

Freddy Deldado B. / Juan Carlos Mariscal C. (editores)

“Gobernabilidad social de las áreas protegidas y biodiversidad en Bolivia y latinoamérica”



Gobernabilidad Social
de las Áreas Protegidas y Biodiversidad
en Bolivia y Latinoamérica

Gobernabilidad Social de las Áreas Protegidas y Biodiversidad en Bolivia y Latinoamérica

Memoria del seminario realizado en Cochabamba
del 26 al 29 de febrero de 2004



AGRUCO Agroecología Universidad de Cochabamba
Av. Petrolera Km. 4 1/2 (Facultad de Agronomía)
Casilla 3392
Tel/Fax (+5914) 4762180 / 4762181
Cochabamba - Bolivia
E-mail: agruco@agruco.org
<http://www.agruco.org>

NCCR North - South
National Center of Competences in Research North - South
<http://www.nccr-north-south.unibe.ch>
c/o
CDE Centre for Development and Environment,
Institute of Geography, Berne University
Steigerhubelstrasse 3, CH-3008 Berne, Switzerland.
Tel. 41 22 906 59 40/44; Fax. 41 33 906 59 74
<http://www.cde.unibe.ch>

IUED Institut Universitaire d'Etudes du Développement
24 Rothschild
c.p. 136
1211 Geneva
Tél. 41 22 906 59 40/44; Fax. 41 22 906 59 74
<http://www.iued.unige.ch>

Edición: Freddy Delgado B., Juan Carlos Mariscal C.
Revisión: Dora Ponce C., Elvira Serrano C., Jaime Delgadillo P.

© AGRUCO/PLURAL, 2004.
Primera edición: febrero, 2004.

D.L.: 4-1-1921-04
ISBN: 99905-63-18-7

Producción:
Plural editores
Rosendo Gutiérrez 595 esq. Ecuador
Teléfono 2411018 / Casilla 5097, La Paz - Bolivia
Email: plural@entelnet.bo
www.editorialplural.com

Impreso en Bolivia

Contenido

1. Presentación	
<i>Dr. Freddy Delgado Burgoa. Director Ejecutivo de AGRUCO</i>	5

Parte I

Situación y análisis de las áreas protegidas en el mundo, Latinoamérica y Bolivia	9
--	---

Perspectivas y desafíos de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad: Reflexiones en torno al Congreso Mundial de Parques realizado en Durban (África del Sur, 2003)	
<i>Carmen E. Miranda L.</i>	11
Desafíos para la gestión sostenible de la Biodiversidad en el mundo y los países andinos	
<i>Stephan Rist</i>	23
Conservación o desarrollo: algunos elementos para una perspectiva crítica	
<i>Marc Hufty</i>	53
Panel de debate y discusión. Parte I	61

Parte II

Experiencias y análisis de las áreas protegidas en Latinoamérica	75
---	----

Áreas protegidas y pueblos indígenas: Directrices y experiencias internacionales.	
<i>José Aylwin O. y Jaime Soto.....</i>	77

Las áreas de conservación en Costa Rica: pasado y presente	
<i>Silvia Rodríguez Cervantes</i>	105
Conflictos alrededor de la explotación forestal en la zona de transición del parque del Manu, caso Pilcopata-Perú	
<i>Jamil Alca Castillo</i>	125
Panel de debate y discusión. Parte II	153

Parte III

Marco institucional, estrategias y experiencias de las áreas protegidas en Bolivia	161
Marco institucional y estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP)	
<i>Juan René Alcoba</i>	163
El proceso de formulación de la ley de áreas protegidas de Bolivia	
<i>Gonzalo Zambrana A.</i>	179
Estrategia boliviana de biodiversidad	
<i>Gonzalo Mérida</i>	191
El Parque Nacional Sajama	
<i>Franz Guzmán y Albertina Calle</i>	199
Petroleros adentro, campesinos afuera: bio-petro estrategias de control de áreas protegidas y lógicas conservacionistas	
<i>René Orellana H.</i>	209
Conflictos y gestión local en áreas protegidas: los casos del parque Amboró y el bosque seco chiquitano	
<i>Miguel Angel Crespo</i>	229
El Parque Nacional Tunari y el comité de gestión: situación actual	
<i>Humberto Mariscal</i>	247
Las áreas protegidas de Ayopaya desde la percepción de las organizaciones campesinas	
<i>Zacarías Ortíz</i>	261
Panel de debate y discusión. Parte III	265

Parte IV

Investigación y acción en torno al Parque Nacional Tunari	285
Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y conservación de la naturaleza y la biodiversidad del Parque Nacional Tunari	
<i>Freddy Delgado</i>	287

Avance de investigación: gobernanza en los municipios y organizaciones locales para la gestión de la biodiversidad en el parque Tunari <i>Dora Ponce Camacho</i>	311
Avance de investigación: la transformación de valores éticos en la interfaz del estado y de la sociedad civil y su importancia en el manejo de la biodiversidad, tierra y territorio. El caso del Parque Nacional Tunari en los Andes de Bolivia <i>Elvira Serrano C.</i>	333
Medio ambiente y biodiversidad desde una perspectiva transdisciplinaria pautas para un nuevo enfoque para el Parque Nacional Tunari <i>Sebastián Boillat</i>	361
La capacitación como instrumento para el fortalecimiento de la gestión local de las áreas protegidas el caso del "PAMS" en el Parque Nacional Tunari <i>Jaime Delgadillo P. y Juan Carlos Mariscal C.</i>	375
Panel de debate y discusión. Parte IV	395
 Mesa redonda final	
Dr. Willi Graf, COSUDE	
Lic. Adolfo Mendoza, Prefectura de Cochabamba	
Limbert Olmos, FSUTCC	
Félix Terceros, Municipio de Tapacarí	417
 Parte V	
Visita de campo al Parque Nacional Tunari	439

Presentación

En los últimos 50 años ha existido una preocupación generalizada en el mundo sobre las posibilidades de sostenibilidad de la vida en el planeta. Esta preocupación ha surgido por el deterioro ambiental y el incremento de la pobreza a raíz de una relación sociedad-naturaleza de alto contenido antropocéntrico y una priorización del crecimiento económico y la acumulación del capital, liderada por los países denominados desarrollados.

En diferentes eventos internacionales, se han reconocido estos desequilibrios y se han propuesto diferentes alternativas para la conservación de la naturaleza; una de ellas ha sido la creación de áreas protegidas desde una visión estructuralista y unidimensional, que no ha considerado la perspectiva de los actores sociales locales, fundamentalmente de los pueblos indígenas originarios, que durante siglos han acumulado un valioso bagaje de conocimientos que ha permitido en diferentes procesos históricos, una relación armoniosa con la naturaleza, basada en una concepción de vida donde la sociedad es parte de la naturaleza.

La creación de áreas protegidas se ha constituido en la actualidad como una de las propuestas y acciones fundamentales para la conservación de la biodiversidad, sin embargo los resultados logrados en diferentes regiones del mundo y Latinoamérica, han demostrado que es necesario considerar de forma más preponderante y fundamental la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para la definición de categorías, políticas, planes, programas y proyectos. Los conflictos y problemas causados por la creación de áreas protegidas, en muchos casos han incrementado la pobreza en las poblaciones involucradas directa o indirectamente y han originado problemas de gobernabilidad en sus diferentes niveles.

La visión multidimensional y el énfasis puesto en la participación local sobre las áreas protegidas, la biodiversidad y los recursos naturales, es fundamental

considerarla en cualquier proyecto de creación de áreas protegidas y en los planes de manejo. Por tanto, la gestión de la biodiversidad y los recursos naturales se convierte en un espacio donde se debe reinventar la relación Estado-Sociedad en sus diferentes niveles, en una perspectiva de construir proceso de aprendizaje social que permita una relación equilibrada con la naturaleza.

En este proceso, el diálogo entre la sabiduría de los pueblos originarios y el conocimiento científico, debe permitir recrear estrategias que se plasmen en políticas, programas y proyectos eminentemente participativos, buscando la interacción entre diferentes maneras de ver la vida, que en el escenario político viene a ser parte de un proceso social, en el que se puede coincidir o no plenamente.

El seminario sobre gobernabilidad social de las áreas protegidas y biodiversidad en Bolivia y Latinoamérica realizado entre el 26 al 29 de febrero del 2004 en Cochabamba, Bolivia, justamente ha pretendido abrir un espacio de diálogo y discusión entre representantes de movimientos sociales (principalmente de los pueblos originarios), científicos de las ciencias sociales y naturales, políticos y representantes del gobierno boliviano, para analizar la gobernancia y ver las posibilidades para una gobernabilidad que permita reducir la pobreza y conservar la biodiversidad y los recursos naturales en áreas protegidas. En virtud a ello, los objetivos del evento han sido:

- Conocer la perspectiva de los actores locales respecto a la gestión de las áreas protegidas en Bolivia y Latinoamérica.
- Analizar la problemática de la gestión y la gobernabilidad de las áreas protegidas y la biodiversidad en Bolivia.
- Crear una dinámica de resolución de los conflictos alrededor del Tunari.

Inicialmente se han presentado tres conferencias magistrales de expertos internacionales que permitan contextualizar la discusión, tomando las perspectivas y desafíos de las áreas protegidas y la gestión sostenible de la biodiversidad en el mundo, además de reflexiones críticas sobre conservación y desarrollo. Estas exposiciones de contexto general han sido complementadas por las experiencias y reflexiones de expertos sobre áreas protegidas y movimientos indígenas en Perú, Chile y Costa Rica.

Las exposiciones del marco institucional, normativo y político de las áreas protegidas en Bolivia y la presentación de la estrategia nacional de biodiversidad, ha permitido precisar el contexto a nivel nacional, para luego presentar los casos de los Parques Sajama, Amboró, el bosque seco Chiquitano, el Parque Altamachi y el Parque Nacional Tunari.

La importante participación en el evento, de líderes del movimiento indígena-campesino, representantes de municipios rurales, académicos, representantes del gobierno e invitados especiales del exterior del país, ha permitido generar

una amplia discusión y reflexión sobre la gobernanza y la gobernabilidad en las áreas protegidas, discusión que se vio reflejada en las importantes intervenciones de los panelistas invitados.

Creemos que el diálogo iniciado en el seminario sobre “gobernanza social de las áreas protegidas y biodiversidad en Bolivia y Latinoamérica” y que se plasma en esta publicación, es un aporte que pretende reflexionar sobre alternativas para mejorar la relación Estado-Sociedad y la relación Naturaleza-sociedad.

Tanto el seminario como la presente publicación, es producto del proyecto de investigación científica sobre “Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y conservación de la naturaleza y la biodiversidad” dirigido por el Centro Universitario AGRUCO de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón. Este proyecto forma parte del Polo de competencia en investigación Norte-Sur (NCCR), financiado por el fondo nacional suizo para la investigación científica y la agencia suiza de cooperación para el desarrollo.

Como parte de este proceso de diálogo y aprendizaje, es necesario mencionar y agradecer a la Federación sindical única de trabajadores campesinos de Cochabamba, al Centro de desarrollo y medio ambiente (CDMA) de la Universidad de Berna, al Instituto de estudios de desarrollo (IUED) de la Universidad de Ginebra, Suiza y al Jacs South América, por todo el apoyo recibido para la realización del seminario pero fundamentalmente por embarcarse con nosotros en la realización de investigaciones y acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de la población boliviana.

Agradecemos de forma especial a Plural editores, por abrirnos espacios para difundir experiencias y reflexiones, labor quijotesca en Bolivia, por el esfuerzo que conlleva embarcarse en temas muy sensibles pero fundamentales como es el caso de las áreas protegidas, la biodiversidad y la gobernabilidad.

Dr. Freddy Delgado Burgoa
Director Ejecutivo de AGRUCO
Coordinador COMPAS Latinoamérica
UMSS-FCAYP/COSUDE

Parte I

Situación y análisis de las áreas protegidas en el mundo, Latinoamérica y Bolivia

Perspectivas y desafíos de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad:

Cármén E. Miranda L.¹

*Reflexiones en torno al Congreso Mundial de Parques realizado en Durban
(África del Sur, 2003)*

1. ¿Qué es la biodiversidad?

El concepto de biodiversidad ha sido introducido y aceptado formalmente desde la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, siendo definida como la variedad de la vida en todos sus niveles –desde genes hasta ecosistemas– y los procesos ecológicos y evolutivos que la mantienen (Convención de Diversidad Biológica CBD). El estudio de la biodiversidad se remite a tres niveles: genes, especies y ecosistemas; además la biodiversidad tiene dos componentes, que son: el componente tangible y el componente intangible. El componente tangible se refiere justamente a los ecosistemas, especies y genes, mientras que el componente intangible hace referencia al conjunto de conocimientos y prácticas que las diferentes sociedades humanas han desarrollado a través del tiempo.

¿Cual es el valor de la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica prácticamente es el recurso que hace posible el sostén de la vida en el planeta tierra; tiene un valor a nivel ecológico dado por el conjunto de interacciones y funciones reguladoras que se establecen dentro de los ecosistemas. A nivel económico tiene también un valor muy importante determinado por todos los bienes y servicios que le proporcionan al hombre como son los alimentos, las medicinas, las materias primas para la industria, los paisajes para el ecoturismo y muchos otros bienes y servicios que provienen de la naturaleza. A nivel ético cultural hace referencia al derecho intrínseco que tienen a la vida todos los seres vivos y también a las profundas relaciones y percepciones que las diferentes culturas han desarrollado

1 Licenciada en Biología, especialista en Áreas Protegidas y Biodiversidad. Es Coordinadora en Bolivia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

con la biodiversidad. A nivel de la diversidad genética, se tiene por ejemplo, las diferentes formas de un gen que se encuentran en un individuo y que producen diferentes manifestaciones como es el caso de la especie *Brassica oleracea* (conocido comúnmente como coliflor) que tiene diferentes variedades que expresan las diversas manifestaciones determinadas por la carga genética de los individuos (coliflor, col de bruselas, brócoli, col de hoja). Se estima que a nivel del planeta tierra se tiene entre 5 a 10 millones de especies, de las cuales hasta ahora solo han sido identificadas 1.75 millones de especies.

2. La situación de la biodiversidad en América Latina

América Latina posee el bosque tropical pluvial mas extenso y con mayor diversidad del planeta, porque cubre el 60% del total de los bosques tropicales y se estima que en estos ecosistemas se encuentra la tercera parte de todas las especies. Sin embargo, los bosques tropicales de América Latina pasan por una situación crítica debido a la transformación de sus ecosistemas naturales y la pérdida de su biodiversidad. Hasta el año 2000 se estima que se han extinguido el 20% de la biodiversidad que albergan los bosques tropicales de América Latina, y hasta el año 2050 esta pérdida podría llegar al 50%. Existe una amenaza de extinción de las especies y esta es más severa a medida que avanza la destrucción de estos bosques; se calcula que 5 millones de hectáreas se destruyen al año en la región amazónica y alrededor de 25000 especies de plantas y más de 1000 especies y subespecies de vertebrados están amenazadas de extinción actualmente.

Las mayores consecuencias de la pérdida de la biodiversidad son sin duda, la erosión biológica y cultural, los cambios climáticos que viene ocurriendo en las últimas décadas y que están impactando negativamente en los ciclos ecológicos, la biodiversidad y los ecosistemas, las pérdidas económicas y la gran cantidad de potencialidades desperdiciadas. Todo esto recae indudablemente en una disminución de la calidad de vida principalmente de las poblaciones locales que viven en relación estrecha con la biodiversidad.

3. La problemática de la biodiversidad en Bolivia

Bolivia es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Tiene 2 grandes regiones fisiográficas (las tierras altas y tierras bajas), un amplio rango altitudinal (aproximadamente desde los 200 hasta los 6000 metros sobre el nivel del mar), una amplia variabilidad de climas y microclimas, 3 grandes cuencas hidrográficas (la Cuenca del Amazonas, la Cuenca del Plata y la Cuenca Interna del Altiplano), 16 ecorregiones, 198 ecosistemas diferentes y miles de especies.

La Estrategia Boliviana para la Conservación de la Biodiversidad en su proceso de formulación, ha realizado una evaluación de la riqueza biológica de Bolivia. Los resultados de esta evaluación señalan que Bolivia es el octavo país del mundo que tiene mayor superficie de bosques tropicales (51% de su territorio) y es el país más amazónico del continente (la Cuenca del Amazonas ocupa el 65% del territorio boliviano), es centro de origen de muchas especies y domesticación de cultivos, fue territorio de culturas milenarias y grupos indígenas que han desarrollado valiosos conocimientos de uso y manejo de la biodiversidad, es hábitat de aproximadamente 2600 especies de vertebrados que representan entre el 60 y 80% del total estimado para el país, es el séptimo país del mundo con mayor diversidad de aves (1358 especies de aves identificadas hasta la fecha) y al menos tiene 14000 especies de plantas, entre las que destacan por su endemismo las orquídeas, las palmeras y los cactus.

Si bien Bolivia es un país megadiverso y con importante riqueza biológica que le da la posibilidad de ser declarada reserva de vida, algunos de sus ecosistemas, especies y áreas protegidas presentan una situación crítica de conservación. En un estudio realizado por FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) (2001), se revela que solo el 22% de territorio boliviano puede considerarse como en muy buen estado de conservación, el 36% como bueno, el 26 % como regular, el 10.5% como crítico y el 5.5% como muy crítico. Otras cifras y datos que maneja el Ministerio de Desarrollo Sostenible muestran también que muchos ecosistemas en Bolivia se encuentran en un franco proceso de deterioro debido ante todo a la desmedida deforestación y a la transformación de los ecosistemas naturales para la habilitación de tierras agrícolas. Se indica por ejemplo que el 55% del territorio boliviano está en proceso de desertización, el 25% presenta una erosión de fuerte a muy grave (275544 km²) y el 10% se encuentra en un proceso de erosión de ligera a muy moderada (110423 km²). Estos datos indirectamente reflejan también el deterioro y la pérdida de la biodiversidad que es producto sobre todo de diversas actividades humanas y productivas como es la extracción de la yareta (*Azorrella sp.*) en las tierras altas para su uso como recurso energético (leña) en la minería.

Pese al deterioro de los ecosistemas en Bolivia, la biodiversidad y los recursos naturales continúan siendo la base del desarrollo y la supervivencia para una gran mayoría de la población boliviana. Se indica por ejemplo que el 65% de los alimentos que se consume en Bolivia se producen en los agroecosistemas de las tierras altas y se cultivan 14 especies diferentes de papa con aproximadamente 700 variedades, más de 300 especies diferentes se utilizan en la medicina tradicional, se consume una importante cantidad de especies silvestres como fuente proteica principalmente en las tierras bajas y otro grupo importante de recursos biológicos son utilizados en la industria. Por otra parte, se menciona que en los últimos años el ecoturismo es una actividad importante en Bolivia y que es generadora de ingresos económicos, sin embargo el apoyo y la atención del gobierno boliviano a esta actividad es aún muy escasa.

4. Funciones y beneficios de las áreas protegidas

Las áreas protegidas persiguen el objetivo principal de conservar una parte representativa de la biodiversidad y los ecosistemas, al mismo tiempo prestan una serie de beneficios para la población local y la sociedad en su conjunto. Las áreas protegidas a nivel mundial cumplen funciones tales como: constituir sumideros de carbono, cumplir funciones en la estabilización del clima, ser fuente de recursos genéticos, principalmente de especies silvestres y áreas de conservación in situ de la riqueza biológica. A nivel nacional se constituyen en atractivos ecoturísticos, en reguladores de los flujos ecológicos y los ciclos hidrológicos, principalmente por aquellos ubicados en las cabeceras de las cuencas y también contribuyen a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas representativos de un país. A nivel local cumplen funciones ecológicas que contribuyen a la disminución de la erosión de los suelos, a la estabilización de las pendientes, a la regulación de los ciclos hidrológicos y climáticos locales y a la conservación y producción de aguas. Por otra parte, a nivel local cumplen funciones socio-económicas y culturales como es por ejemplo la regulación de plagas y enfermedades en agroecosistemas campesinos, son fuente de recursos alimenticios, de recursos medicinales, de materiales de construcción y de otros usos para la población local y pueden constituirse en fuente de ingresos económicos a través del ecoturismo o producción de otro tipo de bienes.

En síntesis, las áreas protegidas están contribuyendo y coadyuvando positivamente a la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas para beneficio no solo de la población local y nacional, sino también para toda la población mundial y el planeta tierra en su conjunto.

5. El V Congreso Mundial de Parques, Durban Africa del Sur 2003

El V Congreso Mundial de Parques se llevó a cabo en la ciudad de Durban de la República de Africa del Sur entre el 8 y 17 de septiembre del 2003.

Inicialmente es importante hacer referencia a una historia de 125 años del movimiento de las áreas protegidas en el mundo desde que fue creada la primera área protegida. Actualmente la red mundial incluye un número aproximado a las 44000 áreas protegidas, que en conjunto ocupan una extensión equivalente al territorio de la India y China, lo que representa un 12% del total de la superficie terrestre, con un 10% adicional del Continente Antártico. Por otro lado, las áreas protegidas han tenido un comportamiento creciente en cuanto a número y superficie desde la creación del primer parque en 1872 en los Estados Unidos de Norte América, experimentando su mayor crecimiento entre los años de 1965 a 1990. Asimismo, las áreas protegidas han sido componentes importantes de varias convenciones internacionales como

la Convención de Diversidad Biológica, la Convención Ramsar, la Convención del Patrimonio Mundial y la Convención de Humedales. No obstante, las amenazas sobre las áreas protegidas y la biodiversidad, aumentan cada día al igual que el reconocimiento de sus valores y servicios.

Bajo ese contexto, el Congreso de Durban ha planteado el reto de promover que las áreas protegidas sean manejadas de manera que sus beneficios apoyen de forma efectiva al desarrollo sostenible a diferentes niveles y que se logre una mayor participación de los diferentes actores sociales. El lema del Congreso fue *"beneficios más allá de las fronteras"*, pretendiendo con ello volcar el análisis y demostrar la relevancia de las áreas protegidas en el marco de la agenda económica, social y ambiental del siglo 21, considerando fundamentalmente el contexto de la globalización. Los principales patrocinadores de este Congreso fueron Nelson Mandela y la Reina Noor de Jordania.

Los objetivos específicos planteados para el congreso de Durban fueron los siguientes:

- Evaluar y aprender de las experiencias de los últimos 10 años.
- Diversificar los constituyentes y actores involucrados en la gestión de las áreas protegidas.
- Integrar las áreas protegidas en la agenda económica, social y ambiental del siglo 21.
- Promover un nuevo enfoque técnico a los profesionales vinculados al trabajo en áreas protegidas.
- Enfocar la atención a la problemática de las áreas en África y recomendar acciones para superar las mismas.

En el Congreso de Durban se ha implementado también talleres de discusión para temáticas específicas como: los vínculos entre paisaje terrestre y marino, la concientización y apoyo a las áreas protegidas, la gobernabilidad de las áreas protegidas, la formación de capacidades, la efectividad del manejo, el financiamiento y recursos y el sistema global representativo. Entre tanto, los temas transversales del Congreso de Durban han sido las áreas protegidas marino costeras, población y equidad y los sitios de patrimonio mundial.

Haciendo un breve análisis desde la creación de la primera área protegida hace más de 100 años y de los Congresos Mundiales de Parques que se llevan a cabo cada 10 años, se puede advertir que la idea inicial de contar con espacios restringidos y aislados de su entorno, a cambiado y evolucionado a través de todo el Siglo XX sobre todo respecto de sus objetivos y a la participación de los diferentes actores sociales y la integración de las áreas protegidas en su contexto social, económico y ecológico. En ese sentido, se puede ver por ejemplo que en el primer Congreso de Parques realizado en 1962 (Seattle, USA), se intentó por primera vez definir y cate-

gorizar las áreas protegidas, considerando fundamentalmente la importancia de la generación de conocimientos a través de la ciencia para el manejo de estas unidades de conservación. En 1972 el Congreso realizado en Yellowstone (Grand Teton, USA) que tenía como título “Parques Nacionales Patrimonio para un Mundo Mejor”, sentó las bases para el diseño de la Convención sobre el Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Congreso realizado en Bali (Indonesia) en 1982 que tuvo como título “Parques para el Desarrollo”, destacó el rol de las áreas protegidas como base para el desarrollo local y ya promovió el manejo participativo de las áreas protegidas. En 1992 el Congreso realizado en Caracas (Venezuela) que tomó el título “Parques para la Vida”, focalizó la importancia de integrar la gestión de las áreas protegidas a escala regional y de fortalecer la participación de las comunidades locales. Finalmente, el último Congreso realizado el año 2002 en Durban (Africa del Sur) se ha propuesto revisar el estado de las áreas protegidas a nivel global, evaluar los problemas críticos que las afectan y proponer direcciones y acciones para esta década que inicia.

En este contexto de desarrollo global de las áreas protegidas, se puede apreciar que el proceso que estamos viviendo en Bolivia en cuanto a la demanda de una mayor participación social genuina desde las organizaciones de base y en cuanto a la necesidad de desarrollar procesos de empoderamiento local no es un tema que se esta discutiendo únicamente en Bolivia, sino que ha sido el tema central de discusión en el congreso en Durban. En un principio se veía que las instituciones gubernamentales son las únicas responsables de la administración y gestión de las áreas protegidas, sin embargo hoy existe una apertura para que la ciudadanía participe en un esfuerzo orgánico y responsable en estas acciones, lo que significa que la gobernabilidad social es un tema central en la problemática actual de las áreas protegidas.

En ese sentido, el Congreso de Durban evaluó por ejemplo los éxitos y problemas sobre la participación de las comunidades locales y pueblos indígenas en la planificación y manejo de las áreas protegidas y definió los lineamientos y guías sobre como enfrentar estas acciones en el futuro. Recordemos que en Caracas ya se habló sobre la necesidad de integrar las áreas protegidas con sus entornos sociales; a 10 años de esa propuesta se realizó una evaluación para determinar los avances, los aprendizajes, los problemas y los fracasos. Por otro lado, se tuvo el desafío, principalmente impulsado por la representación Sur Americana, de superar el enfoque tradicional o conservacionista y de generar nuevos enfoques de manejo, gobernabilidad y gestión de las áreas protegidas. En ese propósito, se han identificado algunos adelantos desde el Congreso de Caracas (1992) como:

- El reconocimiento de las áreas protegidas como elementos decisivos para la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica, puesto que las áreas protegidas son instrumentos efectivos para la conservación de la biodiversidad y para la aplicación del convenio sobre biodiversidad.
- Se ha duplicado el número y la superficie de las áreas de protegidas.

- La cantidad de bienes naturales y mixtos del Patrimonio Mundial ha aumentado de 101 a 172 en aproximadamente una década.
- Existe un mayor reconocimiento de los vínculos entre las poblaciones humanas y el medio ambiente.
- Se han realizado muchos planes regionales y nacionales.
- Se han desarrollado medidas para mejorar la eficacia del manejo de las áreas protegidas.
- Existe una mayor participación de pueblos indígenas y comunidades locales
- Se han experimentando nuevas formas de gobernanza y se está rescatando formas tradicionales de gobernanza para fines de conservación de la biodiversidad.
- Se ha reconocido la importancia y el valor de los conocimientos tradicionales y otros conocimientos sobre la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas.
- Está por entrar en vigor el protocolo de Kioto.
- Las áreas protegidas se han conectado con éxito más allá de las fronteras internacionales, y en algunos casos hay experiencias que han efectuando una contribución significativa a lograr la paz en zonas de conflictos armados.
- Diversas áreas protegidas han sido enlazadas por redes y corredores ecológicos en el marco de grandes iniciativas regionales, lo cual ha sido un aspecto muy ponderado ya que las áreas protegidas bajo un enfoque de “islas” no garantiza una efectiva conservación de la biodiversidad.

Por otra parte, en el Congreso de Durban se han identificado también una serie de retos dada la situación y el contexto muy adverso y difícil en la que se encuentran la mayoría de las áreas protegidas, destacando entre estos retos los siguientes:

- Conciliar las necesidades del desarrollo con el uso y manejo sostenibles de los recursos naturales.
- Frente a la amenaza del cambio climático, es de urgente necesidad reducir las emisiones de gases de invernadero y, al mismo tiempo, se debe incorporar un manejo de ecosistemas que potencien su capacidad de recuperación.
- Complementar y ampliar la representatividad para todos los ecosistemas, especialmente para ecosistemas marinos.
- Se ocasionan daños severos e irreversibles a la diversidad de especies, los hábitats y los paisajes naturales, así como a los procesos naturales y a la diversidad cultural de la que dependen.
- La cantidad y calidad de las aguas dulces que alimentan a las áreas protegidas están declinando a causa de los desvíos, diques y otras barreras que se establecen en tierras agrícolas, además de los procesos de erosión de los suelos y la deforestación de los bosques.

- Existe una creciente demanda de animales y plantas silvestres, lo que implica un serio peligro de extinción principalmente para las especies raras y/o amenazadas.
- Las especies exóticas invasoras provocan efectos negativos sobre las especies nativas o autóctonas, desplazándolas o eliminándolas de su medio natural.
- La inversión de los gobiernos en las áreas protegidas es insuficiente y no permite el cumplimiento de sus objetivos sociales y de conservación.
- Los subsidios y otros instrumentos financieros e institucionales ocasionan efectos negativos sobre la biodiversidad y los ecosistemas naturales como es la explotación de hidrocarburos dentro las áreas protegidas.
- Recursos humanos insuficientes para garantizar un manejo técnico adecuado de las áreas protegidas, particularmente en los países llamados en desarrollo.
- Muchas áreas protegidas que solo existen en los papeles, carecen de una protección efectiva y un manejo técnico eficiente.
- Los costos y beneficios de las áreas protegidas no se distribuyen equitativamente, puesto que las comunidades locales suelen sobrellevar la mayor parte de los costos y recibir escasos beneficios, mientras que la sociedad en su conjunto recibe más beneficios y sobrelleva bajos costos.
- Frecuentemente las áreas protegidas están desvinculadas de la planificación del desarrollo y de los planes de ordenamiento territorial.
- No se reconoce el papel decisivo de las áreas protegidas para el desarrollo sostenible, argumentando que las áreas protegidas obstaculizan las actividades productivas.
- Los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros grupos de la sociedad civil no participan suficientemente en la identificación y la gestión de las áreas protegidas.

6. El plan de acción de Durban

En base a todos los retos que tienen actualmente las áreas protegidas, la discusión en el Congreso ha derivado y concluido en la definición de un Plan de Acción para implementarse en la presente década, que entre sus planteamientos considera fundamentalmente lo siguiente:

- No es un plan modelo para todos los países y áreas protegidas, puesto que se reconoce las existencia de diversos criterios locales, nacionales y regionales.
- Se sugiere acciones necesarias a fin de potenciar los beneficios de las áreas protegidas para la sociedad en su conjunto y mejorar su cobertura y manejo.
- Plantea como documento numerosas cuestiones a examinar y resolver, lo que implica la adopción de medidas factibles a cada caso, contexto y escenario.

De esta manera, el Plan de Acción de Durban ha realizado recomendaciones para categorizar las acciones en los siguientes niveles: acciones internacionales (intergubernamental, NNUU, convenios y tratados), acciones regionales (intergubernamental, convenios y mecanismos regionales), acciones nacionales (estrategias, leyes y decretos), acciones locales, acciones de las autoridades responsables de las áreas protegidas y acciones de la UICN.

Finalmente, en el Congreso de Durban se ha llegado a definir 10 resultados con sus respectivas metas, tal como se describen a continuación:

Resultado 1. Las áreas protegidas tendrán un aporte crucial a la conservación de la biodiversidad en el Mundo. Para este resultado se plantean dos metas:

- El convenio de Diversidad Biológica habrá adoptado medidas específicas para mejorar la contribución de las áreas protegidas a la conservación de la diversidad biológica.
- Todos los signatarios del Convenio sobre el Patrimonio Mundial habrán adoptado medidas para mejorar la contribución de los sitios del Patrimonio Mundial a la conservación de la biodiversidad.

Resultado 2. Las áreas protegidas habrán realizado una contribución fundamental al desarrollo sostenible. Para este resultado se plantea una meta:

- Se habrán adoptado medidas para que las áreas protegidas contribuyan a reducir la pobreza y en ningún modo la agraven.

Resultado 3. Se habrá establecido un sistema mundial de áreas protegidas conectadas con los paisajes terrestres y marinos circundantes. Para este resultado se plantean dos metas:

- Para el 2010 se habrá establecido un sistemas de áreas protegidas que sea representativo para todos los ecosistemas del mundo.
- Para el 2015 todas las áreas protegidas estarán conectadas en sistemas ecológicos/ terrestres y marinos amplios.

Resultado 4. Se habrá mejorado la calidad, eficacia y el sistema de presentación de los informes de gestión de las áreas protegidas. Para este resultado se plantea también dos metas:

- Todas las áreas protegidas tendrán un manejo efectivo para el 2015.
- Todas las áreas protegidas tendrán una capacidad efectiva de manejo.

Resultado 5. Los derechos de los pueblos indígenas, pueblos móviles y comunidades locales se verán reconocidos y garantizados en relación con los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Para este resultado se plantea las siguientes metas:

- Todas las áreas protegidas existentes y futuras serán manejadas y establecidas en plena conformidad con los derechos de los pueblos indígenas, pueblos móviles y comunidades locales.
- Los pueblos indígenas y las comunidades locales estarán representados en la gestión de las áreas protegidas por representantes electos y de forma proporcional a sus derechos e intereses.
- Se establecerán y aplicarán para los 2010 mecanismos participativos para la restitución de las tierras y territorios tradicionales de pueblos indígenas que fueron incorporados en áreas protegidas sin su consentimiento libre y conocimiento de causa.

Resultado 6. Las generaciones más jóvenes tendrán mayor poder de decisión. Para este resultado se plantea la siguiente meta:

- Se asegurará una mayor participación de las generaciones más jóvenes en la gobernanza y manejo de las áreas protegidas y se tomarán medidas para fortalecer su capacidad de contribuir y ampliar el conjunto de la comunidad de la conservación.

Resultado 7. Se habrá obtenido mayor apoyo para a las áreas protegidas por parte de otros grupos de interés. Para este resultado plantea una meta:

- Se habrá obtenido apoyo de los principales grupos de interesados directos.

Resultado 8. Se habrán establecido mejores formas de gobernanza que reconozcan métodos tanto tradicionales como innovadores de gran valor potencial para la conservación de la biodiversidad. Para este resultado se plantea una meta:

- En todos los países se habrán establecido sistemas eficaces de gobernanza.

Resultado 9. Se dispondrá de recursos mucho mayores para las áreas protegidas proporcionales a sus valores y necesidades. Para este resultado se tiene una meta:

- Se garantizarán los recursos suficientes para identificar, establecer y sufragar los costos recurrentes de un sistema mundialmente representativo de áreas protegidas para el 2010.

Resultado 10: Habrá una mejor comunicación y educación sobre las funciones y los beneficios de las áreas protegidas. Para este resultado se plantea una meta:

- Se garantizarán los recursos suficientes para identificar, establecer y sufragar los costos recurrentes de un sistema mundialmente representativo de áreas protegidas para el 2010.

Para concluir es necesario subrayar que la preocupación que se está viviendo en Bolivia y en América Latina con respecto a las nuevas formas de participación, la apertura a las capacidades locales y al empoderamiento de las comunidades locales y de la sociedad en su conjunto para la gestión sostenible de la biodiversidad, no es solo nacional y regional sino que es una discusión y una reflexión que se viene realizando a nivel global. En ese marco, Bolivia en los últimos 10 años ha contribuido a la solución de algunos problemas a través de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y con importantes experiencias para la construcción de un nuevo enfoque de manejo y gestión de las áreas protegidas.

Desafíos para la gestión sostenible de la biodiversidad en el mundo y los países andinos

Dr. Stephan Rist¹

1. Introducción

El Convenio sobre Diversidad Biológica (COB) aprobado en 1992 en la Conferencia Mundial de Río de Janeiro-Brasil, representa un hito decisivo en el reconocimiento de problemas ambientales globales. Por primera vez en la historia, representantes de más 150 países reconocieron que el desarrollo económico y social está amenazando seriamente a la biodiversidad y, con ello, también a las bases biológicas, ecológicas, sociales y económicas de la vida en el planeta tierra. En esta cumbre se acordó la creación y el fortalecimiento de estrategias regionales, nacionales y locales capaces de mitigar los efectos negativos del desarrollo socio-económico sobre la biodiversidad. A partir de ahí se desarrollaron una gran diversidad de enfoques, estrategias e instrumentos para lograr los objetivos planteados en el CDB. En el caso de los Andes, los objetivos del CDB han sido traducidos a una estrategia regional de la Comunidad Andina (2002) y a estrategias de biodiversidad nacionales en Bolivia (MDSP, 2001), Ecuador (MA, 2001) y Perú (CONAM, 2001).

La existencia de una alta diversidad de enfoques, estrategias e instrumentos para la gestión de la biodiversidad es muy positivo, ya que es imposible que exista una sola estrategia que permita dar solución a las múltiples causas y dinámicas que afectan la biodiversidad. No obstante, la diversidad de enfoques y estrategias también conlleva el riesgo de crear contradicciones, inconsistencias o

1 Ingeniero Agrónomo con Doctorado en Sociología Rural en la Universidad de Munich-Alemania. Docente Investigador del Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna-Suiza. Coordinador del Individual Project 1 y 2 del NCCR.

discontinuidades dando lugar a la instrumentalización de las políticas definidas por intereses particulares que pueden ser o no legítimos como en el caso de la reivindicación de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios y de los grupos económicamente poderosos como son empresas agroindustriales o petroleras. Por ello es altamente importante que la formulación de medidas específicas y de estrategias para una gestión más sostenible de la biodiversidad, sea acompañada con una mirada crítica y auto-crítica de parte de todos los involucrados, tal como se pretende hacer en el presente seminario y las investigaciones emprendidas en el marco del NCCR Norte-Sur.

Con el presente trabajo pretendemos contextualizar la situación de la biodiversidad en los países Andinos de Bolivia, Perú y Ecuador en un marco que considera las principales tendencias del desarrollo de los conceptos para la gestión de la biodiversidad a nivel mundial. Además, se articulan los conceptos definidos en el caso de los Andes con un análisis transdisciplinario que significa considerar a parte del conocimiento científico disciplinario y especializado aquellos conocimientos que se originan desde una visión interdisciplinaria, como son los conocimientos locales generados por los pueblos indígenas.

Sobre esta base se concluye que la búsqueda de una gestión más sostenible de la biodiversidad, se ha convertido en una arena donde confluyen diferentes actores sociales que no solamente develan y defienden sus intereses particulares, sino que a través de sus discursos se encuentran valores fundamentales del mismo desarrollo que expresan diferentes concepciones sobre la relación sociedad-naturaleza. En ese sentido, la gestión de la biodiversidad se convierte en un proceso de construcción social de la naturaleza que debido a su articulación directa con las acciones humanas que repercuten en las dinámicas ecológicas y biológicas de los diferentes ecosistemas. Así las discusiones sobre la gestión más sostenible de la biodiversidad, adquieren dimensiones culturales, sociales y políticas que requieren una revisión crítica de las políticas, estrategias e instrumentos actuales.

2. Definición, importancia y causas de la pérdida de la biodiversidad

Según el CDB, la biodiversidad comprende a la variabilidad y a la cantidad de organismos vivos existentes en el planeta o en un lugar determinado, y se refiere simultáneamente a los genes, especies y ecosistemas.

Los objetivos de la CDB no solamente apuntan a la biodiversidad como tal, sino enfatizan en el uso sostenible de sus componentes que además considera la distribución equitativa de los beneficios resultantes de ella. Así se evidencia que la conservación de la biodiversidad debe inscribirse a un modelo de gestión basado en valores éticos claramente establecidos, como son los derechos para un uso sostenible de la biodiversidad y la equidad en la distribución de los beneficios que

reporta la misma. Es importante considerar, además, que la biodiversidad abarca más allá de la diversidad genética y de especies, puesto que incluye a la diversidad de ecosistemas. La dimensión eco-sistémica hace que la gestión más sostenible de la biodiversidad no solo se enfoque a conservar la diversidad de especies y genes, sino que asume que la conservación de la biodiversidad se logra en la medida que los diferentes ecosistemas sean compatibles con los modelos de desarrollo implementados por las sociedades. Incluso tomando en cuenta que hoy en día también se busca conservar ecosistemas 'naturales' (como las áreas protegidas) que no sean afectados en forma directa por actividades humanas, la persistencia de estos solo será posible si son protegidos por los mismos humanos, por lo que la conservación de los ecosistemas y paisajes 'naturales' depende de las decisiones políticas tomadas por las sociedades que regulan estos espacios.

Los Países Andinos organizados en la Comunidad Andina (CAN), concentran el 25 % de la biodiversidad del planeta y forman parte de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo (CAN, 2003). En la subregión viven entre el 10 al 16 % de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas que se encuentran en el mundo. Es importante señalar que la biodiversidad expresada en especies no tiene un valor intrínseco por sí mismo, sino que esta directamente relacionada con las bases económicas de los Países Andinos. La participación de la biodiversidad en las exportaciones del 2001 en Bolivia, Ecuador y Perú oscilaron entre el 20 y 45 % (CAN, 2003).

Por otra parte, los ecosistemas proporcionan recursos y servicios vitales tales como la provisión de agua dulce para consumo humano, riego, energía hidroeléctrica, materiales para la construcción de casas y utensilios, productos energéticos (leña), medicinales y alimenticios y paisajes para el ecoturismo, además de otorgar servicios en el control de las inundaciones y la erosión de los suelos.

En relación con las causas de la pérdida de la biodiversidad, la situación en los países andinos refleja las dinámicas a nivel global. Los ecosistemas andinos están seriamente dañados por la erosión, la deforestación, el sobre pastoreo, el crecimiento demográfico combinado con altas tasas de urbanización, la contaminación por desechos mineros y el mal manejo del agua. Esta situación se traduce en una fragmentación creciente de los hábitats que es el factor principal para la pérdida de la biodiversidad a escala mundial, contribuyendo en gran medida para ello los procesos de erosión y deforestación. Se indica que el 90% de la deforestación es resultado de una agricultura no sustentable; asimismo las plantaciones de árboles exóticos para explotación forestal también desempeñan un papel importante en la degradación de los bosques nativos.

El cambio climático global junto con el manejo inadecuado de los ecosistemas de montañas, han hecho más vulnerable a las poblaciones andinas ante los desastres naturales, siendo insuficientes las actuales políticas y prácticas de prevención. Los deslizamientos de tierra, las avalanchas, las inundaciones, los terremotos y las inundaciones por derretimiento de glaciares, causan muchas

veces masivas pérdidas de vidas y bienes materiales. Los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño en el período 1997-1998 en los países andinos, particularmente en las costas de Ecuador y Perú, alcanzó la suma de US\$ 7.545 millones, lo cual representó casi el 95% del PIB de Bolivia en 1997 o el 32% de las exportaciones de Venezuela, siendo el país más afectado Ecuador que registró pérdidas por un valor equivalente al 14% de su PIB (CAN, 2003).

En la costa del Pacífico Sur la presencia de la placa de Nazca, cuyo borde se extiende desde Panamá hasta el sur de Chile, y de la placa sudamericana que abarca desde la fosa marina Perú-Chile hasta el eje de la Cordillera del Atlántico Sur, hace que esta región sea muy vulnerable a los fenómenos telúricos y a los desastres naturales, donde existe además una fuerte proliferación de asentamientos precarios en determinadas ciudades, la construcción de viviendas inadecuadas sobre suelos frágiles y una regulación pública muy ineficiente en el ordenamiento territorial.

3. Desarrollo de los enfoques para la gestión de la biodiversidad

3.1. La protección de especies de flora y fauna

Inicialmente la preocupación por la pérdida de la biodiversidad estaba centrada en algunas especies de flora y fauna, puesto que como resultado de la modernización han disminuido significativamente sus poblaciones o incluso están en peligro de extinción. Estas iniciativas surgieron en los países europeos y EE UU, centrando su atención en algunas especies vegetales y animales locales de alto valor estético. En el caso de las regiones tropicales, el interés apuntaba sobre todo hacia algunos mamíferos mayores como los elefantes, rinocerontes, etc. Bajo este enfoque no existía todavía una conciencia general sobre la importancia de la biodiversidad de cara a la preservación de la productividad, la estabilidad y la resiliencia de los ecosistemas.

3.2. Los cuestionamientos a las áreas naturales protegidas y el manejo de ecosistemas

El interés se centra en parte o la totalidad de determinados paisajes naturales o ecosistemas, cuya protección se justifica esencialmente por su alto número de especies raras y/o en peligro de extinción ("hot-spots")². Este enfoque parte de la idea que la conservación de especies en el largo plazo sólo es posible si se protegen sus espacios vitales o su hábitat. Como la articulación entre aprovechamiento de los recursos y la protección del medio ambiente genera conflictos, la solución de

2 Un buen resumen de conceptos y procedimientos en la definición de hot-spots se encuentra en Myers et al., 2000. *Biodiversity hot-spots for conservation priorities*. Vol. 403.

éstos pasa por una decisión explícita a favor del medio ambiente. Este enfoque de conservación tiene una larga historia, tanto en países ricos como en países pobres de Oriente y del Hemisferio Sur, en consecuencia existen numerosos análisis comparativos de casos en diferentes países y contextos ecológicos³.

Pese a que los efectos positivos de las áreas protegidas (AP) sobre la protección de la biodiversidad son ampliamente reconocidos, también en la actualidad son muy cuestionados debido a que los nuevos descubrimientos ecológicos indican que la conservación de las especies a largo plazo depende de las dinámicas de su población, del hábitat y de las influencias externas que se ejercen sobre las mismas. Las dinámicas e influencias no se pueden explicar desde una óptica exclusivamente de las especies. Debido a ello, se fueron desarrollando cada vez más los llamados “enfoques multi-especies” que centran su atención en la conservación de los ecosistemas⁴. Hay que añadir que las especies son la expresión de una determinada etapa dentro del continuo proceso de evolución biológica. Para que la evolución de las especies pueda continuar se requiere de una interacción genética con todas las especies biológicamente relevantes para ellas mismas y no sólo con aquellas que se encuentran en las áreas protegidas. En este contexto la conservación de la diversidad genética adquiere especial importancia, puesto que esta no se puede garantizar sólo conservando las APs, sino que se requiere de la conservación de los ecosistemas naturales donde se consideran los factores de evolución y de diversidad genética⁵.

Otro aspecto que se viene cuestionando al enfoque de las APs son los graves conflictos sociales que se desató entre la población local, las autoridades públicas y las empresas que explotan recursos naturales como los madereros. Tales conflictos ponen en duda el logro de las metas que desde este enfoque se fijaron a largo plazo. A esto se suman las múltiples debilidades e inconsistencias en la gobernancia de los organismos estatales encargadas en la gestión de las APS, lo que hace que los planes quedan en el papel o no sean implementados debidamente.

Este enfoque, por otra parte, conduce a paisajes duales, es decir que las APs forman islas en medio de otros paisajes que suelen ser objeto de manejo intensivo. Esto también conduce a crecientes –y en parte graves– conflictos sociales que se suscitan entorno al aprovechamiento de los recursos⁶. Las APs se encuentran bajo presión, por un lado, de los usuarios locales de recursos quienes se ven obligados al manejo intensivo en superficies cada vez más pequeñas y, por otro, de los agroindustriales que manejan grandes superficies de cultivos que paulatinamente

3 Un resumen tanto de las condiciones políticas y las alianzas que llevaron a la creación de áreas protegidas, como de los cambios que se produjeron en el transcurso del tiempo se encuentra en Bates, 2000. *The Political Ecology of Conserving Tropical Rain Forests: a Cross National Analysis*.

4 Marcot, 1996. *On Population Viability and Management*. Pág. 58.

5 Meffe, 1996. *Conserving Genetic Diversity in Natural Systems*, S. 40ff.

6 Ver por ejemplo a Scott, 1998. *From Conflict to Collaboration*.

incrementan su presión tanto hacia las superficies de los pequeños agricultores como de las APs.

A raíz de todo ello, los enfoques interdisciplinarios están ganando cada vez más importancia, pues persiguen una estrategia integral de análisis y solución de los problemas. El ampliar más la visión del problema no siempre implica un cambio significativo de ideas, frecuentemente sirve sólo para buscar mejores métodos tendientes al logro de las metas de protección⁷. A partir de esta visión más integral se ha generado como respuesta a las contradicciones internas que se dan en la protección de la naturaleza en el curso de los últimos años, el llamado “método” o “manejo del ecosistema”. En nuestra opinión este enfoque contiene valiosos elementos que sirven para combinar la conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento sostenible de los recursos. A continuación se presenta un resumen de lo que se entiende por manejo del ecosistema que se basa en 12 principios⁸.

3.2.1. Descripción del método del manejo del ecosistema

El método del manejo del ecosistema (ME) es una estrategia para el manejo integrado de suelo, agua y los recursos vivos, pues promueve la conservación y uso sostenible de forma equitativa. De esta manera, la aplicación del ME puede ayudar a alcanzar el balance de los tres objetivos de la CDB: conservación, uso sostenible y distribución justa e equitativa de los beneficios provenientes del uso de la biodiversidad. El ME se basa en la aplicación de metodologías científicas apropiadas, enfocadas en los niveles de organización biológica, la estructura esencial, los procesos y las funciones e interacciones entre los organismos y su ambiente. Reconoce a los humanos, con su diversidad cultural, como un componente integral de muchos ecosistemas y se basa en los siguientes 12 principios:

- Principio 1.*** Los objetivos de manejo del suelo, el agua y los recursos vivientes son asuntos de la preferencia de la sociedad.
- Principio 2.*** El manejo debe descentralizarse hasta el nivel apropiado más bajo.
- Principio 3.*** Los administradores de ecosistemas deben considerar los efectos (potenciales o actuales) de sus actividades sobre los ecosistemas adyacentes o sobre otros ecosistemas.
- Principio 4.*** Reconociendo las potenciales ganancias del manejo, generalmente existe la necesidad de entender y manejar el ecosistema en un contexto económico. Cualquier programa de manejo de ecosistemas de este tipo debe: Reducir las distorsiones del mercado que afecten negativamente

7 Ver Neuman, 1998. Imposing Wilderness-Struggles over Livelihoods and Nature Preservation in Africa.

8 Una descripción completa se encuentra en UICN, 2003.

a la diversidad biológica, alinear incentivos para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad e internalizar los costos y beneficios de un ecosistema dado, en la medida de lo posible.

Principio 5. Una meta prioritaria del método del ecosistema debe ser la conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, para mantener los servicios que provee.

Principio 6. Los ecosistemas deben manejarse de acuerdo a sus límites de funcionamiento.

Principio 7. El método del ecosistema debe abordarse de acuerdo a las escalas espaciales y temporales apropiadas.

Principio 8. Reconociendo las escalas temporales variables y de los efectos de laguna que caracterizan a los procesos de los ecosistemas, los objetivos del manejo de ecosistemas deben fijarse a largo plazo.

Principio 9. El manejo debe reconocer que el cambio es inevitable.

Principio 10. El método del manejo del ecosistema debe procurar un balance e integración apropiada entre la conservación y el uso de la diversidad biológica.

Principio 11. El método del manejo del ecosistema debe considerar todas las formas de información relevantes, incluyendo el conocimiento científico, el local y el indígena, así como las innovaciones y las prácticas.

Principio 12. El método del manejo del ecosistema debe involucrar a todos los sectores relevantes de la sociedad y las disciplinas científicas.

Tanto las experiencias de la protección ambiental “clásica” como de las tendencias actuales del desarrollo agropecuario y forestal sostenible, develan que las estrategias de conservación de la biodiversidad tienen mejores posibilidades de éxito sólo si se logra combinar las exigencias que se deducen de los paisajes naturales con las que se requiere para la gestión de los paisajes culturales. El fomento del uso de los recursos naturales y de la biodiversidad se va desprendiendo cada vez más de los enfoques sectoriales que contienen límites definidos según aspectos técnico-productivos y biológicos, tendiendo a llegar a un nivel donde el manejo de ecosistemas en forma integral es el tema central.

El manejo de ecosistemas abarca un gran conjunto de elementos naturales, aunque el concepto de ecosistema es aplicable tanto para un acuario como para un parque o una reserva natural o para todo el planeta, especialmente en las regiones de habla inglesa ha adquirido un significado específico junto al concepto de “management” o manejo. Incorpora reservas de hábitat y un conjunto de espacios que son manejados más activamente para la obtención de bienes y servicios⁹. En este sentido el enfoque del manejo de ecosistemas que aquí se presenta, se refiere a un

9 Franklin, 1997: Ecosystem Management: An overview, S.30.

gran número –variable según el caso– de unidades espaciales superiores situadas en paisajes naturales y/o culturales. Actualmente este enfoque sirve como base referencial para todas las instituciones públicas en EE UU y Canadá que están a cargo de la regulación y manejo de los bosques, la protección del medio ambiente y la naturaleza y de la administración de los parques nacionales¹⁰.

Similares conceptos y métodos de implementación conforman el pilar fundamental en la mayor parte de Europa, pero no bajo el nombre de “manejo de ecosistemas”, sino de “protección de la naturaleza”. Pueden considerarse parte del enfoque de manejo de ecosistemas aquellos conceptos, métodos y experiencias del “manejo ambiental” que se utilizan en Europa y cuyo objetivo principal se concentra en el análisis y la solución de problemas ambientales en espacios más grandes como los problemas de sistemas de aguas subterráneas y aguas corrientes, los sistemas agroecológicos, los bosques, los Alpes, etc.¹¹ En la misma dirección van las actuales inversiones en los estados de la CEI, donde la GTZ, GEF y la UE han lanzado su programa TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States)¹² en el ámbito de la protección medioambiental.

El enfoque del manejo de ecosistemas nació como respuesta a las debilidades que se detectaron en los esfuerzos de protección medioambiental realizados hasta ahora. Refleja un avance importante ya que se reconoce la importancia de la integración de los requerimientos de la sociedad en el manejo de los ecosistemas. No obstante, centrar el análisis y la formulación de estrategias de acción en las unidades ecológicas ‘naturales’, como son los ecosistemas, pone de relieve un valor ético fundamental que apunta a una relación entre sociedad y naturaleza que se basa en el respeto de los procesos de regeneración de las bases ecológicas propias de la naturaleza. Debido a que justamente este valor fundamental no es compartido por los grupos sociales responsables de la destrucción de la biodiversidad, el manejo de ecosistemas enfrenta muchas deficiencias. Así se pone de relieve una deficiencia significativa del manejo de ecosistemas que consiste en marginar o incluso ignorar la dimensión ética, lo que resulta en una tendencia tecnocrática que obvia los procesos sociales y políticos y que deberían ser los medios para impulsar un debate sobre qué tipo de valores deben guiar la relación entre sociedad y naturaleza.

-
- 10 Hay varias publicaciones sobre la creación, importancia, definiciones y métodos de ejecución: Vogt et al. (1997) *Ecosystems*
 - Balancing Science with Management; Boyce & Haney (1997) *Ecosystem Management*
 - Applications for sustainable forest and wildlife resources; Samson & Knopf (1996) *Ecosystem Management*
 - Selected readings.
 - 11 Un buen resumen de los fundamentos teóricos, instrumentos de implementación y de las experiencias recogidas se encuentra en la obra de tres tomos de Nath et al. (1998): *Environmental Management in Practice*. En relación con el manejo ambiental, ver tomo I.
 - 12 Ver detalles del programa TACIS en: www.tacisinfo.ru

Un principio fundamental que abre pistas para superar las tendencias expertocráticas del manejo de ecosistemas es su proceder adoptivo. Se reconoce que casi todas las instrucciones procedentes de las instancias de manejo conllevan grandes inseguridades. Por eso los ‘gerentes’ de ecosistemas siempre consideran el proceso de aprendizaje social en la planificación de todas sus actividades. Es necesario establecer mecanismos de retroalimentación que permitan un dialogo constante entre todos los participantes e instituciones sobre metas, estrategias y medidas actuales. De ello resulta que el manejo de ecosistemas no es viable si no se introducen cambios fundamentales al interior de las instituciones encargadas de la labor. Una implementación efectiva dependerá de procesos de aprendizaje en las siguientes áreas: capacitación profesional interdisciplinaria, procesos de decisión adaptivos e interactivos y estructuras horizontales e integrales de comunicación e información¹³.

La implementación del manejo de ecosistemas en la región europea y norteamericana cuenta con una base relativamente sólida de experiencias y por ende encuentra creciente aceptación por parte de políticos, investigadores y usuarios de recursos; a nivel de la cooperación internacional no se puede decir lo mismo, pues con este enfoque prácticamente no han desarrollado experiencias. Hace poco la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó una primera evaluación de una serie de proyectos pilotos en países del Hemisferio Sur y los estados de CEI¹⁴, en la que se demuestra que debido a las diferentes condiciones socioeconómicas y políticas de partida los métodos de implementación necesitan de una revisión y adaptación aún más detallada.

Como la planificación de los proyectos de protección ambiental fue dictada –en la mayoría de los casos– “verticalmente de arriba hacia abajo”, el grado de aceptación por parte de los actores locales es muy bajo. La desconfianza en los países pobres y el manejo burocrático de leyes y finanzas (transferencias monetarias de los países ricos) limitan aún más los márgenes de acción. Un factor agravante es que el enfoque de biodiversidad se empecina demasiado en la conservación de algunas especies; además se le da escasa importancia a los paisajes culturales que deberían ser manejados en forma más sostenible.

Por todo ello es indispensable una revisión de aquellos enfoques cuyo tema central es la protección de la naturaleza. Es necesario que los proyectos que persiguen la conservación de la biodiversidad sean integrados a una estrategia global para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En cuanto a conceptos, métodos y prácticas, el replanteamiento se encuentra todavía en su fase inicial. Durante la búsqueda de posibles soluciones a las contradicciones que encierra el

13 Ver también Danter, 2000: Organisational Changes as a Component of Ecosystem Management.

14 Pirot et al., 2000: Ecosystem Management: Lessons from around the world – A Guide for Development and Conservation Practitioners. IUCN.

enfoque de simple protección de la naturaleza, la aplicación de ideas y conceptos provenientes del uso de los recursos naturales puede resultar muy útil.

3.3. Reservas de la biosfera de la UNESCO

La visión de que la biodiversidad no sólo se puede conservar mediante protección de la naturaleza y de las superficies de compensación, encuentra cada vez más aprobación. Una investigación patrocinada por la UNESCO sobre las características, tendencias de desarrollo, importancia y distribución mundial de los paisajes culturales, fue la base para el programa internacional “Man and biosphere” (MAB) y para el programa “Red Internacional de Reservas de la Biosfera”. Con este programa ya no se pretende ex-zonificar las extensas áreas naturales, al contrario, su énfasis está en el aprovechamiento sostenible de paisajes culturales por parte del ser humano mismo. Cada reserva de la biosfera debe cumplir al mismo tiempo, las siguientes tres funciones que se fortalecen mutuamente¹⁵:

- Función de conservación: paisajes, ecosistemas, especies y diversidad genética.
- Función de desarrollo: fortalecimiento del desarrollo ecológico y humano según los principios de la sostenibilidad.
- Función logística: fomento de investigaciones, monitoreo, educación e intercambio de información vinculados con aspectos locales, nacionales y globales de conservación y desarrollo de la biodiversidad.

Aquí es interesante el procedimiento que se emplea en la definición del término reserva que significa que las áreas se quedan bajo la soberanía de los estados. Según las condiciones existentes, dichas áreas pueden abarcar tanto la propiedad estatal como la propiedad solar privada. Antes de integrarse éstas a la red mundial de reservas de la biosfera, deberá existir un marco institucional cuyo representante actuará, además, como solicitante¹⁶. De esta manera se pretende evitar las consecuencias negativas que ocasiona una declaración de áreas protegidas dictada verticalmente desde arriba. Antes de iniciar el proyecto tanto el gobierno como la población tienen la obligación de ponerse de acuerdo sobre fundamentos y metas a largo plazo del desarrollo de las reservaciones. Una vez integrados a

15 Para más detalles ver también: <http://unesco.org/mab>.

16 En Suiza las comunidades de Entlebuch hace poco decidieron establecer la primera reserva de la biosfera. Ver más detalles en: Rouss et al. (1999) Die Zukunft der Kulturlandschaft in der Schweiz. Regional management des Projektes Biosphärenreservat Entlebuch. [El futuro del paisaje cultural en Suiza. Manejo regional del proyecto Reserva de la Biósfera Entlebuch].

la red, la UNESCO pondrá a disposición una serie de medidas de apoyo que se elaborarán junto con todos los involucrados. Muchos países que anteriormente ya habían delimitado sus áreas protegidas, ahora las definieron como núcleos de una reserva de la biosfera complementándolas con paisajes culturales de manejo más intensivo y con paisajes en estado de transición. Esta estrategia permitió que se diseñara una planificación integral del desarrollo, según la cual ahora se toman en cuenta tanto las superficies conservadas al natural, los paisajes culturales como el efecto recíproco que ambos producen.

Si bien las estrategias de apoyo en su mayoría están orientadas hacia determinados sectores, poseen un horizonte común, pues tienen que contribuir al aprovechamiento sostenible de paisajes culturales. En todo caso hay que evitar eventuales cambios en el uso de recursos, caso contrario tales cambios perjudicarían la sostenibilidad del sistema global.

El enfoque de las reservas de la biosfera apunta a que los paisajes naturales y culturales se integren, proceso en el que es de suma importancia que los usuarios locales de los recursos naturales participen activamente. En este contexto, combinar protección con aprovechamiento reduce el potencial conflictivo, pues ello permite –además de proteger a las especies– la conservación de la diversidad de ecosistemas y paisajes que exige la Convención sobre Diversidad Biológica. Por lo enunciado, este enfoque tiene mucho en común con el manejo de ecosistemas.

3.4. Agricultura y forestería sostenible

Muchos proyectos y programas de desarrollo rural en el trópico –y desde hace algún tiempo también en los países de la CEI– han superado sus fuertes enfoques sectoriales y técnico-productivos asumiendo los principios del uso sostenible de los recursos naturales. Como se trata de promocionar el uso sostenible de los recursos, ahora no sólo se ocupan de las técnicas productivas (fertilización, variedades, manejo integral de plagas, etc.) sino también de la sostenibilidad de los recursos como el suelo (fertilidad, erosión, expansión de desiertos, contaminación con metales pesados etc.), el agua (manejo de cuencas) y la agro-biodiversidad. La consideración de los problemas locales de recursos conduce a que se traten también las relaciones entre agricultura y forestación con los elementos atmosféricos como CO₂, metano y ozono.

El denominador común de estos enfoques es su claro énfasis en la ecologización de los sistemas de producción existentes y en la creación de nuevos sistemas del mismo tipo. Aquí la conservación de la biodiversidad en sí juega un papel implícito y muchas veces sirve solamente para legitimar los proyectos, es decir se presupone que la conservación de la biodiversidad aparecerá como un efecto secundario positivo. La investigación sistemática de los efectos reales entre diferentes formas de agricultura y la biodiversidad está todavía en sus inicios, pues

solo un grupo especial de proyectos se dedican a la conservación de la diversidad de animales domésticos y de plantas cultivadas en el sector forestal y en el agrario. Sin embargo, algunos de sus primeros resultados de investigación demuestran que a largo plazo no se puede garantizar la conservación de la agro-biodiversidad sin relacionarla sistemáticamente con elementos de los paisajes naturales.

Con ejemplos tomados del área de conservación de plantas culturales agrarias se puede demostrar que la diversidad de especies y variedades sólo puede conservarse si éstas se encuentran en poblaciones situadas en medio de grandes superficies. Se ha demostrado, además, que la creación de las diferentes especies, variedades, razas terrestres etc. sólo fue posible en interacción con plantas silvestres de la misma familia, por ello cabe recalcar cuán importante es la conservación de las mismas¹⁷. Como las poblaciones de plantas culturales y su amplia gama de plantas silvestres sobrepasan los estrechos límites de algunos sistemas de producción, la agrobiodiversidad solo se puede obtener mediante la conservación de determinados ecosistemas favorables a la biodiversidad. Por este motivo hay muchos puntos comunes con el manejo de ecosistemas.

En países occidentales, las diferentes formas de agricultura orgánica son las alternativas más frecuentes que se dan en el campo del manejo sostenible, siendo éstas objeto de revalorización adicional según la óptica de la conservación de la biodiversidad. Cada vez más investigaciones científicas demuestran que aquellos sistemas de cultivo combinan en forma óptima las exigencias de la protección de la naturaleza y de la producción sostenible. Aquí es de suma importancia evitar paisajes duales, es decir la separación de áreas naturales protegidas y las superficies de producción. En la Región Andina la alta densidad y el encadenamiento de hábitats no cultivados y perennes conducen a un aumento de la diversidad de paisajes. Se pudo demostrar que esta práctica, mediante el asentamiento de poblaciones de insectos beneficiosos, ayuda a controlar las plagas de la colza por ejemplo, hecho que contribuyó a su vez considerablemente al éxito del cultivo orgánico de colza¹⁸. La conservación de superficies casi naturales se convierte por tanto en un factor de producción y adquiere importancia económica para los agricultores. Todavía no se ha logrado determinar claramente en qué forma estos sistemas que fueron probados en unidades productivas, se podrían implementar a nivel de grandes superficies.

17 Comparar Lefort & Chauvet , 1996: Biodiversity and Agriculture, Grasslands and Forests. pág. 312 sg. Ver también Hodkin, 1996: Current issues in Conserving the Biodiversity of Agriculturally Important Species pág. 357 sg.

18 Thies & Tschamtkke (2000): Biologische Schädlingskontrolle durch Landschaftsmanagement [Control orgánico de plagas a través del manejo de paisajes] en: Ökologie und Landbau [Ecología y cultivo de la tierra] 115,3/2000. Pág 47sg. Ver también Stolton et al., 2000: The relationship between nature conservation, biodiversity and organic agriculture.

La cuestión de la biodiversidad –excepto la de agrobiodiversidad– recibe un trato implícito en el marco de la agricultura sostenible. Las experiencias y tendencias actuales en el campo de la protección de la naturaleza, la protección ambiental y la agricultura y forestación sostenibles, indican claramente que estos sectores se deben profundizar contemplando el criterio del “manejo de ecosistemas situados en grandes superficies”. En ello no hay que dejar de lado que el ser humano y la sociedad son partes integrales del ecosistema. Las soluciones transdisciplinarias que contemplan la participación integral de los grupos poblacionales involucrados se convierten por tanto en la base fundamental para el manejo de ecosistemas. Tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo, las ventajas de este enfoque son cada vez más perceptibles.

Hasta la fecha queda pendiente, sin embargo, la aclaración de las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son los momentos claves en el proceso de negociación entre los diferentes actores? ¿Como se pueden apoyar efectivamente estos procesos a nivel local, regional e internacional? ¿Tomando en las situaciones de arranque, qué instrumentos son los que más se adecuan para el logro de este fin?, ¿Qué clase de enfoques permiten la superación efectiva de los paisajes duales? Las prácticas exitosas de manejo de ecosistemas en pequeñas unidades productivas ¿cómo se pueden transferir experiencias locales a niveles superiores (“up-scaling”)? Además falta analizar hasta qué punto se puede implementar la estrategia de aprovechamiento sostenible sin que el entorno social (industria, comercio, servicios, consumidores etc.) participe simultáneamente en el desarrollo sostenible.

3.5. La diversidad cultural: un fundamento para la conservación de la biodiversidad

El punto de partida de este aporte es el concepto de que la conservación de la biodiversidad finalmente refleja un asunto de valor de la sociedad. Su implementación requiere por tanto de un método que esté construido sobre una relación naturaleza-sociedad definida culturalmente. Para ello no es necesario empezar de cero, pues en muchas regiones de la tierra importantes para la biodiversidad rigen formas de vida que se consideran a sí mismas culturas más o menos independientes frente a los “modernos”, sistemas de valores influenciados por la cultura occidental. Respecto a la biodiversidad, los miembros de estos grupos socioculturales disponen de más saberes que los que han sido investigados incluso por la Botánica o la Biología (etnobotánica). Estas culturas locales demuestran con toda claridad que la biodiversidad se regenera en forma sostenible sólo si tiene un “sentido” en el marco de las formas de vida sociales e individuales.

Como el concepto “sentido” implica valores culturales, se inició una serie de proyectos pilotos que –pasando por el fortalecimiento y promoción de las culturas

locales—pretenden contribuir a una conservación de la biodiversidad y de sus correspondientes formas de vida y de conocimiento¹⁹. La conservación de la biodiversidad, por tanto, está fuertemente ligada a la realidad de los sistemas de valores culturales. Como estos valores culturales por su carácter mismo son de gran amplitud, su fortalecimiento también tiene efectos positivos sobre otras actividades como por ejemplo la agricultura, la economía forestal, etc. La conservación de la biodiversidad, desde esta óptica, es un “producto” de formas de vida definidas culturalmente, y como tal se integra en una estrategia global del desarrollo sostenible²⁰.

Si bien se advierte un creciente reconocimiento de la importancia de la diversidad cultural como fundamento de la biodiversidad, ésta sufre amenazas cada vez mayores. Ello se debe a factores tanto internos como externos. Como está orientada unilateralmente hacia lo económico, la creciente globalización de los hábitats —marginados hasta hace poco— afecta a las formas de vida existentes en ellos; por otro lado son los factores internos tales como conflictos generacionales, modernización de las tradicionales formas de vida en un entorno cambiante, etc., los que pueden conducir hacia un cambio —consciente en este caso— de la diversidad cultural existente. Tomando en cuenta tales procesos de erosión cultural los Proyectos y Programas que se dedican a la conservación de la diversidad cultural se concentran en el apoyo a los grupos locales. Desde esta perspectiva se formularán luego las correcciones que fuesen necesarias a nivel regional, nacional e internacional. Aquí juegan un papel especial los enfoques y métodos de revalorización y renovación de las formas de vida y producción culturalmente definidas. Tales enfoques demandan un consciente y sistemático análisis de la visión del mundo de los actores locales y de los eventuales vínculos de su visión con una visión científica del mundo²¹.

Las percepciones y funciones locales, específicamente marcadas por lo que significa la vida, los animales, las plantas, el suelo, el ser humano, etc., son el fundamento de partida para la aplicación de métodos de investigación y de ase-

19 Como parte de una estrategia para la conservación de la biodiversidad, la red internacional COMPAS (Comparing an Supporting Endogenous Development An Bio-Cultural Diversity) presenta en sus publicaciones y su web-site recomendaciones conceptuales y prácticas para el apoyo a la diversidad cultural. Ver también: Procedimientos de la Conferencia Internacional “Culture and Biodiversity”, efectuada en Kunming, China, entre el 20 y 30 de Julio de 2000. Aquí se encuentra una buena documentación de los resultados y tendencias actuales.

20 En su extensa publicación „Cultural and Spiritual Values of Diversity “, de 1999, la UNEP presenta una introducción minuciosa sobre el tema Importancia de la Diversidad Cultural para la Biodiversidad.

21 Högger (1993): Wasserschlange und Sonnenvogel –Die andere Seite der Entwicklungshilfe S. 105ff. [Serpiente marina y fénix– La otra cara de la cooperación, Pág. 105 y siguientes]

soramiento predominantemente comunicativos²². En este contexto los elementos naturales panorámico-paisajísticos que se conservan en su estado natural, son considerados también resultado de un proceso social, puesto que su conservación “natural” procede de una decisión comunitaria. Ello permite que todo panorama o paisaje, en cualquier forma que se presente, sea comprendido como verdadero “paisaje cultural”. Esta amplia visión es el fundamento sobre el que los nuevos enfoques –que priorizan el fortalecimiento de los elementos culturales– construyen el tratamiento de la biodiversidad, pues estos son los elementos que finalmente condicionan el logro de una relación sostenible entre el hombre y su entorno natural. Al margen de la conservación de especies, este aporte considera también que determinadas especies, ecosistemas o paisajes pueden poseer un valor directamente social sólo si los elementos naturales cobijados en ellos están ligados con los correspondientes saberes de los actores locales. Amplios trabajos etno-botánicos realizados demuestran claramente este aspecto.

Debido a que determinadas formas de saberes están siempre ligadas a las visiones del mundo definidas culturalmente, la diversidad de los saberes relacionados con la biodiversidad puede conservarse en forma óptima sólo si converge con la diversidad de culturas. No obstante, la dinámica cultural es muy compleja, su aplicación no es de fácil planificación y control. Así lo demuestra el creciente número de conflictos de carácter étnico y la tensión que se da en muchos países del Hemisferio Sur entre las élites con orientación mayormente “occidental” y la población local. El desarrollo de enfoques y métodos para el fomento del diálogo intra e intercultural en el marco de la Cooperación Internacional, como se dice comúnmente, está en pañales. Como el diálogo intercultural incluye a las culturas occidentales, la Cooperación Internacional será objeto de un proceso de aprendizaje conjunto en el que ninguna de las partes posee la solución definitiva. En posesión de un trasfondo cultural ambos presentan valiosos elementos que aportan a un proceso común de desarrollo.

Aquí se trata de enfoques que a diferencia de los aportes a la biodiversidad mencionados en los capítulos anteriores, centralizan la búsqueda de posibilidades de apoyo a los procesos de negociación y de aprendizaje por parte de instituciones externas. Los aspectos de interculturalidad reciben una ponderación especial. Se reconoce que el apoyo a la diversidad cultural por parte de asesores e investigadores con formación científica requiere de un diálogo intercultural que acepte las percepciones de los actores locales como punto de partida explícito pero también un fortalecimiento y revalorización de sus saberes como parte de su intraculturalidad. Las experiencias podrán integrarse adecuadamente en el enfoque del manejo del ecosistema, enfoque que –en referencia a este punto [de interculturalidad]– acusa insuficiencias.

22 De cara al logro de esta meta y por encargo del DEZA, la CDE ha desarrollado un módulo conocido bajo el nombre de “Autodidactic Learning for Sustainability (ALS)” e implementado con éxito en proyectos en América Latina, Asia y África (Ver CDE, 1998).

3.6. Biodiversidad y procesos socio-económicos a nivel nacional e internacional

Esta discusión se apoya sobre todo en el postulado que las principales causas de la pérdidas de biodiversidad son las actividades económicas del hombre, en consecuencia es menester que estas actividades sean objeto de una mejor orientación. Inmediatamente después de la firma de la Convención sobre la Biodiversidad surgió una serie de iniciativas²³ que se ocupan de la cuestión de la relación entre pérdida de biodiversidad y las políticas macroeconómicas y sociales a nivel nacional e internacional. Aquí se presenta el postulado que la conservación de la biodiversidad se logrará, a largo plazo, sólo a través de un “scaling-up” de los enfoques en su mayoría locales y regionales que se conocen hasta ahora. Por ello las estrategias tenderán a prestar atención a las causas más profundas de la pérdida de diversidad. Viene al caso un proyecto del , basado en 10 estudios de caso, que identificó las siguientes “causales subyacentes” responsables de tales procesos:

- Presión doméstica** : Crecimiento demográfico
Pobreza
Migración
Falta de equidad/acentuación de disparidades
Marginalización de grupos sociales
Cambio cultural
- Presión internacional** : Políticas marco-económicas
Comercio internacional
- Políticas** : Fallas e inconsistencias conceptuales
Fallas en mercados domésticos
Deficiencias en marcos institucionales y jurídicos
Programas no sostenibles de desarrollo
Falta de control social más efectivo sobre uso de recursos

Conforme al modelo Presión-Estado-Respuesta, se trata pues, de elementos tanto de presión como de respuesta. La diferencia entre y dentro de estos grupos no siempre es clara, especialmente en lo que se refiere al concepto de ‘fallas políticas’. Es importante considerar, sin embargo, que estas causas subyacentes no tiene importancia en todos los estudios de casos, aunque una buena parte de estas sí la tienen (over-determination of bio-diversity loss). También está claro que detrás de cada causa se esconden otros factores. Este

23 WWF Macroeconomics Program Office, November 99: Root Causes of Biodiversity Loss. Executive Summary (based on “Root Causes of Biodiversity Loss”. Alexander Wood et al. Eds. Earthscan Publications, 2000).

listado, sin embargo, es útil para una estructuración de los problemas. Algunas de estas causas se presentan más a nivel nacional y subnacional; para algunas por ejemplo se tiene que encontrar una solución a nivel internacional. Como la pérdida de biodiversidad no tiene una explicación monocausal, su solución se encontrará sólo pasando por una mejor coordinación entre los diversos actores sociales y las instancias operativas correspondientes. Pero además de una mejor coordinación, dichos actores tendrán que hacer grandes esfuerzos para reducir los efectos negativos que sus propias actividades provocan a la biodiversidad. Tanto los actores estatales así como las empresas y corporaciones privadas, disponen de ciertos campos con libertad de acción en los que sí pueden contribuir a la protección de la biodiversidad. El fracaso de las políticas nacionales es una causa que frecuentemente se diagnostica en la pérdida de biodiversidad. Así por ejemplo, un estudio sobre Colombia²⁴ demuestra que a consecuencia de las desacertadas políticas agrícolas impuestas, la presión sobre los recursos naturales durante décadas tuvo un dramático incremento. De haberse introducido mejores políticas podría haberse reducido –si no neutralizarlo– el efecto presión que ejercen el crecimiento demográfico y la pobreza.

Las medidas más importantes ha considerarse son: Transferencia del derecho propietario y de usufructo a los grupos poblacionales directamente involucrados; fijación de precios tomando en cuenta costos externos; creación de incentivos que promuevan favorablemente el comportamiento específico individual; y toma de decisiones políticas sustentadas con buen fundamento científico y admisión de una gran diversidad de enfoques y métodos. Está demostrado que la protección de la biodiversidad cuando está incorporada en las políticas de transporte, turismo y de agricultura, tiene un impacto más directo (sea positivo o sea negativo) que cuando se encuentra englobada sólo en las políticas medioambientales²⁵.

Otro gran desafío fundamental para la conservación de la biodiversidad ligada a los países meridionales ricos en biodiversidad, es la de introducir limitaciones que impidan que los hábitats en estado natural o casi natural sigan siendo objeto de transformación en espacios de aprovechamiento intensivo. En los países del Hemisferio Norte este proceso prácticamente ya ha sido detenido. Dichas limitaciones pueden ser de tipo territorial o también pueden ser que tanto el uso del suelo como la producción agrícola sean más cuidadosos, se adapten más a los fines que se persiguen y sean diseñados en forma diferenciada. Ambas variantes buscarían impedir que el hábitat se transforme en un panorama agrario e industrial uniforme. Este proceso de desarrollo podría conducir a que toda la tierra finalmente quede al

24 Heath & Binswanger, 1996: Natural Resource Degradation effects of poverty and population growth are largely policy-induced: the case of Colombia.

25 Global Environment Facility (GEF), 2000: Achieving Sustainability of Biodiversity Conservation.

servicio de la producción para la humanidad. Pero frenar los procesos de transformación sólo será posible si los países asumen el riesgo y los costos de iniciar otra senda de desarrollo, es decir algo diferente a lo que hicieron los países del Hemisferio Norte. Se tendrán entonces de desarrollar nuevos enfoques, tecnologías y formas de producción adaptadas al entorno local que den lugar a una nueva base para la conservación de la biodiversidad. Ello se podrá lograr sólo si se crean mecanismos a nivel internacional, tales como compensaciones financieras, pago de bonos para productos provenientes de países que conservan activamente la biodiversidad (Land use Planning Protocol, Sustainable use Certification, etc.)²⁶.

Dentro las estructuras existentes, en aquellos países que todavía poseen grandes reservas de tierra situadas junto a ecosistemas conservados en estado natural o casi natural –al menos a corto plazo–, les resulta económicamente necesario transformar tales reservas en superficies productivas. Esta visión vale tanto para los actores estatales como para los usuarios de la tierra, sean éstos agroindustriales o campesinos. Para las actuales como para las futuras generaciones, el valor potencial de la biodiversidad (cultivos, farmacéutica, atracciones turísticas) sigue siendo insuficientemente remunerado en los mercados y no existen incentivos que conduzcan al cambio, a no ser que se introduzcan políticas específicas. Los futuros convenios internacionales tendrían que observar este aspecto. La Convención sobre la Biodiversidad y la GEF son los primeros ejemplos de ello.

Si bien con este aporte se tratan importantes factores de la conservación de la biodiversidad, en la discusión existe todavía la tendencia a tratar al hombre principalmente como un sujeto que actúa en forma negativa. Hay también ejemplos positivos en los que la sociedad ha desarrollado sistemas de aprovechamiento de tierra rico en biodiversidad y ubicado relativamente cerca de espacios naturales (praderas naturales y praderas delgadas en los Alpes, plantaciones de café orgánico en América Central, sistemas agroforestales en regiones tropicales, etc.). En estos lugares pueden conservarse las especies naturales, si no todas, al menos gran parte de ellas. Pese a que estos ejemplos positivos se encuentran en peligro por los efectos de la modernización unilateral o por su importancia marginal, su enfoque podría servir para que la biodiversidad pueda conservarse al menos hasta cierto grado. Este aspecto debería ingresar con mayor fuerza en la discusión de políticas para que se pueda plasmar en políticas económicas.

El trabajo de coordinación y la necesaria transferencia de medios son un gran desafío a la capacidad de los actores. Las experiencias que se hicieron con la implementación de tales acuerdos ambientales, especialmente cuando estos requieren un gran flujo de medios, son poco alentadoras. Los intereses económicos que se encuentran de por medio son difíciles de vencer, puesto que éstos suelen encontrar la forma de evadir o transgredir tales convenios.

26 Swanson, 1997: Global Action for Biodiversity, pp 163.

4. Desafíos para la gestión sostenible de la biodiversidad en países andinos

4.1. Paisajes duales: entre áreas protegidas y áreas no protegidas

Haciendo una comparación del desarrollo histórico de los enfoques para la gestión de la biodiversidad con la situación de Bolivia y otros países andinos, se encuentra que co-existen diferentes conceptos representando todas las principales etapas como son los parques naturales, áreas protegidas, reservas de la biosfera o territorios indígenas. A pesar de que existen estrategias regionales y nacionales que involucran a los tres países andinos (Perú, Bolivia y Ecuador), en realidad la gestión de la biodiversidad se concentra en las áreas protegidas y en territorios indígenas, las que en Perú cubren el 5%, en Ecuador el 16% y en Bolivia el 22% (Geo p.80). El gran resto de sus territorios que componen de bosques nativos, praderas, humedales, sistemas agroforestales, áreas de cultivo, etc. están prácticamente excluidos de la gestión pública de la biodiversidad, haciendo que la diversidad de agroecosistemas, agrosilvopastoriles o forestales se vean amenazadas por el avance de la deforestación, la concentración en la tenencia de la tierra, el aumento de los monocultivos y la ganadería agroindustrial.

Toda esta tendencia lleva a crear 'paisajes duales' que se caracterizan por la existencia de áreas protegidas con diferentes modalidades que son relativamente pequeñas y aisladas, y el gran resto del territorio que constituye la base para el desarrollo y la gestión sostenible no juega un rol significativo. Si bien los corredores biológicos aportan en ese sentido, desde el punto de vista ecológico no solucionan el problema de fondo que es el modelo de desarrollo no sostenible en las áreas no protegidas.

En esta perspectiva es evidente que una gestión de la biodiversidad que se enfoca unilateralmente en áreas protegidas y corredores biológicos no puede cumplir con los objetivos integrales planteados en la CDB, ya que en las áreas protegidas es sumamente difícil y cuestionable proteger la biodiversidad en contra del uso sostenible por parte de grupos sociales locales, por lo que es claro que la gestión de la biodiversidad en áreas no protegidas requiere de un enfoque no-proteccionista basado en sistemas del uso sostenible de los recursos naturales como son las distintas formas de agricultura indígena, tradicional, orgánica o agrosilvopastoril. Debido a que la rentabilidad económica de estas formas de uso sostenible de la tierra no alcanza los mismos niveles con las formas convencionales de uso de la tierra, la gestión sostenible de la biodiversidad tiene que enmarcarse en una política de desarrollo rural que es capaz de crear las condiciones-macro respectivas.

Para las políticas referidas a la gestión de la biodiversidad esto significa que el tamaño y el tipo de áreas protegidas con diferentes modalidades no deben ser definidos bajo la idea de compensar los efectos negativos en áreas no protegidas. La gestión sostenible de la biodiversidad tiene que ser parte íntegra de los sistemas de agricultura y forestales.

4.2. Multidimensionalidad de la biodiversidad y enfoque transectorial

Analizando la importancia y las principales causas de la pérdida de la biodiversidad, muestra con mucha claridad que la búsqueda de una gestión más sostenible de la biodiversidad sólo puede ser alcanzado en la medida que se logre re-ajustar las dinámicas del desarrollo socio-económico en su conjunto con los principios que regulan los procesos ecológicos. En esta perspectiva, el grado de biodiversidad es en un indicador de la relación sociedad y naturaleza. La gestión de la biodiversidad requiere de cambios profundos dentro y entre las sociedades del sistema global. Un aspecto fundamental en la búsqueda de los cambios requeridos es la multidimensionalidad de la biodiversidad, como se advierte en la siguiente figura:

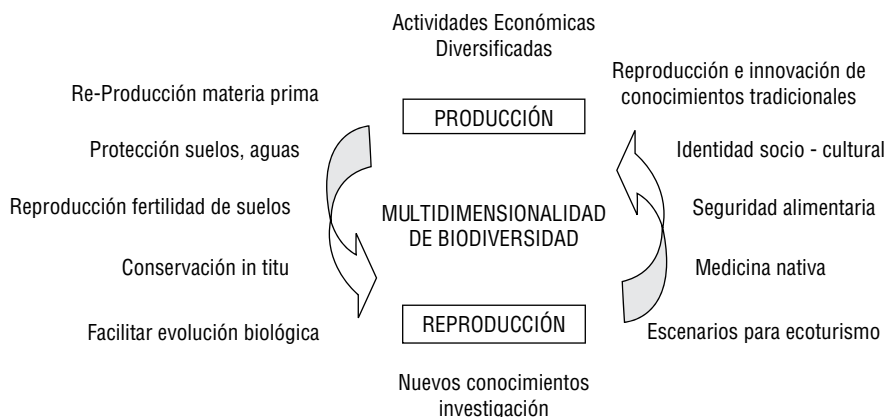


Figura 1: Multidimensionalidad de la biodiversidad

Al tomar la multidimensionalidad de la biodiversidad como punto de partida y considerando la necesidad de integrar las áreas no protegidas a la revisión de las políticas vinculadas a la gestión de la biodiversidad, hace evidente que los enfoques sectoriales tienen que ser superados. En vez de considerar la biodiversidad como un recurso que debe ser administrado por un sector específico, habría que crear mecanismos que permitan integrar los requerimientos correspondientes en las políticas económicas, ambientales y sociales considerando que los factores que reducen la biodiversidad emanan de todos estos ámbitos.

4.3. Integración de diversidad cultural y biológica

Considerando la estrecha relación entre sociedad y estado de la biodiversidad, hace que la diversidad cultural se convierte en otro elemento fundamental para la

gestión sostenible de la diversidad biológica. La ampliación de los mecanismos para la creación de sistemas de gestión de la biodiversidad de acuerdo a principios propios de culturas locales e indígenas, es otra estrategia fundamental para contrarrestar las fuerzas unificadoras provenientes de las formas de vida que se reducen a ser componentes útiles de una economía de mercado mundial. Es ahí donde se debería articular las demandas para tierra y territorio de parte de los pueblos indígenas con la gestión sostenible de la biodiversidad. Reconociendo las potencialidades que tienen las formas indígenas de vida, de producción y de conocimientos para una gestión integral de la biodiversidad, se debería impulsar la creación de arreglos entre estado y sociedad como son la creación y el apoyo a territorios indígenas, tierras comunitarias de origen, etc., considerando entre otros los requerimientos de una gestión más sostenible de la biodiversidad.

4.4. Investigación transdisciplinaria como estrategia para la gestión de la biodiversidad

La formulación de políticas transectoriales y la integración de la dimensión socio-cultural a la gestión de la biodiversidad, desafía también el rol de la ciencia y del conocimiento de sus expertos. En vez de 'cientificar' las políticas en nombre de una expertocracia que funciona lejos del control social de parte de los afectados e interesados en la biodiversidad, los agentes científicos deberían crear metodologías participativas que sean capaces de integrar las diferentes formas de conocimientos representados por los actores involucrados. La investigación transdisciplinaria ofrece opciones concretas para ello. Basado en una visión interdisciplinaria, a los científicos se les considera como participantes activos de un dialogo de saberes que reconoce que ellos representan a una forma de ver el mundo que es tan legítimo como otras representadas, por ejemplo, por los pueblos indígenas. La finalidad del dialogo no consiste en evaluar con el método de uno al otro, sino tratar de ver como a partir de un interés común, por ejemplo la gestión sostenible de la biodiversidad desde diferentes formas de conocimiento pueden coadyuvar a lograr los objetivos planteados (Scholz et al, 2000).

Ampliando los principios presentados por Hurni et al (2001), se puede caracterizar una estrategia transdisciplinaria para la investigación de la siguiente manera:

- El punto de partida de la investigación son problemas sociales, ecológicos o culturales que se orientan en el desarrollo sostenible. La planificación de las investigaciones, su ejecución e interpretación de los resultados, son entendidos como parte de un proceso de comunicación integral y de dialogo multi-actores. Esto facilita la participación de actores no necesariamente comprometidos con una visión científica del mundo, sino como socios iguales representando cosmovisiones distintas. La participación activa en

la construcción y ampliación de plataformas para el dialogo multi-actores es parte integrante de los procedimientos metodológicos.

- Al interior de la ciencia un enfoque transdisciplinario presupone partir de visiones interdisciplinarias que implican un entendimiento entre ciencias naturales, sociales y humanas.
- El trabajo científico se entiende como parte de un proceso de aprendizaje social. Hasta que grado prevalecerán los criterios deducidos del análisis científico no es definido sólo por los científicos, sino es resultado de procesos de negociación que tiene que basarse necesariamente en el reconocimiento de la pluralidad de sistemas de conocimientos. De esta manera, se garantiza procesos sociales que permitan la articulación de los valores que subyacen de los mundos de vida en una perspectiva que va más allá de una mera representación de intereses particulares. Así se da cabida a que las dimensiones éticas que motivan las investigaciones forman parte del proceso de deliberación desde el principio.

4.5. Los procesos de aprendizaje social como procesos colectivos en la gestión de la biodiversidad

Los desafíos mencionados anteriormente ponen de relieve con toda claridad que la gestión de la biodiversidad se convierte en una arena donde en vez de perfeccionar o hacer más eficientes las propuestas y procedimientos políticos sectoriales y preconcebidos, aquí se trata de re-inventar partiendo de una perspectiva transdisciplinaria e integral.

El vínculo entre sociedad y el estado de la biodiversidad hoy en día es tan estrecho que la última depende en forma directa de las decisiones tomadas o no, al tipo de desarrollo emprendido. Si la naturaleza a puesto a disposición de las fuerzas destructoras de la sociedad humana o sea protegida según las más diversas concepciones, su grado de sostenibilidad dependerá siempre más de la sociedad que de los factores ecológicos internos. En este sentido la gestión de la biodiversidad se convierte en un proceso de construcción social de la naturaleza que bajo dimensiones globales es un desafío novedoso para los actores de la sociedad global.

Debido a que esta situación es novedosa para las sociedades, es evidente que recurrir solamente a los modelos acostumbrados para las definiciones de políticas no es la solución adecuada, ya que los mismos son parte de la falta de sostenibilidad en la gestión de la biodiversidad. Con esto la búsqueda de una gestión más sostenible de la biodiversidad se transforma en un escenario importante en el cual la creación de nuevos modelos para la coordinación y definición de decisiones políticas está directamente ligada a los avances específicos en el campo de la gestión sostenible de la diversidad biológica. La gestión de la biodiversidad se transforma en un espacio importante para encarar procesos de aprendizaje social

entre los diferentes actores sociales tomando en cuenta la multidimensionalidad de la biodiversidad.

La gestión de la biodiversidad se convierte, de esta manera, en un encuentro de diferentes ‘mundos de vida’²⁷ que en el escenario de la política se presenta como parte de un proceso social, en cuyo centro está la realización de proyectos de vida que pueden coincidir plenamente o en parte. Con esto se apela a una dimensión profunda de las reformas políticas que ciertamente influyen en las discusiones motivadas por la política partidaria y cotidiana, pero para la mayoría de los actores no son suficientemente conscientes como para poder ser incorporadas en sus discursos. Por eso los análisis se concentran con demasiada fuerza en los epifenómenos como son los de la relación óptima entre procesos de decisión, funciones u organigramas. Lo que fácilmente se olvida es que, sobre el horizonte de los universos vitales de los miembros de la comunidad, las nuevas estructuras estatales sólo pueden adquirir legitimidad y consistencia a largo plazo si pueden vincularse de manera inteligente con los propios ‘proyectos’ de los actores locales (Rist, 2002). Por eso se tiene que entender que desde la perspectiva local, las nuevas estructuras solamente pueden ser aceptables, y por tanto sostenibles, a partir del significado que ellas adquieran como resultado de un proceso complejo que conduce a la re-orientación de la relación existente entre prácticas sociales y modelos normativos y conceptuales tanto formales como informales (Long, 1992: 36).

Si se requiere trasladar el énfasis de los epifenómenos estructurales a las dimensiones profundas del cambio social, deben pasar a ocupar el primer plano aquellas capacidades y saberes que, por una parte, subyacen a la realidad de los ‘mundos de vida’ y, por otra, se encuentran en estrecho contacto con la dinámica interna de los procesos sociales de adaptación y renovación.

Con ello no se trata solamente de una adaptación pasiva a las estructuras existentes, sino simultáneamente de una transformación, lo que se pretende aclarar con la aplicación del concepto de los procesos de aprendizaje social. Esto empalma con la creciente aceptación y expansión de procesos participativo-comunicativos, en lugar de prescriptivos, para la elaboración y aplicación de las políticas e instrumentos del desarrollo sostenible (Kaufmann-Hayoz, 2001). Una perspectiva

27 El concepto de “Lebenswelt” ha surgido del pensamiento fenomenológico (Husserl, E., *Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentalen Philosophie*, 1936) y fue introducido en el ámbito de las ciencias sociales por Alfred Schütz “*Phenomenology and Social Sciences*” (1940), “*Husserl’s importance for the Social Sciences*” (1959). Se enmarcan en una perspectiva “constructivista”. El concepto de ‘Lebenswelt’ tiene diferentes traducciones al español “mundo vivido” o “mundo vital” etc. y se refiere a la realidad accesible en la cotidianidad, como algo que se percibe como “dado” para quien conoce simplemente en la actitud natural en la vida precientífica. Husserl conceptualiza esta realidad del mundo vivido como mundo de la experiencia, del entorno subjetivo o mundo vivenciado.

de este tipo incluye la fe en el potencial de las siguientes características (Woodhill & Röling, 2000):

- La reflexión autocrítica y colectiva
- La comunicación dialógica entre muchas y diferentes categorías de actores
- Las capacidades reflexivas tanto de los individuos como de las sociedades
- La posibilidad de que los movimientos sociales logren mejorar las condiciones marco de tipo social y económico.

En otras palabras, se presupone que los grupos sociales son capaces de aprender, cómo son capaces de transformar sus patrones de interpretación, de orientación y de acción sobre la base del discurso y la legitimación de las acciones políticas con la mirada puesta en una mayor sostenibilidad.

En lo que se refiere al análisis institucional, el estudio de los procesos de aprendizaje social significa un claro cambio de posición, desde un enfoque que por encima de todo considera problemas, déficits o limitaciones, hacia un enfoque que intenta identificar, por medio de la comprensión de los procesos en curso, aquellas fuerzas que pueden considerarse como potenciales para un desarrollo más sostenible en el sentido de una prosecución de los procesos de aprendizaje social.

En este último aspecto, no es el comportamiento de los actores el que ocupa el centro del interés, sino que más bien se trata de hacer comprensibles las relaciones entre valores, motivos y patrones de interpretación que subyacen a ese comportamiento (Rist, Delgado, Wiesmann, 2003). Esto tiene consecuencias directas para la reconceptualización de la teoría y la práctica de la definición de lo que es política: si se entiende el desarrollo sostenible en la perspectiva de los procesos de aprendizaje social que afectan por igual a actores locales y externos, entonces ya no puede orientarse exclusivamente a partir de enfoques prescriptivos. Más bien la definición de políticas debe apuntar a las potencialidades del aprendizaje social, con lo que adquieren particular importancia el diálogo múltiple entre los actores, la cooperación y también la investigación activa sobre la base de procesos transdisciplinarios y deliberativos. Los procesos de aprendizaje social son procesos de aprendizaje colectivos que afectan al conjunto de la sociedad y que no pueden quedar restringidos a una élite de expertos, científicos o políticos.

En el marco de la promoción de un desarrollo sostenible en el plano local, adquiere una importancia decisiva el conocimiento de estos procesos de aprendizaje social, ya que ellos permiten una mejor visualización del grado en que se dan elementos complementarios y contradictorios entre las estructuras comunitarias y públicas. Para el tipo de prosecución de las políticas de descentralización, esto significa que estas no pueden reducirse a estrategias de optimización de las estructuras que se introdujo en un momento, sino que deberían manejarse como parte de un proceso de aprendizaje social, básicamente abierto y que no sólo consideren

la optimización de las estructuras existentes sino también la creación de nuevas opciones y estructuras.

A la hora de articular desde esta perspectiva las estructuras comunales y municipales, no se puede echar mano simplemente de los patrones de acción previamente dados, sino que se tiene que contar con una cantidad creciente de irritaciones y contradicciones, de creatividad social y de reflexión que constituyen una parte importante de la actual dinámica social, cuyo curso no se puede ni planificar ni manipular a largo plazo.

Bibliografía

- BATES D.
2000 The political Ecology of Conserving tropical Rein Forests: a cross national analysis. *Society and Natural resources* 13: 619-634.
- BEAN M.
1996 Creating Policy on species diversity, S. 689 In: Szrao, R, Johnston, D, (eds.): *Biodiversity in Managed Landscapes—Theory and Practice*. Oxford. New York.
- BOYCE S., HANEY A.
1997 *Ecosystem Management—Applications for Sustainable Forest and Wildlife Resources*. Yale University Press. New Haven and London.
- CASTRI di F., YOUNES T.
1996 *Biodiversity, Science and Development—Towards a new partnership*. International Union of Biological Sciences.
- CDE
1998 Autodidactic Learning for Sustainability (ALS) Concept paper. Bern.
1995 *Natürliche Ressourcen—Nachhaltige Nutzung. Eine Orientierungshilfe für die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen in der EZA. Berichte Umwelt und Entwicklung Nr. 14.*
- Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAM)
2001 *Estrategia Nacional Sobre Diversidad Biológica*. Lima, Perú.
- Comunidad Andina (CAN)
2003 *Geo Andino 2003. Perspectivas del Medio Ambiente*. Lima. Perú, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA.
- 2002 *Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino. Decisión 523 de la Comunidad Andina.*
- Dangbegnon, Constant
1998 *Platforms for resource management, case studies of success and failure in Benin and Burkina Faso*. Agricultural University Wageningen. The Netherlands.

- DANTER J.
2000 Organisational Changes as a Component of Ecosystem Management. *Society and Natural Resources*. 13: 537-547.
- DÖMPKE S., SUCCOW M.
1998 Cultural Landscapes and Nature Conservation in Northern Eurasia. Bonn.
- FRANKLIN J.
1997 Ecosystem Management: An overview. In: Boyce S., Haney A., 1997: *Ecosystem Management-Applications for Sustainable Forest and Wildlife Resources*. Yale University Press. New Haven and London.
- GLEDITSCH N.-P.
1996 Conflict and Environment. Kluwer Academic Publishers.
- Global environment Facility (GEF)
2000 Achieving Sustainability of Biodiversity Conservation. Report of a GEF Thematic Review. Monitoring and Evaluation Working Paper 1.
- HEATH J., BINSWANGER H.
1996 Natural Resource Degradation effects of poverty and population growth are largely policy-induced: the case of Colombia. *Environment and Development Economics* 1. Cambridge University Press.
- HISLAIRE P., RIST S.
2000 Notes on the case studies. Capitalisation of experiences in sustainable natural resource management and biodiversity (draft). DEZA. Bern.
- HODKIN T.
1996 Current issues in Conserving the Biodiversity of Agriculturally Important Species. S. 357ff. In: Castri di F., Younes T.: *Biodiversity, Science and Development-Towards a new partnership*. International Union of Biological Sciences.
- HÖGGER R.
1993 Wasserschlange und Sonnenvogel-Die andere Seite der Entwicklungshilfe. Waldgut.
- HURNI H. and U. Wiesmann
2001 Transdisziplinäre Forschung im Entwicklungskontext: Leerformel oder Notwendigkeit? Forschungspartnerschaft mit Entwicklungsländern-Eine Herausforderung für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Bern, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW); Schweizerische Kommission für Partnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE).
- KRATOCHWIL A.
1999 Biodiversity in ecosystems: principles and case studies of different complexity Tasks for vegetation science, 34. Dordrecht Kluwer Academic Publishers.

LEFORT M., CHAUVET M.

- 1996 Biodiversity and Agriculture, Grasslands and Forests. S.312ff. In: Castri di F., Younes T.: Biodiversity, Science and Development-Towards a new partnership. International Union of Biological Sciences.

MACHLIS G., FORESTER D.

- 1996 The relationship between socio-economic factors and the loss of biodiversity: first efforts and theoretical and quantitative models. S. 121ff. In: Szrao, R., Johnston, D., (eds.): Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

MARCOT B.

- 1996 On population viability analysis and management, S. 58ff. In: Szrao R., Johnston, D., (eds.): Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

MEFFE G.

- 1996 Conserving genetic diversity in natural systems, S. 40ff. In: Szrao, R., Johnston, D., (eds.): Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

Ministerio de Ambiente (MA)

- 2001 Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador. Quito. Ecuador.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación

- 2001 Estrategia Nacional de Biodiversidad de Bolivia.

MYERS N., MITTERMEIER R., MITTERMAIER C., FONSECA da G., KENT J.

- 2000 Biodiversity and conservation priorities. In: Nature, Vol. 403, P.853-858.

NATH B., HENS L., COMPTON P., DEVUYST D.

- 1998 Environmental Management in Practice-Instruments for environmental management. Vol. 1-3. Routledge. London.

NEUMANN, R.

- 1998 Imposing wilderness-Struggles over Livelihoods and Nature Preservation in Africa. University of California Press, Berkeley and Los Angeles. USA. ZB GT 34182.

OCDE/GD

- 1997 Incentive Measures to promote the Conservation and the Sustainable Use of Biodiversity.

PINGNATTI S., PINGATTI F.

- 1999 Biodiversity in Mediterranean ecosystems, S. 59ff. In: Kratochwil A., (ed.), Biodiversity in ecosystems: principles and case studies of different complexity Tasks for vegetation science, 34. Dordrecht Kluwer Academic Publishers.

PIROT J.-E., MEYNELL P.-J., ELDER D.

2000 Ecosystem Management: Lessons from around the world-A Guide for Development and Conservation Practitioners. IUCN. Geneva.

RIST S., F. DELGADO, et al.

2003 "Emergence of a Traditional Land Use System in Aymara Communities in the Perspective of Social Learning Processes." Mountain Research and Development 23(3): 263-270.

RUOSS E.

1999 Die Zukunft der Kulturlandschaft in der Schweiz. Regionalmanagement des Projektes Biosphärenreservat Entlebuch. Tagungsbericht, Symposium Sörenberg/Entlebuch, 28./29. Mai 1998/Regionalmanagement des Projekts Biosphärenreservat Entlebuch, 93 S. Ill. Berichte aus der Region Entlebuch.

SALWASSER H.

1996 Conserving biological diversity through ecosystem management. S.548ff. In: Szrao, R., Johnston, D., (eds.): Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

SAMSON F., KNOPF F.

1996 Ecosystem Management-Selected Readings. Springer. New York.

SCHOLZ W., HÄBERLI R.

2000 Transdisciplinarity: Joint Problem-Solving among Science, Technology and Society, Haffmanns Verlag. Zürich.

SCOTT P.

1998 From conflict to collaboration-People and Forests at Mount Elgon, Uganda. IUCN. Gland. Switzerland.

STOLTON S., GEIER B., MCNEELY J.

2000 The relationship between nature conservation, biodiversity and organic agriculture. IFOAM. IUCN. WWF. Germany.

STUCKI B., WEISS J.

1995 Ökologie im bäuerlichen Alltag-Wahrnehmung von Umweltproblemen und umweltrelevantes Handeln von Schweizer Bauern und Bäuerinnen. Schlussbericht des Schweizerischen Nationalfonds. Bern.

SWANSON T.

1997 Global Action for Biodiversity. Earthscan. London.

SZRAO R., JOHNSTON D.

1996 Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

THIES C., TSCHARNTKE T.

2000 Biologische Schädlingskontrolle durch Landschaftsmanagement. In: Ökologie und Landbau 115, 3/2000. S.47ff.

UNEP

1999 Cultural and Spiritual Values of Biodiversity-A complementary contribution to the Global Biodiversity Assessment. IT –Intermediate Technology.

Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN)

2003 Descripción del método de Ecosistemas. Ginebra. <http://www.iucn.org/places/orma/comisiones>.

VOGT K., GORDON J., WARGO J., VOGT D., and collaborators

1996 Ecosystems-Balancing Science with Management. Springer. New York.

WIESMANN U.

1998 Sustainable regional development in rural Africa; conceptual framework and case studies from Kenya. Geographica Bernesia. African Studies A14. Bern.

WOOD D., LENNE J.-M.

1999 Agrobiodiversity –Characterization, Utilization and Management. CABI PUBLICATIONS.

Conservación o desarrollo: algunos elementos para una perspectiva crítica

Marc Hufty¹

1. Introducción

Durante los años 90, se incremento rápidamente el establecimiento de “áreas protegidas” en el mundo entero, y especialmente en América latina. Dicha categoría se ha convertido en uno de los usos mas frecuentes de las tierras emergidas. Las áreas protegidas bajo un régimen de conservación, con sus múltiples denominaciones y categorías, superan en superficie las tierras cultivadas. Tienen impacto sobre la vida de millones de personas que viven dentro o cerca de estas áreas.

El título que elegí, “Conservación o desarrollo: algunos elementos para una perspectiva crítica”, significa que pretendo examinar este fenómeno poniendo en duda las categorías aceptadas, y cuestionando las instituciones (en el sentido sociológico de sistemas de normas), desde un punto de vista a la vez distante, lo que es un privilegio de la academia, y próximo, por una preocupación ética a favor del desarrollo humano.

El establecimiento de áreas protegidas se ha convertido en una de las herramientas mayores de la conservación de la naturaleza en el último fin de siglo. Pero este fenómeno ha generado múltiples interrogantes, como por ejemplo: ¿Como explicar la popularidad de las áreas protegidas como mecanismo de conservación? ¿O, como explicar la multiplicación de las áreas protegidas, si uno plantea la cuestión de las áreas protegidas establecidas por otros motivos que la conservación de un ecosistema prioritario? ¿De donde viene la idea de categorizar por ley zonas y reservarles a usos no inmediatamente productivos? ¿Quién o que instituciones

1 Director del Individual Project 8 del NCCR. Profesor del Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo (IUDE) de la Universidad de Ginebra-Suiza.

están impulsando este mecanismo para la conservación? ¿Conservar para quien y como? ¿Porqué las naciones incrementaron el establecimiento de áreas protegidas a esta altura y velocidad? ¿Quién produce el conocimiento y la pericia para determinar donde y como proteger, y los discursos relevantes? ¿Cuáles son los discursos? ¿Es eficiente como mecanismo el establecimiento de parques y áreas protegidas? ¿Quién determina las áreas que se debe proteger, con que criterios, cuales motivaciones, que apoyos, y como una decisión pasa a ser ley? ¿Finalmente, cuándo ya es ley, que pasa en la práctica, al nivel del terreno, con las poblaciones viviendo dentro o acerca de estas áreas? ¿Cómo interfiere con procesos tal como la descentralización, privatizaciones, participación, y ciudadanía? ¿Cómo puede ser que se perpetúan situaciones en las cuales áreas protegidas sean implementadas en contra de la voluntad de las poblaciones locales?

No es, por supuesto, la pretensión de responder acá a todas estas preguntas, pero cuando considero el fenómeno, son las preguntas que me surgen. Tratando de ordenar esta catarata de interrogaciones, propongo dividir esta ponencia en tres partes:

- Una génesis del concepto de áreas protegidas;
- Una discusión sobre la ciencia y su rol en las políticas publicas de conservación;
- Un examen de sus cualidades como herramienta y de su aplicación en América Latina y Bolivia.

2. Génesis del concepto de áreas protegidas

La conservación o la limitación al uso de madera por ejemplo, es una práctica muy antigua. El derecho forestal ya estaba desarrollado en la Babilonia de hace 3000 años. Akhenaton, faraón egipcio de hace 2500 años, implemento la primera reserva natural conocida. El emperador indio Asoka formulo el primer edicto para la protección de varias especies de animales salvajes². En realidad, los recursos naturales, cuando se percibían como raros fueron objeto de restricciones en cuanto al uso.

El concepto de “parque” nació en Europa³ para proteger bosques, necesarios para la construcción de barcos. Era entonces utilitarista o “antropocéntrico”. La función de la naturaleza era de servir al hombre para su desarrollo. Este es un primer modelo ideal-típico de protección de la naturaleza.

El concepto de parque en su aceptación moderna nació en los EEUU al fin del Siglo XIX con el objetivo de proteger sitios pintorescos. Se crearon parques

2 Sadeleer Nicolas de, “De la protection à la sauvegarde de la biodiversité”, *Ecologie politique*, n° 9, 1994, p. 31.

3 Potvin Catherine, *La biodiversité pour le biologiste: protéger ou conserver la nature?*, *La biodiversité. Tout conserver ou tout exploiter*^{1?}, Parizeau Marie-Hélène (dir.), Coll. Sciences, Ethiques, Sociétés, De Boeck Université, Paris, Bruxelles, 1997, p. 38.

para preservar la naturaleza de algunos lugares, reconocidos como especialmente estéticos. Se creo al mismo tiempo el mito de una naturaleza virgen, intocada por el hombre, tal como Dios la había creado⁴. Esta visión de inspiración “ecocéntrica o preservacionista” fue la que domino cuando se fundo el parque Yellowstone (Wyoming) en 1872 que luego se convirtió en el modelo de referencia para los parques y un segundo modelo ideal-típico de protección de la naturaleza.

Los indígenas que vivían dentro de la zona del Yellowstone fueron incluidos y tolerados al principio, pero rápidamente, en el nombre de la preservación del lugar, fueron expulsados, brutalmente. Este iba a ser el modelo que se difundió en el mundo entero, principalmente en el Sur, acompañando el movimiento de colonización de las potencias europeas.

La idea de proteger un lugar reconocido por su belleza, su interés como reserva de caza o de lugares de descanso para las clases dominantes, implicaba como modo de control social la expulsión de poblaciones indígenas consumidoras de tierras cultivables, de animales y de recursos en general, mientras por el otro lado el colonialista vaciaba estos países de sus recursos.

Esas dos corrientes, la conservacionista, que supone la utilización de las áreas protegidas, y la preservacionista, que supone el mantenimiento de la naturaleza fuera del uso humano, cohabitaron desde entonces. El movimiento de expansión de los movimientos de protección de la naturaleza, por ejemplo IUCN y WF-I, siguieron mayormente el modelo ecocéntrico o preservacionista⁵. Queda claro que es un modelo idealista. Sus postulados científicos fueron criticados.

Desde el punto de vista de la ecología, los ecosistemas no son estáticos, pasan por fases transitorias y el clímax, el estado estable y óptimo, imaginado por los preservacionistas, nunca se logra. La trayectoria evolutiva de un ecosistema esta relacionada con las perturbaciones que le dan forma. Además depende de las interacciones con otros ecosistemas, entonces, aislar un ecosistema para conservarlo, tratando de mantenerle en un estado climácico, no puede sino tener como

4 Dumoulin David, op. cit., p. 4.

5 Le préservationnisme suppose le maintien dans un état supposé de “nature” d’un objet, en-dehors de toute interférence humaine. Quant à la conservation, nous nous référons à l’IUCN qui la définit comme “la gestion de l’utilisation par l’homme de la biosphère de manière que les générations actuelles tirent le maximum d’avantages des ressources vivantes tout en assurant leur pérennité pour satisfaire aux besoins des générations futures”. Cf. IUCN, Stratégie mondiale de la conservation, 1980, Section 1. Toujours selon l’IUCN, “It is important to note that “conservation” does not mean non use, but rather wise use, which contributes to sustainable development. Conservation should therefore be seen as a form of economic development”, McNeely Jeff et al., “Economic Evaluation in Conservation”, Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in Conservation (Volume 2), BORRINI-FEYERABEND Grazia (dir.), IUCN, Gland (Switzerland), 1997, p. 96.

consecuencia una pérdida de biodiversidad⁶. Y los alcances concretos fueron cuestionados. Las presiones antrópicas nunca cesaron cuando se creó un parque. El Yellowstone se convirtió en uno de los lugares de recreación preferidos de los turistas norteamericanos.

Este modelo fue poco a poco rechazado. Las áreas protegidas iban a incluir varios tipos de usos económicos, una posición más realista. Hay que admitir, en el Sur que casi ninguna área protegida está fuera de una interacción con poblaciones locales, quienes usan sus recursos. Hay que pensar que la protección necesita incluir la dinámica hombre-naturaleza. Pero paradójicamente, el modelo preservacionista sigue vigente como un ideal de los profesionales de la conservación y los biólogos, una observación comprobada personalmente.

Queda claro que esta actitud, motivada por una visión preservacionista idealista, fue posible en los países colonizados como elemento del control social.⁷ Pensar ahora en expulsar campesinos o indígenas de un área protegida, o imponer nuevos parques sin tener en cuenta la gente tiene resabio a colonialismo, que sea entre países o internamente, es la negación de la ciudadanía, del derecho a manejar su destino, para estas poblaciones. El balance entre lo que se califica de patrimonio colectivo, o el salvataje de especies o ecosistemas claves y las necesidades humanas, no es una cosa simple.

¿Porque se incrementó rápidamente el establecimiento de “áreas protegidas” en el mundo entero, y en América latina en particular? Se debe a una multiplicidad de causas. El modelo de los parques con el objetivo de salvar a especies o ecosistemas específicos funciona en Europa y América del Norte (dominación cultural). La mayoría de las publicaciones producidas reproducen este éxito. Históricamente, las autoridades de los estados en desarrollo tomaron el modelo y lo aplicaron. Hoy día se valoriza a través de un mecanismo complejo que tiene que ver por lo menos con dos elementos: la ciencia y los mecanismos de financiamiento (la economía).

3. Ciencia y política

Los lazos entre lo local, nacional e internacional se reforzaron de manera significativa desde la Cumbre de Río de 1992. Las políticas de manejo de las áreas Protegidas, sea por la elección de las prioridades, metodología o la implementación

6 POTVIN Catherine, “La biodiversité pour le biologiste: protéger ou conserver la nature?”, *Tout conserver ou tout exploiter?*, PARIZEAU Marie-Hélène (dir.), Sciences, Ethiques, Sociétés, De Boeck Université, Paris, Bruxelles, 1997, p. 38.

7 Grove Richard, *Ibid.*; Rodary Estienne, “Participation locale et conservation de la faune”, *Ecologie politique*, n° 20, Printemps 1997, p. 33.

día tras día, son construidas en común. Se crean coaliciones, alianzas y redes entre estos niveles. Entonces esa es la manera en la cual se definen las políticas en los niveles internacional y nacional en relación con lo local, la realidad del terreno, tienen que ser conceptualizados conjuntamente.

La manera de como la ciencia influye es un primer elemento a considerar y que quedo poco cuestionado. Hay una ciencia “dominante”, es decir un consenso que se desarrolla permanentemente a nivel internacional y que influye en todos los países, particularmente en los países dependientes de la ayuda externa para la implementación de sus programas de conservación. La visión del mundo y el discurso elaborado por la ciencia es determinante.

Hay una “verdad” y las situaciones que no se ajustan a esta verdad, son consideradas como aberraciones que se tienen y que se pueden corregir tras un mejoramiento del conocimiento y de los procesos de implementación. Los campesinos o indígenas que no respeten los límites de un parque, debe ser porque todavía no lograron encontrar el incentivo perfecto. Aún fuera de un populismo anticientífico, quizás habría que poner en duda los objetivos mismos. Como son impulsados por un razonamiento lógico, moderno y a una pretensión universal, además de ser apoyados por los millones de dólares del régimen internacional de la ayuda externa, es una tarea difícil.

¿Pero, como se construye este conocimiento? La ciencia es construida por ideas y grupos de investigadores en competencia. Cuando se impone una idea, quedan muchas dudas y cuestionamientos. Esta competencia abierta (por las publicaciones) garantiza la posible evolución del conocimiento científico. Hay pocas certezas, sobre todo en relación con el mundo de la ecología, de los ecosistemas y de las interacciones con el ser humano. Cuando se trata de modelos predictivos (por ejemplo como se comporta un sistema ecológico bajo tales condiciones) aplicados al mundo real, fuera del laboratorio, las variables imprevistas se añaden a un sistema ya complejo de variables aisladas teóricamente. La incertidumbre crece significativamente.

Pero el conocimiento científico para ser implementado bajo la forma de proyectos concretos, entra en un proceso de diálogo con el político y el tecnocrático. Y paradójicamente, mientras más se acerca al terreno, más se convierte en certidumbre, porque para la acción no se debe dudar. Hay muchos intereses en juego. Las incertidumbres del científico se convierten en certidumbres del técnico⁸.

En realidad, lo que parece racional no lo es tanto. Muchos factores juegan cuando se trata de decidir donde vamos a crear un área protegida o que especie proteger. No queda claro cuando el “científico” o el “técnico” va a tener el criterio decisivo sobre otros factores, políticos por ejemplo. Es siempre una mezcla de motivos en la cual el político se apoya sobre el técnico y el técnico sobre el político.

8 Keeley & Scoones. Understanding environmental policy process.

¿Quien decide, en que tipo de dinámica, que relación de poder? Reconocer esto es entrar en la realidad y en el mundo de las ciencias sociales.

Además, no se entiende el mundo de la conservación sin entender el mundo del desarrollo. No hablo de situaciones concretas de terreno, sino del mundo de los organismos nacionales e internacionales que pretender aportar el desarrollo a los países de Sur. Aparte del hecho de que veo el desarrollo como una creencia occidental (Rist) y que cada pueblo tendría que poder definir el mismo su modo de inserción en la economía globalizada, existe una realidad. El nivel internacional (entendiendo a organizaciones internacionales, ONG y cooperaciones bilaterales) llega con una idea bien puesta y muchos recursos para implementarla. Influyen sobre las políticas públicas nacionales y locales tras la condicionalidad en general, limitando las elecciones posibles, y tras mecanismos de intervención diaria al nivel del terreno. Y como la ayuda para la conservación pasa por estos mecanismos, tiene la misma lógica. La posibilidad de elegir un camino diferente es muy limitada.

4. Las áreas protegidas como mecanismo en América Latina

El nombre de áreas protegidas se incremento muy rápidamente en América Latina y en Bolivia. Hay alrededor de 350 áreas protegidas en la cuenca amazónica, que cubren el 5% de la región.

Aunque los primeros programas de conservación son antiguos, pienso por ejemplo en la protección de la vicuña, este incremento se produjo sobre todo en los años noventa y no es casualidad, las áreas protegidas se han convertido en el instrumento preferido de los conservacionistas y técnicos.

Pero aquí también quedan pendientes muchas preguntas. ¿Es eficiente esta visión de la conservación? ¿tienen la capacidad de garantizar la capacidad de regeneración potencial de los ecosistemas?

Hay obstáculos a la eficiencia de esta visión, como por ejemplo:

- La falta de conocimiento sobre las relaciones entre los ecosistemas, sobre las interacciones entre el sistema de áreas protegidas implementado. Muchas áreas protegidas son de dimensión demasiado reducida para ser muy eficaz y se concentran a menudo sobre unas especies claves, lo que suele introducir incoherencias.
- La falta de coherencia entre los diversos mecanismos de protección. Pienso en las 19 categorías de protección vigentes de áreas protegidas o las acciones no coordinadas de los varios organismos que intervienen
- La falta de conocimiento sobre la realidad del nivel de protección logrado frente a las capacidades institucionales limitadas de los estados o de las

comunidades de asumir una responsabilidad técnica y financiera creciente con recursos limitados

- Y cuando la ley se aplica, corre el riesgo de antagonizar a las poblaciones locales, sobre todo cuando un área protegida se realiza sin consultas previas. Las realidades sociales son complejas y diversas, un solo modelo no puede abarcar el conjunto de estas situaciones.

Es cierto que no se puede dejar abierto un crecimiento anárquico, pues conduciría a la desaparición de los bosques y ecosistemas, hay que proteger, pero que, como y con quien, es objeto de muchas interpretaciones.

Estas son algunas ideas que quería compartir con Uds. Dejo abierto aun más preguntas que al principio, pero me parece fundamental una mirada crítica hacia el binomio conservación-desarrollo.

Panel de debate y discusión

Parte I

Moderador:

Dr. Freddy Delgado, Director AGRUCO-UMSS, Cochabamba-Bolivia

Silvia Rodríguez

Universidad Nacional de Costa Rica

Quería preguntarle a Carmen, creo que asistió al Congreso de Durban. En ese congreso no se plantearon cuestionamientos, o algo así? Porque recuerdo que desde el Congreso de Bali en 1982 ya se hacía referencia a los parques solo en papeles, también ya se hablaba del rechazo y los conflictos con las poblaciones locales. Por ejemplo en África, los Godos asesinaban incluso a los encargados de administrar y proteger los parques. En Costa Rica también hubo innumerables reacciones de la gente, las cuales están bien documentadas. Entonces la pregunta es si después de tantos congresos (cada 10 años), se ha planteado algún cuestionamiento más allá de las propuestas tan bien hechas que salen de estos congresos.

Carmen Miranda

Representante de la UICN, Bolivia

Creo que si ha habido, porque hay un proceso muy interesante de búsqueda de soluciones de acuerdo a como se va dando la realidad y de acuerdo a como van surgiendo los conflictos. En Durban si hubo pronunciamientos respecto a que en muchos países continua habiendo áreas protegidas (AP) solo en papeles, es decir que solo ostentan la denominación o la categoría de área protegida puesto que en la realidad no pasa nada.

En el caso de Bolivia, por ejemplo, nuestra primera AP creada fue el Parque Nacional Sajama en 1939, pero por más de cuarenta años ni el Estado boliviano

se ocupó de esta AP. En Bolivia hasta 1992 más de 40 AP pasaban por la misma situación, es decir solo existían en papeles. A la fecha esta situación a cambiado, al menos en parte, porque se tiene en funcionamiento un Sistema Nacional de Áreas Protegidas con 21 AP que han implementado su gestión en los 10 últimos años. Evidentemente, como mencionaba Stephan, estos han recibido un importante apoyo financiero y técnico de la cooperación internacional; todos sabemos que Bolivia cuenta con muy pocos recursos para desarrollar y financiar el funcionamiento de todas las áreas protegidas.

Es importante entender la situación de las AP desde el punto de vista ecológico, biológico y principalmente de lo que ha sido la evolución de las especies. Como se sabe, hubo diferentes periodos de evolución y extinción de las especies; en estos momentos estamos pasando por la sexta extinción planetaria pero la diferencia de esta con las anteriores, es que es más rápida y que está poniendo en serio riesgo la supervivencia misma de la humanidad. Entonces creo que debemos preguntarnos que hacer? cambiamos nuestra visión y actitud como seres humanos con respecto a la naturaleza, o caso contrario desaparecerá todo.

El desarrollo de las áreas protegidas en el caso boliviano es muy particular. Cuando se empezó a trabajar y se participaba en reuniones internacionales, hacíamos conocer que en Bolivia se estaba avanzando en lo que es la gestión de áreas protegidas con gente, muchos colegas colombianos, costarricenses, ecuatorianos, peruanos y chilenos reaccionaban con la siguiente frase: ustedes están locos... Para estos colegas era imposible pensar en que existieran áreas protegidas con gente, puesto que la historia de las AP en la América Latina se ha caracterizado por seguir las pautas de la tónica internacional y los principios de restricción total para la gente. En Bolivia eso es muy difícil porque todos sus ecosistemas han estado ocupados y tienen una historia de ocupación desde mucho antes de la llegada de los españoles en 1532, por lo que en Bolivia no hay territorios donde no existe o no haya existido población. Las AP con gente requieren prácticamente de otra visión muy diferente.

Quiero aprovechar también para comentar algo sobre lo que mencionó Stephan respecto a que se requiere otro método diferente a las AP para conservar la biodiversidad. Estoy de acuerdo que el futuro podría ser ya no de áreas protegidas, pero ¿cuál sería el proceso para desarrollarnos y conservar a la vez nuestros recursos naturales y biodiversidad? ese equilibrio parece muy difícil. Creo que en algunos casos se requiere limitar el uso de la biodiversidad para poder asegurar su conservación, como revelan los estudios que realizamos en el caso de la Estación Biológica del Beni. Aquí los indígenas Chimanes cazan y viven de la naturaleza en un 100%, entonces que pasa? Una relación equilibrada entre la naturaleza y las sociedades humanas se va a dar solo en tanto no se sobrepase la capacidad de carga y el uso de la biodiversidad. Actualmente nuestra sociedad es extremadamente consumista y por eso hay la necesidad de tener áreas protegidas. Bolivia

hace años atrás tenía más del sesenta por ciento de su territorio con superficie de bosque, pero ahora cual es la realidad? Los ocho millones de personas que actualmente vivimos en Bolivia tenemos una gran capacidad de destrucción, o sea hay procesos intensos de transformación de la naturaleza, y comparando los ecosistemas intervenidos por el hombre con los ecosistemas naturales definitivamente estos últimos son mucho más biodiversos. En resumen, es muy fácil decir ya no queremos más áreas protegidas, pero en este momento estamos viviendo un proceso muy severo de cambio de los ecosistemas y de destrucción de los recursos naturales y la biodiversidad. Si hubiera una comprensión y una profunda conciencia de las sociedades humanas para no transgredir las posibilidades de soportabilidad ecológica de la misma naturaleza, entonces podríamos decir no a las áreas protegidas, pero creo que no estamos en esa posibilidad.

Miguel Angel Crespo

PROBIOMA, Santa Cruz-Bolivia

Quiero hacerle una pregunta a Carmen, pero antes quisiera hacer la siguiente reflexión. Las iniciativas y propuestas que se han hecho en Durban las encuentro muy contradictorias. Hace unos días leí una revista muy interesante de biodiversidad donde se comentaba mucho sobre las iniciativas para la integración regional, también comentaban sobre una serie de políticas y estrategias que están usando el Banco Mundial, el BID y la CAF. A nivel latinoamericano todas estas políticas y estrategias significan obviamente la integración energética, gasoductos, oleoductos, corredores de exportación, hidro-vías, etc. Pero paralelamente a esto tenemos las iniciativas que conllevan fundamentalmente a consolidar los corredores biológicos, lo cual está impulsado por ONGs, las organizaciones internacionales conservacionistas y otras. Ahí tenemos una contradicción. En Centro América se tiene por ejemplo el corredor biológico de mesoamérica, pero contradictoriamente se tiene también el Plan Puebla Panamá.

En Bolivia se tiene también el tema de la integración energética, el corredor Vilcabamba Amoro, el gasoducto Camisea, la declaración de sitios Rama en el pantanal, la hidro vía Paraná Paraguay y otros emprendimientos internacionales, pero para estas acciones y políticas internacionales, que afectan muchos más los ecosistemas y la biodiversidad, no se hacen cuestionamientos de parte de las organizaciones conservacionistas. Esto me lleva a la conclusión de lo que se vive en Bolivia: el hecho de impulsar áreas protegidas sin ningún objetivo, al margen de las poblaciones locales y manejando el término participación parece que no tiene sentido, cuando el problema no es participación, sino “derecho soberano” de las poblaciones locales, municipios y Estado. Bajo el tema de la participación parece que se quiere hacer que muchos participen pero no decidan, y los que deciden

en definitiva son los grandes conglomerados de organizaciones no gubernamentales internacionales, las que mas tarde entran en negociaciones con este tipo de políticas internacionales para su mismo provecho y beneficio. En Bolivia tenemos un famoso caso de este tipo de negociaciones, como es el caso del bosque seco chiquitano, donde 5 ONGs conservacionistas han negociado por veinte millones de dólares con la ENRON y SHELL la destrucción de un bosque que tenía categoría “A”, declarado prístino por el Ministerio de Desarrollo Sostenible, pero han pasado por encima de eso para negociar con estas transnacionales. Entonces en qué estamos? Las propuestas de Durban son realistas o no; son nuevamente un saludo a la bandera o una distracción?

Lo que pasa en los hechos, es que no se respetan las soberanías, no se respetan los derechos y normas de cada uno de los Países y no se está siendo consecuente con los principios de la conservación. Personalmente estoy de acuerdo con el establecimiento de áreas protegidas, pero deben ser hechos en base a criterios y necesidades. Hay otro elemento que planteaste mucho: “manejo”. Este término o concepto en el fondo esta dirigido simplemente a mostrar el eficientismo científico, sin embargo la calidad de manejo no está en función a ello, sino que está en función del derecho y el manejo consuetudinario tradicional que tienen las poblaciones locales, obviamente en equilibrio y en coordinación con lo que pueden hacer la ciencia, y no es al revés. Eso muestra un nuevo sesgo en el planteamiento de Durban. Entonces cual es el fondo de lo que realmente se está planteando? Apoderarse de los recursos genéticos para un mejor negocio o negociado con empresas transnacionales ligadas a la explotación de los recursos naturales? Esa es la pregunta que hago.

Carmen Miranda

Representante de la UICN, Bolivia

Es difícil responder tu pregunta, pero tratare de abordar por dos partes. Primero aclarar que no se tiene una uniformidad de criterios y acciones entre las organizaciones conservacionistas nacionales e internacionales. La UICN por ejemplo no es una ONG, sino es una entidad que aglutina a instituciones de diferentes partes del mundo y tiene diferentes instancias, tiene por ejemplo como miembros no solo a ONGs sino también a gobiernos. Hay también redes de expertos que trabajan en áreas protegidas, la conservación de especies, el derecho ambiental etc. Entonces la UICN es un ente muy complejo, que tiene también una problemática interna muy compleja y hay diferentes posiciones, no hay una uniformidad, aunque si hay una uniformidad en cuanto a la visión. Respecto a otras ONGs internacionales que funcionan bajo un enfoque empresarial tengo mis propias ideas.

Lo que ha sucedido en el congreso de Durban es lo que siempre sucede en estos espacios donde asiste gente de diferentes nacionalidades con diferentes visiones y percepciones. La comisión de parques que está conformada por un grupo de especialistas y que generalmente son los que organizan estos eventos, casi siempre ha tenido una visión muy conservadora. Evidentemente esto molesta a mucha gente y cuestiona. Después del congreso de Durban hubo mucha discusión y cuestionamientos principalmente referido a que se está perdiendo la esencia y el propósito de las áreas protegidas, o sea hay diferentes visiones y tendencias; hay un sector joven sobre todo provenientes de los países en desarrollo que pone sus experiencias nuevas sobre la mesa como por ejemplo el de gestionar AP con gente, frente a otro sector tradicional y con una visión altamente conservacionista. Ello posiblemente se deba a que la gestión de AP en Latinoamérica por ejemplo no es lo mismo que en Europa o en EE UU, incluso Chile tiene una visión muy diferente. En Chile muchas de sus áreas protegidas se han establecido durante el gobierno de facto de Pinochet, teniendo en consecuencia un sistema de AP terriblemente rígido. Entonces creo que hay mucha pugna y los resultados de Durban son indicativos de la problemática en la que se encuentran las AP en todo el mundo.

En cuanto a quienes marcan las pautas del desarrollo, se debe tomar en cuenta que instituciones como el BID son los que financian los grandes proyectos como es el caso de Camisea. En este caso el BID ha financiado la evaluación de impacto ambiental del proyecto, pero hay otras entidades que tienen otros intereses como por ejemplo la prospección petrolífera antes que una evaluación de impacto ambiental; dentro las mismas instituciones hay gente bien intencionada y otra posiblemente no. Sin embargo, todo esto es muy complicado analizar. Incluso saber por donde van las prioridades de conservación en nuestro país, hace un momento lo comentábamos, existe instituciones que disponen de muchos recursos y tienen una alta capacidad institucional de tener presencia, por lo que casi siempre estas instituciones son las que definen por ejemplo las prioridades de conservación.

¿Por qué se ha priorizado el corredor Villcabamba-Amboró? Porque es un Jots Pot, es decir tienen un alto potencial y una alta importancia para la conservación de la biodiversidad, y hacer un corredor biológico bajo estas condiciones tiene un montón de justificaciones. Pero quien empezó con eso y cual ha sido la reacción como bolivianos y del gobierno? Entonces creo que es muy difícil echar solamente la culpa a las iniciativas de las ONGs Internacionales, además muchas de ellas posiblemente trabajan de una manera honesta para aportar a la conservación de la biodiversidad y otras talvez están respondiendo a las políticas de intromisión de las potencias y las transnacionales en países en desarrollo, como es el caso de Bolivia.

En relación al tema de la participación local, vuelvo a poner el caso del corredor Villcabamba-Amboró. Hay que reconocer que en este caso ni siquiera

la definición de los límites ha sido discutida en un ámbito más amplio y con las argumentaciones nacionales respectivas. Este tipo de cosas no son adecuadas y desde el punto de vista de la participación es una enorme deficiencia; es importante y necesario abrir una amplia participación, por lo menos me considero una defensora de ello y estoy absolutamente convencida de que si no hay una participación y un involucramiento responsable de la sociedad civil en la gestión de la biodiversidad, lamentablemente nuestros recursos y nuestra biodiversidad se va a deteriorar mas de lo que ya están.

Gonzalo Zambrana

Director de Medio Ambiente del Municipio de Cochabamba

Si nos ponemos a pensar en lo que dijo Carmen, en una serie de recursos de la biodiversidad o de especies que están en peligro de extinción, como el caso de la paraba de frente roja por señalar un ejemplo, y nos preguntamos que hacer frente a este fenómeno? seguramente muchos recomendarán la creación de áreas protegidas y otros no. Personalmente creo que debe haber áreas protegidas; asimismo, tal como dijo Carmen, creo que el concepto de área protegida es inherente al ser humano y a la concepción de desarrollo sostenible que tienen las comunidades, ya que las comunidades han convivido con la naturaleza durante mucho tiempo, ahí están los criaderos de ganado, ahí se práctica la rotación de cultivos, ahí se tiene los corrales itinerantes. Entonces hay una serie de perspectivas o de experiencias que son parte de la esencia misma de las comunidades indígenas campesinas, por lo tanto el concepto de área protegida no es extraño a las comunidades campesinas indígenas ni a nosotros mismos, y difiere de lo que viene de afuera.

Ahora, cuando vemos la forma como en la década del setenta se formularon las categorías de áreas protegidas a partir de la UICN y un equipo grande en el mundo, como esto se modificó luego. El año 92 aparece una categoría que introduce el concepto de manejo a las área protegidas, es decir se introduce el aprovechamiento de los recursos naturales a las áreas protegidas; los últimos resultados de Durban sin duda muestran avances en este sentido, pero de donde derivan esos avances? Derivan del planteamiento de nuestras propias necesidades y de nuestra propia realidad, de la realidad de cada uno de nuestros países, ahí es donde se modifican esas concepciones únicamente conservacionistas. Por otro lado, porque desde el año 92 se empieza a hablar de desarrollo sostenible, por qué empieza a haber gestión en las áreas protegidas? Eso deciden y viene de afuera, y eso viene con plata; por qué hoy día hablamos de gobernancia, de gobernabilidad, de desarrollo humano, de alivio a la pobreza, todo eso viene de afuera. Ahora, si nos ponemos a pensar y a discutir demasiado sobre si lo que viene de afuera es malo o no, o la forma como se están planteando es bueno o malo, no vamos a llegar a ningún lado y no

vamos a alcanzar seguramente ningún resultado. ¿No será mejor partir de nuestras propias experiencias como el caso del parque amboró? Aquí se movilizaron todas las comunidades para impedir la perforación de un pozo petrolífero, entonces en esta experiencia aparece una concepción diferente de áreas protegidas, resulta que los campesinos impiden a una transnacional a que haga perforaciones. Tal vez lo que tendríamos que hacer es apropiarnos del concepto de áreas protegidas, pero discutirlo desde nuestra racionalidad, desde la racionalidad de las comunidades locales. Así los conceptos que vienen de afuera se adecuan a nuestra realidad; modificar y adecuar la concepción de las áreas protegidas hasta convertir estas en espacios simultáneos de desarrollo y conservación.

Comunario de Sewencas

Trópico de Cochabamba

Bueno, soy nativo de la Comunidad de Sewenca (Trópico de Cochabamba) desde mis abuelos. Entonces yo conozco la naturaleza, como ha sido Sewencas y más hacia el norte como es Yuracare. Por ello cuestiono lo que han indicado los expositores ¿De qué manejo hablan? ¿Quién está manejando a quien? ¿A cargo de quién está la administración de los parques? Hay un director no cierto? entonces puedo decir que la administración es la que maneja el parque.

Por otro lado, la señora Carmen mencionó que los parques dan beneficios. El parque nacional Carrasco se ha creado en 1991, de ahí para aquí en vez de traer beneficios, a mí me ha traído perjuicios, tuve que defender mi terreno hasta con hombres, eso es beneficio? Que me digan que está prohibido trabajar la tierra en el parque, y mi derecho adquirido antes de la creación del parque donde está? Aquí hay un problema muy grande, en realidad se está confrontando a la gente del área rural con la gente de la ciudad. ¿A caso en el área rural no hay propiedad privada como en las áreas urbanas? Es lo que les dije a algunos turistas.

Ahora en el caso de los animales silvestres, es la naturaleza misma que se encarga de ellos. Pueden preguntar en Sewencas, por el año 1955 había muchas aves, incluso nadie cazaba, pero ha ido desapareciendo; asimismo habían truchas que pesaban hasta dos kilos, ahora las truchas no pesan más de 150 gramos. Esto se debe a razones: la mano del hombre y la misma naturaleza. Bueno es verdad que todo está desapareciendo más rápido, de aquí a 50 años que será, y no vayan a echar la culpa a los campesinos e indígenas. En cuanto a los recursos forestales son renovables, lo que hace falta es concientizar en vez de criticar, quién viene a Sewencas a depredar nuestras truchas? gente de la ciudad que son profesionales abogados, médicos que creen tener mas derecho que nosotros, a mí estos han amenazado con demandarme, yo encantado me he presentado y de ahí les dije en forma de broma: que a su dueño de casa lo están demandando. No se que

autoridad me haya citado, pero no es justo demandar a los dueños legítimos no creen? Entonces es falta de conciencia y respeto a nuestros derechos adquiridos desde nuestros abuelos. Con eso termino.

Gonzalo Merida

Exconsultor para la Estrategia Nacional de Biodiversidad

Una de las cosas más interesantes de estos seminarios es la apertura al análisis conceptual. Creo que Marc y Stephan han enfocado el tema bien de fondo conceptualmente hablando. Bolivia quizá esta en el momento más importante, me hubiera gustado que este aquí el director del SERNAP, porque realmente hay una fuerte necesidad de conceptualizar un cambio marcado en lo que significa la descentralización, en lo que significa una concepción diferente de hacer gestión sostenible de la biodiversidad y del patrimonio natural. No hay duda que estamos en una coyuntura muy interesante principalmente para el Sistema de Áreas Protegidas, pero también como decía Stephan fuera de ese 86% de nuestro país, hay la necesidad de conceptualizar la conservación de áreas protegidas y de generar beneficios con distribuciones más equitativas. Creo que quedó un vacío, como que faltando nudos sobre aquello que Stephan decía, esas preguntas de fondo conceptual, pero quizás tanto Marc y Stephan puedan comentar algo más sobre el cómo enriquecer un proceso que viene desde este seminario o las conclusiones que pueda generar este seminario, en las posibilidades de empezar a abordar ese cómo en la percepción de ustedes y en la revisión y presentaciones que nos han hecho.

Stephan Rist

CDMA, Universidad de Berna-Suiza

Creo que tocaste un punto neurálgico y estoy consciente que en la presentación no lo respondí, pero si planteamos la pregunta con una finalidad y un propósito muy claro. Creo que no tengo la capacidad para dar la solución a esto, aunque podría imaginarme alguna cosa, pero sería muy pretencioso pensar que yo resolveré ese problema, debido a ello lo que hacemos es introducir únicamente conceptos nuevos. Lo que se tiene que definir, en primer lugar, es la metodología, es decir definir quienes y cómo debería elaborarse las soluciones. Eso es lo que tendríamos que aprender, porque estamos mal acostumbrados a que solo los científicos, políticos o expertos resuelvan los problemas que enfrentamos en la vida cotidiana. Ese es el camino que nos ha de llevar a dar soluciones efectivas a los problemas. En este sentido se deben abrir espacios de discusión como este seminario por ejemplo, que me parece muy importante porque aquí podemos plantear muchos aspectos, así

poco a poco se puede ir construyendo y uniendo elementos en una perspectiva de encontrar soluciones adecuadas.

Mi respuesta posiblemente no satisface suficientemente a sus inquietudes, por ello quiero plantear un aspecto más. Los que trabajamos como expertos no cultivamos la virtud de escuchar a aquellos que no son de nuestra misma formación profesional; escuchando a don Zacarías esta mañana por ejemplo, me acordé de una entrevista que realizamos en un trabajo de investigación con AGRUCO, donde sale muy claramente que los campesinos están dispuestos de negociar y también a aceptar ciertas restricciones en cuanto al manejo de la biodiversidad pero siempre y cuando la otra parte (como prefecturas, ONGs) estén dispuestos a respetar y cumplir los compromisos. Muchos campesinos dicen para que vayamos a negociar, porque luego no nos respetan, nos hacen participar y después todo queda en nada. Otro aspecto a lo que estamos acostumbrados es la imposición que viene de afuera; entonces creo que todo esto nos puede indicar por donde deberíamos andar. Aprender a escuchar creo que es lo fundamental.

Marc Hufty

IUED, Universidad de Ginebra-Suiza

En ese sentido insistimos con Freddy para tener un estudio de caso concreto en el Parque Tunari, del cual vamos a hablar mañana. Aquí se busca un encuentro entre dos mundos diferentes, entre dos concepciones diferentes: académicos y campesinos. Otro factor que me parece muy importante y que leí en el último número de la revista "The Economist" (revista inglesa), es el "empoderamiento" de los pueblos indígenas en América latina. Por qué cambiaron las ideas de los parques? porque simplemente hubo una confrontación con los pueblos indígenas. Por ello actualmente ya no se puede imponer la creación de un parque muy fácilmente, se generan muchos problemas a todo nivel. Entonces las cosas han cambiado, asimismo hay un interés global para salvar lo que más se pueda de la naturaleza, pero también se mantienen algunos intereses humanos. Como conciliar y encontrar soluciones me parece que pasa por escuchar y empoderar a la gente que hasta hace 20 años atrás no tenía voz ni reclamaba sus derechos.

Emilio Espinoza

Dirigente de la Central Campesina Provincial de Quillacollo

En primer lugar quiero saludar a todos los compañeros presentes como a los expositores. Mi nombre es Emilio Espinoza, ex dirigente de la central provincial de Quillacollo y soy de la comunidad Chapisirca. Quiero decir que los de afuera

no conocen como vivimos en nuestras comunidades, no viven en nuestro territorio nacional, no los conocemos, además sabemos con que idea sacan las leyes y escriben artículos, y por eso creo que hay mucha desconfianza del movimiento campesino; mi provincia por ejemplo esta afectada en 80% por el Parque Nacional Tunari. Por otro lado hay que hablar de las empresas transnacionales, eso quería preguntarle a la señora Carmen, ella mencionaba claramente que en las áreas protegidas la gente que vive ahí destruye los bosques, yo pregunto acaso las empresas mineras y petroleras no destruyen los bosques? Hay otras empresas que explotan agua para generar energía, estas no destrozan el medio ambiente? La Empresa Misicuni, por ejemplo, ha provocado muchos destrozos, incluso ha quitado tierras a los compañeros. En el Parque Altamachi hay 12 concesiones mineras. Creo compañeros que nosotros tenemos derecho para plantear y nosotros conocemos que esta pasando en los parques; así también nosotros trabajamos para poder traer alimentos a Cochabamba y todo el país, somos agricultores sembramos papa, oca, papalisa y muchos otros alimentos, sabemos transformar los productos agrícolas como el chuño.

Esa es la situación. Me extraña, así mismo, que el ex ministro Claudio Mancilla anuncie en Berlín en marzo del 2001 y que salió en el periódico "Los Tiempos", que Bolivia dará uno de sus Parques del Salar de Uyuni en concesión y no en privatización. Por qué se hace esto compañeros? Porque la ley de áreas protegidas no se ha realizado con la participación de los compañeros campesinos, no ha habido una participación de la ciudadanía que conoce su territorio. Hay que decir que el expresidente Goni Sánchez de Lozada que ha trabajado a favor de las transnacionales, ha firmado el decreto ley de áreas protegidas dos días antes de concluir su gestión. Parece que ningún ministro, ningún parlamentario, mucho menos los consejeros de las provincias conocen sus territorios, ellos deberían ser partícipes en la elaboración de las leyes de áreas protegidas, si se quería hacer una ley que favorezca a los compañeros campesinos. El diputado Roberto Fernández de la Provincia Quillacollo ha propuesto una nueva ley del Parque Nacional Tunari, pero este diputado no conoce ni a los campesinos. Nosotros si bien no conocemos mucho de la teoría, pero de la parte práctica sabemos mucho, y con eso podemos aportar para hacer buenas leyes. En el caso de la Ley del Parque nacional Tunari hace 12 años no puede funcionar, esto se debe a que el mismo gobierno no cumple la ley; por eso compañeros es hora de plantear soluciones desde nuestras bases.

Otra cosa que pasa con los que asisten a los congresos mundiales hablan a nombre de toda la ciudadanía, como si todos estarían de acuerdo con lo que el gobierno hace. Quienes van a estos congresos? Que planteamientos hacen? Yo tuve oportunidad de participar en un congreso mundial en Francia en Tanderil, ahí me extraño mucho que los parlamentarios y ministros van a hablar como todo estaría solucionado con la ciudadanía y el movimiento campesino de nuestro país. Eso ya no puede seguir, llegó el momento de cambiar, los parlamentarios mienten incluso

en otros países. Pero yo sé que cuando participamos nosotros los amigos de otros países se dan cuenta que nuestros parlamentarios mienten, por ello debemos ser partícipes cuando se está elaborando una ley.

No hay que olvidarse que en nuestras comunidades tenemos muchos usos y costumbres, y también sabemos como se manejan las servidumbres. Los profesionales tal vez nos pueden ayudar redactando las propuestas que nosotros podamos presentar y plantear, pero no aprovecharse de los compañeros para sacarles solamente sus conocimientos. La participación de la ciudadanía es muy importante, porque sino nunca va haber consenso. Sabemos que muchas de las leyes de nuestro país es copia de otros países o es una imposición desde los organismos internacionales, pero esto tenemos que cambiar, todos nos equivocamos y también podemos corregirnos nosotros mismos.

Juan José Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Hablare a nombre del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) sólo para aclarar dos cosas que son vitales y para que no se genere desinformación. Primero que no hay una ley de áreas protegidas aprobada, por lo que acaba de decir el compañero que me antecedió no es cierto. Lo que se tiene son dos propuestas de ley y esta tarde seguramente vamos a hablar con mayor detalle de eso. El segundo elemento es que el salar de Uyuni no es un área protegida, sino que es una reserva fiscal que tiene intereses fundamentalmente mineros, por tanto el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de manera directa no tiene ninguna atribución legal. Cualquier iniciativa que hubiera tenido el ministro Mancilla en aquel momento, tenía que ver más con la actividad turística, porque él era ministro de comercio exterior e inversiones, donde el turismo está incluido. Entonces el SERNAP no tiene que ver nada con eso y mucho menos un tema de concesión de un sitio como ese. Para el SERNAP es vital que se maneje bien la información y se tenga claridad en la información; respecto al resto de los temas en mi intervención plantearé una serie de cosas que también me gustaría compartir con ustedes.

Carmen Miranda

Representante de la UICN, Bolivia

Quería comentar algunas cosas con respecto a la preocupación del compañero Emilio. Creo que los esfuerzos por conservar la biodiversidad y manejar sosteniblemente los recursos naturales en Bolivia son muy difíciles, puesto que Bolivia no tiene una política de Estado en este sentido. Entonces la conservación

de la biodiversidad para el Estado no es una prioridad. Los procesos de discusión se van dando por ejemplo en relación a la ley de áreas protegidas; creo que hay una demanda justa en decir por qué se va a abstraer un territorio para conservar la biodiversidad y va a impedir el ingreso de empresas mineras o petroleras? Entonces creo que la demanda de los compañeros campesinos es algo absolutamente justa, pero lamentablemente en Bolivia tenemos una falta de coordinación intersectorial muy grande. Si tocamos los casos por ejemplo del Isiboro Sécore, el Pilón Lajas y así muchos otros, vemos que los temas de seguridad jurídica y de propiedad son terriblemente conflictivos, porque son áreas que tienen inclusive hasta 5 usos diferentes: son áreas protegidas, son territorios indígenas, son áreas de colonización, son áreas de prospección petrolífera, son áreas de prospección minera y son áreas de reservas forestales. Entonces cual es la prioridad en cuanto al uso de recursos que prevalecerá en estas áreas; no hay una adecuada articulación a nivel sectorial, inclusive dentro del mismo Ministerio de Desarrollo Sostenible quién tiene competencia sobre cada uno de los destinos. El problema es muy serio para las áreas protegidas y para la conservación de la biodiversidad en su conjunto, mucho peor al no contar con un marco legal que respalde a las áreas protegidas. Todos los esfuerzos que se vienen haciendo son acciones que tienen en muchos casos resultados a medias, ya que no se cuenta con la fuerza jurídica como para hacer prevalecer la conservación de la biodiversidad y ciertos derechos de la gente local. Si no hay una política de Estado la situación de la biodiversidad y las áreas protegidas es muy delicada y compleja. Sabemos que hay otros intereses que están en juego y están presionando para ello. Quería terminar respondiendo en algo la preocupación de Gonzalo, en el sentido de que sí es necesario en Bolivia que se discuta el tema de la gestión de la biodiversidad. Creo que es muy importante que las instituciones gubernamentales se abran a la sociedad de una manera transparente y sincera, para que así se pueda entablar un diálogo con todos los actores que tienen que ver de una u otra manera con el tema de la Gestión de la Biodiversidad, o sea me parece que se ha tenido diez años de trabajo esforzado lográndose algunos resultados, pero como alguien lo mencionó, de aquí para adelante la cosa es diferente, si es que no hay una apertura a un diálogo sincero y transparente no vamos a poder avanzar mucho.



Exposición de la Lic. Carmen Miranda: "Perspectivas y desafíos de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad"



Panel de discusión y debate Parte I: Situación y análisis de las áreas protegidas en el mundo Latino-américa y Bolivia. Dr. Stephan Rist (Univ. Berna- Suiza), Dr. Marc Huffhy (Univ. Ginebra-Suiza), Lic. Carmen Miranda (IUCN-Bolivia)

Parte II

Experiencias y análisis de las áreas protegidas en Latinoamérica

Áreas protegidas y pueblos indígenas: Directrices y experiencias internacionales

Jose Aylwin O.¹

Jaime Soto N.²

1. Antecedentes de una compleja relación

El establecimiento de áreas protegidas para preservar espacios de valor natural data de poco más de un siglo. Se inició en el oeste de Estados Unidos con la creación del parque Yosemite en 1864 y del parque Yellowstone en 1872. En la actualidad las áreas protegidas representan un esfuerzo global para preservar especies amenazadas, habitats y ecosistemas de gran valor y biodiversidad, áreas de valor natural y cultural. A la fecha existen más de 10.000 áreas protegidas en 160 países, las que incluyen alrededor del 5% de la superficie de la tierra³.

Muchas de estas áreas de protección y parques han sido establecidas sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. La creación de estas áreas protegidas ha significado una amenaza para la subsistencia material y cultural de estos pueblos indígenas⁴ en distintos contextos geográficos del mundo. En muchos casos significó

1 Abogado. Investigador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera de Temuco-Chile. Asesor de Bosque Modelo Chiloé

2 Antropólogo. Investigador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera de Temuco-Chile.

3 Para una protección efectiva de la biodiversidad y sitios de importancia y cultural, muchos aspiran a la protección de un 10% de la superficie del planeta. Es allí donde la participación de las comunidades y los particulares adquieren mayor relevancia

4 Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios, o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a

la expulsión de los indígenas de sus tierras ancestrales. En otros impidió el acceso a los indígenas a áreas de gran relevancia para su desarrollo material y cultural.

Los alrededor de 5.000 pueblos indígenas que existen en el mundo, con una población estimada en alrededor de 600 millones, aportan gran parte de la diversidad cultural que existe hoy en el mundo. Habitan o reclaman como sus territorios ancestrales entre el 20 al 30% de la superficie del planeta.

Las formas de vida y sobrevivencia de los pueblos indígenas están generalmente basadas en el uso de recursos y ecosistemas locales. Los mismos han desarrollado mecanismos sociales y culturales que permiten hacer un uso sustentable de los recursos, o al menos moderar impactos ambientales.

Muchos pueblos indígenas tienen actitudes de conservación basadas en sus creencias espirituales o en nociones éticas compartidas por la comunidad. Entre estas creencias se encuentran la del cuidado de la tierra, la de tomar solo lo que se puede utilizar en forma cuidadosa y plena. Muchas culturas indígenas tienen respecto a la tierra actitudes espirituales de aprecio, respeto y humildad. Aunque es efectivo que en ocasiones, los pueblos indígenas impactan adversamente el ambiente en que habitan, sus actitudes y creencias espirituales, sus conocimientos tradicionales, sus niveles de consumo bajo, hacen de los pueblos indígenas fuertes aliados en la conservación.

2. El modelo Yellowstone y los pueblos indígenas

El área del parque Yellowstone estuvo habitada desde hace 11.000 años. A la época de su creación constituía el territorio ancestral de distintos pueblos indígenas (shoshone y bannock, entre otros). Con la creación del parque, los indígenas fueron desplazados fuera de él y radicados en reservaciones en otras tierras. Los indígenas resistieron la creación del parque, y la expulsión de que fueran objeto desde sus territorios ancestrales, existiendo antecedentes de enfrentamientos con los administradores del parque y turistas.

El Parque Nacional Yellowstone se convirtió en un símbolo de protección estricta de la naturaleza y por lo mismo tuvo una gran influencia en la creación de parques naturales en todo el mundo. De acuerdo a este modelo impuesto, se crearon a fines del siglo XIX y comienzos del XX muchos otros parques en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Kenya, entre otros países. Tales parques estuvieron concebidos como áreas de protección en la que la gente no podría cazar, recolectar, criar animales o aún sacar hierbas medicinales. La única intervención humana permitida sería el turismo. Bajo esta concepción, muchos

futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. (Martínez Cobo, 1986/7)

pueblos cazadores recolectores, como los Massai en África serían relocalizados de sus tierras ancestrales, declaradas parques, hacia otras tierras.

En América Latina la creación de los parques nacionales durante el Siglo XX también estuvo influenciada por este modelo. Muchas áreas protegidas deshabitadas, son la resultante de procesos de relocalización de la población, generalmente indígena, que habitaba en su interior. Cabe señalar, sin embargo, que en algunos países las leyes que obligaban a la relocalización forzada de la población desde su interior, no fueron aplicadas. Se estima que en Sud América el 86% de las áreas protegidas están habitadas o usadas por poblaciones aledañas, que los pueblos indígenas son residentes en el 30% de las áreas protegidas de América Central, habitando el 85% de dichas áreas⁵.

3. De la exclusión a la inclusión indígena: la revisión de las áreas protegidas

3.1. Los nuevos lineamientos

Diversos factores gatillan en las últimas décadas la revisión de las visiones y políticas que dieron origen a las áreas protegidas en el mundo. Por un lado, los pueblos indígenas han emergido como actores relevantes en todos los continentes, y con especial relevancia en las Américas, reclamando de los Estados, derechos sobre sus tierras y recursos naturales. También demandan el derecho a participar en los asuntos que les conciernen, así como a decidir su propio futuro. Muchas de las tierras que reclaman han sido transformadas en parques o reservas naturales por los Estados, unidades de las cuales han sido desplazados y de cuya administración han sido excluidos. Estos hechos no solo han sido cuestionados desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también desde la perspectiva de la conservación, desde la cual ha surgido una importante reflexión sobre el sentido de la naturaleza, los objetivos de la conservación y el rol de los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad.

3.2. El rol de la UICN

Un rol central en la revisión de los modelos de conservación hasta hace poco dominantes y en el repensamiento de la relación entre áreas protegidas y comunidades humanas en general, y pueblos indígenas, en particular, ha correspondido a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN)⁶. Ya en 1975

5 Los antecedentes del punto I han sido extraídos del artículo de Stan Stevens "The legacy of Yellowstone" (en Stevens ed. 1997)

6 La UICN es una entidad no gubernamental fundada en 1948. Su objetivo es conservar la integridad de la naturaleza, y promover el uso equitativo y sustentable de los recursos naturales. Agrupa hoy a Estados soberanos, agencias gubernamentales y ONGs, estando integrada por 980 miembros en 141 países

su Asamblea General reunida en Zaire aprobó la idea de que el asentamiento y uso indígena al interior de los parques nacionales era inapropiado, siempre que se hiciera en zonas destinadas para tal efecto. Llamó a los Estados a establecer mecanismo para que los pueblos indígenas pudiesen convertir sus tierras en áreas protegidas sin renunciar a sus derechos sobre ellas. En 1978 revisó su clasificación de áreas protegidas proponiendo la inclusión entre las nuevas categorías de las “*reservas antropológicas*”, áreas establecidas para proteger un patrimonio cultural en las que las actividades de subsistencia fuesen permitidas.

Las propuestas más importantes en esta materia, sin embargo, han sido desarrolladas en la década de los noventa. Así, en el Plan de Acción emanado de la reunión de Caracas en 1992 (IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, convocado por UICN, propuso que la política y legislación sobre recursos naturales “debe tomar en consideración las prácticas consuetudinarias de manejo de recursos indígenas y tradicionales así como los sistemas de tenencia tradicional de la tierra en el diseño e implementación de las estrategias de las áreas protegidas.” (Recomendación 4). Asimismo propuso que los administradores de las áreas protegidas “involucren cercanamente a la gente local en el monitoreo, uso y administración de especies naturales y otros productos naturales” (Recomendación 8); y que debe existir “un fuerte involucramiento de las comunidades locales e indígenas en todos los aspectos de la planificación y manejo de las áreas protegidas marinas de una nación.” (Recomendación 11)⁷.

Como consecuencia de la Asamblea General de la UICN celebrada en Buenos Aires en 1994 se adoptó una nueva clasificación de áreas protegidas mucho más sensible a los pueblos indígenas, que refleja las nuevas perspectivas en la relación entre ambiente natural y humano y su interacción (Ver Anexo 1).

Junto con reducir el número de categorías de áreas protegidas de 10 a 6, y en contraste con las categorías anteriormente existentes, considera la posibilidad del asentamiento indígena en todas ellas. Aún cuando el asentamiento de población no es considerado como apropiado en la categoría I a (Área Natural Estricta), esta no es vista como incompatible con la categoría I b (caracteriza estas Áreas Naturales Silvestres como aquellas que “no están habitadas de forma permanente o significativa...”). Como consecuencia de esta nueva clasificación, el sistema en su conjunto tiene el potencial de acoger una variedad de modelos de áreas protegidas, en función del grado de intervención humana, de forma que tanto los derechos de los pueblos indígenas como los objetivos de conservación puedan ser respetados (Beltrán ed., 2001).

Tales orientaciones serían más tarde reafirmadas por la UICN en 1996 en el Congreso Mundial de la Naturaleza. Así, su resolución 1.53 reconoció que los

7 Traducción J. Aylwin, en Stan Stevens, “New Alliances for Conservation” (en Stevens ed, 1997)

pueblos indígenas tienen el derecho “a participar efectivamente en el manejo de las áreas protegidas establecidas en sus tierras y territorios”, y en consecuencia, se debe llegar a acuerdos con ellos “previo al establecimiento de áreas protegidas en sus tierras o territorios”. (Ver Anexo 2).

En forma consistente con los lineamientos anteriores, la UICN amplió su definición de áreas protegidas, al incorporar en ella los recursos culturales asociados. De acuerdo con la nueva definición, las áreas protegidas son concebidas como: *“Una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces”* (UICN, 1994 a).

En años recientes, en base a las orientaciones de los Congresos antes señalados, la WWF y la UICN han aprobado un conjunto de Principios, asociado a dichos principios, Directrices relativas a las áreas protegidas en tierras y territorios indígenas (Fuente; UICN, WWF International, 2001, en Beltrán ed. 2001).

El Principio 1, menciona la estrecha interrelación que debe existir entre ambos, de las contribuciones de los indígenas al mantenimiento de los ecosistemas frágiles, y de la necesidad de considerar a los pueblos indígenas como socios legítimos en la tarea de la conservación cuando ella atañe a sus tierras y recursos.

“Los pueblos indígenas y tradicionales mantienen un antiguo vínculo con la naturaleza y tienen una comprensión profunda de ella. Han hecho frecuentemente contribuciones significativas para el mantenimiento de muchos de los ecosistemas más frágiles del planeta, a través de sus prácticas tradicionales de uso sustentable de recursos y su respeto por la naturaleza basado en su cultura. Por tanto, no debería haber conflicto intrínseco entre los objetivos de las áreas protegidas y la existencia, dentro o alrededor de sus fronteras, de pueblos indígenas y tradicionales. Más aún, dichos pueblos deben ser reconocidos como socios legítimos e iguales en el desarrollo e implementación de estrategias de conservación que afectan sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos, en particular, en el establecimiento y manejo de áreas protegidas.”

Otros de estos principios subrayan la necesidad de establecer acuerdos entre las agencias que administran áreas protegidas y los pueblos indígenas para el establecimiento y manejo de áreas protegidas que afectan sus tierras, así como la responsabilidad que corresponde a los indígenas en la tarea de la conservación (Principio 2); la necesidad de incorporar en esta relación los principios de descentralización, participación, transparencia y rendición de cuentas (Principio 3) así como la necesidad de que estos pueblos accedan a los beneficios asociados con las áreas protegidas. (ver Anexo 3).

3.3. Convenciones Internacionales

Aunque no relacionadas directamente con las áreas protegidas, cabe también incluir aquí los lineamientos establecidos por las convenciones internacionales

relativas a los derechos de los pueblos indígenas, así como aquellas que tratan sobre la protección de la biodiversidad.

Entre las primeras destaca el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas en Países Independientes de 1989, el que constituye el instrumento jurídico internacional más relevante en la materia. Este Convenio establece lineamientos significativos en el tema de los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios indígenas, así como sobre los recursos naturales, muchos de los cuales tienen relevancia para la temática que aquí nos preocupa.

Dispone que *“los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación.”* (art. 13.1). El Convenio agrega al concepto de tierras indígenas el de territorios, concepto que cubre *“la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera.”* (art. 13.2).

El Convenio dispone además que deberá reconocerse *el derecho de estos pueblos a la “propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”* y tomarse medidas para *“salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.”* (art. 14.1).

Finalmente dispone que deban protegerse especialmente los derechos de los pueblos indígenas *“...a los recursos naturales existentes en sus tierras”*, derechos que comprenden *“...participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.”* (art. 15.1)⁸.

El Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (1992)⁹, por su parte, reconoce y establece en su artículo 8. j, la relevancia de los conocimientos tradicionales indígenas al señalar:

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

Aunque no se trate de una Convención, cabe referirse a la Agenda XXI emanada de la Cumbre de Medio Ambiente de Río en 1992. Se trata de un documento de carácter programático en cuyo Capítulo 26 se reconoce la histórica relación de los

8 Subrayado del autor

9 Ratificada por Chile

indígenas con sus tierras, incluyendo en ellas el ambiente de las áreas que tradicionalmente han ocupado, así como los conocimientos tradicionales que tienen de ellas y sus recursos (Cap. 26.1); se promueve la participación de las poblaciones indígenas y sus comunidades en la formulación de políticas, leyes, programas relacionados con el manejo de recursos y estrategias de conservación (Cap. 26.3c); y se plantea la necesidad de permitir a los indígenas mayor control sobre sus tierras, autogestión de sus recursos, y participación en la toma de decisiones que les afectan, incluyendo, participación en la administración de áreas protegidas (Cap. 26.4)¹⁰.

3.4. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso Awas Tingni en la costa atlántica de Nicaragua

Desde los años setenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha procesado centenares de peticiones sobre situaciones que afectan a personas y comunidades indígenas en el ejercicio de sus derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1947, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. En respuesta a estas peticiones la Comisión ha emitido numerosas resoluciones, y recomendaciones a los Estados, instándolos a respetar los derechos humanos en las situaciones que involucran a los indígenas. Algunos de estos casos han sido remitidos por la Comisión a la Corte Interamericana, la que a través de sus resoluciones, ha contribuido al desarrollo de una jurisprudencia en materia de derechos indígenas.

Uno de los temas centrales de los reclamos indígenas está en relación con el derecho de propiedad sobre sus tierras ancestrales. Ya en 1970 la Comisión se refirió a la obligación de defender las tierras indígenas (caso de los Guahibos en Colombia). En 1985 emitió una resolución para el caso de los yanomami del Noroeste de Brasil, recomendando delimitar y demarcar el Parque Yanomami, incluyendo más de 9 millones de has. de bosque amazónico, hábitat de aproximadamente 1200 yanomami.

Sin embargo, el caso más importante abordado por el sistema interamericano en esta materia ha sido el de la comunidad de Awas Tingni de la Costa Atlántica de Nicaragua. Este caso se originó en una petición hecha a la Comisión en 1995 alegando que el Estado de Nicaragua no había adoptado las medidas necesarias para asegurar el derecho a la tierra de las comunidades indígenas Mayagna (Sumo) de Awas Tingni y de otras comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua frente a una concesión de explotación maderera otorgada a una empresa coreana por dicho Estado. En 1998 la Comisión acogió la petición de los indígenas, e interpuso una demanda en contra del Estado de Nicaragua ante la Corte. La demanda se refiere a la violación por parte de dicho Estado de los artículos 1 (obligación de respetar

10 Suscrita por Chile. Subrayados del autor.

los derechos), 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 21 (derecho a la propiedad privada) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en razón de la falta de demarcación y de reconocimiento oficial del territorio de esta comunidad. La Comisión también solicitó a la Corte, en base al artículo 63 (1) de la Convención, la reparación de las consecuencias de la violación.

Con fecha 31 de agosto de 2001, la Corte dictó sentencia en el caso en análisis, concluyendo que Nicaragua violó el artículo 21 de la Convención Americana en perjuicio de los indígenas en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención, condenándolo a que delimite, demarque y titule el territorio de propiedad de la Comunidad. El fallo de la Corte Interamericana dejó establecido en sus considerandos el valor de la propiedad comunal de los pueblos indígenas a la luz del artículo 21 de la Convención Americana (par. 149), la validez de la posesión de la tierra basada en la costumbre indígena, aun a falta de título, para que se les reconozca la propiedad sobre ellas (par. 151), y la necesidad de que la estrecha relación que los indígenas tienen con sus tierras sea reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica (par. 149)¹¹.

Se trata de un fallo que establece un precedente de gran relevancia, dado que de acuerdo a él, las tierras sobre las que los indígenas prueben posesión ancestral, generalmente reconocidas en las Américas como de propiedad fiscal, deben serles reconocidas en propiedad, delimitadas y tituladas en su favor.

4. La experiencia de algunos países

En forma paralela a la revisión de la concepción de las áreas protegidas y de su relación con las comunidades humanas y pueblos indígenas al que se ha hecho referencia, desde la década del 60 vienen desarrollándose en el mundo diversas experiencias de involucramiento de los pueblos indígenas en la gestión de las áreas que se encuentran en sus tierras y territorios, dándose impulso a experiencias de conservación indígena.

En 1961 el gobierno de Brasil crea el Parque Nacional Xingú en la cuenca amazónica, el que fue concebido como un parque indígena cuyo objetivo era asegurar las formas de vida tradicional del pueblo Xingu amenazado por la explotación de recursos naturales llevada adelante por no indígenas en su territorio ancestral. En años siguientes, parques y áreas protegidas en distintas partes del mundo no solo reconocen y admiten la habitación indígena antes rechazada, sino que también permiten y regulan el desarrollo en su interior de actividades de subsistencia. Estas

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, Sentencia de 31 de Agosto de 2001

experiencias incluyen la de la Reserva de Kalahari en Botswana, habitada por el pueblo sun; el Parque Nacional Santa Marta en Colombia, en el territorio ancestral de los kogí; el Parque Nacional Manu en Perú, habitado por distintos pueblos indígenas amazónicos; el Parque Nacional Canaima en Venezuela, habitado por los indígenas pemón; así como varios parques nacionales en Suecia, donde habitan los samí, cuya economía tradicional está vinculada al manejo del reno.

Otras experiencias de interés son aquellas que tienen relación con las iniciativas de conservación impulsadas por los pueblos indígenas en sus propias tierras. Entre ellas destacan la impulsada por los kuna en Panamá en tierras de su comarca autónoma Kuna Yala desde los años 80. Con el apoyo de diversas entidades de cooperación, los kuna establecieron un área protegida basada en los conceptos de las reservas de la biosfera que se ha convertido en un modelo de parque indígena. Esta iniciativa kuna contiene en su interior una extensa zona de protección estricta, basada en el concepto kuna de santuario espiritual, otra de zona de uso agrícola, y una zona para el asentamiento humano.

Otra iniciativa indígena de características similares es la que ha sido impulsada por los Haida de la Isla Haida Gwaii (Queen Charlotte Islands) en Canadá. En forma conjunta con la creación en 1987 del Parque Nacional, el que surgiera como consecuencia de las demandas para detener la tala indiscriminada del bosque, los Haida han impulsado un parque tribal en la parte norte de la isla, y han propuesto la creación de un parque marino en las aguas que circundan la isla. (Stevens, en Stevens ed, 1997)

El análisis en profundidad de la relación entre áreas protegidas y pueblos indígenas en el mundo podría resultar muy extenso. Es por ello que parece de interés dar cuenta aquí de los avances que en esta materia se han verificado en algunos países, de modo de ilustrar las tendencias contemporáneas existentes en este ámbito:

– El caso de Nueva Zelanda

La participación indígena en la gestión de las áreas protegidas en Nueva Zelanda se remonta a 1887, año en que un jefe maorí “cedió” las tierras que dieron origen a la creación del Parque Nacional Tongarero, para dar protección al monte sagrado que allí existe. Se trata del primer parque nacional de este país que en la actualidad, constituye Patrimonio Mundial de UNESCO. Desde su creación el directorio de conservación de este parque ha estado integrado por al menos un maorí. Otro parque nacional creado como consecuencia de una “donación” de tierras indígenas en 1978, el Parque Nacional Taranaki, así como el Parque Nacional Whanganui, tienen participación indígena maorí en sus respectivos directorios. Al año 1992, los maorí contaban con un total de 68 representantes en los directorios de conservación de 12 parques nacionales y de 3 parques marítimos en Nueva Zelanda, cifra que representa un tercio del total de representantes.

– El caso de Canadá

Diversos factores, incluyendo la presión de los pueblos indígenas y las decisiones de los tribunales de justicia, determinaron la introducción de cambios en la política de Parques Nacionales en Canadá desde los años 70. A contar de entonces se reconoce en ese país el asentamiento y los derechos de subsistencia indígena al interior de las áreas protegidas. Así en su política de 1979 para “Parques Canadá” estableció:

“En nuevos parques nacionales, garantías serán establecidas a fin de que algunos usos de recursos para fines de subsistencia por la gente local sean permitidos en partes de estos parques, cuando estos usos sean una parte esencial de la forma de vida local y cuando no existan alternativas fuera de sus límites.”¹²

Junto con lo anterior, en dicha política se estableció que cuando nuevos parques fueran creados en el marco de la resolución de reclamaciones de tierras indígenas, acuerdos con los pueblos indígenas deben ser negociados, creando en ellos regímenes de co-manejo para su planificación y administración. (Parks Canadá, 1979, en Stevens, 1991).

Las directrices de “Parques Canadá” de 1994 sobre la materia, son explícitas al establecer que en los parques en que los indígenas tengan derechos originarios o de tratado, el ejercicio de estos derechos serán respetados; la actividad tradicional de los pueblos indígenas al interior de los parques será mantenida como consecuencia de los acuerdos de tierras o de los tratados, así como de acuerdos específicos negociados durante el proceso de creación del parque. Dada la base legal y constitucional que estos acuerdos y tratados tienen en Canadá, tales acuerdos modificarán en ocasiones la política de parques, e incluso la Ley Nacional de Parques (Parks Canadá, 1994).

En la práctica, en la mayor parte de los parques en áreas indígenas se han venido constituyendo comités asesores (Advisory Committees) para hacer posible en ellos la participación indígena. Dichos comités abordan temas como el uso de la tierra y de los recursos naturales, la planificación de actividades en los parques y la administración. Sin embargo, las facultades de los pueblos indígenas en estos comités son limitadas, dado que la decisión final esta en las manos de Parques. (Stevens, en Stevens ed., 1997).

Experiencias de co-manejo de áreas protegidas por pueblos indígenas solo comienzan a ser impulsadas en el norte de ese país y en Columbia Británica en los años noventa y en el contexto de los procesos de negociación de tierras indígenas verificados en los últimos años. Un ejemplo de esta nueva tendencia es el *acuerdo de co-manejo del Parque Nisga Memorial Lava Bed que fuera incluido en el tratado suscrito entre los Nisga, Canadá y Columbia Británica en 1998.*

12 Traducción y negrillas del autor.

En base a este tratado, dicho parque provincial ubicado en el territorio ancestral de este pueblo, pasó a ser administrado en forma conjunta por el gobierno provincial y el gobierno de los Nisga a través de un Comité de co-manejo integrado en partes iguales (3 y 3). Entre las funciones del Comité se incluyen el desarrollo del plan maestro del Parque, la definición de actividades y proyectos arqueológicos y culturales en el parque, la administración del parque, etc. *La historia y la cultura de los Nisga serán promovidas como la principal fuente de interpretación y característica del parque* (Nisga Final Agreement, 1998)¹³.

– El caso de Australia

También como resultado de la presión indígena, y de las decisiones de los tribunales de justicia de ese país¹⁴, en Australia se han verificado importantes cambios relativos a los derechos indígenas sobre sus tierras y recursos. Ello ha incidido en la modificación de la política de conservación, abriéndose caminos para el reconocimiento de los derechos indígenas sobre las áreas protegidas existentes en sus tierras y territorios, incluyendo, entre otras dimensiones, el derecho al asentamiento y uso indígena de los recursos naturales, y a una activa participación indígena en su gestión.

Algunos hitos recientes en este proceso han sido los siguientes:

a. *La puesta en marcha por Environment Australia del Programa del Sistema Nacional de Reservas en 1996/97*

Dicho programa incluye entre sus objetivos:

- El establecimiento y manejo de áreas protegidas nuevas y significativas desde el punto de vista ecológico, a ser añadidas al Sistema Nacional de Reservas Terrestres de Australia;
- La oferta de incentivos para que los pueblos indígenas participen en el Sistema Nacional de Reservas, a través de la declaración voluntaria de áreas protegidas en las tierras de su propiedad (Áreas Protegidas Indígenas);
- El apoyo para una mayor participación del pueblo indígena en el manejo de los parques nacionales y de otras áreas protegidas existentes;
- El estímulo a los pueblos indígenas para que manejen la tierra con fines de conservación de la biodiversidad¹⁵.

13 Idem.

14 La decisión de la Corte Suprema de Australia en el caso Mabo (1992) anuló la doctrina de terra nullius antes vigente, reconociendo a los indígenas el "título nativo" sobre aquellas tierras sobre las cuales los indígenas han mantenido su conexión tradicional y donde este no ha sido cancelado por acciones anteriores de gobierno.

15 Subrayados del autor.

b. *La dictación de la Ley de Protección y Conservación de la Biodiversidad (EPBC) de 1999 (entra en vigencia el 2000)*

Esta nueva ley reconoce el papel crítico que tienen los pueblos indígenas en la conservación y el uso sustentable de los recursos ecológicos, y en el mantenimiento del conocimiento tradicional. Con la intención de obtener el máximo beneficio del conocimiento tradicional, la Ley EPBC busca: (1) establecer un Comité Asesor Indígena que asesore al ministro del Ambiente del Commonwealth; (2) asegurar la representación de los indígenas en el Comité Asesor sobre la Diversidad Biológica; y (3) asegurar que los intereses de los indígenas sean considerados cuando se desarrollen acuerdos bilaterales, planes de manejo, planes de recuperación, planes de conservación de la vida silvestre y planes de disminución de amenazas.

Uno de los casos que puede ejemplificar la forma en que estas definiciones políticas y legales se aplican en la práctica a la relación entre áreas protegidas y pueblos indígenas, es el del Parque Nacional Kakadu, ubicado en el Territorio Septentrional de Australia.

Dicho parque, cuya superficie abarca 19.804 km² constituye el territorio tradicional de los aborígenes bininj/mungguy (Kakadu). Como consecuencia de la Ley de Derecho de la Tierra Aborigen de este Territorio (1975), se han concedido una importante cantidad de tierras en fideicomiso a los indígenas (alrededor del 42% del Territorio Septentrional ha sido concedido a los Fideicomisos de Tierra Aborigen (Commonwealth of Australia, 1999a). Actualmente existen tres fideicomisos de tierra dentro del Parque que, en total, cubren el 50% de su superficie. Adicionalmente existen tres áreas sujetas a reclamo bajo la Ley sobre los Derechos de la Tierra Aborigen (Commonwealth of Australia, 1999b). Estos tres fideicomisos arriendan la tierra al Director de Parques Nacionales, para que sea manejada como un parque nacional.

Todo ello configura un cuadro que hace de esta unidad uno de los tres parques nacionales en Australia que son manejados conjuntamente por los dueños aborígenes tradicionales y por el Director de Parques Nacionales del Gobierno Federal. Los mecanismos principales que permiten la participación de los aborígenes en el manejo y la administración del Parque son:

- El Comité de Manejo de Kakadu,
- El plan de manejo del Parque, y
- Los contactos diarios, formales e informales, entre el personal del Parque (algunos de los cuales son aborígenes) y los dueños tradicionales.

El Comité de Manejo, creado en 1989, representa los intereses y puntos de vista de los dueños tradicionales en el manejo conjunto del Parque, y determina

la política para el manejo del Parque. El Comité ha sido recientemente ampliado a 15 miembros, 10 de los cuales son aborígenes nombrados por los propietarios tradicionales y representan a todo el pueblo aborígen y los idiomas principales de la región. En el Comité también están el Director del ANPWS, el Secretario Asistente de Parks Australia North, un representante de la industria de turismo del Territorio Septentrional y una persona destacada en el área de la conservación de la naturaleza (Hill and Press, 1994).

La Ley prevé el nombramiento de un representante del gobierno del Territorio Septentrional, quien todavía no ha sido designado. Los nombramientos de los representantes de la industria del turismo, del Gobierno del Territorio Septentrional y el especialista en conservación, deben ser aceptados por los propietarios aborígenes tradicionales del Parque. El papel de los aborígenes en el manejo y la administración del parque es definido en detalle en el plan de manejo, la cuarta versión del cual se halla actualmente en operación.

Existen tres objetivos principales en el manejo del Parque: 1) conservar el patrimonio natural de Kakadu, 2) conservar su patrimonio cultural, y 3) respetar los intereses de los propietarios aborígenes tradicionales. El plan de manejo muestra las diversas maneras en que los propietarios aborígenes locales pueden participar en el manejo del Parque (Beltrán ed. 2001)

– *El caso de Bolivia*

En 1992 se aprobó en Bolivia la Ley 1333 de Protección y Conservación del Medio Ambiente del 27 de abril de 1992. Dicha ley incorpora la realidad de los pueblos indígenas y su especificidad cultural en el desarrollo sustentable y la protección del patrimonio natural. Así su artículo 56 dispone que “el Estado promoverá programas de desarrollo en favor de las comunidades que tradicionalmente aprovechan los recursos de fauna y flora silvestre con fines de subsistencia, a modo de evitar su depredación y alcanzar su uso sostenible.” En el artículo 62 se señala que “*en la administración de áreas protegidas podrán participar... comunidades tradicionales establecidas y pueblos indígenas.*” En su artículo 64 dispone que “*la declaratoria de áreas protegidas es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas...*”.¹⁶ Finalmente su artículo 78 dispone que el Estado creará mecanismos y procedimientos para garantizar “la participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos de desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales...”, así como “el rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de recursos naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas.”

16 Negrillas del autor.

Dicha legislación es paralela en el tiempo a las reformas constitucionales (1994) y legales (1996) que junto con declarar a Bolivia como un país multiétnico y pluricultural, reconocieron los derechos sobre sus tierras comunitarias de origen (TCO), garantizándoles el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Cabe señalar que a partir de 1996 se ha venido impulsando un saneamiento de TCOs a lo largo del país. Al 2002 se habían saneado 22 TCO con poco mas de 5 millones de has, existiendo demandas por un total de 30 millones de has. cerca de un tercio del país. (Aylwin, 2002)

En base a esta normativa, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) entidad a cargo del Sistema, ha venido impulsando iniciativas de co-manejo de áreas protegidas con participación activa de la sociedad civil, incluyendo ONGs, pueblos indígenas y grupos rurales).

Los términos del co-manejo deben especificarse para cada sitio en un convenio entre el SERNAP y el grupo a cargo de la cogestión. Dicho grupo debe estar legalmente reconocido y tener la experiencia y la capacidad necesaria para cumplir eficazmente con su papel (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Participación, 1997).

El SERNAP está promoviendo la formación de Comités Locales de Manejo (CLM) con el fin de descentralizar aún más el manejo de las áreas protegidas. Cada comité debe estar conformado por representantes de los pueblos indígenas, los grupos rurales, las municipalidades, las organizaciones públicas, las ONGs y el SERNAP. Para cada área protegida, el CLM estará a cargo de: (a) participar en la definición de los objetivos de manejo; (b) controlar y monitorear el desempeño de los encargados del manejo del sitio; (c) asesorar y supervisar al director del área en todo lo que esté relacionado con la preparación y la implementación de los planes operativos y de manejo; y (d) asistir en la identificación y la obtención de apoyo financiero de fuentes externas.

Una experiencia de co-manejo de un área protegida involucrando a pueblos indígenas (guarani del Izozog) es la del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de Kaa-Iya del Gran Chaco. En 1995 este Parque pasó a la administración conjunta del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Participación y la CABI, que es la autoridad política del pueblo guarani de Izozog. Dicha administración fue establecida inicialmente por un período de diez años. Los términos y las condiciones del acuerdo entre estas dos organizaciones abarcan los siguientes aspectos:

- Asegurar que todas las actividades de planeamiento, administración y manejo del parque sean llevadas a cabo en consonancia con el marco institucional ambiental actualmente en vigencia en Bolivia y siguiendo los lineamientos del plan operativo y de manejo para el área.
- Incluir a los guardaparques del área y a los representantes de las comunidades locales en el manejo del parque.
- Mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los habitantes locales.

En 1996 se formó el Comité de Manejo del parque, el que está conformado por el director del área y miembros del SERNAP, la CABI, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), las municipalidades locales, el Grupo Comunitario de Chiquitanos (TURUBO), la Comunidad Ayorea de Santa Teresita y el Grupo de Mujeres de las Comunidades Indígenas del Izozog (CIMO). A estas organizaciones se les solicitó asesoramiento en la definición de políticas para el manejo del parque. Como parte de este mandato, el Comité ha participado en la preparación, ejecución y evaluación de planes operativos y de manejo para el sitio. El plan de manejo del parque comprende los cinco programas siguientes:

- a) **Programa operativo:** incluye la demarcación definitiva del parque, la construcción de las oficinas del área en la localidad de La Brecha y la creación de diez lugares para acampar que se localizan en sitios estratégicos. También prevé la edificación de refugios rústicos para investigadores y de un centro de visitantes.
- b) **Programa de vigilancia:** se creó un equipo de guardaparques que está a cargo del control y la vigilancia de las áreas designadas, de la investigación de campo y de las relaciones con las comunidades locales y el público en general.
- c) **Programa de manejo de recursos naturales:** la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, el Centro para el Estudio de las Tierras Nativas (CSNL) y la CABI emplearon una parte de los fondos iniciales para elaborar una serie de mapas comunitarios con información básica, y capacitaron a los participantes en las técnicas para realizar los trabajos futuros de evaluación de la fauna local.
- d) **Programa de uso público:** se desarrolló un proyecto para identificar las zonas dentro del parque que se pueden abrir al turismo.
- e) **Programa de proyección regional y cooperación:** el propósito de este programa es relacionar el parque con otras áreas protegidas en América Latina, en particular con aquellas que tengan ecosistema del Chaco.

De acuerdo a la información disponible, la evaluación de la experiencia ha sido muy positiva para todas las partes. Las interacciones entre los pueblos indígenas, el gobierno boliviano, las ONGs internacionales y el sector empresarial dentro del parque, han contribuido claramente a mejorar la situación general del ecosistema del Chaco en este sector del oriente de Bolivia. Estas asociaciones tuvieron éxito sobre todo cuando se adoptó una estrategia abarcadora e integrada de modo de asegurar la conservación del ecosistema y la mejora de las condiciones de los pueblos indígenas locales.

Los izoceños han percibido una serie de resultados positivos a partir de este programa. El automonitoreo del uso de los recursos, a partir del cual se pudo comprometer a los grupos locales a participar en la investigación, permitió formular

preguntas muy interesantes. Los datos colectados permanecerán en la comunidad a menos que la gente decida lo contrario. Las comunidades participantes ganaron poder por sus propios esfuerzos de recolección de información y por el control que ejercen sobre los mismos.

En efecto, los grupos comenzaron a descubrir su propio potencial para analizar problemas. Se espera que este incremento en la autosuficiencia y confianza eventualmente conduzca a que las comunidades formulen planes de manejo adaptados a las condiciones culturales, económicas y ambientales locales (Towsend, 1998 en Beltrán, ed. 2001).

Las lecciones de un estudio de caso

Dada la relevancia que ha adquirido internacionalmente la interacción en áreas protegidas y pueblos indígenas, los conflictos que en ocasiones existen entre ellos, y las experiencias de colaboración entre ambos que han emergido en los últimos años, a pedido de la UICN, el PNUMA-World Conservation Monitoring Centre preparó una serie de once casos de estudio en distintas partes del mundo¹⁷, orientados a analizar la operatividad, lecciones y desafíos de estas experiencias prácticas.

De este estudio de casos se desprenden algunos antecedentes y conclusiones que resultan de interés consignar aquí:

- a. *Las principales demandas indígenas en relación con las áreas protegidas creadas en sus dominios terrestres, marino-costeros y de agua dulce son las siguientes:*
 - que las áreas protegidas protejan de una manera efectiva de las amenazas externas tales dominios, al igual que los pueblos y culturas que éstos contienen, y en particular refuercen las áreas tradicionalmente protegidas;
 - que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales a sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos;
 - que reconozcan sus derechos a controlar y manejar estos recursos dentro de las áreas protegidas;

17 Los casos de estudio fueron el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de Kaa-Iya del Gran Chaco (KIGC, Bolivia); la Reserva Biológica Marina de Cayos Miskitos y Franja Costera (RBMCM, Nicaragua); el Parque Nacional de Sarstoon-Temash (PNST, Belice); el Parque Nacional de Wood Buffalo (PNWB, Canadá); el Área de la Laponia (LAPP, Suecia); el Parque Nacional de la Montaña de Simen (PNSM, Etiopía); el Parque Nacional de Sagarmatha (Monte Everest) (PNS, Nepal); el Parque Nacional de Doi Inthanon (PNDI, Tailandia); la Reserva Natural de Xishuangbanna (RNX, China); la Reserva de Recursos Kytalyk (RRK, Federación Rusa); y el Parque Nacional Kakadu (PNK, Australia).

- que permitan la participación de las instituciones tradicionales en los arreglos de co manejo dentro de sus dominios terrestres, marino-costeros y de agua dulce;
- reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales a determinar sus propias prioridades de desarrollo, siempre que éstas sean compatibles con los objetivos de las áreas protegidas;
- sean declaradas solo como resultado de su iniciativa y/o con su consentimiento informado previo;
- incorporen el uso sustentable de los recursos naturales empleando métodos que mantengan la integridad del ecosistema y que hayan sido tradicionalmente utilizados por los pueblos indígenas.

b. Los temas de mayor conflicto en ésta relación son:

La *tenencia* de la tierra y la propiedad de zonas marinas en las áreas protegidas es el factor que causa las mayores dificultades entre los pueblos indígenas y las autoridades de conservación. Aún hay temas no resueltos en aquellos casos donde existe un mayor entendimiento y comunicación entre ambos grupos (tales como el KIGC, la RBMCM y el PNK). En la RBMCM, la Asamblea Legislativa está a punto de aprobar una ley de propiedad de los territorios indígenas. La situación de la tenencia de la tierra es todavía más problemática en los sitios con gran densidad de población y en las áreas protegidas que están recibiendo una afluencia de inmigrantes provenientes de regiones cercanas donde hay guerra, agitación política, o donde los recursos ya han sido seriamente agotados.

El *acceso a los recursos terrestres y marino-costeros* es el segundo factor más significativo que genera conflictos entre los pueblos indígenas y las autoridades del área protegida. Este tema ha sido considerado en algunas áreas, sobre todo en aquellas en las que los pueblos indígenas han sido llamados a jugar un papel clave en el desarrollo y la implementación de acciones específicas de manejo. Esto ha sido parcialmente resuelto en la RNX gracias a la decisión de las autoridades de manejo de tolerar cierto nivel de uso de los recursos por parte de los grupos locales (por ej. la recolección de plantas medicinales). Por otro lado, el uso de recursos por parte de ciertos grupos de pueblos indígenas todavía es considerado como inaceptable y negativo para la preservación de los recursos naturales.

Otra fuente de conflicto es la *concesión de derechos de explotación* a compañías comerciales para extraer recursos terrestres o marinos (petróleo, bosque, peces, langosta) de las áreas protegidas o de sus alrededores. El derecho de paso de un gasoducto por ejemplo atraviesa un sector del KIGC, pero la compañía ha aceptado pagar una compensación a los grupos locales. La ubicación de áreas de concesión minera está ocasionando en el PNK mucha controversia, al punto de su casi inclu-

sión en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en Peligro. En la RBMCM, el gobierno central ha fracasado en sus intentos de controlar la explotación de los recursos marinos (por ejp. la langosta) por parte de compañías comerciales dentro de la reserva, y la tala de bosques en sus alrededores, lo que va en perjuicio de los pueblos indígenas.

c. Las principales enseñanzas son las siguientes:

1. Cuando la participación de los pueblos indígenas en el manejo ha tenido lugar al principio del proceso de planeación, han habido beneficios tanto para los pueblos indígenas como para las autoridades de manejo;
2. Cuanto más amplia es la participación de los pueblos indígenas en todos los aspectos del manejo, menor es la posibilidad de que surjan conflictos;
3. En aquellas áreas en las que ya existe algún tipo de co-manejo, el desafío consiste en reforzar y extender dicho mecanismo. En donde los pueblos indígenas aún no están participando, el desafío es hacer que esto ocurra.

d. Las conclusiones principales son las siguientes:

- Los pueblos indígenas y tradicionales están interactuando de forma activa con las áreas protegidas en todo el mundo. Los casos de estudio presentados describen sólo una pequeña muestra de estas interacciones.
- La mayoría de las áreas protegidas que se describen se han establecido sin el consentimiento expreso del pueblo que habitaba con anterioridad las tierras o los mares de la región. Como resultado, las autoridades del área protegida han venido tomando decisiones sobre las especies o los ecosistemas incluidos en estas áreas, sin la plena participación de los grupos clave de interés.
- Afortunadamente, esta situación está cambiando. Esto se debe, en parte, a que está surgiendo una mayor aceptación general de los derechos de los pueblos indígenas, y también a que, en la actualidad, se reconoce ampliamente que la participación de los pueblos indígenas es esencial para asegurar la sustentabilidad a largo plazo de las áreas protegidas en las cuales ellos viven o concentran su interés.
- A veces, sin embargo, la participación real de los pueblos indígenas y tradicionales en los procesos de planeamiento y de toma de decisiones está lejos de lo que sería lo ideal. Una manera de desarrollar el co-manejo de las áreas protegidas cuando éste ha tomado raíz lentamente, puede ser a través de la consulta informal y las discusiones entre las agencias de gobierno y las comunidades de los pueblos indígenas, tal vez facilitados por las organizaciones internacionales. (en Beltrán ed., 2001).

5. Los desafíos para Chile

El proceso de creación de áreas protegidas por el Estado de Chile a lo largo del siglo XX con el objeto de conservar espacios de valor natural, no difiere en lo sustancial del que tuvo lugar en otros contextos geográficos. Por lo mismo, ha tenido muchas de las virtudes (proteger sitios y ecosistemas únicos para las futuras generaciones), así como también de los defectos (creación de unidades sobre áreas de habitación ancestral de los pueblos originarios, desarrollar las tareas de conservación con exclusión de las comunidades aledañas) que han sido identificados precedentemente.

El año 2000, se estimaba que del total de unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) (94 con un total de 14.5 millones de has.), 18 (7 parques, 7 reservas, 2 monumentos, y dos proyectos, con una superficie de 1.5 millones de has.) estaban relacionadas de algún modo con pueblos indígenas, involucrando a una población de alrededor de 17.181 personas. (CONAF, 2000).

Entre los problemas que a esa época existían en la relación entre comunidades indígenas y unidades del SNASPE se identificaban la presión de las comunidades por el uso de recursos (con fines económico productivos (ganado, recolección), simbólico religiosos, culturales, etc.); la presión por regularización de tierras al interior de las unidades; y la falta de confianza hacia los organismos de administración territorial (Valenzuela y Contreras, en Castro y Albo comp. 2000).

Producto también de diversos factores (presión indígena, democratización del país, apertura a nuevos conceptos de conservación, entre otros), y al igual que en otros contextos, en los últimos años se ha desarrollado un proceso de reformas jurídicas y políticas que apuntan hacia la construcción de una nueva relación entre las áreas protegidas –cuya administración corresponde en Chile a la Corporación Nacional Forestal (CONAF)–, y los pueblos indígenas.

En el plano jurídico cabe mencionar la ley indígena (19.253 de 1993), la que en su artículo 35 establece que *“en la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la participación de las comunidades allí existentes. La Corporación Nacional Forestal o el Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación, de común acuerdo, determinarán en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso que en aquellas áreas corresponda a las Comunidades indígenas.”*

También debe señalarse en este mismo ámbito la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992, cuya ratificación por Chile hace obligatorio su artículo 8 J antes referido, validando así los conocimientos tradicionales indígenas y su aporte a la biodiversidad. Lo mismo puede decirse de la Agenda XXI, documento programático que, aunque no tiene un rango legal, debe orientar la acción del Estado que la suscribió, y que en su Capítulo 26.4 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la administración de las áreas protegidas.

En el ámbito de las políticas públicas, la CONAF ha ido elaborando nuevos criterios y directrices que deben orientar el trabajo de las unidades del SNASPE, haciendo en ellas referencia explícita a los pueblos indígenas y a las comunidades aledañas, estableciendo la necesidad de considerar su participación en distintos niveles.

Así, en el año 2000 CONAF define como lineamientos estratégicos institucionales para el SNASPE en relación con las comunidades indígenas, la necesidad de diseñar y mantener sistemas de información y seguimiento de la relación áreas silvestres protegidas del SNASPE y las comunidades indígenas; el establecimiento de mecanismos concretos de participación indígena en el manejo de recursos, así como en la formulación de los objetivos de las unidades protegidas, sus programas técnicos, las normas de uso del territorio y la reinversión de las utilidades económicas derivadas de la administración y manejo de la unidad; la creación de un sistema institucional que permita la operación eficiente de los modelos de gestión participativos en el ámbito intra e interinstitucional; y la definición e implementación de proyectos asociativos que vinculen las Áreas Silvestres Protegidas-comunidades indígenas destinados a generar beneficios económicos permanentes (CONAF, 2000)¹⁸.

En un documento más amplio relativo a la participación comunitaria –en general– en la gestión del SNASPE, se establecen los fundamentos jurídicos, políticos e institucionales que hacen de dicha participación un imperativo para CONAF. Se definen además los conceptos, objetivos y niveles, modalidades e instancias de ésta participación.¹⁹ Entre los niveles de participación definidos se encuentra el de la información, la consulta, la asociación, la colaboración y la integración. Como instancias de participación en el nivel consultivo se plantean los Consejos Consultivos Locales (en las distintas unidades del SNASPE) y los Consejos Consultivos Regionales. En el nivel asociativo se plantean posibles convenios con comunidades indígenas y/o organizaciones comunitarias, para el desarrollo de iniciativas que permitan lograr beneficios mutuos, a partir de objetivos comunes. (CONAF (Araya ed.), 2002).

En el mismo documento se menciona como ejemplo de participación comunitaria asociativa el contrato suscrito el 2002 por CONAF con las comunidades

18 Corporación Nacional Forestal, Lineamientos Estratégico Institucionales Áreas Silvestres Protegidas del Estado y Comunidades Indígenas, CONAF, Santiago, 2000. Cabe señalar que en el documento se plantea que “la participación de las comunidades locales solo podrá considerarse realmente legítima, auténtica y válida si implica acceso real a las decisiones es decir, si es una forma real de redistribuir el poder.”

19 El documento define participación como: “Proceso impulsado por CONAF, destinado a involucrar a la comunidad en la gestión del SNASPE, para el fortalecimiento de las unidades que lo conforman, lograr una mejor identificación con el valioso patrimonio natural y cultural que comprenden, y contribuir al desarrollo de sus zonas de influencia”. (CONAF (Araya ed.), 2002).

atacameños en la región de Antofagasta, para la gestión de la Reserva Nacional Los Flamencos. Se trata de una experiencia sin duda valiosa, que ha permitido una participación creciente de los atacameños en la gestión de las unidades de ésta Reserva (7) que se encuentra ubicada en la comuna de San Pedro de Atacama, traducándose en beneficios económicos para las comunidades aledañas. Es importante señalar que ésta experiencia de asociatividad entre pueblos indígenas y el SNASPE, la más avanzada hoy existente en el país, ha significado no tan solo beneficios para dichas comunidades, sino también para la propia CONAF. Tales beneficios incluyen –según sus representantes en esa región– la mayor valoración del área protegida, y el mejoramiento del conocimiento del manejo y de la conservación de los recursos naturales allí existentes (Contreras y Valenzuela, en Díaz y Peña ed., 2003).

Si observamos las tendencias internacionales antes reseñadas, debemos admitir, sin embargo, que los pasos que se han dado en Chile en la apertura de la relación del Estado con los pueblos indígenas para la gestión de las áreas protegidas, sin duda valiosos, constituyen solo el comienzo de un largo camino a recorrer.

Tanto desde la perspectiva de los derechos indígenas, como de la perspectiva de la conservación, parece aconsejable profundizar el camino iniciado, generando alternativas y experiencias que permitan establecer lazos de cooperación cada vez mas estrechos y fecundos entre partes hasta hace poco antagónicas en materia de conservación.

Si bien los riesgos pueden parecer a muchos como significativos, identificándose entre los más evidentes aquellos que son inherentes a la “redistribución del poder” que hasta ahora el Estado ha tenido como guardián exclusivo de las unidades de conservación, y el posible deterioro de la biodiversidad que se pueda generar como consecuencia del uso de estas unidades por los pueblos indígenas, todo parece indicar que los beneficios de una alianza en este sentido son muy superiores. Entre los beneficios que las experiencias internacionales antes revisadas de cooperación para la conservación entre pueblos indígenas y Estados nos muestran, destacan la creación de un clima de mayor confianza entre ambas partes que hace posible el desarrollo de un trabajo conjunto en función de objetivos compartidos (y por tanto, la superación de los conflictos del pasado); el mejoramiento de la conservación de dichas unidades con la inclusión de nuevas capacidades y conocimientos, en este caso tradicionales; y el enriquecimiento del aporte que las áreas protegidas ofrecen a la sociedad, al pasar a concebirse no tan solo como espacios de valor natural, sino además como espacios de valor cultural.

Son estos algunos de los antecedentes, experiencias y reflexiones que los organismos del Estado a cargo de la gestión de las áreas protegidas y los pueblos indígenas que se relacionan con ellas deben tomar en consideración para adoptar sus estrategias de acción hacia el futuro en esta materia.

Bibliografía

Aylwin, José

- 2002 *El derecho de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio en América Latina: Antecedentes Históricos y Tendencias Actuales*, IEI UFRO; Temuco.

Beltrán, Javier ed. y coord.

- 2001 *Pueblos Indígenas y Tradicionales y Áreas Protegidas. Principios, Directrices y Casos de Estudio*, Unión Mundial para la Naturaleza y WWF Internacional.

Castro, Milka y Xavier Albó coords.

- 2000 *Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos del Tercer Milenio* (XII Congreso Internacional, marzo de 2000, Arica Chile) Vol. 2, Universidad de Chile, Santiago.

Corporación Nacional Forestal

- 2000 *Lineamientos Estratégico Institucionales Áreas Silvestres Protegidas del Estado y Comunidades Indígenas*, CONAF, Santiago.

——— (Araya, Pedro ed.)

- 2002 *Marco de Acción. Participación de la comunidad en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado*, CONAF.

Díaz, Miguel y Alberto Peña

- 2003 *Arboles, recursos naturales y comunidades indígenas en Chile*, Corporación Nacional Forestal.

Martínez Cobo, José

- 1986 *Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas*, vol V, *Conclusiones, propuestas y recomendaciones*, Nueva York, Naciones Unidas (ECN.4/Sub.2/1986/7/ Add.4).

Stevens, Stan

- 1997 *Conservation Through Cultural Survival. Indigenous Peoples and Protected Areas*, Island Press, Washington DC.

Wells, Michael and Karina Brandon

- 1992 *People and parks. Linking protected area management with local communities*, The World Bank, Washington DC.

Anexo 1

Sistema internacional de categorías de Áreas Protegidas de la UICN - 1994

Las seis categorías de manejo se definen de la siguiente manera, de conformidad con su principal objetivo de manejo:

- I. Área protegida manejada principalmente con fines científicos o con fines de protección de la naturaleza. Áreas terrestres y/o marinas que poseen algún ecosistema, rasgo geológico o fisiológico y/o especies destacados o representativos, destinadas principalmente a actividades de investigación científica y/o monitoreo ambiental; o vastas superficies de tierra y/o mar no modificadas o ligeramente modificadas, que conservan su carácter e influencia natural, no están habitadas de forma permanente o significativa, y se protegen y manejan para preservar su condición natural (Área Natural Estricta/ Área Natural Silvestre).
- II. Área protegida manejada principalmente para la conservación de ecosistemas y con fines de recreación. Áreas terrestres y/o marinas naturales, designadas para a) proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas para las generaciones actuales y futuras, b) excluir los tipos de explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con el cual fue designada el área, y c) proporcionar un marco para actividades espirituales, científicas, educativas, recreativas y turísticas, actividades que deben ser compatibles desde el punto de vista ecológico y cultural (Parque Nacional).
- III. Área protegida manejada principalmente para la conservación de características naturales específicas. Áreas que contienen una o más características naturales o naturales/culturales específicas de valor destacado o excepcional por su rareza implícita, sus calidades representativas o estéticas o por su importancia cultural (Monumento Natural).

- IV. Área protegida manejada principalmente para la conservación, con intervención a nivel de gestión. Áreas terrestres y/o marinas sujetas a intervención activa con fines de manejo, para garantizar el mantenimiento de los hábitat y/o satisfacer las necesidades de determinadas especies (Área de Manejo de Hábitat/Especies).
- V. Área protegida manejada principalmente para la conservación de paisajes terrestres y marinos y con fines recreativos. Superficies de tierra, con costas y mares, según el caso, en las cuales las interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años, han producido zonas de carácter definido con importantes valores estéticos, ecológicos y/o culturales, y que a menudo albergan una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta interacción tradicional es esencial para la protección, el mantenimiento y la evolución del área (Paisaje Terrestre y Marino Protegido).
- VI. Área protegida manejada principalmente para la utilización sustentable de los ecosistemas naturales. Áreas que contienen predominantemente sistemas naturales no modificados, que son objeto de actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo un flujo sustentable de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad (Área Protegida con Recursos Manejados).

Anexo 2

Congreso Mundial de la Naturaleza, octubre de 1996, resolución 1.53: Pueblos indígenas y Áreas Protegidas

Recordando que han sido establecidas algunas áreas protegidas en tierras o territorios de los pueblos indígenas sin el consentimiento ni la participación de los pueblos afectados;

Considerando los términos de la Convención 169 de la OIT y los del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sobre el papel de los pueblos indígenas con respecto al manejo, uso y conservación de la biodiversidad;

Considerando las recomendaciones y directrices del Programa 21;

Considerando que en *Cuidar la Tierra* se destaca el papel de los pueblos indígenas en el desarrollo sustentable y sus derechos en el manejo de los recursos naturales;

Considerando las recomendaciones del Cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas en que se insta a desarrollar políticas para las áreas protegidas que resguarden los intereses de los pueblos indígenas;

Reconociendo que varios gobiernos han adoptado ya políticas y medidas para incorporar plenamente los derechos e intereses de los pueblos indígenas en el establecimiento y manejo de áreas protegidas dentro de sus tierras y territorios;

El Congreso Mundial para la Naturaleza, en su primer período de sesiones, Montreal, Canadá, 14 a 23 de octubre de 1996:

1. **Solicita** al Director General, el Secretariado y sus programas técnicos, Comisiones, miembros y Consejeros de la UICN, dentro de los recursos disponibles acoger, promover, participar y abogar en el desarrollo e implementación de una clara política con respecto a las áreas protegidas establecidas en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, que se base en los siguientes principios:

- a) el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a sus tierras o territorios y recursos naturales que se encuentren dentro de las áreas protegidas;
 - b) el reconocimiento de la necesidad de lograr un acuerdo con los pueblos indígenas previo al establecimiento de áreas protegidas en sus tierras o territorios;
 - c) el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a participar efectivamente en el manejo de las áreas protegidas establecidas en sus tierras o territorios, y a ser consultados sobre cualquier decisión que afecte a sus derechos e intereses sobre tales tierras o territorios;
- 2. **Insta** a los miembros de la UICN a establecer mecanismos apropiados a nivel nacional, para el desarrollo y la implementación de políticas sobre áreas protegidas y pueblos indígenas, que sean consistentes con estos principios;
 - 3. **Solicita** a la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN que establezca vínculos más estrechos con las organizaciones indígenas a fin de incorporar los derechos e intereses de los pueblos indígenas en la aplicación de Categorías de Manejo de Áreas Protegidas de la UICN;
 - 4. **Solicita** al Director General que, dentro de los recursos disponibles, incorpore en el Programa sobre Áreas Protegidas y Patrimonio Natural, acciones específicas que aseguren el desarrollo ulterior y la implementación de las políticas adecuadas basadas en estos principios.

Fuente: Beltrán ed. (2001).

Anexo 3

Principios y directrices sobre áreas protegidas y pueblos indígenas / tradicionales

Principio 1

Los pueblos indígenas y tradicionales mantienen un antiguo vínculo con la naturaleza y tienen una comprensión profunda de ella. Han hecho frecuentemente contribuciones significativas para el mantenimiento de muchos de los ecosistemas más frágiles del planeta, a través de sus prácticas tradicionales de uso sustentable de recursos y su respeto por la naturaleza basado en su cultura. Por tanto, no debería haber conflicto intrínseco entre los objetivos de las áreas protegidas y la existencia, dentro o alrededor de sus fronteras, de pueblos indígenas y tradicionales. Más aún, dichos pueblos deben ser reconocidos como socios legítimos e iguales en el desarrollo e implementación de estrategias de conservación que afectan sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos y, en particular, en el establecimiento y manejo de áreas protegidas.

Principio 2

Los acuerdos concluidos entre las instituciones de conservación, incluidas las agencias que administran las áreas protegidas, y los pueblos indígenas y tradicionales para el establecimiento y manejo de áreas protegidas que afecten sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos deben basarse en el respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales a la utilización tradicional sustentable de sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos. Simultáneamente, tales acuerdos deben basarse en el reconocimiento por parte de los pueblos indígenas y tradicionales de su responsabilidad de conservar la biodiversidad, la integridad ecológica y los recursos naturales que contienen tales áreas protegidas.

Principio 3

En todos los asuntos pertinentes a los intereses mutuos de las áreas protegidas y los pueblos indígenas y tradicionales, deben tomarse en cuenta los principios de descentralización, participación, transparencia y rendición de cuentas.

Principio 4

Los pueblos indígenas y tradicionales deben poder acceder plena y equitativamente los beneficios asociados con las áreas protegidas, reconociendo debidamente los derechos de otros grupos legítimos de interés.

Principio 5

Los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales en relación con las áreas protegidas constituyen con frecuencia una responsabilidad internacional, dado que muchos de los territorios, las tierras, las aguas, los mares costeros y otros recursos que dichos pueblos tradicionalmente poseen, ocupan o utilizan de otra forma atraviesan fronteras, de la misma forma que lo hacen muchos de los ecosistemas que requieren protección.

Fuente: IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, WWF y UICN/ CMAP (Beltrán ed. 2001).

Las áreas de conservación en Costa Rica: pasado y presente

Silvia Rodríguez Cervantes¹

1. Introducción

El impacto del ser humano sobre los recursos naturales empezó a sentirse con más fuerza a partir del inicio de la agricultura hace aproximadamente 10000 años atrás. Esta actividad al hombre le permitió domesticar algunas plantas y animales silvestres para su alimentación, vestido y albergue, pero al mismo tiempo transformó los ecosistemas naturales, especialmente aquellos que reunían condiciones favorables para el asentamiento humano. A pesar de estos cambios, la población dispersa de ese tiempo no imprimió gran presión al medio ambiente ni por medio de la agricultura ni por otras actividades. Por tanto, durante miles de años nadie sintió la necesidad de delimitar y aislar partes de la tierra con fines de conservación ni de guardar semillas para la posteridad en bancos de germoplasma o en jardines botánicos.

La idea de las áreas protegidas surge muchos siglos después, durante la revolución industrial a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En ese entonces se empezaron a escuchar voces aisladas de preocupación por el medio ambiente tratando de elevar la conciencia sobre la responsabilidad de cada generación para asegurar la permanencia de algunas porciones representativas de diferentes ecosistemas. Con el paso del tiempo los objetivos para la creación de las Areas Naturales Protegidas (ANAP) ó Areas Protegidas como se las denomina en Bolivia han ido cambiando pasando a ser primero lugares para el solaz y esparcimiento, y luego sitios para la investigación científica y el ecoturismo, hasta reservorios de recursos silvestres *in situ*, base de futuros productos farmacéuticos, químicos y agrícolas.

1 Es profesora emérita de la Universidad Nacional Heredia-Costa Rica. Presidente de la fundación Genetic Resource Action International (GRAIN) con sede en España.

Por su parte, los jardines botánicos fueron la primera forma de conservación *ex situ* de los recursos genéticos realizada por algunos países europeos a mediados del siglo XVIII con objetivos científicos y económicos, aunque también para el solaz y el descanso. Otro estilo de conservación *ex situ*, son los distintos tipos de fincas experimentales y de bancos de germoplasma para la conservación de los recursos para la alimentación y la agricultura o recursos domesticados. Estos últimos se empezaron a consolidar en el mundo a partir de 1970 (Ver recuadro 1).

En los últimos años se ha desarrollado una forma novedosa de conservación *ex situ* que consiste en recopilar y catalogar plantas, animales y microorganismos con fines de bioprospección a partir de bases de datos computadorizadas con información de interés para la industria agroquímica, farmacéutica y biotecnológica.

No puedo dejar de mencionar la conservación del germoplasma animal y vegetal en *finca*, que durante miles de años han hecho los campesinos y las campesinas en todo el mundo, procedimiento que conjunta el uso de diversas variedades de semillas con su mejoramiento y adaptación a diferentes ecosistemas y por lo tanto con resultados indiscutibles en la conservación y enriquecimiento de la biodiversidad. Basada en este sistema campesino, una corriente de agrónomos liderados por Erna Bennet defendía en los años de 1950 y 1960 la conservación *in situ* de los recursos domesticados en contraste con la alternativa del aislamiento de semillas en bancos de germoplasma (Pistorious 1997:27-30). Este tipo de conservación *in situ*, es obviamente diferente a la que se incentiva con el mismo nombre pero para la conservación principal de la biodiversidad silvestre por medio de la creación de parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas y que mencioné párrafos arriba. Para evitar confusiones, y porque en realidad los sistemas de trabajo campesino se realizan en forma mixta cuidando y usando recursos fito y zoogenéticos, domesticados y silvestres (Ver recuadro 1) aquí utilizaré el término para ellos de conservación *en finca*. (Rodríguez, S. 1993)

En esta ponencia me referiré básicamente al desarrollo y a interrogantes actuales de las ANAP en el mundo y en Costa Rica. Al hacerlo, iré entrelazando algunos acontecimientos internacionales que sirven de hitos históricos para su establecimiento y tipo de manejo. Por supuesto que a esos acontecimientos internacionales se suman esfuerzos individuales e institucionales, y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que también tomaré en cuenta en este recuento histórico.

Recuadro 1
La Conservación de la Biodiversidad Silvestre y Domesticada (*)

De la biodiversidad silvestre: Sus componentes pueden ser mantenidos in situ, es decir aislando ecosistemas específicos (Ej. parques nacionales y otras áreas naturales protegidas) para apartarlos lo más posible del impacto humano o que éste sea mínimo.

De la biodiversidad domesticada: Forman parte de ella los recursos agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros cultivados por el ser humano. Cuando se mantienen en jardines botánicos, bancos de germoplasma, algunas fincas experimentales y bancos de datos, se dice que su conservación es ex situ, es decir, aislados de manera artificial, fuera de su hábitat natural.

De la biodiversidad domesticada y silvestre:

a) En la finca: El trabajo cotidiano realizado por muchos campesinos e indígenas en la finca, es un tipo de conservación mixta en donde ellos mantienen policultivos de variedades locales dejándolos interactuar con sus parientes silvestres y con animales domésticos. Algunos agrónomos defendieron estos principios en las décadas de 1950-60 llamándola conservación in situ que no debemos confundir con la conservación de la biodiversidad silvestre en parques nacionales por lo que en este trabajo lo llamaré conservación en la finca.

b) Computarizada: Forma novedosa de conservación ex situ que consiste en recopilar y catalogar plantas, animales y microorganismos con fines de bioprospección a partir de bases de datos computarizadas con información de interés para la industria agroquímica, farmacéutica y biotecnológica.

(*) Como cualquier tipo de clasificación, hay zonas grises que no son fácilmente ubicables. Así, en las ANAP lo que se protege no es solamente la biodiversidad silvestre. Este es el caso de la reserva de la biosfera de Manantlán, en México, donde se protege al llamado maíz perenne (*zea diploperenis*), al que se le atribuye domesticación de las comunidades locales.

2. Las áreas naturales protegidas: entre el gozo estético y la explotación de la biodiversidad

El Parque Nacional Yellowstone inicia el proceso de protección In Situ en 1862

A mediados del siglo XIX, la parte Este de los Estados Unidos había sido fuertemente urbanizada, las áreas rurales remanentes habían perdido el sabor de lo agreste y la proporción entre los ecosistemas naturales y los artificializados había cambiado dramáticamente. Sus habitantes, de ambiente citadino, artístico y universitario empezaron a pensar en la posibilidad de guardar algunos de los últimos vestigios que quedaban de los ecosistemas originales de ese país. Su deseo era poder disfrutar de lugares en donde pudieran practicar la cacería mayor o simplemente experimentar “lo silvestre” por lo que se dieron a la tarea de apoyar la legislación que creó el Parque Yellowstone en 1862, localizado en el Oeste del país, sabiendo que allí existían todavía áreas silvestres (Nash 1978:603). Un empresario de ferrocarriles y los residentes de los estados de Wyoming y Montana también dieron su apoyo a dicha legislación ante la posibilidad de percibir los ingresos que el parque generaría por medio del turismo (Nash 1970). Resulta entonces que el origen de los parques nacionales se encuentra en las necesidades de recreación de una población urbana sofisticada sin tener, para entonces, mayores objetivos científico-tecnológicos ni económicos.

Después de la constitución del Parque Nacional Yellowstone en los EE UU, el impulso conservacionista fue seguido sin mucha fuerza por otros países, especialmente los desarrollados. Igualmente temprana, pero aislada, fue la firma el Convenio Internacional para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América en 1940. Allí se insta a los gobiernos contratantes a crear parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes². Era notorio que en ese momento no existía ni el clima necesario ni se estipularon en el Convenio los mecanismos adecuados para poner en vigor ésta y otras iniciativas que en los años de la posguerra lanzaron algunos organismos internacionales.

En el caso de Costa Rica, es hasta el 19 de octubre de 1966 cuando la Asamblea Legislativa ratifica el Convenio anterior mediante Ley de la República No. 3763. A pesar de este desfase de más de un cuarto de siglo, los términos del Convenio dieron base para el comienzo del proceso de protección en Costa Rica aún antes de su ratificación. El primer antecedente nacional para la protección de áreas silvestres de la posguerra se encuentra en la Ley Orgánica del Instituto de Turismo (Ley No. 1917) del 30 de julio de 1955, que en su artículo 6 ordena que este instituto se encargue de la custodia y conservación de una zona alrededor de los cráteres de los volcanes del país, declarándose tales zonas parques nacionales.

La I Conferencia Mundial de Parques en Seattle-Washington y el deseo de un movimiento mundial (1962)

Cien años después de la fundación del Parque Yellowstone, se celebró en 1962 la I Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales en Seattle, Washington, que tuvo como propósito “establecer un mayor entendimiento internacional y alentar el movimiento de parques nacionales sobre una base mundial” (Adams, B. 1962: xxxii)³. En dicha Conferencia, se perciben nuevos objetivos, por ejemplo, se habló constantemente del turismo como forma de promocionar estas áreas de singular belleza y también, aunque de manera general e intuitiva⁴, se señaló la posibilidad de realizar investigación científica. No se discuten fines económicos

-
- 2 Estas categorías se encuentran definidas en el artículo primero de esta Convención que indudablemente han sido modificadas o aumentadas con el transcurso del tiempo.
 - 3 Pasaron ocho años para que se creara el 21 de octubre de 1963 y por decreto ejecutivo la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco. Siete años más tarde, el 7 de septiembre de 1970 se crea por la misma vía el Monumento Nacional Cahuita.
 - 4 Por ejemplo, Beltrán (1962:366) se refiere a dos razones básicas para el establecimiento de los parques nacionales en ese entonces: una por su belleza y atracción y la otra porque esas áreas, en su estado natural, podrán ser útiles para el estudio de problemas científicos.

más específicos. Tampoco se reportan mayor influencia de esta conferencia en el área centroamericana.

La Conferencia de Estocolmo y el II Congreso Mundial de Parques en Yellowstone: Plataformas de lanzamiento de las áreas naturales protegidas (1972)

Diez años después, en el año de 1972, se celebraron dos actividades⁵ muy importantes para el movimiento conservacionista: la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, conocida como la Conferencia de Estocolmo, y el II Congreso Mundial de Parques Nacionales en Yellowstone que incluso se apoyan y complementan.

Como antecedentes debo decir que, por un lado había aumentado la conciencia de la erosión genética provocada por la Revolución Verde y el avance de la deforestación en los países tropicales. Por otro, los países industrializados requerían de la protección de los recursos bióticos, materia prima de la biotecnología, que a la sazón mostraba grandes avances y un futuro económico promisorio. Por lo tanto, se requería una protección especial de los ecosistemas ricos en biodiversidad, localizados principalmente en los países tropicales para las necesidades actuales y futuras de la biotecnología.

Estados Unidos marca la pauta para la creación de las ANAP. *Dentro de ese contexto de toma de conciencia de los problemas ambientales y sus impactos en la agricultura y en la biotecnología, tenemos que los EE UU proponen en la Conferencia de Estocolmo la creación de áreas silvestres protegidas en donde pueda velarse por la protección de los recursos genéticos de plantas, animales y microorganismos (Departament. of State 1971:15-31). La introducción al capítulo sobre pozas genéticas de la ponencia presentada oficialmente por este país, es especialmente reveladora en el siguiente párrafo inicial:*

La riqueza de la diversidad de las especies silvestres y plantas domesticadas primitivas para la agricultura y la forestería, así como también los animales y microorganismos, está siendo agotada y dislocada. Algunos de los principales países como los Estados Unidos tienen programas para conservar estos recursos genéticos, pero muchos de estos recursos se originan en las naciones en desarrollo que están sujetos a pérdida inmediata. El problema es mundial por el enorme espectro de especies

5 Sólo me estoy refiriendo a las conferencias más directamente vinculadas al tema de esta ponencia, pero hubo una serie de reuniones y de publicaciones que tuvieron profunda influencia indirecta. Algunas de ellas: En 1972 la publicación del libro "Los límites al crecimiento" (Meadows, D. et all 1972). En 1974, la Conferencia sobre la Alimentación que abordó el asunto de la escasez de alimentos y las hambrunas aparentemente provocadas por condiciones climáticas adversas. En ese mismo año la Conferencia Mundial sobre Población en donde se relacionan los problemas demográficos y los recursos naturales.

involucradas y las dimensiones de la agricultura mundial. El hecho de que la domesticación avanzada se encuentre en los países desarrollados, remotos del origen de las especies, les otorga una gran dependencia para el acceso de los materiales básicos de cultivo. Como nosotros no tenemos el control directo para la disposición de los recursos ubicados en otros países, sólo los esfuerzos de cooperación, ya sea bilateral o a través de organizaciones internacionales, resolverán el problema (Departamento de Estado 1971:15) (Traducción libre SRC).

Este párrafo resume perfectamente la importancia que tiene para la agricultura y la incipiente biotecnología moderna el germoplasma vegetal y los parientes silvestres localizados en los centros de diversidad. Por último, aún dentro del documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es interesante anotar el párrafo siguiente en que se evidencia la convergencia histórica entre necesidad de proteger los distintos tipos de germoplasma para fines comerciales o industriales, la creación de áreas naturales y el uso del paliativo económico del turismo:

La forma más económica de mantener los depósitos o reservas genéticas de especies silvestres en la mayoría de los casos será aislar áreas naturales, parques nacionales o reservas similares en donde las poblaciones se puedan mantener “in situ”. En muchos casos estas reservas pueden servir de atracciones turísticas que traen considerables beneficios económicos a las naciones involucradas, reduciendo de esta manera o eliminando costos extraídos de los bolsillos para la preservación de especies (Department of State 1971:26).

Tres propuestas resultaron de la Conferencia de Estocolmo: el Plan de Acción, el Programa de Acción Ambiental, y la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano. El Plan de Acción contiene 109 recomendaciones, pero para el propósito que aquí interesa, es importante analizar aquellas relacionadas con las sugerencias de los EE UU y aprobadas en la Conferencia:

- La Recomendación No. 38 solicita a los gobiernos “Dar los pasos necesarios para aislar áreas representativas de ecosistemas de significado internacional para su protección bajo acuerdos internacionales” (Allen 1972:6)
- Las Recomendaciones de la No. 39 a la 45 complementan lo anterior, planteando entre otras cosas la importancia vital de la conservación genética, de su forma de manejo, almacenamiento, intercambio de información y monitoreo
- En la Recomendación No. 39 se pide a los gobiernos que accedan a comprometerse en programas internacionales para conservar los recursos genéticos *in situ* en bancos de semillas, colecciones de cultivos, etc.; y *ex situ*, conservando a las poblaciones vegetales y animales en el medio ambiente natural y en su proceso de evolución.

Allen (1962) afirma que las recomendaciones relacionadas con el mantenimiento de la diversidad genética constituyen uno de los grandes logros de la Conferencia de Estocolmo.

La celebración del II Congreso de Parques Nacionales en Seattle, Washington poco después de la Conferencia de Estocolmo, contiene resoluciones de apoyo que influirían en la consolidación de las ANAP en distintos lugares. Así tenemos en la Resolución No. 7, propuesta por los cinco representantes de los países Centroamericanos, quienes sugirieron la celebración de reuniones regionales para concertar acciones que desembocaran en el manejo conjunto de los recursos naturales y culturales. Esta resolución fue aprobada unánimemente por los noventa países representados y a los dos años, en 1974, se celebraba en San José, Costa Rica la primera reunión centroamericana con ese fin⁶. Contó con la asistencia de representantes de los cinco países Centroamericanos y de Panamá y las propuestas giraron en torno al establecimiento de parques nacionales y parques fronterizos o regionales y el impulso que debería darse al turismo y a aspectos culturales dentro de ellas.

Entre los años 1969 a 1981 las áreas protegidas bajo diferentes tipos de manejo, aumentaron en Centroamérica de 25 a 149 y el total en kilómetros cuadrados pasaron de 193,500 a 615,000 (Neumann and Machilis 1989:14, citando USDI, NPS 1985:69). En el caso concreto de Costa Rica, el establecimiento sistemático de los parques nacionales es evidentemente el resultado directo de las recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo y del Congreso Mundial de Parques. Sin embargo, ¿cuáles fueron las razones de que se detuviera el crecimiento de parques nacionales y se establecieran otras categorías de manejo? Su respuesta la trataré de ensayar en el siguiente punto.

El III Congreso Mundial de Parques en Bali (1982)

Las ANAP no se establecen en un vacío social: Después del cabildeo en torno al lanzamiento de la propuesta para la creación de las áreas de conservación en el mundo, a lo largo de la década de los 70 del siglo pasado, encontramos que éstas crecen rápidamente no sólo en la región Centroamericana. Ya para 1987 la Comisión para el Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland, estimó que un 4% de la superficie del mundo se encontraba bajo esa protección y que dos tercios de ella se localizaban en países económicamente pobres aunque ecológicamente ricos (World Commission 1987:147). Muchos países habían respondido a las sugerencias de los Estados Unidos hechas en la Conferencia de Estocolmo y a las distintas propuestas emanadas de otros foros internacionales.

6 Una reunión similar fue celebrada en ese mismo año para los países de África del Este, en el Parque Nacional Serengti en Tanzania.

No obstante, ya para el principio de la década de los años ochenta, un nuevo problema empezaba a surgir. El mundo entero, y en mayor proporción los países en los que se encuentran dos tercios de las áreas protegidas, estaban atravesando por una crisis económica que afectó todos los ángulos de la vida cotidiana, incluyendo el papel del estado y la conservación de los recursos naturales. Los grupos más empobrecidos de la población que vivían con anterioridad en los lugares que luego fueron declarados áreas de conservación o en sus alrededores, empezaron a sentir una amenaza a sus opciones de subsistencia y de vida con este tipo de acción. Algunos gobiernos, como el de Brasil, también se manifestaron abiertamente en contra de iniciativas extranjeras que detuvieran lo que se consideraba “desarrollo” en aras de un conservacionismo galopante.

Rao y Gisler (1990:22) establecieron una serie de consecuencias sociales que las políticas de protección de las áreas y las vidas silvestres trajeron a los países en desarrollo. Tales políticas resultaron problemáticas en tanto que:

- Impusieron la relocalización de los antiguos pobladores en otras áreas no familiares a ellos o simplemente porque se les privó de sus tierras ancestrales
- En el caso de que se les permitiera seguir viviendo en el lugar, ocasionaron limitaciones al uso tradicional de los recursos naturales, que había sido una piedra angular para el equilibrio de la vida
- Dislocaron las economías hogareñas, en los sistemas de tenencia de la tierra, la división del trabajo y destrezas tradicionales de las cuales ellos dependen
- Provocaron interferencia o conflicto con los valores culturales o religiosos
- Provocaron exposición a culturas y estilos de vida ajenos tales como los que trae consigo el turismo y las nuevas tecnologías
- Sofocaron un estilo de desarrollo concebido por la gente local.

Los mismos autores citan ejemplos concretos de Zambia, Zaire, Nepal, Kenia, Tanzania, y Uganda, que describen la forma cómo las áreas de conservación impactaron a poblaciones locales en esos países. Las reacciones no se dejaron esperar yendo desde respuestas individuales a otras de grupos o comunidades organizadas; y desde una actitud de indiferencia hasta el repudio y la rebelión. Así, tenemos en este último caso el referido por McNeely (1990:16):

...los Bodos, una tribu de Assam (India), invadieron el Parque Nacional Manas, asesinaron a 12 guardas forestales, limpiaron parte de la tierra y abrieron la reserva a cazadores y pescadores furtivos. Los Bodos argumentaban que esas eran tierras que sus ancestros les habían legado y que sólo estaban reclamando algo que se les había quitado bajo el régimen Británico.

McNeely nos da otros ejemplos en Perú y en el mismo Estados Unidos, subrayando que de ninguna manera son ejemplos aislados. Este autor, citando el

estudio llevado a cabo por Machlis y Tichnell (1985), indica que ellos identificaron 16,111 amenazas específicas en los parques del neotrópico, las cuales van desde robos de plantas o animales silvestres, malas relaciones con la población local, demandas en conflicto por los recursos del parque, hasta problemas de otro tipo como el cambio en el clima, el aumento de la población humana y el aumento en la demanda de los recursos naturales. En un registro más específico de las áreas protegidas en el mundo que tienen algún tipo de amenaza, la UICN incluía en 1990, noventa sitios.

La Conferencia de Río de Janeiro: la discordia sobre el acceso y el patentamiento de la biodiversidad (1992)

El Jefe de la Delegación de los EE.UU. a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. William Reilly, decía “Ciertamente hay una crisis de pérdida de biodiversidad en el mundo de hoy esta es una tragedia para el planeta, una pérdida de productos de uso potencial, (pero) bajo ninguna circunstancia vamos a pedir que nuestra industria comparta sus patentes o haga que su tecnología se encuentre disponible bajo términos concesionales. Hemos negociado en la Ronda de Uruguay del GATT tratando de proteger los derechos de propiedad intelectual. No estamos por ceder aquí, en un tratado ambiental, lo que tanto nos costó proteger allá. (Usdin 1992:9) (Traducción libre SRC).

Esta Conferencia, mejor conocida como “Cumbre de la Tierra”, fue el seguimiento de la Conferencia de Estocolmo de 1972. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a la Cumbre de la Tierra en 1989, la biodiversidad se convirtió en uno de los temas centrales de la discusión. Este asunto, y el del calentamiento global, fueron considerados de tal importancia, que los delegados a esa Conferencia firmaron sendos documentos vinculantes como convenios internacionales⁷.

El Cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales fue celebrado en Caracas, Venezuela, en febrero de 1992. La Declaración respectiva concede también una alta prioridad a las necesidades y preocupaciones de la población local en el establecimiento y manejo eficaz de parques nacionales y otras áreas (FAO-UNEP 1992:13), pero sus resultados fueron opacados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992.

7 Otros tres documentos no vinculantes también emergieron de esta Cumbre, como son, la Declaración de Río, que contiene un conjunto de principios de desarrollo sostenible; la Agenda 21, que contiene una variedad de especificaciones para enfrentar los problemas ambientales; y la enunciación de un conjunto de principios forestales para el manejo, conservación y uso de los bosques (Raeburn 1991:5).

Dentro de este marco, el Comité Intergubernamental de Negociaciones del Convenio de Biodiversidad, después de siete períodos de sesiones y cinco borradores, arribó a la Conferencia de Río con un documento lleno de corchetes, esto es, con un documento que incluía numerosos artículos sobre los cuales no se había alcanzado consenso (Comité Intergubernamental de Negociación, 1992). El Convenio de Biodiversidad se convirtió en el documento más controversial de los cinco analizados. Fue firmado por 150 países pero el presidente del país más poderoso, George Bush padre, se negó a firmarlo. El acceso a los recursos, la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica, fueron temas muy sensibles para los negociadores de los Estados Unidos quienes pensaron que, así como estaban establecidos, atentarían en contra de su interés nacional (Usdin 1992:8).

A pesar de esa resistencia, el tema del pago por los recursos de la biodiversidad, especialmente los contenidos en las ANAP era irreversible (Barton 1992:774). En la Cumbre de la Tierra se presentó como modelo de implementación conjunta entre los países industrializados y los países ricos en biodiversidad, la negociación celebrada entre el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), que es una asociación civil y la compañía farmacéutica Merck & Co. para llevar a cabo actividades de prospección química más tarde llamadas bioprospección (Stone 1992:1624 y basado en Science 1992:1142). En el contrato firmado por ambas instituciones en septiembre de 1991, la Merck decidió contribuir económicamente por el acceso a un número no dado a conocer de recursos provenientes de las ANAP públicas de Costa Rica. También, esta empresa acuerda apoyar en algunos aspectos la estructura científica de este país pero como contraparte, defiende para sí los derechos de propiedad intelectual en caso de obtener algún producto para el mercado y el secretismo en algunas cláusulas del contrato.

El convenio INBio-Merck y convenios similares de bioprospección se presentaron con una fuerte propaganda como modelos de emprendimiento conjunto entre países en los que todas las partes ganarían en términos económicos y también ecológicos. Detrás de ese modelo hay una clara ideología que se manifiesta en los siguientes planteamientos que no es el momento de rebatir aquí:

- “Hay que vender el bosque para salvarlo pues el mercado es el que ofrece el mejor incentivo para mantener la biodiversidad”.
- Es necesario trasladar los recursos en dominio público a manos privadas para evitar así la llamada “tragedia de los bienes comunes”, cuestionable tesis que habla de que, cuando los bienes son de todos y de ninguno hay una tendencia a no cuidarlos y por lo tanto, a que se extingan o erosionen.
- El modelo parece seguir apoyando la antigua receta de los años sesentas y setentas que indicaba que, para que los países subdesarrollados salieran de su situación, requerían seguir el ejemplo de los países industrializados. En este caso concreto, el desarrollo sustentable se alcanzaría, entre otras

cosas, con la proliferación de contratos como el INBio-Merck, ya que éste supone, además de los ingresos monetarios otorgados al país proveedor por la venta de los recursos del bosque, la transferencia de tecnología de los países industrializados. De esta manera, con el tiempo, todo el proceso industrial se podría efectuar en los países subdesarrollados, irónicamente los más ricos en biodiversidad.

Casi trece años después de celebrado el primer contrato INBio-Merck que tenía como materia prima la biodiversidad de las ANAP públicas de Costa Rica, no se ha reportado ningún producto farmacéutico o industrial exitoso. El estado, las universidades públicas y las ANAP habrían recibido aproximadamente US\$ 2,768.407 a lo largo de nueve años (de 1991 a 2000). En cambio, el ecoturismo, que tiene también como base fundamental la visitación de las ANAP del país, produce \$500,000,000 dólares al año. Con respecto a las comunidades locales y pueblos indígenas, ellas no han recibido ni un solo beneficio económico del emprendimiento conjunto, solo expectativas que han empezado a languidecer.

Lo que sí produjo indirectamente este contrato, fue una temprana toma de conciencia de la población costarricense para normar adecuadamente el proceso de bioprospección y otro tipo de utilización de la biodiversidad de las ANAP estatales. De allí que, como producto de un proceso muy participativo, fue redactada y luego sancionada la Ley de Biodiversidad en mayo de 1998. Esta ley contempla, en uno de sus capítulos, la formación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el establecimiento de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, que supuestamente serían instancias de control ciudadano sobre las acciones gubernamentales en relación con el uso, el manejo y la protección de la biodiversidad. Como reglamento de la ley, en diciembre pasado (2003) se publicaron como Decreto ejecutivo las Normas de Acceso a los Recursos Bioquímicos y Genéticos.

Así mismo, distintas organizaciones de la sociedad civil han hecho un fuerte cabildeo para retardar lo más posible la aprobación de los derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida, ya que estamos conscientes de que éste es uno de los mecanismos con el cual se despojará a las comunidades locales y los pueblos indígenas del control de los recursos. Desgraciadamente esta lucha está en peligro de perderse en primer lugar, con las firmas de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica; en segundo lugar con el eventual Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, en tercero, si no se modifica el Art. 27.3 b) del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para que se prohíba cualquier tipo de propiedad intelectual sobre formas de vida.

A pesar de las conquistas en el terreno de la legislación, todavía falta en Costa Rica mucho camino por recorrer para que las comunidades locales y los pueblos indígenas tengan una verdadera participación tanto en la CONAGEBIO

como en los Consejos de Áreas de Conservación en donde tienen un representante por consejo.

La Cumbre del Desarrollo Sostenible (2002) y el V Congreso Mundial de Parques en Durban-Sudáfrica (2003)

Todavía los resultados de estos dos últimos eventos están muy frescos para conocer en toda su extensión su impacto en Costa Rica. Sin embargo, podemos observar varias tendencias preocupantes:

- 1) En primer lugar llama la atención el lema del V Congreso de las ANAP: "Beneficios más allá de las fronteras" el cual confirma la pauta que ya se venía observando desde la Cumbre de la Tierra, en cuanto al énfasis excesivo dado al uso mercantil de los recursos. Esto dista totalmente de las razones conservacionistas que impulsaron en 1940 la firma del Convenio Internacional para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América.
- 2) En segundo lugar, y como para ir dando vida al lema arriba citado, se han venido manejando y machacando en una y otra reunión, una serie de conceptos como por ejemplo: "nuevos mecanismos financieros", "colaboraciones para las ANAP", "certificación de las ANAP", sociedades comerciales o "patnerships", personas interesadas o "stakeholders" y otras con clara orientación hacia lo mercantil y algunos con escasa traducción al español. Hay otros conceptos como el de "governance" (governabilidad, control o autoridad) con toda una serie de calificativos: como control "bueno", control internacional, control social (Scanlon, J. y Burhenne-Guilmin, F. 2003), igualmente contruidos desde el idioma inglés.
Lo cierto es que todas estas nociones se van imponiendo poco a poco de arriba hacia abajo hasta vaciarse de significado, igual que en otro tiempo lo hicieron conceptos como: la teoría de las islas, la de los corredores biológicos, las áreas de amortiguamiento, las reservas de la biosfera, la bioprospección, la distribución justa y equitativa de beneficios, los derechos intelectuales *sui géneris*, la transparencia, el "empowerment" o empoderamiento –que tampoco cuenta siquiera con una traducción adecuada al español- y que todos fuimos aprendiendo a veces sin saber de dónde venían y con qué propósitos las estábamos siguiendo.
- 3) En tercer lugar, observamos también, que los conceptos no están tan lejos de las acciones y que la nueva arremetida para la mercantilización de la biodiversidad se fomenta ahora por medio de alianzas o sociedades comerciales a pesar de la pérdida de momentum en negociaciones como las basadas en el contrato INBio Merck y a pesar de los fracasos de la bioprospección con

distribución justa y equitativa para las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Por ejemplo, la UNCTAD ha retomado su iniciativa de los Bionegocios que tiene alcances globales. Para América del Sur, sabemos que el Secretariado General de la Comunidad Andina, está trabajando para hacer una sociedad con la ONG Conservación Internacional; y en el mes de mayo pasado se realizó el primer Foro de Inversionistas para las empresas de la Biodiversidad de la región Andina-Amazónica. En nuestra región, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la NASA de los Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para el desarrollo del Corredor Biológico Mesoamericano, que luego derivó en el llamado Plan Puebla Panamá. Este corredor es una iniciativa que tiene como concepto central la supuesta integración de la conservación y del uso sustentable de la biodiversidad en donde el desarrollo económico juega un papel vital.

El Grupo de Países Megadiversos Afines, formado en 2002 por quince de los países más ricos en biodiversidad (Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenya, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela), igualmente impulsa los bionegocios. Aunque hablan de constituirse en un mecanismo para la preservación y el uso sustentable de la biodiversidad, no dudan en avalar el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sólo a cambio de las condiciones que establecen las Guías de Bonn⁸ para conceder el acceso a los recursos genéticos. Una de esas condiciones se refiere a que, cuando alguna empresa o persona solicita derechos de propiedad intelectual, se le exija un certificado de consentimiento previamente informado, en el que se podrían concertar algunos beneficios para los países proveedores de los recursos.

- 4) Por último, al dar este vistazo histórico sobre las preocupaciones de la humanidad para conservar los recursos naturales, sólo me queda preguntar: ¿Cuándo llegará el día en que, los productores de las guías internacionales (international guidance) se fijen más y mejor en el modo de hacer las cosas de las comunidades locales y de los pueblos indígenas para el manejo de los ecosistemas en lugar de seguir produciendo conceptos huecos para las poblaciones?. Pienso por ejemplo en la riqueza de teoría y práctica que producirían en esas reuniones internacionales el conocimiento y discusión de las distintas formas colectivas y ancestrales ejecutadas por los pueblos indígenas como los de Bolivia para comunicarse con la naturaleza y fortalecer al mismo tiempo las relaciones sociales entre parientes y amigos.

8 Discutidas en grupos de trabajo y aceptadas en las Conferencias de las Partes del CDB.

Tenemos así, ejemplos que ustedes bien conocen como: el marcaje y el ritual del ganado (el killpaku), el abonamiento de suelos con corrales itinerantes (el huaneo), la crianza ritual de la papa y otras relaciones de reciprocidad de las cuales el mundo entero puede aprender para mejorar los lazos de comunicación entre lo que ahora se llama el “control internacional” y el “control social local” de las áreas naturales protegidas⁹. De otra manera las ANAP estarán muy lejos de cumplir con los objetivos sociales y ecológicos que deberían tener.

3. Las reacciones sociales y las áreas naturales protegidas en Costa Rica

En el caso de Costa Rica también se han presentado una gama de respuestas desde la resistencia pasiva a una mucho más activa. Uno de los casos más publicitados ha sido el conflicto con los Gamb Usitos u Oreros en Corcovado, que en la década de los años 80 ocasionaron seis declaratorias de emergencia nacional por parte del gobierno central (Camacho 1993; Naughton 1987). Igualmente hace unos años, se dieron ocupaciones ilegales, incendios deliberados en algunas áreas, ataques personales a los guardaparques, desobediencia civil para observar las reglas de acceso y utilización de los recursos.

También hubo reacciones mucho más organizadas. Por ejemplo, la invasión de la Reserva Biológica de Carara en 1983 por un grupo campesinos respaldados por el Diputado Gerardo Morera para vivir y cultivar en una porción de esta área protegida (Rodríguez y Vargas 1988:173). Otro ejemplo es el de los pobladores del Área de Conservación de Tortuguero, quienes organizados en la Asociación de Productores para el Desarrollo Sostenible dieron una fuerte lucha para que no los desalojaran del lugar. Por su parte, Anger (1989:20-21) reporta la reacción de los pobladores del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo de la siguiente manera:

(Los pobladores) han enviado delegaciones al Presidente de Costa Rica, han amenazado a los guardaparques y han condenado al ostracismo a supuestos defensores del refugio. El año pasado ellos toleraron a los buzos que utilizan tanques de aire para la pesca de la langosta (método ilegal en Manzanillo), antes que reconocer el poder de las autoridades del refugio...

Si bien algunos de estos ejemplos se documentaron a fines de las décadas de 1980 y 1990, no quiere decir que la reacción de los pobladores locales al sentirse afectados en sus derechos con la creación de las áreas de conservación en los

9 Cartillas de Revaloración del Saber Local. Calendario 2004. www.agruco.org

años de 1970 hubiera pasado inadvertida. Por el contrario, la percepción de que el establecimiento de parques nacionales estaba fallando de alguna manera al no tomar en cuenta las necesidades sociales, hizo que el tema central del Tercer Congreso Mundial de Parques Nacionales celebrado en Bali, Indonesia, en 1982 fuera: “Parques Nacionales, Conservación y Desarrollo: el papel de las áreas protegidas para el sostenimiento de la sociedad” con lo cual los organizadores proponían analizar las consecuencias de ese vacío.

McNeely (1982:1)¹⁰ en la Introducción a las Actas que dan cuenta del Congreso señala que:

Los Parques Nacionales son generalmente considerados como áreas de un significado natural destacado, en donde la influencia humana es mínima. Pero en un período de aumento de población, de inseguridad económica y de inestabilidad social, muchos gobiernos están encontrando que el modelo tradicional de parques nacionales no es ya suficiente para dar cuenta de sus necesidades de recreación, educación, manejo de recursos genéticos de cuencas y otros muchos bienes y servicios producidos por la conservación de áreas protegidas

Es significativo el número de ponencias presentadas en este congreso que muestran la preocupación por lo “social”. El congreso termina con una declaración, conocida como la Declaración de Bali, que menciona una serie de seis acciones fundamentales. La incluida en el punto 5 indica:

Reconocer el contexto económico, cultural y político de las áreas protegidas; aumentar el apoyo local para las áreas protegidas a través de medidas tales como la educación, el compartimiento de ingresos, la participación en decisiones, los esquemas de desarrollo complementario en áreas adyacentes y, en el caso de ser compatible con los objetivos del área protegida: acceso a los recursos.

La realidad, vista bajo la perspectiva social, marcó un viraje en el lenguaje y en las acciones netamente conservacionistas con que antes se abordó el manejo de los parques nacionales y reservas equivalentes. Se diversificaron en doce las categorías de manejo, surgiendo por ejemplo las reservas de la biosfera, las reservas de recursos naturales y los refugios de vida silvestre, en las cuales se proponía el “uso múltiple de los recursos”. Se empieza a hablar también de la creación de una nueva categoría, la de banco genético *in situ* donde se protegerían –en lugar de especies– pozas genéticas de valor económico actual o potencial para la agricultura,

10 McNeely, es uno de los organizadores del Congreso de Bali y fue quien también escribió el artículo que trata de las reacciones negativas de los pobladores respecto de las áreas de conservación en 1990. Pareciera entonces que, después de ocho años de la Declaración de Bali, todavía existían reacciones sociales en contra de dichas áreas.

la horticultura, la silvicultura, la acuicultura y la biotecnología. En síntesis, este tipo de recursos se conservan con el fin de ser usados (McNeeely 1982:19-37) y hay una clara alusión a lo que después se conceptuó como bioprospección, es decir, la búsqueda o exploración con fines comerciales de recursos bióticos.

En Costa Rica también se incorporaron los cambios. Si comparamos las fechas de establecimiento de parques nacionales, reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre podemos ver que fueron los parques nacionales y las reservas biológicas las categorías que primero se establecieron en el país. Es interesante anotar que antes de 1972, sólo había en el país seis áreas protegidas; en cambio dieciocho nuevos parques nacionales fueron creados después de la Conferencia de Estocolmo.

En un lapso de diez años (1972-1982) se observa un aumento impresionante de las dos categorías más restrictivas en cuanto al uso económico de sus riquezas, esto es, de parques nacionales y de reservas biológicas. Costa Rica siguió después la corriente internacional. Con excepción del PN Amistad que se funda en 1982 con intenciones de transformarlo en Reserva de la Biosfera y el aumento en el área del PN Braulio Carrillo; en toda esa década no se establece ningún otro parque (cuadro No. 2). Es hasta principios de los años noventa cuando hay una transferencia de parte de una reserva forestal (la Cordillera Volcánica Central) para acrecentar el PN Santa Rosa y convertir toda el área en el Parque Nacional Guanacaste. Después prácticamente no se crearon áreas bajo estos tipos de categorías hasta los primeros años de los noventa en donde observamos que hay un punto de retorno que va del establecimiento de categorías más permisivas (reservas forestales, por ejemplo) a otras más restrictivas (parques nacionales). En esa década se establecieron tres pequeños parques nacionales, uno terrestre y dos marinos.

En cuanto a la tenencia de la tierra, se observa que también son los parques nacionales y las reservas biológicas las que la ley Forestal del 28 de junio de 1990 en su Artículo. 38, contemplaba que, "dados sus fines de conservación, deberían ser terrenos adquiridos por el estado por medio de compra o por expropiación, o por ambas". En el caso de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, los predios o partes de predios también se deberán comprar o expropiar, salvo que sus propietarios aceptaran someterse al régimen forestal respectivo. Es decir, existía la posibilidad de que permanecieran bajo propiedad privada, pero bajo ciertas condiciones de uso.

En Costa Rica, hubo un primer momento en el que se establecieron básicamente parques nacionales y otras categorías de manejo muy restrictivas. Siguiendo las pautas internacionales, reservas absolutas, parques nacionales, áreas protectoras, refugios de vida silvestre, reservas forestales que son modalidades creadas dependiendo de los recursos que protegen o por el grado de rigurosidad con que se permite o no la presencia y las actividades humanas (Ver recuadro 2).

Recuadro 2 **Categorías de Manejo en Costa Rica**

En la ley Forestal No. 7032 de 1986 se marcaban las diferencias entre las distintas áreas de conservación.

- Nadie podía hacer ningún tipo de aprovechamiento económico de los recursos naturales contenidos en los parques nacionales y reservas biológicas (Art. 34).
- En las reservas forestales, en las zonas protectoras y en los refugios de vida silvestre, bajo ciertas condiciones se podía manejar y aprovechar la madera, la flora y la fauna, según el caso (Art. 35).
- Con respecto a los sistemas de tenencia de la tierra, las reservas forestales, las áreas protectoras y los refugios de vida silvestre, toleran la permanencia de propietarios privados o poseedores, siempre y cuando sometan sus tierras al régimen forestal (Art. 37).

Con los cambios en la legislación, Costa Rica se puso a tono con las recomendaciones de la III Conferencia de Parques Nacionales celebrada en Bali, en 1982 que trataron de dar respuesta a inquietudes sociales.

En resumen, parece que estamos en presencia de dos décadas con distintas tendencias. En la década de los setenta se establecen la mayoría de los parques nacionales, todas las reservas forestales, parte de las zonas protectoras y algunos refugios de vida silvestre. En la década de los ochenta surgen el resto de las zonas protectoras y los refugios más grandes. Actualmente, parece que se da una tendencia a incrementar un poco los parques nacionales transfiriendo tierra de categorías más permisivas de manejo, como son las reservas forestales.

Bibliografía

Adams, B. (ed.)

- 1962 First World Conference on National Parks. Proceedings of a Conference organized by the IUCN. Seattle, Wash. USA. June 30-July 7, 1962.

Allen, Robert

- 1972 Can Stockholm Survive New York? *The Ecologist*. Vol. 2. No. 10. Ps. 4-9.

Anger, Dorothy

- 1989 "No queremos el refugio": Conservation and Community in Costa Rica. En: *Alternatives*. Vol. 16-3. Ps. 18-22.

Barton, John

- 1992 Biodiversity at Rio. En: *BioScience*. Vol. 42. No. 10. Ps. 773-776.

Beltrán, Enrique

- 1962 Use and Conservation: Two Conflicting Principles. En: Adams, B. (ed.). (1962). First World Conference on National Parks. Proceedings of a Conference organized by the IUCN. Seattle, Wash. USA. June 30-July 7, 1962. Ps. 364-370.

Camacho, Antonieta

1993 Regional Planning and People's Participation: A case Study at the Osa Península, Brunca Region, Costa Rica. School of Development Studies. University of East Anglia, Norwich, U.K. Phd. Thesis.

Comité Intergubernamental de Negociación (CIN)

1992 Quinto Proyecto Revisado de Convenio sobre la Biodiversidad Biológica. Nairobi, 11-12 de mayo de 1992.

Department of State

1971 Suggestions Developed Within the US Government for Consideration by the Secretary General of the 1972 Conference on Human Environment. Washington, D.C. USA

FAO-UNEP

1992 La Declaración de Caracas. En: Flora y Fauna Silvestres. Año 6 No. 14. Enero-Abril, 1992.

Neumann, Roderick and Machlis, Gary

1989 Land-use and Threats to Parks in the Neotropics. Environmental Conservation. Vol. 16. No. 1. Spring 1989. Pp. 13-18.

Machlis, Gary and Tichnell, David

1985 The State of the World's Parks: an International Assessment of Resource Management, Policy, and Research. Westview Press. Boulder, Colorado. USA.

McNeely, Jeffrey

1982 Introduction: Protected Areas are Adapting to New Realities. En: National Parks, Conservation, and Development: The Role of Protected Areas in Sustaining Society. Proceedings of the World Congress on National Parks. Bali, Indonesia. 11-22 October, 1982. Pp. 1-9.

McNeely, Jeffrey y Pitt, David

1985 Culture: The Missing Element in Conservation and Development. En: Culture and Conservation: The Human Dimension in Environmental Planning. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Great Britain. Ps. 1-10.

McNeely, Jeffrey

1990 The Future of National Parks. En: Environment. 32-1. Jan-Feb. 1990. Ps. 16-41.

Meadows Donella et al.

1972 The Limits to Growth. Earth Island. London, U.K.

Naughton, Lisa

1987 Ecological Conservation vs. Local Resources use. MSc. Thesis. Geography Department. University of Wisconsin-Madison. Wisconsin. USA.

Nash, Roderick

1970 The American Invention of national parks. En: American Quarterly. Vol. 22. Ps. 726-735.

Nash, Roderick

- 1978 The Exporting and Importing of Nature. En: Global Protection of Natural Areas. Proceedings of the 14th Biennial Wilderness Conference. Earthcare. Ed. Shoefield. Westview Press. Boulder, Col. USA.

Pistorious, Robin

- 1997 Scientists, Plants and Politics. A History of the Plant Genetic Resources Movement. International Plant Genetic Resources Institute. Rome, Italy.

Raeburn, Paul

- 1992 The Convention on Biological Diversity: Landmark Earth Summit Pact Opens Uncertain New Era For Use and Exchange of Genetic Resources. En: Diversity. Vol. 8. No. 2. Ps. 4-7.

Rao, Kishore and Geisler, Charles

- 1990 The Social Consequences of Protected Areas Development for Resident Populations. En: Society and Natural Resources. Vol. 3. Ps. 19-32. United Kingdom.

Rodríguez, Silvia and Vargas, Emilio

- 1988 El Recurso Forestal en Costa Rica: Políticas Públicas y Sociedad. Ed. EUNA. Heredia, Costa Rica.

Rodríguez, Silvia

- 1993 Conservación, Contradicción y Erosión de Soberanía: el estado costarricense y las áreas naturales protegidas. Tesis para obtener el doctorado en Estudios del Desarrollo. Universidad de Wisconsin-Madison.

Rodríguez, Silvia

- 2003 Contratos Paradigmáticos de Bioprospección: entre las Promesas y la Realidad. Revista Ciencias Ambientales. Diciembre 2003. Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

Scanlon, J. y Burhenne-Guilmin, F.

- 2003 An International Legal Regime for Protected Areas. Vth IUCN World Parks Congress. Durban, South Africa. September 2003. Prepared for Parks Canada. IUCN Environmental Law Centre, Bonn for the IUCN Environmental Law Programme.

Stone, Richard

- 1992 The Biodiversity Treaty: Pandora's Box or Fair Deal?. En: Science. Vol. 256. June 19, 1992. P. 1624.

Usdin, Steve

- 1992 Biotech Industry Played Key Role in the Refusal to Sign BioConvention. En: Diversity. Vol. 8, No. 2. Ps. 8-9.

World Commission on Environment and Development

- 1987 Our Common Future. Oxford University. United Kingdom.

Conflictos alrededor de la explotación forestal en la zona de transición del parque del Manu caso Pilcopata - Perú

Jamil Alca Castillo¹

1. Introducción

Los efectos ambientales que se presentan con mayor incidencia, hoy en día representan un problema cada vez más álgido. Una de las acciones que causa dicho problema, viene a ser la depredación de ecosistemas frágiles, como son los bosques amazónicos. Se concentra nuestra mirada al Perú, porque representa uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y cuenta con ingentes cantidades de bosques, considerado como el segundo país de América Latina y el séptimo en el mundo en términos de cubierta forestal.

Sin embargo, estos bosques soportan una tasa de deforestación anual de 261,158 Ha², produciéndose una sobreexplotación, a la que se atribuye diversas causas. Los datos estadísticos establecen que en 1990, la cubierta forestal de la amazonía peruana era de 67'906,000 Ha (53% del país). La deforestación acumulada hasta 1990 era de 6'948,237 Ha (9,19% del bosque amazónico) y la proyección de deforestación al año 2000 era de 9'559,817 Ha (12,65 % del bosque amazónico)³. La situación actual, es crítica⁴, puesto que se tiene zonas descremadas, siendo los departamentos mas afectados Madre de Dios, Cusco, Ucayali, Loreto y San Martín (Brack: 2002:104).

-
- 1 Especialista en Gestión Ambiental y Desarrollo – CBC-FLACSO. Asistente de Investigación del Individual Project 8 del NCCR, Ginebra-Suiza. Investigador Asociado del Instituto Latinoamericano de Investigación ILAI. Jamilalc@hotmail.com – jamilalca@yahoo.com
 - 2 Flores, 2002
 - 3 Flores, 2002
 - 4 Debido a que el nivel de deforestación esta estimado a 0,010 hectáreas por habitante / año, cuando el promedio en Latino América esta de 0,004 (CONAM)

En estas condiciones, el acceso al recurso forestal y su uso específico para madera, son fuentes de conflictos en toda el área amazónica y particularmente en la selva alta peruana que representa el primer espacio de colonización de la selva, a donde llegan migrantes de la sierra, a los que se les denomina “colonos”, quienes encuentran un nuevo espacio ecológico y social, donde reconstruyen su identidad y sus procesos de producción; es también, espacio de comunidades nativas que resistieron la marginación y viven –aunque manteniendo muchas de sus costumbres– integradas a la sociedad occidental.

El presente trabajo analiza y expone la realidad del Caso de Pilcopata, considerada dentro de la Zona de Transición o Zona Cultural del Parque Nacional del Manu, ubicada entre las Regiones de Madre de Dios (Provincia de Manu) y Cusco (Provincia de Paucartambo) del Perú. El Parque Nacional del Manu, se estableció el 29 de mayo de 1973, en el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado, mediante Decreto Supremo N° 0644-73-AG, que asignó una extensión superficial de un millón quinientas treinta y dos mil ochocientos seis hectáreas (1 532 806 Ha.). Esta norma fue modificada por el Decreto Supremo N° 045-2002-AG, de ampliación del Parque Nacional del Manu, publicado el 14 de julio de 2002 (en el actual mandato de Alejandro Toledo), que le sumó mayor territorio, incrementándose el área de extensión a 1 716 295.22 Ha. La Zona de Pilcopata también es parte de la Reserva de Biosfera de Manu (Categoría reconocida por la MAB-UNESCO de las Naciones Unidas el 1° de marzo de 1977). En diciembre de 1987 el Parque Nacional del Manu fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial.

Esta área natural protegida está normada, entre otras, por el Estado Peruano, por la Ley N° 26834 “Ley de Áreas Naturales Protegidas”, publicada el 4 de julio de 1997; el Decreto Supremo N° 010-99-AG, Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, del 11 de abril de 1999 y; por el Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, publicado el 26 de junio de 2001, que en general establecen el sistema encargado de dichas áreas.

En este artículo se pretende mostrar, que los factores de orden político, económico, social y cultural se entrecruzan, las que son necesarias considerar al estudiar las normas y los conflictos socioambientales que se manifiestan en las percepciones que tienen las poblaciones. Para una mayor aproximación al objeto de estudio, identificamos algunos niveles de problemas. El problema general radica en que los conflictos alrededor de la explotación forestal en la zona, no contribuyen a la explotación racional del recurso, produciendo degradación ambiental y social. Las formas de control social no son eficientes alrededor de la explotación forestal. Y al incidir en las percepciones, se resalta lo negativo de su concepción, es decir, las percepciones negativas que tienen los actores locales respecto a las acciones y normas de los actores externos; y las percepciones negativas de los actores externos sobre los locales, no permiten una comunicación fluida que facilite emprender acciones conjuntas en beneficio del desarrollo local y del uso racional del recurso

forestal, además de exacerbar los conflictos. Por último, la identificación de los efectos sociales y culturales del encuentro de normas locales y normas formales que regulan la explotación de los bosques, donde las legales no reconocen a las locales y tampoco su reconocimiento.

Presentamos entonces, algunos alcances del trabajo realizado en la zona de Pilcopata, donde se hizo uso de métodos y técnicas de investigación social, y se consideraron criterios explicativos, para conocer, analizar y explicar los aspectos relacionados a las percepciones, prácticas, normas y conflictos alrededor de la explotación forestal en la selva alta peruana, particularmente en la zona de transición de un área natural protegida.

2. Marco teórico referencial

En las sociedades, es imprescindible el desarrollo de normas. Éstas “contienen disposiciones que prohíben, permiten o requieren alguna acción o resultado” (Ostrom: 1992: 21). Pueden ser denominadas locales, internas o “consuetudinarias”, constituido por un conjunto de costumbres, no codificadas, ni establecidas legislativamente por los órganos estatales competentes, todo bajo el consenso social. Este tipo de sociedades no cuentan con tribunales, aunque posean normas de derecho, no poseen normas procesales como indica Gluckman (Citado en Mair: 1970: 176).

En cambio las normas “formales”, fundamentadas en las leyes, son normas de conducta promulgadas por el Estado, cuya administración se encuentra o debe estar reglamentada y ejercer el control social ejercido mediante la sistemática aplicación de la fuerza de una sociedad política organizada” (Pound citado en Mair: 1970: 176). De esta manera se garantizaría un orden interno y externo, condición que en varios países de América Latina y particularmente en el Perú, no se estaría cumpliendo, puesto que la debilidad estatal, no permitiría forzar a los agentes o actores a realizar procesos de explotación óptimos de los recursos naturales y específicamente del recurso forestal.

En forma general, respecto al acceso a recursos naturales, las normas median en la relación de las sociedades con estos recursos, donde generalmente se remarca la importancia de considerar tres aspectos o dimensiones que son, tenencia, acceso y control. Entendiendo la tenencia como las formas de posesión y propiedad de un recurso determinado, donde la propiedad implica uso, gozo y disposición; en tanto que la posesión implica uso y gozo solamente. El acceso supone, disponibilidad y facilidad que tienen los miembros de una sociedad para acceder y aprovechar determinados recursos para satisfacer intereses o necesidades. El control alude al poder de administrar o gestionar el espacio y sus recursos, tiene que ver por lo tanto con el uso, el aprovechamiento y el acceso a los recursos naturales (Orellana, 1997: 3). Estas tres dimensiones están regidas por un conjunto de normas, que facilitan

a los diferentes actores sociales el acceso a los recursos, permitiendo también, el ordenamiento de los territorios.

Todo esto, está enmarcado en lo que se denomina “normatividad ambiental”, que representa a las normas relativas a los problemas ambientales, dentro de las cuales se tienen a las leyes o códigos de aguas, de minería, de petróleo o forestal que son las más antiguas, y las más modernas son las leyes ambientales y la defensa del equilibrio ecológico. Como enfatiza González de Olarte (1992:21), todas estas influenciadas por disposiciones y recomendaciones internacionales⁵ han sido tomadas como parte de la preocupación de los gobiernos.

El encuentro de dos formas de normas basadas en la realización de prácticas adecuadas y prohibición de las “inadecuadas” en la explotación de recursos naturales, como de la contradicción de diversos intereses y valores conducen a desencuentros, tensiones y conflictos, donde es necesario tener en consideración la característica “omnipresente” (Ormachea 2001:163) del conflicto, debido a que se encuentra en todos lados, en toda la historia de la humanidad.

El marco para la explicación de estos fenómenos, se fundamenta en un modelo diametralmente opuesto⁶ al que considera que la sociedad es una configuración relativamente persistente de elementos y que descansa en el consenso de sus miembros⁷. En tal sentido lo opuesto se sienta en cuatro puntos que sustenta Dahrendorf. “1) Toda sociedad está sometida a cambio en todo momento; el cambio social es ubicuo⁸. 2) Toda sociedad experimenta en todo momento conflictos sociales; el conflicto es ubicuo. 3) Todo elemento de una sociedad contribuye a su cambio. 4) Toda sociedad descansa sobre la coacción que algunos de sus individuos ejercen sobre otros” (1968:102).

Si bien existen dos modelos yuxtapuestos, nos permiten explicar la realidad que será comprobada mediante la investigación empírica, fundamentado en que la teoría del conflicto y del cambio no es una teoría general.

Para buscar los orígenes del conflicto social, se debe recurrir a las relaciones de dominio que prevalecen en ciertas unidades de organización social, que son precisamente donde se encuentran los grupos antagónicos, y bajo este supuesto, “se destacan especialmente tres cuestiones: 1. ¿Cómo nacen los grupos antagónicos de la estructura de la sociedad?; 2. ¿Qué formas pueden asumir las luchas entre

5 Lo que describiría los niveles de la gobernancia en un nivel global.

6 Explicada por la teoría del conflicto, “que fue un elemento central de la investigación para la paz en la década de los cincuenta y a principios de los sesenta, pero que al final de esta década (80s) se encontró una simetría entre las partes y pasó por alto las asimetrías básicas del sistema mundial al igual que al interior de las unidades nacionales y las entidades sociales” (Wallensteen 1988:82).

7 Argumento del estructural funcionalismo.

8 Que se encuentra en un mismo tiempo en todas partes.

esos grupos?; 3. ¿Cómo puede el conflicto entre dichos grupos producir un cambio en las estructuras sociales?" (Dahrendorf 1968:102-103).

De esta forma vemos, que el conflicto se produce entre dos sociedades o sistemas, donde es necesario considerar los detalles del contexto o situación en que se manifiesta el fenómeno. Pero esta posición, es una de las construcciones teóricas que se hicieron y se hacen respecto a lo que es el conflicto, y al respecto Wallensteen indica que dar una definición con precisión, aun resulta evasiva (1988:82).

Entre estos intentos tenemos que, para Raymond Aron (1985) el conflicto es una posición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles. Para Coser (sociólogo) el conflicto es una lucha por los valores, por los bienes escasos (como los recursos), la potencia y el estatus, lucha en la que el objetivo de los antagonistas es el neutralizar o eliminar al contrario. En cambio para Duroselle (1982) quien es Historiador de Relaciones Internacionales, los conflictos oponen a uno o varios Estados o unidades políticas, en un choque de voluntades contradictorias.

Por otro lado, Julien Freund sostiene que el conflicto "consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o grupos de la misma especie, que manifiestan una intención hostil, uno respecto a los otros, generalmente en relación a un derecho, y que para mantener, afirmar o restablecer el derecho intenta romper la resistencia del otro, eventualmente recurriendo a la violencia, la cual puede, si se presenta el caso, tender a la eliminación física del otro" (1983:65).

Adam Curle, prefiere referirse a relaciones "no pacíficas"⁹ y de incompatibilidad. Así "un conflicto aparece cuando un individuo, una comunidad, una nación o, incluso un bloque internacional, desea algo que no puede ser conseguido a menos que sea a costa de otro individuo o grupo que también lo desea" (1977:15).

Esquemáticamente, Fisas define el conflicto como una situación en la que un actor (una persona, una comunidad, un Estado, etc.) se encuentra en oposición consciente con otro actor (del mismo o de diferente rango), a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles (o éstos son percibidos como tales), lo que los conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha"¹⁰.

Entonces se resaltan aspectos diferentes, como las incompatibilidades de objetivos, la lucha, el choque, el enfrentamiento; algunas se refieren al objeto del conflicto (posesión de valores, de un derecho), y otras hacen referencia a los deseos que no se cumplen, provocando frustración o impotencia entre los actores que no alcanzan lo que quieren.

Galtung (1984) a la vez, resalta la cuestión estructural del conflicto. Para él, debe definirse como la situación en la que hay actores que persiguen objetivos incompatibles, o partes de un conjunto social con intereses incompatibles. Pero

9 Las relaciones pacíficas, por el contrario son aquellas que se desarrollan sin conflicto.

10 Citado en Curso de Maestría: Manejo de Conflictos Socioambientales, CBC-FLACSO, 2003.

estos intereses, pueden producirse por la condición de “escasez”, en lo que incide Wallensteen, quien argumenta sobre el conflicto, “como una situación social en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos” (1988: 3), teniendo en consideración que la escasez es una construcción social y está de acuerdo a patrones establecidos en una sociedad.

La situación social del conflicto o la inherencia de éste al orden social, es predominante. Esto se expresa en condiciones espaciales y temporales específicas, tienen historicidad e impactos en la acción colectiva; son parte de la existencia de las asociaciones ciudadanas, que contribuyen a impedir la dominación y ejercer control mutuo, aunque no garanticen la justicia ni la equidad; es decir, los conflictos son naturales a la democracia (Dahl 1991:39-60). Al resaltarse la inherencia social en el tiempo, se concluye que los conflictos “no” son necesariamente negativos.

Estos preceptos, son la base para la construcción teórica de lo que refieren los conflictos socioambientales, que tienen como espacio de vida u objeto, a los recursos naturales o al ambiente. De una manera totalizante, se consideran estos conflictos, como aquellos producidos por la actuación del hombre con o en su ambiente, como también a conflictos que se producen por la actuación entre los hombres en torno a las cosas del ambiente (Briceño 1996:3; Orellana 1996: 7), hace referencia de forma implícita a la relación hombre-naturaleza.

En este contexto, el Programa de Bosques, Árboles y Comunidades Rurales (FTPP-FAO) define al conflicto socioambiental como el proceso a través del cual, ciertas prácticas de uso y explotación de recursos naturales, al degradar los ecosistemas, puede conducir a movimientos o cambios en la estructura de las relaciones sociales entre los diversos actores al interior de una sociedad.

Estas consideraciones nos conducen a entender a los conflictos como un proceso inherente a la situación social. En este proceso, un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos, para explotarlos o no desde distintas perspectivas. Significa que los conflictos en torno a los recursos naturales, son fenómenos sociales que involucran condiciones mínimas tales como la escasez, el deterioro o la privación.

La presión que se ejerce sobre los recursos naturales escasos (y especialmente sobre el recurso forestal) cobra mayor interés en situaciones como las actuales, donde “el mercado, la incorporación de territorios, el crecimiento poblacional, agudizan la presión sobre los recursos naturales, incidiendo por lo tanto en su escasez, deterioro y privación siendo espacios propicios para el desarrollo de conflictos” (Ortiz 1996: 6).

Si bien, la concepción evasiva del conflicto es una dificultad, Orellana establece una tipología de conflictos, que aunque en forma gruesa y general, permite una mejor aproximación a la problemática del conflicto socioambiental, identificando tres grandes tipos, los cuales son:

- a. Naturaleza como Recurso Natural Vs. Naturaleza como espacio de Vida, considerando de tal forma dos grandes mundos enfrentados, de relación tensa, lo que se traduce en términos de intereses y necesidades. En el caso forestal puede presentarse por ejemplo entre colonos versus comunidades nativas.
- b. Naturaleza como Recurso Natural: conflictos internos. Estos pueden expresarse como conflictos de uso, acceso, explotación y manejo de recursos, en el que también flotan intereses y necesidades. Considerando a los actores, se puede presentar por ejemplo entre colonos versus Estado, o colonos versus ganaderos.
- c. Naturaleza como Espacio de Vida: conflictos internos. Que pueden ser por uso, acceso y manejo de espacios (la ocupación de espacios puede ser una manifestación). Presenta intereses y necesidades, siendo parte de este tipo los conflictos interétnicos e intercomunales (1995:15-16).

Al interior de estos procesos se presentan diferentes características, encontramos por ejemplo, el entorno geográfico donde se desarrolla el conflicto, la estructura política donde interactúan los actores o partes, las relaciones, los patrones sociales y redes de comunicación que existen, los mecanismos para la toma de decisiones que tienen las partes, los mecanismos de sanción y otros. Y es que, los recursos naturales y los recursos forestales en particular están integrados en un espacio social compartido, donde se establecen relaciones complejas y desiguales entre una amplia gama de actores sociales¹¹ que pueden ser por ejemplo agricultores, ganaderos, extractores madereros, empresas extractoras, comunidades nativas, organismos estatales o no gubernamentales, y otros. Representan las partes interesadas o “stakeholders”, quienes son los actores sociales necesarios “para que un conflicto transite de una fase embrionaria, de latencia, de problema, a una fase manifiesta y de conflicto propiamente dicho” (Ortíz, 1996: 8).

Dentro de esto, la dimensión política está representada por los “actores con mayor acceso al poder –quienes son– los que mejor pueden controlar las decisiones sobre los recursos naturales e influir en ellas para su propio beneficio” (Peet y Watts, en Buckles y Rusnak 2000:4), sumando todo esto a la base fundamental que viene a ser la “escasez del recurso natural, a causa del cambio ambiental y el aumento de la demanda y su desigual distribución” (Homer-Dixon y Blitt –1998– en Buckles y Rusnak 2000:4).

11 En este sentido “los actores en conflicto, determinadas como unidades decisionales, que están directa o indirectamente involucrados en el conflicto, los cuales a su vez tienen un interés significativo en el resultado, pueden ser clasificados en tres categorías: A) Los actores primarios, B) Actores secundarios, C) Actores interesados” (Ormachea: 2001:116-117).

Es decir, podemos considerar como partes del primer aspecto los procesos crecientes de deforestación, degradación de la tierra y otros. El segundo, tiene dimensiones sociales y económicas que podríamos considerar desde los procesos de migración –en el caso de la selva alta la migración de pobladores andinos o colonos a esta zona–, el incremento de la población, liberalización del mercado, cambio de tecnología, uso de la tierra, desarrollo de empresas rurales o grupos de personas y otros. El último aspecto corresponde a la desigual distribución de recursos entre personas o grupos sociales o en las definiciones de los derechos de acceso a los recursos. Se puede considerar dentro de este aspecto, la presencia de la legislación estatal, que permite o no el acceso, la distribución y el goce del recurso.

Estos aspectos configuran la naturaleza de la “zona gris” (Wallensteen 1988:4), es decir, las percepciones que permitirían identificar las incompatibilidades, cuyas causas son varias o combinadas y, cuyo proceso implica acciones y reacciones¹². Todos estos elementos en forma individual o en combinación exacerban los conflictos, por ésto es necesario resaltar que, las causas de los conflictos sobre recursos naturales y en el caso particular del recurso forestal son múltiples, alrededor del cual se dinamizan la toma de decisiones, fundamentados en los objetivos, intereses u otros aspectos con los que cuentan los actores sociales.

Respecto a esto, Ormachea (2001:168-170) resume una “tipología”, donde considera las causas probables del surgimiento de conflictos alrededor de la explotación de los recursos naturales, considerando a los basados en hechos, en intereses, necesidades, valores, formas de relación y en estructuras.

Consideraciones importantes para analizar los conflictos socioambientales, que pueden encontrarse en los conflictos interpersonales y/o en los de orden internacional, donde juegan un papel importante, las relaciones de poder entre los actores del conflicto, quienes manifiestan “actitudes conflictivas” que permiten identificar “procesos psicológicos que exacerban la situación conflictiva” (Citado en Ormachea. 2001: 167) en el que incide Mitchell, puesto que estas situaciones afectan la dinámica social y al ambiente.

3. Características de la zona de Pilcopata

Al nordeste de la ciudad del Cusco, a diez horas de viaje aproximadamente en vehículo de transporte, está ubicado el centro poblado de Pilcopata, capital del distrito de Kcosñipata, provincia de Paucartambo, Región Cusco-Perú. Se llega a la zona, después de haber transitado por una vía de 215.35 Km, la que se recorre

12 Surge de las relaciones existentes entre grupos o individuos, aunque también hay el caso de la inacción o evasión de una de las partes como forma de enfrentar el conflicto (Ortíz 1996:8).

34.50 Km por una pista asfaltada hasta el lugar denominado Huambutío, a partir del cual la carretera es afirmada. Este tramo carretero corresponde al establecido entre Cusco, Paucartambo, Shintuya que pertenece a la Región Madre de Dios, uniéndose de esta forma dos regiones políticas.

La zona es conocida también como el Valle de Kcosñipata, ubicada entre los 600 a 3,500 m.s.n.m. la que corresponde a la Selva Alta, de la cual se reconocen la ceja de selva y la selva alta propiamente dicha, donde se tienen altas precipitaciones anuales cuyos promedios llegan a 4,000 mm aproximadamente, siendo considerada una zona de altas precipitaciones en el país por su ubicación en la Vertiente Oriental de los Andes. Estas precipitaciones de origen orográfico, tienen mayor incidencia en los meses de noviembre a abril, decayendo en los meses siguientes, condiciones que son propicias para el desarrollo de especies forestales.

La ocupación de este espacio se remonta a épocas incaicas, pues representó una posibilidad económica debido a que proveía de coca al Imperio. Posteriormente en la época de conquista y colonia fue punto de ambición de los españoles quienes fueron en búsqueda de la ciudad mítica inca llamada "Paititi". Formó parte del circuito comercial Potosí, porque en ella se producía coca y caña de azúcar, todo esto atrajo el asentamiento de españoles, estableciéndose además las primeras misiones católicas con fines de evangelización.

Posteriormente en la época republicana se dio inicio a una colonización de la selva alta en general, ya que representaba un frente de extracción de recursos, debido a esto se tuvo la afluencia de pequeños mineros, agricultores y extractores forestales. Los "booms" que se vivieron en la zona amazónica peruana, fueron causantes de que este espacio sea ocupado por migrantes, eso se dio a finales del siglo XIX e inicios del XX con el boom del caucho, posteriormente siguió el boom del oro, especialmente en Madre de Dios. A mediados del siglo XX la zona estuvo ocupada por haciendas que cultivaban caña de azúcar para producir aguardiente, que se comercializaba en los mercados de Cusco y Puno, pero la baja en el comercio hizo que se desistiera de dicha actividad y se incida en la explotación forestal.

A partir de 1955 se construye la carretera de penetración a la zona denominada Chontachaca, produciéndose una mayor afluencia de migrantes provenientes de Apurímac, Cusco, Puno y otros lugares, cada uno con sus particularidades sociales y culturales, de diferentes estratos sociales, con la intención de extraer madera, debido a que esta actividad reportaba buenos dividendos económicos, que no han sido reinvertidos en la zona, porque generalmente han sido malgastados en fiestas y consumo de alcohol.

El terremoto de 1955, generó también mayor demanda de madera para el restablecimiento de los lugares afectados, que precisamente, generó el boom maderero, durando aproximadamente hasta los 90. La característica de este proceso extractivo tuvo carácter selectivo, puesto que se extraía árboles de mayor valor económico, motivo por el que hoy se tiene sólo árboles corrientes, produciéndose de esta forma

el deterioro y la depredación del recurso forestal en la zona, perjudicando no sólo al ambiente, sino también, a la población asentada en la zona.

Actualmente, basados en los censos de población, se estableció un crecimiento poblacional de 1.7%, contando con una población aproximada según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de 2,801 habitantes, la que está compuesta por colonos quechuas, aymaras y mestizos, como también por grupos étnicos que corresponden a los grupos Harambut y Matsiguenga. Los idiomas que se hablan son preponderantemente el Castellano, el Quechua y en las comunidades nativas su lengua correspondiente Matsiguenga o Arawak y el Harambut. La población está dedicada a las actividades forestales, agrícolas, pecuarias y de comercialización.

A pesar de ser parte de un área protegida, uno de los mayores problemas que aqueja a la zona es la deforestación, que de acuerdo al Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), es severa, debido a que en un área de 243 Km², se produce una extracción promedio de 8,400 m³/año, lo que produciría en 40 años la desaparición de los bosques en la zona. Otros de los problemas lo representan la erosión laminar de grado moderado a severo del suelo, la presión demográfica, las altas precipitaciones en terrenos superficiales, la falta de infraestructura vial adecuada y la ineficiencia de las organizaciones sociales.

La institución competente de velar por la solución de los diferentes problemas de la zona es el Concejo Distrital de Kcosñipata, siendo el Alcalde quien preside el Comité de Desarrollo Distrital, organismo que agrupa a todas las instituciones (sean estatales o no estatales) que trabajan en la zona. Cuentan además con un Gobernador Distrital, y al ser reconocidos los sectores cuentan con un Teniente Gobernador, representantes del Poder Ejecutivo que no son elegidos por voto popular. A nivel distrital se tiene un Juez de Paz, que atiende algunos asuntos judiciales de ínfima cuantía, lesiones y litigios familiares o contenciosos.

Las instituciones estatales que trabajan, están representadas por oficinas locales de los distintos ministerios, entre ellos se tiene: al Ministerio de Educación representado por el Centro Educativo Inicial, el Centro de Educación Primaria y Secundaria (Colegio de Pilcopata). El Ministerio de Salud, se cuenta con un Centro de Salud. El Ministerio de Agricultura encargado de actividades agrícolas y de capacitación. El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, encargado de administrar los recursos forestales y de fauna silvestre. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio del Interior representado por la Policía Nacional.

El sector no estatal está representado por organizaciones no gubernamentales que realizan acciones fundamentadas en alcanzar el “desarrollo sostenible” de la zona. APECO y PRONATURALEZA trabajaron en la década pasada entre otras; el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) concluyó sus labores el año 2002, del cual se tiene una experiencia sistematizada. Actualmente la institución que sigue trabajando en la zona es PRO-MANU, Proyecto de Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera y Parque Nacional de Manu, siendo

por tanto un proyecto de cooperación, que representa el convenio entre la Unión Europea y la República del Perú.

En lo referente a los servicios básicos con los que cuenta la población de la zona, éstos se encuentran principalmente en el Centro Poblado de Pilcopata, siendo los sectores alejados de éste, los menos favorecidos. Cuentan con servicio de agua domiciliaria, desagüe y servicio eléctrico, además con teléfonos públicos.

En estas condiciones se desarrolla la actividad forestal a la cual está abocada casi el 70% de la población, a pesar de que la madera de mayor valor económico ya no se encuentra, siendo las especies corrientes las explotadas actualmente.

4. La explotación forestal y conflictos

Los inicios de la explotación forestal en la zona, correspondiente a la Selva Alta del Perú, tienen su origen en la década de los cincuenta, con la construcción de la carretera de penetración Cusco-Shintuya (Madre de Dios). El 20 de enero de 1953, dicha carretera, llegó en su primer tramo, hasta el sector denominado Chontachaca, y posteriormente avanzó hacia las zonas de Patria y Pilcopata.

Esto incrementó los procesos de migración a la zona, iniciándose de esta forma una colonización desordenada del Valle, siendo la extracción forestal la actividad principal, debido a que suponía la obtención de un ingreso económico inmediato. Produciéndose de esta forma el desbosque de los sectores aledaños a la carretera, sectores bajos y medios donde se contaba con especies de valor comercial como el aguano y el cedro de altura, como también de algunas maderas corrientes que podían ofrecerse en el mercado local y regional. Los bosques que se encuentran hoy, son generalmente secundarios, donde prima la madera corriente, que suponen también, un valor económico para la población¹³.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, en su Diagnóstico Preliminar del Distrito de Kcosñipata del 2001, estimó para entonces una deforestación de 82,000 hectáreas, significando por tanto un incremento anual del 2%, todo esto, por la presencia y accionar de pequeños productores o extractores madereros, que operaban bajo contratos de extracción forestal hasta de 1,000 hectáreas y con permisos de extracción forestal en unidades agropecuarias.

Entre los años 1999 y 2000, se nota un decrecimiento de la producción de madera aserrada en la zona, como presenta el cuadro 1, esto se da por el alejamiento del recurso, la destrucción forestal y la implementación de políticas restrictivas en la explotación maderera.

13 Teniendo en cuenta que se identificaron 63 especies forestales inventariadas y observadas en bosques secundarios y primarios naturales entre las que destacan: aguano, alcanflor, caobilla, matapalo, lucma, pacapacay, ubilla y otros (INRENA 2000).

Cuadro 1
Resumen de producción de Madera Aserrada en Kcosñipata

Año de producción	Pies tablares
1997	2'577,588.2
1998	2'896,146.0
1999	2'704,539.2
2000	2'509,178.0
Total	10'687,451.4
Promedio anual	2'671,862.85

Fuente: INRENA 2002.

Aunque, las cantidades presentadas tienen como base los contratos y permisos de extracción reportados entonces a la oficina de OFIRENA del Ministerio de Agricultura encargada de administrar los recursos forestales en ese tiempo, no se tiene contabilizada la madera extraída ilegalmente.

En julio del año 2000 los recursos forestales y de fauna silvestre, pasan a ser administrados por la Oficina Sede de Administración y Control Forestal de Pilcopata de la Unidad Operativa Regional Cusco-INRENA del Ministerio de Agricultura, quienes fueron los encargados de implementar y hacer cumplir la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308.

Por los efectos que se tiene en el recurso forestal, éstos no han sido administrados eficientemente, con su consecuente degradación y pérdida, que va en desmedro de la biodiversidad de la zona, como de las familias, que son perjudicadas tanto en el orden económico como en lo social y cultural.

Actualmente la extracción del recurso forestal es administrada únicamente vía permiso de extracción forestal en unidades agropecuarias tituladas o en procesos de titulación, previa constancia emitida por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras PETT, pero la extracción ilegal continúa.

4.1. Los actores sociales

Los actores sociales alrededor de la explotación forestal, son quienes intervienen, no sólo en el proceso de extracción del recurso, sino también aquellos cuyas decisiones y acciones influyen en el acceso o no al recurso. En este sentido se identifican actores internos y externos, que nos permite una identificación y agrupación en forma general.

Los actores sociales internos, lo representan la población asentada y dedicada a la explotación y comercialización del recurso forestal en la zona. Son aquellos que participan en el proceso de extracción, los denominamos “extractores”. Generalmente lo conforman pobladores o colonos establecidos en el núcleo pobla-

cional o en los sectores aledaños. Personas que cuentan con terrenos titulados y se dedican a la actividad agrícola. Dentro de este grupo se encuentran, algunos pobladores de las comunidades nativas, como también, los comerciantes quienes son los encargados de sacar la madera fuera para ser comercializada en los mercados regionales.

Dentro de los considerados extractores, se pueden reconocer dos tipos, quienes se diferencian por la forma de trabajo o relación con la ley. Es decir, quienes se acogen y cumplen las normas establecidas en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aquellos que no se acogen a ésta y trabajan al margen de ella o en forma clandestina.

Los primeros han solicitado a la oficina local del INRENA en Pilcopata, el permiso de extracción correspondiente, debido a esto, mandaron elaborar un expediente técnico donde se establece el plan de manejo respectivo, indicando los productos y volúmenes a extraer y el número de zafras o cosechas por año, incluso la duración del mismo¹⁴, lo que representa un costo económico. En cambio, los que no se acogen a estas normas legales “trabajan al margen de la ley”, se les denomina “clandestinos” o “ilegales”. No cuentan con autorización para extraer el recurso, sin embargo realizan dicha actividad, entre éstos se encuentran los denominados “cuquis”¹⁵, quienes provistos de motosierras, no respetan los límites de las propiedades particulares, ni las áreas de conservación o de protección, generalmente no trabajan en la agricultura y solamente se dedican a la extracción maderera.

Dentro del proceso de extracción maderera, que va desde el internamiento en el bosque, elección de la especie a talar, hasta la comercialización, se puede reconocer diferentes actividades, que suponen “especialidades” y cuya labor representa un costo económico, que presentamos en el cuadro 2. Se nota entonces una división del trabajo, donde quienes realizan las labores más riesgosas como motosierristas, lomeadores y jaladores obtienen menores beneficios económicos. En estos espacios, por lo tanto, se manifiestan mecanismos de control social internos para el trabajo.

En consecuencia, en estos espacios se concentra el “poder”, sea de índole económica o por el conocimiento con el que cuentan estas personas especializadas, por la labor que realizan en el proceso de extracción. Observándose la preeminencia del “capital económico” y el “capital cultural” como refiere Bordeau (1997). El “capital cultural” está enmarcado en el conocimiento que tienen algunos actores sobre el proceso de extracción y el ambiente, reconocido en ese espacio social en el que interactúan.

14 Establecido en el Capítulo VI del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sobre los “Permisos y Autorizaciones para Aprovechamiento Forestal”, en los artículos 125° y 126°.

15 Hace alusión a una especie de hormiga existente en la amazonía.

Cuadro 2
Costo por labor en la zona de extracción

Labor/ trabajador	Costo en Nuevos Soles
Motosierrista	0.20 por Pie ³
Lomeador	20.0 por día
Jalador	17.0 por día
Trochero Tractor	0.15 por Pie ³
Tochero carro	0.20 por Pie ³

Fuente: Informantes Pilcopata/Elaboración propia.2002.

Son entonces, los actores que están en contacto con el recurso, pero cuyas acciones muchas veces no planificadas, van en desmedro del ambiente¹⁶ cuando no se consideran procesos de tala programada, ni procesos de reforestación, viendo solamente al espacio económico y a la vegetación como un recurso económico.

Otro grupo, lo representan los Actores Sociales Externos, siendo aquellos cuyas decisiones influyen en el acceso, control y conservación del recurso forestal. Representados por entidades estatales y no estatales. Tomando en consideración este precepto, se identifican al Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, la Policía Nacional que cumple un papel alternativo con su ente particular, que viene a ser la Policía Forestal, realizan controles y redadas para incautar madera que no cumple con los requisitos establecidos. En menor medida en la zona, el Ministerio de Agricultura, aunque deja la labor fundamental de la administración forestal al INRENA.

Otras vienen a representar las organizaciones no gubernamentales, generalmente con la intención de conservar el ambiente y propender un uso racional de los recursos. En este sentido se tiene a PROMANU, que trabaja en la zona de amortiguamiento, pretendiendo cuidar la Reserva de Biosfera de Manu. Son precisamente estas condiciones, las que otorgan la importancia de la intervención de estos actores.

En conclusión, son actores que pretenden aplicar las decisiones establecidas en los niveles global y nacional, y hacerlos efectivos en los niveles locales.

4.2. Las leyes y realidad de su aplicación

Entre los años 1997 y 1998, la Oficina del OFIRENA del Ministerio de Agricultura, otorgó ilegalmente 13 contratos de extracción forestal, cuyos titulares, en

16 Utilizamos el término de ambiente y no medio ambiente, porque “medio” se puede entender de tres formas, la primera como mitad, en segunda instancia hace referencia a un fin o instrumento y, por último hace referencia a entorno y es por esta última referencia que al decir medio ambiente se estaría produciendo duplicidad de términos, que pretendemos evitar.

su mayor parte, no realizaron ningún proceso de extracción forestal. Se utilizaron los contratos de extracción para el “negocio” de la venta y obtención de guías de transporte forestal (INRENA, 2000. 40), de esta forma se amparaban las extracciones ilícitas en varios sectores del Valle.

Este proceso se vivía en muchas zonas amazónicas del Perú, pero no se tenía una norma acorde a la realidad existente y a los diferentes cambios que se presentan hoy en un mundo tan dinámico y en constante cambio. Hasta entonces seguía en vigencia la Ley N° 21147, establecida el 13 de mayo de 1975. Es por esto, que con el fin de controlar la sobreexplotación y establecer mecanismos de una explotación racional y planificada del recurso forestal, se estableció a nivel nacional la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 2730817, fundamentado entre otras, en la Constitución Política del Perú de 1993, en su capítulo II del Ambiente y los Recursos Naturales, artículo 66°, donde se indica que “los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”; otro referente también viene a ser el artículo 67°.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, tiene por objeto “normar, regular, y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación...” (Artículo 1°).

Mediante esta ley se establece que el Ministerio de Agricultura viene a ser el órgano normativo y promotor del uso sostenible y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, es quien decide políticas públicas, y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), representa el órgano encargado de la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel nacional, es por tanto, la agencia que ejecuta las políticas.

Las condiciones para la regulación e implementación de la Ley, se dan a través del Reglamento¹⁸, que fue aprobado el 6 de abril del 2001, bajo Decreto Supremo N° 014-2001-AG, siendo Presidente de la República el Dr. Valentín Paniagua Corazao¹⁹.

-
- 17 El Congreso de la República aprobó el proyecto, dictaminado favorablemente por la Comisión de Amazonía, Ecología y Ambiente, presidido por el entonces congresista oficialista Biólogo Luis Campos Baca, lo que recibió el respaldo del Ejecutivo. Dicha norma fue dada en el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, el 15 de julio del 2000.
 - 18 Que consta de trescientos ochenta y cinco (385) artículos y veinticinco (25) Disposiciones Complementarias, que precisan las formas de acceso al recurso y sus requerimientos, además de un ordenamiento del recurso forestal con el que se cuenta.
 - 19 Quien accedió interinamente a la Presidencia en Noviembre del 2001, a raíz de la declaración de vacancia por “incapacidad moral” de Alberto Fujimori.

El establecimiento de estas normas se produce también, porque la actividad maderera para el Perú representa un contrasentido y un reto, pues cerca de dos tercias partes del territorio nacional se encuentran bajo cubierta forestal y sin embargo, esta actividad no contribuye de manera significativa al Producto Bruto Interno²⁰, pero contradictoriamente, los índices de deforestación se incrementan, teniéndose como índice anual promedio 261,158 hectáreas (INRENA: 1996). Se tiene por tanto un recurso valioso, pero que supone, la interposición de intereses, que por muchos años produjeron diferentes conflictos y confrontaciones entre los actores sociales.

Caillaux y Chirinos ante esto, remarcen la importancia de conformar un marco legal e institucional adecuados, que debería fundamentarse en: "1) La puesta en práctica de una nueva legislación y política forestal orientada a la sostenibilidad, en lo que se ha avanzado de modo significativo; 2) Una clara intermediación del Estado, que avalada por la participación ciudadana dinámica y transparente, dirima los conflictos de intereses y modalidades de acceso, a fin de otorgar seguridad a los inversionistas; 4) Una institucionalidad fuerte y transparente, y; 5) Un sistema efectivo de control, vigilancia y monitoreo a fin de prevenir la tala ilegal y velar por el aprovechamiento sostenible del bosque" (2003:9-10).

El establecimiento de esta Ley, si bien representa un acierto en lo que se refiere al orden político, su aplicación aún no ha mostrado los resultados positivos sociales en lo que concierne al sector de la selva alta y particularmente a los pequeños extractores que se desarrollan en estas áreas, como se presenta en el caso de la zona de Pilcopata.

El año 2000, La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308 se implementa en Pilcopata y, su reglamentación un año después, con mayor precisión lo referente al Capítulo VI "De los Permisos y Autorizaciones para el Aprovechamiento Forestal" artículos del 125° al 160°, por las características de la zona y su población asentada. Esta implementación trajo como consecuencia reacciones de la población, por lo intempestivo de su aplicación y falta de consulta social, a la que se le atribuye, no solamente una falta de consulta y participación ciudadana en su elaboración, sino también, la no consideración de su particular realidad, demostrando la "invisibilidad" (Soria, 2002) de este sector físico y social.

Consecuentemente, toda esta disconformidad con el marco legal aplicado, tuvo mayores repercusiones, pues, exacerbó a los pequeños extractores y población en general, quienes al sentirse agredidos y tener mayores restricciones, protestaron, incluso con la toma del local del INRENA de la zona, siendo por tanto, un evento precipitante del conflicto.

Es necesario tener presente, que entre otros vacíos a nivel general, a dicha norma se le reconoce como fortalezas, la promoción del manejo sostenible del

20 Según la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del 2002, la actividad forestal contribuye únicamente al 4% del PBI Nacional.

bosque bajo extracción con planes de manejo, eliminación de la concesión directa, promoción de múltiples usos del bosque, entre otras. Sobre sus vacíos, no menciona, ni garantiza derechos de los trabajadores y usuarios del bosque, no considera gradualidad para adaptarse, no promueve actividades científicas; más aún se reconocen sus debilidades, entre las que llaman la atención, la debilidad estatal ya que se asigna exceso de tareas al INRENA, falta claridad en las concesiones, no promueve la cultura forestal, falta transparencia en la gestión forestal, débil promoción del empleo y otras (FORO ECOLÓGICO. 2000).

Particularmente en la zona de Pilcopata, además de lo mencionado, no se consideró el sistema anterior que primaba cuando se tenía la administración del Ministerio de Agricultura, por lo tanto se estableció, durante mucho tiempo una forma de “actuar” frente al recurso forestal, con patrones económicos y sociales creados en parte por la propia estructura estatal, que representan por tanto, un obstáculo para la implementación de una norma coercitiva y contradictoria a los intereses de los actores locales, peor aún, cuando se pretende ser drástico y no se brindan los espacios para la adecuación de las personas a la ley.

Los intereses van acompañados de una falta de planificación y falta de conciencia ambiental predominantes, pues son predominantes la acumulación de capital y la satisfacción de necesidades inmediatas, sin considerar el ecosistema frágil de la selva alta peruana y del bosque. Por último, existe un desconocimiento de la ley por parte de la población, porque en primer lugar el mensaje normativo no llega a la población y, en segundo lugar, si llega, llega de manera distorsionada.

Entonces, prima la necesidad por sobre la conservación o la explotación racional del recurso forestal. Estos pobladores que provienen de zonas andinas, colonos, pequeños extractores de madera, que han causado y causan depredación del recurso, tienen por supuesto un vínculo con la naturaleza. Vínculo que se inclinará hacia la protección o el uso racional cuando se sientan amenazados. Pero esto se contrapone cuando el interés de satisfacer necesidades prima en las familias, es decir, cuando se pugna por conseguir el pan de cada día, que conduce al no cumplimiento de la ley forestal vigente, produciéndose una explotación irracional del recurso forestal. A esto se suma la falta de control eficiente por parte del INRENA, debido a que no cuenta con personal ni la infraestructura suficientes²¹.

Pero el establecimiento y aplicación de estas normas formales, produjeron también lo siguiente:

- Diferenciación entre actores extractores, donde prima mayormente el capital económico, concentrándose sólo en pocas manos la “ganancia” económica.

21 La oficina local de INRENA en Pilcopata, sólo cuenta con dos trabajadores, un ingeniero y un asistente forestal.

- Los que menos tienen venden su fuerza de trabajo a “bajos precios”, cumpliendo el precepto que en economías capitalistas, en la “actual generación, los pobres venden barato” (Martínez Alíer 1999: 100).
- La aplicación de la ley, contradictoriamente, incrementó los índices de informalidad en la explotación forestal, llegando a establecer colateralmente un régimen de “acceso libre” al recurso, produciéndose mayor degradación.
- A pesar de haber existido recurso forestal disponible y en cantidades, la que fue explotada desmedidamente por la falta de una norma adecuada, no fue aprovechado positivamente, viviéndose la moralidad del CARPE DIEM, disfrutando del presente y olvidándose del mañana.

En consecuencia, a pesar de que la nueva norma sobre el recurso forestal propende un uso racional del recurso y el desarrollo sostenible, resulta siendo contradictoria. En realidad no debería ser así, debido a que sólo se mostrarán estas debilidades, cuando no consideren los aspectos particulares, sistemas anteriores, sociales, económicos y ambientales de las zonas donde se implementen las normas.

4.3. Las percepciones de los actores

Las percepciones o “zona gris” como las denomina Wallenstein, permiten establecer la forma de relación que se tiene entre los actores sociales, que en este caso particular, manifiestan una forma tensa, contraviniendo a la fluidez y colaboración, por las diferentes prácticas de los diferentes grupos de actores, no llegan a acuerdos y tampoco se reconoce el real valor de cada uno de ellos. Tienen intereses particulares y distintos discrepando y no comparten los mismos valores respecto al ambiente y en particular a lo que supone la explotación forestal.

Estas percepciones se resumen en lo siguiente. Las de los actores internos, endógenos o locales giran en torno a:

- El establecimiento de la ley es negativo, debido a que no sólo restringe la actividad, sino los expone a perder su madera por comisos u otras sanciones (esto para todos los actores extractores legales o ilegales).
- El INRENA representa un obstáculo y no realiza un trabajo eficiente, sólo beneficia a algunos. Prohíbe el acceso libre al recurso forestal, además, prohíbe la práctica de la agricultura de roce y quema, que viene a representar una alternativa de solución al problema de la falta de madera. El trabajo era mejor cuando la administración estaba bajo el Ministerio de Agricultura, puesto que no exigía tantos requisitos y se tenía una mejor relación.
- La ley no considera la situación de los pobladores. No se ha establecido un mecanismo de consulta, ni se han buscado las formas para tener una relación y comunicación adecuadas.

- El que tiene dinero, sea legal o no, puede explotar el recurso forestal y “hacer llegar la madera a los mercados para su comercialización y beneficiarse”.
- Aunque se prohíba la extracción, se seguirá explotando, puesto que satisfacer las necesidades de las familias es lo más importante.
- Las alternativas que plantean las instituciones no benefician y por el contrario, perjudican, por ejemplo en la agricultura prohíben la quema. Las alternativas que se presentan para dejar la actividad forestal, no son eficientes ni beneficiosas.
- Los procesos de reforestación son muy caros, necesitan mucho tiempo. Debido a esta posición la población extractora no asume los costos, ni el trabajo de los procesos de reforestación.
- No existe una relación buena con las instituciones. Al prohibirse la extracción forestal, se produjeron reacciones violentas de la población, como la toma del local del INRENA, incluso con funcionarios dentro.
- La presencia de estas instituciones no gubernamentales, sólo sirve para que los funcionarios se benefician. Para la población, son los trabajadores y funcionarios quienes se llevan todos los beneficios y no repercute en beneficio del desarrollo de la zona. Esto causa malestar y desconfianza.
- Muchas veces la madera ilegal comisada, ha sido recuperada por los propios extractores, incluso del local de INRENA Pilcopata, en propias palabras de los pobladores “le roban la madera al INRENA por las noches, cuando los ingenieros están descansando”.
- Los extractores clandestinos “cuquis”, no respetan los límites de las propiedades particulares, ni las áreas de protección o de conservación.
- El recurso forestal se está acabando, cada vez la extracción resulta dificultosa. Mucho trabajo para poco beneficio, pero se siguen adentrando a zonas inhóspitas y protegidas.

Al contrario las percepciones de los actores externos se resumen en lo siguiente:

- Las prácticas de extracción forestal que realizan los pobladores no son eficientes y depredan el ambiente, especialmente los extractores clandestinos.
- No sólo la extracción forestal que se realiza depreda el ambiente, sino otras prácticas más que realizan, como la agricultura mediante roce y quema.
- No se respetan los límites establecidos, ni tampoco los requisitos que se establecen en la ley.
- Los que cuentan con permiso de extracción forestal, no ven sólo su beneficio en la extracción, sino también en la comercialización de guías de remisión.
- Sobre los conflictos, se asume que no existen y que la adecuación de la población a la ley es progresiva.

- Plantean la posibilidad de prácticas alternas a la explotación forestal, fundamentados en el desarrollo sostenible.

Se presentan dos posiciones encontradas y contradictorias, que son la base de las divergencias. Por el lado institucional externo, se plantea la extracción racional de los recursos naturales específicamente del recurso forestal, fundamentados en lograr el desarrollo sostenible de la zona, por lo menos, eso se manifiesta en sus principios. Reforzado por la ley, que incluso reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques. A diferencia de esta posición, aquello que sostiene a los extractores y pobladores de la zona de Pilcopata, es el beneficio económico inmediato que representa la extracción maderera, y sienten como obstáculo la aplicación de la reglamentación de la ley. Entonces se contradicen valores, produciendo una mala relación y situación tensa entre los actores alrededor de la explotación forestal.

4.4. Los conflictos

Al ponerse en el lugar de los actores locales en conflicto, es decir, en sus “zapatos” respecto al acceso a recursos naturales escasos, se identifica que las causas radican en la necesidad de conseguir el pan cotidiano, que si es negado u obstaculizado, se estaría presentando una situación real de conflicto y en este caso particular socioambiental.

Es importante tener presente, que dicho fenómeno social es dinámico y cambiante, cumpliendo un “ciclo de vida”, que comprende desde una fase de latencia, a la de inicio, pasando por fases de escalada, destrucción, desescalada y búsqueda de solución, solución que en realidad viene a representar la transformación del conflicto.

En este sentido, en el caso particular de la zona de estudio, la aplicación de mecanismos de control para una explotación racional del recurso forestal, ha producido descontento en la población, porque de trabajar en forma prácticamente libre, pasaron a un control más estricto esta vez efectuado por el INRENA, exacerbándose se esta forma, los ánimos de los extractores forestales, produciéndose protestas, como la del año 2000, en el que fue tomada la Oficina Local del INRENA sede Pilcopata. Esta medida de fuerza sólo fue dejada de lado, gracias a la intervención de representantes del Poder Ejecutivo.

Todo se generó por la implementación drástica de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308, poniendo de manifiesto el conflicto, para rápidamente ascender y tener como medidas de “destrucción”, la toma del local de dicha institución reguladora.

En dicho momento se identifican a los siguientes actores del conflicto, y nos basamos en la primera clasificación establecida anteriormente que considera a los internos y los externos.

Los actores “primarios”²², a los que Raez denomina “públicos” (2001: 10-13), vienen a ser los *extractores*: legales e informales, lomeadores, motosierristas, jaladores, trocheros, comerciantes y agricultores. Por la otra facción, identificamos al INRENA, encargada de hacer cumplir la ley forestal. Son centrales en la dinámica del conflicto.

Los actores “secundarios” están representados, para la facción extractores, la población en general que les brindó su apoyo. Mientras por el otro lado, se encuentran a instituciones como PROMANU. Dentro de los “interesados” o “intervinientes”, destacan la Municipalidad Distrital de Kosñipata y las empresas de turismo que operan en la zona, a quienes se les ha cerrado el paso por la carretera “tomada” y tienen interés en que dichos problemas se solucionen.

Actualmente, los actores siguen siendo los mismos, entre los que se suscitan diferentes tipos de conflictos como los suscitados entre los mismos extractores legales, entre extractores legales e ilegales, o de éstos frente a la institución reguladora u otras particulares o frente a comunidades nativas, allí radica la importancia de tener presente la dinámica del conflicto.

Identificamos como causas generadoras de los conflictos a:

- El carácter restrictivo de la ley y la falta de comunicación con la población para el establecimiento y aplicación de ésta.
- La aplicación de la reglamentación de la norma, donde se establecen requisitos que no pueden ser cubiertos por la mayoría de la población extractora local. Además de las acciones de las autoridades competentes en contra de los extractores, como los comisos de madera.
- El agotamiento del recurso forestal, que genera que se introduzcan en zonas más alejadas, propiedades de particulares o zonas de conservación o protección.
- Las necesidades de la población tienen que cubrirse para lograr su desarrollo pleno. Esto va complementado con la aparente falta de valor de la conservación y utilización racional del recurso forestal que tienen los actores locales.
- La visión del espacio amazónico como espacio económico y no necesariamente como espacio de vida, propio de personas que no corresponden a

22 Esta clasificación la establece Ormachea, donde se reconocen como primarios a “quienes perciben sus objetivos como incompatibles e interactúan directamente en la búsqueda de sus objetivos precisamente. Los actores secundarios, son aquellas partes que tienen un interés directo en el resultado de la disputa pero que no se sienten directamente involucrados; son quienes proveen de apoyo moral o económico al menos a una de las partes primarias, es decir, son aliados estratégicos. Los actores interesados, son aquellas entidades o personas interesadas en la resolución exitosa de un conflicto” (2001:165-167).

este espacio, sino de migrantes que recrean en él sus formas de ser. Y es que la degradación del ambiente, del recurso forestal y la visión del espacio de utilidad, están ligados “a la pobreza, a la distribución desigual de la tierra en las áreas de procedencia de los migrantes, a la baja productividad de la agricultura, al crecimiento acelerado de la población y a una serie de políticas inadecuadas” (wri 1991, citado en Pichón, 1993: 341), es preponderante entonces, la identidad con el medio, la falta de alternativas para desarrollar en este nuevo ambiente y su responsabilidad frente a él, que está relacionado íntimamente con el sentido de propiedad y los derechos.

- El desconocimiento por parte de la población sobre la ley y reglamentación sobre el recurso forestal.
- La relación tensa entre instituciones y población.
- El incremento de prácticas clandestinas y depredatorias.
- El ineficiente control social y la prevalencia de acciones individuales. No se respetan los límites de propiedades privadas e incluso comunales.

Se presentan entonces, una serie de factores basados en intereses, hechos, necesidades, valores y relaciones, que no están siendo comprendidas por los diferentes actores, y este desconocimiento, produce que se actúe de forma excluyente.

Cabe hacer hincapié, en que esta forma excluyente, llega a su máxima manifestación cuando el conflicto llega a una fase de destrucción, para que en una última instancia y proceso de transformación se disipe, estableciéndose una fase de latencia. Si bien la fase de destrucción, perjudica a los actores, la fase de disipación o latencia es la que perjudica en mayor medida al ambiente y en este caso particular al recurso forestal.

Esto se da porque, en las condiciones de latencia, los representantes del ente regulador, creen en la eficiencia del control que ejercen (el mito del control y regulación eficientes), como también, se tiene presente que, la adecuación de los extractores a la ley es mayor, llegándose a creer que no se vive tala ilegal. Situación que no es cierta y por el contrario generalmente los procesos de tala ilegal son mayores, porque al ser las condiciones y normas demasiado restrictivas, no son respetadas, conduciendo esta mano de obra a la ilegalidad extractiva. Haciendo referencia a la gobernancia, se observa que en un nivel local, muchas veces se deja sin efecto el nivel nacional e incluso internacional, porque los mecanismos de control ejercidos no son eficientes.

En consecuencia, el recurso forestal se está acabando, a pesar de esto no se nota la conciencia ambiental, por el contrario, muchos extractores se adentran a mayores distancias en el bosque, mostrando que, la escasez y lejanía del recurso forestal, no son obstáculos para la tala ilegal, que va en desmedro de los bosques de protección, las áreas protegidas, en este caso particular del Parque Nacional del Manu y del propio ambiente.

5. A manera de conclusiones

La selva alta peruana es un espacio físico social, construido a través del tiempo e interacción socio cultural. Provista de gran biodiversidad, representa la zona de transición al llano amazónico, siendo por tanto una zona de “amortiguamiento”. El potencial forestal con el que cuenta, sigue llamando la atención del vasto grupo social de extractores, representando por lo tanto un reto y oportunidad, pues supone un recurso de fácil acceso y explotación para el poblador, que le permite obtener un ingreso inmediato. Pero además, por todos los servicios ambientales que brinda, constituye parte estratégica y fundamental en la extracción racional de los recursos, y es un elemento más, que bien utilizado contribuirá al desarrollo sostenible de las poblaciones asentadas en la zona.

Existen varios factores por los que el recurso forestal no tiene un uso racional. Como referencia se tiene, que antes de la aplicación de la nueva ley forestal, el acceso a éste era prácticamente libre, existía además (aunque sigue existiendo) una debilidad institucional, también falta de conciencia ambiental de los extractores y el desmedido interés por obtener beneficios económicos, todo esto produjo que el recurso se vaya agotando, con las subsecuentes consecuencias ambientales y sociales, además de ir en desmedro de las áreas protegidas y en este caso particular del Parque Nacional del Manu, límites que no son obstáculo para el desmedido afán extractor.

La implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308, es un elemento restrictivo para el acceso al recurso forestal, el que se considera que no ha sido participativo y no tomó en cuenta la realidad económica y sociocultural de la selva alta, y especialmente de zonas como la de Pilcopata, produciendo conflictos entre la institución reguladora y la población extractora al aplicarse la norma.

Por encima de todo, priman las necesidades de la población, se rompe entonces cualquier intención de aplicación restrictiva de la ley, pesando un nivel local por encima del nacional e internacional. Pero los conflictos, tienen además causas estructurales, donde se notan valores, aspectos económicos, sociales y culturales, que dan soporte al cuerpo de las percepciones que se manifiestan no sólo en el discurso, sino también en el accionar de los actores sociales.

Respecto a la degradación del recurso forestal, podemos también en forma general mencionar dos factores complementarios, el primero gira en torno a la visión utilitaria y económica que tiene el extractor forestal o el colono del espacio amazónico. Y el segundo, son las políticas implementadas por el Estado, donde se fomentó la colonización del espacio amazónico, de igual manera con visión económica y extractiva de recursos, para solucionar la escasez de tierras en la sierra, el crecimiento poblacional y el incremento de la pobreza.

Bibliografía

- Alca, Jamil
1997 "La Cultura en el Perú", Seminario Internacional del SUM (Canadá), Cusco.
- Aron, Raymond
1985 "Paz y guerra entre naciones". Alianza.
- Barrantes, Roxana y Travelli, Carolina
1996 "Bosques de madera: Análisis económico del caso peruano". Instituto de Estudios Peruanos IEP – Consorcio de Investigación Científica. 1ª edición. Lima. P. 11-103.
- Barklay, Frederica
1993 "La evolución del espacio rural en la Amazonía nororiental del Perú" En Amazonía: Escenarios y Conflictos. CEDIME. Ediciones ABYA-YALA 1ª Edición. Quito, Ecuador. P. 95-144.
- Buckles, Daniel (Editor)
1999 "Cultivar la Paz. Conflicto y colaboración en el manejo de los recursos naturales". Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. Ottawa, Canadá.
- Bedoya, Eduardo
1991 Las causas de la deforestación en la amazonía peruana: un problema estructural". Centro de Investigación y Promoción Amazónica CIPA. Documento 12. Lima, Perú. P. 1-130.
- Brack Egg, Antonio
2002 "Amazonía: desarrollo y sostenibilidad", Lima, Perú. P. 3-116.
- Caillaux, Jorge; Chirinos, Carlos
2003 "El caso Tahuamanu. Cuando el bosque toca madera". Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lima, Perú. P. 7-39.
- Carreño, Elías
1999 "Legislación ambiental: En Resumen". Grupo Temático Medio Ambiente, Asociación INCA. Perú.
- Cevallos, R.
2001 "INRENA y madereros discrepan sobre Ley forestal y de fauna" Comisión de Agricultura del Congreso. En La República. Lima. P 6-91.
- Chase Smith, Richard
1983 "Las comunidades nativas y el mito del gran vacío amazónico" Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Lima, Perú. P. 9-107.
- Curle, Adam
1977 "Conflictividad y pacificación". Herder. P. 15.

Dahrendorf, Ralf

1968 "Hacia la Teoría del Conflicto Social" En Los cambios sociales. Fuentes, tipos y consecuencias. Fondo de Cultura Económica. 1ª Edición en español. México. P. 97-107.

Dahl, Robert

1991 "Los dilemas del pluralismo democrático". Alianza Editorial. México. P. 36-60.

Dourojeanni, Marc

1990 Amazonía ¿Qué hacer?" Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. Edición auspiciada por el Proyecto de Capacitación Extensión y Divulgación Forestal – Pucallpa COTESU-INTERCOOPERATION-DGFF-V.A.V. Perú. P. 444.

Duroselle, J.B.

1982 "Historia Universal Contemporánea". Edicions Universitaries Catalanes. España.

Foro Ecológico del Perú

1997 "Aportes para una Ley de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre promotora de la Inversión Privada, la gestión pública eficiente y la participación ciudadana". Lima.

Foy Valencia, Pierre (Editor)

1997 "Derecho y Ambiente. Nuevas Aproximaciones y Estimaciones". Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. 1ª Edición. Lima, Perú.

Freund, Julien

1982 "Sociologie du conflit". P.U.F. P. 65.

Florez, Salvador

2001 "Agricultura y Manejo de Bosques en la Amazonía Peruana". En El Manu y Otras Experiencias de Investigación y Manejo de Bosques Tropicales. Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO. Perú. P. 91-99.

Galtung, Johan

1982 "Conflict, Peace and War". Cursos Internacionales de Benidorm. Universidad de Alicante.

García, Joaquín

1993 "Proceso de construcción de la identidad de las poblaciones en la Amazonía Peruana". En Amazonía: Escenarios y Conflictos. CEDIME-FLACSO sede Ecuador-Comisión V Centenario-ILDIS-ABYA YALA. Primera Edición. Quito Ecuador. P. 519-544.

Gonzales de Olarte, Efraín

1992 "La dimensión ambiental de las políticas económicas". SEPIA Cuadernos de Trabajo N° 2. Lima, Perú. P. 7-44.

Hidalgo, Jessica

- 2000 "La Nueva Ley Forestal y los Pequeños extractores de madera". En IDEEFE, Revista del Instituto de Defensa Legal N° 132, octubre. Lima Perú. P. 68-70.

Individual Project 8

- 2001 "Governance, human development and natural enviroment". Versión Provisoire-NCCR North-South.

Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

- 1993 "Diagnóstico Sub Cuenca Pilcopata". Dirección de Estudios - Región Inca. Cusco, Perú. P. 3-122.

Martínez Aliet, Joan

- 1998 "Introducción a la Economía Ecológica". Cuadernos de Medio Ambiente. Rubes Editorial S.L. España. P. 91-108.

Orellana, René

- 1993 "Aproximaciones a un Marco Teórico para la comprensión y el manejo de conflictos socioambientales". CERES-FTTP. Bolivia. P. 1-23.

- 1993 "Conflictos ...¿sociales? ¿ambientales? ¿socio-ambientales? ...conflictos y controversias en la definición de conceptos". Separata. Discusión de Curso de Post Grado Manejo y Resolución de Conflictos ambientales. Santa Cruz- Bolivia. P. 1-10.

- 1993 "Derecho Consuetudinario y tratamiento de conflictos. El caso de las disputas de bosques, tierras o aguas entre familias y/o comunidades rurales". En Contenidos del Módulo del Curso Regional de Gestión Ambiental y Manejo de Conflictos Socioambientales. Quito, Ecuador. P. 1-9.

Ormachea, Iván

- 1999 "Resolución de conflictos ambientales: nueva perspectiva para el análisis y solución de conflictos" En Derecho y Ambiente. Nuevas Aproximaciones y Estimaciones. PUCP - Fondo Editorial. 1ª Edición. Lima, Perú. P. 163-178.

Ortiz, Pablo

- 1996 "Apuntes teórico - conceptuales para propuesta metodológica de manejo comunitario de conflictos socioambientales" FAO/FTTP. Serie: Documentos de Trabajo. Quito. P. 3-53.

Ostrom, Elinor

- 1993 "Diseño de instituciones para sistemas de riego autogestionarios" Centro Internacional para la Autogestión, PRESS, San Francisco, California, Estados Unidos.

Pastor, Oscar y Pacheco, Raúl

- 1999 "Planificación Estratégica de Desarrollo para la comunidad nativa Santa Rosa de Huacaria" Tesis para optar el título de Licenciados en Antropología. UNSAAC - Cusco, Perú.

Pichón, Francisco

1993 "Colonización y deforestación en la frontera agrícola de la región amazónica ecuatoriana". En Amazonía: Escenarios y Conflictos. CEDIME. Ediciones ABYA-YALA 1ª Edición. Quito, Ecuador. P. 337-368.

Raez, Ernesto

2001 "Ecología, Política y Ley Forestal en el Perú: Balance y perspectivas". FORO ECOLÓGICO DEL PERÚ. Lima. P. 3-47.

Renard, Cacevitz y varios

s/f "Al este de los andes. Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII". Tomo I. Coedición ABYA YALA, Instituto Francés de Estudios Andinos IFEA. Primera edición en español. Lima, Perú - Quito, Ecuador. P. 115-147.

Rosental - IUDIN

1973 "Diccionario Filosófico". Ediciones Universo. Argentina.

Sachs, Wolfgang (Editor)

1996 "Diccionario del Desarrollo. Una Guía del Conocimiento como Poder". Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas PRATEC. Primera edición en castellano. Título original: The Develepment Dictionary, A Guide to Know ledge as Power. P. 399.

Santos Granero, Fernando

1993 "Burguesías locales y espacios regionales en la Amazonía norperuana: los casos de Loreto y Ucayali" En Amazonía: Escenarios y Conflictos. CEDIME. Ediciones ABYA-YALA 1ª Edición. Quito, Ecuador. P. 57-91.

Silva Santiesteban, Fernando

1993 "Antropología conceptos y nociones generales". Fondo de Cultura Económica. Perú 4ª edición actualizada. Colección Biblioteca Universidad de Lima, Lima, Perú. P. 234-235.

Smart, Louise y Maye, Bernard

1988 "Negociación y Mediación". Presentación CDR ASOCIADOS, para la Conferencia Anual COPRED. P. 2-18.

Sociedad peruana de Derecho Ambiental

2002 "Compendio de Legislación de Áreas Naturales Protegidas". SPDA, INRENA, John D. And Catherine T. MacArthur Foundation y la Embajada Real de los Países Bajos. Lima, Perú.

Soria, Carlos

1999 "Aportes para el Análisis de la Normatividad para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía en la Década de Fujimori". En Desarrollo Sostenible y Descentralizado de la Amazonía Peruana. I Encuentro Macro-regional de Organizaciones Indígenas y Campesinas. Coor-

- dinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú, FORO ECOLÓGICO, Red Perú de Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local y USAID. Lima, Perú. P. 22.
- 1999 “¿Adios a los bosques amazónicos? La Ecología Política de implementar la nueva Ley Forestal en el Perú”. Presentado en la reunión de la Latin American Stdudies Association – LASA. Dallas, Texas. Marzo 27-28. P. 16.
- Ury, William; Brett, Jeanne y Golberg, Sepsen
1993 “Tres aproximaciones a la resolución de conflictos. Intereses, derechos y poder”. De Getting Disputes Resolved: designing systems to cut the costs of conflict. MA:Pon book. (Separata P. 1-12).
- Wallenstein, Peter
1988 “Un Marco Teórico para la Resolución de Conflictos”. Tomado del libro de Peace Research: Achievementsand Challenges, traducido por Luis Alberto Padilla. Uppsala. P. 82-100.

Normas legales:

Constitución Política del Perú, 1993.

Ley Forestal

2000 “Ley forestal y de Fauna silvestre” www.asesor.com.pe/teleley/190283.htm, Perú.

Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

1999 Decreto Supremo N° 014-2001-AG. Normas Legales del Diario El Peruano. Perú.

Decreto Supremo N° 0644-73-AG

Establece el Parque Nacional del Manu en los Departamentos de Madre de Dios y Cusco.

Decreto Supremo N° 045-2002-AG

Amplían el Parque Nacional del Manu.

Panel de debate y discusión

Parte II

Moderador:

*Lic. Miguel Angel Crespo, Director PROBIOMA
Santa Cruz-Bolivia*

Franz Guzmán

Director del Parque Nacional Sajama

Un tema común que sale en este seminario, son los conflictos de relacionamiento con las poblaciones originarias indígenas de todos nuestros países, como es el caso del Perú, Chile, Costa Rica y otros. Todo esto proviene de una desconfianza ancestral de los grupos originarios y las comunidades campesinas con relación al Estado, y esto obviamente surge cuando se crean las áreas protegidas, sin embargo en algunos casos existen espacios de discusión al interior de las áreas protegidas como son las asambleas comunales donde se definen la suerte de las actividades y allá se ven los intereses de la comunidad respecto al área protegida. Asimismo se han creado otros espacios de discusión con los actores locales como son los comités de gestión, por lo tanto en algunos lugares como el Tunari probablemente los comunarios no estén de acuerdo con el área protegida porque ven riesgos en su economía y la propiedad de sus tierras, pero hay otras áreas donde han superado este problema y más bien ya están avanzando en actividades que benefician a las comunidades como es el caso del Sajama. Por lo tanto no podemos concluir indicando que no queremos áreas protegidas en Bolivia.

Creo que es necesario hacer un análisis de todos los casos y principalmente de la reacción de los actores locales respecto a sus propias áreas, allá podemos encontrar elementos de confluencia que en lo sucesivo pueden ir resolviendo los problemas. Considero por lo tanto, que es muy importante la dinámica de la participación local a través de sus propias formas de discusión y toma de decisiones, ya sean estos eventos comunales, eventos intercomunales, eventos del comité de gestión, eventos a nivel municipal, etc. De este seminario rescato

dos aspectos: por una parte que los conflictos con las comunidades no solo esta ocurriendo en Bolivia, sino también en muchos países de Latinoamérica, y por otra, que estamos en la perspectiva de consolidar la visión de tener áreas protegidas con gente. Este último aspecto sin embargo, siempre traerá el riesgo de tener conflictos, porque hay gente. Por lo tanto una conclusión fundamental, es que se debe ir trabajando mucho mejor con las comunidades y que lleguen los beneficios a las mismas.

Carmen Miranda

Representante de la UICN-Bolivia

Tengo dos preguntas: uno para Jamil y otra para Jaime. Jamil hiciste referencia a que el parque Manú o más bien la reserva de la biosfera de Manú era de papel, me gustaría saber por qué aseveras eso? Ya que en reiteradas oportunidades escuche los informes del trabajo que se esta haciendo por parte de la administración gubernamental como por algunas comunidades y gente local involucrada. Mi pregunta para Jaime es respecto a que tu mostraste que el sistema Nacional en Chile tiene 17 áreas protegidas, y en todas estas hay presencia indígena o se refiere a la presencia humana en general. Por otro lado, sabemos que la política de gestión de las áreas protegidas en Chile ha sido una política muy vertical, donde incluso han echado a las poblaciones humanas de las áreas protegidas. Quiero saber si es que esto ha cambiado, o se continúa manteniéndose en el sistema Chileno?

Jamil Alca

Investigador, Perú

Sobre la reserva de biosfera de Manu hice una explicación que esta fue una declaración internacional por la UNESCO, y que no necesariamente requiere de declaraciones mediante leyes o mandatos nacionales, pero la gestión requiere de un fuerte apoyo nacional. En realidad la gestión no está siendo aún operativa con ningún tipo de apoyo, por eso digo que es de papel. Hace dos semanas en Cuzco hubo una reunión descentralizada para analizar el anteproyecto de reforma del código del medio ambiente establecida en el año 1990. Precisamente este código tiene un vacío respecto de las áreas naturales protegidas porque no reconoce a las reservas de la biosfera, lo que no le faculta la capacidad de gestión del Estado Peruano sobre este tipo de área natural protegida. Entonces lo que está reconocido y puede gestionar el gobierno es las categorías de áreas naturales protegidas reconocidas en el código de medio ambiente, como son los parques nacionales hasta los cotos de casa, pero no así la reserva de biosfera. Por ello el

caso de Manú no es operativa, aunque la UNESCO mediante una organización que se llama PROMANU seguramente están haciendo algunos trabajos que tu te enteraste. Aunque esta organización tiene con el gobierno peruano un acuerdo de co-gestión de la reserva de biosfera de Manu, pero en la realidad no es aún operativa más esta organización es causante de muchos conflictos, por eso dije que es una reserva de papel.

Jaime Soto

FUNDECAM, Chile

Lo que mostramos son estimaciones de la población indígena colindante o la que se encuentra en el interior de algunos parques. Pero la que se encuentra en el interior de acuerdo con el sistema son considerados ilegales, puesto que estas comunidades según la ley están ocupando espacios territoriales fiscales. Hace algunas semanas nos entrevistamos con el director y funcionarios de la región de la Araucanía y consultamos sobre la situación de las poblaciones indígenas en áreas naturales protegidas, la respuesta que recibimos era obvia, como son tierras declaradas fiscales cualquier ocupación es ilegal e inmediatamente se recurre a los tribunales de justicia. No existe ninguna consideración de una situación cultural o política, más bien las demandas por ejemplo del pueblo se están llevando hasta los tribunales de justicia. En el año 2003 incluso se aplicó la ley antiterrorista, que ha servido para que muchos dirigentes mapuches sean detenidos, entonces al aplicarse la ley antiterrorista pierden todas las garantías de la reforma procesal penal que está ocurriendo desde hace dos años en Chile. La situación es grave, con eso creo que respondo un poco a tu primera pregunta.

La segunda pregunta en el sentido de que el sistema sigue tan jerárquico y vertical, creo que sí aunque no desconocemos que hay un avance por lo menos en la corporación nacional forestal. En que sentido? en que ya se están ocupando del tema y se vienen realizando una serie de seminarios con respecto a la cosmovisión indígena. Otro avance es en relación a crear comités de gestión a nivel local, a nivel regional, pero eso todavía está a nivel de reflexión interna en la corporación nacional forestal. Por eso planteamos que existe todavía un largo camino por recorrer, primero que nada hay que romper la desconfianza mutua que hay en las poblaciones indígenas y el Estado. En el caso del Estado le cuesta mucho entender de que existe mucha desconfianza de parte de las comunidades. Esta desconfianza de las comunidades es legítima y tiene razones históricas, pero no así la desconfianza que hay de parte del Estado hacia las comunidades. Este es un tema muy difícil de tratar con los funcionarios gubernamentales, porque no pueden tomar conciencia de que la desconfianza de parte de las comunidades es histórica y muy bien fundamentada, y no así de parte del Estado.

Jamil Alca

Investigador, Perú

Como ya se hicieron varias preguntas, me gustaría acotar algo sobre lo que hablo el compañero de la presencia de las comunidades en la gestión de las reservas. En el caso Peruano una de las categorías que reconoce el sistema nacional de áreas protegidas son las reservas comunales en beneficio de determinados grupos étnicos, o sea tenemos un área natural protegida y las comunidades beneficiarias de esa reserva son las comunidades aledañas. Nosotros no utilizamos el término indígena sino llamamos comunidades nativas y poblaciones colonas. En este sentido tenemos una experiencia que se llama la reserva comunal Yaneshia que se creo en la década de los 70, pero no ha tenido los elementos necesarios para una buena cogestión. Desde el año 2000 se han establecido cuatro reservas comunales, una de ellas es la que limita con el Parque Nacional del Manu que se llama la reserva comunal Amaraqueiri en beneficio de las poblaciones Jarambu, Machienga y Sipiros. Esta experiencia de co-manejo sin embargo, creemos que es una desventaja para el conocimiento que tienen las poblaciones locales, puesto que co-manejo implica que el Estado peruano va a establecer un director nacional que sea profesional. Este es el requisito para ser director, aunque hay la posibilidad de que este director sea un profesional nativo indígena y que existe. Este profesional es un ingeniero forestal de origen Jarambu, no obstante hay duda de que aplique los conocimientos locales porque ya ha tenido una formación con conocimientos externos y que obedecen a sistemas administrativos burocráticos y verticales.

Estas son algunas experiencias de reservas comunales en beneficio de grupos étnicos en el caso peruano. Sin embargo, para poder establecer una autogestión y una gestión adecuada de las áreas naturales protegidas y una gestión ambiental en general, se requiere de hacer muchos ajustes y cambios. Noto en el discurso de ustedes que la situación es parecida en sus países. Como decían algunos compañeros, el discurso es bonito pero no es del todo real. Talvez vale la pena hacer una pequeña autocritica, que es la invisibilidad de los vicios del sistema implementado, es decir que hay que tener cuidado cuando estemos del lado del Estado porque posiblemente no notemos nuestros propios errores.

Por otra parte, la participación ciudadana parece ser un cliché como el caso del género, para justificar los proyectos y los financiamientos, incluyendo estos conceptos y variables que les gusta escuchar a las financieras se justifican muchos proyectos, entonces hay que tener cuidado en este sentido, en realidad las poblaciones nativas en el caso peruano son aprovechados por los negociadores estatales. La participación efectiva no esta simplemente en plantear, sino que escuchen y se haga efectivo las demandas de las comunidades nativas. Entonces el problema no es que tengan voz, sino que no les escuchen. Por otro lado, no se puede establecer

una participación ciudadana con personas que no quieren dialogar, entonces creo que hay considerar esas decisiones.

Elvira Serrano

Investigadora, AGRUCO

Mi pregunta va para Silvia, respecto a que si en Costa Rica se está trabajando sobre el tema de los servicios ambientales y también sobre el bio-comercio. ¿Cómo está este proceso?.

Silvia Rodríguez

Universidad Nacional de Costa Rica

Una respuesta a tu pregunta daría para una charla de media hora o más, pero tratare de responder algo muy corto. A partir del Convenio sobre Diversidad Biológica aprobada en los años 90 empezó muy fuertemente el tema del bio-comercio, ante todo el bio-comercio de genes. Recuerdo que cuando definían biodiversidad hacían referencia a las especies pero también a los genes, y ahora estos genes son materia prima de la biotecnología. Esta era una de las razones por la cual Estados Unidos ya en los años 70 quería que se creen parques naturales, porque la biotecnología estaba empezando a despegar. En 1993 en Costa Rica se realizó un famoso convenio entre el instituto nacional de biodiversidad y la empresa Merck que es privada, y así esta empresa obtuvo muestras de la biodiversidad de las áreas públicas de Costa Rica. Esta situación no era de conocimiento público, solamente decían que era un ingreso eventual. Podría contarles mucho sobre este tema porque he seguido de cerca. Después de 12 años de ese convenio lo que puedo concluir es que no ha llegado ni una moneda a las comunidades, aunque los que recibieron algo fueron las universidades y un área de conservación que es una isla donde no hay población, o sea las comunidades no se beneficiaron con nada. Este convenio tiene toda la idea del bio-comercio y sigue ingresando muy fuertemente, por ahí en mi ponencia hago referencia a que en los Andes también ya empezó. La explicación de los que practican el bio-comercio es que ellos solo obtienen unas muestras para investigar, pero nosotros sabemos que es suficiente esta muestra para que hagan en el caso de la bioquímica medicamentos y por el lado de la ingeniería genética hagan transgénicos. Además dicen que es una manera no invasiva. Pero en algunos casos cuando una molécula es difícil sintetizar necesitan toneladas de materia prima, esto es lo más peligroso y cuestionable.

Aquí en los Andes, una organización de las Naciones Unidas se ha embarcado en estos proyectos, y esto es toda una visión de las áreas protegidas, verdad?

que están abiertas para los investigadores. Entonces a los países en desarrollo les están pidiendo que hagan normas para que los investigadores entren con garantías a las áreas protegidas. Aquí hay otra preocupación para las comunidades y para que expresen en que condiciones los investigadores puede llegar a sacar productos de los parques, y también como justificar que los biólogos que hacen etno-botánica tengan un código de ética para que los resultados de sus investigaciones no sean utilizados sin consentimiento previo de las comunidades. Bueno todo esto de las normas de acceso ya la pasamos en Costa Rica, y fue un proceso tremendamente complicado. Por ejemplo las comunidades indígenas pidieron que el capítulo de conocimiento tradicional quedara pendiente, porque ellos todavía no han logrado pensar en cómo hacer un sistema de protección del conocimiento indígena o del conocimiento tradicional. Aquí hubo un pequeño problema, como este tipo de conocimientos se retroalimentan con el intercambio; entonces cuando se protege al estilo occidental pierde su riqueza. Un indígena poniendo un ejemplo decía: miren cuando uno quiere que haya más luz en una aldea indígena, lo que hacemos es poner la candela en un lugar para que todos tengan un poquito más de luz. Así también son nuestros conocimientos, para que crezca lo tenemos que compartir.

Pero los sistemas occidentales que vienen acompañados de propiedad intelectual donde se aísla el conocimiento y se monopoliza, quiebran todo el sistema de conocimiento comunitario. Entonces vean que la vertiente del bio-comercio es de muchísima discusión. Muchos investigadores están incluso en desacuerdo con las normas de acceso, porque no quieren tener ningún control mucho menos de las comunidades. Pero lo más lamentable es que todo esto va a quedar en la basura con el tratado de libre comercio, porque en este tratado de libre comercio esto será un servicio ambiental y estará legalizado, introducido como parte del libre comercio. En este caso cualquier investigador que venga de afuera tendrá el mismo derecho que un investigador boliviano. En Costa Rica se ha desarrollado varios servicios ambientales como del agua, del oxígeno, y en el caso de la biodiversidad será igual y las comunidades seguirán siendo las que ganarán menos.



Panel de discusión y debate Parte II: Experiencias y análisis de las áreas protegidas en Latinoamérica. Panelistas: Jaime Soto (Chile), Jamil Alca (Perú) Silvia Rodríguez (Costa Rica)



Participación de dirigentes campesinos durante la discusión y el debate en torno a las experiencias de áreas protegidas en Latinoamericana

Parte III

Marco institucional, estrategias y experiencias de las áreas protegidas en Bolivia

Marco institucional y estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP)

Juan Rene Alcoba¹

1. Introducción

En el presente seminario pretendemos hacer conocer, en primer lugar, el marco institucional y legal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y del Servicio Nacional de Áreas protegidas de Bolivia (SERNAP) y, por otro lado, mostrar algunos avances que se ha tenido en Bolivia en cuanto a la gestión de las áreas protegidas y la participación de las comunidades locales. En el marco institucional haremos referencia sobre todo a las políticas y a los lineamientos estratégicos, además de comentar sobre algunos avances logrados con la implementación de las mismas.

2. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia incluye al conjunto de Áreas Protegidas de interés nacional, con diversas categorías de manejo y niveles de administración que funcionan enlazadas bajo un Régimen Especial común que contempla un marco conceptual, político, institucional y normativo específico. Dentro el SNAP se reconocen 5 categorías, que son: Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, Reservas Naturales, Áreas Naturales de Manejo Integrado y Reservas de Inmovilización.

En ese marco, las áreas protegidas en Bolivia están concebidas bajo una lógica de sistema, es decir se tiene políticas, normas e instrumentos de gestión para todas las áreas protegidas y niveles de administración. Las áreas protegidas de interés para Bolivia y que componen actualmente el SNAP son los siguientes:

1 Técnico representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

- 1) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Amboró
- 2) Parque Nacional Noel Kempff Mercado
- 3) Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni
- 4) Area Natural de Manejo Integrado Apolobamba
- 5) Parque Nacional Carrasco
- 6) Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa
- 7) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata
- 8) Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro - Sécore
- 9) Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilon Lajas
- 10) Parque Nacional Sajama
- 11) Parque Nacional Torotoro
- 12) Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
- 13) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi
- 14) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco
- 15) Reserva Nacional Amazónica del Manuripi
- 16) Area Natural de Manejo Integrado San Matías
- 17) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Otuquis
- 18) Reserva Biológica Cordillera de Sama
- 19) Parque Nacional Tunari
- 20) Área Natural de Manejo Integrado El Palmar
- 21) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Agüiaragüe

Estas 21 áreas protegidas que actualmente componen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) fueron priorizadas al momento de la creación del SNAP (1992) de manera que representen a los elementos de biodiversidad más significativos de Bolivia; en conjunto estas 21 áreas protegidas cubren aproximadamente el 14% del total de la superficie de Bolivia. En los papeles sin embargo, se hace referencia a la existencia de alrededor de 56 áreas protegidas desde que se creó la primera área protegida en 1939 (Parque Nacional Sajama).

La concepción y forma de manejo de las áreas protegidas en Bolivia, desde el inicio reconoce la existencia de poblaciones locales y comunidades indígenas en los territorios que hoy son considerados áreas protegidas; considerando que las comunidades indígenas han desarrollado muchos conocimientos y prácticas de uso y de manejo amigable de la biodiversidad. A raíz del reconocimiento de esta realidad el SNAP plantea el concepto de “parques con gente”.

En la gestión de las áreas protegidas la participación social es un elemento vital para garantizar su sostenibilidad; el desafío actual es mostrar que la conservación de la biodiversidad puede generar beneficios económicos para los habitantes locales; mostrando de esta manera que las áreas protegidas tienen un rol socioeconómico importante a nivel local y regional.

En este marco, la visión de la gestión del SNAP está planteada de siguiente manera:

El SNAP asegura la conservación efectiva de una parte significativa del patrimonio natural y cultural de la nación generando al mismo tiempo procesos para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones vinculadas a las áreas protegidas, aportando al desarrollo social y económico regional y nacional de forma integrada con el ámbito político, normativo, administrativo y sociocultural en el marco del Desarrollo Sostenible.

3. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP)

El decreto de creación del SERNAP (DS N° 25158 del 04 Sep. de 1998) le otorga la misión institucional de: coordinar el funcionamiento del SNAP, garantizando la gestión integral de las áreas protegidas de interés nacional a efectos de conservar la diversidad biológica. El SERNAP tiene como objetivo estratégico institucional contribuir a la conservación de la diversidad biológica del país a través del establecimiento, organización y consolidación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Las características institucionales del SERNAP son:

- Entidad de estructura propia desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
- Dependencia funcional (cumplimiento de políticas y normas) del Vice-ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal.
- Independencia de gestión técnica y administrativa.
- Competencia del ámbito nacional.

El SERNAP tiene dos niveles de gestión, que son: A nivel del sistema nacional y a nivel de cada área protegida o distrito.

4. Marco legal del SNAP y el SERNAP

La construcción de políticas para el SNAP se concibe a partir de las principales reformas del Estado que se ha iniciado en la década del 1990.

La gestión de las áreas protegidas se respalda en términos globales, se apoya en la Ley 1580 que ratifica para Bolivia la firma mundial del Convenio de Diversidad Biológica en la Cumbre de Río en 1992. Asimismo, está respaldada por el acuerdo regional en el marco de la Comunidad Andina (1993).

Legalmente en Bolivia, la gestión de las áreas protegidas se respalda en la Ley de Medio Ambiente (Ley N° 1333, 1992) que generó un marco propicio definiendo el concepto, los propósitos y funciones de las áreas protegidas y el sistema que ellas conforman. Asimismo, aún esta en vigencia la Ley de Vida Silvestre, Parques

Nacionales, Caza y Pesca (DL N° 12301, 1975) que respalda también la gestión de las áreas protegidas.

Por otra parte, Bolivia cuenta con un Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. 24791 de 1997) que norma el funcionamiento del sistema. Pese a que este reglamento no se articula expresamente con los procesos políticos y sociales impulsados por las últimas reformas del Estado, abre el espacio para los mecanismos de participación por medio de los Comités de Gestión, los que son definidos como *“la instancia de participación en el ámbito de cada área protegida que incorpora en la gestión de la misma a los pueblos indígenas, comunidades, municipios, prefecturas, otras entidades públicas, entidades privadas y organizaciones sociales involucradas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Medio Ambiente”*

El marco conceptual y de acción general para la gestión de la biodiversidad en el país haciendo énfasis en el desarrollo del potencial económico de la diversidad biológica, fue propuesto en el 2001 por la “Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad” (ENCB) cuya formulación fue generada a través de un amplio proceso participativo a cargo de la Dirección General de Biodiversidad.

Administrativa e institucionalmente el SERNAP está respaldada por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (1997) y sus respectivos reglamentos.

A nivel local, tanto el SNAP como el SERNAP está respaldada por las normas de creación de las áreas protegidas que son establecidas legalmente en algunos casos por Decretos Supremos del Poder Ejecutivo y en otros a través de Leyes sancionadas por el Poder Legislativo como es el caso del Parque Nacional Tunari que esta respaldada por la Ley N° 1262. Asimismo, se disponen de instrumentos de manejo como los planes de manejo, zonificación, programas y normas.

En otras leyes que respaldan la gestión de las áreas protegidas se debe mencionar a la Ley de Participación Popular que reconoce y promueve la participación de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales; la Ley de Municipios que otorga a los Gobiernos Municipales la responsabilidad de promover el desarrollo humano sostenible dentro el ámbito de su jurisdicción territorial; la Ley INRA que reconoce el derecho propietario de la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas; y la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) que establece entre sus temas transversales la protección y conservación del medio ambiente.

5. Principios que rigen la gestión del SNAP

a. Respeto y valoración de la diversidad cultural y natural

En Bolivia, existe una gran diversidad cultural expresada en más de 30 grupos étnicos y pueblos indígenas que habitan en la mayoría de las áreas protegidas. Estas culturas han desarrollado y transmitido de generación en generación

valiosos conocimientos sobre el manejo, uso y conservación de la biodiversidad, además han desarrollado formas de relación con la biodiversidad y los recursos naturales en un marco de respeto y convivencia armónica.

Garantizar la conservación del patrimonio natural en el marco del respeto de las identidades culturales es un compromiso ético que busca no solo valorizar, proteger y restaurar la biodiversidad, sino revalorizar los conocimientos y prácticas de manejo de la biodiversidad y los recursos naturales puesto que esta riqueza intangible es fundamental en los procesos de gestión de las áreas protegidas.

b. Reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las poblaciones locales

El reconocimiento de los derechos y acceso a la tierra y al territorio como espacio social, económico y cultural principalmente para los pueblos y comunidades indígenas son elementos esenciales y cruciales para la gestión sostenible de las áreas protegidas, lo cual también está respaldada por la Constitución Política del Estado que en su artículo 171 párrafo II indica: *“se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los RN, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones”*

En ese sentido, la gestión para el uso y aprovechamiento sostenible de los RN renovables en las áreas protegidas debe basarse en el reconocimiento de los sistemas de producción –tradicionales o no- establecidos por los pobladores locales y en las costumbres y normas consuetudinarias relacionadas con este uso, compatibilizando en el marco de los objetivos de conservación de las áreas protegidas.

c. Integralidad de la conservación y del desarrollo

El establecimiento y manejo de un SNAP debe formar parte de la agenda política nacional y se constituye como una de las políticas prioritarias del Estado, estableciendo una relación permanente con los ámbitos económico, social, político y ambiental del país; desarrollando una coordinación y cooperación entre los diferentes sectores económicos y sociales, en los diferentes niveles de organización administrativa del Estado (nacional, departamental y municipal), respetando las diferentes formas de organización territorial y social (tradicional o no tradicional) y conjuncionando enfoques metodológicos de trabajos y tecnologías interdisciplinarias e interculturales.

d. Participación social con equidad

La participación social con equidad, se refiere a la generación o mejora de las condiciones para la participación de los actores locales relevantes para la conservación

y el desarrollo de las áreas protegidas con igualdad de oportunidades, sin discriminación y con respeto a la diversidad étnica y cultural, así como de género y grupos generacionales en los procesos de formulación de los objetivos, líneas de acción, orientaciones estratégicas y prioridades en la gestión integral de las áreas protegidas.

e. Distribución justa de beneficios

La distribución de beneficios económicos destinados a la población tanto por concepto de ingresos que generan las áreas protegidas, por el aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad y el ecoturismo debe orientarse principalmente al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales. Debe favorecer en términos generales a aquellas comunidades y familias que mantienen o asumen las modalidades de producción sostenible en las áreas protegidas.

f. Subsidiariedad

El principio de subsidiariedad implica el fortalecer niveles descentralizados o desconcentrados para que estos asuman responsabilidades de gestión con relación a las áreas protegidas bajo su competencia; tal es el caso de las Prefecturas con las áreas protegidas de interés departamental y los municipios con las áreas protegidas de interés municipal. De igual manera se deberá respetar, normar y fortalecer el rol del sector privado en la conservación a través de la conformación y manejo de las áreas protegidas privadas. Estos aspectos implican la transferencia de funciones y uso de recursos ya establecidos para este fin en las instancias desconcentradas y, al mismo tiempo, las bases instrumentales y capacidades institucionales y técnicas respectivas.

En el caso de las áreas protegidas de carácter nacional el principio de subsidiariedad abarca el fortalecimiento de las organizaciones de base para mejorar su participación en la gestión de las áreas protegidas y lograr su compromiso y apoyo a la gestión y sostenibilidad del sistema respaldado por las organizaciones y comunidades (TCOs, Ayllus, Markas, Capitanías y otras) que habitan dentro de las áreas y en sus zonas de influencia.

6. Políticas y lineamientos estratégicos del SNAP

1) Conservar la diversidad biológica y cultural en las áreas protegidas

La conservación de los RN, culturales, ecosistemas, paisajes, especies, recursos genéticos dependen del establecimiento y la consolidación de unidades de conservación adecuadas para mantener la viabilidad de los procesos biológicos y evolutivos.

Los lineamientos estratégicos para esta política son las siguientes:

- Aplicación de criterios y mecanismos en el marco de un plan maestro del SNAP, para la adecuación permanente del número, extensión, límites y categorías de las APs de importancia nacional.
- Desarrollar criterios y directrices para la creación, manejo y conservación de las APs departamentales, municipales y privadas.
- Implementación de una estrategia que permita mantener la viabilidad de los procesos ecológicos y evolutivos, evitar o revertir la fragmentación de los habitats.
- Implementación de sistemas de vigilancia y control de la biodiversidad en las APs basado en personal capacitado y con la cooperación activa de las comunidades locales.
- Orientación conceptual y metodológica y gestión de apoyo financiero y técnico para la implementación de programas de manejo y monitoreo de la biodiversidad en cada una de las APs.
- Desarrollo de las capacidades técnicas para orientar y dar seguimiento al establecimiento de capacidad de carga de ecosistemas, estudios de impacto ambiental y medidas de control y mitigación de impactos.
- Fortalecimiento de la promoción, difusión y educación ambiental en el ámbito local y nacional.
- Promoción de la investigación dirigida hacia el rescate y la revalorización de los conocimientos tradicionales.
- Fomento de programas de investigación que dan soporte científico a los aspectos de manejo conservacionista de las APs según las prioridades de gestión establecidas.

2) Orientar los valores, actitudes y prácticas personales y colectivas hacia la conservación de las áreas protegidas

Se pretende modificar las actitudes negativas y reforzar actitudes positivas de los ciudadanos respecto a su relación con la naturaleza. Esto se extiende a todos los niveles, tanto a los funcionarios y empleados públicos tomadores de decisiones como a la sociedad en general. Las áreas protegidas constituyen un espacio de trascendental importancia para coadyuvar a la generación de una conciencia colectiva favorable a la conservación del patrimonio natural y cultural del país. Aspecto esencial en el trabajo de *concienciación* es reconocer, comprender y divulgar prácticas conservacionistas de las poblaciones, la forma de uso del espacio y el carácter de sus relaciones económicas.

Los lineamientos estratégicos para esta política son los siguientes:

- Implementación de campañas de difusión y educación ambiental con relación a los valores naturales, culturales, sociales y económicos de la conservación de la biodiversidad y las APs.
- Creación de condiciones para la enseñanza e interpretación ambiental en las APs.
- Incorporación de temas relacionados con las APs en el currículum de la educación formal.
- Desarrollo de programas para la toma de conciencia de los pobladores en municipios y comunidades.
- Establecimiento de mecanismos para la información y sensibilización de los decisores políticos a nivel nacional, regional y local.
- Consolidar el eje transversal de la conservación del medio ambiente en los contenidos curriculares regionalizados de la educación primaria.

3) Consolidación institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

La política general para el fortalecimiento del SERNAP parte de sus funciones y atribuciones normativas, fiscalizadoras, administrativas, coordinadoras y orientadoras en su condición de organismo público rector del sistema. Debe procurar consolidar su independencia de gestión técnica y administrativa y su estatus institucional actual caracterizado por una relativa autonomía.

Los lineamientos estratégicos para esta política son:

- Consolidar e institucionalizar el marco conceptual de políticas y directrices para la constitución, organización y funcionamiento del SNAP a través de una visión estratégica de largo plazo.
- Generación sistemática de conceptos, políticas específicas, estrategias y directrices relativos a la gestión del SNAP y su adecuación dinámica a los cambios del entorno político y social.
- Fortalecer la implementación de los sistemas de administración y control gubernamental en la unidad Central del SERNAP y en cada una de las APs
- Articulación y fortalecimiento de los procesos de planificación, organización, ejecución, control, seguimiento y evaluación, así como en el establecimiento de sistemas de información a nivel de la unidad central y a nivel de las APs.
- La calidad del personal profesional y su continuidad se dirigirán a la implementación de programas integrales de capacitación de los recursos humanos tanto de la unidad central como de las APs.
- Establecimiento de mecanismos para la coordinación operativa entre el SERNAP y los ministerios y viceministerios, superintendencia de RN, Prefecturas, Municipios, TCOs y otras organizaciones del Estado y de la sociedad civil en aspectos relacionados con las APs.

- Para un mejor posicionamiento del SERNAP ante la opinión pública e instituciones del Estado, promover la proyección de un vigoroso perfil institucional a través de los medios de comunicación que resalte su rol como garante de la conservación del patrimonio natural.
- Generación de propuestas normativas en relación al fortalecimiento de las atribuciones del SERNAP y su inserción a los diferentes niveles del marco jurídico nacional.
- Desarrollo o adecuación de instrumentos normativos específicos de diferente jerarquía que consolidan la gestión del SERNAP en las APs. Esto concierne tanto a la elaboración de normas legales con rango de Ley como reglamentos y normas internas del SERNAP.

4) Mejorar la sostenibilidad financiera de la gestión del áreas protegidas

La consolidación de la capacidad institucional del SERNAP implica a su vez, la reducción de la dependencia del financiamiento externo y el establecimiento de mecanismos para la generación de recursos propios orientados a garantizar la suficiencia económica y financiera del SERNAP.

Para ello se definen los siguientes lineamientos estratégicos:

- Desarrollo de mecanismos para la generación y valoración de bienes y servicios que posibiliten la obtención de recursos propios.
- Establecimiento de una política de generación de recursos propios a través de concesiones, cobros por servicios ambientales, por ingreso a las APs, por el uso de RN y otras que se identifiquen en la estrategia financiera del SERNAP.
- Los fondos fiduciarios y otros mecanismos financieros son prioritarios para solventar los gastos recurrentes del SERNAP como contraparte nacional. Además, los recursos del SERNAP se utilizarán como fondos de contrapartida para la generación de recursos complementarios.
- Promover la participación de las Prefecturas, Gobiernos Municipales y otros actores institucionales privados y públicos, buscando el co-financiamiento en la ejecución de programas y proyectos que benefician a las áreas del sistema.

5) Promover la integración de las APs en las políticas económicas y sociales nacionales

La política de conservación de la biodiversidad y de las APs en especial, debe articularse con las políticas de desarrollo económico y social. Mientras en el pasado predominaba un enfoque exclusivamente extractivo orientado a maximizar las ganancias en decremento progresivo de los RN y la biodiversidad, en los últimos años ha surgido el paradigma del desarrollo sostenible que plantea una

mejor integración de la conservación de la biodiversidad y cultural con el aprovechamiento sostenible de los RN como un elemento estratégico para el desarrollo económico y humano. En este sentido, es necesario introducir activamente los aspectos ambientales, sociales y económicos de la gestión de las APs en el ámbito de las decisiones políticas nacionales.

Los lineamientos que se plantean para esta política son los siguientes:

- Proyección sistemática hacia los ámbitos políticos y sectores económicos del país del valor y beneficio económico de la biodiversidad y cultural y especialmente del potencial de los servicios ambientales como la captura de CO₂, regulación del agua, recursos genéticos y otros.
- Participación activa del SERNAP y otros actores importantes en procesos de conceptualización, formulación y ejecución de políticas públicas relevantes para la conservación de los RN y la Biodiversidad.
- Promoción de la generación de modelos de aprovechamiento sostenibles de los RN y la valoración de los servicios ambientales compatibles con los objetivos de conservación y desarrollo social.
- Establecimiento de mecanismos de relacionamiento permanente con aliados estratégicos (privados o de la sociedad civil) para la difusión e implementación de modelos de uso de los RN compatibles con la conservación de las APs, generando beneficios económicos a nivel local, regional y nacional.
- Fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de coordinación sobre todo con los sectores de la administración pública vinculados con la gestión de las APs.
- Gestión y negociación permanente con diversos sectores para superar vacíos legales, de superposición y contradicciones entre las diferentes normas sectoriales con las del SERNAP.

6) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales

Para lograr sostenibilidad social en el SNAP es necesaria la generación de beneficios que contribuyan a mejorar la calidad de vida e ingresos de las poblaciones asentadas en las APs. Se intenta mejorar las prácticas productivas existentes y rescatar y promover la generación de alternativas de aprovechamiento de la biodiversidad que beneficiando económicamente a las poblaciones locales garanticen la conservación en las APs y su entorno y mejoren su calidad de vida.

Los lineamientos estratégicos para esta política son los siguientes:

- El SERNAP impulsará y desarrollará programas y proyectos que aseguren el manejo integral y sostenible de los RN renovables y que sean compatibles con los objetivos de conservación de las APs, promoviendo la participación de los diferentes actores.

- Fomento a programas y proyectos de generación de alternativas económicas sostenibles en términos ecológicos, de empleo e ingresos y que beneficien a poblaciones locales de las APs.
- Promoción de la investigación de sistemas tradicionales de uso y aprovechamiento de la biodiversidad y los RN compatibles con la conservación.
- Promoción, rescate y difusión de formas de manejo sostenibles de los RN y formas sociales de producción sostenibles, compatibles con los objetivos de conservación de APs.
- Promoción del turismo ecológico y la recreación en APs como instrumento para la sensibilización de la población sobre la importancia de la biodiversidad y para la generación de recursos económicos que contribuyan a la gestión y sostenibilidad de las APs.
- El SERNAP regulará la actividad turística dentro de las APs sobre la base de la normativa específica existente y de acuerdo a los mecanismos de planificación institucionales.
- Coordinación y apoyo al proceso de saneamiento y titulación de tierras en las APs.
- Promoción y rescate de normas comunales de uso de RN y la biodiversidad.

7) Consolidar la integración de la gestión de las APs con la gestión municipal y departamental

En el marco de las reformas del Estado boliviano se va consolidando, a través del sistema Nacional de Planificación, un proceso de planificación estratégica y territorial en el ámbito nacional, departamental y municipal. En este contexto el SERNAP orienta esfuerzos para la articulación del SNAP con todos los niveles de gestión territorial y político-administrativos, buscando mecanismos adecuados para mejorar su inserción en las políticas y estrategias nacionales y sobre todo, regionales y locales.

La coincidencia territorial y político-administrativa parcial o total de APs y municipios permite al SERNAP considerar especialmente a estos últimos como elementos fundamentales de integración local y regional para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. La integración de otros actores institucionales que tienen mandatos específicos para la gestión territorial y de los RN relacionados con las APs como prefecturas, municipios y TCOs, tienen que basarse principalmente en la creación de las capacidades para que estos puedan cumplir su rol para una participación responsables en el manejo de las APs y sus zonas de amortiguación

Los lineamientos estratégicos para esta política son los siguientes:

- Promoción de la integración de la gestión de APs de importancia nacional con los procesos de planificación territorial y estratégica de los diferentes municipios y mancomunidades.

- Vinculación de la gestión de las APs con las instancias políticas administrativas locales y regionales, estableciendo alianzas estratégicas con municipios y actores sociales de las tierras comunitarias de origen e integrando Planes de Manejo de las APs con Planes de Desarrollo Municipal, Departamental y Distritales.
- Promoción de la integración de procesos de planificación de las APs con los diferentes municipios de su entorno, así como mancomunidades.
- Fortalecer la integración de territorios comunitarios de origen y APs a través del desarrollo de instrumentos y mecanismos de gestión y coordinación.

8) Fortalecer la participación social en la gestión de las APs

La gestión de las APs en Bolivia plantea como elemento fundamental la participación de los diferentes actores y sectores de la sociedad como principio para lograr una sostenibilidad social de la conservación de biodiversidad en el marco del desarrollo sostenible, promoviendo un proceso de apropiación social y local de la gestión de APs. Se busca promover la participación efectiva y responsable de la población regional y local en la gestión de las APs y desarrollar sus capacidades para que estén en condiciones de apoyar su manejo y conservación. Se debe garantizar la participación de las organizaciones sociales como de instituciones públicas, privadas, ONGs y otras de la sociedad civil; de modo que se logre su incorporación en los procesos de planificación, ejecución y evaluación de las acciones que se realizan con el objeto de cumplir con los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de las APs.

Los lineamientos estratégicos para esta política son:

- El SERNAP fomentará a través de los Comités de Gestión, la participación efectiva de comunidades indígenas y originarias, campesinas, colonizadores y otras organizaciones locales como los gobiernos municipales y representantes de las Prefecturas.
- Incorporación de recursos humanos locales como personal de las APs permitiendo aumentar la capacidad de relacionamiento con las comunidades locales.
- Fomento de los mecanismos de co-administración de las APs y fortalecimiento de organizaciones indígenas locales y otras organizaciones para la co-administración.
- Fomento a la participación de organizaciones de base en los programas y proyectos de las APs en los ámbitos de desarrollo sostenible, educación ambiental, turismo y otros.
- Con el objeto de articular esfuerzos técnicos y financieros, las ONGs, instituciones de apoyo al desarrollo local, la empresa privada y otro tipo de

organizaciones funcionales participarán en la conservación de las APs a través de los comités interinstitucionales.

- Establecimiento e implementación de nuevas instancias y mecanismos de participación en la gestión de las APs.

9) Impulsar la integración de las áreas protegidas en el ámbito internacional

En los últimos años se han generado nuevos conceptos de conservación a escala regional y continental, que se expresan en la formulación de estrategias para un conjunto de países, en el diseño y establecimiento de biocorredores que pueden abarcar ecosistemas de varios países y en la promoción de áreas de conservación transfronterizas. Estas iniciativas reflejan la necesidad de aunar esfuerzos entre los países de la región para enfrentar los retos del desarrollo sostenible y el manejo ambiental de las bioregiones y grandes ecosistemas compartidos.

Los lineamientos estratégicos son los siguientes:

- Fortalecer la red continental de unidades de conservación integrando los esfuerzos de conservación del SNAP con los sistemas de APs de países andinos y de las cuencas Amazónica y del Plata, velando por el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales relacionados con las APs y la conservación de la biodiversidad.
- Realización, en coordinación con la Cancillería de la República, de un seguimiento sistemático a convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales relevantes para las APs y de los compromisos de se derivan de éstos.
- Coordinación del establecimiento y la implementación de estrategias, programas y proyectos binacionales para biocorredores y gestión de APs transfronterizas.

10) Mecanismos y modalidades de participación de los actores locales en las APs del SNAP

Los mecanismos y modalidades de participación de los actores locales se vienen aplicando a diferentes niveles, como:

- En la administración de la unidad de conservación.
- En los procesos de planificación y gestión ambiental.
- A través del Comité de Gestión.
- A través del Comité Interinstitucional.
- Con la incorporación de recursos humanos locales al personal del APs.
- En la implementación de programas y proyectos dentro de las APs y en las zonas de influencia.

Uno de los mecanismos de participación que mayores avances ha tenido son los Comités de Gestión, encontrándose a la fecha en pleno funcionamiento los siguientes:

N°	Área Protegida	Fecha de Creación
1.	Area Natural de Manejo Integrado (INAMI) Apolobamba	1994, reconfirmado 2000
2.	Parque Nacional Noel Kempff Mercado	Mayo 1995
3.	Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa	Julio 1995
4.	Parque Nacional Sajama	Diciembre 1995
5.	Parque Nacional y ANMI Kaa Iya del Gran Chaco	Mayo 1996
6.	Parque Nacional Torotoro	Junio 1996
7.	Parque Nacional y ANMI Amboro	Julio 1996
8.	Parque Nacional y ANMI Madidi	Octubre 1996
9.	Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia	Octubre 1997
10.	Parque Nacional y ANMI Cotapata	Diciembre 1997
11.	Reserva Biológica Estación Biológica del Beni	Septiembre 1999
12.	Reserva Biológica Cordillera de Sama	Diciembre 2001
13.	Area Natural de Manejo Integrado El Palmar	Enero 2002
14.	R. Biológica y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas	Septiembre 2002

Otro avance importante son los convenios de coadministración que ya fueron consolidados en las siguientes áreas protegidas:

Area Protegida	Institución	Firma de Convenio	Duración
Parque Nacional Noel Kempff Mercado	Fundación Amigos de la Naturaleza - FAN (ONG)	20 abril de 1995	10 años
Reserva Biológica Estación Biológica del Beni	Academia Nacional de Ciencias de Bolivia	25 septiembre de 1995	10 años
Parque Nacional y ANMI Kaa Iya del Gran Chaco	Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) Fundación Ivi Iyambae	24 noviembre de 1995	10 años
Parque Nacional y Territorio Indígena Isibore Sécore	Subcentral Indígena del Territorio Indígena Isiboro Sécore	24 julio de 1997 31 julio de 2002	5 años 5 años

La articulación de las áreas protegidas con los gobiernos municipales y las prefecturas tuvo también avances, lográndose a la fecha incorporar principios y criterios de gestión ambiental, desarrollo sostenible y gestión de áreas protegidas en los Planes de Desarrollo Municipal en los siguientes casos:

- Parque Nacional Sajama con el Municipio de Curaguara de Carangas y Turco.

- Parque Nacional Torotoro con el Municipio de Torotoro
- Parque Nacional Carrasco con el Municipio de Villa Tunari

Por otra parte, se tiene avances en la integración de las áreas protegidas con las siguientes mancomunidades:

- Gestión Ambiental Mancomunitaria de la Cuenca del Río Beni,
- Mancomunidad de Municipios de Apolobamba,
- Mancomunidad de Municipios Sara e Ichilo en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró
- Coadministración con Mancomunidades de Municipios del Chaco del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Agüaragüe

El proceso de formulación de la ley de áreas protegidas de Bolivia

Gonzalo Zambrana A.¹

1. Introducción

El proceso de consulta pública para la formulación de la Ley de Áreas Protegidas, ha tenido como uno de sus elementos principales, el cuestionamiento a uno de los factores centrales que caracterizan al modelo de administración vigente hasta ahora: nos referimos a la concepción de la participación local en la gestión de áreas protegidas o en otros términos, al enfoque de *gestión participativa*.

Para una comprensión efectiva de ello, hemos sostenido desde hace mucho tiempo que es imprescindible situar la problemática de la gestión de las Áreas Protegidas y su relación con la participación local, en el contexto sociopolítico histórico y coyuntural que vive el país. Así encontraremos que temas que forman parte de la problemática del desarrollo, tienen una relación directa con la problemática de las áreas protegidas. Estamos hablando de: reivindicaciones étnicas, demandas de tierra-territorio, viabilidad del modelo de desarrollo económico liberal, corrupción en instituciones públicas, demanda de participación democrática, modelos paternalistas de intervención para el desarrollo, ausencia de control social en la toma de decisiones gubernamentales, etc.

Por ejemplo, hasta ahora el Régimen del INRA, no ha logrado resolver efectivamente el problema de la distribución inequitativa de tierras en Bolivia, puesto que por un lado, en el oriente boliviano se mantienen grandes propiedades con fines especulativos, en el resto del país la carencia de tierras inviabiliza no solo la producción sino la existencia misma de su gente. El caso de las áreas protegidas ha sido otro ejemplo de esta inequidad puesto que, tal como lo reclaman perma-

1 Licenciado en economía. Director de Gestión Ambiental de la Honorable Alcaldía Municipal de Cercado, Cochabamba-Bolivia

nentemente las comunidades locales, las administraciones de las áreas protegidas, no han actuado con la misma dureza empleada en el control de las actividades indígenas y campesinas, que cuando los afectados han sido grupos con poder económico y político, como mineros, petroleros, terratenientes, políticos, etc. Por tanto, al considerarse la problemática territorial de la gente de las áreas protegidas, como un proceso reivindicativo de carácter socioeconómico, cultural y altamente politizado, debe simultáneamente considerarse el conflicto que ha generado el modelo de distribución de tierras en nuestro país, que además de ser inequitativo, al ser racionalizado por los actores sociales, ha sustentado plenamente la demanda de los movimientos sin tierra, que mas allá de su legitimidad o no, forma parte de la agenda reivindicativa de los movimientos insurgentes actuales.

Por ello, es necesario efectuar un repaso a las transformaciones que se han efectivizado en el escenario político boliviano. Es necesario destacar que si bien se han producido movilizaciones de tal magnitud, que han herido profundamente el sistema político vigente hasta ese momento, planteando el redireccionamiento de los esquemas de participación social y democracia, la dinámica sociopolítica que tuvo sus puntos críticos en febrero y octubre del 2003, no se ha manifestado en forma homogénea en todas la regiones del país; para ello es necesario preguntarse por ejemplo, las razones por las cuales mientras en La Paz alcanzaba un estado de ebullición social sin precedentes, las movilizaciones en Cochabamba distaban mucho de otras vividas anteriormente como la *guerra del agua*; peor aún en Tarija, Beni y Pando las actividades transcurrieron con normalidad, excepto en Santa Cruz donde la expresión de masas mas importante se produjo por la presencia de los campesinos de Yapacani que al ingresar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los tradicionales organismos cívicos cruceños, organizaron una movilización para contenerla y peor aun, cuando esta marcha campesina ingreso a la Plaza Principal los "collas" fueron golpeados inmisericordemente por alevosos miembros de la "juventud" cruceñista, sin siquiera respetar mujeres ni ancianos.

La nueva composición gubernamental y la correlación regional de identidades políticas que vinieron después de Octubre del 2003 quizás son una expresión de la dinámica inaugurada en este histórico mes donde se expulso a un presidente constitucional; mientras los movimientos insurgentes de La Paz expresaron diversos grados de identidad con el nuevo gobierno, los empresarios de Santa Cruz, por ejemplo se convirtieron en sus principales críticos. Eso nos permite observar que el nuevo gobierno fue principalmente el resultado de las masivas movilizaciones de El Alto y La Paz, sin que haya sido compartido por otros grupos de poder del oriente del país, principalmente de Santa Cruz, como la CAINCO, que indudablemente perdieron los espacios de poder de los que hasta ese momento habían gozado. Eso se puede ver con claridad en las encuestas, que con cierta regularidad se realizan para evaluar la aceptación de la gestión del presidente Meza Quisbert, mientras en La Paz y El Alto la cifras superan las tres cuartas partes, a medida que se va bajando por Cochabamba y se llega a Santa Cruz y todo el

oriente, el apoyo disminuye proporcionalmente. También es necesario destacar sin embargo de que las masivas movilizaciones, principalmente de La Paz, tuvieron un carácter esencialmente político, estas no tuvieron una dirección única, ni un discurso movilizador ideológicamente elaborado y menos existió la presencia de “institución” política, sin que esto quiera decir que los partidos políticos aspirantes a la representación del conjunto de las masas (como el MAS y el MIP, por ejemplo) no hubieran tenido una participación relevante.

Otro fenómeno que es importante destacar, es la correlación de fuerzas que ha engendrado octubre del 2003, puesto que si antes existía un comportamiento arrogante y prepotente por parte de los grupos de poder, ahora al parecer el péndulo se encuentra en el otro extremo, puesto que existen niveles dirigenciales de los sectores populares cuyo comportamiento, fuertemente politizado tiene fuertes rasgos de intolerancia y reconocimiento a otros segmentos sociales, configurándose por tanto un estado de fuerte polarización, haciendo imprescindible la construcción de un discurso que identifique la necesidad de constituir un estado-nación pluricultural y basado profundamente en la democracia y la equidad.

2. La utopía capitalista en la construcción de la Nación Boliviana

Los orígenes de este conflicto debemos situarlos, en el modelo de estado nacional que los grupos dominantes han intentado construir en nuestro país. Por tanto estamos hablando de la historia del capitalismo en Bolivia. Bajo esta lógica, la esperanza ha sido que a través de un desarrollo intensivo del capitalismo y a través de la acumulación de capital, este sistema con su lógica y racionalidad se iba a imponer absorbiendo inevitablemente a toda la multiplicidad de formas socioculturales y económicas precapitalistas, evolucionando hacia una nación –estado capitalista– occidental (Fig. 1).

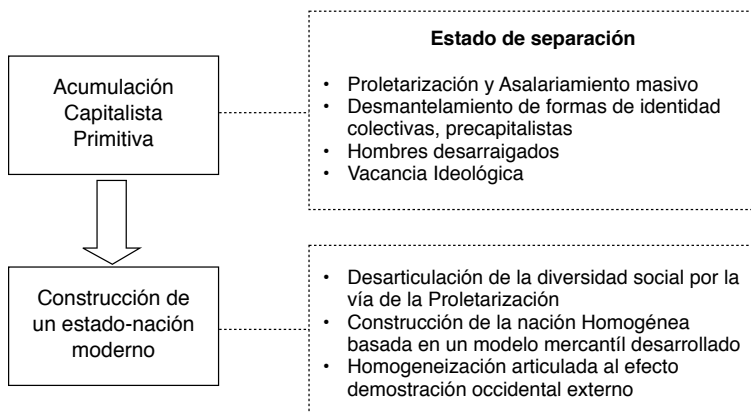


Figura 1. Bases para Construcción de un Estado-Nación Capitalista-Occidental.

3. Estado aparente, modernidad y globalización

Sin embargo, según el esquema de interpretación planteado por Zabaleta² el proceso de constitución de una nación homogénea en Bolivia guiado por la utopía capitalista, no ha logrado ser completado según las propias previsiones del modelo de acumulación

El gran conflicto es que las clases dominantes han supuesto que la inevitabilidad evolutiva del estado-nación capitalista-occidental, por la vía de la modernización en Bolivia, iba a absorber automáticamente a todo vestigio precapitalista, esto implicó el desconocimiento de formas económicas, sociales y culturales diferentes, en otros términos el desconocimiento de la importancia de la alteridad de lo *otro*, se desconoció la pobreza, las culturas, las formaciones sociales diferentes que a pesar de muchos siglos se mantuvieron vigentes bajo diferentes formas de resistencia silenciosa, constituyéndose por tanto el *estado aparente* del que nos hablaba Zabaleta

- No se ha logrado la Proletarización de las formas precapitalistas.
- Estas se han mantenido en pleno vigor asumiendo estrategias de relacionamiento con el sistema vigente.
- Se han mantenido sistemas de relacionamiento económico no mercantil.
- La intelectualidad indígena ha fortalecido crecientemente las formas de identidad no occidentales.
- La Participación Popular ha forjado la confianza indígena en la capacidad de gestión efectiva del candidato propio.

Ni siquiera el escenario de la globalización cuyo rol de favorecimiento a la acumulación de riqueza, más allá de su perspectiva inequitativa en la relación entre países con diferentes estados de desarrollo, fue adecuadamente aprovechado. No se dedicaron los esfuerzos necesarios para asumir temas como la pobreza, la demanda de participación o la diversidad cultural.

Por el contrario los sectores dominantes de nuestro país, en el lento intento de constitución de una nacionalidad homogénea se han visto favorecidos por los avances de la modernidad y globalización que ha solidificado su condición de estado aparente puesto que la globalización al fundamentarse en el *Darwinismo Social* y la Competitividad, ha producido la existencia de inmensas inequidades entre países haciendo necesarios un numero creciente de mecanismos y fuerzas disuasivas apoyada siempre por el poder imperial como alternativa a la falta de

2 TAPIA, Luis. La producción del conocimiento local. Historia y Política en la obra de René Zabaleta Mercado. Muela del Diablo. La Paz. 2002

democracia. En Bolivia esto se expresó además en la existencia de segmentos sociales aparentemente independientes de las clases dominantes conformadas por clanes políticos y familiares, la autodenominada “clase política”; que no tuvieron la capacidad de interpretar la germinación de movimientos potencialmente constitutivos de un *Bloque Histórico*.

4. Formulación de normas y políticas públicas

Los hechos de Febrero³ y octubre del 2003, fueron una demostración extrema de esta realidad y lamentablemente el proceso de consulta de la Ley de Áreas Protegidas se inscribió en este complejo y explosivo escenario sociopolítico.

Los mecanismos de formulación de normas y políticas públicas han sido plenamente correspondientes a las características del tipo de estado en construcción. Es decir la formulación de leyes y políticas públicas, siempre dio por sobre entendido que la demanda social podía ser inscrita en el proceso modernizador marcado, además, en la imposición permanente de modelos externos. Los rasgos más notables fueron:

- Formulación inconsulta de normas y políticas o procesos de consulta parciales y formales
- Poca participación indígena en temas de su interés, de ahí que nunca se dio cumplimiento al convenio 169 de la OIT, que tiene rango de Ley de la República.
- Justificaciones tipo “es mejor tener una norma mal elaborada a no tener nada”.

Las áreas protegidas son un ejemplo de esta forma inconsulta y vertical de manejar las políticas públicas. Si bien la primera Área Protegida en Bolivia: el Parque Nacional Sajama, fue creado en 1939 recién a mediados del 90, se inició la verdadera gestión de áreas protegidas gracias a las corrientes mundiales que tuvieron su punto clímax en la Cumbre de Río de 1992, destinando notables cantidades de recursos financieros para los temas ambientales, los mismos que tuvieron una expresión tangible en Bolivia.

A partir de este evento, la gestión de áreas protegidas, gracias a la disponibilidad de recursos de donación externa, desarrolló su etapa fáctica, pero

3 Las movilizaciones de febrero con seguridad hubieran tenido un curso similar al de octubre sino hubieran sido abortadas por el “accidental” enfrentamiento entre las fuerzas armadas.

lamentablemente bajo un esquema externo fuertemente preservacionista y que desconocía completamente la realidad nacional (Fig. 2).

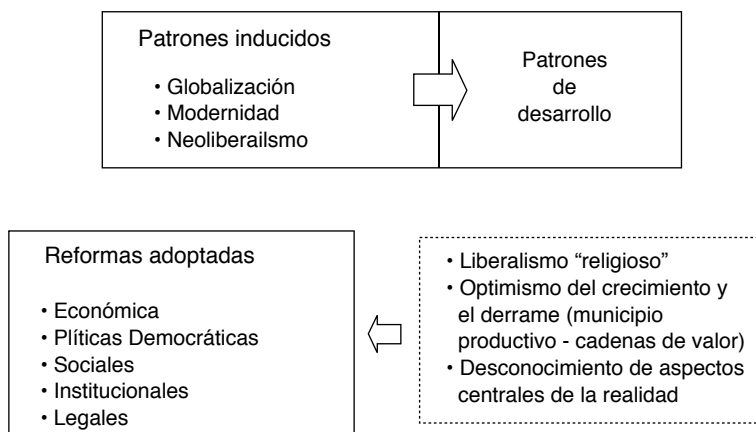


Figura 2. El Modelo de Formulación de Políticas Públicas en Bolivia

Las áreas protegidas se superpusieron a los territorios de comunidades locales indígenas y campesinas sin su consentimiento previo y a partir de ahí aparecieron fuertes conflictos de relacionamiento de diversas características. Cochabamba es un ejemplo de ello puesto que el Parque Nacional Tunari y el Parque Nacional Carrasco ahora tienen problemas sin claras perspectivas de solución y peor aun la recientemente creada, ANMI Altamachi-Cotacajes, que a pesar de toda la experiencia de conflictos existente en las áreas protegidas, nació con serios problemas de relacionamiento y reconocimiento con las comunidades locales.

Es decir, si algo se intento reconocer a las comunidades fue planteado en términos excesivamente economicistas o mercantilistas, desconociendo su cosmovisión y particularmente su racionalidad económica, llegándose a la paradoja de que los mejores representantes de este enfoque economicista resultaron ser precisamente algunos biólogos, que en última instancia propusieron un "*conservacionismo economicista*" totalmente alejado de la realidad de nuestro país. En términos simples lo que se planteo es que, para lograr que las comunidades participen de la gestión de las áreas protegidas, estas debían recibir algún beneficio monetario proveniente de ellas. El error consistió en que el sustrato economicista liberal del discurso oficial (gubernamental) de conservación comprendía a la economía como una relación únicamente mercantil-monetaria y por tanto no fue capaz de comprender la perspectiva económica no necesariamente mercantil, de las comunidades locales y la complejidad de su visión sobre necesidades básicas, manejo territorial y acceso a los recursos naturales (Fig. 3).

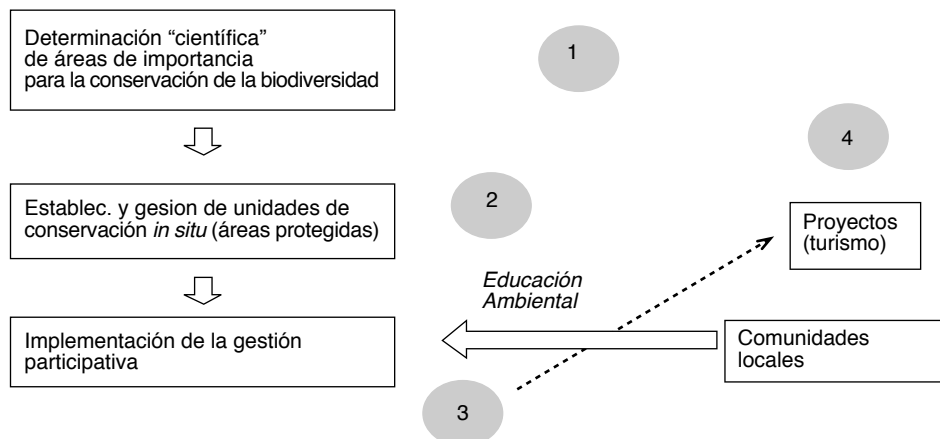


Figura 3. El Establecimiento de las Áreas Protegidas.

5. El Proceso de formulación de la Ley de Areas Protegidas

Este nuevo intento de consulta omitió una consideración adecuada de otros enfoques referidos a la gestión de las áreas protegidas, particularmente los de base indígena-campesina; no se consideraron con la debida importancia documentos como la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Conservación de la Biodiversidad elaborada en 1998 por organizaciones nacionales campesinas e indígenas; tampoco se tomó en cuenta en su verdadera magnitud el documento denominado “Por la defensa de la naturaleza y el medio ambiente”, elaborado por comunidades de áreas protegidas en Mayo del 2003 en Vinto, aún a pesar de que este documento fue entregado oficialmente en manos de un diputado miembro de la comisión encargada de llevar adelante la consulta sobre esta Ley. Menos se consideraron otros documentos como la propuesta de manejo de áreas protegidas realizada por campesinos de Tarija. Por tanto, a pesar de reconocerse la importancia de la participación local en la gestión de las áreas protegidas, esta dimensión no fue considerada en la magnitud que correspondía.

La formulación de la ley se inicia con un documento base que es discutido ampliamente por un grupo de profesionales de amplia experiencia en el tema de áreas protegidas conjuntamente con funcionarios del SERNAP y de otras instancias gubernamentales. Este escenario⁴, tenía el propósito de plantear las bases técnicas de la formulación de esta norma. En base a ello se efectuaron

4 A pesar de la presencia de profesionales de reconocida trayectoria en el tema, no hubo una presencia importante de “expertos” en el tema de participación local.

las consultas departamentales a través de una amplia invitación, a diferentes actores relacionados con el tema. No se realizaron las consultas sectoriales aunque en algunos casos se efectuaron de forma accidental. A pesar de las observaciones sobre los mecanismos de consulta a las comunidades locales y las reiteradas sugerencias sobre la necesidad de realizar una consulta diferenciada con comunidades locales de las áreas protegidas, no se consideró prioritaria esta importante acción.

5.1. Las consultas para la formulación de la Ley de Areas Protegidas

Durante la década del 90 se formularon la mayoría de las leyes relacionadas con la temática de recursos naturales y medio ambiente y aunque se hicieron muchos intentos de formular la Ley de Biodiversidad y se elaboraron más de cuarenta versiones de la misma, después de casi 10 años no se logro su promulgación. Paralelamente a estos intentos, en 1997 se promulgo el Reglamento General de Areas Protegidas, ante la necesidad de contar con un instrumento regulador específico para las áreas protegidas.

El año 2001, ya hubo un intento de formulación de la Ley de Áreas Protegidas, donde se hicieron consultas regionales pero bajo formato convencional y bajo la dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

Ante esta limitación se asumió la necesidad de formular la Ley de Áreas Protegidas por la urgencia de *“contar con un recurso jerárquico”* que permita una mejor protección jurídica de las áreas de conservación y por tanto dotar de la seguridad jurídica que estas requieren, frente a otras normas que por ser de *“interés nacional”* cuentan con mayor jerarquía. A diferencia del trabajo del 2001 en este caso el proceso de formulación fue liderizado por la comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados⁵ y el SERNAP tuvo una participación menos protagónica.

5.2. El documento base de consulta de la Ley de Areas Protegidas

El documento de discusión fue presentado en formato simple y claro, dejando muchos elementos específicos a los Reglamentos. Este documento consolida, aclara y complementa la normativa existente. Aunque muestra muchos avances en el propósito de inscribir la temática de áreas protegidas dentro el Desarrollo Sostenible, no se modifica notablemente el enfoque basado en el modelo de conservación tradicional, manteniendo por tanto el sustrato economicista liberal.

5 Este proceso estuvo dirigido por Alejandra Sánchez de Lozada, quien por su trayectoria en la temática tuvo la oportunidad de dirigir la Dirección General de Biodiversidad y a través de este, el Sistema Nacional de áreas Protegidas que dependía de la DGB.

En el marco internacional, por primera vez se hace referencia específica al Convenio 169 de la OIT, como mecanismo de defensa de los derechos de las comunidades que viven o están influidas por las áreas protegidas. Sin embargo de ello, sobre la participación o co-administración local, no hay ningún avance específico.

Dedica un importante artículo al tema de protección frente al aprovechamiento de los recursos naturales (principalmente no renovables) en áreas protegidas, a través de una estrategia de zonificación y una serie de recursos legales.

En cuanto a los aspectos biofísicos se efectúa una introducción pertinente del concepto de corredores biológicos, pero sin profundizar en los aspectos de desarrollo como determinantes de su viabilidad, mas aun considerando las magnitudes territoriales que se requieren para una implementación adecuada de los corredores.

5.3. Rasgos sobresalientes de la consulta nacional

De manera general se sabe que los aspectos más sobresalientes expresados por los participantes en la consulta fueron:

- Mayor participación y control social en los diversos niveles de la institucionalidad del SNAP.
- Mejores niveles de institucionalidad y alejamiento de la influencia de los partidos políticos.
- Jerarquización de la Norma sobre áreas protegidas para proteger al SNAP de las actividades de aprovechamiento de recursos naturales.
- Mayores niveles de participación local en los mecanismos de administración de cada una de las áreas protegidas.

Aunque a nivel nacional las características de la participación en la consulta fueron diferentes y con una heterogeneidad de actores, la consulta en Cochabamba tuvo un desenlace totalmente diferente, que en última instancia definió la virtual suspensión de la consulta. Los máximos dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, junto a otros dirigentes de comunidades afectadas por las áreas protegidas existentes en Cochabamba se presentaron al taller de consulta, con el propósito de evitar su realización. Luego de efectuar una crítica a la forma ilegítima como se efectúan las consultas de normas que tienen que ver con los intereses de las comunidades locales y denunciar una supuesta colusión entre las áreas protegidas y las empresas petroleras transnacionales, no plantearon la mas mínima posibilidad de avanzar en la consulta nacional develándose su propósito de hacer abortar completamente este proceso.

A partir de este evento, se produjo una interrupción del proceso que luego seria abandonado indefinidamente, peor aun por los hechos de octubre.

6. Las enseñanzas del proceso de formulación de la Ley

La consulta para la formulación de la Ley de áreas Protegidas, se inscribió sin duda al modelo de formulación de políticas públicas, que se describió líneas arriba. Esta forma de hacer las cosas, que al ser parte de las circunstancias sociopolíticas que vivimos el pasado año, determinaron el destino de esta consulta, es decir en octubre las masas insurgentes iniciaron el desmantelamiento del sistema de gestión pública arbitraria y vertical, reclamando un cambio radical en el comportamiento de los gobernantes y su forma de plantear la gestión pública. El proceso de consulta de áreas Protegidas puede ser descrito perfectamente como un indicador de ello.

Por tanto las profundas modificaciones en el escenario político de nuestro país, han demostrado que el modelo de gestión de las áreas protegidas requiere un replanteamiento de su discurso, particularmente en dos aspectos centrales, los mecanismos de participación local en su gestión en todos los niveles y el establecimiento de verdaderas salvaguardas contra el ingreso de empresas transnacionales interesadas en el aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que estos sirvan prioritariamente para el mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada.

En todo caso, al establecerse que las comunidades de las áreas protegidas poseen características socioeconómicas que definen la realidad de nuestro país en relación a las áreas protegidas, es necesario reconsiderar la concepción instrumental-preservacionista, que todavía persiste en el discurso oficial y en base a un acercamiento desde la antropología económica o “de necesidades básicas”, redefinir el objetivo de participación local que tiene y oferta actualmente el SERNAP. Se debe partir de la pregunta, *¿para que se requiere la participación de las comunidades locales en la gestión de las áreas protegidas?*, si la respuesta es: *“para que ayuden a conservar la vida silvestre”*, el resultado con seguridad va a ser por mucho tiempo más, similar al de ahora: participación inefectiva. Por el contrario si, considerando la cosmovisión y racionalidad de las comunidades locales referidas a:

- presencia permanente e indefinida en la zona,
- apego al territorio,
- potencialidad organizativa, de movilización y trabajo comunal,
- conocimiento tradicional sobre manejo de recursos, etc.

Decimos: *“para desarrollar acciones simultáneas de conservación y desarrollo que incorporen a las comunidades a partir de su cosmovisión, perspectiva territorial y de manejo de recursos naturales, religiosidad, identidad sociocultural y percepción de necesidades básicas”*, con seguridad que la participación va a tener la efectividad suficiente para

constituir una alianza estratégica única en favor de la conservación y el desarrollo en áreas protegidas y sus zonas de influencia⁶.

Esto significa que el SERNAP debe desarrollar prioritariamente acciones de fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de áreas protegidas tendientes a establecer en tiempo perentorio, mecanismos de co-administración con las comunidades locales y así lograr que las comunidades locales al “apropiarse” de estos territorios, sean los verdaderos defensores del patrimonio natural de nuestro país. Solo hay que imaginar la potencialidad organizativa de las comunidades locales (sean campesinas o indígenas), en el rol de protección del patrimonio natural en áreas protegidas; si se logra esto, que es muy probable, en el futuro la labor de los guardaparques, por ejemplo, será menos necesaria en actividades de protección y control, para así modificar su actual rol y dedicarse con mas fuerza a promover y facilitar la conservación y el desarrollo sostenible.

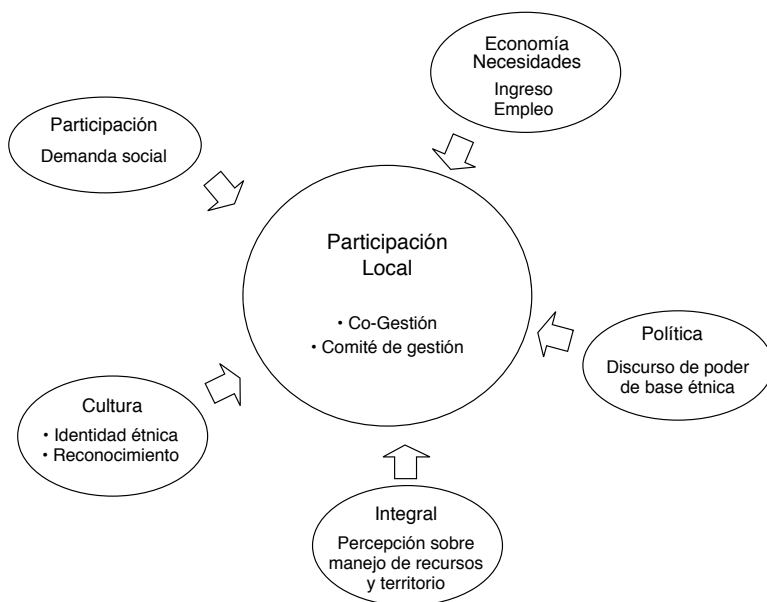


Figura 4. Determinantes de la Gestión Participativa

6 Es importante recordar que en el Parque Nacional Amboró, una movilización social con fuerte presencia campesina impidió el ingreso de una empresa petrolera para explotación de hidrocarburos, dentro el territorio de esta Área Protegida, pero contrariamente en el Parque Nacional Carrasco, la producción hidrocarburífera contó con el apoyo de la Administración de esta Área Protegida, a cambio de la construcción de campamentos de control.

Solo una alianza estratégica de esta naturaleza, entre Comunidades, SERNAP y Promotores del Desarrollo (como son las Municipalidades y algunas ONGs), va a ser la única garantía de que las áreas protegidas conserven su integridad en el largo plazo, disminuyendo al mínimo, la posibilidad de que el aprovechamiento de los recursos naturales beneficie a las transnacionales, la biopiratería, etc.

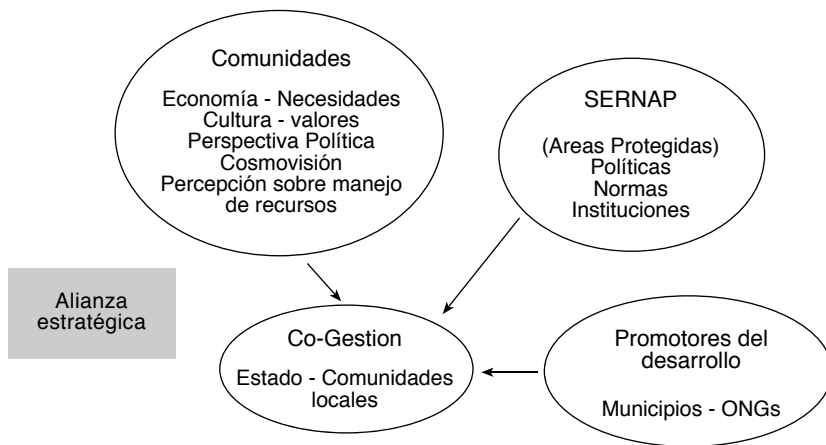


Figura 5. Alianza Estratégica para Gestión Viable de las Áreas Protegidas en el Largo Plazo.

Estrategia boliviana de biodiversidad

Gonzalo Merida¹

1. Antecedentes

Para ver la forma en la que se podían revertir los procesos o tendencias de degradación o de erosión biológica, es que se plantea la elaboración de una Estrategia Nacional de Biodiversidad a partir de un proceso participativo y de discusión con todos los actores involucrados. Este proceso de construcción de estrategia es la que pretendo socializar en esta oportunidad. Inicialmente haré un resumen de las características del proceso participativo que se llevó adelante, luego destacar los aspectos importantes del diagnóstico realizado para tres áreas específicas: el medio físico, la diversidad biológica y la gestión de la diversidad biológica y finalmente, mostrar la estrategia y el plan de acción concertado.

2. Características del proceso de formulación

Durante el proceso se ha intentado involucrar a una gran mayoría de los actores sociales que tienen que ver de una u otra manera con el tema de la biodiversidad. Sabemos que en Bolivia no se tienen políticas de Estado, sino políticas de gobierno, por lo que se trabajan estas coyunturas de planificación estratégica pensando únicamente en los gobiernos que están en ejercicio y en transición. Entonces no se piensa en el largo plazo como una política de Estado. Con la Estrategia Boliviana de Biodiversidad (EBB) lo que se ha intentado es revertir esta falencia, aprovechando

1 Ingeniero Forestal. Consultor del Ministerio de Desarrollo Sostenible para realizar la coordinación general de la formulación de la Estrategia Boliviana de Biodiversidad.

sobre todo los recursos que nos facilitaba el Fondo Global para el Medio Ambiente –aproximadamente doscientos cincuenta mil dólares–, para que Bolivia implemente y construya este proceso. Se ha conseguido también otros recursos adicionales del mismo Estado. Entre el año 1999 y enero del 2003, se ha invertido cerca de medio millón de dólares en construir todo el proceso. Subrayo el “proceso”, porque lo que se ha pretendido hacer es una amplia discusión sobre lo que es la biodiversidad en nuestro país. Ha sido en realidad un proceso muy abierto de discusión, contrariamente a lo que se había pensado inicialmente de que solamente las instituciones ambientalistas trabajen la construcción de esta estrategia en el País. Pero hubo una sana decisión de abrir el proceso de construcción de la estrategia, así discutir bajo otras lógicas, bajo otros pensamientos, con la posibilidad de incorporar a sectores que estaban excluidos del tema de biodiversidad, como es el sector campesino y otros sectores transversales que usan los recursos biológicos como el sector salud.

Bajo ese esquema de construcción de la estrategia, se ha logrado una participación directa de más de 1280 actores entre personas e instituciones, logrando obtener del proceso valiosa información sobre la biodiversidad en Bolivia que están publicados en diversos documentos, a los cuales se puede acceder fácilmente a través de las instancias encargadas de difundir esta estrategia que entre otras cosas, ha pasado por todas las instancias de aprobación como una política de Estado.

Los 1280 actores se han constituido en los autores de la estrategia, además incluye la visión de los diferentes actores involucrados como es particularmente la visión campesina e indígena. Se dice que la biodiversidad es un tema que ingreso en nuestro país como fruto de lo que ha sido la Cumbre de la Tierra en 1992. Sin embargo para nuestros campesinos e indígenas la biodiversidad que se reproduce bajo la lógica de lo que es la Pachamama, siempre ha sido un tema cotidiano, además siempre han tenido sus enfoques y estrategias de conservar esas formas de vida que ellos administran.

3. Resultados del diagnóstico

Un resultado principal de este proceso de diagnóstico ha sido la sistematización de toda la información existente en Bolivia y fuera de ella. Se ha trabajado cuatro años recuperando información de cerca de 73 investigadores que han realizado investigaciones en Bolivia, pero que muchas de estas investigaciones estaban fuera del País. En ese sentido, se ha hecho un gran esfuerzo de recopilar y repatriar toda esa información, para luego incluir en un documento que se llama “Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia”, y que es fruto de todo este proceso de diagnóstico. Este documento hoy en día esta disponible principalmente para todas aquellas personas que toman decisiones sobre la biodiversidad, donde se puede contar con información ordenada y sistematizada sobre lo que existe en nuestro país.

Haciendo un resumen muy breve del documento de diagnóstico que tiene más de 700 páginas e incluye mapas, ilustraciones y muchos anexos, describiré 3 aspectos básicos: El primer aspecto está relacionado con la descripción de las características físico/naturales, es decir aquí se ha realizado una sistematización y caracterización de todo el escenario abiótico de Bolivia y las características del medio físico (fisiografía, geología, geomorfología, etc.) que generan las condiciones y posibilidades de tener diversidad biológica. Entonces una primera parte del diagnóstico caracteriza la parte física tales como las características del clima, las características de los suelos, etc. como elementos que acompañan y factores de distribución de la diversidad biológica. En estos aspectos resalta por ejemplo 20 tipos de unidades de suelo, la oscilación de temperaturas medias y patrones de precipitación extremos.

Un segundo elemento que esta dentro este diagnóstico es el tema de la diversidad biológica y dentro de esto rescatamos el concepto de “riqueza”. Riqueza es el título que habíamos puesto al diagnóstico, porque en verdad somos ricos en diversidad. No hay duda de que estamos entre los 10 y 15 países más diversos del mundo, pese a que Bolivia es uno de los países menos estudiados del mundo. En la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo realizado el 2002, se ha consolidado formalmente esta situación después de mostrar los resultados del diagnóstico y de demostrar que Bolivia esta entre los países más diversos de mundo. Así se ha logrado demostrar al mundo científico, de que Bolivia tiene una gran riqueza biológica a pesar de que los estudios son todavía muy limitados, pues muchas taxonomías y especies todavía no están estudiados en nuestro país.

Otro elemento que se destaca en el diagnóstico es la caracterización de las ecoregiones sobre todo en relación a la existencia de especies como hongos, plantas y animales mejor conocidos, y que nos da una aproximación de cómo esta distribuida la diversidad biológica en nuestro país. Por ejemplo en cuanto a ecoregiones, se ha descrito 12 ecoregiones, lo que hace a Bolivia ser uno de los países con mayor diversidad de ecoregiones en el mundo. Destaca la ecoregión del Bosque Seco Chiquitano como exclusiva de Bolivia. Por otro lado, la parte Suroeste de la Amazonía y los Yungas se describen como las más complejas y ricas en especies de plantas y animales.

En cuanto a la diversidad de especies, Bolivia está entre los 10 países del mundo con mayor número de especies de plantas vasculares, registrándose más de 20,000 especies. En cuanto a especies animales, Bolivia esta también entre los 10 países más ricos en especies de aves del mundo, registrándose hasta la fecha 1398 especies. En el tema de musgos existe cerca de 1000 especies, casi como en todo Norte América que tiene 1300 especies.

Otro aspecto que se toca en el diagnóstico, es lo que se refiere a la gestión de la diversidad biológica. Se tiene sistematizado el estado actual de la conservación de la biodiversidad y como se esta gestionando. Al respecto se encuentran datos e

información interesante, como que el 58% del territorio boliviano se encuentra en un estado de conservación de sus ecosistemas entre bueno a muy bueno. Los ecosistemas más degradados son la Puna Norteña y los Bosques Secos Interandinos. A nivel de especies hay pocos estudios detallados que cuantifican su estado de conservación.

Otro elemento importante que se ha logrado incorporar en este proceso de diagnóstico y que ha sido incorporado por primera vez, es el tema económico sobre los productos y servicios de la biodiversidad. Nuestras economías, sobre todo las de libre mercado, no se puede dejar de ver el tema de biodiversidad dentro sus economías y procesos de desarrollo. Se ha realizado un esfuerzo por sistematizar y revisar las cuentas nacionales, con el objetivo de determinar la generación de ingresos y la participación de la biodiversidad en el PIB nacional, sobre todo de silvicultura, ecoturismo y agrobiodiversidad. Se estableció que estas actividades están generando más o menos el 4% de PIB Nacional. Asimismo, se ha determinado la importancia de la diversidad biológica en la generación de empleo. Los efectos multiplicadores que tiene la economía de la diversidad biológica son muy importantes, por ejemplo se ha encontrado que el ecoturismo tiene un efecto multiplicador de 2,25 por cada dólar americano frente a 1,58 de la actividad minera en Bolivia. Es interesante este aporte de la biodiversidad, que esta en inextenso explicado en el diagnóstico.

Otro elemento del diagnóstico es la parte cultural. Resalta mucho la parte de que Bolivia es un país culturalmente diverso, por lo que se describe a la diversidad étnico-cultural como un potencial estratégico del país, y que aún se menosprecia los conocimientos y prácticas indígenas como estrategias de uso sostenible. También se hace referencia a la gestión biocultural, es decir a la relación que existe entre lo que es la diversidad biológica y la diversidad cultural.

Por otra parte, se describe también los modelos de gestión de la diversidad biológica que se ha implementado desde la época prehispánica hasta el modelo actual, donde se analiza sobre todo los factores de insostenibilidad que estarían presentes en estos modelos, como por ejemplo: la incorrecta o inexistente asignación de valor o precio a productos y servicios de la biodiversidad, la distribución inequitativa de beneficios generados a partir de la biodiversidad, la baja participación en gestión y otros.

En referencia a la tenencia y los accesos inequitativos de tierras, se encuentra algunos datos preocupantes. Un ejemplo de ello es que desde que la aplicación de la ley INRA se han distribuido tierras a campesinos en una superficie que no pasa los 43000 hectáreas frente a 16 millones de hectáreas que están en las TCOs. Hay una diferencia muy crítica en lo que ha sido la distribución entre el sector campesino e indígena.

Por otro lado, existe sobre posición de los derechos sobre el suelo y subsuelo que está generando conflictos muy serios sobre lo que es la administración del patrimonio. En algunos casos existe hasta 5 pisos de derechos propietarios sobre un

mismo recurso o unidad de superficie, eso genera un problema muy serio, es decir se tiene 5 títulos diferentes de propiedad sobre una misma unidad de superficie; en el caso solamente agrario, es decir entre el consejo nacional de Reforma agraria y el instituto nacional de colonización, las dos instituciones que eran responsables de distribución de tierras hasta el 92, han distribuido en algunos lugares 3, 4, hasta 5 pisos de derechos sobre una misma superficie. En consecuencia existe una inseguridad jurídica sobre la propiedad de los recursos muy elevada.

En cuanto al tema de áreas protegidas, en el diagnóstico se describe aspectos que hacen referencia a lo siguiente:

- El establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) después de lo que ha sido la promulgación de la Ley de Medio Ambiente.
- Una institucionalidad con altibajos que ha tenido el SNAP.
- Principalmente la creación de AP sin participación y consenso con las poblaciones locales.
- Una incorrecta asignación de categorías y límites de algunas AP.
- Una participación muy débil en la toma de decisiones.

Si bien en Bolivia existe un avance importante comparado con otros países sobre lo que es participación, pero esa participación se da muchas veces solo a través de lo que son las estructuras de los comités de gestión, lo que no significa una participación en la toma de decisiones, por lo que no se refleja un “empoderamiento local” que puede dar un cambio a la gestión de las Áreas Protegidas. Tal vez un avance en el tema de participación sean los convenios de coadministración de las áreas protegidas entre instituciones gubernamentales y organizaciones campesinas e indígenas.

El tema de sobreposición de derechos de propiedad es muy crítico dentro de las áreas protegidas. Este problema no permite resolver conflictos e implementar estrategias de gestión, de administración o de participación del sector privado o de otros sectores en la administración de servicios que se pueda dar dentro estas unidades de conservación. Un ejemplo es lo que ocurrió en el Parque Amboró, donde se tenía más de 3000 títulos agrarios distribuidos dentro una unidad de conservación, dentro una categoría de área protegida que significaba la no posibilidad de uso de recursos naturales y al mismo tiempo existía esos títulos que les permite usar los recursos suelo, forestales u otros. Esto obligó a cambiar la categoría de Parque Nacional a Área Natural de Manejo Múltiple Integrado (ANMI)

Otro problema en las áreas protegidas son los bajos beneficios que recibe la población local, lo que también está vinculado a la dependencia del financiamiento externo, aunque esto ha mejorado en algo a través del fondo fiduciario que hay para las áreas protegidas, pero todavía hay una marcada dependencia de recursos externos de donación que hasta hace 5 años ha sido cerca del 98% del financiamiento

que se requiere para el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que hace muy vulnerable al sistema principalmente cuando cambian las políticas de cooperación internacional, por ejemplo, en los sueldos que pueda recibir un guarda parque. La misma dependencia ocurre en la toma de decisiones que son muy influidas desde una lógica del centralismo y una dependencia externa.

Finalmente, el diagnóstico hace referencia al tema de la pobreza ligado con la biodiversidad, es decir describe la situación social de los gestores de biodiversidad. Una referencia de las Naciones Unidas indica que el 40% de la economía mundial se basa en productos y servicios biológicos, esto significa que entre 900 y 1200 millones de pobres del mundo dependen para vivir de la diversidad biológica. En nuestro país esa analogía es también muy fuerte, porque 3 millones de personas están viviendo en el área rural y dependen de la diversidad biológica para su desarrollo, y un 81.6% de esta población esta catalogada como pobre.

4. La Estrategia Nacional de Biodiversidad

Bajo el enfoque de diagnóstico que presentamos muy rápidamente, se desarrolla la estrategia boliviana de biodiversidad. Primero recalcar que se ha trabajado bajo una plena concertación entre Gobierno y Sociedad Civil y para un período de 10 años (2002 a 2012). La estrategia esta respaldada por el Decreto Supremo N° 26556, que aprueba la estrategia en un horizonte hacia los próximos 10 años y que debe ser considerada a nivel regional, a nivel de municipios y a nivel de áreas protegidas, estas últimas principalmente en lo que es la gestión y conservación de la biodiversidad.

En el marco de la estrategia dos pilares se contraponen, como es riqueza y pobreza. Somos un país megadiverso muy rico en biodiversidad, pero al mismo tiempo somos un país con tasas elevadas pobreza. Esta dicotomía ha sido trabajada y discutida en el sentido de que se deben buscar mecanismos para hacer que esa riqueza natural a la que se hace referencia no solo constituya un patrimonio natural, sino que fundamentalmente a través de la concepción del uso sostenible permita fortalecer la conservación y al mismo tiempo luchar contra la pobreza.

La estrategia se plantea dentro una filosofía de que Bolivia desde los años 90 ha trabajado muy fuerte en lo que es la protección estricta a través de reglamentaciones, normas, leyes, donde destaca la restricción hacia la intervención humana y no ha trabajado la otra lógica o la otra perspectiva que es la del uso sostenible, mediante la cual se de la posibilidad de que usando o generando beneficios principalmente para las comunidades locales, se puede potenciar la conservación de nuestro patrimonio natural.

Sobre este último enfoque se desarrolla el objetivo estratégico, que indica: *“Desarrollar el potencial económico de la diversidad biológica, asegurando la conservación y uso sostenible de esa diversidad biológica, con una distribución equitativa de beneficios”*

La estrategia plantea 5 áreas de intervención en su plan de acción, que son:

- A1. Fortalecimiento de capacidades nacionales para la gestión
- A2. Conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos, especies y recursos genéticos de importancia ecológica, económica y cultural.
- A3. Atracción de inversiones en productos y servicios de la biodiversidad
- A4. Fortalecimiento de la gestión local en biodiversidad
- A5. Comunicación y educación. Esta debía ser una base transversal por ejemplo en la reforma educativa.

Los resultados esperados de la implementación del plan de acción y la estrategia son:

- La integración de los actores excluidos. Es interesante ver a futuro como esos 1280 actores involucrados en la construcción de la estrategia como líderes han empezado a generar acciones en sus regiones y para ello han utilizado la estrategia.
- Consolidación del Sistema Nacional de Conservación de Recursos genéticos.
- Seguridad jurídica para el acceso a la biodiversidad (este es un tema que se espera como un resultado fundamental).
- Establecimiento de un régimen fiscal que garantice la conservación y la distribución justa de los beneficios. En Bolivia por el tipo de régimen fiscal, por la forma que se están distribuyendo los beneficios que se generan a través de la actividad forestal, el uso de recursos de biodiversidad u otros, no existe la posibilidad de entrar en una distribución justa de beneficios. Por eso en el proceso se ha elaborado una propuesta para modificar el régimen fiscal y se incluya esta posibilidad.
- Un nuevo modelo de conservación y uso sostenible de biodiversidad. Este modelo debemos construir en base a algunas líneas que ya se ha empezado a discutir en el proceso; se debe trabajar y construir desde las comunidades y desde los municipios.
- Reducir el grado de amenaza de la biodiversidad priorizada. Algunas especies están en alto riesgo de extinción y por lo tanto se han priorizado estas como las de mayor atención en cuanto a su protección y conservación, además de medidas concretas para revertir estas tendencias.
- Aumentar la incidencia del sector biodiversidad en el PIB de 4 al 10%. Se piensa sobre todo en los servicios de ecoturismo y también en otros productos y servicios como la captura de carbono. Se habla de una expansión de los ingresos de 350 a 1650 millones de dólares en regiones deprimidas y pobres de Bolivia, en los próximos 10 años.

- Las organizaciones y comunidades indígenas campesinas liderizan la gestión sostenible de la Biodiversidad,
- Los gobiernos municipales tienen capacidad y personal técnico para la gestión sostenible de la Biodiversidad. En los municipios no existen unidades especiales que estén trabajando el tema de biodiversidad, por lo que en el plan existen medidas concretas para generar estas condiciones.
- La currícula de formación escolar, universitaria y de las normales incorporen transversalmente el tema de la Biodiversidad. Esto también esta en marcha.

El Parque Nacional Sajama

Franz Guzmán¹

Albertina Calle²

1. Introducción

El Parque Nacional Sajama (PNS), como muchas otras áreas protegidas (AP), también ha tenido que pasar y afrontar diversos problemas sobre todo cuando se empezó con la gestión del parque en 1995. Es menester aclarar que el PNS es la primera área protegida de Bolivia y tiene una antigüedad de más de 60 años, pero la gestión de esta AP bajo reglamentos, planes y la participación de la población local recién se inició en el año 1995.

Los principales conflictos que se tuvo que afrontar provenían esencialmente de la desconfianza que tenían las comunidades locales ante el Estado y los agentes externos. Esto tiene una explicación desde el punto vista histórico, puesto que desde el período colonial se aplicaron diversas formas de dominación y explotación como fueron las encomiendas y los cobros de tributos por el uso de la tierra, quedando hasta la fecha muchas secuelas negativas de ello. Al iniciar la gestión del PNS se tuvo que resolver esa desconfianza, para lo cual se implementó un largo proceso de discusión con las autoridades comunales y la población local hasta lograr establecer acuerdos que permitan devolver la confianza.

Uno de estos acuerdos fue la elaboración de un plan de manejo participativo con toda la población local, abarcando todo este proceso alrededor de 4 años: 2 años en su elaboración y 2 años en su concertación y consenso, concluyéndose en junio de 2003. En este plan prevalecen los derechos y la reivindicación de las

1 Ingeniero Agrónomo. Director del Parque Nacional Sajama.

2 Presidenta del Comité de Gestión del Parque Nacional Sajama.

comunidades, puesto que se respeta la propiedad de sus tierras, sus usos y costumbres. Por otra parte, el Comité de Gestión del PNS se debía conformar con la participación de todas sus principales autoridades originarias (Jilakatas y Mallkus) y Corregidor, además el presidente del Comité de Gestión debía ser un representante de las comunidades y no así de las instituciones gubernamentales u otras instituciones externas. Bajo estos acuerdos se ha ido superando la desconfianza y los conflictos que se tenían a raíz de ello.

Actualmente la gestión del PNS se encuentra en un proceso de implementación de acciones y proyectos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. Después de aproximadamente 8 años de trabajo, se puede indicar que se viene trabajando del brazo de las comunidades logrando muchos resultados positivos en beneficio de las comunidades y la población local, incluso las comunidades vecinas que veían con desconfianza al PNS ahora quieren formar parte de esta, puesto que ven al parque como una alternativa para conseguir proyectos de desarrollo para sus comunidades.

Sin embargo, el PNS tiene aún muchos problemas que resolver para hacer que la gestión del parque sea mucho sostenible. Aquí pretendemos mostrar tanto los avances logrados como los problemas y retos que aún tiene el PNS.

2. Ubicación, creación y características físico naturales

El Parque Nacional Sajama (PNS) está ubicado en la región del Altiplano Central, junto a la cordillera volcánica u occidental de Bolivia que se caracterizan por sus nevados permanentes y elevada altitud (sobre los 4000 msnm). Política y administrativamente pertenece a la Provincia Sajama del Departamento de Oruro y es parte de los municipios de Curaguara de Carangas y Turco. Abarca 9 ayllus del municipio Curaguara de Carangas (Caripe, Sajama, Lagunas, Suni, Papelpampa, Jila Uta, Manasaya, Cruz de Huayllas y Caracollo de Cosapa) y 2 cantones del municipio de Turco. En el área del parque viven aproximadamente dos mil habitantes, mil en las áreas de influencia y diez mil en las zonas de amortiguación.

El PNS fue creado por el Decreto Supremo del 2 de agosto de 1939, y ratificado por Decreto Ley de 1945. Pero su gestión recién se inició en 1995, después de un largo período de inactividad (de más de 60 años). La principal razón para su creación fue la explotación irracional que soportaban los bosques de Queñua (*Polylepis tarapaca*), ya que estos bosques eran intensamente utilizados para proveer leña y carbón vegetal a las minas de Oruro y los ferrocarriles. Entonces, con la declaratoria de Parque Nacional se pretendió limitar este aprovechamiento irracional.

Si bien el PNS por Ley tiene la categoría de Parque Nacional, en el Plan de Manejo se ha incorporado, (en concertación con las comunidades locales) la categoría de Área Natural de Manejo Integrado (ANMI). De esta manera el PNS tiene actualmente áreas de uso restrictivo de recursos naturales y donde se aplica la categoría de Parque Nacional como son las zonas por encima de la cota 4000, en realidad desde donde empiezan los bosques de queñua. Mientras que en otras zonas donde existe por ejemplo pastizales, bofedales, pastoreo de ganado y asentamientos poblacionales, se aplica la categoría de ANMI. Por otra parte, existen zonas de usos especiales como son los habitados para la vicuña y de uso turístico.

Entre las principales características físico naturales del PNS indicar que el clima es seco y frío con una temperatura media anual de 3.4 °C, con presencia de heladas durante todo el año, principalmente entre los meses de mayo a octubre. La región es árida con precipitaciones anuales inferiores a los 400 mm/año y sus ríos como el Sajama y Tomarapi son parte de la Cuenca del Altiplano Central.

El rango altitudinal oscila entre 4000 y 6542 msnm. Fisiográficamente se caracteriza por la presencia de planicies, lagunas e imponentes conos volcánicos. Destacan los picos nevados de los Payachatas, Condoriri y Sajama, esta última constituye la montaña más alta de Bolivia con 6542 msnm, lo que le convierte en una atracción para los andinistas nacionales y extranjeros. Los suelos son de origen volcánico de mediana a baja fertilidad, de texturas livianas sobre todo arenosos.

La vegetación corresponde al tipo alto andino. Se tiene registrado 154 especies de flora y 250 especies de plantas superiores como son los musgos y las epífitas. Entre la vegetación destacan los bosques de queñua (*Polylepis tarapaca*), los tholares - pajonales (*Parastrephia lepidophylla*, *P. lucida*, *Baccharis incarum*), la yareta (*Azorrella compacta*) y las gramíneas (*Festuca dolychophila*, *Stipa ichu*, *Calamagrostis* ssp., *Pycnophyllum* ssp., *Accichne pulvinata* y otras).

La fauna es muy rica, identificándose hasta el momento 108 especies de animales en todo el área protegida. En la fauna destaca la vicuña, el zorro andino, el quirquincho, el gato andino o titi, el puma, el suri, el cóndor, la choca, la Parihuana y varias aves pequeñas como el *Satenes arequipae*, *Oreomanes fraseri* y *Phrygilus erythronotus*.

3. Potencialidades naturales y culturales del Parque Nacional Sajama

Excepcional belleza escénica altoandina: El nevado del Sajama de 6542 msnm y otros nevados como los Payachatas, Condoriris, Anallajchi, lagunas andinas, aguas termales, geiseres y rutas de andinismo le dan una única belleza escénica altoandina.

Los bosques más altos del mundo: Los bosques de Queñua (*Polylepis tarapaca*) sobre pasan los 52000 msnm, convirtiéndose en los bosques que crecen a mayor altitud en el mundo. Estos bosques cubren más de 10000 hectáreas y tienen un alto y especial interés científico.

Típica vegetación altoandina: Existen más de 154 especies, destacando importantes poblaciones de yareta, bofedales, pastizales húmedos, tholares y otros.

Típica fauna altoandina: Existe una importante fauna altoandina protegida, destacando la protección de la vicuña que para el año 2001 se censaron 3500 unidades en protección dentro el PNS; además están protegidos especies de animales como el suri, el cóndor, el quirquincho, el puma, el zorro, el taruca, el venado andino y una gran variedad de avifauna.

Reservorio de recursos genéticos: Es un área importante para la cría y la selección de camélidos (llamas y alpacas), animales que actualmente tienen un alto potencial económico para la producción de carne, fibra y artesanía.

Colindante con el Parque Nacional Lauca: Tiene como área contigua al Parque Nacional Lauca de la República de Chile, declarado como Reserva de la Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad.

Sitios arqueológicos y culturales: Dentro el PNS existe una variedad de sitios arqueológicos y culturales como los chullpares, pucaras, pictografías, ruinas precolombinas e iglesias coloniales. Asimismo se han redescubierto los “Seques”, que se interpreta como callejones que entran y salen del nevado Sajama. Estas líneas o callejones son muy sorprendentes por su diseño y visibilidad desde el espacio, por lo que tienen un interés científico y cultural ya que revelan que nuestros ancestros conocían muy bien la posición del sol y las estrellas. Es así que el diseño de estas vías tiene relación con la posición de algunas estrellas y astros, cuidando además el paso de las vías por diferentes tipos de terrenos como bofedales, lagunas, arenales y otros. Antiguamente los ancestros tenían sus propios dioses, apus y achachilas, que devienen de la Pachamama que es la tierra, el sol, el agua y el fuego, y para comunicarse con ellos se construían caminos simbólicos como los seques.

Población que mantienen rasgos culturales Aymaras: La población mantiene la herencia cultural de los aymaras de la nacionalidad Carangas que llegaban al Pacífico y los valles de Cochabamba, conservándose muchas de sus costumbres y festividades como la del 21 de junio (año nuevo aymara), el 8 de septiembre y el 11 de noviembre y otras.

Creciente visita de turistas: Anualmente el PNS visita alrededor de 3500 turistas/año, de los cuales el 50% provienen de Europa (Alemania, Francia y otros). Un 30% de los turistas visitan el PNS con fines de andinismo.

El turismo está en proceso de permanente crecimiento, teniendo los siguientes registros desde el año 1996:

Frecuencia de Turistas en el Parque Nacional Sajama

Año	Origen		Total
	Nacional	Extranjeros	
1996	700	457	1157
1997	862	936	1798
1998	1212	1123	2335
1999	1607	1427	3034
2000	1329	1397	2726
2001	1857	1390	3247
2002	1550	1930	3480
2003	1400	1908	3308

Fuente: Registro de Turistas PNS

Posibilidad de la declaratoria de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad:
Presenta todas las condiciones naturales y culturales únicas para ser declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad.

4. La administración y el Comité de Gestión

El PNS forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. La administración está a cargo de un Director y la protección a cargo de 8 guarda parques que son de las mismas comunidades. Se cuenta con 3 campamentos, un campamento central en Sajama donde está la administración y 2 campamentos secundarios ubicados en Tomarapi y Lagunas. También se cuenta con una oficina de enlace en la ciudad de Oruro (calle Potosí #5238).

La gestión del PNS está regida por un Comité de Gestión, siendo este la instancia de participación más importante para las comunidades y la población local, puesto que a través del Comité de Gestión las autoridades comunales participan en la planificación, la toma de decisiones y coadyuvan en la fiscalización del parque. El Comité de Gestión fue conformado el 18 de diciembre de 1995, cuyos componentes son todas las autoridades comunales e intercomunales (Jilakatas, Mallkus y Corregidor), el Gobierno Central (representado por el SERNAP), la Prefectura de Oruro (representado por su Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente), el Municipio de Curahuara de Carangas y representantes de Instituciones No Gubernamentales que trabajan en el parque.

El Comité de Gestión se ha convertido en una asamblea intercantonal de toda la región, donde intervienen y participan todas las autoridades comunales e

intercomunales tradicionales como los Jilakata, Mallcus y el Corregidor. La asamblea ordinaria es cada fin de mes, donde se tratan todos los asuntos referentes al PNS y se toman decisiones en forma concertada y participativa. En estas asambleas también se tratan aspectos relacionados a los servicios de salud, educación, caminos, desarrollo sostenible y otros. Pese a que la administración del parque tiene como principal objetivo la conservación y la promoción del desarrollo sostenible, hemos aprendido que para las comunidades aymaras todo esta relacionado y no se puede separar la conservación del manejo y del desarrollo. Dentro el Comité de Gestión los principales actores en la discusión y la toma de decisiones son las autoridades locales como representantes de las comunidades, puesto que los representantes de las instituciones estatales y no gubernamentales son únicamente facilitadores y están prohibidos de asumir por ejemplo la presidencia del Comité de Gestión. Por lo tanto, son las comunidades las que actualmente velan por los destinos del área protegida.

El Plan de Manejo del PNS ha sido aprobado por las comunidades y el Comité de Gestión el 30 de junio de 2003. La aprobación de este Plan de Manejo fue difícil, puesto que hubo mucha susceptibilidad y desconfianza por parte de las comunidades sobre la propiedad de las tierras y los recursos naturales.

Dentro este Plan de Manejo se tiene un Plan de Protección que permite implementar acciones de control, fiscalización y protección ambiental. Asimismo, se tiene un Plan Integral Ganadero puesto que esta es la principal actividad económica de la zona, existiendo a la fecha en el área 45000 unidades de llamas, 31000 unidades de alpaca y 10000 unidades de ovinos. Otros planes específicos están orientados a la conservación y manejo de la vicuña y otros animales. Actualmente se cuenta con 3500 unidades de vicuñas y 1500 unidades de Zorro Andino en protección. A la fecha también se tiene en funcionamiento un proyecto de corralones, y se tiene proyectado un proyecto de CANAPAS, rebaños, sanidad y comercialización.

Como parte de un proyecto turístico se tiene un Albergue Ecoturístico en Tomarapi que ha sido establecido como una Empresa Comunal S.R.L. Para facilitar y fortalecer las actividades turísticas, actualmente se cuenta con 17 proyectos de mantenimiento de caminos y sendas turísticas y la respectiva señalización. En Caripe también hay una nueva empresa que esta incursionando en servicios de turismo.

5. Avances y proyecciones para la sostenibilidad del PNS

Como se indicó anteriormente, la situación en el área del PNS era muy crítica principalmente antes a 1995, puesto que continuaba la sobreexplotación principalmente de los bosques de queñua y tholares. La caza de animales era

igualmente indiscriminada hasta que se provocó la desaparición de especies como la chinchilla y el guanaco. Muchas personas ajenas a las comunidades, principalmente provenientes de las ciudades urbanas, realizaban cazas masivas de estos animales. Por otra parte, las organizaciones comunales no mostraban interés en el PNS, al contrario desconfiaban de esta. A raíz de ello se genera conflictos entre la administración del parque y las comunidades; además la atención de parte del Estado era nula en cuanto a servicios básicos: salud, educación y desarrollo productivo.

Después de aproximadamente 65 años de su creación y 9 años desde que se estableció el Comité de Gestión y se dio inicio a la gestión participativa del parque, la situación a cambiado sustancialmente. Las comunidades a través de sus autoridades no solo son parte del Comité de Gestión, sino que han rescatado el valor de las autoridades originarias (como son los Jilakatas, Corregidores y Mallcus de Curaguara de Carangas y Jacha Carangas), y han fortalecido mucho más sus organizaciones originarias. De esta manera el tema del PNS se ha convertido entre los puntos de mayor tratamiento en las asambleas comunales y de los ayllus. Aunque cabe recalcar que la asamblea del Comité de Gestión que se realiza cada fin de mes es la principal instancia de toma de decisiones respecto del PNS.

La educación ambiental es una actividad prioritaria para la buena gestión del PNS. Actualmente la educación ambiental no solo esta vinculada a la enseñanza escolar, sino que también se realiza en las comunidades. Un medio importante para la educación ambiental es que contamos con una radioemisora del PNS, la cual nos permite implementar programas de educación ambiental, capacitación en el manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad y hasta la emisión de mensajes. Esta radio emisora tiene un alcance de 50 km a la redonda y no solo es escuchada en el área del parque, sino también en comunidades vecinas. Por otra parte, también se realizan campañas de educación ambiental, prácticas como la limpieza y recojo de basura en todo el área del PNS. A la fecha también ya se cuenta con un texto de toda la Fauna Silvestre del PNS y que es utilizado para la educación ambiental, estando en preparación un texto similar sobre la flora.

La presencia del Municipio de Curaguara de Carangas a través de una Subalcaldía del Distrito B que comprende a todos los cantones del PNS, esta permitiendo impulsar la ejecución de proyectos no solo orientados a la conservación sino también al desarrollo humano, siendo la participación de las comunidades y la población local muy activa en ellos. Gracias a ello ha mejorado significativamente las condiciones de infraestructura y de servicios básicos para la población local, existiendo actualmente en casi todas las comunidades sistemas de agua potable, letrinas y basureros. Asimismo, se cuenta con un Hospital de servicios primarios en Tambo Quemado donde recurre no solo la población local, sino también los visitantes. Se cuenta también con un Núcleo Escolar compuesto de 7 escuelas y un colegio.

No solo ha crecido la visita de turistas al PNS, sino que las organizaciones comunales han emprendido la creación de empresas comunales de servicios turísticos como albergues, restaurantes, centros artesanales y guías comunales. Actualmente la comunidad de Caripe tiene un albergue y restaurante de buena calidad que genera empleo sobre todo para sus socios.

Para apoyar estas iniciativas, se ha implementado acciones de capacitación en gastronomía tanto nacional como extranjera, logrando resultados anecdóticos puesto que los varones han resultado ser los mejores cocineros y las mujeres las mejores administradoras, pero antes de realizar la capacitación se pensaba lo contrario. Esto es una muestra que se esta aprovechando las capacidades locales para generar empleo y la creación de empresas comunales.

Las inversiones para la creación de las empresas comunales provienen de los mismos socios. Por ejemplo para la construcción del albergue y restaurante en Caripe el aporte de cada uno de socios ha sido 1000 adobes y mano de obra para la construcción. Inicialmente algunos socios fueron incrédulos al funcionamiento de esta empresa y se retiraron. De esta manera de los 33 socios que iniciaron quedaron solo 22 socios, pero los 11 socios que se retiraron, después de ver que la empresa iba funcionando y con buenos resultados pretendieron volver. Sin embargo, la condición actual para ser socio es un aporte económico en efectivo. Esto demuestra que las comunidades pueden organizarse para emprender actividades productivas y administrar adecuadamente.

Para seguir fortaleciendo el rubro de turismo, se tiene proyectado el mejoramiento y la habilitación de áreas de camping, la apertura de sendas hacia las Payachatas, la implementación de museos en Lagunas y Caripe, la construcción de un complejo termal en Manasaya, la construcción de miradores y el ordenamiento urbano en base a planificación en Lagunas.

En cuanto al desarrollo productivo ha habido importantes avances sobre todo en la crianza de llamas, mejorándose los corrales y los servicios de veterinaria. Se han construido también sistemas de riego, siendo el principal en Caripe. Otra actividad productiva en el que se ha incursionado es el Manejo de la Vicuña con fines de producción de fibra, existiendo actualmente una Asociación Regional de Manejadores de Vicuña que aglutina a socios del área de parque y de las zonas de amortiguamiento.

Una de las permanentes preocupaciones de las comunidades fue el de preguntarse que beneficios nos va a traer la conservación de la vicuña. Una de la respuesta era la obtención de fibra de vicuña, puesto que es un producto muy apreciado y en el Perú pagan hasta 390 \$us por kilo. Después de visitar e intercambiar experiencias de manejo, captura y esquila de vicuñas en la República del Perú (específicamente en Pampa Galera región de Ayacucho) y la comunidad de Cala Cala en Puno), por primera vez en la zona de Patoco del PNS se práctico la captura y esquila de 76 vicuñas logrando obtener una cantidad de 17.8 kilogramos de fibra vellón. Así

se logró cambiar la idea de que la conservación de la vicuña no tenía beneficios, puesto que anteriormente se veía a la vicuña solo como una amenaza y un riesgo porque compiten fuertemente con la ganadería por las áreas de pastoreo.

Dada esta experiencia, las comunidades pretenden apostar en la vicuña como una alternativa para mejorar sus ingresos a través de la producción y venta de fibra, incluso algunos comunarios plantean traer vicuñas de otras regiones. Entonces con la vicuña ya no solo se persigue su conservación, sino también se está incorporando procesos de manejo sostenible. La Ley boliviana dice que los beneficios de la vicuña solo pueden ser aprovechadas por las comunidades y no así por las instituciones, lo que es una verdadera ventaja para las comunidades. En Bolivia solo se tiene experiencias de producción de fibra de vicuña en la Reserva de Ulla Ulla donde se viene trabajando desde hace unos 4 años, mientras que en el Perú se trabaja desde hace unos 10 años atrás.

Otro avance importante en el área del PNS es el saneamiento de tierras. Inicialmente no se podía pensar dentro del parque en el saneamiento de tierras, puesto que la desconfianza y susceptibilidad de las comunidades por perder sus tierras no permitía. Luego de un año intenso de trabajo, análisis y discusión con las comunidades, se ha tomado la decisión de implementar un proyecto de saneamiento de tierras con el apoyo del SERNAP y el PNS, encontrándonos al momento en busca de financiamiento. Con el saneamiento de tierras lo que se pretende es solucionar algunos conflictos y garantizar la propiedad de las tierras por parte de las comunidades.

Pese a que hay pocas instituciones no gubernamentales que trabajan en el PNS, su apoyo y sus aportes a la gestión del PNS es importante. Así se tiene por ejemplo a BIOTA que se dedica a la investigación de animales carnívoros, al CECI que hace el monitoreo de vicuñas y a YUNTA que viene construyendo pozos de agua potable. A través del SERNAP se tiene otros proyectos especiales como el Proyecto MAPZA-GTZ/GFA y el Proyecto BIAP-KFW-FUNDESNAIP.

La promoción y difusión del turismo es otra actividad que se viene encarrilando como mucha prioridad. Actualmente ya tiene una página web del PNS, el que está permitiendo difundir sus atractivos y potenciales turísticos en todo el mundo. Por otra parte, se tiene convenios con agencias de turismo: 2 en la ciudad de Oruro y 7 en la ciudad de La Paz. Se tiene también convenios con varios establecimientos urbanos y algunas carreras de la Universidad Técnica de Oruro que permiten la difusión de los atractivos turísticos del PNS.

6. Principales problemas

Debido a que la principal actividad económica de la población local (80%) es la crianza de camélidos (llamas y alpacas), se ha incrementado el número no solo de camélidos sino también de vicuñas, lo que está ocasionando un serio so-

brepastoreo en las praderas y bofedales. Por otro lado, el clima extremadamente frígido y de variaciones extremas afecta a los animales, teniendo que lamentarse pérdidas muy significativas en muchos años. Para contrarrestar esta situación, se requiere de mayor orientación y asistencia técnica en el manejo y la sanidad animal. El incremento de las poblaciones de animales silvestres carnívoros como el zorro andino y el puma es otro problema, ya que ocasionan fuertes daños al ganado camélido y ovino.

La carretera internacional Patacamaya-Tambo Quemado que pasa por el área del PNS, ocasiona problemas de contaminación ambiental por la deposición de basura en zonas adyacentes a la carretera.

Algunos conflictos de límites entre cantones y algunas comunidades está todavía vigente, lo que se pretende resolver con el saneamiento de tierras. Finalmente, las escasas fuentes de empleo en la zona siguen obligando a la migración de jóvenes principalmente hacia la República de Chile.

Petroleros adentro, campesinos afuera: bio-petro estrategias de control de áreas protegidas y lógicas conservacionistas

René Orellana H.¹

1. Introducción

Algunas áreas protegidas se han convertido en los últimos años en escenarios de conflicto entre campesinos principalmente y administradores de las áreas. Las organizaciones campesinas han denunciado por su parte la lógica excluyente respecto a ellos de la legislación vigente relativa a áreas protegidas y la flexibilidad que parece existir en estas áreas respecto a operadores petroleros.

A principios de 2003, diversas representaciones de comunidades que habitan en parques y otras categorías de APs se reunieron en un gran evento nacional, manifestando por escrito su oposición a la creación de más áreas protegidas, exigiendo la recategorización de algunas y la anulación de otras, además de la apertura de un proceso de concertación para fines de elaboración de una normativa de biodiversidad y áreas protegidas que considere procesos de gestión campesinas-indígena y colonizadora.

Es evidente que, después de varios años de conflictos sociales en Bolivia, motorizados por actores rurales, el estado no puede prescindir de procesos de concertación con actores campesinos e indígenas, particularmente en lo referido al rediseño del modelo de protección y conservación vigente en Bolivia. Hasta hoy el proceso de creación de APs y la ingeniería relativa a la elaboración de norma jurídica en la materia parece haberse concentrado en ciertos círculos técnicos en los que predomina cierta visión estigmatizadora de los actores campesinos y

1 Licenciado en Sociología. Consultor del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CEN-DA). Candidato a Ph.D. en Antropología Jurídica. E-mail: salvador@supernet.com.bo

colonizadores respecto de la conservación, visión que es claramente legible en la legislación vigente.

En contraste con políticas más o menos adversas o desconfiadas de la presencia y participación campesina en procesos de protección y conservación, las entidades públicas han promovido un proceso de privatización de la administración de APs y se han manifestado relativamente flexibles ante la presencia de operadores extractivos en estas áreas cuyas actividades se han generalizado, llegando incluso a controlar extensiones significativas de varios parques, reservas y áreas de manejo integrado. A la par de este proceso, parecen tejerse de manera cada vez más visible, relaciones de apoyo mutuo, asociaciones con beneficios compartidos en algunos casos (como veremos en este artículo) entre agentes conservacionistas y operadores petroleros; relaciones que no parecen configurar un sincero compromiso con la protección y la conservación de la naturaleza.

En el presente artículo voy a procurar ilustrar el grado de penetración de operadores petroleros y mineros en áreas protegidas, excediéndome y extendiéndome en algunos casos en la presentación y la comparación de datos para que el y la lectora juzguen según diferentes versiones existentes al respecto; por otra parte, voy a detenerme a reflexionar brevemente sobre la forma en que se crean áreas protegidas, las disposiciones excluyentes y desconocedoras de las actividades productivas comunales en que se sustentan estas áreas (tomando la precaución de citar algunos casos). Finalmente me detendré a observar algunos ejemplos de alianzas y prácticas de instituciones no gubernamentales que ponen en duda, por decir lo menos, su verdadero compromiso con la conservación y exigen la apertura de una reflexión en vistas a realizar cambios en las políticas de protección y en la legislación vigente.

2. Imágenes de intervenciones extractivas

Es difícil ilustrar con certeza estadística y geográfica la presencia de petroleros y mineros en áreas protegidas; no tenemos información clara y completa al respecto, y el propio Estado a través de sus diferentes agencias, nos brinda datos diferentes.

Poniendo varios documentos en la mesa, tenemos en frente varias versiones informativas que vale la pena confrontar en la perspectivas de desarrollar, no digamos juicios definitivos, pero al menos conclusiones preliminares que nos permitan pensar el tema.

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) nos ofrece información contradictoria. En primer lugar, según sus datos, la superficie total de concesiones hidrocarburiíferas en Bolivia sería de 5.688.413 hectáreas, lo que nos resulta altamente

sorprendente porque según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hasta 1997 (año en que las reservas de gas estaban contabilizadas en 5.9 TCF probadas+probables, contra 54 TCF en 2002²), la extensión concedida era de 16.6 millones de hectáreas (Lavadenz: 1997); sólo en 1997 se otorgaron 10,2 millones de hectáreas con la nueva Ley de Hidrocarburos (Gandarillas, 2001: 56) de las cuales 8.790.837,76 has. corresponden a bloques con más de un millón de hectáreas. Según los datos de estas fuentes, podríamos inferir que hacia finales de 1997 existirían en Bolivia alrededor de 26 millones de hectáreas con contratos de exploración y explotación.

No parece muy real que la extensión en explotación y exploración haya descendido tanto, máxime si tomamos en cuenta que la nueva Ley de Hidrocarburos recién entra en vigencia en abril de 1996, tendiendo la alfombra para la llegada de nuevas inversiones y el incremento de operaciones. Aquí presentamos nuestra primera duda.

Con respecto a la sobreposición de operaciones petroleras con áreas protegidas, el SERNAP nos brinda la siguiente información:

Cuadro 1
Áreas Protegidas Afectadas por Concesiones Hidrocarburíferas,
según SERNAP-2003

Area Protegida	Superficie	Superficie de Sobreposición (ha)	Porcentaje (%)
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia	247.435,1000	109.492,5082	44,25
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Aguarague	111.076,0992	95.377,2952	85,87
Parque Nacional y Area de Manejo Integrado Amboró	594.809,2078	117.804,7283	19,81
Parque Nacional Carrasco	686.975,9000	21.479,0639	3,13
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré	1.256.597,9713	121.882,7271	9,70
Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilon Lajas	398.451,1000	344.348,0800	86,42
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi	1.867.809,8990	549.882,9032	29,44
Total	5.163.155,2773	1.360.267,3059	26,35

En la lista del cuadro anterior, sin embargo, se ha omitido al pnanmi Kaa Iya. Ahora bien, la omisión proviene de diferentes datos y lecturas de lo que se

2 Villegas, 2003: 46.

entendiendo por operación hidrocarburífera. Según un informe de YPFB de 1999 existían varios bloques de exploración concedidos dentro del Kaa Iya³, representando cuando menos el 20% de su extensión. Por otra parte, debemos apuntar que tanto el Kaa Iya como el ANMI San Matías fueron seriamente afectados por el gasoducto principal al Brasil, en el primer caso, y el ramal a Cuiabá (Brasil) en el segundo.

Si comparamos los mapas que se adjuntan como anexo, podemos empezar a trabajar impresiones sobre las diferencias en los datos. En estos mapas se pueden observar grandes diferencias; en primer lugar es conveniente advertir que la fuente confiable para proveer información de operaciones petroleras es YPFB, entidad encargada por ley de suscribir contratos de riesgo compartido otorgando áreas de operación. La Superintendencia de Hidrocarburos (fuente citada por el SERNAP) tiene por ley únicamente competencias sobre gasoductos, poliductos, transporte y refinación de hidrocarburos.

En el Mapa C (ver anexo) correspondiente al SERNAP, cuya fuente es la Superintendencia de Hidrocarburos, extrañamente no aparecen áreas con contratos de exploración y explotación en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo cual ya inspira muchas dudas. Comparándolo con el Mapa A podremos ver cuan intervenido por operaciones petroleras está el TIPNIS.

El sernap manifestó en el primer semestre de 2003 que en 8 áreas protegidas se habían concedido 24 concesiones de exploración y explotación a favor de 7 empresas petroleras (Chaco, Petrobras, Andina, Total, Maxus, Don Wong y Repsol). No obstante, el Cuadro 1 del sernap que hemos visto anteriormente no incluye al Kaa Iya (área en la que opera Don Wong), con lo que se contabilizan solamente 7 áreas protegidas afectadas. Siguiendo este cuadro podemos observar que el área sobrepuesta asciende a 1.360.267 hectáreas. Las áreas más afectadas porcentualmente respecto de su extensión total son Aguarague (85,87%), Pilón Lajas (86,42%) y Tariquía (44,25%). El área con mayor extensión en términos absolutos es Madidi (549.882 has.), siguiéndole Pilón Lajas (con 344.348 has.) y Amboró (con 117.804 has.). Debemos plantear, sin embargo, muchas dudas sobre la certeza del área total de superposición calculada por el sernap. Un estudio realizado por la Asociación Abt Associates Inc.-PCA. Ingenieros Consultores S.A. por encargo del Viceministerio de Energía e Hidrocarburos el año 2001 –con el auspicio del BID (programa 598/0C-bo) y en el marco del Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarburífero–, nos ofrece datos muy diferentes; según la información construida por la consultora, el área de superposición de operaciones hidrocarburíferas con áreas protegidas sería de 2.690.650,71 has (Cuadro 2).

3 De hecho, el Responsable de la Unidad de Petróleo y Medio Ambiente del SERNAP, José Coello, declaró a la prensa en 2003 que en el PANMI Kaa Iya operaba la petrolera Don Wong.

Cuadro 2
Sobre posición de Operaciones Petroleras y Áreas Protegidas.
Comparación de datos

Sobreposición de operaciones petroleras y Áreas Protegidas según SERNAP (*)	Sobreposición de operaciones petroleras y Áreas Protegidas según Abt Associates Inc.-P.C.A.-VEH-BID (**)	Diferencia
1.360.367	2.690.650,71	1.330.283,71

(*) Fuente: SERNAP (información complementaria actividad hidrocarburífera y minera SNAP, septiembre 2003).

(**) Fuente: Asociación Abt Associates Inc.-P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. (con el auspicio del BID y en el marco del Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarburífero-Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, 2001).

La notable diferencia se observa sobre todo por cálculos de extensiones mayores de operación petrolera en TIPNIS, Madidi, Tariquía, Aguarague, Amboró y Carrasco, pero principalmente por el dato revelador de operaciones hidrocarburíferas en el Kaa Iya sobre una extensión de 599.442 hectáreas (cuadro 3).

El año 2000, YPFb informaba que en el Kaa Iya se habían otorgado varios bloques que no aparecen en los mapas del SERNAP. A octubre del 2000, la empresa Don Wong había ya efectuado prospecciones sísmicas en los bañados del Izozog en varias líneas que totalizan 423,85 kms sobre un área de 250,11 km². Hasta esa misma fecha, la empresa Chaco había realizado prospecciones sísmicas en líneas en una extensión de 1.813,68 kms. en diversas áreas que incluyen Aguarague, Bermejo-Churuma, Chimoré I (Abt Associates INC-PCA, pág. 2.21). Según la misma fuente existían varios bloques concedidos en el Isiboro Sécore que tampoco figuran en el mapa del SERNAP. Hasta finales de 2000, el 67% de las actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas eran básicamente sísmicas (ibid, 9-19).

Más allá de estos datos contradictorios, lo real es que el área de interés petrolero es francamente extensa y aunque eventualmente las operaciones no afecten a todas las áreas protegidas, si lo harán en el futuro en la medida en que se realizarán operaciones de exploración y explotación. Podemos afirmar a primera vista que más del 40% de San Matías es área de interés hidrocarburífero, igualmente sucede con todo el Kaa Iya y casi toda la superficie de Otuquis, Carrasco, Isiboro Sécore (TIPNIS), Pílon Lajas, Madidi, Apolobamba, Aguarague y Tariquía entre otras. Según la fuente citada, el área con potencial hidrocarburífero asciende a 611.000 km² (55.6% del territorio boliviano), de los cuales la mayor parte de encuentra en el Beni (102.944 km²), en el Chaco (118.750 km²) y en el Altiplano (110.464 km²). A octubre de 2000, YPFb estaba licitando ya 55.765,32 km². de esta área de interés.

En el siguiente cuadro podemos observar la superposición de áreas protegidas con áreas de interés petrolero, así como las áreas en proceso de intervención a octubre de 2000.

Área Protegida	Empresa (*)	Sup. en Exploración (*) (has.)	Sup. en Explotación (*) (has.)	Superficie Sobrepuentea Datos SERNAP (*)		Superficie Sobrepuentea Datos Aut Associates Inc.-P.C.A.-VEH-BID (**)		Población aproximada y comunidades(***) (has.)
				Extensión (has.)	% respecto del AP	Extensión (has.)	% respecto del AP	
PN Carrasco	Chaco	14.542,3106	6.937,6847	21.479,0639	3.13	68.670,71	11.03	– 23.200 hab. – Más de 20 comunidades y varios centros poblados
	Petrobras	121.882,7271	ND	121.882,7271	9.70	474.907	43.17	– 28.413 hab. – 91 comunidades
RBTI Pílon Lajas	Petrobras	146.206,1261	ND	344.348,0800	86.42	251.414	62.85	– 6.513 hab. – Más de 25 comunidades y varios centros poblados.
	Repsol	198.141,9539	ND					
PNANMI Madidi	Total	344.348,0800	ND	549.882,9032	29.44	720.032	39.10	– 13.013 hab. – Más de 33 comunidades.
	Petrobras	360.232,4191	ND					
RNFF Tariquia	Repsol	189.650,4641	ND					
	Total	549.882,9032	ND	105.540,0907 (****)	44.25	247.435	100.23	– 27275 hab. – Más de 11 comunidades y varios centros urbanos del entorno.
PNANMI Auguarague	Andina	96.857,5779	ND					
	Chaco	ND	8.682,5128					
PNANMI	Total	30.666,2887		95.377,2952	85.87	108.077	99.88	– Más de 10.221 hab. – Más de 30 comunidades.
	Petrobras	10.161,7845	81,4017					
PNANMI	Maxus	63,3557						
	Chaco	50.029,4633	4.374,9991					
PNANMI	TOTAL	90.920,8922	4.374,991					
	Andina	117.804,7283	ND	117.804,7283	19.81	220,673	34.61	
PNANMI	Andina	ND	ND	ND	ND			
	Kaa Iya	N	ND	ND	ND	599.442	17.42	– Más de 25.070 hab. – Más de 27 comunidades.

(*) Fuente: SERNAP (información complementaria actividad hidrocarbúrfica y minera SNAP, septiembre 2003).

(**) Fuente: Asociación Aut Associates Inc.-P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. (con el auspicio del BID y en el marco del Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarbúrfico-Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, 2001)

(***) Fuente: Calvo L.M. (Diversidad cultural y principales actores en el aprovechamiento de la biodiversidad, 2003) Incluye el área de protección estricta y el área de manejo integrado (y los centros poblados dentro de ésta última).

(****) Extrañamente la suma del área de exploración y la explotación no coinciden con el total de sobreposición sugerido por el SERNAP (109.492,5082 has.) a pesar que la fuente de los datos es esta misma institución.

Cuadro 4
Áreas de Interés Hidrocarburífero,
Áreas con Contrato Hidrocarburífero y Áreas Protegidas

Área Protegida	Nombre de la Zona de Interés Petrolero	Area de Exploración	Contrato Explotación
ANMI Otuquis	Chaco		(X)
ANMI El Palmar	Subandino Sur		(X)
ANSI San Matías	Pantanal		(X)
Estación Biológica del Beni	Beni		
PN Carrasco	Subandino Sur	Chimoré	
	Pie de Monte	Chimoré	Bulo Bulo, Carrasco, Katari
PANMI Amboró	Subandino Sur	Amboró Espejos	
	Pie de monte	Amboró Espejos	(XX) (X)
PANMI Aguarague	Subandino Sur	Aguarague, San Antonio, San Alberto, Tarija Oeste, Bereti	Caigua, Los Monos(XX)
	Pie de Monte	Tarija Oeste, Bereti, Yacuiba	Vertiente, Vuelta Grande.
PANMI Kaa Iya	Chaco	Parapeto, Ustárez, Bañados	(X)
PANMI Madidi	Madre de Dios		
	Subandino norte	Tuichi	
PNTI Isiboro Sécuré	Beni	Chapare	
	Subandino norte	Sécuré	
PNTI Pilón Lajas	Beni		
	Subandino norte	Subandino norte	
RN Manuripi Heath	Madre de Dios (*)		
RN Tariquía	Subandino sur	Tarija Oeste, Bermejo-Churumas, Bambari.	Churumas

(X) Presencia de Ductos.

(XX) Área tradicional.

(*) Se realizaron actividades exploratorias pero actualmente no existen operaciones.

Fuente: Asociación Abt Associates Inc.-pca. Ingenieros Consultores S.A. (con el auspicio del BID y en el marco del Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarburífero-Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, 2000).

A este conjunto de variables hay que agregar las operaciones de transporte de gas y petróleo (que figuran ya en el Cuadro 4) a través de ductos, cuya superficie de afectación a áreas protegidas no está claramente identificada (4 áreas estarían afectadas por actividades de transporte (ibid 9-15)). El SERNAP lamentablemente

no considera la variable gasoductos en la construcción de sus mapas de superposición y en el cálculo de áreas de operación hidrocarburífera. Si sumáramos las extensiones de impacto que las redes de poliductos, oleoductos y gasoductos implican, nuestros datos se incrementarían. Por ejemplo, existen poliductos en operación que afectan al Parque Carrasco (varios oleoductos pasan cerca del parque y algunos lo afectan de manera directa⁴) y gasoductos que afectan al Kaa Iya, al Otuquis (ambos afectados por el gasoducto a Brasil que tiene una extensión de 557 kms en territorio boliviano) y a San Matías (afectado por el gasoducto a Cuiabá que tiene una extensión de 361 kms.) y Aguarague (afectado por varios ramales de oleoductos y gasoductos).

Si a este escenario añadimos las concesiones mineras, el panorama se complica aún más. Las concesiones mineras se concentran en el TIPNIS (en el área del Sécure), en Madidi (precisamente coincidente con el bloque Tuichi), Pilón Lajas entre otras. No he podido lamentablemente cuantificar con datos actualizados la extensión de operaciones mineras, particularmente las que afectan a áreas protegidas, sin embargo podemos afirmar que a 1997, el área correspondiente a concesiones para este tipo de operaciones era de 12.067.000 has. (Lavadenz, 1997). Es perfectamente presumible que la extensión se haya incrementado sustancialmente pues el nuevo Código Minero correspondiente al 17 de marzo de 1997 (primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada) brindó grandes favores a las actividades mineras⁵.

Si, por otra parte, nos animáramos a incluir en este análisis las concesiones forestales otorgadas dentro de áreas protegidas, el mapa de operaciones extractivas en éstas áreas se haría mucho más complejo⁶.

Estas evidencias nos señalan claramente que la legislación ambiental y particularmente la relativa a áreas protegidas en Bolivia no representa ningún obstáculo para las operaciones extractivas. Es más, lo grave es que no se han hecho visibles campañas de organismos estatales, particularmente el SERNAP e incluso de organizaciones ambientalistas comprometidas con la conservación para detener operaciones petroleras que están generando impactos visibles en áreas protegidas.

4 Oleoducto Carrasco-Víboras-Caranda (193,2 kms de longitud), Carrasco-Caranda (126 kms.), Surubí-Carrasco (14.171 kms.), Carrasco-Cbba (247.074 kms.). (ibid, págs. 2-24,25).

5 Entre estos favores debemos incluir: i) la posibilidad de desviar cursos de aguas y aprovechar las que alumbren en el área de operación; ii) ejecutar construcciones, instalaciones, aprovechar materiales vegetales y otros del suelo y el vuelo en el perímetro de su concesión y pagar una patente que está en un rango de 5 a 250 bolivianos por cuadrícula (cada cuadrícula tiene 25 hectáreas). (Véase artículos 34 al 38 y 48 al 52).

6 Existen concesiones forestales en el TIPNIS (en la regiones del Isiboro y del Sécure), en la Reserva del Choré, Aguarague, Madidi, Lecos de Apolo, Pilón Lajas (coincidentes igualmente con el bloque Tuichi).

Por el contrario, las áreas protegidas parecen no representar ningún problema para operadores extractivos⁷.

3. Petroleros y mineros adentro, campesinos afuera visiones erradas en la gestión de la conservación

Hasta aquí he presentado abundante evidencia sobre la permeabilidad de las áreas protegidas ante operaciones extractivas en general. No existe en la legislación nacional fuerza suficiente como para hacer que las áreas protegidas impliquen muros de contención a la penetración de petroleros. Por otra parte, la ausencia de conflictos evidentes o al menos públicos entre instituciones ambientalistas estatales (e incluso algunas privadas) y operadores hidrocarburíferos por ejemplo, nos inspiran la sospecha de una cierta facilitación o cuando menos –para no ser tan extremo en el juicio– cierto silencio o condescendencia con tímidas objeciones de parte de actores conservacionistas.

Bien podrían las organizaciones ambientalistas hacer fuerza con las organizaciones sociales e instituciones públicas locales para limitar en muchos casos y cuando menos condicionar en otros, a la compensación, indemnización justa y participación en los beneficios por parte de las comunidades. Los ejemplos de las negociaciones indígenas-petroleras a propósito del gasoducto a Brasil y su ramal a Cuiabá no son generalizables ni los más idóneos para justificar cierta pasividad particularmente en el SERNAP.

Lo extraño del asunto es que las energías opositoras deseables respecto del SERNAP para confrontar operaciones extractivas mineras y petroleras, se endilgan más bien hacia campesinos y colonizadores e incluso indígenas, ilegalizando sus posesiones, prescribiendo relocalizaciones, limitando y prohibiendo sus actividades de aprovechamiento y manejo de recursos naturales... De hecho la propia legislación de áreas protegidas y las normas legales específicas constitutivas de parques, por ejemplo, son notablemente duras y represivas ante la presencia de comunidades campesinas, no obstante la preexistencia de asentamientos en las

7 Entre los impactos y problemas ambientales generados por operaciones petroleras figuran las siguientes: deterioro de la calidad del agua superficial y subterránea (por presencia de contaminantes y aumento del volumen de sólidos), alteraciones en el régimen hídrico, modificaciones en las redes de drenaje local, deterioro de la calidad del aire (por emisión de partículas, olores, ruidos y gases), contaminación de suelos, destrucción de estructuras de suelos, incremento de susceptibilidad de derrumbes, erosión, cambio de la estructura geológica y geomorfológica, alteración del paisaje, eliminación de cobertura vegetal, degradación de comunidades vegetales, modificación de composición florística, alteración de la composición faunística y de sus procesos migratorios, fragmentación del hábitat de fauna, etc. (ibid, 8-1).

áreas creadas. Esto es fácilmente verificable con la lectura de las disposiciones constitutivas de Áreas Protegidas, las mismas que tienen rango de ley o de decreto supremo. Veamos algunos ejemplos de esto:

“D.S. 22940, 1991, Parque Nacional Carrasco”

Art. Segundo.- A partir de la fecha se suspenden los trámites agrarios sobre dotación, consolidación, adjudicación y/o venta de tierras en el área declarada Parque Nacional.

Art. Cuarto.- Los agricultores, ganaderos y colonos asentados en el Parque Nacional Carrasco que no posean títulos que acrediten su derecho propietario serán reubicados.

Art. Quinto.- Se garantiza el asentamiento de las tribus selvícolas dentro del perímetro del Parque... mientras cumplan las normas de protección establecidos en la Ley...”.

“Ley 1262, 1991, Parque Nacional Tunari”

Artículo Segundo.- Declárase de utilidad y necesidad pública la expropiación de terrenos...

Artículo Séptimo.- Queda terminantemente prohibida la extracción de material de construcción, así como la crianza de ganado en el área del parque...”

Precisamente por ello, en el mapa de conflictos por acceso, aprovechamiento y tenencia de recursos naturales en Bolivia, las áreas protegidas son escenarios de confrontación beligerante, de gravedad en algunos casos, entre los administradores del área protegida y los comunarios campesinos. El enfoque administrativo-gerencial-policíaco y la ausencia de procedimientos y mecanismos efectivos de cogestión o gestión social comunal en la normativa vigente de áreas protegidas, contribuye enormemente a la propagación de estos conflictos. A esto hay que añadir una estrategia que hace a una política estatal, la cual basa la sostenibilidad de las áreas protegidas en la administración privada o al menos en la participación de agentes privados en la administración-gerencia-control. Y aquí hay que tener cierto cuidado porque algunas ONGs supuestamente comprometidas con la conservación, están en un franco proceso de utilización para fines de lucro o de beneficio económico particular, usufructuando de la riqueza paisajística y de la biodiversidad de las áreas protegidas.

Ante la generalización de conflictos agrarios en Bolivia por falta de tierra, uno no puede menos que preocuparse por la insistencia en crear más áreas protegidas (ya tenemos 17,4 millones de hectáreas) y ante cierta lógica privatizadora de las mismas.

Al soporte jurídico limitante de las actividades de aprovechamiento de recursos naturales por parte de comunarios, hay que añadir cierta cultura conservacionista que circula discursivamente en ámbitos ambientalistas particularmente afectos a lecturas tecnicistas que estigmatizan al campesino y al colonizador como

enemigos de la naturaleza, deforestadores y depredadores –extrañamente en el imaginario de los estratos ambientalistas, estos estigmas no se graban sobre operadores petroleros–. Visiones que han llevado a muchos conservacionistas a asumir que son los colonizadores los que han destruido la naturaleza y han contribuido a las altas tasas de deforestación en las tierras bajas de Bolivia. Lo cual es falso como lo demuestran estudios en el tema⁸.

Es necesario hacer una reingeniería también en las formas de pensar y de leer a los campesinos. En el pensamiento conservacionista que opera como dogma, el campesino es depredador o al menos no es un buen conservacionista o protector de la naturaleza. Es preocupante por otra parte, que en este dogma de pensamiento y praxis ambientalista, los técnicos y profesionales que por vocación, voluntad o convicción concentren el poder de decidir qué áreas deben ser declaradas protegidas, qué categoría deben tener, qué normas limitativas, restrictivas o prohibitivas de aprovechamiento de recursos naturales hay que imponer, qué se debe hacer con la población, como se le debe informar, cuál es su futuro, etc. Es decir, no puede ser posible que la gente que vive en y de las áreas (a declararse o declaradas protegidas) y su vida así como de las nuevas generaciones, esté en manos de técnicos y juristas que dispongan donde se crean burbujas intocadas o prístinas. Esta praxis es peligrosa y generadora de conflictos.

Quisiera permitirme aquí una digresión para matizar la perspectiva de mi análisis: las observaciones y críticas dirigidas a las políticas de protección y a la legislación vigente que la sustenta, no implican una oposición a la protección y la conservación; considero que es un grave error asumir como una consecuencia lógica o una equivalencia la oposición al modelo institucional-jurídico de protección vigente (cuestión que aquí sugiero y desarrollo parcialmente) y la oposición a la protección y la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. La reflexión que planteo más bien se dirige a pensar la necesidad de realizar cambios fundamentales en la legislación vigente y en las políticas públicas en la materia, poniéndolas a tono con un enfoque de gestión social de la conservación como garantía de sostenibilidad de la misma, gestión social que implique también beneficio social de los servicios comerciales de la biodiversidad, sin que ello suponga la imposibilidad de acuerdos contractuales sociales-comunales-privados, salvaguardando sin embargo derechos comunales para garantizar el cumplimiento de principios de equidad.

8 Entre 1984 y 1994 se perdieron 1,38 millones de hectáreas de bosque; la tasa anual de deforestación entre el 85 y el 90 fue de 40.000 has., de 78.000 has. entre el 89 y el 92 y 117.000 has. entre el 92 y el 94. Sólo en 1996 se deforestaron 123.400 has. En gran medida, la deforestación se localizó en las áreas de agricultura industrial extensiva (para la producción de soya) de Santa Cruz, particularmente en las llamadas Tierras Bajas del Este.

4. El rol de las ONGs ante este panorama. Peligrosas alianzas contra campesinos

Debemos evaluar el rol de las instituciones privadas en la administración en los procesos de conservación. Existen evidencias por demás expresivas para afirmar que no todas las instituciones no gubernamentales están efectivamente comprometidas con la conservación y la protección. Hay discursos que a la luz de las prácticas concretas resultan demagógicos. Existen ONGs que tiene lazos visibles con operadores extractivos (cuyo silencio y pasividad es evidente ante la proliferación de actividades por ejemplo petroleras como las que he descrito en un acápite anterior) y que nos dicen de procesos de creación de asociaciones de apoyo y beneficio mutuo entre conservacionistas y petroleros. Citemos algunos ejemplos:

- 1) La sociedad formada por el Museo Noel Kempff Mercado, Fundación Amigos de la Naturaleza, World Wildlife Fund (que inicialmente participó, retirándose a medio camino ante las denuncias), World Conservation Society y Missouri Botanical Garden que firmaron un acuerdo protocolar con la ENRON y SHELL, acuerdo que permitió a estas dos empresas (que se presentaron con el nombre de Gas Oriente Boliviano) obtener un crédito de la Overseas Investment Private Corporation (OPIC) para la construcción del gasoducto. Sin este aval otorgado por poderosas y reconocidas instituciones ambientalistas, el crédito no hubiera sido fácilmente otorgado (Gavalda, 199: 56). ¿Qué ganaron las instituciones conservacionistas? un fondo de fideicomiso con 20 millones de dólares aportados en gran parte por las petroleras.
- 2) La sociedad establecida en el Parque Noel Kempff Mercado entre Pacific Corp and British Petroleum América (socia principal de la empresa capitalizada CHACO), American Electric Power System (AEP), Nature Conservancy y la Fundación Amigos de la Naturaleza (ONG administradora del Parque) con el objetivo de resguardar 1.523.466 has. para emitir certificados por 25 millones de toneladas de dióxido de carbono (Powers L.D., en Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia, 2003, pág. 327). “Las compensaciones de carbono generadas debían ser compartidas por los socios de la siguiente manera: 49% para el gobierno de Bolivia, 49% para las compañías energéticas, 2% para AEP” (ibid, 328).
- 3) La ong CIDEDER (Centro Integrado para la Defensa de la Ecología y el Desarrollo Rural) que lleva varios años insistiendo en la creación de un PNANMI Altamachi-Cotacajes, en el norte de Ayopaya (departamento de Cochabamba), sobre un área inicialmente planificada de 633.733 hectáreas, a pesar de existir desde octubre de 2003 una demanda de TCO sobre el área por parte de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Ori-

ginarios de Ayopaya-CSUTCOA (demanda admitida por el INRA en febrero de 2004); insistencia que se ha tornado obcecada con las organizaciones campesinas pero flexible con operadores petroleros y mineros. Como parte de esta flexibilidad esta ONG ha decidido disminuir la extensión del área de protección estricta para no afectar a 18 concesionarios mineros (11 en el área del parque y 7 en el ANMI, totalizando 17.475 has. los primeros y 5.150 has. los segundos) y un bloque bajo contrato petrolero a favor de la sociedad Petrobras-Total (que afectaba al área del parque en 11.697 has.).

La institución CIDEDER no se remitió a excluir a los concesionarios mineros del área del parque, reduciendo esta última, sino que trabajó con los operadores mineros un plan de trabajo en el marco de un plan de manejo. Ciertamente no es criticable que operadores mineros se incorporen en procesos de manejo de áreas vulnerables evitando o mitigando impactos; lo que sí es criticable es que se privilegie a éstos y se aisle a los demandantes del área que la han solicitado como parte de su TCO y más criticable aún es que se cree un parque a medida de mineros y petroleros, evitando “afectarlos”...

Detengámonos un poco en este caso, porque a la fecha, la creación del parque no ha sido consumada y en mi opinión representa un ejemplo de cierto estilo tradicional de creación de áreas protegidas sin consulta o con procesos de consulta denunciados por los dirigentes como fraguados y sesgados. En primer lugar, resalta el protagonismo de instituciones privadas a pesar de cierta reticencia del SERNAP. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Qué ganan las instituciones en este asunto? ¿Por qué no se abre un diálogo con las organizaciones demandantes de la TCO y se procura cumular esta demanda con la protección (ciertamente necesaria de ciertas zonas) y la conservación? Cierta fundamentalismo proteccionista (que contrasta con la permisibilidad respecto de mineros y petroleros) articulado a posibles beneficios económicos provenientes de financiamientos externos, venta de certificados de dióxido de carbono, actividades ecoturísticas y otras relacionadas con el biocomercio permitidas y promovidas por la legislación vigente (entre los que resaltan el DS 24773-Reglamento de Concesiones de Uso de Biodiversidad) nos expresan un panorama preocupante.

Más preocupados quedamos cuando el propio Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación Jorge Cortés, respondiendo a una solicitud de informe sobre el tema presentado por dos diputados, explica por escrito en fecha 18 de diciembre de 2003, que entre las instituciones comprometidas en la creación de ésta área protegida se encuentran: WWF, Conservación Internacional, The Nature Conservancy y PROMETA (que tiene actividades en la RNFF Tariquía). La hipótesis sobre posibles vínculos de apoyo mutuo entre operadores extractivos y conservacionistas encuentra sustento con este panorama.

Bibliografía

CALVO L.M.

- 2003 Diversidad cultural y principales actores en el aprovechamiento de la biodiversidad, en Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia, Eds. PL. Ibisch & G. Mérida, FAN, Santa Cruz, Bolivia.

GANDARILLAS, Marco

- 2001 Hidrocarburos y Territorio, en Territorio y Desarrollo Integral en Bolivia, Ed. Broederlijk Denle, La Paz, Bolivia.

GAVALDA, Marco

- 1999 Las manchas del petróleo boliviano. Tras los pasos de REPSOL en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore, Ed.: CEDIB, La Paz, Bolivia

LAVADENZ, Isabel

- 1997 Tenencia y Distribución de la Tierra en Bolivia, mimeo, INRA, Febrero, La Paz, Bolivia.

MARTÍNEZ, José (Ed.)

- 2000 Atlas. Territorios Indígenas en Bolivia, CPTI-CIDOB-INRA et. al., Santa Cruz, Bolivia

PACHECO, Pablo

- s/f Prácticas Forestales y acceso a los recursos del bosque, Cap. 2 de Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX, s.e.

POWERS, W.D.

- 2003 Bolivia innova exitosamente en el secuestro de carbono, en Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia, Eds. PL. Ibisch & G. Mérida, FAN, Santa Cruz, Bolivia.

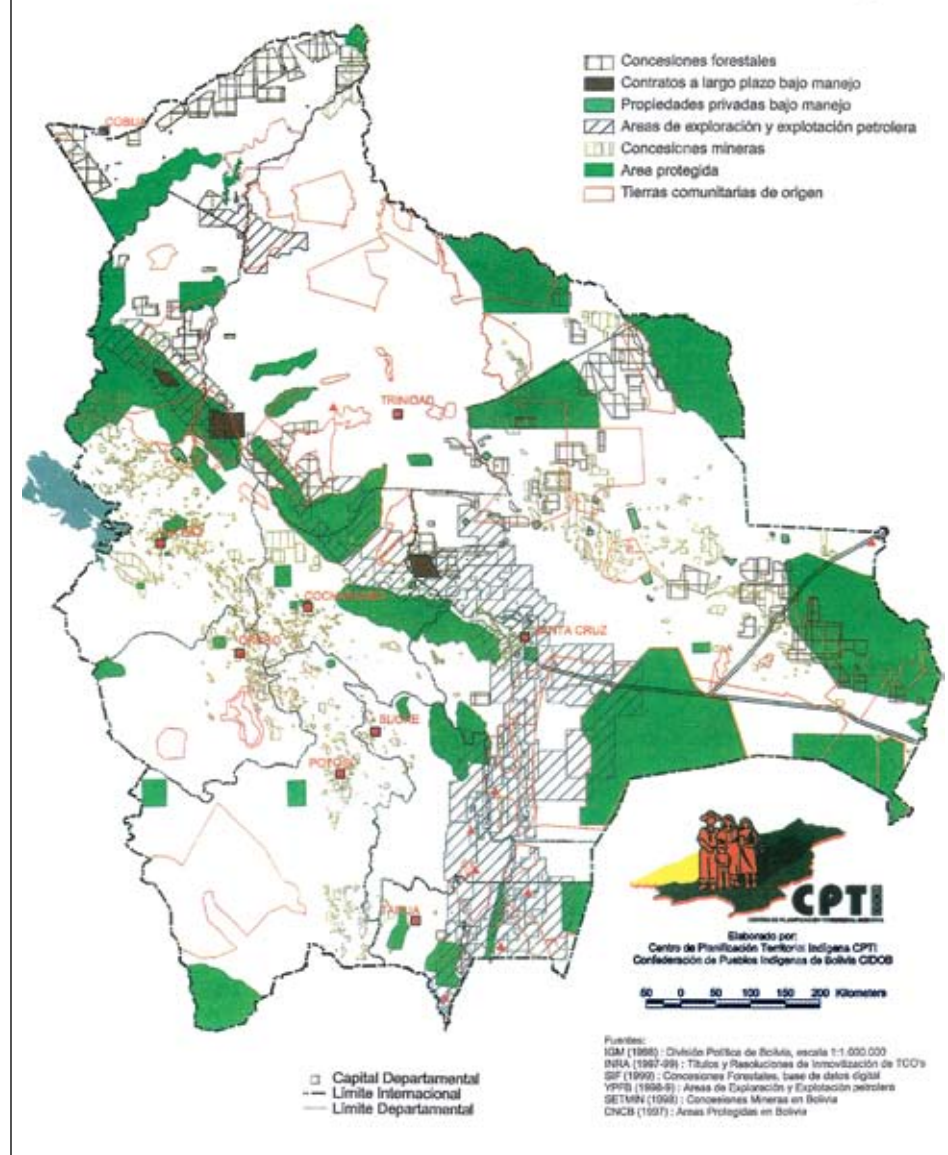
SERNAP

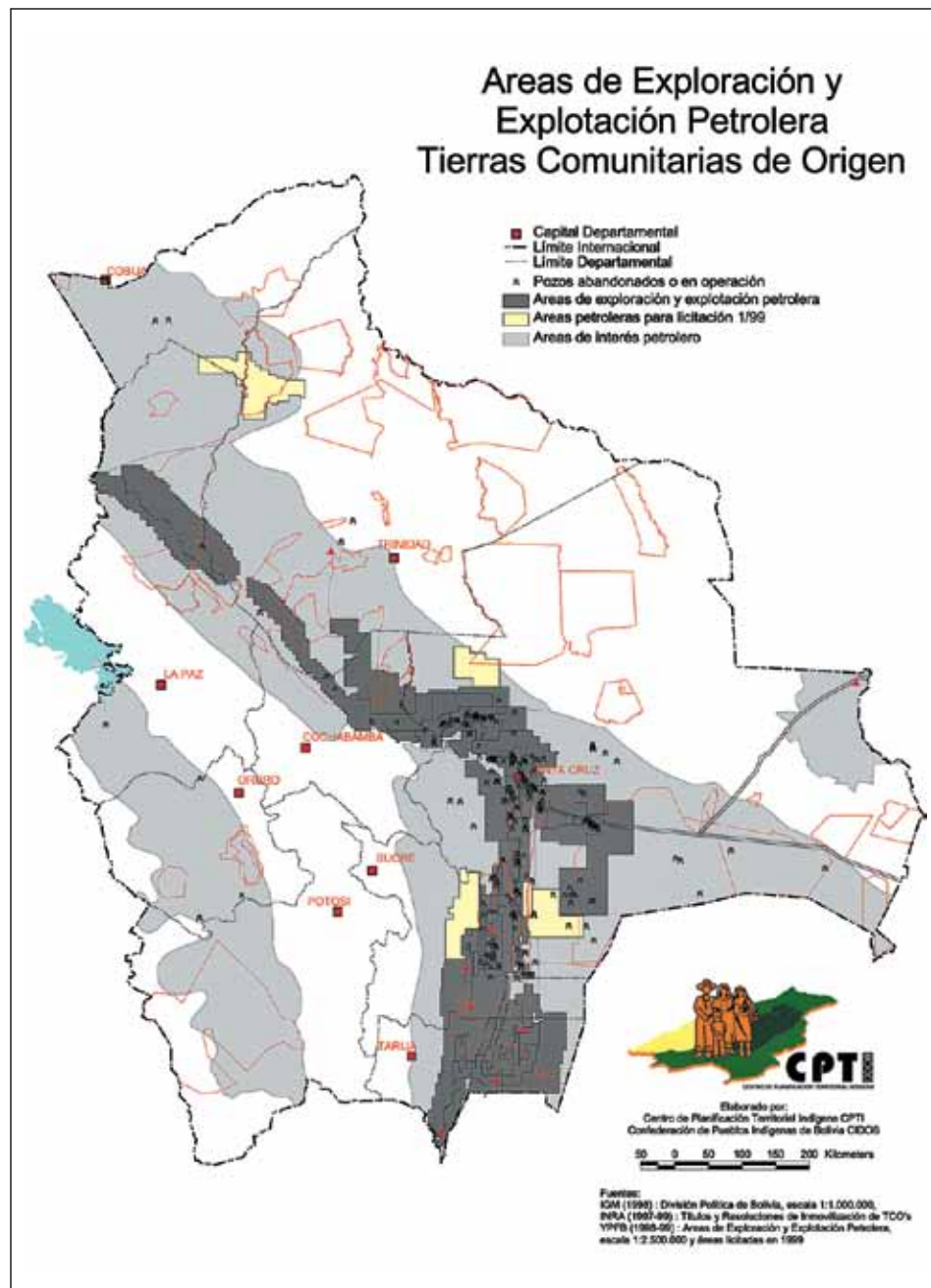
- 2003 Información complementaria actividad hidrocarburífera y minera SNAP, septiembre.

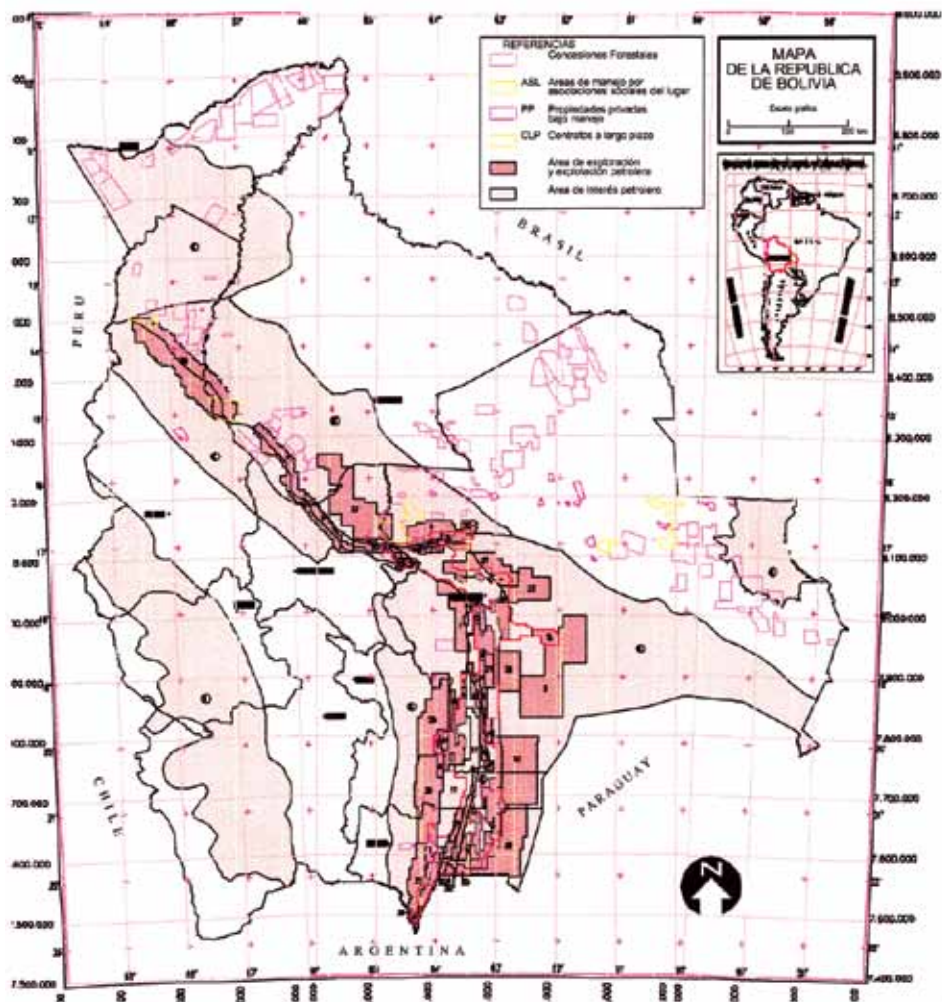
Asociación Abt Associates Inc.-P.C.A. Ingenieros Consultores S.A.

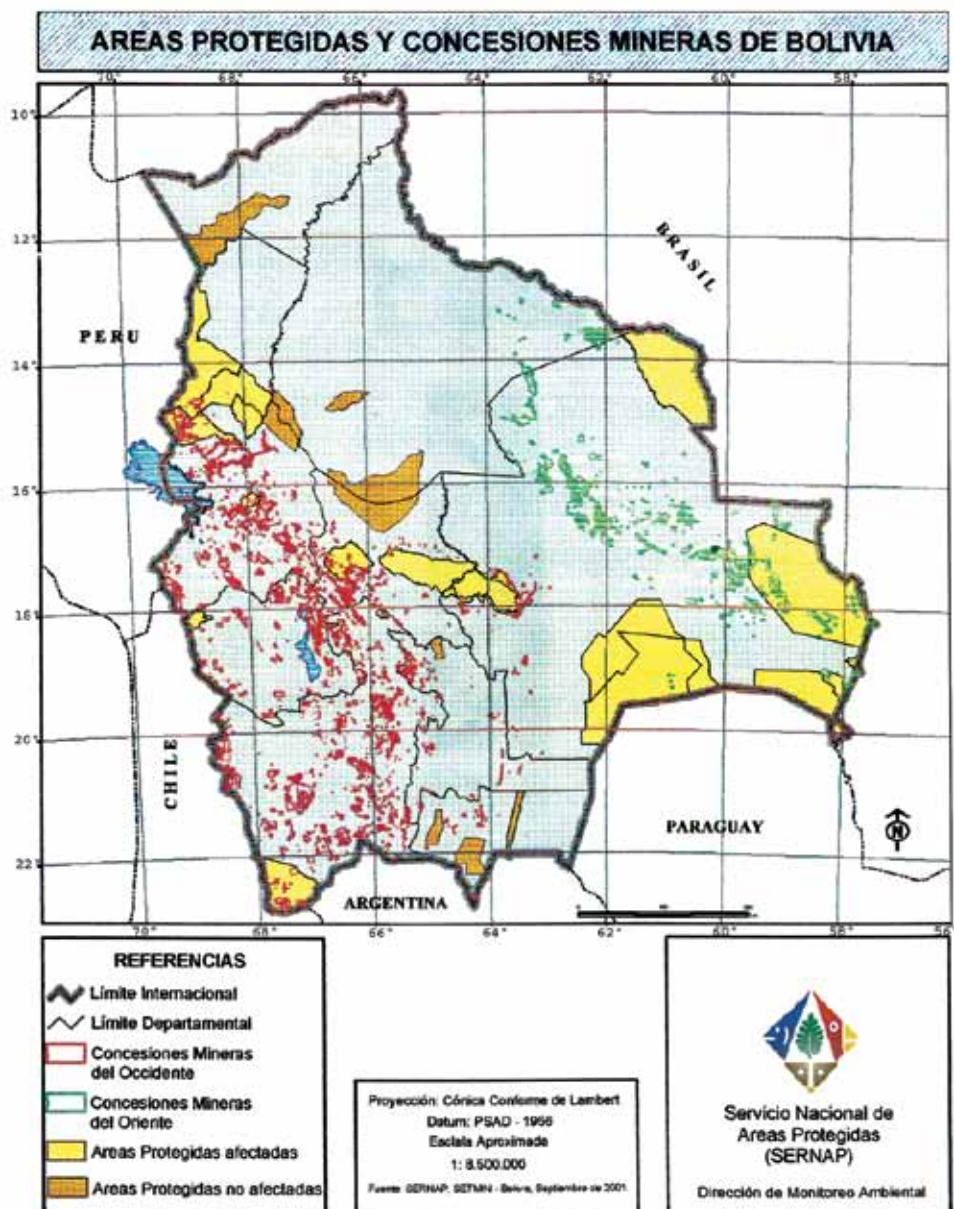
- 2001 Diagnóstico para el Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarburífero, minero, con el auspicio del BID-Viceministerio de Energía e Hidrocarburos.

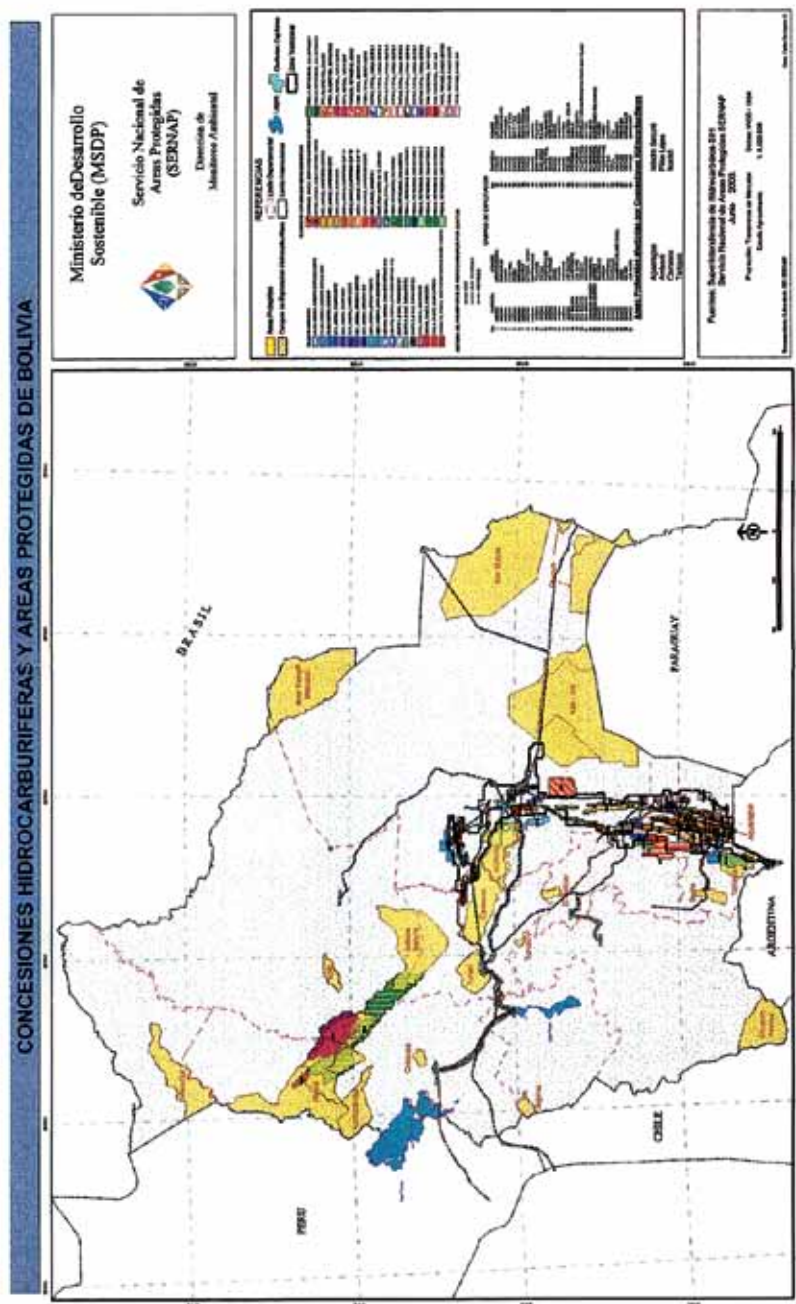
Problemática en Tierras Comunitarias de Origen











Conflictos y gestión local en áreas protegidas: los casos del parque Amboró y el bosque seco chiquitano

Miguel Angel Crespo¹

1. El caso del Parque Nacional Amboro

1.1. Antecedentes

Desde antes de la fundación de la república los bolivianos han sido testigos de la explotación irracional de sus recursos naturales, los mismos que han servido para incrementar la acumulación del capital mundial en las diferentes etapas históricas del mismo. Este fue el caso de la plata de Potosí, y grandes acumulaciones de capitales individuales que al articularse con capitales mundiales, (caso de Patiño con capitales ingleses a partir del Estaño), también empujaron procesos de acumulación capitalista mundial. Todo estos procesos no solo dependieron de los recursos naturales nacionales que se explotaban, sino que también fueron fruto de una gran sangría humana, producto de la explotación del trabajo de los nativos del país, que con su fuerza laboral contribuyeron a que se den estos fenómenos. Sin embargo de ello, tal como la historia y las estadísticas lo demuestran, Bolivia ha vivido en la mayor postración económica desde su fundación, ocupando históricamente los últimos lugares del desarrollo económico y humano no solo del continente, sino del mundo.

Bolivia es un país atrasado, por el abandono en el que se encuentran la mayoría de sus regiones y mucho mas el oriente boliviano. Asimismo, es un país desarticulado, no solamente por la falta de caminos, sino porque existen distintas naciones, culturas, grupos étnicos, etc., los cuales tienen diferentes formas de ac-

1 Licenciado en Economía. Director Ejecutivo de la ONG, PROBIOMA; Santa Cruz-Bolivia.

ceder y usar los recursos naturales. Estos aspectos, enmarcados en una geografía diversa y con una gran riqueza en biodiversidad, caracterizan a nuestro país de una manera muy compleja y en la que la extrema pobreza transversaliza todo.

Paradójicamente, nuestro país está reconocido entre los diez países más ricos del mundo en biodiversidad, hoy por hoy, un recurso estratégico y vital para la sobrevivencia del hombre.

En ese contexto, en los últimos años, se ha dado un proceso de creación de áreas protegidas, proceso en el que los Gobiernos del Norte, mediante la Cooperación Internacional, han ejercido una fuerte presión sobre las políticas nacionales con referencia a la gestión de dichas áreas. Lamentablemente en este proceso se ha obviado a un actor que es fundamental: las poblaciones locales que habitan dichas áreas desde hace muchas décadas, así como a otros actores igualmente importantes como son los municipios y otras organizaciones locales, que han quedado relegadas a un segundo plano.

Esta reflexión es necesaria para introducir, al análisis de lo que es nuestra visión y nuestra propuesta de administración local de recursos naturales, ya que, permiten enmarcar mejor las acciones que se han tomado en las diferentes actividades de PROBIOMA.

A partir de nuestro trabajo en el desarrollo rural (crédito y Asistencia técnica), hemos constatado el rol importante que juega la población rural en la conservación y protección de los recursos Naturales, en la reproducción de recursos genéticos y en el manejo de la biodiversidad. Esta conclusión que se fue perfilando fruto de un estudio llevado a cabo por nosotros el año 94, sobre la relación de la población rural asentada en las laderas del Parque Nacional Amboró (PNA), con las riquezas naturales y de biodiversidad, nos permitieron afirmar con toda solvencia científica, (por la seriedad del estudio)², que los campesinos en este caso, podían ser los mejores guardianes de dicho Parque. Sin embargo esta afirmación hubiera sido incompleta, sino hubiéramos planteado de que esta situación solo sería sostenible, si se dotaba a esta población de la posibilidad de administrar este recurso (El Parque Nacional Amboró), con una perspectiva de desarrollo.

1.2. El proceso

Las poblaciones locales administran sosteniblemente un recurso si sabe que este le dará beneficio en el tiempo. Este planteamiento además del desarrollo, ya incorporaba la visión de territorialidad y posicionamiento local.

A pesar de que Bolivia está considerada entre los países más ricos del planeta en biodiversidad, las poblaciones locales que están en relación permanente con dicha biodiversidad, se encuentran en un estado de postración y atraso.

2 Diagnóstico socioeconómico y de manejo de Recursos Naturales en comunidades colindantes al Parque Nacional Amboró, sector Sur, Probioma, 1994.

En los últimos años, en nuestro país se ha dado un proceso de creación de Áreas Protegidas, en el marco de las normativas vigentes. Sin embargo, este proceso no ha sido fácil y ha tenido muchas dificultades, fundamentalmente debido a que en la mayoría de los casos, no se tomó en cuenta, que dichas áreas no son territorios vacíos de poblaciones, sino que al contrario, en su interior y/o alrededor de ellas, existen comunidades, las mismas que tienen una estrecha relación con los recursos naturales. Es decir, que primaron más los criterios técnicos que los sociales, culturales, económicos y productivos y ello derivó en enfrentamientos con las comunidades locales, (1995) durante el proceso de delimitación de dichas áreas. Tal es el caso del Parque Nacional Amboró, del departamento de Santa Cruz que se encuentra en 4 Provincias (Andrés Ibáñez, Florida, Ichilo y M.M. Caballero).

El enfoque técnico-científico que subordina lo social y cultural, responde a una visión y a una estrategia de separar la biodiversidad y el uso de la misma, de las necesidades locales, regionales y nacionales. Es más, responde a una visión en la que sólo los especialistas y/u organizaciones científicas son las más llamadas a administrar y/o gestionar el uso de la biodiversidad, al margen del derecho soberano que tienen las poblaciones locales que han estado y están en relación cotidiana con los recursos naturales.

Este enfoque fue aplicado en la primera etapa de creación y delimitación del PNA y ello derivó en enfrentamientos entre Comunidades campesinas, y las brigadas de técnicos del gobierno, universidad estatal y ONGs “conservacionistas”, las mismas que no dudaron en acusar a las organizaciones campesinas de depredadores, guerrilleros, etc. Esta situación derivó en una serie de acusaciones de ambos lados y que no contribuyó a establecer el objetivo de delimitación del PNA. Paralelamente, se inició un proceso de represalias de los guarda parques hacia las comunidades y que contribuyó a que las mismas miren al Área Protegida más como una amenaza que un beneficio. Asimismo, se dio un proceso de rechazo hacia las ONGs “conservacionistas”, por considerarlas las causantes de dicho enfrentamiento ya que algunas de ellas no dudaron en plantear la relocalización de las comunidades campesinas. La propuesta de relocalización, que fue hecha pública, enervó aún más los ánimos y el rechazo de las comunidades no sólo a las instituciones, sino a cualquier intento de establecer los límites del PNA.

En este contexto, PROBIOMA decidió realizar un diagnóstico acerca de la relación que tienen las comunidades campesinas con los recursos naturales del PNA Parte Sur. (Zona de mayor conflicto). En dicho Diagnóstico se abordaron los temas desde la perspectiva social, económica, productiva y ambiental. Los resultados de dicho diagnóstico, fueron contundentes en aclarar muchas falsedades que se habían difundido por parte de las ONGs “conservacionistas”, los “expertos” y las diferentes comisiones del gobierno de entonces (1ª gestión de Sánchez de Lozada). Algunos de los resultados fundamentales, fueron los siguientes:

- La mayoría de las poblaciones asentadas son de origen cruceño (65%) y no así del interior. Una gran parte de ellas se originaron durante la Guerra del Chaco, para evitar que los hombres sean enlistados en dicho conflicto bélico.
- Un porcentaje minoritario proviene del interior, pero que están asentados hace 30 años (30%)
- El conocimiento que tienen de la flora, fauna, avifauna, etc., es muy amplio y profundo.
- Las cuencas principales de donde nacen los ríos que bañan los valles y/o desembocan en el norte cruceño, tienen un adecuado manejo en cuanto a su conservación se refiere.
- Los impactos ambientales identificados, han sido generados fundamentalmente por agentes externos: Concesiones madereras, concesiones mineras (explotación de cal, ripio, arena, piedras, etc.), rescatadores de leña para la fabricación de chancaca en Saipina, clubes de caza y pesca, etc.
- La lógica de ocupación del espacio por parte de las comunidades incorpora la conservación del área destinada a bosque de protección.
- El uso de agroquímicos (más de 150 marcas) en las zonas circundantes al PNA, en especial en los valles mezotérmicos, representa una amenaza para la conservación del área protegida. La incursión permanente de distribuidores de las empresas importadoras de agroquímicos, está coadyuvando a la ampliación de la frontera agrícola debido a la insostenibilidad de una agricultura basada en los paquetes tecnológicos promovidos por la revolución verde.

Como se podrá apreciar, los factores identificados como causales de impactos socio ambientales en el PNA, son todos externos y no pueden ser atribuidos a los pobladores locales circundantes al área protegida. A lo anterior se debe añadir la existencia de concesiones petroleras otorgadas en el proceso de capitalización y que están impactando en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMIA), como es el caso del Derecho de Vía que tiene la empresa Transredes para el transporte de hidrocarburos, está generando el ingreso de colonos y la especulación de tierras por otros agentes externos (traficantes de tierras).

Con estos resultados provenientes del diagnóstico, se llegó a la conclusión de que los pobladores locales habían efectuado un adecuado manejo de sus recursos naturales y por su conocimiento de la biodiversidad circundante, correspondía por derecho, que la administración del Área Protegida pase a manos de las organizaciones campesinas, junto a los Municipios y el SERNAP, además por el objetivo mismo que tiene un Área Protegida, los recursos genéticos son propiedad del estado boliviano. Por lo tanto, corresponde que sean las organizaciones locales y el estado, quienes administren soberanamente las Áreas protegidas en el país. De esta manera, surge la Propuesta de Administración Campesina del PNA, la misma que es entregada ofi-

cialmente por la FSUTC-SC, a la autoridad competente en el año 1996. De esta manera se evita la privatización o entrega de la administración de un Parque Nacional a una Organización privada. Como se verá más adelante, este paso tiene un significado muy importante en lo que a la conservación y gestión de los recursos naturales se refiere, desde una perspectiva de gestión local y soberana.

1.3. La propuesta de gestión local

La Propuesta de Administración Campesina del PNA, tiene como objetivo: *“La Conservación del Area de Protección Estricta y el desarrollo sostenible de las comunidades del Area Natural de Manejo Integrado, para la conservación de los recursos genéticos y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas y su área de influencia”*, es decir que parte de la premisa de considerar como una unidad el AP y el ANMI, y busca el equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible.

En segundo lugar, establece un Directorio compuesto por los 9 Municipios que tienen jurisdicción en el PNA, el SERNAP y las Centrales campesinas. Como se verá, se establece el principio de soberanía y potestad que tiene el estado y las organizaciones locales en las políticas de conservación y desarrollo sostenible del PNA y por lo tanto con nuestra biodiversidad.

Asimismo, se establecen tres líneas estratégicas:

- Conservación: Relacionada con el AP y el ANMIA
- Desarrollo sostenible: Relacionada con el ANMIA y su área de influencia
- Infraestructura Básica: Relacionada al ANMIA

Estas líneas estratégicas son para cada una de las cuatro provincias en las que se encuentra el PNA.

En lo referente al Programa de Conservación se establecen varios subprogramas en los que podemos resaltar los siguientes:

- Manejo de Bosques
- Investigación científica
- Protección, custodia y multiplicación de recursos genéticos
- Cría y reproducción de animales en proceso de extinción
- Ecoturismo, etc.

El Programa de Desarrollo Sostenible se refiere al fomento de las siguientes actividades:

- Agricultura ecológica
- Sistemas agroforestales

- Producción de cultivos orgánicos
- Certificación local
- Ecoturismo
- Servicios ambientales
- Producción biológica
- Producción de germoplasma nativo
- Producción de orquídeas
- Control biológico

El Programa de Infraestructura básica se refiere a la dotación en coordinación con los Municipios de lo siguiente:

- Caminos
- Escuelas, Postas sanitarias
- Puentes
- Servicios de control y fiscalización: Campamentos de guarda parques, etc.

La ejecución de estos Programas estará en base a un Director nombrado en consenso entre el SERNAP, Municipios y Centrales Campesinas.

El papel de las ONGs, centros de Investigación, Universidades, etc., quedó establecido en la participación en un Consejo Consultivo, el mismo que tendría la función de apoyar con capacitación técnica, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y fortalecimiento organizativo.

Se planteó un nivel de fiscalización mediante la participación activa de las sub-centrales campesinas, los Comités de Vigilancia y otras organizaciones de control social que puedan surgir en el proceso de ejecución de la propuesta, como ser Comités de fiscalización, etc.

Sin embargo, como requisito previo a la ejecución de la propuesta, se planteó una nueva delimitación del PNA que tome en cuenta aspectos que habían sido ignorados en la primera delimitación y que llevaron al enfrentamiento con las comunidades campesinas. Esta propuesta de delimitación planteó básicamente los siguientes criterios para llevar a su ejecución:

- Participación Campesina
- Tenencia de la tierra
- Uso Actual de la tierra
- PLUS
- Valor ecológico

Estos criterios fueron internalizados en la mayoría de las comunidades que estaban en conflicto con las autoridades que tenían que ver con el PNA. Es decir, con el SERNAP.

1.4. La reacción oficial

Como no podía ser de otra manera, la reacción del Gobierno ante esta propuesta y producto de la presión social en el área, fue la de dejar en “statu quo” el proceso de privatización y/u otorgación de la administración a una organización privada, ya que la propuesta presentada tenía como respaldo una masiva movilización en las comunidades campesinas. Paralelamente, las organizaciones mediante sus centrales, establecieron un sistema de control y fiscalización colectivo de las actividades de las ONGs y declararon enemigos de los campesinos a algunas de ellas (ASEO y FAN), justamente por haber promovido la relocalización de las comunidades y/o la administración privada. En este contexto, las relaciones entre el Gobierno y las Organizaciones campesinas mejoraron, aunque con la permanente amenaza de un nuevo conflicto.

1.5. La incidencia política

A raíz del proceso de internalización de La Propuesta de Administración Campesina y de los conflictos que derivaron en la misma, las organizaciones campesinas incorporaron en sus demandas reivindicativas, la necesidad de gestionar soberanamente el Área Protegida, y en ese marco, tanto la CSUTCB, como la COB, incorporaron en los pliegos de demanda nacional este derecho. Paralelamente la Federación Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, solicitó a PRO-BIOMA, el apoyo para la elaboración de las Bases de una Propuesta de Administración Campesina del Parque Nacional Carrasco, documento que fue elaborado en Octubre de 1996 en la localidad de Totora con la participación de las Centrales, Sub-centrales y Sindicatos campesinos de dicha Provincia. Posteriormente, este documento fue entregado oficialmente a la FSUTCC.

Adicionalmente, la incidencia alcanzó a las organizaciones de otras áreas protegidas del país, como es el caso de la región de Pilon Lajas y las organizaciones indígenas de la Chiquitanía, el Chaco, el Pantanal, etc., que comenzaron a plantear el mismo principio, aunque cada organización con sus diferentes particularidades, según el grado de organización existente.

En el ámbito de las organizaciones pertenecientes al movimiento ambiental y conservacionista, también se plantearon tomas de posición tanto de los que apoyaron esta propuesta nacional, como de los que se oponían y ello derivó en un fracturamiento de un movimiento que hasta ese momento adolecía de una posición nacional en base a las características y particularidades del país. En este sentido, surge una posición nacional que reivindica el derecho que tienen las poblaciones locales, en la administración de las áreas protegidas, en coordinación con el estado a través de los municipios y el SERNAP. Es así que se da inicio a una etapa en la que en algunos casos más que otros, se genera la participación del estado desde una perspectiva más

soberana. Sin embargo, hasta ahora el grado de involucramiento de los Municipios aún es incipiente y ello se refleja en que el SERNAP continúa soportando una gran parte del peso de la gestión en las Áreas Protegidas, aspecto que redundaría en algunos casos en la pérdida de su soberanía de gestión y en detrimento de un involucramiento real de las organizaciones locales. Paradójicamente ha crecido la influencia de las ONGs conservacionistas, que pretenden influir en el diseño de políticas y estrategias y en algunos casos abrogarse la representatividad estatal, tal como ha ocurrido en el Bosque Seco Chiquitano. La falta de recursos del SERNAP está llevando a tener una mayor dependencia de la cooperación internacional y ello no es positivo. Aún los Municipios no han incorporado plenamente en sus políticas, la gestión de las áreas protegidas y los servicios ambientales que podrían proyectarlos hacia estrategias de desarrollo sostenible y generación de recursos financieros. A pesar de ello, existe una posición cada vez más acentuada con respecto al derecho de administración de los recursos naturales por parte de las poblaciones locales.

1.6. La implementación de la propuesta

En el marco de este contexto, PROBIOMA decide impulsar desde una experiencia concreta la Propuesta de Administración Campesina en el Parque Nacional Amboró, a través de las siguientes actividades estratégicas:

- **Ecoturismo Comunitario.** Implementación de 3 emprendimientos en las comunidades de Villa Amboró, Isama (Provincia Ichilo) y Volcanes (Provincia Florida). Estos emprendimientos se iniciaron en el año 1997 y en la actualidad están siendo ampliados de capacidad, así como de una capacitación más profunda para mejorar los servicios al cliente. Cada refugio tiene capacidad para albergar 20 turistas, tanto en camping como en cabañas construidas con material local y adecuadas al medio ecológico. Al respecto, se ha organizado la Asociación de Ecoturismo Comunitario que agrupa a 5 emprendimientos Comunitarios en el PNA y que tiene por objetivo fortalecer a los lugares de ecoturismo comunitario y reglamentar la actividad de las operadoras de turismo.
- **Agricultura ecológica.** Transferencia masiva del Control Biológico, en 45 comunidades del ANMIA, para sustituir el uso de agroquímicos y la presión sobre los recursos naturales del ANMIA y por ende del APA. En este sentido, PROBIOMA ha establecido un Centro de Investigación, Producción y Capacitación - PROBIOTEC, para llevar a cabo la producción masiva de microorganismos, los cuales son comercializados masivamente en el ANMIA y el área de influencia del PNA.
- **Difusión y Comunicación.** Mediante programas radiales que se difunden semanalmente en dos radios de largo alcance (Radio Santa Cruz y 26 de Enero), se lleva a cabo un programa radial en el que se difunde el contenido

y los principios de la administración local, los derechos de las organizaciones locales, testimonios de las comunidades, denuncias sobre impactos de agentes externos y recomendaciones técnicas para el manejo ecológico de los cultivos agrícolas. Este programa llega a más de 45.000 oyentes.

- **Fortalecimiento Organizativo.** Se realizan talleres y reuniones con las comunidades campesinas, con el objetivo de profundizar el proceso de internalización de la propuesta de administración local, el manejo ecológico de cultivos agrícolas, la importancia de los servicios ambientales, la amenaza que suponen las actividades hidrocarburíferas, mineras y el valor estratégico que tiene la biodiversidad y los recursos genéticos.

1.7. La incidencia de la propuesta

Ecoturismo Comunitario: Por primera vez y con muy poca inversión se implementa un proyecto de esta naturaleza en un área protegida y ello ha repercutido de la siguiente manera:

- Se consolida el control local sobre los recursos naturales en el PNA.
- La conservación desde la perspectiva social, representa una fuente de ingresos para el beneficio local. (Estos montos pueden superar a los recibidos por la Participación Popular)
- Se establecen estrategias de conservación y desarrollo sostenible al interior de las comunidades: Recuperación de recursos genéticos nativos (frutas silvestres, semillas nativas)
- Con los ingresos del ecoturismo, las comunidades tienen recursos para otras necesidades básicas, como es la educación, la salud, mejoramiento de caminos y trámites legales.
- Generación de empleo alternativo y especializado.
- Protección del área contra amenazas externas: Concesiones mineras e hidrocarburíferas. (No se permitió el ingreso de la empresa petrolera Andina y se expulsó a los concesionarios mineros del área).
- Control a ONGs dedicadas a la bioprospección.
- Fortalecimiento de sus organizaciones y lazos comunitarios.
- Incorporación en las guías mundiales de ecoturismo Lonely Planet.
- Profesionalización de los guías locales.

Agricultura ecológica: Por primera vez en Bolivia, se introduce en las comunidades de manera masiva, el Control biológico que sustituye gradualmente a los plaguicidas. Los impactos son los siguientes:

- 1.200 has bajo control biológico, en el ANMIA, las mismas que se encuentran en un proceso de reconversión a una agricultura ecológica.

- Se inicia el proceso de certificación local de cultivos orgánicos, con comunidades y organizaciones de mujeres campesinas que comercializan en la ciudad de Santa Cruz.
- La ampliación de la frontera agrícola en las áreas de influencia, se reduce y se fortalece el recurso suelo con la incorporación de biotecnología formulada en base a microorganismos y fertilizantes orgánicos.
- En 10 localidades alrededor del PNA se distribuyen permanentemente, los productos biológicos para ser utilizados en las labores agrícolas.
- Se establecen empresas agrícolas de producción ecológica de: Miel, Hortalizas, Frutas, café y cítricos.

Difusión y Comunicación: Los programas radiales son escuchados permanentemente por las comunidades del PNA y de otras regiones del país que solicitan el apoyo en actividades de ecoturismo, Control biológico, monitoreo socioambiental, etc., principalmente en la Chiquitania, el Pantanal (Santa Cruz), así como en Ixiamas (La Paz), el Chaco (Tarija) , Potosí, y el Chapare (Cochabamba). Paralelamente se inicia la difusión de un Boletín electrónico que llega a más de 3.000 usuarios. La información del ecoturismo, se encuentra incorporada en los siguientes sitios de información especializada a nivel mundial:

Fortalecimiento organizativo: La incidencia generada por la Propuesta de Administración Campesina del PNA ha tenido amplia repercusión en otras Areas Protegidas que han solicitado al SERNAP y a los Municipios llevar a cabo actividades relacionadas con el ecoturismo e inclusive propietarios privados han iniciado procesos similares en otras regiones.

Los sindicatos de las localidades donde se implementan estas actividades han logrado el fortalecimiento de lazos comunitarios para solucionar temas sociales, económicos y de manejo de Recursos Naturales (sin tener que depender de algún Partido Político) y son puntos de referencia en su región.

Se ha constituido la Asociación de Ecoturismo Comunitario, la misma que está definiendo junto con el SERNAP, normas para las empresas operadoras de turismo, así como la ejecución del SISCO (Sistema de Cobranzas), que permita establecer un ingreso al SERNAP, así como al Municipio.

El Estado está reconociendo el papel protagónico que juegan las organizaciones campesinas/indígenas en la administración de las Areas Protegidas.

2. El bosque seco chiquitano

2.1 Antecedentes

Bolivia, es un país que tiene gran variedad de eco regiones, cada una con rasgos diferentes en lo que concierne a biodiversidad. El departamento de Santa

Cruz, es uno de los más ricos en biodiversidad, tiene una gran heterogeneidad de ecosistemas que se reflejan en un gran potencial de recursos naturales. Esta situación ha hecho de éste, uno de los más importantes en cuanto a la inversión se refiere, pero también uno de los más vulnerables por su ubicación estratégica, por su riqueza en recursos naturales y por la falta de una voluntad política del Estado, en hacer un uso sostenible de dichos recursos, así como resguardarlos para las generaciones futuras.

Entre este potencial, está la Gran Chiquitania, región que abarca al Pantanal Boliviano, ubicado en la Provincia Germán Busch y Ángel Sandoval, el Valle de Tucavaca, las Serranías de Sunsas, Santiago y Chochís en la Provincia Chiquitos. En esta región se encuentra el Bosque Seco Chiquitano que pertenece a una de las áreas más extensas del mundo (100.000 km²) y se caracteriza por pantanos permanentes y sabanas inundadas en las diferentes estaciones del año, que tiene una estrecha relación con grandes galerías de bosques. La configuración que tiene esta región, caracterizada por una mezcla de sierras paleozoicas chiquitanas que han servido de barreras y refugios y la gran región inundable del Pantanal. Todo esto caracteriza a la zona y lo convierte en una de las áreas más originales de continente.

El bosque chiquitano y el Pantanal Boliviano, en los últimos años adquieren mayor importancia por su gran riqueza en biodiversidad, pero paradójicamente confluyen una serie de amenazas que comienzan a generar un impacto fuerte en sus recursos naturales. En los últimos 6 años, 421.000 has. (70.000 has./ año) han sido destruidas por la actividad ganadera, incendios, gasoductos y concesiones mineras.

Sin embargo, la gran riqueza en biodiversidad existente en la Chiquitania, así como la actividad productiva, contrasta con la situación de pobreza de las poblaciones locales, que además poseen un conocimiento propio en cuanto al uso y valor ecológico de los recursos naturales, aspecto que representa una base fundamental para el desarrollo y la conservación. La situación socioeconómica de las poblaciones locales, no representan una garantía de que los proyectos de “desarrollo” auspiciados por la banca multilateral y las empresas privadas, se traduzca en un mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales, debido a que dichos proyectos están dirigidos a la explotación de la mano de obra y de los Recursos Naturales sólo como materia prima. Por esta razón es fundamental y necesario establecer la gestión local de los recursos naturales, ya que los pobladores de la zona son los únicos guardianes de la biodiversidad existente, la misma que puede ofrecer servicios ambientales y quienes deben beneficiarse de dichos recursos mediante la implementación de proyectos de desarrollo sostenible y de conservación.

La Gran Chiquitania es considerada hoy: una de las regiones más importantes del departamento por las características físicas y bióticas que tiene. Poblada por indígenas (chiquitanos y ayoreos fundamentalmente) y poblaciones rurales (con emigrantes y nacidos en el lugar). Cuenta con 8 municipios organizados en la Mancomunidad

de Municipios Chiquitanos. Por otra parte, se constituye en un lugar estratégico en materia de conservación y defensa de los recursos naturales debido a la riqueza en ecosistemas como ser: Bosque subhúmedo semideciduo Chiquitano, bosques ribereños Chiquitano, sabanas arboladas del cerrado, afloramientos rocosos, llanuras de inundación del río Alto Paraguay, bajíos permanentemente inundados, bosque higrófilo Chiquitano, sabanas higrófilas. Además, la biodiversidad que posee es rica en ictiofauna con alrededor de 50 especies solo en el pantanal de Otuquis, muchas de ellas endémicas y de alto interés científico, herpetofauna con 257 especies de reptiles, avifauna con 142 especies y mastofauna con más de 320 especies, además de la infinidad de especies vegetales (se estiman más de mil especies de plantas vasculares) que la convierten en centro de atención de la comunidad científica internacional puesto que posee muchos lugares de transición que permiten un flujo estacional de aves migratorias y otras especies, que le dan una categoría única a la región.

Asimismo, hasta la fecha cuenta con las siguientes áreas protegidas establecidas: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, el mismo que fue declarado reserva nacional de inmovilización en septiembre de 1995 y en julio de 1997 fue declarado como Parque Nacional para conservar los bosques secos tropicales. Con una extensión de un 1.005.950 hectáreas divididas en: Parque Nacional con 903.350 has. y Área Natural de Manejo Integrado con 102.600 has. Por otra parte, el Área Natural de Manejo Integrado San Matías ubicado en las provincias Germán Busch y Ángel Sandoval, declarado como área de inmovilización en 1995 y como Área Protegida en 1997 creada con el objetivo de conservar los bosques tropicales, además de proteger la belleza paisajística y escénica de inmensas lagunas, curichis, ríos y serranías, cuenta con una extensión de 2.918.500 has. aproximadamente 29.185 km². Asimismo se está analizando, la posibilidad de crear nuevas áreas de protección como es el caso de las Serranías de Sunsas, Valle de Tucavaca y Serranías Chiquitanas.

Por todo lo mencionado, podemos concluir diciendo:

- 1) A pesar de que en la Chiquitania se han invertido más de 2.500 millones de dólares en la construcción de los gasoductos, en lo fundamental, la situación de pobreza y abandono de los pueblos que lo circundan, sigue inmutable.
- 2) La biodiversidad constituida por humedales, bosque seco, valles y serranías conllevan un valor estratégico que deberá ser aprovechado sostenible y soberanamente por las poblaciones locales, para salir de la situación de pobreza en la que viven.
- 3) Poseedora de un potencial turístico importante, pues cobija en su seno al Pantanal boliviano, además de las serranías chiquitanas, tiene también un conjunto de valores ecológicos y culturales que la convierten en un atractivo importante para el desarrollo del etnoecoturismo y la conservación.

- 4) Ante la situación de luchas desiguales contra proyectos de “desarrollo”, actividades hidrocarburíferas y amenazas de biopiratería, es que nos vemos impulsados a plantear desafíos que permitan defensa de los recursos naturales y la administración de los mismos por parte de las poblaciones locales.

2.2. Las amenazas

Actualmente el Bosque Seco Chiquitano y el Pantanal Boliviano están bajo la gran amenaza de varios megaproyectos en implementación o por ejecutarse. Entre ellos se encuentran: La Hidrovía Paraguay - Paraná, el Gasoducto Bolivia-Brasil, el Gasoducto Transversal Río San Miguel - Cuiaba³ A ello se añade la carretera Santa Cruz - Puerto Suárez, financiado por el BID y las actividades mineras del Mutún y la Mina Don Mario.

Este tipo de proyectos y actividades derivadas de los mismos, generarán importantes cambios ambientales en la región, exponiendo a la Chiquitania, a cambios hidrológicos, con la consiguiente extinción de especies de agua dulce, la pérdida y degradación del hábitat, la sobre explotación de los recursos, la disseminación de especies exóticas (semillas y cultivos transgénicos, etc.). La contaminación química de residuos tóxicos provenientes de la actividad hidrocarburífera y de transporte por la Hidrovía y la posible carretera, generará también presión social de migración, que afectará enormemente el hábitat natural, mediante la explotación irracional de los recursos naturales de la región.

En este marco, o se puede hablar de enfrentar la pobreza de estas poblaciones si ellas no tienen la oportunidad de valorizar y manejar sus recursos naturales, lo que significa que tengan la posibilidad de manejarlos sosteniblemente, basándose en su propia concepción de la conservación y del desarrollo. Esta afirmación responde al concepto de Administración de los Recursos Naturales por las poblaciones locales, que ha demostrado ser la única alternativa capaz de garantizar la conservación de los recursos naturales. El manejo adecuado de los recursos naturales, que tradicionalmente han llevado a cabo las poblaciones locales, es la base que sustenta la Administración Local, la misma que parte del conocimiento que tienen las poblaciones locales de la fauna, flora, avifauna, etc., y sus usos, como un potencial que permitirá ser el fundamento de proyectos destinados a la conservación y el desarrollo de dichas poblaciones locales.

2.3. El proceso de destrucción del bosque chiquitano

En este contexto, y como un ejemplo de lo anterior, desde 1998 se inicia el proceso e negociación para la implementación del Gasoducto San Miguel (Boli-

3 Financiado por la OPIC (a pesar de la fuerte oposición de las poblaciones locales), Enron y Shell son los principales accionistas de dichos gasoductos.

via) - Cuiaba (Brasil), enmarcada en el Proyecto de “Energía Integrada Cuiaba”, y desarrollado por la empresa Gas Oriente Boliviano, integrada por ENRON, SHELL y Transredes (Compañía transportadora capitalizada, controlada en ese entonces por ENRON), los que tenían serias intenciones por realizar el trazado y ejecución del citado gasoducto por el corazón del Bosque Seco Chiquitano.

El diseño del trazado del gasoducto, partía en dos el Bosque Seco Chiquitano, aspecto que generó la oposición de varias organizaciones bolivianas e internacionales, por los impactos socio ambientales que podría causar a nivel regional, incluyendo el Pantanal.

Una de las más importantes observaciones al tendido del ducto por el trazado original, era que iba a atravesar 160 Km. de Bosque Chiquitano primario y 100 Km. de Pantanal. Los Estudios de Impacto Ambiental (EEIA), fueron insuficientes, ya que no tenía las bases para armar un plan de mitigación adecuado. Por otra parte, el gasoducto planteaba cruzar por el Área Protegida San Matías sin previsiones especiales, deficiente análisis de rutas alternativas y lo más graves, no hicieron consultas públicas adecuadas. Estas carencias, llevaron a una oposición rotunda de las organizaciones bolivianas y a negociaciones secretas entre las ONGs conservacionistas y las empresas auspiciadoras del Proyecto, que tenían conclusiones divergentes acerca de la caracterización del bosque. Ante esta situación, y sin conocimiento de las organizaciones y autoridades de la región, se propuso llevar a cabo un estudio independiente (ISEA), financiado por ENRON y llevado a cabo por la Fundación Amigos de la Naturaleza-FAN, el Museo de Historia Noel Kempff Mercado -MHNNKM, el Missouri Botanical Garden -MGB, la WWF y la Wildlife Conservation Society -WCS.

Dicho estudio, a realizarse en 1999 y definido en reuniones de coordinación entre Ejecutivos de la ENRON, SHELL, WWF, Amigos de la Tierra y Conservación Internacional, tenía como objetivo, la caracterización del Bosque Chiquitano, ya definido como bosque primario por el Ministerio de Desarrollo Sostenible.

En dichas reuniones no existió ninguna participación del estado y peor aún de alguna organización y /o autoridad local, que ignoraban las negociaciones realizadas en Washington, entre las organizaciones conservacionistas y las empresas petroleras.

Los resultados de dicho estudio (ISEA) concluyeron que el gasoducto debía ser desviado (planteamiento original de las organizaciones bolivianas), y se propuso una ruta alternativa que aprovecharía corredores existentes, asimismo, se recomendaba “desarrollar un plan de conservación de largo plazo, para compensar el inevitable impacto que el gasoducto causaría en la eco región, cualquiera fuera la ruta elegida”⁴. Esta iniciativa⁵ “debería promover la participación representativa de la sociedad boliviana” (Ídem).

4 (Informe de la WWF en relación a la conservación del Bosque Seco Chiquitano, 24 Septiembre del 2000).

5 Ídem.

Estas recomendaciones que fueron rechazadas por ENRON y SHELL, eran diferentes a las conclusiones del Estudio Ambiental Suplementario – SEA (Por sus siglas en inglés), a cargo de la empresa contratada también por ENRON y SHELL (ENTRIX), la misma que concluía que el Bosque Chiquitano era secundario y que estaba impactado. Esta conclusión llevó a una nueva ronda de reuniones entre las ONGs conservacionistas y los personeros de ENRON y SHELL, esta vez con la participación de “... observadores del SERNAP, BOLFOR y USAID”⁶.

En esta nueva ronda, los ejecutivos de ENRON y SHELL expresaron su desacuerdo con alterar el trazado original en razón a que “...sería mucho más costosa la construcción del gasoducto (por la ruta alternativa), si esta se postergaba, y que había sido planificada para la época seca de 1999. Explicaron que si no se encontraban entregando gas a Cuiaba, habrían multas de un millón de dólares diarios.” A lo anterior se añadía el argumento de que si no se cambiaba la caracterización del Bosque Chiquitano, de primario a secundario, “la OPIC (Overseas Private Investment Corporation - Agencia Federal de Inversiones del Tesoro de EE UU), no iba a financiar la obra, ya que tiene un estándar que estipula que no pueden financiar proyectos que pasan por bosques tropicales primarios”⁷.

Como se observa, las empresas ponían en la balanza el aspecto económico con mayor énfasis que lo social y ambiental, además de que en los negociadores seguían ausentes los actores locales y nacionales.

Finalmente, se impuso el criterio pragmático del dinero mediante la negociación entre las empresas (ENRON y SHELL) y las ONGs autoras del ISEA para crear y financiar un programa de conservación. El 11 de Junio de 1999, las organizaciones autoras del ISEA y las empresas, firmaron un acuerdo (protocolo) para invertir 30 millones de dólares en un programa de conservación para el Bosque Seco Chiquitano. Representantes de OPIC y las empresas, difundieron dicho acuerdo y el directorio de OPIC aprobó el financiamiento. En otras palabras, las ONGs autoras del ISEA otorgaron el sello verde para la destrucción del Bosque Chiquitano.

De acuerdo al Artículo 170 de la CPE, la Ley de Medio Ambiente, Art. 46 y 47; la Ley Forestal en su Artículo 4 y el Reglamento para la prevención y Control Ambiental, Art. 4; el Ministerio de Desarrollo Sostenible, como parte del poder Ejecutivo, tiene la facultad y el deber indelegable de normar en materia de manejo y uso de los bosques para su conservación, etc.

La creación del Programa de “Conservación” del Bosque Seco Chiquitano, fue aprobada por OPIC en base al tráfico de influencias de la ENRON⁸, que junto a su socia SHELL, reunieron a 5 organizaciones conservacionistas para tal proyecto:

6 (Informe de la WWF en relación a la conservación del Bosque Seco Chiquitano, 24 Septiembre del 2000).

7 (Informe de la WWF en relación a la conservación del Bosque Seco Chiquitano, 24 Septiembre del 2000).

8 Denuncia del Washington Post.

- Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) - Bolivia
- Museo Noel Kempff Mercado (MNKM) - Bolivia
- Missouri Botanical Garden - EE UU
- Wild Life Conservation Society - EE UU
- World Wildlife Foundation (WWF) - EE UU

A raíz de la presión nacional e internacional ejercida por las organizaciones⁹, WWF se retira de dicha sociedad aduciendo falta de transparencia en el proceso y la sociedad accidental. De esta manera los miembros de este programa, luego convertido en “Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano”, quedaron conformados de la siguiente manera:

- Fundación Amigos de la Naturaleza - FAN
- Museo Noel Kempff Mercado, perteneciente a la UAGRM y que cambió su razón social por Fundación Amigos del Museo Noel Kempff Mercado
- Missouri Botanical Garden - MBG
- Wildlife Conservation Society – WCS
- ENRON
- SHELL

Las empresas ENRON y SHELL, se comprometieron a otorgar un financiamiento de 20 millones de dólares y 10 millones de dólares debían ser otorgados por las organizaciones “conservacionistas”, haciendo un total de 30 millones de dólares a ser desembolsados en 15 años.

Como se puede observar, las dos compañías petroleras son juez y parte y obviamente por el proceso que dio lugar a su creación, no integran en su directorio, ni a los municipios, ni a los indígenas, ni al gobierno, ni organización local. Por ello, no rinden cuentas a nadie, aspecto que ya constituye un “escándalo de corrupción, dado que obtienen millonarios recursos usufructuando ilegalmente, un bien del Estado boliviano”¹⁰.

2.4. Irregularidades de la FCBC

Esta Fundación no contaba con Personería Jurídica ni tiene la Licencia Ambiental para operar en la región, sin embargo y durante tres años, “ha firmado convenios y ejecutado 113 proyectos por un monto cercano a los 3 millones de dólares, ninguno de los cuales, benefició al bosque, las comunidades que lo habitan o a los municipios”¹¹.

9 Fuente: WWF, Informe Elaborado por R. Napier, Mayo 2001

10 Dossier Informativo: CPESC-CEADES, Noviembre 2003.

11 Dossier Informativo: CPESC-CEADES, Noviembre 2003.

“Han violado al menos, unos 18 artículos de leyes nacionales, incluidas leyes penales por biopiratería de unas 5.000 especies botánicas, donde están implicados MBG, Fundación Amigos del Museo HNKM y la FAN”¹².

A lo anterior, se debe añadir que no ha hecho absolutamente nada en ayudar a prevenir los impactos socio ambientales y violación de las normas ambientales por parte de sus socios ENRON y SHELL durante la construcción y puesta en operaciones del Gasoducto San Miguel - Cuiaba. Es más, ha contribuido a que los daños causados sean más graves, tal como lo verificó la inspección realizada por el Viceministerio del área, realizada “in situ”, en Abril del 2003.

“Pese a todas las denuncias sobre la degradación del bosque, que fueron reconocidas hasta por la OPIC (retiró el préstamo de 200 millones de dólares), jamás se investigó, ni se realizó una auditoría ambiental privada del bosque seco, pese a ser un programa de conservación”¹³. Es más, contribuyeron a una mayor destrucción del Bosque al realizar la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental complementario para la Mina Don Mario, propiedad del ex-presidente Sánchez de Lozada, cuando se descubrió que esta mina había tendido un gasoducto a sus instalaciones sin contar con la Licencia Ambiental correspondiente. El delito es mayor, cuando esta Fundación elabora dicho Estudio, estando bajo amonestación emitida en la Resolución 26/2 del 8 de Julio del 2002 del VMARNDF que define la prohibición de celebrar convenios, elaborar planes, etc. En otras palabras, existe un permanente desacato a la autoridad, violando el Art. 21 y 96 de la Ley de Medio Ambiente y los Art. 22 y 59 del Reglamento de Ley y el Art. 160 del Código Penal sobre “desobediencia a la autoridad”.

Para concluir, en la inspección realizada por el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, al Gasoducto San Miguel - Cuiaba, en Abril del 2003, se descubrió que la FCBC no contaba con Personería Jurídica legal. Sin embargo, en una investigación realizada por CEPESC y CEADES, se descubre que tenían un acta de Personería Jurídica con firma del ex-prefecto Sr. Mario Justiniano de fecha 8 de Enero del 2003. “Mas grave aún, en carta dirigida por el representante de la Fundación, Hermes Justiniano al Prefecto de entonces (Mario Justiniano), fechada el 20 de Agosto del 2003 y recepcionada en la Prefectura el mismo día, hacen notar que pueden perder una donación por no contar con certificado de liberación de impuestos y personalidad jurídica”¹⁴. “Si hasta el 20 de Agosto del 2003, no poseían Personería Jurídica, según se desprende de dicha carta, la aparición de la Personería Jurídica con fecha 8 de Enero del 2003, es falsa y nula y según el

12 Dossier Informativo: CPESC-CEADES, Noviembre 2003.

13 Dossier Informativo: CPESC-CEADES, Noviembre 2003.

14 Dossier Informativo FCBC: Delitos, Ilegalidades, contravenciones con los recursos Naturales del Estado, CPESC/CEADES, Santa Cruz, Noviembre 2003.

Código Penal, Cap. III, Art. 168 (falsedad material) y art. 169 (falsedad ideológica, en concurso real de delitos”¹⁵

2.5. Situación actual

En junio se cumplen cuatro años de iniciadas sus actividades ilegales, la FCBC no se ha logrado consolidar en el área, por el permanente rechazo de las poblaciones locales y en muchos casos la expulsión de varias localidades como es el caso de la provincia Angel Sandoval, donde en el Municipio de San Matías, han expulsado a dicha Fundación de todas las comunidades de su territorio. Asimismo en las localidades de la Provincia Germán Busch y el Municipio de Roboré: Chochis, etc. El SERNAP no ha firmado ningún convenio, así como el Convenio firmado entre la FCBC y la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, ha sido anulado. Por otra parte el CEPSC ha instruido a todas las organizaciones indígenas a expulsar a los funcionarios de la FCBC de las comunidades, asimismo, los Comités Cívicos de Chochis, Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez, San Matías, San José, no desean tener relaciones con dicha Fundación.

Sin embargo, hasta ahora y a pesar de existir recomendaciones de la Fiscalía de Distrito, Defensoría del Pueblo, Contraloría Departamental, Consejo departamental, Derechos Humanos, Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, en sentido de suspender actividades, la citada FCBC, continúa operando con toda impunidad y en franco desacato a la ley y a la dignidad de los pobladores locales, que han visto destruido el Bosque Chiquitano, en aras de los intereses de las empresas petroleras y de un grupo de organizaciones que usa el concepto de la “conservación” para su provecho y en desmedro de los recursos naturales y la soberanía de un pueblo. *No debemos concordar con que se ponga precio a la naturaleza y menos cuando se trata de su destrucción.*

Bolivia es un país muy rico en biodiversidad, y también es rico culturalmente por la diversidad de etnias y pueblos que habitan su territorio. Debemos entender la interrelación y equilibrio que debe primar entre a ambas. Por ello la importancia de la administración local, la misma que está en relación permanente con las comunidades locales, y no puede ser separada del concepto de desarrollo, lo contrario es continuar con las políticas de explotación irracional de nuestros recursos naturales.

“El hombre y la naturaleza conforman una unidad, que no se puede separar cuando se trata de su defensa”

15 Dossier Informativo FCBC: Delitos, ilegalidades, contravenciones con los recursos Naturales del Estado, CPESC/CEADES, Santa Cruz, Noviembre 2003.

El Parque Nacional Tunari y el comité de gestión: situación actual

Humberto Mariscal¹

1. Antecedentes de la creación del Parque Nacional Tunari

El Parque Nacional Tunari (PNT) nació con una visión de conservar el gran potencial de recursos naturales y servicios ambientales que se tiene en esa área geográfica; además de controlar la recarga de los acuíferos de la zona. De esa manera, se promulga el Decreto Supremo N° 06045 (el 30 de marzo de 1962) que crea el PNT, estableciendo los siguientes límites: al norte la ceja de monte en la región de Tablas Monte, al sur la avenida Circunvalación, al este la quebrada de Arocagua y al oeste la quebrada Taquiña. Posteriormente este Decreto Supremo fue elevada a rango del Ley el 4 de noviembre de 1963.

Después de aproximadamente 28 años, con la Ley N° 1262 (promulgada el 13 de septiembre de 1991) se amplía la extensión del PNT y se establecen nuevos límites que se encuentran vigentes hasta la fecha, los cuales son: al norte la ceja de monte de Tablas, al sur la cota 2750, al este el río Kenko o Kenku Mayu y al oeste el margen estrecho de Parotani.

Con la nueva Ley del PNT se amplían sobre todo los límites del sector este y oeste, lo que hace que la jurisdicción provincial y municipal también se amplíe, siendo esta a la fecha la siguiente:

1 Ingeniero Agrónomo. Director del Parque Nacional Tunari, Cochabamba-Bolivia.

Jurisdicción Provincial y Municipal del Parque Nacional Tunari

Provincia	Municipio	Agentes Cantonales
1. CHAPARE	– Sacaba	
2. CERCADO	– Cercado	
3. QUILLACOLLO	– Quillacollo – Colcapirhua – Tiquipaya – Vinto	– El Paso – Chapisirca
4. TAPACARÍ	– Sipe Sipe – Tapacarí	
5. AYOPAYA	–	

Es necesario realizar una aclaración en cuanto a la sección municipal de Morochata perteneciente a la Provincia Ayopaya, puesto que no incluimos a esta sección municipal en el cuadro anterior. Muchos conocen que Morochata es un municipio con alto potencial agrícola y pecuario, donde prevalece el cultivo de la papa en cuanto a superficie, a niveles de productividad, a niveles de producción y a la calidad; asimismo la sección municipal Morochata tiene una diversidad de microclimas aptas para el cultivo de diferentes especies como la papa, la avena, la cebada y variadas hortalizas y leguminosas. Debido a ello, este municipio requiere de un análisis profundo para ser incorporado en el PNT.

La superficie actual del PNT de acuerdo a la jurisdicción provincial es la siguiente:

Extensión del PNT de acuerdo a la Jurisdicción Provincial

Ayopaya	Cercado	Quillacollo	Chapare	Tapacarí
774.40 Km ² 25 %	22.33 Km ² 1 %	1092.98 Km ² 35 %	934.62 Km ² 30 %	266.79 Km ² 9 %

La provincia más afectada territorialmente por el PNT es Quillacollo, y la menos afectada es la provincia Cercado que en realidad corresponde a menos del 1% de la superficie del PNT.

2. Objetivos del Parque Nacional Tunari

Inicialmente el objetivo de PNT era la de ampliar la masa boscosa de las plantaciones forestales principalmente de pino. Sin embargo, con el pasar de los años y la realización de algunos estudios por personalidades importantes, se estableció que los objetivos del PNT van más allá de la ampliación de las plantaciones forestales. De ese modo, se replantearon los objetivos del PNT que actualmente

dentro la Prefectura de Cochabamba es concebido como un proyecto que persigue los siguientes objetivos:

Objetivo del proyecto del PNT:

Realizar un Manejo Integral del PNT bajo una planificación técnica y adecuada que permita obtener un bosque ideal que cumpla las funciones de protección, disminución de la contaminación, generador y regulador del ciclo hidrológico y de recreación.

Se debe aclarar que la visión del Manejo Integral del PNT requiere considerar operativamente diferentes componentes, que se espera lograr en el mediano plazo.

Objetivos específicos del proyecto del PNT:

- Incrementar la cobertura vegetal en el área del PNT con plantaciones orientadas específicamente a la producción de biomasa para energéticos, en forma de bosquetes o combinados en sistemas forestales.
- Promover plantaciones forestales y agroforestales en las comunidades campesinas para evitar la erosión de suelos y mejoramiento ambiental.
- Reducir riesgos y enfrentar situaciones de incendio en toda el área del PNT.
- Activar la coordinación y el diálogo entre instituciones que persiguen el desarrollo basado en el respeto del medio ambiente.
- Optimizar el manejo silvicultural con técnicas adecuadas de intervención en los diferentes rodales a partir de un plan de manejo.
- Implementar un control preventivo en los diferentes campamentos que posee el Proyecto de la incidencia de incendios y lucha activa en caso de incendios.

Respecto del avance de los objetivos específicos, es importante indicar que hasta el año 1997 cuando concluyó sus acciones el entonces PROFOR (Proyecto Forestal) estableció una masa boscosa de aproximadamente 500 hectáreas. A partir del año 1998, la producción de plantines en el vivero del PNT fue de setenta mil a ochenta mil, pero en el año 2003 en base a un sondeo se determinó que la demanda de plantines por parte de la comunidades era mucho mayor, por lo que se estableció para el año 2003 de producir ciento cincuenta mil plantines con la misma capacidad instalada de nuestro vivero, cumpliendo el objetivo e incluso sobrepasando la producción de plantines en diez mil unidades. Para el año 2004 la meta es también de producir ciento cincuenta mil plantines.

Por otra parte, indicar que en el año 2003 se ha tenido 45 incendios en el PNT, y el 95% de estos incendios son provocados. Eso implica que los incendios se debe principalmente a la falta de conciencia y educación ambiental por parte de la sociedad civil. Actualmente se tiene 2 campamentos principales con sus respectivos guarda bosques ubicados en el sector de las áreas boscosas de la Provincia Cercado, los cuales además de hacer el control del parque y están encargados de combatir los incendios.

3. La problemática del Parque Nacional Tunari

La problemática actual del PNT está determinado esencialmente por los diferentes asentamientos que se vienen realizando alrededor de la cota 2750 que es el límite sur del Parque Nacional Tunari. La información y los datos que se presentan a continuación corresponde a los estudios realizados por el CLAS (Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG de la Universidad Mayor de San Simón) y la Lic. Debra Pereira.

Los asentamientos en el límite sur del PNT se ha incrementado paulatinamente, encontrando los siguientes datos hasta la gestión 2001.

**Asentamientos Urbanos en el Límite Sur del PNT
(cota 2750) por Municipio**

Municipio	Años			Total		Superficie Total (m ²)	N° de Lotes	Viviendas Construidas
	1971-1980	1981-1990	1991-2000	N°	%			
SACABA	0	5	8	12	37.5	336840	1307	802
CERCADO	3	7	7	17	53.1	728835	1998	1320
TIQUIPAYA	2	1	0	3	9.4	629064	1049	716
Total	5	13	14	32	100	1'724,739	4354	2838

Fuente: CLAS y Pereira (2001)

Hasta la gestión 2001 se contabilizó 32 asentamientos urbanos alrededor de la cota 2750 que es el límite sur del PNT, cubriendo en total aproximadamente 172.5 hectárea. El sector más afectado por lo asentamientos urbanos es la jurisdicción del Municipio de Cercado, donde existe no solo lotes sino una gran cantidad de viviendas construidas.

Por otra parte, los estudios realizados indican que alrededor de la cota 2750 existen comunidades campesinas que desarrollan actividades agrícolas en sus parcelas familiares, identificándose 41 comunidades distribuidos por municipios de la siguiente manera:

**Comunidades Campesinas en el Límite Sur del PNT
(cota 2750) por Municipio**

Municipio	N° Comunidades	%	Superficie Total (Ha)	Parcelas Familiares (Ha)	Área Cultivable (Ha)
SACABA	9	21.96	1350.0	1203.12	765.61
CERCADO	5	12.19	3733.0	1240.00	233.00
TIQUIPAYA	5	12.19	2500.0	1626.00	752.00
QUILLACOLLO	8	19.51	1088.0	606.82	234.90
VINTO	9	21.96	2484.0	1545.80	683.24
SIPE SIPE	5	12.19	1380.0	858.78	379.58
Total	41	100.0	12535.0	7080.52	3048.34

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Las 41 comunidades campesinas ubicadas alrededor de la cota 2750 ocupan un total de 12535 hectáreas, de los cuales es utilizado en la agricultura aproximadamente el 25 %.

En cuanto a la población tanto urbana como rural asentada alrededor de la cota 2750, se tiene los siguientes datos:

Población Asentada en el Límite Sur (cota 2750) del PNT

Provincia	Municipio	Población Rural	Población Urbana	Población Total
QUILLACOLLO	Quillacollo	4340.0	0.0	4340.0
	Vinto	3486.0	0.0	3486.0
	Tiquipaya	3328.0	2481.0	5809.0
	Sipe Sipe	1706.0	0.0	1706.0
CERCADO	Cercado	3304.0	5827.0	9131.0
CHAPARE	Sacaba	4376.0	2866.0	7242.0
Total	6	20540.0	11174.0	31714.0

Fuente: CLAS y Pereira (2001)

La población total asentada alrededor de la cota 2750 alcanza a 31714 habitantes, siendo población rural casi el 65%. Para mayor información por municipio sobre las urbanizaciones, loteamientos y comunidades campesinas ubicadas alrededor de la cota 2750 ver anexo 1.

Un dato importante, principalmente de las urbanizaciones y loteamientos es su ubicación en relación a la cota 2750, puesto que este dato indica en que grado se esta afectado el límite sur del PNT. De toda la información que se adjunta como anexo, se puede indicar que el 40 % de las urbanizaciones están ubicadas por encima de la cota 2750, es decir que el 100% de estas urbanizaciones están

dentro los límites del PNT. El restante 60% están ubicadas sobre la misma cota 2750, afectando el área del PNT en diferentes porcentajes, vale decir que solo una parte de estas urbanizaciones sobrepasan el límite sur del PNT.

En el caso de los loteamientos, se encuentra que el 72% de estos se ubican por encima de la cota 2750, lo que significa que una mayoría de los loteamientos realizados hasta el año 2000 se encuentran dentro el área del PNT.

Respecto de las comunidades campesinas ubicadas alrededor de la cota 2750, se encuentra que el 64% (de un total de 41 comunidades) están ubicadas dentro los límites del PNT; el restante 36% de las comunidades campesinas afectan solo en parte el área del PNT, es decir que estas comunidades se encuentran ubicadas en la misma cota 2750 y afectan parcialmente el área del PNT.

En conclusión, la mayor problemática del PNT es entonces la transgresión del límite sur definida por la cota 2750 por diferentes asentamientos humanos. Los conflictos que se generan a raíz de ello es complejo y tiene diversas características que no permite encontrar soluciones adecuadas y de consenso. Por una parte, las urbanizaciones y loteamientos es producto sobre todo de una política económica nacional implementada en los años 80 que ha obligado a muchas familias a abandonar los centros mineros y ha establecerse en las grandes ciudades como Cochabamba; asimismo existe una fuerte incidencia política que pretende favorecer a algunos sectores con la entrega de terrenos fiscales y/o municipales.

4. Las acciones en torno al comité de gestión del Parque Nacional Tunari

Con la promulgación del Decreto Supremo N° 24781 del 31 de julio de 1997, entró en vigencia el Reglamento General de las Áreas Protegidas. Este reglamento en su II sección se refiere específicamente a la conformación de los Comités de Gestión en las Áreas Protegidas, siendo importante hacer referencia a algunos de sus artículos respecto de estos comités:

Art. 47. El Comité de Gestión es la instancia de participación, a nivel de cada área protegida, que incorpora en la gestión de la misma a los pueblos indígenas, comunidades originarias establecidas, municipalidades, prefecturas y otras entidades públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales involucradas, de conformidad con lo establecido en el art. 62 de la Ley de Medio Ambiente.

Art. 48. El Comité de Gestión es el órgano representativo de la población local que participa en la planificación y coadyuva en la fiscalización de la gestión del área protegida.

Art. 51. El Comité de gestión estará integrado por un número mínimo de seis y un máximo de diez representantes titulares con sus respectivos suplentes,

designados por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos siempre que sus actos se hubieren enmarcado en la Ley.

Art. 52. Son funciones y atribuciones del Comité de Gestión:

- Participar en la definición de las políticas de manejo del área, así como en la elaboración, ejecución y evaluación del plan de manejo y los planes operativos, en el marco de los objetivos del área y de las normas y políticas nacionales y departamentales.
- Coadyuvar con la Dirección del Área en la priorización, ejecución y evaluación de los programas, sub programas, proyectos y actividades a desarrollarse en el área.
- Colaborar eficazmente en la generación de una participación activa a favor del área protegida por parte de la comunidad local.
- Velar por la integridad territorial y la inviolabilidad del área protegida de conformidad con su categoría y zonificación
- Denunciar ante la dirección del área las infracciones o delitos que sean de su conocimiento
- Poner en conocimiento ante las autoridades nacionales cuando conociere sobre acciones u omisiones de la dirección del área o de la entidad administradora, en perjuicio de los objetivos del área.
- Participar en la selección de los postulantes a guardabosques
- Participar en la evaluación anual de las actividades que cumplen los guardabosques.

En el año 2000 la Prefectura de Cochabamba recién pretende implementar la Ley 1262 del Parque Nacional Tunari que fue promulgada en el año 1991, para lo cual impulsó algunas acciones como fue la conformación del Comité de Gestión. Pero previamente encarga la realización de un estudio para conocer la situación del PNT hasta ese momento y que permita tener elementos para impulsar la gestión del PNT en forma participativa y concertada con los actores sociales involucrados.

Sin embargo, como resultado de ese estudio se constató que la Ley 1262 tiene un contenido estricto de lo que es un área protegida, donde los actores locales están claramente ausentes, es decir que la Ley del PNT no reconoce la permanencia de las comunidades campesinas dentro de su área ni el desarrollo de actividades económicas y culturales. Debido a ello, una primera propuesta fue el de discutir el contenido de la Ley 1262 porque no compatibiliza con la realidad social que se vive en el PNT. Por otra parte, se evidenció que había un profundo desconocimiento de la Ley principalmente por parte de las comunidades campesinas.

En ese marco, es que se planteó que la Ley 1262 debería ser adecuada a la realidad que se vive en el área del PNT. Una planteamiento inmediato para ello,

fue el de realizar un Plan de Manejo del PNT pero con la participación y en concertación con todos los actores sociales involucrados en el PNT. De esa manera fue que se reconoció, que el principal mecanismo para llevar adelante todas las acciones propuestas era la “participación ciudadana”, entendiéndose esta, sin embargo, como la participación del conjunto de los actores sociales involucrados en la gestión de PNT y no solo de las comunidades campesinas. En muchos casos los únicos actores involucrados en la gestión de las áreas protegidas eran las organizaciones ambientalistas (sobre todo ONGs) y las entidades gubernamentales como el SERNAP y las prefecturas.

La falta de información que tenían sobre todo las comunidades campesinas respecto de la Ley 1262, exigía que era necesario realizar acciones de capacitación y de difusión del contenido de la Ley 1262 y otros marcos legales relacionados con las áreas protegidas. La carencia de un soporte técnico también era una debilidad identificada en el PNT, principalmente respecto a la identificación de riesgos y de resolución de los conflictos. Finalmente, como en toda área protegida, una de las mayores preocupaciones era la sostenibilidad financiera.

En síntesis, para dar viabilidad a la gestión del PNT debía inicialmente resolverse todos los conflictos. Un primer paso en esa línea, fue conformar el Comité de Gestión con la participación de la Prefectura, las instituciones ambientalistas, la universidad Mayor de San Simón, las organizaciones campesinas y los municipios. Sin embargo, esta conformación tuvo características muy diferentes a otras áreas protegidas principalmente porque el PNT no tiene un Plan de Manejo y un Director, lo que se tiene es un Programa de Repoblamiento Forestal y un Director de este Programa que hace eventualmente como Director del PNT. Dada esta situación, el Comité de Gestión debía implementar todo el proceso de gestión del PNT, iniciando con la identificación y resolución de los conflictos y la elaboración de un Plan de Manejo. Asimismo, previamente debía revisar la Ley 1262 con la participación de todos los actores sociales involucrados, lo que implicó una larga discusión impregnada en muchos casos por intereses sectarios y hasta políticos. El establecimiento de urbanizaciones y loteamientos en el área del PNT fue uno de los conflictos más discutidos por ejemplo con las alcaldías, ya que muchas urbanizaciones y loteamientos estaban afectando las principales zonas de recarga acuífera como es el área alrededor de la cota 2750. En ese sentido, se debe subrayar que uno de los principales objetivos del PNT es la protección de las zonas de recarga acuífera para el valle de Cochabamba y el manejo sostenible de las cuencas en toda la cordillera del Tunari.

Después de varias reuniones del Comité de Gestión y de la realización de más de 40 talleres con las comunidades campesinas, no se logró ningún avance en la resolución de los conflictos, más bien algunos actores sociales como las organizaciones campesinas expresaron un rechazo total a la Ley 1262. Por un lado, las comunidades campesinas no lograron entender lo que es un área protegida y por

otro, el Ejecutivo representado por la Prefectura no logró entender lo que es un manejo territorial sostenible con participación de actores locales como las comunidades campesinas. Estas dos posiciones muy enfrentadas llevaron al fracaso de todo intento de solución de los conflictos y de la implementación de la Ley 1262 a través del Comité de Gestión.

El derecho propietario sobre la tierra y los recursos naturales fue otro tema muy discutido con las comunidades campesinas, puesto que la Ley 1262 es muy sugerente en cuanto a la expropiación de tierras e incluso al desalojo de asentamientos humanos del área del PNT. Una observación que realizan las comunidades campesinas respecto de la propiedad de la tierra, es que la Ley INRA viene impulsando el “saneamiento de tierras” en muchas comunidades campesinas y la Ley 1262 desconoce la propiedad familiar y comunal de las tierras, lo que es evidentemente una contradicción.

A raíz de todo ello, las comunidades campesinas expresaron claramente su falta de credibilidad en el Estado y sus instituciones como la Prefectura. En los últimos años en Bolivia, el Estado y sus instituciones se han desgastado hasta el punto que una gran parte de la ciudadanía, entre ellas las organizaciones campesinas, ya no cree en sus buenas intenciones y mucho menos de los gobernantes.

Si bien la realización de talleres con las comunidades campesinas y la discusión generada en torno al Comité de Gestión ha permitido un acercamiento con diferentes los actores sociales, lo que no significa que estén de acuerdo con lo que planteó la Prefectura, lo más importante fue que las organizaciones campesinas develaron sus intereses e hicieron conocer su posición que se resume en los siguientes puntos hecho público el 31 de octubre de 2001:

- Rechazo y/o sustitución de la Ley N° 1262 del Parque Nacional Tunari.
- Se respetan los límites actuales del Parque Nacional Tunari.
- Administración propia por las comunidades campesinas del área protegida con apoyo institucional.
- Respeto a usos y costumbres y servidumbres de las comunidades originarias.
- Respeto al derecho propietario sobre la tierra con el mismo tratamiento y saneamiento de tierras en forma gratuita.
- No se acepta ningún tipo de concesión de los recursos naturales del PNT.
- Protección bajo gestión campesina de cuencas, torrenteras y áreas de pendientes.
- Protección bajo gestión campesina de áreas verdes, lagunas y biodiversidad
- Manejo de los bosques, plantas nativas y exóticas bajo administración de las comunidades campesinas.
- Realizar actividades agrícolas, ganaderas y agroforestales de forma sostenibles con el manejo de aynogas y conservación de suelos.

- Uso apropiado del agua, construcción y mantenimiento de sistemas de riego, recuperación de lagunas y conservación de vertientes.
- Capacitación técnica para el manejo sostenible de los recursos naturales.
- Mejoramiento del ganado, de los sistemas de pastoreo y del manejo sostenible de los pastizales.
- Acceso general a servicios básicos públicos equipamiento social y vías de acceso con planificación especializada.
- Construcción de viviendas rurales con planificación apropiada.
- Garantizar mercados para la producción de las comunidades del PNT a precios justos.
- Financiamiento para la administración y ejecución de actividades en el PNT, del tesoro nacional, municipios e impuesto ecológico.
- El Comité de Gestión debe constituirse con una representación de las organizaciones campesinas provinciales igual al 50% más uno del total de sus miembros.

A la fecha el Comité de Gestión no está en funcionamiento, no porque no quieren hacerlo, sino porque además de la posición de las organizaciones campesinas expresa en los anteriores puntos, han planteado llevar adelante un proceso participativo que les permita elaborar una propuesta desde sus organizaciones campesinas para modificar o sustituir la Ley 1262, lo cual fue encargado a la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.

Anexo 1

Urbanizaciones, Loteamientos y Comunidades Campesinas en el Municipio de Sacaba Ubicadas alrededor de la Cota 2750

	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Urbanizaciones:				
Trabajadores de Salud	N° 1 Sacaba	60% sobre la cota	648	Urb. Construida
Servicio Nal. Caminos	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	490	Urb. Construida
Kami	N° 2 Quintanilla	40% sobre la cota	84	Con construcciones y lotes
Veneros Pirquineros Siglo XX	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota	318	Con construcciones y lotes
Puntiti Chico	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota	161	Construcciones en áreas agrícolas
Servicio Nal. de Caminos	N° 3 Pacata	100% sobre la cota	364	Urb. Construida
Taqo Loma	N° 3 Pacata	30% sobre la cota	134	Con construcciones y lotes
Villa 14 de Septiembre	N° 3 Pacata	10% sobre la cota	18	Urb. Construida
Coloma	N° 3 Pacata	20% sobre la cota	36	Con construcciones y lotes
27 de mayo	N° 3 Pacata	10% sobre la cota	56	Con construcciones y lotes
Villa el mar	N° 3 Pacata	100% sobre la cota	522	Urb. Construida
Plan 335-k-anexo	N° 3 Pacata	10% sobre la cota	35	Con construcciones y lotes
		TOTAL	2866	
Loteamientos:				
Magisterio Oruro	N° 1 Sacaba	20% sobre la cota		Sin construcciones
Fabril	N° 1 Sacaba	30% sobre la cota		Sin construcciones
Ferrovianos	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota		Sin construcciones
Mopar	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota		Sin construcciones
Excombatientes	N° 3 Pacata	80% sobre la cota		Sin construcciones
Comunidades:				
Hornoni	N° 3 Pacata	100% sobre la cota	78	Areas agrícolas
Puntiti Chico	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota	2400	Areas agrícolas
Animas Mogo	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	500	Areas agrícolas
Taqo Loma	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	300	Areas agrícolas
San Jacinto	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	85	Areas agrícolas
Chimboco	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	328	Areas agrícolas
Wayllani Chico	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	127	Areas agrícolas
Pucarita	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	250	Areas agrícolas
Pucara	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	308	Areas agrícolas
TOTAL			4376	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Urbanizaciones, Loteamientos y Comunidades Campesinas en Municipio de Cercado Ubicados alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Las Delicias	N° 1	75% sobre la cota	135	Con construcciones y lotes
Lomas de Aranjuez	N° 1	90% sobre la cota	180	Urbanización construida
Portales	N° 2	43% sobre la cota	224	Urbanización construida
Libertad	N° 2	100% sobre la cota	135	Urbanización construida
Maca	N° 2	100% sobre la cota	40	Con construcciones y lotes
Prefectural	N° 2	80% sobre la cota	480	Con construcciones y lotes
Asunción Llallagua	N° 2	48% sobre la cota	605	Urbanización construida
La Floresta	N° 2	100% sobre la cota	30	Con construcciones y lotes
Los Ceibos II	N° 2	10% sobre la cota	24	Con construcciones y lotes
Villa Guadalupe	N° 2	100% sobre la cota	1239	Urbanización construida
Tirani Maravillas	N° 2	100% sobre la cota	480	Con construcciones y lotes
Taquiña Chica	N° 2	100% sobre la cota	700	Con construcciones y lotes
Estrada	N° 2	95% sobre la cota	365	Urbanización construida
27 de mayo Policial	N° 2	25% sobre la cota	240	Urbanización construida
Alto Candelaria	N° 2	100% sobre la cota	720	Urbanización construida
Huanuni	N° 2	14% sobre la cota	50	Urbanización construida
Tunari	N° 2	100% sobre la cota	180	Con construcciones y lotes
		TOTAL	5827	
Loteamientos				
Casegural	N° 1	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Comibol Potosi	N° 2	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Comunidades				
Pacolla	N° 1	100% sobre la cota	200	Vivienda y áreas agrícolas
Andrada	N° 1	100% sobre la cota	444	Vivienda y áreas agrícolas
Tirani	N° 2	100% sobre la cota	464	Vivienda y áreas agrícolas
Taquiña Chico	N° 2	100% sobre la cota	96	Vivienda y áreas agrícolas
Taquiña Grande	N° 2	50% sobre la cota	2100	Vivienda y áreas agrícolas
		TOTAL	3304	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Urbanizaciones, Loteamientos y Comunidades Campesinas en el Municipio de Tiquipaya Ubicadas alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Villa Porvenir Unificada	N° 5	50% sobre la cota	2100	Con construcciones y lotes
Villa Satélite	N° 5	35% sobre la cota	101	Con construcciones y lotes
Cooperativa Miraflores	N° 5	50% sobre la cota	280	Construcciones 60% y lotes
		TOTAL	22481	
Loteamientos				
I.G.M	N° 5	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Valeros	N° 5	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Magisterio Urbano	N° 5	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Extierras Chilimarka	N° 5	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Comunidades				
Los Molinos	N° 4	Sobre la cota	350	Vivienda y áreas agrícolas
Montecillo Bajo	N° 4	En la cota	1750	Vivienda y áreas agrícolas
Salacachi	N° 4	En la cota	917	Vivienda y áreas agrícolas
Pucun Pucun	N° 5	Sobre la cota	311	Vivienda y áreas agrícolas
Tinti Mokho	N° 4	En la cota	779	Vivienda y áreas agrícolas
		TOTAL	3328	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Comunidades Campesinas en el Municipio de Quillacollo alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Piusi	N° 8	En la cota	378	Vivienda y áreas agrícolas
Aguila Rancho	N° 8	Sobre la cota	300	Vivienda y áreas agrícolas
Jove Rancho	N° 8	Sobre la cota	340	Vivienda y áreas agrícolas
Molle Molle	N° 8	En la cota	420	Vivienda y áreas agrícolas
Okosuru	N° 7	En la cota	249	Vivienda y áreas agrícolas
Bella Vista	N° 7	En la cota	1200	Vivienda y áreas agrícolas
Falsuri	N° 7	Sobre la cota	900	Vivienda y áreas agrícolas
Potrero	N° 7	En la cota	553	Vivienda y áreas agrícolas
		TOTAL	4340	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Comunidades Campesinas en el Municipio de Vinto alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Buena Vista	N° 6	En la cota	400	Vivienda y áreas agrícolas
Isacaypata	N° 7	En la cota	989	Vivienda y áreas agrícolas
Thajira o Kolga	N° 8	En la cota	80	Vivienda y áreas agrícolas
Combuyo	N° 8	En la cota	739	Vivienda y áreas agrícolas
Llave Grande	N° 7	Sobre la cota	255	Vivienda y áreas agrícolas
Llave Chico	N° 8	En la cota	276	Vivienda y áreas agrícolas
Calatrancani	N° 8	En la cota	170	Vivienda y áreas agrícolas
Vilomilla	N° 8	En la cota	517	Vivienda y áreas agrícolas
Kaspi Cancha	N° 8	Sobre la cota	60	Vivienda y áreas agrícolas
		TOTAL	3486	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Comunidades Campesinas en el Municipio de Sipe Sipe alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Chaupi		Sobre la cota	160	Vivienda y áreas agrícolas
Viloma		Sobre la cota	813	Vivienda y áreas agrícolas
Combuyo		Sobre la cota	192	Vivienda y áreas agrícolas
Siqui Siquia		Sobre la cota	219	Vivienda y áreas agrícolas
Pirhuas		Sobre la cota	322	Vivienda y áreas agrícolas
Comunidades			1706	

Fuente: CLAS y Pereira (2001)

Las áreas protegidas de Ayopaya desde la percepción de las organizaciones campesinas

Zacarías Ortíz¹

1. Antecedentes históricos

La Provincia Ayopaya siempre ha sido un lugar donde existe muchos recursos naturales y biodiversidad. Aquí vivieron los Quechua-Aymaras desde mucho antes de la llegada de los españoles, incluso antes del nacimiento de Jesucristo. Mucho después llegó el coloniaje español, como se sabe, nos usurparon todas nuestras riquezas, pero no quieren reconocer. Un ejemplo claro de que los españoles usurparon nuestros recursos naturales, es lo que paso con el Cerro Rico de Potosí, pero no solo usurparon nuestros recursos naturales, sino también esclavizaron y mataron a nuestros abuelos. Luego vinieron los patrones que igualmente abusaron y fueron pongos nuestros padres y abuelos de estos. Lo que nos preocupa al movimiento campesino de todo esto, es que ahora no quieren reconocer y muchos profesionales no dicen la verdad, y no nos explicamos porque.

Con la llegada de la Reforma Agraria en 1953 es verdad que desaparecieron los patrones, pero lamentablemente nos quedamos con tierras muy pequeñas que actualmente no es suficiente para mantener a nuestras familias. Sin embargo, desde 1953 muchos gobiernos han ido distribuyendo grandes extensiones (más de 37 millones ha) de tierra a sus familiares y amigos principalmente en el oriente boliviano. Actualmente quién dice que hay que revertir estas tierras? Más bien en los lugares donde los campesinos estamos viviendo con pequeñas parcelas nos quieren quitar y declarar parques. Como ven, no quieren respetar nuestros derechos originarios sobre nuestras propias que nadie nos regaló, sino que nos dejaron nuestros abuelos.

1 Dirigente Campesino. Es Secretario ejecutivo de la Central provincial de Ayopaya, Cochabamba-Bolivia.

Realmente esto es un atentado con todo el movimiento campesino, por eso rechazamos rotundamente a los parques sobre todo en la Provincia Ayopaya.

Por otra parte, los parques y las áreas protegidas se hacen para favorecer a las empresas otorgándoles concesiones petroleras, mineras y otras. Ahora también están queriendo hacer esos llamados corredores biológicos. Qué interés tiene todo esto? No es otra que para enriquecer a los empresarios y las transnacionales. Que beneficio podemos recibir los Quechuas-Aymaras? Ninguno, puesto que siempre nos han excluido y nos han marginado. Todas las Leyes que apoyan la declaración de parques en nuestras tierras, en realidad violan la Constitución Política del Estado y el Convenio de la OIT.

La Constitución Política del Estado en su artículo 171 párrafo I dice claramente que: *“Se reconoce, respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente relativo a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones”*

Por su parte en el Convenio 169 de la OIT en su artículo 15 indica: *“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes sobre la tierra, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los interesados de esos pueblos serían perjudicados.*

2. Las áreas protegidas en Ayopaya

Actualmente a la Provincia Ayopaya afecta tres parques: el Parque Nacional Tunari, el Parque Isiboro Sécure y el que se pretende crear con el nombre de Parque Altamachi-Cotacajes. Todos estos Parques afectan a más del 65% de la Provincia Ayopaya. Por ejemplo el Parque Nacional Tunari ha sido aprobado por el Presidente Jaime Paz Zamora en 1992 y ahora se dice que ya esta en funcionamiento, eso para los campesinos de Ayopaya no es así, porque hasta ahora no nos han consultado para nada, por tanto no reconocemos la Ley 1262 del Parque Nacional Tunari. Además esta ley en uno de sus artículos prohíbe criar animales y practicar la agricultura: Donde creen que van a vivir los campesinos? Que productos va haber en los mercados de Cochabamba si nosotros proveemos sobre todo papa?

Los campesinos pensamos que en vez de querer perjudicar al pueblo boliviano, por qué no se fiscaliza al gran empresario mineros como Gonzalo Sánchez de Lozada y otros que están contaminando los ríos con todo tipo de ácidos, ¿Eso no afecta al medio ambiente? Por qué las instituciones y los profesionales no se ocupan estos hechos y dejan a los campesinos alimentar al pueblo. Existen también otros casos en el oriente boliviano que muchos empresarios tienen grandes extensiones de tierra, y nadie dice nada de eso.

Como Provincia Ayopaya tenemos nuestras propias reservas naturales desde hace mucho tiempo, alrededor de 600 mil hectáreas, pero actualmente estas reservas son las que quieren declarar como Parque Cotacajes-Altamachi. Para ello sin embargo, ninguna institución nos ha consultado si estamos de acuerdo o no, de un momento a otro han aparecido algunas instituciones haciendo estudios y hablando de este parque.

El Municipio de Morochata está afectada en 84% con los tres parques: Tunari, Isiboro Sécore y Cotacajes-Altamachi, y donde creen que se va a producir papa si este municipio es el principal productor de papa en Bolivia.

En la prefectura de Cochabamba dicen que el Comité de Gestión del Parque Nacional Tunari ya está organizado, las organizaciones campesinas de las 5 provincias afectadas por este parque no reconocemos a ningún comité de gestión porque simplemente no somos parte de este, incluso siendo los dueños legítimos de las tierras.

Muchos indican que los parques van a beneficiar a los campesinos, sin embargo nosotros hasta el día de hoy no hemos visto ningún beneficio. Más bien con los parques creemos los que se benefician son las instituciones. En el caso de Cotacajes-Altamachi solamente en estudios y otros trámites se indica que ya se gastó más de un millón de dólares, pero los que vivimos en el lugar no hemos recibido nada hasta el momento. Todo esto está impulsado por la institución CETEFOR, donde hay muchas irregularidades y que incluso compran a algunos dirigentes para lograr que se firmen documentos.

Dentro del llamado Parque Cotacajes-Altamachi existe actualmente 18 concesiones mineras y 16 están en proceso de trámite. Nosotros preguntamos, si se está haciendo una declaración de parque por qué ya hay concesiones mineras? Acaso en un parque no se restringe la explotación de recursos naturales? Por otra parte, las empresas mineras y petroleras acaso no destruyen la biodiversidad? Todos sabemos que este tipo de empresas son las que han destruido los recursos naturales y la biodiversidad en todo el mundo. Otro interés que se busca en el Parque Cotacajes-Altamachi es el establecimiento de centros militares, no sabemos con qué intención.

Debido a todas estas irregularidades e intenciones ocultas, es que los campesinos de Ayopaya rechazamos rotundamente no solo el parque Cotacajes-Altamachi, sino también el Parque Isiboro Sécore y el parque Tunari.

3. Propuesta de las organizaciones originarias de Ayopaya

En primer lugar, pensamos que no nos pueden venir a invadir y ordenar en nuestra propia casa, nos sentimos avasallados y humillados. En nuestras comunidades no solo vivimos, sino que trabajamos, criamos animales, sembramos y

también cuidamos la naturaleza. Para nosotros Quechuas-Aymaras, la Pachamama que es en realidad la Naturaleza, es sagrada y la respetamos en todo momento. Por ello proponemos que nos dejen continuar la naturaleza bajo nuestros propios usos, costumbres y servidumbres.

Por otro lado, proponemos conservar las tierras y hacer plantaciones para recuperar nuestros bosques, sin que haya necesidad de hacer una declaración de parque. También proponemos que se respete nuestras reservas de la Provincia Ayopaya.

A nivel de la Provincia Ayopaya ya contamos con un Plan de Gestión Territorial, pero lamentablemente no se quiere reconocer y ni se respeta este Plan que fue realizado en acuerdo con las organizaciones campesinas. Que nos queda a las organizaciones campesinas si no nos escuchan? Defender nuestras tierras si es necesario con nuestras propias vidas.

Finalmente, como movimiento campesino ya no queremos que existan más problemas y conflictos, más bien proponemos dialogar abiertamente con todas las instituciones y en especial con el gobierno, pero para ello nosotros solamente pedimos que se respeten nuestros derechos legítimos sobre nuestras tierras y territorios, y también nuestra cultura y nuestros derechos a la autodeterminación.

Panel de debate y discusión

Parte III

Moderador:

Dr. Marc Hufty, IEUD - Universidad de Ginebra, Suiza

Participante

No identificado

En realidad quedé impresionado con la presentación del representante del SERNAP, porque nos mostró que estamos avanzando, no es cierto? Sin embargo, recuerdo que a finales del año pasado se pretendió socializar el proyecto de ley de áreas protegidas; en un evento aparecieron 40 campesinos mas o menos que dijeron lo siguiente: Señores ni siquiera nos han invitado y por lo tanto no estamos de acuerdo con nada de lo que van a discutir aquí. Pocos días después se consiguió un video de un encuentro campesino, donde hacen referencia a una serie de problemas con las áreas protegidas y comunidades, de las petroleras, de las tierras comunales, conflictos con las ONGs, conflictos con los guardabosques, conflictos con los comités de gestión, etc. Entonces aquí estoy realmente confundido, o estamos en un país de mentirosos; creo que es el momento preciso para ponernos de acuerdo porque estamos viendo que tenemos muchos problemas. Si bien todo viene de afuera, las áreas protegidas ya están aquí, tenemos una serie de conflictos y también hay buenas intenciones para solucionar, entonces creo que es tiempo de que comencemos a trabajar, cambiemos esa imagen que se dice una cosa, luego se dice otra, y al final, vuelvo a decir, parecemos un país de mentirosos.

Zacarías Ortíz

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Ayopaya

Quisiera hacer una pregunta al representante del SERNAP. El indicó que todo está concertado aquí en Bolivia. Yo soy ejecutivo de la provincia Ayopaya

y por ejemplo con el Parque Nacional Tunari no estamos de acuerdo, nuestros compañeros no están de acuerdo, y nosotros como dirigentes tenemos que hacer respetar la decisión de nuestras bases. En el artículo séptimo de la Ley del Parque Nacional Tunari indica claramente que esta prohibido la crianza de animales, de hacer siembras, además en esta ley no toma en cuenta a los campesinos. La otra cosa, en Altamachi sin consultarnos han puesto zonas militares, con eso no estamos de acuerdo. Por qué no nos consultan? Deben ser honestos, deberíamos debatir en algún ampliado o seminario para acordar. Pero parece que no nos entienden, por eso nos imponen desde arriba. Creo que en una mayoría de las áreas protegidas los compañeros campesinos no estamos de acuerdo, porque hay una imposición de arriba, y nunca nos han consultado, hay que ser claros, tampoco respetaremos ningún convenio, no respetaremos.

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Primero disculpen si lo que presente les ha parecido una taza de leche. Creo que en ningún momento dije que la gestión de las áreas protegidas es una taza de leche, al contrario es un tema muy conflictivo. Entonces mucha gente, como el compañero Zacarias, nos plantean cuestionamientos a las actividades que realizamos, casi siempre los escuchamos y en la medida de la validez consideramos esos cuestionamientos para cambiar nuestras acciones y actitudes. Por otro lado, el Sistema Nacional de Areas Protegidas no es perfecto, en verdad es un instrumento en creación. Comente claramente que por ejemplo los comités de gestión en algunos casos tenemos que reconfigurar, porque se tiene muchos problemas y dificultades para implementar una buena gestión del área protegida. El tema de representatividad, de legitimidad y de los actores que participan en los comités de gestión preocupa mucho al SERNAP. En muchos casos también hay conflictos en varios otros temas, como el acceso y manejo de recursos, para solucionar eso estamos tratando de establecer normas. Así que les pido disculpas nuevamente si ustedes han entendido que las áreas protegidas son una taza de leche, eso no es así, nosotros hacemos gestión, y también es importante destacar que estamos abiertos para el diálogo y para recoger las inquietudes de la gente local, en la mayor cantidad de casos que nos han convocado al diálogo hemos aceptado, y por eso es que de alguna forma el Sistema Nacional de Areas Protegidas todavía se mantiene con fuerza a nivel del país.

El tema de la ley de áreas protegidas hay que aclararlo muy bien. El 2002 hemos empezado un proceso de elaboración de la ley de áreas protegidas donde han participado representantes de la CSUTCB, de la CIDOB, han participado representantes de diferentes organizaciones, nosotros tenemos las actas de diferentes reuniones y talleres que realizamos. Sin embargo, no olviden que entre el año 2002 y 2003 hubo

una transición de gobierno, razón por la cual ese proceso lamentablemente no ha concluido y no se logro concertar el proyecto de ley. Después de la transición de gobierno, la comisión de medio ambiente del congreso nacional ha retomado nuevamente el proyecto de ley de áreas protegidas, pero desde ese momento ellos son los que han liderizado la elaboración de esa norma, nuestros documentos han servido solo como base de referencia, sin embargo a la fecha otra vez el tema está parado. Al SERNAP le interesa discutir este proyecto de ley con todos los actores sociales, de ninguna manera nuestro interés es aprobar una ley sin consenso, mucho menos generar conflictos y desconocer la percepción de los diferentes actores sociales.

Otro tema que es necesarios aclarar es que en Bolivia la creación de áreas protegidas data desde los años 30, por lo que no es un tema reciente. En muchos casos no se ha consultado a las comunidades ni técnicos para crear áreas protegidas; como anécdota cuentan algunos que un senador, estaba sobrevolando una determinada zona y decía que bonito que ese sitio, lo declararemos parque, haremos una ley, y así se crearon los parques. Sin embargo, desde el año 1939 paulatinamente han ido tomando cuerpo las normas y el Sistema de Areas Protegidas. El Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco y el Parque Nacional Madidi son las dos últimas áreas creadas de interés nacional. Estas dos tienen actas de consultas con las comunidades, se tiene documentos en los que se ha concertado con los actores locales de esas regiones sobre la creación del área protegida. Entonces paulatinamente ha ido madurando la forma de creación, visión y el planteamiento de lo que son las áreas protegidas. Asimismo hubo un cambio desde la visión simplemente de un sitio bonito hasta la valoración biológica de sus elementos y su importancia de conservarlos. Todo este proceso lleva muchos años, y estamos de acuerdo que posiblemente muchos actores no han sido considerados en el mismo. Actualmente eso cambio, el SERNAP esta dispuesto a escuchar a todos los actores no solo respecto a sus cuestionamientos, sino también escuchar lo que piensan y cómo podemos trabajar en la gestión de áreas protegidas de una manera más concertada y participativa.

Un aspecto que quiero subrayar también, es el hecho de que todos los actores sociales deben asumir responsabilidad al momento de plantear. En el caso de Sajama el SERNAP acepto que las comunidades sean parte de la co-administración, ello sin embargo, significa asumir responsabilidad, estar organizados, contar con personería jurídica, porque ser parte de una co-administración significa que deben participar en muchos aspectos incluso de carácter técnico. Finalmente en el caso de Cotacajes Altamachi quiero aclarar que esto fue una propuesta de carácter departamental en el que el SERNAP solo ha prestado apoyo técnico para realizar los estudios de declaración de área protegida. Aunque actualmente hubo un cambio en este sentido porque el nuevo planteamiento es que sea un área protegida de carácter nacional Uno de los criterios que se utiliza para la creación de una nueva área protegida es tener la aceptación de los actores locales y haberse socializado

en todas las instancias respectivas. Cotacajes Altamachi actualmente es solo una propuesta que debe concertar la Prefectura del Departamento de Cochabamba, la responsabilidad es de la Prefectura para socializar con ustedes.

Holger Utermöhlen

CLAS-UMSS

Una pregunta muy simple. Cual es la posición del SERNAP referente al Parque Nacional Tunari y a los límites de la misma?

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

En el caso del Parque Nacional Tunari es plena responsabilidad de la Prefectura de Cochabamba, yo en este momento no puedo dar una palabra oficial sin conocer en detalle la situación en la que se encuentra. Además desconozco cuales han sido las discusiones a nivel del comité de gestión.

Holger Utermöhlen

CLAS-UMSS

Bueno yo soy responsable de las propuestas que se elaboró hace dos años atrás, por eso estoy preguntando. El problema es que no hay una posición oficial del SERNAP, lo que pregunto es su aceptación aunque sea a nivel departamental, eso nos perjudica.

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

No se que se ha discutido en la última reunión de comité de gestión sobre el tema, eso para nosotros es un elemento importante, si hay un planteamiento de modificación de categoría o una modificación en el plan de manejo o en la zonificación, el comité de gestión debería plantear una propuesta en base a lo que ustedes han propuesto y el director del área protegida debe plantearlo a nivel de unidad central, si no hay ese camino nosotros difícilmente podemos tomar una decisión, porque no estaríamos considerando los criterios de los actores locales. El comité de gestión tiene precisamente ese rol, para eso se ha creado.

Holger Utermöhlen

CLAS-UMSS

Es muy distinto responder que es un parque departamental o nacional, todo esto se refleja en la propuesta. A caso no se puede esperar una respuesta del gobierno directamente a una propuesta de los campesinos, cuando el SERNAP debería escuchar primero a nosotros porque nosotros vivimos en el parque, entonces por qué no tiene validez nuestras propuestas?

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Bueno es un tema que podemos discutir a mayor detalle, personalmente no puedo dar una palabra oficial en este momento.

Angel Condori Coronel

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Tapacarí

Primeramente un saludo para todos los hermanos que nos visitan de otros países. Creo que estamos hablando un solo idioma, no? Antes quiero presentarme, mi nombre es Angel Condori Coronel y soy ejecutivo de la provincia Tapacarí. Hasta el momento creo que no se ha analizado un aspecto importante: ¿de donde y por qué vienen las áreas protegidas? ¿debe haber algún motivo no creen? ¿de donde nace esa idea? Quiero pedir sobre todo a los profesionales que aclaren esto, quizás por primera vez estamos reunidos aquí. Como dirigente yo me imagino según hablan ustedes. Han mencionado que hay muchos países que son poderosos, que tienen grandes industrias y están contaminando el medio ambiente, no es cierto? Entonces estos países como EE UU quieren imponer a los países pobres ha mantener los pulmones del mundo, ¿o no? Eso creo que es la idea que viene, ¿no es cierto?

Nosotros como latinoamericanos o mejor como Sud americanos, debemos prepararnos para plantear ante estos grandes contaminadores y destructores de la naturaleza. Primeramente que ellos dejen de contaminar al mundo entero, eso debemos plantear todos unidos. El segundo punto, es que dejen de hacer desaparecer a los animalitos, como hemos visto en la pantalla, los matan para exportarlos, además fumigan con químicos y eso mata a los animales. En mi pueblo hemos comprobado, por ejemplo: yo fumigo con un químico al trigo, viene una vizcacha y se lo come, luego se enferma y muere, entonces quien es el culpable? Eso hay que analizar también, no es cierto? No estamos en contra

de mantener los bosques, incluso queremos plantar más bosques, pero aquí hay una falla. El representante del SERNAP dice que no hay consenso entre las organizaciones, además dice no hay consenso para elaborar las leyes. Nosotros no podemos aceptar los parques y todo eso, si las comunidades no van ha administrar. No tenemos confianza en el gobierno ni en la prefectura, porque por ejemplo aparece una área protegida encima se mete una empresa minera o petrolera, por eso ya no confiamos. Entonces de ahora en adelante debemos plantear que las comunidades deben administrar y recibir los beneficios por cuidar y proteger los parques. Nosotros sabemos que es necesario conservar, porque ahora por ejemplo en mi misma comunidad había quewiña y muchas clases de plantas, pero cortando, cortando se ha terminado y no hemos plantado nuevamente. Para ello necesitamos ayuda y asesoramiento, sin necesidad que haya parques nosotros podemos cuidar la naturaleza. Nada más de mi parte, les felicito a los hermanos que han venido de otros países. Tal vez aquí podemos consensuar mucho más entre todos, pero antes los bolivianos como anfitriones debíamos acordar para plantear una sola idea..., gracias.

Emilio Espinoza

Dirigente de la Central Campesina Provincial de Quillacollo

Los compañeros dirigentes que me han antecedido ya han hecho una importante evaluación. También hemos escuchado las propuestas del representante del SERNAP, tal vez esas propuestas podría pasarnos para que nosotros conozcamos mucho más sus planteamientos. Por qué razón? Claramente un compañero mencionó que un artículo de la Ley 1262 del Parque Nacional Tunari aprobado en el gobierno de Jaime Paz Zamora, indica que estan “terminantemente prohibido” la extracción de material de construcción, así mismo la crianza de ganado; por otro lado en ningún punto se reconoce a las comunidades, pero si se reconoce a la universidad, al ejercito, a la prefectura y a las alcaldías en el comité de gestión.

Entonces en vano decimos que hay consenso. El comité de gestión por ejemplo esta compuesto por los mismos del gobierno. Muchas veces nosotros mismos los reconocemos a esas personas, incluso hay algunas personas que a nombre de los campesinos se hacen elegir y trabajan para los partidos políticos. Creo que todo esto también deberíamos concertar entre nosotros, y luego recién reunirnos con representantes de otros países.

En la ley se debe incluir a las organizaciones sociales y a la sociedad civil, los representantes del gobierno también deberían exigir a que se respete a las comunidades. La Ley del Parque Nacional Tunari se debe cambiar, ya se tenía una propuesta para cambiar y los del gobierno lo han puesto a un lado. Había también

otras propuestas como la del diputado Roberto Fernández y Asterio Camacho, quienes decían que estaba concertado con la sociedad civil, pero su intención de estos diputados era hacer las urbanizaciones en las cuencas del Parque Tunari. Como ven muchos parlamentarios se aprovechan, por eso nosotros tenemos derecho a pedir la administración del parque. Nosotros sabemos que llega mucha plata, y con esa plata se pagan los directores y demás. En el caso de Cotacajes Altamachi dicen que ya se está aprobando, pero mañana vamos hacer conocer nuestros planteamientos que no estamos de acuerdo ni con el Parque Nacional Tunari ni con el Parque Cotacajes Altamachi, tenemos todos los documentos que tiene el gobierno.

Es verdad como dijo un compañero, nosotros no estamos en contra de la forestación, al contrario seguimos plantando árboles. En el municipio de Tiquipaya con una institución hemos plantado más de cuarenta mil plantas, pero nosotros mismos vamos a administrar. También estamos de acuerdo en cuidar la naturaleza, los animales, las plantas, así también recuperar nuestra cultura que se esta perdiendo. Pero no estamos de acuerdo con el actual comité de gestión del Parque Tunari, podríamos tal vez hacer una propuesta con ayuda de los profesionales para manejar nosotros mismos, y no vamos a reconocer la Ley 1262 tal como esta, eso ya determinamos con las cinco provincias afectadas.

Valerio Cartagena

Presidente del Consejo del Municipio de Sipe Sipe

Mi nombre es Valerio Cartagena ex dirigente de la provincia Quillacollo, y actualmente soy presidente del Consejo Municipal de Sipe Sipe. Agradecer y felicitar también a los hermanos que nos visitan de otros países. Lo que quiero decirle al último expositor es que en el Municipio de Sipe Sipe no conocemos a ningún comité de gestión del parque Tunari, tampoco conocemos a los guarda bosques, quienes son esos guarda bosques? Por qué no hacen conocer los nombres? Muchas comunidades están afectadas por el parque Tunari, y a mi me sorprende que digan que el comité de gestión esta consensuado. Tal vez sin avisarnos han realizado reuniones. Los dirigentes solo somos portavoces de las bases, no podemos decir que todo esta aprobado y consensuado. Como decían hace rato, la ley del parque Tunari no está aprobada por nosotros, no necesitamos de esa ley. En nuestras comunidades sabemos administrar como nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres; en mi comunidad hay mas de 30 hectáreas de pinos y eucaliptos que con nuestras manos hemos plantado incluso siendo niños. Sabemos administrar nuestras reservas naturales y todo eso, y eso no nos pueden enseñar gente de afuera, más bien les podemos enseñar. Seguramente seguiremos debatiendo el día de mañana el asunto del Parque Nacional Tunari.

Aquino Heredia

Ejecutivo de la Subcentral Campesina del Parque Tunari

Primeramente quiero presentarme. Soy secretario general de la Subcentral Parque Tunari y agradecer a todos los visitantes de otros países que están junto a nosotros. Lo único que quiero tocar es sobre el Parque Tunari, en la realidad quiero aclarar que todo este parque es propiedad privada de los compañeros campesinos, por eso no estamos de acuerdo que siga manejando la Prefectura, o sea en este caso el Estado. A los campesinos no los toman en cuenta y es por eso que nos sentimos molestos. Por otro lado, las plantaciones que hay en el parque fueron plantados por nosotros mismos, o sea no se puede llamar Parque Nacional porque nosotros ahí trabajamos no solo plantamos árboles que no nos dejan cortar, sino que tenemos cultivos y animales, tal vez se tiene que cambiar de categoría o algo así, sobre todo para conformidad de los compañeros campesinos. Pediría que el representante del SERNAP tome en cuenta nuestros reclamos, y el rechazo al parque es de las 5 provincias afectadas, nada más.

Comunario de Sewencas

El señor del SERNAP dijo que para crear los dos últimos parques en Bolivia hubo total consenso con las comunidades. Quiero referirme al caso del Kaa Iya Gran Chaco donde dice que hubo consenso. Creo que ya es una estrategia tomar a dos originarios y tenerlos bien comidos y bien vestidos, y con eso dicen que hubo consenso. Esto es lo que paso en el parque Noel Kempff Mercado. En el caso de Kaa Iya seguramente tomaron a un ganadero y listo, mientras los nativos del Isoño donde están? Por otro lado, dentro de este parque viven ganaderos que tienen miles de hectáreas; hace unos quince días por la radio hubo una noticia que un capitán indígena o algo así, ha vendido quince mil hectáreas en el Kaa Iya, usted sabe de eso?.

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Bolivia

En el caso del parque Kaa Iya quisiera que eso que acaba de manifestar lo comunique al dirigente de la Central Indígena Kaa Iya (CAK) que es la co-administradora del área protegida y no es un ganadero como usted dice. Entonces, le agradecería, por favor, que no mal informe a la gente respecto a cómo se trabaja en el parque Kaa Iya. La Central Indígena esta reconocida por las entidades indígenas de la región y es co-administradora del Parque Kaa Iya del Gran Chaco, no son

dos personas sino que es una organización grande y es muy importante lo que hace en la administración del parque.

En el caso del Madidi y la publicación que usted me mostró, el problema aquí es un camino de acceso bajo la lógica de una propuesta de desarrollo para el norte paceño y no es tema de dinero. Hay diferentes visiones en cuanto al diseño, puesto que el SERNAP planteó que el trazo de ese camino atraviesa una zona núcleo de biodiversidad, mientras que la Prefectura de La Paz y los comunarios insisten en este trazo porque quieren abaratar costos en la construcción del camino. El SERNAP plantea que se realice un trazo compatible con los objetivos de conservación que nosotros tenemos, obviamente sus costos pueden duplicarse o triplicarse, ese es el problema en el caso Madidi. Precisamente el director del Parque Madidi no ha podido estar en este seminario por esta razón, que tuvo que priorizar este problema que data de más de un año.

Stephan Rist

CDMA, Universidad de Bernan-Suiza

Más que una pregunta, quiero compartir lo que estoy aprendiendo de estas discusiones. Nosotros los técnicos somos de alguna manera agentes externos como el gobierno, las ONGs y todo eso, pero al otro lado tenemos a la organización campesina, entonces para mí está muy claro que no se trata de seguir discutiendo si hubo o no participación, puesto que lo que deberíamos tratar de buscar es nuevas formas para goberarnos como sociedad pluricultural, y eso está ligado al título del seminario. Si no vemos en esa dirección y en un proyecto de largo alcance donde tenemos que repensar no solamente áreas protegidas sino todo el sistema de gobernanza, no llegaremos muy lejos. Como dice el compañero de Tapacarí, hay que preguntarse también ¿por qué los países ricos destinan tanto dinero para que se hagan cosas en nombre de la protección de la biodiversidad? Ya que haciendo un balance de esta ayuda nos traen más conflictos que beneficios. Entonces en este sentido creo que tal vez podríamos estar pensando también en las discusiones de mañana.

Carmen Miranda

Representante de la UICN, Bolivia

Quiero comentar lo siguiente. Escuchando la última exposición de René, parecería que hay una conspiración a nivel mundial en el sentido que las áreas protegidas estarían sirviendo de pantalla para los intereses transnacionales, es posible que haya eso. Pero en el caso específico de Bolivia hubo un largo proceso para llegar a implementar la gestión en las áreas protegidas, y todo esto viene de

un deseo sincero y de buscar alternativas para frenar los procesos de deterioro de la biodiversidad.

Entonces estas interpretaciones que se hace de una relación eco-petro-estrategias, a mi parecer son muy peligrosas porque estarían poniendo en tela de juicio toda la necesidad de la gestión de las áreas protegidas. Tal vez en alguna esfera haya una intención en este sentido, ante todo donde se definen las prioridades políticas y económicas de un país. Frente a esto creo que es importante estar conscientes, ante todo como bolivianos, que hay una realidad que muestra cada vez más un deterioro de nuestros recursos naturales y biodiversidad, puesto que esta es la base que permite la sobre vivencia de la sociedad boliviana. En ese marco, es importante más bien la búsqueda de alternativas y soluciones para impulsar el desarrollo sustentable. Es verdad que existen movimientos mundiales que están digitando la economía y otros procesos, pero por otro lado la realidad esta frente a nosotros.

René Orellana
CENDA, Bolivia

Es evidente que hay financiamientos directos de empresas petroleras a grandes agencias conservacionistas mundiales. Estas agencias reciben fondos y las canalizan en agencias nacionales, no es una exageración esto es una cosa real. Tampoco es difícil de creer que hay grandes consorcios que tienen múltiples inversiones, entre ellas petroleras y bio-prospecciones, que tienen el interés de realizar sus actividades petroleras y bio-prospectoras dentro de áreas protegidas. No digamos que el SERNAP u otra entidad estatal les facilita, no quisiera que se interprete ni se lea mi afirmación en este sentido. Pero si existen grandes consorcios que tienen brazos nacionales, tengo la sospecha suficientemente fundada de que FAN es parte de este grupo de instituciones establecida para fines de aprovechamiento de recursos de biodiversidad, para bio-prospección y para facilitar silenciosamente a los operadores petroleros, esto si debe preocupar. Es cierto que el Estado, por ejemplo el SERNAP, tiene graves limitaciones para implementar acciones restrictivas sobre las operaciones petroleras. Eso es cierto porque por ejemplo la superintendencia de hidrocarburos hará o dirá una cosa, YPFB hará o dirá otra cosa, lo que realmente pasa en nuestro país. Esto tal vez es una disculpa para el SERNAP, pero entre comillas. Pero la llamada de atención es más para las instituciones privadas que se dicen conservacionistas y que al menos debería ser consecuentes con ese rol, sobre todo nos deben preocupar aquellas instituciones privadas que están vinculadas a estos poderosos consorcios y que reciben financiamiento, obviamente no pueden ser juez y parte, entonces terminan haciendo acuerdos extraños con los grandes consorcios petroleros. Hay que ver también de

otro lado, como podemos negar que hay consorcios que invierten en todo, pondremos el ejemplo de la ENROLL que invierte en gaseoductos, pozos petroleros, agua potable, energía, etc., y que no va ser extraño que estas tengan inversiones en biotecnología. Cuidado que en este proceso de generar administración privada de las áreas protegidas, las ONGs adjudicatarias terminen trabajando para fines transnacionales como las prospecciones bio-petroleras. Aunque todo esto esta todavía abierto a la discusión.

Jamil Alca

Investigador, Perú

Bueno mi primera pregunta era para Gonzalo Mérida. El nos presentó una planificación estratégica para la conservación de la biodiversidad en Bolivia. Tal vez hay que tener cuidado, porque las planificaciones estratégicas casi siempre terminan en un listado de necesidades y expectativas que posiblemente las mismas poblaciones locales expresan, pero de esa manera no se solucionan los problemas. Tal vez hay que ver puntos más profundos como estrategias políticas. En el caso del Parque Sajama se habló del ecoturismo que se practica en esta área protegida, si es que se prevé el impacto de estas actividades sobre la biodiversidad, pero también sobre las mismas poblaciones. A los amigos del Parque Nacional Tunari, me llamó la atención de concebir los conflictos como espacios estáticos, cuando los conflictos son muy dinámicos y en muchos casos se soluciona un conflicto y se genera otro. Otro tema que me preocupa es la demasiada sectorialización como ocurre en el Perú, o lo que es la contraposición de las normas que casi siempre pesan las leyes que no están dirigidas a la protección de las áreas protegidas y la biodiversidad. Finalmente a Miguel quisiera preguntarle como encarar y plantear propuestas o estrategias políticas, sobre todo en la perspectiva de mejorar la gestión de las áreas protegidas, porque de nada sirve que sigamos discutiendo sino vamos ha llegar a algo concreto.

Franz Guzmán

Director del Parque Nacional Sajama

Bueno hermano peruano, quiero hacerte conocer que las actividades etnoecoturísticas en el Parque Sajama provienen de un proceso de planificación en relación a una estrategia de turismo con el que cuenta el parque. En el caso de las construcciones turísticas se cuenta con una ficha ambiental con la finalidad de prever los impactos ambientales. Los estudios de carga turística señalan la posibilidad de contar con un número de turistas que alcance a veinte mil, pero

actualmente solo tenemos un número de tres mil quinientos turistas considerando que disponemos de toda la capacidad y la infraestructura para recibir mucho más turistas. De todos modos no podemos decir que no haya impactos negativos del turismo, pero estamos siempre trabajando para minimizar estos.

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Unicamente para complementar sobre los aspectos socio-culturales. Se tiene un sistema de monitoreo para cuantificar los impactos en este sentido. Hace unos 2 meses atrás se ha realizado un relevamiento en cada una de las familias que componen las empresas comunales turísticas.

Debra Pereira

Exconsultora del Parque Nacional Tunari

Ningún conflicto es estático, basta que sea conflicto es dinámico. Hay que considerar que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Cuando tenemos un conflicto nos da un espacio de trabajo, de identificación, de negociación, donde además se encuentran intereses. Aunque se pueda encontrar soluciones, pero esas soluciones te pueden generar nuevos conflictos, incluso en el caso de los parques se pueden encontrar conflictos ambientales pero que a la vez son conflictos sociales, y esto no puede ser estático sino que a medida que se solucionan algunos conflictos aparecen otros. Pero siempre va existir una construcción a partir de las soluciones intermedias que se dan y que nos llevan a solucionar un objetivo más global y central.

René Orellana

CENDA, Bolivia

Creo que hay varias normas que se deben cruzar para ver como entienden la gestión de recursos de biodiversidad. Uno es el reglamento general de áreas protegidas, que a mi modo de ver tiene graves errores entre ellas una lectura administrativa de la gestión de las áreas protegidas. Reitero la realidad social ha rebasado la camisa de fuerza de las áreas protegidas y ha dado lecciones riquísimas en el caso de Sajama por ejemplo. Pero la visión en este reglamento de áreas protegidas es administrativo, gerencial y policiaco de las áreas protegidas. Una especie de puesto militar donde hay un comandante, etc. Tiene en teoría una

administración compartida con las comunidades de las áreas protegidas, pero con requisitos y procedimientos que en la práctica es difícil cumplir, incluso con una cota de poder del Estado para romper un contrato de co-administración, etc. Entonces hay un error muy grave en la visión de la gestión de áreas protegidas que tiene el reglamento de áreas protegidas.

Tenemos otra norma que lo mencioné esta mañana, y que lo pondría por encima de la Estrategia de Biodiversidad. Este es el Reglamento de Concesiones de Uso de Biodiversidad que encierra un modelo de gestión. Este reglamento por ejemplo permite crear áreas protegidas privadas a través de la figura de concesiones de uso de biodiversidad por un período de 40 años y que se otorga a operadores privados como empresas hoteleras, empresas ecoturísticas, bio-prospectores, conservacionistas, etc., territorios georeferenciados con la posibilidad de usufructuar toda la biomasa, los recursos paisajísticos, recursos hídricos, y en el caso de investigadores, bio-prospectores y conservacionistas, usufructuar los recursos genéticos por 40 años, casi toda una vida. Esta norma tiene graves contradicciones con la decisión 391 de acceso a los recursos genéticos. Por eso creo que todas estas normas se deben poner sobre la mesa y compatibilizarlos y pensar en un modelo de gestión básicamente con participación social y comunal.

Miguel Angel Crespo

PROBIOMA, Santa Cruz-Bolivia

Si el tema de los recursos naturales lo circunscribimos a la historia de Bolivia desde su creación, incluso antes, es un aspecto de índole político, es decir que la historia de la explotación de nuestros recursos ha esta signada en tanto y cuando que ha servido para la acumulación de capitales financieros que luego se han ido afuera. Pero los Recursos Naturales son patrimonio del Estado Boliviano y el Estado no solo es el ejecutivo sino somos todas las organizaciones de la sociedad civil como son las comunidades indígenas, etc. Si nos basamos en esa premisa, vemos que en este proceso histórico de explotación de los Recursos Naturales los bolivianos no nos hemos beneficiado. Tenemos una deuda externa de más cinco mil millones, la extrema pobreza avanza cada vez más, pero que es lo que nos queda después de pasar por tipos de explotación de nuestros Recursos Naturales. Nos queda 2 recursos vitales, que son: la biodiversidad y el gas natural. En el caso de la biodiversidad es usado y conservado, evidentemente, por las poblaciones locales. Mostrábamos su importancia de uso, sobre todo que porcentaje de la población no solo nacional sino mundial que usa recursos de biodiversidad. Entonces quienes tienen el derecho de gestionar, de conservar y usar sosteniblemente estos recursos, son las poblaciones locales, o sea esto es una propuesta política. En la medida que las poblaciones locales gestionen soberanamente sus recursos con un Estado que

sea capaz de fomentar, fiscalizar, etc., vamos a lograr un beneficio para el país, y eso es una propuesta política. En ese marco obviamente, tenemos que cambiar los ejes de desarrollo que tradicionalmente se han llevado adelante en Bolivia. Pero todavía se piensa que los hidrocarburos van a sacar adelante a Bolivia; para dar algunos datos la agroindustria y el turismo el año pasado ha generado 559 millones de dólares, mientras que los hidrocarburos solo 430 millones de dólares. Que nos está indicando esto? Obviamente que hay que cambiar los modelos y los ejes de desarrollo tradicionales como es la explotación de recursos no renovables (hidrocarburos por ejemplo), y esto es una cuestión política. No es posible que los últimos recursos que nos quedan como bolivianos no se aprovechen adecuadamente para beneficio de todo el país, y no los perdamos como otros recursos en el pasado.

Angel Condori Coronel

Ejecutivo de Central Campesina Provincial de Tapacarí

Creo que es bueno debatir entre todos, con profesionales, compañeros campesinos y otros representantes de la sociedad civil. Quisiera llamar a la reflexión en el sentido de que antes de la creación de un área protegida se debe hacer un diagnóstico sobre todo del sector campesino. Por ejemplo nuestros padres nos han dejado como herencia algunas tierras que recibieron hace 50 años con la reforma agraria, pero hasta ahora ya nos hemos dividido los hijos, incluso los nietos, entonces esas tierras se han convertido en surcofundio. El director del Parque Tunari indicaba que todo está bien y que el comité de gestión está funcionando. Creo que en todos los parques los campesinos necesitan más tierras, pero con estas áreas protegidas más bien se les quiere quitar. Muchos compañeros campesinos incluso ya no se pueden mantener sembrando en sus parcelas. ¿Qué solución hay para esto? Por ejemplo donde se va a reponer las tierras que se pretende quitar en el Parque Tunari? Espero una respuesta.

Por otro lado veo que los profesionales no están actuando correctamente. Desde 1825 pasan 178 años, durante todo este tiempo en Bolivia nos han gobernado profesionales, pero hay que preguntarse a dónde nos han conducido? Creo que a un abismo. Los profesionales lo primero que deberían hacer es valorar a sus pueblos y a los lugares donde han nacido; tal vez ha habido mucha confianza en los profesionales, pero a dónde nos han llevado? Únicamente a mayor pobreza. Estos profesionales además han permitido que las transnacionales saqueen nuestros recursos naturales, es así de claro. Ahora pasa igual, para que entren las transnacionales libremente están peleando por crear más áreas protegidas.

Como podemos cambiar en Bolivia y Sur América? Creo que debemos practicar la planificación participativa. Los bolivianos no estamos en contra de

los parques, pero tenemos que discutir previamente entre todos. Por ejemplo eso pensamos que tenemos que hacer en la asamblea constituyente; aquí hay que trazar entre todos la suerte de Bolivia y también de las áreas protegidas. En el caso de las universidades, como aquí están presentes varios, deberían ocuparse de educar a los alumnos correctamente y con la verdad, y también deberían enseñar la realidad de Bolivia, hacer conocer como es el área rural y no de otros lados. Si así hacemos las cosas seguro nuestra situación que va a cambiar, tal vez ya no necesitemos de ayuda de otros países. Ustedes saben que las ayudas de afuera vienen con condiciones.

Entonces quiero decir finalmente, que debemos unirnos entre campesinos y profesionales, ambos tenemos conocimientos, los campesinos sabemos más en la práctica y los profesionales más en la teoría, pero los papeles y la teoría todo aguanta... No seguiremos siendo servidores de los países ricos, trabajemos juntos para nosotros mismos.

Humberto Mariscal

Director del Parque Nacional Tunari

Un pequeño comentario en relación a la propiedad de las tierras en el Parque Tunari. Obviamente que nadie va hacer el cambio de uso de suelo, eso queda ahí. Tal vez algunas personas están interesados en ello, pero en la administración del parque no se tiene esa idea, más al contrario dentro el plan de manejo que se pretende realizar creemos que debe entrar un proyecto de saneamiento de tierras en coordinación con el INRA. Esa es la propuesta que viene trabajando la administración del parque.

Emilio Espinoza

Dirigente de la Central Campesina Provincial de Quillacollo

Quiero hacer una pregunta al director del Parque Tunari. Quienes provocan los incendios? Los campesinos o la gente de la ciudad. Por otra parte, hay tantos guarda parques que no controlan o que hacen estos guarda parques? No funciona ni eso. Por eso el movimiento campesino rechaza al Parque Tunari porque atenta contra el derecho propietario campesino, ningún artículo reconoce a los campesinos. También quiero preguntar, que pasa con los asentamientos? Ha hecho mención solo a 3 municipios, que pasa con los otros municipios? Es cierto que hay una gran cantidad de comunidades afectadas por el Parque Tunari en 5 provincias, más de 200 comunidades. Parece que los funcionarios de la administración del parque no conocen ni cuantas comunidades existen y como viven, y también indicaban

que la Ley 1262 reconoce el derecho propietario, eso no es verdad, en ningún artículo dice eso. Los compañeros campesinos tenemos un título ejecutorial que no es sustituible según la misma Constitución Política del Estado. Esto también va para el representante del SERNAP. En ninguna comunidad del parque hay reservas fiscales, todo tiene dueño y tienen títulos cada compañero.

Finalmente indican los expositores de las administración del Parque Tunari que se están solucionando los conflictos, en parte es verdad, pero en parte no porque ahora hay más conflictos. Nosotros solo reconocemos la autodeterminación de las organizaciones campesinas. Por quienes esta conformado el comité de gestión? Ahí esta por ejemplo un consejero de la Provincia Quillacollo que no conoce las comunidades afectados. Como movimiento campesino hemos presentado una propuesta, pero no ha servido para nada porque lo han puesto a un lado, y luego recién la prefectura quiere buscar nuevas metodologías de trabajo. Espero que den algunas respuestas a todo esto.

Humberto Mariscal

Director del Parque Nacional Tunari

En forma muy escueta. Es interesante lo que indica el compañero Emilio Espinoza. Con relación a los incendios, indicaba que el 99% es provocado. Prácticamente esto no es fácil de determinar, porque por ejemplo en el último año los incendios se han polarizado, a diferencia que en anteriores años era concentrado en la provincia Cercado. En una ocasión se ha determinado a la persona que ha provocado, y era una anciana de 80 años que quería hacer un barbecho y no pudo controlar, que se puede hacer a una anciana de 80 años, pregunto?

En relación al derecho propietario. El año pasado salió una resolución prefectural, sino me equivoco es la 112, donde indica que se respeta el derecho propietario con usos, costumbres y servidumbres, y esta resolución prefectural ha sido publicada. Con relación a la nueva Ley, muy gentilmente el compañero Emilio y todos los dirigentes invitaron al Director de Recursos Naturales de la Prefectura de Cochabamba a la provincia Quillacollo y entregaron un proyecto para una nueva ley con ideas interesantes. Desde entonces entramos en una dinámica de trabajo en vista que había esa propuesta, y también había otras propuestas como el presentado por el honorable Carlos Quiroga Blanco y Roberto Fernández. De esta manera se realizó una serie de reuniones y talleres con el objetivo de poder consensuar estas ideas. Entonces antes de revisar las propuestas, lo que se planteó fue definir primero que se quiere o que se busca con el Parque Nacional Tunari. Esto se avanzo en un primer taller, pero posteriormente en un segundo taller llego el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba, Feliciano Vegamonte, y dijo no estamos de acuerdo, más lo que queremos es presentar una

nueva propuesta consensuada con todo el movimiento campesino. Esto se aceptó. Entonces Feliciano Vegamonte indicó que esta nueva propuesta sería presentada hasta diciembre del 2003. Hasta ahí se llegó.

Debra Pereira

Exconsultora del Parque Nacional Tunari

Creo que este taller nos puede dar luces. El tema de fondo en el caso de las áreas protegidas son dos: el manejo de las áreas protegidas y la gestión territorial. Estos dos temas están presentes en cualquier área protegida. Todo lo que expresan los compañeros campesinos son legítimos, porque a raíz de esto se van realizando las normas, en definitiva las normas dicen que se debe hacer y que no se debe hacer. Alguna vez se planteó al SERNAP que la lectura de las áreas protegidas deberíamos hacerlo en el mismo objetivo. Las áreas protegidas no son un castigo, creo que tienen su razón de ser ya sea en un contexto nacional, regional o mundial. De lo que se trata, es de repensar como las áreas protegidas pueden garantizar una gestión territorial con el objetivo de generar un bien colectivo, obviamente primero para los actores locales pero también es necesario ver más allá y ver al conjunto de los actores. Esta creo que debe ser la perspectiva de la discusión, para finalmente ver si las áreas protegidas son pertinentes o no, personalmente para mí son pertinentes. Desde mi punto de vista no es incompatible la gestión territorial con las áreas protegidas. Entonces hay que discutir por ejemplo con el SERNAP la visión que tienen de las áreas protegidas como potenciales de recursos naturales, en cambio la gestión territorial ve el manejo del patrimonio natural tal como conciben los compañeros campesinos. Esto es más importante que hacer solo cambios en la administración, hay que reconocer que las organizaciones campesinas sufren también un proceso de desestructuración, en algunos casos incluso ya es difícil determinar que se entiende por usos y costumbres. Todas las experiencias que ocurren en el Parque Tunari nos puede ayudar a reflexionar porque camino seguir. Es necesario conservar la biodiversidad pero en base a la gestión, que es diferente a lo que plantea la estrategia nacional de biodiversidad en el sentido de conservar pero con rentabilidad y priorización de algunos potenciales naturales.

En conclusión referente al Parque Tunari, todo esto se ha reflexionado por eso hay la necesidad de reconstruir los procesos de involucramiento con el derecho legítimo de la participación, creo que la participación es una conquista que se ha peleado mucho antes de la Ley de Participación Popular, y tenemos derecho a ejercer. En base a esta participación se debe buscar primero que queremos con el Parque Tunari? Que objetivo tiene que cumplir? Es decir para que se va hacer un área protegida, antes de entrar en discusiones de categorías y otros asuntos técnicos. Gracias.

René Orellana

CENDA, Cochabamba-Bolivia

Unicamente a modo de despedida. Creo que es necesario buscar puntos de coincidencia, lo que puede ser muy positivo. Un primer punto es encontrar puntos de coincidencia antes de definir un área protegida, que entendemos por conservación y explotación? Ya se han dado algunas líneas como la gestión territorial de las comunidades campesinas que tienen riquísimas experiencias de conservación y protección. En este sentido se debe repensar las áreas protegidas, se debe cambiar los modelos gerenciales de administración de las áreas protegidas, hay que hacer cambios en el reglamento de áreas protegidas porque es excluyente. Todos estos cambios deben hacerse en un contexto de amplia concertación con las comunidades y organizaciones campesinas e indígenas. Por esa vía también hay que dirigir la solución de áreas protegidas conflictivas como el Parque Tunari. Hay que reconocer que la Ley del Parque Tunari es muy peligrosa, porque en uno de sus artículos indica que se expropia las tierras y los recursos naturales, en otro artículo dice se prohíbe el pastoreo. Los que inventaron esa ley prácticamente vivían en otro planeta, puesto que esta área hay decenas de comunidades asentadas. Hay una voluntad para corregir todo esto, hay planteamientos, pero la solución general pasa por redireccionar, rehacer, rediseñar el modelo de áreas protegidas, y esto nos va a permitir encarar problemas graves como la presencia de operadores petroleros, mineros, y también permita cambiar la vieja lógica de ver a los campesinos como depredadores y que no priorice la privatización de las áreas protegidas, más bien promueva un proceso de conservación integral con participación de toda la sociedad civil.

Gonzalo Merida

Exconsultor para la Estrategia Nacional de Biodiversidad

Por la forma en que se ha construido la estrategia nacional de biodiversidad no me correspondería mucho hablar, puesto que es una estrategia apropiada por el Estado, en realidad fui invitado a este evento solo como un interlocutor que tuvo el proceso de diseño de la estrategia, mucho menos puedo atribuirme las ideas que están en la estrategia. Es una posición de Estado, es una posición que han discutido muchos grupos de diferentes sectores, de diferentes visiones. En el proceso se ha abierto a que diferentes visiones puedan construir la estrategia. Todo el contenido de la estrategia responde a lo que han expresado más de 1200 personas o instituciones que han participado en el proceso de diseño. Sobre la pregunta del plan de acción, efectivamente parece un listado de muchas sugerencias sobre lo que se debe hacer, pero tal vez más estructurados como proyectos.

En relación al financiamiento. Cuando hicimos el intento de convertir en dinero el plan de acción, encontramos que se requería alrededor de 60 millones de dólares para poner en marcha todo el plan. Sin embargo este no era el objetivo, puesto que las ideas de proyectos han sido generadas en procesos como este seminario, donde participaron campesinos, indígenas, el sector privado, los profesionales, etc., de aquí salieron las estrategias y los proyectos. De esta manera se ha generado el plan de acción con una serie de iniciativas que provinieron de la sociedad civil. En consecuencia estas ideas tienen que ser plasmadas por la misma sociedad civil, algunas de ellas incluso ya se han iniciado, aunque el gobierno quizá no ha generado todavía una dinámica muy fuerte. Por ejemplo el sector de la confederación de campesinos quieren que se pongan en marcha el proyecto de generación de capacidades en relación a la biodiversidad. Entonces en el plan de acción hay iniciativas de diferentes sectores que pueden ser instrumentalizados como estrategias de desarrollo desde las instituciones, desde los municipios. Por ejemplo el Municipio de Colomi ha tomado estas iniciativas para generar su propia estrategia de competitividad y conservación de la biodiversidad en su municipio.

En realidad la estrategia nacional de biodiversidad es un instrumento que puede servir para orientar la gestión de la biodiversidad a distintos niveles, y cualquier institución o miembro de la sociedad civil puede gestionar y apalancar los proyectos, porque esta se ha validado como una política que integra la gestión de la biodiversidad en nuestro país. Es eso la estrategia nacional de biodiversidad, un instrumento orientador. El objetivo no fue financiar todo lo que se planificó, sino los que se busco que sobre todo la sociedad civil se apropie del plan de acción y ponga en marcha la estrategia.



Presentación del Lic. Miguel A. Crespo: "Conflictos y Gestión Local en Áreas Protegidas: Los casos del Parque Amboró y Bosque Chiquitano"



Panel de discusión y debate Parte III: Marco Institucional, Estrategias y Experiencias de las Áreas Protegidas en Bolivia.

Parte IV

Investigación y acción en torno al Parque Nacional Tunari

Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y conservación de la naturaleza y la biodiversidad del Parque Nacional Tunari

Freddy Delgado¹

1. Antecedentes

Desde el año 2001, a raíz de la convocatoria internacional presentada por el Polo Nacional de Competencia en Investigación Norte-Sur (NCCR-NS), Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) concursó y se adjudicó un proyecto de investigación científica y un proyecto de acompañamiento al proceso de investigación científica, más conocidos como PAMS. A partir de septiembre 2002 AGRUCO está ejecutando el proyecto de investigación científica denominado: Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del Parque Tunari, departamento de Cochabamba. También ejecuta desde el 2003 un Proyecto (PAMS) denominado: “Capacitación en control social y gobernanza para la gestión sostenible de la biodiversidad en el Parque Tunari”.

El NCCR-NS es financiado por el Fondo Nacional Suizo para la investigación científica (FNSIC) y la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) con el objetivo de investigar “estrategias de mitigación de síndromes de la globalización” a nivel internacional en América del Sur, el Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Ginebra (IUED) monitorea el proyecto individual (IP8) que considera los “Modelos de gobernanza de biodiversidad desarrollo humano y medio ambiente, en el que se insertan los dos proyectos de antes mencionados.

1 Ingeniero Agrónomo con Doctorado en Agroecología y Desarrollo Sostenible del Instituto de Sociología y estudios campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba - España. Director ejecutivo de AGRUCO y Docente de la UMSS.

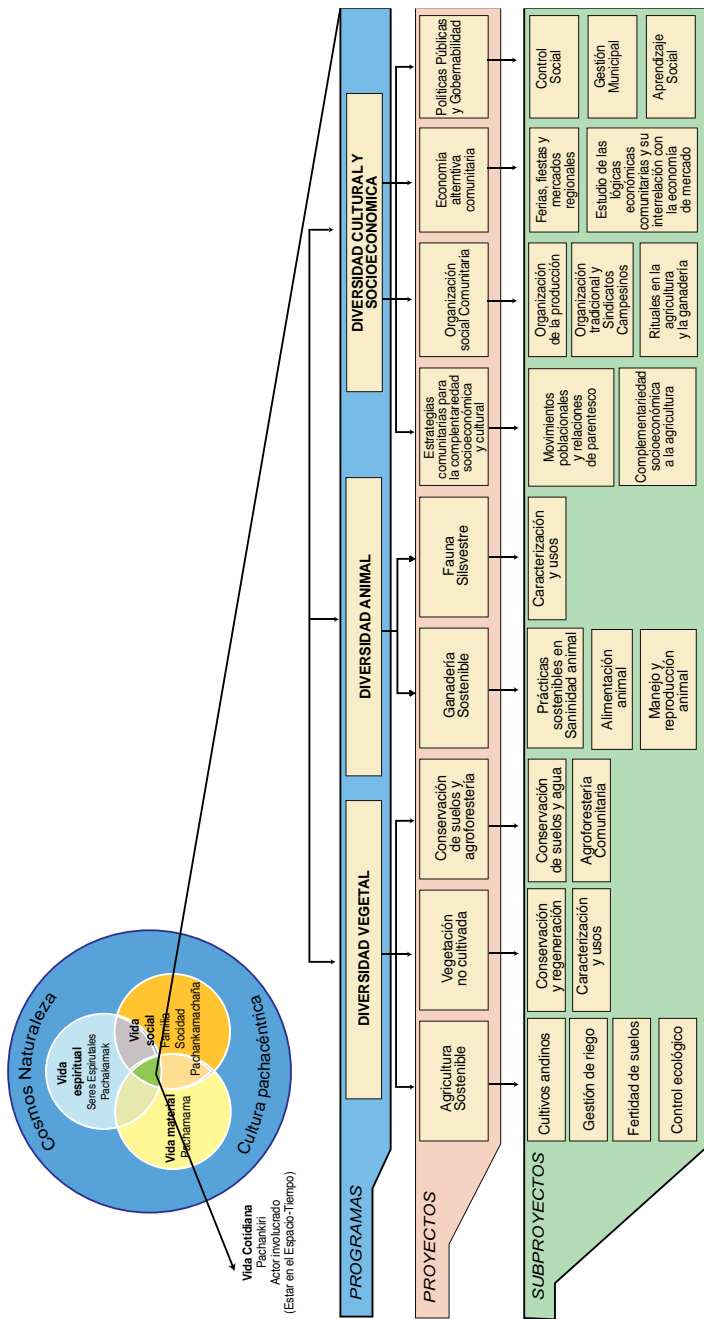
AGRUCO es un Centro de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) dedicado a la investigación, interacción social y apoyo a la formación universitaria que a partir de la revalorización del saber indígena y la agroecología propone alternativas para un desarrollo humano sostenible del área rural, considerando la relación campo-ciudad. Surgió a la vida institucional en 1985 en el marco de un convenio entre la Universidad Mayor de San Simón y la Cooperación Suiza para el Desarrollo.

Este serio esfuerzo de diálogo intercultural ha permitido por un lado, crear contenidos académicos para la educación superior universitaria tanto a nivel de pregrado como de postgrado y por otro, proponer a partir de programas y proyectos integrales comunitarios para la autogestión y el desarrollo sostenible (PICADS), alternativas para mejorar la calidad de vida de la población, considerando la interrelación de la vida espiritual, social y material que existe en los pueblos indígenas originarios de Bolivia y Latinoamérica.

La finalidad de AGRUCO es “Contribuir al desarrollo humano sostenible a partir de las experiencias en agroecología, y la revalorización de los saberes locales considerando los ámbitos socioculturales, económicos, políticos y ambientales”. El objetivo principal es “Apoyar los procesos de formación, investigación e interacción social, mediante la generación, validación y difusión de conceptos, metodologías, técnicas y estrategias, basadas en los saberes locales y la agroecología.” AGRUCO en su plan estratégico para el periodo 2002-2006 ha previsto la ejecución de tres ámbitos de acción: investigación, interacción social con comunidades y apoyo a la formación superior.

En tal sentido, se apoyan y ejecutan acciones pilotos de investigación participativa y desarrollo con organizaciones de base y municipios rurales, generando redes locales y regionales que permitan el intercambio de experiencias, su sistematización y difusión a través de diferentes tipos de publicaciones y medios de comunicación. El programa general de investigación-desarrollo que es el resultado de 15 años de experiencia, ha considerado tres programas: diversidad vegetal, diversidad animal y diversidad cultural y socioeconómica, en la que se insertan diferentes proyectos y subproyectos que se muestran en la gráfica 1.

El programa de investigación-desarrollo es el marco de las acciones programadas enfocadas hacia la formación tanto de estudiantes y docentes del sistema universitario boliviano, como de técnicos vinculados al desarrollo en Bolivia y Latinoamérica. La formación académica permite socializar los saberes y las necesidades de las comunidades originarias y elaborar contenidos generados en los procesos de investigación-desarrollo. El apoyo a la formación en el pregrado y la ejecución del postgrado a través de cursos de actualización y de la maestría en Agroecología, Cultura y Desarrollo Sostenible, son espacios y tiempos que acercan al estudiante universitario hacia la realidad rural del país y de Latinoamérica, permitiendo formar profesionales capaces de plantear conceptos, metodologías,



tecnologías y técnicas que contribuyan al desarrollo humano sostenible y a la conservación de la biodiversidad, considerando en el análisis, las estructuras de poder, las instituciones y los actores sociales, las normas y reglas locales y las políticas públicas.

La experiencia institucional y los logros obtenidos partiendo del trabajo de campo y la constante reflexión y análisis sobre realidades concretas, han hecho de AGRUCO un centro de excelencia reconocido dentro del sistema universitario boliviano y una referencia importante a nivel Latinoamericano y mundial en el campo del desarrollo humano sostenible con énfasis en las culturas andinas y el medio ambiente desde una visión aplicada (la agroecología).

En los últimos 10 años, a raíz de los ajustes estructurales y la promulgación de varias leyes que modifican el marco institucional y las relaciones entre el Estado boliviano y la sociedad civil, AGRUCO por su permanente relación con los gobiernos locales (municipios principalmente rurales y organizaciones sindicales y tradicionales) y las organizaciones de base, ha incursionado en el análisis de varias leyes como las del medio ambiente, participación popular, reforma agraria, descentralización, municipalidades, la reforma educativa, forestal, capitalización, la ley del sistema de administración financiera (SAFCO), tributaria. Las reflexiones y el análisis de las leyes se han dado en el marco de una amplia participación de las comunidades campesinas y las autoridades municipales (alcalde, consejo municipal y comité de vigilancia) en la perspectiva de ver como influyen estas leyes en su calidad de vida y como aprovechar o rechazar estos espacios.

Desde 1986, AGRUCO trabaja con las subcentrales sindicales de 8 de agosto en el municipio de Sipe Sipe y Waca Playa, Chullpa Khasa y el Ayllu Majasaya Mujlli en el municipio de Tapacarí y a partir del año 2000 se está ejecutando un proyecto de manejo de cuencas, agroforestería y conservación de suelos en el municipio de Tacopaya, provincia Arque. El trabajo realizado en los primeros años ha sido dirigido a fortalecer las bases productivas de la agricultura y el fortalecimiento de las organizaciones locales (autoridades tradicionales y dirigentes sindicales). Desde el año de 1998, se ha ampliado el rango de acción a nivel de todo el territorio municipal, principalmente en servicios de asesoramiento en gestión municipal (por ejemplo: elaboración de planes de desarrollo municipal, POAs, servicios de capacitación en control social con comités de vigilancia y elaboración de proyectos de desarrollo productivo) y ejecución de programas y proyectos pilotos integrales comunitarios a nivel de microcuencas y subcentrales sindicales.

Las experiencias de los últimos cuatro años han estado muy relacionadas con los temas de gobernación y ciudadanía. Los temas de ética (especialmente desde la perspectiva de los pueblos indígenas y campesinos), recursos naturales renovables (especialmente bosque, agrobiodiversidad, suelos y aguas), género (especialmente desde la perspectiva de los pueblos indígenas y campesinos) y

riesgos ambientales (especialmente desde la perspectiva de su mitigación en la gestión del territorio), han sido trabajados por más de diez años.

Esta experiencia a nivel local y nacional, es contrastada a través de la participación en redes y movimientos latinoamericanos y mundiales. Es así que ha participado como miembro fundador del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) y actualmente su director ejecutivo es coordinador para los países andinos. En 1996 funda junto a otras instituciones de América, África, Asia y Europa el programa internacional Comparando y apoyando el desarrollo endógeno (COMPAS) del que actualmente es coordinador latinoamericano y cuya sede esta en Holanda. Desde el año 2001 el director ejecutivo ha sido invitado para participar como miembro del directorio de la fundación Genetic Action International (GRAIN) con sede en Barcelona-España.

2. El contexto socioeconómico y la problemática del Parque Nacional Tunari

En Bolivia, los conceptos referidos a la participación popular, el acceso a los recursos naturales, la tierra y el territorio, han vuelto a tener una notable importancia en los últimos años debido a que la promulgación de nuevas leyes no han tenido la aceptación esperada de grupos sociales inmersos en esa problemática (Spedding, 1998; Valdivia, 2001; Bolivia-MDSP, 1998). Existen varios ejemplos² de cómo la población ha reaccionado ante políticas claramente agresivas a la economía y a la vida de la población boliviana.

En términos más generales, la aplicación de estas nuevas leyes insertas como instrumentos fundamentales de las políticas de ajuste estructural del Estado boliviano, han cambiado notablemente su relación con la población urbana y rural, quienes empiezan a cuestionar la actitud de sus representantes elegidos democráticamente, por las determinaciones contrarias a los intereses de las mayorías que generalmente son las más desfavorecidas, lo que implica un cuestionamiento al sistema democrático representativo imperante. Es por ello que las reivindicaciones y la lucha por la tierra y el territorio son parte integral del discurso y de la práctica social de los actores locales, tanto del sector indígena-campesino y del sector de migrantes urbanos.

2 En abril del 2000, en el departamento de Cochabamba surgió un Conflicto entre el Estado y la población urbana y rural, a raíz de la aprobación de la ley de aguas. Esta ley otorgaba a una transnacional responsable de la distribución del agua potable de la ciudad de Cochabamba, varias prerrogativas como el alza de precios sin concertación ni consulta alguna. La población, tras varios días de marchas y protestas logro que se abrogara la mencionada ley.

En Bolivia, desde 1975 se tiene el decreto ley 12301 que reglamenta la vida silvestre, los parques nacionales, la caza y la pesca (MACA, 1975). En 1998 se ha aprobado el decreto supremo 25158 creando el servicio nacional de áreas protegidas (SERNAP) que tiene la misión de coordinar el funcionamiento del sistema nacional de áreas protegidas que tiene las siguientes categorías: parque nacional, santuario nacional, monumento natural nacional, reserva nacional de vida silvestre y área natural de manejo integrado. En la ley general de medio ambiente aprobada en 1992 se define a las áreas protegidas como “áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural de país.”

En relación al marco jurídico legal, el Parque Tunari fue elevado a rango de parque nacional mediante decreto ley 1262 de 1991. Existen además, una serie de decretos supremos, decretos leyes y reglamentos que han intentado consolidar su uso y gestión sostenible, pero los conflictos persisten por la presencia de población urbana y rural que contradice el objetivo para el que se han creado las áreas protegidas, ahondándose más el problema con las leyes de participación popular y descentralización. Si bien los avances son importantes en relación a los marcos jurídicos y legales en la gestión pública, la gestión, uso y manejo de los parques naturales no ha superado los conflictos relacionados a la ocupación del territorio que sin duda requiere de un análisis sociopolítico más que jurídico-técnico (MDSP, 1998).

El problema parece radicar otra vez en la concepción andina sobre la biodiversidad y la gestión del territorio encontradas a través de otras investigaciones en otras regiones de los Andes y que consideran la dimensión espiritual como la base de las dimensiones sociales, económicas y ambientales (Morlón, 1996; Condarco, 1971, Murra, 1972, 1975; Earls, 1989; COMPAS-AGRUCO, 2001; Rengifo, 1988; PRATEC, 1996; PRATEC, 1998), contraponiéndose a las políticas públicas internacionales y nacionales y a las estrategias de la biodiversidad.

En tal sentido es necesario buscar la interfase entre las políticas públicas de forma integral, es decir analizando todas las leyes o proyectos de leyes que directa o indirectamente afectarían a la gestión sostenible del Parque Nacional Tunari, su biodiversidad y la propiedad de los territorios que están bajo la denominación de áreas protegidas con asentamientos poblacionales rurales y urbanos, y cuales son las propuestas de la ciudadanía, representadas en este caso por los habitantes asentados.

La problemática del Parque Nacional Tunari como estudio de caso de un área protegida en el que aparecen muy claramente asentamientos de poblaciones rurales y urbanas en su jurisdicción territorial, requiere de una investigación que considere:

- El conflicto interno entre sus habitantes urbanos y rurales.
- La influencia, aplicación y cumplimiento de las políticas públicas desde los niveles nacionales, departamentales y municipales en la resolución o ampliación del conflicto.
- Hasta que punto las leyes, decretos supremos, normas y reglamentos velan por los intereses de la población involucrada.
- La influencia de las políticas internacionales y los intereses de las transnacionales del norte.

A raíz de la aplicación de leyes como la ley general forestal, la ley de medio ambiente, la ley de participación popular, la ley de municipios, la ley INRA, y la ley de descentralización administrativa, han resurgido serios conflictos en torno al uso y accesos al Parque Nacional Tunari que fue creada en el año de 1963 por ley 253 (MDSP, 1998).

Una de las causas para el resurgimiento de estos conflictos ha sido la aprobación de la ley de participación popular y de descentralización, que han ampliado las jurisdicciones de los gobiernos municipales al ámbito rural de sus secciones de provincia, situación que establece que el parque nacional Tunari abarque el territorio de 5 provincias, 8 municipios y 12 cantones, lo que ha implicado un reconocimiento de pertenencia de las poblaciones rurales de origen indígena-campesino³, como antiguos propietarios que aparecen ubicados en el Parque, y un conflicto de acceso a la propiedad de la tierra por migrantes urbanos⁴ de pequeñas poblaciones mineras asentadas ilegalmente desde no más de hace 20 años y por mercaderes de tierras ambos con objetivos claramente diferenciados, pero relacionados a través de la compra-venta de tierras.

3 El sector indígena-campesino esta conformado por comunidades campesinas asentadas desde antes de la creación de la república (posiblemente desde el siglo XV a raíz de la política del Inca Huayna Cápac de realizar movimientos poblacionales con nuevos asentamientos de grupos étnicos de otros territorios). Hemos denominado comunidades campesinas a la población y territorio integrado por una lógica familiar y comunal que posee a veces múltiples niveles y que está a su vez, esta diversamente relacionada con otras lógicas supracomunitarias que comparten una estructura económica, una organización sociopolítica y una cosmovisión mágico-religiosa (Izko, 1986; Saignes, 1991; Blanco, 1992; Delgado, 2001).

4 Llamamos migrantes urbanos a aquellas personas o familias que han emigrado de otras ciudades del país a los sectores marginales de la ciudad de Cochabamba; muchos de ellos se han ubicado en las faldas del Parque Nacional Tunari. El decreto supremo 21060, promulgado en 1985, ha tenido un efecto radical en la emigración de la población de pequeñas ciudades mineras a la ciudad de Cochabamba a consecuencia del cierre de las minas del Estado.

3. Tierra y territorio desde la visión de los pueblos originarios y la visión conservacionista del Estado

En tal sentido, en el presente proyecto de investigación que incorpora 3 tesis doctorales y 1 proyecto de capacitación (que serán expuestos posteriormente) es importante comprobar que si los conceptos y principios relacionados con la tierra y el territorio provenientes del sector campesino e indígena, que todavía son una gran mayoría en el país, concuerdan o no con la lógica conservacionista introducida en la creación y las propuestas, programas y proyectos de manejo de los parques nacionales ejecutados por entidades gubernamentales o no gubernamentales que siguen la normativa jurídica del Estado boliviano y un enfoque tecnocrático de los recursos naturales.

En tal caso, es necesario considerar que existen varios estudios que reconocen la alta capacidad de adaptación y de gestión de los pueblos indígenas-campesinos en y de los ecosistemas andinos, que han logrado mantener por siglos, un cierto equilibrio en la relación sociedad-naturaleza, por lo menos hasta antes de la invasión española realizada en el año de 1532, tal como lo han demostrado los cronistas españoles e indígenas de la época colonial española (como Garcilazo De la Vega Inca, Juan Santa cruz Pachacuti Yamqui, Pedro Cieza de León).

Sin duda, este proyecto pretende también aportar, a ver la interfase entre los saberes locales y las propuestas técnicas y jurídicas enmarcadas en las políticas públicas, que han creado un proceso de re-interpretación del significado de los conceptos externos (nacionales o internacionales) que según el caso, puede tener discrepancias considerables con el significado "local". Es por ello que desde el punto de vista de la mitigación de los síndromes, se puede entender estas re-interpretaciones como parte de un proceso de aprendizaje social que puede contribuir a re-configurar los valores fundamentales para el pensamiento y la acción en el ámbito público, tal es el caso de las modificaciones de normas y reglamentos que se ha dado con la ley de participación popular, al aceptarse a partir de la presión social del movimiento indígena y campesino, el reconocimiento de sus autoridades y formas de organización tradicionales, reconociéndoles finalmente la personería jurídica.

4. Ciudadanía y democracia representativa en cuestión

La relación entre la ciudadanía y el Estado en América Latina, esta pasando por una profunda crisis de legitimidad por el cuestionamiento a sus representantes en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por tanto, los conceptos de ciuda-

danía⁵ que se han manejado desde las ciencias políticas y sociales y el concepto de democracia representativa⁶ que ha sido la forma de organización del Estado boliviano, están demostrando ciertas limitaciones al analizar nuevas situaciones que se originan por el desencanto y la incredulidad de los ciudadanos en los órganos rectores plasmados en la constitución política del Estado, porque no ha dado respuesta para mejorar la calidad de vida de la población. Es por eso que “en la práctica, la definición de la ciudadanía es una cuestión en pugna y un campo de batalla entre individuos, grupos sociales e ideologías para obtener poder (NCCR-IP8, 2002)”.

Estas concepciones de ciudadanía y democracia representativa, tienden a perder de vista que paralelamente al divorcio cada vez más explícito entre ciudadanía política, civil y social, existen propuestas y estrategias alternativas que emergen de los movimientos étnicos y sociales, un ejemplo de ello es la organización socioterritorial de las comunidades campesinas originarias de los países andinos, organización que se conoce como ayllu,⁷ basado en principios de

-
- 5 Según el NCCR-IP (2002), la ciudadanía es un sentido de pertenecer a una comunidad. Implica solidaridad entre conciudadanos y, por ello, valores comunes o una ética compartida. Desde una perspectiva legal, la ciudadanía implica una igualdad de derechos entre individuos, pero también de deberes (obedecer la ley y pagar su porcentaje de impuestos); de ahí su relación con la libertad y la democracia. Ciudadanía es definida por el CERES (2001) como la participación de los individuos en todos los aspectos de la vida política, económica y cultural de la sociedad. El ejercicio de la ciudadanía es ejercer derechos, cumplir obligaciones y asumir responsabilidades de manera libre y consciente. La participación política se caracteriza por intervenir de manera más o menos decisiva en las condiciones materiales y simbólicas de la realidad. Por eso la ciudadanía esta ligada a la práctica del poder político, donde el ciudadano elige al presidente, a los diputados, al alcalde, a los concejales, para que lo representen y gobiernen en su nombre; por tanto puede exigir que cumplan con las funciones para las que fueron designados. La ciudadanía presenta un doble enfoque, uno basado en la idea de universalidad e igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos, y otro basado en las diferencias culturales que generan diferentes formas de participación y representación en las comunidades y grupos indígenas que habitan en nuestro país.
 - 6 La democracia es el régimen político en el cual la soberanía pertenece al conjunto de los ciudadanos sin distinción, es decir, al pueblo. La democracia representativa o llamada también democracia parlamentaria, es aquella en la cual el pueblo delega en un parlamento, constituido en general por vía de elección, a veces por sorteo, el ejercicio del poder legislativo (Morfaux, 1985).
 - 7 El concepto de ayllu puede tener diferentes connotaciones, es decir puede referirse a aspectos de la organización social (relaciones de parentesco e identificación étnica), connotaciones espirituales en función de los centros rituales (los centros rituales sagrados o wacas que muchas veces están ubicados en las actuales capillas o parroquias o calvarios instalados por la religión católica. Delgado (2001) define el ayllu como la organización social en función de sus relaciones de producción, el espacio geográfico

reciprocidad y redistribución a partir de una gestión territorial comunitaria⁸ que todavía perviven en varias regiones del país, a lo que se ha venido a denominar la “teoría de la complementariedad vertical ecosimbiótica”⁹.”

5. El espacio tiempo-sagrados para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo endógeno sostenible

En los últimos años se han realizado diversas investigaciones en otras regiones que están fuera de la jurisdicción territorial del Parque Nacional Tunari, donde se ha concluido que la teoría de la complementariedad vertical ecosimbiótica considerada inicialmente como una estrategia campesina-indígena de acceso a la tierra, de conservación de los recursos naturales y de seguridad alimentaria, tiene connotaciones que van mas allá del simple espacio físico-natural y espacio socioeconómico, donde lo simbólico es fundamental y se demuestra en la concepción indígena de espacios-tiempos sagrados que en los Andes se conoce como Pachamama (Delgado, 2001).

que ocupa y la estructura simbólica que ocupa y donde se centran las principales actividades que determina el sistema productivo, considerando además el acceso a otras zonas simbióticas. Saignes (1991) indica al referirse al ayllu, llacta o curacasgo, que “la percepción indígena de estas categorías de pertenencia es muy relativizadora; según donde se ubica el sujeto, la noción de ayllu, por ejemplo, puede abarcar a la unidad residencial local, al grupo extenso de parentesco, al conjunto del pueblo, a la federación regional y aún, cuando nacieron las repúblicas andinas, al país entero”.

- 8 Diferentes investigaciones realizadas en los Andes desde la etnohistoria y la antropología tienden a subrayar los variables modos en los que la herencia de la cultura política andina ha influido y dado forma a las fuerzas de penetración mercantil en los Andes (Harris et.al.,1987) y muy especialmente en la gestión del territorio, reconstituyendo creativamente sus formas básicas de interacción social, a fin de liberarse de las cadenas económicas, creando como dice Esteva (1996) nuevos ámbitos de comunidad que les permite vivir en sus propios términos. En este sentido, una de las mayores contribuciones de las ciencias sociales ha sido la teoría del control vertical ecosimbiótico, desarrollado por Murra (1967; 1972, 1975) y Condarco (1971, 1997).
- 9 La ecosimbiosis interzonal no es nada más que la concurrencia a que por tradición están obligados pueblos del mismo origen, pero que se hallan domiciliados o asentados en distintas zonas o habitats contrariamente caracterizados por diferentes condiciones naturales que permiten o imponen a dichos pueblos distintos géneros de vida y la consiguiente necesidad de procurarse recíprocamente acceso al aprovechamiento de los disímiles medios de subsistencia que unos y otros, no por comercio o trueque, sino por una suerte de extraterritorialidad que se reconoce mutuamente para explotación en beneficio privado del que los explota en territorio vecino, a cambio de permitir al pueblo de aquel, iguales derechos en su habitat de origen.

Por otro lado, existe una preocupación cada vez más explícita de una acelerada erosión de suelos y una pérdida de biodiversidad que influye en la prioritaria búsqueda de alternativas legales, tecnológicas, sociales y económicas para un uso sostenible de los recursos naturales y para la conservación de la biodiversidad, que permitan otorgar seguridad y soberanía alimentaria y promover un desarrollo humano sostenible en Bolivia. Sin embargo, la definición de área protegida, donde se destaca el objetivo de conservar la biodiversidad, por lo menos para el caso del Parque Nacional Tunari, no considera a la población existente. El problema parece radicar en la visión materialista y mercantil que se quiere dar a la biodiversidad. Un reciente estudio de la Academia Nacional de Ciencias sobre Lineamientos de políticas públicas para la gestión de la biodiversidad en Bolivia (ANCB, 2002), ha identificado tres problemas centrales que afectan a la biodiversidad y limitan su contribución al desarrollo sostenible del país, estos son:

El modelo de libre mercado que es incompatible con el desarrollo sostenible, especialmente si como en Bolivia, se lo aplica sin ninguna regulación del Estado, lo que está produciendo una creciente pérdida de biodiversidad, tanto en el componente natural como en el cultural, comprometiendo las oportunidades de desarrollo futuras para los bolivianos.

No existe una visión del país que deseamos construir, que impide el desarrollo de políticas integrales construidas colectivamente, logrando espacios de concertación entre los diferentes intereses de la sociedad boliviana; por el contrario, se mantienen una tradición de toma de decisiones que responden fuertemente a intereses particulares y a las presiones internacionales.

No existe un esfuerzo de búsqueda de soluciones y construcción del desarrollo a partir de las oportunidades y realidades locales, por el contrario las soluciones se buscan en la aplicación de medidas copiadas de otras realidades logrando únicamente profundizar los problemas de exclusión social y de autodescalificación de los bolivianos“.

Los problemas identificados por la Academia Nacional de Ciencias, permiten reflexionar a cerca de las profundas diferencias conceptuales de las culturas andinas con el modelo de libre mercado y con las formas de tomar decisiones, que son la base de los conceptos que se manejan sobre las áreas protegidas y por ende de las políticas públicas y la creación de parques nacionales.

6. Los proyectos de tesis doctorales

En el presente proyecto de investigación, desde la antropología política y antropología cultural, se pretende profundizar a través de una tesis doctoral, la concepción de territorialidad y gestión comunitaria tomando la gobernancia y los

conflictos entre sistemas de gestión y actores en sus diferentes niveles, interrelacionando este tema con la propuesta del IP1 para una ejecución y coasesoramiento conjunto entre el IUED, el CDMA y AGRUCO de una tesis doctoral.

A través de la ley de participación popular dictada en 1993, el Estado boliviano ha reconocido la importancia de nuevos actores locales en la toma de decisiones, determinando que estos ya no solo se conformen con los niveles y estructuras de participación existentes ofrecidos por las organizaciones estatales actuales, sino exijan modificaciones profundas a la constitución política del Estado. Esta apertura, más bien puede generar propuestas para reformar o mejorar las estructuras existentes en el sentido de alcanzar una mejor articulación y mejor control social entre los principios y procesos de toma de decisión vigentes en sus propias organizaciones (comunidades, ayllus, sindicatos, barrios, ONGs, federaciones sindicales) con el ámbito municipal y gubernamental.

Es en este sentido, que la gestión municipal y el control social en la jurisdicción territorial del Parque Nacional Tunari, es una prioridad de investigación en el presente proyecto de investigación, donde se analizará la gobernanza política, los conflictos entre sistemas de gestión y actores en sus diversos niveles de gobernanza, como tesis doctoral desde la sociología política.

Los planteamientos propuestos en los anteriores párrafos permiten plantear la hipótesis de que “emergen nociones endógenas de ciudadanía que empiezan a desafiar el sistema democrático representativo que se ha concentrado como un monopolio de determinados grupos sociales que no representan a toda la ciudadanía en su conjunto, en la perspectiva de reinterpretar el rol del Estado y la ciudadanía”. Esta hipótesis será trabajada a través del Proyecto SOLES con el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, con la que se interrelacionará a través de talleres de intercambio.

Una constante del discurso en el campo político de estos actores sociales locales concentrados en los movimientos indígenas y campesinos, es el cuestionamiento y el rechazo a los valores éticos derivados de un estado neo-liberal que se proyecta en primera línea como facilitador de una economía de libre mercado. Este rechazo ha sido demostrado en las elecciones generales realizadas el 30 de julio del presente año; para el caso del departamento de Cochabamba un 80 % de la población, votó en contra de los partidos políticos tradicionales o asistémicos. A nivel nacional, el 47 % de la población, ha votado en contra de estos partidos tradicionales.

No obstante de que los nuevos actores se manifiestan más claramente en los niveles locales y regionales, en sus discursos se observa elementos que reflejan discusiones llevados a cabo a nivel internacional. Por esto, conceptos referidos a la sostenibilidad, biodiversidad, recursos naturales, tierra y territorio, parques naturales y bosques, descentralización y participación, empiezan a formar parte integral del discurso y de la práctica social de los nuevos actores, aunque muchas

veces este discurso provenga de entidades internacionales como el Banco Mundial o el Fondo monetario internacional que tienen implícitos otros objetivos y estrategias no siempre coincidentes con los de los actores locales.

Al relacionar estos elementos con conceptos y principios provenientes de bases étnicas diferenciadas, se crea un proceso de re-interpretación del significado de estos conceptos externos que según el caso, puede tener discrepancias considerables con el significado “oficial” que tienen, de acuerdo a los intereses de los actores internacionales. Desde el punto de vista de la mitigación de los síndromes se entendería estas re-interpretaciones como parte de un proceso de aprendizaje social que debe contribuir a re-configurar los valores fundamentales del pensamiento y la acción en el ámbito público. Estos conceptos y principios parecen diferir profundamente en temas como el medio ambiente y la biodiversidad desde la ciencia moderna occidental y la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, aspectos que involucran también diferentes concepciones de la conservación y el desarrollo, lo que se ha trabajado en una tesis doctoral con el CDMA de la Universidad de Berna.

En esta búsqueda de alternativas, el gobierno boliviano ha instruido al parlamento la elaboración de una ley de ordenamiento territorial (en la actualidad esta como proyecto de ley) que podría definir, si se lo hace concertadamente con la población urbana y rural, la sostenibilidad de los bosques andinos y amazónicos y la resolución de conflictos causados por las áreas protegidas en diferentes regiones del país. Sin embargo, este proyecto de ley ya ha sido cuestionado por el movimiento indígena y campesino y otros sectores de la sociedad civil (principalmente ONGs e institutos de investigación). El proceso ha sido parado por estar en este año 2002 en periodo de elecciones generales, pero sin duda en los próximos meses y tal vez años, el tema será tratado desde diferentes ángulos, pretendiendo con el presente proyecto, contribuir a la discusión, reflexión y soluciones alternativas.

7. Tierra y territorio y áreas protegidas en perspectiva

Es por ello que como un objetivo a largo plazo, el presente proyecto de investigación pretende generar una amplia discusión y reflexión sobre la tierra y el territorio en general y las áreas protegidas en particular a partir del caso del Parque Tunari. Esta discusión y reflexión se origina en el cuestionamiento y definición de las políticas públicas y la gestión municipal en muchos casos contradictorias con otras leyes y en otros casos confusas en su interpretación, generadas en un marco institucional aparentemente participativo y que parecen apuntar a privatizar el acceso a los recursos naturales, a la tierra y a los bosques, desconociendo los principios de comunitarismo y complementariedad ecosimbiótica en la gestión o

gobernación local del territorio, que han sido ampliamente investigados en otras regiones altoandinas del país y puede aportar positivamente desde una perspectiva de un desarrollo humano sostenible con identidad cultural (Delgado, 2001; Rasnaque, 1989; Rocha, 1999; Platt, 1996).

Con la ley de ordenamiento territorial se tiene como objetivo definir el uso de la tierra en función de las capacidades de uso del suelo, siguiendo seguramente parámetros técnicos desarrollados para otros ecosistemas y otros contextos socio-culturales. En tal sentido será importante analizar la perspectiva y saberes de los campesinos e indígenas como actores locales rurales en el uso del ecosistema y la biodiversidad del bosque andino y la gestión del territorio. La mencionada ley intentará también definir la ocupación del territorio. Para el caso del Parque Nacional Tunari será fundamental la elaboración de un plan de ordenamiento territorial departamental y municipal que permita definir el acceso y uso al parque de los campesinos e indígenas de los municipios en cuestión y de los vecinos asentados en las conurbaciones del municipio de Cercado.

8. Objetivos del proyecto global

Objetivo general

- Estudiar los conflictos y los procesos de transformación que se dan entre la gestión de los actores locales y las políticas públicas a nivel municipal, departamental y nacional, referidos a la gestión de la biodiversidad y a la conservación de los recursos naturales en áreas protegidas (el caso del Parque nacional Tunari).

Objetivos específicos

1. Estudiar la gobernanza política y los conflictos internos entre sistemas de gestión y actores a nivel de los diferentes niveles en relación a la gestión municipal y el control social en el Parque Tunari. (Tesis doctoral de Dora Ponce).
2. Estudiar la gobernanza de la tierra y los conflictos entre sistemas de gestión y actores a nivel de los diferentes niveles en relación a la territorialidad y la gestión comunitaria en el Parque Nacional Tunari. (Tesis doctoral de Elvia Serrano).
3. Comprender las concepciones de los campesinos indígenas andinos del espacio de vida y sus relaciones con el concepto de la biodiversidad de ecosistemas y discutir sus potencialidades y limitaciones para una gestión sostenible de la Biodiversidad.

9. Avances del proyecto de investigación en general

En esta presentación queremos mostrar los avances de investigación de todo un equipo intertransdisciplinario de profesionales de AGRUCO que han ido aportando con sus experiencias a este proyecto global, además reiterar que esto es posible gracias a convenios interinstitucionales de cooperación científica entre AGRUCO y estas Universidades Suizas, pero también con otras Universidades Nacionales e Internacionales, así como convenios con Instituciones locales como se ha mostrado líneas arriba.

Durante el primer año de investigación (Septiembre del 2002 a Junio del 2003) el estudio fue enriquecido por los resultados de varias investigaciones entre ellas el trabajo de Silvio Claros sobre *“Análisis de la problemática e implicancias del Parque Nacional Tunari”* ejecutado en el marco del convenio entre la AGRUCO-UMSS y el Municipio de Tapacarí (modalidad trabajo dirigido), el trabajo del Ing. Rubén Flores sobre *“Mecanismos de control y aprendizaje social en el Municipio de Sipe Sipe”* (Tesis de Maestría) realizado en el marco del Convenio entre AGRUCO y SOLES (UMSS y CDMA-Universidad de Berna).

Sobre esta base, se realizó entrevistas a los diferentes grupos de actores sociales involucrados en la problemática del PNT y también se participó activamente en una serie de eventos relacionados al Tema de Areas Protegidas y Gestión de la Biodiversidad. En este proceso se sumo al equipo Miriam Macchi de la Universidad de Berna para desarrollar un trabajo de Investigación titulado *“Parque Tunari: Un análisis de la situación actual desde la perspectiva de las comunidades locales”* que actualmente ya ha sido presentada en su Universidad.

La sistematización de estos trabajos y el análisis de la información obtenida en campo durante este primer año ha permitido alcanzar algunos resultados preliminares que mencionamos a continuación:

- La identificación y caracterización de los diversos grupos de actores sociales externos y locales involucrados en la problemática del PNT, sus interrelaciones en términos de relaciones de poder.
- El análisis preliminar sobre el conflicto territorial a partir de una aproximación a la definición de límites del Parque Nacional Tunari tomando como referencia la información oficial de las instituciones responsables de la gestión de áreas protegidas en Bolivia (SERNAP, Prefectura).
- La definición preliminar de roles y competencias de los actores institucionales en la gestión del Parque Nacional Tunari.

La revisión de información sobre el PNT ha permitido constatar que hasta ahora la atención de los medios de comunicación y las entidades gubernamentales vinculadas al Parque Nacional Tunari ha girado en torno a la problemática de los

asentamientos urbanos en la ladera Sur del PNT, obviándose a otros actores sociales como son las comunidades campesinas y pueblos indígenas que habitan en el territorio del Parque, esto significa que las discusiones y las propuestas trabajadas hasta ahora por la prefectura y el comité de gestión del PNT se han desarrollado en torno a esta problemática específica.

En términos de relaciones de poder, se evidencia claramente que en el Parque Nacional Tunari se imponen criterios conservacionistas de grupos minoritarios (urbanos), sobre otras lógicas locales, significa que las decisiones para la implementación del PNT todavía corresponden a reducidos grupos de poder que políticamente están ligados al gobierno de turno y a la administración pública, en este contexto poco o nada cuenta los criterios de los centenares de comunidades campesinas que en su vida cotidiana están gestionando el territorio y la Biodiversidad en base su propia lógica.

El diagnóstico inicial muestra claramente que existe una superposición de competencias entre los diferentes actores institucionales para la implementación de las políticas públicas de conservación en el Parque Nacional Tunari y principalmente en lo que se refiere a la administración del territorio, por ejemplo los Municipios pierden autoridad sobre su territorio al ser declarado como Parque Nacional, esto repercute en la participación de los municipios en la implementación de la Ley 1262.

Desde la visión del Estado la administración de la tierra en Bolivia ha sido y sigue siendo un tema de administración nacional, los niveles intermedios (Prefecturas) y los locales (municipios) no tienen competencias específicas sobre la tierra, con la sola excepción de la administración del catastro. Esta administración se complica con la creación de los Parques Nacionales y el Servicio Nacional de Áreas protegidas, que es creado como institución reguladora del manejo y Gestión de áreas protegidas, debido a limitaciones esta tarea es transferida a la Prefectura que aunque no tiene las competencias legales asume este rol lo cual genera confrontación de intereses diferenciados que bloquean iniciativas de concertación para llevar adelante una gestión sustentable del Parque Nacional Tunari.

En el tema tierra-territorio el aspecto legal, que se circunscribe a la propiedad de la tierra es importante que las comunidades tienen en propiedad más del 98% del territorio del área del PNT, y las invasiones ilegales en el límite sur van aumentando anualmente, entonces se observa que existen disfunciones en los objetivos por los que fue creado el PNT, puesto que por un lado se establecen reglas que restringen el acceso a los recursos de los territorios de las propias comunidades, y por otro lado se recorre el límite Sur a una cota, que al momento otra vez ha sido invadida ilegalmente lo cual es una evidencia del poder ejercido por grupos de élite de la ciudad de Cochabamba, que a su vez influyen en las políticas públicas.

También en este primer año hemos rescatado experiencias locales de formas de control social para la gestión del Territorio y los recursos naturales, formas de

organización y toma de decisiones que están siendo planteadas en algunos Municipios a través de la participación real de Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) en la gestión municipal.

Las Comunidades campesinas ubicadas en el PNT a través de su proceso histórico han desarrollado estrategias propias de gestión del territorio lo que implica formas de organización local que a través de derechos consuetudinarios (usos y costumbres) regulan el manejo y la conservación de la biodiversidad, que están vigentes en su vida cotidiana pero que el Estado no considera a la hora de establecer políticas públicas que rigen la gestión del territorio Boliviano y por tanto la implementación de estas leyes, normas, estructuras de gestión, tiene serias dificultades y provoca conflictos en los que las comunidades demandan claramente la visión integral que las caracteriza, en este marco el decreto ley 1262 del Parque Nacional Tunari, atenta contra su soberanía que se expresa en una forma de vida, donde el control social del territorio en su concepto más amplio, es la base fundamental de la reproducción de la vida social, material y cultural, la temática de los derechos consuetudinarios merece una investigación que permita profundizar el tema.

Los resultados de este primer año de estudio han constituido la base para precisar los proyectos de Investigación y avanzar en su ejecución que responden a los objetivos específicos del proyecto general: en el caso de Dora Ponce *"Gobernanza en el Municipio y las Organizaciones locales para la gestión de la Biodiversidad en el Parque Nacional Tunari"*; en el caso de Elvira Serrano sobre *"Transformación de valores éticos en la Interfaz entre Estado y Sociedad Civil"*. Y Sebastián Boillat en el tema *"Concepciones Indígenas del Medio Ambiente y su relación con el concepto de Biodiversidad"*. Además estas Investigaciones están acompañadas y apoyadas por las investigaciones de Policarpio Nina en *"Estudio de la Diversidad de Ecosistemas en el Parque Nacional Tunari"* y Angel Aguilar en el tema *"Topología sociocultural de los Municipios del Parque nacional Tunari"*

Es una característica del trabajo de AGRUCO, acompañar los procesos de Investigación con acciones concretas en las comunidades campesinas, esto a permitido durante años que las investigaciones se fortalezcan con la aplicación de una serie de metodologías participativas, que en el marco de las acciones de los proyectos de desarrollo se facilitan de gran manera, porque se planifica e implementa tanto las investigaciones como las acciones junto con las autoridades y organizaciones de base en cada una de las áreas de trabajo, por su parte las acciones han sido retroalimentadas por los resultados de las investigaciones de manera continua, lo que ha permitido en muchos casos reorientar los objetivos y las metodologías de trabajo y replantear las actividades en la búsqueda de mejores resultados.

Las investigaciones sobre el Parque Nacional Tunari en el marco del NCCR-NS también fueron acompañadas y apoyadas por un proyecto de capacitación (Acción), de esta manera durante el año 2003-2004 los Ings. Jaime Delgadillo y Juan

Carlos Mariscal del equipo AGRUCO han ejecutado el “*Programa de Capacitación en Control Social y Gobernanza para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Parque Nacional Tunari*” proceso que ha tenido aportes fundamentales para los trabajos de Investigación.

Bibliografía

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BOLIVIA

2002 Lineamientos de Políticas Públicas para la Gestión de la Biodiversidad en Bolivia. ANCB-ICIB, La Paz-Bolivia, págs. 33

AGRUCO-COMPAS

2001 Cosmovisión Indígena y Biodiversidad en América Latina. AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 408p.

ALBO, X.

1999 Iguales aunque diferentes: hacia unas políticas intercomunales y lingüísticas para Bolivia. Cuadernos de investigación. N° 52. La Paz: CIPCA. UNICEF. 134p.

1986 ¿Khitipxtansa? ¿Quiénes Somos? Identidad Localista, Étnica y Clasista en los Aymaras de Hoy en: Identidades Andinas y Lógicas del Campesinado. Mosca Azul, Lima-Perú. pp. 147-187.

AK'UTAN y VOCES DEL TIEMPO

2000 Tierra y Espiritualidad Maya: II Encuentro Taller. Guatemala 14-17 febrero 2000. 204p.

ANISUR RAHMAN

1991 El Punto de Vista Teórico de la IAP. En: Fals Borda, O y Anisur Rahman, M. (compiladores) (1991). Acción y conocimiento. Como romper el monopolio con investigación - acción participativa. CINEP. Bogotá-Colombia. pp. 37 - 47.

ALAVI, H. y SHANIN, T.

1988 La cuestión agraria: El discurso marxista de Kautsky. En: Agricultura y sociedad No 47. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid-España, 1988. pp. 43-54.

ARCHER, M.

1992 Teoría de Cultura-Acción. En: Ritzer, George. Teoría sociológica contemporánea. Mc Graw Hill, Inglaterra. pp. 497-500

BARNADAS, J.

1980 Kollasuyo: Orígenes de Cochabamba. pp. 19-43 (mimeo).

BARNADAS, J.

1973 Charcas: Orígenes Históricos de una Sociedad Colonial. La Paz: CIPCA. 635p.

BERTAUX, D.

- 1989 Los relatos de vida en el análisis social. En: Revista de Historia y Fuente Oral No 1 ¿Historia oral? Universidad de Barcelona. Barcelona-España. pp. 87-105.

BOLIVIA

- 1960 Constitución Política del Estado 10. ed. Gisbert editores, 1960, La Paz-Bolivia. 81p.

BOLIVIA. MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

- 1996 Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). MDSMA, La Paz-Bolivia, págs. 30.

BOLIVIA. MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN, et.al.

- 1998 Parque Nacional Tunari: Criterios Técnicos-legales para Abordar la Problemática del Parque Nacional Tunari. Cochabamba-Bolivia, págs 91.

BOLIVIA. MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS

- 1975 Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca. Bolivia, págs. 32.

BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA

- 1997 Reglamento de la Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el de Bioseguridad. Bolivia, págs. 40.

BOUYSE CASSAGNE, T.

- 1987 La identidad aymara: Aproximación histórica (siglo XV, siglo XVI). Biblioteca andina. Serie histórica. N° 1. La Paz: HISBOL. 443p.

COLCHESTER, M.

- 1995 ¿Hacia un concepto indígena de la biodiversidad? Biodiversidad 3, REDES-AT-GRAIN, Uruguay, pp. 7-10

CROUCIBLE GROUP

- 1994 Gente, Planta y Patentes. CIID-Norman Comunidad, Canadá, págs 106.

CONDARCO, R.

- 1997 Realidad, Fuente y Conceptos Acerca de la Ecosimbiosis Interzonal Andina. (mimeo). Conferencia dictada en AGRUCO. Enero de 1997. 13p.

CONDARCO, R.; MURRA, J.

- 1987 La teoría de la complementariedad vertical eco-simbiótica. Breve Biblioteca de Bolsillo. N° 2. La Paz: HISBOL. 114p.

CONDARCO, R.

- 1971 El escenario andino y el hombre. En: Protohistoria andina, vol. II. Renovación, Bolivia.

CROSBY, N. A.

- 1988 Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa, 900-1900. Crítica. Barcelona-España. 38p.

DELGADO, F.

2001 Simbiosis Interzonal en la Estrategias de Autodesarrollo Sostenible: El caso del Ayllu Mujlli, Departamento de Cochabamba, Bolivia. Tesis doctoral. Universidad de Córdoba, España, 295 págs.

1999 Cosmovisión Andina para un desarrollo rural sustentable. En: Boletín COMPAS. N° 1. 31p.

DELGADO, F. et. al.

1998 Reciprocidad Andina: Principio de seguridad vital-Reciprocity for life security. En: LEISA. Vol. 14. N° 14. LEUSDEU: ILEIA. 30p.

DELGADO y TAPIA

1998 Políticas y Estrategias Gestión de la Investigación en Agroecología y Revalorización del Saber Local para un Desarrollo Sustentable. AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. 29 p.

ELIADE, M.

Lo sagrado y lo profano. Nueva serie. N° 21. Barcelona: LABOR. 185p.

ESTEVA, G.

1996 Sobre la concepción y el origen del desarrollo. En: Sachs W. el Diccionario del Desarrollo, CAM-PRATEC. pp. 52-78.

FERNÁNDEZ, D.

1993 Conformación de espacios socioeconómicos. Consideraciones generales de la provincia Tapacarí. Serie Técnica 31. AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. 43p.

JIANCHU, XU. et. al.

2000 Links between Cultures and Biodiversity: Proceedings of the cultures and Biodiversity Congress 2000. Yunnan. Cience and Technology Press. China 20-30 Julio. 1033 p.

GORDILLO, J.

2000 Campesinos revolucionarios en Bolivia: Identidad, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba 1952-1964. La Paz. PROMEC. Universidad de la Cordillera. PLURAL. CEP. 261p.

GRUPO SEMILLAS, et.al.

Diversidad biológica y cultural. Retos y propuestas desde América Latina. Dupligráficas, Bogota-Colombia, Págs. 270.

GUHA, R; GADGIL, M.

1993 Los hábitats en la historia de la humanidad. (mimeo) s/p.

GUTIÉRREZ, R. et. al.

1993 Pueblos Indios. Otro Urbanismo en la Región Andina. Abya Yala, Quito-Ecuador, 588p.

HARRIS, O.

1987 Economía étnica. HISBOL. La Paz-Bolivia. pp. 51-114.

- HARRIS, O.
1987 Phaxsima y qullqi. Los poderes y significados del dinero en el Norte de Potosí. En: Harris, O. et. al. Compiladores. La participación indígena en los mercados surandinos. CERES. La Paz-Bolivia, 1987. pp. 235-280.
- HEALY, K.
1989 Sindicatos campesinos y desarrollo rural 1978-1985. Desarrollo en cuestión. N° 1. La Paz: HISBOL. 80p.
- HERVIEU, B.
1995 El espacio rural europeo entre la ruptura y el desarrollo. En: Ramos, E. y Cruz, J. compiladores. Hacia un nuevo sistema rural. Ministerio de agricultura, pesca y alimentación, Madrid-España, 1995. pp. 27-48.
- HOBBELINK, H.
1992 La biotecnología y el futuro de la agricultura mundial. REDES-AT-Norman Comunidad, Uruguay, págs. 205.
- IZKO
1986 Comunidad andina: persistencia y cambio (en: Revista Andina año 1 N° 1. Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, Cusco-Perú). pp 59-128.
- JIMENEZ, G.
1995 Rituales de vida en la cosmovisión andina. La Paz: CID. Secretariado Rural. 139p.
- KUHN, T.
1994 La estructura de las revoluciones científicas. FCE. Madrid-España. 319p.
- LARSON, B.
1992 Colonialismo y transformación agraria en Bolivia: Cochabamba 1500-1900. Biblioteca andina. N° 13. La Paz: CERES. HISBOL. 435p.
- LEFF, E y CARABIAS, J. (Coords.)
1993 Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales. 2 Vols., CIIH-UNAM, México, págs. 273.
- MCCLUNG DE TAPIA, E.
1984 Ecología y cultura en Mesoamérica. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2da ed. 110p.
- MAUSS, M.
1979 Sociología y Antropología. Sociología. Madrid: TECNOS. 430p.
- MILLA, C.
1983 Génesis de la cultura andina. Lima: Fondo Editorial. C.A.P. Colección Bienal. 257p.
- MORIN, E.
1995 Principios de los cambios sociales del siglo XX (en: Sociología. Madrid, Tecnos. pp. 387-405).

MURRA, J.

1975 Formación económicas y políticas del mundo andino. Historia Andina. N° 3. Lima: IEP. 339p.

1972 El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en las economías de las sociedades andinas. En Ortiz de Zúñiga, Iñigo (1967-972). Visita a la provincia de León de Huanuco, 1562. Edición crítica al cuidado de John Murra. Huanuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú.

PARK

1989 Que es la investigación acción participativa. Perspectivas teóricas y metodológicas en: Salazar, María C. La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollo. Popular, Madrid-España, 1992. pp. 135-174.

PLATT, T.

1982 Estado Boliviano y Ayllu Andino: Tierra y tributo en el norte de Potosí. Historia andina. N° 9. Lima: IEP. 197p.

1976 Espejos y maíz. Cuadernos de investigación. N° 10. La Paz: CIPCA. 60p.

PNUMA

1998 Economía de la Biodiversidad. Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental. PNUMA, México, págs. 273.

PNUMA-AECI-MOPU

1990 Desarrollo y medio ambiente en América Latina y el Caribe. Una visión evolutiva. PNUMA, Madrid-España, págs. 231.

PRATEC

1996 La cultura andina de la biodiversidad. PRATEC, Lima-Perú, Págs. 123.

PRATEC

1998 Crianza ritual de semillas en los Andes. PRATEC, Lima-Perú, págs. 167.

RASNAKE

1989 Autoridad y Poder en Los Andes. Los Kuraq Kuna de Yura. HISBOL, La Paz-Bolivia, 282p.

RIST, S.

2001 Wenn Wir Guten Herzens sind, gibt's auch production. Serie. Kommunikation und eeratung N° 42. Verlag-CDE. Berna, Suiza. 344 p.

1992 Desarrollo y Participación. Experiencias con la revalorización del conocimiento campesino en Bolivia. Serie Técnica 27. AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 58p.

RIST, S.; et. al.

2000 Cosmovisión andina y desarrollo autosostenible. pp. 197-210. En: Haverkort, B.; et. al. Comida para el pensamiento: visiones antiguas y experiencias nuevas de la gente rural. Cochabamba: COMPAS. 267p.

- RIVERA, S.
1984 Pachakuti: Los Horizontes Históricos del Colonialismo Interno (mineo) pp 33-93.
- ROCHA, J.
1990 Sociedad Agraria y Religión: Cambio Social e identidad Cultural en los Valles de Cochabamba. Biblioteca Andina. N° 8. La Paz: HISBOL. UCB. ISET. 127p.
- ROGERS, E. M.; SVENNING, L.
1973 La subcultura de los campesinos. En: Rogers, E M y Svenning L. La modernización entre los campesinos. Fondo de Cultura Económica, México, 1973. pp. 28-67.
- SAIGNES, T.
1986 En Busca del Poblamiento Étnico de los Andes Bolivianos (siglos XV y XVI). Avances de Investigación, N° 3. Museo Nal. de Etnografía y Folklore, Bolivia. pp. 5-48.
- SAIGNES, T.
1983 Políticas Étnicas en Bolivia Colonial Siglos XVI-XIX. En Historia Boliviana III/1. Bolivia. pp. 1-30.
- SAN MARTÍN, J.
1998 UKAMAPI. Así no más es pues. En la búsqueda del enfoque para el desarrollo rural autosostenible. UMSS-AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 199p.
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.
1982 Migraciones Internas en el Alto Perú. El Saldo Acumulado en 1645. Historia Boliviana II/1. Bolivia. pp. 11-19.
1977 La población de América Latina desde los tiempos precolombinos al año 2000. Alianza, 2da edición. 190p.
- SÁNCHEZ DE PUERTA, F.
1995 Sociología de la agricultura y tecnología agraria: Más allá de la simple consideración del agricultor. Comunicación presentada al III Coloquio Hispano-Portugués de Estudios Rurales, celebrado en Lisboa los días 19 y 20 de Mayo de 1995. pp. 1-21.
- SCHULTE
1997 Los conceptos teóricos y metodológicos de la investigación. pp. 1-70. En: Proyecto de investigación agrarias PIA. Estrategias de organización socioeconómica campesina frente a los retos del mercado: el ejemplo de la región kallawayá. La Paz: PIA/PIEB. 665p.
- SEVILLA, E.
1990 Redescubriendo a Chayanov: hacia un neopopulismo ecológico. En: Agricultura y sociedad N° 55. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid-España. 1990. pp. 201-237.

- STERN, S. J.
1987 La variedad y la ambigüedad de la intervención indígena andina en los mercados coloniales europeos: apuntes metodológicos. En: Harris, O. et.al. Compiladores. La participación indígena en los mercados surandinos. CERES. La Paz-Bolivia. 1987. pp. 281-312.
- TAPIA, N.
2000 "Agroecología y Conocimiento Campesino en los Andes: el caso del Ayllu Majasaya Mujlli. Cochabamba-Bolivia. Tesis Doctoral, presentada en la Universidad de Córdoba, España. 302p.
- TEMPLE, D.
1986 La dialéctica del don. Economía y Planificación. La Paz: HISBOL. 73p.
- TICONA, E.
2000 Organización y liderazgo aymara: La experiencia indígena en la política boliviana 1979-1996. La Paz: Universidad de la Cordillera. 210p.
- TOLEDO, V.M.
1992 El nuevo movimiento ecológico de los indígenas y campesinos de México. En: Moguel, J. Y L. Hernández, Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural. Siglo XXI editores, págs. 281.
- URIOSTE, M.
1988 Segunda reforma agraria: campesinos, tierra y educación popular. Talleres CEDLA. N° 1. La Paz: CEDLA. 219p.
- URTON
1991 Las Unidades de Análisis en el Estudio de la Reproducción y Transformación de las Sociedades Andinas. En: Reproducción y Transformación de las Sociedades Andinas: Siglos XVI-XX. Abya-Yala/MLAL, Quito-Ecuador. pp. 29-46.
- VAN DEN BERG, H.; SCHIFFERS, N.
1992 La cosmovisión aymara. Biblioteca andina. N° 14. La Paz: UCB. HISBOL. 383p.
- VELEZ, G.
1994 Alternativas a los sistemas dominantes de la propiedad intelectual. Biodiversidad 4. REDES-AT-GRAIN, Uruguay, pp. 11-15
- VIVES AZANCOT, P. A.
1988 Los conquistadores y la ruptura de los ecosistemas aborígenes. En: Solano, Francisco. et. al. 1988 compiladores. Proceso histórico al conquistador. Alianza Universidad. Madrid-España. pp. 95 - 118.
- WACHTEL, N.
1981 Los Mitimaes del Valle de Cochabamba: La Política de Colonización de Wayna Capaj. En Historia Boliviana Y/1. Bolivia. pp. 21 - 57.
- WIRTH, L.
1962 El urbanismo como forma de vida. 2da. edición. Ediciones 3, Bs. As.-Argentina, 1968. 41p.

Avance de investigación: gobernancia en los municipios y organizaciones locales para la gestión de la biodiversidad en el parque Tunari

Dora Ponce Camacho¹

1. Introducción

Considerando los avances del proyecto global sobre el Parque Nacional Tunari, se ha planteado la tesis doctoral sobre *Gobernancia Local*, con el objetivo principal de estudiar las Formas de Gobernancia en el Parque Nacional Tunari en relación a la Gestión de la Biodiversidad, como base para evaluar la pertinencia de otorgar un rol más activo a los municipios en la gestión de la Biodiversidad en áreas protegidas.

Para llegar a este objetivo general, se ha planteado los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar las formas de gobernancia en el Parque Nacional Tunari.
- Comprender las interrelaciones entre formas actuales de gobernancia con relación a la gestión de la Biodiversidad.
- Evaluar la pertinencia de otorgar un rol más activo a los municipios en la gestión de la Biodiversidad en Areas Protegidas.
- Identificar posibles roles de los municipios en la gestión de la Biodiversidad en áreas protegidas como contribución a la reformulación de las políticas públicas.

En el marco del IP8 “*Gobernancia*” se define como los procesos colectivos formales e informales de decisión e interacción entre actores relacionados a la

1 Ingeniero Agrónomo. Magíster en Agroecología, Cultura y Desarrollo Sostenible (AGRUCO-UMSS). Doctorante NCCR-IP8 (IUED-AGRUCO-UMSS). Investigadora de AGRUCO y docente de la carrera de Veterinaria y Zootecnia de la UMSS.

distribución de recursos; procesos que implican la interacción de estructuras de poder, instituciones sociales, normas, reglas y políticas públicas, consideradas como “un factor determinante en la relación entre el desarrollo humano y su medio ambiente” (nccr Norte-Sud; IP8, 2002).

Para el caso del Parque Nacional Tunari, se analizará específicamente las formas de gobernanza en tres municipios, estudios de caso que se ha determinado considerando las diferencias mas marcadas en los aspectos que caracterizan las formas de gobernanza. Es importante señalar que la selección del Estudio de Caso ha sido realizada sobre la base de un trabajo previo de Caracterización Socioeconómica, Política y Cultural de los 11 municipios afectados por el Parque Nacional Tunari.

La caracterización de los 11 municipios del Parque Nacional Tunari, fue una tarea ardua de revisión de información todavía parcial y dispersa, la misma que fue validada en terreno por un trabajo de tesis de grado realizado por A. Aguilar con el apoyo del equipo AGRUCO. El apoyo cercano y activo brindado a este trabajo principalmente durante el proceso de validación de la información en terreno, ha permitido para el caso de esta investigación consolidar las relaciones con los diferentes actores que participan en la gestión municipal.

¿Por qué estudiar las formas de Gobernanza en los municipios?. En principio partimos de la idea de que los municipios hoy en día son los espacios públicos más importantes para la consolidación del gobierno local, y en estos espacios se están generando procesos formales e informales de toma de decisión a través de la interacción de diversos actores sociales para la distribución y gestión de recursos naturales (principalmente desde la aplicación de las políticas de descentralización) Además son también los espacios mas adecuados para que los actores locales puedan incidir en algunas políticas públicas sobre conservación de la Biodiversidad.

En este panorama, para entender las formas de gobernanza, queremos partir de reconocer que tanto las estructuras de poder, las instituciones sociales y la sociedad civil en general están reguladas por una serie de reglas y normas formales e informales que rigen su actuación en el espacio colectivo, sea este publico o no. En este entendido, partiremos analizando las “normas oficiales” referidas a la Biodiversidad como instrumentos fundamentales de las políticas públicas, es decir revisaremos las disposiciones legales vigentes para la conservación de la Biodiversidad en Bolivia, para posteriormente analizar los múltiples procesos de interacción entre los actores sociales que participan en la elaboración, implementación y apropiación de estas normas.

Además, todo este proceso de implementación de políticas públicas para la Conservación de la Biodiversidad en áreas protegidas se analizará considerando otro proceso importante que corresponde a la implementación de las políticas de descentralización en el Estado boliviano. Porque es a partir de la aplicación de

la Ley de Participación Popular (1994), que el Estado boliviano ha reconocido la participación de nuevos actores locales en la toma de decisiones, determinando que estos ya no se limiten a los niveles y estructuras de participación ofrecidos por las entidades estatales, sino se constituyan en actores críticos y propositivos, una prueba de ello es que actualmente están planteando modificaciones profundas a la Constitución Política del Estado y la revisión de otras disposiciones legales.

Esta apertura a la participación “efectiva” de las organizaciones de base, es también una apertura a propuestas alternativas para reformar o mejorar las estructuras existentes, hablamos de procesos de integración de diversas representaciones sociales en torno a objetivos o finalidades compartidas. Es en el ámbito Municipal que actualmente se establece esta trama compleja de interrelaciones entre diversos actores sociales, que bien podría ser un potencial para lograr la concertación.

2. Políticas públicas para la conservación de la biodiversidad

Desde una conceptualización clásica entendemos una política pública como el resultado de un proceso de toma de decisiones que se divide en varias etapas: la identificación del problema y la demanda para la acción pública por un iniciador; el establecer el problema en la agenda gubernamental; el estudio, la formulación de soluciones; la decisión entre acciones posibles; la legitimación de la decisión; la implementación y evaluación de los resultados obtenidos (Jones, 1970). Según esta definición, una Política Pública es el resultado de un proceso de toma de decisiones, para entender por ejemplo ¿Porqué las políticas públicas referidas a la creación de áreas protegidas no gozan de legitimidad en Bolivia? También habría que plantearse otras preguntas como por ejemplo ¿Cómo y quienes elaboran estas políticas y sus instrumentos normativos? ¿Cómo y quienes las aplican? ¿Existen procesos de empoderamiento? ¿Qué aspectos facilitan o dificultan estos procesos de empoderamiento?

En la población boliviana existe actualmente una “susceptibilidad” creciente respecto a la normatividad vigente en algunas políticas públicas relacionadas a la gestión de los recursos Naturales. Este hecho se expresa claramente cuando el Gobierno quiere normar la Conservación de la Biodiversidad a través de la creación de áreas protegidas y los sectores afectados reaccionan inmediatamente a través de sus organizaciones.

En este panorama, las instituciones gubernamentales tienen dificultades para legitimar las decisiones referidas a la creación de áreas protegidas, aspecto que se manifiesta de manera clara en los conflictos sociales que se suscitan entre las poblaciones locales y los representantes del Estado en territorios declarados Parques Nacionales, como ocurre en el Parque Nacional Tunari. Es normal que

en estos casos las primeras críticas sean dirigidas a la política pública y sus instrumentos normativos, se las analiza y se hace notar que presentan vacíos, contradicciones, que no se adecua a la realidad etc. (es la parte que presentamos en este avance), pero también es importante no perder de vista en la reflexión y análisis el hecho de que estas políticas son el resultado de procesos sociales de toma de decisión donde han tenido que participar ciertos actores sociales, con ciertos enfoques, con ciertos objetivos. Entonces uno se pregunta si el problema radica en las políticas públicas y sus instrumentos normativos (como resultado puntual) o el problema esta en el proceso que se ha seguido para su elaboración e implementación, en las complejas interacciones que se han suscitado para cumplir con estos pasos en los diferentes ámbitos: local regional, nacional e internacional.

Además se debe tener en cuenta que cada política pública implica una teoría de sociedad (un *marco normativo general que afecta la asignación de recursos*), una visión de un problema específico (*metas u objetivos a lograrse en torno a esta cuestión*), un público (*individuos o grupos sociales involucrados*) una demarcación geográfica (*límites físicos de implementación*) y un concepto de poder (*un trasfondo de autoridad y una jerarquía vinculada a la naturaleza del estado-nación*) (NCCR-IP8, 2002).

En el caso boliviano se puede apreciar claramente que las políticas nacionales sobre “Desarrollo Sostenible” que contempla también la Conservación de la Biodiversidad, están influenciadas por dos corrientes.

La primera que viene del ámbito Internacional y ha arrancado con la sucesión de cumbres mundiales sobre “Desarrollo Sostenible”, que posiblemente se inicio en Estocolmo en 1972, fue planteada de manera mas clara en 1982 en el primer congreso mundial de Parques Nacionales realizado en la isla de Bali-Indonesia, donde se empezó a promover el nexo entre el “manejo de áreas protegidas y el desarrollo” (UICN, 1990). Y a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo o “Cumbre de la Tierra” realizado el año 1992 en Río de Janeiro-Brasil. En la Agenda 21 se empezó a definir un amplio y detallado plan de acción que bosqueja la manera en que los Estados deben conducir los asuntos relacionados con el medio ambiente hacia el Siglo XXI (CEJIS 2002) proceso que se ha ido consolidando hasta la última reunión realizada en Johannesburgo en 2002, a las cuales se ha adherido el gobierno boliviano de una manera clara, al suscribir y ratificar los diferentes convenios que comprometen al país a trabajar en el fortalecimiento de su sistema legislativo. Por ejemplo la adhesión de Bolivia en la denominada agenda 21 ha comprometido el establecimiento de áreas protegidas y humedales, la elaboración e implementación de la estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad. También a partir de la participación en estos eventos tenemos el programa nacional de cambio climático, el programa de combate a la desertificación y otros. Esta corriente es impulsada por el gobierno boliviano y es la voz oficial del Estado.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido con mucha fuerza una segunda corriente que cuestiona la validez de estas políticas no solo en nuestro país, sino en el mundo entero y principalmente en América Latina, que propicia una posición anti-globalización, al considerar que estas políticas macro buscan subordinar aún mas a las economías menos desarrolladas a favor de las economías de los países desarrollados, a través de mecanismos legales de apropiación de las riquezas naturales y principalmente de la Biodiversidad. Estas siguen siendo sin embargo las “otras” voces que a la hora de definir políticas nacionales no son tomadas en cuenta y muchas veces ni siquiera son escuchadas, pero con las que se identifican gran parte de la población boliviana, como son principalmente las organizaciones campesinas.

3. Sistema normativo para la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas

En Bolivia, el primer Area Protegida fue creada en 1939 (Parque Nacional Sajama) pero la normativa nacional sobre las áreas protegidas se consolida recién después de la suscripción del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Este convenio, firmado por Bolivia, fue aprobado y ratificado por el Honorable Congreso de la Nación en 1994, su texto transcrito *in extenso* se ha convertido en Ley de 1580 de la República conforme las prescripciones constitucionales (fue publicada el 15 de junio de 1994) Este Convenio Internacional en su artículo 8 “*conservación in situ*” compromete a cada parte a conformar un sistema de áreas protegidas para conservar la diversidad biológica.

El gobierno boliviano, ha dado cumplimiento al mismo a través del D.S. No 23845 del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP), estableciendo un sistema normativo que se ha ido implementando paulatinamente a través de una serie de disposiciones legales: Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales. Para el tema específico de Biodiversidad, hasta 1992 el gobierno boliviano había establecido 4 disposiciones legales, actualmente nuestro país cuenta con 24 disposiciones legales, significa que en los últimos 10 años el gobierno boliviano ha producido 20 disposiciones legales para garantizar la conservación y uso sostenible de Biodiversidad en el país, las preguntas son ¿quiénes han participado en la elaboración de estas disposiciones legales? ¿Cuántas se aplican en terreno? ¿Cuántas de estas disposiciones legales han sido incorporadas o apropiadas por la población que en la práctica realiza la gestión de la Biodiversidad? ¿Que significa este incremento tan acelerado de disposiciones legales para la conservación de la Biodiversidad?

Estas preguntas como en el caso de las políticas publicas nos dirigen a la misma conclusión preliminar, Bolivia efectivamente ha cumplido con la Comunidad Internacional el compromiso de conformar un sistema normativo que

permita viabilizar las acciones dirigidas a la conservación de la Biodiversidad, sin embargo este avance no se visualiza en la practica interna del país, al parecer los mecanismos de elaboración e implementación, la poca participación local en estos procesos y las imprecisiones y contradicciones en este sistema normativo ha dificultado su aplicación en el ámbito local y ha logrado mas bien acrecentar los conflictos sociales.

Como indica Guerra (2002), una mirada rápida al sistema normativo de las áreas protegidas evidencia una óptica centralizada y sesgada, dirigida a la conservación de regiones geográficas de propiedad estatal, catalogadas como de importancia nacional sobre la base de estudios incompletos que toman en cuenta principalmente información biológica (muchas veces todavía parcial) y que generalmente carecen de cualquier información seria sobre aspectos políticos, sociales y culturales de las poblaciones que habitan estos territorios y sus áreas circundantes.

En el caso del Parque Nacional Tunari, los pocos estudios relativos a la conservación de la Biodiversidad, fueron realizados después de su creación (1962), por tanto si en su momento no existió un estudio técnico serio que justifique su creación, actualmente tampoco existe un estudio que justifique su ampliación (1992), Los pocos estudios técnicos sobre el potencial del área, se encuentran dispersos en los archivos de las diversas instituciones que han realizado trabajos puntuales en lo que hoy constituye el PNT, especialmente de la ladera sud del parque donde se ubican los municipios de Cercado y Sacaba.

En consecuencia, para el caso del Parque nacional Tunari el mal manejo de datos y la información poco precisa, es casi normal, un ejemplo específico es el referido al Numero de comunidades existentes, los datos oficiales hablan de 145 comunidades asentadas en el Parque Nacional Tunari, el estudio iniciado por el equipo de Investigación AGRUCO-NCCR-IP8-IP1 con el apoyo del equipo PAMs y la importante colaboración de las organizaciones de base durante los talleres PAMs, ha mostrado en menos de seis meses que en el Parque habitan aproximadamente 348 comunidades campesinas, y que los municipios afectados no son solo los 9 municipios que identifica la información oficial sino que se trata de 11 municipios. Estos primeros trabajos en terreno, con la colaboración de las organizaciones locales ha permitido al equipo de investigación de AGRUCO realizar una caracterización sociopolítica precisa y actualizada (en terreno), de los once municipios afectados por el PNT.

4. Algunas inconsistencias en el sistema normativo relacionadas a la biodiversidad y áreas protegidas (identificación preliminar)

La Ley del Medio Ambiente (N° 1333), publicada el 27 de abril de 1992, es un instrumento jurídico de contenido general; en su Art. 64 indica que la decla-

ración de las áreas protegidas es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, pero la norma no especifica si la compatibilidad a la que hace mención esta dirigida a regular las actividades económicas de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas que se hallan dentro el área protegida, por otra parte, no dice nada acerca del tratamiento que se dará a otro tipo de propiedad privados, por ejemplo los terrenos de empresarios privados o de agricultores que no forman parte de las comunidades campesinas y pueblos indígenas. Estas imprecisiones en la normativa legal, esta ocasionando una serie de conflictos en varias áreas protegidas del país.

El reglamento General de Areas Protegidas (D.S. No 24781) que tiene el objetivo de regular la gestión de las áreas protegidas y establecer su marco institucional, cuando se refiere al Comité de Gestión como instancia de participación ciudadana, lo reconoce como órgano de participación y representación de los pueblos indígenas, las comunidades originarias, las municipalidades, y otras entidades públicas y privadas involucradas en la gestión del área; *le otorga roles de fiscalización y planificación, pero no de decisión*. Para las organizaciones locales del PNT, la participación sin poder de decisión no tiene ningún sentido, por tanto no hay ningún interés en participar en este comité, porque solo estarían legitimando las decisiones de las autoridades designadas por el Estado boliviano para esta tarea. En este caso, las organizaciones campesinas han desconocido al Comité de Gestión, aseguran que los representantes campesinos no gozan de legitimidad en sus organizaciones locales, que se han vendido a los representantes del gobierno. La pregunta que surge es ¿Cómo se ha conformado este comité de gestión? ¿Si los representantes campesinos no son legítimos, entonces a quien representan? En el caso de los municipios, estos pueden participar en el comité de Gestión a través de sus representantes, pero parece ser que la participación sin poder de decisión no es de su interés y en el caso del PNT prefieren mantenerse al margen de estos procesos conflictivos.

En la Ley del Medio Ambiente, el marco normativo aparece difuso dando lugar a que se cometan diferentes atropellos, al amparo de ciertos artículos como el Art. 33 que señala “En casos excepcionales y solo cuando se declare de interés nacional, mediante Decreto Supremo se permitirá el aprovechamiento de Recursos Naturales renovables y no renovables...”. Este artículo abre las puertas a las empresas privadas que amparadas en estos vacíos legales logran concesiones mineras y petroleras en las áreas protegidas. Por ejemplo en el Parque y Area natural de Manejo Integrado Altamachi de la provincia Ayopaya existen 18 concesiones Mineras legales y existen otras 16 en proceso de trámite. En el Parque Nacional Tunari se tiene a la empresa Misicuni desarrollando trabajos para proveer de agua a la ciudad de Cochabamba.

Ni el Código Minero, ni la Ley de Hidrocarburos reconocen a las áreas protegidas como sitios donde no es posible realizar actividades de explotación,

él vacío legal hace que no se consideren las normas especiales que rigen en estos espacios, lo que genera inseguridad jurídica en el acceso y la conservación de los Recursos Naturales. Mientras el Reglamento General de Areas Protegidas en el caso de los Parques Nacionales restringe las actividades productivas cotidianas de las poblaciones locales que habitan y han habitado estos territorios desde cientos de años; otras disposiciones como la Ley de Hidrocarburos y el Código Minero facultan a Empresas (muchas de ellas extranjeras) a explotar estos recursos en las Areas Protegidas, provocando la contaminación de los ríos, la tumba y quema de la vegetación y la pérdida de la Biodiversidad por efecto de las actividades propias de extracción de estos recursos.

Por otro lado el Decreto Supremo 25158 que reglamenta el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) excluye a las áreas protegidas de carácter departamental del ámbito de su competencia. Pues se obliga a garantizar la gestión integral sólo de las áreas protegidas de interés nacional (Art. 3). Aquí se evidencia una confusión, porque la misión del SERNAP es coordinar el funcionamiento del SNAP (y dentro del SNAP, por disposiciones legales, están todas las áreas protegidas y no solo las de carácter nacional).

No existe ninguna norma que faculte a los municipios a crear y administrar áreas protegidas en el marco del SNAP. El Decreto Supremo No 25158 que reglamenta el SERNAP las menciona en el Art. 7 inc. J. Una de las atribuciones de esta institución sería promocionar áreas protegidas departamentales y municipales (como se ha explicado, no existe base legal para crear áreas protegidas municipales). Ante estas inconsistencias en el régimen legal es que los municipios no logran identificar su rol en el tema de las áreas protegidas, esto repercute directamente en su participación.

Además existe un vacío legal sobre criterios de distribución de beneficios por el aprovechamiento de Recursos Naturales en áreas protegidas; aún si lograra la participación de las poblaciones locales y los municipios, cual la seguridad de estos actores de acceder a los beneficios, si justamente estos vacíos legales son más bien un instrumento para que algunas empresas privadas aprovechen para concesionarse recursos y aprovechar sus beneficios.

Tampoco existen mecanismos de compensación por impactos adversos ocasionados por distintas actividades y usos, por ejemplo en el caso de las empresas que realizan actividades de extracción de minerales e hidrocarburos en estas áreas protegidas.

Es importante subrayar que todavía no existe régimen legal específico sobre las áreas protegidas municipales, zonas de amortiguación, ni corredores biológicos, sin embargo en Bolivia se está promocionando el tema de los corredores biológicos Ejemplo Corredor Villcabamba-Amboro, un corredor binacional entre Perú y Bolivia.

Estos son algunos ejemplos que muestran que el régimen legal sobre Areas Protegidas en Bolivia contiene algunas imprecisiones y vacíos, que sumados a la

inestabilidad institucional, la difusa definición de roles de los actores institucionales y los mecanismos poco participativos de elaboración y aplicación de políticas públicas, ahondan los conflictos en estos territorios declarados para la conservación y protección de la Biodiversidad.

Actualmente la identificación de estos vacíos legales en la normativa ambiental boliviana, esta siendo estudiada para proponer la inclusión de otras disposiciones como anexos a leyes o reglamentos ya vigentes y/o la conformación de nuevos instrumentos jurídicos, sin embargo el proceso sigue siendo asumido por un grupo reducido de personas (personas e instituciones privadas vinculadas al trabajo en áreas protegidas) que una vez mas están decidiendo por la diversidad de actores sociales que componen el pueblo boliviano.

No estamos en contra de este proceso de revisión de la normativa sobre conservación de la Biodiversidad para incidir en las políticas públicas (es mas, es uno de los objetivos propositivos de esta investigación). Pero no estamos de acuerdo en que para subsanar una falencia se utilice el mismo mecanismo, nada menos para hacer más complejo el sistema legislativo nacional, por tanto menos entendible y menos conocidas para el pueblo boliviano. A través de esta investigación apostamos a la revisión de estas normativas como instrumentos fundamentales de las políticas, pero como resultado de un proceso participativo de toma de decisión, con espacios colectivos de análisis y reflexión tanto en el ámbito local, regional y nacional.

Reconocemos que un análisis del impacto de la aplicación de políticas públicas de Conservación de la Biodiversidad en el ámbito local, carecería de sentido sino contextualizamos el mismo en un ámbito más global. De ahí que se reconoce que las cuestiones de Biodiversidad han sido institucionalizadas de forma creciente, incluyendo la creación de instrumentos legales internacionales, organizaciones especializadas, foros y programas financieros, "Régimen Internacional de Biodiversidad" (NCCR-IP8, 2002) donde justamente se están originando regímenes de regulación global, entonces resulta también imprescindible referirnos a las formas de cooperación internacional para el desarrollo.

5. Identificación de las categorías de actores sociales para la gestión y conservación de la biodiversidad en áreas protegidas

Las normas y reglas formales son influenciadas por modelos teóricos elaborados por expertos, formuladores de políticas, y sus intereses subyacentes, sus valores y éticas, pero también *por las organizaciones a cargo de implementarlas* (NCCR-IP8, 2002). En este sentido se ha realizado una identificación preliminar de los actores sociales involucrados en la producción, implementación y apropiación de políticas públicas referidas a la Conservación de la Biodiversidad en áreas protegidas.

Un ejercicio preliminar utilizando el modelo de Jacob, 1993 nos ha permitido junto a algunas Autoridades de los Municipios del Parque Nacional Tunari, identificar las principales categorías de actores involucrados en el tema de Gestión de la Biodiversidad la misma que se resume en el siguiente cuadro.

Cuadro 1
Categorías de actores del Parque Nacional Tunari

N I V E L D E I N T E R V E N C I O N	INTERNACIONAL					
	NACIONAL	Gobierno central	MDSP DNCB DGB Vice Ministerio de Recursos Naturales y Desarrollo Forestal Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente SERNAP SIRENARE	Viceministerio de Descentralización administrativa y Desarrollo Municipal	Confederación de campesinos CSUTCB	CONAMAQ
	REGIONAL	Prefectura	Superintendencia agraria Superintendencia Forestal Dirección de Recursos Naturales	AMDECO Comité Cívico Brigada parlamentaria	TAQUINA MISICUNI Cruz Verde SEMAPA CEDIB	Federación de Campesinos FSUTCC FEJUVE
	MICRO REGIONAL	Sub prefectura	Unidad Dirección de Medio Ambiente	Municipios Comités de Vigilancia		Sub centrales Centrales regionales
	LOCAL	Corregimiento	PROMIC PROFOR	Agencia Cantonal OTBs		Sindicatos Juntas vecinales
		Organización Administrativa desconcentrada	Servicios técnicos desconcentrados	Estructura descentralizada	Organizaciones Privadas (empresas cooperativas)	Organizaciones/modernas asociaciones, sindicatos
						Comunidades campesinas
						Comunidades

Adaptado de Jacob (1993: 4).

CATEGORIAS DE ACTORES

MDSP = Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

DNCB = Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad.

DGB = Dirección General de la Biodiversidad.

Este ejercicio preliminar ha permitido identificar la diversidad de actores que están involucrados en los procesos de producción, implementación y apropiación de normas referidas a la Conservación y gestión de la Biodiversidad en Bolivia; sin embargo este cuadro debe interpretarse también como la diversidad de enfoques y valores que en ciertos momentos interactúan (interrelaciones complejas y simultáneas). Algunos tienen una mayor participación en los procesos de toma de decisión

para la elaboración de las normas y políticas públicas (principalmente los que están en niveles de intervención nacional y regional), otros tienen un rol más activo y participan en la toma de decisiones referida a la implementación de normas y/o de las políticas públicas (los que participan en los niveles intermedios) y también están los que en la práctica están gestionando la Biodiversidad (específicamente los del nivel local) Esta es casi una tendencia general para el caso de la categoría de actores que corresponden a las instancias gubernamentales, sin embargo tiene una variante importante en el caso de las ONGs y las organizaciones campesinas, donde la toma de decisiones se realiza de manera más coordinada con las bases.

Es importante remarcar que muchos de estos actores institucionales, principalmente los que responden a la estructura gubernamental, son constantemente removidos de sus cargos (cargos políticos), por tanto estos funcionarios muchas veces no están interiorizados o no tienen el tiempo suficiente para involucrarse seriamente en estos procesos de toma de decisión ya sea para la elaboración o implementación de las políticas públicas, o en aspectos operativos en la implementación de los planes de manejo, esto hace que no haya continuidad en las acciones emprendidas.

Si a este hecho sumamos los vacíos y contradicciones que se presentan en el sistema legislativo, veremos claramente que la ambigüedad entre políticas nacionales, regionales y locales, se genera en estos procesos donde la inestabilidad institucional y la poca claridad de las normativas, incide sobre la comunicación y coordinación entre las diferentes categorías de actores, en los que subyace el desconocimiento de sus atribuciones y competencias, lo que desemboca generalmente en la sobre posición de roles, duplicidad de esfuerzos.

Este estudio se concentrará en el ámbito local sin embargo en los casos que se requiera, se ampliará la visión hacia los niveles regional, nacional e internacional porque las formas de gobernanza y la gestión de la biodiversidad en el ámbito local están fuertemente influenciados por hechos sociales, políticos y económicos que se suscitan en estos ámbitos y principalmente por las decisiones que toman en estos niveles.

6. Áreas protegidas y participación popular en Bolivia

Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular en 1993 y la Ley de Descentralización en 1995, los municipios se han convertido en el eje administrativo y de desarrollo para toda estrategia y/o política sectorial o transversal que se quiera implementar en Bolivia. Por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación ha identificado a los Municipios como uno de los espacios más importantes para la implementación de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad.

Sin embargo, la Legislación referida a las áreas protegidas, no prevé un papel importante para los gobiernos municipales en la gestión de las áreas protegidas, en vista de que el municipio no es el espacio físico adecuado para planificar, organizar o administrar los recursos naturales. Por lo tanto su inserción no surge de la lógica de la gestión de las áreas protegidas, sino de la organización político administrativa del Estado y de la competencia municipal en la planificación e implementación de inversiones públicas (MDSP, 2002).

Los vacíos legales en el tema de las áreas protegidas, hacen que los municipios poco o nada hayan avanzado en sus políticas de Conservación de la Biodiversidad, aunque la Ley de Participación Popular reconoce el derecho de los municipios a planificar, organizar y administrar los recursos naturales dentro su jurisdicción; la Ley Forestal boliviana descentraliza la administración de las áreas forestales asignándole al municipio nuevas funciones no solo en el control y extracción y comercialización de la madera, sino también mediante la constitución de reservas forestales municipales, que pueden ser adjudicadas en concesión a organizaciones de la zona constituida para su aprovechamiento llamadas Asociaciones Sociales de Lugar (van Dam, 1999).

La participación de los municipios en la gestión de las áreas protegidas debe analizarse de manera diferenciada en los siguientes casos:

- Cuando se habla de categorías de áreas protegidas municipales
- Cuando se habla de la participación de los municipios en otras categorías, en este caso en los Parques nacionales.

En el primer caso el sistema legislativo boliviano muestra que no existe ninguna norma que faculte a los municipios a crear y administrar áreas protegidas en el marco del SNAP. El Decreto Supremo N° 25158 que reglamenta el SERNAP las menciona en el Art. 7 inc. j) Una de las atribuciones de esta institución sería promocionar áreas protegidas departamentales y municipales (como se ha explicado, no existe base legal para crear áreas protegidas municipales) y actualmente en Bolivia existen áreas protegidas municipales.

En el segundo caso, la Ley de Municipalidades N° 2028 publicada en octubre de 1999, muestra que concretamente el municipio no tienen facultades legales para crear ni administrar directamente áreas protegidas. Claro está, puede participar en su gestión y manejo con la autoridad Nacional de Areas Protegidas. Además es importante subrayar que todavía no existe régimen legal específico sobre las áreas protegidas municipales, zonas de amortiguación ni corredores ecológicos.

Esto nos muestra una vez más que la normativa en Bolivia con relación a las áreas protegidas es todavía poco clara, no muestra una definición clara de las interrelaciones de las políticas públicas nacionales y municipales, lo que no permite

definir tampoco las atribuciones de los municipios en lo que se refiere a la gestión y conservación de la Biodiversidad en áreas protegidas.

Sin embargo, en la práctica las experiencias en varios Parques Nacionales muestran claramente que hay una necesidad de que los municipios se involucren de manera mas activa en la gestión de estas áreas protegidas.

7. Algunos instrumentos y mecanismos de la gestión municipal que pueden favorecer la participación de las organizaciones locales en la gestión de las áreas protegidas

Aunque todavía se desconoce el nivel real de capacidad de gestión de los municipios en el tema de Biodiversidad, en los aproximadamente diez años que se encuentra en vigencia la nueva estructura municipal, se constata que ha existido un proceso de aprendizaje social en los mecanismos de gestión a diferentes niveles: financiero, administrativo, de planificación, de participación, de control social y Desarrollo Local. Por ejemplo se han creado Direcciones y Unidades de Medio Ambiente, se han impulsado actividades productivas que podrían ser instrumentos posibles para generar propuestas concertadas para la gestión de la Biodiversidad y gestión de áreas protegidas.

Además el municipio cuenta con:

- Marco político institucional establecido, con participación de diversas instituciones / organizaciones locales y externas.
- Instrumentos y mecanismos de planificación participativa: Plan de Desarrollo Municipal (PDM), POAs.
- Cuenta con Instancias y Mecanismos de Control social: Comités de Vigilancia y Concejo Provincial de Participación Popular (CPP)
- Definición de competencias en materia de Desarrollo Humano sostenible (Art. 8,I de la Ley de Municipalidades Ley 2028/10/99).

En este marco es necesario analizar las experiencias acumuladas y profundizar el estudio sobre formas de gobernanza local para identificar sus potenciales en la perspectiva de otorgar un rol mas activo a los municipios en la Gestión de las Areas Protegidas.

Partimos también de la hipótesis de que en la medida que el gobierno municipal muestre una apertura hacia formas de gobernanza comunal, contara con instrumentos y mecanismos participativos de control social que están siendo aplicados en las comunidades para gestión de sus recursos naturales en base a Normas que corresponden a sus "Usos y Costumbres".

7.1. Formas de gobernanza de las organizaciones tradicionales

En Bolivia las organizaciones sociales tradicionales² han desarrollado formas propias de gobernanza, en el que el ejercicio de la autoridad esta basada en un sistema de cargos de carácter rotativo que permite a todos los miembros de la comunidad cumplir con esta función, estos sistemas de cargos mantienen asimismo una complementariedad con los diferentes niveles y formas de organización social en el ámbito local y externo. En estas formas de organización social comunitaria subyacen procesos de toma de decisión de carácter colectivo, que permiten asimismo desarrollar mecanismos propios de control social desde las bases, a partir de las normas básicas que regulan su funcionamiento, el espacio más importante para el desarrollo de estos procesos es la “asamblea comunal”, donde se discute, analiza, y se lleva a consenso las decisiones que tienen que ver con el bienestar de la comunidad y de las familias que lo integran.

Las funciones de las organizaciones tradicionales están estrechamente vinculadas a las actividades comunitarias que abarcan todos los ámbitos de la vida en las comunidades regulando las relaciones sociales, económicas, políticas entre la comunidad y las familias. Asimismo administran justicia y solucionan conflictos a nivel familiar y comunal. Es importante destacar que actualmente la organización sindical constituye como un nexo entre la comunidad, el Estado y las instituciones externas a la comunidad.

Por tanto la organización social es la principal institución reguladora en el ámbito comunal que interviene y toma decisiones en los diferentes aspectos sociales, políticos, productivos, éticos y culturales de la vida comunal. Hace función de un “gobierno local”, en el que la participación y aporte de sus miembros es fundamental. Las decisiones del sindicato las toman conjuntamente los miembros en reuniones mensuales o extraordinarias. Los puntos que con mayor frecuencia se tratan en estas reuniones pueden resumirse y agruparse en: control de asistencia, lectura del acta de la reunión anterior, informe de las autoridades (generalmente referido a reuniones con el sector campesino, tramites en los municipios y otros), actividades productivas (aquí se trata por ejemplo el cumplimiento a las normas de uso y acceso a los recursos naturales), aportes o cuotas, educación, coordinación con instituciones, administración de justicia

2 En este trabajo nos referiremos como organizaciones tradicionales a las formas de organización que perviven en las comunidades campesinas y pueblos originarios de la región andina del país donde paradójicamente existe una dualidad y complementariedad entre dos formas de organización: la tradicional, ligada a la concepción del Ayllu andino y a las figuras de los alcaldes de indios y jilakatas; la del sindicalismo agrario de origen europeo, que nace a partir de la Reforma Agraria de 1952 e impulsa el surgimiento de dirigentes sindicales, cumpliendo ambos, un rol fundamental que los une en un objetivo común, que es la cohesión social de la comunidad y del Ayllu (Rist, 2001).

al interior de la comunidad (principalmente en aquellos casos que alteran las relaciones humanas) (Mariscal, 1999: 59)

Muchas de las decisiones planteadas por las bases en la asamblea comunal, posteriormente son socializadas por sus representantes en instancias superiores de la organización sindical como es el caso de las subcentrales, centrales regionales, centrales provinciales, la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) y muchas hasta la Confederación Nacional (CSUTCB), esto permite que las decisiones tomadas desde las bases vayan adquiriendo mayor fuerza y peso al ser planteadas desde sus formas de representación regional y nacional.

La característica principal de las “asambleas comunales” es que su funcionamiento esta regulada por normas internas que han sido establecidas por los mismos miembros de la comunidad, gozan de legitimidad, son flexibles porque continuamente son revisadas y readecuadas a la dinámica propia de la comunidad y a situaciones de crisis o cambio que se generan en ámbitos externos a ella. Es fundamental resaltar que en estas normas comunales subyacen principios de reciprocidad y redistribución como el ayni, la minka, la umaraqa que facilitan su cumplimiento, muchas de estos principios se han institucionalizado dentro las comunidades andinas.

La toma de decisiones es fundamental para las organizaciones tradicionales, pero es aún más importante como se desarrolla este proceso ¿quienes toman las decisiones y de que manera?. Por eso la importancia fundamental de la “asamblea comunal”, como espacio de toma de decisiones y concertación, en este proceso las autoridades se convierten en portavoces de las decisiones de la comunidad. Si una autoridad toma decisiones por su comunidad inmediatamente es restituido de su cargo, posiblemente esto resulta contradictorio con los mecanismos de toma de decisión que se aplican en muchos espacios públicos como el municipio, donde por ejemplo un concejal toma decisiones por aquellos que lo han elegido para representarlos en esta instancia de toma decisión sin siquiera consultarles, tal vez por eso resulta difícil para una autoridad pública entender a un representante de las organizaciones campesinas cuando le manifiesta que para cualquier decisión primero tiene que consultar con sus bases.

Para muchos actores que trabajan en los municipios o en ONGs, estos mecanismos de toma de decisiones de las organizaciones tradicionales “retarda” otros procesos como la implementación de proyectos de desarrollo, porque la coordinación se hace mas compleja y lleva mayor tiempo, pero en la practica resulta mucho mas conveniente y efectiva. En AGRUCO la nuestra experiencia de trabajo con comunidades campesinas nos permite afirmar que una coordinación que pasa por la asamblea comunal, primero permite evitar cualquier susceptibilidad o conflicto al interior de la organización, pero principalmente permite garantizar la participación de la comunidad en la implementación de cualquier propuesta, porque al momento de consensuar la decisión implícitamente las familias campesinas a través de su organización están comprometiéndose a participar en la

implementación de la propuestas (que puede ser una acción o una investigación), en otras palabras se garantiza la participación efectiva de la comunidad.

Se tienen ejemplos concretos de cómo se aplica estas formas de Gobernancia para la gestión de los recursos naturales. Tomamos el caso de la comunidad de Chorojo, una comunidad ubicada entre los 2700 y 4600 msnm que presenta en su territorio un relicto de Kewiñas (*Polilepis beseri*), donde el Mariscal (1999), en el marco de un convenio institucional entre AGRUCO y PROBONA, ha realizado un estudio sobre “Tipos de Relaciones Bosque-Comunidad y Normas tradicionales de Uso y acceso a la Vegetación Boscosa” que muestra claramente como los procesos de toma de decisión colectivos apoyados en normas y reglas establecidos por la misma organización pueden coadyuvar en la gestión y conservación de los recursos forestales y de la biodiversidad.

La comunidad actualmente tiene como base organizativa el sindicato agrario con 68 afiliados, cada 10 del mes los afiliados se reúnen en asamblea general para discutir y tomar decisiones respecto a los temas de mayor preocupación e interés de la comunidad. Y cada 8 de mes el dirigente y otros miembros se reúnen en la subcentral “8 de Agosto” para informar, reflexionar y analizar temas de interés de las cuatro comunidades que la componen.

El sindicato campesino en la Comunidad de Chorojo cuenta con un directorio de aproximadamente 10 personas; entre los cargos mas importantes podemos citar al secretario ejecutivo, secretario de relaciones, secretario de actas, secretario de conflictos, secretario de hacienda, prensa y propaganda, deportes, vialidad, milicias, y vocales. Estas carteras diligenciales cumplen diferentes roles y funciones al servicio del sindicato y de la comunidad³.

3 Secretario general: Es la autoridad máxima de la organización sindical, dirige la asamblea comunal y representa a la comunidad en instancias superiores como la subcentral 8 de agosto, asiste a Congresos, Ampliados y a la Federación departamental, es también un nexo entre la comunidad y el medio externo, asimismo, administra justicia junto al Alcalde. Gestiona proyectos

Secretario de relaciones: Esta autoridad no cumple una función específica, solamente reemplaza al secretario general en caso de que este no se encuentre presente. Acompaña al Secretario .General en congresos, en la gestión de proyectos y otros.

Secretario de actas: Esta autoridad está encargada de redactar el acta de la reunión, anotar las resoluciones de las reuniones. y verificar la asistencia para dar inicio a la reunión.

Secretario de hacienda: El secretario de hacienda es el tesorero de la comunidad, su ocupación es recolectar cuotas en dinero como también en especies, para realizar actividades comunales. Administra el dinero de la comunidad

Secretario de deportes: Organiza eventos deportivos.

Milicias armadas: Controla el orden en las reuniones, asambleas, es el policía sindical.

Vocales: Son también autoridades comunales, sus funciones específicas son tocar el “pututu” para convocar a las reuniones, asambleas y otros acontecimientos comunales.

Encargados de llevar mensajes, convocar a personas específicas

Las familias de la comunidad de Chorojo, organizadas en este sindicato agrario se rigen por un conjunto de normas y reglas explicitadas algunas en sus actas de reunión y otras en la memoria de cada uno de sus miembros, incluido las mujeres y niños que no siempre participan de las reuniones pero tienen conocimiento de las mismas a través de sus mecanismos familiares y comunales de comunicación.

Dentro estas normas, la comunidad ha desarrollado algunas que son específicas para la gestión y conservación de su monte de Kewiñas, la misma fue revisada y readecuada en una asamblea comunal en el año 1992.

En Chorojo los relictos de Kewiña son reconocidos por la organización local como propiedad comunal y/o familiar según el caso, y se tiene instituido una serie de normas locales para su uso y manejo. En muchos casos el corte de los árboles esta regulado bajo normas sociocomunales de carácter estricto.

Por ejemplo, la extracción de leña para consumo diario es permitida utilizando únicamente los árboles caídos y secos de la Kewiña. En el caso de los arbustos, la extracción de leña es algo más libre: sin embargo, se indica que deben aprovechar con preferencia los arbustos secos que se encuentran generalmente al contorno de las parcelas de cultivo. Contrariamente, la extracción de leña destinada a cualquier acontecimiento festivo (matrimonio, cumpleaños, fiesta comunal, etc.). Está reglamentada por normas obligatorias de carácter escrito. (Mariscal, 1999: 86)

Dentro las normas comunales se tiene terminantemente prohibido la quema dentro el bosque, la comercialización de leña y madera, la tala de los árboles, sin autorización de la organización local. Cada familia de la comunidad para celebrar algún tipo de festividad (matrimonio, cumpleaños u otro), y que esté destinado a la elaboración de chicha, tiene derecho a cortar hasta 10 árboles, con la previa solicitud al sindicato en reunión comunal. Esta prohibido el pastoreo, la recolección de leña y el corte de madera por las comunidades vecinas sin previa consulta al sindicato. (Camacho, 1994 citado por Mariscal, 1999: 86).

Lo mismo ocurre con los recursos hídricos, su uso y distribución esta regulada por una serie de normas contextualizadas al entorno biofísico y sociocultural de cuyo cumplimiento se responsabiliza la organización local a través de una autoridad tradicional que es el Juez de Aguas. Muchas veces la limitación temporal al acceso a agua de riego es un instrumento que la organización local emplea para hacer respetar las normas internas (mecanismo de control social). Junto a las autoridades sindicales coexisten otras de carácter tradicional, como el Alcalde y el Juez de Agua. Se trata de autoridades que están plenamente relacionadas con la actividad productiva, lo que confirma que la organización de la producción y la gestión de los recursos naturales, es una prioridad en las comunidades campesinas.

En Chorojo la organización sindical y la organización tradicional se confunden en un mismo sistema organizativo, las reuniones comunales y las asambleas

se caracterizan por la presencia del Alcalde y el juez de aguas, que son factores decisivos en la toma de decisiones; la administración de justicia se la efectúa con la presencia tanto de la autoridad sindical como también del Alcalde como autoridad tradicional. La elección de las autoridades sindicales se realiza en asamblea general, el tiempo de duración de la gestión es de un año y tiene carácter rotativo. La asamblea general es la máxima instancia de decisión de la comunidad.

Si bien hay una autoridad responsable de vigilar y garantizar el cumplimiento de estas normas (autoridad de turno), es la comunidad en su integridad la que vela por el cumplimiento de las normas (control social), además en caso de sanciones esta se determina también en asamblea general.

Una característica particular de las normas comunales en relación a las normas formales es que están son flexibles, dinámicas, se adecuan a la realidad concreta en determinado momento y espacio, esto permite la continua revisión y adecuación a solicitud de los miembros de la comunidad en la asamblea comunal, si estos temas trascienden los límites de la comunidad, se somete a una decisión a nivel de subcentral, central o ampliado o congreso provincial.

En Tapacaré, los jilakatas son las autoridades originarias que han mantenido su función e importancia en los ayllus de la provincia. La principal función del jilakata es el de observar el desarrollo de los cultivos de las familias campesinas y cuidarlas de los daños que puedan ocasionar los animales en pastoreo, de ellos dependerá el cumplimiento de las normas comunales que permiten tener un territorio con cultivos familiares sectorizados en una forma de organización comunitaria, a la que se ha denominado como ayta (Delgado, 2002).

Las formas de organización y las normas socioculturales de uso y acceso al territorio y a los recursos naturales, en cada uno de estos casos responden a patrones culturales propios y a hechos coyunturales e históricos que han vivido estas comunidades. En este marco el cumplimiento de las normas tradicionales (usos y costumbres) no contempla solo la conservación material del recurso, sino también la armonía en la relación social colectiva y el respeto por la naturaleza.

En el marco de la creación de áreas protegidas, debería ser evidente la importancia de la revalorización y fortalecimiento de las formas de organización local y las normas tradicionales y las costumbres, para un uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo estas no se toman en cuenta ante esta situación “las poblaciones indígenas están generando nuevos derechos culturales para recuperar el control sobre su territorio como un espacio ecológico, productivo y cultural para reapropiarse un patrimonio de recursos naturales, y significados culturales. (Leff, 2002:87).

Las investigaciones realizadas por AGRUCO, demuestran que la estabilidad y la fortaleza de la organización comunal repercute de manera directa en la relación de la comunidad con su entorno, es decir en la gestión y conservación de sus recursos naturales (por ejemplo los bosques).

De esta manera resulta hasta absurdo, que el Estado boliviano y sus organismos implementan políticas públicas, normas, reglamentos y estatutos orientados a realizar el control social al uso de los recursos económicos, en caso de los municipios y de los recursos naturales en el caso de las áreas protegidas, ignorando formas locales de control social que están adaptados a las diferentes contextos biofísicos económicos y socioculturales, que deberían ser potenciados para evitar los conflictos que se están presentando actualmente como es el caso del Parque Nacional Tunarí.

Un aspecto importante de resaltar, son los principios éticos y morales que guían las acciones de las autoridades comunales, como son la reciprocidad, la redistribución y el respeto a sus deidades espirituales, parte de los principios de vida de las comunidades campesinas que ha permitido el ejercicio de control de manera mas eficiente porque los procesos son manejadas con transparencia y las decisiones colectivas no pueden ser manipulados por intereses de pequeños grupos. Lo que se contrapone a vertical como lo es en el nivel municipal donde existe una estructura vertical que toma decisiones, en las comunidades esta estructura es horizontal porque las bases mediante sus asambleas son los que definen el destino de la comunidad.

Las características fundamentales de la organización social en las comunidades campesinas, nos ayuda a visualizar su propio punto de vista respecto de lo que es el control social, sobre todo en lo que se refiere al manejo de conflictos y a la toma colectiva de decisiones. Sobre este horizonte se podrá captar mejor las diferencias y los elementos comunes entre la visión interna y la externa acerca de la comprensión y las estrategias utilizadas en el control social, a la vez que se podrá volver a valorar su importancia para la profundización de las políticas de descentralización (Rist, et al 2002).

8. Conclusiones preliminares

Las diferentes posiciones de los diversos actores sociales del Parque Nacional Tunarí, dejan claro que en el marco de las políticas publicas referidas a áreas protegidas entran en conflicto diferentes concepciones y objetivos respecto a la conservación de los recursos naturales que no encuentran un espacio para una discusión abierta, porque cada grupo social vela por intereses propios en medio políticas inadecuadas y confusas. Se elabora un decreto ley (1262) de ampliación del Territorio que no corresponde a la realidad biofísica y sociocultural de este parque y es rechazado por los actores locales quienes están elaborando un anteproyecto de Ley para la Gestión del PNT.

Que la problemática del parque no se genera solo en choque de diferentes opiniones o criterios que no encuentran un lenguaje común para negociar, el

problema es de fondo porque de lo que se trata es de los desencuentros de diferentes formas de percibir el mundo y gestionar el territorio que tiene que ver con las diversas formas de pensar y organizar las acciones en torno a la relación sociedad-naturaleza.

Este escenario creado en torno a políticas de conservación de la biodiversidad deja en entredicho la sola conservación y demanda el establecimiento de políticas de conservación dentro de un enfoque de Desarrollo Sostenible Participativo y que considere los procesos de aprendizaje social entre los actores locales y actores externos del PNT.

Que la problemática del parque no se genera solo en choque de diferentes opiniones o criterios que no encuentran un lenguaje común para negociar, el problema es de fondo porque de lo que se trata es de los desencuentros de diferentes formas de percibir el mundo y gestionar el territorio que tiene que ver con las diversas formas de pensar y organizar las acciones en torno a la relación sociedad-naturaleza.

Bibliografía

- AGRUCO
2002-2003 Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del Parque Nacional Tunari Informe científico Cochabamba-Bolivia 85 Pág.
- ANGLES, A.
1994 Diversidad biológica de papa y su conservación in-situ en la comunidad de Japo (Provincia Tapacaré). Cochabamba: AGRUCO Tesis Ing. Agr. Cochabamba, Bolivia, UMSS Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias "Martín Cárdenas".
- ARRIETA, M.; MAYORGA, F.; GALINDO, M.
1995 "Participación Popular y Desarrollo Rural" Colección debate de políticas agropecuarias. La Paz, Bolivia.
- BOLIVIA
1960 Constitución Política del Estado 10. ed. Gisbert editores, 1960, La Paz-Bolivia. 81p.
- CENTRO DE ESTUDIOS de la realidad económica y social (CERES)
2000 Los conflictos socioambientales en el parque nacional Carrasco Cochabamba Bolivia 104 pág.
- DELGADO, F.
1993 La Agroecología en las estrategias del Desarrollo Rural. Una experiencia institucional. (Trabajos del Colegio Andino 9). Centro Bartolomé de Las Casas, Cusco-Perú, 2da edición. 166p.

DELGADO, Freddy

2002 Estrategias de autodesarrollo y gestión sostenible del territorio en ecosistemas de montaña, Complementariedad ecosimbiótica en el ayllu Majasaya Mujlli, departamento de Cochabamba, Bolivia. Agroecología Universidad Cochabamba. Editorial PLURAL. Cochabamba, Bolivia. 287p.

2001 Simbiosis interzonal en las estrategias de autodesarrollo sostenible en ecosistemas de montaña; el caso del Ayllu Mujlli, departamento de Cochabamba, Bolivia. Los Fundamentos teóricos de la investigación participativa desde la praxis en los Andes bolivianos. Universidad de Córdoba España. Escuela Técnica Superior de ingenieros Agrónomos y de Montes, Córdoba ETSIAM. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos ISEC. Tesis doctorado. Córdoba, España.

1997 Proyecto de Investigación doctoral. Universidad de Córdoba, España. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Córdoba. ETSIAM. Instituto de Sociología y estudios Campesinos ISEC. Córdoba, España.

INTURIAS CANEDO Mirna Liz.

1998 Gestión ambiental y manejo de conflictos en el límite sur del parque Nacional Tunari (jurisdicción provincia Cercado) Tesis de licenciatura Universidad Mayor de San Simón Cochabamba Bolivia. 199 pág.

MARISCAL, J. Carlos

1999 "Tipos de relaciones Bosque-Comunidad y normas tradicionales de Uso y Acceso a la Vegetación Boscosa; el caso de las comunidades de Chorojo y Chullpa K'asa de las provincias Quillacollo y Tapacari en el Departamento de Cochabamba". AGRUCO-PROBONA. Cochabamba, Bolivia. 110p.

NCCR North-South

2002 Consorcio de cooperación Científica para Atenuar los Síndromes del Cambio Global. Cuaderno sobre el Polo Nacional de Competencias en Investigación Norte-Sur.

PARQUE NACIONAL TUNARÍ Área protegida

2001 Año 1 Revista N° 1.

PRESENTACIÓN del gobierno de Bolivia al grupo consultivo

1996 Estrategia de desarrollo rural sostenible COTESU (Cooperación técnica Suiza) 64 pág.

PROMETA

2001 Áreas protegidas departamentales, municipales y privadas en Bolivia 209 pág.

REVISTA internacional de ciencias sociales

1998 La gobernabilidad N° 155.

URIOSTE, Miguel

2002 Desarrollo rural con participación popular fundación tierra. La Paz Bolivia 300 pág.

RIST, S.; et. al.

2000 Cosmovisión andina y desarrollo autosostenible. En: Haverkort, B.; et. al. Comida para el pensamiento: visiones antiguas y experiencias nuevas de la gente rural. Cochabamba: COMPAS. 267p.

SENADO NACIONAL

2001 Proyecto de Ley N°. 142/00-01 Proyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial.

- Información Técnica del Sistema Nacional de Areas Protegidas, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y Servicio Nacional de Areas Protegidas.
- Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad en Bolivia
- Ley Forestal. Ley No 17000, 12 de julio de 1996, en 3 leyes para el Cambio. Ed. CEDOIN. La Paz, 1997.
- Reglamento General de áreas Protegidas, Publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, el 1 de agosto de 1997. La Paz, Bolivia.
- Convenio N° 169 O.I.T. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (1989).
- Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Areas Protegidas (Borrador del 25 de julio del 2003 posterior a la consulta pública La Paz).

Avance de investigación: la transformación de valores éticos en la interfaz del estado y de la sociedad civil y su importancia en el manejo de la biodiversidad, tierra y territorio. El caso del Parque Nacional Tunari en los Andes de Bolivia

*Elvira Serrano*¹

1. Introducción

Hasta 1990, las áreas protegidas en la América Latina y el Caribe sumaban 1'142.800 Km². (UICN, 1990 a) lo que representa el 5.7% de los 20'184.700 Km² del continente Americano. (Burkart 2001:2); en cuanto al respaldo de conocimiento técnico-científico que tiene la toma de decisiones en colonización de tierras en América Latina, los estudios realizados en frentes de expansión agropecuaria, como los de Hecht (1983) Fearnside (1982) y Norello (1985) muestran que las decisiones respecto a la preservación de ciertas áreas se basan en un conocimiento incompleto de sus existencias y funcionamiento. A ello se suma el agravante de que a menudo se usan herramientas metodológicas inadecuadas en la evaluación de los recursos naturales, y se desconoce la dinámica sociocultural de las poblaciones que podrían estar implicadas, lo cual evita una adecuada gestión del Territorio² en estas áreas.

La realidad muestra que el establecimiento de áreas protegidas continúa provocando una serie de conflictos socioeconómicos, culturales y políticos en los cuales se encuentran inmersos una diversidad de actores sociales y una serie de normas y políticas publicas a través de las cuales se desplaza a menudo compul-

-
- 1 Ingeniero Agrónomo. Magíster en Agroecología Cultura y Desarrollo Sostenible (AGRUCO-UMSS). Investigadora de AGRUCO. Doctorante del NCCR-IP1 (IUED-AGRUCO-UMSS)
 - 2 La Gestión del territorio se refiere a la ocupación del territorio, el uso de los recursos naturales en sus diferentes niveles de aplicación en función a las características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y político-institucionales existentes. (Proyecto de Ley de Ordenamiento territorial 2001)

sivamente de estas áreas a poblaciones o en otros casos se les tolera restringiendo sus derechos en el acceso y la gestión del territorio y la biodiversidad, convirtiendo paradójicamente estos espacios de “Conservación de la biodiversidad” en espacios de “Interfaz social”. La esencia de la perspectiva de interfaz es, como Long (1999: 21) lo señala, “explorar cómo las discrepancias de interés social, interpretación cultural, conocimiento y poder son intermediados, perpetuados o transformados en puntos críticos de confrontación y cooperación.”

En las últimas dos décadas el Sistema de áreas protegidas en Latinoamérica ha tenido un fuerte crecimiento; según la FAO (1998b) la superficie de áreas protegidas se ha expandido a un ritmo del 6% anual en la década de los setenta (Burkart 2001), en la última década se han creado en Bolivia 47 áreas protegidas de las que solo 21 están reguladas oficialmente por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP la concepción de área protegida prioriza las características naturales que contiene en su territorio, ello permite asumir que los asentamientos existentes en el territorio de las áreas protegidas sean minoritarios y presenten características de pueblos indígenas ubicados en tierras comunales o relativamente pequeñas comunidades campesinas; esta situación se presenta en la mayoría de las áreas protegidas de la amazonía Boliviana a diferencia de las áreas que se encuentran en zonas de valles interandinos donde la densidad de comunidades campesinas es mayor en las áreas protegidas (ej. Parques Nacionales de Carrasco, Tunari, Toro Toro, Reserva de Tariquia) (Pereira 2001)

En el presente estudio una metodología es básicamente cualitativa el Parque Nacional Tunari (ubicado en el Departamento de Cochabamba-Bolivia) se constituye en un espacio de Interfaz donde se establece un diálogo entre diferentes visiones del mundo que corresponde a actores sociales con diferentes valores éticos a cerca de la relación sociedad-naturaleza, generando procesos de aprendizaje social que inciden en la transformación de los valores éticos de los actores involucrados. Desde la perspectiva de interfaz nos interesa identificar aspectos que contribuyan a la creación de una base común que posibilite una gestión más sostenible de la tierra, del territorio y de la biodiversidad.

2. El Parque Nacional Tunari como espacio de interfaz

Un importante enfoque para entender la política social en Bolivia en la que se consideran a nuevos actores sociales, es hacerlo desde la perspectiva de *interfaz social* (Roberts 2001). Si bien esta perspectiva ha sido principalmente aplicada al desarrollo rural, su aplicación en temas de política social y conflictos urbano-rurales que se dan en el Parque Nacional Tunari es igualmente valiosa puesto que sensibiliza al analista alertándolo sobre el significado de los tipos de relaciones que la implementación de la política crea entre los actores sociales

locales (comunidades, empresarios, instituciones) y los actores sociales externos (gobierno, ONGs, iglesia).

El análisis requiere explorar el contenido de las relaciones, por una parte, en términos de intereses sociales confrontados y por otra, en términos de las interpretaciones e información presente en interacciones estratégicas durante el proceso de implementación.

La implementación de las nuevas políticas de conservación de la biodiversidad y del medio ambiente particularmente la creación de Areas Protegidas representan una interfaz social en la que se enfrentan concepciones, intereses y reivindicaciones enraizadas en diferentes formas de vida cotidiana (Long 1992). Los encuentros y desencuentros de las diferentes formas de vida corresponden a diferentes proyectos de desarrollo que se plantean los grupos de actores sociales involucrados como base para contribuir a procesos de negociación y aprendizaje social que permitan buscar bases mas amplias para la integración y coexistencia pacífica de diferentes grupos culturales en espacios naturales compartidos (Rist 2003).

El análisis de la situación del PNT y los conflictos que genera su creación e implementación permite observar que si bien existen normas genéricas, estas no son generadoras de procesos de gestión, por lo que es necesario crear las normas concretas en base a procesos colectivos que tomen en cuenta las particularidades y la diversidad social, cultural y ecológica de cada área. Esto permitirá encontrar mecanismos para articular sociedad civil³ y estado en la implementación de políticas de gestión del área protegida; en otras palabras las normas deben resolver los conflictos no profundizarlos (Pereira 2002:2).

2.1. Creación del Parque Nacional Tunari

El Parque Nacional Tunari (PNT) fue creado en 1962 por decreto supremo N°. 06045 con una superficie de 240 Km² en las alturas de la ciudad de Cochabamba por iniciativa de un grupo de pobladores ciudadanos de la provincia cercado preocupados en la conservación de las fuentes de recarga de los acuíferos que proveen de agua a la ciudad de Cochabamba, los recursos naturales y las amenazas de inundación y deslizamiento que podrían afectar a la ciudad; fue ampliado en 1991 por la Ley N° 1262 a un área de 3090,91 Km², abarcando 5 provincias, 11 municipios y mas

3 Gramsci fue el mentor intelectual del concepto ambiguo de sociedad civil. Se refiere a la sociedad civil como aquella que esta constituida por una seire de "Aparatos" tales como: la iglesia, sindicatos, partidos, cooperativas, entidades cívicas, etc., que por un lado prolongan la dinámica del Estado y por otro están profundamente arraigados entre personas. Es precisamente ese doble carácter de la Sociedad Civil que forma un espacio privilegiado de trasformaciones políticas, posibilitando el cambio (Castells, 1999: 25).

de 300 comunidades en el Departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia (AGRUCO, 2003).

Se ubica geográficamente entre los 17° 00'-17° 30' de latitud Sur y los 66° 42' de Longitud Oeste, en un rango altitudinal de 2.200 msnm y 4.400 msnm. (sernap) dentro de la cuenca hidrográfica de los Ríos Rocha –Maylancu, que a su vez pertenecen al sistema de cuenca de los ríos Caine– Grande de la vertiente del Amazonas (Pereira 2001). Es una de las áreas protegidas mas importantes en cuanto a diversidad y endemismo de aves en bosques de Kewiñas (*Polilepis Sp.*) en Bolivia; su mayor importancia es su condición de proveedor de los recursos hídricos superficiales y subterráneos para los valles de Cochabamba.

Su ubicación y características topográficas hacen que presente un sistema de cuencas conformando ríos, quebradas, lagunas y zonas de infiltración de acuíferos; solamente en la Ladera Sur se tienen contabilizadas 39 microcuencas; estos atributos hídricos permiten la sobrevivencia de comunidades, ciudades y producción agropecuaria de valles, beneficiando de esta forma a una población aproximada de un millón de habitantes. Asimismo permiten generar energía eléctrica que abastece al Departamento de Cochabamba y en parte a los de Oruro, La Paz y Potosí.

2.2. Los conflictos en el PNT

Los conflictos que existen en el Parque Nacional Tunari tienen su origen en la creación inconsulta de un área protegida en un territorio en el que las comunidades campesinas tienen derecho propietario, la magnitud de los conflictos socioculturales desde 1996 ha sido creciente y consiguientemente ha provocado mayores conflictos, económicos y ambientales.

La Ley 1262 dictada en 1991 a través de la cual se amplía arbitrariamente la extensión del parque afectando a mas de 300 comunidades agrava la situación de conflicto en el PNT. Estas comunidades se enteraron recién en 1996 cuando fueron promulgadas la Ley INRA y la Ley de Participación Popular que sus territorios formaban parte del PNT.

De acuerdo a lo que expresa el reglamento de áreas protegidas deben restringir sus actividades dentro del parque, y ceñirse a un plan de manejo en el que aparece una estructura que desconoce las formas organizativas locales que manejan su territorio según sus usos y costumbres. Paradójicamente hasta ahora no se tiene un plan de manejo del parque y solo está en constitución el Comité de Gestión del PNT pero no ejerce ninguna acción.

Además de las comunidades campesinas/indígenas se tienen una diversidad de otros actores sociales inmersos en la problemática del PNT, tales como las asociaciones de regantes, grupos de exmineros asentados en urbanizaciones y otras organizaciones locales que tienen estructuras organizativas que nacen de una praxis social propia. Así mismo existen otros actores sociales que aunque tienen

presencia dentro del parque, corresponden a una estructura externa y funcional establecida por el Estado como son los Municipios, Prefectura, Alcaldía, Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, ONGs, y Empresas privadas.

Para analizar la complejidad de la problemática del PT nos referiremos a cuatro aspectos fundamentales: el legal, el administrativo, el técnico y el sociocultural.

Conflictos legales

El problema legal se centra en aspectos territoriales que se originan junto a la creación del Parque; pues no se consideró entonces ni cuando fue ampliado, que estos territorios tenían como propietarios legales a poblaciones rurales y urbanas, cada una con particularidades socioeconómicas culturales diferentes. (AGRUCO 2003)

La tución sobre este Territorio de los once gobiernos Municipales, que se pierde al ser declarada área de Preservación Nacional y no pueden actuar ni en su defensa ni en su protección.

Conflictos administrativos

Bajo las mencionadas circunstancias legales, la administración del PNT se la ha dado al gobierno Central que a través del Servicio Nacional De áreas Protegidas (SERNAP) tiene competencias sobre su regulación y Administración, pero sus limitaciones en recursos humanos, y financieros no han permitido desarrollar un plan de gestión y se ha transferido esta responsabilidad a la prefectura del Departamento de Cochabamba que con los limitados medios capacidades operativas lleva adelante una dificultosa administración de este conflictivo espacio.

Esta situación es parte de un conflicto político abierto entre las sociedades campesinas indígenas y el Estado Boliviano y lleva regularmente a enfrentamientos.

Conflictos técnicos

Un problema técnico muy debatido respecto al PNT está orientado a los cuestionamientos que el propio SERNAP tiene respecto a la categoría dentro la cual está catalogada como “Parque Nacional”, pues sus características no concuerdan con las establecidas dentro de esta categoría⁴; al margen de esto hasta ahora no se tiene un Plan de Gestión y manejo de esta área protegida.

4 Parque Nacional Son áreas naturales inalteradas, donde se protegen todos sus elementos y procesos espontáneos, como muestras representativas de ecosistemas naturales, con valores paisajísticos excepcionales con lo cual cumplen finalidades tanto

Aunque existe conciencia principalmente en los actores locales sobre la importancia respecto al rol del PNT en la recarga de acuíferos, no han parado los asentamiento urbanos que ubican las viviendas en zonas de riesgo y que técnicamente provocan la impermeabilización de zonas de recarga de acuíferos y la contaminación del suelo y las aguas por disposición de desechos sólidos de la presencia de industrias o la aplicación de tecnologías no sostenibles.

La falta de manejo de las áreas forestadas con especies introducidas; en diferentes sectores, por efectos naturales, los árboles caídos han formado poblaciones importantes que constituyen un riesgo y dificultan el control de incendios forestales, y finalmente el problema de las torrenceras que es una amenaza para la ciudad de Cochabamba con diferentes magnitudes a nivel de la gran cantidad de microcuencas que se ubican en el PNT.

Conflictos socioculturales

El conflicto de mayor magnitud en este espacio se refiere a las distintas visiones que los actores sociales tienen sobre la gestión del territorio y la biodiversidad, la diferencia mas visible está en la concepción materialista del Estado sobre la gestión del territorio y los mecanismos empleados para su regulación: tales como las políticas, reglamentos y normas. En tanto que las comunidades campesinas tienen una concepción que es parte de su cultura, en la que la gestión del territorio obedece a una lógica de vida que no se limita a considerar solo los aspectos materiales de la gestión del territorio y la biodiversidad sino que considera además los aspectos sociales y espirituales. (Delgado 2002).

Existen controversias específicas si consideramos la diversidad de visiones de los actores sociales presentes en el PNT, que corresponden a lo Urbano y lo rural; en el sector urbano, la visión del PNT mas que un espacio para conservar la Biodiversidad valora el rol económico que cumple en la provisión de servicios: para los ambientalistas son servicios ambientales, tales como la provisión de agua, aire limpio, atractivo paisajístico, etc. De hecho, son los ambientalistas quienes constantemente demandan a la administración del PNT se desaloje a las comunidades campesinas de este y que el mismo cumpla su función en la categoría actualmente asignada. Por otro lado, están los loteadores para quienes el PNT constituye una recurso para lucrar, a través de la especulación dentro de un mercado de tierras que carece de legalidad; también están las empresas privadas que usufructúan diversos recursos del PNT particularmente del recurso agua, entidades públicas

científico-educativas, como recreativas. Admite la afluencia de visitantes, aunque tampoco asentamientos ni actividades humanas fuera de las relacionadas con fines referidos (Categoría de manejo de las áreas de reconocimiento internacional.

de educación, salud, así como organizaciones no gubernamentales para quienes el PNT constituye su espacio de acción.

Para las comunidades campesinas este espacio constituye su territorio con todas las implicancias materiales sociales y espirituales.

3. Configuraciones de contexto y contenido social en el Parque Nacional Tunari, sus diferencias y complejidad

En el área afectada por el PNT existen diferencias substanciales a nivel de los municipios, referidos principalmente a la diversidad de actores sociales presentes en los mismos, esta diferencia constituye una variable importante puesto que determina la *configuración social* de un determinado espacio.

El análisis propuesto parte del *contexto social*, constituido por la diversidad de actores sociales y el análisis de elementos como tierra, mano de obra, mercados, estructuras políticos-económicas, género, clases, religión, etc., que resultan en las diferencias individuales y grupales de las comunidades humanas. Este contexto debe observarse desde el nivel local hasta el global, con especial énfasis en las interacciones entre los diferentes actores y elementos. Una prioridad para nuestro estudio es tomar en cuenta el *contenido social y los valores éticos* que subyacen en las iniciativas de gestión del territorio y la biodiversidad, lo cual se refiere a los efectos que tienen estas iniciativas sobre los diferentes tipos de actores, hogares, o comunidades que determinan el nivel y tipo de impacto que resulta de la adopción o modificación de una intervención determinada. De aquí que los efectos que son positivos para un grupo de actores pueden ser fatales para otros. Estos impactos deben ser tomados en serio, ya que pueden negativamente afectar a ciertos actores en términos socioculturales económicos y ambientales. (Gliessman & Mendez 2000).

Hurni, Rist y Rocheau nos recuerdan que las relaciones entre los humanos y el ambiente son sumamente complejas. Para entenderlas y mejorarlas debemos ampliar nuestro repertorio para desarrollar una ciencia transdisciplinaria que logre integrar estas interacciones a múltiples escalas. Como punto de partida los científicos y practicantes de desarrollo y el manejo de los recursos naturales debemos empezar a profundizar en las múltiples disciplinas que se incluyen en este nuevo enfoque. Primeramente se tiene que mejorar la comunicación entre las diferentes disciplinas y fomentar la aceptación de enfoques transdisciplinarios por parte de instituciones internacionales y nacionales.

Se tiene que aceptar que las percepciones sobre territorio, biodiversidad significan visiones y construcciones sociales diferentes para los distintos actores. Empezando por nosotros, es necesario aceptar que estas distintas percepciones

existen y que además inciden en los procesos de desarrollo y manejo de los recursos naturales.

Por tanto es importante interpretar y analizar de manera transdisciplinaria la concepción de los diferentes actores estudiados como parte de un proceso interactivo basado en el diálogo entre diferentes sistemas de conocimiento a cerca de la tierra, territorio y biodiversidad, para lo cual se ha hecho una primera distinción entre los actores locales y los actores externos que refleja la procedencia y la vinculación que tienen respecto al desarrollo de las configuraciones. También se ha distinguido entre actores públicos y privados. Finalmente se han definido varios tipos de función del carácter tradicional o nuevo de las actividades que desarrollan. Así según los casos se habla de “actores locales tradicionales” y “actores locales no tradicionales” y de “nuevos actores”.

3.1. Visualizando la realidad compleja: configuraciones diferenciadas en el Parque Nacional Tunari como espacios de estudio

Uno de los aspectos mas importantes en la definición del contexto para el estudio es la configuración presente en un espacio, en la cual influyen determinantemente el número de actores sociales y la complejidad de sus interrelaciones. Concentraremos nuestros esfuerzos en conocer y analizar aquellos actores que afectan mas significativamente y en diferentes niveles, para esto es importante llegar a entender las realidades tal como son de las comunidades.

En las configuraciones representativas para el estudio se muestran las relaciones existentes entre actores sociales desde aquellas que están catalogadas como *muy buenas*, en las que se benefician mutuamente ambos grupos; las relaciones catalogadas como *buenas* en las que la relación implica un servicio de tipo estructural o de representación; por otro lado están las relaciones de carácter *débil* en las que la comunicación no es muy fluida y existe alejamiento entre actores; luego están las relaciones de *Conflicto abierto* en las que los actores sociales muestran relaciones de conflicto en diferentes espacios; finalmente están las relaciones *cortadas* que se dan entre actores que no tienen comunicación.

Las diferencias que se presentan en el “Mapeo de las relaciones de los grupos de actores sociales en el espacio de Interfaz del Parque Nacional Tunari” entre un contexto que recibe mayor influencia del sector urbano y otro que está mas alejado de esta influencia se perciben claramente en las configuraciones que se presentan a continuación: en las que solo describiremos las relaciones existentes en los principales grupos de actores sociales, mas adelante este material servirá para hacer un análisis de estas relaciones y porque se establecen el tipo de relaciones que están vigentes y como se transforman de acuerdo a la Coyuntura Política, Social, y económica.

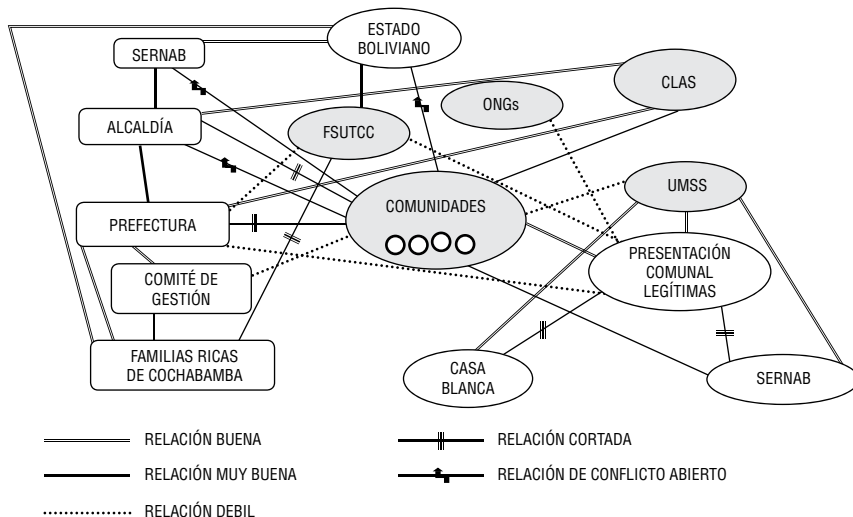
Configuración social en espacios con alta influencia urbana

Figura 1. Mapeo de las relaciones de los grupos de actores sociales en el espacio de interfaz del parque Nacional Tunari comunidad de Tirani.

Uno de los principales problemas identificados en la configuración en la que se encuentra la comunidad de Tirani es que dentro del PNT no hay interlocutores válidos para negociar con el Estado; en esta configuración aparecen 14 actores sociales, los intereses de los mismos son diversos y heterogéneos por tanto complejizan de manera significativa esta configuración, el tipo de relación entre los actores sociales está determinado por la afinidad o contradicción que existen entre los valores éticos que subyacen tanto en la praxis como en el discurso de los mismos, para dar un ejemplo podemos describir la relación que las comunidades campesinas tiene con los otros actores sociales: el grupo de actores sociales de las comunidades mantiene una relación muy buena únicamente con sus representantes, mantiene una relación buena con las ONGs, mantiene una relación muy débil con la UMSS (debido a que el programa del PAMS está orientado solo a los representantes de las comunidades, sería interesante generar una mayor relación de la Universidad con todas las bases pero las comunidades entienden las limitaciones de la UMSS-AGRUCO) así mismo su relación es débil con el comité de Gestión y otro representante de la Universidad que es el CLAS. La relación de las comunidades con entidades tales como la cervecería Taquiña, el Estado Boliviano, el SERNAB, la Alcaldía del Departamento de Cochabamba es de pleno conflicto. La relación de las comunidades con la Prefectura en este momento está cortada al extremo que

cuando las comunidades han solicitado audiencias y lo único que se ha hecho ha sido derivarlos a una secretaria; así mismo con la alcaldía en algunos casos de algunas comunidades. Respecto a la relación de las comunidades con las familias ricas de las urbanizaciones del Parque, esta no existe. Las relaciones de la Cervecería con las comunidades están en Conflicto abierto. Hasta hace poco la relación de la Cervecería con algunos representantes de las comunidades (representantes corruptos) era muy buena. Un ex dirigente en complicidad con la Cervecería Taquiña vende sus terrenos a la Taquiña misma. La otra empresa privada Casa Blanca sus ejecutivos influían en las autoridades que administran el Parque para estar siempre beneficiados, así, se presentaba ante las comunidades el Director de Medio ambiente a dar instrucciones a los Dirigentes de las comunidades acerca de lo que debían opinar sobre ciertas propuestas hechas por los empresarios.

Configuración social en espacios tradicionales

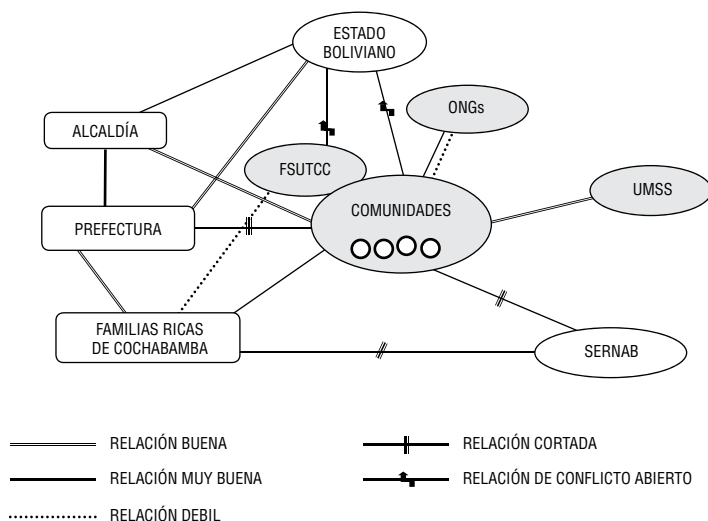


Figura 2. Mapeo de relaciones de los grupos de actores locales en el espacio de interfaz del Parque Nacional Tunari (comunidad - Chorojo)

En la Configuración que presentan las comunidades tradicionales que para el caso del PNT son mas de 300 el estudio considera el contexto de Chorojo donde se identificaron 9 grupos de actores sociales, el principal grupo de actores sociales

está constituido por los actores locales tradicionales (Comunidades) y es a partir del tipo de relaciones que mantienen con los otros actores sociales que determinamos la configuración presentada.

Los actores sociales locales tienen una Relación muy Buena con La Federación Sindical Unica de trabajadores campesinas, puesto que su Sindicato pertenece a esta Organización y permanentemente está en contacto con los dirigentes Sindicales, así mismo tiene muy buena relación con la Alcaldía de Sipe Sipe, esto recientemente, a partir de la participación de sus dirigentes en la elaboración del POA y otras actividades, la Alcaldía en las recientes gestiones ha ejecutado algunos pequeños proyectos en la Comunidad como ser el arreglo de la escuela y agua potable; igualmente tiene una muy buena relación con la Universidad Mayor de San Simón a través del Centro Universitario AGRUCO con quienes ejecutan proyectos participativos de Investigación, formación y desarrollo.

Con los otros grupos de actores sociales, como son los actores privados y algunos públicos como la prefectura de Cochabamba, el Comité de Gestión, y otras ONGs la relación está cortada no existe relación, la comunidad indica que estas autoridades parece que no saben que existe la comunidad de Chorojo.

4. El análisis de los discursos en la identificación de los valores éticos de los principales actores sociales involucrados en la problemática del Parque Nacional Tunari

El análisis de los discursos resulta ser una herramienta fundamental para lograr los objetivos planteados en este estudio, partimos del significado de la palabra discurso que según Taberner 2002 es la construcción lingüística organizada a cerca de hechos (naturales o sociales) o símbolos (temáticos o lógicos). Al igual que la comunidad científica, los grupos de actores sociales comparten principios significados, expresiones, reglas, y los resultados acumulados según la experiencia los cuales son expresados en sus discursos los cuales principalmente tienen carácter dentro de tres niveles: el nivel Descriptivo, Nivel explicativo, el nivel Crítico.

Los testimonios de cinco Dirigentes Campesinos entrevistados por Macchi y Serrano (2002) constituyen los discursos analizados como paso inicial de este estudio; los mismos están caracterizados por mostrar un nivel crítico sobre la problemática del PNT. Un elemento común en el discurso de los actores locales es de que ya no se conforman con los niveles y estructuras de participación existentes ofrecidos por las organizaciones estatales actuales. Más bien generan propuestas para reformar las estructuras existentes en el sentido de alcanzar una mejor articulación entre los, valores éticos, principios y procesos de toma de decisión vigentes en sus propias organizaciones (comunidades, ayllus, sindicatos,

barrios, o federaciones de los mismos) y los que deben regir la toma de decisión en el ámbito estatal.

La concepción de valor varía de sociedad a sociedad, de época a época, lo que sin embargo no justifica un simple relativismo ético. Una sociedad basada en valores de la libertad del individuo, conquistada a lo largo de un esfuerzo de humanizaciones de varios siglos, supone la convicción de que hay que respetar la pluralidad de sistemas de valores de los diferentes grupos humanos y de las diferentes concepciones del mundo (pluralismo de los valores éticos). (Otfried 94)

Sin embargo la convivencia social exige un acuerdo sobre los aspectos formales de la garantía de las condiciones de vida de los individuos y consiguientemente el consenso al menos “material” sino sociocultural sobre que valor debería incluir una vida digna para toda persona, en un sentido amplio referirnos a una Ética Social donde las normas y principios morales de la vida colectiva en el Ámbito institucional y no institucional establecen los deberes que el ser humano tiene como persona para con los demás centrándose básicamente en las instituciones⁵ básicas establecidas dentro de su sociedad

Los principales valores identificados son los referidos a una ética social que exige: justicia social, equidad, bien común, solidaridad, benevolencia, confianza, dignidad, inviolabilidad, comunicación, interacción humana, honestidad, consenso, lealtad, rectitud, honradez, reciprocidad, redistribución, comunitarismo, consenso.

El significado de cada uno de estos valores expresa la visión de los actores a los que corresponde el discurso; debemos recordar que los discursos tienen una orientación crítica a la situación que se viven en el espacio de interfaz del Parque Nacional Tunari, por tanto los valores éticos que aparecen son señalados como demandas en algunos casos, y en otras como líneas a seguir en una propuesta de solución.

La vida en común no está asegurada mediante un modelo conductual innato, sino que en ella se dan procesos en el marco de un Pluralismo ético en el que los valores éticos de los actores sociales se influyen unos a otros y se transforman por necesidades e intereses distintivos, por la escasez de muchos bienes, así como por las pasiones a veces de tipo ideológico o emocional como la envidia, el recelo y el odio. Sin una educación correspondiente, en la que los actores se dispongan a un diálogo, y sin medidas institucionales, no son posibles ni la supervivencia ni la vida en armonía.

5 Institución: Se refiere a los patrones regulares de conducta entre individuos y grupos de la sociedad, tienen un papel crucial en las relaciones humanas con el ambiente. Estas instituciones pueden ser formales o informales, e incluyen cualquier tipo de asociación para negociar el manejo de recursos y/o derechos

4.1. Transformación de valores éticos en actores sociales y procesos de aprendizaje colectivo

Los valores éticos están fundamentados por un lado en la praxis social de individuos y las sociedades que conforman. Por otro lado los valores éticos son relacionados con las concepciones de la vida, del hombre y de la naturaleza que subyacen de las diferentes formas de vida que es expresado a través del concepto de *ethos*. (Rist. 2003)

Una constante del discurso en el campo político de estos actores sociales organizados en los movimientos indígenas y campesinos, es el cuestionamiento y el rechazo a los valores éticos derivados de un estado neo-liberal que se proyecta en primera línea como facilitador de una economía de libre mercado (Delgado, 2002). En el campo social son los valores de solidaridad, justicia y participación los que juegan un rol dominante mientras que en lo cultural valores derivados de concepciones culturales específicas entre sociedad y naturaleza como p. ej. el principio de co-evolución, respeto para la vida y apertura cognitiva asumen una importancia primordial en la formación de identidades propias (Droz, et al. 2003).

A través de la intervención de los actores locales se genera un escenario en el debate público en el cual los valores éticos y las visiones del mundo, de la vida y de la naturaleza tienen una importancia fundamental. El debate hace explícitos los valores éticos diferenciados, sin embargo las interacciones entre los actores sociales generan un proceso de aprendizaje⁶ que transforma los valores éticos de los actores sociales, y consiguientemente la praxis social que desarrollan los mismos, lo cual tiene directa relación con el desarrollo sostenible de las comunidades.

Desde el punto de vista de la mitigación de los síndromes se entiende estas re-interpretaciones como parte de un proceso de aprendizaje social (Woodhill and Roeling 2000), que contribuye a re-configurar los valores fundamentales para el pensamiento y la acción en el ámbito público, lo cual se manifiesta en la práctica de los grupos de actores sociales asentados en el PNT, espacio que hemos determinado como zona de estudio.

Para el caso del Parque Nacional Tunari, se da un interesante proceso en el que el Estado a través de sus políticas respecto a la gestión de áreas protegidas, ejerce una acción coactiva sobre los actores sociales involucrados en estos espacios, que transforma sus hábitos, consiguientemente su *ethos* y valores, pero eso no es todo sino que al mismo tiempo cambia toda una lógica de gestión del territorio y la

6 Nos referimos aquí al proceso por medio del cual la apropiación y uso del conocimiento crean o fortalecen habilidades y capacidades en las personas, comunidades sus organizaciones que se los apropian, convirtiéndose así en factor de cambio y de progreso en la sociedad, en sus instituciones y en las empresas del sector productivo.

biodiversidad como veremos a continuación en las especificidades en la gestión del territorio y la biodiversidad que se dan en las configuraciones de estudio.

5. La gestión del territorio en el Parque Nacional Tunari: propiedad y acceso a la tierra

Como parte del proceso de apropiación de tierras que en el pasado y el presente acompaña al actual modelo de desarrollo predominante en América Latina se ha desplazado en forma prepotente a muchas poblaciones rurales y grupos indígenas de sus propias tierras incorporando en estos grupos a través de las restricciones nuevos hábitos de vida y medios de subsistencia, tan forzosa como precaria y desordenada.

Bolivia tiene una conformación poblacional con una fuerte presencia indígena que tradicionalmente ha vivido en relación directa con la tierra como fuente de alimentación, ingresos y afirmación cultural, por ello la tenencia de la tierra es un tema económico, pero también social y político de gran importancia nacional. Alrededor del cuarenta por ciento de la población económicamente activa depende directamente del sector agropecuario (Justiniano 2001)

La implementación gradual de diferentes leyes, decretos supremos y reglamentaciones en relación al reordenamiento político administrativo y la planificación, uso, tenencia, saneamiento y titulación de tierras (Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización Político-Administrativa, Ley de Municipalidades, Ley INRA, Ley Forestal, Ley del Medio Ambiente, Ley de Minería) es un proceso que se ha intensificado desde 1993. Otras Leyes están en estudio para su próxima promulgación (Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Aguas, Ley de áreas protegidas). Esta preocupación de las estructuras estatales por la problemática de la administración del territorio nacional, del uso y tenencia de la tierra, se produce después de un silencio de 40 años desde la promulgación de la Ley de Reforma Agraria que significó la legalización de la acción campesina de toma de grandes extensiones de tierra (las llamadas haciendas) en propiedad de pequeños grupos familiares, y la abolición de hecho de las prácticas de servidumbre al que se hallaba sometida el campesinado. (Delgado 2002:1).

Muchas comunidades de la región de cabecera de Valle en Cochabamba que fueron exhaciendas, después de la reforma volvieron a una gestión territorial comunitaria en la que mantuvieron el control no solamente sobre la tierra sino sobre el conjunto de su territorio, que desde la perspectiva de los actores locales no se limita a la dimensión material o unidad natural del territorio de los pueblos indígenas y originarios que comprende subsuelo, suelo, espacio aéreo y aguas (Pachamama: *alax pacha*, *manqha pacha* y *aka pacha*). Este territorio es indivisible continuo o discontinuo" (CSUTCB en: Procampo N° 88:21 y 22); determinan a su

vez formas específicas de organización socioeconómica. Por otra parte, la noción de territorio abarca no solamente una superficie unitaria, sino también aquellas zonas de colonizaciones (históricas o recientes) en otros pisos ecológicos diferentes a las de origen. (Delgado 2000).

5.1. La propiedad y el acceso a la tierra en un espacio de conflicto territorial

Desde la visión del Estado la administración de la tierra en Bolivia ha sido y sigue siendo un tema de administración nacional, los niveles intermedios (Prefecturas) y los locales (municipios) no tienen competencias específicas sobre la tierra, con la sola excepción de la administración del catastro. Durante el largo período de vigencia de la Ley de Reforma Agraria, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, administró la tierra en todas sus etapas, desde la identificación de tierras fiscales, la dotación gratuita, la venta, la administración de justicia y la reversión al Estado. El Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización, bajo la tutela del referido Ministerio, eran las entidades encargadas de distribuir tierras y administrar justicia. La justificación de semejante poder concentrado en un ministerio obedeció al criterio de lograr que una sola institución procese de manera expedita la distribución de tierras y evite que el poder judicial en su instancia ordinaria de aplicación de justicia falle sobre disputas de tenencia de tierras en las que el indígena sería atropellado por los que tengan poder ante los órganos de la justicia ordinaria.

En Bolivia no existió un mercado transparente para la tierra, la distribución de la misma obedeció a criterios políticos y de poder con absoluta discrecionalidad (Pereira 2001). Desde 1953 hasta 1972, se distribuyó tierras para colonos campesinos de las zonas altas en las tierras bajas menos pobladas, pero en el gobierno militar de principios de los años setenta, se distribuyó masivamente tierras a grupos de poder que apoyaron al régimen, en una cantidad mayor a todo el período anterior de la reforma agraria, lo que generó una fuerte concentración de tierras en pocas manos. El acceso a la tierra fue siempre fruto de las influencias políticas o de los grupos de presión sindicales o de empresarios con acceso al poder. (Justiniano 2000).

La Ley INRA de 1996 eliminó el regalo de la tierra, separó la administración de justicia del Poder Ejecutivo traspasándola al Poder Judicial, creó mecanismos automáticos vía el pago del impuesto en lugar de la inspección ocular para demostrar el uso económico social de la tierra, estableció procedimientos para la subasta pública de las tierras disponibles y el acceso preferente para los indígenas y campesinos sin tierra, combinando procesos de intervención estatal con el mercado.

Es entonces cuando la legislación en Bolivia por primera vez desde 1952, se ocupa de los territorios comunales de organizaciones campesinas, tratando de imponerles nuevas reglas de acceso a su territorio. Les plantea por ejemplo, que

previo al usufructo de la tierra, deben contar con Planes de Ordenamiento Predial, que el uso de los bosques debe estar regido a lo que manda la Ley Forestal. O que cualquier veta mineral que se descubriese dentro su territorio, es de propiedad del Estado, sujeto a expropiación y posterior explotación de parte de particulares.

Las políticas relacionadas al acceso, uso y la tenencia de la tierra se tornan mas conflictivas a partir de la regulación de territorios como áreas protegidas, pues en la ultima década se han creado en Bolivia 47 áreas protegidas de las que solo 21 están reguladas oficialmente por el SNAP con el propósito de "Preservar el Medio Ambiente", la delimitación de estas áreas obedece a una tendencia conservacionista que no considera a las comunidades y poblaciones existentes dentro de estas áreas generando conflictos en las comunidades afectadas, debido a que los límites de estas áreas expropiaban terrenos que legalmente pertenecían a las comunidades o bien dividían propiedades e impedían el acceso a arroyos y fuentes de agua que tradicionalmente era utilizados por las comunidades, lo que demuestra que estas delimitaciones fueron establecidas sin considerar ningún criterio técnico, ni mucho menos socio-cultural.

Territorialidad del Parque Nacional Tunari

El Parque Nacional Tunari PNT en el momento de su creación (1962) tenía 240 km², a través de la Ley No. 1262 promulgada en 1991 su superficie fue ampliada a un área de 3090,91 Km², abarcando 5 provincias, 11 municipios y mas de 300 comunidades en el Departamento de Cochabamba (Mapa N° 2), en el centro de Bolivia (AGRUCO-2003).

Superficie del Parque Nacional Tunari por jurisdicción provincial

Provincia	Ayopaya	Cercado	Quillacollo	Chapare	Tapacarí
Sup de la provincia Ha.	958.535	28.652	163.264	1.250.533	167.446
Superficie afectada por el Parque	103.171	3.811	120.596	71.511	17.969
% de la superficie total del parque	32,67	1,2	37,97	22,51	5,65
N°. de Municipios	2	1	4	3	1

Fuente: (AGRUCO 2003).

En el cuadro podemos apreciar claramente, que la provincia que tiene la mayor superficie dentro esta área protegida es la provincia Quillacollo con el 37,96% de la superficie total, comprende cuatro Municipios y 58 comunidades, a diferencia de la provincia cercado cuyo territorio es el menor dentro del PNT y corresponde al 1,20% con 1 solo municipio que es principalmente Urbano y que le da a esta área otra particularidad de relación activa con la ciudad de Cochabamba, capitales provinciales de Quillacollo, Sacaba y un macroespacio de una alta dinámica urbanizadora.

Conflictos en la delimitación del territorio del PNT

Territorialmente las áreas protegidas tienen límites bien definidos, presentan continuidades con esferas naturales, sociales económicas y políticas mayores que son reguladas a través de zonas de amortiguación, pero este no es el caso del PNT que no tiene una delimitación oficial, a pesar de que la Ley 1262 en la que se amplía su superficie señala como límites: “al norte, la ceja del monte de la región de Tablas, al sur la Cota 2750, al Este el Río Kenko o Kenko Mayu, y al Oeste la margen Norte del Estrecho de Parotani” no existe la información cartográfica oficial.

Los Municipios urbanos tienen la atribución de administrar los instrumentos reguladores del catastro urbano, esto no ocurre con los Municipios del área rural respecto a su catastro, esto aumenta la dimensión de la complejidad de los Conflictos (Justiniano 2001) puesto que en el PNT están comprendidos tanto Municipios urbanos como rurales, por tanto existe una desigualdad de derechos respecto al manejo de la propiedad de la tierra,

Considerando estos aspectos la prefectura ha elaborado un mapa cartográfico delimitando la superficie territorial del PNT, el cual no coincide con el mapa diseñado por el Sistema Nacional de Áreas protegidas SNAP, donde a simple vista encontramos tres puntos de divergencia: el primero y el mayor se ubica en el sector Norte explícitamente en el Municipio de Villa Tunari, el segundo aparece en el sector de Parotani donde la prefectura ha tomado en su delimitación la referencia del río Tapacaré, en cambio el SNAP toma la cota 2750 como referencia para la delimitación del Parque. El tercer punto de divergencia está en el límite Sur en la cota 2750 en el Municipio del Cercado donde se da una expansión urbana con alto grado de ilegalidad que llega a colindar con el pie de montaña y los municipios de Tiquipaya y Sacaba.

Lo señalado nos muestra que incluso en la estructura Estatal se encuentran dificultades de coordinación cuando se trata del territorio particularmente en esta área donde el mencionado decreto de ampliación ha sido rechazado por las comunidades que manifiestan que esta ampliación obedece a una decisión arbitraria de autoridades del Municipio del cercado sin una consulta previa con las comunidades afectadas

5.2. Ocupación del territorio y conflictos de sociedades urbanas y rurales en el Parque Nacional Tunari

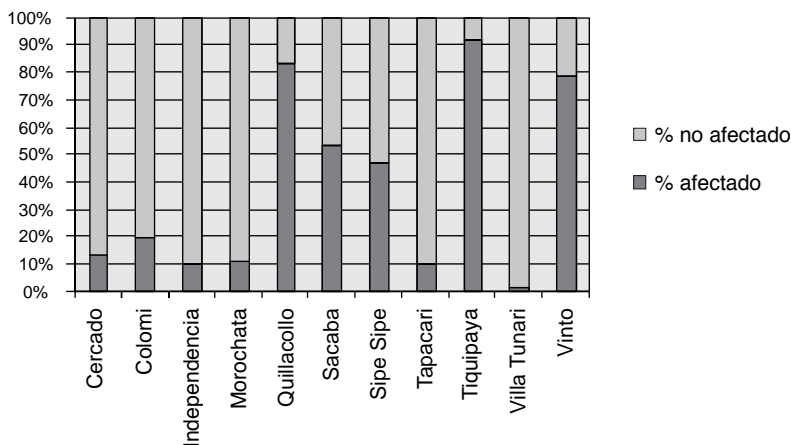
A partir de la ley INRA se han distribuido 1.957.092 hectáreas, lo que es un cambio histórico sin precedentes. Sin embargo, no se ha puesto en funcionamiento el mecanismo de la compulsa pública que fomente un mercado de tierras transparente (Justiniano 2001). Sin duda los perjudicados hasta ahora por la Ley INRA

son los propietarios que no tenían sus títulos claros o que no pudieron demostrar un uso económico social de sus propiedades.

Los compromisos especificados en la Ley de inra de titular territorios indígenas, tienen plazos que al momento están agotados en demasía, la titulación tampoco parece ser la solución, pues los procesos dificultosos y burocráticos de titulación han motivado oposición y por tanto un porcentaje bajísimo de titulación de tierras en Bolivia desde 1953.

La ocupación territorial del espacio del PNT es resultado de un proceso histórico social muy diferenciado en los niveles urbanos y rurales; eso nos muestra el análisis realizado a cerca del territorio que abarca el PNT, pues al menos tres de los 11 Municipios que están dentro del Parque están constituidos por centros urbanos, en los que se ha estado loteando la tierra en un proceso mercantil, en cambio que en el resto del territorio muchas comunidades indígenas tienen el derecho otorgado a través de la Ley de Reforma Agraria.

Porcentaje del territorio de los municipios afectados por el PNT



Fuente: Serrano, Boillat (2004)

La gráfica muestra el área territorial afectada por el PNT en cada uno de los Municipios; los porcentajes mas altos considerando este criterio son los Municipios de Quillacollo, Tiquipaya y Vinto; otro aspecto que nos permite apreciar el cuadro es la ubicación de la capital Municipal que en los casos de los municipios de Cercado, Sacaba, y Tiquipaya se encuentra muy próximo al límite que tiene el parque, lo cual hace que en estas capitales municipales la dinámica del conflicto es mayor, por otro lado, los mencionados Municipios se caracterizan por ser centros urbanos en crecimiento donde constantemente se tropiezan con problemas de

asentamientos poblacionales; aunque el detalle del % de territorio afectado por el PNT en estos Municipios corresponde a los menores, un factor que determina la complejidad de los conflictos en estos Municipios es la presencia de una diversidad de actores sociales.

a) Asentamientos urbanos

En Bolivia uno de los ejes de concentración urbana es la ciudad de Cochabamba, el impacto de la urbanización sobre las tierras agrícolas fértiles del valle desplaza las mejores tierras agrícolas para construir viviendas, los asentamientos urbanos se dan principalmente, a nivel periurbano en el Municipio del Cercado y en los márgenes cercanos a la ciudad de los Municipios de Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sacaba, son muchas las razones de estos asentamientos urbanos.

En el área periurbana, en el tema referido al acceso a la tierra se tiene un grupo social con grandes posibilidades económicas y de relaciones de poder que ha accedido a grandes superficies de terreno estableciendo una zona de Urbanización denominada "Las Lomas de Aranjuez" que se ubica sobre la cota 2750 con grandes mansiones que pertenecen al sector privilegiado de la sociedad Cochabambina, otro grupo social es el que ha accedido a pequeñas superficies de tierra, a través de transacciones legales, y en ocasiones ilegales, asentamientos de familias de escasos recursos que han accedido a un terreno para su vivienda, muchas veces a través del negociado con los loteadores⁷, y han establecido allí barrios, villas, legalmente establecidas e unos casos y en otros no.

Las medidas de ajuste estructural de 1985 año en que fueron capitalizadas muchas empresas Estatales, principalmente la mineras trajo un proceso de asentamientos de una población de relocalizados mineros⁸, la falta de políticas

7 Los loteadores, según nuestra tipología esta dentro del grupo de los actores locales no tradicionales, es el grupo social que más influencias ha ejercido en este proceso de conflictos del Parque Nacional Tunari en la ciudad de Cochabamba, esto con la finalidad de continuar con una serie de negociados en lo que corresponde a la compra y venta de lotes(terrenos), para lo que ha movido a grandes sectores de la sociedad civil infiltrándose en las organizaciones locales, para protestar por ejemplo respecto a la legalidad de los asentamientos sobre la cota 2750msnm. En muchos casos estos grupos están trabajando de manera conjunta con grupos de poder del ámbito político-económico actual del departamento de Cochabamba y el país, por lo que cuentan con un respaldo sólido.

8 Los relocalizados corresponden a la tipología de actores locales no tradicionales, se trata de mineros son grupos de familias migrantes de los centros mineros y con sus cuotas de finiquito salarial adquirieron terrenos de los loteadores en los márgenes de la ciudad de Cochabamba, en el límite sur del PNT donde establecieron barrios con viviendas habitacionales.

de apoyo al sector agrario provocó la migración de algunas familias campesinas⁹, hacia las ciudades ubicándose en las periferias de los centros urbanos, así mismo el crecimiento demográfico del Municipio del Cercado que obligó a un sector de familias pobres a buscar un sitio para vivir en las villas y que al mismo tiempo crean los cinturones marginales urbanos de pobreza, desde entonces este proceso se ha ido intensificando al grado que llegan a colindar con el pie de montaña hacia los Municipios de Tiquipaya y Sacaba siendo factible observar que la tendencia es expandirse hacia otros Municipios relacionados con el límite Sur del PNT.

Una muestra de la tendencia en el proceso de expansión relacionado al límite sur que indican que los asentamientos por encima de la cota 2750 en la década de los 70 alcanzan solamente a 5, y se van incrementando en el 100 % en cada década, esto se puede explicar por las limitaciones en las competencias legales que tienen los municipios respecto a la administración de la tierra, donde solo tienen instrumentos reguladores del catastro los Municipios urbanos no así los rurales

La extensión que ocupan los asentamientos en el área del Límite Sur del Parque, es decir el espacio destinado a las viviendas que ocupan alrededor de 172 hectáreas distribuidas en un 21.27 % en el Municipio de Sacaba, 42.26 % en el de Cercado, 36.47 % en Tiquipaya en los asentamientos solo se encuentran viviendas construidas en el 65.18 % de lotes.

Ocupación de la tierra en lotes y viviendas en los asentamientos urbanos

Municipios	Nº de Asentamientos	Nº de Lotes	Nº de Viviendas	Extensión en m ²
Sacaba	12	1.307	802	366.840
Cercado	17	1.998	1.320	728.835
Tiquipaya	3	1.049	716	629.064
Total	32	4.354	2.838	1.724.739

Fuente : Pereira (2001).

En los mecanismos de distribución de la tierra está determinada la política de acceso al recurso de los pobres y excluidos de manera concreta. La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y la Política Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, contienen lineamientos generales sobre el tema de acceso a la tierra para los pobres, pero no existen avances significativos respecto de la Ley INRA. Por otro lado estos documentos en los hechos se convir-

9 El caso de asentamientos de estas familias esta dado por la necesidad de vivienda para los hijos que estudian en centros urbanos o en los pueblos cercanos a la ciudad esto no significa que continúen desarrollando sus actividades productivas en sus comunidades.

tieron en instrumentos inefectivos de la ejecución de la política gubernamental. La distribución de tierras en Bolivia se caracteriza por la desigualdad y la seguridad jurídica (que otorga el Estado) la misma es muy cuestionada.

El negocio de la especulación de tierras que se da en los asentamientos urbanos del PNT tuvo como principal causa las políticas gubernamentales de la distribución de tierras con una visión del territorio materialista que obedeció en muchos casos a transacciones ilegales de grupos inextricables que solo velan intereses sectoriales y que no les importa la agresión que a través de la implementación de estas políticas se ejerce sobre comunidades indígenas, es importante mencionar que a través de estas políticas se ha transformado las lógicas de gestión del territorio y la biodiversidad de muchas comunidades, especialmente aquellas que están próximas a los centros urbanos.

El hecho de establecer un Parque Nacional en el que se prioriza la tuición del Estado para su Manejo según las Leyes, es una medida que induce a las familias campesinas a vender a precios muy bajos sus terrenos que estaban destinados a la agricultura a fin de no perderlo todo, sin embargo se embarcan en un proceso de dependencia en el que pierden su soberanía por un lado y por otro el loteamiento y la urbanización tiene importantes impactos para el Medio Ambiente y la biodiversidad; una de las configuraciones que sirven a este análisis es en el que se encuentra la comunidad de Tirani, que mas adelante desarrollaremos.

Los conflictos de los asentamientos urbanos que sobrepasan el plano legal desde hace décadas no alcanzan el 5 % en la magnitud de la problemática territorial que representa el parque, y a pesar de ello no han encontrado solución aunque el estado establece que las "disputas sobre tierras debe ser resueltas por los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras en primera instancia y por la Judicatura Agraria en segunda apelación, Aunque se indica que los Municipios y las autoridades naturales no tienen ninguna participación en el proceso, vemos que en el Conflicto del Parque Nacional Tunari precisamente son las autoridades locales que están llevando adelante una gestión que considera la conservación no solo de diversidad biológica sino también cultural, lo cual muestra que la Judicatura Agraria tiene muchas falencias y está todavía en el proceso de asentamiento institucional .

b) Comunidades campesinas en el área de PNT

Las comunidades campesinas ocupan territorios en las distintas zonas¹⁰ que cubre la superficies del PNT, desde las zonas de montaña y altura, cabeceras de valle,

10 Según MAYER (1981:59) llegan a ser: "secciones del territorio comunal que se usa de una manera claramente distinta, lo que incluye un conjunto de cultivos, un patrón de rotación, barbecho y un sistema para la asignación de recursos *libres* tales como agua de riego, tierras de pastoreo y otros

valle hasta regiones tropicales, presentándose un alto nivel de relación entre ellas lo cual les permite desarrollar actividades agrícolas, pecuarias y forestales destinadas al autoconsumo y parcialmente al mercado local, las tierras de acuerdo a una racionalidad espacio temporal son destinadas a la actividad ganadera en pequeña escala, la particularidad del manejo territorial en las comunidades campesinas esta en las formas de acceso al territorio que se tienen en las que la propiedad privada y la propiedad colectiva son parte de una gran diversidad de estrategias.

Dentro de los 11 Municipios que están en el PNT son mas de 300 las comunidades campesinas que ocupan este territorio (AGRUCO 2003), la forma de gestión que tienen estas comunidades respecto a su territorio responde a una lógica que corresponde a una forma de concebir el territorio como algo sagrado y vivo, de hecho el Estado al aprobar el establecimiento del PNT no consideró estos aspectos y mas por el contrario a través de la Ley INRA se estableció el saneamiento de tierras que fue reiterado a través de la Ley del Diálogo (Ley 2233 del 31 de julio del 2001), que establece en el Art. 6 la priorización del saneamiento y titulación de la propiedad agraria: Los Gobiernos Municipales, en acuerdo con las Organizaciones Campesinas e Indígenas, deberán coordinar con el INRA, la identificación de áreas prioritarias para el saneamiento y titulación de la Propiedad Agraria, en la respectiva Sección y Provincia.

A la fecha no se han registrado avances en la implementación de esta disposición, a criterio del Gobierno, por la falta de recursos económicos, de una política de tierras, y la atención de parte del INRA de numerosos procesos contenciosos administrativos ante el Tribunal Agrario.

De hecho muchas comunidades hasta antes de 1996 año en que fueron promulgadas las mencionadas leyes no tenían conocimiento a cerca del hecho de que sus territorios formaban parte del PNT, la Ley de Participación Popular oficializó la división Político administrativa de las secciones municipales y fue esta la instancia en que las comunidades se informaron de que eran parte del PNT, lo cual provocó una serie de conflictos sociopolíticos y administrativos que antes explicamos.

Concretamente en el tema Territorial el conflicto con las comunidades se genera ante la Ley 1262 a través de la cual se amplía la extensión del Parque llegando a afectar a 147 comunidades que de acuerdo a lo que expresa el Reglamento de Areas protegidas deben restringir sus actividades dentro del Parque, y señirse a un plan de manejo en el que aparece una estructura que desconoce las formas organizativas locales que manejan su territorio según sus usos y costumbres; paradójicamente, hasta ahora no se tiene un plan de manejo del Parque, y está en constitución el Comité de Gestión del PNT.

En 1998 la prefectura de Cochabamba, elaboro una propuesta de manejo del parque basado en criterios técnico legales, esta propuestas sigue una perspectiva conservacionista y técnica de la Ley 1262 creando una oposición clara de las comu-

nidades a la legislación actual de parque (Los Tiempos 2002) esta situación es parte de un conflicto político abierto entre sociedades campesinas indígenas y Estado a nivel de Bolivia y particularmente de áreas protegidas que lleva regularmente a enfrentamientos. El conflicto llegó a la propuesta extrema de la prefectura de la Provincia Cercado de relocalizar a las comunidades rurales autóctonas fuera del área del parque (Los Tiempos 1999).

Por lo señalado podemos indicar que la implementación de las nuevas políticas de conservación de la biodiversidad y el Medio Ambiente representan una Interfaz social en la que se enfrentan concepciones, intereses y reivindicaciones enraizadas en diferentes formas de vida cotidiana. Los encuentros y desencuentros de las diferentes formas de vida corresponden a diferentes proyectos de desarrollo que se plantean los grupos de actores sociales involucrados como base para contribuir a procesos de aprendizaje y negociación social que permitan buscar bases mas amplias para la integración y coexistencia pacifica de diferentes grupos culturales en espacios naturales compartidos (Rist 2003).

En síntesis la situación del PNT permite observar que si bien existen normas genéricas, estas no son generadoras de procesos de gestión, por ello, es necesario generar participativamente normas que tomen en cuenta las particularidades y diversidad social, cultural y ecológica de cada área como mecanismo que permita articular sociedad civil Estado en la implementación de políticas de gestión del área protegida, en otras palabras la norma debe resolver los conflictos no profundizarlos (Pereira 2002:2).

6. Conclusiones

En el análisis del Parque Nacional Tunari como espacio de interfaz podemos indicar que existe una diversidad de actores sociales con características específicas que configuran espacios cuya complejidad varía de acuerdo al número de actores sociales presentes en los diferentes contextos, y al tipo de relaciones establecidas entre los mismos, la caracterización de los municipios afectados por el PNT nos ha posibilitado preestablecer los criterios para determinar las configuraciones en las que se realiza el Estudio, así mismo nos ha facilitado la selección de los principales grupos de actores sociales que serán analizados dentro de la investigación.

En el espacio de interfaz los puntos clave identificados para abordar el problema son los siguientes: El tema de la concepción del territorio y la biodiversidad, a partir del respeto de las visiones existentes en la perspectiva de los diferentes actores sociales en un diálogo intercultural que permita llegar a un consenso, lo cual requiere la voluntad política de los actores sociales de resolver el conflicto, con la participación de todos los involucrados, y promover la coordi-

nación interinstitucional. Así mismo llegar a acuerdos sobre la categoría del PNT, aclarar el tema de los límites del Parque, revisar la normativa de gestión de áreas protegidas y principalmente priorizar el bien común para todos los que viven en el área del Parque.

A partir del análisis de los discursos hemos conocido una diversidad de valores éticos desde la perspectiva de los actores locales que nos permiten determinar que los mayores conflictos entre los grupos de actores sociales se suscitan cuando la diferencia y percepción respecto a un valor es mayor. A partir de estos resultados preliminares es importante profundizar este tema para construir bases que nos permitan analizar las transformaciones de los valores éticos en los diferentes actores sociales, así como los factores que facilitan los procesos de aprendizaje social a partir de los cuales se dan estas transformaciones.

El análisis de la política en cuanto a tierra y territorio expresada en el ordenamiento territorial demuestra en síntesis una desarticulación entre su diseño y su implementación, esta desarticulación es conceptual, programática e institucional, *conceptual* porque las metas que se fijan a nivel del Estado no pueden ser alcanzadas por las condiciones humanas de los equipos de su estructura encargada de esta tarea, y principalmente porque no hay unanimidad en la comprensión del concepto tierra y territorio entre las unidades gubernamentales estas diferencias se hacen mayores cuando nos remitimos a considerar la conceptualización de tierra-territorio de los diferentes actores del Espacio Boliviano y que será importante estudiarlas, *programática* por que los procesos de implementación se van anteponiendo a los procesos de organización y definición de la política e *Institucional* porque no existe una adecuada articulación entre niveles nacional, departamental y municipal.

En el tema tierra-territorio el aspecto legal, que se circunscribe a la propiedad de la tierra es importante recordar que las comunidades tienen en propiedad mas del 98% del territorio del área del PNT, y las invasiones ilegales en el límite sur van aumentando anualmente, entonces se observa que existen disfunciones en los objetivos por los que fue creado el PNT, puesto que por un lado se establecen reglas que restringen el acceso a los recursos de los territorios de los propias comunidades, y por otro lado se recorre el límite Sur a una cota, que al momento otra vez ha sido invadida ilegalmente lo cual es una evidencia del poder ejercido por grupos de élite de la ciudad de Cochabamba, que a su vez influyen en las políticas publicas.

La situación de incertidumbre con respecto a la delimitación del territorio del Parque Nacional Tunari, no ha prosperado hasta ahora debido a las grandes contradicciones que se ha dado en torno a tema desde el punto de vista de las diferentes instituciones que tendrían que participar en su implementación, lo que nos lleva a la conclusión que este es y será uno de los puntos de mayor conflicto, porque el tema Tierra-Territorio es que más atención ha copado en las organizaciones campesinas.

En los niveles comunales se mantiene una estructura de gestión territorial, no reconocida por el Estado basada en principios comunitarios, de reciprocidad y redistribución cuya Gestión está a cargo de las autoridades tradicionales locales que organizan la producción y el acceso al territorio y los recursos naturales a través de una diversidad de formas que superan las limitaciones que se tienen en la regulación de la propiedad privada.

Un aspecto relevante en el estudio preliminar realizado en la configuración de Tirani, es ver como las políticas actúan como medios coactivos en la transformación de los hábitos de la gente, y cambia paulatinamente sus lógicas de gestión, en este caso nos referimos a la gestión del territorio, en el cual se da todo un proceso de cambio en la lógica que desemboca en un problema suburbano, que al mismo tiempo a nivel de las comunidades induce a una inseguridad alimentaria familiar.

Bibliografía

AGRUCO

- 2000 Diagnóstico Participativo y Plan de uso del Suelo del Ayllu Majasaya Mujlli, Municipio Tapacarí. Cochabamba-Bolivia. 83p
- 2002 Proyecto "Conflictos y procesos de Transformación entre los actores locales y las políticas publicas en la gestión de la Naturaleza y la Biodiversidad en el PNT".
- 1994 Informe final sobre el estudio piloto "Bosque y árboles en la vida de las comunidades de Chorojo y Paredones. Doc. Institucional AGRUCO 1994 BURKART R. MORELLO J. MARCHETTI (2000) Las áreas protegidas en el tercer milenio. Universidad de Buenos Aires. 17p.

BOLIVIA

- 1960 Constitución Política del Estado 10. ed. Gisbert editores, 1960, La Paz-Bolivia. 81p

CHAYANOV, A. V.

- 1974 La organización de la unidad económica campesina. Nueva visión, Bs. As.-Argentina. 342p.

DELGADO, F.

- 2001 Simbiosis interzonal en las estrategias de autodesarrollo sustentable en ecosistemas de montaña: El caso del Ayllu Mujlli de la Provincia Tapacarí. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba-España. ed. 406 p. DORY D. MANZANO N. "Lógicas territoriales y políticas pública las condiciones de gobernabilidad democrática en Cochabamba. P. 46. pp. 129 La Paz-Bolivia.

- 1993 La Agroecología en las estrategias del Desarrollo Rural. Una experiencia institucional. (Trabajos del Colegio Andino 9). Centro Bartolomé de Las Casas, Cusco-Perú, 2da edición. 166p.
- DELGADO y TAPIA
1998 Políticas y Estrategias Gestión de la Investigación en Agroecología y Revalorización del Saber Local para un Desarrollo Sustentable. AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. 29 p.
- EARLS, JOHN
Planificación agrícola andina. Bases para un manejo cibernético de sistemas de andenes. Lima, COFIDE, 1989. Págs. 443.
- JUSTINIANO
2001 Políticas de tierras: El caso de Bolivia documento preparado para el Encuentro sobre políticas de manejo Territorial. 25p.
- LISPERGUER, G. et. al.
1989 Organización de la producción en el Ayllu Mujlli, cantón Challa, Provincia Tapacarí. Serie Técnica 17. AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 22p.
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN SERNAB
2002 Políticas para el sistema nacional de áreas protegidas.
- PARK
1989 Que es la investigación acción participativa. Perspectivas teóricas y metodológicas en: Salazar, María C. La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollo. Popular, Madrid-España, 1992. pp. 135-174.
- PEREIRA, D.
2001 Estudio socioeconómico del limite sur del Parque Nacional Tunari elaborado para la prefectura del Departamento de Cochabamba.
- PLATT, T.
1982 Estado Boliviano y Ayllu Andino: Tierra y tributo en el norte de Potosí. Historia andina. N° 9. Lima: IEP. 197p.
- RASNAKE
1989 Autoridad y Poder en Los Andes. Los Kuraq Kuna de Yura. HISBOL, La Paz-Bolivia, 282p.
- RIST, S.; et. al.
2000 Cosmovisión andina y desarrollo autosostenible. . En: Haverkort, B.; et. al. Comida para el pensamiento: visiones antiguas y experiencias nuevas de la gente rural. Cochabamba: COMPAS. 267p.
- RIST, S.
1992 Desarrollo y Participación. Experiencias con la revalorización del conocimiento campesino en Bolivia. Serie Técnica 27. AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 58p.

SAN MARTÍN, J.

- 1998 UKAMAPI. Así no más es pues. En la búsqueda del enfoque para el desarrollo rural autosostenible. UMSS-AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 199p.

S. BOISIE

- 1995 Ordenamiento territorial y Proyecto Nacional, CEPAL-ILDIS Dirección de políticas y Planificación Regionales Documento 95/31 Santiago de Chile pp. 1.

SENADO NACIONAL

- 2001 Proyecto de Ley N°. 142/00-01 Proyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial.

SERRANO E.

- 2003 Influencia de las relaciones sociales de reciprocidad y parentesco en la reproducción de los sistemas de producción indígenas para una agricultura sostenible. AGRUCO-UMSS. P. 246

TAPIA, N.

- 2000 "Agroecología y Conocimiento Campesino en los Andes: el caso del Ayllu Majasaya Mujlli. Cochabamba-Bolivia. Tesis Doctoral, a Universidad de Córdoba, España. 302p.

URIOSTE, M.

- 1988 Segunda reforma agraria: campesinos, tierra y educación popular. Talleres CEDLA. N° 1. La Paz: CEDLA. 219p.

Medio ambiente y biodiversidad desde una perspectiva transdisciplinaria, pautas para un nuevo enfoque para el Parque Nacional Tunari

Sebastián Boillat¹

1. Introducción

Desde que existe preocupación por las amenazas a la diversidad biológica, desde la ciencia y desde las esferas políticas, se desarrollaron diferentes enfoques para la conservación de la biodiversidad. En una primera etapa se dio énfasis en la protección de especies animales y vegetales consideradas como importantes, mediante restricciones de caza, recolección o comercio para estas especies. En una segunda etapa se buscó proteger a estas especies dentro de su ambiente natural, condición fundamental para asegurar su conservación a largo plazo. Se crearon entonces áreas protegidas en que se restringen las actividades económicas sobre la base de estudios hechos por expertos científicos.

En este marco, numerosos conflictos sociales aparecieron en las áreas protegidas debido a la oposición de las poblaciones locales que se ven imponer restricciones en el uso de sus recursos sin que se les involucre en la gestión del área y los procesos de toma de decisiones. Además, el enfoque conservacionista se reveló ineficiente cuando la reproducción de la biodiversidad esta ligada a una actividad humana tradicional.

Consciente de estas fallas, la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) introdujo en 1999 el concepto de enfoque de ecosistemas que incluye 12 principios con el objetivo de implementar *una estrategia para la gestión de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve su conservación y uso sostenible de manera equitativa*" (CDB, 1999). Estos principios implican, entre otros, (1) consensos sociales en la gestión de

1 Ingeniero en Medio Ambiente de la Universidad de Berna-Suiza. Doctorante del individual project 1 de NCCR y AGRUCO-UMSS.

los recursos, (2) la descentralización de esta gestión al nivel más bajo posible, (3) la consideración del saber local e indígena de los ecosistemas, y (4) la valoración de los ecosistemas no solamente como hábitat para las especies, sino también por su estructura y sus funciones ecológicas en general.

Las implicaciones de este nuevo enfoque son múltiples. Dar un valor a los ecosistemas como tales implica definirlos para poder planificar y consensuar su manejo. Sin embargo no existen en la naturaleza límites y características de los ecosistemas que pueden ser definidas en forma única y objetiva, y su clasificación y diferenciación siempre es arbitraria (Bisby et al., 1995).

La definición de los ecosistemas es entonces el resultado de un proceso de construcción social que varía en una dimensión intercultural. En otras palabras, un ecosistema no es nada más que una división arbitraria del medio ambiente, definida por un grupo de personas para poder comprender y gestionar a la naturaleza. En este contexto, las comunidades locales que viven en las áreas protegidas también tienen su propia definición de los ecosistemas que es de igual valor que la definición que les dan los científicos.

Aplicar este nuevo enfoque en la gestión de áreas protegidas requiere considerar el conocimiento del medio ambiente y su manejo en forma transdisciplinaria. La investigación transdisciplinaria no significa solamente que la realidad tiene que ser entendida desde las ciencias naturales y sociales (enfoque multidisciplinario), sino que el conocimiento tiene que ser extendido también del lado de los actores locales y sus propias interpretaciones de la realidad (Hurni et al., 1999). Por lo tanto, llegar a una gestión sostenible y social de un área como el de la Cordillera del Tunari requiere de una investigación participativa con los actores locales, a fin de establecer un diálogo para discutir en forma participativa el estado del medio ambiente y las potencialidades para su gestión local sostenible.

2. Objetivos y metodología

El objetivo de esta investigación es de comprender las concepciones de los campesinos indígenas andinos del medio ambiente y sus relaciones con el concepto de la biodiversidad de ecosistemas, y discutir sus potencialidades y limitaciones para una gestión sostenible de la biodiversidad, usando estudios de caso en el Parque Nacional Tunari.

En una primera fase, se debe realizar un estudio de la biodiversidad de ecosistemas en forma separada desde la visión indígena y científica. Luego se identificarán los principios básicos y la epistemología de ambos tipos de conocimiento, para poder compararlos y discutirlos en forma participativa, y finalmente formular pautas para su integración o consenso para la gestión sostenible de la zona del Parque Nacional Tunari.

Lo que ya se realizó fue una caracterización ecológica del Parque Nacional Tunari, y una investigación explorativa de la visión indígena del medio ambiente a partir de estudios realizados por AGRUCO en la comunidad de Chorojo. Esto permitió emitir resultados preliminares e hipótesis para continuar la investigación, y que también ya son un aporte para la propuesta de un nuevo enfoque para el Parque Nacional Tunari.

3. Caracterización ecológica del Parque Nacional Tunari

Ecoregiones en el Parque Nacional Tunari

El Parque Nacional Tunari corresponde al macizo andino de la Cordillera del Tunari, parte de la Cordillera Oriental de Bolivia. La Cordillera del Tunari representa un promontorio de tierras altas orientado hacia los Yungas, cerrando de ambos lados zonas de valles secos interandinos en Cochabamba y Ayopaya. La parte central del Parque abarca estas tierras altas que pertenecen al distrito biogeográfico de la Puna Peruana (Navarro & Maldonado, 2002) teniendo mayor afinidad con las punas húmedas de La Paz y del Perú que con las punas ubicadas más al sur, más áridas. Estas zonas de Puna son relativamente homogéneas en todo el área del Parque y pueden ser consideradas como perteneciendo a una sola ecoregión.

De acuerdo al mapa global de ecoregiones del WWF (Olson et al., 2001), existen tres ecoregiones en el Parque Nacional Tunari: (1) la Puna Andina Central, que corresponde a la Puna Peruana de Navarro & Maldonado (2002), los Bosques Montanos Secos de Bolivia, que corresponde a las zonas de valles secos, y (3), los Yungas Bolivianos. Tomando en cuenta los ombroclimas de estas diferentes zonas (Navarro & Maldonado, 2002), se distinguen las zonas de valles entre valles secos en el Sur (principalmente el valle de Cochabamba) con clima pluviestacional a xérico, y los valles subhúmedos de Ayopaya, con clima netamente pluviestacional. Una tercera categoría de valles es representada por los Yungas hiperhúmedos del Chapare, hacia el noreste, con clima pluvial. De acuerdo a Navarro & Maldonado (2002), las partes altas de los Yungas, a pesar de ya no ser valles, tienen características más afines con la región de Yungas que de la Puna, por su clima pluvial.

Entonces se pueden definir para el Parque Nacional Tunari cuatro zonas ecológicas: (1) la zona de puna, entre 3200 y 5000 m con clima pluviestacional, (2) la zona de valles secos entre 2000 y 3200 m con clima pluviestacional a xérico, (3) los valles subhúmedos entre 900 y 3200 m con clima pluviestacional, y (4) la zona de yungas y puna hiperhúmeda entre 2000 y 4300 m con clima pluvial (fig. 1, cuadro).



Figura 1: Principales ecoregiones en el Parque Nacional Tunari.

**Principales Ecoregiones del Parque Tunari
(en base a Navarro & Maldonado, 2002)**

Eco región	Puna	Valles secos	Valles subhúmedos	Yungas
Altura	3200 - 5000 m	2000 - 3200 m	900 - 3200 m	2000 - 4300 m
Ombroclima	Pluviestacional	Pluviestacional Xérico seco Xérico semiárido	Pluviestacional	Pluvial
Termoclima	Supratropical Orotropical Criorotropical	Mesotropical	Termotropical Mesotropical	Mesotropical Supratropical Orotropical

Ecosistemas en el Parque Nacional Tunari

A cada ecoregión corresponde una vegetación nativa característica, que representa la vegetación natural potencial, es decir lo que crecería allí tomando solamente en cuenta el bioclima y no factores edáficos y humanos. Existe información detallada sobre la vegetación natural potencial en la zona andina gracias a los trabajos de Navarro & Maldonado (2002) y PROBONA (2003). Cada ecoregión tiene su vegetación natural potencial específica en función a sus diferentes pisos ecológicos.

Por ejemplo, la vegetación característica de la zona de puna son bosques de kewiña (*Polylepis besseri* y *Polylepis racemosa*) hasta una altura de aproximadamente 3900 m, luego matorrales con *Baccharis* spp. y pajonales en la zona alta. En los valles, debajo de 3200 m, son bosques de soto (*Schinopsis haenkiana*), kacha kacha (*Aspidosperma quebracho-blanco*), lloque (*Kageneckia lanceolata*) o pino colorado (*Prumnopitys harmsiana*) para los valles subhúmedos.

Sin embargo, considerar solamente la vegetación natural potencial en el caso del Parque Nacional Tunari sería ignorar un gran número de ecosistemas que son, por una parte, condicionados por factores edáficos como suelos pobres y pedregosos, o zonas húmedas, y por otra parte productos de la influencia humana.

Un breve recorrido de la Cordillera muestra claramente que en la mayor parte de su territorio ya no existen bosques nativos, o han sido reducidos a bosques relictos de un tamaño no mayor a una ladera. La observación de imágenes Landsat 7 muestra también claramente la ausencia de grandes extensiones de vegetación densa. Otra manera de constatar este hecho es consultar el mapa de estado de conservación de los bosques nativos andinos de Bolivia elaborado por PROBONA (2003). Este muestra que, a diferencia de áreas protegidas vecinas como el Parque Nacional Carrasco o el TIPNIS, la mayor parte del territorio del Parque Nacional Tunari se encuentra en un estado de conservación crítico a muy crítico de acuerdo a la vegetación nativa.

Esto quiere decir que en el PNT, la mayor parte de la vegetación ha sido modificada por la acción humana. La mayoría de las actividades que se desarrollan en el área del parque son ligadas a la agricultura tradicional andina, practicada por comunidades de origen Quechua. La agricultura andina crea y re-crea en forma permanente diversos tipos de ecosistemas, como parcelas cultivadas, pero también matorrales y pastizales de las zonas de pastoreo y de las parcelas en descanso. Existen también, en forma relativamente nueva, bosques exóticos de eucaliptos y de pinos plantados.

Varios estudios en diferentes regiones del mundo mostraron que existe una relación estrecha entre sistemas de agricultura tradicional y dinámica de los ecosistemas a nivel de paisaje. Es especialmente el caso en zonas donde la agricultura tradicional es relativamente antigua y corresponde a un centro de civilización, como por ejemplo el Mediterráneo Europeo (Naveh, 1998), el Suroeste de México (Gerritsen, 2002) o los altos Andes (Tapia, 2002).

En un sistema de agricultura tradicional, los ecosistemas siguen una dinámica definida por la organización de la producción. Existen relaciones entre los ecosistemas que son el resultado del manejo campesino de los patrones de sucesión, tanto sucesión ecológica como sucesión en los tipos de uso del suelo (Gerritsen, 2002).

En este tipo de agricultura, la relación entre los campesinos y la naturaleza puede ser comprendida como un proceso de co-producción, que es la interacción vigente y el proceso continuo de transformación entre los campesinos y la naturaleza.

La co-producción puede, bajo ciertas condiciones, llevar a una transformación de la diversidad en las actividades de producción y en los recursos biológicos (Gerritsen, 2002). En otras palabras, el campesino produce a la naturaleza y la naturaleza produce al campesino en un contexto dinámico. Esta dinámica implica una adaptación mutua entre campesinos y naturaleza que se implementa a lo largo de las generaciones que van reproduciendo una continuidad en la co-producción basada en la continuidad de la cultura. La co-producción implica también la co-evolución, una respuesta adaptativa de los ecosistemas y especies a las prácticas humanas, y vice-versa.

Un factor determinante para la creación y mantenimiento de una alta diversidad de ecosistemas es la diversificación de la producción: una estrategia de uso múltiple del medio ambiente implica atribuir varios valores diferentes a los recursos naturales que tienen que ser conservados y creados. Al contrario, una estrategia de uso basado en un solo recurso, le quita valor a los demás recursos naturales que ya no son mantenidos y destruidos (Gerritsen, 2002). Una estrategia de uso diversificado del medio ambiente implica que la relación campesino-naturaleza respete a los ciclos de vida. Si deja suficientemente espacio para permitir los procesos evolutivos naturales y mantiene una biodiversidad suficiente para asegurar la base genética de estos procesos, se crea un sistema sostenible con su diversidad de ecosistemas y de recursos que depende de la actividad humana. Este sistema no tiene menor valor que los ecosistemas naturales. En este contexto los ecosistemas naturales tienen que ser comprendidos como elementos que son parte integrante de un sistema ecológico más amplio que incluye al hombre y sus actividades.

Esta claro que la agricultura tradicional andina, esencialmente de subsistencia, se apoya en estrategias diversificadas de producción que permite minimizar los riesgos (Serrano, Rist et al., 1994). Por lo tanto, a pesar de que aún no se hayan realizado estudios detallados de la diversidad de ecosistemas en la zona andina, se puede emitir la hipótesis de que la agricultura tradicional andina juega un papel fundamental en la creación y la conservación de la diversidad de ecosistemas en el paisaje andino.

4. Cosmovisión andina y medio ambiente

En la cosmovisión andina, cohabitan tres ámbitos de vida, la vida material, la vida social y la vida espiritual que se interrelacionan para conformar el espacio-tiempo de la vida cotidiana (San Martín, 1997). Estos tres ámbitos están presentes en los diferentes grupos de conocimientos que manejan los campesinos para describir, categorizar e interpretar al medio ambiente. Es posible reconocer a estos ámbitos de vida relacionando a estos grupos de conocimientos. Un ejemplo es la relación entre zonas de producción, predicción climática y seres espirituales que existe en la comunidad de Chorojo (Ponce, 2003).

Zonas de producción

Una zona de producción es un conjunto territorial de recursos productivos, manejado por la comunidad y en el cual la producción es realizada de manera específica (Mayer, 1992). Es la primera división que se hace del territorio en una comunidad y que permite la organización de la producción. Cada zona de producción tiene infraestructuras, repartición de los recursos, regulación de la utilización de los recursos específicos. Las zonas de producción no son iguales que pisos ecológicos, son creadas por el hombre y no son estáticas. Su establecimiento obedece no solamente a limitaciones ecológicas, sino también a los objetivos y necesidades de los actores: que producir, para qué y dónde (Mayer, 1992). Generalmente, las familias tratan de asegurarse acceso a diversas zonas de producción.

En la comunidad de Chorojo por ejemplo, la zona más alta de la comunidad es denominada Pata Loma (Serrano, 2003). Se encuentra a una altura de 4500-4600 m con fuerte presencia de rocas. Es una zona de pastoreo temporal. Entre 4000 y 4500 m se encuentra la zona de Loma (Serrano, 2003), con pastizales y bosquetes arbustivos que son de uso exclusivamente pastroril. La parte más alta apta para la agricultura se encuentra entre 3800 y 4000 m y consiste en las Aynoqas, que son sectores determinados del territorio de propiedad comunal. La organización comunal regula y facilita el acceso de todas las familias a estos sectores. Existen 12 aynoqas y cada año la comunidad identifica una aynoqa que será cultivada por 3 años consecutivos. De esta manera son siempre dos a tres aynoqas que son cultivadas, mientras las demás sectores se encuentran en descanso y sirven enteramente como áreas de pastoreo. En esta zona, el descanso de las tierras dura entre 7 y 12 años. La zona de Chaupi Loma, entre 3600 y 3800 m, se caracteriza por la propiedad familiar de tierras a secano con 4 años consecutivos de cultivos de tubérculos andinos y cereales, y descansos entre 1 a 5 años (Serrano, 2003).

La zona dicha Chimpa (Ponce, 2003) corresponde a la vertiente opuesta a los asentamientos poblacionales. Por su exposición en el solano, es una zona más seca y árida, dónde se desarrolla una agricultura en parcelas familiares. La producción es a secano y se realiza en esta zona solo en los años lluviosos. Allí los periodos de descanso son mayores y dependen de la variación anual en la ocurrencia de precipitaciones. La zona de Monte (Ponce, 2003; Serrano, 2003) corresponde al bosque nativo de kewiñas (*Polylepis besseri*) entre 3500 y 3800 m. Existen parcelas de propiedad familiar para el cultivo a secano de tubérculos y cereales, fuera y dentro del bosque. Esta zona es especialmente aprovechada en años secos. Fuera del bosque, el descanso de las parcelas es de 3 a 18 años, dentro del bosque, solo 1 año (Serrano, 2003). La parte central de la comunidad dónde también se encuentra la escuela es denominada Ura (Serrano, 2003) también Chaupi Loma o Rancho (Ponce, 2003). Allí, entre 3200 y 3600 m, se concentra el mayor asentamiento poblacional y la propiedad de las parcelas es familiar. La agricultura es intensiva y bajo riego,

y tiene la mayor diversidad de cultivos con hortalizas y leguminosas además de tubérculos y cereales. La producción incluye siembras miskas de papa y en bersa de cereales, que permiten tener 3 cosechas en 2 años. Los periodos de descanso de las parcelas varían entre 0 y 5 años (Serrano, 2003). Finalmente, la parte más baja de la comunidad es la zona Uraman (Serrano, 2003), debajo de 3200 m. La propiedad es familiar. La preferencia es dada al cultivo de maíz, asociado con leguminosas. El descanso de las tierras es generalmente entre 1 a 5 años, la producción intensiva se da solo en caso de parcelas que disponen de riego (fig. 2).

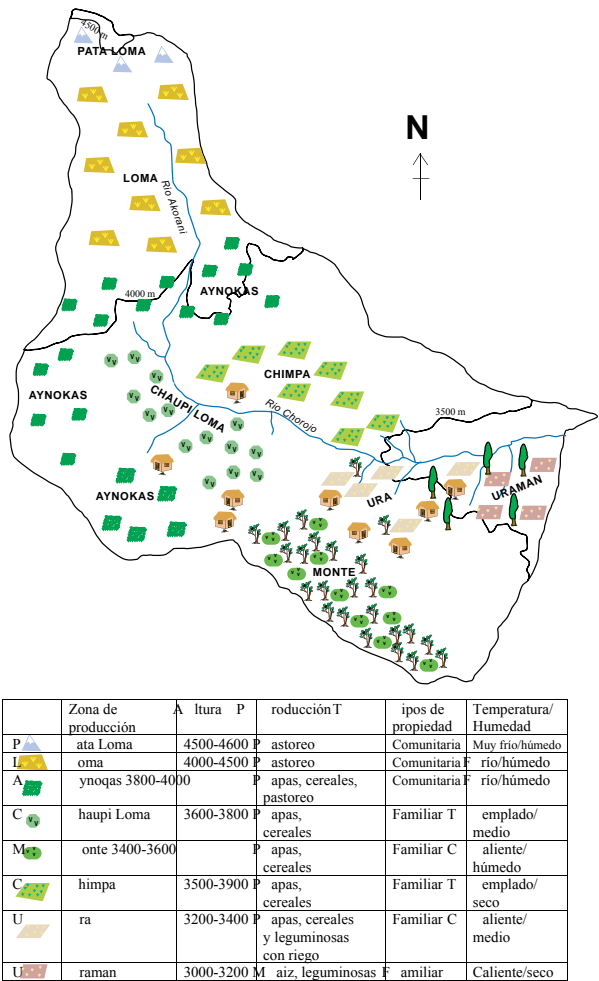


Figura 2: Zonas de Producción en la comunidad de Chorojo (Ponce, 2003, modificado).

La predicción climática y su relación con la dinámica de uso de la tierra

En la comunidad de Chorojo, la diversidad de zonas de producción es de importancia fundamental para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad alimentaria de los comunarios. Es por eso que las familias de la comunidad siempre buscan asegurarse el acceso a parcelas cultivables en las diferentes zonas de la comunidad, sea mediante relaciones de reciprocidad o parentesco (Serrano, 2003).

Sin embargo, el periodo de descanso de las parcelas varía y la intensidad de uso de estas parcelas no es constante. Un factor determinante para la planificación y la ejecución de actividades productivas es la predicción del clima, que tiene como objetivo otorgar las pautas suficientes a las familias campesinas sobre las características climáticas que podrían presentarse en un determinado período agrícola (Ponce, 2003). Ya que el clima varía entre los años, entre las estaciones y dentro de ellas, estos cambios afectan, además a los humanos, a las plantas y a los animales que *“reaccionan de manera anticipada y mas notoria a estos cambios”* (Ponce, 2003). El cambio de clima también se expresa en fenómenos atmosféricos y el movimiento de los astros.

Existen entonces cuatro grupos de indicadores que utilizan los campesinos para la predicción climática: fitoindicadores, zooindicadores, indicadores atmosféricos e indicadores astronómicos. Concretamente, los campesinos andinos observan e interpretan a lo largo del año diferentes estados fenológicos de plantas silvestres, comportamiento de la fauna silvestre, así como fenómenos astronómicos y físicos, para luego tomar decisiones orientadas hacia la producción (Ponce, 2003). Los pronósticos climáticos son muy importantes para la planificación de las siembras, su inicio y su ubicación. Por ejemplo si la muña (*Satureja boliviana*) florece de manera adelantada, también se tendrán que adelantar las siembras (Ponce, 2003).

Los pronósticos climáticos también influyen en el uso de las diferentes zonas de producción de la comunidad. Si las observaciones generales para el año de producción le indican que habrá sequía, el campesino sembrará más en las zonas de mayor humedad (en el caso de Chorojo el Monte y las Aynoqas), empero si la previsión acusa que será un año de abundantes lluvias se labrará en las zonas con suelos secos, generalmente ubicadas en laderas (en Chorojo la Chimpa) (Ponce, 2001). Una base importante para el pronóstico general del año es la observación de la nitidez y el brillo de los astros. La observación de las Nubes Magallánicas (llamados *Qayana* por los indígenas) se relaciona directamente con las zonas de producción: si la *Puna Qayana* es grande y brillante, la producción será buena en las punas, si la *Valle Qayana* es grande y brillante, la producción será buena en los valles (Ponce, 2003). De acuerdo a San Martín (2001), las Nubes Magallánicas también se observan en las comunidades aymaras, y permiten

relacionar directamente el territorio de la comunidad con entidades cósmicas. Otra importante observación astronómica que se realiza en las comunidades andinas es la de la constelación de las Pléyades, o “Cabrillas”: *“Desde San Antonio miramos las cabrillas (Pleyades), si son grandes y titilean las estrellas de atrás hará frío pero retrasado, es decir los fríos vendrán retrasados”* (Francico Romero, Chorojo). (Ponce, 2001). Este último indicador corresponde a un elemento fundamental de la cosmovisión andina.

La cultura andina como integradora de los ámbitos de vida

Las Pléyades, indicador general de la predicción climática en las comunidades, se relacionan directamente con la creación. Se consideran como el centro de origen de la vida. Las Pléyades son el Chakastillu, la Cruz Mayor, o Sol de Soles, una energía fundamental del cosmos, encarnación del Ser Supremo Wiracocha Pachachic, la fuente de energía vital eterna, el hacedor y criador (San Martín, 2001).

La predicción climática mediante los astros es solamente un aspecto de la relación directa entre la producción, el manejo de los ecosistemas y aspectos sociales y espirituales. A lo largo del año, se practican toda una serie de rituales que se relacionan a la vez con los movimientos astrales y la organización social y productiva de la comunidad. Existen rituales en fechas claves para el inicio de siembras, fin del aporque de cultivos, cambio de autoridades, etc. El calendario se convierte entonces en el espacio de integración de todas las actividades de la comunidad, sean materiales-productivas, sociales y espirituales (Delgado, 2002). Para el hombre andino existen confluencias de energías muy profundas, integrantes e interactuantes, que repercuten no solo en el entorno sino en la totalidad. Esto implica una relación íntima de interacciones entre los tres ámbitos de la vida (material, social y espiritual) de cada acción en el cotidiano acaecer de la comunidad (Serrano, 2001).

La cultura andina es entonces holística-totalizadora, quiere decir que no pueden existir estos aspectos en forma separada y que los tres ámbitos se interrelacionan entre sí para formar la vida cotidiana (Delgado & Tapia, 1998). En la cosmovisión andina los tres ámbitos de la vida Pachamama (vida material), Pachakamak (vida espiritual) y Pachankamachaña (vida social) conforman la vida cotidiana (Pachankiri). Esta es la visión que ha sido adoptada por AGRUCO como enfoque institucional dicho enfoque Histórico-Cultural-Lógico (San Martín, 1997) para la comprensión de la vida en las comunidades andinas (fig. 3)

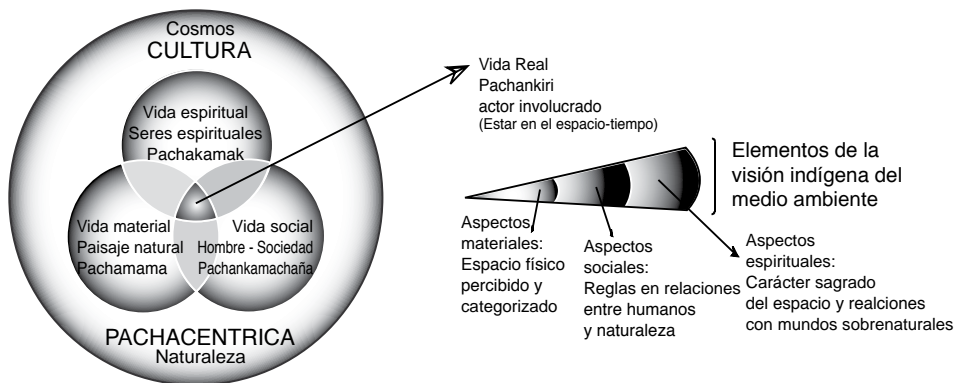


Figura 3: El enfoque Histórico-Cultural-Lógico aplicado a la visión indígena del medio ambiente.

5. Conclusiones

Los estudios realizados en la comunidad de Chorojo mostraron que la dinámica existente en el manejo de los diferentes ecosistemas que existen en su territorio está ligada a su visión del medio ambiente, que incluye aspectos materiales, sociales y espirituales que no pueden ser separados entre sí.

Al contrario, la ciencia busca comprender al medio ambiente separando a los ámbitos de vida, considerando aspectos materiales en el caso de las ciencias naturales y aspectos sociales en el caso de las ciencias sociales. Combinar a los dos es posible adoptando un enfoque interdisciplinario que busca integrar a las diferentes ciencias dentro del marco de la comunidad científica. Sin embargo no logra incluir al tercer ámbito de vida, el espiritual, que sólo se considera en la visión indígena. Adoptar un enfoque transdisciplinario, que busca además de la integración de las ciencias la integración de los conocimientos de los actores locales, implica tomar en cuenta a los aspectos espirituales del medio ambiente que existen en la visión indígena.

Considerar de manera integral a los tres ámbitos de vida es una condición para plantear la sostenibilidad del manejo de los ecosistemas en el Parque Nacional Tunari. Los conocimientos que tienen las comunidades campesinas y que se relacionan con estos tres ámbitos de vida pueden ser considerados como el resultado de los procesos de co-producción y de co-evolución que se implementaron en el paisaje andino a lo largo del desarrollo de las civilizaciones indígenas. Son las bases culturales que permiten la reproducción de la diversidad de ecosistemas y de recursos en la Cordillera del Tunari, caracterizada por la presencia de un paisaje cultural más que natural. A partir de un ecosistema nativo, el hombre andino crea una serie de ecosistemas que juega un rol específico en su visión del mundo. El

indígena andino enriquece a cada uno de estos ecosistemas con aspectos sociales y espirituales para formar un todo y aspirar a la reproducción de la vida o, en otros términos, a la sostenibilidad de su cultura.

Con estas consideraciones, podemos emitir la hipótesis de que son las comunidades campesinas que crean y mantienen la diversidad de ecosistemas en el paisaje andino. Es necesario por lo tanto continuar la investigación y profundizar la caracterización de los sistemas andinos de co-producción, desde una visión indígena como desde una visión científica. También es necesario identificar en forma participativa las amenazas, internas como externas, que ponen en riesgo la sostenibilidad de este sistema.

El diálogo intercultural que surge de este trabajo de investigación transdisciplinaria es de gran importancia para un área como el Parque Nacional Tunari, porque se caracteriza por su alta intervención humana de tipo agrícola-tradicional que les da una importancia fundamental a las comunidades para la gestión de la biodiversidad. La Cordillera del Tunari tiene que ser comprendida como un paisaje cultural que es el resultado de una co-evolución entre hombre y naturaleza.

En este contexto, un marco jurídico-legal demasiado rígido para un área protegida puede provocar no solamente conflictos con las poblaciones que habitan el área, sino también poner en riesgo a largo plazo la reproducción y el mantenimiento de la biodiversidad, porque esta estrechamente ligada a las actividades humanas tradicionales.

La situación ecológica y social actual del Parque Nacional Tunari sugiere que hay una necesidad urgente de volver a plantear el objetivo del área y abrir espacios de consenso entre el Estado y las comunidades locales. Solo en este contexto se podría lograr implementar propuestas de manejo que sean compatible con la realidad ecológica, social y económica del área, y pretender alcanzar la sostenibilidad en la gestión de los recursos de la Cordillera del Tunari.

Bibliografía

BISBY, F.A. et al.

1995 Characterization of Biodiversity. *in* Heywood, V.H. & Watson, R.T. (eds.) Global Biodiversity Assessment. Cambridge University Press, Cambridge for UNEP. 21-106.

Convention on Biological Diversity (CBD)

1999 Liasion Group Meeting on Ecosystem Approach. Report. Paris: Secretariat of the CBD.

DELGADO, F.; TAPIA, N.

1998 Políticas y estrategias de la investigación en agroecología y revalorización del saber local. Serie Memorias N° 5. Cochabamba: AGRUCO.

DELGADO, F.

- 2002 Estrategias de autodesarrollo y gestión sostenible del territorio en ecosistemas de montaña. Serie: La vida en las comunidades N° 2. La Paz: AGRUCO/Plural Editores.

GERRITSEN, P.

- 2002 Diversity at Stake. A farmers' perspective on biodiversity and conservation in western Mexico. Wageningen Studies on Heterogeneity and Relocalization, nr. 4. Wageningen, The Netherlands.

URNI, H.; WIESMANN, U.; KOHLER, T.

- 1999 Mitigating the syndromes of desertification: the requirements for transdisciplinary research and information exchange. EU Workshop on "information requirements and organizational approaches to support interdisciplinary research on desertification", Alghero, Sardinia.

MAYER, E.

- 1992 Zones de production: autonomie individuelle et contrôle communal. In: Morlon, P. (1992). Comprendre l'agriculture paysanne dans les Andes centrales. Paris: IRNA. 159-178.

NAVARRO, G.; MALDONADO, M.

- 2002 Geografía ecológica de Bolivia, vegetación y ambientes acuáticos. Cochabamba: Centro de Ecología Simón I. Patiño.

NAVEH, Z.

- 1998 From biodiversity to ecodiversity. Holistic conservation of the biological and cultural diversity of mediterranean landscapes. *Ecological Studies* 136: 23-53.

OLSON, D. M. et al.

- 2001 Terrestrial Ecoregions of the World. A New Map of Life on Earth. *BioScience* Vol. 51 N° 11, 933-938.

PONCE, D.

- 2003 Previsión del clima y recreación del conocimiento indígena en los Andes bolivianos. El caso de la comunidad Chorojo, Prov. Quillacollo, Dep. Cochabamba. Tesis de Maestría. Cochabamba: AGRUCO.
- 2001 La Predicción del clima en la cuenca Jatun Mayu. In COMPAS/ AGRUCO (2001). *Cosmovisión Indígena y Biodiversidad en América Latina*. Cochabamba: AGRUCO. 83-94

PROBONA

- 2003 Mapa de los Bosques Nativos Andinos de Bolivia. FAN-PROBONA. La Paz: Plural Editores

RODRÍGUEZ, C.

- 1994 Sistema de pastoreo en la comunidad de Chorojo, Prov. Quillacollo, Dep. Cochabamba. Tesis de Grado. Cochabamba: AGRUCO.

SAN MARTÍN, J.

- 2001 Conociendo a quienes afectan y guían el clima y la vida. El caso de los Andes. *In* COMPAS/ AGRUCO (2001). Cosmovisión Indígena y Biodiversidad en América Latina. Cochabamba: AGRUCO. 61-82.
- 1997 En la búsqueda del enfoque para el desarrollo rural autosostenible. Uk'amäpi, así nomás es pues. Serie: La vida en las comunidades N.1. La Paz: AGRUCO/Plural Editores.

SERRANO, E.

- 2001 Astros, clima y continuidad de vida en las comunidades. *In* COMPAS/ AGRUCO (2001). Cosmovisión Indígena y Biodiversidad en América Latina. Cochabamba: AGRUCO. 95-105.

SERRANO, E.

- 2003 Influencia de las Relaciones Sociales de Reciprocidad y Parentesco en la Reproducción de los Sistemas de Producción Indígenas para una Agricultura Sostenible. El caso de la Comunidad de Chorojo, Prov. Quillacollo, Dep. Cochabamba. Tesis de Maestría. Cochabamba: AGRUCO.

SERRANO, E.; RIST, S. et al.

- 1994 Informe final sobre el estudio piloto "Bosques y árboles en la vida de las comunidades de Chorojo y Paredones", parte Chorojo. Cochabamba: AGRUCO.

TAPIA, N.

- 2002 Agroecología y agricultura campesina sostenible en los Andes bolivianos. La Paz: AGRUCO/Plural Editores.

La capacitación como instrumento para el fortalecimiento de la gestión local de las áreas protegidas, el caso del “PAMS” en el Parque Nacional Tunari

Jaime Delgadillo P.¹
Juan Carlos Mariscal C.²

1. Introducción

El Programa de Capacitación en Control Social y Gobernanancia para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Parque Nacional Tunari que corresponde a las Acciones para Atenuar los Síndromes del Cambio Global (PAMS), ha sido gestionada e implementada en el marco de la cooperación entre la Universidad Mayor de San Simón representada por el Centro Agroecología Universidad Cochabamba de (AGRUCO-UMSS), el National Centre if Competence in Research North-South (NCCR N-S) representada por el Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo (IUED) de la Universidad de Ginebra y la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) que representa a las organizaciones campesinas de los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari (Tapacarí, Sipe Sipe, Vinto, Morochata, Tiquipaya, Quillacollo, Cercado, Sacaba, Villa Tunari, Colomi y Ayopaya).

El programa refleja los resultados de las discusiones sostenidas entre AGRUCO-UMSS y el IUED (responsable del IP8) que enfoca temas sobre gobernabilidad, gobernanancia, desarrollo humano y medio ambiente, por lo que este programa de capacitación se inserta a los “Modelos de Gobernanancia de Biodiversidad”

-
- 1 Ingeniero Agrónomo Responsable de investigación en AGRUCO y docente de la Facultad de Agronomía de la UMSS. Magíster candidato en Agroecología y Desarrollo Sostenible (Universidad de Córdoba-España).
 - 2 Ingeniero Agrónomo Investigador Asociado de AGRUCO y docente de la Escuela Técnica Superior de Agronomía. Magíster candidato en Economía de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Universidad Concepción-Chile).

del IP8, que es parte de la línea de acción llamada “Estrategias de Mitigación de Síndromes” del NCCR-NS. El PAMS ha sido planteada en base a la experiencia previa que desarrollo AGRUCO-UMSS en la capacitación a las organizaciones de base y los comités de vigilancia de 5 municipios en temáticas de “Control Social y Gestión Municipal”, las cuales fueron financiadas por el Programa de Inversión Rural Participativa (PDCR II), lográndose resultados satisfactorios que se buscan ampliar y replicar con el presente programa de capacitación.

En el marco del Programa de Investigación IP8, el PAMS busca facilitar y coadyuvar los procesos de investigación de tesis de doctorado a través de acciones de apoyo directo a las comunidades y organizaciones campesinas de los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari, siendo estos los beneficiarios directos del programa de capacitación. En ese sentido, la coordinación para la gestión y ejecución del programa de capacitación se ha realizado a través de los dirigentes de las organizaciones campesinas (federación, centrales y subcentrales) y las autoridades de los comités de vigilancia.

La justificación del programa de capacitación se circunscribe en la preocupación de la sociedad civil, las autoridades locales y principalmente las organizaciones campesinas, en que las soluciones a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales (RN) se generalizan a través de políticas de Estado que impulsan la creación de áreas protegidas dentro un marco jurídico-técnico en más de los casos, ajenos a la realidad del contexto local e incluso desconocido por involucrados o afectados por estas decisiones desde arriba. Estas acciones del Estado en vez de coadyuvar a la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, frenan la participación y las iniciativas locales en la gestión y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, creando muchas veces conflictos sociales.

De esta manera, las políticas de Estado obedecen a nociones de orden internacional que no necesariamente consideran los aspectos locales de manejo ni mucho menos los aspectos socioeconómicos y culturales de los actores locales. Esta situación que se reproduce a nivel de los gobiernos locales como los municipios, generan un síndrome de orden social y cultural que desemboca en una susceptibilidad latente de la sociedad civil respecto a sus derechos de acceso a sus territorios y a los recursos naturales. De ahí que la creación de áreas protegidas como el Parque Tunari desemboca en conflictos que inciden negativamente en la buena gobernabilidad municipal y nacional.

Actualmente las organizaciones de base y las autoridades responsables del control social como son los comités de vigilancia a nivel municipal, vienen cuestionando la actitud de sus representantes municipales (concejales y alcalde) y nacionales (poder legislativo y ejecutivo) por seguir y aplicar acciones y políticas contrarias a los intereses de las mayorías, lo que es un fuerte cuestionamiento al sistema democrático representativo en Bolivia. Pero al ser una

debilidad para el ejercicio de la buena gobernabilidad, es también el escaso conocimiento de los marcos legales por parte de la sociedad civil y los responsables del control social, lo que limita en las negociaciones que realizan, para incidir en las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales. Por ello es de vital importancia la capacitación de las autoridades locales, los responsables del control social y las organizaciones de base en general, para que así puedan ejercer adecuadamente sus funciones, hagan respetar sus derechos y en las negociaciones logren resultados a favor de las mayorías, esencialmente en las políticas y acciones relacionados a la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales.

Es en ese sentido que a los actores locales de los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari les corresponde intervenir y tomar decisiones al respecto, sin embargo este proceso hasta la fecha no ha prosperado debido a que en las organizaciones de base y los municipios no existe un entendimiento cabal de los marcos jurídico-legales referidos, por un lado, a las funciones y competencias de los actores locales y, por otro lado, a la comprensión de las leyes vigentes sobre las áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, la gestión municipal y el control social.

2. Objetivos y plan de capacitación

Por todo lo expuesto anteriormente, el programa de capacitación planteó los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Fortalecer la gobernabilidad en los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari a través del Programa de Capacitación en Control Social y Gobernancia para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad.

Objetivos específicos:

- 1) Discutir y analizar los actuales marcos técnico-jurídicos y socioeconómicos relacionados a la gestión municipal, el control social y los recursos naturales con los responsables del control social (principalmente comités de vigilancia y organizaciones campesinas) en ocho municipios del Parque Nacional Tunari.
- 2) Analizar y discutir la Estrategia Nacional de Biodiversidad con las organizaciones locales encargadas del control social para la gestión sostenible de la biodiversidad.

- 3) Discutir y analizar el tema del Parque Nacional Tunari y áreas protegidas desde las diferentes perspectivas de los actores sociales involucrados en la problemática.

2.1. Plan de capacitación

La capacitación ha seguido un plan estructurado en base a los siguientes componentes:

a. Planificación y motivación

La planificación y motivación correspondió a las siguientes actividades específicas:

- Reuniones de coordinación y planificación con dirigentes campesinos (de la FSUTCC, las subcentrales y centrales), autoridades municipales y comité de vigilancia. Aquí se cumplió con la socialización del proyecto y la programación de los cursos de capacitación, y
- Preparación de los contenidos y el material didáctico de capacitación para cada temática y ley establecida en el proyecto.

Las acciones de planificación y motivación se aplicaron durante toda la ejecución del programa de capacitación, puesto que era necesario mantener una coordinación permanente con los dirigentes campesinos, las autoridades municipales y los miembros de los comités de vigilancia para la realización de los cursos de capacitación.

b. Acciones de capacitación

Este componente correspondió a la realización de los cursos de capacitación en los 8 municipios afectados por el Parque Tunari, los cuales han sido estructurados en 3 módulos:

Módulo I. El objetivo de este modulo fue el de capacitar sobre los marcos legales vigentes relacionados con la gestión municipal, el control social y la gestión de los recursos naturales. En este módulo la capacitación se dividió en 3 partes. La primera parte trato: El Estado Boliviano, Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades y Descentralización y Ley del Diálogo 200. La segunda parte trato de los roles y funciones de las autoridades municipales, los comités de vigilancia y las organizaciones de base en la gestión municipal y el control social. Y la tercera trato: La Constitución Política del Estado y los Recursos Naturales (suelos, bosques, minerales,

aguas e hidrocarburos), Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal y Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria).

Módulo II. El objetivo de este módulo fue Analizar y reflexionar sobre la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Areas Protegidas en Bolivia. La capacitación se dividió en 2 partes. La primera parte trato de: La Estrategia Nacional de Biodiversidad, la situación actual de la conservación de la biodiversidad en Bolivia y la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas. En tanto que la segunda parte abordó los siguientes temas: El Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) y su marco legal y la importancia de la biodiversidad y del control social para la gestión sostenible.

Módulo III. Su objetivo fue el de analizar y reflexionar con los actores locales la problemática y la situación actual del Parque Nacional Tunari. Aquí la capacitación también se dividió en dos partes. La primera trato de los lineamientos técnicos-jurídicos de las áreas protegidas en Bolivia y el análisis sobre algunos casos de áreas protegidas en Bolivia. En una segunda parte se abordó el análisis y la discusión de la Ley y la problemática del Parque Nacional Tunari.

c. Seguimiento y evaluación

Este componente correspondió a las actividades de evaluación, particularmente de las acciones de capacitación conjuntamente los beneficiarios, lo cual se realizó al finalizar cada curso de capacitación. Este seguimiento correspondió también a una supervisión y monitoreo del cumplimiento del plan de trabajo que estuvo a cargo del director ejecutivo de AGRUCO y el Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC). En fase final contempló también la elaboración del informe.

3. Metodología de capacitación

El proceso de capacitación ha seguido una secuencia lógica según el plan y los componentes definidos en el proyecto. La planificación y motivación se desarrolló bajo una modalidad participativa y de concertación, principalmente con los dirigentes campesinos, para lo cual se realizaron reuniones donde, además de socializar el contenido del proyecto, se ha concertado las fechas y los lugares para la realización de los talleres de capacitación.

La capacitación se implementó a través de “cursos-taller” siguiendo un programa estructurado según las temáticas y leyes correspondientes para cada módulo. Cada temática y ley ha sido preparada en una presentación didáctica acorde con el nivel de educación de los beneficiarios que por lo general es de carácter básico.

Por ello, el material didáctico fue redactado en palabras simples y acompañado con ilustraciones y gráficos; el material didáctico fue preparado en base a una amplia revisión de bibliografía, documentos y las leyes y decretos correspondientes. Este material también fue facilitada a los beneficiarios en forma impresa.

Los cursos taller fueron desarrollados de una manera interactiva, dialogada y de aprendizaje mutuo entre capacitadores y capacitados, por lo que fue necesario realizar la capacitación en el idioma nativo de los actores locales que es el quechua. En ese marco los capacitadores no solo buscaron transmitir los contenidos de cada temática y de cada ley, sino esencialmente motivar a un “aprendizaje social” a través de una reflexión colectiva, constructiva y propositiva por parte de los participantes y capacitadores, lo que ha generado que exista amplios espacios de intervención abierta para los participantes, quienes no solo realizaron preguntas, sino que emitieron opiniones y realizaron reflexiones, análisis, críticas y propuestas a la situación y a los muchos problemas que enfrenta el sector campesino.

4. Resultados logrados: participación y reacción

Los resultados logrados con el programa de capacitación pueden visualizarse en los 3 componentes establecidos en el proyecto, es decir para la planificación y motivación, las acciones de capacitación y el seguimiento y evaluación.

4.1. Planificación y motivación

Las actividades de planificación y motivación se han cumplido de acuerdo a lo previsto en el proyecto y el plan de trabajo. La primera actividad del proyecto fue precisamente una reunión de planificación y motivación con los dirigentes campesinos de los municipios afectados por el Parque Tunari realizado en la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCB). En esta reunión se socializó el proyecto en forma extensa, para posteriormente realizar la planificación de los talleres para el Módulo I en cada uno de los municipios, actividad que consistió en fijar la fecha de realización de los talleres, el lugar, la alimentación y el tiempo de duración. Por otra parte, los dirigentes emitieron sugerencias y propuestas para mejorar los contenidos y el procedimiento de realización de los cursos-taller.

Posteriormente a esta reunión de planificación y motivación, las acciones de planificación y coordinación fueron permanentes entre el equipo técnico de capacitación, la dirección ejecutiva de AGRUCO y los principales dirigentes campesinos de la FSUTCB y las organizaciones campesinas de base (subcentrales, centrales y sindicatos comunales). De esta manera por ejemplo la planificación del Módulo II se realizó a la finalización de los cursos taller del Módulo I, y para el Módulo III finalizado los cursos taller del Módulo II. Sin embargo, se debe indicar que algu-

nos talleres no han podido realizarse en la fecha planificada debido a coyunturas imprevistas como el mal estado de los caminos por la excesiva precipitación y los bloqueos de caminos por las organizaciones campesinas, razón por la que se tuvo que postergar y planificar nuevamente las fechas de realización de los cursos taller, lo que retrasó la conclusión del proyecto en algunas semanas y que fue comunicado oportunamente al NCCR a través de una carta.

La planificación con los dirigentes campesinos que tuvo un carácter de concertación a través de una discusión y análisis, ha determinado no solo la fijación de las fechas y los lugares para la realización de los cursos taller, sino también el ajuste y la modificación de algunos puntos de los programas de los cursos taller. Esta dinámica hizo que el proyecto se enmarque en una planificación participativa y flexible que es propio de las comunidades campesinas, puesto que su íntima relación con la naturaleza hace que la incertidumbre sea parte de las acciones cotidianas de las sociedades, lo que muchas veces no es considerado en los niveles académicos e institucionales. Más adelante se detallan los programas desarrollados para cada módulo de capacitación considerando algunas modificaciones respecto a lo planificado en el proyecto.

4.2. Participación en los cursos de capacitación

Dentro las acciones de capacitación se cumplieron con todos los módulos y cursos taller programados, lográndose por cada módulo una participación muy variable. Para una mejor apreciación de la participación de hombre y mujeres en los cursos de capacitación, a continuación se muestra para cada módulo.

Módulo I

La participación en este módulo fue el siguiente:

Participación en cursos taller del módulo I

Municipio	Fecha de realización	Lugar de realización	Participantes		
			Hombres	Mujeres	Total
1. Tapacarí	12-9-2003	Tapacarí	79	15	94
2. Sacaba	13-9-2003	El Morro- Sacaba	36	16	52
3. Sipe-Sipe	4-10-2003	Tajamar- Sipe Sipe	55	3	58
4. Cercado	5-10-2003	Escuela Tirani	26	6	32
5. Vinto	24-10-2003	Motecato-Vinto	33	10	43
6. Tiquipaya	5-12-2003	Chapisirca	33	3	36
7. Independencia	28-11-2003	Independencia	12	36	48
8. Morochata	6-12-2002	Morochata	84	5	89
Total			358	94	452

Como se puede advertir en el cuadro anterior, la participación fue muy variable en cada uno de los municipios, lográndose en algunos casos una participación muy superior a lo previsto en el proyecto; en otros casos, algo inferior. Esta situación tiene que ver mucho con el tamaño y número de comunidades en cada municipio, además de la motivación y el interés de las organizaciones campesinas. El número de asistentes en cada uno de los cursos taller fue el siguiente:

El promedio de asistencia por curso taller para el módulo I fue de 57 personas, existiendo una predominancia de hombres, aunque la participación total de mujeres fue importante ya que asciende a un 20.8% del total, lo que demuestra una paulatina incorporación de la mujer a procesos de capacitación que en años pasados era casi totalmente excluida. En el caso de Independencia la participación de mujeres fue mayoritaria, ya que el interés de las organizaciones de mujeres de este municipio fue mucho mayor que en otros municipios.

Considerando el promedio de asistencia en este módulo, se puede concluir que se ha cumplido con el grupo meta previsto en el proyecto y que se ha superado las expectativas de participación de las mujeres. El haber superado el número de participantes en los municipios de Tapacarí y Morochata podría significar un problema, sin embargo esto no fue así, puesto que la infraestructura y el mobiliario existente en estos municipios facilitan la realización de los cursos taller con un 40% más de lo establecido.

Por otra parte, con la realización de los cursos taller en los 8 municipios previstos como beneficiarios del proyecto se ha cumplido con el Módulo I en un 100%, logrando en todos los municipios desarrollar 9 temáticas estructuradas en tres partes según el programa.

Sin embargo, la participación no solo se refiere a la asistencia en términos de números de personas, sino que también a la reacción de los participantes frente a la temáticas tratadas, que a manera de síntesis se puede destacar los siguientes puntos relevantes obtenidos de los mismos testimonios de los participantes:

- La primera parte que trató la gestión municipal, ha tenido muy buena aceptación y provocó mucho interés sobre todo en aquellos municipios que en la actualidad tienen conflictos políticos y de gobernabilidad, como son el casos de Morochata, Vinto y Tiquipaya. Mientras que en municipios como Tapacarí y Sipe Sipe donde ya se realizó acciones de capacitación sobre algunos temas de la gestión municipal, el interés fue algo menor pero no menos importante, además en estos municipios la gobernabilidad a mejorado en los últimos años justamente por el efecto de algunos proyectos de capacitación en control social y gestión municipal en los que AGRUCO-USS participó como entidad capacitadora.

- La segunda parte que trato de los roles de la autoridades y el control social, también provocó mucha reacción principalmente por el desconocimiento que se tiene de las atribuciones de las organizaciones de base y del comité de vigilancia para ejercer control social sobre la gestión municipal. En muchos municipios esta temática fue considerada desconocida y que era urgente conocer para poder tomar acciones sobre los malos manejos y la corrupción que se genera al interior de algunos Gobiernos Municipales.
- La tercera parte que trato de las leyes relacionadas a los recursos naturales, por los testimonios de los participantes, fue muy novedoso ya que nunca antes habían tenido cursos de capacitación sobre las leyes bolivianas principalmente de la Constitución Política del Estado (CPE) que para la mayoría era muy poco conocido. Muchos participantes en sus intervenciones coincidieron en indicar que la CPE es violada por los mismos Gobiernos y por todos los que ostentan poder en Bolivia; asimismo expresaron la necesidad que existe de reformar la CPE para garantizar un Estado que se ocupe más de los pobres y de las desigualdades en Bolivia.
- Otro tema muy discutido fue el de la Ley INRA que tiene que ver directamente con el área rural y los campesinos, ya que en los últimos años se ha generado una gran incertidumbre sobre la propiedad y los derechos campesinos sobre la tierra. La Ley Forestal y de Medio Ambiente fue recibido más como información y con menos reacción posiblemente porque hasta el momento estas leyes no han afectado directamente el derecho y la soberanía de las comunidades campesinas. En torno a la discusión de los recursos naturales surgió también el tema del Gas, que en la actualidad es muy discutido en Bolivia.
- Finalmente, los participantes y principalmente los que intervinieron con sus opiniones los cursos taller evaluaron de positivo y de muy provechoso para las organizaciones campesinas en la perspectiva de avanzar con la capacitación de sus dirigentes y autoridades y a través de esto, fortalecer sus organizaciones. Se expresaron muchos agradecimientos por parte de los participantes y dirigentes a todas las instituciones que hicieron posible la realización de los cursos taller de capacitación.

Módulo II

Como en el caso de los cursos taller del Módulo I, la asistencia y participación en el Módulo II fueron variables en cada uno de los municipios, sin embargo se pudo constatar que una mayoría de los asistentes fueron los mismos que participaron en el Módulo I, lo que garantizó una continuidad al proceso de capacitación. Esta participación fue el siguiente:

Participación en cursos taller del módulo II

Municipio	Fecha de realización	Lugar de realización	Participantes		
			Hombres	Mujeres	Total
1. Tapacarí	12-11-2003	Tapacarí	60	16	76
2. Sacaba	30-11-2003	Challviri	79	7	86
3. Sipe-Sipe	5-11-2003	Tajamar- Sipe Sipe	72	6	78
4. Cercado	16-11-2003	Escuela Andrada	31	11	42
5. Vinto	26-11-2003	Qollpa Centro	25	10	35
6. Tiquipaya	16-11-2003	Chapisirca	94	2	96
7. Quillacollo	3y4-04-2004	Quillacollo*	26	2	28
Total			387	54	441

*Importante: En el Municipio de Quillacollo los cursos taller del módulo I y II se realizaron conjuntamente en fechas consecutivas, por lo que la asistencia sólo se considera en el módulo II.

El promedio de asistencia por curso taller en este Módulo II fue de 63 participantes, superior al promedio del Módulo I que fue de 57 participantes.

La realización de los cursos taller del Módulo II se ha cumplido en todos los municipios previstos, con excepción de los municipios de Independencia y Morochata donde no se ha podido continuar con el proceso de capacitación debido al mal estado de los caminos que no nos permitió llegar hasta estos municipios, haciéndose mucho más difícil esta gestión por la excesiva prolongación de la temporada de lluvias. Además, en el caso de Morochata existen muchos conflictos en el Gobierno Municipal que no permite desarrollar eventos con las organizaciones campesinas y las autoridades municipales, puesto que en este municipio desde el mes de diciembre se vive una permanente convulsión social debido a que el Alcalde ha sido destituido por malos manejos administrativos y financieros, quien actualmente se encuentra prófugo con toda la documentación del municipio, por lo que hasta la fecha el Gobierno Municipal no se ha podido entrar en funcionamiento.

La reacción de los participantes para las temáticas desarrolladas en el Módulo II no fue igual a la del Módulo I, puesto que la conservación de la biodiversidad a nivel nacional y mundial, que se enfatiza en este módulo, es aún muy desconocida para las comunidades campesinas. De los testimonios de los participantes puede destacarse los siguientes puntos:

- La primera parte que trató sobre todo lo relacionado con la conservación de la Biodiversidad como es la Estrategia Boliviana, causó sorpresa por el desconocimiento que tienen los dirigentes campesinos y las organizaciones campesinas de esta estrategia. Se expresaron muchas críticas y rechazos a muchos aspectos de la Estrategia Boliviana de Biodiversidad y de otras

políticas nacionales e internacionales relacionadas con la conservación de la biodiversidad. En las organizaciones campesinas existe la susceptibilidad de que toda política Estatal que se relacione con los recursos naturales y biodiversidad afecta sus intereses, derechos y su soberanía, lo cual se atribuye en gran parte a que las organizaciones campesinas no solo desconocen la legislación y las políticas nacionales e internacionales, sino que nunca han participado en la proposición mucho menos en la elaboración de estas leyes y estrategias, lo que es muy cuestionado actualmente por las organizaciones campesinas y al parecer es la principal debilidad del sistema de democracia representativa que no ha logrado cubrir las expectativas de las mayorías como son las comunidades campesinas en Bolivia.

- La segunda parte que trató de las Áreas Protegidas y la situación del Parque Nacional Tunari, tuvo reacciones de rechazo puesto que este afecta directamente a las comunidades campesinas que no solo pone en riesgo la propiedad de sus tierras y sus recursos naturales, sino que principalmente atenta contra las únicas posibilidades de vida que tienen las comunidades que son de cultivar la tierra y criar animales, además de utilizar algunos recursos naturales para sus necesidades básicas de vida como el agua y la leña. El rechazo a las áreas protegidas, y en especial el Parque Tunari, es unánime, puesto que la Ley 1262 del Parque Nacional Tunari no considera los usos y costumbres de las comunidades campesinas que han vivido por siglos dentro el área del parque, además no respeta el derecho de las comunidades campesinas e indígenas a trabajar la tierra y a vivir bajos sus usos y costumbres que están establecidos en la Constitución Política del Estado. Otro aspecto muy criticado y rechazado es el procedimiento de los Gobiernos de imponer en forma vertical y forzada las políticas de conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, generándose por ello conflictos que no favorecen a la buena gobernabilidad ni a la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales.

Módulo III

Los cursos taller del módulo III se ha realizado en 7 municipios, no llegando a realizarse en los municipios de Morochata e Independencia por las razones ya explicadas anteriormente. En los últimos meses sin embargo, el Municipio de Quillacollo se incorporó al proceso de capacitación, puesto que en este municipio al inicio no hubo interés de parte de sus dirigentes para implementar la capacitación.

Por otra parte, se debe aclarar que el programa del Modulo III fue ampliado a pedido de las organizaciones y los mismos participantes de los cursos taller sugiriendo incluir al módulo III el tema del ALCA y los Transgénicos, puesto que

estos temas actualmente se consideran prioritarios en las discusiones entre las organizaciones campesinas y el Gobierno.

La asistencia y participación al igual que en los Módulos I y II fue muy variable en cada municipio, tal como se muestra a continuación:

Participación en cursos taller del módulo III

Municipio	Fecha de realización	Lugar de realización	Participantes		
			Hombres	Mujeres	Total
1. Tapacarí	14-03-2004	Tapacarí	30	8	38
2. Sacaba	10-03-2004	Larati	116	7	123
3. Sipe-Sipe	20-03-2004	Tajamar- Sipe Sipe	40	6	46
4. Cercado	21-12-2003	Escuela Andrada	24	3	27
5. Vinto	25-03-2004	Keraya Centro	25	10	35
6. Tiquipaya	09-04-2004	Cruzani	35	3	38
7. Quillacollo	04-04-2004	Liruini	35	1	36
Total			305	38	343

La participación en el Módulo III ha disminuido respecto de los cursos taller del módulo I y II, lo que se debe principalmente a que la época de lluvias, que coincidió con la realización del módulo III, impidió a muchos participantes trasladarse al lugar de los cursos taller incluso a pie. El promedio de asistencia a estos cursos taller fue de 49 personas por taller, lo que representa aproximadamente un 10% menos respecto a los módulos I y II. La participación de las mujeres disminuyó mucho más, siendo aproximadamente un 45% menos respecto a los módulos I y II. Sin embargo, esta disminución en número de participantes totales y de mujeres no significa que haya disminuido la calidad de los cursos taller y mucho menos el interés de los beneficiarios, al contrarió los participantes del Módulo III fueron aquellas personas que más interés mostraron por completar el proceso de capacitación con los 3 módulos, siendo estas personas además las que siguieron con mucho interés los módulos I y II. Esta continuidad de los participantes fue importante para lograr cumplir con los objetivos del programa de capacitación.

La reacción de los participantes a las temáticas desarrolladas en el Módulo III fue de igual o de mayor interés a los anteriores módulos, puesto que el tema del ALCA, los Transgénicos y la Ley del Parque Nacional Tunari sienten y perciben que afecta directamente sus intereses y vulnera mucho más la situación en la que viven las comunidades. Los puntos destacables de estas reacciones son los siguientes:

- El ALCA y los transgénicos han recibido un rechazo unánime de los participantes de los cursos taller, puesto que se advierte un serio riesgo para la seguridad de vida de las comunidades campesinas principalmente de Bolivia. En ambos casos la seguridad y soberanía alimentaria será la más afectada y

por tanto las organizaciones campesinas ven en el ALCA y los transgénicos como una amenaza para las mayorías de los países pobres, pretendiendo los países ricos invadir con sus productos y semillas. Estas últimas tienen el riesgo de que ya no podrán ser reproducidas en las comunidades, lo que hará a los campesinos más pobres y dependientes de las empresas transnacionales. Por otra parte, muchos campesinos participantes indicaron que el ALCA también tiene una intención oculta sobre los recursos naturales y la biodiversidad, que es la apertura a las transnacionales para la explotación y la apropiación de las riquezas naturales de los países pobres, siendo también la declaración de parques o áreas protegidas parte de esta corriente globalizadora.

- Otro resultado importante del Modulo III fue el trabajo de grupos que se realizó en torno a la problemática del Parque Nacional Tunari. De hecho, lo que se advierte en las comunidades campesinas y sus dirigentes respecto del Parque Nacional Tunari es de rechazo total, por una parte, porque en la Ley se desconoce los derechos de las comunidades ha desarrollar actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Por otra parte, porque no reconoce los usos y costumbres de las comunidades, peor aún no reconoce la existencia de comunidades campesinas dentro del área declarado como Parque. Esta situación crea en la actualidad muchos conflictos y de oposición a la implementación de la Ley 1262 (del Parque Nacional Tunari). Las comunidades y sus dirigentes proponen que la Ley de Parque Nacional Tunari debe revisarse a profundidad y modificar principalmente la categoría de Parque que no se adecua a la situación social, cultural y económica de las comunidades campesinas.

4.3. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y la evaluación se ha cumplido durante todo el proceso de ejecución con la participación de la Dirección Ejecutiva de AGRUCO-UMSS, los Técnicos Responsables de la Capacitación y los dirigentes campesinos de la FSUTCC y las organizaciones campesinas de base (centrales, subcentrales y sindicatos comunales). En ese sentido, se puede indicar que la ejecución del programa ha sido ampliamente participativa y de alguna manera flexible en cuanto a los tiempos establecidos, ajustándose a la dinámica social de las comunidades campesinas, pero cuidando sobre todo la calidad de los resultados en la ejecución de cursos taller de capacitación.

5. Evaluación de los beneficiarios

Los resultados e impactos logrados con la capacitación y la reflexión pueden ser evaluados amplia y profundamente con las opiniones, comentarios y testimonios grabados de los beneficiarios. A continuación se muestra partes relevantes

de algunos testimonios que reflejan una evaluación positiva de los beneficiarios y que sin duda contribuye a mejorar la gestión de las áreas protegidas.

Sobre la importancia de la capacitación y reflexión

... sobre las leyes tenemos que hablar y para nosotros del campo y la gente mayor el único son estos talleres, son buenos, como la escuela o colegio, ya no hay otra escuela para nosotros solamente este tipo de cursos, por eso debemos estar muy atentos y también hay que preguntar, analizar y así darnos cuenta como están las leyes...

Respecto de la gestión y el control social

... todas las organizaciones campesinas, organizaciones sociales, donde quiera que se encuentren, tenemos que saber cómo hacer el control social, por tanto es importante involucrarse como organizaciones en cuestiones de control social, esto porque siendo dirigentes o cualquier autoridad deben estar sometido a las organizaciones y no pueden ser sometedores, es por eso también que se debe tener una idea clara de lo que significa el control social...

... el control social no sólo debe ser en las organizaciones comunales sino también en la alcaldía, en todo el municipio ...si no existiera un control social, las autoridades que nos representan, después de hablar bonito a las bases, pueden desaparecer e irse del municipio engañando y robando a los campesinos...

Sobre la ley del Parque Nacional Tunari y las áreas protegidas

... la ley del Parque Tunari se ha elaborado sin conocer bien los usos y costumbres por eso no podemos aceptar, el parque además en esa ley nos esta prohibiendo la crianza de ganado, el recojo de leña y otros entonces con eso estamos afectados...

... si el gobierno quiere construir alguna obra en nuestras comunidades debe consultar con nosotros o para dar en concesión o explotar los recursos ... tenemos muchas leyes, pero se hacen siempre desde arriba sin participación de nosotros y nuestros gobiernos aplican las leyes solo cuando les conviene y nunca cumplen...

... algunos decimos que hecha la ley hecha la trampa como vemos el gobierno declara áreas protegidas pero a la vez también dar en concesión territorios para la explotación de petróleo... los gobiernos siempre manejan a su gusto...

... rechazo de áreas protegidas porque atentan contra nuestros derechos a recursos naturales rechazo a empresas privadas ...

De las leyes y los problemas

... cuando nosotros el pueblo nos levantamos el gobierno dice hay que hacer respetar la constitución política del estado no debe haber marchas ni bloqueos ... pero si analizamos

bien la CPE necesita cambios igualmente las otras leyes como el INRA que ha sido aprobado por el gobierno como querían ellos...

... para poder salir de este problema y de otros que afectan a los sectores campesinos, debemos trabajar con unidad, con una organización sólida, sólo así se va a poder defender nuestra tierra y territorio respetando nuestros usos y costumbres....

... una de las labores de los dirigentes que asisten a talleres y seminarios, es llevar lo aprendido a sus bases, debe socializar los temas que se tocaron con los jóvenes, con los ancianos, con las mujeres, con los hombres sin hacer discriminaciones.

... compañeros según como nos ha explicado las leyes hemos conocido mas y esta bien por eso compañeros siempre es importante asistir a estos talleres porque para nosotros es como la universidad ..nosotros siempre hemos sido engañados por los gobiernos ... por eso compañeros a mi me parece muy bien estos cursos...

De la Continuidad de los talleres de capacitación

... yo rogaría a la institución que estos talleres no se terminen aquí, sino que continúe y que sigan orientando también en otros lugares... agradezco a los compañeros de AGRUCO por este seminario que ha sido muy importante para nosotros...

Como se puede advertir en los testimonios de los propios beneficiarios, la implementación del Programa de Capacitación (PAMS) tuvo un efecto muy positivo y fue muy valorado por los beneficiarios, ya que muchos de ellos expresaron que fue la primera vez que escucharon una explicación detallada de las leyes, además estas se pudo analizar, reflexionar y discutir con la participación de todos los dirigentes.

Otro indicador importante de los resultados logrados con el programa de capacitación, es la profundidad y la calidad de los análisis y la autoreflexión que realizaron los participantes en cada uno de los cursos taller. Este análisis y autoreflexión no solamente ayudo a fortalecer el proceso de capacitación, sino que ha permitido un intercambio de conocimientos y experiencias entre técnicos capacitadores y actores locales, generándose así un proceso de aprendizaje social entre actores externos y actores locales. Asimismo, gran parte de la información y los aprendizajes fueron difundidos por los dirigentes a sus comunidades y sus compañeros de base, lo que es otro indicador de impacto y del alcance indirecto que logro el programa de capacitación.

En consecuencia, de la evaluación realizada por los beneficiarios se puede concluir que el programa de capacitación ha cumplido con el objetivo planteado en el proyecto como fue el de fortalecer y mejorar la Gobernabilidad y el Control Social, lo que depende indudablemente de una mejor cualificación de los conocimientos y de los actores que están directamente involucrados en esta tarea, como son los dirigentes campesinos, los comités de vigilancia, las autoridades municipales y las autoridades gubernamentales. Asimismo, en los testimonios

de los participantes de los cursos taller resalta que la capacitación y la reflexión sobre todo a nivel de las organizaciones campesinas, es una de las pocas estrategias para mejorar la gobernabilidad y el control social en la perspectiva de lograr no solo una gestión sostenible de la biodiversidad, sino en todos los aspectos de la vida del País. Por ello, muchos dirigentes han planteado la necesidad de dar continuidad a este proceso de capacitación profundizando algunos temas y leyes e incorporando otras.

Finalmente, mencionar como otro indicador positivo del programa de capacitación implementado, que las organizaciones campesinas junto a su máximo representante a nivel departamental (FSUTCC) solicitaron el apoyo de AGRUCO en la realización de un ampliado con la participación de los dirigentes y representantes de las cinco provincias afectadas con el Parque Nacional Tunari ha realizarse en el mes de mayo del 2004, donde se pretende obtener una propuesta campesina en torno a la problemática del Parque Nacional Tunari considerando sobre todo el proceso de capacitación implementado y los aprendizajes obtenidos de la discusión, el análisis y la autoreflexión. Esta actividad lamentablemente no fue contemplada en el proyecto; sin embargo consideramos que es muy importante apoyar como un resultado y logro del programa de capacitación, por lo que AGRUCO ha decidido apoyar este taller institucionalmente y proponer una segunda parte del proceso al que se ha denominado PAMS II.

6. Conclusiones y lecciones aprendidas

6.1. Conclusiones

- La conclusión principal del programa de capacitación es, sin duda, el aprendizaje social que se ha generado en torno a la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales en el Parque Nacional Tunari. Este aprendizaje social permitirá a los actores sociales que han participado en el proceso, como son principalmente los dirigentes campesinos y los comités de vigilancia, iniciar una concertación adecuada y un control social eficiente sobre los recursos naturales, en la perspectiva de lograr una buena gobernabilidad.
- Para los capacitadores y los capacitados ha constituido un proceso de aprendizaje mutuo, puesto que ambas partes han generado un diálogo intercultural y de saberes a partir de sus propias experiencias, interpretaciones y visiones sobre las temáticas y leyes tratadas. Si bien este proceso ha servido para que los actores locales adquieran mayores conocimientos e información sobre las temáticas y leyes tratadas, para los capacitadores y los investigadores ha significado un proceso de retroalimentación, ampliación y fortalecimiento de sus conocimientos teóricos y prácticos, lo que les

permitirá una mejor lectura e interpretación de la realidad en la perspectiva de incidir en las políticas nacionales y municipales, sobre todo con relación a las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad.

- Para los investigadores ha constituido, en primer lugar, un nexo y una apertura con las organizaciones campesinas principalmente a nivel municipal y por otra, conocer la visión de las comunidades campesinas sobre los recursos naturales y la legislación boliviana que se expresaron en los testimonios, que serán un insumo de análisis para las investigaciones científicas. Asimismo, el programa de capacitación ha permitido mostrar a los investigadores su posición frente a las comunidades campesinas. Si bien las investigaciones deben cumplir objetivos y resultados concretos, el PAMS ha significado una acción de reciprocidad con las organizaciones campesinas tan importante en la cultura andina, pero también es un medio de diálogo y aprendizaje para los investigadores involucrados.
- Por otra parte y de manera general, el programa de capacitación y reflexión ha permitido también generar un sentimiento de unidad en las organizaciones y dirigentes campesinos de los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari, lo que ha fortalecido a las organizaciones sociales en la perspectiva de defender los derechos sobre la tierra y la gestión del territorio bajo su propia cosmovisión, sus usos y costumbres, que muchas veces no son respetados y menos considerados en muchas de políticas nacionales.
- La activa participación de las organizaciones campesinas en los cursos taller ha demostrado el interés que tienen estas por una mayor capacitación y conocimiento, siendo ello una señal importante de que las mayorías en Bolivia quieren insertarse a la dinámica política municipal y nacional, pero haciendo prevalecer su visión, sus organizaciones y su cultura, por lo que las instituciones externas, especialmente las entidades educativas, deben contribuir cada vez más en este cometido puesto que es la base de la gestión sostenible y la buena gobernabilidad en torno a la biodiversidad y los recursos naturales.
- Se espera que la capacitación y reflexión impulsada a través del presente programa, contribuya en el mediano plazo a la solución de los conflictos que se han generado en torno al Parque Nacional Tunari, con una perspectiva a más largo plazo de lograr una gestión sostenible entre las organizaciones de base, los gobiernos municipales y las entidades gubernamentales.
- Los resultados del proceso de capacitación y reflexión prácticamente han rebasado las expectativas de AGRUCO a pesar de algunos inconvenientes de fuerza mayor como fue el octubre negro del 2003 (convulsión social y cambio de gobierno), conflictos de los Gobiernos Municipales (el caso de Morochata), la época de lluvias y el mal estado de los caminos (principalmente en Independencia) que ocasionaron la postergación y la no realización de algunos talleres.

- Por todos los resultados e impactos logrados con el PAMS I, consideramos que es de mucha necesidad la implementación de un segundo PAMS³ para ampliar el proceso de aprendizaje a una mayor población de las comunidades campesinas, pero fundamentalmente para apoyar a la búsqueda de soluciones adecuadas a la problemática del Parque Nacional Tunari en la perspectiva de lograr una gestión sostenible de la biodiversidad y las áreas protegidas a través de mecanismos de una buena gobernabilidad y control social.

6.2. Lecciones aprendidas

- Si bien el Estado Boliviano cuenta con muchas leyes y decretos para regular los diferentes procesos y acciones de los diferentes actores sociales, estos no son de conocimiento de una mayoría de la población principalmente rural, debido a la ausencia de sistemas de comunicación de alcance popular que difundan apropiadamente el contenido de las leyes, además el sistema educativo en Bolivia no considera ni siquiera la enseñanza de la Constitución Política del Estado. En estas circunstancias, los cursos taller de capacitación como los realizados, son los únicos medios de aprendizaje e información para las comunidades campesinas. Es muy notoria la carencia de programas de capacitación para adultos y las comunidades campesinas, lo cual repercute en la gobernabilidad, el control social y la participación ciudadana.
- El análisis y la autoreflexión de las comunidades y sus dirigentes respecto de las diferentes leyes, ha sido un verdadero aprendizaje social no solo para los actores locales, sino también para los actores externos (técnicos capacitadores e investigadores), puesto que los testimonios de los campesinos participantes de los cursos taller nos hacen ver que una mayoría de las leyes no responden a la realidad socio-cultural de Bolivia y en muchos casos existe contradicciones entre leyes, lo que en vez de ser un medio para normar adecuadamente los diferentes aspectos de vida del Estado boliviano, provoca conflictos sociales que muchas veces llegan a la violencia. Un problema que han advertido las comunidades, es la contradicción de la Ley INRA con la declaratoria de parques como el Parque Nacional Tunari; la primera pretende realizar el saneamiento de las tierras en las comunidades campesinas y, la segunda, prohíbe las actividades agrícolas, pecuarias y forestales de las mismas comunidades campesinas. Estas contradicciones se encuentra incluso

3 En el momento de la impresión de esta memoria, se tiene la confirmación de la aprobación del PAMS II; proyecto que se intitula “Apoyo a los Procesos de Concertación entre Actores Sociales para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales en la Cordillera del Tunari.

frente a la Constitución Política del Estado, lo que para las comunidades es un problema no solo de falta de conocimiento por parte de ellos, sino que también del desconocimiento de la realidad boliviana por parte de los legisladores y los gobiernos de turno. La credibilidad de las comunidades hacia las leyes nacionales es realmente muy escasa, ya que advierten que ni los legisladores y gobierno las cumplen, por lo que muchos dirigentes y comunidades plantea que se debe reconocer la normas consuetudinarias de las comunidades por su efectividad no solo en la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad, sino también en otros aspectos como la justicia comunitaria.

- Otro aprendizaje, principalmente para los capacitadores, fue que no solo es necesario elaborar un material didáctico apropiado y capacitar en el idioma nativo, sino que es importante la credibilidad y la confianza de los participantes y las comunidades campesinas hacia los capacitadores e investigadores, puesto que la incertidumbre que se tiene de ser mal informados y con intereses sectarios es muy grande. Esta confianza no solo garantiza la realización de los talleres, sino también que el análisis y la autoreflexión sean realizados sin temores ni reservas por parte de los asistentes a los cursos taller; siendo fundamental también para ello, la coordinación y participación en el proceso de capacitación de los dirigentes de la máxima entidad que los representa como es la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, las centrales campesinas, subcentrales y sindicatos campesinos.
- En ese marco, la implementación de programas de interacción social como el PAMS requieren de una coordinación estrecha con las organizaciones sociales, dirigentes y principalmente con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, ya que estas instancias facilitan la buena implementación de las actividades programadas con las organizaciones campesinas. De la misma forma se requiere una coordinación con las autoridades municipales para garantizar la participación de estos actores como los Comités de Vigilancia, el Alcalde y los Concejales Municipales.
- Otro aspecto no menos importante es que se requiere de una buena coordinación y retroalimentación entre los integrantes del equipo técnico e investigadores, dejando de lado las especialidades y más bien buscando un tratamiento integral de las temáticas y leyes tratadas.
- La experiencia institucional de AGRUCO en los procesos de fortalecimiento y capacitación a organizaciones campesinas, permitió diseñar una estrategia metodológica apropiada para la ejecución del PAMS, la misma tuvo tres aspectos importantes: el enfoque participativo e interactivo, el diálogo de saberes y la reciprocidad. En ese sentido, las actividades fueron ampliamente concertadas con los dirigentes, autoridades y representantes de las organizaciones campesinas y municipios.

- Finalmente, si bien se ha contribuido en el aprendizaje social, la ampliación de los conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales en torno a la Gobernabilidad, Control Social y la Gestión Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales en Áreas Protegidas, este proceso requiere de una continuidad (PAMS-II), para consolidar resultados efectivos y facilitar la búsqueda de soluciones a la problemática del Parque Nacional Tunari en la perspectiva de lograr un desarrollo sostenible que garantice el desarrollo humano, el mejoramiento económico y la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad en el área rural de Bolivia.

Panel de debate y discusión

Parte IV

Moderador:

Dra. Silvia Rodríguez, Universidad Nacional de Costa Rica

Emilio Espinoza

Dirigente de la Central Campesina de la Provincia de Quillacollo

Es muy interesante las propuestas que han presentado los compañeros panelistas y, por ello, quiero felicitar a todos los panelistas, en especial al compañero Zacarías, porque ha tenido la capacidad de redactar y presentar la versión que tienen los campesinos sobre el Parque Tunari. Así también han mostrado la realidad de cómo vivimos las comunidades campesinas del Parque Tunari. Anteriormente muchas instituciones y profesionales han visitado nuestras comunidades pero nunca hicieron conocer la verdadera realidad y versión de los compañeros campesinos. Otras instituciones manejadas por el gobierno buscaron solo aprovecharse de nuestros conocimientos y organizaciones, además nos engañaron, por eso es que desconfiamos mucho y no los aceptábamos a muchas instituciones.

Por otro lado tengo una preocupación con lo que esta pasando con SEMAPA en el Parque Tunari. Resulta que SEMAPA a través del INRA quiere sanear 2657 hectáreas en el territorio que corresponde al Municipio de Tiquipaya, pero esta situación desconocen los compañeros campesinos, eso nos sorprende. Como dije anteriormente, todas las tierras del Parque Tunari incluso los de pastoreo y lagunas cuenta con un título de propiedad ejecutorial de los campesinos. Además en el artículo 177 de la Constitución Política del Estado dice que el título de propiedad ejecutorial es insustituible, no se puede quitar. Pero que esta ocurriendo? La Prefectura y la Alcaldía quieren transferir a SEMAPA tierras que son de nosotros. Por esa razón no estaré mañana porque tenemos una reunión para discutir esta situación, pero mis compañeros van estar aquí. Así nos pasa, aquí estamos hablando de

resolver los conflictos del Parque Tunari, mientras que por otro lado las empresas se están adueñando de las tierras, eso realmente nos sorprende.

Como también ya dije anteriormente, los campesinos pedimos que nos respeten y que las tierras y los recursos se administren según nuestros usos, costumbres y servidumbres, porque así se ha manejado desde nuestros abuelos. Si no se toman en cuenta nuestros reclamos, no nos queda otra cosa que luchar con el movimiento campesino para hacernos respetar y defender nuestros territorios. Por ello queremos que estos seminarios lleguen a buenos resultados y propuestas que sirvan a todo el movimiento campesino, indígena y de colonizadores del país. Creo que queda mucho todavía para debatir, analizar y discutir.

Finalmente quiero pedir a los compañeros visitantes de los diferentes países como de Costa Rica, Perú, Chile y otros, y también a los representantes del gobierno boliviano y de las instituciones, que en los congresos mundiales y en todos los congresos digan la verdad y hagan conocer la versión de los campesinos. Lamentablemente a nosotros no nos invitan ni nos dan cabida en estos congresos, aunque últimamente algunas instituciones ya nos invitan para que podamos hacer conocer nuestra posición, y lo más importante es que lleguemos a tener acercamientos y conclusiones que beneficien a todos. Muchas gracias.

Casiano Fernández

Dirigente de la Central Campesina de la Provincia de Quillacollo

Primeramente quiero expresar mi agradecimiento a AGRUCO por haberme invitado a este seminario. Yo vivo en la Provincia Quillacollo regional Llave Grande. Aquí la señora Debra Pereyra informó que el Parque Tunari está muy bien. Como va estar bien? Si lo que quieren es expulsarnos de nuestras tierras, nos quieren prohibir la construcción de casas, caminos y otros; entonces donde vamos a vivir? Todo esto es un perjuicio para nosotros, pero ya tenemos una decisión como organización de campesinos para no ceder ni un paso de nuestras tierras. Por otra parte, nosotros no reconocemos a ese comité de gestión, no se donde hacen reuniones, no sabemos nada. Los compañeros campesinos ya están cansados de todo esto, no queremos ser responsables si hay más problemas. Eso nada más, gracias señores.

Juan René Alcoba

Representante del SERNAP

Tengo varios puntos para comentar sobre las exposiciones particularmente en relación al Parque Nacional Tunari. Primero quiero aclarar que la situación del

Parque Tunari es muy diferente a lo que ocurre en el resto de las áreas protegidas que se tiene en el país. Por indicar una diferencia, en este parque no hay elementos de biodiversidad que nos interesa conservar y que sean de prioridad para el sistema, al contrario es un área con mucha intervención y una fuerte amenaza de urbanización. Todo eso lleva obviamente, a que es necesario repensar la categoría y el objetivo de esta área protegida.

Por otra parte, en todas las intervenciones y discusiones que se realizaron desde ayer, se advierte que no hay una claridad de la Prefectura en cuanto a la gestión y la resolución de los conflictos. El SERNAP ha dejado en manos de la Prefectura toda la situación del Parque Tunari, ya que la Prefectura es un importante actor regional y tiene la posibilidad de hacer un mejor trabajo a nivel local para que se inicie la gestión de esta área protegida. Asimismo, el caso de Cotacajes Altamachi es plena responsabilidad de la Prefectura de Cochabamba, por lo que el SERNAP solo puede apoyar y orientar para una buena gestión del mismo, aunque indirectamente el SERNAP es responsable de todas las áreas protegidas en Bolivia. Por ello también dijimos que el Parque Tunari es diferente a las otras áreas protegidas que esta bajo la responsabilidad del SERNAP. Por ejemplo en el caso del Parque Nacional Sajama, como nos explicó su director, se tiene importantes avances en cuanto a la participación local y la conservación y el manejo sostenibles de los recursos de biodiversidad.

Otro aspecto que nos preocupa como SERNAP, es la forzada relación que se quiere encontrar entre áreas protegidas y las empresa petroleras. Creemos que en este aspecto hay una lectura sesgada. Es necesario entender que la región subandina tiene importantes recursos de biodiversidad pero también geo-morfológicamente hablando, donde no hay duda que existen recursos petrolíferos. Por ello posiblemente haya una alta coincidencia entre áreas protegidas y concesiones petroleras. Lo que se debe aclarar entonces, es que de ninguna manera el objetivo de las áreas protegidas es hacer explotaciones petroleras, creo que ni René que hablo del tema intento decir eso. Por otro lado, se quiere hacer ver que las instituciones gubernamentales también están involucrados o trabajan a favor de las empresas petroleras y mineras, por lo menos en el caso del SERNAP eso no ocurre de ninguna manera.

Por todos estos aspectos, creo que es muy necesario trabajar de manera conjunta entre actores del Estado y de la sociedad civil, en la perspectiva de hacer alianzas que nos permitan implementar normas y efectuar una fiscalización fuerte a todos los actores que intervienen en las áreas protegidas del país, adicionalmente las alianzas con los sectores sociales pueden ser vitales para implementar una gestión adecuada de las áreas protegidas. El SERNAP tiene una visión netamente de conservación y manejo sostenible de los recursos de biodiversidad en los lugares determinados como prioridad para Bolivia.

Carmen Miranda

Representante de la UICN-Bolivia

Tengo una pregunta en referencia a la sistematización de las normas comunales para el uso de ciertos recursos de la biodiversidad. Conozco una experiencia en Chuquisaca donde a partir de estos ejercicios académicos se ha propiciado la articulación del derecho consuetudinario con la normativa formal. Entonces quiero saber si es que AGRUCO está emprendiendo este tipo de iniciativas principalmente para fomentar la conservación de recursos de biodiversidad y recursos forestales.

Otra pregunta que quiero hacer es a Jaime. Me parece muy interesante todo ese proceso de capacitación que realizaron y de apertura a un diálogo intercultural, en realidad como una estrategia para lograr sostenibilidad en el manejo de nuestros recursos. Pero también hemos visto que los procesos de capacitación y de diálogo intercultural son largos y costosos; creo que con un curso o cuatro cursos no es suficiente, además sabemos que hay deficiencias en la transmisión de la información entre quienes asisten a un curso y el resto de la población. En el caso del Parque Tunari entiendo que son muchas comunidades y seguro que hay una población humana muy grande, por tanto la asistencia a los cursos de capacitación que realizaron seguro que fue restringida a un tipo de dirigentes. Me gustaría saber si es que están implementando una metodología de monitoreo para ver cual es el impacto real de estos procesos que buscan creo el “empoderamiento” para la gestión comunal de la biodiversidad.

Otra cosa que quería comentar brevemente es lo siguiente. Coincido con la visión del representante del SERNAP en el sentido de que Cochabamba como departamento tiene muchos desafíos y conflictos que debe resolver en el nivel local y departamental. Una de ellos es por ejemplo resolver la viabilidad del Parque Nacional Tunari. Uno de los problemas de porque no fue incluido el Parque Tunari en el sistema nacional, es que no se encontró elementos de la biodiversidad representativos que justifique su conservación, además que no es posible encontrar ecosistemas prístinos.

Por todas estas razones, creo que es importante hacer una evaluación anticipada de cual va ser el objetivo y la perspectiva de viabilidad del Parque Tunari, además no debemos olvidar que los esfuerzos para desarrollar un área protegida son grandes e implica un montón de esfuerzos no solamente a nivel social sino también económicos. El Parque Nacional Tunari no hay duda que es muy importante para la ciudad de Cochabamba, y de todas maneras es necesario pensar en ayudar a que la naturaleza sea la que gane frente a otros intereses personales y sectarios.

Dora Ponce

Investigadora en el Parque Tunari, NCCR-AGRUCO

Respecto a la pregunta de Carmen sobre las normas locales. Por el año 1999 AGRUCO en convenio con PROBONA ha realizado una investigación sobre

las normas comunales y el tipo de relación que mantienen las comunidades con sus bosques nativos. Como resultado de este estudio se conoce por ejemplo las normas internas que tiene la comunidad de Chorojo para regular el uso de los recursos del Bosque, y esto se lo ha difundido bastante hasta se tiene un video sobre el mismo. Pero creemos que más que solo ver las normas, es importante ver lo que hay detrás de estas normas; en realidad las normas comunales son la expresión de una cosmovisión particular que tienen las comunidades campesinas. El trabajo de investigación que vengo realizando, tiene precisamente el objetivo de analizar las normas locales no como formas únicas o estáticas, sino ligadas a su cosmovisión, a su proceso histórico, a las relaciones que existen dentro la comunidad y otros ámbitos. Es decir que no pretendemos estudiar las normas comunales en forma atomizada, sino que ligada a su contexto sociocultural y productivo, y nuestro interés es ante todo de revalorizar las formas de relación de las comunidades campesinas con la naturaleza, que finalmente resultan ser las formas de vida que tienen las comunidades campesinas e indígenas y que son complemente diferentes a la visión occidental. Por ello no son fácilmente compatibles las normas comunales con la legislación formal, ya que la primera tiene que ver con una forma de vida, una forma de organización y una forma específica de concebir a la naturaleza, mientras que la legislación formal es ante todo restrictiva. Con el trabajo de investigación esperamos aportar en la definición de las políticas públicas.

Pese a que ya se han realizado muchos estudios sobre las normas locales y comunales, en Bolivia se continúa elaborando reglamentos en base a criterios externos e internacionales. Incluso como les dije, hay normas consuetudinarias que están funcionando en las comunidades campesinas e indígenas, porque no revalorizar estas? Hay muchos conocimientos y saberes en las comunidades que no se les quiere dar la importancia respectiva.

Jaime Delgadillo
Técnico de AGRUCO

Con respecto a los impactos del programa de capacitación y diálogo intercultural que implementamos. Creemos que hay diferentes impactos y que algunos pueden ser inmediatos y otros pueden llegar a más largo plazo. Reconocemos también que este proceso toma su tiempo y es difícil abarcar a poblaciones grandes, tal vez esas sean algunas desventajas. Pero tomando algunos puntos específicos, podemos ver que los impactos son evidentes por ejemplo en el control social a nivel municipal, porque este tema fue incluido en el programa de capacitación, incluso ya hubo cambio de autoridades municipales que no realizan manejos transparentes en sus municipios.

Para implementar un programa de capacitación en base a un diálogo intercultural, creemos que es fundamental el idioma local y tomarse todo el tiempo posible para conversar, dialogar y aclarar las dudas. Otro aspecto es la transparencia de los contenidos de la capacitación. Para las comunidades campesinas es mucho más importante conocer toda la información que dar solo un resumen didáctico, puesto que muchas veces un pequeño resumen interpreta como una actitud para esconder información. El análisis debe ser también profundo en lo posible considerando un proceso histórico que es vital para las comunidades campesinas, ya que la visión de estas es que nada de lo ocurre hoy es causal, si no que hay una causa histórica. De esta manera se buscó que los participantes de los talleres entiendan bajos sus propios códigos y percepciones los temas tratados, para que luego puedan transmitir a sus compañeros de base con mayor facilidad. Otro aspecto importante es que todo el proceso debe planificarse en forma participativa con todos los dirigentes y las autoridades legítimas, y respetando la estructura orgánica de los campesinos.

Solamente para poner otro ejemplo del impacto que se ha logrado con el programa de capacitación. En este seminario están participando algunos de los compañeros campesinos que se han beneficiado con los talleres de capacitación, y en sus intervenciones reflejan lo que aprendieron. También hemos tenido oportunidad de escuchar en otros eventos a compañeros campesinos que expresan lo que han aprendido y lo que se ha discutido en cada uno de los talleres. Pese a que AGRUCO tiene una larga experiencia de trabajo en las comunidades sobre todo en el Municipio de Tapacarí, en una mayoría de los municipios intervenimos por primera vez con el programa de capacitación, logrando una importante confianza y credibilidad.

Por los resultados que se lograron con este primer programa de capacitación, una mayoría de las organizaciones campesinas del parque han demandado una segunda fase, que si bien estará orientado a profundizar algunos temas, el objetivo central será apoyar a la búsqueda de soluciones a los conflictos del Parque Nacional Tunari pero comandado por la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba en coordinación con otras instituciones y todas las organizaciones de base.

Respecto a la pregunta que tan viable es el Parque Tunari? Creo que ya han escuchado la respuesta, durante todo el seminario los actores locales han expresado su versión y lo que piensan sobre el Parque Tunari. Creemos que los compañeros no están totalmente en desacuerdo con el parque, lo que pasa es que los procedimientos legales, las formas de creación y administración de las áreas protegidas no responden a sus percepciones y demandas. Si se continua con los procedimientos tradicionales no se va a lograr nada. Es necesario cambiar la visión y el objetivo del Parque Tunari, pero también los procedimientos y métodos de trabajo principalmente de parte de la prefectura, las alcaldías y de algunas instituciones involucradas.

Otro elemento que podría ayudar a la viabilidad del Parque Tunari, es que los actores gubernamentales y prefecturales aprendan a escuchar las propuestas de los actores locales u otros actores, luego generar discusiones abiertas y sin restricciones. Las organizaciones campesinas del Parque Tunari ya tienen una propuesta que puede ser mejorada y profundizada en base a una discusión sin imposiciones ni discriminaciones, aunque es cierto que lo más importante es pensar en que todos ganen, incluso la naturaleza, para ello sin embargo es necesario ceder de alguna manera en nuestras posiciones. Ese en este sentido que, como AGRUCO, hemos ido orientando a las comunidades campesinas. Pero los que finalmente tomaran las decisiones son los actores locales, porque debemos reconocer que ellos son los dueños de casa y los demás son solo inquilinos.

Franz Guzmán

Director del Parque Nacional Sajama

Quisiera abordar varios aspectos. Una primera cosa que debemos aclarar, es que no se puede generalizar que todas las áreas protegidas de Bolivia están mal solo tomando como punto de discusión y análisis el Parque Tunari, y por esto hay que crear movimientos sociales. Eso creo que es muy peligroso. Debemos reconocer que hay comunidades Aymaras que están trabajando positivamente en las áreas protegidas. Creemos que los conflictos que están ocurriendo en Cochabamba es de carácter institucional, tal vez nunca debió haberse creado un área protegida y que este problema hay que abordarlo desde un punto de vista institucional

Las investigaciones que esta haciendo AGRUCO nos muestra con claridad meridiana lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Tunari, y a partir de estos resultados hay que construir una propuesta concertada que debe llegar a los niveles de gobierno. En realidad este parque ha perdido su esencia. ¿Qué se va a conservar en el Tunari, las plantaciones de pinos y eucaliptos? creo que no hay esencia de conservación. Por otra parte, la categoría de manejo no está adecuado, se esta castigando a las poblaciones que viven dentro el Parque Tunari. Además es casi imposible hacer gobernable con trescientas comunidades, mucho peor con una ley tan restrictiva, donde estamos?

Las áreas protegidas tienen como sustento social la participación de los actores locales, ellos son en realidad los que tienen que conservar y han conservado desde miles de años atrás. Las comunidades campesinas son conservacionistas en esencia, y esa conservación debemos llevar a un proceso de desarrollo sostenible si es que en verdad queremos salvar la naturaleza y sacar a nuestras comunidades de la pobreza, es decir debemos premiar la conservación implementando un proceso de desarrollo sostenible. Creo que en Cochabamba se esta haciendo todo lo contrario, más bien creo que se esta castigando a las comunidades campesinas.

Entonces la perspectiva de solución es una propuesta institucional donde participan actores como el SERNAP, el propio gobierno, la prefectura, las alcaldías, las organizaciones campesinas, etc. Ojalá que para esta solución se consideren como punto de partida los resultados de investigación que esta realizando AGRUCO. La pregunta es a AGRUCO y a los compañeros campesinos del Parque Tunari si han pensado o ya existe esa propuesta, y si no fuese así, hay que movilizar a las instituciones inmediatamente para solucionar la situación del Parque Tunari.

Miguel Angel Crespo
PROBIOMA-Santa Cruz

Quisiera decir lo siguiente. El proceso de creación de áreas protegidas ha sido polémico en todos los lugares, en unos más que en otros menos. Pero hay un elemento que es coincidente sobre todo en los últimos años, y es que ese proceso esta siendo impulsado fundamentalmente por organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales, muchas de ellas de corte muy conservacionista. Esto es lo que me preocupa personalmente, porque muchas de estas organizaciones conservacionistas no han dudado en más de los casos en aliarse a las empresas petroleras u otras empresas para negociar territorios y áreas que son potestad y patrimonio del Estado boliviano, por ende de las comunidades que viven allá.

Un hecho lamentable es lo que esta ocurriendo en la provincia Ayopaya con la creación del Parque Cotacajes-Altamachi, el que esta siendo impulsado por cuatro ONGs, estoy hablando de tres ONGs norteamericanas o internacionales y una nacional. Esta última es PROMETA que es una ONG conservacionista de Tarija, y no es casual que esté impulsando la creación de esta área protegida. Esta mañana me tocó hablar pero no hubo tiempo para referirme a profundidad al caso del bosque seco chiquitano; lamentablemente estas mismas ONGs negociaron con la ENRON y SHELL el cambio de la definición de un bosque primario o prístino a otro que les permita a estas empresas pasar por medio del bosque seco chiquitano. Es una historia muy larga que me tomaría mucho tiempo contarla. Que significa todo esto? Que se está violando la soberanía nacional y la Constitución Política del Estado, o no es cierto? La creación de áreas protegidas deberían ser impulsados por el Estado boliviano a través de sus autoridades e instituciones competentes, pero fundamentalmente bajo un proceso en el que este involucrada la población local. Cuando la población local no esta involucrada hay libertad para hacer negociados.

Las áreas protegidas en si no son malas, el problema es cuando se llevan adelante bajo procesos no transparentes y no participativos, como los que hemos escuchado en estos dos días. Entonces los compañeros campesinos tienen razón en

rechazar las áreas protegidas cuando los procedimientos de creación y de gestión no son transparentes ni apropiados.

La conservación en áreas protegidas deberían principalmente permitir la sostenibilidad en el mejoramiento de la calidad de vida, o sea que las comunidades vean un beneficio como producto de la creación de las áreas protegidas. Pero como esto no ocurre las organizaciones campesinas reaccionan negativamente frente a las áreas protegidas. Es hora de que los bolivianos cambiemos nuestras actitudes, tanto a nivel del gobierno como de la sociedad civil, bajo la premisa sobre todo de rescatar y fortalecer los derechos soberanos que tenemos los bolivianos sobre el manejo y la gestión de nuestros recursos naturales.

Otro aspecto en este sentido, es que se debe buscar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas y del SERNAP, puesto que ambas tienen la potestad legal para ocuparse de las áreas protegidas. Aunque las instituciones del Estado casi siempre se encuentran en una situación difícil, porque están presionados por todos lados, por el lado de las petroleras, las empresas mineras, las organizaciones conservacionistas y hasta las comunidades locales.

Es importante por otro lado, involucrar a los municipios en el tema de las áreas protegidas, ya que estos son responsables de la gestión territorial en sus jurisdicciones, pero los asuntos de las áreas protegidas y del medio ambiente están dejando de lado bajo el argumento que es responsabilidad del Gobierno, eso se debe a que los municipios todavía no encuentran beneficios en las áreas protegidas y los recursos de biodiversidad. Por otro lado, muchos municipios aún no asumen que la conservación y los servicios ambientales son la base del desarrollo sostenible.

El fortalecimiento de las comunidades locales es vital, principalmente en términos del uso adecuado y sostenible que hacen de la biodiversidad. Aunque no debemos ser ingenuos de mistificar esto, porque nadie puede desconocer que estamos viviendo un momento de intensa globalización en muchos aspectos. Aquí es donde las ONGs, universidades, centros de investigación y otras organizaciones deben contribuir en rescatar, fortalecer y mejorar las tecnologías locales, de modo que sobre la base de las tecnologías y conocimientos locales se puedan generar e innovar tecnologías y estrategias mucho más sostenibles.

Bolivia se encuentra actualmente en una coyuntura muy especial, producto de las movilizaciones de octubre, puesto que se está cuestionando muchos aspectos de manejo del Estado, especialmente de los anteriores gobiernos. En este sentido una de las leyes más cuestionadas es la ley de hidrocarburos; desde hace mucho tiempo hay una demanda por revisar esta ley. En Bolivia la dimensión económica siempre ha estado por encima de la dimensión social y ambiental, por eso es que siempre hemos tenido las leyes como el código minero y la ley de hidrocarburos con una visión netamente económica. Pero creo que es hora de exigir que la dimensión social y ambiental debe estar a la misma altura de la dimensión económica.

Esto supone que en la modificación de la ley de hidrocarburos deben participar los dirigentes sindicales, los municipios, las autoridades competentes y la sociedad civil en general. No es posible que continúen haciendo las leyes un par de tecnócratas pro petroleras, sabemos que estos están vendidos a las empresas y cada vez que las empresa no están de acuerdo con un párrafo o una palabra lo hacen cambiar, hay un loby muy fuerte de estas empresas a nivel del gobierno.

Entonces las jornadas de octubre deben servir para hacer cambios estructurales en nuestro país, y eso dependerá del pueblo y de las organizaciones vivas de la sociedad civil. Debemos cambiar la visión en muchos aspectos, principalmente respecto a nuestros recursos naturales. Puede que este planteando una utopía, pero pienso que en nuestro país todo es posible y en la medida que hayan organizaciones fortalecidas y un concepto fortalecido de soberanía sí vamos a poder avanzar y cambiar.

Para terminar felicitar a AGRUCO por el trabajo y las investigaciones que esta realizando. No entendía el problema del Parque Tunari con mucha claridad, pero a partir de la explicación acerca del trabajo y las investigaciones que han desarrollado la cosa esta muy clara. Como ya dijeron, sobre la base de estos resultados se deben buscar soluciones a los conflictos y problemas. En ese sentido quería hacer una pregunta. AGRUCO podría facilitar o dinamizar un proceso donde se puedan sentar los actores del SERNAP, la prefectura, los municipios y comunidades locales para definir cual va a ser el futuro del Parque Tunari? Si se va a recategorizar o se va eliminar el concepto de área protegida? Creo que en el caso del Parque Tunari ya no requiere darle más vueltas ni de parte de la prefectura ni de parte de los campesinos, sino de llegar a una concertación con todos los actores sociales involucrados pero inmediatamente.

Aquino Heredia

Ejecutivo de la Subcentral Campesina del Parque Tunari

Lo que quiero indicar es que el pasado año nos reunimos las 5 provincias afectadas por el Parque Tunari, seguro recuerdan los compañeros dirigentes, en esa ocasión se presento un anteproyecto que la prefectura quería hacer aprobar. Entonces los dirigentes de las 5 provincias pedimos un compás de espera, por lo menos de 7 meses. De esta manera decidimos entre todos los dirigentes capacitarnos y prepararnos, para que posteriormente podamos discutir la situación del Parque Tunari con la prefectura. Así es como realizamos, AGRUCO nos ha capacitado y nos hizo conocer muchas leyes y temas con transparencia, su labor fue muy buena. Por ello pensamos los dirigentes de las 5 provincias que vamos a seguir trabajando con AGRUCO, creo que no termina aquí, sino que vamos a seguir preparando nuestra propuesta. Agradecer al equipo de AGRUCO, muchas gracias.

Jaime Soto

FUNDECAM, Chile

No se si voy hacer una reflexión. Entre lo que se presentó ayer y hoy en el taller, creo que hay como dos propuestas o dos visiones de manejo de áreas protegidas en Bolivia. Una que viene del Servicio Nacional de Areas Protegidas de Bolivia (SERNAP) y la otra que se mostró en el caso del Parque Nacional Amboró, esta última como una propuesta alternativa que incorporaba elementos nuevos. Pero lo que no veo claro cual es la propuesta de los campesinos, o sea cual es la propuesta con visión Aymara, Quechua? Que hubiera sido interesante para negociar con las otras propuestas y no partir con algo mediatizado. A lo mejor Sebastián trató de mostrar algo por ejemplo en un mapa de manejo de las diferentes altitudes. Pero para mi una propuesta indígena verdadera es aquella que no esta mediatizada por ninguna institución. A lo mejor ustedes lo han propuesto como una labor de AGRUCO para poder colaborar con una visión actual que yo pienso que existe y que es Aymara Quechua. Obviamente esta propuesta mediatizada tiene elementos occidentales, aunque es mucho más flexible que la propuesta de Estado. En este proceso supongo que AGRUCO es un tercer actor, al menos así entiendo por el trabajo que hago y que es similar al de ustedes. Como un tercer actor están participando en el proceso, a ello va dirigida mi pregunta. Cómo ven ustedes su situación? Sienten presiones? Viven presiones dentro su trabajo? Al acompañar y colaborar con una propuesta campesina sienten presiones del Estado?.

Elvira Serrano

Investigadora en el Parque Tunari, NCCR-AGRUCO

De hecho este seminario es un espacio que pretende facilitar el acercamiento de diferentes visiones, de las diferentes percepciones para luego llegar a algunos puntos de negociación. Aquí se ha podido ver cuál es la percepción de las comunidades y otros actores como la prefectura, y en base a estos se podría encontrar espacios de interfaces. Por otro lado, a partir de lo que ha sido el programa de capacitación que presento Jaime, los compañeros campesinos ya han ido delineando algunos puntos clave sobre los cuales ellos van a realizar sus propuestas. AGRUCO en este proceso obviamente es un facilitador, lo que ha hecho simplemente es socializar algunas leyes y orientar a los dirigentes campesinos, pero finalmente los que tomarán alguna decisión son los propios campesinos. Una acción inmediata que tienen programado los compañeros campesinos y que es producto también del programa de capacitación, es una reunión que realizaran las 5 provincias afectadas por el Parque Nacional Tunari para elaborar una propuesta de gestión del Parque Nacional Tunari. Suponemos que posteriormente habrá algún otro espacio para

negociar con los personeros de la prefectura y del SERNAP. Para ello se ha previsto una segunda etapa del proyecto de capacitación en concertación con la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, dirigentes de las organizaciones de base, comités de vigilancia y otros actores.

Zacarías Ortíz

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Ayopaya

Las propuestas de las organizaciones campesinas sabe claramente el pueblo boliviano. Como dijo un compañero, en octubre del año pasado hubo una convulsión social en Bolivia que ha promovido muchos cambios o al menos esta cambiando, aunque muchos dicen todavía que hay que evaluar. Las organizaciones campesinas estamos proponiendo incluso que debe cambiar la Constitución Política del Estado, sobre esa base cambiar todo hasta las áreas protegidas. Pero sobre el actual modelo no podemos cambiar mucho. Los bolivianos tuvimos muchas riquezas naturales como plata, plomo, estaño, oro y otros, pero actualmente los hijos de los mineros por lo menos trabajan en alguna empresa. Eso ya no queremos que ocurra, por eso estamos proponiendo cambios a través de la asamblea constituyente, queremos escuchar y ser escuchados, queremos cambiar este país para que legítimamente los quechuas y los aymaras manejen las riquezas naturales, no con imposición de otros países, sino con soberanía, esa es nuestra visión.

Sebastián Bolliat

Investigador del Parque Tunari, NCCR-AGRUCO

A mi me gustaría agregar algo y estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero Zacarías. Bolivia se encuentra en un proceso que al parecer va a cambiar muchas cosas, porque se presume que habrá una asamblea constituyente que posiblemente cambie toda la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de lo que podía ser la suerte del Parque Tunari, no es suficiente cambiar la categoría, sino pensar también quienes plantearon las diferentes categorías de áreas protegidas y de donde vienen. Se realizó igualmente una ley sin consultar a las organizaciones campesinas. Advierto más bien en este proceso de la asamblea constituyente, una oportunidad para plantear como se va encarar la conservación ambiental en Bolivia o mejor dicho la gestión sostenible de la biodiversidad, considerando sobre todo la participación de las organizaciones campesinas y actores locales. Posteriormente esas propuestas podrían subir a un nivel de legislación, pero que estas respeten las bases culturales y la realidad del país.

En el caso del Parque Tunari no creo que deba ser anulada y dejarlo a su suerte, puesto que en esta área vive mucha gente que esta bajo presión del mercado tal como lo dijo Miguel, y que esta gente esta de alguna forma consciente de que si se le somete a la lógica del mercado van a tener que acabar con sus recursos aunque no tengan la voluntad de hacerlo. Entonces hay una necesidad de que se apoye procesos de desarrollo sostenible, y dentro de ello el manejo sostenible de la biodiversidad que existe en el parque.

Dora Ponce

Investigadora del Parque Tunari, NCCR-AGRUCO

Sobre la pregunta de Jaime si recibimos alguna presión en el trabajo que hacemos. A lo largo de todo el trabajo que realizamos en AGRUCO desde hace muchos años, de relación más cercana a las comunidades o en términos mucho más académicos de diálogo intercultural, pienso que en AGRUCO nos dimos cuenta que las comunidades tienen alternativas viables por ejemplo para la conservación o manejo de la biodiversidad, y nuestro acercamiento no es porque los compañeros campesinos nos caen más simpáticos que otro sector de la sociedad civil. Creo que hemos tenido oportunidad de reflexionar en equipo, de compartir trabajos en equipo y de ver las potencialidades siempre desde una perspectiva sostenible. En esa perspectiva probablemente nos fuimos identificando con la visión campesina, y con el propósito principal de apoyar el rescate y la revalorización de los saberes y tecnologías locales. Esta perspectiva posiblemente no les gusta a muchos.

Aportando algo sobre la pregunta si AGRUCO podría facilitar un acercamiento de los actores del parque? Esto en realidad va depender de la voluntad de los actores. Un aspecto importante en esto es el acceso a la información, puesto que en Bolivia es muy usual ocultar la información y ser transparentes en este sentido, aspecto que lo hemos comprobado cuando buscamos información.

Eugenio Luna

Dirigente Campesino de la Cuenca Taquiña

Aquí se ha tratado mucho sobre conservación de la biodiversidad. Quiero preguntar si las áreas protegidas deben cumplir una función económica o no? A que viene esta mi pregunta. Los que trabajamos en el agro, o sea como agricultores, actualmente nos estamos peleando por pequeñas parcelas, entonces si hubiera áreas libres donde vivir seguro que vamos a pedir que nos entreguen esas áreas libres; nuestra presión será decir abrogamos esa ley o si no nos levantamos.

Gonzalo Zambrana

Director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba

Creo que uno de los factores que ha definido las jornadas de octubre y que ha puesto en tela de juicio, es precisamente la forma de ver el mundo de una manera unidireccional, es decir bajo nuestra visión sin reconocer la visión de los otros. La jornadas de octubre a los bolivianos nos ha dejado en el otro lado del péndulo, tal como sucede con este tipo de convulsión social. Lo que nos está sucediendo ahora es ver al revés, o sea solo ver desde lo que proponen los movimientos insurgentes, y eso es lo que nos están planteando los movimientos insurgentes. Creo que el peor error que cometeríamos a partir de las enseñanzas de octubre es de ver el mundo desde una sola óptica, sin reconocer las otras que existían o que vendrán. Rescato lo que expresaba el compañero de Sajama en el sentido que existen matices; las áreas protegidas siempre han sido conflictivas desde su creación pero existen matices, en el mismo Parque Tunari existe matices. La ley del Parque Tunari ya lleva varios años, y conocemos que existen otras dos propuestas. Aquí tengo en manos una de ellas, en realidad lleva la autoría de un Comité de Defensa de la Cordillera del Tunari, y como se ve es una propuesta netamente campesina. A mi gustaría saber que opinan de esta propuesta los compañeros campesinos que están presentes? A mi modo de ver es una propuesta bastante completa incluso plantea hasta estrategias de financiamiento, como por ejemplo un impuesto ecológico.

Zacarías Ortíz

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Ayopaya

Esa propuesta que esta en tus manos no es de las organizaciones campesinas legítimas, sino que es una propuesta que realizaron los seguidores del gobierno que ha caído en octubre, o sea seguidores del Goni Sánchez de Lozada. Por eso los que estamos planteando es cambiar todo con la asamblea constituyente, incluso el modelo, porque todo lo que hay en Bolivia es de los anteriores gobiernos seguidores del imperialismo Yanqui.

Eugenio Luna

Dirigente Campesino de la Cuenca Taquiña

Primero quiero preguntar si AGRUCO va continuar haciendo cursos de capacitación o no? Por otra parte, quiero preguntar que función tiene que cumplir el Parque Tunari, a donde apunta? Dentro esta área protegida puede haber tierras de cultivo dentro de ellas o no?

Jaime Delgadillo

Técnico de AGRUCO-UMSS

Responderé en el idioma quechua tal como pregunto el compañero. Como ya dijeron algunos compañeros que me han antecedido, no podemos decir que todas las áreas protegidas son iguales. Cada caso es particular. Algunos parques indicaron que están bien, no hay ningún problema; en otros casos hay muchos problemas. Por ejemplo dijeron que el Parque Sajama está funcionando bien, pero el Parque Tunari es muy diferente. Entonces de las tierras en el Parque Tunari todavía no está definido, como ustedes están reclamando hay que buscar soluciones.

En el caso de los cursos de capacitación, muchos de los compañeros campesinos nos han pedido que continuemos con los cursos de capacitación. Pero esto va a depender si conseguimos como AGRUCO nuevos fondos para hacer los cursos. Para ello en coordinación con la Federación de Campesinos de Cochabamba, ya realizamos un nuevo proyecto que en estos días lo vamos a presentar y ojalá que nos aprueben nuevamente. En una segunda fase de este programa de capacitación, también estamos planteando apoyar en la solución de los conflictos del Parque Tunari, pero a través de un acercamiento transparente entre los actores sociales y la toma de decisiones bajo plena concertación.

Mario Vargas

Comunario de la Comunidad de Chorojo

Primero agradecer a todos. La verdad de la creación de las áreas protegidas como el de Cotacajes Altamachi, es para negocio de las transnacionales, esa es la verdadera versión. Como campesinos por eso rechazamos a todo tipo de leyes de áreas protegidas. En estas leyes siempre los gobiernos han buscado sus intereses junto a las transnacionales. Por eso planteamos como comunarios que nosotros mismos podemos hacernos cargo de las áreas protegidas y de cuidar, incluso estamos de acuerdo en hacer nuevas plantaciones. Esa es nuestra versión, gracias.

Angel Condori Coronel

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Tapacarí

Quizás falta aclarar algo. Creo que primeramente debemos velar por los intereses de nuestro país, no solamente del sector campesino, sino igualmente de los profesionales y otros, todos tenemos derechos y deben ser iguales para todos. Para que? Para que no sigamos siendo dependientes de ningún país rico y que siempre nos han dominado utilizando a algunos de nuestros profesionales. Pero

como podemos cambiar esto? Creo que tenemos que unirnos todos como verdaderos bolivianos, como un solo hombre, con una sola idea. Que debemos hacer para solucionar los problemas de los parques, concesiones petroleras y todo eso? Creo que primero debemos hacer una ley de tierra y territorio a través de la asamblea constituyente. En esa ley debe indicarse claramente que se prohíbe el ingreso de las empresas transnacionales a una determinada área. Por ejemplo nosotros como bolivianos a otros países no podemos ingresar fácilmente, el mismo trato debemos darles a las transnacionales.

Por otra parte, debemos luchar no solo los bolivianos sino también los países vecinos para cambiar el modelo neoliberal. Este modelo ha traído demasiada pobreza; el sector de salud y educación esta peor cada vez más. De los campesinos hasta ahora no tenemos profesionales, esto debemos cambiar con una educación para todos y productiva.

Eliseo Vallejos

Dirigente Campesino de la Subcentral Parque Tunari

Primeramente quiero expresar mis saludos a todos los presentes, a los compañeros visitantes de otros países, a los compañeros campesinos y a los compañeros expositores. Quiero indicar que en el trabajo de AGRUCO se ve claramente que han podido recoger las propuestas y los pensamientos de todas las comunidades de las 5 cinco provincias afectadas por el Parque Tunari. Todo esto nos muestra que hay una buena posibilidad de llegar a una solución del Parque Tunari con todas las comunidades y provincias. Evidentemente hay muchas propuestas que se han hecho anteriormente, pero nunca hemos visto claramente la situación como nos ha presentado AGRUCO. Mi sugerencia es que ahora se puede hacer una propuesta con todos los compañeros campesinos y los expertos ecologistas o ambientalistas, probablemente para cambiar o anular la Ley 1262 del Parque Tunari que está en contra de los campesinos.

Stephan Rist

CDMA, Universidad de Berna, Suiza

Considerando todo lo que se ha discutido hoy día, creo que se puede llegar a la siguiente conclusión. Se ha visto que desde la ciencia y las investigaciones que se han realizado no se puede aseverar que solo una ley nos va a permitir avanzar, mas bien hemos visto que la ley es un obstáculo. Entonces que nos queda? Creo que lo que se debe hacer es apoyar a las comunidades sobre lo que ya existe, sobre lo que esta hecho en términos de gestión sostenible versus recursos naturales.

También hemos escuchado la versión del SERNAP, que indicó que el Parque Tunari es completamente diferente a otras áreas protegidas; y otra vez más de parte de los campesinos hemos escuchado que no quieren aceptar estas restricciones que están asociados a esta ley. Entonces como conclusión creo que esta ley debe ser anulada porque parece que el único actor que lo defiende es la Prefectura, y sobre la base de las nuevas propuestas, tanto de los campesinos como de otros sectores, crear una nueva ley en concertación con todos los actores.

Humberto Mariscal

Director del Parque Tunari

Quiero aclarar lo que dijo uno de los expositores en relación a que la prefectura tiene un nuevo proyecto de ley. Eso no es cierto. En realidad la prefectura quería construir con la participación de los actores campesinos que están aquí y demás actores ambientalistas y en base a las propuestas que han presentado estos mismos actores. Entonces se planteó una metodología no de revisar artículo por artículo, sino discutir primero que queremos para el parque, sin decir si va ser parque nacional, santuario u otra categoría, hasta ahí llegamos. Vuelvo a recalcar que la prefectura no tiene ningún proyecto.

Miguel Angel Crespo

PROBIOMA-Santa Cruz

Me queda una preocupación. Tal vez voy a jugar a ser abogado del diablo. Cuidado que nos hagamos muchas ilusiones con la asamblea constituyente, porque no vaya a ser que después nos demos de cabeza contra la pared. La asamblea constituyente no va a resolver nada si nosotros no tenemos el derecho soberano de acceder sosteniblemente a nuestros recursos naturales. Cuidado que pase lo que pasó con la situación de las llamadas TCOs (Tierras Comunitarias de Origen) que incluso el gobierno entregó estos títulos con bombos y platillos a los compañeros indígenas, pero hoy ¿qué está ocurriendo? En estos territorios están trabajando las empresas madereras, están pasando los gaseoductos por estos territorios y no dijeron absolutamente nada. Cuidado que ocurra lo que está ocurriendo en el parque Kaa Iya, donde hay una administración campesina pero por atrás hay una organización conservacionista que ha negociado con la empresa petrolera por 20 millones de dólares el asunto del bosque Seco Chiquitano. Entonces no nos hagamos muchas ilusiones con la asamblea constituyente, la soberanía se la ejerce no se la recibe. En el caso del Amboro no se espera una ley para que la empresa petrolera Andina no entre a este parque. La autorización estaba otorgada por el

gobierno pero fue la organización y el derecho soberano de estas que no permitió el ingreso de esta empresa.

Feliciano Vegamonte

Ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Con el permiso de los panelistas solo quiero hacer un simple comentario. Como parte de los auspiciadores de este seminario, quiero decir que necesitamos en Bolivia hacer cambios estructurales y los cambios estructurales no se hacen con discursos, sino en forma práctica incluso desde las mismas bases. Lo que se ha hablado anteriormente me llama mucho la atención, por eso insistí en pedir la palabra. Lo que dijo el compañero sobre que no nos haremos muchas ilusiones con la asamblea constituyente, es muy cierto. Toda discusión en torno a la tierra especialmente en Bolivia, es una discusión política. Si no somos dueños del territorio nunca vamos a ser libres.

Con mucho respeto al Director del Parque Tunari, quiero decirle que digamos la verdad. Hubo muchas propuestas para el Parque Tunari, mejor dicho anteproyectos, que eran presentados por los partidos políticos (NFR, ADN y MNR) y de otras instituciones conservacionistas. Por ello decidimos parar ese proceso, principalmente cuando la hija del Goni Sánchez de Lozada (Expresidente de Bolivia) que era diputada nacional estaba muy ilusionada en hacer aprobar una ley de áreas protegidas. En ese mismo momento la señora Debra Pereyra también quería hacer aprobar su propuesta.

Posteriormente coordinamos con AGRUCO para hacer un proceso de capacitación en todos los municipios del Parque Tunari, luego de eso recién hacer una propuesta de parte del movimiento campesino. Pero quiero decir que ni AGRUCO ni otra institución van a solucionar nuestros problemas, AGRUCO solo va hacer algunas investigaciones y en base a los resultados los que vamos a dar una solución somos los actores sociales directamente involucrados en el problema del Parque Tunari.

La propuesta concreta de las organizaciones campesinas es la reversión de todas las tierras de las áreas protegidas y parques a favor de todos los compañeros campesinos e indígenas del país. Como vamos hacer operativo esta propuesta? Con una ley de tierra y territorio que ya esta encaminado. Con otras leyes como la de la Reforma Agraria y otras, a los campesinos solo nos han dado derecho a la tierra en Bolivia, y no tenemos derecho al territorio de lo que se aprovechan las transnacionales como dijo anteriormente el compañero Miguel. Las transnacionales son en realidad las que manejan los gobiernos en Bolivia, y sirvientes de estos son todos los que están en cargos del gobierno. Todos los gobiernos proponen trabajar por el pueblo, pero por atrás están haciendo negociados como el ALCA que ahora

esta apoyando el actual Presidente. Sabemos que el ALCA será un perjuicio para los compañeros campesinos. Entonces hay que conocer los intereses de cada uno de los actores.

Por ejemplo las propuestas tienen que conocer todas las bases y no solo algunos dirigentes; sobre las leyes no puede decidir sola una persona. Este seminario incluso no es una instancia de decisión, al contrario es una instancia de información y de reflexión. Los llamados indios en este país ya no tenemos porque tener miedo, más bien debemos capacitarnos mucho más para que así podamos discutir y debatir nuestros problemas. Por eso quiero pedir a AGRUCO que continuemos con los trabajos de capacitación y de investigación, porque estos nos tienen que servir para conocer y aprender más, y así buscar soluciones a nuestros problemas en debates y discusiones abiertas ya sea con los del gobierno u otros. Eso quería expresar, gracias.



Mesa redonda final del seminario con participación del Lic. Adolfo Mendoza (Prefectura de Cochabamba), Felix Terceros (Municipio de Tapacarí), Dr. Willi Graf (COSUDE) y Limber Olmos (Federación de Campesinos de Cochabamba)



Participación del Consejero Departamental del Municipio de Tapacarí, Sr. Angel Condori durante la ceremonia de clausura del seminario.

Mesa redonda final

Mesa redonda final

Participantes:

Dr. Willi Graf, COSUDE

Lic. Adolfo Mendoza, Prefectura de Cochabamba

Limbert Olmos, FSUTCC

Félix Terceros, Municipio de Tapacarí

Moderador:

Dr. Stephan Rist, CDMA de la Universidad de Berna-Suiza

Iniciaremos entonces con la mesa redonda final del seminario, pidiéndoles a los invitados a que a manera de presentación realicen una primera intervención.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Como indicó Stephan, actualmente ocupo el cargo de Director de Fortalecimiento Municipal de la Prefectura de Cochabamba. En realidad formo parte de la nueva gestión prefectural que nace a partir de los conflictos de octubre, y la explicación de nuestra presencia allí tiene que ver precisamente por los cambios políticos que se generaron en Bolivia el mes de octubre pasado.

Como habíamos señalado al inicio de este evento, la Prefectura de Cochabamba está tratando de trabajar alrededor de todas estas discusiones en la perspectiva de cambiar la visión que se tiene de la Prefectura en el sentido de que ya no sea concebida como una entidad interventora, si no mas bien como una entidad facilitadora de procesos. Es necesario aclarar que también los cambios políticos que están sucediendo en el país nos están permitiendo construir una nueva visión de la relación entre gobernabilidad social y biodiversidad, no es fácil porque hay todavía viejas prácticas políticas que hacen difícil los cambios prefecturales. Por otra parte, todavía subsisten las viejas fuerzas políticas que están en juego, entre lo que podríamos denominar en términos Pierre Bordieu, la mano izquierda y la mano derecha del Estado, aunque la mano derecha este fracturada.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Buenos días, soy de la Central Morro Sacaba y estoy aquí en representación de la Federación de Campesinos de Cochabamba. Para mí es un gusto participar en este seminario, porque aquí se puede tener mas información de las investigaciones y discusiones, que luego se puede difundir a todos los compañeros campesinos, y también hacer planteamientos acerca de todo lo que se está tratando en este seminario.

Félix Terceros

Director de Desarrollo Social del Municipio de Tapacarí

Estoy aquí en realidad, en representación del Honorable Alcalde Municipal de Tapacarí que por motivos de fuerza mayor no ha podido asistir a este debate, por lo que me encomendó participar en nombre suyo. De esta manera estoy dispuesto ha responder a todas las inquietudes que tengan, y también recibir toda la información, para luego transmitirles al municipio y toda la población Tapacareña.

Willi Graf

Coordinador adjunto de la COSUDE

Soy Willi Graf de la COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación); COSUDE tiene una larga tradición en Bolivia de apoyo al uso de los recursos naturales sobre todo dentro el manejo de sistemas productivos, pero también en el tema de la sostenibilidad en cuanto al uso de los recursos naturales y su interacción con la sociedad.

Dentro este ámbito venimos apoyando, por ejemplo, la reflexión que AGRUCO hace sobre la interacción de las culturas andinas con los recursos naturales; asimismo venimos apoyando procesos de reflexión sobre los ecosistemas de montañas y los recursos hídricos, temas que se priorizaron durante la celebración del año internacional de las montañas el 2003. De hecho COSUDE ve estos temas como uno de los grandes desafíos para Bolivia y probablemente también de otros países. Toda esta reflexión sobre la gobernabilidad social para el uso de los recursos naturales, el manejo de cuencas, la conservación de la biodiversidad y otros temas relacionados, creemos que son vitales para Bolivia.

Una preocupación que quisiera compartir con ustedes en relación a las áreas protegidas y en particular con el SERNAP, es la sostenibilidad financiera de estas. Tal vez la reflexión de este seminario puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, puesto que el gobierno de Suiza ha puesto a disposición del FUNDESNA un

millón de dólares como fondos fiduciarios, lo cual es un intento del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) para crear un sistema de financiamiento que sea sostenible. Pero lo que me preocupa es que la supervisión de este fondo terminamos este junio, y ahí me surge la interrogante. Que sentido tiene un financiamiento sostenible para un sistema que tal vez no es sostenible? esto es algo que quería compartir con ustedes como reflexión.

Stephan Rist

Moderador: preguntas para la Mesa Redonda

Muy bien gracias. Como la mayoría de los miembros de esta mesa redonda no pudieron estar en el seminario durante todo el tiempo, se ha pensado proponer preguntas para una intervención de cada uno ellos.

Entonces la primera pregunta es *¿Cuál es la visión que ellos tienen y las instituciones a las que representan en cuanto a la situación actual de la biodiversidad y de lo que son las áreas protegidas más específicamente?* Creo que es importante conocer la visión institucional y personal sobre la biodiversidad y las áreas protegidas.

La segunda pregunta es: *¿Cómo ven la sostenibilidad del sistema de áreas protegidas tomando en cuenta las diferentes dimensiones que están involucradas, tales como la dimensión económica, social, cultural y ambiental?*

La tercera pregunta es: *¿De qué manera la sostenibilidad está articulada con diferentes roles de los actores que están involucrados en la gestión de las áreas protegidas?*

Considerando la visión que tienen sobre la sostenibilidad de la biodiversidad y las áreas protegidas, se plantea la cuarta pregunta de la siguiente manera: *¿Cuáles serían los ajustes que ustedes consideran necesarios en la perspectiva de mejorar la sostenibilidad de la conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas?*

Pensamos que estos ajustes deberían darse en la interrelación o no relación de los principales actores involucrados como son el Estado, los ministerios del ramo, las entidades públicas como el SERNAP, las prefecturas, los municipios, las empresas privadas, las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y, desde luego, las organizaciones campesinas.

Entonces para iniciar la ronda de respuestas le daríamos la palabra al representante de la prefectura.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Gracias. No podría hablar antes de dejar en claro que nuestra posición no es solo personal, sino que también corresponde a la nueva visión de la Prefectura,

aunque en verdad mucho de lo que expresaré son posturas personales. Insisto que la nueva visión de la Prefectura esta en construcción y precisamente este tipo de seminarios nos están brindando insumos para discutir, reflexionar y deliberar esta nueva visión prefectural.

Respecto de la situación actual de las áreas protegidas y la biodiversidad, creemos que tiene que ver con dos componentes fundamentales: El primero es que en la practica todas las acciones criticas que son fundamentalmente sociales, tienen que ver con una critica de las definiciones asumidas en el país en la década de los noventa; es decir en el fondo se pone en tela de juicio aquel ámbito normativo que formo parte de las reformas políticas de segunda generación, y que hoy pues, deben cambiar. Así como las reformas políticas de los noventa expresaron en el marco normativo una serie de condiciones diferentes a las anteriores políticas, en términos de la temática de la biodiversidad y las áreas protegidas ocurrió algo similar. En segundo lugar, hoy estamos ingresando a una nueva etapa donde los actores sociales han tenido un enriquecimiento en términos de relación durante la década de los noventa, que la ubicamos como una década fundamental para entender las nuevas visiones en torno a las áreas protegidas y la biodiversidad.

Creemos que el reto hacia adelante tiene que establecerse en base a la conjunción de dos criterios: Por un lado, aquello que es clásico en referencia al "bien común" y, por otro lado, la idea de respeto al "derecho a la diferencia". Sabemos muy bien que las mayores críticas sociales respecto a lo que ocurre con las áreas protegidas, tienen que ver con las reivindicaciones en términos de "derecho a la diferencia". En ese sentido creemos que nuestro reto e insisto, es conjuncionar ambos elementos. Si es que se ve a las áreas protegidas y la biodiversidad como problemáticas específicas del "bien común", se estaría descartando la posibilidad de sostener la legitimidad del "derecho a la diferencia". Por el contrario, si es que se basan las acciones única y exclusivamente en el "derecho a la diferencia", y nos olvidamos del bien común, se estaría ingresando en un panorama de exacerbación de los "particularismos", lo que impediría dotarle de sostenibilidad a aquello que formalmente llamamos áreas protegidas y a aquello que formalmente tiene que ver con el tema de la biodiversidad.

En este sentido y en el marco de la asamblea constituyente la apuesta que se está haciendo, es que se deben discutir los principios fundamentales de esta relación entre el "derecho a la diferencia" y el "bien común". Debo aclarar sin embargo, que no pensamos que la asamblea constituyente sea la panacea, así como en algún momento se pensaba que la democracia iba a resolver todo e iba a dar pan a todos. Creemos que la asamblea constituyente simplemente brindará los principios sobre los cuales los temas específicos deben tratarse y resolverse bajo la nueva coyuntura.

Entonces, esa relación entre el "bien común" y el "derecho a la diferencia" en el caso de las áreas protegidas y la biodiversidad debe formar parte de uno de los

temas específicos de deliberación en el marco de la asamblea constituyente, pero no es necesario que esta se constituya para discutir estos temas, sino que lo antes posible se debe empezar con un proceso de deliberación entre los distintos actores involucrados con la temática de la biodiversidad y las áreas protegidas, esperando que de esa deliberación anticipada puede darse cuerpo a los contenidos que permitirían establecer los principios expresados en la asamblea constituyente.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Gracias. Como dijeron mis compañeros, antiguamente la biodiversidad se manejaba y se la veía de diferente manera ¿Por que?. Porque no había mucha contaminación como ahora, antes el ambiente era mas sano, pero ahora vemos como están creciendo las industrias que contaminan. Por otro lado, la eliminación de árboles es mucho más fuerte. Todos vemos que hay un cambio en la biodiversidad y que ahora se quiere proteger en las áreas protegidas. Asimismo se han realizado nuevas leyes para esto, como la ley forestal y la ley del medio ambiente, pero entre estas hay contradicciones. Entonces nosotros como campesinos tampoco podemos decir que con los nuevos cambios va a cambiar, por ello mantenemos nuestra posición de que las áreas protegidas deben estar en nuestras manos, caso contrario seguiremos luchando y defendiendo nuestros derechos. Gracias

Félix Terceros

Representante del Municipio de Tapacarí

En el Municipio de Tapacarí todo está ligado directamente con lo que son las organizaciones campesinas originarias. Esto a funcionado con un principio desde hace mucho tiempo atrás, y eso implica que las organizaciones campesinas originarias han normado, de acuerdo a su cultura, el uso y manejo de los recursos naturales como el suelo, los bosques y otros. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos años con la promulgación de las nuevas leyes, con las cuales ha cambiado incluso el rol de las mismas organizaciones campesinas. Por un lado, sigue funcionando la central campesina desde los sindicatos, pero, por otro lado, se tiene al comité de vigilancia que se organiza a partir de los sindicatos y esta ligado a la Ley de Participación Popular.

Con la Ley de Participación Popular por ejemplo, se han implementado varios proyectos relacionados con el manejo y la recuperación de los recursos naturales como los suelos y los bosques, pero un problema de estos proyectos es la sostenibilidad. Muchos proyectos solo funcionan mientras están a cargo de las

ONGs o el municipio, pero cuando estas se retiran los proyectos quedan ahí nomás, y esto de alguna manera a creado cierta debilidad. Por eso el Municipio de Tapacaré está buscando implementar otro tipo de proyectos relacionado con los recursos naturales, con una responsabilidad desde las organizaciones campesinas, y esto implica devolver los roles originarios de las organizaciones campesinas tradicionales. De esta manera se pretende involucrar directamente a los campesinos en el manejo y la conservación de los recursos naturales, lo que consideramos que es muy importante para lograr la sostenibilidad del manejo y la conservación de los recursos naturales.

Es verdad que en algunas comunidades están dejando de controlar y cuidar sus recursos, para revertir esta situación consideramos que es importante los procesos de capacitación de los recursos humanos en temas de manejo, conservación y administración de los recursos naturales. Este tipo de proyectos se tienen insertos en el PDM y los POAs por ejemplo, ya que a partir de esta capacitación pensamos que puede lograrse una sostenibilidad en el manejo y la conservación de los recursos naturales desde las mismas comunidades campesinas. De este modo pretendemos fortalecer la autogestión y el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas. Para ello es importante también el apoyo de las ONGs, la Prefectura y otras instituciones, pero bajo esa visión de autogestión y desarrollo sostenible. Al respecto, quiero manifestar que el Municipio de Tapacaré requiere bastante cooperación y apoyo, puesto que territorialmente es muy grande y tiene muchas comunidades que requieren de ayuda para mejorar su situación, principalmente en lo que respecta a la recuperación y la conservación de sus recursos naturales como suelos, bosques, áreas de pastoreo y aguas. Con esto quiero decir que la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad tampoco van a poder encarar solamente el Municipio y las comunidades campesinas, sino se requiere la colaboración y la cooperación del Estado y otras instituciones.

Willi Graf

Coordinador adjunto de la COSUDE

Primero me voy a permitir contarles una experiencia personal con las áreas protegidas. Como turista privilegiado dentro un grupo que tenían los recursos para disfrutar de las áreas protegidas, tuve la oportunidad de conocer esos gorilas famosos de montaña que hay en Ruanda, muchos de ustedes tal vez han visto en televisión, y el costo para visitar estos lugares era alrededor de 150 dólares por persona por un día, pero al volver me enteré que casi ninguna de las personas que viven alrededor de esos lugares, personas de Ruanda, habían visto los gorilas. Al pensar en esto para mi era evidente que estos gorilas tendrían que sobrevivir para nosotros los turistas, y que ni la gente local que vivía a cinco kilómetros de

los gorilas les podían ver, situación que de ninguna manera podía ser considerado sostenible. En una segunda oportunidad como experto agrónomo en África, tuve una anécdota en Kenia visitando a campesinos, quienes se quejaban de que uno de los mayores daños que había en sus campos era provocado por los elefantes que venían del área protegida del lado. Por ello había evidentemente, fuertes conflictos incluso entre los mismos grupos locales.

En Bolivia los conflictos se le atribuye casi siempre a dos actores: Por un lado está el Estado y, por el otro lado, está la sociedad civil, pero la sociedad civil no es homogénea, hay muchos intereses particulares y creo que esto es parte de la experiencia mundial con áreas protegidas cómo lo ha mostrado la Doctora Rodríguez en su exposición, al indicar que Bolivia no es un caso muy particular hablando de conflictos. Más bien, lo particular de Bolivia es que tiene una alta riqueza biológica, mientras que las experiencias de conflictos alrededor de las áreas protegidas en los hechos es mundial.

Por otra parte, como indicó el señor Alca, al final lo que se impone es lo local; puedes tener lo mejor como ley o como sistema nacional, pero si a nivel local no logras un mínimo de aceptación y consenso, la ley no se va a sostener, va a caer. Entonces creo que la reflexión que se está haciendo aquí es muy interesante para la cooperación internacional.

Algo que se debe considerar al analizar el tema de las áreas protegidas, es que nosotros venimos de países donde se ha destruido la naturaleza, a cambio se ha dado un desarrollo económico muy importante, y lo que ahora estamos financiando es la búsqueda de un nuevo equilibrio con la naturaleza con esos recursos económicos que hemos generado a través de procesos de industrialización y de servicios. Por ejemplo en Suiza cuantos osos existen? Creo solo hay en zoológicos. Todos los animales endémicos de Suiza ya no existen y por ejemplo cuando se ve un lobo en algún lugar que también era un animal endémico en Suiza, es todo un acontecimiento nacional que sale en los periódicos, como si el lobo se va ha comer media ciudad.

Tenemos entonces un problema de legitimidad como cooperación internacional, porque nosotros en nuestros países hemos destruido nuestra naturaleza y ahora con los recursos que hemos generado en parte por el desarrollo, los países industrializados pedimos mantener por lo menos el Amazonas. En conferencias internacionales es un problema grande y con razón países como Malasia nos preguntan que ha pasado con sus bosques, y en verdad los bosques boreales en Europa casi han desaparecido, los bosques naturales ni hablar, aunque se ha reforestado mucho después con los recursos generados por la industrialización.

Este tema es muy particular para la cooperación internacional, y creo que se repite a nivel de país. La misma crisis de legitimidad tienen los Estados frente a los pueblos indígenas u otros grupos que quieren aprovechar los recursos naturales para su desarrollo, ya que se les quiere imponer límites entonces surgen fuertes

conflictos. Por lo tanto, en base a nuestra propia experiencia, no me sorprende lo que se vive en Bolivia en el caso por ejemplo del Parque Tunari, donde la cooperación Suiza ha estado involucrado a través de sus financiamientos como en los programas de reforestación (PROFOR), el programa del manejo de cuencas (PROMIC) y ahora a través de programas de investigación.

A pesar de que no hay elefantes en el Tunari, pero hay bastantes conflictos, aunque posiblemente haya elefantes blancos hablando desde el punto de visto económico (inversiones sin beneficios), y todo esto trae efectivamente muchos problemas. La única forma probablemente de resolver estos problemas, es abrir una amplia discusión a nivel local y un consenso entre todos los actores; no olvidemos que si no se resuelve el tema a nivel local no hay sostenibilidad, pese a que pueden existir una buena legislación y acuerdos interinstitucionales.

Stephan Rist

Moderador

Muy bien gracias. Creo que con esta primera ronda vemos que lo que expresaron tienen que ver mucho con lo que se ha estado debatiendo durante estos días en el seminario. Por otro lado, la problemática de la biodiversidad y las áreas protegidas no solo se reduce a aspectos técnicos, sino que claramente se ha mostrado que estos temas están inmersos y relacionados con aspectos socio-económicos y políticos como la asamblea constituyente y hasta con los elefantes verdaderos y blancos. Entonces es importante situarnos otra vez en ese escenario, donde tenemos que ampliar la visión mucho más allá, porque tal vez uno u otro estamos acostumbrados a ver la situación desde un punto de vista solo técnico profesional.

Pasaríamos entonces a ver la tercera pregunta, aunque creo que ya lo han mencionado por lo menos en forma indirecta, que hace referencia a lo siguiente: ¿Cuáles son los ajustes que se deberían dar en las relaciones entre Estado y sus instituciones y las organizaciones de la sociedad civil? Para que no sea una pregunta muy amplia, les pediríamos que vean la posibilidad de indicar dos ajustes que se requiere hacer con mayor urgencia. Empezaríamos nuevamente con Willi porque después, lastimosamente tendrá que retirarse. Empezaríamos entonces al revés, le daremos la palabra primero a Willi Graf.

Willi Graf

Coordinador adjunto de la COSUDE

Es un tema que realmente me preocupa mucho. Pensamos que la sostenibilidad tiene tal vez hasta cuatro niveles fundamentales ha considerar: el nivel

institucional, el nivel social, el nivel ecológico y el nivel financiero. Tal vez pueda sorprenderles lo que diré, pero pensamos que el nivel ecológico en este momento es el que tiene menos peligro, porque las extensiones todavía son grandes, evidentemente algunas áreas como la región andina son más frágiles y de menos extensión.

La sostenibilidad ecológica que siempre ha sido la preocupación central de las áreas protegidas y la motivación central para financiar áreas protegidas, si bien esta en peligro pero la mayor preocupación en este momento es el tema social. Vemos que el consenso social sobre áreas protegidas y cómo manejarlos no es suficiente para garantizar la sostenibilidad ecológica de las áreas protegidas en Bolivia. Esto ocurre porque tal vez la sociedad boliviana todavía tiene que buscar en sí, la sostenibilidad del mismo país. Creemos que hay todavía temas muy importantes a nivel de la sostenibilidad de la misma sociedad boliviana como una sola unidad, y esto también se refleja en las áreas protegidas posiblemente con mayor intensidad porque aquí se encuentran pueblos muy distintos y con lógicas muy diversas.

Otro tema que nos preocupa mucho es el nivel institucional. A pesar de los diez años de esfuerzos con el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), consideramos que todavía no se puede hablar de una institucionalidad muy fortalecida. El año pasado por ejemplo, hubo una crisis muy fuerte en el SERNAP debido a los acontecimientos políticos y la influencia de algunos grupos sectarios. Esta situación en el plazo de un mes ha puesto en peligro todo el sistema y quedó de alguna manera desestructurado. Todo esto demuestra una tremenda fragilidad institucional, lo que no permite asegurar una sostenibilidad social ni ecológica. Por eso pensamos que es más urgente resolver la sostenibilidad social e institucional del sistema, y ahí también está la sostenibilidad financiera. Efectivamente es muy preocupante que un Sistema Nacional de Áreas Protegidas dependa en 95% de los recursos provenientes de la cooperación internacional.

Para dar otro ejemplo diferente a lo que ocurre en el SERNAP, es la situación del programa nacional de semillas que tiene 70 % de recursos propios y 30% proviene de la cooperación internacional. Hay otros proyectos que también dependen mucho de la cooperación internacional, pero no son sistemas nacionales. Esto no es sostenible

Por otro lado se ha intentado crear mayor sostenibilidad financiera para las áreas protegidas a través de FUNDESNAP, esta es una fundación que ha recibido fondos de Canadá, de Suiza, Gran Bretaña y algunos otros fondos del Banco Mundial. Con esta fundación se ha pretendido hacer más sostenible el financiamiento de las áreas protegidas, porque la idea fue crear un fondo fiduciario, lo que significa que el dinero depositado no se retira queda como fondo y solo los intereses y las ganancias que se crean en la bolsa internacional y otros lugares sirven para financiar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lamentablemente estos fondos siguen siendo una pequeña proporción del financiamiento total que se necesita para todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por todo esto es que al inicio indique, que para

nosotros es también una pregunta si vale la pena seguir manteniendo este sistema de financiamiento posiblemente sostenible para un sistema que en la práctica tiene tantos aspectos de insostenibilidad. De hecho en el convenio está previsto que a partir de este año Suiza ya no da ningún seguimiento a este millón de dólares que ha depositado en FUNDESNA, pero creemos que es demasiado temprano para dejar esta supervisión porque otros niveles del sistema son todavía muy insostenibles.

Félix Terceros

Representante del Municipio de Tapacarí

Es muy importante destacar que la sostenibilidad no se puede lograr, si es que no se hace un trabajo conjunto e integral. Aquí tiene que ver mucho la participación de las organizaciones sociales, pues si no involucramos a las organizaciones campesinas y a la gente que vive en las áreas que queremos proteger, va ser muy difícil lograr una sostenibilidad. En este sentido, deben ir de mano la participación social, la institucionalidad y el financiamiento, lo cual es muy importante para que la gestión de las áreas protegidas sea sostenible. Entonces es muy importante involucrar a las organizaciones sociales en todos los aspectos, el fortalecimiento institucional y la disponibilidad de recursos. En conclusión, debe verse a las áreas protegidas de manera integral, así lograr una sostenibilidad efectiva de la biodiversidad y alcanzar una sostenibilidad ecológica que todos esperamos.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Cuando analizábamos la situación de los recursos naturales en los talleres de capacitación que realizamos con AGRUCO, vimos con mis compañeros que esa parte de la sostenibilidad no se da porque se está perdiendo la cultura y las tradiciones de antes. Esto ocurre porque hay una marginación a la cultura y las tradiciones de los campesinos, desde ese punto de vista ya se ve que no existe una sostenibilidad. Hay también otras cosas, pero si se pierde la cultura y las tradiciones es difícil que exista sostenibilidad.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Quisiera referirme a algunas de las dimensiones ya apuntadas respecto de la sostenibilidad, como son las dimensiones institucional, social y política.

Creo que ahí hay un componente político bien importante que hace referencia a lo siguiente: el tema de la sostenibilidad es un asunto “glo-cal”, es decir que el asunto de la biodiversidad y las áreas protegidas no solo no se resuelve única y exclusivamente en el ámbito global o en el ámbito local, sino que es un asunto que involucra a todos. Entonces, la preocupación financiera debe estar orientada por un criterio que escapa de ver esta dicotomía que viene de afuera o lo que está dentro, es decir la problemática de los parques o las áreas protegidas no admite una división tajante entre lo que llamamos formalmente la cooperación internacional y los resortes locales. En la práctica, la cooperación internacional ha actuado en muchos casos también como un actor local muy intenso, y en ese sentido, así como en el carnaval el personaje son exactamente lo contrario que en otro tipo de escenarios.

Un primer desafío creemos que es ver esta nueva relación, enfrentarse fundamentalmente a esta nueva dicotomía que la considero como parte de la propia construcción colonial del poder. Eso obviamente no quiere decir que las preocupaciones en términos de sostenibilidad financiera respecto de estos actores “glocales” no tengan validez o estén vacíos de contenido, más bien la figura es exactamente contraria, son actores “glocales”, llamémoslo así, fundamentales y preocupados por el tema de la sostenibilidad. Estos actores deberían participar por lo tanto, en la redefinición de las reglas de juego; ahí entramos a la sostenibilidad en términos institucionales. Finalmente hay muchas reglas de juego que ya no funcionan y hay que pensar también en su modificación.

Entonces difícilmente se puede ver la sostenibilidad solamente en términos de pequeñas modificaciones de artículos o de normas, creemos que el asunto es mucho más grande, y esto se relaciona también con las dimensiones simbólicas que acompañan a la sostenibilidad. Una otra gran dicotomía más allá de la cooperación internacional y los actores locales, ha sido construida alrededor de Estado y sociedad civil; por varios datos, varias muestras empíricas en este país que vive y respira a través de los conflictos, tal vez en ese sentido también habría que ver el problema de la sostenibilidad, los movimientos sociales no tienen una orientación necesariamente “anti-estatal”, por el contrario los movimientos sociales en Bolivia se han orientado a formar parte digamos de estrategias estatales. Ese es el caso de toda la discusión respecto de la problemática de los parques, todo lo que tiene que ver con las TCOs (Tierras Comunitarias de Origen) el reconocimiento constitucional de lo pluri o multiétnico, etc. Hay entonces intensa participación subalterna en la propia construcción estatal. En ese marco, la dimensión política de la sostenibilidad también invita a repensar esta arbitraria dicotomía entre Estado y sociedad civil, mucho más cuando de pronto aparece en el escenario local la temática de la “gobernabilidad participativa” que intenta vincular gobiernos locales con sociedad civil a nivel local.

Sephan Rist

Moderador

Muy bien gracias. Creo hasta aquí, para mi por lo menos, ya se vislumbra una dimensión muy interesante y parecería que estamos colectivamente construyendo un concepto de sostenibilidad. Podríamos coincidir entre muchos que sostenibilidad no tiene que ver solamente con lo económico o lo ecológico, sino que al hablar de sostenibilidad debemos tomar en cuenta una multiplicidad de dimensiones: lo ecológico, lo económico, lo institucional, la participación social, la dimensión política, la cultura y las tradiciones y también los aspectos simbólicos. Entonces este análisis me parece muy interesante, tal vez sin estar previsto está surgiendo algo que podemos seguir trabajando y reflexionando.

Pasaríamos entonces a ver la tercera pregunta, aunque creo que ya lo han mencionado por lo menos en forma indirecta, que hace referencia a lo siguiente: ¿Cuáles son los ajustes que se deberían dar en las relaciones entre Estado y sus instituciones y las organizaciones de la sociedad civil? Para que no sea una pregunta muy amplia, les pediríamos que vean la posibilidad de indicar dos ajustes que se requiere hacer con mayor urgencia. Empezaríamos nuevamente con Willi porque después, lastimosamente tendrá que retirarse.

Willi Graf

Coordinador adjunto de la COSUDE

Mencionaré tres pero en forma rápida. El primero, es que se necesita una discusión mucho más amplia del tema de la biodiversidad y las áreas protegidas involucrando esencialmente a los gobiernos municipales y las prefecturas, en la perspectiva de que ellas podrían ser los nuevos responsables de la gestión de la biodiversidad y las áreas protegidas en sus respectivas jurisdicciones. Me parece tremendamente importante que a través del proceso de participación popular se refuerce también el sistema de áreas protegidas; en los espacios municipales de alguna manera se han fortalecido otros procesos como las TCOs por ejemplo, por lo que también el tema de las áreas protegidas puede ser fortalecido, y a través de esto se puede crear una mayor aceptación política social donde evidentemente son actores importantes los grupos indígenas y otros grupos de interés de las áreas protegidas.

El segundo punto tienen más que ver con el ámbito de la institucionalidad. Aquí se requiere una decisión y una clara muestra de voluntad política del Estado para institucionalizar de manera definitiva el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, para que esta tenga sobre todo la suficiente fuerza para resistir cualquier ingerencia política tanto a nivel nacional como a nivel de los diferentes componentes del Sistema

Nacional de Areas Protegidas. Además se requiere de un adecuado control social en las instancias como el SERNAP, o sea el control de la sociedad civil sobre esta instancia en realidad no existe, creemos incluso que hay sistemas de control social más desarrollados para la cooperación internacional, aunque no debería ser el caso. Cuando hay problemas llaman a la cooperación internacional, cuando debería llamar a las mismas fuerzas y contra fuerzas del ámbito nacional.

El tercer aspecto, tiene que ver con el desarrollo de una estrategia financiera verdaderamente sostenible, lo que implica generar ingresos y reducir gastos. Por ejemplo si hay una aceptación social tal vez no se requiere de guardaparques, puesto que estos representan en este momento uno de los gastos más fuertes para el sistema. Esto podría reducirse o podría financiarse localmente a través de estrategias mas claras de ingreso, como las entidades descentralizadas de ecoturismo, ya que este rubro puede generar muchísimos más ingresos de lo que hasta hoy ha generado. Se dice a menudo que llegan muchos turistas a Bolivia, pero comparando con lugares donde realmente llegan podríamos decir que a Bolivia no llega nadie. Esos serían los tres puntos.

Félix Terceros

Representante del Municipio de Tapacarí

Creo que para esta situación se debe crear espacios de discusión, donde puedan participar actores locales, gobiernos municipales y del gobierno nacional. En estos espacios de discusión deben ajustarse los mecanismos tanto de administración como de manejo de los recursos naturales para que se pueda hacer efectivo esa sostenibilidad que tanto se busca. Entre todos los actores se puede plantear la forma de como se va administrar y manejar los recursos naturales. Aquí podrían estar involucrados las autoridades del gobierno municipal, la sociedad civil y el gobierno nacional pero dejando de lado la influencia de los partidos políticos que muchas veces trabajan bajo objetivos sectarios.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Nosotros también vemos que debe haber una relación organizada junto con los campesinos, los municipios y el gobierno. También es necesario un control social, porque vemos que las instituciones no manejan bien los fondos y hay mucha corrupción en el gobierno. Por eso muchas veces los campesinos no están de acuerdo con lo que plantea el gobierno, se necesita un control social como en los municipios, y así tal vez se puede mejorar más en las instituciones.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Quisiera comenzar indicando que la biodiversidad, en términos generales, se relaciona con temas de la agenda política nacional como es la discusión de tierra-territorio y la problemática del ALCA, y esto nos invita a pensar que esta discusión podría canalizarse a partir de un intenso proceso de deliberación local en el marco de los contenidos de la asamblea constituyente, es decir creo que ese es el escenario fundamental para ir avanzando desde lo local a lo nacional en la discusión de estos temas, puesto que estos eventos son enriquecedores para los actores que nos involucramos, sin embargo no tienen capacidad de decisión y por eso creo que es necesario discutir en una otra instancia y eso son los espacios que podríamos denominar de “deliberación local” sobre estos temas de la agenda política nacional donde entraría el tema de biodiversidad.

El segundo ajuste tiene que ver con la institucionalidad, comparto esa preocupación con Willi, porque es un tema fundamental que considero que no solamente tienen que ver con el control social, sino también con la otra cara de la medalla del control social que es la responsabilidad funcionaria y la rendición de cuentas. Si solo nos detenemos en el control social, entonces simplemente estamos pensando en como las organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto genera un control respecto de gobiernos municipales o prefecturas, es decir respecto del Estado local, pero la contraparte de esto es una responsabilidad funcionaria que puede establecerse claramente como parte de este proceso de transformación de las reglas de juego. Entonces el nivel de institucionalidad debe llegar a la institucionalidad de cargos, no tanto en términos de institucionalidad como reglas de juego. En conclusión dos criterios deben acompañar al control social, la responsabilidad funcionaria y la rendición de cuentas.

Stephan Rist

Moderador

Muy bien gracias. Se ha concluido entonces la ronda de preguntas y respuestas con los invitados. Ahora abrimos la participación de ustedes, pero les sugiero que traten de ser concretos y tomarse el menor tiempo posible.

Participante

No identificado

Gracias. Para empezar a mi me preocupa el proceso de inestabilidad que viene ligado a todo un proceso de cambios que se está viviendo nuestro país. Sin

embargo hay que dejar en claro que las áreas protegidas no se crearon para que el SERNAP se expropien bajo ciertas reglas de juego y que ellos quieran manejar; en muchos casos el SERNAP como administrador de las áreas protegidas se ha constituido en el enemigo más fuerte de las áreas protegidas, o sea quiero decir en áreas donde no había problemas estos se han acentuados con la presencia del SERNAP, lo que significa un retroceso en el proceso de conservación de los recursos naturales. Pero tampoco las áreas protegidas se han creado para otro tipo de agentes o grupos de gente que se expropien.

Entonces creo que aún con todos los problemas que está viviendo nuestro país y que está afectando a las áreas protegidas, seguimos creyendo de que estas siguen siendo los instrumentos que aún sirven para preservar los recursos naturales y la biodiversidad. Otro problema es la poca participación local; el país tiene dos sistemas de administración: el gobierno central y los gobiernos municipales, pero casi es inexistente la participación de los gobiernos municipales en las áreas protegidas. Ahí hay un vacío grande y se debe ayudar a que los municipios en su proceso de desarrollo involucren también la conservación y el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad como parte de la necesidad que tienen las poblaciones.

Por otra parte, me parece que es un error de la cooperación internacional dejar al Estado fondos para que se administren desde el gobierno central. Creo que las áreas protegidas se podrían fortalecer en todas sus dimensiones apoyando al desarrollo local de las comunidades que están siendo afectadas por éstas áreas. Es verdad por otro lado, que no todos los parques tienen los mismos problemas, pero la mayoría tienen el problema de índole social. Un ejemplo bien chiquito pero que significa mucho para entender lo que está pasando en las áreas protegidas, es lo que ocurre en el Parque Carrasco. Aquí ocurre que todas las comunidades aledañas al parque construyen sus casas con el bambú, de repente se establece el Parque y se prohíbe el corte del bambú a los lugareños, evidentemente el guarda-parque tienen que hacer cumplir la norma que está establecida. Como se puede restringir de esta manera a las comunidades mas viejas de estos territorios como son Totorá y Pocona, puesto que históricamente han utilizado el bambú, es más, esta especie tienen una fácil capacidad de recuperación, pero a causa del parque ahora está prohibida su utilización.

Entonces existen desencuentros entre la administración de las áreas protegidas y el desarrollo libre de las comunidades, por lo que obviamente las comunidades no quieren tener parque ni siquiera a su lado. Esas experiencias se repiten en muchas áreas protegidas y la cooperación internacional debería enfocarse al desarrollo de estas comunidades, para que así entiendan que la conservación de un área protegida es importante también para ello, puesto que no se les puede prohibir el derecho a vivir y existir en sus lugares de origen. Creo que más bien se les debe facilitar algunos mecanismos para que saquen beneficios y cuiden su materia prima no solo para ellos, sino también para sus hijos.

Miguel Angel Crespo
PROBIOMA-Santa Cruz

Quisiera tocar tres puntos fundamentales. Primero, insistir en que el tema de las áreas protegidas y lo que significa la gestión de la biodiversidad debería ser parte de la política del desarrollo nacional sostenible, pero el Estado boliviano hasta ahora no lo ha asumido como tal. De nada sirve que sigamos reunidos hablando de la gestión de áreas protegidas y de la biodiversidad, si esto no asume como un política de Estado, aunque hay que reconocer que la estrategia nacional de biodiversidad es un avance. Del mismo modo, otros actores importantes tampoco la asumen como una política prioritaria, estoy hablando de los municipios y también de las organizaciones locales que no se involucran definitivamente en los procesos de toma de decisiones y esto le quita muchas posibilidades de sostenibilidad a todo lo que es el sistema de áreas protegidas, y lo mas grave se está dejando de lado el precepto del derecho soberano sobre las decisiones de esos sectores.

El representante de la COSUDE tiene mucha razón al indicar que las áreas protegidas no pueden seguir bajo la tutela de la cooperación internacional; las áreas protegidas tiene que ir pasando cada vez más a ser una cuestión nacional en la que se pueda establecer mecanismos de sostenibilidad. Aunque creo ya están en marcha algunas estrategias como un “sistema de cobranza” que, según personeros del SERNAP, se pretende implementar inmediatamente al menos en el departamento de Santa Cruz. De este “sistema de cobranza” debe salir un porcentaje para el municipio y otro para el SERNAP, de esta manera se abre la posibilidad de que las comunidades también se benefician, y no estén de acuerdo con las áreas protegidas porque no les trae ningún beneficio.

El otro elemento que quería plantear, es que dado las jornadas de octubre pasado (convulsión social que termino con la renuncia del Presidente Constitucional de Bolivia) debe haber una voluntad política de parte del Estado para encarar dos grandes amenazas. Una de estas amenazas proviene de las iniciativas de integración regional que están siendo propiciadas por el Banco Mundial, el BID y la CAF, a través de las cuales se está buscando la construcción de gasoductos, oleoductos, corredores bioceánicos, hidrovías, etc. Según alguna información, el continente Sur Americano está cuadrículado y estas iniciativas de integración pretenden consolidar un modelo de explotación de los recursos naturales bajo conceptos de “dependencia”, es decir convertirnos únicamente en un país productor de materias primas. Por ejemplo, se hablan mucho de los mercados justos para los productos orgánicos en Europa, pero cuando nosotros queremos exportar cacao transformados en barras de chocolate nos ponen un arancel del 24% y cuando exportamos solo cacao biológico el arancel es cero por ciento, que significa eso? Los mercados justos no son tales en tanto y en cuanto nosotros sigamos exportando

materia prima, pero cuando empecemos a darle un valor agregado ya tenemos que pagar el arancel.

Que significa todo esto? Que a través de las iniciativas de integración regional se está queriendo imponer obviamente todo lo que están rechazando algunos países, concretamente Bolivia tal como en las jornadas de octubre hubo una oposición muy fuerte a los tratados de libre comercio, pero el Estado boliviano hasta ahora no a asumido una posición soberana sobre el tema puesto que a nivel de gobierno se sigue hablando de manera muy sutil. Estos tratados obviamente son una amenaza y tienen un impacto muy fuerte sobre los recursos naturales.

Otro caso son los “corredores biológicos” que se vienen impulsando a partir de organizaciones conservacionistas internacionales, pero también están involucrados el Banco Mundial y el BID. Esta es otra estrategia para el aprovechamiento y la apropiación de los recursos genéticos de la biodiversidad, y nosotros no estamos tomando ninguna iniciativa para frenar ninguna de estas dos amenazas. Los primeros afectados seremos obviamente bolivianos, porque no vamos a poder tener un acceso libre y soberano sobre nuestros recursos de la biodiversidad que es lo único que nos queda y es en lo único que sí realmente somos competitivos, puesto que la competitividad no esta en traer un producto de mejor calidad sino en la cualidad cualitativamente diferente y eso es lo que no tienen otros países. No por nada Bolivia está considerado entre los diez países más ricos en biodiversidad y eso nos hace diferentes con los países del resto del mundo y no estamos aprovechando bajo una política de Estado; mientras no seamos capaces de asumir todo esto, vamos a seguir viendo el tema de las áreas protegidas como un tema que es inherente a los científicos y que sirven únicamente para la contemplación.

Finalmente quisiera decir, que este seminario nos sirva no solamente para que reflexionar sino que para empezar a tomar realmente cartas en el asunto, porque el tiempo apremia ya que estas iniciativas de integración regional y de los corredores biológicos están corriendo a cien por hora y nosotros ni siquiera hemos empezado. Eso es lo que quería plantear.

Sebastian Bolliat

Investigador del Parque Tunari

A mi me parece que al hablar de un sistema nacional de áreas protegidas se esta hablando de un organismo estatal, entonces si queremos pensar en la sostenibilidad de ese sistema tenemos que pensar primero en la sostenibilidad del mismo Estado boliviano. En ese contexto se debe analizar y reflexionar por qué el Estado y sus organismos no son sostenibles, por lo menos ahora se puede decir eso. Tomando una referencia de los gastos del Estado boliviano, vemos que

alrededor de un 35% de sus ingresos esta destinado a pagar la deuda externa, entonces lo que proviene de la cooperación internacional son realmente migajas. Como vamos a financiar el sistema nacional de áreas protegidas cuando tenemos que pagar a la deuda externa un 35% de nuestro presupuesto; creo que hay muy pocas posibilidades de hacer sostenible las áreas protegidas pensando en que el Estado boliviano debe asumírselos.

Por otro lado, no existe participación de la sociedad civil en la elaboración de ese presupuesto. Quién o quienes hacen ese presupuesto general de la nación, acaso hubo alguna consulta a la sociedad civil, nunca lo ha habido, no es cierto? Aunque existe procesos de descentralización pero estos todavía no son muy suficientes. Otro punto que veo con preocupación, son las políticas de privatización que continúan incidiendo fuertemente, por tanto consolidar un organismo estatal diferente en ese sentido es difícil. Entonces pienso que deberíamos reflexionar y encontrar los espacios para poder actuar en la perspectiva de eliminar esas trabas que hay en los organismos estatales y que no permiten una autosostenibilidad.

Participante

Creo que lo que se plantea en general es una transformación del Estado a partir de las áreas protegidas. Considero que las propuestas para ello sin embargo, necesariamente deben partir de lo local para evitar las tergiversaciones y que intermedien terceras personas. El sistema nacional de áreas protegidas y sus actores yo les asemejo con los que desarrollan una tecnología y la transfieren pero no para el usuario, sino para ellos mismos, entonces se vuelven gestores de la tecnología además de usuarios, lo que nuevamente colisiona con las propuestas de lo local. Aquí justamente creo que debemos volcarnos nuestras miradas.

Por otro lado quería hacerle una pregunta al señor Limber Olmos representante de la Central de Sacaba. La organización sindical y comunal hace un manejo de los recursos y define por ejemplo los conflictos en relación a la tenencia de tierra y también establece los mecanismos y formas de manejo de los recursos del agua, no es verdad? Por ejemplo en Sacaba hubo problemas cuando los sin tierra se han entrado a sus terrenos o cuando el PDAS estableció un sistema de distribución del agua, o cuando yacimientos bombea agua de las partes altas que obviamente afecta a las capas de abajo. En ese sentido quería hacer la pregunta al representante de los campesinos de la Central el Morro de Sacaba: ¿Cuáles son las capacidades que tiene la Central del Morro para manejar sus recursos y también sus debilidades o sus dificultades, de tal manera que los municipios y la prefectura en el marco del sistema nacional de áreas protegidas podrían fortalecer en esa gestión?

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Respecto a tu pregunta puedo indicar que en Sacaba tenemos una asociación grande de regantes y también existe la Central Campesina. Las tierras que se han tomado creo que es una movida política que trata de dividir al sector campesino y afectar a los compañeros campesinos. Quieren tomar nuestros territorios que han sido siempre de nosotros, aunque algunos no tienen títulos. En el caso del agua no tengo la información para darte una respuesta.

Participante

No identificado

Coincido mucho con lo que planteó Miguel Ángel sobre el tema de las áreas protegidas. Pero también vale la pena hacer una reflexión en el sentido de que si vemos de manera aislada la situación de las áreas protegidas, pareciera ser un conflicto entre la gestión, la participación y la capacidad de decidir sobre los recursos. Pero si hacemos una revisión retrospectiva, encontramos que la conservación siempre ha sido parte de nuestra vida, principalmente de las comunidades campesinas y pueblos indígenas. Muy posteriormente aparecen las áreas protegidas como una estrategia de conservación y estas han tenido su origen en iniciativas individuales con tinte científico. En la década de los 90 se amplían estas iniciativas a un contexto mucho más social y gubernamental, de donde surgen con fuerza las áreas protegidas. Ahora creo que estamos en una nueva etapa de ampliación de ese contexto social pero en términos de participación. Si bien en la década de los 90 los gobierno empiezan a asumir la gestión de las áreas protegidas, hoy lo que se demanda es que la sociedad civil tenga mayor participación y decisión en las gestión de las áreas protegidas.

Creo que bajo esa perspectiva deberíamos empezar a ver el escenario de las áreas protegidas y la biodiversidad y no como un problema, sino como un proceso de desarrollo y maduración de una estrategia de conservación y gestión a través de áreas protegidas. Si asumimos esa visión, entonces, como dijo Miguel Ángel, debemos subirnos inmediatamente al tren. Las áreas protegidas ya están ahí, ya se tienen algunas normas e instituciones del Estado, lo único que nos queda es ver como acomodamos este nuevo rol de la participación local, de lo que era una indicativa individual a una iniciativa social e institucional. Nuestras propuestas deben apuntar a todo ello, no ver como un problema sino ver la gestión de las áreas protegidas como una etapa más en el mejoramiento del desarrollo sostenible, considerando que siempre hemos practicado la conservación como parte de nuestras vidas, al menos en el caso de los bolivianos.

Stefan Rist

Moderador

Muy bien gracias. Daríamos entonces las últimas palabras a nuestros panelistas, empezando ahora por el representante del Municipio de Tapacarí.

Félix Terceros

Representante del Municipio de Tapacarí

Creo que nos encontramos en Bolivia en un momento político particular, que desde mi punto de vista ha incentivado el surgimiento de diferentes grupos con intereses sectarios y políticos. Esto considero muy peligroso para el país, porque en vez de cambiar para bien podríamos terminar peor que antes. Hay mucha discrepancia entre personas y entre diferentes grupos políticos, por tanto nuestro reto es acomodar nuevamente el Estado boliviano. Para ello se necesita que los bolivianos tengamos una sola camiseta, y nos quitemos los colores políticos, caso contrario por mucho que discutamos seguirán las discrepancias y esto es lo que no deja mejorar nuestra situación y solucionar nuestros problemas. Para terminar simplemente decirles que la única manera para que las áreas protegidas y la biodiversidad este garantizada, es que todos trabajemos bajo una sola idea por Bolivia.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Para despedirme, decirles que es la primera vez que nos invitan a la Central el Morro ha participar en este tipo de seminarios como panelistas. Todo lo que se ha tratado aquí haré conocer a mis compañeros. De mi parte quisiera pedir que no nos quedemos aquí, sino que continuemos avanzando y que siempre se tome en cuenta al sector campesino porque nosotros estamos muy interesados en discutir los temas. Estamos sumamente agradecidos por la invitación a este seminario, gracias.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Por todo lo que se ha expuesto en este seminario, por lo menos para la prefectura, un planteamiento es el de repensar el papel que tienen que jugar las áreas protegidas y cruzar estas con la problemática de las tierras comunitarias de origen

por ejemplo. Aquí creo que es necesario generar un amplio proceso de discusión que no solo involucre a la prefectura sino a todos los actores de la sociedad civil, donde la prefectura debe ser ante todo un facilitador de procesos hacia la generación de oportunidades, antes que ser un interventor tal como sigue ocurriendo por ejemplo con el marco normativo.

Sobre el papel de la cooperación pienso que todo esto está preñado de colonialismo, si es que concebimos que la cooperación internacional es también un actor local. Más bien creo que la idea debe ser ver como la cooperación internacional cumple una responsabilidad global, es decir no se trata única y exclusivamente que aporten recursos financieros, sino también de conocer porque lo hacen. No creo que la participación de la cooperación internacional en términos financieros sea descartable, más bien es parte de la propia sostenibilidad. El problema es, quién pone las reglas del juego y ahí es cuando puede saltar el demonio del colonialismo nuevamente, por supuesto.

Aquí quisiera poner el ejemplo del “Gran Tumpa”. En el relato de Abaycay cuando los Chiriguano atacan una misión, y los misioneros los Franciscanos se refugian en Buenos Aires. Entonces el Gran Tumpa, esto en el período colonial tardío, se desplaza hacia Buenos Aires para preguntar ¿por qué razón los misioneros abandonaron su lugar? El Virrey responde porque ustedes saquearon la misión, y el Gran Tumpa responde no: lo que pasó es que nosotros necesitábamos de esos recursos de la misión para poder subsistir y quien ocupa nuestro territorio debe pagar tributo y por tanto corresponde que los misioneros vuelvan para pagar tributo. Entonces, la lectura aquí es la otra cara de la medalla de la acostumbrada en la relación colonial. Es necesario por lo tanto, que la cooperación internacional participe porque tiene con nosotros una deuda histórica, creo que el asunto podría ir por allí.

Por otro lado, vuelvo a insistir en que la discusión de las áreas protegidas tiene que ver con la problemática del “bien común” y el “derecho a la diferencia”. Es como pensar por ejemplo en que el pan es un bien común, todos tenemos derecho a acceder a un pan. Sin embargo hay pan de Toco, hay pan de Arani y hay las ricas marraquetas en La Paz, no es cierto? Si uniformamos a todos los panaderos seguro que desaparecerá la diversidad de panes. Entonces no estaríamos respetando el derecho a la diferencia, por el contrario si es que dejamos de pensar en el acceso común al pan y simplemente apostamos por el pan de Toco o la marraqueta paceña, ahí sí podríamos estar perdidos porque exacerbamos particularismos y perdemos el fondo de la cuestión del acceso de todos al pan.

El tema de las áreas protegidas tiene que ver con el cruce entre el bien común y el derecho a la diferencia, o sea hasta donde las áreas protegidas tienen que ver con el bien común y, al mismo tiempo, con el derecho de los pueblos indígenas y los campesinos ha participar en la administración y el manejo de las áreas protegidas. Creo que se debe combinar ambos elementos.

Finalmente ¿Qué es el Estado? ¿A que nos referimos cuando hablamos de Estado? ¿Cuando se habla de sostenibilidad del Estado se esta pensando en un Estado neoliberal? ¿Estamos dispuestos a generar una sostenibilidad de un Estado neoliberal? O por el contrario ¿Estamos pensando en la sostenibilidad de una otra forma de Estado?, si fuera así nuevamente salta el tema de la asamblea constituyente, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de Estado también estamos hablando de aquello que se expresa en términos locales como es el Gobierno Municipal; el Estado son también los Gobiernos Municipales y ahí están también trabajando las organizaciones campesinas. Entonces los Gobiernos Municipales están participando en la construcción de un Estado, ojo esto es perverso, porque de pronto todo esto forma parte de la gran maraña que en términos generales podríamos decir Estado neoliberal.

En general, no es que la sociedad civil este en un lado y el Estado en otro, sino que hay una conexión a partir de los movimiento sociales respecto de la propia construcción del Estado. ¿El MAS no es Estado en el parlamento? ¿El MIP no es Estado en el parlamento? Forman parte, pues, del mismo sistema político que criticamos desde los movimientos sociales. Estos temas deberían ponerse sobre la mesa, porque siendo Estado hablo desde allí, no puedo hablar desentendiéndome de la posición desde la cual estoy hablando. Todo Alcalde es también Estado a nivel local, y esto en las áreas protegidas y las demandas de TCOs tiene que ver con el juego de las élites locales, porque el asunto de lo local no se muere en la homogeneidad. Por eso insisto, en que la problemática de la biodiversidad debe formar parte de una intensa deliberación en ámbitos locales, para que de allí nos conduzcan a la creación de una nueva forma de Estado que la creemos sostenible a partir de acuerdos comunes y el respeto al derecho a la diferencia.

Parte V

Visita de campo al Parque Nacional Tunari

Visita de campo al Parque Nacional Tunari (PNT)

El seminario tuvo un complemento práctico a través de una visita al Parque Nacional Tunari (PNT). Esta visita permitió realizar un análisis más objetivo y práctico de la problemática del PNT; al mismo tiempo permitió intercambiar diferentes percepciones y experiencias entre campesinos que viven en el PNT y visitantes externos participantes del seminario.

1. Objetivo de la visita de campo al PNT

El objetivo principal de la visita al PNT fue el de analizar la situación del PNT de una forma más objetiva y a través de un diálogo directo entre campesinos del lugar e investigadores nacionales y extranjeros.

2. Lugar y fecha de la visita

La visita se llevo acabo a las comunidades de Andrada y Tirani de la Sub Central del Parque Tunari del Municipio de Cercado, (Departamento de Cochabamba, Bolivia), en fecha 29 de febrero de 2004, desde las 9:00 hasta las 16:30 horas aproximadamente.

3. Programa de actividades

La visita se desarrollo en base al siguiente programa:

Programa de la visita al Parque Tunari

Horas	Actividad	Responsable
9:00 a.m.	Salida del Hotel REGINA	AGRUCO-UMSS
10:00 a.m.	Reunión en el campamento 10: Presentación de los visitantes, Explicación del parque por los actores locales e intercambio de experiencias	VISITANTES COMUNARIOS DEL LUGAR AGRUCO-UMSS
10:30 a.m.	Recorrido por el parque e intercambio de experiencias	AGRUCO
12:30 p.m.	Descanso y almuerzo en los predios del PNT	
13:30 p.m.	Recorrido por el parque e intercambio de experiencias	VISITANTES COMUNARIOS DEL LUGAR AGRUCO-UMSS
15:30 p.m.	Retorno a la ciudad.	AGRUCO-UMSS PARTICIPANTES

4. Participantes

En la mencionada visita y en el recorrido por distintos lugares del PNT, participaron campesinos del lugar, investigadores (extranjeros y nacionales), guardaparques y algunas autoridades de áreas protegidas que participaron en el Seminario. El total de participantes en la visita fue de aproximadamente 40 personas.

5. Testimonios, opiniones y comentarios realizados durante la visita

A continuación presentamos algunos testimonios que surgieron durante la visita y el intercambio de experiencias entre visitantes externos y campesinos de lugar.

Aquino Heredia (campesino del lugar)

Como están viendo, nos encontramos en las comunidades de Tirani y Andrada que pertenecen a la Subcentral Parque Tunari. Nosotros como campesinos habíamos adquirido en 1953 títulos ejecutoriales de nuestras tierras. Mucho después el gobierno promulgó la Ley 1262 del PNT, la cual en vez de favorecernos nos atenta porque en uno de los artículos prohíbe la crianza de ganado, la extracción de material, la construcción de casas y otros que afectan al sector campesino. Durante el seminario hemos discutido que en otros parques el manejo es más adecuado ¿porque los campesinos no tomamos parte en el manejo del PNT? Por eso nosotros pedimos que este problema debe ser solucionado de una vez.

Eliseo Vallejos (campesino del lugar)

De acuerdo a la historia el PNT, este se inicio en el año 1946 a la cabeza de Arquitecto Urquidi. A mi me sorprende la ausencia del actual director del parque en este momento. En el seminario no han contado toda la historia. En 1958 por los desastres ocasionados por la riada de agua se ha fortalecido mas el PNT, actualmente afecta a cinco provincias y once municipios. Desde el año 1977 las ocho comunidades que estamos en esta área del parque (zona norte de Cochabamba) hemos plantado muchos árboles. Esta plantación realizamos sin ninguna remuneración y hasta ahora seguimos siendo los cuidadores del pulmón de Cochabamba. Pero la prensa dice que somos más bien destructores de los árboles. Al contrario, somos los cuidadores y protegedores del parque. Este último año la comunidad Leuquepamapa ha plantado más de 6000 plantas.

Miguel Carrillo (campesino del lugar)

El año 1994-1995, esta área de recreación del parque estaba muy bien equipado, ahora faltan varias cosas, parece que los anteriores directores no han cuidado bien y solo se han dedicado a velar por su bolsillo. En cambio a nosotros nos duele mucho, porque es nuestro sacrificio, nuestro dinero y nuestro trabajo. Por eso nosotros creemos que esto debe pasar a las manos de los compañeros campesinos, para que haya un mejor manejo. Los años anteriores hemos manejado los árboles con poda tal vez mejor que los profesionales. Ustedes que están investigando han podido observar durante el recorrido que este lugar no se puede llamar parque, sino que debe ser cambiado de categoría a un área de manejo integrado. Deben precisar bien la experiencia, en esa lógica la visita de hoy tiene el objetivo de intercambiar experiencias, así buscar una buena solución para esta problemática. La problemática del parque se está agudizando porque no hay un dialogo entre comunidades y Estado; en segundo lugar, no existe parque sin territorio y toda el área tiene propietarios y además cumple una función social que no solo es cultivar, sino que es cuidar los árboles y no cortar. Entonces estamos cumpliendo con la función social. Por otro lado, si existe interés por cuidar los recursos naturales, es importante conversar con los actores locales y, en base a ello, buscar soluciones. Asimismo el intercambio entre los profesionales y los campesinos debe ser más fluido. Concluyo diciendo, que el Estado crea la Ley y le dice al campesino planta arbolitos y tu después vas ha aprovechar, pero es un engaño. Porque cuando el campesino quiere aprovechar los recursos le dicen usted no puede tocar, y la segunda etapa es la prohibición en el manejo del bosque. Así el Estado corrompe a la comunidad, y hace hablar a la comunidad, lo que no corresponde. Todos estamos concientes de que hay que preservar el medio ambiente. Con los seminarios, por ejemplo de AGRUCO, la gente se da

cuenta y dice: nosotros somos parte del parque y por tanto debemos participar en la administración y en el manejo. Yo creo que este parque es el pulmón de Cochabamba y los que viven en la ciudad también deben contribuir. Espero que de aquí en adelante podamos seguir intercambiando más ideas y que todos los problemas se puedan solucionar en función de satisfacer las necesidades de uno y otro, y les felicito a todos.

Javier Rocha (comunario del lugar)

Yo no estoy metido con políticos. Los anteriores dirigentes estaban comprometidos con los políticos, por eso no querían soltar el cargo. Ahora nosotros somos nuevos y podemos manejar, como decían mis compañeros, AGRUCO ha venido a hacernos despertar, porque nos falta capacitarnos más; y ya no vamos ha permitir que nos manejen como antes. Yo también quiero pedirles que esta visita no sea la primera ni última vez, sino que sigan apoyándonos porque algunas instituciones vienen y luego desaparecen.

Guardaparques

Bueno yo me siento feliz por ver por primera vez, a las instituciones que nos acompañan. Nuestra obligación como guardaparques es controlar los incendios en el área del parque y también otro producir plantines en el vivero y luego plantar. Actualmente producimos 150000 plantines. Nosotros estamos ubicados en los diferentes campamentos, pero el personal es aún escaso y no abastece.

Dr. Stephan Rist (Investigador extranjero)

En primer lugar, les agradezco mucho por la información muy clara y muy rica que nos ayuda a entender mejor la situación porque se trata de un problema mundial. Como podemos ver en África y en la India, aquí encontramos exactamente lo mismo. Por eso es bueno que compartamos la experiencia entre representantes de diferentes naciones, ya que es fundamental que sepamos que el tema de los parques también viene impulsado por los países del norte y con muchas contradicciones. Nosotros conociendo esta situación podemos influir en los que toman decisiones, para que no se vuelva ha repetir este tipo de contradicciones. El manejo debía ser a partir de una organización de base y no crear contradicciones mirando solamente al árbol y olvidándose de las familias. Ahora lo que quisiera saber de los guardabosques es ¿Quien los nombra, la organización de base o la prefectura, y como funciona?

Guardaparques

Somos de diferentes comunidades Pacolla, Tirani, Andrada, Taquiña y otros.

En síntesis, los participantes de la visita dialogaron y analizaron la problemática del PNT desde diferentes visiones y gran parte de ellos coincidieron en que la participación de los actores locales, tanto en la reglamentación como en el manejo y la administración, es fundamental para la sostenibilidad de las áreas protegidas.

6. Conclusiones

- La visita facilitó un mejor acercamiento, análisis e interpretación de la problemática que actualmente viven en las áreas protegidas y en especial Parque Nacional Tunari.
- El diálogo y el intercambio de experiencias entre los actores locales y externos contribuyó a ampliar y fortalecer los conocimientos de ambos. Asimismo, originó un mayor interés sobre la problemática de los parques y las alternativas de solución viables.
- Finalmente, es importante destacar la actitud de los visitantes externos quienes exteriorizaron su respaldo a los campesinos y el compromiso de continuar brindando su apoyo para la búsqueda de soluciones. En consecuencia, la visita de campo alcanzó los objetivos y resultados esperados, la misma se vio ratificada en los agradecimientos y la satisfacción de los comunarios anfitriones y los visitantes externos.

Memoria fotográfica

*Visita al Parque Nacional Tunari
29 de febrero de 2004*



Intercambio de experiencia entre los visitantes externos y comunarios del lugar en uno de los campamento del Parque Nacional Tunari.



Recorrido y visita a algunas áreas de bosques nativos que existe aún en el Parque Nacional Tunari.



Descanso y almuerzo en un sector del parque forestado con árboles de pino.



Participantes de la visita al Parque Nacional Tunari.

La creación de áreas protegidas se ha constituido en la actualidad como una de las propuestas y acciones fundamentales para la conservación de la biodiversidad, sin embargo, los resultados logrados en diferentes regiones del mundo y Latinoamérica han demostrado que es necesario considerar de forma más preponderante y fundamental la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para la definición de categorías, políticas, planes, programas y proyectos. Los conflictos y problemas causados por la creación de áreas protegidas, en muchos casos, han incrementado la pobreza en las poblaciones involucradas directa o indirectamente y han originado problemas de gobernabilidad en sus diferentes niveles.

La visión multidimensional y el énfasis puesto en la participación local sobre las áreas protegidas, la biodiversidad y los recursos naturales es fundamental considerarla en cualquier proyecto de creación de áreas protegidas y en los planes de manejo. Por tanto, la gestión de la biodiversidad y los recursos naturales se convierte en un espacio donde se debe reinventar la relación Estado-sociedad en sus diferentes niveles, en una perspectiva de construir un proceso de aprendizaje social que permita una relación equilibrada con la naturaleza.

En este proceso, el diálogo entre la sabiduría de los pueblos originarios y el conocimiento científico debe permitir recrear estrategias que se plasmen en políticas, programas y proyectos eminentemente participativos, buscando la interacción entre diferentes maneras de ver la vida, que en el escenario político viene a ser parte de un proceso social, en el que se puede coincidir o no plenamente. El seminario sobre gobernabilidad social de las áreas protegidas y biodiversidad en Bolivia y Latinoamérica, realizado entre el 26 y 29 de febrero de 2004 en Cochabamba, Bolivia, justamente ha pretendido abrir un espacio de diálogo y discusión entre representantes de movimientos sociales (principalmente de los pueblos originarios), científicos de las ciencias sociales y naturales, políticos y representantes del gobierno boliviano, para analizar la gobernancia y ver las posibilidades para una gobernabilidad que permita reducir la pobreza y conservar la biodiversidad y los recursos naturales en áreas protegidas.

Gobernabilidad Social
de las Áreas Protegidas y Biodiversidad
en Bolivia y Latinoamérica

Gobernabilidad Social de las Áreas Protegidas y Biodiversidad en Bolivia y Latinoamérica

Memoria del seminario realizado en Cochabamba
del 26 al 29 de febrero de 2004



AGRUCO Agroecología Universidad de Cochabamba
Av. Petrolera Km. 4 1/2 (Facultad de Agronomía)
Casilla 3392
Tel/Fax (+5914) 4762180 / 4762181
Cochabamba - Bolivia
E-mail: agruco@agruco.org
<http://www.agruco.org>

NCCR North - South
National Center of Competences in Research North - South
<http://www.nccr-north-south.unibe.ch>
c/o
CDE Centre for Development and Environment,
Institute of Geography, Berne University
Steigerhubelstrasse 3, CH-3008 Berne, Switzerland.
Tel. 41 22 906 59 40/44; Fax. 41 33 906 59 74
<http://www.cde.unibe.ch>

IUED Institut Universitaire d'Etudes du Développement
24 Rothschild
c.p. 136
1211 Geneva
Tél. 41 22 906 59 40/44; Fax. 41 22 906 59 74
<http://www.iued.unige.ch>

Edición: Freddy Delgado B., Juan Carlos Mariscal C.
Revisión: Dora Ponce C., Elvira Serrano C., Jaime Delgadillo P.

© AGRUCO/PLURAL, 2004.
Primera edición: febrero, 2004.

D.L.: 4-1-1921-04
ISBN: 99905-63-18-7

Producción:
Plural editores
Rosendo Gutiérrez 595 esq. Ecuador
Teléfono 2411018 / Casilla 5097, La Paz - Bolivia
Email: plural@entelnet.bo
www.editorialplural.com

Impreso en Bolivia

Contenido

1. Presentación	
<i>Dr. Freddy Delgado Burgoa. Director Ejecutivo de AGRUCO</i>	5

Parte I

Situación y análisis de las áreas protegidas en el mundo, Latinoamérica y Bolivia	9
--	---

Perspectivas y desafíos de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad: Reflexiones en torno al Congreso Mundial de Parques realizado en Durban (África del Sur, 2003)	
<i>Carmen E. Miranda L.</i>	11
Desafíos para la gestión sostenible de la Biodiversidad en el mundo y los países andinos	
<i>Stephan Rist</i>	23
Conservación o desarrollo: algunos elementos para una perspectiva crítica	
<i>Marc Hufty</i>	53
Panel de debate y discusión. Parte I	61

Parte II

Experiencias y análisis de las áreas protegidas en Latinoamérica	75
---	----

Áreas protegidas y pueblos indígenas: Directrices y experiencias internacionales.	
<i>José Aylwin O. y Jaime Soto.....</i>	77

Las áreas de conservación en Costa Rica: pasado y presente	
<i>Silvia Rodríguez Cervantes</i>	105
Conflictos alrededor de la explotación forestal en la zona de transición del parque del Manu, caso Pilcopata-Perú	
<i>Jamil Alca Castillo</i>	125
Panel de debate y discusión. Parte II	153

Parte III

Marco institucional, estrategias y experiencias de las áreas protegidas en Bolivia	161
Marco institucional y estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP)	
<i>Juan René Alcoba</i>	163
El proceso de formulación de la ley de áreas protegidas de Bolivia	
<i>Gonzalo Zambrana A.</i>	179
Estrategia boliviana de biodiversidad	
<i>Gonzalo Mérida</i>	191
El Parque Nacional Sajama	
<i>Franz Guzmán y Albertina Calle</i>	199
Petroleros adentro, campesinos afuera: bio-petro estrategias de control de áreas protegidas y lógicas conservacionistas	
<i>René Orellana H.</i>	209
Conflictos y gestión local en áreas protegidas: los casos del parque Amboró y el bosque seco chiquitano	
<i>Miguel Angel Crespo</i>	229
El Parque Nacional Tunari y el comité de gestión: situación actual	
<i>Humberto Mariscal</i>	247
Las áreas protegidas de Ayopaya desde la percepción de las organizaciones campesinas	
<i>Zacarías Ortíz</i>	261
Panel de debate y discusión. Parte III	265

Parte IV

Investigación y acción en torno al Parque Nacional Tunari	285
Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y conservación de la naturaleza y la biodiversidad del Parque Nacional Tunari	
<i>Freddy Delgado</i>	287

Avance de investigación: gobernanza en los municipios y organizaciones locales para la gestión de la biodiversidad en el parque Tunari <i>Dora Ponce Camacho</i>	311
Avance de investigación: la transformación de valores éticos en la interfaz del estado y de la sociedad civil y su importancia en el manejo de la biodiversidad, tierra y territorio. El caso del Parque Nacional Tunari en los Andes de Bolivia <i>Elvira Serrano C.</i>	333
Medio ambiente y biodiversidad desde una perspectiva transdisciplinaria pautas para un nuevo enfoque para el Parque Nacional Tunari <i>Sebastián Boillat</i>	361
La capacitación como instrumento para el fortalecimiento de la gestión local de las áreas protegidas el caso del "PAMS" en el Parque Nacional Tunari <i>Jaime Delgadillo P. y Juan Carlos Mariscal C.</i>	375
Panel de debate y discusión. Parte IV	395
 Mesa redonda final	
Dr. Willi Graf, COSUDE	
Lic. Adolfo Mendoza, Prefectura de Cochabamba	
Limbert Olmos, FSUTCC	
Félix Terceros, Municipio de Tapacaré	417
 Parte V	
Visita de campo al Parque Nacional Tunari	439

Presentación

En los últimos 50 años ha existido una preocupación generalizada en el mundo sobre las posibilidades de sostenibilidad de la vida en el planeta. Esta preocupación ha surgido por el deterioro ambiental y el incremento de la pobreza a raíz de una relación sociedad-naturaleza de alto contenido antropocéntrico y una priorización del crecimiento económico y la acumulación del capital, liderada por los países denominados desarrollados.

En diferentes eventos internacionales, se han reconocido estos desequilibrios y se han propuesto diferentes alternativas para la conservación de la naturaleza; una de ellas ha sido la creación de áreas protegidas desde una visión estructuralista y unidimensional, que no ha considerado la perspectiva de los actores sociales locales, fundamentalmente de los pueblos indígenas originarios, que durante siglos han acumulado un valioso bagaje de conocimientos que ha permitido en diferentes procesos históricos, una relación armoniosa con la naturaleza, basada en una concepción de vida donde la sociedad es parte de la naturaleza.

La creación de áreas protegidas se ha constituido en la actualidad como una de las propuestas y acciones fundamentales para la conservación de la biodiversidad, sin embargo los resultados logrados en diferentes regiones del mundo y Latinoamérica, han demostrado que es necesario considerar de forma más preponderante y fundamental la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para la definición de categorías, políticas, planes, programas y proyectos. Los conflictos y problemas causados por la creación de áreas protegidas, en muchos casos han incrementado la pobreza en las poblaciones involucradas directa o indirectamente y han originado problemas de gobernabilidad en sus diferentes niveles.

La visión multidimensional y el énfasis puesto en la participación local sobre las áreas protegidas, la biodiversidad y los recursos naturales, es fundamental

considerarla en cualquier proyecto de creación de áreas protegidas y en los planes de manejo. Por tanto, la gestión de la biodiversidad y los recursos naturales se convierte en un espacio donde se debe reinventar la relación Estado-Sociedad en sus diferentes niveles, en una perspectiva de construir proceso de aprendizaje social que permita una relación equilibrada con la naturaleza.

En este proceso, el diálogo entre la sabiduría de los pueblos originarios y el conocimiento científico, debe permitir recrear estrategias que se plasmen en políticas, programas y proyectos eminentemente participativos, buscando la interacción entre diferentes maneras de ver la vida, que en el escenario político viene a ser parte de un proceso social, en el que se puede coincidir o no plenamente.

El seminario sobre gobernabilidad social de las áreas protegidas y biodiversidad en Bolivia y Latinoamérica realizado entre el 26 al 29 de febrero del 2004 en Cochabamba, Bolivia, justamente ha pretendido abrir un espacio de diálogo y discusión entre representantes de movimientos sociales (principalmente de los pueblos originarios), científicos de las ciencias sociales y naturales, políticos y representantes del gobierno boliviano, para analizar la gobernancia y ver las posibilidades para una gobernabilidad que permita reducir la pobreza y conservar la biodiversidad y los recursos naturales en áreas protegidas. En virtud a ello, los objetivos del evento han sido:

- Conocer la perspectiva de los actores locales respecto a la gestión de las áreas protegidas en Bolivia y Latinoamérica.
- Analizar la problemática de la gestión y la gobernabilidad de las áreas protegidas y la biodiversidad en Bolivia.
- Crear una dinámica de resolución de los conflictos alrededor del Tunari.

Inicialmente se han presentado tres conferencias magistrales de expertos internacionales que permitan contextualizar la discusión, tomando las perspectivas y desafíos de las áreas protegidas y la gestión sostenible de la biodiversidad en el mundo, además de reflexiones críticas sobre conservación y desarrollo. Estas exposiciones de contexto general han sido complementadas por las experiencias y reflexiones de expertos sobre áreas protegidas y movimientos indígenas en Perú, Chile y Costa Rica.

Las exposiciones del marco institucional, normativo y político de las áreas protegidas en Bolivia y la presentación de la estrategia nacional de biodiversidad, ha permitido precisar el contexto a nivel nacional, para luego presentar los casos de los Parques Sajama, Amboró, el bosque seco Chiquitano, el Parque Altamachi y el Parque Nacional Tunari.

La importante participación en el evento, de líderes del movimiento indígena-campesino, representantes de municipios rurales, académicos, representantes del gobierno e invitados especiales del exterior del país, ha permitido generar

una amplia discusión y reflexión sobre la gobernanza y la gobernabilidad en las áreas protegidas, discusión que se vio reflejada en las importantes intervenciones de los panelistas invitados.

Creemos que el diálogo iniciado en el seminario sobre “gobernanza social de las áreas protegidas y biodiversidad en Bolivia y Latinoamérica” y que se plasma en esta publicación, es un aporte que pretende reflexionar sobre alternativas para mejorar la relación Estado-Sociedad y la relación Naturaleza-sociedad.

Tanto el seminario como la presente publicación, es producto del proyecto de investigación científica sobre “Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y conservación de la naturaleza y la biodiversidad” dirigido por el Centro Universitario AGRUCO de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón. Este proyecto forma parte del Polo de competencia en investigación Norte-Sur (NCCR), financiado por el fondo nacional suizo para la investigación científica y la agencia suiza de cooperación para el desarrollo.

Como parte de este proceso de diálogo y aprendizaje, es necesario mencionar y agradecer a la Federación sindical única de trabajadores campesinos de Cochabamba, al Centro de desarrollo y medio ambiente (CDMA) de la Universidad de Berna, al Instituto de estudios de desarrollo (IUED) de la Universidad de Ginebra, Suiza y al Jacs South América, por todo el apoyo recibido para la realización del seminario pero fundamentalmente por embarcarse con nosotros en la realización de investigaciones y acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de la población boliviana.

Agradecemos de forma especial a Plural editores, por abrirnos espacios para difundir experiencias y reflexiones, labor quijotesca en Bolivia, por el esfuerzo que conlleva embarcarse en temas muy sensibles pero fundamentales como es el caso de las áreas protegidas, la biodiversidad y la gobernabilidad.

Dr. Freddy Delgado Burgoa
Director Ejecutivo de AGRUCO
Coordinador COMPAS Latinoamérica
UMSS-FCAYP/COSUDE

Parte I

Situación y análisis de las áreas protegidas en el mundo, Latinoamérica y Bolivia

Perspectivas y desafíos de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad:

Cármén E. Miranda L.¹

*Reflexiones en torno al Congreso Mundial de Parques realizado en Durban
(África del Sur, 2003)*

1. ¿Qué es la biodiversidad?

El concepto de biodiversidad ha sido introducido y aceptado formalmente desde la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, siendo definida como la variedad de la vida en todos sus niveles –desde genes hasta ecosistemas– y los procesos ecológicos y evolutivos que la mantienen (Convención de Diversidad Biológica CBD). El estudio de la biodiversidad se remite a tres niveles: genes, especies y ecosistemas; además la biodiversidad tiene dos componentes, que son: el componente tangible y el componente intangible. El componente tangible se refiere justamente a los ecosistemas, especies y genes, mientras que el componente intangible hace referencia al conjunto de conocimientos y prácticas que las diferentes sociedades humanas han desarrollado a través del tiempo.

¿Cual es el valor de la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica prácticamente es el recurso que hace posible el sostén de la vida en el planeta tierra; tiene un valor a nivel ecológico dado por el conjunto de interacciones y funciones reguladoras que se establecen dentro de los ecosistemas. A nivel económico tiene también un valor muy importante determinado por todos los bienes y servicios que le proporcionan al hombre como son los alimentos, las medicinas, las materias primas para la industria, los paisajes para el ecoturismo y muchos otros bienes y servicios que provienen de la naturaleza. A nivel ético cultural hace referencia al derecho intrínseco que tienen a la vida todos los seres vivos y también a las profundas relaciones y percepciones que las diferentes culturas han desarrollado

1 Licenciada en Biología, especialista en Áreas Protegidas y Biodiversidad. Es Coordinadora en Bolivia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

con la biodiversidad. A nivel de la diversidad genética, se tiene por ejemplo, las diferentes formas de un gen que se encuentran en un individuo y que producen diferentes manifestaciones como es el caso de la especie *Brassica oleracea* (conocido comúnmente como coliflor) que tiene diferentes variedades que expresan las diversas manifestaciones determinadas por la carga genética de los individuos (coliflor, col de bruselas, brócoli, col de hoja). Se estima que a nivel del planeta tierra se tiene entre 5 a 10 millones de especies, de las cuales hasta ahora solo han sido identificadas 1.75 millones de especies.

2. La situación de la biodiversidad en América Latina

América Latina posee el bosque tropical pluvial mas extenso y con mayor diversidad del planeta, porque cubre el 60% del total de los bosques tropicales y se estima que en estos ecosistemas se encuentra la tercera parte de todas las especies. Sin embargo, los bosques tropicales de América Latina pasan por una situación crítica debido a la transformación de sus ecosistemas naturales y la pérdida de su biodiversidad. Hasta el año 2000 se estima que se han extinguido el 20% de la biodiversidad que albergan los bosques tropicales de América Latina, y hasta el año 2050 esta pérdida podría llegar al 50%. Existe una amenaza de extinción de las especies y esta es más severa a medida que avanza la destrucción de estos bosques; se calcula que 5 millones de hectáreas se destruyen al año en la región amazónica y alrededor de 25000 especies de plantas y más de 1000 especies y subespecies de vertebrados están amenazadas de extinción actualmente.

Las mayores consecuencias de la pérdida de la biodiversidad son sin duda, la erosión biológica y cultural, los cambios climáticos que viene ocurriendo en las últimas décadas y que están impactando negativamente en los ciclos ecológicos, la biodiversidad y los ecosistemas, las pérdidas económicas y la gran cantidad de potencialidades desperdiciadas. Todo esto recae indudablemente en una disminución de la calidad de vida principalmente de las poblaciones locales que viven en relación estrecha con la biodiversidad.

3. La problemática de la biodiversidad en Bolivia

Bolivia es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Tiene 2 grandes regiones fisiográficas (las tierras altas y tierras bajas), un amplio rango altitudinal (aproximadamente desde los 200 hasta los 6000 metros sobre el nivel del mar), una amplia variabilidad de climas y microclimas, 3 grandes cuencas hidrográficas (la Cuenca del Amazonas, la Cuenca del Plata y la Cuenca Interna del Altiplano), 16 ecorregiones, 198 ecosistemas diferentes y miles de especies.

La Estrategia Boliviana para la Conservación de la Biodiversidad en su proceso de formulación, ha realizado una evaluación de la riqueza biológica de Bolivia. Los resultados de esta evaluación señalan que Bolivia es el octavo país del mundo que tiene mayor superficie de bosques tropicales (51% de su territorio) y es el país más amazónico del continente (la Cuenca del Amazonas ocupa el 65% del territorio boliviano), es centro de origen de muchas especies y domesticación de cultivos, fue territorio de culturas milenarias y grupos indígenas que han desarrollado valiosos conocimientos de uso y manejo de la biodiversidad, es hábitat de aproximadamente 2600 especies de vertebrados que representan entre el 60 y 80% del total estimado para el país, es el séptimo país del mundo con mayor diversidad de aves (1358 especies de aves identificadas hasta la fecha) y al menos tiene 14000 especies de plantas, entre las que destacan por su endemismo las orquídeas, las palmeras y los cactus.

Si bien Bolivia es un país megadiverso y con importante riqueza biológica que le da la posibilidad de ser declarada reserva de vida, algunos de sus ecosistemas, especies y áreas protegidas presentan una situación crítica de conservación. En un estudio realizado por FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) (2001), se revela que solo el 22% de territorio boliviano puede considerarse como en muy buen estado de conservación, el 36% como bueno, el 26 % como regular, el 10.5% como crítico y el 5.5% como muy crítico. Otras cifras y datos que maneja el Ministerio de Desarrollo Sostenible muestran también que muchos ecosistemas en Bolivia se encuentran en un franco proceso de deterioro debido ante todo a la desmedida deforestación y a la transformación de los ecosistemas naturales para la habilitación de tierras agrícolas. Se indica por ejemplo que el 55% del territorio boliviano está en proceso de desertización, el 25% presenta una erosión de fuerte a muy grave (275544 km²) y el 10% se encuentra en un proceso de erosión de ligera a muy moderada (110423 km²). Estos datos indirectamente reflejan también el deterioro y la pérdida de la biodiversidad que es producto sobre todo de diversas actividades humanas y productivas como es la extracción de la yareta (*Azorrella sp.*) en las tierras altas para su uso como recurso energético (leña) en la minería.

Pese al deterioro de los ecosistemas en Bolivia, la biodiversidad y los recursos naturales continúan siendo la base del desarrollo y la supervivencia para una gran mayoría de la población boliviana. Se indica por ejemplo que el 65% de los alimentos que se consume en Bolivia se producen en los agroecosistemas de las tierras altas y se cultivan 14 especies diferentes de papa con aproximadamente 700 variedades, más de 300 especies diferentes se utilizan en la medicina tradicional, se consume una importante cantidad de especies silvestres como fuente proteica principalmente en las tierras bajas y otro grupo importante de recursos biológicos son utilizados en la industria. Por otra parte, se menciona que en los últimos años el ecoturismo es una actividad importante en Bolivia y que es generadora de ingresos económicos, sin embargo el apoyo y la atención del gobierno boliviano a esta actividad es aún muy escasa.

4. Funciones y beneficios de las áreas protegidas

Las áreas protegidas persiguen el objetivo principal de conservar una parte representativa de la biodiversidad y los ecosistemas, al mismo tiempo prestan una serie de beneficios para la población local y la sociedad en su conjunto. Las áreas protegidas a nivel mundial cumplen funciones tales como: constituir sumideros de carbono, cumplir funciones en la estabilización del clima, ser fuente de recursos genéticos, principalmente de especies silvestres y áreas de conservación in situ de la riqueza biológica. A nivel nacional se constituyen en atractivos ecoturísticos, en reguladores de los flujos ecológicos y los ciclos hidrológicos, principalmente por aquellos ubicados en las cabeceras de las cuencas y también contribuyen a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas representativos de un país. A nivel local cumplen funciones ecológicas que contribuyen a la disminución de la erosión de los suelos, a la estabilización de las pendientes, a la regulación de los ciclos hidrológicos y climáticos locales y a la conservación y producción de aguas. Por otra parte, a nivel local cumplen funciones socio-económicas y culturales como es por ejemplo la regulación de plagas y enfermedades en agroecosistemas campesinos, son fuente de recursos alimenticios, de recursos medicinales, de materiales de construcción y de otros usos para la población local y pueden constituirse en fuente de ingresos económicos a través del ecoturismo o producción de otro tipo de bienes.

En síntesis, las áreas protegidas están contribuyendo y coadyuvando positivamente a la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas para beneficio no solo de la población local y nacional, sino también para toda la población mundial y el planeta tierra en su conjunto.

5. El V Congreso Mundial de Parques, Durban Africa del Sur 2003

El V Congreso Mundial de Parques se llevó a cabo en la ciudad de Durban de la República de Africa del Sur entre el 8 y 17 de septiembre del 2003.

Inicialmente es importante hacer referencia a una historia de 125 años del movimiento de las áreas protegidas en el mundo desde que fue creada la primera área protegida. Actualmente la red mundial incluye un número aproximado a las 44000 áreas protegidas, que en conjunto ocupan una extensión equivalente al territorio de la India y China, lo que representa un 12% del total de la superficie terrestre, con un 10% adicional del Continente Antártico. Por otro lado, las áreas protegidas han tenido un comportamiento creciente en cuanto a número y superficie desde la creación del primer parque en 1872 en los Estados Unidos de Norte América, experimentando su mayor crecimiento entre los años de 1965 a 1990. Asimismo, las áreas protegidas han sido componentes importantes de varias convenciones internacionales como

la Convención de Diversidad Biológica, la Convención Ramsar, la Convención del Patrimonio Mundial y la Convención de Humedales. No obstante, las amenazas sobre las áreas protegidas y la biodiversidad, aumentan cada día al igual que el reconocimiento de sus valores y servicios.

Bajo ese contexto, el Congreso de Durban ha planteado el reto de promover que las áreas protegidas sean manejadas de manera que sus beneficios apoyen de forma efectiva al desarrollo sostenible a diferentes niveles y que se logre una mayor participación de los diferentes actores sociales. El lema del Congreso fue *"beneficios más allá de las fronteras"*, pretendiendo con ello volcar el análisis y demostrar la relevancia de las áreas protegidas en el marco de la agenda económica, social y ambiental del siglo 21, considerando fundamentalmente el contexto de la globalización. Los principales patrocinadores de este Congreso fueron Nelson Mandela y la Reina Noor de Jordania.

Los objetivos específicos planteados para el congreso de Durban fueron los siguientes:

- Evaluar y aprender de las experiencias de los últimos 10 años.
- Diversificar los constituyentes y actores involucrados en la gestión de las áreas protegidas.
- Integrar las áreas protegidas en la agenda económica, social y ambiental del siglo 21.
- Promover un nuevo enfoque técnico a los profesionales vinculados al trabajo en áreas protegidas.
- Enfocar la atención a la problemática de las áreas en África y recomendar acciones para superar las mismas.

En el Congreso de Durban se ha implementado también talleres de discusión para temáticas específicas como: los vínculos entre paisaje terrestre y marino, la concientización y apoyo a las áreas protegidas, la gobernabilidad de las áreas protegidas, la formación de capacidades, la efectividad del manejo, el financiamiento y recursos y el sistema global representativo. Entre tanto, los temas transversales del Congreso de Durban han sido las áreas protegidas marino costeras, población y equidad y los sitios de patrimonio mundial.

Haciendo un breve análisis desde la creación de la primera área protegida hace más de 100 años y de los Congresos Mundiales de Parques que se llevan a cabo cada 10 años, se puede advertir que la idea inicial de contar con espacios restringidos y aislados de su entorno, a cambiado y evolucionado a través de todo el Siglo XX sobre todo respecto de sus objetivos y a la participación de los diferentes actores sociales y la integración de las áreas protegidas en su contexto social, económico y ecológico. En ese sentido, se puede ver por ejemplo que en el primer Congreso de Parques realizado en 1962 (Seattle, USA), se intentó por primera vez definir y cate-

gorizar las áreas protegidas, considerando fundamentalmente la importancia de la generación de conocimientos a través de la ciencia para el manejo de estas unidades de conservación. En 1972 el Congreso realizado en Yellowstone (Grand Teton, USA) que tenía como título “Parques Nacionales Patrimonio para un Mundo Mejor”, sentó las bases para el diseño de la Convención sobre el Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Congreso realizado en Bali (Indonesia) en 1982 que tuvo como título “Parques para el Desarrollo”, destacó el rol de las áreas protegidas como base para el desarrollo local y ya promovió el manejo participativo de las áreas protegidas. En 1992 el Congreso realizado en Caracas (Venezuela) que tomó el título “Parques para la Vida”, focalizó la importancia de integrar la gestión de las áreas protegidas a escala regional y de fortalecer la participación de las comunidades locales. Finalmente, el último Congreso realizado el año 2002 en Durban (Africa del Sur) se ha propuesto revisar el estado de las áreas protegidas a nivel global, evaluar los problemas críticos que las afectan y proponer direcciones y acciones para esta década que inicia.

En este contexto de desarrollo global de las áreas protegidas, se puede apreciar que el proceso que estamos viviendo en Bolivia en cuanto a la demanda de una mayor participación social genuina desde las organizaciones de base y en cuanto a la necesidad de desarrollar procesos de empoderamiento local no es un tema que se esta discutiendo únicamente en Bolivia, sino que ha sido el tema central de discusión en el congreso en Durban. En un principio se veía que las instituciones gubernamentales son las únicas responsables de la administración y gestión de las áreas protegidas, sin embargo hoy existe una apertura para que la ciudadanía participe en un esfuerzo orgánico y responsable en estas acciones, lo que significa que la gobernabilidad social es un tema central en la problemática actual de las áreas protegidas.

En ese sentido, el Congreso de Durban evaluó por ejemplo los éxitos y problemas sobre la participación de las comunidades locales y pueblos indígenas en la planificación y manejo de las áreas protegidas y definió los lineamientos y guías sobre como enfrentar estas acciones en el futuro. Recordemos que en Caracas ya se habló sobre la necesidad de integrar las áreas protegidas con sus entornos sociales; a 10 años de esa propuesta se realizó una evaluación para determinar los avances, los aprendizajes, los problemas y los fracasos. Por otro lado, se tuvo el desafío, principalmente impulsado por la representación Sur Americana, de superar el enfoque tradicional o conservacionista y de generar nuevos enfoques de manejo, gobernabilidad y gestión de las áreas protegidas. En ese propósito, se han identificado algunos adelantos desde el Congreso de Caracas (1992) como:

- El reconocimiento de las áreas protegidas como elementos decisivos para la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica, puesto que las áreas protegidas son instrumentos efectivos para la conservación de la biodiversidad y para la aplicación del convenio sobre biodiversidad.
- Se ha duplicado el número y la superficie de las áreas de protegidas.

- La cantidad de bienes naturales y mixtos del Patrimonio Mundial ha aumentado de 101 a 172 en aproximadamente una década.
- Existe un mayor reconocimiento de los vínculos entre las poblaciones humanas y el medio ambiente.
- Se han realizado muchos planes regionales y nacionales.
- Se han desarrollado medidas para mejorar la eficacia del manejo de las áreas protegidas.
- Existe una mayor participación de pueblos indígenas y comunidades locales
- Se han experimentando nuevas formas de gobernanza y se está rescatando formas tradicionales de gobernanza para fines de conservación de la biodiversidad.
- Se ha reconocido la importancia y el valor de los conocimientos tradicionales y otros conocimientos sobre la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas.
- Está por entrar en vigor el protocolo de Kioto.
- Las áreas protegidas se han conectado con éxito más allá de las fronteras internacionales, y en algunos casos hay experiencias que han efectuando una contribución significativa a lograr la paz en zonas de conflictos armados.
- Diversas áreas protegidas han sido enlazadas por redes y corredores ecológicos en el marco de grandes iniciativas regionales, lo cual ha sido un aspecto muy ponderado ya que las áreas protegidas bajo un enfoque de “islas” no garantiza una efectiva conservación de la biodiversidad.

Por otra parte, en el Congreso de Durban se han identificado también una serie de retos dada la situación y el contexto muy adverso y difícil en la que se encuentran la mayoría de las áreas protegidas, destacando entre estos retos los siguientes:

- Conciliar las necesidades del desarrollo con el uso y manejo sostenibles de los recursos naturales.
- Frente a la amenaza del cambio climático, es de urgente necesidad reducir las emisiones de gases de invernadero y, al mismo tiempo, se debe incorporar un manejo de ecosistemas que potencien su capacidad de recuperación.
- Complementar y ampliar la representatividad para todos los ecosistemas, especialmente para ecosistemas marinos.
- Se ocasionan daños severos e irreversibles a la diversidad de especies, los hábitats y los paisajes naturales, así como a los procesos naturales y a la diversidad cultural de la que dependen.
- La cantidad y calidad de las aguas dulces que alimentan a las áreas protegidas están declinando a causa de los desvíos, diques y otras barreras que se establecen en tierras agrícolas, además de los procesos de erosión de los suelos y la deforestación de los bosques.

- Existe una creciente demanda de animales y plantas silvestres, lo que implica un serio peligro de extinción principalmente para las especies raras y/o amenazadas.
- Las especies exóticas invasoras provocan efectos negativos sobre las especies nativas o autóctonas, desplazándolas o eliminándolas de su medio natural.
- La inversión de los gobiernos en las áreas protegidas es insuficiente y no permite el cumplimiento de sus objetivos sociales y de conservación.
- Los subsidios y otros instrumentos financieros e institucionales ocasionan efectos negativos sobre la biodiversidad y los ecosistemas naturales como es la explotación de hidrocarburos dentro las áreas protegidas.
- Recursos humanos insuficientes para garantizar un manejo técnico adecuado de las áreas protegidas, particularmente en los países llamados en desarrollo.
- Muchas áreas protegidas que solo existen en los papeles, carecen de una protección efectiva y un manejo técnico eficiente.
- Los costos y beneficios de las áreas protegidas no se distribuyen equitativamente, puesto que las comunidades locales suelen sobrellevar la mayor parte de los costos y recibir escasos beneficios, mientras que la sociedad en su conjunto recibe más beneficios y sobrelleva bajos costos.
- Frecuentemente las áreas protegidas están desvinculadas de la planificación del desarrollo y de los planes de ordenamiento territorial.
- No se reconoce el papel decisivo de las áreas protegidas para el desarrollo sostenible, argumentando que las áreas protegidas obstaculizan las actividades productivas.
- Los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros grupos de la sociedad civil no participan suficientemente en la identificación y la gestión de las áreas protegidas.

6. El plan de acción de Durban

En base a todos los retos que tienen actualmente las áreas protegidas, la discusión en el Congreso ha derivado y concluido en la definición de un Plan de Acción para implementarse en la presente década, que entre sus planteamientos considera fundamentalmente lo siguiente:

- No es un plan modelo para todos los países y áreas protegidas, puesto que se reconoce las existencia de diversos criterios locales, nacionales y regionales.
- Se sugiere acciones necesarias a fin de potenciar los beneficios de las áreas protegidas para la sociedad en su conjunto y mejorar su cobertura y manejo.
- Plantea como documento numerosas cuestiones a examinar y resolver, lo que implica la adopción de medidas factibles a cada caso, contexto y escenario.

De esta manera, el Plan de Acción de Durban ha realizado recomendaciones para categorizar las acciones en los siguientes niveles: acciones internacionales (intergubernamental, NNUU, convenios y tratados), acciones regionales (intergubernamental, convenios y mecanismos regionales), acciones nacionales (estrategias, leyes y decretos), acciones locales, acciones de las autoridades responsables de las áreas protegidas y acciones de la UICN.

Finalmente, en el Congreso de Durban se ha llegado a definir 10 resultados con sus respectivas metas, tal como se describen a continuación:

Resultado 1. Las áreas protegidas tendrán un aporte crucial a la conservación de la biodiversidad en el Mundo. Para este resultado se plantean dos metas:

- El convenio de Diversidad Biológica habrá adoptado medidas específicas para mejorar la contribución de las áreas protegidas a la conservación de la diversidad biológica.
- Todos los signatarios del Convenio sobre el Patrimonio Mundial habrán adoptado medidas para mejorar la contribución de los sitios del Patrimonio Mundial a la conservación de la biodiversidad.

Resultado 2. Las áreas protegidas habrán realizado una contribución fundamental al desarrollo sostenible. Para este resultado se plantea una meta:

- Se habrán adoptado medidas para que las áreas protegidas contribuyan a reducir la pobreza y en ningún modo la agraven.

Resultado 3. Se habrá establecido un sistema mundial de áreas protegidas conectadas con los paisajes terrestres y marinos circundantes. Para este resultado se plantean dos metas:

- Para el 2010 se habrá establecido un sistemas de áreas protegidas que sea representativo para todos los ecosistemas del mundo.
- Para el 2015 todas las áreas protegidas estarán conectadas en sistemas ecológicos/ terrestres y marinos amplios.

Resultado 4. Se habrá mejorado la calidad, eficacia y el sistema de presentación de los informes de gestión de las áreas protegidas. Para este resultado se plantea también dos metas:

- Todas las áreas protegidas tendrán un manejo efectivo para el 2015.
- Todas las áreas protegidas tendrán una capacidad efectiva de manejo.

Resultado 5. Los derechos de los pueblos indígenas, pueblos móviles y comunidades locales se verán reconocidos y garantizados en relación con los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Para este resultado se plantea las siguientes metas:

- Todas las áreas protegidas existentes y futuras serán manejadas y establecidas en plena conformidad con los derechos de los pueblos indígenas, pueblos móviles y comunidades locales.
- Los pueblos indígenas y las comunidades locales estarán representados en la gestión de las áreas protegidas por representantes electos y de forma proporcional a sus derechos e intereses.
- Se establecerán y aplicarán para los 2010 mecanismos participativos para la restitución de las tierras y territorios tradicionales de pueblos indígenas que fueron incorporados en áreas protegidas sin su consentimiento libre y conocimiento de causa.

Resultado 6. Las generaciones más jóvenes tendrán mayor poder de decisión. Para este resultado se plantea la siguiente meta:

- Se asegurará una mayor participación de las generaciones más jóvenes en la gobernanza y manejo de las áreas protegidas y se tomarán medidas para fortalecer su capacidad de contribuir y ampliar el conjunto de la comunidad de la conservación.

Resultado 7. Se habrá obtenido mayor apoyo para a las áreas protegidas por parte de otros grupos de interés. Para este resultado plantea una meta:

- Se habrá obtenido apoyo de los principales grupos de interesados directos.

Resultado 8. Se habrán establecido mejores formas de gobernanza que reconozcan métodos tanto tradicionales como innovadores de gran valor potencial para la conservación de la biodiversidad. Para este resultado se plantea una meta:

- En todos los países se habrán establecido sistemas eficaces de gobernanza.

Resultado 9. Se dispondrá de recursos mucho mayores para las áreas protegidas proporcionales a sus valores y necesidades. Para este resultado se tiene una meta:

- Se garantizarán los recursos suficientes para identificar, establecer y sufragar los costos recurrentes de un sistema mundialmente representativo de áreas protegidas para el 2010.

Resultado 10: Habrá una mejor comunicación y educación sobre las funciones y los beneficios de las áreas protegidas. Para este resultado se plantea una meta:

- Se garantizarán los recursos suficientes para identificar, establecer y sufragar los costos recurrentes de un sistema mundialmente representativo de áreas protegidas para el 2010.

Para concluir es necesario subrayar que la preocupación que se está viviendo en Bolivia y en América Latina con respecto a las nuevas formas de participación, la apertura a las capacidades locales y al empoderamiento de las comunidades locales y de la sociedad en su conjunto para la gestión sostenible de la biodiversidad, no es solo nacional y regional sino que es una discusión y una reflexión que se viene realizando a nivel global. En ese marco, Bolivia en los últimos 10 años ha contribuido a la solución de algunos problemas a través de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y con importantes experiencias para la construcción de un nuevo enfoque de manejo y gestión de las áreas protegidas.

Desafíos para la gestión sostenible de la biodiversidad en el mundo y los países andinos

Dr. Stephan Rist¹

1. Introducción

El Convenio sobre Diversidad Biológica (COB) aprobado en 1992 en la Conferencia Mundial de Río de Janeiro-Brasil, representa un hito decisivo en el reconocimiento de problemas ambientales globales. Por primera vez en la historia, representantes de más 150 países reconocieron que el desarrollo económico y social está amenazando seriamente a la biodiversidad y, con ello, también a las bases biológicas, ecológicas, sociales y económicas de la vida en el planeta tierra. En esta cumbre se acordó la creación y el fortalecimiento de estrategias regionales, nacionales y locales capaces de mitigar los efectos negativos del desarrollo socio-económico sobre la biodiversidad. A partir de ahí se desarrollaron una gran diversidad de enfoques, estrategias e instrumentos para lograr los objetivos planteados en el CDB. En el caso de los Andes, los objetivos del CDB han sido traducidos a una estrategia regional de la Comunidad Andina (2002) y a estrategias de biodiversidad nacionales en Bolivia (MDSP, 2001), Ecuador (MA, 2001) y Perú (CONAM, 2001).

La existencia de una alta diversidad de enfoques, estrategias e instrumentos para la gestión de la biodiversidad es muy positivo, ya que es imposible que exista una sola estrategia que permita dar solución a las múltiples causas y dinámicas que afectan la biodiversidad. No obstante, la diversidad de enfoques y estrategias también conlleva el riesgo de crear contradicciones, inconsistencias o

1 Ingeniero Agrónomo con Doctorado en Sociología Rural en la Universidad de Munich-Alemania. Docente Investigador del Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna-Suiza. Coordinador del Individual Project 1 y 2 del NCCR.

discontinuidades dando lugar a la instrumentalización de las políticas definidas por intereses particulares que pueden ser o no legítimos como en el caso de la reivindicación de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios y de los grupos económicamente poderosos como son empresas agroindustriales o petroleras. Por ello es altamente importante que la formulación de medidas específicas y de estrategias para una gestión más sostenible de la biodiversidad, sea acompañada con una mirada crítica y auto-crítica de parte de todos los involucrados, tal como se pretende hacer en el presente seminario y las investigaciones emprendidas en el marco del NCCR Norte-Sur.

Con el presente trabajo pretendemos contextualizar la situación de la biodiversidad en los países Andinos de Bolivia, Perú y Ecuador en un marco que considera las principales tendencias del desarrollo de los conceptos para la gestión de la biodiversidad a nivel mundial. Además, se articulan los conceptos definidos en el caso de los Andes con un análisis transdisciplinario que significa considerar a parte del conocimiento científico disciplinario y especializado aquellos conocimientos que se originan desde una visión interdisciplinaria, como son los conocimientos locales generados por los pueblos indígenas.

Sobre esta base se concluye que la búsqueda de una gestión más sostenible de la biodiversidad, se ha convertido en una arena donde confluyen diferentes actores sociales que no solamente develan y defienden sus intereses particulares, sino que a través de sus discursos se encuentran valores fundamentales del mismo desarrollo que expresan diferentes concepciones sobre la relación sociedad-naturaleza. En ese sentido, la gestión de la biodiversidad se convierte en un proceso de construcción social de la naturaleza que debido a su articulación directa con las acciones humanas que repercuten en las dinámicas ecológicas y biológicas de los diferentes ecosistemas. Así las discusiones sobre la gestión más sostenible de la biodiversidad, adquieren dimensiones culturales, sociales y políticas que requieren una revisión crítica de las políticas, estrategias e instrumentos actuales.

2. Definición, importancia y causas de la pérdida de la biodiversidad

Según el CDB, la biodiversidad comprende a la variabilidad y a la cantidad de organismos vivos existentes en el planeta o en un lugar determinado, y se refiere simultáneamente a los genes, especies y ecosistemas.

Los objetivos de la CDB no solamente apuntan a la biodiversidad como tal, sino enfatizan en el uso sostenible de sus componentes que además considera la distribución equitativa de los beneficios resultantes de ella. Así se evidencia que la conservación de la biodiversidad debe inscribirse a un modelo de gestión basado en valores éticos claramente establecidos, como son los derechos para un uso sostenible de la biodiversidad y la equidad en la distribución de los beneficios que

reporta la misma. Es importante considerar, además, que la biodiversidad abarca más allá de la diversidad genética y de especies, puesto que incluye a la diversidad de ecosistemas. La dimensión eco-sistémica hace que la gestión más sostenible de la biodiversidad no solo se enfoque a conservar la diversidad de especies y genes, sino que asume que la conservación de la biodiversidad se logra en la medida que los diferentes ecosistemas sean compatibles con los modelos de desarrollo implementados por las sociedades. Incluso tomando en cuenta que hoy en día también se busca conservar ecosistemas 'naturales' (como las áreas protegidas) que no sean afectados en forma directa por actividades humanas, la persistencia de estos solo será posible si son protegidos por los mismos humanos, por lo que la conservación de los ecosistemas y paisajes 'naturales' depende de las decisiones políticas tomadas por las sociedades que regulan estos espacios.

Los Países Andinos organizados en la Comunidad Andina (CAN), concentran el 25 % de la biodiversidad del planeta y forman parte de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo (CAN, 2003). En la subregión viven entre el 10 al 16 % de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas que se encuentran en el mundo. Es importante señalar que la biodiversidad expresada en especies no tiene un valor intrínseco por sí mismo, sino que esta directamente relacionada con las bases económicas de los Países Andinos. La participación de la biodiversidad en las exportaciones del 2001 en Bolivia, Ecuador y Perú oscilaron entre el 20 y 45 % (CAN, 2003).

Por otra parte, los ecosistemas proporcionan recursos y servicios vitales tales como la provisión de agua dulce para consumo humano, riego, energía hidroeléctrica, materiales para la construcción de casas y utensilios, productos energéticos (leña), medicinales y alimenticios y paisajes para el ecoturismo, además de otorgar servicios en el control de las inundaciones y la erosión de los suelos.

En relación con las causas de la pérdida de la biodiversidad, la situación en los países andinos refleja las dinámicas a nivel global. Los ecosistemas andinos están seriamente dañados por la erosión, la deforestación, el sobre pastoreo, el crecimiento demográfico combinado con altas tasas de urbanización, la contaminación por desechos mineros y el mal manejo del agua. Esta situación se traduce en una fragmentación creciente de los hábitats que es el factor principal para la pérdida de la biodiversidad a escala mundial, contribuyendo en gran medida para ello los procesos de erosión y deforestación. Se indica que el 90% de la deforestación es resultado de una agricultura no sustentable; asimismo las plantaciones de árboles exóticos para explotación forestal también desempeñan un papel importante en la degradación de los bosques nativos.

El cambio climático global junto con el manejo inadecuado de los ecosistemas de montañas, han hecho más vulnerable a las poblaciones andinas ante los desastres naturales, siendo insuficientes las actuales políticas y prácticas de prevención. Los deslizamientos de tierra, las avalanchas, las inundaciones, los terremotos y las inundaciones por derretimiento de glaciares, causan muchas

veces masivas pérdidas de vidas y bienes materiales. Los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño en el período 1997-1998 en los países andinos, particularmente en las costas de Ecuador y Perú, alcanzó la suma de US\$ 7.545 millones, lo cual representó casi el 95% del PIB de Bolivia en 1997 o el 32% de las exportaciones de Venezuela, siendo el país más afectado Ecuador que registró pérdidas por un valor equivalente al 14% de su PIB (CAN, 2003).

En la costa del Pacífico Sur la presencia de la placa de Nazca, cuyo borde se extiende desde Panamá hasta el sur de Chile, y de la placa sudamericana que abarca desde la fosa marina Perú-Chile hasta el eje de la Cordillera del Atlántico Sur, hace que esta región sea muy vulnerable a los fenómenos telúricos y a los desastres naturales, donde existe además una fuerte proliferación de asentamientos precarios en determinadas ciudades, la construcción de viviendas inadecuadas sobre suelos frágiles y una regulación pública muy ineficiente en el ordenamiento territorial.

3. Desarrollo de los enfoques para la gestión de la biodiversidad

3.1. La protección de especies de flora y fauna

Inicialmente la preocupación por la pérdida de la biodiversidad estaba centrada en algunas especies de flora y fauna, puesto que como resultado de la modernización han disminuido significativamente sus poblaciones o incluso están en peligro de extinción. Estas iniciativas surgieron en los países europeos y EE UU, centrando su atención en algunas especies vegetales y animales locales de alto valor estético. En el caso de las regiones tropicales, el interés apuntaba sobre todo hacia algunos mamíferos mayores como los elefantes, rinocerontes, etc. Bajo este enfoque no existía todavía una conciencia general sobre la importancia de la biodiversidad de cara a la preservación de la productividad, la estabilidad y la resiliencia de los ecosistemas.

3.2. Los cuestionamientos a las áreas naturales protegidas y el manejo de ecosistemas

El interés se centra en parte o la totalidad de determinados paisajes naturales o ecosistemas, cuya protección se justifica esencialmente por su alto número de especies raras y/o en peligro de extinción ("hot-spots")². Este enfoque parte de la idea que la conservación de especies en el largo plazo sólo es posible si se protegen sus espacios vitales o su hábitat. Como la articulación entre aprovechamiento de los recursos y la protección del medio ambiente genera conflictos, la solución de

2 Un buen resumen de conceptos y procedimientos en la definición de hot-spots se encuentra en Myers et al., 2000. *Biodiversity hot-spots for conservation priorities*. Vol. 403.

éstos pasa por una decisión explícita a favor del medio ambiente. Este enfoque de conservación tiene una larga historia, tanto en países ricos como en países pobres de Oriente y del Hemisferio Sur, en consecuencia existen numerosos análisis comparativos de casos en diferentes países y contextos ecológicos³.

Pese a que los efectos positivos de las áreas protegidas (AP) sobre la protección de la biodiversidad son ampliamente reconocidos, también en la actualidad son muy cuestionados debido a que los nuevos descubrimientos ecológicos indican que la conservación de las especies a largo plazo depende de las dinámicas de su población, del hábitat y de las influencias externas que se ejercen sobre las mismas. Las dinámicas e influencias no se pueden explicar desde una óptica exclusivamente de las especies. Debido a ello, se fueron desarrollando cada vez más los llamados “enfoques multi-especies” que centran su atención en la conservación de los ecosistemas⁴. Hay que añadir que las especies son la expresión de una determinada etapa dentro del continuo proceso de evolución biológica. Para que la evolución de las especies pueda continuar se requiere de una interacción genética con todas las especies biológicamente relevantes para ellas mismas y no sólo con aquellas que se encuentran en las áreas protegidas. En este contexto la conservación de la diversidad genética adquiere especial importancia, puesto que esta no se puede garantizar sólo conservando las APs, sino que se requiere de la conservación de los ecosistemas naturales donde se consideran los factores de evolución y de diversidad genética⁵.

Otro aspecto que se viene cuestionando al enfoque de las APs son los graves conflictos sociales que se desató entre la población local, las autoridades públicas y las empresas que explotan recursos naturales como los madereros. Tales conflictos ponen en duda el logro de las metas que desde este enfoque se fijaron a largo plazo. A esto se suman las múltiples debilidades e inconsistencias en la gobernancia de los organismos estatales encargadas en la gestión de las APS, lo que hace que los planes quedan en el papel o no sean implementados debidamente.

Este enfoque, por otra parte, conduce a paisajes duales, es decir que las APs forman islas en medio de otros paisajes que suelen ser objeto de manejo intensivo. Esto también conduce a crecientes –y en parte graves– conflictos sociales que se suscitan entorno al aprovechamiento de los recursos⁶. Las APs se encuentran bajo presión, por un lado, de los usuarios locales de recursos quienes se ven obligados al manejo intensivo en superficies cada vez más pequeñas y, por otro, de los agroindustriales que manejan grandes superficies de cultivos que paulatinamente

3 Un resumen tanto de las condiciones políticas y las alianzas que llevaron a la creación de áreas protegidas, como de los cambios que se produjeron en el transcurso del tiempo se encuentra en Bates, 2000. *The Political Ecology of Conserving Tropical Rain Forests: a Cross National Analysis*.

4 Marcot, 1996. *On Population Viability and Management*. Pág. 58.

5 Meffe, 1996. *Conserving Genetic Diversity in Natural Systems*, S. 40ff.

6 Ver por ejemplo a Scott, 1998. *From Conflict to Collaboration*.

incrementan su presión tanto hacia las superficies de los pequeños agricultores como de las APs.

A raíz de todo ello, los enfoques interdisciplinarios están ganando cada vez más importancia, pues persiguen una estrategia integral de análisis y solución de los problemas. El ampliar más la visión del problema no siempre implica un cambio significativo de ideas, frecuentemente sirve sólo para buscar mejores métodos tendientes al logro de las metas de protección⁷. A partir de esta visión más integral se ha generado como respuesta a las contradicciones internas que se dan en la protección de la naturaleza en el curso de los últimos años, el llamado “método” o “manejo del ecosistema”. En nuestra opinión este enfoque contiene valiosos elementos que sirven para combinar la conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento sostenible de los recursos. A continuación se presenta un resumen de lo que se entiende por manejo del ecosistema que se basa en 12 principios⁸.

3.2.1. Descripción del método del manejo del ecosistema

El método del manejo del ecosistema (ME) es una estrategia para el manejo integrado de suelo, agua y los recursos vivos, pues promueve la conservación y uso sostenible de forma equitativa. De esta manera, la aplicación del ME puede ayudar a alcanzar el balance de los tres objetivos de la CDB: conservación, uso sostenible y distribución justa e equitativa de los beneficios provenientes del uso de la biodiversidad. El ME se basa en la aplicación de metodologías científicas apropiadas, enfocadas en los niveles de organización biológica, la estructura esencial, los procesos y las funciones e interacciones entre los organismos y su ambiente. Reconoce a los humanos, con su diversidad cultural, como un componente integral de muchos ecosistemas y se basa en los siguientes 12 principios:

- Principio 1.*** Los objetivos de manejo del suelo, el agua y los recursos vivientes son asuntos de la preferencia de la sociedad.
- Principio 2.*** El manejo debe descentralizarse hasta el nivel apropiado más bajo.
- Principio 3.*** Los administradores de ecosistemas deben considerar los efectos (potenciales o actuales) de sus actividades sobre los ecosistemas adyacentes o sobre otros ecosistemas.
- Principio 4.*** Reconociendo las potenciales ganancias del manejo, generalmente existe la necesidad de entender y manejar el ecosistema en un contexto económico. Cualquier programa de manejo de ecosistemas de este tipo debe: Reducir las distorsiones del mercado que afecten negativamente

7 Ver Neuman, 1998. Imposing Wilderness-Struggles over Livelihoods and Nature Preservation in Africa.

8 Una descripción completa se encuentra en UICN, 2003.

a la diversidad biológica, alinear incentivos para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad e internalizar los costos y beneficios de un ecosistema dado, en la medida de lo posible.

Principio 5. Una meta prioritaria del método del ecosistema debe ser la conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, para mantener los servicios que provee.

Principio 6. Los ecosistemas deben manejarse de acuerdo a sus límites de funcionamiento.

Principio 7. El método del ecosistema debe abordarse de acuerdo a las escalas espaciales y temporales apropiadas.

Principio 8. Reconociendo las escalas temporales variables y de los efectos de laguna que caracterizan a los procesos de los ecosistemas, los objetivos del manejo de ecosistemas deben fijarse a largo plazo.

Principio 9. El manejo debe reconocer que el cambio es inevitable.

Principio 10. El método del manejo del ecosistema debe procurar un balance e integración apropiada entre la conservación y el uso de la diversidad biológica.

Principio 11. El método del manejo del ecosistema debe considerar todas las formas de información relevantes, incluyendo el conocimiento científico, el local y el indígena, así como las innovaciones y las prácticas.

Principio 12. El método del manejo del ecosistema debe involucrar a todos los sectores relevantes de la sociedad y las disciplinas científicas.

Tanto las experiencias de la protección ambiental “clásica” como de las tendencias actuales del desarrollo agropecuario y forestal sostenible, develan que las estrategias de conservación de la biodiversidad tienen mejores posibilidades de éxito sólo si se logra combinar las exigencias que se deducen de los paisajes naturales con las que se requiere para la gestión de los paisajes culturales. El fomento del uso de los recursos naturales y de la biodiversidad se va desprendiendo cada vez más de los enfoques sectoriales que contienen límites definidos según aspectos técnico-productivos y biológicos, tendiendo a llegar a un nivel donde el manejo de ecosistemas en forma integral es el tema central.

El manejo de ecosistemas abarca un gran conjunto de elementos naturales, aunque el concepto de ecosistema es aplicable tanto para un acuario como para un parque o una reserva natural o para todo el planeta, especialmente en las regiones de habla inglesa ha adquirido un significado específico junto al concepto de “management” o manejo. Incorpora reservas de hábitat y un conjunto de espacios que son manejados más activamente para la obtención de bienes y servicios⁹. En este sentido el enfoque del manejo de ecosistemas que aquí se presenta, se refiere a un

9 Franklin, 1997: Ecosystem Management: An overview, S.30.

gran número –variable según el caso– de unidades espaciales superiores situadas en paisajes naturales y/o culturales. Actualmente este enfoque sirve como base referencial para todas las instituciones públicas en EE UU y Canadá que están a cargo de la regulación y manejo de los bosques, la protección del medio ambiente y la naturaleza y de la administración de los parques nacionales¹⁰.

Similares conceptos y métodos de implementación conforman el pilar fundamental en la mayor parte de Europa, pero no bajo el nombre de “manejo de ecosistemas”, sino de “protección de la naturaleza”. Pueden considerarse parte del enfoque de manejo de ecosistemas aquellos conceptos, métodos y experiencias del “manejo ambiental” que se utilizan en Europa y cuyo objetivo principal se concentra en el análisis y la solución de problemas ambientales en espacios más grandes como los problemas de sistemas de aguas subterráneas y aguas corrientes, los sistemas agroecológicos, los bosques, los Alpes, etc.¹¹ En la misma dirección van las actuales inversiones en los estados de la CEI, donde la GTZ, GEF y la UE han lanzado su programa TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States)¹² en el ámbito de la protección medioambiental.

El enfoque del manejo de ecosistemas nació como respuesta a las debilidades que se detectaron en los esfuerzos de protección medioambiental realizados hasta ahora. Refleja un avance importante ya que se reconoce la importancia de la integración de los requerimientos de la sociedad en el manejo de los ecosistemas. No obstante, centrar el análisis y la formulación de estrategias de acción en las unidades ecológicas ‘naturales’, como son los ecosistemas, pone de relieve un valor ético fundamental que apunta a una relación entre sociedad y naturaleza que se basa en el respeto de los procesos de regeneración de las bases ecológicas propias de la naturaleza. Debido a que justamente este valor fundamental no es compartido por los grupos sociales responsables de la destrucción de la biodiversidad, el manejo de ecosistemas enfrenta muchas deficiencias. Así se pone de relieve una deficiencia significativa del manejo de ecosistemas que consiste en marginar o incluso ignorar la dimensión ética, lo que resulta en una tendencia tecnocrática que obvia los procesos sociales y políticos y que deberían ser los medios para impulsar un debate sobre qué tipo de valores deben guiar la relación entre sociedad y naturaleza.

-
- 10 Hay varias publicaciones sobre la creación, importancia, definiciones y métodos de ejecución: Vogt et al. (1997) *Ecosystems*
 - Balancing Science with Management; Boyce & Haney (1997) *Ecosystem Management*
 - Applications for sustainable forest and wildlife resources; Samson & Knopf (1996) *Ecosystem Management*
 - Selected readings.
 - 11 Un buen resumen de los fundamentos teóricos, instrumentos de implementación y de las experiencias recogidas se encuentra en la obra de tres tomos de Nath et al. (1998): *Environmental Management in Practice*. En relación con el manejo ambiental, ver tomo I.
 - 12 Ver detalles del programa TACIS en: www.tacisinfo.ru

Un principio fundamental que abre pistas para superar las tendencias expertocráticas del manejo de ecosistemas es su proceder adoptivo. Se reconoce que casi todas las instrucciones procedentes de las instancias de manejo conllevan grandes inseguridades. Por eso los ‘gerentes’ de ecosistemas siempre consideran el proceso de aprendizaje social en la planificación de todas sus actividades. Es necesario establecer mecanismos de retroalimentación que permitan un dialogo constante entre todos los participantes e instituciones sobre metas, estrategias y medidas actuales. De ello resulta que el manejo de ecosistemas no es viable si no se introducen cambios fundamentales al interior de las instituciones encargadas de la labor. Una implementación efectiva dependerá de procesos de aprendizaje en las siguientes áreas: capacitación profesional interdisciplinaria, procesos de decisión adaptivos e interactivos y estructuras horizontales e integrales de comunicación e información¹³.

La implementación del manejo de ecosistemas en la región europea y norteamericana cuenta con una base relativamente sólida de experiencias y por ende encuentra creciente aceptación por parte de políticos, investigadores y usuarios de recursos; a nivel de la cooperación internacional no se puede decir lo mismo, pues con este enfoque prácticamente no han desarrollado experiencias. Hace poco la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó una primera evaluación de una serie de proyectos pilotos en países del Hemisferio Sur y los estados de CEI¹⁴, en la que se demuestra que debido a las diferentes condiciones socioeconómicas y políticas de partida los métodos de implementación necesitan de una revisión y adaptación aún más detallada.

Como la planificación de los proyectos de protección ambiental fue dictada –en la mayoría de los casos– “verticalmente de arriba hacia abajo”, el grado de aceptación por parte de los actores locales es muy bajo. La desconfianza en los países pobres y el manejo burocrático de leyes y finanzas (transferencias monetarias de los países ricos) limitan aún más los márgenes de acción. Un factor agravante es que el enfoque de biodiversidad se empecina demasiado en la conservación de algunas especies; además se le da escasa importancia a los paisajes culturales que deberían ser manejados en forma más sostenible.

Por todo ello es indispensable una revisión de aquellos enfoques cuyo tema central es la protección de la naturaleza. Es necesario que los proyectos que persiguen la conservación de la biodiversidad sean integrados a una estrategia global para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En cuanto a conceptos, métodos y prácticas, el replanteamiento se encuentra todavía en su fase inicial. Durante la búsqueda de posibles soluciones a las contradicciones que encierra el

13 Ver también Danter, 2000: Organisational Changes as a Component of Ecosystem Management.

14 Pirot et al., 2000: Ecosystem Management: Lessons from around the world – A Guide for Development and Conservation Practitioners. IUCN.

enfoque de simple protección de la naturaleza, la aplicación de ideas y conceptos provenientes del uso de los recursos naturales puede resultar muy útil.

3.3. Reservas de la biosfera de la UNESCO

La visión de que la biodiversidad no sólo se puede conservar mediante protección de la naturaleza y de las superficies de compensación, encuentra cada vez más aprobación. Una investigación patrocinada por la UNESCO sobre las características, tendencias de desarrollo, importancia y distribución mundial de los paisajes culturales, fue la base para el programa internacional “Man and biosphere” (MAB) y para el programa “Red Internacional de Reservas de la Biosfera”. Con este programa ya no se pretende ex-zonificar las extensas áreas naturales, al contrario, su énfasis está en el aprovechamiento sostenible de paisajes culturales por parte del ser humano mismo. Cada reserva de la biosfera debe cumplir al mismo tiempo, las siguientes tres funciones que se fortalecen mutuamente¹⁵:

- Función de conservación: paisajes, ecosistemas, especies y diversidad genética.
- Función de desarrollo: fortalecimiento del desarrollo ecológico y humano según los principios de la sostenibilidad.
- Función logística: fomento de investigaciones, monitoreo, educación e intercambio de información vinculados con aspectos locales, nacionales y globales de conservación y desarrollo de la biodiversidad.

Aquí es interesante el procedimiento que se emplea en la definición del término reserva que significa que las áreas se quedan bajo la soberanía de los estados. Según las condiciones existentes, dichas áreas pueden abarcar tanto la propiedad estatal como la propiedad solar privada. Antes de integrarse éstas a la red mundial de reservas de la biosfera, deberá existir un marco institucional cuyo representante actuará, además, como solicitante¹⁶. De esta manera se pretende evitar las consecuencias negativas que ocasiona una declaración de áreas protegidas dictada verticalmente desde arriba. Antes de iniciar el proyecto tanto el gobierno como la población tienen la obligación de ponerse de acuerdo sobre fundamentos y metas a largo plazo del desarrollo de las reservaciones. Una vez integrados a

15 Para más detalles ver también: <http://unesco.org/mab>.

16 En Suiza las comunidades de Entlebuch hace poco decidieron establecer la primera reserva de la biosfera. Ver más detalles en: Rouss et al. (1999) Die Zukunft der Kulturlandschaft in der Schweiz. Regional management des Projektes Biosphärenreservat Entlebuch. [El futuro del paisaje cultural en Suiza. Manejo regional del proyecto Reserva de la Biósfera Entlebuch].

la red, la UNESCO pondrá a disposición una serie de medidas de apoyo que se elaborarán junto con todos los involucrados. Muchos países que anteriormente ya habían delimitado sus áreas protegidas, ahora las definieron como núcleos de una reserva de la biosfera complementándolas con paisajes culturales de manejo más intensivo y con paisajes en estado de transición. Esta estrategia permitió que se diseñara una planificación integral del desarrollo, según la cual ahora se toman en cuenta tanto las superficies conservadas al natural, los paisajes culturales como el efecto recíproco que ambos producen.

Si bien las estrategias de apoyo en su mayoría están orientadas hacia determinados sectores, poseen un horizonte común, pues tienen que contribuir al aprovechamiento sostenible de paisajes culturales. En todo caso hay que evitar eventuales cambios en el uso de recursos, caso contrario tales cambios perjudicarían la sostenibilidad del sistema global.

El enfoque de las reservas de la biosfera apunta a que los paisajes naturales y culturales se integren, proceso en el que es de suma importancia que los usuarios locales de los recursos naturales participen activamente. En este contexto, combinar protección con aprovechamiento reduce el potencial conflictivo, pues ello permite –además de proteger a las especies– la conservación de la diversidad de ecosistemas y paisajes que exige la Convención sobre Diversidad Biológica. Por lo enunciado, este enfoque tiene mucho en común con el manejo de ecosistemas.

3.4. Agricultura y forestería sostenible

Muchos proyectos y programas de desarrollo rural en el trópico –y desde hace algún tiempo también en los países de la CEI– han superado sus fuertes enfoques sectoriales y técnico-productivos asumiendo los principios del uso sostenible de los recursos naturales. Como se trata de promocionar el uso sostenible de los recursos, ahora no sólo se ocupan de las técnicas productivas (fertilización, variedades, manejo integral de plagas, etc.) sino también de la sostenibilidad de los recursos como el suelo (fertilidad, erosión, expansión de desiertos, contaminación con metales pesados etc.), el agua (manejo de cuencas) y la agro-biodiversidad. La consideración de los problemas locales de recursos conduce a que se traten también las relaciones entre agricultura y forestación con los elementos atmosféricos como CO₂, metano y ozono.

El denominador común de estos enfoques es su claro énfasis en la ecologización de los sistemas de producción existentes y en la creación de nuevos sistemas del mismo tipo. Aquí la conservación de la biodiversidad en sí juega un papel implícito y muchas veces sirve solamente para legitimar los proyectos, es decir se presupone que la conservación de la biodiversidad aparecerá como un efecto secundario positivo. La investigación sistemática de los efectos reales entre diferentes formas de agricultura y la biodiversidad está todavía en sus inicios, pues

solo un grupo especial de proyectos se dedican a la conservación de la diversidad de animales domésticos y de plantas cultivadas en el sector forestal y en el agrario. Sin embargo, algunos de sus primeros resultados de investigación demuestran que a largo plazo no se puede garantizar la conservación de la agro-biodiversidad sin relacionarla sistemáticamente con elementos de los paisajes naturales.

Con ejemplos tomados del área de conservación de plantas culturales agrarias se puede demostrar que la diversidad de especies y variedades sólo puede conservarse si éstas se encuentran en poblaciones situadas en medio de grandes superficies. Se ha demostrado, además, que la creación de las diferentes especies, variedades, razas terrestres etc. sólo fue posible en interacción con plantas silvestres de la misma familia, por ello cabe recalcar cuán importante es la conservación de las mismas¹⁷. Como las poblaciones de plantas culturales y su amplia gama de plantas silvestres sobrepasan los estrechos límites de algunos sistemas de producción, la agrobiodiversidad solo se puede obtener mediante la conservación de determinados ecosistemas favorables a la biodiversidad. Por este motivo hay muchos puntos comunes con el manejo de ecosistemas.

En países occidentales, las diferentes formas de agricultura orgánica son las alternativas más frecuentes que se dan en el campo del manejo sostenible, siendo éstas objeto de revalorización adicional según la óptica de la conservación de la biodiversidad. Cada vez más investigaciones científicas demuestran que aquellos sistemas de cultivo combinan en forma óptima las exigencias de la protección de la naturaleza y de la producción sostenible. Aquí es de suma importancia evitar paisajes duales, es decir la separación de áreas naturales protegidas y las superficies de producción. En la Región Andina la alta densidad y el encadenamiento de hábitats no cultivados y perennes conducen a un aumento de la diversidad de paisajes. Se pudo demostrar que esta práctica, mediante el asentamiento de poblaciones de insectos beneficiosos, ayuda a controlar las plagas de la colza por ejemplo, hecho que contribuyó a su vez considerablemente al éxito del cultivo orgánico de colza¹⁸. La conservación de superficies casi naturales se convierte por tanto en un factor de producción y adquiere importancia económica para los agricultores. Todavía no se ha logrado determinar claramente en qué forma estos sistemas que fueron probados en unidades productivas, se podrían implementar a nivel de grandes superficies.

17 Comparar Lefort & Chauvet , 1996: Biodiversity and Agriculture, Grasslands and Forests. pág. 312 sg. Ver también Hodkin, 1996: Current issues in Conserving the Biodiversity of Agriculturally Important Species pág. 357 sg.

18 Thies & Tschamtkke (2000): Biologische Schädlingskontrolle durch Landschaftsmanagement [Control orgánico de plagas a través del manejo de paisajes] en: Ökologie und Landbau [Ecología y cultivo de la tierra] 115,3/2000. Pág 47sg. Ver también Stolton et al., 2000: The relationship between nature conservation, biodiversity and organic agriculture.

La cuestión de la biodiversidad –excepto la de agrobiodiversidad– recibe un trato implícito en el marco de la agricultura sostenible. Las experiencias y tendencias actuales en el campo de la protección de la naturaleza, la protección ambiental y la agricultura y forestación sostenibles, indican claramente que estos sectores se deben profundizar contemplando el criterio del “manejo de ecosistemas situados en grandes superficies”. En ello no hay que dejar de lado que el ser humano y la sociedad son partes integrales del ecosistema. Las soluciones transdisciplinarias que contemplan la participación integral de los grupos poblacionales involucrados se convierten por tanto en la base fundamental para el manejo de ecosistemas. Tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo, las ventajas de este enfoque son cada vez más perceptibles.

Hasta la fecha queda pendiente, sin embargo, la aclaración de las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son los momentos claves en el proceso de negociación entre los diferentes actores? ¿Como se pueden apoyar efectivamente estos procesos a nivel local, regional e internacional? ¿Tomando en las situaciones de arranque, qué instrumentos son los que más se adecuan para el logro de este fin?, ¿Qué clase de enfoques permiten la superación efectiva de los paisajes duales? Las prácticas exitosas de manejo de ecosistemas en pequeñas unidades productivas ¿cómo se pueden transferir experiencias locales a niveles superiores (“up-scaling”)? Además falta analizar hasta qué punto se puede implementar la estrategia de aprovechamiento sostenible sin que el entorno social (industria, comercio, servicios, consumidores etc.) participe simultáneamente en el desarrollo sostenible.

3.5. La diversidad cultural: un fundamento para la conservación de la biodiversidad

El punto de partida de este aporte es el concepto de que la conservación de la biodiversidad finalmente refleja un asunto de valor de la sociedad. Su implementación requiere por tanto de un método que esté construido sobre una relación naturaleza-sociedad definida culturalmente. Para ello no es necesario empezar de cero, pues en muchas regiones de la tierra importantes para la biodiversidad rigen formas de vida que se consideran a sí mismas culturas más o menos independientes frente a los “modernos”, sistemas de valores influenciados por la cultura occidental. Respecto a la biodiversidad, los miembros de estos grupos socioculturales disponen de más saberes que los que han sido investigados incluso por la Botánica o la Biología (etnobotánica). Estas culturas locales demuestran con toda claridad que la biodiversidad se regenera en forma sostenible sólo si tiene un “sentido” en el marco de las formas de vida sociales e individuales.

Como el concepto “sentido” implica valores culturales, se inició una serie de proyectos pilotos que –pasando por el fortalecimiento y promoción de las culturas

locales– pretenden contribuir a una conservación de la biodiversidad y de sus correspondientes formas de vida y de conocimiento¹⁹. La conservación de la biodiversidad, por tanto, está fuertemente ligada a la realidad de los sistemas de valores culturales. Como estos valores culturales por su carácter mismo son de gran amplitud, su fortalecimiento también tiene efectos positivos sobre otras actividades como por ejemplo la agricultura, la economía forestal, etc. La conservación de la biodiversidad, desde esta óptica, es un “producto” de formas de vida definidas culturalmente, y como tal se integra en una estrategia global del desarrollo sostenible²⁰.

Si bien se advierte un creciente reconocimiento de la importancia de la diversidad cultural como fundamento de la biodiversidad, ésta sufre amenazas cada vez mayores. Ello se debe a factores tanto internos como externos. Como está orientada unilateralmente hacia lo económico, la creciente globalización de los hábitats –marginados hasta hace poco– afecta a las formas de vida existentes en ellos; por otro lado son los factores internos tales como conflictos generacionales, modernización de las tradicionales formas de vida en un entorno cambiante, etc., los que pueden conducir hacia un cambio –consciente en este caso– de la diversidad cultural existente. Tomando en cuenta tales procesos de erosión cultural los Proyectos y Programas que se dedican a la conservación de la diversidad cultural se concentran en el apoyo a los grupos locales. Desde esta perspectiva se formularán luego las correcciones que fuesen necesarias a nivel regional, nacional e internacional. Aquí juegan un papel especial los enfoques y métodos de revalorización y renovación de las formas de vida y producción culturalmente definidas. Tales enfoques demandan un consciente y sistemático análisis de la visión del mundo de los actores locales y de los eventuales vínculos de su visión con una visión científica del mundo²¹.

Las percepciones y funciones locales, específicamente marcadas por lo que significa la vida, los animales, las plantas, el suelo, el ser humano, etc., son el fundamento de partida para la aplicación de métodos de investigación y de ase-

19 Como parte de una estrategia para la conservación de la biodiversidad, la red internacional COMPAS (Comparing an Supporting Endogenous Development An Bio-Cultural Diversity) presenta en sus publicaciones y su web-site recomendaciones conceptuales y prácticas para el apoyo a la diversidad cultural. Ver también: Procedimientos de la Conferencia Internacional “Culture and Biodiversity”, efectuada en Kunming, China, entre el 20 y 30 de Julio de 2000. Aquí se encuentra una buena documentación de los resultados y tendencias actuales.

20 En su extensa publicación „Cultural and Spiritual Values of Diversity “, de 1999, la UNEP presenta una introducción minuciosa sobre el tema Importancia de la Diversidad Cultural para la Biodiversidad.

21 Högger (1993): *Wasserschlange und Sonnenvogel –Die andere Seite der Entwicklungshilfe* S. 105ff. [Serpiente marina y fénix– La otra cara de la cooperación, Pág. 105 y siguientes]

soramiento predominantemente comunicativos²². En este contexto los elementos naturales panorámico-paisajísticos que se conservan en su estado natural, son considerados también resultado de un proceso social, puesto que su conservación “natural” procede de una decisión comunitaria. Ello permite que todo panorama o paisaje, en cualquier forma que se presente, sea comprendido como verdadero “paisaje cultural”. Esta amplia visión es el fundamento sobre el que los nuevos enfoques –que priorizan el fortalecimiento de los elementos culturales– construyen el tratamiento de la biodiversidad, pues estos son los elementos que finalmente condicionan el logro de una relación sostenible entre el hombre y su entorno natural. Al margen de la conservación de especies, este aporte considera también que determinadas especies, ecosistemas o paisajes pueden poseer un valor directamente social sólo si los elementos naturales cobijados en ellos están ligados con los correspondientes saberes de los actores locales. Amplios trabajos etno-botánicos realizados demuestran claramente este aspecto.

Debido a que determinadas formas de saberes están siempre ligadas a las visiones del mundo definidas culturalmente, la diversidad de los saberes relacionados con la biodiversidad puede conservarse en forma óptima sólo si converge con la diversidad de culturas. No obstante, la dinámica cultural es muy compleja, su aplicación no es de fácil planificación y control. Así lo demuestra el creciente número de conflictos de carácter étnico y la tensión que se da en muchos países del Hemisferio Sur entre las élites con orientación mayormente “occidental” y la población local. El desarrollo de enfoques y métodos para el fomento del diálogo intra e intercultural en el marco de la Cooperación Internacional, como se dice comúnmente, está en pañales. Como el diálogo intercultural incluye a las culturas occidentales, la Cooperación Internacional será objeto de un proceso de aprendizaje conjunto en el que ninguna de las partes posee la solución definitiva. En posesión de un trasfondo cultural ambos presentan valiosos elementos que aportan a un proceso común de desarrollo.

Aquí se trata de enfoques que a diferencia de los aportes a la biodiversidad mencionados en los capítulos anteriores, centralizan la búsqueda de posibilidades de apoyo a los procesos de negociación y de aprendizaje por parte de instituciones externas. Los aspectos de interculturalidad reciben una ponderación especial. Se reconoce que el apoyo a la diversidad cultural por parte de asesores e investigadores con formación científica requiere de un diálogo intercultural que acepte las percepciones de los actores locales como punto de partida explícito pero también un fortalecimiento y revalorización de sus saberes como parte de su intraculturalidad. Las experiencias podrán integrarse adecuadamente en el enfoque del manejo del ecosistema, enfoque que –en referencia a este punto [de interculturalidad]– acusa insuficiencias.

22 De cara al logro de esta meta y por encargo del DEZA, la CDE ha desarrollado un módulo conocido bajo el nombre de “Autodidactic Learning for Sustainability (ALS)” e implementado con éxito en proyectos en América Latina, Asia y África (Ver CDE, 1998).

3.6. Biodiversidad y procesos socio-económicos a nivel nacional e internacional

Esta discusión se apoya sobre todo en el postulado que las principales causas de la pérdidas de biodiversidad son las actividades económicas del hombre, en consecuencia es menester que estas actividades sean objeto de una mejor orientación. Inmediatamente después de la firma de la Convención sobre la Biodiversidad surgió una serie de iniciativas²³ que se ocupan de la cuestión de la relación entre pérdida de biodiversidad y las políticas macroeconómicas y sociales a nivel nacional e internacional. Aquí se presenta el postulado que la conservación de la biodiversidad se logrará, a largo plazo, sólo a través de un “scaling-up” de los enfoques en su mayoría locales y regionales que se conocen hasta ahora. Por ello las estrategias tenderán a prestar atención a las causas más profundas de la pérdida de diversidad. Viene al caso un proyecto del , basado en 10 estudios de caso, que identificó las siguientes “causales subyacentes” responsables de tales procesos:

- Presión doméstica** : Crecimiento demográfico
Pobreza
Migración
Falta de equidad/acentuación de disparidades
Marginalización de grupos sociales
Cambio cultural
- Presión internacional** : Políticas marco-económicas
Comercio internacional
- Políticas** : Fallas e inconsistencias conceptuales
Fallas en mercados domésticos
Deficiencias en marcos institucionales y jurídicos
Programas no sostenibles de desarrollo
Falta de control social más efectivo sobre uso de recursos

Conforme al modelo Presión-Estado-Respuesta, se trata pues, de elementos tanto de presión como de respuesta. La diferencia entre y dentro de estos grupos no siempre es clara, especialmente en lo que se refiere al concepto de ‘fallas políticas’. Es importante considerar, sin embargo, que estas causas subyacentes no tiene importancia en todos los estudios de casos, aunque una buena parte de estas sí la tienen (over-determination of bio-diversity loss). También está claro que detrás de cada causa se esconden otros factores. Este

23 WWF Macroeconomics Program Office, November 99: Root Causes of Biodiversity Loss. Executive Summary (based on “Root Causes of Biodiversity Loss”. Alexander Wood et al. Eds. Earthscan Publications, 2000).

listado, sin embargo, es útil para una estructuración de los problemas. Algunas de estas causas se presentan más a nivel nacional y subnacional; para algunas por ejemplo se tiene que encontrar una solución a nivel internacional. Como la pérdida de biodiversidad no tiene una explicación monocausal, su solución se encontrará sólo pasando por una mejor coordinación entre los diversos actores sociales y las instancias operativas correspondientes. Pero además de una mejor coordinación, dichos actores tendrán que hacer grandes esfuerzos para reducir los efectos negativos que sus propias actividades provocan a la biodiversidad. Tanto los actores estatales así como las empresas y corporaciones privadas, disponen de ciertos campos con libertad de acción en los que sí pueden contribuir a la protección de la biodiversidad. El fracaso de las políticas nacionales es una causa que frecuentemente se diagnostica en la pérdida de biodiversidad. Así por ejemplo, un estudio sobre Colombia²⁴ demuestra que a consecuencia de las desacertadas políticas agrícolas impuestas, la presión sobre los recursos naturales durante décadas tuvo un dramático incremento. De haberse introducido mejores políticas podría haberse reducido –si no neutralizarlo– el efecto presión que ejercen el crecimiento demográfico y la pobreza.

Las medidas más importantes ha considerarse son: Transferencia del derecho propietario y de usufructo a los grupos poblacionales directamente involucrados; fijación de precios tomando en cuenta costos externos; creación de incentivos que promuevan favorablemente el comportamiento específico individual; y toma de decisiones políticas sustentadas con buen fundamento científico y admisión de una gran diversidad de enfoques y métodos. Está demostrado que la protección de la biodiversidad cuando está incorporada en las políticas de transporte, turismo y de agricultura, tiene un impacto más directo (sea positivo o sea negativo) que cuando se encuentra englobada sólo en las políticas medioambientales²⁵.

Otro gran desafío fundamental para la conservación de la biodiversidad ligada a los países meridionales ricos en biodiversidad, es la de introducir limitaciones que impidan que los hábitats en estado natural o casi natural sigan siendo objeto de transformación en espacios de aprovechamiento intensivo. En los países del Hemisferio Norte este proceso prácticamente ya ha sido detenido. Dichas limitaciones pueden ser de tipo territorial o también pueden ser que tanto el uso del suelo como la producción agrícola sean más cuidadosos, se adapten más a los fines que se persiguen y sean diseñados en forma diferenciada. Ambas variantes buscarían impedir que el hábitat se transforme en un panorama agrario e industrial uniforme. Este proceso de desarrollo podría conducir a que toda la tierra finalmente quede al

24 Heath & Binswanger, 1996: Natural Resource Degradation effects of poverty and population growth are largely policy-induced: the case of Colombia.

25 Global Environment Facility (GEF), 2000: Achieving Sustainability of Biodiversity Conservation.

servicio de la producción para la humanidad. Pero frenar los procesos de transformación sólo será posible si los países asumen el riesgo y los costos de iniciar otra senda de desarrollo, es decir algo diferente a lo que hicieron los países del Hemisferio Norte. Se tendrán entonces de desarrollar nuevos enfoques, tecnologías y formas de producción adaptadas al entorno local que den lugar a una nueva base para la conservación de la biodiversidad. Ello se podrá lograr sólo si se crean mecanismos a nivel internacional, tales como compensaciones financieras, pago de bonos para productos provenientes de países que conservan activamente la biodiversidad (Land use Planning Protocol, Sustainable use Certification, etc.)²⁶.

Dentro las estructuras existentes, en aquellos países que todavía poseen grandes reservas de tierra situadas junto a ecosistemas conservados en estado natural o casi natural –al menos a corto plazo–, les resulta económicamente necesario transformar tales reservas en superficies productivas. Esta visión vale tanto para los actores estatales como para los usuarios de la tierra, sean éstos agroindustriales o campesinos. Para las actuales como para las futuras generaciones, el valor potencial de la biodiversidad (cultivos, farmacéutica, atracciones turísticas) sigue siendo insuficientemente remunerado en los mercados y no existen incentivos que conduzcan al cambio, a no ser que se introduzcan políticas específicas. Los futuros convenios internacionales tendrían que observar este aspecto. La Convención sobre la Biodiversidad y la GEF son los primeros ejemplos de ello.

Si bien con este aporte se tratan importantes factores de la conservación de la biodiversidad, en la discusión existe todavía la tendencia a tratar al hombre principalmente como un sujeto que actúa en forma negativa. Hay también ejemplos positivos en los que la sociedad ha desarrollado sistemas de aprovechamiento de tierra rico en biodiversidad y ubicado relativamente cerca de espacios naturales (praderas naturales y praderas delgadas en los Alpes, plantaciones de café orgánico en América Central, sistemas agroforestales en regiones tropicales, etc.). En estos lugares pueden conservarse las especies naturales, si no todas, al menos gran parte de ellas. Pese a que estos ejemplos positivos se encuentran en peligro por los efectos de la modernización unilateral o por su importancia marginal, su enfoque podría servir para que la biodiversidad pueda conservarse al menos hasta cierto grado. Este aspecto debería ingresar con mayor fuerza en la discusión de políticas para que se pueda plasmar en políticas económicas.

El trabajo de coordinación y la necesaria transferencia de medios son un gran desafío a la capacidad de los actores. Las experiencias que se hicieron con la implementación de tales acuerdos ambientales, especialmente cuando estos requieren un gran flujo de medios, son poco alentadoras. Los intereses económicos que se encuentran de por medio son difíciles de vencer, puesto que éstos suelen encontrar la forma de evadir o transgredir tales convenios.

26 Swanson, 1997: Global Action for Biodiversity, pp 163.

4. Desafíos para la gestión sostenible de la biodiversidad en países andinos

4.1. Paisajes duales: entre áreas protegidas y áreas no protegidas

Haciendo una comparación del desarrollo histórico de los enfoques para la gestión de la biodiversidad con la situación de Bolivia y otros países andinos, se encuentra que co-existen diferentes conceptos representando todas las principales etapas como son los parques naturales, áreas protegidas, reservas de la biosfera o territorios indígenas. A pesar de que existen estrategias regionales y nacionales que involucran a los tres países andinos (Perú, Bolivia y Ecuador), en realidad la gestión de la biodiversidad se concentra en las áreas protegidas y en territorios indígenas, las que en Perú cubren el 5%, en Ecuador el 16% y en Bolivia el 22% (Geo p.80). El gran resto de sus territorios que componen de bosques nativos, praderas, humedales, sistemas agroforestales, áreas de cultivo, etc. están prácticamente excluidos de la gestión pública de la biodiversidad, haciendo que la diversidad de agroecosistemas, agrosilvopastoriles o forestales se vean amenazadas por el avance de la deforestación, la concentración en la tenencia de la tierra, el aumento de los monocultivos y la ganadería agroindustrial.

Toda esta tendencia lleva a crear 'paisajes duales' que se caracterizan por la existencia de áreas protegidas con diferentes modalidades que son relativamente pequeñas y aisladas, y el gran resto del territorio que constituye la base para el desarrollo y la gestión sostenible no juega un rol significativo. Si bien los corredores biológicos aportan en ese sentido, desde el punto de vista ecológico no solucionan el problema de fondo que es el modelo de desarrollo no sostenible en las áreas no protegidas.

En esta perspectiva es evidente que una gestión de la biodiversidad que se enfoca unilateralmente en áreas protegidas y corredores biológicos no puede cumplir con los objetivos integrales planteados en la CDB, ya que en las áreas protegidas es sumamente difícil y cuestionable proteger la biodiversidad en contra del uso sostenible por parte de grupos sociales locales, por lo que es claro que la gestión de la biodiversidad en áreas no protegidas requiere de un enfoque no-proteccionista basado en sistemas del uso sostenible de los recursos naturales como son las distintas formas de agricultura indígena, tradicional, orgánica o agrosilvopastoril. Debido a que la rentabilidad económica de estas formas de uso sostenible de la tierra no alcanza los mismos niveles con las formas convencionales de uso de la tierra, la gestión sostenible de la biodiversidad tiene que enmarcarse en una política de desarrollo rural que es capaz de crear las condiciones-macro respectivas.

Para las políticas referidas a la gestión de la biodiversidad esto significa que el tamaño y el tipo de áreas protegidas con diferentes modalidades no deben ser definidos bajo la idea de compensar los efectos negativos en áreas no protegidas. La gestión sostenible de la biodiversidad tiene que ser parte íntegra de los sistemas de agricultura y forestales.

4.2. Multidimensionalidad de la biodiversidad y enfoque transectorial

Analizando la importancia y las principales causas de la pérdida de la biodiversidad, muestra con mucha claridad que la búsqueda de una gestión más sostenible de la biodiversidad sólo puede ser alcanzado en la medida que se logre re-ajustar las dinámicas del desarrollo socio-económico en su conjunto con los principios que regulan los procesos ecológicos. En esta perspectiva, el grado de biodiversidad es en un indicador de la relación sociedad y naturaleza. La gestión de la biodiversidad requiere de cambios profundos dentro y entre las sociedades del sistema global. Un aspecto fundamental en la búsqueda de los cambios requeridos es la multidimensionalidad de la biodiversidad, como se advierte en la siguiente figura:

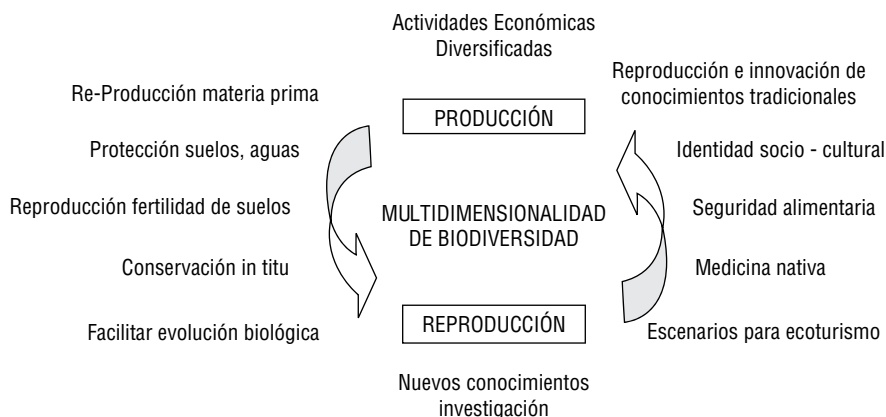


Figura 1: Multidimensionalidad de la biodiversidad

Al tomar la multidimensionalidad de la biodiversidad como punto de partida y considerando la necesidad de integrar las áreas no protegidas a la revisión de las políticas vinculadas a la gestión de la biodiversidad, hace evidente que los enfoques sectoriales tienen que ser superados. En vez de considerar la biodiversidad como un recurso que debe ser administrado por un sector específico, habría que crear mecanismos que permitan integrar los requerimientos correspondientes en las políticas económicas, ambientales y sociales considerando que los factores que reducen la biodiversidad emanan de todos estos ámbitos.

4.3. Integración de diversidad cultural y biológica

Considerando la estrecha relación entre sociedad y estado de la biodiversidad, hace que la diversidad cultural se convierte en otro elemento fundamental para la

gestión sostenible de la diversidad biológica. La ampliación de los mecanismos para la creación de sistemas de gestión de la biodiversidad de acuerdo a principios propios de culturas locales e indígenas, es otra estrategia fundamental para contrarrestar las fuerzas unificadoras provenientes de las formas de vida que se reducen a ser componentes útiles de una economía de mercado mundial. Es ahí donde se debería articular las demandas para tierra y territorio de parte de los pueblos indígenas con la gestión sostenible de la biodiversidad. Reconociendo las potencialidades que tienen las formas indígenas de vida, de producción y de conocimientos para una gestión integral de la biodiversidad, se debería impulsar la creación de arreglos entre estado y sociedad como son la creación y el apoyo a territorios indígenas, tierras comunitarias de origen, etc., considerando entre otros los requerimientos de una gestión más sostenible de la biodiversidad.

4.4. Investigación transdisciplinaria como estrategia para la gestión de la biodiversidad

La formulación de políticas transectoriales y la integración de la dimensión socio-cultural a la gestión de la biodiversidad, desafía también el rol de la ciencia y del conocimiento de sus expertos. En vez de 'cientificar' las políticas en nombre de una expertocracia que funciona lejos del control social de parte de los afectados e interesados en la biodiversidad, los agentes científicos deberían crear metodologías participativas que sean capaces de integrar las diferentes formas de conocimientos representados por los actores involucrados. La investigación transdisciplinaria ofrece opciones concretas para ello. Basado en una visión interdisciplinaria, a los científicos se les considera como participantes activos de un dialogo de saberes que reconoce que ellos representan a una forma de ver el mundo que es tan legítimo como otras representadas, por ejemplo, por los pueblos indígenas. La finalidad del dialogo no consiste en evaluar con el método de uno al otro, sino tratar de ver como a partir de un interés común, por ejemplo la gestión sostenible de la biodiversidad desde diferentes formas de conocimiento pueden coadyuvar a lograr los objetivos planteados (Scholz et al, 2000).

Ampliando los principios presentados por Hurni et al (2001), se puede caracterizar una estrategia transdisciplinaria para la investigación de la siguiente manera:

- El punto de partida de la investigación son problemas sociales, ecológicos o culturales que se orientan en el desarrollo sostenible. La planificación de las investigaciones, su ejecución e interpretación de los resultados, son entendidos como parte de un proceso de comunicación integral y de dialogo multi-actores. Esto facilita la participación de actores no necesariamente comprometidos con una visión científica del mundo, sino como socios iguales representando cosmovisiones distintas. La participación activa en

la construcción y ampliación de plataformas para el dialogo multi-actores es parte integrante de los procedimientos metodológicos.

- Al interior de la ciencia un enfoque transdisciplinario presupone partir de visiones interdisciplinarias que implican un entendimiento entre ciencias naturales, sociales y humanas.
- El trabajo científico se entiende como parte de un proceso de aprendizaje social. Hasta que grado prevalecerán los criterios deducidos del análisis científico no es definido sólo por los científicos, sino es resultado de procesos de negociación que tiene que basarse necesariamente en el reconocimiento de la pluralidad de sistemas de conocimientos. De esta manera, se garantiza procesos sociales que permitan la articulación de los valores que subyacen de los mundos de vida en una perspectiva que va más allá de una mera representación de intereses particulares. Así se da cabida a que las dimensiones éticas que motivan las investigaciones forman parte del proceso de deliberación desde el principio.

4.5. Los procesos de aprendizaje social como procesos colectivos en la gestión de la biodiversidad

Los desafíos mencionados anteriormente ponen de relieve con toda claridad que la gestión de la biodiversidad se convierte en una arena donde en vez de perfeccionar o hacer más eficientes las propuestas y procedimientos políticos sectoriales y preconcebidos, aquí se trata de re-inventar partiendo de una perspectiva transdisciplinaria e integral.

El vínculo entre sociedad y el estado de la biodiversidad hoy en día es tan estrecho que la última depende en forma directa de las decisiones tomadas o no, al tipo de desarrollo emprendido. Si la naturaleza a puesto a disposición de las fuerzas destructoras de la sociedad humana o sea protegida según las más diversas concepciones, su grado de sostenibilidad dependerá siempre más de la sociedad que de los factores ecológicos internos. En este sentido la gestión de la biodiversidad se convierte en un proceso de construcción social de la naturaleza que bajo dimensiones globales es un desafío novedoso para los actores de la sociedad global.

Debido a que esta situación es novedosa para las sociedades, es evidente que recurrir solamente a los modelos acostumbrados para las definiciones de políticas no es la solución adecuada, ya que los mismos son parte de la falta de sostenibilidad en la gestión de la biodiversidad. Con esto la búsqueda de una gestión más sostenible de la biodiversidad se transforma en un escenario importante en el cual la creación de nuevos modelos para la coordinación y definición de decisiones políticas está directamente ligada a los avances específicos en el campo de la gestión sostenible de la diversidad biológica. La gestión de la biodiversidad se transforma en un espacio importante para encarar procesos de aprendizaje social

entre los diferentes actores sociales tomando en cuenta la multidimensionalidad de la biodiversidad.

La gestión de la biodiversidad se convierte, de esta manera, en un encuentro de diferentes ‘mundos de vida’²⁷ que en el escenario de la política se presenta como parte de un proceso social, en cuyo centro está la realización de proyectos de vida que pueden coincidir plenamente o en parte. Con esto se apela a una dimensión profunda de las reformas políticas que ciertamente influyen en las discusiones motivadas por la política partidaria y cotidiana, pero para la mayoría de los actores no son suficientemente conscientes como para poder ser incorporadas en sus discursos. Por eso los análisis se concentran con demasiada fuerza en los epifenómenos como son los de la relación óptima entre procesos de decisión, funciones u organigramas. Lo que fácilmente se olvida es que, sobre el horizonte de los universos vitales de los miembros de la comunidad, las nuevas estructuras estatales sólo pueden adquirir legitimidad y consistencia a largo plazo si pueden vincularse de manera inteligente con los propios ‘proyectos’ de los actores locales (Rist, 2002). Por eso se tiene que entender que desde la perspectiva local, las nuevas estructuras solamente pueden ser aceptables, y por tanto sostenibles, a partir del significado que ellas adquieran como resultado de un proceso complejo que conduce a la re-orientación de la relación existente entre prácticas sociales y modelos normativos y conceptuales tanto formales como informales (Long, 1992: 36).

Si se requiere trasladar el énfasis de los epifenómenos estructurales a las dimensiones profundas del cambio social, deben pasar a ocupar el primer plano aquellas capacidades y saberes que, por una parte, subyacen a la realidad de los ‘mundos de vida’ y, por otra, se encuentran en estrecho contacto con la dinámica interna de los procesos sociales de adaptación y renovación.

Con ello no se trata solamente de una adaptación pasiva a las estructuras existentes, sino simultáneamente de una transformación, lo que se pretende aclarar con la aplicación del concepto de los procesos de aprendizaje social. Esto empalma con la creciente aceptación y expansión de procesos participativo-comunicativos, en lugar de prescriptivos, para la elaboración y aplicación de las políticas e instrumentos del desarrollo sostenible (Kaufmann-Hayoz, 2001). Una perspectiva

27 El concepto de “Lebenswelt” ha surgido del pensamiento fenomenológico (Husserl, E., *Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentalen Philosophie*, 1936) y fue introducido en el ámbito de las ciencias sociales por Alfred Schütz “*Phenomenology and Social Sciences*” (1940), “*Husserl’s importance for the Social Sciences*” (1959). Se enmarcan en una perspectiva “constructivista”. El concepto de ‘Lebenswelt’ tiene diferentes traducciones al español “mundo vivido” o “mundo vital” etc. y se refiere a la realidad accesible en la cotidianidad, como algo que se percibe como “dado” para quien conoce simplemente en la actitud natural en la vida precientífica. Husserl conceptualiza esta realidad del mundo vivido como mundo de la experiencia, del entorno subjetivo o mundo vivenciado.

de este tipo incluye la fe en el potencial de las siguientes características (Woodhill & Röling, 2000):

- La reflexión autocrítica y colectiva
- La comunicación dialógica entre muchas y diferentes categorías de actores
- Las capacidades reflexivas tanto de los individuos como de las sociedades
- La posibilidad de que los movimientos sociales logren mejorar las condiciones marco de tipo social y económico.

En otras palabras, se presupone que los grupos sociales son capaces de aprender, cómo son capaces de transformar sus patrones de interpretación, de orientación y de acción sobre la base del discurso y la legitimación de las acciones políticas con la mirada puesta en una mayor sostenibilidad.

En lo que se refiere al análisis institucional, el estudio de los procesos de aprendizaje social significa un claro cambio de posición, desde un enfoque que por encima de todo considera problemas, déficits o limitaciones, hacia un enfoque que intenta identificar, por medio de la comprensión de los procesos en curso, aquellas fuerzas que pueden considerarse como potenciales para un desarrollo más sostenible en el sentido de una prosecución de los procesos de aprendizaje social.

En este último aspecto, no es el comportamiento de los actores el que ocupa el centro del interés, sino que más bien se trata de hacer comprensibles las relaciones entre valores, motivos y patrones de interpretación que subyacen a ese comportamiento (Rist, Delgado, Wiesmann, 2003). Esto tiene consecuencias directas para la reconceptualización de la teoría y la práctica de la definición de lo que es política: si se entiende el desarrollo sostenible en la perspectiva de los procesos de aprendizaje social que afectan por igual a actores locales y externos, entonces ya no puede orientarse exclusivamente a partir de enfoques prescriptivos. Más bien la definición de políticas debe apuntar a las potencialidades del aprendizaje social, con lo que adquieren particular importancia el diálogo múltiple entre los actores, la cooperación y también la investigación activa sobre la base de procesos transdisciplinarios y deliberativos. Los procesos de aprendizaje social son procesos de aprendizaje colectivos que afectan al conjunto de la sociedad y que no pueden quedar restringidos a una élite de expertos, científicos o políticos.

En el marco de la promoción de un desarrollo sostenible en el plano local, adquiere una importancia decisiva el conocimiento de estos procesos de aprendizaje social, ya que ellos permiten una mejor visualización del grado en que se dan elementos complementarios y contradictorios entre las estructuras comunitarias y públicas. Para el tipo de prosecución de las políticas de descentralización, esto significa que estas no pueden reducirse a estrategias de optimización de las estructuras que se introdujo en un momento, sino que deberían manejarse como parte de un proceso de aprendizaje social, básicamente abierto y que no sólo consideren

la optimización de las estructuras existentes sino también la creación de nuevas opciones y estructuras.

A la hora de articular desde esta perspectiva las estructuras comunales y municipales, no se puede echar mano simplemente de los patrones de acción previamente dados, sino que se tiene que contar con una cantidad creciente de irritaciones y contradicciones, de creatividad social y de reflexión que constituyen una parte importante de la actual dinámica social, cuyo curso no se puede ni planificar ni manipular a largo plazo.

Bibliografía

- BATES D.
2000 The political Ecology of Conserving tropical Rein Forests: a cross national analysis. *Society and Natural resources* 13: 619-634.
- BEAN M.
1996 Creating Policy on species diversity, S. 689 In: Szrao, R, Johnston, D, (eds.): *Biodiversity in Managed Landscapes—Theory and Practice*. Oxford. New York.
- BOYCE S., HANEY A.
1997 *Ecosystem Management—Applications for Sustainable Forest and Wildlife Resources*. Yale University Press. New Haven and London.
- CASTRI di F., YOUNES T.
1996 *Biodiversity, Science and Development—Towards a new partnership*. International Union of Biological Sciences.
- CDE
1998 Autodidactic Learning for Sustainability (ALS) Concept paper. Bern.
1995 *Natürliche Ressourcen—Nachhaltige Nutzung. Eine Orientierungshilfe für die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen in der EZA. Berichte Umwelt und Entwicklung Nr. 14.*
- Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAM)
2001 *Estrategia Nacional Sobre Diversidad Biológica*. Lima, Perú.
- Comunidad Andina (CAN)
2003 *Geo Andino 2003. Perspectivas del Medio Ambiente*. Lima. Perú, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA.
- 2002 *Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino. Decisión 523 de la Comunidad Andina.*
- Dangbegnon, Constant
1998 *Platforms for resource management, case studies of success and failure in Benin and Burkina Faso*. Agricultural University Wageningen. The Netherlands.

- DANTER J.
2000 Organisational Changes as a Component of Ecosystem Management. Society and Natural Resources. 13: 537-547.
- DÖMPKE S., SUCCOW M.
1998 Cultural Landscapes and Nature Conservation in Northern Eurasia. Bonn.
- FRANKLIN J.
1997 Ecosystem Management: An overview. In: Boyce S., Haney A., 1997: Ecosystem Management-Applications for Sustainable Forest and Wildlife Resources. Yale University Press. New Haven and London.
- GLEDITSCH N.-P.
1996 Conflict and Environment. Kluwer Academic Publishers.
- Global environment Facility (GEF)
2000 Achieving Sustainability of Biodiversity Conservation. Report of a GEF Thematic Review. Monitoring and Evaluation Working Paper 1.
- HEATH J., BINSWANGER H.
1996 Natural Resource Degradation effects of poverty and population growth are largely policy-induced: the case of Colombia. Environment and Development Economics 1. Cambridge University Press.
- HISLAIRE P., RIST S.
2000 Notes on the case studies. Capitalisation of experiences in sustainable natural resource management and biodiversity (draft). DEZA. Bern.
- HODKIN T.
1996 Current issues in Conserving the Biodiversity of Agriculturally Important Species. S. 357ff. In: Castri di F., Younes T.: Biodiversity, Science and Development-Towards a new partnership. International Union of Biological Sciences.
- HÖGGER R.
1993 Wasserschlange und Sonnenvogel-Die andere Seite der Entwicklungshilfe. Waldgut.
- HURNI H. and U. Wiesmann
2001 Transdisziplinäre Forschung im Entwicklungskontext: Leerformel oder Notwendigkeit? Forschungspartnerschaft mit Entwicklungsländern-Eine Herausforderung für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Bern, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW); Schweizerische Kommission für Partnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE).
- KRATOCHWIL A.
1999 Biodiversity in ecosystems: principles and case studies of different complexity Tasks for vegetation science, 34. Dordrecht Kluwer Academic Publishers.

LEFORT M., CHAUVET M.

- 1996 Biodiversity and Agriculture, Grasslands and Forests. S.312ff. In: Castri di F., Younes T.: Biodiversity, Science and Development-Towards a new partnership. International Union of Biological Sciences.

MACHLIS G., FORESTER D.

- 1996 The relationship between socio-economic factors and the loss of biodiversity: first efforts and theoretical and quantitative models. S. 121ff. In: Szrao, R., Johnston, D., (eds.): Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

MARCOT B.

- 1996 On population viability analysis and management, S. 58ff. In: Szrao R., Johnston, D., (eds.): Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

MEFFE G.

- 1996 Conserving genetic diversity in natural systems, S. 40ff. In: Szrao, R., Johnston, D., (eds.): Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

Ministerio de Ambiente (MA)

- 2001 Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador. Quito. Ecuador.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación

- 2001 Estrategia Nacional de Biodiversidad de Bolivia.

MYERS N., MITTERMEIER R., MITTERMAIER C., FONSECA da G., KENT J.

- 2000 Biodiversity and conservation priorities. In: Nature, Vol. 403, P.853-858.

NATH B., HENS L., COMPTON P., DEVUYST D.

- 1998 Environmental Management in Practice-Instruments for environmental management. Vol. 1-3. Routledge. London.

NEUMANN, R.

- 1998 Imposing wilderness-Struggles over Livelihoods and Nature Preservation in Africa. University of California Press, Berkeley and Los Angeles. USA. ZB GT 34182.

OCDE/GD

- 1997 Incentive Measures to promote the Conservation and the Sustainable Use of Biodiversity.

PINGNATTI S., PINGATTI F.

- 1999 Biodiversity in Mediterranean ecosystems, S. 59ff. In: Kratochwil A., (ed.), Biodiversity in ecosystems: principles and case studies of different complexity Tasks for vegetation science, 34. Dordrecht Kluwer Academic Publishers.

PIROT J.-E., MEYNELL P.-J., ELDER D.

2000 Ecosystem Management: Lessons from around the world-A Guide for Development and Conservation Practitioners. IUCN. Geneva.

RIST S., F. DELGADO, et al.

2003 "Emergence of a Traditional Land Use System in Aymara Communities in the Perspective of Social Learning Processes." Mountain Research and Development 23(3): 263-270.

RUOSS E.

1999 Die Zukunft der Kulturlandschaft in der Schweiz. Regionalmanagement des Projektes Biosphärenreservat Entlebuch. Tagungsbericht, Symposium Sörenberg/Entlebuch, 28./29. Mai 1998/Regionalmanagement des Projekts Biosphärenreservat Entlebuch, 93 S. Ill. Berichte aus der Region Entlebuch.

SALWASSER H.

1996 Conserving biological diversity through ecosystem management. S.548ff. In: Szrao, R., Johnston, D., (eds.): Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

SAMSON F., KNOPF F.

1996 Ecosystem Management-Selected Readings. Springer. New York.

SCHOLZ W., HÄBERLI R.

2000 Transdisciplinarity: Joint Problem-Solving among Science, Technology and Society, Haffmanns Verlag. Zürich.

SCOTT P.

1998 From conflict to collaboration-People and Forests at Mount Elgon, Uganda. IUCN. Gland. Switzerland.

STOLTON S., GEIER B., MCNEELY J.

2000 The relationship between nature conservation, biodiversity and organic agriculture. IFOAM. IUCN. WWF. Germany.

STUCKI B., WEISS J.

1995 Ökologie im bäuerlichen Alltag-Wahrnehmung von Umweltproblemen und umweltrelevantes Handeln von Schweizer Bauern und Bäuerinnen. Schlussbericht des Schweizerischen Nationalfonds. Bern.

SWANSON T.

1997 Global Action for Biodiversity. Earthscan. London.

SZRAO R., JOHNSTON D.

1996 Biodiversity in Managed Landscapes-Theory and Practice. Oxford. New York.

THIES C., TSCHARNTKE T.

2000 Biologische Schädlingskontrolle durch Landschaftsmanagement. In: Ökologie und Landbau 115, 3/2000. S.47ff.

UNEP

1999 Cultural and Spiritual Values of Biodiversity-A complementary contribution to the Global Biodiversity Assessment. IT –Intermediate Technology.

Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN)

2003 Descripción del método de Ecosistemas. Ginebra. <http://www.iucn.org/places/orma/comisiones>.

VOGT K., GORDON J., WARGO J., VOGT D., and collaborators

1996 Ecosystems-Balancing Science with Management. Springer. New York.

WIESMANN U.

1998 Sustainable regional development in rural Africa; conceptual framework and case studies from Kenya. Geographica Bernesia. African Studies A14. Bern.

WOOD D., LENNE J.-M.

1999 Agrobiodiversity –Characterization, Utilization and Management. CABI PUBLICATIONS.

Conservación o desarrollo: algunos elementos para una perspectiva crítica

Marc Hufty¹

1. Introducción

Durante los años 90, se incremento rápidamente el establecimiento de “áreas protegidas” en el mundo entero, y especialmente en América latina. Dicha categoría se ha convertido en uno de los usos mas frecuentes de las tierras emergidas. Las áreas protegidas bajo un régimen de conservación, con sus múltiples denominaciones y categorías, superan en superficie las tierras cultivadas. Tienen impacto sobre la vida de millones de personas que viven dentro o cerca de estas áreas.

El título que elegí, “Conservación o desarrollo: algunos elementos para una perspectiva crítica”, significa que pretendo examinar este fenómeno poniendo en duda las categorías aceptadas, y cuestionando las instituciones (en el sentido sociológico de sistemas de normas), desde un punto de vista a la vez distante, lo que es un privilegio de la academia, y próximo, por una preocupación ética a favor del desarrollo humano.

El establecimiento de áreas protegidas se ha convertido en una de las herramientas mayores de la conservación de la naturaleza en el último fin de siglo. Pero este fenómeno ha generado múltiples interrogantes, como por ejemplo: ¿Como explicar la popularidad de las áreas protegidas como mecanismo de conservación? ¿O, como explicar la multiplicación de las áreas protegidas, si uno plantea la cuestión de las áreas protegidas establecidas por otros motivos que la conservación de un ecosistema prioritario? ¿De donde viene la idea de categorizar por ley zonas y reservarles a usos no inmediatamente productivos? ¿Quién o que instituciones

1 Director del Individual Project 8 del NCCR. Profesor del Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo (IUDE) de la Universidad de Ginebra-Suiza.

están impulsando este mecanismo para la conservación? ¿Conservar para quien y como? ¿Porqué las naciones incrementaron el establecimiento de áreas protegidas a esta altura y velocidad? ¿Quién produce el conocimiento y la pericia para determinar donde y como proteger, y los discursos relevantes? ¿Cuáles son los discursos? ¿Es eficiente como mecanismo el establecimiento de parques y áreas protegidas? ¿Quién determina las áreas que se debe proteger, con que criterios, cuales motivaciones, que apoyos, y como una decisión pasa a ser ley? ¿Finalmente, cuándo ya es ley, que pasa en la práctica, al nivel del terreno, con las poblaciones viviendo dentro o acerca de estas áreas? ¿Cómo interfiere con procesos tal como la descentralización, privatizaciones, participación, y ciudadanía? ¿Cómo puede ser que se perpetúan situaciones en las cuales áreas protegidas sean implementadas en contra de la voluntad de las poblaciones locales?

No es, por supuesto, la pretensión de responder acá a todas estas preguntas, pero cuando considero el fenómeno, son las preguntas que me surgen. Tratando de ordenar esta catarata de interrogaciones, propongo dividir esta ponencia en tres partes:

- Una génesis del concepto de áreas protegidas;
- Una discusión sobre la ciencia y su rol en las políticas publicas de conservación;
- Un examen de sus cualidades como herramienta y de su aplicación en América Latina y Bolivia.

2. Génesis del concepto de áreas protegidas

La conservación o la limitación al uso de madera por ejemplo, es una práctica muy antigua. El derecho forestal ya estaba desarrollado en la Babilonia de hace 3000 años. Akhenaton, faraón egipcio de hace 2500 años, implemento la primera reserva natural conocida. El emperador indio Asoka formulo el primer edicto para la protección de varias especies de animales salvajes². En realidad, los recursos naturales, cuando se percibían como raros fueron objeto de restricciones en cuanto al uso.

El concepto de “parque” nació en Europa³ para proteger bosques, necesarios para la construcción de barcos. Era entonces utilitarista o “antropocéntrico”. La función de la naturaleza era de servir al hombre para su desarrollo. Este es un primer modelo ideal-típico de protección de la naturaleza.

El concepto de parque en su aceptación moderna nació en los EEUU al fin del Siglo XIX con el objetivo de proteger sitios pintorescos. Se crearon parques

2 Sadeleer Nicolas de, “De la protection à la sauvegarde de la biodiversité”, *Ecologie politique*, n° 9, 1994, p. 31.

3 Potvin Catherine, *La biodiversité pour le biologiste: protéger ou conserver la nature?*, *La biodiversité. Tout conserver ou tout exploiter*^{1?}, Parizeau Marie-Hélène (dir.), Coll. Sciences, Ethiques, Sociétés, De Boeck Université, Paris, Bruxelles, 1997, p. 38.

para preservar la naturaleza de algunos lugares, reconocidos como especialmente estéticos. Se creo al mismo tiempo el mito de una naturaleza virgen, intocada por el hombre, tal como Dios la había creado⁴. Esta visión de inspiración “ecocéntrica o preservacionista” fue la que domino cuando se fundo el parque Yellowstone (Wyoming) en 1872 que luego se convirtió en el modelo de referencia para los parques y un segundo modelo ideal-típico de protección de la naturaleza.

Los indígenas que vivían dentro de la zona del Yellowstone fueron incluidos y tolerados al principio, pero rápidamente, en el nombre de la preservación del lugar, fueron expulsados, brutalmente. Este iba a ser el modelo que se difundió en el mundo entero, principalmente en el Sur, acompañando el movimiento de colonización de las potencias europeas.

La idea de proteger un lugar reconocido por su belleza, su interés como reserva de caza o de lugares de descanso para las clases dominantes, implicaba como modo de control social la expulsión de poblaciones indígenas consumidoras de tierras cultivables, de animales y de recursos en general, mientras por el otro lado el colonialista vaciaba estos países de sus recursos.

Esas dos corrientes, la conservacionista, que supone la utilización de las áreas protegidas, y la preservacionista, que supone el mantenimiento de la naturaleza fuera del uso humano, cohabitaron desde entonces. El movimiento de expansión de los movimientos de protección de la naturaleza, por ejemplo IUCN y WF-I, siguieron mayormente el modelo ecocéntrico o preservacionista⁵. Queda claro que es un modelo idealista. Sus postulados científicos fueron criticados.

Desde el punto de vista de la ecología, los ecosistemas no son estáticos, pasan por fases transitorias y el clímax, el estado estable y óptimo, imaginado por los preservacionistas, nunca se logra. La trayectoria evolutiva de un ecosistema esta relacionada con las perturbaciones que le dan forma. Además depende de las interacciones con otros ecosistemas, entonces, aislar un ecosistema para conservarlo, tratando de mantenerle en un estado climácico, no puede sino tener como

4 Dumoulin David, op. cit., p. 4.

5 Le préservationnisme suppose le maintien dans un état supposé de “nature” d’un objet, en-dehors de toute interférence humaine. Quant à la conservation, nous nous référons à l’IUCN qui la définit comme “la gestion de l’utilisation par l’homme de la biosphère de manière que les générations actuelles tirent le maximum d’avantages des ressources vivantes tout en assurant leur pérennité pour satisfaire aux besoins des générations futures”. Cf. IUCN, Stratégie mondiale de la conservation, 1980, Section 1. Toujours selon l’IUCN, “It is important to note that “conservation” does not mean non use, but rather wise use, which contributes to sustainable development. Conservation should therefore be seen as a form of economic development”, McNeely Jeff et al., “Economic Evaluation in Conservation”, Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in Conservation (Volume 2), BORRINI-FEYERABEND Grazia (dir.), IUCN, Gland (Switzerland), 1997, p. 96.

consecuencia una pérdida de biodiversidad⁶. Y los alcances concretos fueron cuestionados. Las presiones antrópicas nunca cesaron cuando se creó un parque. El Yellowstone se convirtió en uno de los lugares de recreación preferidos de los turistas norteamericanos.

Este modelo fue poco a poco rechazado. Las áreas protegidas iban a incluir varios tipos de usos económicos, una posición más realista. Hay que admitir, en el Sur que casi ninguna área protegida está fuera de una interacción con poblaciones locales, quienes usan sus recursos. Hay que pensar que la protección necesita incluir la dinámica hombre-naturaleza. Pero paradójicamente, el modelo preservacionista sigue vigente como un ideal de los profesionales de la conservación y los biólogos, una observación comprobada personalmente.

Queda claro que esta actitud, motivada por una visión preservacionista idealista, fue posible en los países colonizados como elemento del control social.⁷ Pensar ahora en expulsar campesinos o indígenas de un área protegida, o imponer nuevos parques sin tener en cuenta la gente tiene resabio a colonialismo, que sea entre países o internamente, es la negación de la ciudadanía, del derecho a manejar su destino, para estas poblaciones. El balance entre lo que se califica de patrimonio colectivo, o el salvataje de especies o ecosistemas claves y las necesidades humanas, no es una cosa simple.

¿Porque se incrementó rápidamente el establecimiento de “áreas protegidas” en el mundo entero, y en América latina en particular? Se debe a una multiplicidad de causas. El modelo de los parques con el objetivo de salvar a especies o ecosistemas específicos funciona en Europa y América del Norte (dominación cultural). La mayoría de las publicaciones producidas reproducen este éxito. Históricamente, las autoridades de los estados en desarrollo tomaron el modelo y lo aplicaron. Hoy día se valoriza a través de un mecanismo complejo que tiene que ver por lo menos con dos elementos: la ciencia y los mecanismos de financiamiento (la economía).

3. Ciencia y política

Los lazos entre lo local, nacional e internacional se reforzaron de manera significativa desde la Cumbre de Río de 1992. Las políticas de manejo de las áreas Protegidas, sea por la elección de las prioridades, metodología o la implementación

6 POTVIN Catherine, “La biodiversité pour le biologiste: protéger ou conserver la nature?”, *Tout conserver ou tout exploiter?*, PARIZEAU Marie-Hélène (dir.), Sciences, Ethiques, Sociétés, De Boeck Université, Paris, Bruxelles, 1997, p. 38.

7 Grove Richard, *Ibid.*; Rodary Estienne, “Participation locale et conservation de la faune”, *Ecologie politique*, n° 20, Printemps 1997, p. 33.

día tras día, son construidas en común. Se crean coaliciones, alianzas y redes entre estos niveles. Entonces esa es la manera en la cual se definen las políticas en los niveles internacional y nacional en relación con lo local, la realidad del terreno, tienen que ser conceptualizados conjuntamente.

La manera de como la ciencia influye es un primer elemento a considerar y que quedo poco cuestionado. Hay una ciencia “dominante”, es decir un consenso que se desarrolla permanentemente a nivel internacional y que influye en todos los países, particularmente en los países dependientes de la ayuda externa para la implementación de sus programas de conservación. La visión del mundo y el discurso elaborado por la ciencia es determinante.

Hay una “verdad” y las situaciones que no se ajustan a esta verdad, son consideradas como aberraciones que se tienen y que se pueden corregir tras un mejoramiento del conocimiento y de los procesos de implementación. Los campesinos o indígenas que no respeten los límites de un parque, debe ser porque todavía no lograron encontrar el incentivo perfecto. Aún fuera de un populismo anticientífico, quizás habría que poner en duda los objetivos mismos. Como son impulsados por un razonamiento lógico, moderno y a una pretensión universal, además de ser apoyados por los millones de dólares del régimen internacional de la ayuda externa, es una tarea difícil.

¿Pero, como se construye este conocimiento? La ciencia es construida por ideas y grupos de investigadores en competencia. Cuando se impone una idea, quedan muchas dudas y cuestionamientos. Esta competencia abierta (por las publicaciones) garantiza la posible evolución del conocimiento científico. Hay pocas certezas, sobre todo en relación con el mundo de la ecología, de los ecosistemas y de las interacciones con el ser humano. Cuando se trata de modelos predictivos (por ejemplo como se comporta un sistema ecológico bajo tales condiciones) aplicados al mundo real, fuera del laboratorio, las variables imprevistas se añaden a un sistema ya complejo de variables aisladas teóricamente. La incertidumbre crece significativamente.

Pero el conocimiento científico para ser implementado bajo la forma de proyectos concretos, entra en un proceso de diálogo con el político y el tecnocrático. Y paradójicamente, mientras más se acerca al terreno, más se convierte en certidumbre, porque para la acción no se debe dudar. Hay muchos intereses en juego. Las incertidumbres del científico se convierten en certidumbres del técnico⁸.

En realidad, lo que parece racional no lo es tanto. Muchos factores juegan cuando se trata de decidir donde vamos a crear un área protegida o que especie proteger. No queda claro cuando el “científico” o el “técnico” va a tener el criterio decisivo sobre otros factores, políticos por ejemplo. Es siempre una mezcla de motivos en la cual el político se apoya sobre el técnico y el técnico sobre el político.

8 Keeley & Scoones. Understanding environmental policy process.

¿Quien decide, en que tipo de dinámica, que relación de poder? Reconocer esto es entrar en la realidad y en el mundo de las ciencias sociales.

Además, no se entiende el mundo de la conservación sin entender el mundo del desarrollo. No hablo de situaciones concretas de terreno, sino del mundo de los organismos nacionales e internacionales que pretender aportar el desarrollo a los países de Sur. Aparte del hecho de que veo el desarrollo como una creencia occidental (Rist) y que cada pueblo tendría que poder definir el mismo su modo de inserción en la economía globalizada, existe una realidad. El nivel internacional (entendiendo a organizaciones internacionales, ONG y cooperaciones bilaterales) llega con una idea bien puesta y muchos recursos para implementarla. Influyen sobre las políticas públicas nacionales y locales tras la condicionalidad en general, limitando las elecciones posibles, y tras mecanismos de intervención diaria al nivel del terreno. Y como la ayuda para la conservación pasa por estos mecanismos, tiene la misma lógica. La posibilidad de elegir un camino diferente es muy limitada.

4. Las áreas protegidas como mecanismo en América Latina

El nombre de áreas protegidas se incremento muy rápidamente en América Latina y en Bolivia. Hay alrededor de 350 áreas protegidas en la cuenca amazónica, que cubren el 5% de la región.

Aunque los primeros programas de conservación son antiguos, pienso por ejemplo en la protección de la vicuña, este incremento se produjo sobre todo en los años noventa y no es casualidad, las áreas protegidas se han convertido en el instrumento preferido de los conservacionistas y técnicos.

Pero aquí también quedan pendientes muchas preguntas. ¿Es eficiente esta visión de la conservación? ¿tienen la capacidad de garantizar la capacidad de regeneración potencial de los ecosistemas?

Hay obstáculos a la eficiencia de esta visión, como por ejemplo:

- La falta de conocimiento sobre las relaciones entre los ecosistemas, sobre las interacciones entre el sistema de áreas protegidas implementado. Muchas áreas protegidas son de dimensión demasiado reducida para ser muy eficaz y se concentran a menudo sobre unas especies claves, lo que suele introducir incoherencias.
- La falta de coherencia entre los diversos mecanismos de protección. Pienso en las 19 categorías de protección vigentes de áreas protegidas o las acciones no coordinadas de los varios organismos que intervienen
- La falta de conocimiento sobre la realidad del nivel de protección logrado frente a las capacidades institucionales limitadas de los estados o de las

comunidades de asumir una responsabilidad técnica y financiera creciente con recursos limitados

- Y cuando la ley se aplica, corre el riesgo de antagonizar a las poblaciones locales, sobre todo cuando un área protegida se realiza sin consultas previas. Las realidades sociales son complejas y diversas, un solo modelo no puede abarcar el conjunto de estas situaciones.

Es cierto que no se puede dejar abierto un crecimiento anárquico, pues conduciría a la desaparición de los bosques y ecosistemas, hay que proteger, pero que, como y con quien, es objeto de muchas interpretaciones.

Estas son algunas ideas que quería compartir con Uds. Dejo abierto aun más preguntas que al principio, pero me parece fundamental una mirada crítica hacia el binomio conservación-desarrollo.

Panel de debate y discusión

Parte I

Moderador:

Dr. Freddy Delgado, Director AGRUCO-UMSS, Cochabamba-Bolivia

Silvia Rodríguez

Universidad Nacional de Costa Rica

Quería preguntarle a Carmen, creo que asistió al Congreso de Durban. En ese congreso no se plantearon cuestionamientos, o algo así? Porque recuerdo que desde el Congreso de Bali en 1982 ya se hacía referencia a los parques solo en papeles, también ya se hablaba del rechazo y los conflictos con las poblaciones locales. Por ejemplo en África, los Godos asesinaban incluso a los encargados de administrar y proteger los parques. En Costa Rica también hubo innumerables reacciones de la gente, las cuales están bien documentadas. Entonces la pregunta es si después de tantos congresos (cada 10 años), se ha planteado algún cuestionamiento más allá de las propuestas tan bien hechas que salen de estos congresos.

Carmen Miranda

Representante de la UICN, Bolivia

Creo que si ha habido, porque hay un proceso muy interesante de búsqueda de soluciones de acuerdo a como se va dando la realidad y de acuerdo a como van surgiendo los conflictos. En Durban si hubo pronunciamientos respecto a que en muchos países continua habiendo áreas protegidas (AP) solo en papeles, es decir que solo ostentan la denominación o la categoría de área protegida puesto que en la realidad no pasa nada.

En el caso de Bolivia, por ejemplo, nuestra primera AP creada fue el Parque Nacional Sajama en 1939, pero por más de cuarenta años ni el Estado boliviano

se ocupó de esta AP. En Bolivia hasta 1992 más de 40 AP pasaban por la misma situación, es decir solo existían en papeles. A la fecha esta situación a cambiado, al menos en parte, porque se tiene en funcionamiento un Sistema Nacional de Áreas Protegidas con 21 AP que han implementado su gestión en los 10 últimos años. Evidentemente, como mencionaba Stephan, estos han recibido un importante apoyo financiero y técnico de la cooperación internacional; todos sabemos que Bolivia cuenta con muy pocos recursos para desarrollar y financiar el funcionamiento de todas las áreas protegidas.

Es importante entender la situación de las AP desde el punto de vista ecológico, biológico y principalmente de lo que ha sido la evolución de las especies. Como se sabe, hubo diferentes periodos de evolución y extinción de las especies; en estos momentos estamos pasando por la sexta extinción planetaria pero la diferencia de esta con las anteriores, es que es más rápida y que está poniendo en serio riesgo la supervivencia misma de la humanidad. Entonces creo que debemos preguntarnos que hacer? cambiamos nuestra visión y actitud como seres humanos con respecto a la naturaleza, o caso contrario desaparecerá todo.

El desarrollo de las áreas protegidas en el caso boliviano es muy particular. Cuando se empezó a trabajar y se participaba en reuniones internacionales, hacíamos conocer que en Bolivia se estaba avanzando en lo que es la gestión de áreas protegidas con gente, muchos colegas colombianos, costarricenses, ecuatorianos, peruanos y chilenos reaccionaban con la siguiente frase: ustedes están locos... Para estos colegas era imposible pensar en que existieran áreas protegidas con gente, puesto que la historia de las AP en la América Latina se ha caracterizado por seguir las pautas de la tónica internacional y los principios de restricción total para la gente. En Bolivia eso es muy difícil porque todos sus ecosistemas han estado ocupados y tienen una historia de ocupación desde mucho antes de la llegada de los españoles en 1532, por lo que en Bolivia no hay territorios donde no existe o no haya existido población. Las AP con gente requieren prácticamente de otra visión muy diferente.

Quiero aprovechar también para comentar algo sobre lo que mencionó Stephan respecto a que se requiere otro método diferente a las AP para conservar la biodiversidad. Estoy de acuerdo que el futuro podría ser ya no de áreas protegidas, pero ¿cuál sería el proceso para desarrollarnos y conservar a la vez nuestros recursos naturales y biodiversidad? ese equilibrio parece muy difícil. Creo que en algunos casos se requiere limitar el uso de la biodiversidad para poder asegurar su conservación, como revelan los estudios que realizamos en el caso de la Estación Biológica del Beni. Aquí los indígenas Chimanes cazan y viven de la naturaleza en un 100%, entonces que pasa? Una relación equilibrada entre la naturaleza y las sociedades humanas se va a dar solo en tanto no se sobrepase la capacidad de carga y el uso de la biodiversidad. Actualmente nuestra sociedad es extremadamente consumista y por eso hay la necesidad de tener áreas protegidas. Bolivia

hace años atrás tenía más del sesenta por ciento de su territorio con superficie de bosque, pero ahora cual es la realidad? Los ocho millones de personas que actualmente vivimos en Bolivia tenemos una gran capacidad de destrucción, o sea hay procesos intensos de transformación de la naturaleza, y comparando los ecosistemas intervenidos por el hombre con los ecosistemas naturales definitivamente estos últimos son mucho más biodiversos. En resumen, es muy fácil decir ya no queremos más áreas protegidas, pero en este momento estamos viviendo un proceso muy severo de cambio de los ecosistemas y de destrucción de los recursos naturales y la biodiversidad. Si hubiera una comprensión y una profunda conciencia de las sociedades humanas para no transgredir las posibilidades de soportabilidad ecológica de la misma naturaleza, entonces podríamos decir no a las áreas protegidas, pero creo que no estamos en esa posibilidad.

Miguel Angel Crespo

PROBIOMA, Santa Cruz-Bolivia

Quiero hacerle una pregunta a Carmen, pero antes quisiera hacer la siguiente reflexión. Las iniciativas y propuestas que se han hecho en Durban las encuentro muy contradictorias. Hace unos días leí una revista muy interesante de biodiversidad donde se comentaba mucho sobre las iniciativas para la integración regional, también comentaban sobre una serie de políticas y estrategias que están usando el Banco Mundial, el BID y la CAF. A nivel latinoamericano todas estas políticas y estrategias significan obviamente la integración energética, gasoductos, oleoductos, corredores de exportación, hidro-vías, etc. Pero paralelamente a esto tenemos las iniciativas que conllevan fundamentalmente a consolidar los corredores biológicos, lo cual está impulsado por ONGs, las organizaciones internacionales conservacionistas y otras. Ahí tenemos una contradicción. En Centro América se tiene por ejemplo el corredor biológico de mesoamérica, pero contradictoriamente se tiene también el Plan Puebla Panamá.

En Bolivia se tiene también el tema de la integración energética, el corredor Vilcabamba Amboro, el gasoducto Camisea, la declaración de sitios Rama en el pantanal, la hidro vía Paraná Paraguay y otros emprendimientos internacionales, pero para estas acciones y políticas internacionales, que afectan muchos más los ecosistemas y la biodiversidad, no se hacen cuestionamientos de parte de las organizaciones conservacionistas. Esto me lleva a la conclusión de lo que se vive en Bolivia: el hecho de impulsar áreas protegidas sin ningún objetivo, al margen de las poblaciones locales y manejando el término participación parece que no tiene sentido, cuando el problema no es participación, sino “derecho soberano” de las poblaciones locales, municipios y Estado. Bajo el tema de la participación parece que se quiere hacer que muchos participen pero no decidan, y los que deciden

en definitiva son los grandes conglomerados de organizaciones no gubernamentales internacionales, las que mas tarde entran en negociaciones con este tipo de políticas internacionales para su mismo provecho y beneficio. En Bolivia tenemos un famoso caso de este tipo de negociaciones, como es el caso del bosque seco chiquitano, donde 5 ONGs conservacionistas han negociado por veinte millones de dólares con la ENRON y SHELL la destrucción de un bosque que tenía categoría “A”, declarado prístino por el Ministerio de Desarrollo Sostenible, pero han pasado por encima de eso para negociar con estas transnacionales. Entonces en qué estamos? Las propuestas de Durban son realistas o no; son nuevamente un saludo a la bandera o una distracción?

Lo que pasa en los hechos, es que no se respetan las soberanías, no se respetan los derechos y normas de cada uno de los Países y no se está siendo consecuente con los principios de la conservación. Personalmente estoy de acuerdo con el establecimiento de áreas protegidas, pero deben ser hechos en base a criterios y necesidades. Hay otro elemento que planteaste mucho: “manejo”. Este término o concepto en el fondo esta dirigido simplemente a mostrar el eficientismo científico, sin embargo la calidad de manejo no está en función a ello, sino que está en función del derecho y el manejo consuetudinario tradicional que tienen las poblaciones locales, obviamente en equilibrio y en coordinación con lo que pueden hacer la ciencia, y no es al revés. Eso muestra un nuevo sesgo en el planteamiento de Durban. Entonces cual es el fondo de lo que realmente se está planteando? Apoderarse de los recursos genéticos para un mejor negocio o negociado con empresas transnacionales ligadas a la explotación de los recursos naturales? Esa es la pregunta que hago.

Carmen Miranda

Representante de la UICN, Bolivia

Es difícil responder tu pregunta, pero tratare de abordar por dos partes. Primero aclarar que no se tiene una uniformidad de criterios y acciones entre las organizaciones conservacionistas nacionales e internacionales. La UICN por ejemplo no es una ONG, sino es una entidad que aglutina a instituciones de diferentes partes del mundo y tiene diferentes instancias, tiene por ejemplo como miembros no solo a ONGs sino también a gobiernos. Hay también redes de expertos que trabajan en áreas protegidas, la conservación de especies, el derecho ambiental etc. Entonces la UICN es un ente muy complejo, que tiene también una problemática interna muy compleja y hay diferentes posiciones, no hay una uniformidad, aunque si hay una uniformidad en cuanto a la visión. Respecto a otras ONGs internacionales que funcionan bajo un enfoque empresarial tengo mis propias ideas.

Lo que ha sucedido en el congreso de Durban es lo que siempre sucede en estos espacios donde asiste gente de diferentes nacionalidades con diferentes visiones y percepciones. La comisión de parques que está conformada por un grupo de especialistas y que generalmente son los que organizan estos eventos, casi siempre ha tenido una visión muy conservadora. Evidentemente esto molesta a mucha gente y cuestiona. Después del congreso de Durban hubo mucha discusión y cuestionamientos principalmente referido a que se está perdiendo la esencia y el propósito de las áreas protegidas, o sea hay diferentes visiones y tendencias; hay un sector joven sobre todo provenientes de los países en desarrollo que pone sus experiencias nuevas sobre la mesa como por ejemplo el de gestionar AP con gente, frente a otro sector tradicional y con una visión altamente conservacionista. Ello posiblemente se deba a que la gestión de AP en Latinoamérica por ejemplo no es lo mismo que en Europa o en EE UU, incluso Chile tiene una visión muy diferente. En Chile muchas de sus áreas protegidas se han establecido durante el gobierno de facto de Pinochet, teniendo en consecuencia un sistema de AP terriblemente rígido. Entonces creo que hay mucha pugna y los resultados de Durban son indicativos de la problemática en la que se encuentran las AP en todo el mundo.

En cuanto a quienes marcan las pautas del desarrollo, se debe tomar en cuenta que instituciones como el BID son los que financian los grandes proyectos como es el caso de Camisea. En este caso el BID ha financiado la evaluación de impacto ambiental del proyecto, pero hay otras entidades que tienen otros intereses como por ejemplo la prospección petrolífera antes que una evaluación de impacto ambiental; dentro las mismas instituciones hay gente bien intencionada y otra posiblemente no. Sin embargo, todo esto es muy complicado analizar. Incluso saber por donde van las prioridades de conservación en nuestro país, hace un momento lo comentábamos, existe instituciones que disponen de muchos recursos y tienen una alta capacidad institucional de tener presencia, por lo que casi siempre estas instituciones son las que definen por ejemplo las prioridades de conservación.

¿Por qué se ha priorizado el corredor Villcabamba-Amboró? Porque es un Jots Pot, es decir tienen un alto potencial y una alta importancia para la conservación de la biodiversidad, y hacer un corredor biológico bajo estas condiciones tiene un montón de justificaciones. Pero quien empezó con eso y cual ha sido la reacción como bolivianos y del gobierno? Entonces creo que es muy difícil echar solamente la culpa a las iniciativas de las ONGs Internacionales, además muchas de ellas posiblemente trabajan de una manera honesta para aportar a la conservación de la biodiversidad y otras talvez están respondiendo a las políticas de intromisión de las potencias y las transnacionales en países en desarrollo, como es el caso de Bolivia.

En relación al tema de la participación local, vuelvo a poner el caso del corredor Villcabamba-Amboró. Hay que reconocer que en este caso ni siquiera

la definición de los límites ha sido discutida en un ámbito más amplio y con las argumentaciones nacionales respectivas. Este tipo de cosas no son adecuadas y desde el punto de vista de la participación es una enorme deficiencia; es importante y necesario abrir una amplia participación, por lo menos me considero una defensora de ello y estoy absolutamente convencida de que si no hay una participación y un involucramiento responsable de la sociedad civil en la gestión de la biodiversidad, lamentablemente nuestros recursos y nuestra biodiversidad se va a deteriorar mas de lo que ya están.

Gonzalo Zambrana

Director de Medio Ambiente del Municipio de Cochabamba

Si nos ponemos a pensar en lo que dijo Carmen, en una serie de recursos de la biodiversidad o de especies que están en peligro de extinción, como el caso de la paraba de frente roja por señalar un ejemplo, y nos preguntamos que hacer frente a este fenómeno? seguramente muchos recomendarán la creación de áreas protegidas y otros no. Personalmente creo que debe haber áreas protegidas; asimismo, tal como dijo Carmen, creo que el concepto de área protegida es inherente al ser humano y a la concepción de desarrollo sostenible que tienen las comunidades, ya que las comunidades han convivido con la naturaleza durante mucho tiempo, ahí están los criaderos de ganado, ahí se práctica la rotación de cultivos, ahí se tiene los corrales itinerantes. Entonces hay una serie de perspectivas o de experiencias que son parte de la esencia misma de las comunidades indígenas campesinas, por lo tanto el concepto de área protegida no es extraño a las comunidades campesinas indígenas ni a nosotros mismos, y difiere de lo que viene de afuera.

Ahora, cuando vemos la forma como en la década del setenta se formularon las categorías de áreas protegidas a partir de la UICN y un equipo grande en el mundo, como esto se modificó luego. El año 92 aparece una categoría que introduce el concepto de manejo a las área protegidas, es decir se introduce el aprovechamiento de los recursos naturales a las áreas protegidas; los últimos resultados de Durban sin duda muestran avances en este sentido, pero de donde derivan esos avances? Derivan del planteamiento de nuestras propias necesidades y de nuestra propia realidad, de la realidad de cada uno de nuestros países, ahí es donde se modifican esas concepciones únicamente conservacionistas. Por otro lado, porque desde el año 92 se empieza a hablar de desarrollo sostenible, por qué empieza a haber gestión en las áreas protegidas? Eso deciden y viene de afuera, y eso viene con plata; por qué hoy día hablamos de gobernancia, de gobernabilidad, de desarrollo humano, de alivio a la pobreza, todo eso viene de afuera. Ahora, si nos ponemos a pensar y a discutir demasiado sobre si lo que viene de afuera es malo o no, o la forma como se están planteando es bueno o malo, no vamos a llegar a ningún lado y no

vamos a alcanzar seguramente ningún resultado. ¿No será mejor partir de nuestras propias experiencias como el caso del parque amboró? Aquí se movilizaron todas las comunidades para impedir la perforación de un pozo petrolífero, entonces en esta experiencia aparece una concepción diferente de áreas protegidas, resulta que los campesinos impiden a una transnacional a que haga perforaciones. Tal vez lo que tendríamos que hacer es apropiarnos del concepto de áreas protegidas, pero discutirlo desde nuestra racionalidad, desde la racionalidad de las comunidades locales. Así los conceptos que vienen de afuera se adecuan a nuestra realidad; modificar y adecuar la concepción de las áreas protegidas hasta convertir estas en espacios simultáneos de desarrollo y conservación.

Comunario de Sewencas **Trópico de Cochabamba**

Bueno, soy nativo de la Comunidad de Sewenca (Trópico de Cochabamba) desde mis abuelos. Entonces yo conozco la naturaleza, como ha sido Sewencas y más hacia el norte como es Yuracare. Por ello cuestiono lo que han indicado los expositores ¿De qué manejo hablan? ¿Quién está manejando a quien? ¿A cargo de quién está la administración de los parques? Hay un director no cierto? entonces puedo decir que la administración es la que maneja el parque.

Por otro lado, la señora Carmen mencionó que los parques dan beneficios. El parque nacional Carrasco se ha creado en 1991, de ahí para aquí en vez de traer beneficios, a mi me ha traído perjuicios, tuve que defender mi terreno hasta con hombres, eso es beneficio? Que me digan que está prohibido trabajar la tierra en el parque, y mi derecho adquirido antes de la creación del parque donde está? Aquí hay un problema muy grande, en realidad se está confrontando a la gente del área rural con la gente de la ciudad. ¿A caso en el área rural no hay propiedad privada como en las áreas urbanas? Es lo que les dije a algunos turistas.

Ahora en el caso de los animales silvestres, es la naturaleza misma que se encarga de ellos. Pueden preguntar en Sewencas, por el año 1955 había muchas aves, incluso nadie cazaba, pero ha ido desapareciendo; asimismo habían truchas que pesaban hasta dos kilos, ahora las truchas no pesan más de 150 gramos. Esto se debe a razones: la mano del hombre y la misma naturaleza. Bueno es verdad que todo está desapareciendo más rápido, de aquí a 50 años que será, y no vayan a echar la culpa a los campesinos e indígenas. En cuanto a los recursos forestales son renovables, lo que hace falta es concientizar en vez de criticar, quién viene a Sewencas a depredar nuestras truchas? gente de la ciudad que son profesionales abogados, médicos que creen tener mas derecho que nosotros, a mi estos han amenazado con demandarme, yo encantado me he presentado y de ahí les dije en forma de broma: que a su dueño de casa lo están demandando. No se que

autoridad me haya citado, pero no es justo demandar a los dueños legítimos no creen? Entonces es falta de conciencia y respeto a nuestros derechos adquiridos desde nuestros abuelos. Con eso termino.

Gonzalo Merida

Exconsultor para la Estrategia Nacional de Biodiversidad

Una de las cosas más interesantes de estos seminarios es la apertura al análisis conceptual. Creo que Marc y Stephan han enfocado el tema bien de fondo conceptualmente hablando. Bolivia quizá esta en el momento más importante, me hubiera gustado que este aquí el director del SERNAP, porque realmente hay una fuerte necesidad de conceptualizar un cambio marcado en lo que significa la descentralización, en lo que significa una concepción diferente de hacer gestión sostenible de la biodiversidad y del patrimonio natural. No hay duda que estamos en una coyuntura muy interesante principalmente para el Sistema de Áreas Protegidas, pero también como decía Stephan fuera de ese 86% de nuestro país, hay la necesidad de conceptualizar la conservación de áreas protegidas y de generar beneficios con distribuciones más equitativas. Creo que quedó un vacío, como que faltando nudos sobre aquello que Stephan decía, esas preguntas de fondo conceptual, pero quizás tanto Marc y Stephan puedan comentar algo más sobre el cómo enriquecer un proceso que viene desde este seminario o las conclusiones que pueda generar este seminario, en las posibilidades de empezar a abordar ese cómo en la percepción de ustedes y en la revisión y presentaciones que nos han hecho.

Stephan Rist

CDMA, Universidad de Berna-Suiza

Creo que tocaste un punto neurálgico y estoy consciente que en la presentación no lo respondí, pero si planteamos la pregunta con una finalidad y un propósito muy claro. Creo que no tengo la capacidad para dar la solución a esto, aunque podría imaginarme alguna cosa, pero sería muy pretencioso pensar que yo resolveré ese problema, debido a ello lo que hacemos es introducir únicamente conceptos nuevos. Lo que se tiene que definir, en primer lugar, es la metodología, es decir definir quienes y cómo debería elaborarse las soluciones. Eso es lo que tendríamos que aprender, porque estamos mal acostumbrados a que solo los científicos, políticos o expertos resuelvan los problemas que enfrentamos en la vida cotidiana. Ese es el camino que nos ha de llevar a dar soluciones efectivas a los problemas. En este sentido se deben abrir espacios de discusión como este seminario por ejemplo, que me parece muy importante porque aquí podemos plantear muchos aspectos, así

poco a poco se puede ir construyendo y uniendo elementos en una perspectiva de encontrar soluciones adecuadas.

Mi respuesta posiblemente no satisface suficientemente a sus inquietudes, por ello quiero plantear un aspecto más. Los que trabajamos como expertos no cultivamos la virtud de escuchar a aquellos que no son de nuestra misma formación profesional; escuchando a don Zacarías esta mañana por ejemplo, me acordé de una entrevista que realizamos en un trabajo de investigación con AGRUCO, donde sale muy claramente que los campesinos están dispuestos de negociar y también a aceptar ciertas restricciones en cuanto al manejo de la biodiversidad pero siempre y cuando la otra parte (como prefecturas, ONGs) estén dispuestos a respetar y cumplir los compromisos. Muchos campesinos dicen para que vayamos a negociar, porque luego no nos respetan, nos hacen participar y después todo queda en nada. Otro aspecto a lo que estamos acostumbrados es la imposición que viene de afuera; entonces creo que todo esto nos puede indicar por donde deberíamos andar. Aprender a escuchar creo que es lo fundamental.

Marc Hufty

IUED, Universidad de Ginebra-Suiza

En ese sentido insistimos con Freddy para tener un estudio de caso concreto en el Parque Tunari, del cual vamos a hablar mañana. Aquí se busca un encuentro entre dos mundos diferentes, entre dos concepciones diferentes: académicos y campesinos. Otro factor que me parece muy importante y que leí en el último número de la revista "The Economist" (revista inglesa), es el "empoderamiento" de los pueblos indígenas en América latina. Por qué cambiaron las ideas de los parques? porque simplemente hubo una confrontación con los pueblos indígenas. Por ello actualmente ya no se puede imponer la creación de un parque muy fácilmente, se generan muchos problemas a todo nivel. Entonces las cosas han cambiado, asimismo hay un interés global para salvar lo que más se pueda de la naturaleza, pero también se mantienen algunos intereses humanos. Como conciliar y encontrar soluciones me parece que pasa por escuchar y empoderar a la gente que hasta hace 20 años atrás no tenía voz ni reclamaba sus derechos.

Emilio Espinoza

Dirigente de la Central Campesina Provincial de Quillacollo

En primer lugar quiero saludar a todos los compañeros presentes como a los expositores. Mi nombre es Emilio Espinoza, ex dirigente de la central provincial de Quillacollo y soy de la comunidad Chapisirca. Quiero decir que los de afuera

no conocen como vivimos en nuestras comunidades, no viven en nuestro territorio nacional, no los conocemos, además sabemos con que idea sacan las leyes y escriben artículos, y por eso creo que hay mucha desconfianza del movimiento campesino; mi provincia por ejemplo esta afectada en 80% por el Parque Nacional Tunari. Por otro lado hay que hablar de las empresas transnacionales, eso quería preguntarle a la señora Carmen, ella mencionaba claramente que en las áreas protegidas la gente que vive ahí destruye los bosques, yo pregunto acaso las empresas mineras y petroleras no destruyen los bosques? Hay otras empresas que explotan agua para generar energía, estas no destrozan el medio ambiente? La Empresa Misicuni, por ejemplo, ha provocado muchos destrozos, incluso ha quitado tierras a los compañeros. En el Parque Altamachi hay 12 concesiones mineras. Creo compañeros que nosotros tenemos derecho para plantear y nosotros conocemos que esta pasando en los parques; así también nosotros trabajamos para poder traer alimentos a Cochabamba y todo el país, somos agricultores sembramos papa, oca, papalisa y muchos otros alimentos, sabemos transformar los productos agrícolas como el chuño.

Esa es la situación. Me extraña, así mismo, que el ex ministro Claudio Mancilla anuncie en Berlín en marzo del 2001 y que salió en el periódico "Los Tiempos", que Bolivia dará uno de sus Parques del Salar de Uyuni en concesión y no en privatización. Por qué se hace esto compañeros? Porque la ley de áreas protegidas no se ha realizado con la participación de los compañeros campesinos, no ha habido una participación de la ciudadanía que conoce su territorio. Hay que decir que el expresidente Goni Sánchez de Lozada que ha trabajado a favor de las transnacionales, ha firmado el decreto ley de áreas protegidas dos días antes de concluir su gestión. Parece que ningún ministro, ningún parlamentario, mucho menos los consejeros de las provincias conocen sus territorios, ellos deberían ser partícipes en la elaboración de las leyes de áreas protegidas, si se quería hacer una ley que favorezca a los compañeros campesinos. El diputado Roberto Fernández de la Provincia Quillacollo ha propuesto una nueva ley del Parque Nacional Tunari, pero este diputado no conoce ni a los campesinos. Nosotros si bien no conocemos mucho de la teoría, pero de la parte práctica sabemos mucho, y con eso podemos aportar para hacer buenas leyes. En el caso de la Ley del Parque nacional Tunari hace 12 años no puede funcionar, esto se debe a que el mismo gobierno no cumple la ley; por eso compañeros es hora de plantear soluciones desde nuestras bases.

Otra cosa que pasa con los que asisten a los congresos mundiales hablan a nombre de toda la ciudadanía, como si todos estarían de acuerdo con lo que el gobierno hace. Quienes van a estos congresos? Que planteamientos hacen? Yo tuve oportunidad de participar en un congreso mundial en Francia en Tanderil, ahí me extraño mucho que los parlamentarios y ministros van a hablar como todo estaría solucionado con la ciudadanía y el movimiento campesino de nuestro país. Eso ya no puede seguir, llegó el momento de cambiar, los parlamentarios mienten incluso

en otros países. Pero yo sé que cuando participamos nosotros los amigos de otros países se dan cuenta que nuestros parlamentarios mienten, por ello debemos ser partícipes cuando se está elaborando una ley.

No hay que olvidarse que en nuestras comunidades tenemos muchos usos y costumbres, y también sabemos como se manejan las servidumbres. Los profesionales tal vez nos pueden ayudar redactando las propuestas que nosotros podamos presentar y plantear, pero no aprovecharse de los compañeros para sacarles solamente sus conocimientos. La participación de la ciudadanía es muy importante, porque sino nunca va haber consenso. Sabemos que muchas de las leyes de nuestro país es copia de otros países o es una imposición desde los organismos internacionales, pero esto tenemos que cambiar, todos nos equivocamos y también podemos corregirnos nosotros mismos.

Juan José Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Hablare a nombre del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) sólo para aclarar dos cosas que son vitales y para que no se genere desinformación. Primero que no hay una ley de áreas protegidas aprobada, por lo que acaba de decir el compañero que me antecedió no es cierto. Lo que se tiene son dos propuestas de ley y esta tarde seguramente vamos a hablar con mayor detalle de eso. El segundo elemento es que el salar de Uyuni no es un área protegida, sino que es una reserva fiscal que tiene intereses fundamentalmente mineros, por tanto el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de manera directa no tiene ninguna atribución legal. Cualquier iniciativa que hubiera tenido el ministro Mancilla en aquel momento, tenía que ver más con la actividad turística, porque él era ministro de comercio exterior e inversiones, donde el turismo está incluido. Entonces el SERNAP no tiene que ver nada con eso y mucho menos un tema de concesión de un sitio como ese. Para el SERNAP es vital que se maneje bien la información y se tenga claridad en la información; respecto al resto de los temas en mi intervención plantearé una serie de cosas que también me gustaría compartir con ustedes.

Carmen Miranda

Representante de la UICN, Bolivia

Quería comentar algunas cosas con respecto a la preocupación del compañero Emilio. Creo que los esfuerzos por conservar la biodiversidad y manejar sosteniblemente los recursos naturales en Bolivia son muy difíciles, puesto que Bolivia no tiene una política de Estado en este sentido. Entonces la conservación

de la biodiversidad para el Estado no es una prioridad. Los procesos de discusión se van dando por ejemplo en relación a la ley de áreas protegidas; creo que hay una demanda justa en decir por qué se va a abstraer un territorio para conservar la biodiversidad y va a impedir el ingreso de empresas mineras o petroleras? Entonces creo que la demanda de los compañeros campesinos es algo absolutamente justa, pero lamentablemente en Bolivia tenemos una falta de coordinación intersectorial muy grande. Si tocamos los casos por ejemplo del Isiboro Sécore, el Pilón Lajas y así muchos otros, vemos que los temas de seguridad jurídica y de propiedad son terriblemente conflictivos, porque son áreas que tienen inclusive hasta 5 usos diferentes: son áreas protegidas, son territorios indígenas, son áreas de colonización, son áreas de prospección petrolífera, son áreas de prospección minera y son áreas de reservas forestales. Entonces cual es la prioridad en cuanto al uso de recursos que prevalecerá en estas áreas; no hay una adecuada articulación a nivel sectorial, inclusive dentro del mismo Ministerio de Desarrollo Sostenible quién tiene competencia sobre cada uno de los destinos. El problema es muy serio para las áreas protegidas y para la conservación de la biodiversidad en su conjunto, mucho peor al no contar con un marco legal que respalde a las áreas protegidas. Todos los esfuerzos que se vienen haciendo son acciones que tienen en muchos casos resultados a medias, ya que no se cuenta con la fuerza jurídica como para hacer prevalecer la conservación de la biodiversidad y ciertos derechos de la gente local. Si no hay una política de Estado la situación de la biodiversidad y las áreas protegidas es muy delicada y compleja. Sabemos que hay otros intereses que están en juego y están presionando para ello. Quería terminar respondiendo en algo la preocupación de Gonzalo, en el sentido de que sí es necesario en Bolivia que se discuta el tema de la gestión de la biodiversidad. Creo que es muy importante que las instituciones gubernamentales se abran a la sociedad de una manera transparente y sincera, para que así se pueda entablar un diálogo con todos los actores que tienen que ver de una u otra manera con el tema de la Gestión de la Biodiversidad, o sea me parece que se ha tenido diez años de trabajo esforzado lográndose algunos resultados, pero como alguien lo mencionó, de aquí para adelante la cosa es diferente, si es que no hay una apertura a un diálogo sincero y transparente no vamos a poder avanzar mucho.



Exposición de la Lic. Carmen Miranda: "Perspectivas y desafíos de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad"



Panel de discusión y debate Parte I: Situación y análisis de las áreas protegidas en el mundo Latino-américa y Bolivia. Dr. Stephan Rist (Univ. Berna- Suiza), Dr. Marc Huffhy (Univ. Ginebra-Suiza), Lic. Carmen Miranda (IUCN-Bolivia)

Parte II

Experiencias y análisis de las áreas protegidas en Latinoamérica

Áreas protegidas y pueblos indígenas: Directrices y experiencias internacionales

Jose Aylwin O.¹

Jaime Soto N.²

1. Antecedentes de una compleja relación

El establecimiento de áreas protegidas para preservar espacios de valor natural data de poco más de un siglo. Se inició en el oeste de Estados Unidos con la creación del parque Yosemite en 1864 y del parque Yellowstone en 1872. En la actualidad las áreas protegidas representan un esfuerzo global para preservar especies amenazadas, habitats y ecosistemas de gran valor y biodiversidad, áreas de valor natural y cultural. A la fecha existen más de 10.000 áreas protegidas en 160 países, las que incluyen alrededor del 5% de la superficie de la tierra³.

Muchas de estas áreas de protección y parques han sido establecidas sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. La creación de estas áreas protegidas ha significado una amenaza para la subsistencia material y cultural de estos pueblos indígenas⁴ en distintos contextos geográficos del mundo. En muchos casos significó

1 Abogado. Investigador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera de Temuco-Chile. Asesor de Bosque Modelo Chiloé

2 Antropólogo. Investigador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera de Temuco-Chile.

3 Para una protección efectiva de la biodiversidad y sitios de importancia y cultural, muchos aspiran a la protección de un 10% de la superficie del planeta. Es allí donde la participación de las comunidades y los particulares adquieren mayor relevancia

4 Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios, o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a

la expulsión de los indígenas de sus tierras ancestrales. En otros impidió el acceso a los indígenas a áreas de gran relevancia para su desarrollo material y cultural.

Los alrededor de 5.000 pueblos indígenas que existen en el mundo, con una población estimada en alrededor de 600 millones, aportan gran parte de la diversidad cultural que existe hoy en el mundo. Habitan o reclaman como sus territorios ancestrales entre el 20 al 30% de la superficie del planeta.

Las formas de vida y sobrevivencia de los pueblos indígenas están generalmente basadas en el uso de recursos y ecosistemas locales. Los mismos han desarrollado mecanismos sociales y culturales que permiten hacer un uso sustentable de los recursos, o al menos moderar impactos ambientales.

Muchos pueblos indígenas tienen actitudes de conservación basadas en sus creencias espirituales o en nociones éticas compartidas por la comunidad. Entre estas creencias se encuentran la del cuidado de la tierra, la de tomar solo lo que se puede utilizar en forma cuidadosa y plena. Muchas culturas indígenas tienen respecto a la tierra actitudes espirituales de aprecio, respeto y humildad. Aunque es efectivo que en ocasiones, los pueblos indígenas impactan adversamente el ambiente en que habitan, sus actitudes y creencias espirituales, sus conocimientos tradicionales, sus niveles de consumo bajo, hacen de los pueblos indígenas fuertes aliados en la conservación.

2. El modelo Yellowstone y los pueblos indígenas

El área del parque Yellowstone estuvo habitada desde hace 11.000 años. A la época de su creación constituía el territorio ancestral de distintos pueblos indígenas (shoshone y bannock, entre otros). Con la creación del parque, los indígenas fueron desplazados fuera de él y radicados en reservas en otras tierras. Los indígenas resistieron la creación del parque, y la expulsión de que fueran objeto desde sus territorios ancestrales, existiendo antecedentes de enfrentamientos con los administradores del parque y turistas.

El Parque Nacional Yellowstone se convirtió en un símbolo de protección estricta de la naturaleza y por lo mismo tuvo una gran influencia en la creación de parques naturales en todo el mundo. De acuerdo a este modelo impuesto, se crearon a fines del siglo XIX y comienzos del XX muchos otros parques en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Kenya, entre otros países. Tales parques estuvieron concebidos como áreas de protección en la que la gente no podría cazar, recolectar, criar animales o aún sacar hierbas medicinales. La única intervención humana permitida sería el turismo. Bajo esta concepción, muchos

futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. (Martínez Cobo, 1986/7)

pueblos cazadores recolectores, como los Massai en África serían relocalizados de sus tierras ancestrales, declaradas parques, hacia otras tierras.

En América Latina la creación de los parques nacionales durante el Siglo XX también estuvo influenciada por este modelo. Muchas áreas protegidas deshabitadas, son la resultante de procesos de relocalización de la población, generalmente indígena, que habitaba en su interior. Cabe señalar, sin embargo, que en algunos países las leyes que obligaban a la relocalización forzada de la población desde su interior, no fueron aplicadas. Se estima que en Sud América el 86% de las áreas protegidas están habitadas o usadas por poblaciones aledañas, que los pueblos indígenas son residentes en el 30% de las áreas protegidas de América Central, habitando el 85% de dichas áreas⁵.

3. De la exclusión a la inclusión indígena: la revisión de las áreas protegidas

3.1. Los nuevos lineamientos

Diversos factores gatillan en las últimas décadas la revisión de las visiones y políticas que dieron origen a las áreas protegidas en el mundo. Por un lado, los pueblos indígenas han emergido como actores relevantes en todos los continentes, y con especial relevancia en las Américas, reclamando de los Estados, derechos sobre sus tierras y recursos naturales. También demandan el derecho a participar en los asuntos que les conciernen, así como a decidir su propio futuro. Muchas de las tierras que reclaman han sido transformadas en parques o reservas naturales por los Estados, unidades de las cuales han sido desplazados y de cuya administración han sido excluidos. Estos hechos no solo han sido cuestionados desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también desde la perspectiva de la conservación, desde la cual ha surgido una importante reflexión sobre el sentido de la naturaleza, los objetivos de la conservación y el rol de los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad.

3.2. El rol de la UICN

Un rol central en la revisión de los modelos de conservación hasta hace poco dominantes y en el repensamiento de la relación entre áreas protegidas y comunidades humanas en general, y pueblos indígenas, en particular, ha correspondido a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN)⁶. Ya en 1975

5 Los antecedentes del punto I han sido extraídos del artículo de Stan Stevens "The legacy of Yellowstone" (en Stevens ed. 1997)

6 La UICN es una entidad no gubernamental fundada en 1948. Su objetivo es conservar la integridad de la naturaleza, y promover el uso equitativo y sustentable de los recursos naturales. Agrupa hoy a Estados soberanos, agencias gubernamentales y ONGs, estando integrada por 980 miembros en 141 países

su Asamblea General reunida en Zaire aprobó la idea de que el asentamiento y uso indígena al interior de los parques nacionales era inapropiado, siempre que se hiciera en zonas destinadas para tal efecto. Llamó a los Estados a establecer mecanismo para que los pueblos indígenas pudiesen convertir sus tierras en áreas protegidas sin renunciar a sus derechos sobre ellas. En 1978 revisó su clasificación de áreas protegidas proponiendo la inclusión entre las nuevas categorías de las “*reservas antropológicas*”, áreas establecidas para proteger un patrimonio cultural en las que las actividades de subsistencia fuesen permitidas.

Las propuestas más importantes en esta materia, sin embargo, han sido desarrolladas en la década de los noventa. Así, en el Plan de Acción emanado de la reunión de Caracas en 1992 (IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, convocado por UICN, propuso que la política y legislación sobre recursos naturales “debe tomar en consideración las prácticas consuetudinarias de manejo de recursos indígenas y tradicionales así como los sistemas de tenencia tradicional de la tierra en el diseño e implementación de las estrategias de las áreas protegidas.” (Recomendación 4). Asimismo propuso que los administradores de las áreas protegidas “involucren cercanamente a la gente local en el monitoreo, uso y administración de especies naturales y otros productos naturales” (Recomendación 8); y que debe existir “un fuerte involucramiento de las comunidades locales e indígenas en todos los aspectos de la planificación y manejo de las áreas protegidas marinas de una nación.” (Recomendación 11)⁷.

Como consecuencia de la Asamblea General de la UICN celebrada en Buenos Aires en 1994 se adoptó una nueva clasificación de áreas protegidas mucho más sensible a los pueblos indígenas, que refleja las nuevas perspectivas en la relación entre ambiente natural y humano y su interacción (Ver Anexo 1).

Junto con reducir el número de categorías de áreas protegidas de 10 a 6, y en contraste con las categorías anteriormente existentes, considera la posibilidad del asentamiento indígena en todas ellas. Aún cuando el asentamiento de población no es considerado como apropiado en la categoría I a (Área Natural Estricta), esta no es vista como incompatible con la categoría I b (caracteriza estas Áreas Naturales Silvestres como aquellas que “no están habitadas de forma permanente o significativa...”). Como consecuencia de esta nueva clasificación, el sistema en su conjunto tiene el potencial de acoger una variedad de modelos de áreas protegidas, en función del grado de intervención humana, de forma que tanto los derechos de los pueblos indígenas como los objetivos de conservación puedan ser respetados (Beltrán ed., 2001).

Tales orientaciones serían más tarde reafirmadas por la UICN en 1996 en el Congreso Mundial de la Naturaleza. Así, su resolución 1.53 reconoció que los

7 Traducción J. Aylwin, en Stan Stevens, “New Alliances for Conservation” (en Stevens ed, 1997)

pueblos indígenas tienen el derecho “a participar efectivamente en el manejo de las áreas protegidas establecidas en sus tierras y territorios”, y en consecuencia, se debe llegar a acuerdos con ellos “previo al establecimiento de áreas protegidas en sus tierras o territorios”. (Ver Anexo 2).

En forma consistente con los lineamientos anteriores, la UICN amplió su definición de áreas protegidas, al incorporar en ella los recursos culturales asociados. De acuerdo con la nueva definición, las áreas protegidas son concebidas como: *“Una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces”* (UICN, 1994 a).

En años recientes, en base a las orientaciones de los Congresos antes señalados, la WWF y la UICN han aprobado un conjunto de Principios, asociado a dichos principios, Directrices relativas a las áreas protegidas en tierras y territorios indígenas (Fuente; UICN, WWF International, 2001, en Beltrán ed. 2001).

El Principio 1, menciona la estrecha interrelación que debe existir entre ambos, de las contribuciones de los indígenas al mantenimiento de los ecosistemas frágiles, y de la necesidad de considerar a los pueblos indígenas como socios legítimos en la tarea de la conservación cuando ella atañe a sus tierras y recursos.

“Los pueblos indígenas y tradicionales mantienen un antiguo vínculo con la naturaleza y tienen una comprensión profunda de ella. Han hecho frecuentemente contribuciones significativas para el mantenimiento de muchos de los ecosistemas más frágiles del planeta, a través de sus prácticas tradicionales de uso sustentable de recursos y su respeto por la naturaleza basado en su cultura. Por tanto, no debería haber conflicto intrínseco entre los objetivos de las áreas protegidas y la existencia, dentro o alrededor de sus fronteras, de pueblos indígenas y tradicionales. Más aún, dichos pueblos deben ser reconocidos como socios legítimos e iguales en el desarrollo e implementación de estrategias de conservación que afectan sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos, en particular, en el establecimiento y manejo de áreas protegidas.”

Otros de estos principios subrayan la necesidad de establecer acuerdos entre las agencias que administran áreas protegidas y los pueblos indígenas para el establecimiento y manejo de áreas protegidas que afectan sus tierras, así como la responsabilidad que corresponde a los indígenas en la tarea de la conservación (Principio 2); la necesidad de incorporar en esta relación los principios de descentralización, participación, transparencia y rendición de cuentas (Principio 3) así como la necesidad de que estos pueblos accedan a los beneficios asociados con las áreas protegidas. (ver Anexo 3).

3.3. Convenciones Internacionales

Aunque no relacionadas directamente con las áreas protegidas, cabe también incluir aquí los lineamientos establecidos por las convenciones internacionales

relativas a los derechos de los pueblos indígenas, así como aquellas que tratan sobre la protección de la biodiversidad.

Entre las primeras destaca el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas en Países Independientes de 1989, el que constituye el instrumento jurídico internacional más relevante en la materia. Este Convenio establece lineamientos significativos en el tema de los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios indígenas, así como sobre los recursos naturales, muchos de los cuales tienen relevancia para la temática que aquí nos preocupa.

Dispone que *“los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación.”* (art. 13.1). El Convenio agrega al concepto de tierras indígenas el de territorios, concepto que cubre *“la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera.”* (art. 13.2).

El Convenio dispone además que deberá reconocerse *el derecho de estos pueblos a la “propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”* y tomarse medidas para *“salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.”* (art. 14.1).

Finalmente dispone que deban protegerse especialmente los derechos de los pueblos indígenas *“...a los recursos naturales existentes en sus tierras”*, derechos que comprenden *“...participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.”* (art. 15.1)⁸.

El Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (1992)⁹, por su parte, reconoce y establece en su artículo 8. j, la relevancia de los conocimientos tradicionales indígenas al señalar:

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

Aunque no se trate de una Convención, cabe referirse a la Agenda XXI emanada de la Cumbre de Medio Ambiente de Río en 1992. Se trata de un documento de carácter programático en cuyo Capítulo 26 se reconoce la histórica relación de los

8 Subrayado del autor

9 Ratificada por Chile

indígenas con sus tierras, incluyendo en ellas el ambiente de las áreas que tradicionalmente han ocupado, así como los conocimientos tradicionales que tienen de ellas y sus recursos (Cap. 26.1); se promueve la participación de las poblaciones indígenas y sus comunidades en la formulación de políticas, leyes, programas relacionados con el manejo de recursos y estrategias de conservación (Cap. 26.3c); y se plantea la necesidad de permitir a los indígenas mayor control sobre sus tierras, autogestión de sus recursos, y participación en la toma de decisiones que les afectan, incluyendo, participación en la administración de áreas protegidas (Cap. 26.4)¹⁰.

3.4. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso Awas Tingni en la costa atlántica de Nicaragua

Desde los años setenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha procesado centenares de peticiones sobre situaciones que afectan a personas y comunidades indígenas en el ejercicio de sus derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1947, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. En respuesta a estas peticiones la Comisión ha emitido numerosas resoluciones, y recomendaciones a los Estados, instándolos a respetar los derechos humanos en las situaciones que involucran a los indígenas. Algunos de estos casos han sido remitidos por la Comisión a la Corte Interamericana, la que a través de sus resoluciones, ha contribuido al desarrollo de una jurisprudencia en materia de derechos indígenas.

Uno de los temas centrales de los reclamos indígenas está en relación con el derecho de propiedad sobre sus tierras ancestrales. Ya en 1970 la Comisión se refirió a la obligación de defender las tierras indígenas (caso de los Guahibos en Colombia). En 1985 emitió una resolución para el caso de los yanomami del Noroeste de Brasil, recomendando delimitar y demarcar el Parque Yanomami, incluyendo más de 9 millones de has. de bosque amazónico, hábitat de aproximadamente 1200 yanomami.

Sin embargo, el caso más importante abordado por el sistema interamericano en esta materia ha sido el de la comunidad de Awas Tingni de la Costa Atlántica de Nicaragua. Este caso se originó en una petición hecha a la Comisión en 1995 alegando que el Estado de Nicaragua no había adoptado las medidas necesarias para asegurar el derecho a la tierra de las comunidades indígenas Mayagna (Sumo) de Awas Tingni y de otras comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua frente a una concesión de explotación maderera otorgada a una empresa coreana por dicho Estado. En 1998 la Comisión acogió la petición de los indígenas, e interpuso una demanda en contra del Estado de Nicaragua ante la Corte. La demanda se refiere a la violación por parte de dicho Estado de los artículos 1 (obligación de respetar

10 Suscrita por Chile. Subrayados del autor.

los derechos), 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 21 (derecho a la propiedad privada) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en razón de la falta de demarcación y de reconocimiento oficial del territorio de esta comunidad. La Comisión también solicitó a la Corte, en base al artículo 63 (1) de la Convención, la reparación de las consecuencias de la violación.

Con fecha 31 de agosto de 2001, la Corte dictó sentencia en el caso en análisis, concluyendo que Nicaragua violó el artículo 21 de la Convención Americana en perjuicio de los indígenas en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención, condenándolo a que delimite, demarque y titule el territorio de propiedad de la Comunidad. El fallo de la Corte Interamericana dejó establecido en sus considerandos el valor de la propiedad comunal de los pueblos indígenas a la luz del artículo 21 de la Convención Americana (par. 149), la validez de la posesión de la tierra basada en la costumbre indígena, aun a falta de título, para que se les reconozca la propiedad sobre ellas (par. 151), y la necesidad de que la estrecha relación que los indígenas tienen con sus tierras sea reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica (par. 149)¹¹.

Se trata de un fallo que establece un precedente de gran relevancia, dado que de acuerdo a él, las tierras sobre las que los indígenas prueben posesión ancestral, generalmente reconocidas en las Américas como de propiedad fiscal, deben serles reconocidas en propiedad, delimitadas y tituladas en su favor.

4. La experiencia de algunos países

En forma paralela a la revisión de la concepción de las áreas protegidas y de su relación con las comunidades humanas y pueblos indígenas al que se ha hecho referencia, desde la década del 60 vienen desarrollándose en el mundo diversas experiencias de involucramiento de los pueblos indígenas en la gestión de las áreas que se encuentran en sus tierras y territorios, dándose impulso a experiencias de conservación indígena.

En 1961 el gobierno de Brasil crea el Parque Nacional Xingú en la cuenca amazónica, el que fue concebido como un parque indígena cuyo objetivo era asegurar las formas de vida tradicional del pueblo Xingu amenazado por la explotación de recursos naturales llevada adelante por no indígenas en su territorio ancestral. En años siguientes, parques y áreas protegidas en distintas partes del mundo no solo reconocen y admiten la habitación indígena antes rechazada, sino que también permiten y regulan el desarrollo en su interior de actividades de subsistencia. Estas

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, Sentencia de 31 de Agosto de 2001

experiencias incluyen la de la Reserva de Kalahari en Botswana, habitada por el pueblo sun; el Parque Nacional Santa Marta en Colombia, en el territorio ancestral de los kogí; el Parque Nacional Manu en Perú, habitado por distintos pueblos indígenas amazónicos; el Parque Nacional Canaima en Venezuela, habitado por los indígenas pemón; así como varios parques nacionales en Suecia, donde habitan los samí, cuya economía tradicional está vinculada al manejo del reno.

Otras experiencias de interés son aquellas que tienen relación con las iniciativas de conservación impulsadas por los pueblos indígenas en sus propias tierras. Entre ellas destacan la impulsada por los kuna en Panamá en tierras de su comarca autónoma Kuna Yala desde los años 80. Con el apoyo de diversas entidades de cooperación, los kuna establecieron un área protegida basada en los conceptos de las reservas de la biosfera que se ha convertido en un modelo de parque indígena. Esta iniciativa kuna contiene en su interior una extensa zona de protección estricta, basada en el concepto kuna de santuario espiritual, otra de zona de uso agrícola, y una zona para el asentamiento humano.

Otra iniciativa indígena de características similares es la que ha sido impulsada por los Haida de la Isla Haida Gwaii (Queen Charlotte Islands) en Canadá. En forma conjunta con la creación en 1987 del Parque Nacional, el que surgiera como consecuencia de las demandas para detener la tala indiscriminada del bosque, los Haida han impulsado un parque tribal en la parte norte de la isla, y han propuesto la creación de un parque marino en las aguas que circundan la isla. (Stevens, en Stevens ed, 1997)

El análisis en profundidad de la relación entre áreas protegidas y pueblos indígenas en el mundo podría resultar muy extenso. Es por ello que parece de interés dar cuenta aquí de los avances que en esta materia se han verificado en algunos países, de modo de ilustrar las tendencias contemporáneas existentes en este ámbito:

– El caso de Nueva Zelanda

La participación indígena en la gestión de las áreas protegidas en Nueva Zelanda se remonta a 1887, año en que un jefe maorí “cedió” las tierras que dieron origen a la creación del Parque Nacional Tongarero, para dar protección al monte sagrado que allí existe. Se trata del primer parque nacional de este país que en la actualidad, constituye Patrimonio Mundial de UNESCO. Desde su creación el directorio de conservación de este parque ha estado integrado por al menos un maorí. Otro parque nacional creado como consecuencia de una “donación” de tierras indígenas en 1978, el Parque Nacional Taranaki, así como el Parque Nacional Whanganui, tienen participación indígena maorí en sus respectivos directorios. Al año 1992, los maorí contaban con un total de 68 representantes en los directorios de conservación de 12 parques nacionales y de 3 parques marítimos en Nueva Zelanda, cifra que representa un tercio del total de representantes.

– El caso de Canadá

Diversos factores, incluyendo la presión de los pueblos indígenas y las decisiones de los tribunales de justicia, determinaron la introducción de cambios en la política de Parques Nacionales en Canadá desde los años 70. A contar de entonces se reconoce en ese país el asentamiento y los derechos de subsistencia indígena al interior de las áreas protegidas. Así en su política de 1979 para “Parques Canadá” estableció:

“En nuevos parques nacionales, garantías serán establecidas a fin de que algunos usos de recursos para fines de subsistencia por la gente local sean permitidos en partes de estos parques, cuando estos usos sean una parte esencial de la forma de vida local y cuando no existan alternativas fuera de sus límites.”¹²

Junto con lo anterior, en dicha política se estableció que cuando nuevos parques fueran creados en el marco de la resolución de reclamaciones de tierras indígenas, acuerdos con los pueblos indígenas deben ser negociados, creando en ellos regímenes de co-manejo para su planificación y administración. (Parks Canadá, 1979, en Stevens, 1991).

Las directrices de “Parques Canadá” de 1994 sobre la materia, son explícitas al establecer que en los parques en que los indígenas tengan derechos originarios o de tratado, el ejercicio de estos derechos serán respetados; la actividad tradicional de los pueblos indígenas al interior de los parques será mantenida como consecuencia de los acuerdos de tierras o de los tratados, así como de acuerdos específicos negociados durante el proceso de creación del parque. Dada la base legal y constitucional que estos acuerdos y tratados tienen en Canadá, tales acuerdos modificarán en ocasiones la política de parques, e incluso la Ley Nacional de Parques (Parks Canadá, 1994).

En la práctica, en la mayor parte de los parques en áreas indígenas se han venido constituyendo comités asesores (Advisory Committees) para hacer posible en ellos la participación indígena. Dichos comités abordan temas como el uso de la tierra y de los recursos naturales, la planificación de actividades en los parques y la administración. Sin embargo, las facultades de los pueblos indígenas en estos comités son limitadas, dado que la decisión final esta en las manos de Parques. (Stevens, en Stevens ed., 1997).

Experiencias de co-manejo de áreas protegidas por pueblos indígenas solo comienzan a ser impulsadas en el norte de ese país y en Columbia Británica en los años noventa y en el contexto de los procesos de negociación de tierras indígenas verificados en los últimos años. Un ejemplo de esta nueva tendencia es el *acuerdo de co-manejo del Parque Nisga Memorial Lava Bed que fuera incluido en el tratado suscrito entre los Nisga, Canadá y Columbia Británica en 1998.*

12 Traducción y negrillas del autor.

En base a este tratado, dicho parque provincial ubicado en el territorio ancestral de este pueblo, pasó a ser administrado en forma conjunta por el gobierno provincial y el gobierno de los Nisga a través de un Comité de co-manejo integrado en partes iguales (3 y 3). Entre las funciones del Comité se incluyen el desarrollo del plan maestro del Parque, la definición de actividades y proyectos arqueológicos y culturales en el parque, la administración del parque, etc. *La historia y la cultura de los Nisga serán promovidas como la principal fuente de interpretación y característica del parque* (Nisga Final Agreement, 1998)¹³.

– El caso de Australia

También como resultado de la presión indígena, y de las decisiones de los tribunales de justicia de ese país¹⁴, en Australia se han verificado importantes cambios relativos a los derechos indígenas sobre sus tierras y recursos. Ello ha incidido en la modificación de la política de conservación, abriéndose caminos para el reconocimiento de los derechos indígenas sobre las áreas protegidas existentes en sus tierras y territorios, incluyendo, entre otras dimensiones, el derecho al asentamiento y uso indígena de los recursos naturales, y a una activa participación indígena en su gestión.

Algunos hitos recientes en este proceso han sido los siguientes:

a. *La puesta en marcha por Environment Australia del Programa del Sistema Nacional de Reservas en 1996/97*

Dicho programa incluye entre sus objetivos:

- El establecimiento y manejo de áreas protegidas nuevas y significativas desde el punto de vista ecológico, a ser añadidas al Sistema Nacional de Reservas Terrestres de Australia;
- La oferta de incentivos para que los pueblos indígenas participen en el Sistema Nacional de Reservas, a través de la declaración voluntaria de áreas protegidas en las tierras de su propiedad (Áreas Protegidas Indígenas);
- El apoyo para una mayor participación del pueblo indígena en el manejo de los parques nacionales y de otras áreas protegidas existentes;
- El estímulo a los pueblos indígenas para que manejen la tierra con fines de conservación de la biodiversidad¹⁵.

13 Idem.

14 La decisión de la Corte Suprema de Australia en el caso Mabo (1992) anuló la doctrina de terra nullius antes vigente, reconociendo a los indígenas el “título nativo” sobre aquellas tierras sobre las cuales los indígenas han mantenido su conexión tradicional y donde este no ha sido cancelado por acciones anteriores de gobierno.

15 Subrayados del autor.

b. *La dictación de la Ley de Protección y Conservación de la Biodiversidad (EPBC) de 1999 (entra en vigencia el 2000)*

Esta nueva ley reconoce el papel crítico que tienen los pueblos indígenas en la conservación y el uso sustentable de los recursos ecológicos, y en el mantenimiento del conocimiento tradicional. Con la intención de obtener el máximo beneficio del conocimiento tradicional, la Ley EPBC busca: (1) establecer un Comité Asesor Indígena que asesore al ministro del Ambiente del Commonwealth; (2) asegurar la representación de los indígenas en el Comité Asesor sobre la Diversidad Biológica; y (3) asegurar que los intereses de los indígenas sean considerados cuando se desarrollen acuerdos bilaterales, planes de manejo, planes de recuperación, planes de conservación de la vida silvestre y planes de disminución de amenazas.

Uno de los casos que puede ejemplificar la forma en que estas definiciones políticas y legales se aplican en la práctica a la relación entre áreas protegidas y pueblos indígenas, es el del Parque Nacional Kakadu, ubicado en el Territorio Septentrional de Australia.

Dicho parque, cuya superficie abarca 19.804 km² constituye el territorio tradicional de los aborígenes bininj/mungguy (Kakadu). Como consecuencia de la Ley de Derecho de la Tierra Aborigen de este Territorio (1975), se han concedido una importante cantidad de tierras en fideicomiso a los indígenas (alrededor del 42% del Territorio Septentrional ha sido concedido a los Fideicomisos de Tierra Aborigen (Commonwealth of Australia, 1999a). Actualmente existen tres fideicomisos de tierra dentro del Parque que, en total, cubren el 50% de su superficie. Adicionalmente existen tres áreas sujetas a reclamo bajo la Ley sobre los Derechos de la Tierra Aborigen (Commonwealth of Australia, 1999b). Estos tres fideicomisos arriendan la tierra al Director de Parques Nacionales, para que sea manejada como un parque nacional.

Todo ello configura un cuadro que hace de esta unidad uno de los tres parques nacionales en Australia que son manejados conjuntamente por los dueños aborígenes tradicionales y por el Director de Parques Nacionales del Gobierno Federal. Los mecanismos principales que permiten la participación de los aborígenes en el manejo y la administración del Parque son:

- El Comité de Manejo de Kakadu,
- El plan de manejo del Parque, y
- Los contactos diarios, formales e informales, entre el personal del Parque (algunos de los cuales son aborígenes) y los dueños tradicionales.

El Comité de Manejo, creado en 1989, representa los intereses y puntos de vista de los dueños tradicionales en el manejo conjunto del Parque, y determina

la política para el manejo del Parque. El Comité ha sido recientemente ampliado a 15 miembros, 10 de los cuales son aborígenes nombrados por los propietarios tradicionales y representan a todo el pueblo aborígen y los idiomas principales de la región. En el Comité también están el Director del ANPWS, el Secretario Asistente de Parks Australia North, un representante de la industria de turismo del Territorio Septentrional y una persona destacada en el área de la conservación de la naturaleza (Hill and Press, 1994).

La Ley prevé el nombramiento de un representante del gobierno del Territorio Septentrional, quien todavía no ha sido designado. Los nombramientos de los representantes de la industria del turismo, del Gobierno del Territorio Septentrional y el especialista en conservación, deben ser aceptados por los propietarios aborígenes tradicionales del Parque. El papel de los aborígenes en el manejo y la administración del parque es definido en detalle en el plan de manejo, la cuarta versión del cual se halla actualmente en operación.

Existen tres objetivos principales en el manejo del Parque: 1) conservar el patrimonio natural de Kakadu, 2) conservar su patrimonio cultural, y 3) respetar los intereses de los propietarios aborígenes tradicionales. El plan de manejo muestra las diversas maneras en que los propietarios aborígenes locales pueden participar en el manejo del Parque (Beltrán ed. 2001)

– *El caso de Bolivia*

En 1992 se aprobó en Bolivia la Ley 1333 de Protección y Conservación del Medio Ambiente del 27 de abril de 1992. Dicha ley incorpora la realidad de los pueblos indígenas y su especificidad cultural en el desarrollo sustentable y la protección del patrimonio natural. Así su artículo 56 dispone que “el Estado promoverá programas de desarrollo en favor de las comunidades que tradicionalmente aprovechan los recursos de fauna y flora silvestre con fines de subsistencia, a modo de evitar su depredación y alcanzar su uso sostenible.” En el artículo 62 se señala que “*en la administración de áreas protegidas podrán participar... comunidades tradicionales establecidas y pueblos indígenas.*” En su artículo 64 dispone que “*la declaratoria de áreas protegidas es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas...*”.¹⁶ Finalmente su artículo 78 dispone que el Estado creará mecanismos y procedimientos para garantizar “la participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos de desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales...”, así como “el rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de recursos naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas.”

16 Negrillas del autor.

Dicha legislación es paralela en el tiempo a las reformas constitucionales (1994) y legales (1996) que junto con declarar a Bolivia como un país multiétnico y pluricultural, reconocieron los derechos sobre sus tierras comunitarias de origen (TCO), garantizándoles el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Cabe señalar que a partir de 1996 se ha venido impulsando un saneamiento de TCOs a lo largo del país. Al 2002 se habían saneado 22 TCO con poco mas de 5 millones de has, existiendo demandas por un total de 30 millones de has. cerca de un tercio del país. (Aylwin, 2002)

En base a esta normativa, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) entidad a cargo del Sistema, ha venido impulsando iniciativas de co-manejo de áreas protegidas con participación activa de la sociedad civil, incluyendo ONGs, pueblos indígenas y grupos rurales).

Los términos del co-manejo deben especificarse para cada sitio en un convenio entre el SERNAP y el grupo a cargo de la cogestión. Dicho grupo debe estar legalmente reconocido y tener la experiencia y la capacidad necesaria para cumplir eficazmente con su papel (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Participación, 1997).

El SERNAP está promoviendo la formación de Comités Locales de Manejo (CLM) con el fin de descentralizar aún más el manejo de las áreas protegidas. Cada comité debe estar conformado por representantes de los pueblos indígenas, los grupos rurales, las municipalidades, las organizaciones públicas, las ONGs y el SERNAP. Para cada área protegida, el CLM estará a cargo de: (a) participar en la definición de los objetivos de manejo; (b) controlar y monitorear el desempeño de los encargados del manejo del sitio; (c) asesorar y supervisar al director del área en todo lo que esté relacionado con la preparación y la implementación de los planes operativos y de manejo; y (d) asistir en la identificación y la obtención de apoyo financiero de fuentes externas.

Una experiencia de co-manejo de un área protegida involucrando a pueblos indígenas (guarani del Izozog) es la del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de Kaa-Iya del Gran Chaco. En 1995 este Parque pasó a la administración conjunta del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Participación y la CABI, que es la autoridad política del pueblo guarani de Izozog. Dicha administración fue establecida inicialmente por un período de diez años. Los términos y las condiciones del acuerdo entre estas dos organizaciones abarcan los siguientes aspectos:

- Asegurar que todas las actividades de planeamiento, administración y manejo del parque sean llevadas a cabo en consonancia con el marco institucional ambiental actualmente en vigencia en Bolivia y siguiendo los lineamientos del plan operativo y de manejo para el área.
- Incluir a los guardaparques del área y a los representantes de las comunidades locales en el manejo del parque.
- Mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los habitantes locales.

En 1996 se formó el Comité de Manejo del parque, el que está conformado por el director del área y miembros del SERNAP, la CABI, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), las municipalidades locales, el Grupo Comunitario de Chiquitanos (TURUBO), la Comunidad Ayorea de Santa Teresita y el Grupo de Mujeres de las Comunidades Indígenas del Izozog (CIMO). A estas organizaciones se les solicitó asesoramiento en la definición de políticas para el manejo del parque. Como parte de este mandato, el Comité ha participado en la preparación, ejecución y evaluación de planes operativos y de manejo para el sitio. El plan de manejo del parque comprende los cinco programas siguientes:

- a) **Programa operativo:** incluye la demarcación definitiva del parque, la construcción de las oficinas del área en la localidad de La Brecha y la creación de diez lugares para acampar que se localizan en sitios estratégicos. También prevé la edificación de refugios rústicos para investigadores y de un centro de visitantes.
- b) **Programa de vigilancia:** se creó un equipo de guardaparques que está a cargo del control y la vigilancia de las áreas designadas, de la investigación de campo y de las relaciones con las comunidades locales y el público en general.
- c) **Programa de manejo de recursos naturales:** la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, el Centro para el Estudio de las Tierras Nativas (CSNL) y la CABI emplearon una parte de los fondos iniciales para elaborar una serie de mapas comunitarios con información básica, y capacitaron a los participantes en las técnicas para realizar los trabajos futuros de evaluación de la fauna local.
- d) **Programa de uso público:** se desarrolló un proyecto para identificar las zonas dentro del parque que se pueden abrir al turismo.
- e) **Programa de proyección regional y cooperación:** el propósito de este programa es relacionar el parque con otras áreas protegidas en América Latina, en particular con aquellas que tengan ecosistema del Chaco.

De acuerdo a la información disponible, la evaluación de la experiencia ha sido muy positiva para todas las partes. Las interacciones entre los pueblos indígenas, el gobierno boliviano, las ONGs internacionales y el sector empresarial dentro del parque, han contribuido claramente a mejorar la situación general del ecosistema del Chaco en este sector del oriente de Bolivia. Estas asociaciones tuvieron éxito sobre todo cuando se adoptó una estrategia abarcadora e integrada de modo de asegurar la conservación del ecosistema y la mejora de las condiciones de los pueblos indígenas locales.

Los izoceños han percibido una serie de resultados positivos a partir de este programa. El automonitoreo del uso de los recursos, a partir del cual se pudo comprometer a los grupos locales a participar en la investigación, permitió formular

preguntas muy interesantes. Los datos colectados permanecerán en la comunidad a menos que la gente decida lo contrario. Las comunidades participantes ganaron poder por sus propios esfuerzos de recolección de información y por el control que ejercen sobre los mismos.

En efecto, los grupos comenzaron a descubrir su propio potencial para analizar problemas. Se espera que este incremento en la autosuficiencia y confianza eventualmente conduzca a que las comunidades formulen planes de manejo adaptados a las condiciones culturales, económicas y ambientales locales (Towsend, 1998 en Beltrán, ed. 2001).

Las lecciones de un estudio de caso

Dada la relevancia que ha adquirido internacionalmente la interacción en áreas protegidas y pueblos indígenas, los conflictos que en ocasiones existen entre ellos, y las experiencias de colaboración entre ambos que han emergido en los últimos años, a pedido de la UICN, el PNUMA-World Conservation Monitoring Centre preparó una serie de once casos de estudio en distintas partes del mundo¹⁷, orientados a analizar la operatividad, lecciones y desafíos de estas experiencias prácticas.

De este estudio de casos se desprenden algunos antecedentes y conclusiones que resultan de interés consignar aquí:

- a. *Las principales demandas indígenas en relación con las áreas protegidas creadas en sus dominios terrestres, marino-costeros y de agua dulce son las siguientes:*
 - que las áreas protegidas protejan de una manera efectiva de las amenazas externas tales dominios, al igual que los pueblos y culturas que éstos contienen, y en particular refuercen las áreas tradicionalmente protegidas;
 - que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales a sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos;
 - que reconozcan sus derechos a controlar y manejar estos recursos dentro de las áreas protegidas;

17 Los casos de estudio fueron el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de Kaa-Iya del Gran Chaco (KIGC, Bolivia); la Reserva Biológica Marina de Cayos Miskitos y Franja Costera (RBMCM, Nicaragua); el Parque Nacional de Sarstoon-Temash (PNST, Belice); el Parque Nacional de Wood Buffalo (PNWB, Canadá); el Área de la Laponia (LAPP, Suecia); el Parque Nacional de la Montaña de Simen (PNSM, Etiopía); el Parque Nacional de Sagarmatha (Monte Everest) (PNS, Nepal); el Parque Nacional de Doi Inthanon (PNDI, Tailandia); la Reserva Natural de Xishuangbanna (RNX, China); la Reserva de Recursos Kytalyk (RRK, Federación Rusa); y el Parque Nacional Kakadu (PNK, Australia).

- que permitan la participación de las instituciones tradicionales en los arreglos de co manejo dentro de sus dominios terrestres, marino-costeros y de agua dulce;
- reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales a determinar sus propias prioridades de desarrollo, siempre que éstas sean compatibles con los objetivos de las áreas protegidas;
- sean declaradas solo como resultado de su iniciativa y/o con su consentimiento informado previo;
- incorporen el uso sustentable de los recursos naturales empleando métodos que mantengan la integridad del ecosistema y que hayan sido tradicionalmente utilizados por los pueblos indígenas.

b. Los temas de mayor conflicto en ésta relación son:

La *tenencia* de la tierra y la propiedad de zonas marinas en las áreas protegidas es el factor que causa las mayores dificultades entre los pueblos indígenas y las autoridades de conservación. Aún hay temas no resueltos en aquellos casos donde existe un mayor entendimiento y comunicación entre ambos grupos (tales como el KIGC, la RBMCM y el PNK). En la RBMCM, la Asamblea Legislativa está a punto de aprobar una ley de propiedad de los territorios indígenas. La situación de la tenencia de la tierra es todavía más problemática en los sitios con gran densidad de población y en las áreas protegidas que están recibiendo una afluencia de inmigrantes provenientes de regiones cercanas donde hay guerra, agitación política, o donde los recursos ya han sido seriamente agotados.

El *acceso a los recursos terrestres y marino-costeros* es el segundo factor más significativo que genera conflictos entre los pueblos indígenas y las autoridades del área protegida. Este tema ha sido considerado en algunas áreas, sobre todo en aquellas en las que los pueblos indígenas han sido llamados a jugar un papel clave en el desarrollo y la implementación de acciones específicas de manejo. Esto ha sido parcialmente resuelto en la RNX gracias a la decisión de las autoridades de manejo de tolerar cierto nivel de uso de los recursos por parte de los grupos locales (por ej. la recolección de plantas medicinales). Por otro lado, el uso de recursos por parte de ciertos grupos de pueblos indígenas todavía es considerado como inaceptable y negativo para la preservación de los recursos naturales.

Otra fuente de conflicto es la *concesión de derechos de explotación* a compañías comerciales para extraer recursos terrestres o marinos (petróleo, bosque, peces, langosta) de las áreas protegidas o de sus alrededores. El derecho de paso de un gasoducto por ejemplo atraviesa un sector del KIGC, pero la compañía ha aceptado pagar una compensación a los grupos locales. La ubicación de áreas de concesión minera está ocasionando en el PNK mucha controversia, al punto de su casi inclu-

sión en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en Peligro. En la RBMCM, el gobierno central ha fracasado en sus intentos de controlar la explotación de los recursos marinos (por ejp. la langosta) por parte de compañías comerciales dentro de la reserva, y la tala de bosques en sus alrededores, lo que va en perjuicio de los pueblos indígenas.

c. Las principales enseñanzas son las siguientes:

1. Cuando la participación de los pueblos indígenas en el manejo ha tenido lugar al principio del proceso de planeación, han habido beneficios tanto para los pueblos indígenas como para las autoridades de manejo;
2. Cuanto más amplia es la participación de los pueblos indígenas en todos los aspectos del manejo, menor es la posibilidad de que surjan conflictos;
3. En aquellas áreas en las que ya existe algún tipo de co-manejo, el desafío consiste en reforzar y extender dicho mecanismo. En donde los pueblos indígenas aún no están participando, el desafío es hacer que esto ocurra.

d. Las conclusiones principales son las siguientes:

- Los pueblos indígenas y tradicionales están interactuando de forma activa con las áreas protegidas en todo el mundo. Los casos de estudio presentados describen sólo una pequeña muestra de estas interacciones.
- La mayoría de las áreas protegidas que se describen se han establecido sin el consentimiento expreso del pueblo que habitaba con anterioridad las tierras o los mares de la región. Como resultado, las autoridades del área protegida han venido tomando decisiones sobre las especies o los ecosistemas incluidos en estas áreas, sin la plena participación de los grupos clave de interés.
- Afortunadamente, esta situación está cambiando. Esto se debe, en parte, a que está surgiendo una mayor aceptación general de los derechos de los pueblos indígenas, y también a que, en la actualidad, se reconoce ampliamente que la participación de los pueblos indígenas es esencial para asegurar la sustentabilidad a largo plazo de las áreas protegidas en las cuales ellos viven o concentran su interés.
- A veces, sin embargo, la participación real de los pueblos indígenas y tradicionales en los procesos de planeamiento y de toma de decisiones está lejos de lo que sería lo ideal. Una manera de desarrollar el co-manejo de las áreas protegidas cuando éste ha tomado raíz lentamente, puede ser a través de la consulta informal y las discusiones entre las agencias de gobierno y las comunidades de los pueblos indígenas, tal vez facilitados por las organizaciones internacionales. (en Beltrán ed., 2001).

5. Los desafíos para Chile

El proceso de creación de áreas protegidas por el Estado de Chile a lo largo del siglo XX con el objeto de conservar espacios de valor natural, no difiere en lo sustancial del que tuvo lugar en otros contextos geográficos. Por lo mismo, ha tenido muchas de las virtudes (proteger sitios y ecosistemas únicos para las futuras generaciones), así como también de los defectos (creación de unidades sobre áreas de habitación ancestral de los pueblos originarios, desarrollar las tareas de conservación con exclusión de las comunidades aledañas) que han sido identificados precedentemente.

El año 2000, se estimaba que del total de unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) (94 con un total de 14.5 millones de has.), 18 (7 parques, 7 reservas, 2 monumentos, y dos proyectos, con una superficie de 1.5 millones de has.) estaban relacionadas de algún modo con pueblos indígenas, involucrando a una población de alrededor de 17.181 personas. (CONAF, 2000).

Entre los problemas que a esa época existían en la relación entre comunidades indígenas y unidades del SNASPE se identificaban la presión de las comunidades por el uso de recursos (con fines económico productivos (ganado, recolección), simbólico religiosos, culturales, etc.); la presión por regularización de tierras al interior de las unidades; y la falta de confianza hacia los organismos de administración territorial (Valenzuela y Contreras, en Castro y Albo comp. 2000).

Producto también de diversos factores (presión indígena, democratización del país, apertura a nuevos conceptos de conservación, entre otros), y al igual que en otros contextos, en los últimos años se ha desarrollado un proceso de reformas jurídicas y políticas que apuntan hacia la construcción de una nueva relación entre las áreas protegidas –cuya administración corresponde en Chile a la Corporación Nacional Forestal (CONAF)–, y los pueblos indígenas.

En el plano jurídico cabe mencionar la ley indígena (19.253 de 1993), la que en su artículo 35 establece que *“en la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la participación de las comunidades allí existentes. La Corporación Nacional Forestal o el Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación, de común acuerdo, determinarán en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso que en aquellas áreas corresponda a las Comunidades indígenas.”*

También debe señalarse en este mismo ámbito la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992, cuya ratificación por Chile hace obligatorio su artículo 8 J antes referido, validando así los conocimientos tradicionales indígenas y su aporte a la biodiversidad. Lo mismo puede decirse de la Agenda XXI, documento programático que, aunque no tiene un rango legal, debe orientar la acción del Estado que la suscribió, y que en su Capítulo 26.4 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la administración de las áreas protegidas.

En el ámbito de las políticas públicas, la CONAF ha ido elaborando nuevos criterios y directrices que deben orientar el trabajo de las unidades del SNASPE, haciendo en ellas referencia explícita a los pueblos indígenas y a las comunidades aledañas, estableciendo la necesidad de considerar su participación en distintos niveles.

Así, en el año 2000 CONAF define como lineamientos estratégicos institucionales para el SNASPE en relación con las comunidades indígenas, la necesidad de diseñar y mantener sistemas de información y seguimiento de la relación áreas silvestres protegidas del SNASPE y las comunidades indígenas; el establecimiento de mecanismos concretos de participación indígena en el manejo de recursos, así como en la formulación de los objetivos de las unidades protegidas, sus programas técnicos, las normas de uso del territorio y la reinversión de las utilidades económicas derivadas de la administración y manejo de la unidad; la creación de un sistema institucional que permita la operación eficiente de los modelos de gestión participativos en el ámbito intra e interinstitucional; y la definición e implementación de proyectos asociativos que vinculen las Áreas Silvestres Protegidas-comunidades indígenas destinados a generar beneficios económicos permanentes (CONAF, 2000)¹⁸.

En un documento más amplio relativo a la participación comunitaria –en general– en la gestión del SNASPE, se establecen los fundamentos jurídicos, políticos e institucionales que hacen de dicha participación un imperativo para CONAF. Se definen además los conceptos, objetivos y niveles, modalidades e instancias de ésta participación.¹⁹ Entre los niveles de participación definidos se encuentra el de la información, la consulta, la asociación, la colaboración y la integración. Como instancias de participación en el nivel consultivo se plantean los Consejos Consultivos Locales (en las distintas unidades del SNASPE) y los Consejos Consultivos Regionales. En el nivel asociativo se plantean posibles convenios con comunidades indígenas y/o organizaciones comunitarias, para el desarrollo de iniciativas que permitan lograr beneficios mutuos, a partir de objetivos comunes. (CONAF (Araya ed.), 2002).

En el mismo documento se menciona como ejemplo de participación comunitaria asociativa el contrato suscrito el 2002 por CONAF con las comunidades

18 Corporación Nacional Forestal, Lineamientos Estratégico Institucionales Áreas Silvestres Protegidas del Estado y Comunidades Indígenas, CONAF, Santiago, 2000. Cabe señalar que en el documento se plantea que “la participación de las comunidades locales solo podrá considerarse realmente legítima, auténtica y válida si implica acceso real a las decisiones es decir, si es una forma real de redistribuir el poder.”

19 El documento define participación como: “Proceso impulsado por CONAF, destinado a involucrar a la comunidad en la gestión del SNASPE, para el fortalecimiento de las unidades que lo conforman, lograr una mejor identificación con el valioso patrimonio natural y cultural que comprenden, y contribuir al desarrollo de sus zonas de influencia”. (CONAF (Araya ed.), 2002).

atacameños en la región de Antofagasta, para la gestión de la Reserva Nacional Los Flamencos. Se trata de una experiencia sin duda valiosa, que ha permitido una participación creciente de los atacameños en la gestión de las unidades de ésta Reserva (7) que se encuentra ubicada en la comuna de San Pedro de Atacama, traducándose en beneficios económicos para las comunidades aledañas. Es importante señalar que ésta experiencia de asociatividad entre pueblos indígenas y el SNASPE, la más avanzada hoy existente en el país, ha significado no tan solo beneficios para dichas comunidades, sino también para la propia CONAF. Tales beneficios incluyen –según sus representantes en esa región– la mayor valoración del área protegida, y el mejoramiento del conocimiento del manejo y de la conservación de los recursos naturales allí existentes (Contreras y Valenzuela, en Díaz y Peña ed., 2003).

Si observamos las tendencias internacionales antes reseñadas, debemos admitir, sin embargo, que los pasos que se han dado en Chile en la apertura de la relación del Estado con los pueblos indígenas para la gestión de las áreas protegidas, sin duda valiosos, constituyen solo el comienzo de un largo camino a recorrer.

Tanto desde la perspectiva de los derechos indígenas, como de la perspectiva de la conservación, parece aconsejable profundizar el camino iniciado, generando alternativas y experiencias que permitan establecer lazos de cooperación cada vez mas estrechos y fecundos entre partes hasta hace poco antagónicas en materia de conservación.

Si bien los riesgos pueden parecer a muchos como significativos, identificándose entre los más evidentes aquellos que son inherentes a la “redistribución del poder” que hasta ahora el Estado ha tenido como guardián exclusivo de las unidades de conservación, y el posible deterioro de la biodiversidad que se pueda generar como consecuencia del uso de estas unidades por los pueblos indígenas, todo parece indicar que los beneficios de una alianza en este sentido son muy superiores. Entre los beneficios que las experiencias internacionales antes revisadas de cooperación para la conservación entre pueblos indígenas y Estados nos muestran, destacan la creación de un clima de mayor confianza entre ambas partes que hace posible el desarrollo de un trabajo conjunto en función de objetivos compartidos (y por tanto, la superación de los conflictos del pasado); el mejoramiento de la conservación de dichas unidades con la inclusión de nuevas capacidades y conocimientos, en este caso tradicionales; y el enriquecimiento del aporte que las áreas protegidas ofrecen a la sociedad, al pasar a concebirse no tan solo como espacios de valor natural, sino además como espacios de valor cultural.

Son estos algunos de los antecedentes, experiencias y reflexiones que los organismos del Estado a cargo de la gestión de las áreas protegidas y los pueblos indígenas que se relacionan con ellas deben tomar en consideración para adoptar sus estrategias de acción hacia el futuro en esta materia.

Bibliografía

Aylwin, José

- 2002 *El derecho de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio en América Latina: Antecedentes Históricos y Tendencias Actuales*, IEI UFRO; Temuco.

Beltrán, Javier ed. y coord.

- 2001 *Pueblos Indígenas y Tradicionales y Áreas Protegidas. Principios, Directrices y Casos de Estudio*, Unión Mundial para la Naturaleza y WWF Internacional.

Castro, Milka y Xavier Albó coords.

- 2000 *Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos del Tercer Milenio* (XII Congreso Internacional, marzo de 2000, Arica Chile) Vol. 2, Universidad de Chile, Santiago.

Corporación Nacional Forestal

- 2000 *Lineamientos Estratégico Institucionales Áreas Silvestres Protegidas del Estado y Comunidades Indígenas*, CONAF, Santiago.

——— (Araya, Pedro ed.)

- 2002 *Marco de Acción. Participación de la comunidad en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado*, CONAF.

Díaz, Miguel y Alberto Peña

- 2003 *Arboles, recursos naturales y comunidades indígenas en Chile*, Corporación Nacional Forestal.

Martínez Cobo, José

- 1986 *Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas*, vol V, *Conclusiones, propuestas y recomendaciones*, Nueva York, Naciones Unidas (ECN.4/Sub.2/1986/7/ Add.4).

Stevens, Stan

- 1997 *Conservation Through Cultural Survival. Indigenous Peoples and Protected Areas*, Island Press, Washington DC.

Wells, Michael and Karina Brandon

- 1992 *People and parks. Linking protected area management with local communities*, The World Bank, Washington DC.

Anexo 1

Sistema internacional de categorías de Áreas Protegidas de la UICN - 1994

Las seis categorías de manejo se definen de la siguiente manera, de conformidad con su principal objetivo de manejo:

- I. Área protegida manejada principalmente con fines científicos o con fines de protección de la naturaleza. Áreas terrestres y/o marinas que poseen algún ecosistema, rasgo geológico o fisiológico y/o especies destacados o representativos, destinadas principalmente a actividades de investigación científica y/o monitoreo ambiental; o vastas superficies de tierra y/o mar no modificadas o ligeramente modificadas, que conservan su carácter e influencia natural, no están habitadas de forma permanente o significativa, y se protegen y manejan para preservar su condición natural (Área Natural Estricta/ Área Natural Silvestre).
- II. Área protegida manejada principalmente para la conservación de ecosistemas y con fines de recreación. Áreas terrestres y/o marinas naturales, designadas para a) proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas para las generaciones actuales y futuras, b) excluir los tipos de explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con el cual fue designada el área, y c) proporcionar un marco para actividades espirituales, científicas, educativas, recreativas y turísticas, actividades que deben ser compatibles desde el punto de vista ecológico y cultural (Parque Nacional).
- III. Área protegida manejada principalmente para la conservación de características naturales específicas. Áreas que contienen una o más características naturales o naturales/culturales específicas de valor destacado o excepcional por su rareza implícita, sus calidades representativas o estéticas o por su importancia cultural (Monumento Natural).

- IV. Área protegida manejada principalmente para la conservación, con intervención a nivel de gestión. Áreas terrestres y/o marinas sujetas a intervención activa con fines de manejo, para garantizar el mantenimiento de los hábitat y/o satisfacer las necesidades de determinadas especies (Área de Manejo de Hábitat/Especies).
- V. Área protegida manejada principalmente para la conservación de paisajes terrestres y marinos y con fines recreativos. Superficies de tierra, con costas y mares, según el caso, en las cuales las interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años, han producido zonas de carácter definido con importantes valores estéticos, ecológicos y/o culturales, y que a menudo albergan una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta interacción tradicional es esencial para la protección, el mantenimiento y la evolución del área (Paisaje Terrestre y Marino Protegido).
- VI. Área protegida manejada principalmente para la utilización sustentable de los ecosistemas naturales. Áreas que contienen predominantemente sistemas naturales no modificados, que son objeto de actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo un flujo sustentable de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad (Área Protegida con Recursos Manejados).

Anexo 2

Congreso Mundial de la Naturaleza, octubre de 1996, resolución 1.53: Pueblos indígenas y Áreas Protegidas

Recordando que han sido establecidas algunas áreas protegidas en tierras o territorios de los pueblos indígenas sin el consentimiento ni la participación de los pueblos afectados;

Considerando los términos de la Convención 169 de la OIT y los del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sobre el papel de los pueblos indígenas con respecto al manejo, uso y conservación de la biodiversidad;

Considerando las recomendaciones y directrices del Programa 21;

Considerando que en *Cuidar la Tierra* se destaca el papel de los pueblos indígenas en el desarrollo sustentable y sus derechos en el manejo de los recursos naturales;

Considerando las recomendaciones del Cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas en que se insta a desarrollar políticas para las áreas protegidas que resguarden los intereses de los pueblos indígenas;

Reconociendo que varios gobiernos han adoptado ya políticas y medidas para incorporar plenamente los derechos e intereses de los pueblos indígenas en el establecimiento y manejo de áreas protegidas dentro de sus tierras y territorios;

El Congreso Mundial para la Naturaleza, en su primer período de sesiones, Montreal, Canadá, 14 a 23 de octubre de 1996:

1. **Solicita** al Director General, el Secretariado y sus programas técnicos, Comisiones, miembros y Consejeros de la UICN, dentro de los recursos disponibles acoger, promover, participar y abogar en el desarrollo e implementación de una clara política con respecto a las áreas protegidas establecidas en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, que se base en los siguientes principios:

- a) el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a sus tierras o territorios y recursos naturales que se encuentren dentro de las áreas protegidas;
 - b) el reconocimiento de la necesidad de lograr un acuerdo con los pueblos indígenas previo al establecimiento de áreas protegidas en sus tierras o territorios;
 - c) el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a participar efectivamente en el manejo de las áreas protegidas establecidas en sus tierras o territorios, y a ser consultados sobre cualquier decisión que afecte a sus derechos e intereses sobre tales tierras o territorios;
- 2. **Insta** a los miembros de la UICN a establecer mecanismos apropiados a nivel nacional, para el desarrollo y la implementación de políticas sobre áreas protegidas y pueblos indígenas, que sean consistentes con estos principios;
 - 3. **Solicita** a la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN que establezca vínculos más estrechos con las organizaciones indígenas a fin de incorporar los derechos e intereses de los pueblos indígenas en la aplicación de Categorías de Manejo de Áreas Protegidas de la UICN;
 - 4. **Solicita** al Director General que, dentro de los recursos disponibles, incorpore en el Programa sobre Áreas Protegidas y Patrimonio Natural, acciones específicas que aseguren el desarrollo ulterior y la implementación de las políticas adecuadas basadas en estos principios.

Fuente: Beltrán ed. (2001).

Anexo 3

Principios y directrices sobre áreas protegidas y pueblos indígenas / tradicionales

Principio 1

Los pueblos indígenas y tradicionales mantienen un antiguo vínculo con la naturaleza y tienen una comprensión profunda de ella. Han hecho frecuentemente contribuciones significativas para el mantenimiento de muchos de los ecosistemas más frágiles del planeta, a través de sus prácticas tradicionales de uso sustentable de recursos y su respeto por la naturaleza basado en su cultura. Por tanto, no debería haber conflicto intrínseco entre los objetivos de las áreas protegidas y la existencia, dentro o alrededor de sus fronteras, de pueblos indígenas y tradicionales. Más aún, dichos pueblos deben ser reconocidos como socios legítimos e iguales en el desarrollo e implementación de estrategias de conservación que afectan sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos y, en particular, en el establecimiento y manejo de áreas protegidas.

Principio 2

Los acuerdos concluidos entre las instituciones de conservación, incluidas las agencias que administran las áreas protegidas, y los pueblos indígenas y tradicionales para el establecimiento y manejo de áreas protegidas que afecten sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos deben basarse en el respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales a la utilización tradicional sustentable de sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos. Simultáneamente, tales acuerdos deben basarse en el reconocimiento por parte de los pueblos indígenas y tradicionales de su responsabilidad de conservar la biodiversidad, la integridad ecológica y los recursos naturales que contienen tales áreas protegidas.

Principio 3

En todos los asuntos pertinentes a los intereses mutuos de las áreas protegidas y los pueblos indígenas y tradicionales, deben tomarse en cuenta los principios de descentralización, participación, transparencia y rendición de cuentas.

Principio 4

Los pueblos indígenas y tradicionales deben poder acceder plena y equitativamente los beneficios asociados con las áreas protegidas, reconociendo debidamente los derechos de otros grupos legítimos de interés.

Principio 5

Los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales en relación con las áreas protegidas constituyen con frecuencia una responsabilidad internacional, dado que muchos de los territorios, las tierras, las aguas, los mares costeros y otros recursos que dichos pueblos tradicionalmente poseen, ocupan o utilizan de otra forma atraviesan fronteras, de la misma forma que lo hacen muchos de los ecosistemas que requieren protección.

Fuente: IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, WWF y UICN/ CMAP (Beltrán ed. 2001).

Las áreas de conservación en Costa Rica: pasado y presente

Silvia Rodríguez Cervantes¹

1. Introducción

El impacto del ser humano sobre los recursos naturales empezó a sentirse con más fuerza a partir del inicio de la agricultura hace aproximadamente 10000 años atrás. Esta actividad al hombre le permitió domesticar algunas plantas y animales silvestres para su alimentación, vestido y albergue, pero al mismo tiempo transformó los ecosistemas naturales, especialmente aquellos que reunían condiciones favorables para el asentamiento humano. A pesar de estos cambios, la población dispersa de ese tiempo no imprimió gran presión al medio ambiente ni por medio de la agricultura ni por otras actividades. Por tanto, durante miles de años nadie sintió la necesidad de delimitar y aislar partes de la tierra con fines de conservación ni de guardar semillas para la posteridad en bancos de germoplasma o en jardines botánicos.

La idea de las áreas protegidas surge muchos siglos después, durante la revolución industrial a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En ese entonces se empezaron a escuchar voces aisladas de preocupación por el medio ambiente tratando de elevar la conciencia sobre la responsabilidad de cada generación para asegurar la permanencia de algunas porciones representativas de diferentes ecosistemas. Con el paso del tiempo los objetivos para la creación de las Áreas Naturales Protegidas (ANAP) ó Áreas Protegidas como se las denomina en Bolivia han ido cambiando pasando a ser primero lugares para el solaz y esparcimiento, y luego sitios para la investigación científica y el ecoturismo, hasta reservorios de recursos silvestres *in situ*, base de futuros productos farmacéuticos, químicos y agrícolas.

1 Es profesora emérita de la Universidad Nacional Heredia-Costa Rica. Presidente de la fundación Genetic Resource Action International (GRAIN) con sede en España.

Por su parte, los jardines botánicos fueron la primera forma de conservación *ex situ* de los recursos genéticos realizada por algunos países europeos a mediados del siglo XVIII con objetivos científicos y económicos, aunque también para el solaz y el descanso. Otro estilo de conservación *ex situ*, son los distintos tipos de fincas experimentales y de bancos de germoplasma para la conservación de los recursos para la alimentación y la agricultura o recursos domesticados. Estos últimos se empezaron a consolidar en el mundo a partir de 1970 (Ver recuadro 1).

En los últimos años se ha desarrollado una forma novedosa de conservación *ex situ* que consiste en recopilar y catalogar plantas, animales y microorganismos con fines de bioprospección a partir de bases de datos computarizadas con información de interés para la industria agroquímica, farmacéutica y biotecnológica.

No puedo dejar de mencionar la conservación del germoplasma animal y vegetal en *finca*, que durante miles de años han hecho los campesinos y las campesinas en todo el mundo, procedimiento que conjunta el uso de diversas variedades de semillas con su mejoramiento y adaptación a diferentes ecosistemas y por lo tanto con resultados indiscutibles en la conservación y enriquecimiento de la biodiversidad. Basada en este sistema campesino, una corriente de agrónomos liderados por Erna Bennet defendía en los años de 1950 y 1960 la conservación *in situ* de los recursos domesticados en contraste con la alternativa del aislamiento de semillas en bancos de germoplasma (Pistorious 1997:27-30). Este tipo de conservación *in situ*, es obviamente diferente a la que se incentiva con el mismo nombre pero para la conservación principal de la biodiversidad silvestre por medio de la creación de parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas y que mencioné párrafos arriba. Para evitar confusiones, y porque en realidad los sistemas de trabajo campesino se realizan en forma mixta cuidando y usando recursos fito y zoogenéticos, domesticados y silvestres (Ver recuadro 1) aquí utilizaré el término para ellos de conservación *en finca*. (Rodríguez, S. 1993)

En esta ponencia me referiré básicamente al desarrollo y a interrogantes actuales de las ANAP en el mundo y en Costa Rica. Al hacerlo, iré entrelazando algunos acontecimientos internacionales que sirven de hitos históricos para su establecimiento y tipo de manejo. Por supuesto que a esos acontecimientos internacionales se suman esfuerzos individuales e institucionales, y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que también tomaré en cuenta en este recuento histórico.

Recuadro 1
La Conservación de la Biodiversidad Silvestre y Domesticada (*)

De la biodiversidad silvestre: Sus componentes pueden ser mantenidos in situ, es decir aislando ecosistemas específicos (Ej. parques nacionales y otras áreas naturales protegidas) para apartarlos lo más posible del impacto humano o que éste sea mínimo.

De la biodiversidad domesticada: Forman parte de ella los recursos agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros cultivados por el ser humano. Cuando se mantienen en jardines botánicos, bancos de germoplasma, algunas fincas experimentales y bancos de datos, se dice que su conservación es ex situ, es decir, aislados de manera artificial, fuera de su hábitat natural.

De la biodiversidad domesticada y silvestre:

a) En la finca: El trabajo cotidiano realizado por muchos campesinos e indígenas en la finca, es un tipo de conservación mixta en donde ellos mantienen policultivos de variedades locales dejándolos interactuar con sus parientes silvestres y con animales domésticos. Algunos agrónomos defendieron estos principios en las décadas de 1950-60 llamándola conservación in situ que no debemos confundir con la conservación de la biodiversidad silvestre en parques nacionales por lo que en este trabajo lo llamaré conservación en la finca.

b) Computarizada: Forma novedosa de conservación ex situ que consiste en recopilar y catalogar plantas, animales y microorganismos con fines de bioprospección a partir de bases de datos computarizadas con información de interés para la industria agroquímica, farmacéutica y biotecnológica.

(*) Como cualquier tipo de clasificación, hay zonas grises que no son fácilmente ubicables. Así, en las ANAP lo que se protege no es solamente la biodiversidad silvestre. Este es el caso de la reserva de la biosfera de Manantlán, en México, donde se protege al llamado maíz perenne (*zea diploperenis*), al que se le atribuye domesticación de las comunidades locales.

2. Las áreas naturales protegidas: entre el gozo estético y la explotación de la biodiversidad

El Parque Nacional Yellowstone inicia el proceso de protección In Situ en 1862

A mediados del siglo XIX, la parte Este de los Estados Unidos había sido fuertemente urbanizada, las áreas rurales remanentes habían perdido el sabor de lo agreste y la proporción entre los ecosistemas naturales y los artificializados había cambiado dramáticamente. Sus habitantes, de ambiente citadino, artístico y universitario empezaron a pensar en la posibilidad de guardar algunos de los últimos vestigios que quedaban de los ecosistemas originales de ese país. Su deseo era poder disfrutar de lugares en donde pudieran practicar la cacería mayor o simplemente experimentar “lo silvestre” por lo que se dieron a la tarea de apoyar la legislación que creó el Parque Yellowstone en 1862, localizado en el Oeste del país, sabiendo que allí existían todavía áreas silvestres (Nash 1978:603). Un empresario de ferrocarriles y los residentes de los estados de Wyoming y Montana también dieron su apoyo a dicha legislación ante la posibilidad de percibir los ingresos que el parque generaría por medio del turismo (Nash 1970). Resulta entonces que el origen de los parques nacionales se encuentra en las necesidades de recreación de una población urbana sofisticada sin tener, para entonces, mayores objetivos científico-tecnológicos ni económicos.

Después de la constitución del Parque Nacional Yellowstone en los EE UU, el impulso conservacionista fue seguido sin mucha fuerza por otros países, especialmente los desarrollados. Igualmente temprana, pero aislada, fue la firma el Convenio Internacional para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América en 1940. Allí se insta a los gobiernos contratantes a crear parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes². Era notorio que en ese momento no existía ni el clima necesario ni se estipularon en el Convenio los mecanismos adecuados para poner en vigor ésta y otras iniciativas que en los años de la posguerra lanzaron algunos organismos internacionales.

En el caso de Costa Rica, es hasta el 19 de octubre de 1966 cuando la Asamblea Legislativa ratifica el Convenio anterior mediante Ley de la República No. 3763. A pesar de este desfase de más de un cuarto de siglo, los términos del Convenio dieron base para el comienzo del proceso de protección en Costa Rica aún antes de su ratificación. El primer antecedente nacional para la protección de áreas silvestres de la posguerra se encuentra en la Ley Orgánica del Instituto de Turismo (Ley No. 1917) del 30 de julio de 1955, que en su artículo 6 ordena que este instituto se encargue de la custodia y conservación de una zona alrededor de los cráteres de los volcanes del país, declarándose tales zonas parques nacionales.

La I Conferencia Mundial de Parques en Seattle-Washington y el deseo de un movimiento mundial (1962)

Cien años después de la fundación del Parque Yellowstone, se celebró en 1962 la I Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales en Seattle, Washington, que tuvo como propósito “establecer un mayor entendimiento internacional y alentar el movimiento de parques nacionales sobre una base mundial” (Adams, B. 1962: xxxii)³. En dicha Conferencia, se perciben nuevos objetivos, por ejemplo, se habló constantemente del turismo como forma de promocionar estas áreas de singular belleza y también, aunque de manera general e intuitiva⁴, se señaló la posibilidad de realizar investigación científica. No se discuten fines económicos

-
- 2 Estas categorías se encuentran definidas en el artículo primero de esta Convención que indudablemente han sido modificadas o aumentadas con el transcurso del tiempo.
 - 3 Pasaron ocho años para que se creara el 21 de octubre de 1963 y por decreto ejecutivo la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco. Siete años más tarde, el 7 de septiembre de 1970 se crea por la misma vía el Monumento Nacional Cahuita.
 - 4 Por ejemplo, Beltrán (1962:366) se refiere a dos razones básicas para el establecimiento de los parques nacionales en ese entonces: una por su belleza y atracción y la otra porque esas áreas, en su estado natural, podrán ser útiles para el estudio de problemas científicos.

más específicos. Tampoco se reportan mayor influencia de esta conferencia en el área centroamericana.

La Conferencia de Estocolmo y el II Congreso Mundial de Parques en Yellowstone: Plataformas de lanzamiento de las áreas naturales protegidas (1972)

Diez años después, en el año de 1972, se celebraron dos actividades⁵ muy importantes para el movimiento conservacionista: la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, conocida como la Conferencia de Estocolmo, y el II Congreso Mundial de Parques Nacionales en Yellowstone que incluso se apoyan y complementan.

Como antecedentes debo decir que, por un lado había aumentado la conciencia de la erosión genética provocada por la Revolución Verde y el avance de la deforestación en los países tropicales. Por otro, los países industrializados requerían de la protección de los recursos bióticos, materia prima de la biotecnología, que a la sazón mostraba grandes avances y un futuro económico promisorio. Por lo tanto, se requería una protección especial de los ecosistemas ricos en biodiversidad, localizados principalmente en los países tropicales para las necesidades actuales y futuras de la biotecnología.

Estados Unidos marca la pauta para la creación de las ANAP. *Dentro de ese contexto de toma de conciencia de los problemas ambientales y sus impactos en la agricultura y en la biotecnología, tenemos que los EE UU proponen en la Conferencia de Estocolmo la creación de áreas silvestres protegidas en donde pueda velarse por la protección de los recursos genéticos de plantas, animales y microorganismos (Departament. of State 1971:15-31). La introducción al capítulo sobre pozas genéticas de la ponencia presentada oficialmente por este país, es especialmente reveladora en el siguiente párrafo inicial:*

La riqueza de la diversidad de las especies silvestres y plantas domesticadas primitivas para la agricultura y la forestería, así como también los animales y microorganismos, está siendo agotada y dislocada. Algunos de los principales países como los Estados Unidos tienen programas para conservar estos recursos genéticos, pero muchos de estos recursos se originan en las naciones en desarrollo que están sujetos a pérdida inmediata. El problema es mundial por el enorme espectro de especies

5 Sólo me estoy refiriendo a las conferencias más directamente vinculadas al tema de esta ponencia, pero hubo una serie de reuniones y de publicaciones que tuvieron profunda influencia indirecta. Algunas de ellas: En 1972 la publicación del libro “Los límites al crecimiento” (Meadows, D. et all 1972). En 1974, la Conferencia sobre la Alimentación que abordó el asunto de la escasez de alimentos y las hambrunas aparentemente provocadas por condiciones climáticas adversas. En ese mismo año la Conferencia Mundial sobre Población en donde se relacionan los problemas demográficos y los recursos naturales.

involucradas y las dimensiones de la agricultura mundial. El hecho de que la domesticación avanzada se encuentre en los países desarrollados, remotos del origen de las especies, les otorga una gran dependencia para el acceso de los materiales básicos de cultivo. Como nosotros no tenemos el control directo para la disposición de los recursos ubicados en otros países, sólo los esfuerzos de cooperación, ya sea bilateral o a través de organizaciones internacionales, resolverán el problema (Departamento de Estado 1971:15) (Traducción libre SRC).

Este párrafo resume perfectamente la importancia que tiene para la agricultura y la incipiente biotecnología moderna el germoplasma vegetal y los parientes silvestres localizados en los centros de diversidad. Por último, aún dentro del documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es interesante anotar el párrafo siguiente en que se evidencia la convergencia histórica entre necesidad de proteger los distintos tipos de germoplasma para fines comerciales o industriales, la creación de áreas naturales y el uso del paliativo económico del turismo:

La forma más económica de mantener los depósitos o reservas genéticas de especies silvestres en la mayoría de los casos será aislar áreas naturales, parques nacionales o reservas similares en donde las poblaciones se puedan mantener “in situ”. En muchos casos estas reservas pueden servir de atracciones turísticas que traen considerables beneficios económicos a las naciones involucradas, reduciendo de esta manera o eliminando costos extraídos de los bolsillos para la preservación de especies (Department of State 1971:26).

Tres propuestas resultaron de la Conferencia de Estocolmo: el Plan de Acción, el Programa de Acción Ambiental, y la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano. El Plan de Acción contiene 109 recomendaciones, pero para el propósito que aquí interesa, es importante analizar aquellas relacionadas con las sugerencias de los EE UU y aprobadas en la Conferencia:

- La Recomendación No. 38 solicita a los gobiernos “Dar los pasos necesarios para aislar áreas representativas de ecosistemas de significado internacional para su protección bajo acuerdos internacionales” (Allen 1972:6)
- Las Recomendaciones de la No. 39 a la 45 complementan lo anterior, planteando entre otras cosas la importancia vital de la conservación genética, de su forma de manejo, almacenamiento, intercambio de información y monitoreo
- En la Recomendación No. 39 se pide a los gobiernos que accedan a comprometerse en programas internacionales para conservar los recursos genéticos *in situ* en bancos de semillas, colecciones de cultivos, etc.; y *ex situ*, conservando a las poblaciones vegetales y animales en el medio ambiente natural y en su proceso de evolución.

Allen (1962) afirma que las recomendaciones relacionadas con el mantenimiento de la diversidad genética constituyen uno de los grandes logros de la Conferencia de Estocolmo.

La celebración del II Congreso de Parques Nacionales en Seattle, Washington poco después de la Conferencia de Estocolmo, contiene resoluciones de apoyo que influirían en la consolidación de las ANAP en distintos lugares. Así tenemos en la Resolución No. 7, propuesta por los cinco representantes de los países Centroamericanos, quienes sugirieron la celebración de reuniones regionales para concertar acciones que desembocaran en el manejo conjunto de los recursos naturales y culturales. Esta resolución fue aprobada unánimemente por los noventa países representados y a los dos años, en 1974, se celebraba en San José, Costa Rica la primera reunión centroamericana con ese fin⁶. Contó con la asistencia de representantes de los cinco países Centroamericanos y de Panamá y las propuestas giraron en torno al establecimiento de parques nacionales y parques fronterizos o regionales y el impulso que debería darse al turismo y a aspectos culturales dentro de ellas.

Entre los años 1969 a 1981 las áreas protegidas bajo diferentes tipos de manejo, aumentaron en Centroamérica de 25 a 149 y el total en kilómetros cuadrados pasaron de 193,500 a 615,000 (Neumann and Machilis 1989:14, citando USDI, NPS 1985:69). En el caso concreto de Costa Rica, el establecimiento sistemático de los parques nacionales es evidentemente el resultado directo de las recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo y del Congreso Mundial de Parques. Sin embargo, ¿cuáles fueron las razones de que se detuviera el crecimiento de parques nacionales y se establecieran otras categorías de manejo? Su respuesta la trataré de ensayar en el siguiente punto.

El III Congreso Mundial de Parques en Bali (1982)

Las ANAP no se establecen en un vacío social: Después del cabildeo en torno al lanzamiento de la propuesta para la creación de las áreas de conservación en el mundo, a lo largo de la década de los 70 del siglo pasado, encontramos que éstas crecen rápidamente no sólo en la región Centroamericana. Ya para 1987 la Comisión para el Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland, estimó que un 4% de la superficie del mundo se encontraba bajo esa protección y que dos tercios de ella se localizaban en países económicamente pobres aunque ecológicamente ricos (World Commission 1987:147). Muchos países habían respondido a las sugerencias de los Estados Unidos hechas en la Conferencia de Estocolmo y a las distintas propuestas emanadas de otros foros internacionales.

6 Una reunión similar fue celebrada en ese mismo año para los países de África del Este, en el Parque Nacional Serengti en Tanzania.

No obstante, ya para el principio de la década de los años ochenta, un nuevo problema empezaba a surgir. El mundo entero, y en mayor proporción los países en los que se encuentran dos tercios de las áreas protegidas, estaban atravesando por una crisis económica que afectó todos los ángulos de la vida cotidiana, incluyendo el papel del estado y la conservación de los recursos naturales. Los grupos más empobrecidos de la población que vivían con anterioridad en los lugares que luego fueron declarados áreas de conservación o en sus alrededores, empezaron a sentir una amenaza a sus opciones de subsistencia y de vida con este tipo de acción. Algunos gobiernos, como el de Brasil, también se manifestaron abiertamente en contra de iniciativas extranjeras que detuvieran lo que se consideraba “desarrollo” en aras de un conservacionismo galopante.

Rao y Gisler (1990:22) establecieron una serie consecuencias sociales que las políticas de protección de las áreas y las vidas silvestres trajeron a los países en desarrollo. Tales políticas resultaron problemáticas en tanto que:

- Impusieron la relocalización de los antiguos pobladores en otras áreas no familiares a ellos o simplemente porque se les privó de sus tierras ancestrales
- En el caso de que se les permitiera seguir viviendo en el lugar, ocasionaron limitaciones al uso tradicional de los recursos naturales, que había sido una piedra angular para el equilibrio de la vida
- Dislocaron las economías hogareñas, en los sistemas de tenencia de la tierra, la división del trabajo y destrezas tradicionales de las cuales ellos dependen
- Provocaron interferencia o conflicto con los valores culturales o religiosos
- Provocaron exposición a culturas y estilos de vida ajenos tales como los que trae consigo el turismo y las nuevas tecnologías
- Sofocaron un estilo de desarrollo concebido por la gente local.

Los mismos autores citan ejemplos concretos de Zambia, Zaire, Nepal, Kenia, Tanzania, y Uganda, que describen la forma cómo las áreas de conservación impactaron a poblaciones locales en esos países. Las reacciones no se dejaron esperar yendo desde respuestas individuales a otras de grupos o comunidades organizadas; y desde una actitud de indiferencia hasta el repudio y la rebelión. Así, tenemos en este último caso el referido por McNeely (1990:16):

...los Bodos, una tribu de Assam (India), invadieron el Parque Nacional Manas, asesinaron a 12 guardas forestales, limpiaron parte de la tierra y abrieron la reserva a cazadores y pescadores furtivos. Los Bodos argumentaban que esas eran tierras que sus ancestros les habían legado y que sólo estaban reclamando algo que se les había quitado bajo el régimen Británico.

McNeely nos da otros ejemplos en Perú y en el mismo Estados Unidos, subrayando que de ninguna manera son ejemplos aislados. Este autor, citando el

estudio llevado a cabo por Machlis y Tichnell (1985), indica que ellos identificaron 16,111 amenazas específicas en los parques del neotrópico, las cuales van desde robos de plantas o animales silvestres, malas relaciones con la población local, demandas en conflicto por los recursos del parque, hasta problemas de otro tipo como el cambio en el clima, el aumento de la población humana y el aumento en la demanda de los recursos naturales. En un registro más específico de las áreas protegidas en el mundo que tienen algún tipo de amenaza, la UICN incluía en 1990, noventa sitios.

La Conferencia de Río de Janeiro: la discordia sobre el acceso y el patentamiento de la biodiversidad (1992)

El Jefe de la Delegación de los EE.UU. a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. William Reilly, decía “Ciertamente hay una crisis de pérdida de biodiversidad en el mundo de hoy esta es una tragedia para el planeta, una pérdida de productos de uso potencial, (pero) bajo ninguna circunstancia vamos a pedir que nuestra industria comparta sus patentes o haga que su tecnología se encuentre disponible bajo términos concesionales. Hemos negociado en la Ronda de Uruguay del GATT tratando de proteger los derechos de propiedad intelectual. No estamos por ceder aquí, en un tratado ambiental, lo que tanto nos costó proteger allá. (Usdin 1992:9) (Traducción libre SRC).

Esta Conferencia, mejor conocida como “Cumbre de la Tierra”, fue el seguimiento de la Conferencia de Estocolmo de 1972. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a la Cumbre de la Tierra en 1989, la biodiversidad se convirtió en uno de los temas centrales de la discusión. Este asunto, y el del calentamiento global, fueron considerados de tal importancia, que los delegados a esa Conferencia firmaron sendos documentos vinculantes como convenios internacionales⁷.

El Cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales fue celebrado en Caracas, Venezuela, en febrero de 1992. La Declaración respectiva concede también una alta prioridad a las necesidades y preocupaciones de la población local en el establecimiento y manejo eficaz de parques nacionales y otras áreas (FAO-UNEP 1992:13), pero sus resultados fueron opacados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992.

7 Otros tres documentos no vinculantes también emergieron de esta Cumbre, como son, la Declaración de Río, que contiene un conjunto de principios de desarrollo sostenible; la Agenda 21, que contiene una variedad de especificaciones para enfrentar los problemas ambientales; y la enunciación de un conjunto de principios forestales para el manejo, conservación y uso de los bosques (Raeburn 1991:5).

Dentro de este marco, el Comité Intergubernamental de Negociaciones del Convenio de Biodiversidad, después de siete períodos de sesiones y cinco borradores, arribó a la Conferencia de Río con un documento lleno de corchetes, esto es, con un documento que incluía numerosos artículos sobre los cuales no se había alcanzado consenso (Comité Intergubernamental de Negociación, 1992). El Convenio de Biodiversidad se convirtió en el documento más controversial de los cinco analizados. Fue firmado por 150 países pero el presidente del país más poderoso, George Bush padre, se negó a firmarlo. El acceso a los recursos, la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica, fueron temas muy sensibles para los negociadores de los Estados Unidos quienes pensaron que, así como estaban establecidos, atentarían en contra de su interés nacional (Usdin 1992:8).

A pesar de esa resistencia, el tema del pago por los recursos de la biodiversidad, especialmente los contenidos en las ANAP era irreversible (Barton 1992:774). En la Cumbre de la Tierra se presentó como modelo de implementación conjunta entre los países industrializados y los países ricos en biodiversidad, la negociación celebrada entre el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), que es una asociación civil y la compañía farmacéutica Merck & Co. para llevar a cabo actividades de prospección química más tarde llamadas bioprospección (Stone 1992:1624 y basado en Science 1992:1142). En el contrato firmado por ambas instituciones en septiembre de 1991, la Merck decidió contribuir económicamente por el acceso a un número no dado a conocer de recursos provenientes de las ANAP públicas de Costa Rica. También, esta empresa acuerda apoyar en algunos aspectos la estructura científica de este país pero como contraparte, defiende para sí los derechos de propiedad intelectual en caso de obtener algún producto para el mercado y el secretismo en algunas cláusulas del contrato.

El convenio INBio-Merck y convenios similares de bioprospección se presentaron con una fuerte propaganda como modelos de emprendimiento conjunto entre países en los que todas las partes ganarían en términos económicos y también ecológicos. Detrás de ese modelo hay una clara ideología que se manifiesta en los siguientes planteamientos que no es el momento de rebatir aquí:

- “Hay que vender el bosque para salvarlo pues el mercado es el que ofrece el mejor incentivo para mantener la biodiversidad”.
- Es necesario trasladar los recursos en dominio público a manos privadas para evitar así la llamada “tragedia de los bienes comunes”, cuestionable tesis que habla de que, cuando los bienes son de todos y de ninguno hay una tendencia a no cuidarlos y por lo tanto, a que se extingan o erosionen.
- El modelo parece seguir apoyando la antigua receta de los años sesentas y setentas que indicaba que, para que los países subdesarrollados salieran de su situación, requerían seguir el ejemplo de los países industrializados. En este caso concreto, el desarrollo sustentable se alcanzaría, entre otras

cosas, con la proliferación de contratos como el INBio-Merck, ya que éste supone, además de los ingresos monetarios otorgados al país proveedor por la venta de los recursos del bosque, la transferencia de tecnología de los países industrializados. De esta manera, con el tiempo, todo el proceso industrial se podría efectuar en los países subdesarrollados, irónicamente los más ricos en biodiversidad.

Casi trece años después de celebrado el primer contrato INBio-Merck que tenía como materia prima la biodiversidad de las ANAP públicas de Costa Rica, no se ha reportado ningún producto farmacéutico o industrial exitoso. El estado, las universidades públicas y las ANAP habrían recibido aproximadamente US\$ 2,768.407 a lo largo de nueve años (de 1991 a 2000). En cambio, el ecoturismo, que tiene también como base fundamental la visitación de las ANAP del país, produce \$500,000,000 dólares al año. Con respecto a las comunidades locales y pueblos indígenas, ellas no han recibido ni un solo beneficio económico del emprendimiento conjunto, solo expectativas que han empezado a languidecer.

Lo que sí produjo indirectamente este contrato, fue una temprana toma de conciencia de la población costarricense para normar adecuadamente el proceso de bioprospección y otro tipo de utilización de la biodiversidad de las ANAP estatales. De allí que, como producto de un proceso muy participativo, fue redactada y luego sancionada la Ley de Biodiversidad en mayo de 1998. Esta ley contempla, en uno de sus capítulos, la formación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el establecimiento de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, que supuestamente serían instancias de control ciudadano sobre las acciones gubernamentales en relación con el uso, el manejo y la protección de la biodiversidad. Como reglamento de la ley, en diciembre pasado (2003) se publicaron como Decreto ejecutivo las Normas de Acceso a los Recursos Bioquímicos y Genéticos.

Así mismo, distintas organizaciones de la sociedad civil han hecho un fuerte cabildeo para retardar lo más posible la aprobación de los derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida, ya que estamos conscientes de que éste es uno de los mecanismos con el cual se despojará a las comunidades locales y los pueblos indígenas del control de los recursos. Desgraciadamente esta lucha está en peligro de perderse en primer lugar, con las firmas de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica; en segundo lugar con el eventual Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, en tercero, si no se modifica el Art. 27.3 b) del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para que se prohíba cualquier tipo de propiedad intelectual sobre formas de vida.

A pesar de las conquistas en el terreno de la legislación, todavía falta en Costa Rica mucho camino por recorrer para que las comunidades locales y los pueblos indígenas tengan una verdadera participación tanto en la CONAGEBIO

como en los Consejos de Áreas de Conservación en donde tienen un representante por consejo.

La Cumbre del Desarrollo Sostenible (2002) y el V Congreso Mundial de Parques en Durban-Sudáfrica (2003)

Todavía los resultados de estos dos últimos eventos están muy frescos para conocer en toda su extensión su impacto en Costa Rica. Sin embargo, podemos observar varias tendencias preocupantes:

- 1) En primer lugar llama la atención el lema del V Congreso de las ANAP: “Beneficios más allá de las fronteras” el cual confirma la pauta que ya se venía observando desde la Cumbre de la Tierra, en cuanto al énfasis excesivo dado al uso mercantil de los recursos. Esto dista totalmente de las razones conservacionistas que impulsaron en 1940 la firma del Convenio Internacional para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América.
- 2) En segundo lugar, y como para ir dando vida al lema arriba citado, se han venido manejando y machacando en una y otra reunión, una serie de conceptos como por ejemplo: “nuevos mecanismos financieros”, “colaboraciones para las ANAP”, “certificación de las ANAP”, sociedades comerciales o “partnerships”, personas interesadas o “stakeholders” y otras con clara orientación hacia lo mercantil y algunos con escasa traducción al español. Hay otros conceptos como el de “governance” (gobernabilidad, control o autoridad) con toda una serie de calificativos: como control “bueno”, control internacional, control social (Scanlon, J. y Burhenne-Guilmin, F. 2003), igualmente contruidos desde el idioma inglés.
Lo cierto es que todas estas nociones se van imponiendo poco a poco de arriba hacia abajo hasta vaciarse de significado, igual que en otro tiempo lo hicieron conceptos como: la teoría de las islas, la de los corredores biológicos, las áreas de amortiguamiento, las reservas de la biosfera, la bioprospección, la distribución justa y equitativa de beneficios, los derechos intelectuales *sui generis*, la transparencia, el “empowerment” o empoderamiento –que tampoco cuenta siquiera con una traducción adecuada al español- y que todos fuimos aprendiendo a veces sin saber de dónde venían y con qué propósitos las estábamos siguiendo.
- 3) En tercer lugar, observamos también, que los conceptos no están tan lejos de las acciones y que la nueva arremetida para la mercantilización de la biodiversidad se fomenta ahora por medio de alianzas o sociedades comerciales a pesar de la pérdida de momentum en negociaciones como las basadas en el contrato INBio Merck y a pesar de los fracasos de la bioprospección con

distribución justa y equitativa para las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Por ejemplo, la UNCTAD ha retomado su iniciativa de los Bionegocios que tiene alcances globales. Para América del Sur, sabemos que el Secretariado General de la Comunidad Andina, está trabajando para hacer una sociedad con la ONG Conservación Internacional; y en el mes de mayo pasado se realizó el primer Foro de Inversionistas para las empresas de la Biodiversidad de la región Andina-Amazónica. En nuestra región, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la NASA de los Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para el desarrollo del Corredor Biológico Mesoamericano, que luego derivó en el llamado Plan Puebla Panamá. Este corredor es una iniciativa que tiene como concepto central la supuesta integración de la conservación y del uso sustentable de la biodiversidad en donde el desarrollo económico juega un papel vital.

El Grupo de Países Megadiversos Afines, formado en 2002 por quince de los países más ricos en biodiversidad (Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenya, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela), igualmente impulsa los bionegocios. Aunque hablan de constituirse en un mecanismo para la preservación y el uso sustentable de la biodiversidad, no dudan en avalar el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sólo a cambio de las condiciones que establecen las Guías de Bonn⁸ para conceder el acceso a los recursos genéticos. Una de esas condiciones se refiere a que, cuando alguna empresa o persona solicita derechos de propiedad intelectual, se le exija un certificado de consentimiento previamente informado, en el que se podrían concertar algunos beneficios para los países proveedores de los recursos.

- 4) Por último, al dar este vistazo histórico sobre las preocupaciones de la humanidad para conservar los recursos naturales, sólo me queda preguntar: ¿Cuándo llegará el día en que, los productores de las guías internacionales (international guidance) se fijen más y mejor en el modo de hacer las cosas de las comunidades locales y de los pueblos indígenas para el manejo de los ecosistemas en lugar de seguir produciendo conceptos huecos para las poblaciones?. Pienso por ejemplo en la riqueza de teoría y práctica que producirían en esas reuniones internacionales el conocimiento y discusión de las distintas formas colectivas y ancestrales ejecutadas por los pueblos indígenas como los de Bolivia para comunicarse con la naturaleza y fortalecer al mismo tiempo las relaciones sociales entre parientes y amigos.

8 Discutidas en grupos de trabajo y aceptadas en las Conferencias de las Partes del CDB.

Tenemos así, ejemplos que ustedes bien conocen como: el marcaje y el ritual del ganado (el killpaku), el abonamiento de suelos con corrales itinerantes (el huaneo), la crianza ritual de la papa y otras relaciones de reciprocidad de las cuales el mundo entero puede aprender para mejorar los lazos de comunicación entre lo que ahora se llama el “control internacional” y el “control social local” de las áreas naturales protegidas⁹. De otra manera las ANAP estarán muy lejos de cumplir con los objetivos sociales y ecológicos que deberían tener.

3. Las reacciones sociales y las áreas naturales protegidas en Costa Rica

En el caso de Costa Rica también se han presentado una gama de respuestas desde la resistencia pasiva a una mucho más activa. Uno de los casos más publicitados ha sido el conflicto con los Gamb Usitos u Oreros en Corcovado, que en la década de los años 80 ocasionaron seis declaratorias de emergencia nacional por parte del gobierno central (Camacho 1993; Naughton 1987). Igualmente hace unos años, se dieron ocupaciones ilegales, incendios deliberados en algunas áreas, ataques personales a los guardaparques, desobediencia civil para observar las reglas de acceso y utilización de los recursos.

También hubo reacciones mucho más organizadas. Por ejemplo, la invasión de la Reserva Biológica de Carara en 1983 por un grupo campesinos respaldados por el Diputado Gerardo Morera para vivir y cultivar en una porción de esta área protegida (Rodríguez y Vargas 1988:173). Otro ejemplo es el de los pobladores del Área de Conservación de Tortuguero, quienes organizados en la Asociación de Productores para el Desarrollo Sostenible dieron una fuerte lucha para que no los desalojaran del lugar. Por su parte, Anger (1989:20-21) reporta la reacción de los pobladores del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo de la siguiente manera:

(Los pobladores) han enviado delegaciones al Presidente de Costa Rica, han amenazado a los guardaparques y han condenado al ostracismo a supuestos defensores del refugio. El año pasado ellos toleraron a los buzos que utilizan tanques de aire para la pesca de la langosta (método ilegal en Manzanillo), antes que reconocer el poder de las autoridades del refugio...

Si bien algunos de estos ejemplos se documentaron a fines de las décadas de 1980 y 1990, no quiere decir que la reacción de los pobladores locales al sentirse afectados en sus derechos con la creación de las áreas de conservación en los

9 Cartillas de Revaloración del Saber Local. Calendario 2004. www.agruco.org

años de 1970 hubiera pasado inadvertida. Por el contrario, la percepción de que el establecimiento de parques nacionales estaba fallando de alguna manera al no tomar en cuenta las necesidades sociales, hizo que el tema central del Tercer Congreso Mundial de Parques Nacionales celebrado en Bali, Indonesia, en 1982 fuera: “Parques Nacionales, Conservación y Desarrollo: el papel de las áreas protegidas para el sostenimiento de la sociedad” con lo cual los organizadores proponían analizar las consecuencias de ese vacío.

McNeely (1982:1)¹⁰ en la Introducción a las Actas que dan cuenta del Congreso señala que:

Los Parques Nacionales son generalmente considerados como áreas de un significado natural destacado, en donde la influencia humana es mínima. Pero en un período de aumento de población, de inseguridad económica y de inestabilidad social, muchos gobiernos están encontrando que el modelo tradicional de parques nacionales no es ya suficiente para dar cuenta de sus necesidades de recreación, educación, manejo de recursos genéticos de cuencas y otros muchos bienes y servicios producidos por la conservación de áreas protegidas

Es significativo el número de ponencias presentadas en este congreso que muestran la preocupación por lo “social”. El congreso termina con una declaración, conocida como la Declaración de Bali, que menciona una serie de seis acciones fundamentales. La incluida en el punto 5 indica:

Reconocer el contexto económico, cultural y político de las áreas protegidas; aumentar el apoyo local para las áreas protegidas a través de medidas tales como la educación, el compartimiento de ingresos, la participación en decisiones, los esquemas de desarrollo complementario en áreas adyacentes y, en el caso de ser compatible con los objetivos del área protegida: acceso a los recursos.

La realidad, vista bajo la perspectiva social, marcó un viraje en el lenguaje y en las acciones netamente conservacionistas con que antes se abordó el manejo de los parques nacionales y reservas equivalentes. Se diversificaron en doce las categorías de manejo, surgiendo por ejemplo las reservas de la biosfera, las reservas de recursos naturales y los refugios de vida silvestre, en las cuales se proponía el “uso múltiple de los recursos”. Se empieza a hablar también de la creación de una nueva categoría, la de banco genético *in situ* donde se protegerían –en lugar de especies– pozas genéticas de valor económico actual o potencial para la agricultura,

10 McNeely, es uno de los organizadores del Congreso de Bali y fue quien también escribió el artículo que trata de las reacciones negativas de los pobladores respecto de las áreas de conservación en 1990. Pareciera entonces que, después de ocho años de la Declaración de Bali, todavía existían reacciones sociales en contra de dichas áreas.

la horticultura, la silvicultura, la acuicultura y la biotecnología. En síntesis, este tipo de recursos se conservan con el fin de ser usados (McNeeely 1982:19-37) y hay una clara alusión a lo que después se conceptuó como bioprospección, es decir, la búsqueda o exploración con fines comerciales de recursos bióticos.

En Costa Rica también se incorporaron los cambios. Si comparamos las fechas de establecimiento de parques nacionales, reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre podemos ver que fueron los parques nacionales y las reservas biológicas las categorías que primero se establecieron en el país. Es interesante anotar que antes de 1972, sólo había en el país seis áreas protegidas; en cambio dieciocho nuevos parques nacionales fueron creados después de la Conferencia de Estocolmo.

En un lapso de diez años (1972-1982) se observa un aumento impresionante de las dos categorías más restrictivas en cuanto al uso económico de sus riquezas, esto es, de parques nacionales y de reservas biológicas. Costa Rica siguió después la corriente internacional. Con excepción del PN Amistad que se funda en 1982 con intenciones de transformarlo en Reserva de la Biosfera y el aumento en el área del PN Braulio Carrillo; en toda esa década no se establece ningún otro parque (cuadro No. 2). Es hasta principios de los años noventa cuando hay una transferencia de parte de una reserva forestal (la Cordillera Volcánica Central) para acrecentar el PN Santa Rosa y convertir toda el área en el Parque Nacional Guanacaste. Después prácticamente no se crearon áreas bajo estos tipos de categorías hasta los primeros años de los noventa en donde observamos que hay un punto de retorno que va del establecimiento de categorías más permisivas (reservas forestales, por ejemplo) a otras más restrictivas (parques nacionales). En esa década se establecieron tres pequeños parques nacionales, uno terrestre y dos marinos.

En cuanto a la tenencia de la tierra, se observa que también son los parques nacionales y las reservas biológicas las que la ley Forestal del 28 de junio de 1990 en su Artículo. 38, contemplaba que, "dados sus fines de conservación, deberían ser terrenos adquiridos por el estado por medio de compra o por expropiación, o por ambas". En el caso de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, los predios o partes de predios también se deberán comprar o expropiar, salvo que sus propietarios aceptaran someterse al régimen forestal respectivo. Es decir, existía la posibilidad de que permanecieran bajo propiedad privada, pero bajo ciertas condiciones de uso.

En Costa Rica, hubo un primer momento en el que se establecieron básicamente parques nacionales y otras categorías de manejo muy restrictivas. Siguiendo las pautas internacionales, reservas absolutas, parques nacionales, áreas protectoras, refugios de vida silvestre, reservas forestales que son modalidades creadas dependiendo de los recursos que protegen o por el grado de rigurosidad con que se permite o no la presencia y las actividades humanas (Ver recuadro 2).

Recuadro 2 Categorías de Manejo en Costa Rica

En la ley Forestal No. 7032 de 1986 se marcaban las diferencias entre las distintas áreas de conservación.

- Nadie podía hacer ningún tipo de aprovechamiento económico de los recursos naturales contenidos en los parques nacionales y reservas biológicas (Art. 34).
- En las reservas forestales, en las zonas protectoras y en los refugios de vida silvestre, bajo ciertas condiciones se podía manejar y aprovechar la madera, la flora y la fauna, según el caso (Art. 35).
- Con respecto a los sistemas de tenencia de la tierra, las reservas forestales, las áreas protectoras y los refugios de vida silvestre, toleran la permanencia de propietarios privados o poseedores, siempre y cuando sometan sus tierras al régimen forestal (Art. 37).

Con los cambios en la legislación, Costa Rica se puso a tono con las recomendaciones de la III Conferencia de Parques Nacionales celebrada en Bali, en 1982 que trataron de dar respuesta a inquietudes sociales.

En resumen, parece que estamos en presencia de dos décadas con distintas tendencias. En la década de los setenta se establecen la mayoría de los parques nacionales, todas las reservas forestales, parte de las zonas protectoras y algunos refugios de vida silvestre. En la década de los ochenta surgen el resto de las zonas protectoras y los refugios más grandes. Actualmente, parece que se da una tendencia a incrementar un poco los parques nacionales transfiriendo tierra de categorías más permisivas de manejo, como son las reservas forestales.

Bibliografía

Adams, B. (ed.)

1962 First World Conference on National Parks. Proceedings of a Conference organized by the IUCN. Seattle, Wash. USA. June 30-July 7, 1962.

Allen, Robert

1972 Can Stockholm Survive New York? *The Ecologist*. Vol. 2. No. 10. Ps. 4-9.

Anger, Dorothy

1989 "No queremos el refugio": Conservation and Community in Costa Rica. En: *Alternatives*. Vol. 16-3. Ps. 18-22.

Barton, John

1992 Biodiversity at Rio. En: *BioScience*. Vol. 42. No. 10. Ps. 773-776.

Beltrán, Enrique

1962 Use and Conservation: Two Conflicting Principles. En: Adams, B. (ed.). (1962). First World Conference on National Parks. Proceedings of a Conference organized by the IUCN. Seattle, Wash. USA. June 30-July 7, 1962. Ps. 364-370.

Camacho, Antonieta

1993 Regional Planning and People's Participation: A case Study at the Osa Península, Brunca Region, Costa Rica. School of Development Studies. University of East Anglia, Norwich, U.K. Phd. Thesis.

Comité Intergubernamental de Negociación (CIN)

1992 Quinto Proyecto Revisado de Convenio sobre la Biodiversidad Biológica. Nairobi, 11-12 de mayo de 1992.

Department of State

1971 Suggestions Developed Within the US Government for Consideration by the Secretary General of the 1972 Conference on Human Environment. Washington, D.C. USA

FAO-UNEP

1992 La Declaración de Caracas. En: Flora y Fauna Silvestres. Año 6 No. 14. Enero-Abril, 1992.

Neumann, Roderick and Machlis, Gary

1989 Land-use and Threats to Parks in the Neotropics. Environmental Conservation. Vol. 16. No. 1. Spring 1989. Pp. 13-18.

Machlis, Gary and Tichnell, David

1985 The State of the World's Parks: an International Assessment of Resource Management, Policy, and Research. Westview Press. Boulder, Colorado. USA.

McNeely, Jeffrey

1982 Introduction: Protected Areas are Adapting to New Realities. En: National Parks, Conservation, and Development: The Role of Protected Areas in Sustaining Society. Proceedings of the World Congress on National Parks. Bali, Indonesia. 11-22 October, 1982. Pp. 1-9.

McNeely, Jeffrey y Pitt, David

1985 Culture: The Missing Element in Conservation and Development. En: Culture and Conservation: The Human Dimension in Environmental Planning. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Great Britain. Ps. 1-10.

McNeely, Jeffrey

1990 The Future of National Parks. En: Environment. 32-1. Jan-Feb. 1990. Ps. 16-41.

Meadows Donella et al.

1972 The Limits to Growth. Earth Island. London, U.K.

Naughton, Lisa

1987 Ecological Conservation vs. Local Resources use. MSc. Thesis. Geography Department. University of Wisconsin-Madison. Wisconsin. USA.

Nash, Roderick

1970 The American Invention of national parks. En: American Quarterly. Vol. 22. Ps. 726-735.

Nash, Roderick

- 1978 The Exporting and Importing of Nature. En: Global Protection of Natural Areas. Proceedings of the 14th Biennial Wilderness Conference. Earthcare. Ed. Shoefield. Westview Press. Boulder, Col. USA.

Pistorious, Robin

- 1997 Scientists, Plants and Politics. A History of the Plant Genetic Resources Movement. International Plant Genetic Resources Institute. Rome, Italy.

Raeburn, Paul

- 1992 The Convention on Biological Diversity: Landmark Earth Summit Pact Opens Uncertain New Era For Use and Exchange of Genetic Resources. En: Diversity. Vol. 8. No. 2. Ps. 4-7.

Rao, Kishore and Geisler, Charles

- 1990 The Social Consequences of Protected Areas Development for Resident Populations. En: Society and Natural Resources. Vol. 3. Ps. 19-32. United Kingdom.

Rodríguez, Silvia and Vargas, Emilio

- 1988 El Recurso Forestal en Costa Rica: Políticas Públicas y Sociedad. Ed. EUNA. Heredia, Costa Rica.

Rodríguez, Silvia

- 1993 Conservación, Contradicción y Erosión de Soberanía: el estado costarricense y las áreas naturales protegidas. Tesis para obtener el doctorado en Estudios del Desarrollo. Universidad de Wisconsin-Madison.

Rodríguez, Silvia

- 2003 Contratos Paradigmáticos de Bioprospección: entre las Promesas y la Realidad. Revista Ciencias Ambientales. Diciembre 2003. Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

Scanlon, J. y Burhenne-Guilmin, F.

- 2003 An International Legal Regime for Protected Areas. Vth IUCN World Parks Congress. Durban, South Africa. September 2003. Prepared for Parks Canada. IUCN Environmental Law Centre, Bonn for the IUCN Environmental Law Programme.

Stone, Richard

- 1992 The Biodiversity Treaty: Pandora's Box or Fair Deal?. En: Science. Vol. 256. June 19, 1992. P. 1624.

Usdin, Steve

- 1992 Biotech Industry Played Key Role in the Refusal to Sign BioConvention. En: Diversity. Vol. 8, No. 2. Ps. 8-9.

World Commission on Environment and Development

- 1987 Our Common Future. Oxford University. United Kingdom.

Conflictos alrededor de la explotación forestal en la zona de transición del parque del Manu caso Pilcopata - Perú

Jamil Alca Castillo¹

1. Introducción

Los efectos ambientales que se presentan con mayor incidencia, hoy en día representan un problema cada vez más álgido. Una de las acciones que causa dicho problema, viene a ser la depredación de ecosistemas frágiles, como son los bosques amazónicos. Se concentra nuestra mirada al Perú, porque representa uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y cuenta con ingentes cantidades de bosques, considerado como el segundo país de América Latina y el séptimo en el mundo en términos de cubierta forestal.

Sin embargo, estos bosques soportan una tasa de deforestación anual de 261,158 Ha², produciéndose una sobreexplotación, a la que se atribuye diversas causas. Los datos estadísticos establecen que en 1990, la cubierta forestal de la amazonía peruana era de 67'906,000 Ha (53% del país). La deforestación acumulada hasta 1990 era de 6'948,237 Ha (9,19% del bosque amazónico) y la proyección de deforestación al año 2000 era de 9'559,817 Ha (12,65 % del bosque amazónico)³. La situación actual, es crítica⁴, puesto que se tiene zonas descremadas, siendo los departamentos mas afectados Madre de Dios, Cusco, Ucayali, Loreto y San Martín (Brack: 2002:104).

-
- 1 Especialista en Gestión Ambiental y Desarrollo – CBC-FLACSO. Asistente de Investigación del Individual Project 8 del NCCR, Ginebra-Suiza. Investigador Asociado del Instituto Latinoamericano de Investigación ILAI. Jamilalc@hotmail.com – jamilalca@yahoo.com
 - 2 Flores, 2002
 - 3 Flores, 2002
 - 4 Debido a que el nivel de deforestación esta estimado a 0,010 hectáreas por habitante / año, cuando el promedio en Latino América esta de 0,004 (CONAM)

En estas condiciones, el acceso al recurso forestal y su uso específico para madera, son fuentes de conflictos en toda el área amazónica y particularmente en la selva alta peruana que representa el primer espacio de colonización de la selva, a donde llegan migrantes de la sierra, a los que se les denomina “colonos”, quienes encuentran un nuevo espacio ecológico y social, donde reconstruyen su identidad y sus procesos de producción; es también, espacio de comunidades nativas que resistieron la marginación y viven –aunque manteniendo muchas de sus costumbres– integradas a la sociedad occidental.

El presente trabajo analiza y expone la realidad del Caso de Pilcopata, considerada dentro de la Zona de Transición o Zona Cultural del Parque Nacional del Manu, ubicada entre las Regiones de Madre de Dios (Provincia de Manu) y Cusco (Provincia de Paucartambo) del Perú. El Parque Nacional del Manu, se estableció el 29 de mayo de 1973, en el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado, mediante Decreto Supremo N° 0644-73-AG, que asignó una extensión superficial de un millón quinientas treinta y dos mil ochocientos seis hectáreas (1 532 806 Ha.). Esta norma fue modificada por el Decreto Supremo N° 045-2002-AG, de ampliación del Parque Nacional del Manu, publicado el 14 de julio de 2002 (en el actual mandato de Alejandro Toledo), que le sumó mayor territorio, incrementándose el área de extensión a 1 716 295.22 Ha. La Zona de Pilcopata también es parte de la Reserva de Biosfera de Manu (Categoría reconocida por la MAB-UNESCO de las Naciones Unidas el 1° de marzo de 1977). En diciembre de 1987 el Parque Nacional del Manu fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial.

Esta área natural protegida está normada, entre otras, por el Estado Peruano, por la Ley N° 26834 “Ley de Áreas Naturales Protegidas”, publicada el 4 de julio de 1997; el Decreto Supremo N° 010-99-AG, Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, del 11 de abril de 1999 y; por el Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, publicado el 26 de junio de 2001, que en general establecen el sistema encargado de dichas áreas.

En este artículo se pretende mostrar, que los factores de orden político, económico, social y cultural se entrecruzan, las que son necesarias considerar al estudiar las normas y los conflictos socioambientales que se manifiestan en las percepciones que tienen las poblaciones. Para una mayor aproximación al objeto de estudio, identificamos algunos niveles de problemas. El problema general radica en que los conflictos alrededor de la explotación forestal en la zona, no contribuyen a la explotación racional del recurso, produciendo degradación ambiental y social. Las formas de control social no son eficientes alrededor de la explotación forestal. Y al incidir en las percepciones, se resalta lo negativo de su concepción, es decir, las percepciones negativas que tienen los actores locales respecto a las acciones y normas de los actores externos; y las percepciones negativas de los actores externos sobre los locales, no permiten una comunicación fluida que facilite emprender acciones conjuntas en beneficio del desarrollo local y del uso racional del recurso

forestal, además de exacerbar los conflictos. Por último, la identificación de los efectos sociales y culturales del encuentro de normas locales y normas formales que regulan la explotación de los bosques, donde las legales no reconocen a las locales y tampoco su reconocimiento.

Presentamos entonces, algunos alcances del trabajo realizado en la zona de Pilcopata, donde se hizo uso de métodos y técnicas de investigación social, y se consideraron criterios explicativos, para conocer, analizar y explicar los aspectos relacionados a las percepciones, prácticas, normas y conflictos alrededor de la explotación forestal en la selva alta peruana, particularmente en la zona de transición de un área natural protegida.

2. Marco teórico referencial

En las sociedades, es imprescindible el desarrollo de normas. Éstas “contienen disposiciones que prohíben, permiten o requieren alguna acción o resultado” (Ostrom: 1992: 21). Pueden ser denominadas locales, internas o “consuetudinarias”, constituido por un conjunto de costumbres, no codificadas, ni establecidas legislativamente por los órganos estatales competentes, todo bajo el consenso social. Este tipo de sociedades no cuentan con tribunales, aunque posean normas de derecho, no poseen normas procesales como indica Gluckman (Citado en Mair: 1970: 176).

En cambio las normas “formales”, fundamentadas en las leyes, son normas de conducta promulgadas por el Estado, cuya administración se encuentra o debe estar reglamentada y ejercer el control social ejercido mediante la sistemática aplicación de la fuerza de una sociedad política organizada” (Pound citado en Mair: 1970: 176). De esta manera se garantizaría un orden interno y externo, condición que en varios países de América Latina y particularmente en el Perú, no se estaría cumpliendo, puesto que la debilidad estatal, no permitiría forzar a los agentes o actores a realizar procesos de explotación óptimos de los recursos naturales y específicamente del recurso forestal.

En forma general, respecto al acceso a recursos naturales, las normas median en la relación de las sociedades con estos recursos, donde generalmente se remarca la importancia de considerar tres aspectos o dimensiones que son, tenencia, acceso y control. Entendiendo la tenencia como las formas de posesión y propiedad de un recurso determinado, donde la propiedad implica uso, gozo y disposición; en tanto que la posesión implica uso y gozo solamente. El acceso supone, disponibilidad y facilidad que tienen los miembros de una sociedad para acceder y aprovechar determinados recursos para satisfacer intereses o necesidades. El control alude al poder de administrar o gestionar el espacio y sus recursos, tiene que ver por lo tanto con el uso, el aprovechamiento y el acceso a los recursos naturales (Orellana, 1997: 3). Estas tres dimensiones están regidas por un conjunto de normas, que facilitan

a los diferentes actores sociales el acceso a los recursos, permitiendo también, el ordenamiento de los territorios.

Todo esto, está enmarcado en lo que se denomina “normatividad ambiental”, que representa a las normas relativas a los problemas ambientales, dentro de las cuales se tienen a las leyes o códigos de aguas, de minería, de petróleo o forestal que son las más antiguas, y las más modernas son las leyes ambientales y la defensa del equilibrio ecológico. Como enfatiza González de Olarte (1992:21), todas estas influenciadas por disposiciones y recomendaciones internacionales⁵ han sido tomadas como parte de la preocupación de los gobiernos.

El encuentro de dos formas de normas basadas en la realización de prácticas adecuadas y prohibición de las “inadecuadas” en la explotación de recursos naturales, como de la contradicción de diversos intereses y valores conducen a desencuentros, tensiones y conflictos, donde es necesario tener en consideración la característica “omnipresente” (Ormachea 2001:163) del conflicto, debido a que se encuentra en todos lados, en toda la historia de la humanidad.

El marco para la explicación de estos fenómenos, se fundamenta en un modelo diametralmente opuesto⁶ al que considera que la sociedad es una configuración relativamente persistente de elementos y que descansa en el consenso de sus miembros⁷. En tal sentido lo opuesto se sienta en cuatro puntos que sustenta Dahrendorf. “1) Toda sociedad está sometida a cambio en todo momento; el cambio social es ubicuo⁸. 2) Toda sociedad experimenta en todo momento conflictos sociales; el conflicto es ubicuo. 3) Todo elemento de una sociedad contribuye a su cambio. 4) Toda sociedad descansa sobre la coacción que algunos de sus individuos ejercen sobre otros” (1968:102).

Si bien existen dos modelos yuxtapuestos, nos permiten explicar la realidad que será comprobada mediante la investigación empírica, fundamentado en que la teoría del conflicto y del cambio no es una teoría general.

Para buscar los orígenes del conflicto social, se debe recurrir a las relaciones de dominio que prevalecen en ciertas unidades de organización social, que son precisamente donde se encuentran los grupos antagónicos, y bajo este supuesto, “se destacan especialmente tres cuestiones: 1. ¿Cómo nacen los grupos antagónicos de la estructura de la sociedad?; 2. ¿Qué formas pueden asumir las luchas entre

5 Lo que describiría los niveles de la gobernancia en un nivel global.

6 Explicada por la teoría del conflicto, “que fue un elemento central de la investigación para la paz en la década de los cincuenta y a principios de los sesenta, pero que al final de esta década (80s) se encontró una simetría entre las partes y pasó por alto las asimetrías básicas del sistema mundial al igual que al interior de las unidades nacionales y las entidades sociales” (Wallensteen 1988:82).

7 Argumento del estructural funcionalismo.

8 Que se encuentra en un mismo tiempo en todas partes.

esos grupos?; 3. ¿Cómo puede el conflicto entre dichos grupos producir un cambio en las estructuras sociales?" (Dahrendorf 1968:102-103).

De esta forma vemos, que el conflicto se produce entre dos sociedades o sistemas, donde es necesario considerar los detalles del contexto o situación en que se manifiesta el fenómeno. Pero esta posición, es una de las construcciones teóricas que se hicieron y se hacen respecto a lo que es el conflicto, y al respecto Wallensteen indica que dar una definición con precisión, aun resulta evasiva (1988:82).

Entre estos intentos tenemos que, para Raymond Aron (1985) el conflicto es una posición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles. Para Coser (sociólogo) el conflicto es una lucha por los valores, por los bienes escasos (como los recursos), la potencia y el estatus, lucha en la que el objetivo de los antagonistas es el neutralizar o eliminar al contrario. En cambio para Duroselle (1982) quien es Historiador de Relaciones Internacionales, los conflictos oponen a uno o varios Estados o unidades políticas, en un choque de voluntades contradictorias.

Por otro lado, Julien Freund sostiene que el conflicto "consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o grupos de la misma especie, que manifiestan una intención hostil, uno respecto a los otros, generalmente en relación a un derecho, y que para mantener, afirmar o restablecer el derecho intenta romper la resistencia del otro, eventualmente recurriendo a la violencia, la cual puede, si se presenta el caso, tender a la eliminación física del otro" (1983:65).

Adam Curle, prefiere referirse a relaciones "no pacíficas"⁹ y de incompatibilidad. Así "un conflicto aparece cuando un individuo, una comunidad, una nación o, incluso un bloque internacional, desea algo que no puede ser conseguido a menos que sea a costa de otro individuo o grupo que también lo desea" (1977:15).

Esquemáticamente, Fisas define el conflicto como una situación en la que un actor (una persona, una comunidad, un Estado, etc.) se encuentra en oposición consciente con otro actor (del mismo o de diferente rango), a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles (o éstos son percibidos como tales), lo que los conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha"¹⁰.

Entonces se resaltan aspectos diferentes, como las incompatibilidades de objetivos, la lucha, el choque, el enfrentamiento; algunas se refieren al objeto del conflicto (posesión de valores, de un derecho), y otras hacen referencia a los deseos que no se cumplen, provocando frustración o impotencia entre los actores que no alcanzan lo que quieren.

Galtung (1984) a la vez, resalta la cuestión estructural del conflicto. Para él, debe definirse como la situación en la que hay actores que persiguen objetivos incompatibles, o partes de un conjunto social con intereses incompatibles. Pero

9 Las relaciones pacíficas, por el contrario son aquellas que se desarrollan sin conflicto.

10 Citado en Curso de Maestría: Manejo de Conflictos Socioambientales, CBC-FLACSO, 2003.

estos intereses, pueden producirse por la condición de “escasez”, en lo que incide Wallensteen, quien argumenta sobre el conflicto, “como una situación social en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos” (1988: 3), teniendo en consideración que la escasez es una construcción social y está de acuerdo a patrones establecidos en una sociedad.

La situación social del conflicto o la inherencia de éste al orden social, es predominante. Esto se expresa en condiciones espaciales y temporales específicas, tienen historicidad e impactos en la acción colectiva; son parte de la existencia de las asociaciones ciudadanas, que contribuyen a impedir la dominación y ejercer control mutuo, aunque no garanticen la justicia ni la equidad; es decir, los conflictos son naturales a la democracia (Dahl 1991:39-60). Al resaltarse la inherencia social en el tiempo, se concluye que los conflictos “no” son necesariamente negativos.

Estos preceptos, son la base para la construcción teórica de lo que refieren los conflictos socioambientales, que tienen como espacio de vida u objeto, a los recursos naturales o al ambiente. De una manera totalizante, se consideran estos conflictos, como aquellos producidos por la actuación del hombre con o en su ambiente, como también a conflictos que se producen por la actuación entre los hombres en torno a las cosas del ambiente (Briceño 1996:3; Orellana 1996: 7), hace referencia de forma implícita a la relación hombre-naturaleza.

En este contexto, el Programa de Bosques, Árboles y Comunidades Rurales (FTPP-FAO) define al conflicto socioambiental como el proceso a través del cual, ciertas prácticas de uso y explotación de recursos naturales, al degradar los ecosistemas, puede conducir a movimientos o cambios en la estructura de las relaciones sociales entre los diversos actores al interior de una sociedad.

Estas consideraciones nos conducen a entender a los conflictos como un proceso inherente a la situación social. En este proceso, un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos, para explotarlos o no desde distintas perspectivas. Significa que los conflictos en torno a los recursos naturales, son fenómenos sociales que involucran condiciones mínimas tales como la escasez, el deterioro o la privación.

La presión que se ejerce sobre los recursos naturales escasos (y especialmente sobre el recurso forestal) cobra mayor interés en situaciones como las actuales, donde “el mercado, la incorporación de territorios, el crecimiento poblacional, agudizan la presión sobre los recursos naturales, incidiendo por lo tanto en su escasez, deterioro y privación siendo espacios propicios para el desarrollo de conflictos” (Ortiz 1996: 6).

Si bien, la concepción evasiva del conflicto es una dificultad, Orellana establece una tipología de conflictos, que aunque en forma gruesa y general, permite una mejor aproximación a la problemática del conflicto socioambiental, identificando tres grandes tipos, los cuales son:

- a. Naturaleza como Recurso Natural Vs. Naturaleza como espacio de Vida, considerando de tal forma dos grandes mundos enfrentados, de relación tensa, lo que se traduce en términos de intereses y necesidades. En el caso forestal puede presentarse por ejemplo entre colonos versus comunidades nativas.
- b. Naturaleza como Recurso Natural: conflictos internos. Estos pueden expresarse como conflictos de uso, acceso, explotación y manejo de recursos, en el que también flotan intereses y necesidades. Considerando a los actores, se puede presentar por ejemplo entre colonos versus Estado, o colonos versus ganaderos.
- c. Naturaleza como Espacio de Vida: conflictos internos. Que pueden ser por uso, acceso y manejo de espacios (la ocupación de espacios puede ser una manifestación). Presenta intereses y necesidades, siendo parte de este tipo los conflictos interétnicos e intercomunales (1995:15-16).

Al interior de estos procesos se presentan diferentes características, encontramos por ejemplo, el entorno geográfico donde se desarrolla el conflicto, la estructura política donde interactúan los actores o partes, las relaciones, los patrones sociales y redes de comunicación que existen, los mecanismos para la toma de decisiones que tienen las partes, los mecanismos de sanción y otros. Y es que, los recursos naturales y los recursos forestales en particular están integrados en un espacio social compartido, donde se establecen relaciones complejas y desiguales entre una amplia gama de actores sociales¹¹ que pueden ser por ejemplo agricultores, ganaderos, extractores madereros, empresas extractoras, comunidades nativas, organismos estatales o no gubernamentales, y otros. Representan las partes interesadas o “stakeholders”, quienes son los actores sociales necesarios “para que un conflicto transite de una fase embrionaria, de latencia, de problema, a una fase manifiesta y de conflicto propiamente dicho” (Ortíz, 1996: 8).

Dentro de esto, la dimensión política está representada por los “actores con mayor acceso al poder –quienes son– los que mejor pueden controlar las decisiones sobre los recursos naturales e influir en ellas para su propio beneficio” (Peet y Watts, en Buckles y Rusnak 2000:4), sumando todo esto a la base fundamental que viene a ser la “escasez del recurso natural, a causa del cambio ambiental y el aumento de la demanda y su desigual distribución” (Homer-Dixon y Blitt –1998– en Buckles y Rusnak 2000:4).

11 En este sentido “los actores en conflicto, determinadas como unidades decisionales, que están directa o indirectamente involucrados en el conflicto, los cuales a su vez tienen un interés significativo en el resultado, pueden ser clasificados en tres categorías: A) Los actores primarios, B) Actores secundarios, C) Actores interesados” (Ormachea: 2001:116-117).

Es decir, podemos considerar como partes del primer aspecto los procesos crecientes de deforestación, degradación de la tierra y otros. El segundo, tiene dimensiones sociales y económicas que podríamos considerar desde los procesos de migración –en el caso de la selva alta la migración de pobladores andinos o colonos a esta zona–, el incremento de la población, liberalización del mercado, cambio de tecnología, uso de la tierra, desarrollo de empresas rurales o grupos de personas y otros. El último aspecto corresponde a la desigual distribución de recursos entre personas o grupos sociales o en las definiciones de los derechos de acceso a los recursos. Se puede considerar dentro de este aspecto, la presencia de la legislación estatal, que permite o no el acceso, la distribución y el goce del recurso.

Estos aspectos configuran la naturaleza de la “zona gris” (Wallensteen 1988:4), es decir, las percepciones que permitirían identificar las incompatibilidades, cuyas causas son varias o combinadas y, cuyo proceso implica acciones y reacciones¹². Todos estos elementos en forma individual o en combinación exacerban los conflictos, por ésto es necesario resaltar que, las causas de los conflictos sobre recursos naturales y en el caso particular del recurso forestal son múltiples, alrededor del cual se dinamizan la toma de decisiones, fundamentados en los objetivos, intereses u otros aspectos con los que cuentan los actores sociales.

Respecto a esto, Ormachea (2001:168-170) resume una “tipología”, donde considera las causas probables del surgimiento de conflictos alrededor de la explotación de los recursos naturales, considerando a los basados en hechos, en intereses, necesidades, valores, formas de relación y en estructuras.

Consideraciones importantes para analizar los conflictos socioambientales, que pueden encontrarse en los conflictos interpersonales y/o en los de orden internacional, donde juegan un papel importante, las relaciones de poder entre los actores del conflicto, quienes manifiestan “actitudes conflictivas” que permiten identificar “procesos psicológicos que exacerban la situación conflictiva” (Citado en Ormachea. 2001: 167) en el que incide Mitchell, puesto que estas situaciones afectan la dinámica social y al ambiente.

3. Características de la zona de Pilcopata

Al nordeste de la ciudad del Cusco, a diez horas de viaje aproximadamente en vehículo de transporte, está ubicado el centro poblado de Pilcopata, capital del distrito de Kcosñipata, provincia de Paucartambo, Región Cusco-Perú. Se llega a la zona, después de haber transitado por una vía de 215.35 Km, la que se recorre

12 Surge de las relaciones existentes entre grupos o individuos, aunque también hay el caso de la inacción o evasión de una de las partes como forma de enfrentar el conflicto (Ortíz 1996:8).

34.50 Km por una pista asfaltada hasta el lugar denominado Huambutío, a partir del cual la carretera es afirmada. Este tramo carretero corresponde al establecido entre Cusco, Paucartambo, Shintuya que pertenece a la Región Madre de Dios, uniéndose de esta forma dos regiones políticas.

La zona es conocida también como el Valle de Kcosñipata, ubicada entre los 600 a 3,500 m.s.n.m. la que corresponde a la Selva Alta, de la cual se reconocen la ceja de selva y la selva alta propiamente dicha, donde se tienen altas precipitaciones anuales cuyos promedios llegan a 4,000 mm aproximadamente, siendo considerada una zona de altas precipitaciones en el país por su ubicación en la Vertiente Oriental de los Andes. Estas precipitaciones de origen orográfico, tienen mayor incidencia en los meses de noviembre a abril, decayendo en los meses siguientes, condiciones que son propicias para el desarrollo de especies forestales.

La ocupación de este espacio se remonta a épocas incaicas, pues representó una posibilidad económica debido a que proveía de coca al Imperio. Posteriormente en la época de conquista y colonia fue punto de ambición de los españoles quienes fueron en búsqueda de la ciudad mítica inca llamada "Paititi". Formó parte del circuito comercial Potosí, porque en ella se producía coca y caña de azúcar, todo esto atrajo el asentamiento de españoles, estableciéndose además las primeras misiones católicas con fines de evangelización.

Posteriormente en la época republicana se dio inicio a una colonización de la selva alta en general, ya que representaba un frente de extracción de recursos, debido a esto se tuvo la afluencia de pequeños mineros, agricultores y extractores forestales. Los "booms" que se vivieron en la zona amazónica peruana, fueron causantes de que este espacio sea ocupado por migrantes, eso se dio a finales del siglo XIX e inicios del XX con el boom del caucho, posteriormente siguió el boom del oro, especialmente en Madre de Dios. A mediados del siglo XX la zona estuvo ocupada por haciendas que cultivaban caña de azúcar para producir aguardiente, que se comercializaba en los mercados de Cusco y Puno, pero la baja en el comercio hizo que se desistiera de dicha actividad y se incida en la explotación forestal.

A partir de 1955 se construye la carretera de penetración a la zona denominada Chontachaca, produciéndose una mayor afluencia de migrantes provenientes de Apurímac, Cusco, Puno y otros lugares, cada uno con sus particularidades sociales y culturales, de diferentes estratos sociales, con la intención de extraer madera, debido a que esta actividad reportaba buenos dividendos económicos, que no han sido reinvertidos en la zona, porque generalmente han sido malgastados en fiestas y consumo de alcohol.

El terremoto de 1955, generó también mayor demanda de madera para el restablecimiento de los lugares afectados, que precisamente, generó el boom maderero, durando aproximadamente hasta los 90. La característica de este proceso extractivo tuvo carácter selectivo, puesto que se extraía árboles de mayor valor económico, motivo por el que hoy se tiene sólo árboles corrientes, produciéndose de esta forma

el deterioro y la depredación del recurso forestal en la zona, perjudicando no sólo al ambiente, sino también, a la población asentada en la zona.

Actualmente, basados en los censos de población, se estableció un crecimiento poblacional de 1.7%, contando con una población aproximada según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de 2,801 habitantes, la que está compuesta por colonos quechuas, aymaras y mestizos, como también por grupos étnicos que corresponden a los grupos Harambut y Matsiguenga. Los idiomas que se hablan son preponderantemente el Castellano, el Quechua y en las comunidades nativas su lengua correspondiente Matsiguenga o Arawak y el Harambut. La población está dedicada a las actividades forestales, agrícolas, pecuarias y de comercialización.

A pesar de ser parte de un área protegida, uno de los mayores problemas que aqueja a la zona es la deforestación, que de acuerdo al Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), es severa, debido a que en un área de 243 Km², se produce una extracción promedio de 8,400 m³/año, lo que produciría en 40 años la desaparición de los bosques en la zona. Otros de los problemas lo representan la erosión laminar de grado moderado a severo del suelo, la presión demográfica, las altas precipitaciones en terrenos superficiales, la falta de infraestructura vial adecuada y la ineficiencia de las organizaciones sociales.

La institución competente de velar por la solución de los diferentes problemas de la zona es el Concejo Distrital de Kcosñipata, siendo el Alcalde quien preside el Comité de Desarrollo Distrital, organismo que agrupa a todas las instituciones (sean estatales o no estatales) que trabajan en la zona. Cuentan además con un Gobernador Distrital, y al ser reconocidos los sectores cuentan con un Teniente Gobernador, representantes del Poder Ejecutivo que no son elegidos por voto popular. A nivel distrital se tiene un Juez de Paz, que atiende algunos asuntos judiciales de ínfima cuantía, lesiones y litigios familiares o contenciosos.

Las instituciones estatales que trabajan, están representadas por oficinas locales de los distintos ministerios, entre ellos se tiene: al Ministerio de Educación representado por el Centro Educativo Inicial, el Centro de Educación Primaria y Secundaria (Colegio de Pilcopata). El Ministerio de Salud, se cuenta con un Centro de Salud. El Ministerio de Agricultura encargado de actividades agrícolas y de capacitación. El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, encargado de administrar los recursos forestales y de fauna silvestre. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio del Interior representado por la Policía Nacional.

El sector no estatal está representado por organizaciones no gubernamentales que realizan acciones fundamentadas en alcanzar el “desarrollo sostenible” de la zona. APECO y PRONATURALEZA trabajaron en la década pasada entre otras; el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) concluyó sus labores el año 2002, del cual se tiene una experiencia sistematizada. Actualmente la institución que sigue trabajando en la zona es PRO-MANU, Proyecto de Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de Biosfera y Parque Nacional de Manu, siendo

por tanto un proyecto de cooperación, que representa el convenio entre la Unión Europea y la República del Perú.

En lo referente a los servicios básicos con los que cuenta la población de la zona, éstos se encuentran principalmente en el Centro Poblado de Pilcopata, siendo los sectores alejados de éste, los menos favorecidos. Cuentan con servicio de agua domiciliaria, desagüe y servicio eléctrico, además con teléfonos públicos.

En estas condiciones se desarrolla la actividad forestal a la cual está abocada casi el 70% de la población, a pesar de que la madera de mayor valor económico ya no se encuentra, siendo las especies corrientes las explotadas actualmente.

4. La explotación forestal y conflictos

Los inicios de la explotación forestal en la zona, correspondiente a la Selva Alta del Perú, tienen su origen en la década de los cincuenta, con la construcción de la carretera de penetración Cusco-Shintuya (Madre de Dios). El 20 de enero de 1953, dicha carretera, llegó en su primer tramo, hasta el sector denominado Chontachaca, y posteriormente avanzó hacia las zonas de Patria y Pilcopata.

Esto incrementó los procesos de migración a la zona, iniciándose de esta forma una colonización desordenada del Valle, siendo la extracción forestal la actividad principal, debido a que suponía la obtención de un ingreso económico inmediato. Produciéndose de esta forma el desbosque de los sectores aledaños a la carretera, sectores bajos y medios donde se contaba con especies de valor comercial como el aguano y el cedro de altura, como también de algunas maderas corrientes que podían ofrecerse en el mercado local y regional. Los bosques que se encuentran hoy, son generalmente secundarios, donde prima la madera corriente, que suponen también, un valor económico para la población¹³.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, en su Diagnóstico Preliminar del Distrito de Kcosñipata del 2001, estimó para entonces una deforestación de 82,000 hectáreas, significando por tanto un incremento anual del 2%, todo esto, por la presencia y accionar de pequeños productores o extractores madereros, que operaban bajo contratos de extracción forestal hasta de 1,000 hectáreas y con permisos de extracción forestal en unidades agropecuarias.

Entre los años 1999 y 2000, se nota un decrecimiento de la producción de madera aserrada en la zona, como presenta el cuadro 1, esto se da por el alejamiento del recurso, la destrucción forestal y la implementación de políticas restrictivas en la explotación maderera.

13 Teniendo en cuenta que se identificaron 63 especies forestales inventariadas y observadas en bosques secundarios y primarios naturales entre las que destacan: aguano, alcanflor, caobilla, matapalo, lucma, pacapacay, ubilla y otros (INRENA 2000).

Cuadro 1
Resumen de producción de Madera Aserrada en Kcosñipata

Año de producción	Pies tablares
1997	2'577,588.2
1998	2'896,146.0
1999	2'704,539.2
2000	2'509,178.0
Total	10'687,451.4
Promedio anual	2'671,862.85

Fuente: INRENA 2002.

Aunque, las cantidades presentadas tienen como base los contratos y permisos de extracción reportados entonces a la oficina de OFIRENA del Ministerio de Agricultura encargada de administrar los recursos forestales en ese tiempo, no se tiene contabilizada la madera extraída ilegalmente.

En julio del año 2000 los recursos forestales y de fauna silvestre, pasan a ser administrados por la Oficina Sede de Administración y Control Forestal de Pilcopata de la Unidad Operativa Regional Cusco-INRENA del Ministerio de Agricultura, quienes fueron los encargados de implementar y hacer cumplir la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308.

Por los efectos que se tiene en el recurso forestal, éstos no han sido administrados eficientemente, con su consecuente degradación y pérdida, que va en desmedro de la biodiversidad de la zona, como de las familias, que son perjudicadas tanto en el orden económico como en lo social y cultural.

Actualmente la extracción del recurso forestal es administrada únicamente vía permiso de extracción forestal en unidades agropecuarias tituladas o en procesos de titulación, previa constancia emitida por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras PETT, pero la extracción ilegal continúa.

4.1. Los actores sociales

Los actores sociales alrededor de la explotación forestal, son quienes intervienen, no sólo en el proceso de extracción del recurso, sino también aquellos cuyas decisiones y acciones influyen en el acceso o no al recurso. En este sentido se identifican actores internos y externos, que nos permite una identificación y agrupación en forma general.

Los actores sociales internos, lo representan la población asentada y dedicada a la explotación y comercialización del recurso forestal en la zona. Son aquellos que participan en el proceso de extracción, los denominamos “extractores”. Generalmente lo conforman pobladores o colonos establecidos en el núcleo pobla-

cional o en los sectores aledaños. Personas que cuentan con terrenos titulados y se dedican a la actividad agrícola. Dentro de este grupo se encuentran, algunos pobladores de las comunidades nativas, como también, los comerciantes quienes son los encargados de sacar la madera fuera para ser comercializada en los mercados regionales.

Dentro de los considerados extractores, se pueden reconocer dos tipos, quienes se diferencian por la forma de trabajo o relación con la ley. Es decir, quienes se acogen y cumplen las normas establecidas en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aquellos que no se acogen a ésta y trabajan al margen de ella o en forma clandestina.

Los primeros han solicitado a la oficina local del INRENA en Pilcopata, el permiso de extracción correspondiente, debido a esto, mandaron elaborar un expediente técnico donde se establece el plan de manejo respectivo, indicando los productos y volúmenes a extraer y el número de zafras o cosechas por año, incluso la duración del mismo¹⁴, lo que representa un costo económico. En cambio, los que no se acogen a estas normas legales “trabajan al margen de la ley”, se les denomina “clandestinos” o “ilegales”. No cuentan con autorización para extraer el recurso, sin embargo realizan dicha actividad, entre éstos se encuentran los denominados “cuquis”¹⁵, quienes provistos de motosierras, no respetan los límites de las propiedades particulares, ni las áreas de conservación o de protección, generalmente no trabajan en la agricultura y solamente se dedican a la extracción maderera.

Dentro del proceso de extracción maderera, que va desde el internamiento en el bosque, elección de la especie a talar, hasta la comercialización, se puede reconocer diferentes actividades, que suponen “especialidades” y cuya labor representa un costo económico, que presentamos en el cuadro 2. Se nota entonces una división del trabajo, donde quienes realizan las labores más riesgosas como motosierristas, lomeadores y jaladores obtienen menores beneficios económicos. En estos espacios, por lo tanto, se manifiestan mecanismos de control social internos para el trabajo.

En consecuencia, en estos espacios se concentra el “poder”, sea de índole económica o por el conocimiento con el que cuentan estas personas especializadas, por la labor que realizan en el proceso de extracción. Observándose la preeminencia del “capital económico” y el “capital cultural” como refiere Bordeau (1997). El “capital cultural” está enmarcado en el conocimiento que tienen algunos actores sobre el proceso de extracción y el ambiente, reconocido en ese espacio social en el que interactúan.

14 Establecido en el Capítulo VI del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sobre los “Permisos y Autorizaciones para Aprovechamiento Forestal”, en los artículos 125° y 126°.

15 Hace alusión a una especie de hormiga existente en la amazonía.

Cuadro 2
Costo por labor en la zona de extracción

Labor/ trabajador	Costo en Nuevos Soles
Motosierrista	0.20 por Pie ³
Lomeador	20.0 por día
Jalador	17.0 por día
Trochero Tractor	0.15 por Pie ³
Tochero carro	0.20 por Pie ³

Fuente: Informantes Pilcopata/Elaboración propia.2002.

Son entonces, los actores que están en contacto con el recurso, pero cuyas acciones muchas veces no planificadas, van en desmedro del ambiente¹⁶ cuando no se consideran procesos de tala programada, ni procesos de reforestación, viendo solamente al espacio económico y a la vegetación como un recurso económico.

Otro grupo, lo representan los Actores Sociales Externos, siendo aquellos cuyas decisiones influyen en el acceso, control y conservación del recurso forestal. Representados por entidades estatales y no estatales. Tomando en consideración este precepto, se identifican al Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, la Policía Nacional que cumple un papel alternativo con su ente particular, que viene a ser la Policía Forestal, realizan controles y redadas para incautar madera que no cumple con los requisitos establecidos. En menor medida en la zona, el Ministerio de Agricultura, aunque deja la labor fundamental de la administración forestal al INRENA.

Otras vienen a representar las organizaciones no gubernamentales, generalmente con la intención de conservar el ambiente y propender un uso racional de los recursos. En este sentido se tiene a PROMANU, que trabaja en la zona de amortiguamiento, pretendiendo cuidar la Reserva de Biosfera de Manu. Son precisamente estas condiciones, las que otorgan la importancia de la intervención de estos actores.

En conclusión, son actores que pretenden aplicar las decisiones establecidas en los niveles global y nacional, y hacerlos efectivos en los niveles locales.

4.2. Las leyes y realidad de su aplicación

Entre los años 1997 y 1998, la Oficina del OFIRENA del Ministerio de Agricultura, otorgó ilegalmente 13 contratos de extracción forestal, cuyos titulares, en

16 Utilizamos el término de ambiente y no medio ambiente, porque “medio” se puede entender de tres formas, la primera como mitad, en segunda instancia hace referencia a un fin o instrumento y, por último hace referencia a entorno y es por esta última referencia que al decir medio ambiente se estaría produciendo duplicidad de términos, que pretendemos evitar.

su mayor parte, no realizaron ningún proceso de extracción forestal. Se utilizaron los contratos de extracción para el “negocio” de la venta y obtención de guías de transporte forestal (INRENA, 2000. 40), de esta forma se amparaban las extracciones ilícitas en varios sectores del Valle.

Este proceso se vivía en muchas zonas amazónicas del Perú, pero no se tenía una norma acorde a la realidad existente y a los diferentes cambios que se presentan hoy en un mundo tan dinámico y en constante cambio. Hasta entonces seguía en vigencia la Ley N° 21147, establecida el 13 de mayo de 1975. Es por esto, que con el fin de controlar la sobreexplotación y establecer mecanismos de una explotación racional y planificada del recurso forestal, se estableció a nivel nacional la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 2730817, fundamentado entre otras, en la Constitución Política del Perú de 1993, en su capítulo II del Ambiente y los Recursos Naturales, artículo 66°, donde se indica que “los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”; otro referente también viene a ser el artículo 67°.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, tiene por objeto “normar, regular, y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación...” (Artículo 1°).

Mediante esta ley se establece que el Ministerio de Agricultura viene a ser el órgano normativo y promotor del uso sostenible y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, es quien decide políticas públicas, y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), representa el órgano encargado de la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel nacional, es por tanto, la agencia que ejecuta las políticas.

Las condiciones para la regulación e implementación de la Ley, se dan a través del Reglamento¹⁸, que fue aprobado el 6 de abril del 2001, bajo Decreto Supremo N° 014-2001-AG, siendo Presidente de la República el Dr. Valentín Paniagua Corazao¹⁹.

-
- 17 El Congreso de la República aprobó el proyecto, dictaminado favorablemente por la Comisión de Amazonía, Ecología y Ambiente, presidido por el entonces congresista oficialista Biólogo Luis Campos Baca, lo que recibió el respaldo del Ejecutivo. Dicha norma fue dada en el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, el 15 de julio del 2000.
 - 18 Que consta de trescientos ochenta y cinco (385) artículos y veinticinco (25) Disposiciones Complementarias, que precisan las formas de acceso al recurso y sus requerimientos, además de un ordenamiento del recurso forestal con el que se cuenta.
 - 19 Quien accedió interinamente a la Presidencia en Noviembre del 2001, a raíz de la declaración de vacancia por “incapacidad moral” de Alberto Fujimori.

El establecimiento de estas normas se produce también, porque la actividad maderera para el Perú representa un contrasentido y un reto, pues cerca de dos terceras partes del territorio nacional se encuentran bajo cubierta forestal y sin embargo, esta actividad no contribuye de manera significativa al Producto Bruto Interno²⁰, pero contradictoriamente, los índices de deforestación se incrementan, teniéndose como índice anual promedio 261,158 hectáreas (INRENA: 1996). Se tiene por tanto un recurso valioso, pero que supone, la interposición de intereses, que por muchos años produjeron diferentes conflictos y confrontaciones entre los actores sociales.

Caillaux y Chirinos ante esto, remarcen la importancia de conformar un marco legal e institucional adecuados, que debería fundamentarse en: "1) La puesta en práctica de una nueva legislación y política forestal orientada a la sostenibilidad, en lo que se ha avanzado de modo significativo; 2) Una clara intermediación del Estado, que avalada por la participación ciudadana dinámica y transparente, dirima los conflictos de intereses y modalidades de acceso, a fin de otorgar seguridad a los inversionistas; 4) Una institucionalidad fuerte y transparente, y; 5) Un sistema efectivo de control, vigilancia y monitoreo a fin de prevenir la tala ilegal y velar por el aprovechamiento sostenible del bosque" (2003:9-10).

El establecimiento de esta Ley, si bien representa un acierto en lo que se refiere al orden político, su aplicación aún no ha mostrado los resultados positivos sociales en lo que concierne al sector de la selva alta y particularmente a los pequeños extractores que se desarrollan en estas áreas, como se presenta en el caso de la zona de Pilcopata.

El año 2000, La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308 se implementa en Pilcopata y, su reglamentación un año después, con mayor precisión lo referente al Capítulo VI "De los Permisos y Autorizaciones para el Aprovechamiento Forestal" artículos del 125° al 160°, por las características de la zona y su población asentada. Esta implementación trajo como consecuencia reacciones de la población, por lo intempestivo de su aplicación y falta de consulta social, a la que se le atribuye, no solamente una falta de consulta y participación ciudadana en su elaboración, sino también, la no consideración de su particular realidad, demostrando la "invisibilidad" (Soria, 2002) de este sector físico y social.

Consecuentemente, toda esta disconformidad con el marco legal aplicado, tuvo mayores repercusiones, pues, exacerbó a los pequeños extractores y población en general, quienes al sentirse agredidos y tener mayores restricciones, protestaron, incluso con la toma del local del INRENA de la zona, siendo por tanto, un evento precipitante del conflicto.

Es necesario tener presente, que entre otros vacíos a nivel general, a dicha norma se le reconoce como fortalezas, la promoción del manejo sostenible del

20 Según la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del 2002, la actividad forestal contribuye únicamente al 4% del PBI Nacional.

bosque bajo extracción con planes de manejo, eliminación de la concesión directa, promoción de múltiples usos del bosque, entre otras. Sobre sus vacíos, no menciona, ni garantiza derechos de los trabajadores y usuarios del bosque, no considera gradualidad para adaptarse, no promueve actividades científicas; más aún se reconocen sus debilidades, entre las que llaman la atención, la debilidad estatal ya que se asigna exceso de tareas al INRENA, falta claridad en las concesiones, no promueve la cultura forestal, falta transparencia en la gestión forestal, débil promoción del empleo y otras (FORO ECOLÓGICO. 2000).

Particularmente en la zona de Pilcopata, además de lo mencionado, no se consideró el sistema anterior que primaba cuando se tenía la administración del Ministerio de Agricultura, por lo tanto se estableció, durante mucho tiempo una forma de “actuar” frente al recurso forestal, con patrones económicos y sociales creados en parte por la propia estructura estatal, que representan por tanto, un obstáculo para la implementación de una norma coercitiva y contradictoria a los intereses de los actores locales, peor aún, cuando se pretende ser drástico y no se brindan los espacios para la adecuación de las personas a la ley.

Los intereses van acompañados de una falta de planificación y falta de conciencia ambiental predominantes, pues son predominantes la acumulación de capital y la satisfacción de necesidades inmediatas, sin considerar el ecosistema frágil de la selva alta peruana y del bosque. Por último, existe un desconocimiento de la ley por parte de la población, porque en primer lugar el mensaje normativo no llega a la población y, en segundo lugar, si llega, llega de manera distorsionada.

Entonces, prima la necesidad por sobre la conservación o la explotación racional del recurso forestal. Estos pobladores que provienen de zonas andinas, colonos, pequeños extractores de madera, que han causado y causan depredación del recurso, tienen por supuesto un vínculo con la naturaleza. Vínculo que se inclinará hacia la protección o el uso racional cuando se sientan amenazados. Pero esto se contrapone cuando el interés de satisfacer necesidades prima en las familias, es decir, cuando se pugna por conseguir el pan de cada día, que conduce al no cumplimiento de la ley forestal vigente, produciéndose una explotación irracional del recurso forestal. A esto se suma la falta de control eficiente por parte del INRENA, debido a que no cuenta con personal ni la infraestructura suficientes²¹.

Pero el establecimiento y aplicación de estas normas formales, produjeron también lo siguiente:

- Diferenciación entre actores extractores, donde prima mayormente el capital económico, concentrándose sólo en pocas manos la “ganancia” económica.

21 La oficina local de INRENA en Pilcopata, sólo cuenta con dos trabajadores, un ingeniero y un asistente forestal.

- Los que menos tienen venden su fuerza de trabajo a “bajos precios”, cumpliendo el precepto que en economías capitalistas, en la “actual generación, los pobres venden barato” (Martínez Alíer 1999: 100).
- La aplicación de la ley, contradictoriamente, incrementó los índices de informalidad en la explotación forestal, llegando a establecer colateralmente un régimen de “acceso libre” al recurso, produciéndose mayor degradación.
- A pesar de haber existido recurso forestal disponible y en cantidades, la que fue explotada desmedidamente por la falta de una norma adecuada, no fue aprovechado positivamente, viviéndose la moralidad del CARPE DIEM, disfrutando del presente y olvidándose del mañana.

En consecuencia, a pesar de que la nueva norma sobre el recurso forestal propende un uso racional del recurso y el desarrollo sostenible, resulta siendo contradictoria. En realidad no debería ser así, debido a que sólo se mostrarán estas debilidades, cuando no consideren los aspectos particulares, sistemas anteriores, sociales, económicos y ambientales de las zonas donde se implementen las normas.

4.3. Las percepciones de los actores

Las percepciones o “zona gris” como las denomina Wallenstein, permiten establecer la forma de relación que se tiene entre los actores sociales, que en este caso particular, manifiestan una forma tensa, contraviniendo a la fluidez y colaboración, por las diferentes prácticas de los diferentes grupos de actores, no llegan a acuerdos y tampoco se reconoce el real valor de cada uno de ellos. Tienen intereses particulares y distintos discrepando y no comparten los mismos valores respecto al ambiente y en particular a lo que supone la explotación forestal.

Estas percepciones se resumen en lo siguiente. Las de los actores internos, endógenos o locales giran en torno a:

- El establecimiento de la ley es negativo, debido a que no sólo restringe la actividad, sino los expone a perder su madera por comisos u otras sanciones (esto para todos los actores extractores legales o ilegales).
- El INRENA representa un obstáculo y no realiza un trabajo eficiente, sólo beneficia a algunos. Prohíbe el acceso libre al recurso forestal, además, prohíbe la práctica de la agricultura de roce y quema, que viene a representar una alternativa de solución al problema de la falta de madera. El trabajo era mejor cuando la administración estaba bajo el Ministerio de Agricultura, puesto que no exigía tantos requisitos y se tenía una mejor relación.
- La ley no considera la situación de los pobladores. No se ha establecido un mecanismo de consulta, ni se han buscado las formas para tener una relación y comunicación adecuadas.

- El que tiene dinero, sea legal o no, puede explotar el recurso forestal y “hacer llegar la madera a los mercados para su comercialización y beneficiarse”.
- Aunque se prohíba la extracción, se seguirá explotando, puesto que satisfacer las necesidades de las familias es lo más importante.
- Las alternativas que plantean las instituciones no benefician y por el contrario, perjudican, por ejemplo en la agricultura prohíben la quema. Las alternativas que se presentan para dejar la actividad forestal, no son eficientes ni beneficiosas.
- Los procesos de reforestación son muy caros, necesitan mucho tiempo. Debido a esta posición la población extractora no asume los costos, ni el trabajo de los procesos de reforestación.
- No existe una relación buena con las instituciones. Al prohibirse la extracción forestal, se produjeron reacciones violentas de la población, como la toma del local del INRENA, incluso con funcionarios dentro.
- La presencia de estas instituciones no gubernamentales, sólo sirve para que los funcionarios se benefician. Para la población, son los trabajadores y funcionarios quienes se llevan todos los beneficios y no repercute en beneficio del desarrollo de la zona. Esto causa malestar y desconfianza.
- Muchas veces la madera ilegal comisada, ha sido recuperada por los propios extractores, incluso del local de INRENA Pilcopata, en propias palabras de los pobladores “le roban la madera al INRENA por las noches, cuando los ingenieros están descansando”.
- Los extractores clandestinos “cuquis”, no respetan los límites de las propiedades particulares, ni las áreas de protección o de conservación.
- El recurso forestal se está acabando, cada vez la extracción resulta dificultosa. Mucho trabajo para poco beneficio, pero se siguen adentrando a zonas inhóspitas y protegidas.

Al contrario las percepciones de los actores externos se resumen en lo siguiente:

- Las prácticas de extracción forestal que realizan los pobladores no son eficientes y depredan el ambiente, especialmente los extractores clandestinos.
- No sólo la extracción forestal que se realiza depreda el ambiente, sino otras prácticas más que realizan, como la agricultura mediante roce y quema.
- No se respetan los límites establecidos, ni tampoco los requisitos que se establecen en la ley.
- Los que cuentan con permiso de extracción forestal, no ven sólo su beneficio en la extracción, sino también en la comercialización de guías de remisión.
- Sobre los conflictos, se asume que no existen y que la adecuación de la población a la ley es progresiva.

- Plantean la posibilidad de prácticas alternas a la explotación forestal, fundamentados en el desarrollo sostenible.

Se presentan dos posiciones encontradas y contradictorias, que son la base de las divergencias. Por el lado institucional externo, se plantea la extracción racional de los recursos naturales específicamente del recurso forestal, fundamentados en lograr el desarrollo sostenible de la zona, por lo menos, eso se manifiesta en sus principios. Reforzado por la ley, que incluso reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques. A diferencia de esta posición, aquello que sostiene a los extractores y pobladores de la zona de Pilcopata, es el beneficio económico inmediato que representa la extracción maderera, y sienten como obstáculo la aplicación de la reglamentación de la ley. Entonces se contradicen valores, produciendo una mala relación y situación tensa entre los actores alrededor de la explotación forestal.

4.4. Los conflictos

Al ponerse en el lugar de los actores locales en conflicto, es decir, en sus “zapatos” respecto al acceso a recursos naturales escasos, se identifica que las causas radican en la necesidad de conseguir el pan cotidiano, que si es negado u obstaculizado, se estaría presentando una situación real de conflicto y en este caso particular socioambiental.

Es importante tener presente, que dicho fenómeno social es dinámico y cambiante, cumpliendo un “ciclo de vida”, que comprende desde una fase de latencia, a la de inicio, pasando por fases de escalada, destrucción, desescalada y búsqueda de solución, solución que en realidad viene a representar la transformación del conflicto.

En este sentido, en el caso particular de la zona de estudio, la aplicación de mecanismos de control para una explotación racional del recurso forestal, ha producido descontento en la población, porque de trabajar en forma prácticamente libre, pasaron a un control más estricto esta vez efectuado por el INRENA, exacerbándose se esta forma, los ánimos de los extractores forestales, produciéndose protestas, como la del año 2000, en el que fue tomada la Oficina Local del INRENA sede Pilcopata. Esta medida de fuerza sólo fue dejada de lado, gracias a la intervención de representantes del Poder Ejecutivo.

Todo se generó por la implementación drástica de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308, poniendo de manifiesto el conflicto, para rápidamente ascender y tener como medidas de “destrucción”, la toma del local de dicha institución reguladora.

En dicho momento se identifican a los siguientes actores del conflicto, y nos basamos en la primera clasificación establecida anteriormente que considera a los internos y los externos.

Los actores “primarios”²², a los que Raez denomina “públicos” (2001: 10-13), vienen a ser los *extractores*: legales e informales, lomeadores, motosierristas, jaladores, trocheros, comerciantes y agricultores. Por la otra facción, identificamos al INRENA, encargada de hacer cumplir la ley forestal. Son centrales en la dinámica del conflicto.

Los actores “secundarios” están representados, para la facción extractores, la población en general que les brindó su apoyo. Mientras por el otro lado, se encuentran a instituciones como PROMANU. Dentro de los “interesados” o “intervinientes”, destacan la Municipalidad Distrital de Kosñipata y las empresas de turismo que operan en la zona, a quienes se les ha cerrado el paso por la carretera “tomada” y tienen interés en que dichos problemas se solucionen.

Actualmente, los actores siguen siendo los mismos, entre los que se suscitan diferentes tipos de conflictos como los suscitados entre los mismos extractores legales, entre extractores legales e ilegales, o de éstos frente a la institución reguladora u otras particulares o frente a comunidades nativas, allí radica la importancia de tener presente la dinámica del conflicto.

Identificamos como causas generadoras de los conflictos a:

- El carácter restrictivo de la ley y la falta de comunicación con la población para el establecimiento y aplicación de ésta.
- La aplicación de la reglamentación de la norma, donde se establecen requisitos que no pueden ser cubiertos por la mayoría de la población extractora local. Además de las acciones de las autoridades competentes en contra de los extractores, como los comisos de madera.
- El agotamiento del recurso forestal, que genera que se introduzcan en zonas más alejadas, propiedades de particulares o zonas de conservación o protección.
- Las necesidades de la población tienen que cubrirse para lograr su desarrollo pleno. Esto va complementado con la aparente falta de valor de la conservación y utilización racional del recurso forestal que tienen los actores locales.
- La visión del espacio amazónico como espacio económico y no necesariamente como espacio de vida, propio de personas que no corresponden a

22 Esta clasificación la establece Ormachea, donde se reconocen como primarios a “quienes perciben sus objetivos como incompatibles e interactúan directamente en la búsqueda de sus objetivos precisamente. Los actores secundarios, son aquellas partes que tienen un interés directo en el resultado de la disputa pero que no se sienten directamente involucrados; son quienes proveen de apoyo moral o económico al menos a una de las partes primarias, es decir, son aliados estratégicos. Los actores interesados, son aquellas entidades o personas interesadas en la resolución exitosa de un conflicto” (2001:165-167).

este espacio, sino de migrantes que recrean en él sus formas de ser. Y es que la degradación del ambiente, del recurso forestal y la visión del espacio de utilidad, están ligados “a la pobreza, a la distribución desigual de la tierra en las áreas de procedencia de los migrantes, a la baja productividad de la agricultura, al crecimiento acelerado de la población y a una serie de políticas inadecuadas” (wri 1991, citado en Pichón, 1993: 341), es preponderante entonces, la identidad con el medio, la falta de alternativas para desarrollar en este nuevo ambiente y su responsabilidad frente a él, que está relacionado íntimamente con el sentido de propiedad y los derechos.

- El desconocimiento por parte de la población sobre la ley y reglamentación sobre el recurso forestal.
- La relación tensa entre instituciones y población.
- El incremento de prácticas clandestinas y depredatorias.
- El ineficiente control social y la prevalencia de acciones individuales. No se respetan los límites de propiedades privadas e incluso comunales.

Se presentan entonces, una serie de factores basados en intereses, hechos, necesidades, valores y relaciones, que no están siendo comprendidas por los diferentes actores, y este desconocimiento, produce que se actúe de forma excluyente.

Cabe hacer hincapié, en que esta forma excluyente, llega a su máxima manifestación cuando el conflicto llega a una fase de destrucción, para que en una última instancia y proceso de transformación se disipe, estableciéndose una fase de latencia. Si bien la fase de destrucción, perjudica a los actores, la fase de disipación o latencia es la que perjudica en mayor medida al ambiente y en este caso particular al recurso forestal.

Esto se da porque, en las condiciones de latencia, los representantes del ente regulador, creen en la eficiencia del control que ejercen (el mito del control y regulación eficientes), como también, se tiene presente que, la adecuación de los extractores a la ley es mayor, llegándose a creer que no se vive tala ilegal. Situación que no es cierta y por el contrario generalmente los procesos de tala ilegal son mayores, porque al ser las condiciones y normas demasiado restrictivas, no son respetadas, conduciendo esta mano de obra a la ilegalidad extractiva. Haciendo referencia a la gobernancia, se observa que en un nivel local, muchas veces se deja sin efecto el nivel nacional e incluso internacional, porque los mecanismos de control ejercidos no son eficientes.

En consecuencia, el recurso forestal se está acabando, a pesar de esto no se nota la conciencia ambiental, por el contrario, muchos extractores se adentran a mayores distancias en el bosque, mostrando que, la escasez y lejanía del recurso forestal, no son obstáculos para la tala ilegal, que va en desmedro de los bosques de protección, las áreas protegidas, en este caso particular del Parque Nacional del Manu y del propio ambiente.

5. A manera de conclusiones

La selva alta peruana es un espacio físico social, construido a través del tiempo e interacción socio cultural. Provista de gran biodiversidad, representa la zona de transición al llano amazónico, siendo por tanto una zona de “amortiguamiento”. El potencial forestal con el que cuenta, sigue llamando la atención del vasto grupo social de extractores, representando por lo tanto un reto y oportunidad, pues supone un recurso de fácil acceso y explotación para el poblador, que le permite obtener un ingreso inmediato. Pero además, por todos los servicios ambientales que brinda, constituye parte estratégica y fundamental en la extracción racional de los recursos, y es un elemento más, que bien utilizado contribuirá al desarrollo sostenible de las poblaciones asentadas en la zona.

Existen varios factores por los que el recurso forestal no tiene un uso racional. Como referencia se tiene, que antes de la aplicación de la nueva ley forestal, el acceso a éste era prácticamente libre, existía además (aunque sigue existiendo) una debilidad institucional, también falta de conciencia ambiental de los extractores y el desmedido interés por obtener beneficios económicos, todo esto produjo que el recurso se vaya agotando, con las subsecuentes consecuencias ambientales y sociales, además de ir en desmedro de las áreas protegidas y en este caso particular del Parque Nacional del Manu, límites que no son obstáculo para el desmedido afán extractor.

La implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308, es un elemento restrictivo para el acceso al recurso forestal, el que se considera que no ha sido participativo y no tomó en cuenta la realidad económica y sociocultural de la selva alta, y especialmente de zonas como la de Pilcopata, produciendo conflictos entre la institución reguladora y la población extractora al aplicarse la norma.

Por encima de todo, priman las necesidades de la población, se rompe entonces cualquier intención de aplicación restrictiva de la ley, pesando un nivel local por encima del nacional e internacional. Pero los conflictos, tienen además causas estructurales, donde se notan valores, aspectos económicos, sociales y culturales, que dan soporte al cuerpo de las percepciones que se manifiestan no sólo en el discurso, sino también en el accionar de los actores sociales.

Respecto a la degradación del recurso forestal, podemos también en forma general mencionar dos factores complementarios, el primero gira en torno a la visión utilitaria y económica que tiene el extractor forestal o el colono del espacio amazónico. Y el segundo, son las políticas implementadas por el Estado, donde se fomentó la colonización del espacio amazónico, de igual manera con visión económica y extractiva de recursos, para solucionar la escasez de tierras en la sierra, el crecimiento poblacional y el incremento de la pobreza.

Bibliografía

Alca, Jamil

1997 "La Cultura en el Perú", Seminario Internacional del SUM (Canadá), Cusco.

Aron, Raymond

1985 "Paz y guerra entre naciones". Alianza.

Barrantes, Roxana y Travelli, Carolina

1996 "Bosques de madera: Análisis económico del caso peruano". Instituto de Estudios Peruanos IEP – Consorcio de Investigación Científica. 1ª edición. Lima. P. 11-103.

Barklay, Frederica

1993 "La evolución del espacio rural en la Amazonía nororiental del Perú" En Amazonía: Escenarios y Conflictos. CEDIME. Ediciones ABYA-YALA 1ª Edición. Quito, Ecuador. P. 95-144.

Buckles, Daniel (Editor)

1999 "Cultivar la Paz. Conflicto y colaboración en el manejo de los recursos naturales". Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. Ottawa, Canadá.

Bedoya, Eduardo

1991 Las causas de la deforestación en la amazonía peruana: un problema estructural". Centro de Investigación y Promoción Amazónica CIPA. Documento 12. Lima, Perú. P. 1-130.

Brack Egg, Antonio

2002 "Amazonía: desarrollo y sostenibilidad", Lima, Perú. P. 3-116.

Caillaux, Jorge; Chirinos, Carlos

2003 "El caso Tahuamanu. Cuando el bosque toca madera". Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lima, Perú. P. 7-39.

Carreño, Elías

1999 "Legislación ambiental: En Resumen". Grupo Temático Medio Ambiente, Asociación INCA. Perú.

Cevallos, R.

2001 "INRENA y madereros discrepan sobre Ley forestal y de fauna" Comisión de Agricultura del Congreso. En La República. Lima. P. 6-91.

Chase Smith, Richard

1983 "Las comunidades nativas y el mito del gran vacío amazónico" Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP). Lima, Perú. P. 9-107.

Curle, Adam

1977 "Conflictividad y pacificación". Herder. P. 15.

Dahrendorf, Ralf

1968 "Hacia la Teoría del Conflicto Social" En Los cambios sociales. Fuentes, tipos y consecuencias. Fondo de Cultura Económica. 1ª Edición en español. México. P. 97-107.

Dahl, Robert

1991 "Los dilemas del pluralismo democrático". Alianza Editorial. México. P. 36-60.

Dourojeanni, Marc

1990 Amazonía ¿Qué hacer?" Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. Edición auspiciada por el Proyecto de Capacitación Extensión y Divulgación Forestal – Pucallpa COTESU-INTERCOOPERATION-DGFF-V.A.V. Perú. P. 444.

Duroselle, J.B.

1982 "Historia Universal Contemporánea". Edicions Universitaries Catalanes. España.

Foro Ecológico del Perú

1997 "Aportes para una Ley de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre promotora de la Inversión Privada, la gestión pública eficiente y la participación ciudadana". Lima.

Foy Valencia, Pierre (Editor)

1997 "Derecho y Ambiente. Nuevas Aproximaciones y Estimaciones". Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. 1ª Edición. Lima, Perú.

Freund, Julien

1982 "Sociologie du conflit". P.U.F. P. 65.

Florez, Salvador

2001 "Agricultura y Manejo de Bosques en la Amazonía Peruana". En El Manu y Otras Experiencias de Investigación y Manejo de Bosques Tropicales. Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO. Perú. P. 91-99.

Galtung, Johan

1982 "Conflict, Peace and War". Cursos Internacionales de Benidorm. Universidad de Alicante.

García, Joaquín

1993 "Proceso de construcción de la identidad de las poblaciones en la Amazonía Peruana". En Amazonía: Escenarios y Conflictos. CEDIME-FLACSO sede Ecuador-Comisión V Centenario-ILDIS-ABYA YALA. Primera Edición. Quito Ecuador. P. 519-544.

Gonzales de Olarte, Efraín

1992 "La dimensión ambiental de las políticas económicas". SEPIA Cuadernos de Trabajo N° 2. Lima, Perú. P. 7-44.

Hidalgo, Jessica

- 2000 "La Nueva Ley Forestal y los Pequeños extractores de madera". En IDEEFE, Revista del Instituto de Defensa Legal N° 132, octubre. Lima Perú. P. 68-70.

Individual Project 8

- 2001 "Governance, human development and natural environment". Versión Provisoire-NCCR North-South.

Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)

- 1993 "Diagnóstico Sub Cuenca Pilcopata". Dirección de Estudios - Región Inca. Cusco, Perú. P. 3-122.

Martínez Aliet, Joan

- 1998 "Introducción a la Economía Ecológica". Cuadernos de Medio Ambiente. Rubes Editorial S.L. España. P. 91-108.

Orellana, René

- 1993 "Aproximaciones a un Marco Teórico para la comprensión y el manejo de conflictos socioambientales". CERES-FTTP. Bolivia. P. 1-23.

- 1993 "Conflictos ...¿sociales? ¿ambientales? ¿socio-ambientales? ...conflictos y controversias en la definición de conceptos". Separata. Discusión de Curso de Post Grado Manejo y Resolución de Conflictos ambientales. Santa Cruz- Bolivia. P. 1-10.

- 1993 "Derecho Consuetudinario y tratamiento de conflictos. El caso de las disputas de bosques, tierras o aguas entre familias y/o comunidades rurales". En Contenidos del Módulo del Curso Regional de Gestión Ambiental y Manejo de Conflictos Socioambientales. Quito, Ecuador. P. 1-9.

Ormachea, Iván

- 1999 "Resolución de conflictos ambientales: nueva perspectiva para el análisis y solución de conflictos" En Derecho y Ambiente. Nuevas Aproximaciones y Estimaciones. PUCP - Fondo Editorial. 1ª Edición. Lima, Perú. P. 163-178.

Ortiz, Pablo

- 1996 "Apuntes teórico - conceptuales para propuesta metodológica de manejo comunitario de conflictos socioambientales" FAO/FTTP. Serie: Documentos de Trabajo. Quito. P. 3-53.

Ostrom, Elinor

- 1993 "Diseño de instituciones para sistemas de riego autogestionarios" Centro Internacional para la Autogestión, PRESS, San Francisco, California, Estados Unidos.

Pastor, Oscar y Pacheco, Raúl

- 1999 "Planificación Estratégica de Desarrollo para la comunidad nativa Santa Rosa de Huacaria" Tesis para optar el título de Licenciados en Antropología. UNSAAC - Cusco, Perú.

Pichón, Francisco

1993 "Colonización y deforestación en la frontera agrícola de la región amazónica ecuatoriana". En *Amazonía: Escenarios y Conflictos*. CEDIME. Ediciones ABYA-YALA 1ª Edición. Quito, Ecuador. P. 337-368.

Raez, Ernesto

2001 "Ecología, Política y Ley Forestal en el Perú: Balance y perspectivas". FORO ECOLÓGICO DEL PERÚ. Lima. P. 3-47.

Renard, Cacevitz y varios

s/f "Al este de los andes. Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII". Tomo I. Coedición ABYA YALA, Instituto Francés de Estudios Andinos IFEA. Primera edición en español. Lima, Perú - Quito, Ecuador. P. 115-147.

Rosental - IUDIN

1973 "Diccionario Filosófico". Ediciones Universo. Argentina.

Sachs, Wolfgang (Editor)

1996 "Diccionario del Desarrollo. Una Guía del Conocimiento como Poder". Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas PRATEC. Primera edición en castellano. Título original: The Develepment Dictionary, A Guide to Know ledge as Power. P. 399.

Santos Granero, Fernando

1993 "Burguesías locales y espacios regionales en la Amazonía norperuana: los casos de Loreto y Ucayali" En *Amazonía: Escenarios y Conflictos*. CEDIME. Ediciones ABYA-YALA 1ª Edición. Quito, Ecuador. P. 57-91.

Silva Santiesteban, Fernando

1993 "Antropología conceptos y nociones generales". Fondo de Cultura Económica. Perú 4ª edición actualizada. Colección Biblioteca Universidad de Lima, Lima, Perú. P. 234-235.

Smart, Louise y Maye, Bernard

1988 "Negociación y Mediación". Presentación CDR ASOCIADOS, para la Conferencia Anual COPRED. P. 2-18.

Sociedad peruana de Derecho Ambiental

2002 "Compendio de Legislación de Áreas Naturales Protegidas". SPDA, INRENA, John D. And Catherine T. MacArthur Foundation y la Embajada Real de los Países Bajos. Lima, Perú.

Soria, Carlos

1999 "Aportes para el Análisis de la Normatividad para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía en la Década de Fujimori". En *Desarrollo Sostenible y Descentralizado de la Amazonía Peruana*. I Encuentro Macro-regional de Organizaciones Indígenas y Campesinas. Coor-

- dinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú, FORO ECOLÓGICO, Red Perú de Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local y USAID. Lima, Perú. P. 22.
- 1999 “¿Adios a los bosques amazónicos? La Ecología Política de implementar la nueva Ley Forestal en el Perú”. Presentado en la reunión de la Latin American Stdudies Association – LASA. Dallas, Texas. Marzo 27-28. P. 16.
- Ury, William; Brett, Jeanne y Golberg, Sephen
1993 “Tres aproximaciones a la resolución de conflictos. Intereses, derechos y poder”. De Getting Disputes Resolved: designing systems to cut the costs of conflict. MA:Pon book. (Separata P. 1-12).
- Wallensteen, Peter
1988 “Un Marco Teórico para la Resolución de Conflictos”. Tomado del libro de Peace Research: Achievementsand Challenges, traducido por Luis Alberto Padilla. Uppsala. P. 82-100.

Normas legales:

Constitución Política del Perú, 1993.

Ley Forestal

2000 “Ley forestal y de Fauna silvestre” www.asesor.com.pe/teleley/190283.htm, Perú.

Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

1999 Decreto Supremo N° 014-2001-AG. Normas Legales del Diario El Peruano. Perú.

Decreto Supremo N° 0644-73-AG

Establece el Parque Nacional del Manu en los Departamentos de Madre de Dios y Cusco.

Decreto Supremo N° 045-2002-AG

Amplían el Parque Nacional del Manu.

Panel de debate y discusión

Parte II

Moderador:

*Lic. Miguel Angel Crespo, Director PROBIOMA
Santa Cruz-Bolivia*

Franz Guzmán

Director del Parque Nacional Sajama

Un tema común que sale en este seminario, son los conflictos de relacionamiento con las poblaciones originarias indígenas de todos nuestros países, como es el caso del Perú, Chile, Costa Rica y otros. Todo esto proviene de una desconfianza ancestral de los grupos originarios y las comunidades campesinas con relación al Estado, y esto obviamente surge cuando se crean las áreas protegidas, sin embargo en algunos casos existen espacios de discusión al interior de las áreas protegidas como son las asambleas comunales donde se definen la suerte de las actividades y allá se ven los intereses de la comunidad respecto al área protegida. Asimismo se han creado otros espacios de discusión con los actores locales como son los comités de gestión, por lo tanto en algunos lugares como el Tunari probablemente los comunarios no estén de acuerdo con el área protegida porque ven riesgos en su economía y la propiedad de sus tierras, pero hay otras áreas donde han superado este problema y más bien ya están avanzando en actividades que benefician a las comunidades como es el caso del Sajama. Por lo tanto no podemos concluir indicando que no queremos áreas protegidas en Bolivia.

Creo que es necesario hacer un análisis de todos los casos y principalmente de la reacción de los actores locales respecto a sus propias áreas, allá podemos encontrar elementos de confluencia que en lo sucesivo pueden ir resolviendo los problemas. Considero por lo tanto, que es muy importante la dinámica de la participación local a través de sus propias formas de discusión y toma de decisiones, ya sean estos eventos comunales, eventos intercomunales, eventos del comité de gestión, eventos a nivel municipal, etc. De este seminario rescato

dos aspectos: por una parte que los conflictos con las comunidades no solo esta ocurriendo en Bolivia, sino también en muchos países de Latinoamérica, y por otra, que estamos en la perspectiva de consolidar la visión de tener áreas protegidas con gente. Este último aspecto sin embargo, siempre traerá el riesgo de tener conflictos, porque hay gente. Por lo tanto una conclusión fundamental, es que se debe ir trabajando mucho mejor con las comunidades y que lleguen los beneficios a las mismas.

Carmen Miranda

Representante de la UICN-Bolivia

Tengo dos preguntas: uno para Jamil y otra para Jaime. Jamil hiciste referencia a que el parque Manú o más bien la reserva de la biosfera de Manú era de papel, me gustaría saber por qué aseveras eso? Ya que en reiteradas oportunidades escuche los informes del trabajo que se esta haciendo por parte de la administración gubernamental como por algunas comunidades y gente local involucrada. Mi pregunta para Jaime es respecto a que tu mostraste que el sistema Nacional en Chile tiene 17 áreas protegidas, y en todas estas hay presencia indígena o se refiere a la presencia humana en general. Por otro lado, sabemos que la política de gestión de las áreas protegidas en Chile ha sido una política muy vertical, donde incluso han echado a las poblaciones humanas de las áreas protegidas. Quiero saber si es que esto ha cambiado, o se continúa manteniéndose en el sistema Chileno?

Jamil Alca

Investigador, Perú

Sobre la reserva de biosfera de Manu hice una explicación que esta fue una declaración internacional por la UNESCO, y que no necesariamente requiere de declaraciones mediante leyes o mandatos nacionales, pero la gestión requiere de un fuerte apoyo nacional. En realidad la gestión no está siendo aún operativa con ningún tipo de apoyo, por eso digo que es de papel. Hace dos semanas en Cuzco hubo una reunión descentralizada para analizar el anteproyecto de reforma del código del medio ambiente establecida en el año 1990. Precisamente este código tiene un vacío respecto de las áreas naturales protegidas porque no reconoce a las reservas de la biosfera, lo que no le faculta la capacidad de gestión del Estado Peruano sobre este tipo de área natural protegida. Entonces lo que está reconocido y puede gestionar el gobierno es las categorías de áreas naturales protegidas reconocidas en el código de medio ambiente, como son los parques nacionales hasta los cotos de casa, pero no así la reserva de biosfera. Por ello el

caso de Manú no es operativa, aunque la UNESCO mediante una organización que se llama PROMANU seguramente están haciendo algunos trabajos que tu te enteraste. Aunque esta organización tiene con el gobierno peruano un acuerdo de co-gestión de la reserva de biosfera de Manu, pero en la realidad no es aún operativa más esta organización es causante de muchos conflictos, por eso dije que es una reserva de papel.

Jaime Soto

FUNDECAM, Chile

Lo que mostramos son estimaciones de la población indígena colindante o la que se encuentra en el interior de algunos parques. Pero la que se encuentra en el interior de acuerdo con el sistema son considerados ilegales, puesto que estas comunidades según la ley están ocupando espacios territoriales fiscales. Hace algunas semanas nos entrevistamos con el director y funcionarios de la región de la Araucanía y consultamos sobre la situación de las poblaciones indígenas en áreas naturales protegidas, la respuesta que recibimos era obvia, como son tierras declaradas fiscales cualquier ocupación es ilegal e inmediatamente se recurre a los tribunales de justicia. No existe ninguna consideración de una situación cultural o política, más bien las demandas por ejemplo del pueblo se están llevando hasta los tribunales de justicia. En el año 2003 incluso se aplicó la ley antiterrorista, que ha servido para que muchos dirigentes mapuches sean detenidos, entonces al aplicarse la ley antiterrorista pierden todas las garantías de la reforma procesal penal que está ocurriendo desde hace dos años en Chile. La situación es grave, con eso creo que respondo un poco a tu primera pregunta.

La segunda pregunta en el sentido de que el sistema sigue tan jerárquico y vertical, creo que sí aunque no desconocemos que hay un avance por lo menos en la corporación nacional forestal. En que sentido? en que ya se están ocupando del tema y se vienen realizando una serie de seminarios con respecto a la cosmovisión indígena. Otro avance es en relación a crear comités de gestión a nivel local, a nivel regional, pero eso todavía está a nivel de reflexión interna en la corporación nacional forestal. Por eso planteamos que existe todavía un largo camino por recorrer, primero que nada hay que romper la desconfianza mutua que hay en las poblaciones indígenas y el Estado. En el caso del Estado le cuesta mucho entender de que existe mucha desconfianza de parte de las comunidades. Esta desconfianza de las comunidades es legítima y tiene razones históricas, pero no así la desconfianza que hay de parte del Estado hacia las comunidades. Este es un tema muy difícil de tratar con los funcionarios gubernamentales, porque no pueden tomar conciencia de que la desconfianza de parte de las comunidades es histórica y muy bien fundamentada, y no así de parte del Estado.

Jamil Alca

Investigador, Perú

Como ya se hicieron varias preguntas, me gustaría acotar algo sobre lo que hablo el compañero de la presencia de las comunidades en la gestión de las reservas. En el caso Peruano una de las categorías que reconoce el sistema nacional de áreas protegidas son las reservas comunales en beneficio de determinados grupos étnicos, o sea tenemos un área natural protegida y las comunidades beneficiarias de esa reserva son las comunidades aledañas. Nosotros no utilizamos el término indígena sino llamamos comunidades nativas y poblaciones colonas. En este sentido tenemos una experiencia que se llama la reserva comunal Yaneshia que se creo en la década de los 70, pero no ha tenido los elementos necesarios para una buena cogestión. Desde el año 2000 se han establecido cuatro reservas comunales, una de ellas es la que limita con el Parque Nacional del Manu que se llama la reserva comunal Amaraqueiri en beneficio de las poblaciones Jarambu, Machienga y Sipiros. Esta experiencia de co-manejo sin embargo, creemos que es una desventaja para el conocimiento que tienen las poblaciones locales, puesto que co-manejo implica que el Estado peruano va a establecer un director nacional que sea profesional. Este es el requisito para ser director, aunque hay la posibilidad de que este director sea un profesional nativo indígena y que existe. Este profesional es un ingeniero forestal de origen Jarambu, no obstante hay duda de que aplique los conocimientos locales porque ya ha tenido una formación con conocimientos externos y que obedecen a sistemas administrativos burocráticos y verticales.

Estas son algunas experiencias de reservas comunales en beneficio de grupos étnicos en el caso peruano. Sin embargo, para poder establecer una autogestión y una gestión adecuada de las áreas naturales protegidas y una gestión ambiental en general, se requiere de hacer muchos ajustes y cambios. Noto en el discurso de ustedes que la situación es parecida en sus países. Como decían algunos compañeros, el discurso es bonito pero no es del todo real. Talvez vale la pena hacer una pequeña autocritica, que es la invisibilidad de los vicios del sistema implementado, es decir que hay que tener cuidado cuando estemos del lado del Estado porque posiblemente no notemos nuestros propios errores.

Por otra parte, la participación ciudadana parece ser un cliché como el caso del género, para justificar los proyectos y los financiamientos, incluyendo estos conceptos y variables que les gusta escuchar a las financieras se justifican muchos proyectos, entonces hay que tener cuidado en este sentido, en realidad las poblaciones nativas en el caso peruano son aprovechados por los negociadores estatales. La participación efectiva no esta simplemente en plantear, sino que escuchen y se haga efectivo las demandas de las comunidades nativas. Entonces el problema no es que tengan voz, sino que no les escuchen. Por otro lado, no se puede establecer

una participación ciudadana con personas que no quieren dialogar, entonces creo que hay considerar esas decisiones.

Elvira Serrano

Investigadora, AGRUCO

Mi pregunta va para Silvia, respecto a que si en Costa Rica se está trabajando sobre el tema de los servicios ambientales y también sobre el bio-comercio. ¿Cómo está este proceso?.

Silvia Rodríguez

Universidad Nacional de Costa Rica

Una respuesta a tu pregunta daría para una charla de media hora o más, pero tratare de responder algo muy corto. A partir del Convenio sobre Diversidad Biológica aprobada en los años 90 empezó muy fuertemente el tema del bio-comercio, ante todo el bio-comercio de genes. Recuerdo que cuando definían biodiversidad hacían referencia a las especies pero también a los genes, y ahora estos genes son materia prima de la biotecnología. Esta era una de las razones por la cual Estados Unidos ya en los años 70 quería que se creen parques naturales, porque la biotecnología estaba empezando a despegar. En 1993 en Costa Rica se realizó un famoso convenio entre el instituto nacional de biodiversidad y la empresa Merck que es privada, y así esta empresa obtuvo muestras de la biodiversidad de las áreas públicas de Costa Rica. Esta situación no era de conocimiento público, solamente decían que era un ingreso eventual. Podría contarles mucho sobre este tema porque he seguido de cerca. Después de 12 años de ese convenio lo que puedo concluir es que no ha llegado ni una moneda a las comunidades, aunque los que recibieron algo fueron las universidades y un área de conservación que es una isla donde no hay población, o sea las comunidades no se beneficiaron con nada. Este convenio tiene toda la idea del bio-comercio y sigue ingresando muy fuertemente, por ahí en mi ponencia hago referencia a que en los Andes también ya empezó. La explicación de los que practican el bio-comercio es que ellos solo obtienen unas muestras para investigar, pero nosotros sabemos que es suficiente esta muestra para que hagan en el caso de la bioquímica medicamentos y por el lado de la ingeniería genética hagan transgénicos. Además dicen que es una manera no invasiva. Pero en algunos casos cuando una molécula es difícil sintetizar necesitan toneladas de materia prima, esto es lo más peligroso y cuestionable.

Aquí en los Andes, una organización de las Naciones Unidas se ha embarcado en estos proyectos, y esto es toda una visión de las áreas protegidas, verdad?

que están abiertas para los investigadores. Entonces a los países en desarrollo les están pidiendo que hagan normas para que los investigadores entren con garantías a las áreas protegidas. Aquí hay otra preocupación para las comunidades y para que expresen en que condiciones los investigadores puede llegar a sacar productos de los parques, y también como justificar que los biólogos que hacen etno-botánica tengan un código de ética para que los resultados de sus investigaciones no sean utilizados sin consentimiento previo de las comunidades. Bueno todo esto de las normas de acceso ya la pasamos en Costa Rica, y fue un proceso tremendamente complicado. Por ejemplo las comunidades indígenas pidieron que el capítulo de conocimiento tradicional quedara pendiente, porque ellos todavía no han logrado pensar en cómo hacer un sistema de protección del conocimiento indígena o del conocimiento tradicional. Aquí hubo un pequeño problema, como este tipo de conocimientos se retroalimentan con el intercambio; entonces cuando se protege al estilo occidental pierde su riqueza. Un indígena poniendo un ejemplo decía: miren cuando uno quiere que haya más luz en una aldea indígena, lo que hacemos es poner la candela en un lugar para que todos tengan un poquito más de luz. Así también son nuestros conocimientos, para que crezca lo tenemos que compartir.

Pero los sistemas occidentales que vienen acompañados de propiedad intelectual donde se aísla el conocimiento y se monopoliza, quiebran todo el sistema de conocimiento comunitario. Entonces vean que la vertiente del bio-comercio es de muchísima discusión. Muchos investigadores están incluso en desacuerdo con las normas de acceso, porque no quieren tener ningún control mucho menos de las comunidades. Pero lo más lamentable es que todo esto va a quedar en la basura con el tratado de libre comercio, porque en este tratado de libre comercio esto será un servicio ambiental y estará legalizado, introducido como parte del libre comercio. En este caso cualquier investigador que venga de afuera tendrá el mismo derecho que un investigador boliviano. En Costa Rica se ha desarrollado varios servicios ambientales como del agua, del oxígeno, y en el caso de la biodiversidad será igual y las comunidades seguirán siendo las que ganarán menos.



Panel de discusión y debate Parte II: Experiencias y análisis de las áreas protegidas en Latinoamérica. Panelistas: Jaime Soto (Chile), Jamil Alca (Perú) Silvia Rodríguez (Costa Rica)



Participación de dirigentes campesinos durante la discusión y el debate en torno a las experiencias de áreas protegidas en Latinoamericana

Parte III

Marco institucional, estrategias y experiencias de las áreas protegidas en Bolivia

Marco institucional y estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP)

Juan Rene Alcoba¹

1. Introducción

En el presente seminario pretendemos hacer conocer, en primer lugar, el marco institucional y legal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y del Servicio Nacional de Áreas protegidas de Bolivia (SERNAP) y, por otro lado, mostrar algunos avances que se ha tenido en Bolivia en cuanto a la gestión de las áreas protegidas y la participación de las comunidades locales. En el marco institucional haremos referencia sobre todo a las políticas y a los lineamientos estratégicos, además de comentar sobre algunos avances logrados con la implementación de las mismas.

2. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia incluye al conjunto de Áreas Protegidas de interés nacional, con diversas categorías de manejo y niveles de administración que funcionan enlazadas bajo un Régimen Especial común que contempla un marco conceptual, político, institucional y normativo específico. Dentro el SNAP se reconocen 5 categorías, que son: Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, Reservas Naturales, Áreas Naturales de Manejo Integrado y Reservas de Inmovilización.

En ese marco, las áreas protegidas en Bolivia están concebidas bajo una lógica de sistema, es decir se tiene políticas, normas e instrumentos de gestión para todas las áreas protegidas y niveles de administración. Las áreas protegidas de interés para Bolivia y que componen actualmente el SNAP son los siguientes:

1 Técnico representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

- 1) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Amboró
- 2) Parque Nacional Noel Kempff Mercado
- 3) Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni
- 4) Area Natural de Manejo Integrado Apolobamba
- 5) Parque Nacional Carrasco
- 6) Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa
- 7) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata
- 8) Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro - Sécore
- 9) Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilon Lajas
- 10) Parque Nacional Sajama
- 11) Parque Nacional Torotoro
- 12) Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
- 13) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi
- 14) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco
- 15) Reserva Nacional Amazónica del Manuripi
- 16) Area Natural de Manejo Integrado San Matías
- 17) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Otuquis
- 18) Reserva Biológica Cordillera de Sama
- 19) Parque Nacional Tunari
- 20) Área Natural de Manejo Integrado El Palmar
- 21) Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Agüiaragüe

Estas 21 áreas protegidas que actualmente componen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) fueron priorizadas al momento de la creación del SNAP (1992) de manera que representen a los elementos de biodiversidad más significativos de Bolivia; en conjunto estas 21 áreas protegidas cubren aproximadamente el 14% del total de la superficie de Bolivia. En los papeles sin embargo, se hace referencia a la existencia de alrededor de 56 áreas protegidas desde que se creó la primera área protegida en 1939 (Parque Nacional Sajama).

La concepción y forma de manejo de las áreas protegidas en Bolivia, desde el inicio reconoce la existencia de poblaciones locales y comunidades indígenas en los territorios que hoy son considerados áreas protegidas; considerando que las comunidades indígenas han desarrollado muchos conocimientos y prácticas de uso y de manejo amigable de la biodiversidad. A raíz del reconocimiento de esta realidad el SNAP plantea el concepto de “parques con gente”.

En la gestión de las áreas protegidas la participación social es un elemento vital para garantizar su sostenibilidad; el desafío actual es mostrar que la conservación de la biodiversidad puede generar beneficios económicos para los habitantes locales; mostrando de esta manera que las áreas protegidas tienen un rol socioeconómico importante a nivel local y regional.

En este marco, la visión de la gestión del SNAP está planteada de siguiente manera:

El SNAP asegura la conservación efectiva de una parte significativa del patrimonio natural y cultural de la nación generando al mismo tiempo procesos para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones vinculadas a las áreas protegidas, aportando al desarrollo social y económico regional y nacional de forma integrada con el ámbito político, normativo, administrativo y sociocultural en el marco del Desarrollo Sostenible.

3. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP)

El decreto de creación del SERNAP (DS N° 25158 del 04 Sep. de 1998) le otorga la misión institucional de: coordinar el funcionamiento del SNAP, garantizando la gestión integral de las áreas protegidas de interés nacional a efectos de conservar la diversidad biológica. El SERNAP tiene como objetivo estratégico institucional contribuir a la conservación de la diversidad biológica del país a través del establecimiento, organización y consolidación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Las características institucionales del SERNAP son:

- Entidad de estructura propia desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
- Dependencia funcional (cumplimiento de políticas y normas) del Vice-ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal.
- Independencia de gestión técnica y administrativa.
- Competencia del ámbito nacional.

El SERNAP tiene dos niveles de gestión, que son: A nivel del sistema nacional y a nivel de cada área protegida o distrito.

4. Marco legal del SNAP y el SERNAP

La construcción de políticas para el SNAP se concibe a partir de las principales reformas del Estado que se ha iniciado en la década del 1990.

La gestión de las áreas protegidas se respalda en términos globales, se apoya en la Ley 1580 que ratifica para Bolivia la firma mundial del Convenio de Diversidad Biológica en la Cumbre de Río en 1992. Asimismo, está respaldada por el acuerdo regional en el marco de la Comunidad Andina (1993).

Legalmente en Bolivia, la gestión de las áreas protegidas se respalda en la Ley de Medio Ambiente (Ley N° 1333, 1992) que generó un marco propicio definiendo el concepto, los propósitos y funciones de las áreas protegidas y el sistema que ellas conforman. Asimismo, aún esta en vigencia la Ley de Vida Silvestre, Parques

Nacionales, Caza y Pesca (DL N° 12301, 1975) que respalda también la gestión de las áreas protegidas.

Por otra parte, Bolivia cuenta con un Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. 24791 de 1997) que norma el funcionamiento del sistema. Pese a que este reglamento no se articula expresamente con los procesos políticos y sociales impulsados por las últimas reformas del Estado, abre el espacio para los mecanismos de participación por medio de los Comités de Gestión, los que son definidos como *“la instancia de participación en el ámbito de cada área protegida que incorpora en la gestión de la misma a los pueblos indígenas, comunidades, municipios, prefecturas, otras entidades públicas, entidades privadas y organizaciones sociales involucradas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Medio Ambiente”*

El marco conceptual y de acción general para la gestión de la biodiversidad en el país haciendo énfasis en el desarrollo del potencial económico de la diversidad biológica, fue propuesto en el 2001 por la “Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad” (ENCB) cuya formulación fue generada a través de un amplio proceso participativo a cargo de la Dirección General de Biodiversidad.

Administrativa e institucionalmente el SERNAP está respaldada por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (1997) y sus respectivos reglamentos.

A nivel local, tanto el SNAP como el SERNAP está respaldada por las normas de creación de las áreas protegidas que son establecidas legalmente en algunos casos por Decretos Supremos del Poder Ejecutivo y en otros a través de Leyes sancionadas por el Poder Legislativo como es el caso del Parque Nacional Tunari que esta respaldada por la Ley N° 1262. Asimismo, se disponen de instrumentos de manejo como los planes de manejo, zonificación, programas y normas.

En otras leyes que respaldan la gestión de las áreas protegidas se debe mencionar a la Ley de Participación Popular que reconoce y promueve la participación de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales; la Ley de Municipios que otorga a los Gobiernos Municipales la responsabilidad de promover el desarrollo humano sostenible dentro el ámbito de su jurisdicción territorial; la Ley INRA que reconoce el derecho propietario de la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas; y la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) que establece entre sus temas transversales la protección y conservación del medio ambiente.

5. Principios que rigen la gestión del SNAP

a. Respeto y valoración de la diversidad cultural y natural

En Bolivia, existe una gran diversidad cultural expresada en más de 30 grupos étnicos y pueblos indígenas que habitan en la mayoría de las áreas protegidas. Estas culturas han desarrollado y transmitido de generación en generación

valiosos conocimientos sobre el manejo, uso y conservación de la biodiversidad, además han desarrollado formas de relación con la biodiversidad y los recursos naturales en un marco de respeto y convivencia armónica.

Garantizar la conservación del patrimonio natural en el marco del respeto de las identidades culturales es un compromiso ético que busca no solo valorizar, proteger y restaurar la biodiversidad, sino revalorizar los conocimientos y prácticas de manejo de la biodiversidad y los recursos naturales puesto que esta riqueza intangible es fundamental en los procesos de gestión de las áreas protegidas.

b. Reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las poblaciones locales

El reconocimiento de los derechos y acceso a la tierra y al territorio como espacio social, económico y cultural principalmente para los pueblos y comunidades indígenas son elementos esenciales y cruciales para la gestión sostenible de las áreas protegidas, lo cual también está respaldada por la Constitución Política del Estado que en su artículo 171 párrafo II indica: *“se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los RN, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones”*

En ese sentido, la gestión para el uso y aprovechamiento sostenible de los RN renovables en las áreas protegidas debe basarse en el reconocimiento de los sistemas de producción –tradicionales o no- establecidos por los pobladores locales y en las costumbres y normas consuetudinarias relacionadas con este uso, compatibilizando en el marco de los objetivos de conservación de las áreas protegidas.

c. Integralidad de la conservación y del desarrollo

El establecimiento y manejo de un SNAP debe formar parte de la agenda política nacional y se constituye como una de las políticas prioritarias del Estado, estableciendo una relación permanente con los ámbitos económico, social, político y ambiental del país; desarrollando una coordinación y cooperación entre los diferentes sectores económicos y sociales, en los diferentes niveles de organización administrativa del Estado (nacional, departamental y municipal), respetando las diferentes formas de organización territorial y social (tradicional o no tradicional) y conjuncionando enfoques metodológicos de trabajos y tecnologías interdisciplinarias e interculturales.

d. Participación social con equidad

La participación social con equidad, se refiere a la generación o mejora de las condiciones para la participación de los actores locales relevantes para la conservación

y el desarrollo de las áreas protegidas con igualdad de oportunidades, sin discriminación y con respeto a la diversidad étnica y cultural, así como de género y grupos generacionales en los procesos de formulación de los objetivos, líneas de acción, orientaciones estratégicas y prioridades en la gestión integral de las áreas protegidas.

e. Distribución justa de beneficios

La distribución de beneficios económicos destinados a la población tanto por concepto de ingresos que generan las áreas protegidas, por el aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad y el ecoturismo debe orientarse principalmente al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales. Debe favorecer en términos generales a aquellas comunidades y familias que mantienen o asumen las modalidades de producción sostenible en las áreas protegidas.

f. Subsidiariedad

El principio de subsidiariedad implica el fortalecer niveles descentralizados o desconcentrados para que estos asuman responsabilidades de gestión con relación a las áreas protegidas bajo su competencia; tal es el caso de las Prefecturas con las áreas protegidas de interés departamental y los municipios con las áreas protegidas de interés municipal. De igual manera se deberá respetar, normar y fortalecer el rol del sector privado en la conservación a través de la conformación y manejo de las áreas protegidas privadas. Estos aspectos implican la transferencia de funciones y uso de recursos ya establecidos para este fin en las instancias desconcentradas y, al mismo tiempo, las bases instrumentales y capacidades institucionales y técnicas respectivas.

En el caso de las áreas protegidas de carácter nacional el principio de subsidiariedad abarca el fortalecimiento de las organizaciones de base para mejorar su participación en la gestión de las áreas protegidas y lograr su compromiso y apoyo a la gestión y sostenibilidad del sistema respaldado por las organizaciones y comunidades (TCOs, Ayllus, Markas, Capitanías y otras) que habitan dentro de las áreas y en sus zonas de influencia.

6. Políticas y lineamientos estratégicos del SNAP

1) Conservar la diversidad biológica y cultural en las áreas protegidas

La conservación de los RN, culturales, ecosistemas, paisajes, especies, recursos genéticos dependen del establecimiento y la consolidación de unidades de conservación adecuadas para mantener la viabilidad de los procesos biológicos y evolutivos.

Los lineamientos estratégicos para esta política son las siguientes:

- Aplicación de criterios y mecanismos en el marco de un plan maestro del SNAP, para la adecuación permanente del número, extensión, límites y categorías de las APs de importancia nacional.
- Desarrollar criterios y directrices para la creación, manejo y conservación de las APs departamentales, municipales y privadas.
- Implementación de una estrategia que permita mantener la viabilidad de los procesos ecológicos y evolutivos, evitar o revertir la fragmentación de los habitats.
- Implementación de sistemas de vigilancia y control de la biodiversidad en las APs basado en personal capacitado y con la cooperación activa de las comunidades locales.
- Orientación conceptual y metodológica y gestión de apoyo financiero y técnico para la implementación de programas de manejo y monitoreo de la biodiversidad en cada una de las APs.
- Desarrollo de las capacidades técnicas para orientar y dar seguimiento al establecimiento de capacidad de carga de ecosistemas, estudios de impacto ambiental y medidas de control y mitigación de impactos.
- Fortalecimiento de la promoción, difusión y educación ambiental en el ámbito local y nacional.
- Promoción de la investigación dirigida hacia el rescate y la revalorización de los conocimientos tradicionales.
- Fomento de programas de investigación que dan soporte científico a los aspectos de manejo conservacionista de las APs según las prioridades de gestión establecidas.

2) Orientar los valores, actitudes y prácticas personales y colectivas hacia la conservación de las áreas protegidas

Se pretende modificar las actitudes negativas y reforzar actitudes positivas de los ciudadanos respecto a su relación con la naturaleza. Esto se extiende a todos los niveles, tanto a los funcionarios y empleados públicos tomadores de decisiones como a la sociedad en general. Las áreas protegidas constituyen un espacio de trascendental importancia para coadyuvar a la generación de una conciencia colectiva favorable a la conservación del patrimonio natural y cultural del país. Aspecto esencial en el trabajo de *concienciación* es reconocer, comprender y divulgar prácticas conservacionistas de las poblaciones, la forma de uso del espacio y el carácter de sus relaciones económicas.

Los lineamientos estratégicos para esta política son los siguientes:

- Implementación de campañas de difusión y educación ambiental con relación a los valores naturales, culturales, sociales y económicos de la conservación de la biodiversidad y las APs.
- Creación de condiciones para la enseñanza e interpretación ambiental en las APs.
- Incorporación de temas relacionados con las APs en el currículum de la educación formal.
- Desarrollo de programas para la toma de conciencia de los pobladores en municipios y comunidades.
- Establecimiento de mecanismos para la información y sensibilización de los decisores políticos a nivel nacional, regional y local.
- Consolidar el eje transversal de la conservación del medio ambiente en los contenidos curriculares regionalizados de la educación primaria.

3) Consolidación institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

La política general para el fortalecimiento del SERNAP parte de sus funciones y atribuciones normativas, fiscalizadoras, administrativas, coordinadoras y orientadoras en su condición de organismo público rector del sistema. Debe procurar consolidar su independencia de gestión técnica y administrativa y su estatus institucional actual caracterizado por una relativa autonomía.

Los lineamientos estratégicos para esta política son:

- Consolidar e institucionalizar el marco conceptual de políticas y directrices para la constitución, organización y funcionamiento del SNAP a través de una visión estratégica de largo plazo.
- Generación sistemática de conceptos, políticas específicas, estrategias y directrices relativos a la gestión del SNAP y su adecuación dinámica a los cambios del entorno político y social.
- Fortalecer la implementación de los sistemas de administración y control gubernamental en la unidad Central del SERNAP y en cada una de las APs
- Articulación y fortalecimiento de los procesos de planificación, organización, ejecución, control, seguimiento y evaluación, así como en el establecimiento de sistemas de información a nivel de la unidad central y a nivel de las APs.
- La calidad del personal profesional y su continuidad se dirigirán a la implementación de programas integrales de capacitación de los recursos humanos tanto de la unidad central como de las APs.
- Establecimiento de mecanismos para la coordinación operativa entre el SERNAP y los ministerios y viceministerios, superintendencia de RN, Prefecturas, Municipios, TCOs y otras organizaciones del Estado y de la sociedad civil en aspectos relacionados con las APs.

- Para un mejor posicionamiento del SERNAP ante la opinión pública e instituciones del Estado, promover la proyección de un vigoroso perfil institucional a través de los medios de comunicación que resalte su rol como garante de la conservación del patrimonio natural.
- Generación de propuestas normativas en relación al fortalecimiento de las atribuciones del SERNAP y su inserción a los diferentes niveles del marco jurídico nacional.
- Desarrollo o adecuación de instrumentos normativos específicos de diferente jerarquía que consolidan la gestión del SERNAP en las APs. Esto concierne tanto a la elaboración de normas legales con rango de Ley como reglamentos y normas internas del SERNAP.

4) Mejorar la sostenibilidad financiera de la gestión del áreas protegidas

La consolidación de la capacidad institucional del SERNAP implica a su vez, la reducción de la dependencia del financiamiento externo y el establecimiento de mecanismos para la generación de recursos propios orientados a garantizar la suficiencia económica y financiera del SERNAP.

Para ello se definen los siguientes lineamientos estratégicos:

- Desarrollo de mecanismos para la generación y valoración de bienes y servicios que posibiliten la obtención de recursos propios.
- Establecimiento de una política de generación de recursos propios a través de concesiones, cobros por servicios ambientales, por ingreso a las APs, por el uso de RN y otras que se identifiquen en la estrategia financiera del SERNAP.
- Los fondos fiduciarios y otros mecanismos financieros son prioritarios para solventar los gastos recurrentes del SERNAP como contraparte nacional. Además, los recursos del SERNAP se utilizarán como fondos de contrapartida para la generación de recursos complementarios.
- Promover la participación de las Prefecturas, Gobiernos Municipales y otros actores institucionales privados y públicos, buscando el co-financiamiento en la ejecución de programas y proyectos que benefician a las áreas del sistema.

5) Promover la integración de las APs en las políticas económicas y sociales nacionales

La política de conservación de la biodiversidad y de las APs en especial, debe articularse con las políticas de desarrollo económico y social. Mientras en el pasado predominaba un enfoque exclusivamente extractivo orientado a maximizar las ganancias en decremento progresivo de los RN y la biodiversidad, en los últimos años ha surgido el paradigma del desarrollo sostenible que plantea una

mejor integración de la conservación de la biodiversidad y cultural con el aprovechamiento sostenible de los RN como un elemento estratégico para el desarrollo económico y humano. En este sentido, es necesario introducir activamente los aspectos ambientales, sociales y económicos de la gestión de las APs en el ámbito de las decisiones políticas nacionales.

Los lineamientos que se plantean para esta política son los siguientes:

- Proyección sistemática hacia los ámbitos políticos y sectores económicos del país del valor y beneficio económico de la biodiversidad y cultural y especialmente del potencial de los servicios ambientales como la captura de CO₂, regulación del agua, recursos genéticos y otros.
- Participación activa del SERNAP y otros actores importantes en procesos de conceptualización, formulación y ejecución de políticas públicas relevantes para la conservación de los RN y la Biodiversidad.
- Promoción de la generación de modelos de aprovechamiento sostenibles de los RN y la valoración de los servicios ambientales compatibles con los objetivos de conservación y desarrollo social.
- Establecimiento de mecanismos de relacionamiento permanente con aliados estratégicos (privados o de la sociedad civil) para la difusión e implementación de modelos de uso de los RN compatibles con la conservación de las APs, generando beneficios económicos a nivel local, regional y nacional.
- Fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de coordinación sobre todo con los sectores de la administración pública vinculados con la gestión de las APs.
- Gestión y negociación permanente con diversos sectores para superar vacíos legales, de superposición y contradicciones entre las diferentes normas sectoriales con las del SERNAP.

6) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales

Para lograr sostenibilidad social en el SNAP es necesaria la generación de beneficios que contribuyan a mejorar la calidad de vida e ingresos de las poblaciones asentadas en las APs. Se intenta mejorar las prácticas productivas existentes y rescatar y promover la generación de alternativas de aprovechamiento de la biodiversidad que beneficiando económicamente a las poblaciones locales garanticen la conservación en las APs y su entorno y mejoren su calidad de vida.

Los lineamientos estratégicos para esta política son los siguientes:

- El SERNAP impulsará y desarrollará programas y proyectos que aseguren el manejo integral y sostenible de los RN renovables y que sean compatibles con los objetivos de conservación de las APs, promoviendo la participación de los diferentes actores.

- Fomento a programas y proyectos de generación de alternativas económicas sostenibles en términos ecológicos, de empleo e ingresos y que beneficien a poblaciones locales de las APs.
- Promoción de la investigación de sistemas tradicionales de uso y aprovechamiento de la biodiversidad y los RN compatibles con la conservación.
- Promoción, rescate y difusión de formas de manejo sostenibles de los RN y formas sociales de producción sostenibles, compatibles con los objetivos de conservación de APs.
- Promoción del turismo ecológico y la recreación en APs como instrumento para la sensibilización de la población sobre la importancia de la biodiversidad y para la generación de recursos económicos que contribuyan a la gestión y sostenibilidad de las APs.
- El SERNAP regulará la actividad turística dentro de las APs sobre la base de la normativa específica existente y de acuerdo a los mecanismos de planificación institucionales.
- Coordinación y apoyo al proceso de saneamiento y titulación de tierras en las APs.
- Promoción y rescate de normas comunales de uso de RN y la biodiversidad.

7) Consolidar la integración de la gestión de las APs con la gestión municipal y departamental

En el marco de las reformas del Estado boliviano se va consolidando, a través del sistema Nacional de Planificación, un proceso de planificación estratégica y territorial en el ámbito nacional, departamental y municipal. En este contexto el SERNAP orienta esfuerzos para la articulación del SNAP con todos los niveles de gestión territorial y político-administrativos, buscando mecanismos adecuados para mejorar su inserción en las políticas y estrategias nacionales y sobre todo, regionales y locales.

La coincidencia territorial y político-administrativa parcial o total de APs y municipios permite al SERNAP considerar especialmente a estos últimos como elementos fundamentales de integración local y regional para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. La integración de otros actores institucionales que tienen mandatos específicos para la gestión territorial y de los RN relacionados con las APs como prefecturas, municipios y TCOs, tienen que basarse principalmente en la creación de las capacidades para que estos puedan cumplir su rol para una participación responsables en el manejo de las APs y sus zonas de amortiguación

Los lineamientos estratégicos para esta política son los siguientes:

- Promoción de la integración de la gestión de APs de importancia nacional con los procesos de planificación territorial y estratégica de los diferentes municipios y mancomunidades.

- Vinculación de la gestión de las APs con las instancias políticas administrativas locales y regionales, estableciendo alianzas estratégicas con municipios y actores sociales de las tierras comunitarias de origen e integrando Planes de Manejo de las APs con Planes de Desarrollo Municipal, Departamental y Distritales.
- Promoción de la integración de procesos de planificación de las APs con los diferentes municipios de su entorno, así como mancomunidades.
- Fortalecer la integración de territorios comunitarios de origen y APs a través del desarrollo de instrumentos y mecanismos de gestión y coordinación.

8) Fortalecer la participación social en la gestión de las APs

La gestión de las APs en Bolivia plantea como elemento fundamental la participación de los diferentes actores y sectores de la sociedad como principio para lograr una sostenibilidad social de la conservación de biodiversidad en el marco del desarrollo sostenible, promoviendo un proceso de apropiación social y local de la gestión de APs. Se busca promover la participación efectiva y responsable de la población regional y local en la gestión de las APs y desarrollar sus capacidades para que estén en condiciones de apoyar su manejo y conservación. Se debe garantizar la participación de las organizaciones sociales como de instituciones públicas, privadas, ONGs y otras de la sociedad civil; de modo que se logre su incorporación en los procesos de planificación, ejecución y evaluación de las acciones que se realizan con el objeto de cumplir con los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de las APs.

Los lineamientos estratégicos para esta política son:

- El SERNAP fomentará a través de los Comités de Gestión, la participación efectiva de comunidades indígenas y originarias, campesinas, colonizadores y otras organizaciones locales como los gobiernos municipales y representantes de las Prefecturas.
- Incorporación de recursos humanos locales como personal de las APs permitiendo aumentar la capacidad de relacionamiento con las comunidades locales.
- Fomento de los mecanismos de co-administración de las APs y fortalecimiento de organizaciones indígenas locales y otras organizaciones para la co-administración.
- Fomento a la participación de organizaciones de base en los programas y proyectos de las APs en los ámbitos de desarrollo sostenible, educación ambiental, turismo y otros.
- Con el objeto de articular esfuerzos técnicos y financieros, las ONGs, instituciones de apoyo al desarrollo local, la empresa privada y otro tipo de

organizaciones funcionales participarán en la conservación de las APs a través de los comités interinstitucionales.

- Establecimiento e implementación de nuevas instancias y mecanismos de participación en la gestión de las APs.

9) Impulsar la integración de las áreas protegidas en el ámbito internacional

En los últimos años se han generado nuevos conceptos de conservación a escala regional y continental, que se expresan en la formulación de estrategias para un conjunto de países, en el diseño y establecimiento de biocorredores que pueden abarcar ecosistemas de varios países y en la promoción de áreas de conservación transfronterizas. Estas iniciativas reflejan la necesidad de aunar esfuerzos entre los países de la región para enfrentar los retos del desarrollo sostenible y el manejo ambiental de las bioregiones y grandes ecosistemas compartidos.

Los lineamientos estratégicos son los siguientes:

- Fortalecer la red continental de unidades de conservación integrando los esfuerzos de conservación del SNAP con los sistemas de APs de países andinos y de las cuencas Amazónica y del Plata, velando por el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales relacionados con las APs y la conservación de la biodiversidad.
- Realización, en coordinación con la Cancillería de la República, de un seguimiento sistemático a convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales relevantes para las APs y de los compromisos de se derivan de éstos.
- Coordinación del establecimiento y la implementación de estrategias, programas y proyectos binacionales para biocorredores y gestión de APs transfronterizas.

10) Mecanismos y modalidades de participación de los actores locales en las APs del SNAP

Los mecanismos y modalidades de participación de los actores locales se vienen aplicando a diferentes niveles, como:

- En la administración de la unidad de conservación.
- En los procesos de planificación y gestión ambiental.
- A través del Comité de Gestión.
- A través del Comité Interinstitucional.
- Con la incorporación de recursos humanos locales al personal del APs.
- En la implementación de programas y proyectos dentro de las APs y en las zonas de influencia.

Uno de los mecanismos de participación que mayores avances ha tenido son los Comités de Gestión, encontrándose a la fecha en pleno funcionamiento los siguientes:

N°	Área Protegida	Fecha de Creación
1.	Area Natural de Manejo Integrado (INAMI) Apolobamba	1994, reconfirmado 2000
2.	Parque Nacional Noel Kempff Mercado	Mayo 1995
3.	Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa	Julio 1995
4.	Parque Nacional Sajama	Diciembre 1995
5.	Parque Nacional y ANMI Kaa Iya del Gran Chaco	Mayo 1996
6.	Parque Nacional Torotoro	Junio 1996
7.	Parque Nacional y ANMI Amboro	Julio 1996
8.	Parque Nacional y ANMI Madidi	Octubre 1996
9.	Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia	Octubre 1997
10.	Parque Nacional y ANMI Cotapata	Diciembre 1997
11.	Reserva Biológica Estación Biológica del Beni	Septiembre 1999
12.	Reserva Biológica Cordillera de Sama	Diciembre 2001
13.	Area Natural de Manejo Integrado El Palmar	Enero 2002
14.	R. Biológica y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas	Septiembre 2002

Otro avance importante son los convenios de coadministración que ya fueron consolidados en las siguientes áreas protegidas:

Area Protegida	Institución	Firma de Convenio	Duración
Parque Nacional Noel Kempff Mercado	Fundación Amigos de la Naturaleza - FAN (ONG)	20 abril de 1995	10 años
Reserva Biológica Estación Biológica del Beni	Academia Nacional de Ciencias de Bolivia	25 septiembre de 1995	10 años
Parque Nacional y ANMI Kaa Iya del Gran Chaco	Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) Fundación Ivi Iyambae	24 noviembre de 1995	10 años
Parque Nacional y Territorio Indígena Isibore Sécure	Subcentral Indígena del Territorio Indígena Isiboro Sécure	24 julio de 1997 31 julio de 2002	5 años 5 años

La articulación de las áreas protegidas con los gobiernos municipales y las prefecturas tuvo también avances, lográndose a la fecha incorporar principios y criterios de gestión ambiental, desarrollo sostenible y gestión de áreas protegidas en los Planes de Desarrollo Municipal en los siguientes casos:

- Parque Nacional Sajama con el Municipio de Curaguara de Carangas y Turco.

- Parque Nacional Torotoro con el Municipio de Torotoro
- Parque Nacional Carrasco con el Municipio de Villa Tunari

Por otra parte, se tiene avances en la integración de las áreas protegidas con las siguientes mancomunidades:

- Gestión Ambiental Mancomunitaria de la Cuenca del Río Beni,
- Mancomunidad de Municipios de Apolobamba,
- Mancomunidad de Municipios Sara e Ichilo en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró
- Coadministración con Mancomunidades de Municipios del Chaco del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Agüaragüe

El proceso de formulación de la ley de áreas protegidas de Bolivia

Gonzalo Zambrana A.¹

1. Introducción

El proceso de consulta pública para la formulación de la Ley de Áreas Protegidas, ha tenido como uno de sus elementos principales, el cuestionamiento a uno de los factores centrales que caracterizan al modelo de administración vigente hasta ahora: nos referimos a la concepción de la participación local en la gestión de áreas protegidas o en otros términos, al enfoque de *gestión participativa*.

Para una comprensión efectiva de ello, hemos sostenido desde hace mucho tiempo que es imprescindible situar la problemática de la gestión de las Áreas Protegidas y su relación con la participación local, en el contexto sociopolítico histórico y coyuntural que vive el país. Así encontraremos que temas que forman parte de la problemática del desarrollo, tienen una relación directa con la problemática de las áreas protegidas. Estamos hablando de: reivindicaciones étnicas, demandas de tierra-territorio, viabilidad del modelo de desarrollo económico liberal, corrupción en instituciones públicas, demanda de participación democrática, modelos paternalistas de intervención para el desarrollo, ausencia de control social en la toma de decisiones gubernamentales, etc.

Por ejemplo, hasta ahora el Régimen del INRA, no ha logrado resolver efectivamente el problema de la distribución inequitativa de tierras en Bolivia, puesto que por un lado, en el oriente boliviano se mantienen grandes propiedades con fines especulativos, en el resto del país la carencia de tierras inviabiliza no solo la producción sino la existencia misma de su gente. El caso de las áreas protegidas ha sido otro ejemplo de esta inequidad puesto que, tal como lo reclaman perma-

1 Licenciado en economía. Director de Gestión Ambiental de la Honorable Alcaldía Municipal de Cercado, Cochabamba-Bolivia

nentemente las comunidades locales, las administraciones de las áreas protegidas, no han actuado con la misma dureza empleada en el control de las actividades indígenas y campesinas, que cuando los afectados han sido grupos con poder económico y político, como mineros, petroleros, terratenientes, políticos, etc. Por tanto, al considerarse la problemática territorial de la gente de las áreas protegidas, como un proceso reivindicativo de carácter socioeconómico, cultural y altamente politizado, debe simultáneamente considerarse el conflicto que ha generado el modelo de distribución de tierras en nuestro país, que además de ser inequitativo, al ser racionalizado por los actores sociales, ha sustentado plenamente la demanda de los movimientos sin tierra, que mas allá de su legitimidad o no, forma parte de la agenda reivindicativa de los movimientos insurgentes actuales.

Por ello, es necesario efectuar un repaso a las transformaciones que se han efectivizado en el escenario político boliviano. Es necesario destacar que si bien se han producido movilizaciones de tal magnitud, que han herido profundamente el sistema político vigente hasta ese momento, planteando el redireccionamiento de los esquemas de participación social y democracia, la dinámica sociopolítica que tuvo sus puntos críticos en febrero y octubre del 2003, no se ha manifestado en forma homogénea en todas la regiones del país; para ello es necesario preguntarse por ejemplo, las razones por las cuales mientras en La Paz alcanzaba un estado de ebullición social sin precedentes, las movilizaciones en Cochabamba distaban mucho de otras vividas anteriormente como la *guerra del agua*; peor aún en Tarija, Beni y Pando las actividades transcurrieron con normalidad, excepto en Santa Cruz donde la expresión de masas mas importante se produjo por la presencia de los campesinos de Yapacani que al ingresar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los tradicionales organismos cívicos cruceños, organizaron una movilización para contenerla y peor aun, cuando esta marcha campesina ingreso a la Plaza Principal los "collas" fueron golpeados inmisericordemente por alevosos miembros de la "juventud" cruceñista, sin siquiera respetar mujeres ni ancianos.

La nueva composición gubernamental y la correlación regional de identidades políticas que vinieron después de Octubre del 2003 quizás son una expresión de la dinámica inaugurada en este histórico mes donde se expulso a un presidente constitucional; mientras los movimientos insurgentes de La Paz expresaron diversos grados de identidad con el nuevo gobierno, los empresarios de Santa Cruz, por ejemplo se convirtieron en sus principales críticos. Eso nos permite observar que el nuevo gobierno fue principalmente el resultado de las masivas movilizaciones de El Alto y La Paz, sin que haya sido compartido por otros grupos de poder del oriente del país, principalmente de Santa Cruz, como la CAINCO, que indudablemente perdieron los espacios de poder de los que hasta ese momento habían gozado. Eso se puede ver con claridad en las encuestas, que con cierta regularidad se realizan para evaluar la aceptación de la gestión del presidente Meza Quisbert, mientras en La Paz y El Alto la cifras superan las tres cuartas partes, a medida que se va bajando por Cochabamba y se llega a Santa Cruz y todo el

oriente, el apoyo disminuye proporcionalmente. También es necesario destacar sin embargo de que las masivas movilizaciones, principalmente de La Paz, tuvieron un carácter esencialmente político, estas no tuvieron una dirección única, ni un discurso movilizador ideológicamente elaborado y menos existió la presencia de “institución” política, sin que esto quiera decir que los partidos políticos aspirantes a la representación del conjunto de las masas (como el MAS y el MIP, por ejemplo) no hubieran tenido una participación relevante.

Otro fenómeno que es importante destacar, es la correlación de fuerzas que ha engendrado octubre del 2003, puesto que si antes existía un comportamiento arrogante y prepotente por parte de los grupos de poder, ahora al parecer el péndulo se encuentra en el otro extremo, puesto que existen niveles dirigenciales de los sectores populares cuyo comportamiento, fuertemente politizado tiene fuertes rasgos de intolerancia y reconocimiento a otros segmentos sociales, configurándose por tanto un estado de fuerte polarización, haciendo imprescindible la construcción de un discurso que identifique la necesidad de constituir un estado-nación pluricultural y basado profundamente en la democracia y la equidad.

2. La utopía capitalista en la construcción de la Nación Boliviana

Los orígenes de este conflicto debemos situarlos, en el modelo de estado nacional que los grupos dominantes han intentado construir en nuestro país. Por tanto estamos hablando de la historia del capitalismo en Bolivia. Bajo esta lógica, la esperanza ha sido que a través de un desarrollo intensivo del capitalismo y a través de la acumulación de capital, este sistema con su lógica y racionalidad se iba a imponer absorbiendo inevitablemente a toda la multiplicidad de formas socioculturales y económicas precapitalistas, evolucionando hacia una nación –estado capitalista– occidental (Fig. 1).

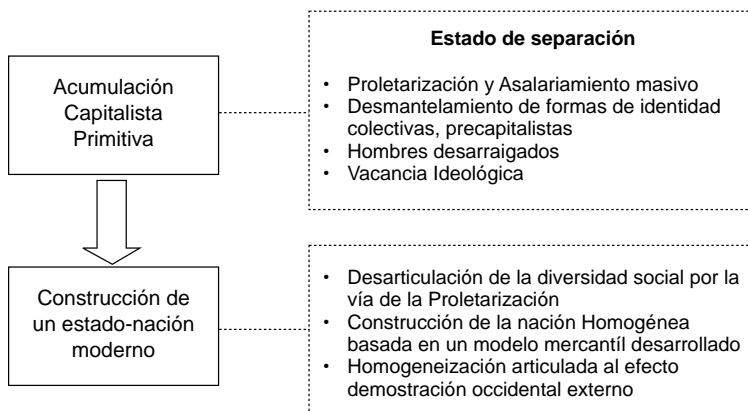


Figura 1. Bases para Construcción de un Estado-Nación Capitalista-Occidental.

3. Estado aparente, modernidad y globalización

Sin embargo, según el esquema de interpretación planteado por Zabaleta² el proceso de constitución de una nación homogénea en Bolivia guiado por la utopía capitalista, no ha logrado ser completado según las propias previsiones del modelo de acumulación

El gran conflicto es que las clases dominantes han supuesto que la inevitabilidad evolutiva del estado-nación capitalista-occidental, por la vía de la modernización en Bolivia, iba a absorber automáticamente a todo vestigio precapitalista, esto implicó el desconocimiento de formas económicas, sociales y culturales diferentes, en otros términos el desconocimiento de la importancia de la alteridad de lo *otro*, se desconoció la pobreza, las culturas, las formaciones sociales diferentes que a pesar de muchos siglos se mantuvieron vigentes bajo diferentes formas de resistencia silenciosa, constituyéndose por tanto el *estado aparente* del que nos hablaba Zabaleta

- No se ha logrado la Proletarización de las formas precapitalistas.
- Estas se han mantenido en pleno vigor asumiendo estrategias de relacionamiento con el sistema vigente.
- Se han mantenido sistemas de relacionamiento económico no mercantil.
- La intelectualidad indígena ha fortalecido crecientemente las formas de identidad no occidentales.
- La Participación Popular ha forjado la confianza indígena en la capacidad de gestión efectiva del candidato propio.

Ni siquiera el escenario de la globalización cuyo rol de favorecimiento a la acumulación de riqueza, más allá de su perspectiva inequitativa en la relación entre países con diferentes estados de desarrollo, fue adecuadamente aprovechado. No se dedicaron los esfuerzos necesarios para asumir temas como la pobreza, la demanda de participación o la diversidad cultural.

Por el contrario los sectores dominantes de nuestro país, en el lento intento de constitución de una nacionalidad homogénea se han visto favorecidos por los avances de la modernidad y globalización que ha solidificado su condición de estado aparente puesto que la globalización al fundamentarse en el *Darwinismo Social* y la Competitividad, ha producido la existencia de inmensas inequidades entre países haciendo necesarios un numero creciente de mecanismos y fuerzas disuasivas apoyada siempre por el poder imperial como alternativa a la falta de

2 TAPIA, Luis. La producción del conocimiento local. Historia y Política en la obra de René Zabaleta Mercado. Muela del Diablo. La Paz. 2002

democracia. En Bolivia esto se expreso además en la existencia de segmentos sociales aparentemente independientes de las clases dominantes conformadas por clanes políticos y familiares, la autodenominada “clase política”; que no tuvieron la capacidad de interpretar la germinación de movimientos potencialmente constitutivos de un *Bloque Histórico*.

4. Formulación de normas y políticas públicas

Los hechos de Febrero³ y octubre del 2003, fueron una demostración extrema de esta realidad y lamentablemente el proceso de consulta de la Ley de Áreas Protegidas se inscribió en este complejo y explosivo escenario sociopolítico.

Los mecanismos de formulación de normas y políticas públicas han sido plenamente correspondientes a las características del tipo de estado en construcción. Es decir la formulación de leyes y políticas publicas, siempre dio por sobre entendido que la demanda social podía ser inscrita en el proceso modernizador marcado, además, en la imposición permanente de modelos externos. Los rasgos más notables fueron:

- Formulación inconsulta de normas y políticas o procesos de consulta parciales y formales
- Poca participación indígena en temas de su interés, de ahí que nunca se dio cumplimiento al convenio 169 de la OIT, que tiene rango de Ley de la República.
- Justificaciones tipo “es mejor tener una norma mal elaborada a no tener nada”.

Las áreas protegidas son un ejemplo de esta forma inconsulta y vertical de manejar las políticas públicas. Si bien la primera Área Protegida en Bolivia: el Parque Nacional Sajama, fue creado en 1939 recién a mediados del 90, se inicio la verdadera gestión de áreas protegidas gracias a las corrientes mundiales que tuvieron su punto clímax en la Cumbre de Río de 1992, destinando notables cantidades de recursos financieros para los temas ambientales, los mismos que tuvieron una expresión tangible en Bolivia.

A partir de este evento, la gestión de áreas protegidas, gracias a la disponibilidad de recursos de donación externa, desarrollo su etapa fáctica, pero

3 Las movilizaciones de febrero con seguridad hubieran tenido un curso similar al de octubre sino hubieran sido abortadas por el “accidental” enfrentamiento entre las fuerzas armadas.

lamentablemente bajo un esquema externo fuertemente preservacionista y que desconocía completamente la realidad nacional (Fig. 2).

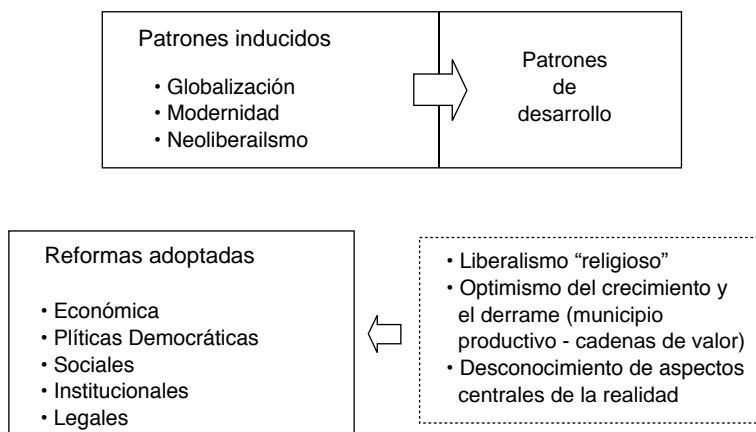


Figura 2. El Modelo de Formulación de Políticas Públicas en Bolivia

Las áreas protegidas se superpusieron a los territorios de comunidades locales indígenas y campesinas sin su consentimiento previo y a partir de ahí aparecieron fuertes conflictos de relacionamiento de diversas características. Cochabamba es un ejemplo de ello puesto que el Parque Nacional Tunari y el Parque Nacional Carrasco ahora tienen problemas sin claras perspectivas de solución y peor aun la recientemente creada, ANMI Altamachi-Cotacajes, que a pesar de toda la experiencia de conflictos existente en las áreas protegidas, nació con serios problemas de relacionamiento y reconocimiento con las comunidades locales.

Es decir, si algo se intento reconocer a las comunidades fue planteado en términos excesivamente economicistas o mercantilistas, desconociendo su cosmovisión y particularmente su racionalidad económica, llegándose a la paradoja de que los mejores representantes de este enfoque economicista resultaron ser precisamente algunos biólogos, que en última instancia propusieron un “*conservacionismo economicista*” totalmente alejado de la realidad de nuestro país. En términos simples lo que se planteo es que, para lograr que las comunidades participen de la gestión de las áreas protegidas, estas debían recibir algún beneficio monetario proveniente de ellas. El error consistió en que el sustrato economicista liberal del discurso oficial (gubernamental) de conservación comprendía a la economía como una relación únicamente mercantil-monetaria y por tanto no fue capaz de comprender la perspectiva económica no necesariamente mercantil, de las comunidades locales y la complejidad de su visión sobre necesidades básicas, manejo territorial y acceso a los recursos naturales (Fig. 3).

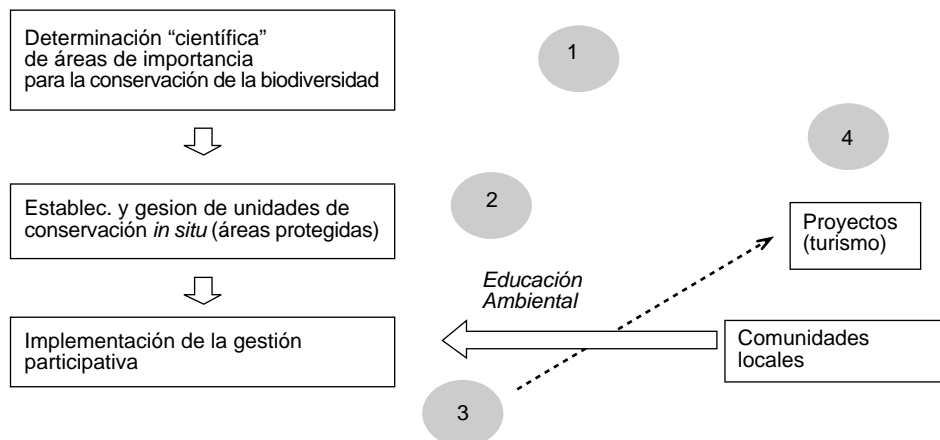


Figura 3. El Establecimiento de las Áreas Protegidas.

5. El Proceso de formulación de la Ley de Areas Protegidas

Este nuevo intento de consulta omitió una consideración adecuada de otros enfoques referidos a la gestión de las áreas protegidas, particularmente los de base indígena-campesina; no se consideraron con la debida importancia documentos como la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Conservación de la Biodiversidad elaborada en 1998 por organizaciones nacionales campesinas e indígenas; tampoco se tomó en cuenta en su verdadera magnitud el documento denominado “Por la defensa de la naturaleza y el medio ambiente”, elaborado por comunidades de áreas protegidas en Mayo del 2003 en Vinto, aún a pesar de que este documento fue entregado oficialmente en manos de un diputado miembro de la comisión encargada de llevar adelante la consulta sobre esta Ley. Menos se consideraron otros documentos como la propuesta de manejo de áreas protegidas realizada por campesinos de Tarija. Por tanto, a pesar de reconocerse la importancia de la participación local en la gestión de las áreas protegidas, esta dimensión no fue considerada en la magnitud que correspondía.

La formulación de la ley se inicia con un documento base que es discutido ampliamente por un grupo de profesionales de amplia experiencia en el tema de áreas protegidas conjuntamente con funcionarios del SERNAP y de otras instancias gubernamentales. Este escenario⁴, tenía el propósito de plantear las bases técnicas de la formulación de esta norma. En base a ello se efectuaron

4 A pesar de la presencia de profesionales de reconocida trayectoria en el tema, no hubo una presencia importante de “expertos” en el tema de participación local.

las consultas departamentales a través de una amplia invitación, a diferentes actores relacionados con el tema. No se realizaron las consultas sectoriales aunque en algunos casos se efectuaron de forma accidental. A pesar de las observaciones sobre los mecanismos de consulta a las comunidades locales y las reiteradas sugerencias sobre la necesidad de realizar una consulta diferenciada con comunidades locales de las áreas protegidas, no se consideró prioritaria esta importante acción.

5.1. Las consultas para la formulación de la Ley de Areas Protegidas

Durante la década del 90 se formularon la mayoría de las leyes relacionadas con la temática de recursos naturales y medio ambiente y aunque se hicieron muchos intentos de formular la Ley de Biodiversidad y se elaboraron más de cuarenta versiones de la misma, después de casi 10 años no se logro su promulgación. Paralelamente a estos intentos, en 1997 se promulgo el Reglamento General de Areas Protegidas, ante la necesidad de contar con un instrumento regulador específico para las áreas protegidas.

El año 2001, ya hubo un intento de formulación de la Ley de Áreas Protegidas, donde se hicieron consultas regionales pero bajo formato convencional y bajo la dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

Ante esta limitación se asumió la necesidad de formular la Ley de Áreas Protegidas por la urgencia de *“contar con un recurso jerárquico”* que permita una mejor protección jurídica de las áreas de conservación y por tanto dotar de la seguridad jurídica que estas requieren, frente a otras normas que por ser de *“interés nacional”* cuentan con mayor jerarquía. A diferencia del trabajo del 2001 en este caso el proceso de formulación fue liderizado por la comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados⁵ y el SERNAP tuvo una participación menos protagónica.

5.2. El documento base de consulta de la Ley de Areas Protegidas

El documento de discusión fue presentado en formato simple y claro, dejando muchos elementos específicos a los Reglamentos. Este documento consolida, aclara y complementa la normativa existente. Aunque muestra muchos avances en el propósito de inscribir la temática de áreas protegidas dentro el Desarrollo Sostenible, no se modifica notablemente el enfoque basado en el modelo de conservación tradicional, manteniendo por tanto el sustrato economicista liberal.

5 Este proceso estuvo dirigido por Alejandra Sánchez de Lozada, quien por su trayectoria en la temática tuvo la oportunidad de dirigir la Dirección General de Biodiversidad y a través de este, el Sistema Nacional de áreas Protegidas que dependía de la DGB.

En el marco internacional, por primera vez se hace referencia específica al Convenio 169 de la OIT, como mecanismo de defensa de los derechos de las comunidades que viven o están influidas por las áreas protegidas. Sin embargo de ello, sobre la participación o co-administración local, no hay ningún avance específico.

Dedica un importante artículo al tema de protección frente al aprovechamiento de los recursos naturales (principalmente no renovables) en áreas protegidas, a través de una estrategia de zonificación y una serie de recursos legales.

En cuanto a los aspectos biofísicos se efectúa una introducción pertinente del concepto de corredores biológicos, pero sin profundizar en los aspectos de desarrollo como determinantes de su viabilidad, mas aun considerando las magnitudes territoriales que se requieren para una implementación adecuada de los corredores.

5.3. Rasgos sobresalientes de la consulta nacional

De manera general se sabe que los aspectos más sobresalientes expresados por los participantes en la consulta fueron:

- Mayor participación y control social en los diversos niveles de la institucionalidad del SNAP.
- Mejores niveles de institucionalidad y alejamiento de la influencia de los partidos políticos.
- Jerarquización de la Norma sobre áreas protegidas para proteger al SNAP de las actividades de aprovechamiento de recursos naturales.
- Mayores niveles de participación local en los mecanismos de administración de cada una de las áreas protegidas.

Aunque a nivel nacional las características de la participación en la consulta fueron diferentes y con una heterogeneidad de actores, la consulta en Cochabamba tuvo un desenlace totalmente diferente, que en última instancia definió la virtual suspensión de la consulta. Los máximos dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, junto a otros dirigentes de comunidades afectadas por las áreas protegidas existentes en Cochabamba se presentaron al taller de consulta, con el propósito de evitar su realización. Luego de efectuar una crítica a la forma ilegítima como se efectúan las consultas de normas que tienen que ver con los intereses de las comunidades locales y denunciar una supuesta colusión entre las áreas protegidas y las empresas petroleras transnacionales, no plantearon la mas mínima posibilidad de avanzar en la consulta nacional develándose su propósito de hacer abortar completamente este proceso.

A partir de este evento, se produjo una interrupción del proceso que luego seria abandonado indefinidamente, peor aun por los hechos de octubre.

6. Las enseñanzas del proceso de formulación de la Ley

La consulta para la formulación de la Ley de áreas Protegidas, se inscribió sin duda al modelo de formulación de políticas públicas, que se describió líneas arriba. Esta forma de hacer las cosas, que al ser parte de las circunstancias sociopolíticas que vivimos el pasado año, determinaron el destino de esta consulta, es decir en octubre las masas insurgentes iniciaron el desmantelamiento del sistema de gestión pública arbitraria y vertical, reclamando un cambio radical en el comportamiento de los gobernantes y su forma de plantear la gestión pública. El proceso de consulta de áreas Protegidas puede ser descrito perfectamente como un indicador de ello.

Por tanto las profundas modificaciones en el escenario político de nuestro país, han demostrado que el modelo de gestión de las áreas protegidas requiere un replanteamiento de su discurso, particularmente en dos aspectos centrales, los mecanismos de participación local en su gestión en todos los niveles y el establecimiento de verdaderas salvaguardas contra el ingreso de empresas transnacionales interesadas en el aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que estos sirvan prioritariamente para el mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada.

En todo caso, al establecerse que las comunidades de las áreas protegidas poseen características socioeconómicas que definen la realidad de nuestro país en relación a las áreas protegidas, es necesario reconsiderar la concepción instrumental-preservacionista, que todavía persiste en el discurso oficial y en base a un acercamiento desde la antropología económica o “de necesidades básicas”, redefinir el objetivo de participación local que tiene y oferta actualmente el SERNAP. Se debe partir de la pregunta, *¿para que se requiere la participación de las comunidades locales en la gestión de las áreas protegidas?*, si la respuesta es: *“para que ayuden a conservar la vida silvestre”*, el resultado con seguridad va a ser por mucho tiempo más, similar al de ahora: participación inefectiva. Por el contrario si, considerando la cosmovisión y racionalidad de las comunidades locales referidas a:

- presencia permanente e indefinida en la zona,
- apego al territorio,
- potencialidad organizativa, de movilización y trabajo comunal,
- conocimiento tradicional sobre manejo de recursos, etc.

Decimos: *“para desarrollar acciones simultáneas de conservación y desarrollo que incorporen a las comunidades a partir de su cosmovisión, perspectiva territorial y de manejo de recursos naturales, religiosidad, identidad sociocultural y percepción de necesidades básicas”*, con seguridad que la participación va a tener la efectividad suficiente para

constituir una alianza estratégica única en favor de la conservación y el desarrollo en áreas protegidas y sus zonas de influencia⁶.

Esto significa que el SERNAP debe desarrollar prioritariamente acciones de fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de áreas protegidas tendientes a establecer en tiempo perentorio, mecanismos de co-administración con las comunidades locales y así lograr que las comunidades locales al “apropiarse” de estos territorios, sean los verdaderos defensores del patrimonio natural de nuestro país. Solo hay que imaginar la potencialidad organizativa de las comunidades locales (sean campesinas o indígenas), en el rol de protección del patrimonio natural en áreas protegidas; si se logra esto, que es muy probable, en el futuro la labor de los guardaparques, por ejemplo, será menos necesaria en actividades de protección y control, para así modificar su actual rol y dedicarse con mas fuerza a promover y facilitar la conservación y el desarrollo sostenible.

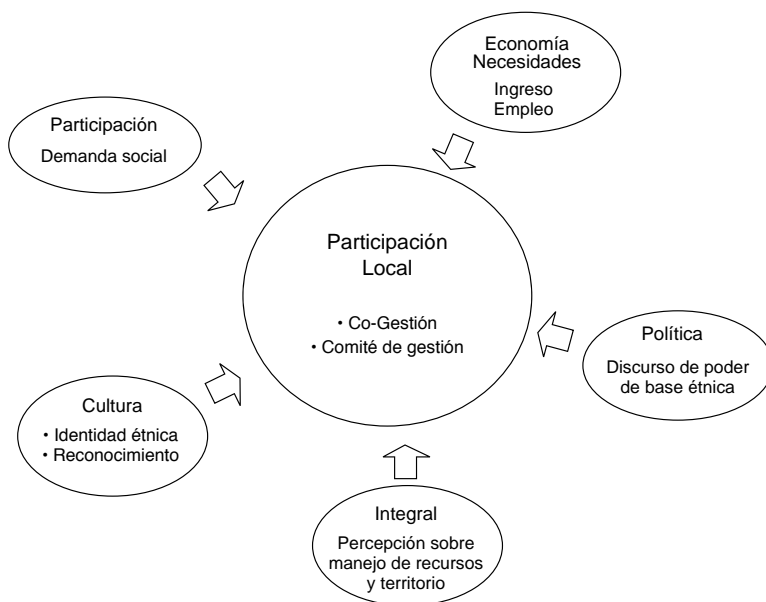


Figura 4. Determinantes de la Gestión Participativa

6 Es importante recordar que en el Parque Nacional Amboró, una movilización social con fuerte presencia campesina impidió el ingreso de una empresa petrolera para explotación de hidrocarburos, dentro el territorio de esta Área Protegida, pero contrariamente en el Parque Nacional Carrasco, la producción hidrocarburífera contó con el apoyo de la Administración de esta Área Protegida, a cambio de la construcción de campamentos de control.

Solo una alianza estratégica de esta naturaleza, entre Comunidades, SERNAP y Promotores del Desarrollo (como son las Municipalidades y algunas ONGs), va a ser la única garantía de que las áreas protegidas conserven su integridad en el largo plazo, disminuyendo al mínimo, la posibilidad de que el aprovechamiento de los recursos naturales beneficie a las transnacionales, la biopiratería, etc.

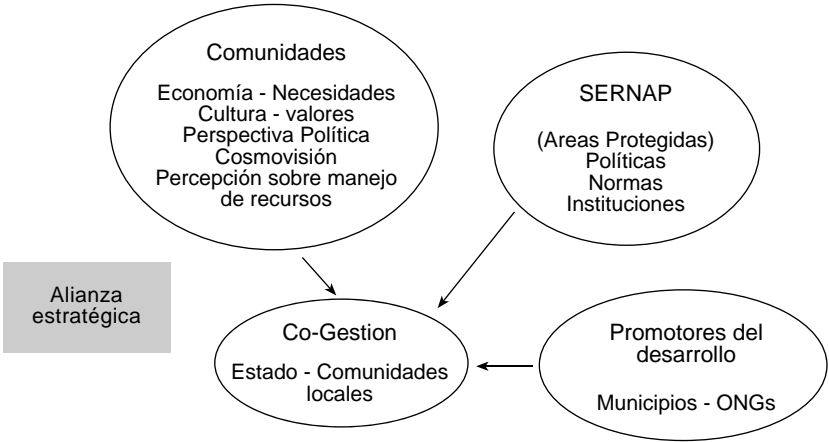


Figura 5. Alianza Estratégica para Gestión Viable de las Áreas Protegidas en el Largo Plazo.

Estrategia boliviana de biodiversidad

Gonzalo Merida¹

1. Antecedentes

Para ver la forma en la que se podían revertir los procesos o tendencias de degradación o de erosión biológica, es que se plantea la elaboración de una Estrategia Nacional de Biodiversidad a partir de un proceso participativo y de discusión con todos los actores involucrados. Este proceso de construcción de estrategia es la que pretendo socializar en esta oportunidad. Inicialmente haré un resumen de las características del proceso participativo que se llevó adelante, luego destacar los aspectos importantes del diagnóstico realizado para tres áreas específicas: el medio físico, la diversidad biológica y la gestión de la diversidad biológica y finalmente, mostrar la estrategia y el plan de acción concertado.

2. Características del proceso de formulación

Durante el proceso se ha intentado involucrar a una gran mayoría de los actores sociales que tienen que ver de una u otra manera con el tema de la biodiversidad. Sabemos que en Bolivia no se tienen políticas de Estado, sino políticas de gobierno, por lo que se trabajan estas coyunturas de planificación estratégica pensando únicamente en los gobiernos que están en ejercicio y en transición. Entonces no se piensa en el largo plazo como una política de Estado. Con la Estrategia Boliviana de Biodiversidad (EBB) lo que se ha intentado es revertir esta falencia, aprovechando

1 Ingeniero Forestal. Consultor del Ministerio de Desarrollo Sostenible para realizar la coordinación general de la formulación de la Estrategia Boliviana de Biodiversidad.

sobre todo los recursos que nos facilitaba el Fondo Global para el Medio Ambiente –aproximadamente doscientos cincuenta mil dólares–, para que Bolivia implemente y construya este proceso. Se ha conseguido también otros recursos adicionales del mismo Estado. Entre el año 1999 y enero del 2003, se ha invertido cerca de medio millón de dólares en construir todo el proceso. Subrayo el “proceso”, porque lo que se ha pretendido hacer es una amplia discusión sobre lo que es la biodiversidad en nuestro país. Ha sido en realidad un proceso muy abierto de discusión, contrariamente a lo que se había pensado inicialmente de que solamente las instituciones ambientalistas trabajen la construcción de esta estrategia en el País. Pero hubo una sana decisión de abrir el proceso de construcción de la estrategia, así discutir bajo otras lógicas, bajo otros pensamientos, con la posibilidad de incorporar a sectores que estaban excluidos del tema de biodiversidad, como es el sector campesino y otros sectores transversales que usan los recursos biológicos como el sector salud.

Bajo ese esquema de construcción de la estrategia, se ha logrado una participación directa de más de 1280 actores entre personas e instituciones, logrando obtener del proceso valiosa información sobre la biodiversidad en Bolivia que están publicados en diversos documentos, a los cuales se puede acceder fácilmente a través de las instancias encargadas de difundir esta estrategia que entre otras cosas, ha pasado por todas las instancias de aprobación como una política de Estado.

Los 1280 actores se han constituido en los autores de la estrategia, además incluye la visión de los diferentes actores involucrados como es particularmente la visión campesina e indígena. Se dice que la biodiversidad es un tema que ingreso en nuestro país como fruto de lo que ha sido la Cumbre de la Tierra en 1992. Sin embargo para nuestros campesinos e indígenas la biodiversidad que se reproduce bajo la lógica de lo que es la Pachamama, siempre ha sido un tema cotidiano, además siempre han tenido sus enfoques y estrategias de conservar esas formas de vida que ellos administran.

3. Resultados del diagnóstico

Un resultado principal de este proceso de diagnóstico ha sido la sistematización de toda la información existente en Bolivia y fuera de ella. Se ha trabajado cuatro años recuperando información de cerca de 73 investigadores que han realizado investigaciones en Bolivia, pero que muchas de estas investigaciones estaban fuera del País. En ese sentido, se ha hecho un gran esfuerzo de recopilar y repatriar toda esa información, para luego incluir en un documento que se llama “Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia”, y que es fruto de todo este proceso de diagnóstico. Este documento hoy en día esta disponible principalmente para todas aquellas personas que toman decisiones sobre la biodiversidad, donde se puede contar con información ordenada y sistematizada sobre lo que existe en nuestro país.

Haciendo un resumen muy breve del documento de diagnóstico que tiene más de 700 páginas e incluye mapas, ilustraciones y muchos anexos, describiré 3 aspectos básicos: El primer aspecto está relacionado con la descripción de las características físico/naturales, es decir aquí se ha realizado una sistematización y caracterización de todo el escenario abiótico de Bolivia y las características del medio físico (fisiografía, geología, geomorfología, etc.) que generan las condiciones y posibilidades de tener diversidad biológica. Entonces una primera parte del diagnóstico caracteriza la parte física tales como las características del clima, las características de los suelos, etc. como elementos que acompañan y factores de distribución de la diversidad biológica. En estos aspectos resalta por ejemplo 20 tipos de unidades de suelo, la oscilación de temperaturas medias y patrones de precipitación extremos.

Un segundo elemento que esta dentro este diagnóstico es el tema de la diversidad biológica y dentro de esto rescatamos el concepto de “riqueza”. Riqueza es el título que habíamos puesto al diagnóstico, porque en verdad somos ricos en diversidad. No hay duda de que estamos entre los 10 y 15 países más diversos del mundo, pese a que Bolivia es uno de los países menos estudiados del mundo. En la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo realizado el 2002, se ha consolidado formalmente esta situación después de mostrar los resultados del diagnóstico y de demostrar que Bolivia esta entre los países más diversos de mundo. Así se ha logrado demostrar al mundo científico, de que Bolivia tiene una gran riqueza biológica a pesar de que los estudios son todavía muy limitados, pues muchas taxonomías y especies todavía no están estudiados en nuestro país.

Otro elemento que se destaca en el diagnóstico es la caracterización de las ecoregiones sobre todo en relación a la existencia de especies como hongos, plantas y animales mejor conocidos, y que nos da una aproximación de cómo esta distribuida la diversidad biológica en nuestro país. Por ejemplo en cuanto a ecoregiones, se ha descrito 12 ecoregiones, lo que hace a Bolivia ser uno de los países con mayor diversidad de ecoregiones en el mundo. Destaca la ecoregión del Bosque Seco Chiquitano como exclusiva de Bolivia. Por otro lado, la parte Suroeste de la Amazonía y los Yungas se describen como las más complejas y ricas en especies de plantas y animales.

En cuanto a la diversidad de especies, Bolivia está entre los 10 países del mundo con mayor número de especies de plantas vasculares, registrándose más de 20,000 especies. En cuanto a especies animales, Bolivia esta también entre los 10 países más ricos en especies de aves del mundo, registrándose hasta la fecha 1398 especies. En el tema de musgos existe cerca de 1000 especies, casi como en todo Norte América que tiene 1300 especies.

Otro aspecto que se toca en el diagnóstico, es lo que se refiere a la gestión de la diversidad biológica. Se tiene sistematizado el estado actual de la conservación de la biodiversidad y como se esta gestionando. Al respecto se encuentran datos e

información interesante, como que el 58% del territorio boliviano se encuentra en un estado de conservación de sus ecosistemas entre bueno a muy bueno. Los ecosistemas más degradados son la Puna Norteña y los Bosques Secos Interandinos. A nivel de especies hay pocos estudios detallados que cuantifican su estado de conservación.

Otro elemento importante que se ha logrado incorporar en este proceso de diagnóstico y que ha sido incorporado por primera vez, es el tema económico sobre los productos y servicios de la biodiversidad. Nuestras economías, sobre todo las de libre mercado, no se puede dejar de ver el tema de biodiversidad dentro sus economías y procesos de desarrollo. Se ha realizado un esfuerzo por sistematizar y revisar las cuentas nacionales, con el objetivo de determinar la generación de ingresos y la participación de la biodiversidad en el PIB nacional, sobre todo de silvicultura, ecoturismo y agrobiodiversidad. Se estableció que estas actividades están generando más o menos el 4% de PIB Nacional. Asimismo, se ha determinado la importancia de la diversidad biológica en la generación de empleo. Los efectos multiplicadores que tiene la economía de la diversidad biológica son muy importantes, por ejemplo se ha encontrado que el ecoturismo tiene un efecto multiplicador de 2,25 por cada dólar americano frente a 1,58 de la actividad minera en Bolivia. Es interesante este aporte de la biodiversidad, que esta en inextenso explicado en el diagnóstico.

Otro elemento del diagnóstico es la parte cultural. Resalta mucho la parte de que Bolivia es un país culturalmente diverso, por lo que se describe a la diversidad étnico-cultural como un potencial estratégico del país, y que aún se menosprecia los conocimientos y prácticas indígenas como estrategias de uso sostenible. También se hace referencia a la gestión biocultural, es decir a la relación que existe entre lo que es la diversidad biológica y la diversidad cultural.

Por otra parte, se describe también los modelos de gestión de la diversidad biológica que se ha implementado desde la época prehispánica hasta el modelo actual, donde se analiza sobre todo los factores de insostenibilidad que estarían presentes en estos modelos, como por ejemplo: la incorrecta o inexistente asignación de valor o precio a productos y servicios de la biodiversidad, la distribución inequitativa de beneficios generados a partir de la biodiversidad, la baja participación en gestión y otros.

En referencia a la tenencia y los accesos inequitativos de tierras, se encuentra algunos datos preocupantes. Un ejemplo de ello es que desde que la aplicación de la ley INRA se han distribuido tierras a campesinos en una superficie que no pasa los 43000 hectáreas frente a 16 millones de hectáreas que están en las TCOs. Hay una diferencia muy crítica en lo que ha sido la distribución entre el sector campesino e indígena.

Por otro lado, existe sobre posición de los derechos sobre el suelo y subsuelo que está generando conflictos muy serios sobre lo que es la administración del patrimonio. En algunos casos existe hasta 5 pisos de derechos propietarios sobre un

mismo recurso o unidad de superficie, eso genera un problema muy serio, es decir se tiene 5 títulos diferentes de propiedad sobre una misma unidad de superficie; en el caso solamente agrario, es decir entre el consejo nacional de Reforma agraria y el instituto nacional de colonización, las dos instituciones que eran responsables de distribución de tierras hasta el 92, han distribuido en algunos lugares 3, 4, hasta 5 pisos de derechos sobre una misma superficie. En consecuencia existe una inseguridad jurídica sobre la propiedad de los recursos muy elevada.

En cuanto al tema de áreas protegidas, en el diagnóstico se describe aspectos que hacen referencia a lo siguiente:

- El establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) después de lo que ha sido la promulgación de la Ley de Medio Ambiente.
- Una institucionalidad con altibajos que ha tenido el SNAP.
- Principalmente la creación de AP sin participación y consenso con las poblaciones locales.
- Una incorrecta asignación de categorías y límites de algunas AP.
- Una participación muy débil en la toma de decisiones.

Si bien en Bolivia existe un avance importante comparado con otros países sobre lo que es participación, pero esa participación se da muchas veces solo a través de lo que son las estructuras de los comités de gestión, lo que no significa una participación en la toma de decisiones, por lo que no se refleja un “empoderamiento local” que puede dar un cambio a la gestión de las Áreas Protegidas. Tal vez un avance en el tema de participación sean los convenios de coadministración de las áreas protegidas entre instituciones gubernamentales y organizaciones campesinas e indígenas.

El tema de sobreposición de derechos de propiedad es muy crítico dentro de las áreas protegidas. Este problema no permite resolver conflictos e implementar estrategias de gestión, de administración o de participación del sector privado o de otros sectores en la administración de servicios que se pueda dar dentro estas unidades de conservación. Un ejemplo es lo que ocurrió en el Parque Amboró, donde se tenía más de 3000 títulos agrarios distribuidos dentro una unidad de conservación, dentro una categoría de área protegida que significaba la no posibilidad de uso de recursos naturales y al mismo tiempo existía esos títulos que les permite usar los recursos suelo, forestales u otros. Esto obligó a cambiar la categoría de Parque Nacional a Área Natural de Manejo Múltiple Integrado (ANMI)

Otro problema en las áreas protegidas son los bajos beneficios que recibe la población local, lo que también está vinculado a la dependencia del financiamiento externo, aunque esto ha mejorado en algo a través del fondo fiduciario que hay para las áreas protegidas, pero todavía hay una marcada dependencia de recursos externos de donación que hasta hace 5 años ha sido cerca del 98% del financiamiento

que se requiere para el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que hace muy vulnerable al sistema principalmente cuando cambian las políticas de cooperación internacional, por ejemplo, en los sueldos que pueda recibir un guarda parque. La misma dependencia ocurre en la toma de decisiones que son muy influidas desde una lógica del centralismo y una dependencia externa.

Finalmente, el diagnóstico hace referencia al tema de la pobreza ligado con la biodiversidad, es decir describe la situación social de los gestores de biodiversidad. Una referencia de las Naciones Unidas indica que el 40% de la economía mundial se basa en productos y servicios biológicos, esto significa que entre 900 y 1200 millones de pobres del mundo dependen para vivir de la diversidad biológica. En nuestro país esa analogía es también muy fuerte, porque 3 millones de personas están viviendo en el área rural y dependen de la diversidad biológica para su desarrollo, y un 81.6% de esta población esta catalogada como pobre.

4. La Estrategia Nacional de Biodiversidad

Bajo el enfoque de diagnóstico que presentamos muy rápidamente, se desarrolla la estrategia boliviana de biodiversidad. Primero recalcar que se ha trabajado bajo una plena concertación entre Gobierno y Sociedad Civil y para un período de 10 años (2002 a 2012). La estrategia esta respaldada por el Decreto Supremo N° 26556, que aprueba la estrategia en un horizonte hacia los próximos 10 años y que debe ser considerada a nivel regional, a nivel de municipios y a nivel de áreas protegidas, estas últimas principalmente en lo que es la gestión y conservación de la biodiversidad.

En el marco de la estrategia dos pilares se contraponen, como es riqueza y pobreza. Somos un país megadiverso muy rico en biodiversidad, pero al mismo tiempo somos un país con tasas elevadas pobreza. Esta dicotomía ha sido trabajada y discutida en el sentido de que se deben buscar mecanismos para hacer que esa riqueza natural a la que se hace referencia no solo constituya un patrimonio natural, sino que fundamentalmente a través de la concepción del uso sostenible permita fortalecer la conservación y al mismo tiempo luchar contra la pobreza.

La estrategia se plantea dentro una filosofía de que Bolivia desde los años 90 ha trabajado muy fuerte en lo que es la protección estricta a través de reglamentaciones, normas, leyes, donde destaca la restricción hacia la intervención humana y no ha trabajado la otra lógica o la otra perspectiva que es la del uso sostenible, mediante la cual se de la posibilidad de que usando o generando beneficios principalmente para las comunidades locales, se puede potenciar la conservación de nuestro patrimonio natural.

Sobre este último enfoque se desarrolla el objetivo estratégico, que indica: *“Desarrollar el potencial económico de la diversidad biológica, asegurando la conservación y uso sostenible de esa diversidad biológica, con una distribución equitativa de beneficios”*

La estrategia plantea 5 áreas de intervención en su plan de acción, que son:

- A1. Fortalecimiento de capacidades nacionales para la gestión
- A2. Conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos, especies y recursos genéticos de importancia ecológica, económica y cultural.
- A3. Atracción de inversiones en productos y servicios de la biodiversidad
- A4. Fortalecimiento de la gestión local en biodiversidad
- A5. Comunicación y educación. Esta debía ser una base transversal por ejemplo en la reforma educativa.

Los resultados esperados de la implementación del plan de acción y la estrategia son:

- La integración de los actores excluidos. Es interesante ver a futuro como esos 1280 actores involucrados en la construcción de la estrategia como líderes han empezado a generar acciones en sus regiones y para ello han utilizado la estrategia.
- Consolidación del Sistema Nacional de Conservación de Recursos genéticos.
- Seguridad jurídica para el acceso a la biodiversidad (este es un tema que se espera como un resultado fundamental).
- Establecimiento de un régimen fiscal que garantice la conservación y la distribución justa de los beneficios. En Bolivia por el tipo de régimen fiscal, por la forma que se están distribuyendo los beneficios que se generan a través de la actividad forestal, el uso de recursos de biodiversidad u otros, no existe la posibilidad de entrar en una distribución justa de beneficios. Por eso en el proceso se ha elaborado una propuesta para modificar el régimen fiscal y se incluya esta posibilidad.
- Un nuevo modelo de conservación y uso sostenible de biodiversidad. Este modelo debemos construir en base a algunas líneas que ya se ha empezado a discutir en el proceso; se debe trabajar y construir desde las comunidades y desde los municipios.
- Reducir el grado de amenaza de la biodiversidad priorizada. Algunas especies están en alto riesgo de extinción y por lo tanto se han priorizado estas como las de mayor atención en cuanto a su protección y conservación, además de medidas concretas para revertir estas tendencias.
- Aumentar la incidencia del sector biodiversidad en el PIB de 4 al 10%. Se piensa sobre todo en los servicios de ecoturismo y también en otros productos y servicios como la captura de carbono. Se habla de una expansión de los ingresos de 350 a 1650 millones de dólares en regiones deprimidas y pobres de Bolivia, en los próximos 10 años.

- Las organizaciones y comunidades indígenas campesinas liderizan la gestión sostenible de la Biodiversidad,
- Los gobiernos municipales tienen capacidad y personal técnico para la gestión sostenible de la Biodiversidad. En los municipios no existen unidades especiales que estén trabajando el tema de biodiversidad, por lo que en el plan existen medidas concretas para generar estas condiciones.
- La currícula de formación escolar, universitaria y de las normales incorporen transversalmente el tema de la Biodiversidad. Esto también esta en marcha.

El Parque Nacional Sajama

Franz Guzmán¹

Albertina Calle²

1. Introducción

El Parque Nacional Sajama (PNS), como muchas otras áreas protegidas (AP), también ha tenido que pasar y afrontar diversos problemas sobre todo cuando se empezó con la gestión del parque en 1995. Es menester aclarar que el PNS es la primera área protegida de Bolivia y tiene una antigüedad de más de 60 años, pero la gestión de esta AP bajo reglamentos, planes y la participación de la población local recién se inició en el año 1995.

Los principales conflictos que se tuvo que afrontar provenían esencialmente de la desconfianza que tenían las comunidades locales ante el Estado y los agentes externos. Esto tiene una explicación desde el punto vista histórico, puesto que desde el período colonial se aplicaron diversas formas de dominación y explotación como fueron las encomiendas y los cobros de tributos por el uso de la tierra, quedando hasta la fecha muchas secuelas negativas de ello. Al iniciar la gestión del PNS se tuvo que resolver esa desconfianza, para lo cual se implementó un largo proceso de discusión con las autoridades comunales y la población local hasta lograr establecer acuerdos que permitan devolver la confianza.

Uno de estos acuerdos fue la elaboración de un plan de manejo participativo con toda la población local, abarcando todo este proceso alrededor de 4 años: 2 años en su elaboración y 2 años en su concertación y consenso, concluyéndose en junio de 2003. En este plan prevalecen los derechos y la reivindicación de las

1 Ingeniero Agrónomo. Director del Parque Nacional Sajama.

2 Presidenta del Comité de Gestión del Parque Nacional Sajama.

comunidades, puesto que se respeta la propiedad de sus tierras, sus usos y costumbres. Por otra parte, el Comité de Gestión del PNS se debía conformar con la participación de todas sus principales autoridades originarias (Jilakatas y Mallkus) y Corregidor, además el presidente del Comité de Gestión debía ser un representante de las comunidades y no así de las instituciones gubernamentales u otras instituciones externas. Bajo estos acuerdos se ha ido superando la desconfianza y los conflictos que se tenían a raíz de ello.

Actualmente la gestión del PNS se encuentra en un proceso de implementación de acciones y proyectos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. Después de aproximadamente 8 años de trabajo, se puede indicar que se viene trabajando del brazo de las comunidades logrando muchos resultados positivos en beneficio de las comunidades y la población local, incluso las comunidades vecinas que veían con desconfianza al PNS ahora quieren formar parte de esta, puesto que ven al parque como una alternativa para conseguir proyectos de desarrollo para sus comunidades.

Sin embargo, el PNS tiene aún muchos problemas que resolver para hacer que la gestión del parque sea mucho sostenible. Aquí pretendemos mostrar tanto los avances logrados como los problemas y retos que aún tiene el PNS.

2. Ubicación, creación y características físico naturales

El Parque Nacional Sajama (PNS) está ubicado en la región del Altiplano Central, junto a la cordillera volcánica u occidental de Bolivia que se caracterizan por sus nevados permanentes y elevada altitud (sobre los 4000 msnm). Política y administrativamente pertenece a la Provincia Sajama del Departamento de Oruro y es parte de los municipios de Curaguara de Carangas y Turco. Abarca 9 ayllus del municipio Curaguara de Carangas (Caripe, Sajama, Lagunas, Suni, Papelpampa, Jila Uta, Manasaya, Cruz de Huayllas y Caracollo de Cosapa) y 2 cantones del municipio de Turco. En el área del parque viven aproximadamente dos mil habitantes, mil en las áreas de influencia y diez mil en las zonas de amortiguación.

El PNS fue creado por el Decreto Supremo del 2 de agosto de 1939, y ratificado por Decreto Ley de 1945. Pero su gestión recién se inició en 1995, después de un largo período de inactividad (de más de 60 años). La principal razón para su creación fue la explotación irracional que soportaban los bosques de Queñua (*Polylepis tarapaca*), ya que estos bosques eran intensamente utilizados para proveer leña y carbón vegetal a las minas de Oruro y los ferrocarriles. Entonces, con la declaratoria de Parque Nacional se pretendió limitar este aprovechamiento irracional.

Si bien el PNS por Ley tiene la categoría de Parque Nacional, en el Plan de Manejo se ha incorporado, (en concertación con las comunidades locales) la categoría de Área Natural de Manejo Integrado (ANMI). De esta manera el PNS tiene actualmente áreas de uso restrictivo de recursos naturales y donde se aplica la categoría de Parque Nacional como son las zonas por encima de la cota 4000, en realidad desde donde empiezan los bosques de queñua. Mientras que en otras zonas donde existe por ejemplo pastizales, bofedales, pastoreo de ganado y asentamientos poblacionales, se aplica la categoría de ANMI. Por otra parte, existen zonas de usos especiales como son los habitados para la vicuña y de uso turístico.

Entre las principales características físico naturales del PNS indicar que el clima es seco y frío con una temperatura media anual de 3.4 °C, con presencia de heladas durante todo el año, principalmente entre los meses de mayo a octubre. La región es árida con precipitaciones anuales inferiores a los 400 mm/año y sus ríos como el Sajama y Tomarapi son parte de la Cuenca del Altiplano Central.

El rango altitudinal oscila entre 4000 y 6542 msnm. Fisiográficamente se caracteriza por la presencia de planicies, lagunas e imponentes conos volcánicos. Destacan los picos nevados de los Payachatas, Condoriri y Sajama, esta última constituye la montaña más alta de Bolivia con 6542 msnm, lo que le convierte en una atracción para los andinistas nacionales y extranjeros. Los suelos son de origen volcánico de mediana a baja fertilidad, de texturas livianas sobre todo arenosos.

La vegetación corresponde al tipo alto andino. Se tiene registrado 154 especies de flora y 250 especies de plantas superiores como son los musgos y las epífitas. Entre la vegetación destacan los bosques de queñua (*Polylepis tarapaca*), los tholares - pajonales (*Parastrephia lepidophylla*, *P. lucida*, *Baccharis incarum*), la yareta (*Azorrella compacta*) y las gramíneas (*Festuca dolychophila*, *Stipa ichu*, *Calamagrostis* ssp., *Pycnophyllum* ssp., *Accichne pulvinata* y otras).

La fauna es muy rica, identificándose hasta el momento 108 especies de animales en todo el área protegida. En la fauna destaca la vicuña, el zorro andino, el quirquincho, el gato andino o titi, el puma, el suri, el cóndor, la choca, la Parihuana y varias aves pequeñas como el *Satenes arequipae*, *Oreomanes fraseri* y *Phrygilus erythronotus*.

3. Potencialidades naturales y culturales del Parque Nacional Sajama

Excepcional belleza escénica altoandina: El nevado del Sajama de 6542 msnm y otros nevados como los Payachatas, Condoriris, Anallajchi, lagunas andinas, aguas termales, geiseres y rutas de andinismo le dan una única belleza escénica altoandina.

Los bosques más altos del mundo: Los bosques de Queñua (*Polylepis tarapaca*) sobre pasan los 52000 msnm, convirtiéndose en los bosques que crecen a mayor altitud en el mundo. Estos bosques cubren más de 10000 hectáreas y tienen un alto y especial interés científico.

Típica vegetación altoandina: Existen más de 154 especies, destacando importantes poblaciones de yareta, bofedales, pastizales húmedos, tholares y otros.

Típica fauna altoandina: Existe una importante fauna altoandina protegida, destacando la protección de la vicuña que para el año 2001 se censaron 3500 unidades en protección dentro el PNS; además están protegidos especies de animales como el suri, el cóndor, el quirquincho, el puma, el zorro, el taruca, el venado andino y una gran variedad de avifauna.

Reservorio de recursos genéticos: Es un área importante para la cría y la selección de camélidos (llamas y alpacas), animales que actualmente tienen un alto potencial económico para la producción de carne, fibra y artesanía.

Colindante con el Parque Nacional Lauca: Tiene como área contigua al Parque Nacional Lauca de la República de Chile, declarado como Reserva de la Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad.

Sitios arqueológicos y culturales: Dentro el PNS existe una variedad de sitios arqueológicos y culturales como los chulmpares, pucaras, pictografías, ruinas precolombinas e iglesias coloniales. Asimismo se han redescubierto los “Seques”, que se interpreta como callejones que entran y salen del nevado Sajama. Estas líneas o callejones son muy sorprendentes por su diseño y visibilidad desde el espacio, por lo que tienen un interés científico y cultural ya que revelan que nuestros ancestros conocían muy bien la posición del sol y las estrellas. Es así que el diseño de estas vías tiene relación con la posición de algunas estrellas y astros, cuidando además el paso de las vías por diferentes tipos de terrenos como bofedales, lagunas, arenales y otros. Antiguamente los ancestros tenían sus propios dioses, apus y achachilas, que devienen de la Pachamama que es la tierra, el sol, el agua y el fuego, y para comunicarse con ellos se construían caminos simbólicos como los seques.

Población que mantienen rasgos culturales Aymaras: La población mantiene la herencia cultural de los aymaras de la nacionalidad Carangas que llegaban al Pacífico y los valles de Cochabamba, conservándose muchas de sus costumbres y festividades como la del 21 de junio (año nuevo aymara), el 8 de septiembre y el 11 de noviembre y otras.

Creciente visita de turistas: Anualmente el PNS visita alrededor de 3500 turistas/año, de los cuales el 50% provienen de Europa (Alemania, Francia y otros). Un 30% de los turistas visitan el PNS con fines de andinismo.

El turismo está en proceso de permanente crecimiento, teniendo los siguientes registros desde el año 1996:

Frecuencia de Turistas en el Parque Nacional Sajama

Año	Origen		Total
	Nacional	Extranjeros	
1996	700	457	1157
1997	862	936	1798
1998	1212	1123	2335
1999	1607	1427	3034
2000	1329	1397	2726
2001	1857	1390	3247
2002	1550	1930	3480
2003	1400	1908	3308

Fuente: Registro de Turistas PNS

Posibilidad de la declaratoria de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad:
Presenta todas las condiciones naturales y culturales únicas para ser declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad.

4. La administración y el Comité de Gestión

El PNS forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. La administración está a cargo de un Director y la protección a cargo de 8 guarda parques que son de las mismas comunidades. Se cuenta con 3 campamentos, un campamento central en Sajama donde está la administración y 2 campamentos secundarios ubicados en Tomarapi y Lagunas. También se cuenta con una oficina de enlace en la ciudad de Oruro (calle Potosí #5238).

La gestión del PNS está regida por un Comité de Gestión, siendo este la instancia de participación más importante para las comunidades y la población local, puesto que a través del Comité de Gestión las autoridades comunales participan en la planificación, la toma de decisiones y coadyuvan en la fiscalización del parque. El Comité de Gestión fue conformado el 18 de diciembre de 1995, cuyos componentes son todas las autoridades comunales e intercomunales (Jilakatas, Mallkus y Corregidor), el Gobierno Central (representado por el SERNAP), la Prefectura de Oruro (representado por su Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente), el Municipio de Curahuara de Carangas y representantes de Instituciones No Gubernamentales que trabajan en el parque.

El Comité de Gestión se ha convertido en una asamblea intercantonale de toda la región, donde intervienen y participan todas las autoridades comunales e

intercomunales tradicionales como los Jilakata, Mallcus y el Corregidor. La asamblea ordinaria es cada fin de mes, donde se tratan todos los asuntos referentes al PNS y se toman decisiones en forma concertada y participativa. En estas asambleas también se tratan aspectos relacionados a los servicios de salud, educación, caminos, desarrollo sostenible y otros. Pese a que la administración del parque tiene como principal objetivo la conservación y la promoción del desarrollo sostenible, hemos aprendido que para las comunidades aymaras todo esta relacionado y no se puede separar la conservación del manejo y del desarrollo. Dentro el Comité de Gestión los principales actores en la discusión y la toma de decisiones son las autoridades locales como representantes de las comunidades, puesto que los representantes de las instituciones estatales y no gubernamentales son únicamente facilitadores y están prohibidos de asumir por ejemplo la presidencia del Comité de Gestión. Por lo tanto, son las comunidades las que actualmente velan por los destinos del área protegida.

El Plan de Manejo del PNS ha sido aprobado por las comunidades y el Comité de Gestión el 30 de junio de 2003. La aprobación de este Plan de Manejo fue difícil, puesto que hubo mucha susceptibilidad y desconfianza por parte de las comunidades sobre la propiedad de las tierras y los recursos naturales.

Dentro este Plan de Manejo se tiene un Plan de Protección que permite implementar acciones de control, fiscalización y protección ambiental. Asimismo, se tiene un Plan Integral Ganadero puesto que esta es la principal actividad económica de la zona, existiendo a la fecha en el área 45000 unidades de llamas, 31000 unidades de alpaca y 10000 unidades de ovinos. Otros planes específicos están orientados a la conservación y manejo de la vicuña y otros animales. Actualmente se cuenta con 3500 unidades de vicuñas y 1500 unidades de Zorro Andino en protección. A la fecha también se tiene en funcionamiento un proyecto de corralones, y se tiene proyectado un proyecto de CANAPAS, rebaños, sanidad y comercialización.

Como parte de un proyecto turístico se tiene un Albergue Ecoturístico en Tomarapi que ha sido establecido como una Empresa Comunal S.R.L. Para facilitar y fortalecer las actividades turísticas, actualmente se cuenta con 17 proyectos de mantenimiento de caminos y sendas turísticas y la respectiva señalización. En Caripe también hay una nueva empresa que esta incursionando en servicios de turismo.

5. Avances y proyecciones para la sostenibilidad del PNS

Como se indicó anteriormente, la situación en el área del PNS era muy crítica principalmente antes a 1995, puesto que continuaba la sobreexplotación principalmente de los bosques de queñua y tholares. La caza de animales era

igualmente indiscriminada hasta que se provocó la desaparición de especies como la chinchilla y el guanaco. Muchas personas ajenas a las comunidades, principalmente provenientes de las ciudades urbanas, realizaban cazas masivas de estos animales. Por otra parte, las organizaciones comunales no mostraban interés en el PNS, al contrario desconfiaban de esta. A raíz de ello se genera conflictos entre la administración del parque y las comunidades; además la atención de parte del Estado era nula en cuanto a servicios básicos: salud, educación y desarrollo productivo.

Después de aproximadamente 65 años de su creación y 9 años desde que se estableció el Comité de Gestión y se dio inicio a la gestión participativa del parque, la situación a cambiado sustancialmente. Las comunidades a través de sus autoridades no solo son parte del Comité de Gestión, sino que han rescatado el valor de las autoridades originarias (como son los Jilakatas, Corregidores y Mallcus de Curaguara de Carangas y Jacha Carangas), y han fortalecido mucho más sus organizaciones originarias. De esta manera el tema del PNS se ha convertido entre los puntos de mayor tratamiento en las asambleas comunales y de los ayllus. Aunque cabe recalcar que la asamblea del Comité de Gestión que se realiza cada fin de mes es la principal instancia de toma de decisiones respecto del PNS.

La educación ambiental es una actividad prioritaria para la buena gestión del PNS. Actualmente la educación ambiental no solo esta vinculada a la enseñanza escolar, sino que también se realiza en las comunidades. Un medio importante para la educación ambiental es que contamos con una radioemisora del PNS, la cual nos permite implementar programas de educación ambiental, capacitación en el manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad y hasta la emisión de mensajes. Esta radio emisora tiene un alcance de 50 km a la redonda y no solo es escuchada en el área del parque, sino también en comunidades vecinas. Por otra parte, también se realizan campañas de educación ambiental, prácticas como la limpieza y recojo de basura en todo el área del PNS. A la fecha también ya se cuenta con un texto de toda la Fauna Silvestre del PNS y que es utilizado para la educación ambiental, estando en preparación un texto similar sobre la flora.

La presencia del Municipio de Curaguara de Carangas a través de una Subalcaldía del Distrito B que comprende a todos los cantones del PNS, esta permitiendo impulsar la ejecución de proyectos no solo orientados a la conservación sino también al desarrollo humano, siendo la participación de las comunidades y la población local muy activa en ellos. Gracias a ello ha mejorado significativamente las condiciones de infraestructura y de servicios básicos para la población local, existiendo actualmente en casi todas las comunidades sistemas de agua potable, letrinas y basureros. Asimismo, se cuenta con un Hospital de servicios primarios en Tambo Quemado donde recurre no solo la población local, sino también los visitantes. Se cuenta también con un Núcleo Escolar compuesto de 7 escuelas y un colegio.

No solo ha crecido la visita de turistas al PNS, sino que las organizaciones comunales han emprendido la creación de empresas comunales de servicios turísticos como albergues, restaurantes, centros artesanales y guías comunales. Actualmente la comunidad de Caripe tiene un albergue y restaurante de buena calidad que genera empleo sobre todo para sus socios.

Para apoyar estas iniciativas, se ha implementado acciones de capacitación en gastronomía tanto nacional como extranjera, logrando resultados anecdóticos puesto que los varones han resultado ser los mejores cocineros y las mujeres las mejores administradoras, pero antes de realizar la capacitación se pensaba lo contrario. Esto es una muestra que se esta aprovechando las capacidades locales para generar empleo y la creación de empresas comunales.

Las inversiones para la creación de las empresas comunales provienen de los mismos socios. Por ejemplo para la construcción del albergue y restaurante en Caripe el aporte de cada uno de socios ha sido 1000 adobes y mano de obra para la construcción. Inicialmente algunos socios fueron incrédulos al funcionamiento de esta empresa y se retiraron. De esta manera de los 33 socios que iniciaron quedaron solo 22 socios, pero los 11 socios que se retiraron, después de ver que la empresa iba funcionando y con buenos resultados pretendieron volver. Sin embargo, la condición actual para ser socio es un aporte económico en efectivo. Esto demuestra que las comunidades pueden organizarse para emprender actividades productivas y administrar adecuadamente.

Para seguir fortaleciendo el rubro de turismo, se tiene proyectado el mejoramiento y la habilitación de áreas de camping, la apertura de sendas hacia las Payachatas, la implementación de museos en Lagunas y Caripe, la construcción de un complejo termal en Manasaya, la construcción de miradores y el ordenamiento urbano en base a planificación en Lagunas.

En cuanto al desarrollo productivo ha habido importantes avances sobre todo en la crianza de llamas, mejorándose los corrales y los servicios de veterinaria. Se han construido también sistemas de riego, siendo el principal en Caripe. Otra actividad productiva en el que se ha incursionado es el Manejo de la Vicuña con fines de producción de fibra, existiendo actualmente una Asociación Regional de Manejadores de Vicuña que aglutina a socios del área de parque y de las zonas de amortiguamiento.

Una de las permanentes preocupaciones de las comunidades fue el de preguntarse que beneficios nos va a traer la conservación de la vicuña. Una de la respuesta era la obtención de fibra de vicuña, puesto que es un producto muy apreciado y en el Perú pagan hasta 390 \$us por kilo. Después de visitar e intercambiar experiencias de manejo, captura y esquila de vicuñas en la República del Perú (específicamente en Pampa Galera región de Ayacucho) y la comunidad de Cala Cala en Puno), por primera vez en la zona de Patoco del PNS se práctico la captura y esquila de 76 vicuñas logrando obtener una cantidad de 17.8 kilogramos de fibra vellón. Así

se logró cambiar la idea de que la conservación de la vicuña no tenía beneficios, puesto que anteriormente se veía a la vicuña solo como una amenaza y un riesgo porque compiten fuertemente con la ganadería por las áreas de pastoreo.

Dada esta experiencia, las comunidades pretenden apostar en la vicuña como una alternativa para mejorar sus ingresos a través de la producción y venta de fibra, incluso algunos comunarios plantean traer vicuñas de otras regiones. Entonces con la vicuña ya no solo se persigue su conservación, sino también se está incorporando procesos de manejo sostenible. La Ley boliviana dice que los beneficios de la vicuña solo pueden ser aprovechadas por las comunidades y no así por las instituciones, lo que es una verdadera ventaja para las comunidades. En Bolivia solo se tiene experiencias de producción de fibra de vicuña en la Reserva de Ulla Ulla donde se viene trabajando desde hace unos 4 años, mientras que en el Perú se trabaja desde hace unos 10 años atrás.

Otro avance importante en el área del PNS es el saneamiento de tierras. Inicialmente no se podía pensar dentro el parque en el saneamiento de tierras, puesto que la desconfianza y susceptibilidad de las comunidades por perder sus tierras no permitía. Luego de un año intenso de trabajo, análisis y discusión con las comunidades, se ha tomado la decisión de implementar un proyecto de saneamiento de tierras con el apoyo del SERNAP y el PNS, encontrándonos al momento en busca de financiamiento. Con el saneamiento de tierras lo que se pretende es solucionar algunos conflictos y garantizar la propiedad de las tierras por parte de las comunidades.

Pese a que hay pocas instituciones no gubernamentales que trabajan en el PNS, su apoyo y sus aportes a la gestión del PNS es importante. Así se tiene por ejemplo a BIOTA que se dedica a la investigación de animales carnívoros, al CECI que hace el monitoreo de vicuñas y a YUNTA que viene construyendo pozos de agua potable. A través del SERNAP se tiene otros proyectos especiales como el Proyecto MAPZA-GTZ/GFA y el Proyecto BIAP-KFW-FUNDESNAPE.

La promoción y difusión del turismo es otra actividad que se viene encarrando como mucha prioridad. Actualmente ya tiene una página web del PNS, el que está permitiendo difundir sus atractivos y potenciales turísticos en todo el mundo. Por otra parte, se tiene convenios con agencias de turismo: 2 en la ciudad de Oruro y 7 en la ciudad de La Paz. Se tiene también convenios con varios establecimientos urbanos y algunas carreras de la Universidad Técnica de Oruro que permiten la difusión de los atractivos turísticos del PNS.

6. Principales problemas

Debido a que la principal actividad económica de la población local (80%) es la crianza de camélidos (llamas y alpacas), se ha incrementado el número no solo de camélidos sino también de vicuñas, lo que está ocasionando un serio so-

brepastoreo en las praderas y bofedales. Por otro lado, el clima extremadamente frígido y de variaciones extremas afecta a los animales, teniendo que lamentarse pérdidas muy significativas en muchos años. Para contrarrestar esta situación, se requiere de mayor orientación y asistencia técnica en el manejo y la sanidad animal. El incremento de las poblaciones de animales silvestres carnívoros como el zorro andino y el puma es otro problema, ya que ocasionan fuertes daños al ganado camélido y ovino.

La carretera internacional Patacamaya-Tambo Quemado que pasa por el área del PNS, ocasiona problemas de contaminación ambiental por la deposición de basura en zonas adyacentes a la carretera.

Algunos conflictos de límites entre cantones y algunas comunidades está todavía vigente, lo que se pretende resolver con el saneamiento de tierras. Finalmente, las escasas fuentes de empleo en la zona siguen obligando a la migración de jóvenes principalmente hacia la República de Chile.

Petroleros adentro, campesinos afuera: bio-petro estrategias de control de áreas protegidas y lógicas conservacionistas

René Orellana H.¹

1. Introducción

Algunas áreas protegidas se han convertido en los últimos años en escenarios de conflicto entre campesinos principalmente y administradores de las áreas. Las organizaciones campesinas han denunciado por su parte la lógica excluyente respecto a ellos de la legislación vigente relativa a áreas protegidas y la flexibilidad que parece existir en estas áreas respecto a operadores petroleros.

A principios de 2003, diversas representaciones de comunidades que habitan en parques y otras categorías de APs se reunieron en un gran evento nacional, manifestando por escrito su oposición a la creación de más áreas protegidas, exigiendo la recategorización de algunas y la anulación de otras, además de la apertura de un proceso de concertación para fines de elaboración de una normativa de biodiversidad y áreas protegidas que considere procesos de gestión campesinas-indígena y colonizadora.

Es evidente que, después de varios años de conflictos sociales en Bolivia, motorizados por actores rurales, el estado no puede prescindir de procesos de concertación con actores campesinos e indígenas, particularmente en lo referido al rediseño del modelo de protección y conservación vigente en Bolivia. Hasta hoy el proceso de creación de APs y la ingeniería relativa a la elaboración de norma jurídica en la materia parece haberse concentrado en ciertos círculos técnicos en los que predomina cierta visión estigmatizadora de los actores campesinos y

1 Licenciado en Sociología. Consultor del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CEN-DA). Candidato a Ph.D. en Antropología Jurídica. E-mail: salvador@supernet.com.bo

colonizadores respecto de la conservación, visión que es claramente legible en la legislación vigente.

En contraste con políticas más o menos adversas o desconfiadas de la presencia y participación campesina en procesos de protección y conservación, las entidades públicas han promovido un proceso de privatización de la administración de APs y se han manifestado relativamente flexibles ante la presencia de operadores extractivos en estas áreas cuyas actividades se han generalizado, llegando incluso a controlar extensiones significativas de varios parques, reservas y áreas de manejo integrado. A la par de este proceso, parecen tejerse de manera cada vez más visible, relaciones de apoyo mutuo, asociaciones con beneficios compartidos en algunos casos (como veremos en este artículo) entre agentes conservacionistas y operadores petroleros; relaciones que no parecen configurar un sincero compromiso con la protección y la conservación de la naturaleza.

En el presente artículo voy a procurar ilustrar el grado de penetración de operadores petroleros y mineros en áreas protegidas, excediéndome y extendiéndome en algunos casos en la presentación y la comparación de datos para que el y la lectora juzguen según diferentes versiones existentes al respecto; por otra parte, voy a detenerme a reflexionar brevemente sobre la forma en que se crean áreas protegidas, las disposiciones excluyentes y desconocedoras de las actividades productivas comunales en que se sustentan estas áreas (tomando la precaución de citar algunos casos). Finalmente me detendré a observar algunos ejemplos de alianzas y prácticas de instituciones no gubernamentales que ponen en duda, por decir lo menos, su verdadero compromiso con la conservación y exigen la apertura de una reflexión en vistas a realizar cambios en las políticas de protección y en la legislación vigente.

2. Imágenes de intervenciones extractivas

Es difícil ilustrar con certeza estadística y geográfica la presencia de petroleros y mineros en áreas protegidas; no tenemos información clara y completa al respecto, y el propio Estado a través de sus diferentes agencias, nos brinda datos diferentes.

Poniendo varios documentos en la mesa, tenemos en frente varias versiones informativas que vale la pena confrontar en la perspectivas de desarrollar, no digamos juicios definitivos, pero al menos conclusiones preliminares que nos permitan pensar el tema.

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) nos ofrece información contradictoria. En primer lugar, según sus datos, la superficie total de concesiones hidrocarburiíferas en Bolivia sería de 5.688.413 hectáreas, lo que nos resulta altamente

sorprendente porque según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hasta 1997 (año en que las reservas de gas estaban contabilizadas en 5.9 TCF probadas+probables, contra 54 TCF en 2002²), la extensión concedida era de 16.6 millones de hectáreas (Lavadenz: 1997); sólo en 1997 se otorgaron 10,2 millones de hectáreas con la nueva Ley de Hidrocarburos (Gandarillas, 2001: 56) de las cuales 8.790.837,76 has. corresponden a bloques con más de un millón de hectáreas. Según los datos de estas fuentes, podríamos inferir que hacia finales de 1997 existirían en Bolivia alrededor de 26 millones de hectáreas con contratos de exploración y explotación.

No parece muy real que la extensión en explotación y exploración haya descendido tanto, máxime si tomamos en cuenta que la nueva Ley de Hidrocarburos recién entra en vigencia en abril de 1996, tendiendo la alfombra para la llegada de nuevas inversiones y el incremento de operaciones. Aquí presentamos nuestra primera duda.

Con respecto a la sobreposición de operaciones petroleras con áreas protegidas, el SERNAP nos brinda la siguiente información:

Cuadro 1
Áreas Protegidas Afectadas por Concesiones Hidrocarburíferas,
según SERNAP-2003

Area Protegida	Superficie	Superficie de Sobreposición (ha)	Porcentaje (%)
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia	247.435,1000	109.492,5082	44,25
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Aguarague	111.076,0992	95.377,2952	85,87
Parque Nacional y Area de Manejo Integrado Amboró	594.809,2078	117.804,7283	19,81
Parque Nacional Carrasco	686.975,9000	21.479,0639	3,13
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré	1.256.597,9713	121.882,7271	9,70
Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilon Lajas	398.451,1000	344.348,0800	86,42
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi	1.867.809,8990	549.882,9032	29,44
Total	5.163.155,2773	1.360.267,3059	26,35

En la lista del cuadro anterior, sin embargo, se ha omitido al pnanmi Kaa Iya. Ahora bien, la omisión proviene de diferentes datos y lecturas de lo que se

2 Villegas, 2003: 46.

entendiendo por operación hidrocarburífera. Según un informe de YPFB de 1999 existían varios bloques de exploración concedidos dentro del Kaa Iya³, representando cuando menos el 20% de su extensión. Por otra parte, debemos apuntar que tanto el Kaa Iya como el ANMI San Matías fueron seriamente afectados por el gasoducto principal al Brasil, en el primer caso, y el ramal a Cuiabá (Brasil) en el segundo.

Si comparamos los mapas que se adjuntan como anexo, podemos empezar a trabajar impresiones sobre las diferencias en los datos. En estos mapas se pueden observar grandes diferencias; en primer lugar es conveniente advertir que la fuente confiable para proveer información de operaciones petroleras es YPFB, entidad encargada por ley de suscribir contratos de riesgo compartido otorgando áreas de operación. La Superintendencia de Hidrocarburos (fuente citada por el SERNAP) tiene por ley únicamente competencias sobre gasoductos, poliductos, transporte y refinación de hidrocarburos.

En el Mapa C (ver anexo) correspondiente al SERNAP, cuya fuente es la Superintendencia de Hidrocarburos, extrañamente no aparecen áreas con contratos de exploración y explotación en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo cual ya inspira muchas dudas. Comparándolo con el Mapa A podremos ver cuan intervenido por operaciones petroleras está el TIPNIS.

El sernap manifestó en el primer semestre de 2003 que en 8 áreas protegidas se habían concedido 24 concesiones de exploración y explotación a favor de 7 empresas petroleras (Chaco, Petrobras, Andina, Total, Maxus, Don Wong y Repsol). No obstante, el Cuadro 1 del sernap que hemos visto anteriormente no incluye al Kaa Iya (área en la que opera Don Wong), con lo que se contabilizan solamente 7 áreas protegidas afectadas. Siguiendo este cuadro podemos observar que el área sobrepuesta asciende a 1.360.267 hectáreas. Las áreas más afectadas porcentualmente respecto de su extensión total son Aguarague (85,87%), Pilón Lajas (86,42%) y Tariquía (44,25%). El área con mayor extensión en términos absolutos es Madidi (549.882 has.), siguiéndole Pilón Lajas (con 344.348 has.) y Amboró (con 117.804 has.). Debemos plantear, sin embargo, muchas dudas sobre la certeza del área total de superposición calculada por el sernap. Un estudio realizado por la Asociación Abt Associates Inc.-PCA. Ingenieros Consultores S.A. por encargo del Viceministerio de Energía e Hidrocarburos el año 2001 –con el auspicio del BID (programa 598/0C-bo) y en el marco del Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarburífero–, nos ofrece datos muy diferentes; según la información construida por la consultora, el área de superposición de operaciones hidrocarburíferas con áreas protegidas sería de 2.690.650,71 has (Cuadro 2).

3 De hecho, el Responsable de la Unidad de Petróleo y Medio Ambiente del SERNAP, José Coello, declaró a la prensa en 2003 que en el PANMI Kaa Iya operaba la petrolera Don Wong.

Cuadro 2
Sobre posición de Operaciones Petroleras y Áreas Protegidas.
Comparación de datos

Sobreposición de operaciones petroleras y Áreas Protegidas según SERNAP (*)	Sobreposición de operaciones petroleras y Áreas Protegidas según Abt Associates Inc.-P.C.A.-VEH-BID (**)	Diferencia
1.360.367	2.690.650,71	1.330.283,71

(*) Fuente: SERNAP (información complementaria actividad hidrocarburífera y minera SNAP, septiembre 2003).

(**) Fuente: Asociación Abt Associates Inc.-P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. (con el auspicio del BID y en el marco del Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarburífero-Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, 2001).

La notable diferencia se observa sobre todo por cálculos de extensiones mayores de operación petrolera en TIPNIS, Madidi, Tariquía, Aguarague, Amboró y Carrasco, pero principalmente por el dato revelador de operaciones hidrocarburíferas en el Kaa Iya sobre una extensión de 599.442 hectáreas (cuadro 3).

El año 2000, YPFb informaba que en el Kaa Iya se habían otorgado varios bloques que no aparecen en los mapas del SERNAP. A octubre del 2000, la empresa Don Wong había ya efectuado prospecciones sísmicas en los bañados del Izozog en varias líneas que totalizan 423,85 kms sobre un área de 250,11 km². Hasta esa misma fecha, la empresa Chaco había realizado prospecciones sísmicas en líneas en una extensión de 1.813,68 kms. en diversas áreas que incluyen Aguarague, Bermejo-Churuma, Chimoré I (Abt Associates INC-PCA, pág. 2.21). Según la misma fuente existían varios bloques concedidos en el Isiboro Sécore que tampoco figuran en el mapa del SERNAP. Hasta finales de 2000, el 67% de las actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas eran básicamente sísmicas (ibid, 9-19).

Más allá de estos datos contradictorios, lo real es que el área de interés petrolero es francamente extensa y aunque eventualmente las operaciones no afecten a todas las áreas protegidas, si lo harán en el futuro en la medida en que se realizarán operaciones de exploración y explotación. Podemos afirmar a primera vista que más del 40% de San Matías es área de interés hidrocarburífero, igualmente sucede con todo el Kaa Iya y casi toda la superficie de Otuquis, Carrasco, Isiboro Sécore (TIPNIS), Pílon Lajas, Madidi, Apolobamba, Aguarague y Tariquía entre otras. Según la fuente citada, el área con potencial hidrocarburífero asciende a 611.000 km² (55.6% del territorio boliviano), de los cuales la mayor parte de encuentra en el Beni (102.944 km²), en el Chaco (118.750 km²) y en el Altiplano (110.464 km²). A octubre de 2000, YPFb estaba licitando ya 55.765,32 km². de esta área de interés.

En el siguiente cuadro podemos observar la superposición de áreas protegidas con áreas de interés petrolero, así como las áreas en proceso de intervención a octubre de 2000.

Área Protegida	Empresa (*)	Sup. en Exploración (*) (has.)	Sup. en Explotación (*) (has.)	Superficie Sobrepuentea Datos SERNAP (*)		Superficie Sobrepuentea Datos Aut Associates Inc.-P.C.A.-VEH-BID (**)		Población aproximada y comunidades(***) (has.)
				Extensión (has.)	% respecto del AP	Extensión (has.)	% respecto del AP	
PN Carrasco	Chaco	14.542,3106	6.937,6847	21.479,0639	3.13	68.670,71	11.03	– 23.200 hab. – Más de 20 comunidades y varios centros poblados
	Petrobras	121.882,7271	ND	121.882,7271	9.70	474.907	43.17	– 28.413 hab. – 91 comunidades
RBTI Pílon Lajas	Petrobras	146.206,1261	ND	344.348,0800	86.42	251.414	62.85	– 6.513 hab. – Más de 25 comunidades y varios centros poblados.
	Repsol	198.141,9539	ND					
PNANMI Madidi	Total	344.348,0800	ND	549.882,9032	29.44	720.032	39.10	– 13.013 hab. – Más de 33 comunidades.
	Petrobras	360.232,4191	ND					
RNFF Tariquia	Repsol	189.650,4641	ND					
	Total	549.882,9032	ND	105.540,0907 (****)	44.25	247.435	100.23	– 27275 hab. – Más de 11 comunidades y varios centros urbanos del entorno.
PNANMI Auguarague	Andina	96.857,5779	ND					
	Chaco	ND	8.682,5128					
PNANMI	Total	30.666,2887		95.377,2952	85.87	108.077	99.88	– Más de 10.221 hab. – Más de 30 comunidades.
	Petrobras	10.161,7845	81,4017					
PNANMI	Maxus	63,3557						
	Chaco	50.029,4633	4.374,9991					
PNANMI	TOTAL	90.920,8922	4.374,991					
	Andina	117.804,7283	ND	117.804,7283	19.81	220,673	34.61	
Kaa Iya	Andina	ND	N	ND	ND	599.442	17.42	– Más de 25.070 hab. – Más de 27 comunidades.
	ND							

(*) Fuente: SERNAP (información complementaria actividad hidrocarbúrfica y minera SNAP, septiembre 2003).

(**) Fuente: Asociación Aut Associates Inc.-P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. (con el auspicio del BID y en el marco del Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarbúrfico-Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, 2001)

(***) Fuente: Calvo L.M. (Diversidad cultural y principales actores en el aprovechamiento de la biodiversidad, 2003) Incluye el área de protección estricta y el área de manejo integrado (y los centros poblados dentro de ésta última).

(****) Extrañamente la suma del área de exploración y la explotación no coinciden con el total de sobreposición sugerido por el SERNAP (109.492,5082 has.) a pesar que la fuente de los datos es esta misma institución.

Cuadro 4
Áreas de Interés Hidrocarburífero,
Áreas con Contrato Hidrocarburífero y Áreas Protegidas

Área Protegida	Nombre de la Zona de Interés Petrolero	Area de Exploración	Contrato Explotación
ANMI Otuquis	Chaco		(X)
ANMI El Palmar	Subandino Sur		(X)
ANSI San Matías	Pantanal		(X)
Estación Biológica del Beni	Beni		
PN Carrasco	Subandino Sur	Chimoré	
	Pie de Monte	Chimoré	Bulo Bulo, Carrasco, Katari
PANMI Amboró	Subandino Sur	Amboró Espejos	
	Pie de monte	Amboró Espejos	(XX) (X)
PANMI Aguarague	Subandino Sur	Aguarague, San Antonio, San Alberto, Tarija Oeste, Bereti	Caigua, Los Monos(XX)
	Pie de Monte	Tarija Oeste, Bereti, Yacuiba	Vertiente, Vuelta Grande.
PANMI Kaa Iya	Chaco	Parapeto, Ustárez, Bañados	(X)
PANMI Madidi	Madre de Dios		
	Subandino norte	Tuichi	
PNTI Isiboro Sécuré	Beni	Chapare	
	Subandino norte	Sécuré	
PNTI Pilón Lajas	Beni		
	Subandino norte	Subandino norte	
RN Manuripi Heath	Madre de Dios (*)		
RN Tariquía	Subandino sur	Tarija Oeste, Bermejo-Churumas, Bambari.	Churumas

(X) Presencia de Ductos.

(XX) Área tradicional.

(*) Se realizaron actividades exploratorias pero actualmente no existen operaciones.

Fuente: Asociación Abt Associates Inc.-pca. Ingenieros Consultores S.A. (con el auspicio del BID y en el marco del Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarburífero-Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, 2000).

A este conjunto de variables hay que agregar las operaciones de transporte de gas y petróleo (que figuran ya en el Cuadro 4) a través de ductos, cuya superficie de afectación a áreas protegidas no está claramente identificada (4 áreas estarían afectadas por actividades de transporte (ibid 9-15)). El SERNAP lamentablemente

no considera la variable gasoductos en la construcción de sus mapas de superposición y en el cálculo de áreas de operación hidrocarburífera. Si sumáramos las extensiones de impacto que las redes de poliductos, oleoductos y gasoductos implican, nuestros datos se incrementarían. Por ejemplo, existen poliductos en operación que afectan al Parque Carrasco (varios oleoductos pasan cerca del parque y algunos lo afectan de manera directa⁴) y gasoductos que afectan al Kaa Iya, al Otuquis (ambos afectados por el gasoducto a Brasil que tiene una extensión de 557 kms en territorio boliviano) y a San Matías (afectado por el gasoducto a Cuiabá que tiene una extensión de 361 kms.) y Aguarague (afectado por varios ramales de oleoductos y gasoductos).

Si a este escenario añadimos las concesiones mineras, el panorama se complica aún más. Las concesiones mineras se concentran en el TIPNIS (en el área del Sécure), en Madidi (precisamente coincidente con el bloque Tuichi), Pilón Lajas entre otras. No he podido lamentablemente cuantificar con datos actualizados la extensión de operaciones mineras, particularmente las que afectan a áreas protegidas, sin embargo podemos afirmar que a 1997, el área correspondiente a concesiones para este tipo de operaciones era de 12.067.000 has. (Lavadenz, 1997). Es perfectamente presumible que la extensión se haya incrementado sustancialmente pues el nuevo Código Minero correspondiente al 17 de marzo de 1997 (primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada) brindó grandes favores a las actividades mineras⁵.

Si, por otra parte, nos animáramos a incluir en este análisis las concesiones forestales otorgadas dentro de áreas protegidas, el mapa de operaciones extractivas en éstas áreas se haría mucho más complejo⁶.

Estas evidencias nos señalan claramente que la legislación ambiental y particularmente la relativa a áreas protegidas en Bolivia no representa ningún obstáculo para las operaciones extractivas. Es más, lo grave es que no se han hecho visibles campañas de organismos estatales, particularmente el SERNAP e incluso de organizaciones ambientalistas comprometidas con la conservación para detener operaciones petroleras que están generando impactos visibles en áreas protegidas.

4 Oleoducto Carrasco-Víboras-Caranda (193,2 kms de longitud), Carrasco-Caranda (126 kms.), Surubí-Carrasco (14.171 kms.), Carrasco-Cbba (247.074 kms.). (ibid, págs. 2-24,25).

5 Entre estos favores debemos incluir: i) la posibilidad de desviar cursos de aguas y aprovechar las que alumbren en el área de operación; ii) ejecutar construcciones, instalaciones, aprovechar materiales vegetales y otros del suelo y el vuelo en el perímetro de su concesión y pagar una patente que está en un rango de 5 a 250 bolivianos por cuadrícula (cada cuadrícula tiene 25 hectáreas). (Véase artículos 34 al 38 y 48 al 52).

6 Existen concesiones forestales en el TIPNIS (en la regiones del Isiboro y del Sécure), en la Reserva del Choré, Aguarague, Madidi, Lecos de Apolo, Pilón Lajas (coincidentes igualmente con el bloque Tuichi).

Por el contrario, las áreas protegidas parecen no representar ningún problema para operadores extractivos⁷.

3. Petroleros y mineros adentro, campesinos afuera visiones erradas en la gestión de la conservación

Hasta aquí he presentado abundante evidencia sobre la permeabilidad de las áreas protegidas ante operaciones extractivas en general. No existe en la legislación nacional fuerza suficiente como para hacer que las áreas protegidas impliquen muros de contención a la penetración de petroleros. Por otra parte, la ausencia de conflictos evidentes o al menos públicos entre instituciones ambientalistas estatales (e incluso algunas privadas) y operadores hidrocarburíferos por ejemplo, nos inspiran la sospecha de una cierta facilitación o cuando menos –para no ser tan extremo en el juicio– cierto silencio o condescendencia con tímidas objeciones de parte de actores conservacionistas.

Bien podrían las organizaciones ambientalistas hacer fuerza con las organizaciones sociales e instituciones públicas locales para limitar en muchos casos y cuando menos condicionar en otros, a la compensación, indemnización justa y participación en los beneficios por parte de las comunidades. Los ejemplos de las negociaciones indígenas-petroleras a propósito del gasoducto a Brasil y su ramal a Cuiabá no son generalizables ni los más idóneos para justificar cierta pasividad particularmente en el SERNAP.

Lo extraño del asunto es que las energías opositoras deseables respecto del SERNAP para confrontar operaciones extractivas mineras y petroleras, se endilgan más bien hacia campesinos y colonizadores e incluso indígenas, ilegalizando sus posesiones, prescribiendo relocalizaciones, limitando y prohibiendo sus actividades de aprovechamiento y manejo de recursos naturales... De hecho la propia legislación de áreas protegidas y las normas legales específicas constitutivas de parques, por ejemplo, son notablemente duras y represivas ante la presencia de comunidades campesinas, no obstante la preexistencia de asentamientos en las

7 Entre los impactos y problemas ambientales generados por operaciones petroleras figuran las siguientes: deterioro de la calidad del agua superficial y subterránea (por presencia de contaminantes y aumento del volumen de sólidos), alteraciones en el régimen hídrico, modificaciones en las redes de drenaje local, deterioro de la calidad del aire (por emisión de partículas, olores, ruidos y gases), contaminación de suelos, destrucción de estructuras de suelos, incremento de susceptibilidad de derrumbes, erosión, cambio de la estructura geológica y geomorfológica, alteración del paisaje, eliminación de cobertura vegetal, degradación de comunidades vegetales, modificación de composición florística, alteración de la composición faunística y de sus procesos migratorios, fragmentación del hábitat de fauna, etc. (ibid, 8-1).

áreas creadas. Esto es fácilmente verificable con la lectura de las disposiciones constitutivas de Áreas Protegidas, las mismas que tienen rango de ley o de decreto supremo. Veamos algunos ejemplos de esto:

“D.S. 22940, 1991, Parque Nacional Carrasco”

Art. Segundo.- A partir de la fecha se suspenden los trámites agrarios sobre dotación, consolidación, adjudicación y/o venta de tierras en el área declarada Parque Nacional.

Art. Cuarto.- Los agricultores, ganaderos y colonos asentados en el Parque Nacional Carrasco que no posean títulos que acrediten su derecho propietario serán reubicados.

Art. Quinto.- Se garantiza el asentamiento de las tribus selvícolas dentro del perímetro del Parque... mientras cumplan las normas de protección establecidos en la Ley...”

“Ley 1262, 1991, Parque Nacional Tunari”

Artículo Segundo.- Declárase de utilidad y necesidad pública la expropiación de terrenos...

Artículo Séptimo.- Queda terminantemente prohibida la extracción de material de construcción, así como la crianza de ganado en el área del parque...”

Precisamente por ello, en el mapa de conflictos por acceso, aprovechamiento y tenencia de recursos naturales en Bolivia, las áreas protegidas son escenarios de confrontación beligerante, de gravedad en algunos casos, entre los administradores del área protegida y los comunarios campesinos. El enfoque administrativo-gerencial-policíaco y la ausencia de procedimientos y mecanismos efectivos de cogestión o gestión social comunal en la normativa vigente de áreas protegidas, contribuye enormemente a la propagación de estos conflictos. A esto hay que añadir una estrategia que hace a una política estatal, la cual basa la sostenibilidad de las áreas protegidas en la administración privada o al menos en la participación de agentes privados en la administración-gerencia-control. Y aquí hay que tener cierto cuidado porque algunas ONGs supuestamente comprometidas con la conservación, están en un franco proceso de utilización para fines de lucro o de beneficio económico particular, usufructuando de la riqueza paisajística y de la biodiversidad de las áreas protegidas.

Ante la generalización de conflictos agrarios en Bolivia por falta de tierra, uno no puede menos que preocuparse por la insistencia en crear más áreas protegidas (ya tenemos 17,4 millones de hectáreas) y ante cierta lógica privatizadora de las mismas.

Al soporte jurídico limitante de las actividades de aprovechamiento de recursos naturales por parte de comunarios, hay que añadir cierta cultura conservacionista que circula discursivamente en ámbitos ambientalistas particularmente afectos a lecturas tecnicistas que estigmatizan al campesino y al colonizador como

enemigos de la naturaleza, deforestadores y depredadores –extrañamente en el imaginario de los estratos ambientalistas, estos estigmas no se graban sobre operadores petroleros–. Visiones que han llevado a muchos conservacionistas a asumir que son los colonizadores los que han destruido la naturaleza y han contribuido a las altas tasas de deforestación en las tierras bajas de Bolivia. Lo cual es falso como lo demuestran estudios en el tema⁸.

Es necesario hacer una reingeniería también en las formas de pensar y de leer a los campesinos. En el pensamiento conservacionista que opera como dogma, el campesino es depredador o al menos no es un buen conservacionista o protector de la naturaleza. Es preocupante por otra parte, que en este dogma de pensamiento y praxis ambientalista, los técnicos y profesionales que por vocación, voluntad o convicción concentren el poder de decidir qué áreas deben ser declaradas protegidas, qué categoría deben tener, qué normas limitativas, restrictivas o prohibitivas de aprovechamiento de recursos naturales hay que imponer, qué se debe hacer con la población, como se le debe informar, cuál es su futuro, etc. Es decir, no puede ser posible que la gente que vive en y de las áreas (a declararse o declaradas protegidas) y su vida así como de las nuevas generaciones, esté en manos de técnicos y juristas que dispongan donde se crean burbujas intocadas o prístinas. Esta praxis es peligrosa y generadora de conflictos.

Quisiera permitirme aquí una digresión para matizar la perspectiva de mi análisis: las observaciones y críticas dirigidas a las políticas de protección y a la legislación vigente que la sustenta, no implican una oposición a la protección y la conservación; considero que es un grave error asumir como una consecuencia lógica o una equivalencia la oposición al modelo institucional-jurídico de protección vigente (cuestión que aquí sugiero y desarrollo parcialmente) y la oposición a la protección y la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. La reflexión que planteo más bien se dirige a pensar la necesidad de realizar cambios fundamentales en la legislación vigente y en las políticas públicas en la materia, poniéndolas a tono con un enfoque de gestión social de la conservación como garantía de sostenibilidad de la misma, gestión social que implique también beneficio social de los servicios comerciales de la biodiversidad, sin que ello suponga la imposibilidad de acuerdos contractuales sociales-comunales-privados, salvaguardando sin embargo derechos comunales para garantizar el cumplimiento de principios de equidad.

8 Entre 1984 y 1994 se perdieron 1,38 millones de hectáreas de bosque; la tasa anual de deforestación entre el 85 y el 90 fue de 40.000 has., de 78.000 has. entre el 89 y el 92 y 117.000 has. entre el 92 y el 94. Sólo en 1996 se deforestaron 123.400 has. En gran medida, la deforestación se localizó en las áreas de agricultura industrial extensiva (para la producción de soya) de Santa Cruz, particularmente en las llamadas Tierras Bajas del Este.

4. El rol de las ONGs ante este panorama. Peligrosas alianzas contra campesinos

Debemos evaluar el rol de las instituciones privadas en la administración en los procesos de conservación. Existen evidencias por demás expresivas para afirmar que no todas las instituciones no gubernamentales están efectivamente comprometidas con la conservación y la protección. Hay discursos que a la luz de las prácticas concretas resultan demagógicos. Existen ONGs que tiene lazos visibles con operadores extractivos (cuyo silencio y pasividad es evidente ante la proliferación de actividades por ejemplo petroleras como las que he descrito en un acápite anterior) y que nos dicen de procesos de creación de asociaciones de apoyo y beneficio mutuo entre conservacionistas y petroleros. Citemos algunos ejemplos:

- 1) La sociedad formada por el Museo Noel Kempff Mercado, Fundación Amigos de la Naturaleza, World Wildlife Fund (que inicialmente participó, retirándose a medio camino ante las denuncias), World Conservation Society y Missouri Botanical Garden que firmaron un acuerdo protocolar con la ENRON y SHELL, acuerdo que permitió a estas dos empresas (que se presentaron con el nombre de Gas Oriente Boliviano) obtener un crédito de la Overseas Investment Private Corporation (OPIC) para la construcción del gasoducto. Sin este aval otorgado por poderosas y reconocidas instituciones ambientalistas, el crédito no hubiera sido fácilmente otorgado (Gavalda, 199: 56). ¿Qué ganaron las instituciones conservacionistas? un fondo de fideicomiso con 20 millones de dólares aportados en gran parte por las petroleras.
- 2) La sociedad establecida en el Parque Noel Kempff Mercado entre Pacific Corp and British Petroleum América (socia principal de la empresa capitalizada CHACO), American Electric Power System (AEP), Nature Conservancy y la Fundación Amigos de la Naturaleza (ONG administradora del Parque) con el objetivo de resguardar 1.523.466 has. para emitir certificados por 25 millones de toneladas de dióxido de carbono (Powers L.D., en Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia, 2003, pág. 327). “Las compensaciones de carbono generadas debían ser compartidas por los socios de la siguiente manera: 49% para el gobierno de Bolivia, 49% para las compañías energéticas, 2% para AEP” (ibid, 328).
- 3) La ong CIDEDER (Centro Integrado para la Defensa de la Ecología y el Desarrollo Rural) que lleva varios años insistiendo en la creación de un PNANMI Altamachi-Cotacajes, en el norte de Ayopaya (departamento de Cochabamba), sobre un área inicialmente planificada de 633.733 hectáreas, a pesar de existir desde octubre de 2003 una demanda de TCO sobre el área por parte de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Ori-

ginarios de Ayopaya-CSUTCOA (demanda admitida por el INRA en febrero de 2004); insistencia que se ha tornado obcecada con las organizaciones campesinas pero flexible con operadores petroleros y mineros. Como parte de esta flexibilidad esta ONG ha decidido disminuir la extensión del área de protección estricta para no afectar a 18 concesionarios mineros (11 en el área del parque y 7 en el ANMI, totalizando 17.475 has. los primeros y 5.150 has. los segundos) y un bloque bajo contrato petrolero a favor de la sociedad Petrobras-Total (que afectaba al área del parque en 11.697 has.).

La institución CIDEDER no se remitió a excluir a los concesionarios mineros del área del parque, reduciendo esta última, sino que trabajó con los operadores mineros un plan de trabajo en el marco de un plan de manejo. Ciertamente no es criticable que operadores mineros se incorporen en procesos de manejo de áreas vulnerables evitando o mitigando impactos; lo que sí es criticable es que se privilegie a éstos y se aisle a los demandantes del área que la han solicitado como parte de su TCO y más criticable aún es que se cree un parque a medida de mineros y petroleros, evitando “afectarlos”...

Detengámonos un poco en este caso, porque a la fecha, la creación del parque no ha sido consumada y en mi opinión representa un ejemplo de cierto estilo tradicional de creación de áreas protegidas sin consulta o con procesos de consulta denunciados por los dirigentes como fraguados y sesgados. En primer lugar, resalta el protagonismo de instituciones privadas a pesar de cierta reticencia del SERNAP. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Qué ganan las instituciones en este asunto? ¿Por qué no se abre un diálogo con las organizaciones demandantes de la TCO y se procura cumular esta demanda con la protección (ciertamente necesaria de ciertas zonas) y la conservación? Cierta fundamentalismo proteccionista (que contrasta con la permisibilidad respecto de mineros y petroleros) articulado a posibles beneficios económicos provenientes de financiamientos externos, venta de certificados de dióxido de carbono, actividades ecoturísticas y otras relacionadas con el biocomercio permitidas y promovidas por la legislación vigente (entre los que resaltan el DS 24773-Reglamento de Concesiones de Uso de Biodiversidad) nos expresan un panorama preocupante.

Más preocupados quedamos cuando el propio Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación Jorge Cortés, respondiendo a una solicitud de informe sobre el tema presentado por dos diputados, explica por escrito en fecha 18 de diciembre de 2003, que entre las instituciones comprometidas en la creación de ésta área protegida se encuentran: WWF, Conservación Internacional, The Nature Conservancy y PROMETA (que tiene actividades en la RNFF Tariquía). La hipótesis sobre posibles vínculos de apoyo mutuo entre operadores extractivos y conservacionistas encuentra sustento con este panorama.

Bibliografía

CALVO L.M.

- 2003 Diversidad cultural y principales actores en el aprovechamiento de la biodiversidad, en Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia, Eds. PL. Ibisch & G. Mérida, FAN, Santa Cruz, Bolivia.

GANDARILLAS, Marco

- 2001 Hidrocarburos y Territorio, en Territorio y Desarrollo Integral en Bolivia, Ed. Broederlijk Denle, La Paz, Bolivia.

GAVALDA, Marco

- 1999 Las manchas del petróleo boliviano. Tras los pasos de REPSOL en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore, Ed.: CEDIB, La Paz, Bolivia

LAVADENZ, Isabel

- 1997 Tenencia y Distribución de la Tierra en Bolivia, mimeo, INRA, Febrero, La Paz, Bolivia.

MARTÍNEZ, José (Ed.)

- 2000 Atlas. Territorios Indígenas en Bolivia, CPTI-CIDOB-INRA et. al., Santa Cruz, Bolivia

PACHECO, Pablo

- s/f Prácticas Forestales y acceso a los recursos del bosque, Cap. 2 de Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX, s.e.

POWERS, W.D.

- 2003 Bolivia innova exitosamente en el secuestro de carbono, en Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia, Eds. PL. Ibisch & G. Mérida, FAN, Santa Cruz, Bolivia.

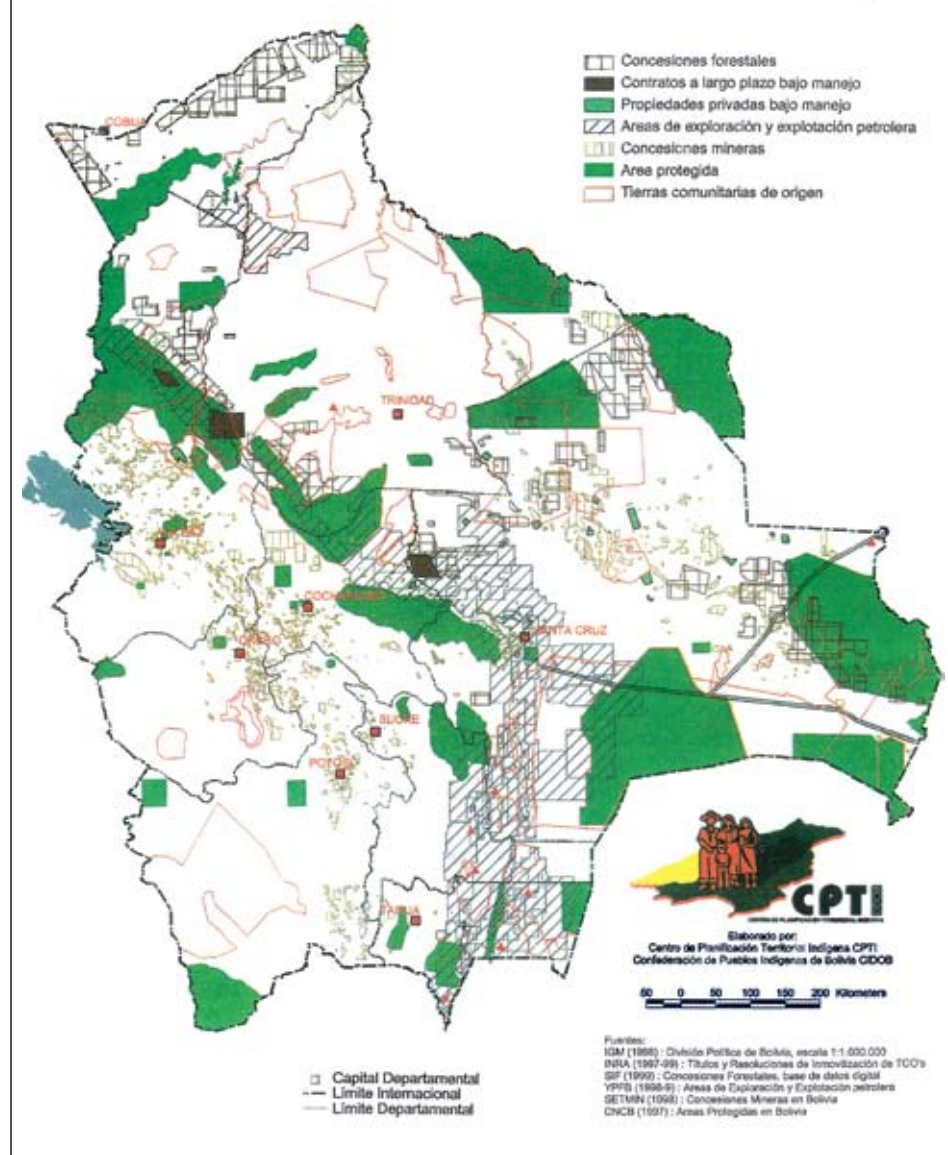
SERNAP

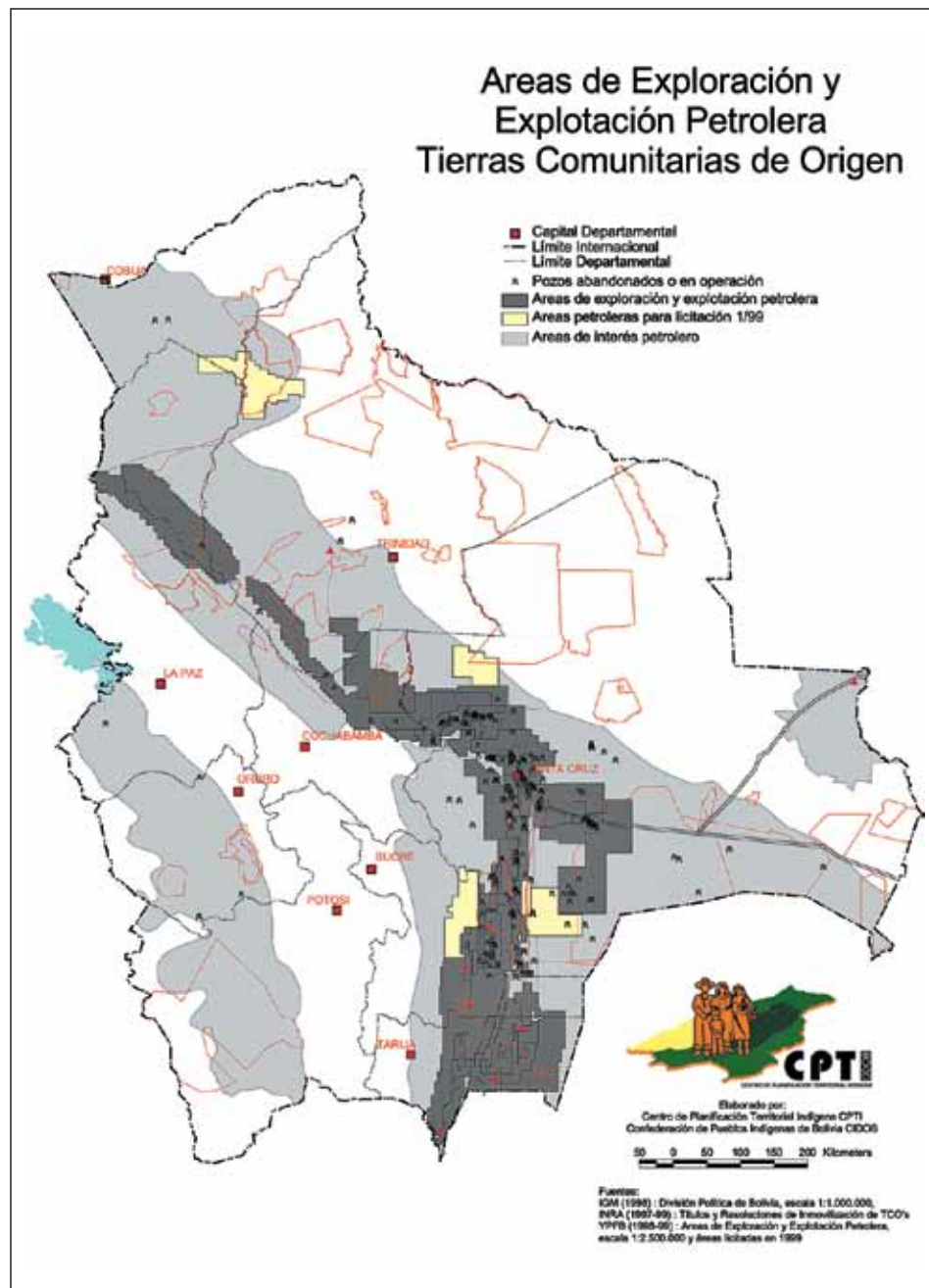
- 2003 Información complementaria actividad hidrocarburífera y minera SNAP, septiembre.

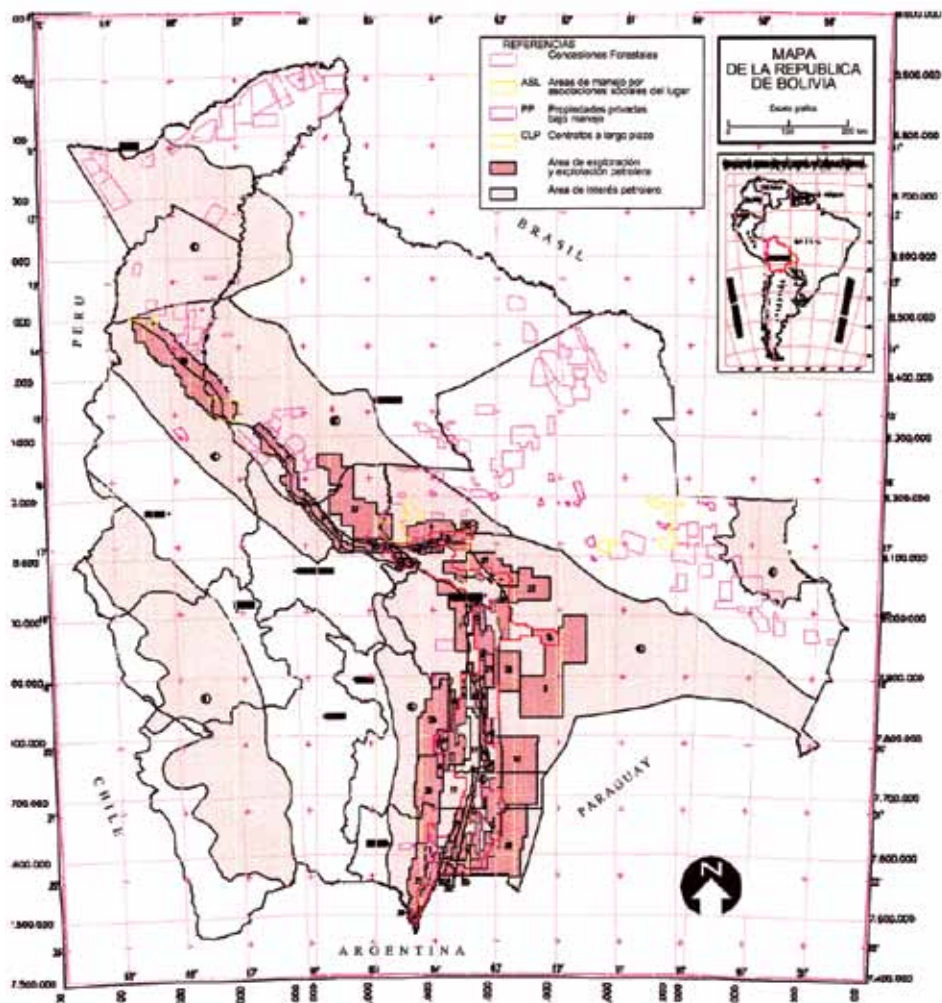
Asociación Abt Associates Inc.-P.C.A. Ingenieros Consultores S.A.

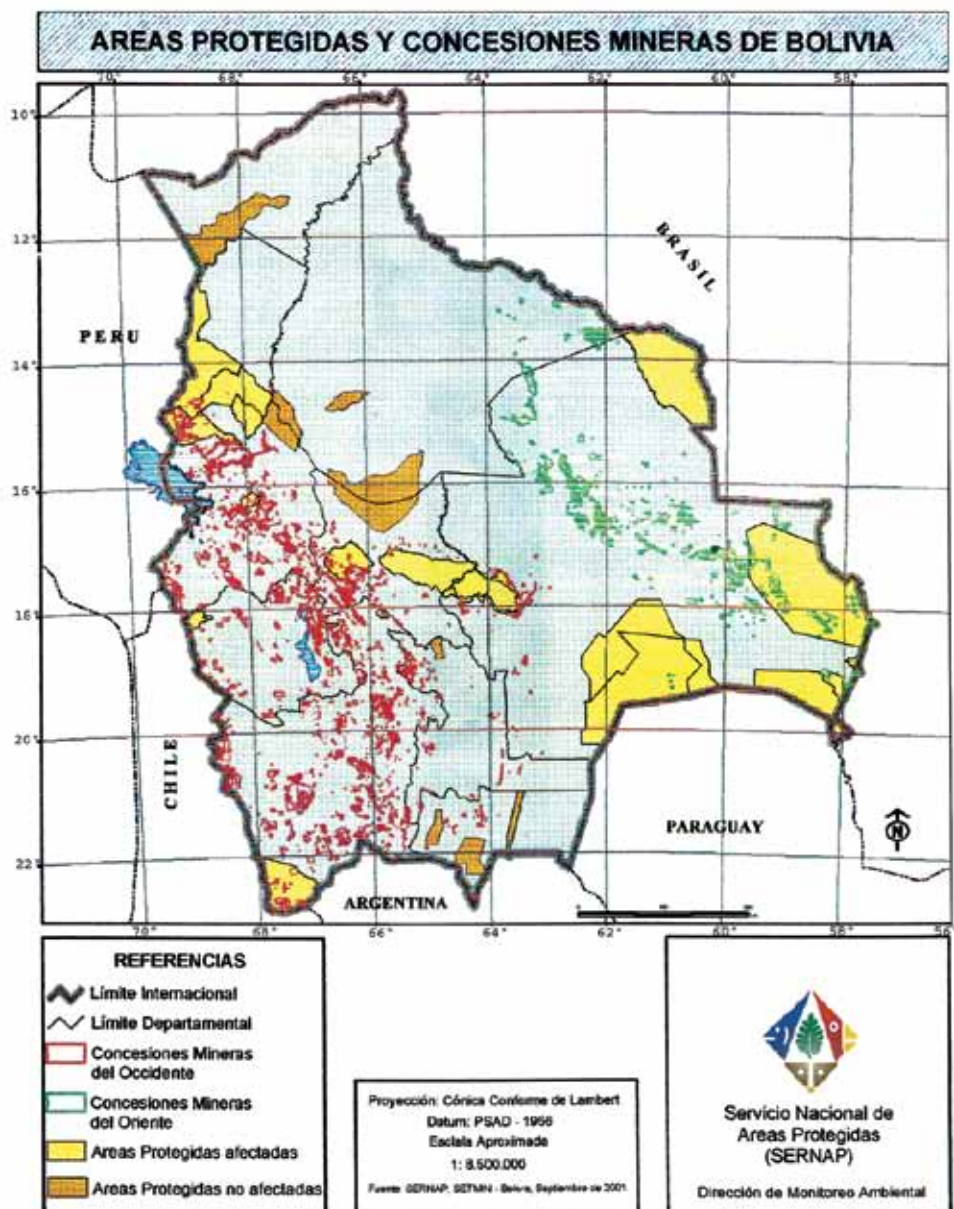
- 2001 Diagnóstico para el Plan de Acción Ambiental para el Sector Hidrocarburífero, minero, con el auspicio del BID-Viceministerio de Energía e Hidrocarburos.

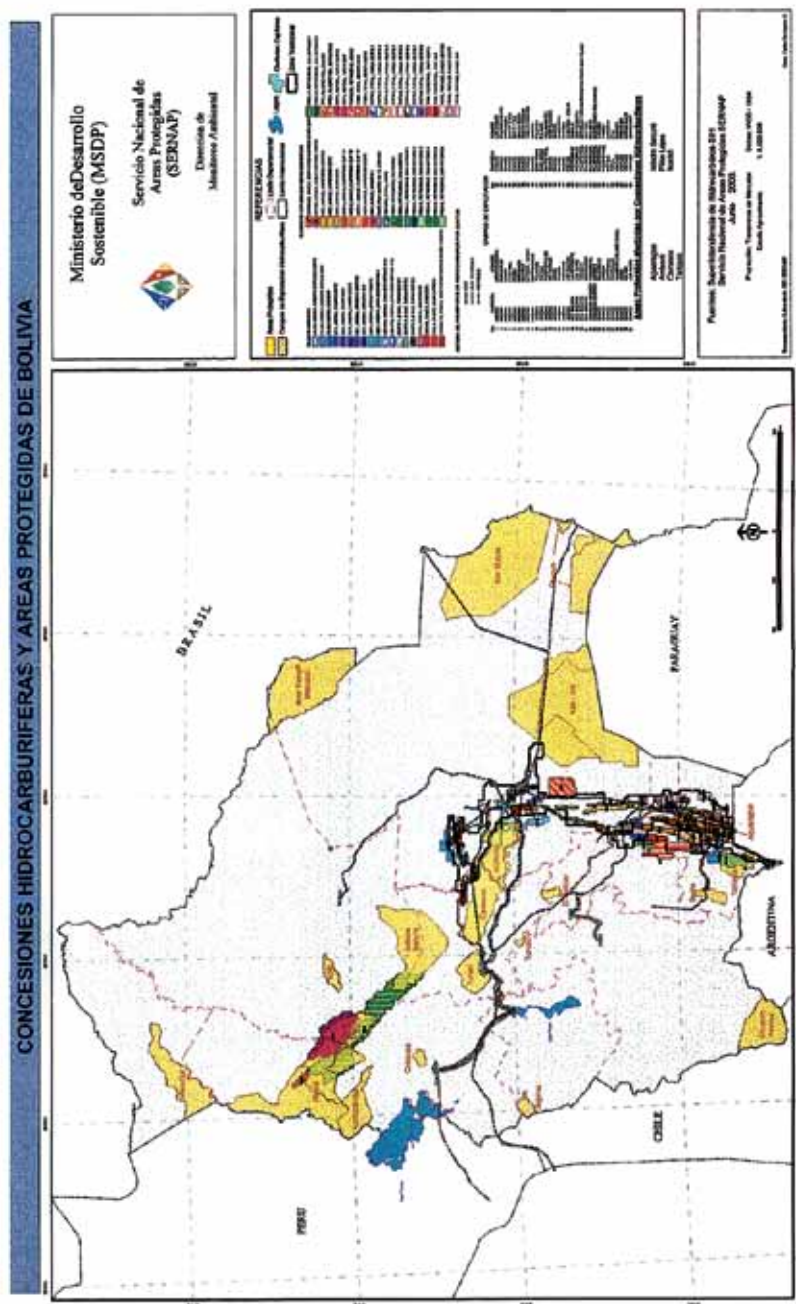
Problemática en Tierras Comunitarias de Origen











Conflictos y gestión local en áreas protegidas: los casos del parque Amboró y el bosque seco chiquitano

Miguel Angel Crespo¹

1. El caso del Parque Nacional Amboro

1.1. Antecedentes

Desde antes de la fundación de la república los bolivianos han sido testigos de la explotación irracional de sus recursos naturales, los mismos que han servido para incrementar la acumulación del capital mundial en las diferentes etapas históricas del mismo. Este fue el caso de la plata de Potosí, y grandes acumulaciones de capitales individuales que al articularse con capitales mundiales, (caso de Patiño con capitales ingleses a partir del Estaño), también empujaron procesos de acumulación capitalista mundial. Todo estos procesos no solo dependieron de los recursos naturales nacionales que se explotaban, sino que también fueron fruto de una gran sangría humana, producto de la explotación del trabajo de los nativos del país, que con su fuerza laboral contribuyeron a que se den estos fenómenos. Sin embargo de ello, tal como la historia y las estadísticas lo demuestran, Bolivia ha vivido en la mayor postración económica desde su fundación, ocupando históricamente los últimos lugares del desarrollo económico y humano no solo del continente, sino del mundo.

Bolivia es un país atrasado, por el abandono en el que se encuentran la mayoría de sus regiones y mucho mas el oriente boliviano. Asimismo, es un país desarticulado, no solamente por la falta de caminos, sino porque existen distintas naciones, culturas, grupos étnicos, etc., los cuales tienen diferentes formas de ac-

1 Licenciado en Economía. Director Ejecutivo de la ONG, PROBIOMA; Santa Cruz-Bolivia.

ceder y usar los recursos naturales. Estos aspectos, enmarcados en una geografía diversa y con una gran riqueza en biodiversidad, caracterizan a nuestro país de una manera muy compleja y en la que la extrema pobreza transversaliza todo.

Paradójicamente, nuestro país está reconocido entre los diez países más ricos del mundo en biodiversidad, hoy por hoy, un recurso estratégico y vital para la sobrevivencia del hombre.

En ese contexto, en los últimos años, se ha dado un proceso de creación de áreas protegidas, proceso en el que los Gobiernos del Norte, mediante la Cooperación Internacional, han ejercido una fuerte presión sobre las políticas nacionales con referencia a la gestión de dichas áreas. Lamentablemente en este proceso se ha obviado a un actor que es fundamental: las poblaciones locales que habitan dichas áreas desde hace muchas décadas, así como a otros actores igualmente importantes como son los municipios y otras organizaciones locales, que han quedado relegadas a un segundo plano.

Esta reflexión es necesaria para introducir, al análisis de lo que es nuestra visión y nuestra propuesta de administración local de recursos naturales, ya que, permiten enmarcar mejor las acciones que se han tomado en las diferentes actividades de PROBIOMA.

A partir de nuestro trabajo en el desarrollo rural (crédito y Asistencia técnica), hemos constatado el rol importante que juega la población rural en la conservación y protección de los recursos Naturales, en la reproducción de recursos genéticos y en el manejo de la biodiversidad. Esta conclusión que se fue perfilando fruto de un estudio llevado a cabo por nosotros el año 94, sobre la relación de la población rural asentada en las laderas del Parque Nacional Amboró (PNA), con las riquezas naturales y de biodiversidad, nos permitieron afirmar con toda solvencia científica, (por la seriedad del estudio)², que los campesinos en este caso, podían ser los mejores guardianes de dicho Parque. Sin embargo esta afirmación hubiera sido incompleta, sino hubiéramos planteado de que esta situación solo sería sostenible, si se dotaba a esta población de la posibilidad de administrar este recurso (El Parque Nacional Amboró), con una perspectiva de desarrollo.

1.2. El proceso

Las poblaciones locales administran sosteniblemente un recurso si sabe que este le dará beneficio en el tiempo. Este planteamiento además del desarrollo, ya incorporaba la visión de territorialidad y posicionamiento local.

A pesar de que Bolivia está considerada entre los países más ricos del planeta en biodiversidad, las poblaciones locales que están en relación permanente con dicha biodiversidad, se encuentran en un estado de postración y atraso.

2 Diagnóstico socioeconómico y de manejo de Recursos Naturales en comunidades colindantes al Parque Nacional Amboró, sector Sur, Probioma, 1994.

En los últimos años, en nuestro país se ha dado un proceso de creación de Áreas Protegidas, en el marco de las normativas vigentes. Sin embargo, este proceso no ha sido fácil y ha tenido muchas dificultades, fundamentalmente debido a que en la mayoría de los casos, no se tomó en cuenta, que dichas áreas no son territorios vacíos de poblaciones, sino que al contrario, en su interior y/o alrededor de ellas, existen comunidades, las mismas que tienen una estrecha relación con los recursos naturales. Es decir, que primaron más los criterios técnicos que los sociales, culturales, económicos y productivos y ello derivó en enfrentamientos con las comunidades locales, (1995) durante el proceso de delimitación de dichas áreas. Tal es el caso del Parque Nacional Amboró, del departamento de Santa Cruz que se encuentra en 4 Provincias (Andrés Ibáñez, Florida, Ichilo y M.M. Caballero).

El enfoque técnico-científico que subordina lo social y cultural, responde a una visión y a una estrategia de separar la biodiversidad y el uso de la misma, de las necesidades locales, regionales y nacionales. Es más, responde a una visión en la que sólo los especialistas y/u organizaciones científicas son las más llamadas a administrar y/o gestionar el uso de la biodiversidad, al margen del derecho soberano que tienen las poblaciones locales que han estado y están en relación cotidiana con los recursos naturales.

Este enfoque fue aplicado en la primera etapa de creación y delimitación del PNA y ello derivó en enfrentamientos entre Comunidades campesinas, y las brigadas de técnicos del gobierno, universidad estatal y ONGs “conservacionistas”, las mismas que no dudaron en acusar a las organizaciones campesinas de depredadores, guerrilleros, etc. Esta situación derivó en una serie de acusaciones de ambos lados y que no contribuyó a establecer el objetivo de delimitación del PNA. Paralelamente, se inició un proceso de represalias de los guarda parques hacia las comunidades y que contribuyó a que las mismas miren al Área Protegida más como una amenaza que un beneficio. Asimismo, se dio un proceso de rechazo hacia las ONGs “conservacionistas”, por considerarlas las causantes de dicho enfrentamiento ya que algunas de ellas no dudaron en plantear la relocalización de las comunidades campesinas. La propuesta de relocalización, que fue hecha pública, enervó aún más los ánimos y el rechazo de las comunidades no sólo a las instituciones, sino a cualquier intento de establecer los límites del PNA.

En este contexto, PROBIOMA decidió realizar un diagnóstico acerca de la relación que tienen las comunidades campesinas con los recursos naturales del PNA Parte Sur. (Zona de mayor conflicto). En dicho Diagnóstico se abordaron los temas desde la perspectiva social, económica, productiva y ambiental. Los resultados de dicho diagnóstico, fueron contundentes en aclarar muchas falsedades que se habían difundido por parte de las ONGs “conservacionistas”, los “expertos” y las diferentes comisiones del gobierno de entonces (1ª gestión de Sánchez de Lozada). Algunos de los resultados fundamentales, fueron los siguientes:

- La mayoría de las poblaciones asentadas son de origen cruceño (65%) y no así del interior. Una gran parte de ellas se originaron durante la Guerra del Chaco, para evitar que los hombres sean enlistados en dicho conflicto bélico.
- Un porcentaje minoritario proviene del interior, pero que están asentados hace 30 años (30%)
- El conocimiento que tienen de la flora, fauna, avifauna, etc., es muy amplio y profundo.
- Las cuencas principales de donde nacen los ríos que bañan los valles y/o desembocan en el norte cruceño, tienen un adecuado manejo en cuanto a su conservación se refiere.
- Los impactos ambientales identificados, han sido generados fundamentalmente por agentes externos: Concesiones madereras, concesiones mineras (explotación de cal, ripio, arena, piedras, etc.), rescatadores de leña para la fabricación de chancaca en Saipina, clubes de caza y pesca, etc.
- La lógica de ocupación del espacio por parte de las comunidades incorpora la conservación del área destinada a bosque de protección.
- El uso de agroquímicos (más de 150 marcas) en las zonas circundantes al PNA, en especial en los valles mezotérmicos, representa una amenaza para la conservación del área protegida. La incursión permanente de distribuidores de las empresas importadoras de agroquímicos, está coadyuvando a la ampliación de la frontera agrícola debido a la insostenibilidad de una agricultura basada en los paquetes tecnológicos promovidos por la revolución verde.

Como se podrá apreciar, los factores identificados como causales de impactos socio ambientales en el PNA, son todos externos y no pueden ser atribuidos a los pobladores locales circundantes al área protegida. A lo anterior se debe añadir la existencia de concesiones petroleras otorgadas en el proceso de capitalización y que están impactando en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMIA), como es el caso del Derecho de Vía que tiene la empresa Transredes para el transporte de hidrocarburos, está generando el ingreso de colonos y la especulación de tierras por otros agentes externos (traficantes de tierras).

Con estos resultados provenientes del diagnóstico, se llegó a la conclusión de que los pobladores locales habían efectuado un adecuado manejo de sus recursos naturales y por su conocimiento de la biodiversidad circundante, correspondía por derecho, que la administración del Área Protegida pase a manos de las organizaciones campesinas, junto a los Municipios y el SERNAP, además por el objetivo mismo que tiene un Área Protegida, los recursos genéticos son propiedad del estado boliviano. Por lo tanto, corresponde que sean las organizaciones locales y el estado, quienes administren soberanamente las Áreas protegidas en el país. De esta manera, surge la Propuesta de Administración Campesina del PNA, la misma que es entregada ofi-

cialmente por la FSUTC-SC, a la autoridad competente en el año 1996. De esta manera se evita la privatización o entrega de la administración de un Parque Nacional a una Organización privada. Como se verá más adelante, este paso tiene un significado muy importante en lo que a la conservación y gestión de los recursos naturales se refiere, desde una perspectiva de gestión local y soberana.

1.3. La propuesta de gestión local

La Propuesta de Administración Campesina del PNA, tiene como objetivo: *“La Conservación del Area de Protección Estricta y el desarrollo sostenible de las comunidades del Area Natural de Manejo Integrado, para la conservación de los recursos genéticos y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas y su área de influencia”*, es decir que parte de la premisa de considerar como una unidad el AP y el ANMI, y busca el equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible.

En segundo lugar, establece un Directorio compuesto por los 9 Municipios que tienen jurisdicción en el PNA, el SERNAP y las Centrales campesinas. Como se verá, se establece el principio de soberanía y potestad que tiene el estado y las organizaciones locales en las políticas de conservación y desarrollo sostenible del PNA y por lo tanto con nuestra biodiversidad.

Asimismo, se establecen tres líneas estratégicas:

- Conservación: Relacionada con el AP y el ANMIA
- Desarrollo sostenible: Relacionada con el ANMIA y su área de influencia
- Infraestructura Básica: Relacionada al ANMIA

Estas líneas estratégicas son para cada una de las cuatro provincias en las que se encuentra el PNA.

En lo referente al Programa de Conservación se establecen varios subprogramas en los que podemos resaltar los siguientes:

- Manejo de Bosques
- Investigación científica
- Protección, custodia y multiplicación de recursos genéticos
- Cría y reproducción de animales en proceso de extinción
- Ecoturismo, etc.

El Programa de Desarrollo Sostenible se refiere al fomento de las siguientes actividades:

- Agricultura ecológica
- Sistemas agroforestales

- Producción de cultivos orgánicos
- Certificación local
- Ecoturismo
- Servicios ambientales
- Producción biológica
- Producción de germoplasma nativo
- Producción de orquídeas
- Control biológico

El Programa de Infraestructura básica se refiere a la dotación en coordinación con los Municipios de lo siguiente:

- Caminos
- Escuelas, Postas sanitarias
- Puentes
- Servicios de control y fiscalización: Campamentos de guarda parques, etc.

La ejecución de estos Programas estará en base a un Director nombrado en consenso entre el SERNAP, Municipios y Centrales Campesinas.

El papel de las ONGs, centros de Investigación, Universidades, etc., quedó establecido en la participación en un Consejo Consultivo, el mismo que tendría la función de apoyar con capacitación técnica, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y fortalecimiento organizativo.

Se planteó un nivel de fiscalización mediante la participación activa de las sub-centrales campesinas, los Comités de Vigilancia y otras organizaciones de control social que puedan surgir en el proceso de ejecución de la propuesta, como ser Comités de fiscalización, etc.

Sin embargo, como requisito previo a la ejecución de la propuesta, se planteó una nueva delimitación del PNA que tome en cuenta aspectos que habían sido ignorados en la primera delimitación y que llevaron al enfrentamiento con las comunidades campesinas. Esta propuesta de delimitación planteó básicamente los siguientes criterios para llevar a su ejecución:

- Participación Campesina
- Tenencia de la tierra
- Uso Actual de la tierra
- PLUS
- Valor ecológico

Estos criterios fueron internalizados en la mayoría de las comunidades que estaban en conflicto con las autoridades que tenían que ver con el PNA. Es decir, con el SERNAP.

1.4. La reacción oficial

Como no podía ser de otra manera, la reacción del Gobierno ante esta propuesta y producto de la presión social en el área, fue la de dejar en “statu quo” el proceso de privatización y/u otorgación de la administración a una organización privada, ya que la propuesta presentada tenía como respaldo una masiva movilización en las comunidades campesinas. Paralelamente, las organizaciones mediante sus centrales, establecieron un sistema de control y fiscalización colectivo de las actividades de las ONGs y declararon enemigos de los campesinos a algunas de ellas (ASEO y FAN), justamente por haber promovido la relocalización de las comunidades y/o la administración privada. En este contexto, las relaciones entre el Gobierno y las Organizaciones campesinas mejoraron, aunque con la permanente amenaza de un nuevo conflicto.

1.5. La incidencia política

A raíz del proceso de internalización de La Propuesta de Administración Campesina y de los conflictos que derivaron en la misma, las organizaciones campesinas incorporaron en sus demandas reivindicativas, la necesidad de gestionar soberanamente el Área Protegida, y en ese marco, tanto la CSUTCB, como la COB, incorporaron en los pliegos de demanda nacional este derecho. Paralelamente la Federación Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, solicitó a PRO-BIOMA, el apoyo para la elaboración de las Bases de una Propuesta de Administración Campesina del Parque Nacional Carrasco, documento que fue elaborado en Octubre de 1996 en la localidad de Totora con la participación de las Centrales, Sub-centrales y Sindicatos campesinos de dicha Provincia. Posteriormente, este documento fue entregado oficialmente a la FSUTCC.

Adicionalmente, la incidencia alcanzó a las organizaciones de otras áreas protegidas del país, como es el caso de la región de Pilon Lajas y las organizaciones indígenas de la Chiquitanía, el Chaco, el Pantanal, etc., que comenzaron a plantear el mismo principio, aunque cada organización con sus diferentes particularidades, según el grado de organización existente.

En el ámbito de las organizaciones pertenecientes al movimiento ambiental y conservacionista, también se plantearon tomas de posición tanto de los que apoyaron esta propuesta nacional, como de los que se oponían y ello derivó en un fracturamiento de un movimiento que hasta ese momento adolecía de una posición nacional en base a las características y particularidades del país. En este sentido, surge una posición nacional que reivindica el derecho que tienen las poblaciones locales, en la administración de las áreas protegidas, en coordinación con el estado a través de los municipios y el SERNAP. Es así que se da inicio a una etapa en la que en algunos casos más que otros, se genera la participación del estado desde una perspectiva más

soberana. Sin embargo, hasta ahora el grado de involucramiento de los Municipios aún es incipiente y ello se refleja en que el SERNAP continúa soportando una gran parte del peso de la gestión en las Áreas Protegidas, aspecto que redundaría en algunos casos en la pérdida de su soberanía de gestión y en detrimento de un involucramiento real de las organizaciones locales. Paradójicamente ha crecido la influencia de las ONGs conservacionistas, que pretenden influir en el diseño de políticas y estrategias y en algunos casos abrogarse la representatividad estatal, tal como ha ocurrido en el Bosque Seco Chiquitano. La falta de recursos del SERNAP está llevando a tener una mayor dependencia de la cooperación internacional y ello no es positivo. Aún los Municipios no han incorporado plenamente en sus políticas, la gestión de las áreas protegidas y los servicios ambientales que podrían proyectarlos hacia estrategias de desarrollo sostenible y generación de recursos financieros. A pesar de ello, existe una posición cada vez más acentuada con respecto al derecho de administración de los recursos naturales por parte de las poblaciones locales.

1.6. La implementación de la propuesta

En el marco de este contexto, PROBIOMA decide impulsar desde una experiencia concreta la Propuesta de Administración Campesina en el Parque Nacional Amboró, a través de las siguientes actividades estratégicas:

- **Ecoturismo Comunitario.** Implementación de 3 emprendimientos en las comunidades de Villa Amboró, Isama (Provincia Ichilo) y Volcanes (Provincia Florida). Estos emprendimientos se iniciaron en el año 1997 y en la actualidad están siendo ampliados de capacidad, así como de una capacitación más profunda para mejorar los servicios al cliente. Cada refugio tiene capacidad para albergar 20 turistas, tanto en camping como en cabañas construidas con material local y adecuadas al medio ecológico. Al respecto, se ha organizado la Asociación de Ecoturismo Comunitario que agrupa a 5 emprendimientos Comunitarios en el PNA y que tiene por objetivo fortalecer a los lugares de ecoturismo comunitario y reglamentar la actividad de las operadoras de turismo.
- **Agricultura ecológica.** Transferencia masiva del Control Biológico, en 45 comunidades del ANMIA, para sustituir el uso de agroquímicos y la presión sobre los recursos naturales del ANMIA y por ende del APA. En este sentido, PROBIOMA ha establecido un Centro de Investigación, Producción y Capacitación - PROBIOTEC, para llevar a cabo la producción masiva de microorganismos, los cuales son comercializados masivamente en el ANMIA y el área de influencia del PNA.
- **Difusión y Comunicación.** Mediante programas radiales que se difunden semanalmente en dos radios de largo alcance (Radio Santa Cruz y 26 de Enero), se lleva a cabo un programa radial en el que se difunde el contenido

y los principios de la administración local, los derechos de las organizaciones locales, testimonios de las comunidades, denuncias sobre impactos de agentes externos y recomendaciones técnicas para el manejo ecológico de los cultivos agrícolas. Este programa llega a más de 45.000 oyentes.

- **Fortalecimiento Organizativo.** Se realizan talleres y reuniones con las comunidades campesinas, con el objetivo de profundizar el proceso de internalización de la propuesta de administración local, el manejo ecológico de cultivos agrícolas, la importancia de los servicios ambientales, la amenaza que suponen las actividades hidrocarburíferas, mineras y el valor estratégico que tiene la biodiversidad y los recursos genéticos.

1.7. La incidencia de la propuesta

Ecoturismo Comunitario: Por primera vez y con muy poca inversión se implementa un proyecto de esta naturaleza en un área protegida y ello ha repercutido de la siguiente manera:

- Se consolida el control local sobre los recursos naturales en el PNA.
- La conservación desde la perspectiva social, representa una fuente de ingresos para el beneficio local. (Estos montos pueden superar a los recibidos por la Participación Popular)
- Se establecen estrategias de conservación y desarrollo sostenible al interior de las comunidades: Recuperación de recursos genéticos nativos (frutas silvestres, semillas nativas)
- Con los ingresos del ecoturismo, las comunidades tienen recursos para otras necesidades básicas, como es la educación, la salud, mejoramiento de caminos y trámites legales.
- Generación de empleo alternativo y especializado.
- Protección del área contra amenazas externas: Concesiones mineras e hidrocarburíferas. (No se permitió el ingreso de la empresa petrolera Andina y se expulsó a los concesionarios mineros del área).
- Control a ONGs dedicadas a la bioprospección.
- Fortalecimiento de sus organizaciones y lazos comunitarios.
- Incorporación en las guías mundiales de ecoturismo Lonely Planet.
- Profesionalización de los guías locales.

Agricultura ecológica: Por primera vez en Bolivia, se introduce en las comunidades de manera masiva, el Control biológico que sustituye gradualmente a los plaguicidas. Los impactos son los siguientes:

- 1.200 has bajo control biológico, en el ANMIA, las mismas que se encuentran en un proceso de reconversión a una agricultura ecológica.

- Se inicia el proceso de certificación local de cultivos orgánicos, con comunidades y organizaciones de mujeres campesinas que comercializan en la ciudad de Santa Cruz.
- La ampliación de la frontera agrícola en las áreas de influencia, se reduce y se fortalece el recurso suelo con la incorporación de biotecnología formulada en base a microorganismos y fertilizantes orgánicos.
- En 10 localidades alrededor del PNA se distribuyen permanentemente, los productos biológicos para ser utilizados en las labores agrícolas.
- Se establecen empresas agrícolas de producción ecológica de: Miel, Hortalizas, Frutas, café y cítricos.

Difusión y Comunicación: Los programas radiales son escuchados permanentemente por las comunidades del PNA y de otras regiones del país que solicitan el apoyo en actividades de ecoturismo, Control biológico, monitoreo socioambiental, etc., principalmente en la Chiquitania, el Pantanal (Santa Cruz), así como en Ixiamas (La Paz), el Chaco (Tarija), Potosí, y el Chapare (Cochabamba). Paralelamente se inicia la difusión de un Boletín electrónico que llega a más de 3.000 usuarios. La información del ecoturismo, se encuentra incorporada en los siguientes sitios de información especializada a nivel mundial:

Fortalecimiento organizativo: La incidencia generada por la Propuesta de Administración Campesina del PNA ha tenido amplia repercusión en otras Áreas Protegidas que han solicitado al SERNAP y a los Municipios llevar a cabo actividades relacionadas con el ecoturismo e inclusive propietarios privados han iniciado procesos similares en otras regiones.

Los sindicatos de las localidades donde se implementan estas actividades han logrado el fortalecimiento de lazos comunitarios para solucionar temas sociales, económicos y de manejo de Recursos Naturales (sin tener que depender de algún Partido Político) y son puntos de referencia en su región.

Se ha constituido la Asociación de Ecoturismo Comunitario, la misma que está definiendo junto con el SERNAP, normas para las empresas operadoras de turismo, así como la ejecución del SISCO (Sistema de Cobranzas), que permita establecer un ingreso al SERNAP, así como al Municipio.

El Estado está reconociendo el papel protagónico que juegan las organizaciones campesinas/indígenas en la administración de las Áreas Protegidas.

2. El bosque seco chiquitano

2.1 Antecedentes

Bolivia, es un país que tiene gran variedad de eco regiones, cada una con rasgos diferentes en lo que concierne a biodiversidad. El departamento de Santa

Cruz, es uno de los más ricos en biodiversidad, tiene una gran heterogeneidad de ecosistemas que se reflejan en un gran potencial de recursos naturales. Esta situación ha hecho de éste, uno de los más importantes en cuanto a la inversión se refiere, pero también uno de los más vulnerables por su ubicación estratégica, por su riqueza en recursos naturales y por la falta de una voluntad política del Estado, en hacer un uso sostenible de dichos recursos, así como resguardarlos para las generaciones futuras.

Entre este potencial, está la Gran Chiquitania, región que abarca al Pantanal Boliviano, ubicado en la Provincia Germán Busch y Ángel Sandoval, el Valle de Tucavaca, las Serranías de Sunsas, Santiago y Chochís en la Provincia Chiquitos. En esta región se encuentra el Bosque Seco Chiquitano que pertenece a una de las áreas más extensas del mundo (100.000 km²) y se caracteriza por pantanos permanentes y sabanas inundadas en las diferentes estaciones del año, que tiene una estrecha relación con grandes galerías de bosques. La configuración que tiene esta región, caracterizada por una mezcla de sierras paleozoicas chiquitanas que han servido de barreras y refugios y la gran región inundable del Pantanal. Todo esto caracteriza a la zona y lo convierte en una de las áreas más originales de continente.

El bosque chiquitano y el Pantanal Boliviano, en los últimos años adquieren mayor importancia por su gran riqueza en biodiversidad, pero paradójicamente confluyen una serie de amenazas que comienzan a generar un impacto fuerte en sus recursos naturales. En los últimos 6 años, 421.000 has. (70.000 has./ año) han sido destruidas por la actividad ganadera, incendios, gasoductos y concesiones mineras.

Sin embargo, la gran riqueza en biodiversidad existente en la Chiquitania, así como la actividad productiva, contrasta con la situación de pobreza de las poblaciones locales, que además poseen un conocimiento propio en cuanto al uso y valor ecológico de los recursos naturales, aspecto que representa una base fundamental para el desarrollo y la conservación. La situación socioeconómica de las poblaciones locales, no representan una garantía de que los proyectos de “desarrollo” auspiciados por la banca multilateral y las empresas privadas, se traduzca en un mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales, debido a que dichos proyectos están dirigidos a la explotación de la mano de obra y de los Recursos Naturales sólo como materia prima. Por esta razón es fundamental y necesario establecer la gestión local de los recursos naturales, ya que los pobladores de la zona son los únicos guardianes de la biodiversidad existente, la misma que puede ofrecer servicios ambientales y quienes deben beneficiarse de dichos recursos mediante la implementación de proyectos de desarrollo sostenible y de conservación.

La Gran Chiquitania es considerada hoy: una de las regiones más importantes del departamento por las características físicas y bióticas que tiene. Poblada por indígenas (chiquitanos y ayoreos fundamentalmente) y poblaciones rurales (con emigrantes y nacidos en el lugar). Cuenta con 8 municipios organizados en la Mancomunidad

de Municipios Chiquitanos. Por otra parte, se constituye en un lugar estratégico en materia de conservación y defensa de los recursos naturales debido a la riqueza en ecosistemas como ser: Bosque subhúmedo semideciduo Chiquitano, bosques ribereños Chiquitano, sabanas arboladas del cerrado, afloramientos rocosos, llanuras de inundación del río Alto Paraguay, bajíos permanentemente inundados, bosque higrófilo Chiquitano, sabanas higrófilas. Además, la biodiversidad que posee es rica en ictiofauna con alrededor de 50 especies solo en el pantanal de Otuquis, muchas de ellas endémicas y de alto interés científico, herpetofauna con 257 especies de reptiles, avifauna con 142 especies y mastofauna con más de 320 especies, además de la infinidad de especies vegetales (se estiman más de mil especies de plantas vasculares) que la convierten en centro de atención de la comunidad científica internacional puesto que posee muchos lugares de transición que permiten un flujo estacional de aves migratorias y otras especies, que le dan una categoría única a la región.

Asimismo, hasta la fecha cuenta con las siguientes áreas protegidas establecidas: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, el mismo que fue declarado reserva nacional de inmovilización en septiembre de 1995 y en julio de 1997 fue declarado como Parque Nacional para conservar los bosques secos tropicales. Con una extensión de un 1.005.950 hectáreas divididas en: Parque Nacional con 903.350 has. y Área Natural de Manejo Integrado con 102.600 has. Por otra parte, el Área Natural de Manejo Integrado San Matías ubicado en las provincias Germán Busch y Ángel Sandoval, declarado como área de inmovilización en 1995 y como Área Protegida en 1997 creada con el objetivo de conservar los bosques tropicales, además de proteger la belleza paisajística y escénica de inmensas lagunas, curichis, ríos y serranías, cuenta con una extensión de 2.918.500 has. aproximadamente 29.185 km². Asimismo se está analizando, la posibilidad de crear nuevas áreas de protección como es el caso de las Serranías de Sunsas, Valle de Tucavaca y Serranías Chiquitanas.

Por todo lo mencionado, podemos concluir diciendo:

- 1) A pesar de que en la Chiquitania se han invertido más de 2.500 millones de dólares en la construcción de los gasoductos, en lo fundamental, la situación de pobreza y abandono de los pueblos que lo circundan, sigue inmutable.
- 2) La biodiversidad constituida por humedales, bosque seco, valles y serranías conllevan un valor estratégico que deberá ser aprovechado sostenible y soberanamente por las poblaciones locales, para salir de la situación de pobreza en la que viven.
- 3) Poseedora de un potencial turístico importante, pues cobija en su seno al Pantanal boliviano, además de las serranías chiquitanas, tiene también un conjunto de valores ecológicos y culturales que la convierten en un atractivo importante para el desarrollo del etnoecoturismo y la conservación.

- 4) Ante la situación de luchas desiguales contra proyectos de “desarrollo”, actividades hidrocarburíferas y amenazas de biopiratería, es que nos vemos impulsados a plantear desafíos que permitan defensa de los recursos naturales y la administración de los mismos por parte de las poblaciones locales.

2.2. Las amenazas

Actualmente el Bosque Seco Chiquitano y el Pantanal Boliviano están bajo la gran amenaza de varios megaproyectos en implementación o por ejecutarse. Entre ellos se encuentran: La Hidrovía Paraguay - Paraná, el Gasoducto Bolivia-Brasil, el Gasoducto Transversal Río San Miguel - Cuiaba³ A ello se añade la carretera Santa Cruz - Puerto Suárez, financiado por el BID y las actividades mineras del Mutún y la Mina Don Mario.

Este tipo de proyectos y actividades derivadas de los mismos, generarán importantes cambios ambientales en la región, exponiendo a la Chiquitania, a cambios hidrológicos, con la consiguiente extinción de especies de agua dulce, la pérdida y degradación del hábitat, la sobre explotación de los recursos, la disseminación de especies exóticas (semillas y cultivos transgénicos, etc.). La contaminación química de residuos tóxicos provenientes de la actividad hidrocarburífera y de transporte por la Hidrovía y la posible carretera, generará también presión social de migración, que afectará enormemente el hábitat natural, mediante la explotación irracional de los recursos naturales de la región.

En este marco, o se puede hablar de enfrentar la pobreza de estas poblaciones si ellas no tienen la oportunidad de valorizar y manejar sus recursos naturales, lo que significa que tengan la posibilidad de manejarlos sosteniblemente, basándose en su propia concepción de la conservación y del desarrollo. Esta afirmación responde al concepto de Administración de los Recursos Naturales por las poblaciones locales, que ha demostrado ser la única alternativa capaz de garantizar la conservación de los recursos naturales. El manejo adecuado de los recursos naturales, que tradicionalmente han llevado a cabo las poblaciones locales, es la base que sustenta la Administración Local, la misma que parte del conocimiento que tienen las poblaciones locales de la fauna, flora, avifauna, etc., y sus usos, como un potencial que permitirá ser el fundamento de proyectos destinados a la conservación y el desarrollo de dichas poblaciones locales.

2.3. El proceso de destrucción del bosque chiquitano

En este contexto, y como un ejemplo de lo anterior, desde 1998 se inicia el proceso e negociación para la implementación del Gasoducto San Miguel (Boli-

3 Financiado por la OPIC (a pesar de la fuerte oposición de las poblaciones locales), Enron y Shell son los principales accionistas de dichos gasoductos.

via) - Cuiaba (Brasil), enmarcada en el Proyecto de “Energía Integrada Cuiaba”, y desarrollado por la empresa Gas Oriente Boliviano, integrada por ENRON, SHELL y Transredes (Compañía transportadora capitalizada, controlada en ese entonces por ENRON), los que tenían serias intenciones por realizar el trazado y ejecución del citado gasoducto por el corazón del Bosque Seco Chiquitano.

El diseño del trazado del gasoducto, partía en dos el Bosque Seco Chiquitano, aspecto que generó la oposición de varias organizaciones bolivianas e internacionales, por los impactos socio ambientales que podría causar a nivel regional, incluyendo el Pantanal.

Una de las más importantes observaciones al tendido del ducto por el trazado original, era que iba a atravesar 160 Km. de Bosque Chiquitano primario y 100 Km. de Pantanal. Los Estudios de Impacto Ambiental (EEIA), fueron insuficientes, ya que no tenía las bases para armar un plan de mitigación adecuado. Por otra parte, el gasoducto planteaba cruzar por el Área Protegida San Matías sin previsiones especiales, deficiente análisis de rutas alternativas y lo más graves, no hicieron consultas públicas adecuadas. Estas carencias, llevaron a una oposición rotunda de las organizaciones bolivianas y a negociaciones secretas entre las ONGs conservacionistas y las empresas auspiciadoras del Proyecto, que tenían conclusiones divergentes acerca de la caracterización del bosque. Ante esta situación, y sin conocimiento de las organizaciones y autoridades de la región, se propuso llevar a cabo un estudio independiente (ISEA), financiado por ENRON y llevado a cabo por la Fundación Amigos de la Naturaleza-FAN, el Museo de Historia Noel Kempff Mercado -MHNNKM, el Missouri Botanical Garden -MGB, la WWF y la Wildlife Conservation Society -WCS.

Dicho estudio, a realizarse en 1999 y definido en reuniones de coordinación entre Ejecutivos de la ENRON, SHELL, WWF, Amigos de la Tierra y Conservación Internacional, tenía como objetivo, la caracterización del Bosque Chiquitano, ya definido como bosque primario por el Ministerio de Desarrollo Sostenible.

En dichas reuniones no existió ninguna participación del estado y peor aún de alguna organización y /o autoridad local, que ignoraban las negociaciones realizadas en Washington, entre las organizaciones conservacionistas y las empresas petroleras.

Los resultados de dicho estudio (ISEA) concluyeron que el gasoducto debía ser desviado (planteamiento original de las organizaciones bolivianas), y se propuso una ruta alternativa que aprovecharía corredores existentes, asimismo, se recomendaba “desarrollar un plan de conservación de largo plazo, para compensar el inevitable impacto que el gasoducto causaría en la eco región, cualquiera fuera la ruta elegida”⁴. Esta iniciativa⁵ “debería promover la participación representativa de la sociedad boliviana” (Ídem).

4 (Informe de la WWF en relación a la conservación del Bosque Seco Chiquitano, 24 Septiembre del 2000).

5 Ídem.

Estas recomendaciones que fueron rechazadas por ENRON y SHELL, eran diferentes a las conclusiones del Estudio Ambiental Suplementario – SEA (Por sus siglas en inglés), a cargo de la empresa contratada también por ENRON y SHELL (ENTRIX), la misma que concluía que el Bosque Chiquitano era secundario y que estaba impactado. Esta conclusión llevó a una nueva ronda de reuniones entre las ONGs conservacionistas y los personeros de ENRON y SHELL, esta vez con la participación de “... observadores del SERNAP, BOLFOR y USAID”⁶.

En esta nueva ronda, los ejecutivos de ENRON y SHELL expresaron su desacuerdo con alterar el trazado original en razón a que “...sería mucho más costosa la construcción del gasoducto (por la ruta alternativa), si esta se postergaba, y que había sido planificada para la época seca de 1999. Explicaron que si no se encontraban entregando gas a Cuiaba, habrían multas de un millón de dólares diarios.” A lo anterior se añadía el argumento de que si no se cambiaba la caracterización del Bosque Chiquitano, de primario a secundario, “la OPIC (Overseas Private Investment Corporation - Agencia Federal de Inversiones del Tesoro de EE UU), no iba a financiar la obra, ya que tiene un estándar que estipula que no pueden financiar proyectos que pasan por bosques tropicales primarios”⁷.

Como se observa, las empresas ponían en la balanza el aspecto económico con mayor énfasis que lo social y ambiental, además de que en los negociadores seguían ausentes los actores locales y nacionales.

Finalmente, se impuso el criterio pragmático del dinero mediante la negociación entre las empresas (ENRON y SHELL) y las ONGs autoras del ISEA para crear y financiar un programa de conservación. El 11 de Junio de 1999, las organizaciones autoras del ISEA y las empresas, firmaron un acuerdo (protocolo) para invertir 30 millones de dólares en un programa de conservación para el Bosque Seco Chiquitano. Representantes de OPIC y las empresas, difundieron dicho acuerdo y el directorio de OPIC aprobó el financiamiento. En otras palabras, las ONGs autoras del ISEA otorgaron el sello verde para la destrucción del Bosque Chiquitano.

De acuerdo al Artículo 170 de la CPE, la Ley de Medio Ambiente, Art. 46 y 47; la Ley Forestal en su Artículo 4 y el Reglamento para la prevención y Control Ambiental, Art. 4; el Ministerio de Desarrollo Sostenible, como parte del poder Ejecutivo, tiene la facultad y el deber indelegable de normar en materia de manejo y uso de los bosques para su conservación, etc.

La creación del Programa de “Conservación” del Bosque Seco Chiquitano, fue aprobada por OPIC en base al tráfico de influencias de la ENRON⁸, que junto a su socia SHELL, reunieron a 5 organizaciones conservacionistas para tal proyecto:

6 (Informe de la WWF en relación a la conservación del Bosque Seco Chiquitano, 24 Septiembre del 2000).

7 (Informe de la WWF en relación a la conservación del Bosque Seco Chiquitano, 24 Septiembre del 2000).

8 Denuncia del Washington Post.

- Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) - Bolivia
- Museo Noel Kempff Mercado (MNKM) - Bolivia
- Missouri Botanical Garden - EE UU
- Wild Life Conservation Society - EE UU
- World Wildlife Foundation (WWF) - EE UU

A raíz de la presión nacional e internacional ejercida por las organizaciones⁹, WWF se retira de dicha sociedad aduciendo falta de transparencia en el proceso y la sociedad accidental. De esta manera los miembros de este programa, luego convertido en “Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano”, quedaron conformados de la siguiente manera:

- Fundación Amigos de la Naturaleza - FAN
- Museo Noel Kempff Mercado, perteneciente a la UAGRM y que cambió su razón social por Fundación Amigos del Museo Noel Kempff Mercado
- Missouri Botanical Garden - MBG
- Wildlife Conservation Society – WCS
- ENRON
- SHELL

Las empresas ENRON y SHELL, se comprometieron a otorgar un financiamiento de 20 millones de dólares y 10 millones de dólares debían ser otorgados por las organizaciones “conservacionistas”, haciendo un total de 30 millones de dólares a ser desembolsados en 15 años.

Como se puede observar, las dos compañías petroleras son juez y parte y obviamente por el proceso que dio lugar a su creación, no integran en su directorio, ni a los municipios, ni a los indígenas, ni al gobierno, ni organización local. Por ello, no rinden cuentas a nadie, aspecto que ya constituye un “escándalo de corrupción, dado que obtienen millonarios recursos usufructuando ilegalmente, un bien del Estado boliviano”¹⁰.

2.4. Irregularidades de la FCBC

Esta Fundación no contaba con Personería Jurídica ni tiene la Licencia Ambiental para operar en la región, sin embargo y durante tres años, “ha firmado convenios y ejecutado 113 proyectos por un monto cercano a los 3 millones de dólares, ninguno de los cuales, benefició al bosque, las comunidades que lo habitan o a los municipios”¹¹.

9 Fuente: WWF, Informe Elaborado por R. Napier, Mayo 2001

10 Dossier Informativo: CPESC-CEADES, Noviembre 2003.

11 Dossier Informativo: CPESC-CEADES, Noviembre 2003.

“Han violado al menos, unos 18 artículos de leyes nacionales, incluidas leyes penales por biopiratería de unas 5.000 especies botánicas, donde están implicados MBG, Fundación Amigos del Museo HNKM y la FAN”¹².

A lo anterior, se debe añadir que no ha hecho absolutamente nada en ayudar a prevenir los impactos socio ambientales y violación de las normas ambientales por parte de sus socios ENRON y SHELL durante la construcción y puesta en operaciones del Gasoducto San Miguel - Cuiaba. Es más, ha contribuido a que los daños causados sean más graves, tal como lo verificó la inspección realizada por el Viceministerio del área, realizada “in situ”, en Abril del 2003.

“Pese a todas las denuncias sobre la degradación del bosque, que fueron reconocidas hasta por la OPIC (retiró el préstamo de 200 millones de dólares), jamás se investigó, ni se realizó una auditoría ambiental privada del bosque seco, pese a ser un programa de conservación”¹³. Es más, contribuyeron a una mayor destrucción del Bosque al realizar la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental complementario para la Mina Don Mario, propiedad del ex-presidente Sánchez de Lozada, cuando se descubrió que esta mina había tendido un gasoducto a sus instalaciones sin contar con la Licencia Ambiental correspondiente. El delito es mayor, cuando esta Fundación elabora dicho Estudio, estando bajo amonestación emitida en la Resolución 26/2 del 8 de Julio del 2002 del VMARNDF que define la prohibición de celebrar convenios, elaborar planes, etc. En otras palabras, existe un permanente desacato a la autoridad, violando el Art. 21 y 96 de la Ley de Medio Ambiente y los Art. 22 y 59 del Reglamento de Ley y el Art. 160 del Código Penal sobre “desobediencia a la autoridad”.

Para concluir, en la inspección realizada por el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, al Gasoducto San Miguel - Cuiaba, en Abril del 2003, se descubrió que la FCBC no contaba con Personería Jurídica legal. Sin embargo, en una investigación realizada por CEPESC y CEADES, se descubre que tenían un acta de Personería Jurídica con firma del ex-prefecto Sr. Mario Justiniano de fecha 8 de Enero del 2003. “Mas grave aún, en carta dirigida por el representante de la Fundación, Hermes Justiniano al Prefecto de entonces (Mario Justiniano), fechada el 20 de Agosto del 2003 y recepcionada en la Prefectura el mismo día, hacen notar que pueden perder una donación por no contar con certificado de liberación de impuestos y personalidad jurídica”¹⁴. “Si hasta el 20 de Agosto del 2003, no poseían Personería Jurídica, según se desprende de dicha carta, la aparición de la Personería Jurídica con fecha 8 de Enero del 2003, es falsa y nula y según el

12 Dossier Informativo: CPESC-CEADES, Noviembre 2003.

13 Dossier Informativo: CPESC-CEADES, Noviembre 2003.

14 Dossier Informativo FCBC: Delitos, Ilegalidades, contravenciones con los recursos Naturales del Estado, CPESC/CEADES, Santa Cruz, Noviembre 2003.

Código Penal, Cap. III, Art. 168 (falsedad material) y art. 169 (falsedad ideológica, en concurso real de delitos”¹⁵

2.5. Situación actual

En junio se cumplen cuatro años de iniciadas sus actividades ilegales, la FCBC no se ha logrado consolidar en el área, por el permanente rechazo de las poblaciones locales y en muchos casos la expulsión de varias localidades como es el caso de la provincia Angel Sandoval, donde en el Municipio de San Matías, han expulsado a dicha Fundación de todas las comunidades de su territorio. Asimismo en las localidades de la Provincia Germán Busch y el Municipio de Roboré: Chochis, etc. El SERNAP no ha firmado ningún convenio, así como el Convenio firmado entre la FCBC y la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, ha sido anulado. Por otra parte el CEPSC ha instruido a todas las organizaciones indígenas a expulsar a los funcionarios de la FCBC de las comunidades, asimismo, los Comités Cívicos de Chochis, Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez, San Matías, San José, no desean tener relaciones con dicha Fundación.

Sin embargo, hasta ahora y a pesar de existir recomendaciones de la Fiscalía de Distrito, Defensoría del Pueblo, Contraloría Departamental, Consejo departamental, Derechos Humanos, Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, en sentido de suspender actividades, la citada FCBC, continúa operando con toda impunidad y en franco desacato a la ley y a la dignidad de los pobladores locales, que han visto destruido el Bosque Chiquitano, en aras de los intereses de las empresas petroleras y de un grupo de organizaciones que usa el concepto de la “conservación” para su provecho y en desmedro de los recursos naturales y la soberanía de un pueblo. *No debemos concordar con que se ponga precio a la naturaleza y menos cuando se trata de su destrucción.*

Bolivia es un país muy rico en biodiversidad, y también es rico culturalmente por la diversidad de etnias y pueblos que habitan su territorio. Debemos entender la interrelación y equilibrio que debe primar entre a ambas. Por ello la importancia de la administración local, la misma que está en relación permanente con las comunidades locales, y no puede ser separada del concepto de desarrollo, lo contrario es continuar con las políticas de explotación irracional de nuestros recursos naturales.

“El hombre y la naturaleza conforman una unidad, que no se puede separar cuando se trata de su defensa”

15 Dossier Informativo FCBC: Delitos, ilegalidades, contravenciones con los recursos Naturales del Estado, CPESC/CEADES, Santa Cruz, Noviembre 2003.

El Parque Nacional Tunari y el comité de gestión: situación actual

Humberto Mariscal¹

1. Antecedentes de la creación del Parque Nacional Tunari

El Parque Nacional Tunari (PNT) nació con una visión de conservar el gran potencial de recursos naturales y servicios ambientales que se tiene en esa área geográfica; además de controlar la recarga de los acuíferos de la zona. De esa manera, se promulga el Decreto Supremo N° 06045 (el 30 de marzo de 1962) que crea el PNT, estableciendo los siguientes límites: al norte la ceja de monte en la región de Tablas Monte, al sur la avenida Circunvalación, al este la quebrada de Arocagua y al oeste la quebrada Taquiña. Posteriormente este Decreto Supremo fue elevada a rango del Ley el 4 de noviembre de 1963.

Después de aproximadamente 28 años, con la Ley N° 1262 (promulgada el 13 de septiembre de 1991) se amplía la extensión del PNT y se establecen nuevos límites que se encuentran vigentes hasta la fecha, los cuales son: al norte la ceja de monte de Tablas, al sur la cota 2750, al este el río Kenko o Kenku Mayu y al oeste el margen estrecho de Parotani.

Con la nueva Ley del PNT se amplían sobre todo los límites del sector este y oeste, lo que hace que la jurisdicción provincial y municipal también se amplíe, siendo esta a la fecha la siguiente:

1 Ingeniero Agrónomo. Director del Parque Nacional Tunari, Cochabamba-Bolivia.

Jurisdicción Provincial y Municipal del Parque Nacional Tunari

Provincia	Municipio	Agentes Cantonales
1. CHAPARE	– Sacaba	
2. CERCADO	– Cercado	
3. QUILLACOLLO	– Quillacollo – Colcapirhua – Tiquipaya – Vinto	– El Paso – Chapisirca
4. TAPACARÍ	– Sipe Sipe – Tapacarí	
5. AYOPAYA	–	

Es necesario realizar una aclaración en cuanto a la sección municipal de Morochata perteneciente a la Provincia Ayopaya, puesto que no incluimos a esta sección municipal en el cuadro anterior. Muchos conocen que Morochata es un municipio con alto potencial agrícola y pecuario, donde prevalece el cultivo de la papa en cuanto a superficie, a niveles de productividad, a niveles de producción y a la calidad; asimismo la sección municipal Morochata tiene una diversidad de microclimas aptas para el cultivo de diferentes especies como la papa, la avena, la cebada y variadas hortalizas y leguminosas. Debido a ello, este municipio requiere de un análisis profundo para ser incorporado en el PNT.

La superficie actual del PNT de acuerdo a la jurisdicción provincial es la siguiente:

Extensión del PNT de acuerdo a la Jurisdicción Provincial

Ayopaya	Cercado	Quillacollo	Chapare	Tapacarí
774.40 Km ² 25 %	22.33 Km ² 1 %	1092.98 Km ² 35 %	934.62 Km ² 30 %	266.79 Km ² 9 %

La provincia más afectada territorialmente por el PNT es Quillacollo, y la menos afectada es la provincia Cercado que en realidad corresponde a menos del 1% de la superficie del PNT.

2. Objetivos del Parque Nacional Tunari

Inicialmente el objetivo de PNT era la de ampliar la masa boscosa de las plantaciones forestales principalmente de pino. Sin embargo, con el pasar de los años y la realización de algunos estudios por personalidades importantes, se estableció que los objetivos del PNT van más allá de la ampliación de las plantaciones forestales. De ese modo, se replantearon los objetivos del PNT que actualmente

dentro la Prefectura de Cochabamba es concebido como un proyecto que persigue los siguientes objetivos:

Objetivo del proyecto del PNT:

Realizar un Manejo Integral del PNT bajo una planificación técnica y adecuada que permita obtener un bosque ideal que cumpla las funciones de protección, disminución de la contaminación, generador y regulador del ciclo hidrológico y de recreación.

Se debe aclarar que la visión del Manejo Integral del PNT requiere considerar operativamente diferentes componentes, que se espera lograr en el mediano plazo.

Objetivos específicos del proyecto del PNT:

- Incrementar la cobertura vegetal en el área del PNT con plantaciones orientadas específicamente a la producción de biomasa para energéticos, en forma de bosquetes o combinados en sistemas forestales.
- Promover plantaciones forestales y agroforestales en las comunidades campesinas para evitar la erosión de suelos y mejoramiento ambiental.
- Reducir riesgos y enfrentar situaciones de incendio en toda el área del PNT.
- Activar la coordinación y el diálogo entre instituciones que persiguen el desarrollo basado en el respeto del medio ambiente.
- Optimizar el manejo silvicultural con técnicas adecuadas de intervención en los diferentes rodales a partir de un plan de manejo.
- Implementar un control preventivo en los diferentes campamentos que posee el Proyecto de la incidencia de incendios y lucha activa en caso de incendios.

Respecto del avance de los objetivos específicos, es importante indicar que hasta el año 1997 cuando concluyo sus acciones el entonces PROFOR (Proyecto Forestal) estableció una masa boscosa de aproximadamente 500 hectáreas. A partir del año 1998, la producción de plantines en el vivero del PNT fue de setenta mil a ochenta mil, pero en el año 2003 en base a un sondeo se determino que la demanda de plantines por parte de la comunidades era mucho mayor, por lo que se estableció para el año 2003 de producir ciento cincuenta mil plantines con la misma capacidad instalada de nuestro vivero, cumpliendo el objetivo e incluso sobrepasando la producción de plantines en diez mil unidades. Para el año 2004 la meta es también de producir ciento cincuenta mil plantines.

Por otra parte, indicar que en el año 2003 se ha tenido 45 incendios en el PNT, y el 95% de estos incendios son provocados. Eso implica que los incendios se debe principalmente a la falta de conciencia y educación ambiental por parte de la sociedad civil. Actualmente se tiene 2 campamentos principales con sus respectivos guarda bosques ubicados en el sector de las áreas boscosas de la Provincia Cercado, los cuales además de hacer el control del parque y están encargados de combatir los incendios.

3. La problemática del Parque Nacional Tunari

La problemática actual del PNT está determinado esencialmente por los diferentes asentamientos que se vienen realizando alrededor de la cota 2750 que es el límite sur del Parque Nacional Tunari. La información y los datos que se presentan a continuación corresponde a los estudios realizados por el CLAS (Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG de la Universidad Mayor de San Simón) y la Lic. Debra Pereira.

Los asentamientos en el límite sur del PNT se ha incrementado paulatinamente, encontrando los siguientes datos hasta la gestión 2001.

**Asentamientos Urbanos en el Límite Sur del PNT
(cota 2750) por Municipio**

Municipio	Años			Total		Superficie Total (m ²)	N° de Lotes	Viviendas Construidas
	1971-1980	1981-1990	1991-2000	N°	%			
SACABA	0	5	8	12	37.5	336840	1307	802
CERCADO	3	7	7	17	53.1	728835	1998	1320
TIQUIPAYA	2	1	0	3	9.4	629064	1049	716
Total	5	13	14	32	100	1'724,739	4354	2838

Fuente: CLAS y Pereira (2001)

Hasta la gestión 2001 se contabilizó 32 asentamientos urbanos alrededor de la cota 2750 que es el límite sur del PNT, cubriendo en total aproximadamente 172.5 hectárea. El sector más afectado por lo asentamientos urbanos es la jurisdicción del Municipio de Cercado, donde existe no solo lotes sino una gran cantidad de viviendas construidas.

Por otra parte, los estudios realizados indican que alrededor de la cota 2750 existen comunidades campesinas que desarrollan actividades agrícolas en sus parcelas familiares, identificándose 41 comunidades distribuidos por municipios de la siguiente manera:

**Comunidades Campesinas en el Límite Sur del PNT
(cota 2750) por Municipio**

Municipio	N° Comunidades	%	Superficie Total (Ha)	Parcelas Familiares (Ha)	Área Cultivable (Ha)
SACABA	9	21.96	1350.0	1203.12	765.61
CERCADO	5	12.19	3733.0	1240.00	233.00
TIQUIPAYA	5	12.19	2500.0	1626.00	752.00
QUILLACOLLO	8	19.51	1088.0	606.82	234.90
VINTO	9	21.96	2484.0	1545.80	683.24
SIPE SIPE	5	12.19	1380.0	858.78	379.58
Total	41	100.0	12535.0	7080.52	3048.34

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Las 41 comunidades campesinas ubicadas alrededor de la cota 2750 ocupan un total de 12535 hectáreas, de los cuales es utilizado en la agricultura aproximadamente el 25 %.

En cuanto a la población tanto urbana como rural asentada alrededor de la cota 2750, se tiene los siguientes datos:

Población Asentada en el Límite Sur (cota 2750) del PNT

Provincia	Municipio	Población Rural	Población Urbana	Población Total
QUILLACOLLO	Quillacollo	4340.0	0.0	4340.0
	Vinto	3486.0	0.0	3486.0
	Tiquipaya	3328.0	2481.0	5809.0
	Sipe Sipe	1706.0	0.0	1706.0
CERCADO	Cercado	3304.0	5827.0	9131.0
CHAPARE	Sacaba	4376.0	2866.0	7242.0
Total	6	20540.0	11174.0	31714.0

Fuente: CLAS y Pereira (2001)

La población total asentada alrededor de la cota 2750 alcanza a 31714 habitantes, siendo población rural casi el 65%. Para mayor información por municipio sobre las urbanizaciones, loteamientos y comunidades campesinas ubicadas alrededor de la cota 2750 ver anexo 1.

Un dato importante, principalmente de las urbanizaciones y loteamientos es su ubicación en relación a la cota 2750, puesto que este dato indica en que grado se esta afectado el límite sur del PNT. De toda la información que se adjunta como anexo, se puede indicar que el 40 % de las urbanizaciones están ubicadas por encima de la cota 2750, es decir que el 100% de estas urbanizaciones están

dentro los límites del PNT. El restante 60% están ubicadas sobre la misma cota 2750, afectando el área del PNT en diferentes porcentajes, vale decir que solo una parte de estas urbanizaciones sobrepasan el límite sur del PNT.

En el caso de los loteamientos, se encuentra que el 72% de estos se ubican por encima de la cota 2750, lo que significa que una mayoría de los loteamientos realizados hasta el año 2000 se encuentran dentro el área del PNT.

Respecto de las comunidades campesinas ubicadas alrededor de la cota 2750, se encuentra que el 64% (de un total de 41 comunidades) están ubicadas dentro los límites del PNT; el restante 36% de las comunidades campesinas afectan solo en parte el área del PNT, es decir que estas comunidades se encuentran ubicadas en la misma cota 2750 y afectan parcialmente el área del PNT.

En conclusión, la mayor problemática del PNT es entonces la transgresión del límite sur definida por la cota 2750 por diferentes asentamientos humanos. Los conflictos que se generan a raíz de ello es complejo y tiene diversas características que no permite encontrar soluciones adecuadas y de consenso. Por una parte, las urbanizaciones y loteamientos es producto sobre todo de una política económica nacional implementada en los años 80 que ha obligado a muchas familias a abandonar los centros mineros y ha establecerse en las grandes ciudades como Cochabamba; asimismo existe una fuerte incidencia política que pretende favorecer a algunos sectores con la entrega de terrenos fiscales y/o municipales.

4. Las acciones en torno al comité de gestión del Parque Nacional Tunari

Con la promulgación del Decreto Supremo N° 24781 del 31 de julio de 1997, entró en vigencia el Reglamento General de las Áreas Protegidas. Este reglamento en su II sección se refiere específicamente a la conformación de los Comités de Gestión en las Áreas Protegidas, siendo importante hacer referencia a algunos de sus artículos respecto de estos comités:

Art. 47. El Comité de Gestión es la instancia de participación, a nivel de cada área protegida, que incorpora en la gestión de la misma a los pueblos indígenas, comunidades originarias establecidas, municipalidades, prefecturas y otras entidades públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales involucradas, de conformidad con lo establecido en el art. 62 de la Ley de Medio Ambiente.

Art. 48. El Comité de Gestión es el órgano representativo de la población local que participa en la planificación y coadyuva en la fiscalización de la gestión del área protegida.

Art. 51. El Comité de gestión estará integrado por un número mínimo de seis y un máximo de diez representantes titulares con sus respectivos suplentes,

designados por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos siempre que sus actos se hubieren enmarcado en la Ley.

Art. 52. Son funciones y atribuciones del Comité de Gestión:

- Participar en la definición de las políticas de manejo del área, así como en la elaboración, ejecución y evaluación del plan de manejo y los planes operativos, en el marco de los objetivos del área y de las normas y políticas nacionales y departamentales.
- Coadyuvar con la Dirección del Área en la priorización, ejecución y evaluación de los programas, sub programas, proyectos y actividades a desarrollarse en el área.
- Colaborar eficazmente en la generación de una participación activa a favor del área protegida por parte de la comunidad local.
- Velar por la integridad territorial y la inviolabilidad del área protegida de conformidad con su categoría y zonificación
- Denunciar ante la dirección del área las infracciones o delitos que sean de su conocimiento
- Poner en conocimiento ante las autoridades nacionales cuando conociere sobre acciones u omisiones de la dirección del área o de la entidad administradora, en perjuicio de los objetivos del área.
- Participar en la selección de los postulantes a guardabosques
- Participar en la evaluación anual de las actividades que cumplen los guardabosques.

En el año 2000 la Prefectura de Cochabamba recién pretende implementar la Ley 1262 del Parque Nacional Tunari que fue promulgada en el año 1991, para lo cual impulsó algunas acciones como fue la conformación del Comité de Gestión. Pero previamente encarga la realización de un estudio para conocer la situación del PNT hasta ese momento y que permita tener elementos para impulsar la gestión del PNT en forma participativa y concertada con los actores sociales involucrados.

Sin embargo, como resultado de ese estudio se constató que la Ley 1262 tiene un contenido estricto de lo que es un área protegida, donde los actores locales están claramente ausentes, es decir que la Ley del PNT no reconoce la permanencia de las comunidades campesinas dentro de su área ni el desarrollo de actividades económicas y culturales. Debido a ello, una primera propuesta fue el de discutir el contenido de la Ley 1262 porque no compatibiliza con la realidad social que se vive en el PNT. Por otra parte, se evidenció que había un profundo desconocimiento de la Ley principalmente por parte de las comunidades campesinas.

En ese marco, es que se planteó que la Ley 1262 debería ser adecuada a la realidad que se vive en el área del PNT. Una planteamiento inmediato para ello,

fue el de realizar un Plan de Manejo del PNT pero con la participación y en concertación con todos los actores sociales involucrados en el PNT. De esa manera fue que se reconoció, que el principal mecanismo para llevar adelante todas las acciones propuestas era la “participación ciudadana”, entendiéndose esta, sin embargo, como la participación del conjunto de los actores sociales involucrados en la gestión de PNT y no solo de las comunidades campesinas. En muchos casos los únicos actores involucrados en la gestión de las áreas protegidas eran las organizaciones ambientalistas (sobre todo ONGs) y las entidades gubernamentales como el SERNAP y las prefecturas.

La falta de información que tenían sobre todo las comunidades campesinas respecto de la Ley 1262, exigía que era necesario realizar acciones de capacitación y de difusión del contenido de la Ley 1262 y otros marcos legales relacionados con las áreas protegidas. La carencia de un soporte técnico también era una debilidad identificada en el PNT, principalmente respecto a la identificación de riesgos y de resolución de los conflictos. Finalmente, como en toda área protegida, una de las mayores preocupaciones era la sostenibilidad financiera.

En síntesis, para dar viabilidad a la gestión del PNT debía inicialmente resolverse todos los conflictos. Un primer paso en esa línea, fue conformar el Comité de Gestión con la participación de la Prefectura, las instituciones ambientalistas, la universidad Mayor de San Simón, las organizaciones campesinas y los municipios. Sin embargo, esta conformación tuvo características muy diferentes a otras áreas protegidas principalmente porque el PNT no tiene un Plan de Manejo y un Director, lo que se tiene es un Programa de Repoblamiento Forestal y un Director de este Programa que hace eventualmente como Director del PNT. Dada esta situación, el Comité de Gestión debía implementar todo el proceso de gestión del PNT, iniciando con la identificación y resolución de los conflictos y la elaboración de un Plan de Manejo. Asimismo, previamente debía revisar la Ley 1262 con la participación de todos los actores sociales involucrados, lo que implicó una larga discusión impregnada en muchos casos por intereses sectarios y hasta políticos. El establecimiento de urbanizaciones y loteamientos en el área del PNT fue uno de los conflictos más discutidos por ejemplo con las alcaldías, ya que muchas urbanizaciones y loteamientos estaban afectando las principales zonas de recarga acuífera como es el área alrededor de la cota 2750. En ese sentido, se debe subrayar que uno de los principales objetivos del PNT es la protección de las zonas de recarga acuífera para el valle de Cochabamba y el manejo sostenible de las cuencas en toda la cordillera del Tunari.

Después de varias reuniones del Comité de Gestión y de la realización de más de 40 talleres con las comunidades campesinas, no se logró ningún avance en la resolución de los conflictos, más bien algunos actores sociales como las organizaciones campesinas expresaron un rechazo total a la Ley 1262. Por un lado, las comunidades campesinas no lograron entender lo que es un área protegida y por

otro, el Ejecutivo representado por la Prefectura no logró entender lo que es un manejo territorial sostenible con participación de actores locales como las comunidades campesinas. Estas dos posiciones muy enfrentadas llevaron al fracaso de todo intento de solución de los conflictos y de la implementación de la Ley 1262 a través del Comité de Gestión.

El derecho propietario sobre la tierra y los recursos naturales fue otro tema muy discutido con las comunidades campesinas, puesto que la Ley 1262 es muy sugerente en cuanto a la expropiación de tierras e incluso al desalojo de asentamientos humanos del área del PNT. Una observación que realizan las comunidades campesinas respecto de la propiedad de la tierra, es que la Ley INRA viene impulsando el “saneamiento de tierras” en muchas comunidades campesinas y la Ley 1262 desconoce la propiedad familiar y comunal de las tierras, lo que es evidentemente una contradicción.

A raíz de todo ello, las comunidades campesinas expresaron claramente su falta de credibilidad en el Estado y sus instituciones como la Prefectura. En los últimos años en Bolivia, el Estado y sus instituciones se han desgastado hasta el punto que una gran parte de la ciudadanía, entre ellas las organizaciones campesinas, ya no cree en sus buenas intenciones y mucho menos de los gobernantes.

Si bien la realización de talleres con las comunidades campesinas y la discusión generada en torno al Comité de Gestión ha permitido un acercamiento con diferentes los actores sociales, lo que no significa que estén de acuerdo con lo que planteó la Prefectura, lo más importante fue que las organizaciones campesinas develaron sus intereses e hicieron conocer su posición que se resume en los siguientes puntos hecho público el 31 de octubre de 2001:

- Rechazo y/o sustitución de la Ley N° 1262 del Parque Nacional Tunari.
- Se respetan los límites actuales del Parque Nacional Tunari.
- Administración propia por las comunidades campesinas del área protegida con apoyo institucional.
- Respeto a usos y costumbres y servidumbres de las comunidades originarias.
- Respeto al derecho propietario sobre la tierra con el mismo tratamiento y saneamiento de tierras en forma gratuita.
- No se acepta ningún tipo de concesión de los recursos naturales del PNT.
- Protección bajo gestión campesina de cuencas, torrenteras y áreas de pendientes.
- Protección bajo gestión campesina de áreas verdes, lagunas y biodiversidad
- Manejo de los bosques, plantas nativas y exóticas bajo administración de las comunidades campesinas.
- Realizar actividades agrícolas, ganaderas y agroforestales de forma sostenibles con el manejo de aynogas y conservación de suelos.

- Uso apropiado del agua, construcción y mantenimiento de sistemas de riego, recuperación de lagunas y conservación de vertientes.
- Capacitación técnica para el manejo sostenible de los recursos naturales.
- Mejoramiento del ganado, de los sistemas de pastoreo y del manejo sostenible de los pastizales.
- Acceso general a servicios básicos públicos equipamiento social y vías de acceso con planificación especializada.
- Construcción de viviendas rurales con planificación apropiada.
- Garantizar mercados para la producción de las comunidades del PNT a precios justos.
- Financiamiento para la administración y ejecución de actividades en el PNT, del tesoro nacional, municipios e impuesto ecológico.
- El Comité de Gestión debe constituirse con una representación de las organizaciones campesinas provinciales igual al 50% más uno del total de sus miembros.

A la fecha el Comité de Gestión no está en funcionamiento, no porque no quieren hacerlo, sino porque además de la posición de las organizaciones campesinas expresa en los anteriores puntos, han planteado llevar adelante un proceso participativo que les permita elaborar una propuesta desde sus organizaciones campesinas para modificar o sustituir la Ley 1262, lo cual fue encargado a la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.

Anexo 1

Urbanizaciones, Loteamientos y Comunidades Campesinas en el Municipio de Sacaba Ubicadas alrededor de la Cota 2750

	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Urbanizaciones:				
Trabajadores de Salud	N° 1 Sacaba	60% sobre la cota	648	Urb. Construida
Servicio Nal. Caminos	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	490	Urb. Construida
Kami	N° 2 Quintanilla	40% sobre la cota	84	Con construcciones y lotes
Veneros Pirquineros Siglo XX	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota	318	Con construcciones y lotes
Puntiti Chico	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota	161	Construcciones en áreas agrícolas
Servicio Nal. de Caminos	N° 3 Pacata	100% sobre la cota	364	Urb. Construida
Taqo Loma	N° 3 Pacata	30% sobre la cota	134	Con construcciones y lotes
Villa 14 de Septiembre	N° 3 Pacata	10% sobre la cota	18	Urb. Construida
Coloma	N° 3 Pacata	20% sobre la cota	36	Con construcciones y lotes
27 de mayo	N° 3 Pacata	10% sobre la cota	56	Con construcciones y lotes
Villa el mar	N° 3 Pacata	100% sobre la cota	522	Urb. Construida
Plan 335-k-anexo	N° 3 Pacata	10% sobre la cota	35	Con construcciones y lotes
		TOTAL	2866	
Loteamientos:				
Magisterio Oruro	N° 1 Sacaba	20% sobre la cota		Sin construcciones
Fabril	N° 1 Sacaba	30% sobre la cota		Sin construcciones
Ferrovianos	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota		Sin construcciones
Mopar	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota		Sin construcciones
Excombatientes	N° 3 Pacata	80% sobre la cota		Sin construcciones
Comunidades:				
Hornoni	N° 3 Pacata	100% sobre la cota	78	Areas agrícolas
Puntiti Chico	N° 2 Quintanilla	100% sobre la cota	2400	Areas agrícolas
Animas Mogo	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	500	Areas agrícolas
Taqo Loma	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	300	Areas agrícolas
San Jacinto	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	85	Areas agrícolas
Chimboco	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	328	Areas agrícolas
Wayllani Chico	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	127	Areas agrícolas
Pucarita	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	250	Areas agrícolas
Pucara	N° 1 Sacaba	100% sobre la cota	308	Areas agrícolas
TOTAL			4376	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Urbanizaciones, Loteamientos y Comunidades Campesinas en Municipio de Cercado Ubicados alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Las Delicias	N° 1	75% sobre la cota	135	Con construcciones y lotes
Lomas de Aranjuez	N° 1	90% sobre la cota	180	Urbanización construida
Portales	N° 2	43% sobre la cota	224	Urbanización construida
Libertad	N° 2	100% sobre la cota	135	Urbanización construida
Maca	N° 2	100% sobre la cota	40	Con construcciones y lotes
Prefectural	N° 2	80% sobre la cota	480	Con construcciones y lotes
Asunción Llallagua	N° 2	48% sobre la cota	605	Urbanización construida
La Floresta	N° 2	100% sobre la cota	30	Con construcciones y lotes
Los Ceibos II	N° 2	10% sobre la cota	24	Con construcciones y lotes
Villa Guadalupe	N° 2	100% sobre la cota	1239	Urbanización construida
Tirani Maravillas	N° 2	100% sobre la cota	480	Con construcciones y lotes
Taquiña Chica	N° 2	100% sobre la cota	700	Con construcciones y lotes
Estrada	N° 2	95% sobre la cota	365	Urbanización construida
27 de mayo Policial	N° 2	25% sobre la cota	240	Urbanización construida
Alto Candelaria	N° 2	100% sobre la cota	720	Urbanización construida
Huanuni	N° 2	14% sobre la cota	50	Urbanización construida
Tunari	N° 2	100% sobre la cota	180	Con construcciones y lotes
		TOTAL	5827	
Loteamientos				
Casegural	N° 1	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Comibol Potosi	N° 2	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Comunidades				
Pacolla	N° 1	100% sobre la cota	200	Vivienda y áreas agrícolas
Andrada	N° 1	100% sobre la cota	444	Vivienda y áreas agrícolas
Tirani	N° 2	100% sobre la cota	464	Vivienda y áreas agrícolas
Taquiña Chico	N° 2	100% sobre la cota	96	Vivienda y áreas agrícolas
Taquiña Grande	N° 2	50% sobre la cota	2100	Vivienda y áreas agrícolas
		TOTAL	3304	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Urbanizaciones, Loteamientos y Comunidades Campesinas en el Municipio de Tiquipaya Ubicadas alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Villa Porvenir Unificada	N° 5	50% sobre la cota	2100	Con construcciones y lotes
Villa Satélite	N° 5	35% sobre la cota	101	Con construcciones y lotes
Cooperativa Miraflores	N° 5	50% sobre la cota	280	Construcciones 60% y lotes
		TOTAL	22481	
Loteamientos				
I.G.M	N° 5	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Valeros	N° 5	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Magisterio Urbano	N° 5	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Extierras Chilimarka	N° 5	100% sobre la cota		Aún sin construcciones
Comunidades				
Los Molinos	N° 4	Sobre la cota	350	Vivienda y áreas agrícolas
Montecillo Bajo	N° 4	En la cota	1750	Vivienda y áreas agrícolas
Salacachi	N° 4	En la cota	917	Vivienda y áreas agrícolas
Pucun Pucun	N° 5	Sobre la cota	311	Vivienda y áreas agrícolas
Tinti Mokho	N° 4	En la cota	779	Vivienda y áreas agrícolas
		TOTAL	3328	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Comunidades Campesinas en el Municipio de Quillacollo alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Piusi	N° 8	En la cota	378	Vivienda y áreas agrícolas
Aguila Rancho	N° 8	Sobre la cota	300	Vivienda y áreas agrícolas
Jove Rancho	N° 8	Sobre la cota	340	Vivienda y áreas agrícolas
Molle Molle	N° 8	En la cota	420	Vivienda y áreas agrícolas
Okosuru	N° 7	En la cota	249	Vivienda y áreas agrícolas
Bella Vista	N° 7	En la cota	1200	Vivienda y áreas agrícolas
Falsuri	N° 7	Sobre la cota	900	Vivienda y áreas agrícolas
Potrero	N° 7	En la cota	553	Vivienda y áreas agrícolas
		TOTAL	4340	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Comunidades Campesinas en el Municipio de Vinto alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Buena Vista	N° 6	En la cota	400	Vivienda y áreas agrícolas
Isacaypata	N° 7	En la cota	989	Vivienda y áreas agrícolas
Thajra o Kolga	N° 8	En la cota	80	Vivienda y áreas agrícolas
Combuyo	N° 8	En la cota	739	Vivienda y áreas agrícolas
Llave Grande	N° 7	Sobre la cota	255	Vivienda y áreas agrícolas
Llave Chico	N° 8	En la cota	276	Vivienda y áreas agrícolas
Calatrancani	N° 8	En la cota	170	Vivienda y áreas agrícolas
Vilomilla	N° 8	En la cota	517	Vivienda y áreas agrícolas
Kaspi Cancha	N° 8	Sobre la cota	60	Vivienda y áreas agrícolas
		TOTAL	3486	

Fuente: CLAS y Pereira (2001).

Comunidades Campesinas en el Municipio de Sipe Sipe alrededor de la Cota 2750

Urbanizaciones	Distrito Municipal	Ubicación en relación a la cota	Población	Observaciones
Chaupi		Sobre la cota	160	Vivienda y áreas agrícolas
Viloma		Sobre la cota	813	Vivienda y áreas agrícolas
Combuyo		Sobre la cota	192	Vivienda y áreas agrícolas
Siqui Siquia		Sobre la cota	219	Vivienda y áreas agrícolas
Pirhuas		Sobre la cota	322	Vivienda y áreas agrícolas
Comunidades			1706	

Fuente: CLAS y Pereira (2001)

Las áreas protegidas de Ayopaya desde la percepción de las organizaciones campesinas

Zacarías Ortíz¹

1. Antecedentes históricos

La Provincia Ayopaya siempre ha sido un lugar donde existe muchos recursos naturales y biodiversidad. Aquí vivieron los Quechua-Aymaras desde mucho antes de la llegada de los españoles, incluso antes del nacimiento de Jesucristo. Mucho después llegó el coloniaje español, como se sabe, nos usurparon todas nuestras riquezas, pero no quieren reconocer. Un ejemplo claro de que los españoles usurparon nuestros recursos naturales, es lo que paso con el Cerro Rico de Potosí, pero no solo usurparon nuestros recursos naturales, sino también esclavizaron y mataron a nuestros abuelos. Luego vinieron los patrones que igualmente abusaron y fueron pongos nuestros padres y abuelos de estos. Lo que nos preocupa al movimiento campesino de todo esto, es que ahora no quieren reconocer y muchos profesionales no dicen la verdad, y no nos explicamos porque.

Con la llegada de la Reforma Agraria en 1953 es verdad que desaparecieron los patrones, pero lamentablemente nos quedamos con tierras muy pequeñas que actualmente no es suficiente para mantener a nuestras familias. Sin embargo, desde 1953 muchos gobiernos han ido distribuyendo grandes extensiones (más de 37 millones ha) de tierra a sus familiares y amigos principalmente en el oriente boliviano. Actualmente quién dice que hay que revertir estas tierras? Más bien en los lugares donde los campesinos estamos viviendo con pequeñas parcelas nos quieren quitar y declarar parques. Como ven, no quieren respetar nuestros derechos originarios sobre nuestras propias que nadie nos regaló, sino que nos dejaron nuestros abuelos.

1 Dirigente Campesino. Es Secretario ejecutivo de la Central provincial de Ayopaya, Cochabamba-Bolivia.

Realmente esto es un atentado con todo el movimiento campesino, por eso rechazamos rotundamente a los parques sobre todo en la Provincia Ayopaya.

Por otra parte, los parques y las áreas protegidas se hacen para favorecer a las empresas otorgándoles concesiones petroleras, mineras y otras. Ahora también están queriendo hacer esos llamados corredores biológicos. Qué interés tiene todo esto? No es otra que para enriquecer a los empresarios y las transnacionales. Que beneficio podemos recibir los Quechuas-Aymaras? Ninguno, puesto que siempre nos han excluido y nos han marginado. Todas las Leyes que apoyan la declaración de parques en nuestras tierras, en realidad violan la Constitución Política del Estado y el Convenio de la OIT.

La Constitución Política del Estado en su artículo 171 párrafo I dice claramente que: *“Se reconoce, respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente relativo a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones”*

Por su parte en el Convenio 169 de la OIT en su artículo 15 indica: *“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes sobre la tierra, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los interesados de esos pueblos serían perjudicados.*

2. Las áreas protegidas en Ayopaya

Actualmente a la Provincia Ayopaya afecta tres parques: el Parque Nacional Tunari, el Parque Isiboro Sécore y el que se pretende crear con el nombre de Parque Altamachi-Cotacajes. Todos estos Parques afectan a más del 65% de la Provincia Ayopaya. Por ejemplo el Parque Nacional Tunari ha sido aprobado por el Presidente Jaime Paz Zamora en 1992 y ahora se dice que ya está en funcionamiento, eso para los campesinos de Ayopaya no es así, porque hasta ahora no nos han consultado para nada, por tanto no reconocemos la Ley 1262 del Parque Nacional Tunari. Además esta ley en uno de sus artículos prohíbe criar animales y practicar la agricultura: Donde creen que van a vivir los campesinos? Que productos van a haber en los mercados de Cochabamba si nosotros proveemos sobre todo papa?

Los campesinos pensamos que en vez de querer perjudicar al pueblo boliviano, por qué no se fiscaliza al gran empresario minero como Gonzalo Sánchez de Lozada y otros que están contaminando los ríos con todo tipo de ácidos, ¿Eso no afecta al medio ambiente? Por qué las instituciones y los profesionales no se ocupan de estos hechos y dejan a los campesinos alimentar al pueblo. Existen también otros casos en el oriente boliviano que muchos empresarios tienen grandes extensiones de tierra, y nadie dice nada de eso.

Como Provincia Ayopaya tenemos nuestras propias reservas naturales desde hace mucho tiempo, alrededor de 600 mil hectáreas, pero actualmente estas reservas son las que quieren declarar como Parque Cotacajes-Altamachi. Para ello sin embargo, ninguna institución nos ha consultado si estamos de acuerdo o no, de un momento a otro han aparecido algunas instituciones haciendo estudios y hablando de este parque.

El Municipio de Morochata está afectada en 84% con los tres parques: Tunari, Isiboro Sécore y Cotacajes-Altamachi, y donde creen que se va a producir papa si este municipio es el principal productor de papa en Bolivia.

En la prefectura de Cochabamba dicen que el Comité de Gestión del Parque Nacional Tunari ya está organizado, las organizaciones campesinas de las 5 provincias afectadas por este parque no reconocemos a ningún comité de gestión porque simplemente no somos parte de este, incluso siendo los dueños legítimos de las tierras.

Muchos indican que los parques van a beneficiar a los campesinos, sin embargo nosotros hasta el día de hoy no hemos visto ningún beneficio. Más bien con los parques creemos los que se benefician son las instituciones. En el caso de Cotacajes-Altamachi solamente en estudios y otros trámites se indica que ya se gastó más de un millón de dólares, pero los que vivimos en el lugar no hemos recibido nada hasta el momento. Todo esto está impulsado por la institución CETEFOR, donde hay muchas irregularidades y que incluso compran a algunos dirigentes para lograr que se firmen documentos.

Dentro del llamado Parque Cotacajes-Altamachi existe actualmente 18 concesiones mineras y 16 están en proceso de trámite. Nosotros preguntamos, si se está haciendo una declaración de parque por qué ya hay concesiones mineras? Acaso en un parque no se restringe la explotación de recursos naturales? Por otra parte, las empresas mineras y petroleras acaso no destruyen la biodiversidad? Todos sabemos que este tipo de empresas son las que han destruido los recursos naturales y la biodiversidad en todo el mundo. Otro interés que se busca en el Parque Cotacajes-Altamachi es el establecimiento de centros militares, no sabemos con qué intención.

Debido a todas estas irregularidades e intenciones ocultas, es que los campesinos de Ayopaya rechazamos rotundamente no solo el parque Cotacajes-Altamachi, sino también el Parque Isiboro Sécore y el parque Tunari.

3. Propuesta de las organizaciones originarias de Ayopaya

En primer lugar, pensamos que no nos pueden venir a invadir y ordenar en nuestra propia casa, nos sentimos avasallados y humillados. En nuestras comunidades no solo vivimos, sino que trabajamos, criamos animales, sembramos y

también cuidamos la naturaleza. Para nosotros Quechuas-Aymaras, la Pachamama que es en realidad la Naturaleza, es sagrada y la respetamos en todo momento. Por ello proponemos que nos dejen continuar la naturaleza bajo nuestros propios usos, costumbres y servidumbres.

Por otro lado, proponemos conservar las tierras y hacer plantaciones para recuperar nuestros bosques, sin que haya necesidad de hacer una declaración de parque. También proponemos que se respete nuestras reservas de la Provincia Ayopaya.

A nivel de la Provincia Ayopaya ya contamos con un Plan de Gestión Territorial, pero lamentablemente no se quiere reconocer y ni se respeta este Plan que fue realizado en acuerdo con las organizaciones campesinas. Que nos queda a las organizaciones campesinas si no nos escuchan? Defender nuestras tierras si es necesario con nuestras propias vidas.

Finalmente, como movimiento campesino ya no queremos que existan más problemas y conflictos, más bien proponemos dialogar abiertamente con todas las instituciones y en especial con el gobierno, pero para ello nosotros solamente pedimos que se respeten nuestros derechos legítimos sobre nuestras tierras y territorios, y también nuestra cultura y nuestros derechos a la autodeterminación.

Panel de debate y discusión

Parte III

Moderador:

Dr. Marc Hufty, IEUD - Universidad de Ginebra, Suiza

Participante

No identificado

En realidad quedé impresionado con la presentación del representante del SERNAP, porque nos mostró que estamos avanzando, no es cierto? Sin embargo, recuerdo que a finales del año pasado se pretendió socializar el proyecto de ley de áreas protegidas; en un evento aparecieron 40 campesinos mas o menos que dijeron lo siguiente: Señores ni siquiera nos han invitado y por lo tanto no estamos de acuerdo con nada de lo que van a discutir aquí. Pocos días después se consiguió un video de un encuentro campesino, donde hacen referencia a una serie de problemas con las áreas protegidas y comunidades, de las petroleras, de las tierras comunales, conflictos con las ONGs, conflictos con los guardabosques, conflictos con los comités de gestión, etc. Entonces aquí estoy realmente confundido, o estamos en un país de mentirosos; creo que es el momento preciso para ponernos de acuerdo porque estamos viendo que tenemos muchos problemas. Si bien todo viene de afuera, las áreas protegidas ya están aquí, tenemos una serie de conflictos y también hay buenas intenciones para solucionar, entonces creo que es tiempo de que comencemos a trabajar, cambiemos esa imagen que se dice una cosa, luego se dice otra, y al final, vuelvo a decir, parecemos un país de mentirosos.

Zacarías Ortíz

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Ayopaya

Quisiera hacer una pregunta al representante del SERNAP. El indicó que todo está concertado aquí en Bolivia. Yo soy ejecutivo de la provincia Ayopaya

y por ejemplo con el Parque Nacional Tunari no estamos de acuerdo, nuestros compañeros no están de acuerdo, y nosotros como dirigentes tenemos que hacer respetar la decisión de nuestras bases. En el artículo séptimo de la Ley del Parque Nacional Tunari indica claramente que esta prohibido la crianza de animales, de hacer siembras, además en esta ley no toma en cuenta a los campesinos. La otra cosa, en Altamachi sin consultarnos han puesto zonas militares, con eso no estamos de acuerdo. Por qué no nos consultan? Deben ser honestos, deberíamos debatir en algún ampliado o seminario para acordar. Pero parece que no nos entienden, por eso nos imponen desde arriba. Creo que en una mayoría de las áreas protegidas los compañeros campesinos no estamos de acuerdo, porque hay una imposición de arriba, y nunca nos han consultado, hay que ser claros, tampoco respetaremos ningún convenio, no respetaremos.

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Primero disculpen si lo que presente les ha parecido una taza de leche. Creo que en ningún momento dije que la gestión de las áreas protegidas es una taza de leche, al contrario es un tema muy conflictivo. Entonces mucha gente, como el compañero Zacarias, nos plantean cuestionamientos a las actividades que realizamos, casi siempre los escuchamos y en la medida de la validez consideramos esos cuestionamientos para cambiar nuestras acciones y actitudes. Por otro lado, el Sistema Nacional de Areas Protegidas no es perfecto, en verdad es un instrumento en creación. Comente claramente que por ejemplo los comités de gestión en algunos casos tenemos que reconfigurar, porque se tiene muchos problemas y dificultades para implementar una buena gestión del área protegida. El tema de representatividad, de legitimidad y de los actores que participan en los comités de gestión preocupa mucho al SERNAP. En muchos casos también hay conflictos en varios otros temas, como el acceso y manejo de recursos, para solucionar eso estamos tratando de establecer normas. Así que les pido disculpas nuevamente si ustedes han entendido que las áreas protegidas son una taza de leche, eso no es así, nosotros hacemos gestión, y también es importante destacar que estamos abiertos para el diálogo y para recoger las inquietudes de la gente local, en la mayor cantidad de casos que nos han convocado al diálogo hemos aceptado, y por eso es que de alguna forma el Sistema Nacional de Areas Protegidas todavía se mantiene con fuerza a nivel del país.

El tema de la ley de áreas protegidas hay que aclararlo muy bien. El 2002 hemos empezado un proceso de elaboración de la ley de áreas protegidas donde han participado representantes de la CSUTCB, de la CIDOB, han participado representantes de diferentes organizaciones, nosotros tenemos las actas de diferentes reuniones y talleres que realizamos. Sin embargo, no olviden que entre el año 2002 y 2003 hubo

una transición de gobierno, razón por la cual ese proceso lamentablemente no ha concluido y no se logro concertar el proyecto de ley. Después de la transición de gobierno, la comisión de medio ambiente del congreso nacional ha retomado nuevamente el proyecto de ley de áreas protegidas, pero desde ese momento ellos son los que han liderizado la elaboración de esa norma, nuestros documentos han servido solo como base de referencia, sin embargo a la fecha otra vez el tema está parado. Al SERNAP le interesa discutir este proyecto de ley con todos los actores sociales, de ninguna manera nuestro interés es aprobar una ley sin consenso, mucho menos generar conflictos y desconocer la percepción de los diferentes actores sociales.

Otro tema que es necesarios aclarar es que en Bolivia la creación de áreas protegidas data desde los años 30, por lo que no es un tema reciente. En muchos casos no se ha consultado a las comunidades ni técnicos para crear áreas protegidas; como anécdota cuentan algunos que un senador, estaba sobrevolando una determinada zona y decía que bonito que ese sitio, lo declararemos parque, haremos una ley, y así se crearon los parques. Sin embargo, desde el año 1939 paulatinamente han ido tomando cuerpo las normas y el Sistema de Areas Protegidas. El Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco y el Parque Nacional Madidi son las dos últimas áreas creadas de interés nacional. Estas dos tienen actas de consultas con las comunidades, se tiene documentos en los que se ha concertado con los actores locales de esas regiones sobre la creación del área protegida. Entonces paulatinamente ha ido madurando la forma de creación, visión y el planteamiento de lo que son las áreas protegidas. Asimismo hubo un cambio desde la visión simplemente de un sitio bonito hasta la valoración biológica de sus elementos y su importancia de conservarlos. Todo este proceso lleva muchos años, y estamos de acuerdo que posiblemente muchos actores no han sido considerados en el mismo. Actualmente eso cambio, el SERNAP esta dispuesto a escuchar a todos los actores no solo respecto a sus cuestionamientos, sino también escuchar lo que piensan y cómo podemos trabajar en la gestión de áreas protegidas de una manera más concertada y participativa.

Un aspecto que quiero subrayar también, es el hecho de que todos los actores sociales deben asumir responsabilidad al momento de plantear. En el caso de Sajama el SERNAP acepto que las comunidades sean parte de la co-administración, ello sin embargo, significa asumir responsabilidad, estar organizados, contar con personería jurídica, porque ser parte de una co-administración significa que deben participar en muchos aspectos incluso de carácter técnico. Finalmente en el caso de Cotacajes Altamachi quiero aclarar que esto fue una propuesta de carácter departamental en el que el SERNAP solo ha prestado apoyo técnico para realizar los estudios de declaración de área protegida. Aunque actualmente hubo un cambio en este sentido porque el nuevo planteamiento es que sea un área protegida de carácter nacional Uno de los criterios que se utiliza para la creación de una nueva área protegida es tener la aceptación de los actores locales y haberse socializado

en todas las instancias respectivas. Cotacajes Altamachi actualmente es solo una propuesta que debe concertar la Prefectura del Departamento de Cochabamba, la responsabilidad es de la Prefectura para socializar con ustedes.

Holger Utermöhlen

CLAS-UMSS

Una pregunta muy simple. Cual es la posición del SERNAP referente al Parque Nacional Tunari y a los límites de la misma?

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

En el caso del Parque Nacional Tunari es plena responsabilidad de la Prefectura de Cochabamba, yo en este momento no puedo dar una palabra oficial sin conocer en detalle la situación en la que se encuentra. Además desconozco cuales han sido las discusiones a nivel del comité de gestión.

Holger Utermöhlen

CLAS-UMSS

Bueno yo soy responsable de las propuestas que se elaboró hace dos años atrás, por eso estoy preguntando. El problema es que no hay una posición oficial del SERNAP, lo que pregunto es su aceptación aunque sea a nivel departamental, eso nos perjudica.

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

No se que se ha discutido en la última reunión de comité de gestión sobre el tema, eso para nosotros es un elemento importante, si hay un planteamiento de modificación de categoría o una modificación en el plan de manejo o en la zonificación, el comité de gestión debería plantear una propuesta en base a lo que ustedes han propuesto y el director del área protegida debe plantearlo a nivel de unidad central, si no hay ese camino nosotros difícilmente podemos tomar una decisión, porque no estaríamos considerando los criterios de los actores locales. El comité de gestión tiene precisamente ese rol, para eso se ha creado.

Holger Utermöhlen

CLAS-UMSS

Es muy distinto responder que es un parque departamental o nacional, todo esto se refleja en la propuesta. A caso no se puede esperar una respuesta del gobierno directamente a una propuesta de los campesinos, cuando el SERNAP debería escuchar primero a nosotros porque nosotros vivimos en el parque, entonces por qué no tiene validez nuestras propuestas?

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Bueno es un tema que podemos discutir a mayor detalle, personalmente no puedo dar una palabra oficial en este momento.

Angel Condori Coronel

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Tapacarí

Primeramente un saludo para todos los hermanos que nos visitan de otros países. Creo que estamos hablando un solo idioma, no? Antes quiero presentarme, mi nombre es Angel Condori Coronel y soy ejecutivo de la provincia Tapacarí. Hasta el momento creo que no se ha analizado un aspecto importante: ¿de donde y por qué vienen las áreas protegidas? ¿debe haber algún motivo no creen? ¿de donde nace esa idea? Quiero pedir sobre todo a los profesionales que aclaren esto, quizás por primera vez estamos reunidos aquí. Como dirigente yo me imagino según hablan ustedes. Han mencionado que hay muchos países que son poderosos, que tienen grandes industrias y están contaminando el medio ambiente, no es cierto? Entonces estos países como EE UU quieren imponer a los países pobres ha mantener los pulmones del mundo, ¿o no? Eso creo que es la idea que viene, ¿no es cierto?

Nosotros como latinoamericanos o mejor como Sud americanos, debemos prepararnos para plantear ante estos grandes contaminadores y destructores de la naturaleza. Primeramente que ellos dejen de contaminar al mundo entero, eso debemos plantear todos unidos. El segundo punto, es que dejen de hacer desaparecer a los animalitos, como hemos visto en la pantalla, los matan para exportarlos, además fumigan con químicos y eso mata a los animales. En mi pueblo hemos comprobado, por ejemplo: yo fumigo con un químico al trigo, viene una vizcacha y se lo come, luego se enferma y muere, entonces quien es el culpable? Eso hay que analizar también, no es cierto? No estamos en contra

de mantener los bosques, incluso queremos plantar más bosques, pero aquí hay una falla. El representante del SERNAP dice que no hay consenso entre las organizaciones, además dice no hay consenso para elaborar las leyes. Nosotros no podemos aceptar los parques y todo eso, si las comunidades no van a administrar. No tenemos confianza en el gobierno ni en la prefectura, porque por ejemplo aparece una área protegida encima se mete una empresa minera o petrolera, por eso ya no confiamos. Entonces de ahora en adelante debemos plantear que las comunidades deben administrar y recibir los beneficios por cuidar y proteger los parques. Nosotros sabemos que es necesario conservar, porque ahora por ejemplo en mi misma comunidad había quewiña y muchas clases de plantas, pero cortando, cortando se ha terminado y no hemos plantado nuevamente. Para ello necesitamos ayuda y asesoramiento, sin necesidad que haya parques nosotros podemos cuidar la naturaleza. Nada más de mi parte, les felicito a los hermanos que han venido de otros países. Tal vez aquí podemos consensuar mucho más entre todos, pero antes los bolivianos como anfitriones debíamos acordar para plantear una sola idea..., gracias.

Emilio Espinoza

Dirigente de la Central Campesina Provincial de Quillacollo

Los compañeros dirigentes que me han antecedido ya han hecho una importante evaluación. También hemos escuchado las propuestas del representante del SERNAP, tal vez esas propuestas podría pasarnos para que nosotros conozcamos mucho más sus planteamientos. Por qué razón? Claramente un compañero mencionó que un artículo de la Ley 1262 del Parque Nacional Tunari aprobado en el gobierno de Jaime Paz Zamora, indica que están “terminantemente prohibido” la extracción de material de construcción, así mismo la crianza de ganado; por otro lado en ningún punto se reconoce a las comunidades, pero si se reconoce a la universidad, al ejército, a la prefectura y a las alcaldías en el comité de gestión.

Entonces en vano decimos que hay consenso. El comité de gestión por ejemplo está compuesto por los mismos del gobierno. Muchas veces nosotros mismos los reconocemos a esas personas, incluso hay algunas personas que a nombre de los campesinos se hacen elegir y trabajan para los partidos políticos. Creo que todo esto también deberíamos concertar entre nosotros, y luego recién reunirnos con representantes de otros países.

En la ley se debe incluir a las organizaciones sociales y a la sociedad civil, los representantes del gobierno también deberían exigir a que se respete a las comunidades. La Ley del Parque Nacional Tunari se debe cambiar, ya se tenía una propuesta para cambiar y los del gobierno lo han puesto a un lado. Había también

otras propuestas como la del diputado Roberto Fernández y Asterio Camacho, quienes decían que estaba concertado con la sociedad civil, pero su intención de estos diputados era hacer las urbanizaciones en las cuencas del Parque Tunari. Como ven muchos parlamentarios se aprovechan, por eso nosotros tenemos derecho a pedir la administración del parque. Nosotros sabemos que llega mucha plata, y con esa plata se pagan los directores y demás. En el caso de Cotacajes Altamachi dicen que ya se está aprobando, pero mañana vamos hacer conocer nuestros planteamientos que no estamos de acuerdo ni con el Parque Nacional Tunari ni con el Parque Cotacajes Altamachi, tenemos todos los documentos que tiene el gobierno.

Es verdad como dijo un compañero, nosotros no estamos en contra de la forestación, al contrario seguimos plantando árboles. En el municipio de Tiquipaya con una institución hemos plantado más de cuarenta mil plantas, pero nosotros mismos vamos a administrar. También estamos de acuerdo en cuidar la naturaleza, los animales, las plantas, así también recuperar nuestra cultura que se esta perdiendo. Pero no estamos de acuerdo con el actual comité de gestión del Parque Tunari, podríamos tal vez hacer una propuesta con ayuda de los profesionales para manejar nosotros mismos, y no vamos a reconocer la Ley 1262 tal como esta, eso ya determinamos con las cinco provincias afectadas.

Valerio Cartagena

Presidente del Consejo del Municipio de Sipe Sipe

Mi nombre es Valerio Cartagena ex dirigente de la provincia Quillacollo, y actualmente soy presidente del Consejo Municipal de Sipe Sipe. Agradecer y felicitar también a los hermanos que nos visitan de otros países. Lo que quiero decirle al último expositor es que en el Municipio de Sipe Sipe no conocemos a ningún comité de gestión del parque Tunari, tampoco conocemos a los guarda bosques, quienes son esos guarda bosques? Por qué no hacen conocer los nombres? Muchas comunidades están afectadas por el parque Tunari, y a mi me sorprende que digan que el comité de gestión esta consensuado. Tal vez sin avisarnos han realizado reuniones. Los dirigentes solo somos portavoces de las bases, no podemos decir que todo esta aprobado y consensuado. Como decían hace rato, la ley del parque Tunari no está aprobada por nosotros, no necesitamos de esa ley. En nuestras comunidades sabemos administrar como nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres; en mi comunidad hay mas de 30 hectáreas de pinos y eucaliptos que con nuestras manos hemos plantado incluso siendo niños. Sabemos administrar nuestras reservas naturales y todo eso, y eso no nos pueden enseñar gente de afuera, más bien les podemos enseñar. Seguramente seguiremos debatiendo el día de mañana el asunto del Parque Nacional Tunari.

Aquino Heredia

Ejecutivo de la Subcentral Campesina del Parque Tunari

Primeramente quiero presentarme. Soy secretario general de la Subcentral Parque Tunari y agradecer a todos los visitantes de otros países que están junto a nosotros. Lo único que quiero tocar es sobre el Parque Tunari, en la realidad quiero aclarar que todo este parque es propiedad privada de los compañeros campesinos, por eso no estamos de acuerdo que siga manejando la Prefectura, o sea en este caso el Estado. A los campesinos no los toman en cuenta y es por eso que nos sentimos molestos. Por otro lado, las plantaciones que hay en el parque fueron plantados por nosotros mismos, o sea no se puede llamar Parque Nacional porque nosotros ahí trabajamos no solo plantamos árboles que no nos dejan cortar, sino que tenemos cultivos y animales, tal vez se tiene que cambiar de categoría o algo así, sobre todo para conformidad de los compañeros campesinos. Pediría que el representante del SERNAP tome en cuenta nuestros reclamos, y el rechazo al parque es de las 5 provincias afectadas, nada más.

Comunario de Sewencas

El señor del SERNAP dijo que para crear los dos últimos parques en Bolivia hubo total consenso con las comunidades. Quiero referirme al caso del Kaa Iya Gran Chaco donde dice que hubo consenso. Creo que ya es una estrategia tomar a dos originarios y tenerlos bien comidos y bien vestidos, y con eso dicen que hubo consenso. Esto es lo que paso en el parque Noel Kempff Mercado. En el caso de Kaa Iya seguramente tomaron a un ganadero y listo, mientras los nativos del Isoño donde están? Por otro lado, dentro de este parque viven ganaderos que tienen miles de hectáreas; hace unos quince días por la radio hubo una noticia que un capitán indígena o algo así, ha vendido quince mil hectáreas en el Kaa Iya, usted sabe de eso?.

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Bolivia

En el caso del parque Kaa Iya quisiera que eso que acaba de manifestar lo comunique al dirigente de la Central Indígena Kaa Iya (CAK) que es la co-administradora del área protegida y no es un ganadero como usted dice. Entonces, le agradecería, por favor, que no mal informe a la gente respecto a cómo se trabaja en el parque Kaa Iya. La Central Indígena esta reconocida por las entidades indígenas de la región y es co-administradora del Parque Kaa Iya del Gran Chaco, no son

dos personas sino que es una organización grande y es muy importante lo que hace en la administración del parque.

En el caso del Madidi y la publicación que usted me mostró, el problema aquí es un camino de acceso bajo la lógica de una propuesta de desarrollo para el norte paceño y no es tema de dinero. Hay diferentes visiones en cuanto al diseño, puesto que el SERNAP planteó que el trazo de ese camino atraviesa una zona núcleo de biodiversidad, mientras que la Prefectura de La Paz y los comunarios insisten en este trazo porque quieren abaratar costos en la construcción del camino. El SERNAP plantea que se realice un trazo compatible con los objetivos de conservación que nosotros tenemos, obviamente sus costos pueden duplicarse o triplicarse, ese es el problema en el caso Madidi. Precisamente el director del Parque Madidi no ha podido estar en este seminario por esta razón, que tuvo que priorizar este problema que data de más de un año.

Stephan Rist

CDMA, Universidad de Bernan-Suiza

Más que una pregunta, quiero compartir lo que estoy aprendiendo de estas discusiones. Nosotros los técnicos somos de alguna manera agentes externos como el gobierno, las ONGs y todo eso, pero al otro lado tenemos a la organización campesina, entonces para mí está muy claro que no se trata de seguir discutiendo si hubo o no participación, puesto que lo que deberíamos tratar de buscar es nuevas formas para goberarnos como sociedad pluricultural, y eso está ligado al título del seminario. Si no vemos en esa dirección y en un proyecto de largo alcance donde tenemos que repensar no solamente áreas protegidas sino todo el sistema de gobernanza, no llegaremos muy lejos. Como dice el compañero de Tapacarí, hay que preguntarse también ¿por qué los países ricos destinan tanto dinero para que se hagan cosas en nombre de la protección de la biodiversidad? Ya que haciendo un balance de esta ayuda nos traen más conflictos que beneficios. Entonces en este sentido creo que tal vez podríamos estar pensando también en las discusiones de mañana.

Carmen Miranda

Representante de la UICN, Bolivia

Quiero comentar lo siguiente. Escuchando la última exposición de René, parecería que hay una conspiración a nivel mundial en el sentido que las áreas protegidas estarían sirviendo de pantalla para los intereses transnacionales, es posible que haya eso. Pero en el caso específico de Bolivia hubo un largo proceso para llegar a implementar la gestión en las áreas protegidas, y todo esto viene de

un deseo sincero y de buscar alternativas para frenar los procesos de deterioro de la biodiversidad.

Entonces estas interpretaciones que se hace de una relación eco-petro-estrategias, a mi parecer son muy peligrosas porque estarían poniendo en tela de juicio toda la necesidad de la gestión de las áreas protegidas. Tal vez en alguna esfera haya una intención en este sentido, ante todo donde se definen las prioridades políticas y económicas de un país. Frente a esto creo que es importante estar conscientes, ante todo como bolivianos, que hay una realidad que muestra cada vez más un deterioro de nuestros recursos naturales y biodiversidad, puesto que esta es la base que permite la sobre vivencia de la sociedad boliviana. En ese marco, es importante más bien la búsqueda de alternativas y soluciones para impulsar el desarrollo sustentable. Es verdad que existen movimientos mundiales que están digitando la economía y otros procesos, pero por otro lado la realidad esta frente a nosotros.

René Orellana
CENDA, Bolivia

Es evidente que hay financiamientos directos de empresas petroleras a grandes agencias conservacionistas mundiales. Estas agencias reciben fondos y las canalizan en agencias nacionales, no es una exageración esto es una cosa real. Tampoco es difícil de creer que hay grandes consorcios que tienen múltiples inversiones, entre ellas petroleras y bio-prospecciones, que tienen el interés de realizar sus actividades petroleras y bio-prospectoras dentro de áreas protegidas. No digamos que el SERNAP u otra entidad estatal les facilita, no quisiera que se interprete ni se lea mi afirmación en este sentido. Pero si existen grandes consorcios que tienen brazos nacionales, tengo la sospecha suficientemente fundada de que FAN es parte de este grupo de instituciones establecida para fines de aprovechamiento de recursos de biodiversidad, para bio-prospección y para facilitar silenciosamente a los operadores petroleros, esto si debe preocupar. Es cierto que el Estado, por ejemplo el SERNAP, tiene graves limitaciones para implementar acciones restrictivas sobre las operaciones petroleras. Eso es cierto porque por ejemplo la superintendencia de hidrocarburos hará o dirá una cosa, YPFB hará o dirá otra cosa, lo que realmente pasa en nuestro país. Esto tal vez es una disculpa para el SERNAP, pero entre comillas. Pero la llamada de atención es más para las instituciones privadas que se dicen conservacionistas y que al menos debería ser consecuentes con ese rol, sobre todo nos deben preocupar aquellas instituciones privadas que están vinculadas a estos poderosos consorcios y que reciben financiamiento, obviamente no pueden ser juez y parte, entonces terminan haciendo acuerdos extraños con los grandes consorcios petroleros. Hay que ver también de

otro lado, como podemos negar que hay consorcios que invierten en todo, pondremos el ejemplo de la ENROLL que invierte en gaseoductos, pozos petroleros, agua potable, energía, etc., y que no va ser extraño que estas tengan inversiones en biotecnología. Cuidado que en este proceso de generar administración privada de las áreas protegidas, las ONGs adjudicatarias terminen trabajando para fines transnacionales como las prospecciones bio-petroleras. Aunque todo esto esta todavía abierto a la discusión.

Jamil Alca

Investigador, Perú

Bueno mi primera pregunta era para Gonzalo Mérida. El nos presentó una planificación estratégica para la conservación de la biodiversidad en Bolivia. Tal vez hay que tener cuidado, porque las planificaciones estratégicas casi siempre terminan en un listado de necesidades y expectativas que posiblemente las mismas poblaciones locales expresan, pero de esa manera no se solucionan los problemas. Tal vez hay que ver puntos más profundos como estrategias políticas. En el caso del Parque Sajama se habló del ecoturismo que se practica en esta área protegida, si es que se prevé el impacto de estas actividades sobre la biodiversidad, pero también sobre las mismas poblaciones. A los amigos del Parque Nacional Tunari, me llamó la atención de concebir los conflictos como espacios estáticos, cuando los conflictos son muy dinámicos y en muchos casos se soluciona un conflicto y se genera otro. Otro tema que me preocupa es la demasiada sectorialización como ocurre en el Perú, o lo que es la contraposición de las normas que casi siempre pesan las leyes que no están dirigidas a la protección de las áreas protegidas y la biodiversidad. Finalmente a Miguel quisiera preguntarle como encarar y plantear propuestas o estrategias políticas, sobre todo en la perspectiva de mejorar la gestión de las áreas protegidas, porque de nada sirve que sigamos discutiendo sino vamos ha llegar a algo concreto.

Franz Guzmán

Director del Parque Nacional Sajama

Bueno hermano peruano, quiero hacerte conocer que las actividades etnoecoturísticas en el Parque Sajama provienen de un proceso de planificación en relación a una estrategia de turismo con el que cuenta el parque. En el caso de las construcciones turísticas se cuenta con una ficha ambiental con la finalidad de prever los impactos ambientales. Los estudios de carga turística señalan la posibilidad de contar con un número de turistas que alcance a veinte mil, pero

actualmente solo tenemos un número de tres mil quinientos turistas considerando que disponemos de toda la capacidad y la infraestructura para recibir mucho más turistas. De todos modos no podemos decir que no haya impactos negativos del turismo, pero estamos siempre trabajando para minimizar estos.

José René Alcoba

Representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Unicamente para complementar sobre los aspectos socio-culturales. Se tiene un sistema de monitoreo para cuantificar los impactos en este sentido. Hace unos 2 meses atrás se ha realizado un relevamiento en cada una de las familias que componen las empresas comunales turísticas.

Debra Pereira

Exconsultora del Parque Nacional Tunari

Ningún conflicto es estático, basta que sea conflicto es dinámico. Hay que considerar que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Cuando tenemos un conflicto nos da un espacio de trabajo, de identificación, de negociación, donde además se encuentran intereses. Aunque se pueda encontrar soluciones, pero esas soluciones te pueden generar nuevos conflictos, incluso en el caso de los parques se pueden encontrar conflictos ambientales pero que a la vez son conflictos sociales, y esto no puede ser estático sino que a medida que se solucionan algunos conflictos aparecen otros. Pero siempre va existir una construcción a partir de las soluciones intermedias que se dan y que nos llevan a solucionar un objetivo más global y central.

René Orellana

CENDA, Bolivia

Creo que hay varias normas que se deben cruzar para ver como entienden la gestión de recursos de biodiversidad. Uno es el reglamento general de áreas protegidas, que a mi modo de ver tiene graves errores entre ellas una lectura administrativa de la gestión de las áreas protegidas. Reitero la realidad social ha rebasado la camisa de fuerza de las áreas protegidas y ha dado lecciones riquísimas en el caso de Sajama por ejemplo. Pero la visión en este reglamento de áreas protegidas es administrativo, gerencial y policiaco de las áreas protegidas. Una especie de puesto militar donde hay un comandante, etc. Tiene en teoría una

administración compartida con las comunidades de las áreas protegidas, pero con requisitos y procedimientos que en la práctica es difícil cumplir, incluso con una cota de poder del Estado para romper un contrato de co-administración, etc. Entonces hay un error muy grave en la visión de la gestión de áreas protegidas que tiene el reglamento de áreas protegidas.

Tenemos otra norma que lo mencioné esta mañana, y que lo pondría por encima de la Estrategia de Biodiversidad. Este es el Reglamento de Concesiones de Uso de Biodiversidad que encierra un modelo de gestión. Este reglamento por ejemplo permite crear áreas protegidas privadas a través de la figura de concesiones de uso de biodiversidad por un período de 40 años y que se otorga a operadores privados como empresas hoteleras, empresas ecoturísticas, bio-prospectores, conservacionistas, etc., territorios georeferenciados con la posibilidad de usufructuar toda la biomasa, los recursos paisajísticos, recursos hídricos, y en el caso de investigadores, bio-prospectores y conservacionistas, usufructuar los recursos genéticos por 40 años, casi toda una vida. Esta norma tiene graves contradicciones con la decisión 391 de acceso a los recursos genéticos. Por eso creo que todas estas normas se deben poner sobre la mesa y compatibilizarlos y pensar en un modelo de gestión básicamente con participación social y comunal.

Miguel Angel Crespo

PROBIOMA, Santa Cruz-Bolivia

Si el tema de los recursos naturales lo circunscribimos a la historia de Bolivia desde su creación, incluso antes, es un aspecto de índole político, es decir que la historia de la explotación de nuestros recursos ha esta signada en tanto y cuando que ha servido para la acumulación de capitales financieros que luego se han ido afuera. Pero los Recursos Naturales son patrimonio del Estado Boliviano y el Estado no solo es el ejecutivo sino somos todas las organizaciones de la sociedad civil como son las comunidades indígenas, etc. Si nos basamos en esa premisa, vemos que en este proceso histórico de explotación de los Recursos Naturales los bolivianos no nos hemos beneficiado. Tenemos una deuda externa de más cinco mil millones, la extrema pobreza avanza cada vez más, pero que es lo que nos queda después de pasar por tipos de explotación de nuestros Recursos Naturales. Nos queda 2 recursos vitales, que son: la biodiversidad y el gas natural. En el caso de la biodiversidad es usado y conservado, evidentemente, por las poblaciones locales. Mostrábamos su importancia de uso, sobre todo que porcentaje de la población no solo nacional sino mundial que usa recursos de biodiversidad. Entonces quienes tienen el derecho de gestionar, de conservar y usar sosteniblemente estos recursos, son las poblaciones locales, o sea esto es una propuesta política. En la medida que las poblaciones locales gestionen soberanamente sus recursos con un Estado que

sea capaz de fomentar, fiscalizar, etc., vamos a lograr un beneficio para el país, y eso es una propuesta política. En ese marco obviamente, tenemos que cambiar los ejes de desarrollo que tradicionalmente se han llevado adelante en Bolivia. Pero todavía se piensa que los hidrocarburos van a sacar adelante a Bolivia; para dar algunos datos la agroindustria y el turismo el año pasado ha generado 559 millones de dólares, mientras que los hidrocarburos solo 430 millones de dólares. Que nos está indicando esto? Obviamente que hay que cambiar los modelos y los ejes de desarrollo tradicionales como es la explotación de recursos no renovables (hidrocarburos por ejemplo), y esto es una cuestión política. No es posible que los últimos recursos que nos quedan como bolivianos no se aprovechen adecuadamente para beneficio de todo el país, y no los perdamos como otros recursos en el pasado.

Angel Condori Coronel

Ejecutivo de Central Campesina Provincial de Tapacarí

Creo que es bueno debatir entre todos, con profesionales, compañeros campesinos y otros representantes de la sociedad civil. Quisiera llamar a la reflexión en el sentido de que antes de la creación de un área protegida se debe hacer un diagnóstico sobre todo del sector campesino. Por ejemplo nuestros padres nos han dejado como herencia algunas tierras que recibieron hace 50 años con la reforma agraria, pero hasta ahora ya nos hemos dividido los hijos, incluso los nietos, entonces esas tierras se han convertido en surcofundio. El director del Parque Tunari indicaba que todo está bien y que el comité de gestión está funcionando. Creo que en todos los parques los campesinos necesitan más tierras, pero con estas áreas protegidas más bien se les quiere quitar. Muchos compañeros campesinos incluso ya no se pueden mantener sembrando en sus parcelas. ¿Qué solución hay para esto? Por ejemplo donde se va a reponer las tierras que se pretende quitar en el Parque Tunari? Espero una respuesta.

Por otro lado veo que los profesionales no están actuando correctamente. Desde 1825 pasan 178 años, durante todo este tiempo en Bolivia nos han gobernado profesionales, pero hay que preguntarse estos profesionales a donde nos han conducido? Creo que a un abismo. Los profesionales lo primero que deberían hacer es valorar a sus pueblos y a los lugares donde han nacido; tal vez ha habido mucha confianza en los profesionales, pero a donde nos han llevado? Únicamente a mayor pobreza. Estos profesionales además han permitido que las transnacionales saqueen nuestros recursos naturales, es así de claro. Ahora pasa igual, para que entren las transnacionales libremente están peleando por crear más áreas protegidas.

Como podemos cambiar en Bolivia y Sur América? Creo que debemos practicar la planificación participativa. Los bolivianos no estamos en contra de

los parques, pero tenemos que discutir previamente entre todos. Por ejemplo eso pensamos que tenemos que hacer en la asamblea constituyente; aquí hay que trazar entre todos la suerte de Bolivia y también de las áreas protegidas. En el caso de las universidades, como aquí están presentes varios, deberían ocuparse de educar a los alumnos correctamente y con la verdad, y también deberían enseñar la realidad de Bolivia, hacer conocer como es el área rural y no de otros lados. Si así hacemos las cosas seguro nuestra situación que va a cambiar, tal vez ya no necesitemos de ayuda de otros países. Ustedes saben que las ayudas de afuera vienen con condiciones.

Entonces quiero decir finalmente, que debemos unirnos entre campesinos y profesionales, ambos tenemos conocimientos, los campesinos sabemos más en la práctica y los profesionales más en la teoría, pero los papeles y la teoría todo aguanta... No seguiremos siendo servidores de los países ricos, trabajemos juntos para nosotros mismos.

Humberto Mariscal

Director del Parque Nacional Tunari

Un pequeño comentario en relación a la propiedad de las tierras en el Parque Tunari. Obviamente que nadie va hacer el cambio de uso de suelo, eso queda ahí. Tal vez algunas personas están interesados en ello, pero en la administración del parque no se tiene esa idea, más al contrario dentro el plan de manejo que se pretende realizar creemos que debe entrar un proyecto de saneamiento de tierras en coordinación con el INRA. Esa es la propuesta que viene trabajando la administración del parque.

Emilio Espinoza

Dirigente de la Central Campesina Provincial de Quillacollo

Quiero hacer una pregunta al director del Parque Tunari. Quienes provocan los incendios? Los campesinos o la gente de la ciudad. Por otra parte, hay tantos guarda parques que no controlan o que hacen estos guarda parques? No funciona ni eso. Por eso el movimiento campesino rechaza al Parque Tunari porque atenta contra el derecho propietario campesino, ningún artículo reconoce a los campesinos. También quiero preguntar, que pasa con los asentamientos? Ha hecho mención solo a 3 municipios, que pasa con los otros municipios? Es cierto que hay una gran cantidad de comunidades afectadas por el Parque Tunari en 5 provincias, más de 200 comunidades. Parece que los funcionarios de la administración del parque no conocen ni cuantas comunidades existen y como viven, y también indicaban

que la Ley 1262 reconoce el derecho propietario, eso no es verdad, en ningún artículo dice eso. Los compañeros campesinos tenemos un título ejecutorial que no es sustituible según la misma Constitución Política del Estado. Esto también va para el representante del SERNAP. En ninguna comunidad del parque hay reservas fiscales, todo tiene dueño y tienen títulos cada compañero.

Finalmente indican los expositores de las administración del Parque Tunari que se están solucionando los conflictos, en parte es verdad, pero en parte no porque ahora hay más conflictos. Nosotros solo reconocemos la autodeterminación de las organizaciones campesinas. Por quienes esta conformado el comité de gestión? Ahí esta por ejemplo un consejero de la Provincia Quillacollo que no conoce las comunidades afectados. Como movimiento campesino hemos presentado una propuesta, pero no ha servido para nada porque lo han puesto a un lado, y luego recién la prefectura quiere buscar nuevas metodologías de trabajo. Espero que den algunas respuestas a todo esto.

Humberto Mariscal

Director del Parque Nacional Tunari

En forma muy escueta. Es interesante lo que indica el compañero Emilio Espinoza. Con relación a los incendios, indicaba que el 99% es provocado. Prácticamente esto no es fácil de determinar, porque por ejemplo en el último año los incendios se han polarizado, a diferencia que en anteriores años era concentrado en la provincia Cercado. En una ocasión se ha determinado a la persona que ha provocado, y era una anciana de 80 años que quería hacer un barbecho y no pudo controlar, que se puede hacer a una anciana de 80 años, pregunto?

En relación al derecho propietario. El año pasado salió una resolución prefectural, sino me equivoco es la 112, donde indica que se respeta el derecho propietario con usos, costumbres y servidumbres, y esta resolución prefectural ha sido publicada. Con relación a la nueva Ley, muy gentilmente el compañero Emilio y todos los dirigentes invitaron al Director de Recursos Naturales de la Prefectura de Cochabamba a la provincia Quillacollo y entregaron un proyecto para una nueva ley con ideas interesantes. Desde entonces entramos en una dinámica de trabajo en vista que había esa propuesta, y también había otras propuestas como el presentado por el honorable Carlos Quiroga Blanco y Roberto Fernández. De esta manera se realizó una serie de reuniones y talleres con el objetivo de poder consensuar estas ideas. Entonces antes de revisar las propuestas, lo que se planteó fue definir primero que se quiere o que se busca con el Parque Nacional Tunari. Esto se avanzo en un primer taller, pero posteriormente en un segundo taller llego el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba, Feliciano Vegamonte, y dijo no estamos de acuerdo, más lo que queremos es presentar una

nueva propuesta consensuada con todo el movimiento campesino. Esto se aceptó. Entonces Feliciano Vegamonte indicó que esta nueva propuesta sería presentada hasta diciembre del 2003. Hasta ahí se llegó.

Debra Pereira

Exconsultora del Parque Nacional Tunari

Creo que este taller nos puede dar luces. El tema de fondo en el caso de las áreas protegidas son dos: el manejo de las áreas protegidas y la gestión territorial. Estos dos temas están presentes en cualquier área protegida. Todo lo que expresan los compañeros campesinos son legítimos, porque a raíz de esto se van realizando las normas, en definitiva las normas dicen que se debe hacer y que no se debe hacer. Alguna vez se planteó al SERNAP que la lectura de las áreas protegidas deberíamos hacerlo en el mismo objetivo. Las áreas protegidas no son un castigo, creo que tienen su razón de ser ya sea en un contexto nacional, regional o mundial. De lo que se trata, es de repensar como las áreas protegidas pueden garantizar una gestión territorial con el objetivo de generar un bien colectivo, obviamente primero para los actores locales pero también es necesario ver más allá y ver al conjunto de los actores. Esta creo que debe ser la perspectiva de la discusión, para finalmente ver si las áreas protegidas son pertinentes o no, personalmente para mí son pertinentes. Desde mi punto de vista no es incompatible la gestión territorial con las áreas protegidas. Entonces hay que discutir por ejemplo con el SERNAP la visión que tienen de las áreas protegidas como potenciales de recursos naturales, en cambio la gestión territorial ve el manejo del patrimonio natural tal como conciben los compañeros campesinos. Esto es más importante que hacer solo cambios en la administración, hay que reconocer que las organizaciones campesinas sufren también un proceso de desestructuración, en algunos casos incluso ya es difícil determinar que se entiende por usos y costumbres. Todas las experiencias que ocurren en el Parque Tunari nos puede ayudar a reflexionar porque camino seguir. Es necesario conservar la biodiversidad pero en base a la gestión, que es diferente a lo que plantea la estrategia nacional de biodiversidad en el sentido de conservar pero con rentabilidad y priorización de algunos potenciales naturales.

En conclusión referente al Parque Tunari, todo esto se ha reflexionado por eso hay la necesidad de reconstruir los procesos de involucramiento con el derecho legítimo de la participación, creo que la participación es una conquista que se ha peleado mucho antes de la Ley de Participación Popular, y tenemos derecho a ejercer. En base a esta participación se debe buscar primero que queremos con el Parque Tunari? Que objetivo tiene que cumplir? Es decir para que se va hacer un área protegida, antes de entrar en discusiones de categorías y otros asuntos técnicos. Gracias.

René Orellana

CENDA, Cochabamba-Bolivia

Unicamente a modo de despedida. Creo que es necesario buscar puntos de coincidencia, lo que puede ser muy positivo. Un primer punto es encontrar puntos de coincidencia antes de definir un área protegida, que entendemos por conservación y explotación? Ya se han dado algunas líneas como la gestión territorial de las comunidades campesinas que tienen riquísimas experiencias de conservación y protección. En este sentido se debe repensar las áreas protegidas, se debe cambiar los modelos gerenciales de administración de las áreas protegidas, hay que hacer cambios en el reglamento de áreas protegidas porque es excluyente. Todos estos cambios deben hacerse en un contexto de amplia concertación con las comunidades y organizaciones campesinas e indígenas. Por esa vía también hay que dirigir la solución de áreas protegidas conflictivas como el Parque Tunari. Hay que reconocer que la Ley del Parque Tunari es muy peligrosa, porque en uno de sus artículos indica que se expropia las tierras y los recursos naturales, en otro artículo dice se prohíbe el pastoreo. Los que inventaron esa ley prácticamente vivían en otro planeta, puesto que esta área hay decenas de comunidades asentadas. Hay una voluntad para corregir todo esto, hay planteamientos, pero la solución general pasa por redireccionar, rehacer, rediseñar el modelo de áreas protegidas, y esto nos va a permitir encarar problemas graves como la presencia de operadores petroleros, mineros, y también permita cambiar la vieja lógica de ver a los campesinos como depredadores y que no priorice la privatización de las áreas protegidas, más bien promueva un proceso de conservación integral con participación de toda la sociedad civil.

Gonzalo Merida

Exconsultor para la Estrategia Nacional de Biodiversidad

Por la forma en que se ha construido la estrategia nacional de biodiversidad no me correspondería mucho hablar, puesto que es una estrategia apropiada por el Estado, en realidad fui invitado a este evento solo como un interlocutor que tuvo el proceso de diseño de la estrategia, mucho menos puedo atribuirme las ideas que están en la estrategia. Es una posición de Estado, es una posición que han discutido muchos grupos de diferentes sectores, de diferentes visiones. En el proceso se ha abierto a que diferentes visiones puedan construir la estrategia. Todo el contenido de la estrategia responde a lo que han expresado más de 1200 personas o instituciones que han participado en el proceso de diseño. Sobre la pregunta del plan de acción, efectivamente parece un listado de muchas sugerencias sobre lo que se debe hacer, pero tal vez más estructurados como proyectos.

En relación al financiamiento. Cuando hicimos el intento de convertir en dinero el plan de acción, encontramos que se requería alrededor de 60 millones de dólares para poner en marcha todo el plan. Sin embargo este no era el objetivo, puesto que las ideas de proyectos han sido generadas en procesos como este seminario, donde participaron campesinos, indígenas, el sector privado, los profesionales, etc., de aquí salieron las estrategias y los proyectos. De esta manera se ha generado el plan de acción con una serie de iniciativas que provinieron de la sociedad civil. En consecuencia estas ideas tienen que ser plasmadas por la misma sociedad civil, algunas de ellas incluso ya se han iniciado, aunque el gobierno quizá no ha generado todavía una dinámica muy fuerte. Por ejemplo el sector de la confederación de campesinos quieren que se pongan en marcha el proyecto de generación de capacidades en relación a la biodiversidad. Entonces en el plan de acción hay iniciativas de diferentes sectores que pueden ser instrumentalizados como estrategias de desarrollo desde las instituciones, desde los municipios. Por ejemplo el Municipio de Colomi ha tomado estas iniciativas para generar su propia estrategia de competitividad y conservación de la biodiversidad en su municipio.

En realidad la estrategia nacional de biodiversidad es un instrumento que puede servir para orientar la gestión de la biodiversidad a distintos niveles, y cualquier institución o miembro de la sociedad civil puede gestionar y apalancar los proyectos, porque esta se ha validado como una política que integra la gestión de la biodiversidad en nuestro país. Es eso la estrategia nacional de biodiversidad, un instrumento orientador. El objetivo no fue financiar todo lo que se planificó, sino los que se busco que sobre todo la sociedad civil se apropie del plan de acción y ponga en marcha la estrategia.



Presentación del Lic. Miguel A. Crespo: "Conflictos y Gestión Local en Áreas Protegidas: Los casos del Parque Amboró y Bosque Chiquitano"



Panel de discusión y debate Parte III: Marco Institucional, Estrategias y Experiencias de las Áreas Protegidas en Bolivia.

Parte IV

Investigación y acción en torno al Parque Nacional Tunari

Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y conservación de la naturaleza y la biodiversidad del Parque Nacional Tunari

Freddy Delgado¹

1. Antecedentes

Desde el año 2001, a raíz de la convocatoria internacional presentada por el Polo Nacional de Competencia en Investigación Norte-Sur (NCCR-NS), Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) concursó y se adjudicó un proyecto de investigación científica y un proyecto de acompañamiento al proceso de investigación científica, más conocidos como PAMS. A partir de septiembre 2002 AGRUCO está ejecutando el proyecto de investigación científica denominado: Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del Parque Tunari, departamento de Cochabamba. También ejecuta desde el 2003 un Proyecto (PAMS) denominado: “Capacitación en control social y gobernanza para la gestión sostenible de la biodiversidad en el Parque Tunari”.

El NCCR-NS es financiado por el Fondo Nacional Suizo para la investigación científica (FNSIC) y la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) con el objetivo de investigar “estrategias de mitigación de síndromes de la globalización” a nivel internacional en América del Sur, el Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Ginebra (IUED) monitorea el proyecto individual (IP8) que considera los “Modelos de gobernanza de biodiversidad desarrollo humano y medio ambiente, en el que se insertan los dos proyectos de antes mencionados.

1 Ingeniero Agrónomo con Doctorado en Agroecología y Desarrollo Sostenible del Instituto de Sociología y estudios campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba - España. Director ejecutivo de AGRUCO y Docente de la UMSS.

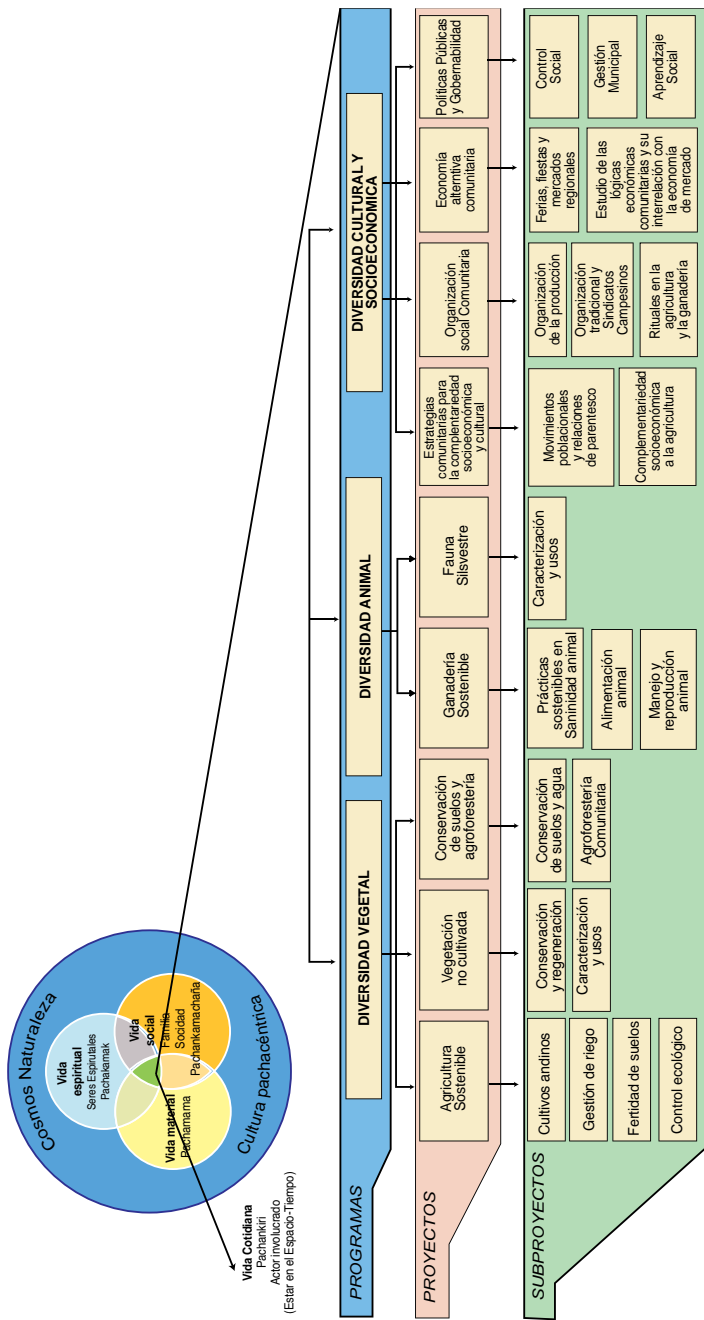
AGRUCO es un Centro de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) dedicado a la investigación, interacción social y apoyo a la formación universitaria que a partir de la revalorización del saber indígena y la agroecología propone alternativas para un desarrollo humano sostenible del área rural, considerando la relación campo-ciudad. Surgió a la vida institucional en 1985 en el marco de un convenio entre la Universidad Mayor de San Simón y la Cooperación Suiza para el Desarrollo.

Este serio esfuerzo de diálogo intercultural ha permitido por un lado, crear contenidos académicos para la educación superior universitaria tanto a nivel de pregrado como de postgrado y por otro, proponer a partir de programas y proyectos integrales comunitarios para la autogestión y el desarrollo sostenible (PICADS), alternativas para mejorar la calidad de vida de la población, considerando la interrelación de la vida espiritual, social y material que existe en los pueblos indígenas originarios de Bolivia y Latinoamérica.

La finalidad de AGRUCO es “Contribuir al desarrollo humano sostenible a partir de las experiencias en agroecología, y la revalorización de los saberes locales considerando los ámbitos socioculturales, económicos, políticos y ambientales”. El objetivo principal es “Apoyar los procesos de formación, investigación e interacción social, mediante la generación, validación y difusión de conceptos, metodologías, técnicas y estrategias, basadas en los saberes locales y la agroecología.” AGRUCO en su plan estratégico para el periodo 2002-2006 ha previsto la ejecución de tres ámbitos de acción: investigación, interacción social con comunidades y apoyo a la formación superior.

En tal sentido, se apoyan y ejecutan acciones pilotos de investigación participativa y desarrollo con organizaciones de base y municipios rurales, generando redes locales y regionales que permitan el intercambio de experiencias, su sistematización y difusión a través de diferentes tipos de publicaciones y medios de comunicación. El programa general de investigación-desarrollo que es el resultado de 15 años de experiencia, ha considerado tres programas: diversidad vegetal, diversidad animal y diversidad cultural y socioeconómica, en la que se insertan diferentes proyectos y subproyectos que se muestran en la gráfica 1.

El programa de investigación-desarrollo es el marco de las acciones programadas enfocadas hacia la formación tanto de estudiantes y docentes del sistema universitario boliviano, como de técnicos vinculados al desarrollo en Bolivia y Latinoamérica. La formación académica permite socializar los saberes y las necesidades de las comunidades originarias y elaborar contenidos generados en los procesos de investigación-desarrollo. El apoyo a la formación en el pregrado y la ejecución del postgrado a través de cursos de actualización y de la maestría en Agroecología, Cultura y Desarrollo Sostenible, son espacios y tiempos que acercan al estudiante universitario hacia la realidad rural del país y de Latinoamérica, permitiendo formar profesionales capaces de plantear conceptos, metodologías,



tecnologías y técnicas que contribuyan al desarrollo humano sostenible y a la conservación de la biodiversidad, considerando en el análisis, las estructuras de poder, las instituciones y los actores sociales, las normas y reglas locales y las políticas públicas.

La experiencia institucional y los logros obtenidos partiendo del trabajo de campo y la constante reflexión y análisis sobre realidades concretas, han hecho de AGRUCO un centro de excelencia reconocido dentro del sistema universitario boliviano y una referencia importante a nivel Latinoamericano y mundial en el campo del desarrollo humano sostenible con énfasis en las culturas andinas y el medio ambiente desde una visión aplicada (la agroecología).

En los últimos 10 años, a raíz de los ajustes estructurales y la promulgación de varias leyes que modifican el marco institucional y las relaciones entre el Estado boliviano y la sociedad civil, AGRUCO por su permanente relación con los gobiernos locales (municipios principalmente rurales y organizaciones sindicales y tradicionales) y las organizaciones de base, ha incursionado en el análisis de varias leyes como las del medio ambiente, participación popular, reforma agraria, descentralización, municipalidades, la reforma educativa, forestal, capitalización, la ley del sistema de administración financiera (SAFCO), tributaria. Las reflexiones y el análisis de las leyes se han dado en el marco de una amplia participación de las comunidades campesinas y las autoridades municipales (alcalde, consejo municipal y comité de vigilancia) en la perspectiva de ver como influyen estas leyes en su calidad de vida y como aprovechar o rechazar estos espacios.

Desde 1986, AGRUCO trabaja con las subcentrales sindicales de 8 de agosto en el municipio de Sipe Sipe y Waca Playa, Chullpa Khasa y el Ayllu Majasaya Mujlli en el municipio de Tapacarí y a partir del año 2000 se está ejecutando un proyecto de manejo de cuencas, agroforestería y conservación de suelos en el municipio de Tacopaya, provincia Arque. El trabajo realizado en los primeros años ha sido dirigido a fortalecer las bases productivas de la agricultura y el fortalecimiento de las organizaciones locales (autoridades tradicionales y dirigentes sindicales). Desde el año de 1998, se ha ampliado el rango de acción a nivel de todo el territorio municipal, principalmente en servicios de asesoramiento en gestión municipal (por ejemplo: elaboración de planes de desarrollo municipal, POAs, servicios de capacitación en control social con comités de vigilancia y elaboración de proyectos de desarrollo productivo) y ejecución de programas y proyectos pilotos integrales comunitarios a nivel de microcuencas y subcentrales sindicales.

Las experiencias de los últimos cuatro años han estado muy relacionadas con los temas de gobernación y ciudadanía. Los temas de ética (especialmente desde la perspectiva de los pueblos indígenas y campesinos), recursos naturales renovables (especialmente bosque, agrobiodiversidad, suelos y aguas), género (especialmente desde la perspectiva de los pueblos indígenas y campesinos) y

riesgos ambientales (especialmente desde la perspectiva de su mitigación en la gestión del territorio), han sido trabajados por más de diez años.

Esta experiencia a nivel local y nacional, es contrastada a través de la participación en redes y movimientos latinoamericanos y mundiales. Es así que ha participado como miembro fundador del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) y actualmente su director ejecutivo es coordinador para los países andinos. En 1996 funda junto a otras instituciones de América, África, Asia y Europa el programa internacional Comparando y apoyando el desarrollo endógeno (COMPAS) del que actualmente es coordinador latinoamericano y cuya sede esta en Holanda. Desde el año 2001 el director ejecutivo ha sido invitado para participar como miembro del directorio de la fundación Genetic Action International (GRAIN) con sede en Barcelona-España.

2. El contexto socioeconómico y la problemática del Parque Nacional Tunari

En Bolivia, los conceptos referidos a la participación popular, el acceso a los recursos naturales, la tierra y el territorio, han vuelto a tener una notable importancia en los últimos años debido a que la promulgación de nuevas leyes no han tenido la aceptación esperada de grupos sociales inmersos en esa problemática (Spedding, 1998; Valdivia, 2001; Bolivia-MDSP, 1998). Existen varios ejemplos² de cómo la población ha reaccionado ante políticas claramente agresivas a la economía y a la vida de la población boliviana.

En términos más generales, la aplicación de estas nuevas leyes insertas como instrumentos fundamentales de las políticas de ajuste estructural del Estado boliviano, han cambiado notablemente su relación con la población urbana y rural, quienes empiezan a cuestionar la actitud de sus representantes elegidos democráticamente, por las determinaciones contrarias a los intereses de las mayorías que generalmente son las más desfavorecidas, lo que implica un cuestionamiento al sistema democrático representativo imperante. Es por ello que las reivindicaciones y la lucha por la tierra y el territorio son parte integral del discurso y de la práctica social de los actores locales, tanto del sector indígena-campesino y del sector de migrantes urbanos.

2 En abril del 2000, en el departamento de Cochabamba surgió un Conflicto entre el Estado y la población urbana y rural, a raíz de la aprobación de la ley de aguas. Esta ley otorgaba a una transnacional responsable de la distribución del agua potable de la ciudad de Cochabamba, varias prerrogativas como el alza de precios sin concertación ni consulta alguna. La población, tras varios días de marchas y protestas logro que se abrogara la mencionada ley.

En Bolivia, desde 1975 se tiene el decreto ley 12301 que reglamenta la vida silvestre, los parques nacionales, la caza y la pesca (MACA, 1975). En 1998 se ha aprobado el decreto supremo 25158 creando el servicio nacional de áreas protegidas (SERNAP) que tiene la misión de coordinar el funcionamiento del sistema nacional de áreas protegidas que tiene las siguientes categorías: parque nacional, santuario nacional, monumento natural nacional, reserva nacional de vida silvestre y área natural de manejo integrado. En la ley general de medio ambiente aprobada en 1992 se define a las áreas protegidas como “áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural de país.”

En relación al marco jurídico legal, el Parque Tunari fue elevado a rango de parque nacional mediante decreto ley 1262 de 1991. Existen además, una serie de decretos supremos, decretos leyes y reglamentos que han intentado consolidar su uso y gestión sostenible, pero los conflictos persisten por la presencia de población urbana y rural que contradice el objetivo para el que se han creado las áreas protegidas, ahondándose más el problema con las leyes de participación popular y descentralización. Si bien los avances son importantes en relación a los marcos jurídicos y legales en la gestión pública, la gestión, uso y manejo de los parques naturales no ha superado los conflictos relacionados a la ocupación del territorio que sin duda requiere de un análisis sociopolítico más que jurídico-técnico (MDSP, 1998).

El problema parece radicar otra vez en la concepción andina sobre la biodiversidad y la gestión del territorio encontradas a través de otras investigaciones en otras regiones de los Andes y que consideran la dimensión espiritual como la base de las dimensiones sociales, económicas y ambientales (Morlón, 1996; Condarco, 1971, Murra, 1972, 1975; Earls, 1989; COMPAS-AGRUCO, 2001; Rengifo, 1988; PRATEC, 1996; PRATEC, 1998), contraponiéndose a las políticas públicas internacionales y nacionales y a las estrategias de la biodiversidad.

En tal sentido es necesario buscar la interfase entre las políticas públicas de forma integral, es decir analizando todas las leyes o proyectos de leyes que directa o indirectamente afectarían a la gestión sostenible del Parque Nacional Tunari, su biodiversidad y la propiedad de los territorios que están bajo la denominación de áreas protegidas con asentamientos poblacionales rurales y urbanos, y cuales son las propuestas de la ciudadanía, representadas en este caso por los habitantes asentados.

La problemática del Parque Nacional Tunari como estudio de caso de un área protegida en el que aparecen muy claramente asentamientos de poblaciones rurales y urbanas en su jurisdicción territorial, requiere de una investigación que considere:

- El conflicto interno entre sus habitantes urbanos y rurales.
- La influencia, aplicación y cumplimiento de las políticas públicas desde los niveles nacionales, departamentales y municipales en la resolución o ampliación del conflicto.
- Hasta que punto las leyes, decretos supremos, normas y reglamentos velan por los intereses de la población involucrada.
- La influencia de las políticas internacionales y los intereses de las transnacionales del norte.

A raíz de la aplicación de leyes como la ley general forestal, la ley de medio ambiente, la ley de participación popular, la ley de municipios, la ley INRA, y la ley de descentralización administrativa, han resurgido serios conflictos en torno al uso y accesos al Parque Nacional Tunari que fue creada en el año de 1963 por ley 253 (MDSP, 1998).

Una de las causas para el resurgimiento de estos conflictos ha sido la aprobación de la ley de participación popular y de descentralización, que han ampliado las jurisdicciones de los gobiernos municipales al ámbito rural de sus secciones de provincia, situación que establece que el parque nacional Tunari abarque el territorio de 5 provincias, 8 municipios y 12 cantones, lo que ha implicado un reconocimiento de pertenencia de las poblaciones rurales de origen indígena-campesino³, como antiguos propietarios que aparecen ubicados en el Parque, y un conflicto de acceso a la propiedad de la tierra por migrantes urbanos⁴ de pequeñas poblaciones mineras asentadas ilegalmente desde no más de hace 20 años y por mercaderes de tierras ambos con objetivos claramente diferenciados, pero relacionados a través de la compra-venta de tierras.

3 El sector indígena-campesino esta conformado por comunidades campesinas asentadas desde antes de la creación de la república (posiblemente desde el siglo XV a raíz de la política del Inca Huayna Cápac de realizar movimientos poblacionales con nuevos asentamientos de grupos étnicos de otros territorios). Hemos denominado comunidades campesinas a la población y territorio integrado por una lógica familiar y comunal que posee a veces múltiples niveles y que está a su vez, esta diversamente relacionada con otras lógicas supracomunitarias que comparten una estructura económica, una organización sociopolítica y una cosmovisión mágico-religiosa (Izko, 1986; Saignes, 1991; Blanco, 1992; Delgado, 2001).

4 Llamamos migrantes urbanos a aquellas personas o familias que han emigrado de otras ciudades del país a los sectores marginales de la ciudad de Cochabamba; muchos de ellos se han ubicado en las faldas del Parque Nacional Tunari. El decreto supremo 21060, promulgado en 1985, ha tenido un efecto radical en la emigración de la población de pequeñas ciudades mineras a la ciudad de Cochabamba a consecuencia del cierre de las minas del Estado.

3. Tierra y territorio desde la visión de los pueblos originarios y la visión conservacionista del Estado

En tal sentido, en el presente proyecto de investigación que incorpora 3 tesis doctorales y 1 proyecto de capacitación (que serán expuestos posteriormente) es importante comprobar que si los conceptos y principios relacionados con la tierra y el territorio provenientes del sector campesino e indígena, que todavía son una gran mayoría en el país, concuerdan o no con la lógica conservacionista introducida en la creación y las propuestas, programas y proyectos de manejo de los parques nacionales ejecutados por entidades gubernamentales o no gubernamentales que siguen la normativa jurídica del Estado boliviano y un enfoque tecnocrático de los recursos naturales.

En tal caso, es necesario considerar que existen varios estudios que reconocen la alta capacidad de adaptación y de gestión de los pueblos indígenas-campesinos en y de los ecosistemas andinos, que han logrado mantener por siglos, un cierto equilibrio en la relación sociedad-naturaleza, por lo menos hasta antes de la invasión española realizada en el año de 1532, tal como lo han demostrado los cronistas españoles e indígenas de la época colonial española (como Garcilazo De la Vega Inca, Juan Santa cruz Pachacuti Yamqui, Pedro Cieza de León).

Sin duda, este proyecto pretende también aportar, a ver la interfase entre los saberes locales y las propuestas técnicas y jurídicas enmarcadas en las políticas públicas, que han creado un proceso de re-interpretación del significado de los conceptos externos (nacionales o internacionales) que según el caso, puede tener discrepancias considerables con el significado "local". Es por ello que desde el punto de vista de la mitigación de los síndromes, se puede entender estas re-interpretaciones como parte de un proceso de aprendizaje social que puede contribuir a re-configurar los valores fundamentales para el pensamiento y la acción en el ámbito público, tal es el caso de las modificaciones de normas y reglamentos que se ha dado con la ley de participación popular, al aceptarse a partir de la presión social del movimiento indígena y campesino, el reconocimiento de sus autoridades y formas de organización tradicionales, reconociéndoles finalmente la personería jurídica.

4. Ciudadanía y democracia representativa en cuestión

La relación entre la ciudadanía y el Estado en América Latina, esta pasando por una profunda crisis de legitimidad por el cuestionamiento a sus representantes en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por tanto, los conceptos de ciuda-

danía⁵ que se han manejado desde las ciencias políticas y sociales y el concepto de democracia representativa⁶ que ha sido la forma de organización del Estado boliviano, están demostrando ciertas limitaciones al analizar nuevas situaciones que se originan por el desencanto y la incredulidad de los ciudadanos en los órganos rectores plasmados en la constitución política del Estado, porque no ha dado respuesta para mejorar la calidad de vida de la población. Es por eso que “en la práctica, la definición de la ciudadanía es una cuestión en pugna y un campo de batalla entre individuos, grupos sociales e ideologías para obtener poder (NCCR-IP8, 2002)”.

Estas concepciones de ciudadanía y democracia representativa, tienden a perder de vista que paralelamente al divorcio cada vez más explícito entre ciudadanía política, civil y social, existen propuestas y estrategias alternativas que emergen de los movimientos étnicos y sociales, un ejemplo de ello es la organización socioterritorial de las comunidades campesinas originarias de los países andinos, organización que se conoce como ayllu,⁷ basado en principios de

-
- 5 Según el NCCR-IP (2002), la ciudadanía es un sentido de pertenecer a una comunidad. Implica solidaridad entre conciudadanos y, por ello, valores comunes o una ética compartida. Desde una perspectiva legal, la ciudadanía implica una igualdad de derechos entre individuos, pero también de deberes (obedecer la ley y pagar su porcentaje de impuestos); de ahí su relación con la libertad y la democracia. Ciudadanía es definida por el CERES (2001) como la participación de los individuos en todos los aspectos de la vida política, económica y cultural de la sociedad. El ejercicio de la ciudadanía es ejercer derechos, cumplir obligaciones y asumir responsabilidades de manera libre y consciente. La participación política se caracteriza por intervenir de manera más o menos decisiva en las condiciones materiales y simbólicas de la realidad. Por eso la ciudadanía esta ligada a la práctica del poder político, donde el ciudadano elige al presidente, a los diputados, al alcalde, a los concejales, para que lo representen y gobiernen en su nombre; por tanto puede exigir que cumplan con las funciones para las que fueron designados. La ciudadanía presenta un doble enfoque, uno basado en la idea de universalidad e igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos, y otro basado en las diferencias culturales que generan diferentes formas de participación y representación en las comunidades y grupos indígenas que habitan en nuestro país.
 - 6 La democracia es el régimen político en el cual la soberanía pertenece al conjunto de los ciudadanos sin distinción, es decir, al pueblo. La democracia representativa o llamada también democracia parlamentaria, es aquella en la cual el pueblo delega en un parlamento, constituido en general por vía de elección, a veces por sorteo, el ejercicio del poder legislativo (Morfaux, 1985).
 - 7 El concepto de ayllu puede tener diferentes connotaciones, es decir puede referirse a aspectos de la organización social (relaciones de parentesco e identificación étnica), connotaciones espirituales en función de los centros rituales (los centros rituales sagrados o wacas que muchas veces están ubicados en las actuales capillas o parroquias o calvarios instalados por la religión católica. Delgado (2001) define el ayllu como la organización social en función de sus relaciones de producción, el espacio geográfico

reciprocidad y redistribución a partir de una gestión territorial comunitaria⁸ que todavía perviven en varias regiones del país, a lo que se ha venido a denominar la “teoría de la complementariedad vertical ecosimbiótica”⁹.”

5. El espacio tiempo-sagrados para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo endógeno sostenible

En los últimos años se han realizado diversas investigaciones en otras regiones que están fuera de la jurisdicción territorial del Parque Nacional Tunari, donde se ha concluido que la teoría de la complementariedad vertical ecosimbiótica considerada inicialmente como una estrategia campesina-indígena de acceso a la tierra, de conservación de los recursos naturales y de seguridad alimentaria, tiene connotaciones que van mas allá del simple espacio físico-natural y espacio socioeconómico, donde lo simbólico es fundamental y se demuestra en la concepción indígena de espacios-tiempos sagrados que en los Andes se conoce como Pachamama (Delgado, 2001).

que ocupa y la estructura simbólica que ocupa y donde se centran las principales actividades que determina el sistema productivo, considerando además el acceso a otras zonas simbióticas. Saignes (1991) indica al referirse al ayllu, llacta o curacasgo, que “la percepción indígena de estas categorías de pertenencia es muy relativizadora; según donde se ubica el sujeto, la noción de ayllu, por ejemplo, puede abarcar a la unidad residencial local, al grupo extenso de parentesco, al conjunto del pueblo, a la federación regional y aún, cuando nacieron las repúblicas andinas, al país entero”.

- 8 Diferentes investigaciones realizadas en los Andes desde la etnohistoria y la antropología tienden a subrayar los variables modos en los que la herencia de la cultura política andina ha influido y dado forma a las fuerzas de penetración mercantil en los Andes (Harris et.al.,1987) y muy especialmente en la gestión del territorio, reconstituyendo creativamente sus formas básicas de interacción social, a fin de liberarse de las cadenas económicas, creando como dice Esteva (1996) nuevos ámbitos de comunidad que les permite vivir en sus propios términos. En este sentido, una de las mayores contribuciones de las ciencias sociales ha sido la teoría del control vertical ecosimbiótico, desarrollado por Murra (1967; 1972, 1975) y Condarco (1971, 1997).
- 9 La ecosimbiosis interzonal no es nada más que la concurrencia a que por tradición están obligados pueblos del mismo origen, pero que se hallan domiciliados o asentados en distintas zonas o habitats contrariamente caracterizados por diferentes condiciones naturales que permiten o imponen a dichos pueblos distintos géneros de vida y la consiguiente necesidad de procurarse recíprocamente acceso al aprovechamiento de los disímiles medios de subsistencia que unos y otros, no por comercio o trueque, sino por una suerte de extraterritorialidad que se reconoce mutuamente para explotación en beneficio privado del que los explota en territorio vecino, a cambio de permitir al pueblo de aquel, iguales derechos en su habitat de origen.

Por otro lado, existe una preocupación cada vez más explícita de una acelerada erosión de suelos y una pérdida de biodiversidad que influye en la prioritaria búsqueda de alternativas legales, tecnológicas, sociales y económicas para un uso sostenible de los recursos naturales y para la conservación de la biodiversidad, que permitan otorgar seguridad y soberanía alimentaria y promover un desarrollo humano sostenible en Bolivia. Sin embargo, la definición de área protegida, donde se destaca el objetivo de conservar la biodiversidad, por lo menos para el caso del Parque Nacional Tunari, no considera a la población existente. El problema parece radicar en la visión materialista y mercantil que se quiere dar a la biodiversidad. Un reciente estudio de la Academia Nacional de Ciencias sobre Lineamientos de políticas públicas para la gestión de la biodiversidad en Bolivia (ANCB, 2002), ha identificado tres problemas centrales que afectan a la biodiversidad y limitan su contribución al desarrollo sostenible del país, estos son:

El modelo de libre mercado que es incompatible con el desarrollo sostenible, especialmente si como en Bolivia, se lo aplica sin ninguna regulación del Estado, lo que está produciendo una creciente pérdida de biodiversidad, tanto en el componente natural como en el cultural, comprometiendo las oportunidades de desarrollo futuras para los bolivianos.

No existe una visión del país que deseamos construir, que impide el desarrollo de políticas integrales construidas colectivamente, logrando espacios de concertación entre los diferentes intereses de la sociedad boliviana; por el contrario, se mantienen una tradición de toma de decisiones que responden fuertemente a intereses particulares y a las presiones internacionales.

No existe un esfuerzo de búsqueda de soluciones y construcción del desarrollo a partir de las oportunidades y realidades locales, por el contrario las soluciones se buscan en la aplicación de medidas copiadas de otras realidades logrando únicamente profundizar los problemas de exclusión social y de autodescalificación de los bolivianos“.

Los problemas identificados por la Academia Nacional de Ciencias, permiten reflexionar a cerca de las profundas diferencias conceptuales de las culturas andinas con el modelo de libre mercado y con las formas de tomar decisiones, que son la base de los conceptos que se manejan sobre las áreas protegidas y por ende de las políticas públicas y la creación de parques nacionales.

6. Los proyectos de tesis doctorales

En el presente proyecto de investigación, desde la antropología política y antropología cultural, se pretende profundizar a través de una tesis doctoral, la concepción de territorialidad y gestión comunitaria tomando la gobernancia y los

conflictos entre sistemas de gestión y actores en sus diferentes niveles, interrelacionando este tema con la propuesta del IP1 para una ejecución y coasesoramiento conjunto entre el IUED, el CDMA y AGRUCO de una tesis doctoral.

A través de la ley de participación popular dictada en 1993, el Estado boliviano ha reconocido la importancia de nuevos actores locales en la toma de decisiones, determinando que estos ya no solo se conformen con los niveles y estructuras de participación existentes ofrecidos por las organizaciones estatales actuales, sino exijan modificaciones profundas a la constitución política del Estado. Esta apertura, más bien puede generar propuestas para reformar o mejorar las estructuras existentes en el sentido de alcanzar una mejor articulación y mejor control social entre los principios y procesos de toma de decisión vigentes en sus propias organizaciones (comunidades, ayllus, sindicatos, barrios, ONGs, federaciones sindicales) con el ámbito municipal y gubernamental.

Es en este sentido, que la gestión municipal y el control social en la jurisdicción territorial del Parque Nacional Tunari, es una prioridad de investigación en el presente proyecto de investigación, donde se analizará la gobernanza política, los conflictos entre sistemas de gestión y actores en sus diversos niveles de gobernanza, como tesis doctoral desde la sociología política.

Los planteamientos propuestos en los anteriores párrafos permiten plantear la hipótesis de que “emergen nociones endógenas de ciudadanía que empiezan a desafiar el sistema democrático representativo que se ha concentrado como un monopolio de determinados grupos sociales que no representan a toda la ciudadanía en su conjunto, en la perspectiva de reinterpretar el rol del Estado y la ciudadanía”. Esta hipótesis será trabajada a través del Proyecto SOLES con el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, con la que se interrelacionará a través de talleres de intercambio.

Una constante del discurso en el campo político de estos actores sociales locales concentrados en los movimientos indígenas y campesinos, es el cuestionamiento y el rechazo a los valores éticos derivados de un estado neo-liberal que se proyecta en primera línea como facilitador de una economía de libre mercado. Este rechazo ha sido demostrado en las elecciones generales realizadas el 30 de julio del presente año; para el caso del departamento de Cochabamba un 80 % de la población, votó en contra de los partidos políticos tradicionales o asistémicos. A nivel nacional, el 47 % de la población, ha votado en contra de estos partidos tradicionales.

No obstante de que los nuevos actores se manifiestan más claramente en los niveles locales y regionales, en sus discursos se observa elementos que reflejan discusiones llevados a cabo a nivel internacional. Por esto, conceptos referidos a la sostenibilidad, biodiversidad, recursos naturales, tierra y territorio, parques naturales y bosques, descentralización y participación, empiezan a formar parte integral del discurso y de la práctica social de los nuevos actores, aunque muchas

veces este discurso provenga de entidades internacionales como el Banco Mundial o el Fondo monetario internacional que tienen implícitos otros objetivos y estrategias no siempre coincidentes con los de los actores locales.

Al relacionar estos elementos con conceptos y principios provenientes de bases étnicas diferenciadas, se crea un proceso de re-interpretación del significado de estos conceptos externos que según el caso, puede tener discrepancias considerables con el significado “oficial” que tienen, de acuerdo a los intereses de los actores internacionales. Desde el punto de vista de la mitigación de los síndromes se entendería estas re-interpretaciones como parte de un proceso de aprendizaje social que debe contribuir a re-configurar los valores fundamentales del pensamiento y la acción en el ámbito público. Estos conceptos y principios parecen diferir profundamente en temas como el medio ambiente y la biodiversidad desde la ciencia moderna occidental y la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, aspectos que involucran también diferentes concepciones de la conservación y el desarrollo, lo que se ha trabajado en una tesis doctoral con el CDMA de la Universidad de Berna.

En esta búsqueda de alternativas, el gobierno boliviano ha instruido al parlamento la elaboración de una ley de ordenamiento territorial (en la actualidad esta como proyecto de ley) que podría definir, si se lo hace concertadamente con la población urbana y rural, la sostenibilidad de los bosques andinos y amazónicos y la resolución de conflictos causados por las áreas protegidas en diferentes regiones del país. Sin embargo, este proyecto de ley ya ha sido cuestionado por el movimiento indígena y campesino y otros sectores de la sociedad civil (principalmente ONGs e institutos de investigación). El proceso ha sido parado por estar en este año 2002 en periodo de elecciones generales, pero sin duda en los próximos meses y tal vez años, el tema será tratado desde diferentes ángulos, pretendiendo con el presente proyecto, contribuir a la discusión, reflexión y soluciones alternativas.

7. Tierra y territorio y áreas protegidas en perspectiva

Es por ello que como un objetivo a largo plazo, el presente proyecto de investigación pretende generar una amplia discusión y reflexión sobre la tierra y el territorio en general y las áreas protegidas en particular a partir del caso del Parque Tunari. Esta discusión y reflexión se origina en el cuestionamiento y definición de las políticas públicas y la gestión municipal en muchos casos contradictorias con otras leyes y en otros casos confusas en su interpretación, generadas en un marco institucional aparentemente participativo y que parecen apuntar a privatizar el acceso a los recursos naturales, a la tierra y a los bosques, desconociendo los principios de comunitarismo y complementariedad ecosimbiótica en la gestión o

gobernación local del territorio, que han sido ampliamente investigados en otras regiones altoandinas del país y puede aportar positivamente desde una perspectiva de un desarrollo humano sostenible con identidad cultural (Delgado, 2001; Rasnaque, 1989; Rocha, 1999; Platt, 1996).

Con la ley de ordenamiento territorial se tiene como objetivo definir el uso de la tierra en función de las capacidades de uso del suelo, siguiendo seguramente parámetros técnicos desarrollados para otros ecosistemas y otros contextos socio-culturales. En tal sentido será importante analizar la perspectiva y saberes de los campesinos e indígenas como actores locales rurales en el uso del ecosistema y la biodiversidad del bosque andino y la gestión del territorio. La mencionada ley intentará también definir la ocupación del territorio. Para el caso del Parque Nacional Tunari será fundamental la elaboración de un plan de ordenamiento territorial departamental y municipal que permita definir el acceso y uso al parque de los campesinos e indígenas de los municipios en cuestión y de los vecinos asentados en las conurbaciones del municipio de Cercado.

8. Objetivos del proyecto global

Objetivo general

- Estudiar los conflictos y los procesos de transformación que se dan entre la gestión de los actores locales y las políticas públicas a nivel municipal, departamental y nacional, referidos a la gestión de la biodiversidad y a la conservación de los recursos naturales en áreas protegidas (el caso del Parque nacional Tunari).

Objetivos específicos

1. Estudiar la gobernanza política y los conflictos internos entre sistemas de gestión y actores a nivel de los diferentes niveles en relación a la gestión municipal y el control social en el Parque Tunari. (Tesis doctoral de Dora Ponce).
2. Estudiar la gobernanza de la tierra y los conflictos entre sistemas de gestión y actores a nivel de los diferentes niveles en relación a la territorialidad y la gestión comunitaria en el Parque Nacional Tunari. (Tesis doctoral de Elvia Serrano).
3. Comprender las concepciones de los campesinos indígenas andinos del espacio de vida y sus relaciones con el concepto de la biodiversidad de ecosistemas y discutir sus potencialidades y limitaciones para una gestión sostenible de la Biodiversidad.

9. Avances del proyecto de investigación en general

En esta presentación queremos mostrar los avances de investigación de todo un equipo intertransdisciplinario de profesionales de AGRUCO que han ido aportando con sus experiencias a este proyecto global, además reiterar que esto es posible gracias a convenios interinstitucionales de cooperación científica entre AGRUCO y estas Universidades Suizas, pero también con otras Universidades Nacionales e Internacionales, así como convenios con Instituciones locales como se ha mostrado líneas arriba.

Durante el primer año de investigación (Septiembre del 2002 a Junio del 2003) el estudio fue enriquecido por los resultados de varias investigaciones entre ellas el trabajo de Silvio Claros sobre *“Análisis de la problemática e implicancias del Parque Nacional Tunari”* ejecutado en el marco del convenio entre la AGRUCO-UMSS y el Municipio de Tapacarí (modalidad trabajo dirigido), el trabajo del Ing. Rubén Flores sobre *“Mecanismos de control y aprendizaje social en el Municipio de Sipe Sipe”* (Tesis de Maestría) realizado en el marco del Convenio entre AGRUCO y SOLES (UMSS y CDMA-Universidad de Berna).

Sobre esta base, se realizó entrevistas a los diferentes grupos de actores sociales involucrados en la problemática del PNT y también se participó activamente en una serie de eventos relacionados al Tema de Areas Protegidas y Gestión de la Biodiversidad. En este proceso se sumo al equipo Miriam Macchi de la Universidad de Berna para desarrollar un trabajo de Investigación titulado *“Parque Tunari: Un análisis de la situación actual desde la perspectiva de las comunidades locales”* que actualmente ya ha sido presentada en su Universidad.

La sistematización de estos trabajos y el análisis de la información obtenida en campo durante este primer año ha permitido alcanzar algunos resultados preliminares que mencionamos a continuación:

- La identificación y caracterización de los diversos grupos de actores sociales externos y locales involucrados en la problemática del PNT, sus interrelaciones en términos de relaciones de poder.
- El análisis preliminar sobre el conflicto territorial a partir de una aproximación a la definición de límites del Parque Nacional Tunari tomando como referencia la información oficial de las instituciones responsables de la gestión de áreas protegidas en Bolivia (SERNAP, Prefectura).
- La definición preliminar de roles y competencias de los actores institucionales en la gestión del Parque Nacional Tunari.

La revisión de información sobre el PNT ha permitido constatar que hasta ahora la atención de los medios de comunicación y las entidades gubernamentales vinculadas al Parque Nacional Tunari ha girado en torno a la problemática de los

asentamientos urbanos en la ladera Sur del PNT, obviándose a otros actores sociales como son las comunidades campesinas y pueblos indígenas que habitan en el territorio del Parque, esto significa que las discusiones y las propuestas trabajadas hasta ahora por la prefectura y el comité de gestión del PNT se han desarrollado en torno a esta problemática específica.

En términos de relaciones de poder, se evidencia claramente que en el Parque Nacional Tunari se imponen criterios conservacionistas de grupos minoritarios (urbanos), sobre otras lógicas locales, significa que las decisiones para la implementación del PNT todavía corresponden a reducidos grupos de poder que políticamente están ligados al gobierno de turno y a la administración pública, en este contexto poco o nada cuenta los criterios de los centenares de comunidades campesinas que en su vida cotidiana están gestionando el territorio y la Biodiversidad en base su propia lógica.

El diagnóstico inicial muestra claramente que existe una superposición de competencias entre los diferentes actores institucionales para la implementación de las políticas públicas de conservación en el Parque Nacional Tunari y principalmente en lo que se refiere a la administración del territorio, por ejemplo los Municipios pierden autoridad sobre su territorio al ser declarado como Parque Nacional, esto repercute en la participación de los municipios en la implementación de la Ley 1262.

Desde la visión del Estado la administración de la tierra en Bolivia ha sido y sigue siendo un tema de administración nacional, los niveles intermedios (Prefecturas) y los locales (municipios) no tienen competencias específicas sobre la tierra, con la sola excepción de la administración del catastro. Esta administración se complica con la creación de los Parques Nacionales y el Servicio Nacional de Áreas protegidas, que es creado como institución reguladora del manejo y Gestión de áreas protegidas, debido a limitaciones esta tarea es transferida a la Prefectura que aunque no tiene las competencias legales asume este rol lo cual genera confrontación de intereses diferenciados que bloquean iniciativas de concertación para llevar adelante una gestión sustentable del Parque Nacional Tunari.

En el tema tierra-territorio el aspecto legal, que se circunscribe a la propiedad de la tierra es importante que las comunidades tienen en propiedad más del 98% del territorio del área del PNT, y las invasiones ilegales en el límite sur van aumentando anualmente, entonces se observa que existen disfunciones en los objetivos por los que fue creado el PNT, puesto que por un lado se establecen reglas que restringen el acceso a los recursos de los territorios de las propias comunidades, y por otro lado se recorre el límite Sur a una cota, que al momento otra vez ha sido invadida ilegalmente lo cual es una evidencia del poder ejercido por grupos de élite de la ciudad de Cochabamba, que a su vez influyen en las políticas públicas.

También en este primer año hemos rescatado experiencias locales de formas de control social para la gestión del Territorio y los recursos naturales, formas de

organización y toma de decisiones que están siendo planteadas en algunos Municipios a través de la participación real de Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) en la gestión municipal.

Las Comunidades campesinas ubicadas en el PNT a través de su proceso histórico han desarrollado estrategias propias de gestión del territorio lo que implica formas de organización local que a través de derechos consuetudinarios (usos y costumbres) regulan el manejo y la conservación de la biodiversidad, que están vigentes en su vida cotidiana pero que el Estado no considera a la hora de establecer políticas públicas que rigen la gestión del territorio Boliviano y por tanto la implementación de estas leyes, normas, estructuras de gestión, tiene serias dificultades y provoca conflictos en los que las comunidades demandan claramente la visión integral que las caracteriza, en este marco el decreto ley 1262 del Parque Nacional Tunari, atenta contra su soberanía que se expresa en una forma de vida, donde el control social del territorio en su concepto más amplio, es la base fundamental de la reproducción de la vida social, material y cultural, la temática de los derechos consuetudinarios merece una investigación que permita profundizar el tema.

Los resultados de este primer año de estudio han constituido la base para precisar los proyectos de Investigación y avanzar en su ejecución que responden a los objetivos específicos del proyecto general: en el caso de Dora Ponce *"Gobernanza en el Municipio y las Organizaciones locales para la gestión de la Biodiversidad en el Parque Nacional Tunari"*; en el caso de Elvira Serrano sobre *"Transformación de valores éticos en la Interfaz entre Estado y Sociedad Civil"*. Y Sebastián Boillat en el tema *"Concepciones Indígenas del Medio Ambiente y su relación con el concepto de Biodiversidad"*. Además estas Investigaciones están acompañadas y apoyadas por las investigaciones de Policarpio Nina en *"Estudio de la Diversidad de Ecosistemas en el Parque Nacional Tunari"* y Angel Aguilar en el tema *"Topología sociocultural de los Municipios del Parque nacional Tunari"*

Es una característica del trabajo de AGRUCO, acompañar los procesos de Investigación con acciones concretas en las comunidades campesinas, esto a permitido durante años que las investigaciones se fortalezcan con la aplicación de una serie de metodologías participativas, que en el marco de las acciones de los proyectos de desarrollo se facilitan de gran manera, porque se planifica e implementa tanto las investigaciones como las acciones junto con las autoridades y organizaciones de base en cada una de las áreas de trabajo, por su parte las acciones han sido retroalimentadas por los resultados de las investigaciones de manera continua, lo que ha permitido en muchos casos reorientar los objetivos y las metodologías de trabajo y replantear las actividades en la búsqueda de mejores resultados.

Las investigaciones sobre el Parque Nacional Tunari en el marco del NCCR-NS también fueron acompañadas y apoyadas por un proyecto de capacitación (Acción), de esta manera durante el año 2003-2004 los Ings. Jaime Delgadillo y Juan

Carlos Mariscal del equipo AGRUCO han ejecutado el “*Programa de Capacitación en Control Social y Gobernanza para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Parque Nacional Tunari*” proceso que ha tenido aportes fundamentales para los trabajos de Investigación.

Bibliografía

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BOLIVIA

2002 Lineamientos de Políticas Públicas para la Gestión de la Biodiversidad en Bolivia. ANCB-ICIB, La Paz-Bolivia, págs. 33

AGRUCO-COMPAS

2001 Cosmovisión Indígena y Biodiversidad en América Latina. AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 408p.

ALBO, X.

1999 Iguales aunque diferentes: hacia unas políticas intercomunales y lingüísticas para Bolivia. Cuadernos de investigación. N° 52. La Paz: CIPCA. UNICEF. 134p.

1986 ¿Khitipxtansa? ¿Quiénes Somos? Identidad Localista, Étnica y Clasista en los Aymaras de Hoy en: Identidades Andinas y Lógicas del Campesinado. Mosca Azul, Lima-Perú. pp. 147-187.

AK'UTAN y VOCES DEL TIEMPO

2000 Tierra y Espiritualidad Maya: II Encuentro Taller. Guatemala 14-17 febrero 2000. 204p.

ANISUR RAHMAN

1991 El Punto de Vista Teórico de la IAP. En: Fals Borda, O y Anisur Rahman, M. (compiladores) (1991). Acción y conocimiento. Como romper el monopolio con investigación - acción participativa. CINEP. Bogotá-Colombia. pp. 37 - 47.

ALAVI, H. y SHANIN, T.

1988 La cuestión agraria: El discurso marxista de Kautsky. En: Agricultura y sociedad No 47. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid-España, 1988. pp. 43-54.

ARCHER, M.

1992 Teoría de Cultura-Acción. En: Ritzer, George. Teoría sociológica contemporánea. Mc Graw Hill, Inglaterra. pp. 497-500

BARNADAS, J.

1980 Kollasuyo: Orígenes de Cochabamba. pp. 19-43 (mimeo).

BARNADAS, J.

1973 Charcas: Orígenes Históricos de una Sociedad Colonial. La Paz: CIPCA. 635p.

BERTAUX, D.

- 1989 Los relatos de vida en el análisis social. En: Revista de Historia y Fuente Oral No 1 ¿Historia oral? Universidad de Barcelona. Barcelona-España. pp. 87-105.

BOLIVIA

- 1960 Constitución Política del Estado 10. ed. Gisbert editores, 1960, La Paz-Bolivia. 81p.

BOLIVIA. MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

- 1996 Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). MDSMA, La Paz-Bolivia, págs. 30.

BOLIVIA. MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN, et.al.

- 1998 Parque Nacional Tunari: Criterios Técnicos-legales para Abordar la Problemática del Parque Nacional Tunari. Cochabamba-Bolivia, págs 91.

BOLIVIA. MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS

- 1975 Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca. Bolivia, págs. 32.

BOLIVIA. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA

- 1997 Reglamento de la Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el de Bioseguridad. Bolivia, págs. 40.

BOUYSE CASSAGNE, T.

- 1987 La identidad aymara: Aproximación histórica (siglo XV, siglo XVI). Biblioteca andina. Serie histórica. N° 1. La Paz: HISBOL. 443p.

COLCHESTER, M.

- 1995 ¿Hacia un concepto indígena de la biodiversidad? Biodiversidad 3, REDES-AT-GRAIN, Uruguay, pp. 7-10

CROUCIBLE GROUP

- 1994 Gente, Planta y Patentes. CIID-Norman Comunidad, Canadá, págs 106.

CONDARCO, R.

- 1997 Realidad, Fuente y Conceptos Acerca de la Ecosimbiosis Interzonal Andina. (mimeo). Conferencia dictada en AGRUCO. Enero de 1997. 13p.

CONDARCO, R.; MURRA, J.

- 1987 La teoría de la complementariedad vertical eco-simbiótica. Breve Biblioteca de Bolsillo. N° 2. La Paz: HISBOL. 114p.

CONDARCO, R.

- 1971 El escenario andino y el hombre. En: Protohistoria andina, vol. II. Renovación, Bolivia.

CROSBY, N. A.

- 1988 Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa, 900-1900. Crítica. Barcelona-España. 38p.

DELGADO, F.

2001 Simbiosis Interzonal en la Estrategias de Autodesarrollo Sostenible: El caso del Ayllu Mujlli, Departamento de Cochabamba, Bolivia. Tesis doctoral. Universidad de Córdoba, España, 295 págs.

1999 Cosmovisión Andina para un desarrollo rural sustentable. En: Boletín COMPAS. N° 1. 31p.

DELGADO, F. et. al.

1998 Reciprocidad Andina: Principio de seguridad vital-Reciprocity for life security. En: LEISA. Vol. 14. N° 14. LEUSDEU: ILEIA. 30p.

DELGADO y TAPIA

1998 Políticas y Estrategias Gestión de la Investigación en Agroecología y Revalorización del Saber Local para un Desarrollo Sustentable. AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. 29 p.

ELIADE, M.

Lo sagrado y lo profano. Nueva serie. N° 21. Barcelona: LABOR. 185p.

ESTEVA, G.

1996 Sobre la concepción y el origen del desarrollo. En: Sachs W. el Diccionario del Desarrollo, CAM-PRATEC. pp. 52-78.

FERNÁNDEZ, D.

1993 Conformación de espacios socioeconómicos. Consideraciones generales de la provincia Tapacarí. Serie Técnica 31. AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. 43p.

JIANCHU, XU. et. al.

2000 Links between Cultures and Biodiversity: Proceedings of the cultures and Biodiversity Congress 2000. Yunnan. Cience and Technology Press. China 20-30 Julio. 1033 p.

GORDILLO, J.

2000 Campesinos revolucionarios en Bolivia: Identidad, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba 1952-1964. La Paz. PROMEC. Universidad de la Cordillera. PLURAL. CEP. 261p.

GRUPO SEMILLAS, et.al.

Diversidad biológica y cultural. Retos y propuestas desde América Latina. Dupligráficas, Bogota-Colombia, Págs. 270.

GUHA, R; GADGIL, M.

1993 Los hábitats en la historia de la humanidad. (mimeo) s/p.

GUTIÉRREZ, R. et. al.

1993 Pueblos Indios. Otro Urbanismo en la Región Andina. Abya Yala, Quito-Ecuador, 588p.

HARRIS, O.

1987 Economía étnica. HISBOL. La Paz-Bolivia. pp. 51-114.

- HARRIS, O.
1987 Phaxsima y qullqi. Los poderes y significados del dinero en el Norte de Potosí. En: Harris, O. et. al. Compiladores. La participación indígena en los mercados surandinos. CERES. La Paz-Bolivia, 1987. pp. 235-280.
- HEALY, K.
1989 Sindicatos campesinos y desarrollo rural 1978-1985. Desarrollo en cuestión. N° 1. La Paz: HISBOL. 80p.
- HERVIEU, B.
1995 El espacio rural europeo entre la ruptura y el desarrollo. En: Ramos, E. y Cruz, J. compiladores. Hacia un nuevo sistema rural. Ministerio de agricultura, pesca y alimentación, Madrid-España, 1995. pp. 27-48.
- HOBBELINK, H.
1992 La biotecnología y el futuro de la agricultura mundial. REDES-AT-Norman Comunidad, Uruguay, págs. 205.
- IZKO
1986 Comunidad andina: persistencia y cambio (en: Revista Andina año 1 N° 1. Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, Cusco-Perú). pp 59-128.
- JIMENEZ, G.
1995 Rituales de vida en la cosmovisión andina. La Paz: CID. Secretariado Rural. 139p.
- KUHN, T.
1994 La estructura de las revoluciones científicas. FCE. Madrid-España. 319p.
- LARSON, B.
1992 Colonialismo y transformación agraria en Bolivia: Cochabamba 1500-1900. Biblioteca andina. N° 13. La Paz: CERES. HISBOL. 435p.
- LEFF, E y CARABIAS, J. (Coords.)
1993 Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales. 2 Vols., CIIH-UNAM, México, págs. 273.
- MCCLUNG DE TAPIA, E.
1984 Ecología y cultura en Mesoamérica. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2da ed. 110p.
- MAUSS, M.
1979 Sociología y Antropología. Sociología. Madrid: TECNOS. 430p.
- MILLA, C.
1983 Génesis de la cultura andina. Lima: Fondo Editorial. C.A.P. Colección Bienal. 257p.
- MORIN, E.
1995 Principios de los cambios sociales del siglo XX (en: Sociología. Madrid, Tecnos. pp. 387-405).

MURRA, J.

1975 Formación económicas y políticas del mundo andino. Historia Andina. N° 3. Lima: IEP. 339p.

1972 El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en las economías de las sociedades andinas. En Ortiz de Zúñiga, Iñigo (1967-972). Visita a la provincia de León de Huanuco, 1562. Edición crítica al cuidado de John Murra. Huanuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú.

PARK

1989 Que es la investigación acción participativa. Perspectivas teóricas y metodológicas en: Salazar, María C. La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollo. Popular, Madrid-España, 1992. pp. 135-174.

PLATT, T.

1982 Estado Boliviano y Ayllu Andino: Tierra y tributo en el norte de Potosí. Historia andina. N° 9. Lima: IEP. 197p.

1976 Espejos y maíz. Cuadernos de investigación. N° 10. La Paz: CIPCA. 60p.

PNUMA

1998 Economía de la Biodiversidad. Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental. PNUMA, México, págs. 273.

PNUMA-AECI-MOPU

1990 Desarrollo y medio ambiente en América Latina y el Caribe. Una visión evolutiva. PNUMA, Madrid-España, págs. 231.

PRATEC

1996 La cultura andina de la biodiversidad. PRATEC, Lima-Perú, Págs. 123.

PRATEC

1998 Crianza ritual de semillas en los Andes. PRATEC, Lima-Perú, págs. 167.

RASNAKE

1989 Autoridad y Poder en Los Andes. Los Kuraq Kuna de Yura. HISBOL, La Paz-Bolivia, 282p.

RIST, S.

2001 Wenn Wir Guten Herzens sind, gibt's auch production. Serie. Kommunikation und eeratung N° 42. Verlag-CDE. Berna, Suiza. 344 p.

1992 Desarrollo y Participación. Experiencias con la revalorización del conocimiento campesino en Bolivia. Serie Técnica 27. AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 58p.

RIST, S.; et. al.

2000 Cosmovisión andina y desarrollo autosostenible. pp. 197-210. En: Haverkort, B.; et. al. Comida para el pensamiento: visiones antiguas y experiencias nuevas de la gente rural. Cochabamba: COMPAS. 267p.

- RIVERA, S.
1984 Pachakuti: Los Horizontes Históricos del Colonialismo Interno (mineo) pp 33-93.
- ROCHA, J.
1990 Sociedad Agraria y Religión: Cambio Social e identidad Cultural en los Valles de Cochabamba. Biblioteca Andina. N° 8. La Paz: HISBOL. UCB. ISET. 127p.
- ROGERS, E. M.; SVENNING, L.
1973 La subcultura de los campesinos. En: Rogers, E M y Svenning L. La modernización entre los campesinos. Fondo de Cultura Económica, México, 1973. pp. 28-67.
- SAIGNES, T.
1986 En Busca del Poblamiento Étnico de los Andes Bolivianos (siglos XV y XVI). Avances de Investigación, N° 3. Museo Nal. de Etnografía y Folklore, Bolivia. pp. 5-48.
- SAIGNES, T.
1983 Políticas Étnicas en Bolivia Colonial Siglos XVI-XIX. En Historia Boliviana III/1. Bolivia. pp. 1-30.
- SAN MARTÍN, J.
1998 UKAMAPI. Así no más es pues. En la búsqueda del enfoque para el desarrollo rural autosostenible. UMSS-AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 199p.
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.
1982 Migraciones Internas en el Alto Perú. El Saldo Acumulado en 1645. Historia Boliviana II/1. Bolivia. pp. 11-19.
1977 La población de América Latina desde los tiempos precolombinos al año 2000. Alianza, 2da edición. 190p.
- SÁNCHEZ DE PUERTA, F.
1995 Sociología de la agricultura y tecnología agraria: Más allá de la simple consideración del agricultor. Comunicación presentada al III Coloquio Hispano-Portugués de Estudios Rurales, celebrado en Lisboa los días 19 y 20 de Mayo de 1995. pp. 1-21.
- SCHULTE
1997 Los conceptos teóricos y metodológicos de la investigación. pp. 1-70. En: Proyecto de investigación agrarias PIA. Estrategias de organización socioeconómica campesina frente a los retos del mercado: el ejemplo de la región kallawaya. La Paz: PIA/PIEB. 665p.
- SEVILLA, E.
1990 Redescubriendo a Chayanov: hacia un neopopulismo ecológico. En: Agricultura y sociedad N° 55. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid-España. 1990. pp. 201-237.

- STERN, S. J.
1987 La variedad y la ambigüedad de la intervención indígena andina en los mercados coloniales europeos: apuntes metodológicos. En: Harris, O. et.al. Compiladores. La participación indígena en los mercados surandinos. CERES. La Paz-Bolivia. 1987. pp. 281-312.
- TAPIA, N.
2000 "Agroecología y Conocimiento Campesino en los Andes: el caso del Ayllu Majasaya Mujlli. Cochabamba-Bolivia. Tesis Doctoral, presentada en la Universidad de Córdoba, España. 302p.
- TEMPLE, D.
1986 La dialéctica del don. Economía y Planificación. La Paz: HISBOL. 73p.
- TICONA, E.
2000 Organización y liderazgo aymara: La experiencia indígena en la política boliviana 1979-1996. La Paz: Universidad de la Cordillera. 210p.
- TOLEDO, V.M.
1992 El nuevo movimiento ecológico de los indígenas y campesinos de México. En: Moguel, J. Y L. Hernández, Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural. Siglo XXI editores, págs. 281.
- URIOSTE, M.
1988 Segunda reforma agraria: campesinos, tierra y educación popular. Talleres CEDLA. N° 1. La Paz: CEDLA. 219p.
- URTON
1991 Las Unidades de Análisis en el Estudio de la Reproducción y Transformación de las Sociedades Andinas. En: Reproducción y Transformación de las Sociedades Andinas: Siglos XVI-XX. Abya-Yala/MLAL, Quito-Ecuador. pp. 29-46.
- VAN DEN BERG, H.; SCHIFFERS, N.
1992 La cosmovisión aymara. Biblioteca andina. N° 14. La Paz: UCB. HISBOL. 383p.
- VELEZ, G.
1994 Alternativas a los sistemas dominantes de la propiedad intelectual. Biodiversidad 4. REDES-AT-GRAIN, Uruguay, pp. 11-15
- VIVES AZANCOT, P. A.
1988 Los conquistadores y la ruptura de los ecosistemas aborígenes. En: Solano, Francisco. et. al. 1988 compiladores. Proceso histórico al conquistador. Alianza Universidad. Madrid-España. pp. 95 - 118.
- WACHTEL, N.
1981 Los Mitimaes del Valle de Cochabamba: La Política de Colonización de Wayna Capaj. En Historia Boliviana Y/1. Bolivia. pp. 21 - 57.
- WIRTH, L.
1962 El urbanismo como forma de vida. 2da. edición. Ediciones 3, Bs. As.-Argentina, 1968. 41p.

Avance de investigación: gobernancia en los municipios y organizaciones locales para la gestión de la biodiversidad en el parque Tunari

Dora Ponce Camacho¹

1. Introducción

Considerando los avances del proyecto global sobre el Parque Nacional Tunari, se ha planteado la tesis doctoral sobre *Gobernancia Local*, con el objetivo principal de estudiar las Formas de Gobernancia en el Parque Nacional Tunari en relación a la Gestión de la Biodiversidad, como base para evaluar la pertinencia de otorgar un rol más activo a los municipios en la gestión de la Biodiversidad en áreas protegidas.

Para llegar a este objetivo general, se ha planteado los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar las formas de gobernancia en el Parque Nacional Tunari.
- Comprender las interrelaciones entre formas actuales de gobernancia con relación a la gestión de la Biodiversidad.
- Evaluar la pertinencia de otorgar un rol más activo a los municipios en la gestión de la Biodiversidad en Areas Protegidas.
- Identificar posibles roles de los municipios en la gestión de la Biodiversidad en áreas protegidas como contribución a la reformulación de las políticas públicas.

En el marco del IP8 “*Gobernancia*” se define como los procesos colectivos formales e informales de decisión e interacción entre actores relacionados a la

1 Ingeniero Agrónomo. Magíster en Agroecología, Cultura y Desarrollo Sostenible (AGRUCO-UMSS). Doctorante NCCR-IP8 (IUED-AGRUCO-UMSS). Investigadora de AGRUCO y docente de la carrera de Veterinaria y Zootecnia de la UMSS.

distribución de recursos; procesos que implican la interacción de estructuras de poder, instituciones sociales, normas, reglas y políticas públicas, consideradas como “un factor determinante en la relación entre el desarrollo humano y su medio ambiente” (nccr Norte-Sud; IP8, 2002).

Para el caso del Parque Nacional Tunari, se analizará específicamente las formas de gobernanza en tres municipios, estudios de caso que se ha determinado considerando las diferencias mas marcadas en los aspectos que caracterizan las formas de gobernanza. Es importante señalar que la selección del Estudio de Caso ha sido realizada sobre la base de un trabajo previo de Caracterización Socioeconómica, Política y Cultural de los 11 municipios afectados por el Parque Nacional Tunari.

La caracterización de los 11 municipios del Parque Nacional Tunari, fue una tarea ardua de revisión de información todavía parcial y dispersa, la misma que fue validada en terreno por un trabajo de tesis de grado realizado por A. Aguilar con el apoyo del equipo AGRUCO. El apoyo cercano y activo brindado a este trabajo principalmente durante el proceso de validación de la información en terreno, ha permitido para el caso de esta investigación consolidar las relaciones con los diferentes actores que participan en la gestión municipal.

¿Por qué estudiar las formas de Gobernanza en los municipios?. En principio partimos de la idea de que los municipios hoy en día son los espacios públicos más importantes para la consolidación del gobierno local, y en estos espacios se están generando procesos formales e informales de toma de decisión a través de la interacción de diversos actores sociales para la distribución y gestión de recursos naturales (principalmente desde la aplicación de las políticas de descentralización) Además son también los espacios mas adecuados para que los actores locales puedan incidir en algunas políticas públicas sobre conservación de la Biodiversidad.

En este panorama, para entender las formas de gobernanza, queremos partir de reconocer que tanto las estructuras de poder, las instituciones sociales y la sociedad civil en general están reguladas por una serie de reglas y normas formales e informales que rigen su actuación en el espacio colectivo, sea este publico o no. En este entendido, partiremos analizando las “normas oficiales” referidas a la Biodiversidad como instrumentos fundamentales de las políticas públicas, es decir revisaremos las disposiciones legales vigentes para la conservación de la Biodiversidad en Bolivia, para posteriormente analizar los múltiples procesos de interacción entre los actores sociales que participan en la elaboración, implementación y apropiación de estas normas.

Además, todo este proceso de implementación de políticas públicas para la Conservación de la Biodiversidad en áreas protegidas se analizará considerando otro proceso importante que corresponde a la implementación de las políticas de descentralización en el Estado boliviano. Porque es a partir de la aplicación de

la Ley de Participación Popular (1994), que el Estado boliviano ha reconocido la participación de nuevos actores locales en la toma de decisiones, determinando que estos ya no se limiten a los niveles y estructuras de participación ofrecidos por las entidades estatales, sino se constituyan en actores críticos y propositivos, una prueba de ello es que actualmente están planteando modificaciones profundas a la Constitución Política del Estado y la revisión de otras disposiciones legales.

Esta apertura a la participación “efectiva” de las organizaciones de base, es también una apertura a propuestas alternativas para reformar o mejorar las estructuras existentes, hablamos de procesos de integración de diversas representaciones sociales en torno a objetivos o finalidades compartidas. Es en el ámbito Municipal que actualmente se establece esta trama compleja de interrelaciones entre diversos actores sociales, que bien podría ser un potencial para lograr la concertación.

2. Políticas públicas para la conservación de la biodiversidad

Desde una conceptualización clásica entendemos una política pública como el resultado de un proceso de toma de decisiones que se divide en varias etapas: la identificación del problema y la demanda para la acción pública por un iniciador; el establecer el problema en la agenda gubernamental; el estudio, la formulación de soluciones; la decisión entre acciones posibles; la legitimación de la decisión; la implementación y evaluación de los resultados obtenidos (Jones, 1970). Según esta definición, una Política Pública es el resultado de un proceso de toma de decisiones, para entender por ejemplo ¿Porqué las políticas públicas referidas a la creación de áreas protegidas no gozan de legitimidad en Bolivia? También habría que plantearse otras preguntas como por ejemplo ¿Cómo y quienes elaboran estas políticas y sus instrumentos normativos? ¿Cómo y quienes las aplican? ¿Existen procesos de empoderamiento? ¿Qué aspectos facilitan o dificultan estos procesos de empoderamiento?

En la población boliviana existe actualmente una “susceptibilidad” creciente respecto a la normatividad vigente en algunas políticas públicas relacionadas a la gestión de los recursos Naturales. Este hecho se expresa claramente cuando el Gobierno quiere normar la Conservación de la Biodiversidad a través de la creación de áreas protegidas y los sectores afectados reaccionan inmediatamente a través de sus organizaciones.

En este panorama, las instituciones gubernamentales tienen dificultades para legitimar las decisiones referidas a la creación de áreas protegidas, aspecto que se manifiesta de manera clara en los conflictos sociales que se suscitan entre las poblaciones locales y los representantes del Estado en territorios declarados Parques Nacionales, como ocurre en el Parque Nacional Tunari. Es normal que

en estos casos las primeras críticas sean dirigidas a la política pública y sus instrumentos normativos, se las analiza y se hace notar que presentan vacíos, contradicciones, que no se adecua a la realidad etc. (es la parte que presentamos en este avance), pero también es importante no perder de vista en la reflexión y análisis el hecho de que estas políticas son el resultado de procesos sociales de toma de decisión donde han tenido que participar ciertos actores sociales, con ciertos enfoques, con ciertos objetivos. Entonces uno se pregunta si el problema radica en las políticas públicas y sus instrumentos normativos (como resultado puntual) o el problema esta en el proceso que se ha seguido para su elaboración e implementación, en las complejas interacciones que se han suscitado para cumplir con estos pasos en los diferentes ámbitos: local regional, nacional e internacional.

Además se debe tener en cuenta que cada política pública implica una teoría de sociedad (un *marco normativo general que afecta la asignación de recursos*), una visión de un problema específico (*metas u objetivos a lograrse en torno a esta cuestión*), un público (*individuos o grupos sociales involucrados*) una demarcación geográfica (*límites físicos de implementación*) y un concepto de poder (*un trasfondo de autoridad y una jerarquía vinculada a la naturaleza del estado-nación*) (NCCR-IP8, 2002).

En el caso boliviano se puede apreciar claramente que las políticas nacionales sobre “Desarrollo Sostenible” que contempla también la Conservación de la Biodiversidad, están influenciadas por dos corrientes.

La primera que viene del ámbito Internacional y ha arrancado con la sucesión de cumbres mundiales sobre “Desarrollo Sostenible”, que posiblemente se inicio en Estocolmo en 1972, fue planteada de manera mas clara en 1982 en el primer congreso mundial de Parques Nacionales realizado en la isla de Bali-Indonesia, donde se empezó a promover el nexo entre el “manejo de áreas protegidas y el desarrollo” (UICN, 1990). Y a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo o “Cumbre de la Tierra” realizado el año 1992 en Río de Janeiro-Brasil. En la Agenda 21 se empezó a definir un amplio y detallado plan de acción que bosqueja la manera en que los Estados deben conducir los asuntos relacionados con el medio ambiente hacia el Siglo XXI (CEJIS 2002) proceso que se ha ido consolidando hasta la última reunión realizada en Johannesburgo en 2002, a las cuales se ha adherido el gobierno boliviano de una manera clara, al suscribir y ratificar los diferentes convenios que comprometen al país a trabajar en el fortalecimiento de su sistema legislativo. Por ejemplo la adhesión de Bolivia en la denominada agenda 21 ha comprometido el establecimiento de áreas protegidas y humedales, la elaboración e implementación de la estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad. También a partir de la participación en estos eventos tenemos el programa nacional de cambio climático, el programa de combate a la desertificación y otros. Esta corriente es impulsada por el gobierno boliviano y es la voz oficial del Estado.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido con mucha fuerza una segunda corriente que cuestiona la validez de estas políticas no solo en nuestro país, sino en el mundo entero y principalmente en América Latina, que propicia una posición anti-globalización, al considerar que estas políticas macro buscan subordinar aún mas a las economías menos desarrolladas a favor de las economías de los países desarrollados, a través de mecanismos legales de apropiación de las riquezas naturales y principalmente de la Biodiversidad. Estas siguen siendo sin embargo las “otras” voces que a la hora de definir políticas nacionales no son tomadas en cuenta y muchas veces ni siquiera son escuchadas, pero con las que se identifican gran parte de la población boliviana, como son principalmente las organizaciones campesinas.

3. Sistema normativo para la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas

En Bolivia, el primer Area Protegida fue creada en 1939 (Parque Nacional Sajama) pero la normativa nacional sobre las áreas protegidas se consolida recién después de la suscripción del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Este convenio, firmado por Bolivia, fue aprobado y ratificado por el Honorable Congreso de la Nación en 1994, su texto transcrito *in extenso* se ha convertido en Ley de 1580 de la República conforme las prescripciones constitucionales (fue publicada el 15 de junio de 1994) Este Convenio Internacional en su artículo 8 “*conservación in situ*” compromete a cada parte a conformar un sistema de áreas protegidas para conservar la diversidad biológica.

El gobierno boliviano, ha dado cumplimiento al mismo a través del D.S. No 23845 del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP), estableciendo un sistema normativo que se ha ido implementando paulatinamente a través de una serie de disposiciones legales: Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales. Para el tema específico de Biodiversidad, hasta 1992 el gobierno boliviano había establecido 4 disposiciones legales, actualmente nuestro país cuenta con 24 disposiciones legales, significa que en los últimos 10 años el gobierno boliviano ha producido 20 disposiciones legales para garantizar la conservación y uso sostenible de Biodiversidad en el país, las preguntas son ¿quiénes han participado en la elaboración de estas disposiciones legales? ¿Cuántas se aplican en terreno? ¿Cuántas de estas disposiciones legales han sido incorporadas o apropiadas por la población que en la práctica realiza la gestión de la Biodiversidad? ¿Que significa este incremento tan acelerado de disposiciones legales para la conservación de la Biodiversidad?

Estas preguntas como en el caso de las políticas publicas nos dirigen a la misma conclusión preliminar, Bolivia efectivamente ha cumplido con la Comunidad Internacional el compromiso de conformar un sistema normativo que

permita viabilizar las acciones dirigidas a la conservación de la Biodiversidad, sin embargo este avance no se visualiza en la practica interna del país, al parecer los mecanismos de elaboración e implementación, la poca participación local en estos procesos y las imprecisiones y contradicciones en este sistema normativo ha dificultado su aplicación en el ámbito local y ha logrado mas bien acrecentar los conflictos sociales.

Como indica Guerra (2002), una mirada rápida al sistema normativo de las áreas protegidas evidencia una óptica centralizada y sesgada, dirigida a la conservación de regiones geográficas de propiedad estatal, catalogadas como de importancia nacional sobre la base de estudios incompletos que toman en cuenta principalmente información biológica (muchas veces todavía parcial) y que generalmente carecen de cualquier información seria sobre aspectos políticos, sociales y culturales de las poblaciones que habitan estos territorios y sus áreas circundantes.

En el caso del Parque Nacional Tunari, los pocos estudios relativos a la conservación de la Biodiversidad, fueron realizados después de su creación (1962), por tanto si en su momento no existió un estudio técnico serio que justifique su creación, actualmente tampoco existe un estudio que justifique su ampliación (1992), Los pocos estudios técnicos sobre el potencial del área, se encuentran dispersos en los archivos de las diversas instituciones que han realizado trabajos puntuales en lo que hoy constituye el PNT, especialmente de la ladera sud del parque donde se ubican los municipios de Cercado y Sacaba.

En consecuencia, para el caso del Parque nacional Tunari el mal manejo de datos y la información poco precisa, es casi normal, un ejemplo específico es el referido al Numero de comunidades existentes, los datos oficiales hablan de 145 comunidades asentadas en el Parque Nacional Tunari, el estudio iniciado por el equipo de Investigación AGRUCO-NCCR-IP8-IP1 con el apoyo del equipo PAMs y la importante colaboración de las organizaciones de base durante los talleres PAMs, ha mostrado en menos de seis meses que en el Parque habitan aproximadamente 348 comunidades campesinas, y que los municipios afectados no son solo los 9 municipios que identifica la información oficial sino que se trata de 11 municipios. Estos primeros trabajos en terreno, con la colaboración de las organizaciones locales ha permitido al equipo de investigación de AGRUCO realizar una caracterización sociopolítica precisa y actualizada (en terreno), de los once municipios afectados por el PNT.

4. Algunas inconsistencias en el sistema normativo relacionadas a la biodiversidad y áreas protegidas (identificación preliminar)

La Ley del Medio Ambiente (N° 1333), publicada el 27 de abril de 1992, es un instrumento jurídico de contenido general; en su Art. 64 indica que la decla-

ración de las áreas protegidas es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, pero la norma no especifica si la compatibilidad a la que hace mención esta dirigida a regular las actividades económicas de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas que se hallan dentro el área protegida, por otra parte, no dice nada acerca del tratamiento que se dará a otro tipo de propiedad privados, por ejemplo los terrenos de empresarios privados o de agricultores que no forman parte de las comunidades campesinas y pueblos indígenas. Estas imprecisiones en la normativa legal, esta ocasionando una serie de conflictos en varias áreas protegidas del país.

El reglamento General de Areas Protegidas (D.S. No 24781) que tiene el objetivo de regular la gestión de las áreas protegidas y establecer su marco institucional, cuando se refiere al Comité de Gestión como instancia de participación ciudadana, lo reconoce como órgano de participación y representación de los pueblos indígenas, las comunidades originarias, las municipalidades, y otras entidades públicas y privadas involucradas en la gestión del área; *le otorga roles de fiscalización y planificación, pero no de decisión*. Para las organizaciones locales del PNT, la participación sin poder de decisión no tiene ningún sentido, por tanto no hay ningún interés en participar en este comité, porque solo estarían legitimando las decisiones de las autoridades designadas por el Estado boliviano para esta tarea. En este caso, las organizaciones campesinas han desconocido al Comité de Gestión, aseguran que los representantes campesinos no gozan de legitimidad en sus organizaciones locales, que se han vendido a los representantes del gobierno. La pregunta que surge es ¿Cómo se ha conformado este comité de gestión? ¿Si los representantes campesinos no son legítimos, entonces a quien representan? En el caso de los municipios, estos pueden participar en el comité de Gestión a través de sus representantes, pero parece ser que la participación sin poder de decisión no es de su interés y en el caso del PNT prefieren mantenerse al margen de estos procesos conflictivos.

En la Ley del Medio Ambiente, el marco normativo aparece difuso dando lugar a que se cometan diferentes atropellos, al amparo de ciertos artículos como el Art. 33 que señala "En casos excepcionales y solo cuando se declare de interés nacional, mediante Decreto Supremo se permitirá el aprovechamiento de Recursos Naturales renovables y no renovables...". Este artículo abre las puertas a las empresas privadas que amparadas en estos vacíos legales logran concesiones mineras y petroleras en las áreas protegidas. Por ejemplo en el Parque y Area natural de Manejo Integrado Altamachi de la provincia Ayopaya existen 18 concesiones Mineras legales y existen otras 16 en proceso de trámite. En el Parque Nacional Tunari se tiene a la empresa Misicuni desarrollando trabajos para proveer de agua a la ciudad de Cochabamba.

Ni el Código Minero, ni la Ley de Hidrocarburos reconocen a las áreas protegidas como sitios donde no es posible realizar actividades de explotación,

él vacío legal hace que no se consideren las normas especiales que rigen en estos espacios, lo que genera inseguridad jurídica en el acceso y la conservación de los Recursos Naturales. Mientras el Reglamento General de Areas Protegidas en el caso de los Parques Nacionales restringe las actividades productivas cotidianas de las poblaciones locales que habitan y han habitado estos territorios desde cientos de años; otras disposiciones como la Ley de Hidrocarburos y el Código Minero facultan a Empresas (muchas de ellas extranjeras) a explotar estos recursos en las Areas Protegidas, provocando la contaminación de los ríos, la tumba y quema de la vegetación y la pérdida de la Biodiversidad por efecto de las actividades propias de extracción de estos recursos.

Por otro lado el Decreto Supremo 25158 que reglamenta el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) excluye a las áreas protegidas de carácter departamental del ámbito de su competencia. Pues se obliga a garantizar la gestión integral sólo de las áreas protegidas de interés nacional (Art. 3). Aquí se evidencia una confusión, porque la misión del SERNAP es coordinar el funcionamiento del SNAP (y dentro del SNAP, por disposiciones legales, están todas las áreas protegidas y no solo las de carácter nacional).

No existe ninguna norma que faculte a los municipios a crear y administrar áreas protegidas en el marco del SNAP. El Decreto Supremo No 25158 que reglamenta el SERNAP las menciona en el Art. 7 inc. J. Una de las atribuciones de esta institución sería promocionar áreas protegidas departamentales y municipales (como se ha explicado, no existe base legal para crear áreas protegidas municipales). Ante estas inconsistencias en el régimen legal es que los municipios no logran identificar su rol en el tema de las áreas protegidas, esto repercute directamente en su participación.

Además existe un vacío legal sobre criterios de distribución de beneficios por el aprovechamiento de Recursos Naturales en áreas protegidas; aún si lograra la participación de las poblaciones locales y los municipios, cual la seguridad de estos actores de acceder a los beneficios, si justamente estos vacíos legales son más bien un instrumento para que algunas empresas privadas aprovechen para concesionarse recursos y aprovechar sus beneficios.

Tampoco existen mecanismos de compensación por impactos adversos ocasionados por distintas actividades y usos, por ejemplo en el caso de las empresas que realizan actividades de extracción de minerales e hidrocarburos en estas áreas protegidas.

Es importante subrayar que todavía no existe régimen legal específico sobre las áreas protegidas municipales, zonas de amortiguación, ni corredores biológicos, sin embargo en Bolivia se está promocionando el tema de los corredores biológicos Ejemplo Corredor Villcabamba-Amboro, un corredor binacional entre Perú y Bolivia.

Estos son algunos ejemplos que muestran que el régimen legal sobre Areas Protegidas en Bolivia contiene algunas imprecisiones y vacíos, que sumados a la

inestabilidad institucional, la difusa definición de roles de los actores institucionales y los mecanismos poco participativos de elaboración y aplicación de políticas públicas, ahondan los conflictos en estos territorios declarados para la conservación y protección de la Biodiversidad.

Actualmente la identificación de estos vacíos legales en la normativa ambiental boliviana, esta siendo estudiada para proponer la inclusión de otras disposiciones como anexos a leyes o reglamentos ya vigentes y/o la conformación de nuevos instrumentos jurídicos, sin embargo el proceso sigue siendo asumido por un grupo reducido de personas (personas e instituciones privadas vinculadas al trabajo en áreas protegidas) que una vez mas están decidiendo por la diversidad de actores sociales que componen el pueblo boliviano.

No estamos en contra de este proceso de revisión de la normativa sobre conservación de la Biodiversidad para incidir en las políticas públicas (es mas, es uno de los objetivos propositivos de esta investigación). Pero no estamos de acuerdo en que para subsanar una falencia se utilice el mismo mecanismo, nada menos para hacer más complejo el sistema legislativo nacional, por tanto menos entendible y menos conocidas para el pueblo boliviano. A través de esta investigación apostamos a la revisión de estas normativas como instrumentos fundamentales de las políticas, pero como resultado de un proceso participativo de toma de decisión, con espacios colectivos de análisis y reflexión tanto en el ámbito local, regional y nacional.

Reconocemos que un análisis del impacto de la aplicación de políticas públicas de Conservación de la Biodiversidad en el ámbito local, carecería de sentido sino contextualizamos el mismo en un ámbito más global. De ahí que se reconoce que las cuestiones de Biodiversidad han sido institucionalizadas de forma creciente, incluyendo la creación de instrumentos legales internacionales, organizaciones especializadas, foros y programas financieros, "Régimen Internacional de Biodiversidad" (NCCR-IP8, 2002) donde justamente se están originando regímenes de regulación global, entonces resulta también imprescindible referirnos a las formas de cooperación internacional para el desarrollo.

5. Identificación de las categorías de actores sociales para la gestión y conservación de la biodiversidad en áreas protegidas

Las normas y reglas formales son influenciadas por modelos teóricos elaborados por expertos, formuladores de políticas, y sus intereses subyacentes, sus valores y éticas, pero también *por las organizaciones a cargo de implementarlas* (NCCR-IP8, 2002). En este sentido se ha realizado una identificación preliminar de los actores sociales involucrados en la producción, implementación y apropiación de políticas públicas referidas a la Conservación de la Biodiversidad en áreas protegidas.

Un ejercicio preliminar utilizando el modelo de Jacob, 1993 nos ha permitido junto a algunas Autoridades de los Municipios del Parque Nacional Tunari, identificar las principales categorías de actores involucrados en el tema de Gestión de la Biodiversidad la misma que se resume en el siguiente cuadro.

Cuadro 1
Categorías de actores del Parque Nacional Tunari

N I V E L D E I N T E R V E N C I O N	INTERNACIONAL					
	NACIONAL	Gobierno central	MDSP DNCB DGB Vice Ministerio de Recursos Naturales y Desarrollo Forestal Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente SERNAP SIRENARE	Viceministerio de Descentralización administrativa y Desarrollo Municipal	Confederación de campesinos CSUTCB	CONAMAQ
	REGIONAL	Prefectura	Superintendencia agraria Superintendencia Forestal Dirección de Recursos Naturales	AMDECO Comité Cívico Brigada parlamentaria	TAQUINA MISICUNI Cruz Verde SEMAPA CEDIB	Federación de Campesinos FSUTCC FEJUVE
	MICRO REGIONAL	Sub prefectura	Unidad Dirección de Medio Ambiente	Municipios Comités de Vigilancia		Sub centrales Centrales regionales
	LOCAL	Corregimiento	PROMIC PROFOR	Agencia Cantonal OTBs		Sindicatos Juntas vecinales
		Organización Administrativa desconcentrada	Servicios técnicos desconcentrados	Estructura descentralizada	Organizaciones Privadas (empresas cooperativas)	Organizaciones/modernas asociaciones, sindicatos

Adaptado de Jacob (1993: 4).

CATEGORIAS DE ACTORES

MDSP =Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

DNCB = Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad.

DGB = Dirección General de la Biodiversidad.

Este ejercicio preliminar ha permitido identificar la diversidad de actores que están involucrados en los procesos de producción, implementación y apropiación de normas referidas a la Conservación y gestión de la Biodiversidad en Bolivia; sin embargo este cuadro debe interpretarse también como la diversidad de enfoques y valores que en ciertos momentos interactúan (interrelaciones complejas y simultáneas). Algunos tienen una mayor participación en los procesos de toma de decisión

para la elaboración de las normas y políticas públicas (principalmente los que están en niveles de intervención nacional y regional), otros tienen un rol más activo y participan en la toma de decisiones referida a la implementación de normas y/o de las políticas públicas (los que participan en los niveles intermedios) y también están los que en la práctica están gestionando la Biodiversidad (específicamente los del nivel local) Esta es casi una tendencia general para el caso de la categoría de actores que corresponden a las instancias gubernamentales, sin embargo tiene una variante importante en el caso de las ONGs y las organizaciones campesinas, donde la toma de decisiones se realiza de manera más coordinada con las bases.

Es importante remarcar que muchos de estos actores institucionales, principalmente los que responden a la estructura gubernamental, son constantemente removidos de sus cargos (cargos políticos), por tanto estos funcionarios muchas veces no están interiorizados o no tienen el tiempo suficiente para involucrarse seriamente en estos procesos de toma de decisión ya sea para la elaboración o implementación de las políticas públicas, o en aspectos operativos en la implementación de los planes de manejo, esto hace que no haya continuidad en las acciones emprendidas.

Si a este hecho sumamos los vacíos y contradicciones que se presentan en el sistema legislativo, veremos claramente que la ambigüedad entre políticas nacionales, regionales y locales, se genera en estos procesos donde la inestabilidad institucional y la poca claridad de las normativas, incide sobre la comunicación y coordinación entre las diferentes categorías de actores, en los que subyace el desconocimiento de sus atribuciones y competencias, lo que desemboca generalmente en la sobre posición de roles, duplicidad de esfuerzos.

Este estudio se concentrará en el ámbito local sin embargo en los casos que se requiera, se ampliará la visión hacia los niveles regional, nacional e internacional porque las formas de gobernanza y la gestión de la biodiversidad en el ámbito local están fuertemente influenciados por hechos sociales, políticos y económicos que se suscitan en estos ámbitos y principalmente por las decisiones que toman en estos niveles.

6. Áreas protegidas y participación popular en Bolivia

Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular en 1993 y la Ley de Descentralización en 1995, los municipios se han convertido en el eje administrativo y de desarrollo para toda estrategia y/o política sectorial o transversal que se quiera implementar en Bolivia. Por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación ha identificado a los Municipios como uno de los espacios más importantes para la implementación de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad.

Sin embargo, la Legislación referida a las áreas protegidas, no prevé un papel importante para los gobiernos municipales en la gestión de las áreas protegidas, en vista de que el municipio no es el espacio físico adecuado para planificar, organizar o administrar los recursos naturales. Por lo tanto su inserción no surge de la lógica de la gestión de las áreas protegidas, sino de la organización político administrativa del Estado y de la competencia municipal en la planificación e implementación de inversiones públicas (MDSP, 2002).

Los vacíos legales en el tema de las áreas protegidas, hacen que los municipios poco o nada hayan avanzado en sus políticas de Conservación de la Biodiversidad, aunque la Ley de Participación Popular reconoce el derecho de los municipios a planificar, organizar y administrar los recursos naturales dentro su jurisdicción; la Ley Forestal boliviana descentraliza la administración de las áreas forestales asignándole al municipio nuevas funciones no solo en el control y extracción y comercialización de la madera, sino también mediante la constitución de reservas forestales municipales, que pueden ser adjudicadas en concesión a organizaciones de la zona constituida para su aprovechamiento llamadas Asociaciones Sociales de Lugar (van Dam, 1999).

La participación de los municipios en la gestión de las áreas protegidas debe analizarse de manera diferenciada en los siguientes casos:

- Cuando se habla de categorías de áreas protegidas municipales
- Cuando se habla de la participación de los municipios en otras categorías, en este caso en los Parques nacionales.

En el primer caso el sistema legislativo boliviano muestra que no existe ninguna norma que faculte a los municipios a crear y administrar áreas protegidas en el marco del SNAP. El Decreto Supremo N° 25158 que reglamenta el SERNAP las menciona en el Art. 7 inc. j) Una de las atribuciones de esta institución sería promocionar áreas protegidas departamentales y municipales (como se ha explicado, no existe base legal para crear áreas protegidas municipales) y actualmente en Bolivia existen áreas protegidas municipales.

En el segundo caso, la Ley de Municipalidades N° 2028 publicada en octubre de 1999, muestra que concretamente el municipio no tienen facultades legales para crear ni administrar directamente áreas protegidas. Claro está, puede participar en su gestión y manejo con la autoridad Nacional de Areas Protegidas. Además es importante subrayar que todavía no existe régimen legal específico sobre las áreas protegidas municipales, zonas de amortiguación ni corredores ecológicos.

Esto nos muestra una vez más que la normativa en Bolivia con relación a las áreas protegidas es todavía poco clara, no muestra una definición clara de las interrelaciones de las políticas públicas nacionales y municipales, lo que no permite

definir tampoco las atribuciones de los municipios en lo que se refiere a la gestión y conservación de la Biodiversidad en áreas protegidas.

Sin embargo, en la práctica las experiencias en varios Parques Nacionales muestran claramente que hay una necesidad de que los municipios se involucren de manera mas activa en la gestión de estas áreas protegidas.

7. Algunos instrumentos y mecanismos de la gestión municipal que pueden favorecer la participación de las organizaciones locales en la gestión de las áreas protegidas

Aunque todavía se desconoce el nivel real de capacidad de gestión de los municipios en el tema de Biodiversidad, en los aproximadamente diez años que se encuentra en vigencia la nueva estructura municipal, se constata que ha existido un proceso de aprendizaje social en los mecanismos de gestión a diferentes niveles: financiero, administrativo, de planificación, de participación, de control social y Desarrollo Local. Por ejemplo se han creado Direcciones y Unidades de Medio Ambiente, se han impulsado actividades productivas que podrían ser instrumentos posibles para generar propuestas concertadas para la gestión de la Biodiversidad y gestión de áreas protegidas.

Además el municipio cuenta con:

- Marco político institucional establecido, con participación de diversas instituciones / organizaciones locales y externas.
- Instrumentos y mecanismos de planificación participativa: Plan de Desarrollo Municipal (PDM), POAs.
- Cuenta con Instancias y Mecanismos de Control social: Comités de Vigilancia y Concejo Provincial de Participación Popular (CPP)
- Definición de competencias en materia de Desarrollo Humano sostenible (Art. 8,I de la Ley de Municipalidades Ley 2028/10/99).

En este marco es necesario analizar las experiencias acumuladas y profundizar el estudio sobre formas de gobernanza local para identificar sus potenciales en la perspectiva de otorgar un rol mas activo a los municipios en la Gestión de las Areas Protegidas.

Partimos también de la hipótesis de que en la medida que el gobierno municipal muestre una apertura hacia formas de gobernanza comunal, contara con instrumentos y mecanismos participativos de control social que están siendo aplicados en las comunidades para gestión de sus recursos naturales en base a Normas que corresponden a sus "Usos y Costumbres".

7.1. Formas de gobernanza de las organizaciones tradicionales

En Bolivia las organizaciones sociales tradicionales² han desarrollado formas propias de gobernanza, en el que el ejercicio de la autoridad esta basada en un sistema de cargos de carácter rotativo que permite a todos los miembros de la comunidad cumplir con esta función, estos sistemas de cargos mantienen asimismo una complementariedad con los diferentes niveles y formas de organización social en el ámbito local y externo. En estas formas de organización social comunitaria subyacen procesos de toma de decisión de carácter colectivo, que permiten asimismo desarrollar mecanismos propios de control social desde las bases, a partir de las normas básicas que regulan su funcionamiento, el espacio más importante para el desarrollo de estos procesos es la “asamblea comunal”, donde se discute, analiza, y se lleva a consenso las decisiones que tienen que ver con el bienestar de la comunidad y de las familias que lo integran.

Las funciones de las organizaciones tradicionales están estrechamente vinculadas a las actividades comunitarias que abarcan todos los ámbitos de la vida en las comunidades regulando las relaciones sociales, económicas, políticas entre la comunidad y las familias. Asimismo administran justicia y solucionan conflictos a nivel familiar y comunal. Es importante destacar que actualmente la organización sindical constituye como un nexo entre la comunidad, el Estado y las instituciones externas a la comunidad.

Por tanto la organización social es la principal institución reguladora en el ámbito comunal que interviene y toma decisiones en los diferentes aspectos sociales, políticos, productivos, éticos y culturales de la vida comunal. Hace función de un “gobierno local”, en el que la participación y aporte de sus miembros es fundamental. Las decisiones del sindicato las toman conjuntamente los miembros en reuniones mensuales o extraordinarias. Los puntos que con mayor frecuencia se tratan en estas reuniones pueden resumirse y agruparse en: control de asistencia, lectura del acta de la reunión anterior, informe de las autoridades (generalmente referido a reuniones con el sector campesino, tramites en los municipios y otros), actividades productivas (aquí se trata por ejemplo el cumplimiento a las normas de uso y acceso a los recursos naturales), aportes o cuotas, educación, coordinación con instituciones, administración de justicia

2 En este trabajo nos referiremos como organizaciones tradicionales a las formas de organización que perviven en las comunidades campesinas y pueblos originarios de la región andina del país donde paradójicamente existe una dualidad y complementariedad entre dos formas de organización: la tradicional, ligada a la concepción del Ayllu andino y a las figuras de los alcaldes de indios y jilakatas; la del sindicalismo agrario de origen europeo, que nace a partir de la Reforma Agraria de 1952 e impulsa el surgimiento de dirigentes sindicales, cumpliendo ambos, un rol fundamental que los une en un objetivo común, que es la cohesión social de la comunidad y del Ayllu (Rist, 2001).

al interior de la comunidad (principalmente en aquellos casos que alteran las relaciones humanas) (Mariscal, 1999: 59)

Muchas de las decisiones planteadas por las bases en la asamblea comunal, posteriormente son socializadas por sus representantes en instancias superiores de la organización sindical como es el caso de las subcentrales, centrales regionales, centrales provinciales, la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) y muchas hasta la Confederación Nacional (CSUTCB), esto permite que las decisiones tomadas desde las bases vayan adquiriendo mayor fuerza y peso al ser planteadas desde sus formas de representación regional y nacional.

La característica principal de las “asambleas comunales” es que su funcionamiento esta regulada por normas internas que han sido establecidas por los mismos miembros de la comunidad, gozan de legitimidad, son flexibles porque continuamente son revisadas y readecuadas a la dinámica propia de la comunidad y a situaciones de crisis o cambio que se generan en ámbitos externos a ella. Es fundamental resaltar que en estas normas comunales subyacen principios de reciprocidad y redistribución como el ayni, la minka, la umaraqa que facilitan su cumplimiento, muchas de estos principios se han institucionalizado dentro las comunidades andinas.

La toma de decisiones es fundamental para las organizaciones tradicionales, pero es aún más importante como se desarrolla este proceso ¿quienes toman las decisiones y de que manera?. Por eso la importancia fundamental de la “asamblea comunal”, como espacio de toma de decisiones y concertación, en este proceso las autoridades se convierten en portavoces de las decisiones de la comunidad. Si una autoridad toma decisiones por su comunidad inmediatamente es restituido de su cargo, posiblemente esto resulta contradictorio con los mecanismos de toma de decisión que se aplican en muchos espacios públicos como el municipio, donde por ejemplo un concejal toma decisiones por aquellos que lo han elegido para representarlos en esta instancia de toma decisión sin siquiera consultarles, tal vez por eso resulta difícil para una autoridad pública entender a un representante de las organizaciones campesinas cuando le manifiesta que para cualquier decisión primero tiene que consultar con sus bases.

Para muchos actores que trabajan en los municipios o en ONGs, estos mecanismos de toma de decisiones de las organizaciones tradicionales “retarda” otros procesos como la implementación de proyectos de desarrollo, porque la coordinación se hace mas compleja y lleva mayor tiempo, pero en la practica resulta mucho mas conveniente y efectiva. En AGRUCO la nuestra experiencia de trabajo con comunidades campesinas nos permite afirmar que una coordinación que pasa por la asamblea comunal, primero permite evitar cualquier susceptibilidad o conflicto al interior de la organización, pero principalmente permite garantizar la participación de la comunidad en la implementación de cualquier propuesta, porque al momento de consensuar la decisión implícitamente las familias campesinas a través de su organización están comprometiéndose a participar en la

implementación de la propuestas (que puede ser una acción o una investigación), en otras palabras se garantiza la participación efectiva de la comunidad.

Se tienen ejemplos concretos de cómo se aplica estas formas de Gobernancia para la gestión de los recursos naturales. Tomamos el caso de la comunidad de Chorojo, una comunidad ubicada entre los 2700 y 4600 msnm que presenta en su territorio un relicto de Kewiñas (*Polilepis beseri*), donde el Mariscal (1999), en el marco de un convenio institucional entre AGRUCO y PROBONA, ha realizado un estudio sobre “Tipos de Relaciones Bosque-Comunidad y Normas tradicionales de Uso y acceso a la Vegetación Boscosa” que muestra claramente como los procesos de toma de decisión colectivos apoyados en normas y reglas establecidos por la misma organización pueden coadyuvar en la gestión y conservación de los recursos forestales y de la biodiversidad.

La comunidad actualmente tiene como base organizativa el sindicato agrario con 68 afiliados, cada 10 del mes los afiliados se reúnen en asamblea general para discutir y tomar decisiones respecto a los temas de mayor preocupación e interés de la comunidad. Y cada 8 de mes el dirigente y otros miembros se reúnen en la subcentral “8 de Agosto” para informar, reflexionar y analizar temas de interés de las cuatro comunidades que la componen.

El sindicato campesino en la Comunidad de Chorojo cuenta con un directorio de aproximadamente 10 personas; entre los cargos mas importantes podemos citar al secretario ejecutivo, secretario de relaciones, secretario de actas, secretario de conflictos, secretario de hacienda, prensa y propaganda, deportes, vialidad, milicias, y vocales. Estas carteras diligenciales cumplen diferentes roles y funciones al servicio del sindicato y de la comunidad³.

3 Secretario general: Es la autoridad máxima de la organización sindical, dirige la asamblea comunal y representa a la comunidad en instancias superiores como la subcentral 8 de agosto, asiste a Congresos, Ampliados y a la Federación departamental, es también un nexo entre la comunidad y el medio externo, asimismo, administra justicia junto al Alcalde. Gestiona proyectos

Secretario de relaciones: Esta autoridad no cumple una función específica, solamente reemplaza al secretario general en caso de que este no se encuentre presente. Acompaña al Secretario .General en congresos, en la gestión de proyectos y otros.

Secretario de actas: Esta autoridad está encargada de redactar el acta de la reunión, anotar las resoluciones de las reuniones. y verificar la asistencia para dar inicio a la reunión.

Secretario de hacienda: El secretario de hacienda es el tesorero de la comunidad, su ocupación es recolectar cuotas en dinero como también en especies, para realizar actividades comunales. Administra el dinero de la comunidad

Secretario de deportes: Organiza eventos deportivos.

Milicias armadas: Controla el orden en las reuniones, asambleas, es el policía sindical.

Vocales: Son también autoridades comunales, sus funciones específicas son tocar el “pututu” para convocar a las reuniones, asambleas y otros acontecimientos comunales.

Encargados de llevar mensajes, convocar a personas específicas

Las familias de la comunidad de Chorojo, organizadas en este sindicato agrario se rigen por un conjunto de normas y reglas explicitadas algunas en sus actas de reunión y otras en la memoria de cada uno de sus miembros, incluido las mujeres y niños que no siempre participan de las reuniones pero tienen conocimiento de las mismas a través de sus mecanismos familiares y comunales de comunicación.

Dentro estas normas, la comunidad ha desarrollado algunas que son específicas para la gestión y conservación de su monte de Kewiñas, la misma fue revisada y readecuada en una asamblea comunal en el año 1992.

En Chorojo los relictos de Kewiña son reconocidos por la organización local como propiedad comunal y/o familiar según el caso, y se tiene instituido una serie de normas locales para su uso y manejo. En muchos casos el corte de los árboles esta regulado bajo normas sociocomunales de carácter estricto.

Por ejemplo, la extracción de leña para consumo diario es permitida utilizando únicamente los árboles caídos y secos de la Kewiña. En el caso de los arbustos, la extracción de leña es algo más libre: sin embargo, se indica que deben aprovechar con preferencia los arbustos secos que se encuentran generalmente al contorno de las parcelas de cultivo. Contrariamente, la extracción de leña destinada a cualquier acontecimiento festivo (matrimonio, cumpleaños, fiesta comunal, etc.). Está reglamentada por normas obligatorias de carácter escrito. (Mariscal, 1999: 86)

Dentro las normas comunales se tiene terminantemente prohibido la quema dentro el bosque, la comercialización de leña y madera, la tala de los árboles, sin autorización de la organización local. Cada familia de la comunidad para celebrar algún tipo de festividad (matrimonio, cumpleaños u otro), y que esté destinado a la elaboración de chicha, tiene derecho a cortar hasta 10 árboles, con la previa solicitud al sindicato en reunión comunal. Esta prohibido el pastoreo, la recolección de leña y el corte de madera por las comunidades vecinas sin previa consulta al sindicato. (Camacho, 1994 citado por Mariscal, 1999: 86).

Lo mismo ocurre con los recursos hídricos, su uso y distribución esta regulada por una serie de normas contextualizadas al entorno biofísico y sociocultural de cuyo cumplimiento se responsabiliza la organización local a través de una autoridad tradicional que es el Juez de Aguas. Muchas veces la limitación temporal al acceso a agua de riego es un instrumento que la organización local emplea para hacer respetar las normas internas (mecanismo de control social). Junto a las autoridades sindicales coexisten otras de carácter tradicional, como el Alcalde y el Juez de Agua. Se trata de autoridades que están plenamente relacionadas con la actividad productiva, lo que confirma que la organización de la producción y la gestión de los recursos naturales, es una prioridad en las comunidades campesinas.

En Chorojo la organización sindical y la organización tradicional se confunden en un mismo sistema organizativo, las reuniones comunales y las asambleas

se caracterizan por la presencia del Alcalde y el juez de aguas, que son factores decisivos en la toma de decisiones; la administración de justicia se la efectúa con la presencia tanto de la autoridad sindical como también del Alcalde como autoridad tradicional. La elección de las autoridades sindicales se realiza en asamblea general, el tiempo de duración de la gestión es de un año y tiene carácter rotativo. La asamblea general es la máxima instancia de decisión de la comunidad.

Si bien hay una autoridad responsable de vigilar y garantizar el cumplimiento de estas normas (autoridad de turno), es la comunidad en su integridad la que vela por el cumplimiento de las normas (control social), además en caso de sanciones esta se determina también en asamblea general.

Una característica particular de las normas comunales en relación a las normas formales es que están son flexibles, dinámicas, se adecuan a la realidad concreta en determinado momento y espacio, esto permite la continua revisión y adecuación a solicitud de los miembros de la comunidad en la asamblea comunal, si estos temas trascienden los límites de la comunidad, se somete a una decisión a nivel de subcentral, central o ampliado o congreso provincial.

En Tapacaré, los jilakatas son las autoridades originarias que han mantenido su función e importancia en los ayllus de la provincia. La principal función del jilakata es el de observar el desarrollo de los cultivos de las familias campesinas y cuidarlas de los daños que puedan ocasionar los animales en pastoreo, de ellos dependerá el cumplimiento de las normas comunales que permiten tener un territorio con cultivos familiares sectorizados en una forma de organización comunitaria, a la que se ha denominado como ayta (Delgado, 2002).

Las formas de organización y las normas socioculturales de uso y acceso al territorio y a los recursos naturales, en cada uno de estos casos responden a patrones culturales propios y a hechos coyunturales e históricos que han vivido estas comunidades. En este marco el cumplimiento de las normas tradicionales (usos y costumbres) no contempla solo la conservación material del recurso, sino también la armonía en la relación social colectiva y el respeto por la naturaleza.

En el marco de la creación de áreas protegidas, debería ser evidente la importancia de la revalorización y fortalecimiento de las formas de organización local y las normas tradicionales y las costumbres, para un uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo estas no se toman en cuenta ante esta situación “las poblaciones indígenas están generando nuevos derechos culturales para recuperar el control sobre su territorio como un espacio ecológico, productivo y cultural para reapropiarse un patrimonio de recursos naturales, y significados culturales. (Leff, 2002:87).

Las investigaciones realizadas por AGRUCO, demuestran que la estabilidad y la fortaleza de la organización comunal repercute de manera directa en la relación de la comunidad con su entorno, es decir en la gestión y conservación de sus recursos naturales (por ejemplo los bosques).

De esta manera resulta hasta absurdo, que el Estado boliviano y sus organismos implementan políticas públicas, normas, reglamentos y estatutos orientados a realizar el control social al uso de los recursos económicos, en caso de los municipios y de los recursos naturales en el caso de las áreas protegidas, ignorando formas locales de control social que están adaptados a las diferentes contextos biofísicos económicos y socioculturales, que deberían ser potenciados para evitar los conflictos que se están presentando actualmente como es el caso del Parque Nacional Tunarí.

Un aspecto importante de resaltar, son los principios éticos y morales que guían las acciones de las autoridades comunales, como son la reciprocidad, la redistribución y el respeto a sus deidades espirituales, parte de los principios de vida de las comunidades campesinas que ha permitido el ejercicio de control de manera mas eficiente porque los procesos son manejadas con transparencia y las decisiones colectivas no pueden ser manipulados por intereses de pequeños grupos. Lo que se contrapone a vertical como lo es en el nivel municipal donde existe una estructura vertical que toma decisiones, en las comunidades esta estructura es horizontal porque las bases mediante sus asambleas son los que definen el destino de la comunidad.

Las características fundamentales de la organización social en las comunidades campesinas, nos ayuda a visualizar su propio punto de vista respecto de lo que es el control social, sobre todo en lo que se refiere al manejo de conflictos y a la toma colectiva de decisiones. Sobre este horizonte se podrá captar mejor las diferencias y los elementos comunes entre la visión interna y la externa acerca de la comprensión y las estrategias utilizadas en el control social, a la vez que se podrá volver a valorar su importancia para la profundización de las políticas de descentralización (Rist, et al 2002).

8. Conclusiones preliminares

Las diferentes posiciones de los diversos actores sociales del Parque Nacional Tunarí, dejan claro que en el marco de las políticas publicas referidas a áreas protegidas entran en conflicto diferentes concepciones y objetivos respecto a la conservación de los recursos naturales que no encuentran un espacio para una discusión abierta, porque cada grupo social vela por intereses propios en medio políticas inadecuadas y confusas. Se elabora un decreto ley (1262) de ampliación del Territorio que no corresponde a la realidad biofísica y sociocultural de este parque y es rechazado por los actores locales quienes están elaborando un anteproyecto de Ley para la Gestión del PNT.

Que la problemática del parque no se genera solo en choque de diferentes opiniones o criterios que no encuentran un lenguaje común para negociar, el

problema es de fondo porque de lo que se trata es de los desencuentros de diferentes formas de percibir el mundo y gestionar el territorio que tiene que ver con las diversas formas de pensar y organizar las acciones en torno a la relación sociedad-naturaleza.

Este escenario creado en torno a políticas de conservación de la biodiversidad deja en entredicho la sola conservación y demanda el establecimiento de políticas de conservación dentro de un enfoque de Desarrollo Sostenible Participativo y que considere los procesos de aprendizaje social entre los actores locales y actores externos del PNT.

Que la problemática del parque no se genera solo en choque de diferentes opiniones o criterios que no encuentran un lenguaje común para negociar, el problema es de fondo porque de lo que se trata es de los desencuentros de diferentes formas de percibir el mundo y gestionar el territorio que tiene que ver con las diversas formas de pensar y organizar las acciones en torno a la relación sociedad-naturaleza.

Bibliografía

AGRUCO

2002-2003 Conflictos y procesos de transformación entre los actores locales y las políticas públicas en la gestión y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del Parque Nacional Tunari Informe científico Cochabamba-Bolivia 85 Pág.

ANGLES, A.

1994 Diversidad biológica de papa y su conservación in-situ en la comunidad de Japo (Provincia Tapacaré). Cochabamba: AGRUCO Tesis Ing. Agr. Cochabamba, Bolivia, UMSS Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias "Martín Cárdenas".

ARRIETA, M.; MAYORGA, F.; GALINDO, M.

1995 "Participación Popular y Desarrollo Rural" Colección debate de políticas agropecuarias. La Paz, Bolivia.

BOLIVIA

1960 Constitución Política del Estado 10. ed. Gisbert editores, 1960, La Paz-Bolivia. 81p.

CENTRO DE ESTUDIOS de la realidad económica y social (CERES)

2000 Los conflictos socioambientales en el parque nacional Carrasco Cochabamba Bolivia 104 pág.

DELGADO, F.

1993 La Agroecología en las estrategias del Desarrollo Rural. Una experiencia institucional. (Trabajos del Colegio Andino 9). Centro Bartolomé de Las Casas, Cusco-Perú, 2da edición. 166p.

DELGADO, Freddy

2002 Estrategias de autodesarrollo y gestión sostenible del territorio en ecosistemas de montaña, Complementariedad ecosimbiótica en el ayllu Majasaya Mujlli, departamento de Cochabamba, Bolivia. Agroecología Universidad Cochabamba. Editorial PLURAL. Cochabamba, Bolivia. 287p.

2001 Simbiosis interzonal en las estrategias de autodesarrollo sostenible en ecosistemas de montaña; el caso del Ayllu Mujlli, departamento de Cochabamba, Bolivia. Los Fundamentos teóricos de la investigación participativa desde la praxis en los Andes bolivianos. Universidad de Córdoba España. Escuela Técnica Superior de ingenieros Agrónomos y de Montes, Córdoba ETSIAM. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos ISEC. Tesis doctorado. Córdoba, España.

1997 Proyecto de Investigación doctoral. Universidad de Córdoba, España. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Córdoba. ETSIAM. Instituto de Sociología y estudios Campesinos ISEC. Córdoba, España.

INTURIAS CANEDO Mirna Liz.

1998 Gestión ambiental y manejo de conflictos en el límite sur del parque Nacional Tunari (jurisdicción provincia Cercado) Tesis de licenciatura Universidad Mayor de San Simón Cochabamba Bolivia. 199 pág.

MARISCAL, J. Carlos

1999 "Tipos de relaciones Bosque-Comunidad y normas tradicionales de Uso y Acceso a la Vegetación Boscosa; el caso de las comunidades de Chorojo y Chullpa K'asa de las provincias Quillacollo y Tapacari en el Departamento de Cochabamba". AGRUCO-PROBONA. Cochabamba, Bolivia. 110p.

NCCR North-South

2002 Consorcio de cooperación Científica para Atenuar los Síndromes del Cambio Global. Cuaderno sobre el Polo Nacional de Competencias en Investigación Norte-Sur.

PARQUE NACIONAL TUNARÍ Área protegida

2001 Año 1 Revista N° 1.

PRESENTACIÓN del gobierno de Bolivia al grupo consultivo

1996 Estrategia de desarrollo rural sostenible COTESU (Cooperación técnica Suiza) 64 pág.

PROMETA

2001 Áreas protegidas departamentales, municipales y privadas en Bolivia 209 pág.

REVISTA internacional de ciencias sociales

1998 La gobernabilidad N° 155.

URIOSTE, Miguel

2002 Desarrollo rural con participación popular fundación tierra. La Paz Bolivia 300 pág.

RIST, S.; et. al.

2000 Cosmovisión andina y desarrollo autosostenible. En: Haverkort, B.; et. al. Comida para el pensamiento: visiones antiguas y experiencias nuevas de la gente rural. Cochabamba: COMPAS. 267p.

SENADO NACIONAL

2001 Proyecto de Ley N°. 142/00-01 Proyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial.

- Información Técnica del Sistema Nacional de Areas Protegidas, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y Servicio Nacional de Areas Protegidas.
- Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad en Bolivia
- Ley Forestal. Ley No 17000, 12 de julio de 1996, en 3 leyes para el Cambio. Ed. CEDOIN. La Paz, 1997.
- Reglamento General de áreas Protegidas, Publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, el 1 de agosto de 1997. La Paz, Bolivia.
- Convenio N° 169 O.I.T. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (1989).
- Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Areas Protegidas (Borrador del 25 de julio del 2003 posterior a la consulta pública La Paz).

Avance de investigación: la transformación de valores éticos en la interfaz del estado y de la sociedad civil y su importancia en el manejo de la biodiversidad, tierra y territorio. El caso del Parque Nacional Tunari en los Andes de Bolivia

Elvira Serrano¹

1. Introducción

Hasta 1990, las áreas protegidas en la América Latina y el Caribe sumaban 1'142.800 Km². (UICN, 1990 a) lo que representa el 5.7% de los 20'184.700 Km² del continente Americano. (Burkart 2001:2); en cuanto al respaldo de conocimiento técnico-científico que tiene la toma de decisiones en colonización de tierras en América Latina, los estudios realizados en frentes de expansión agropecuaria, como los de Hecht (1983) Fearnside (1982) y Norello (1985) muestran que las decisiones respecto a la preservación de ciertas áreas se basan en un conocimiento incompleto de sus existencias y funcionamiento. A ello se suma el agravante de que a menudo se usan herramientas metodológicas inadecuadas en la evaluación de los recursos naturales, y se desconoce la dinámica sociocultural de las poblaciones que podrían estar implicadas, lo cual evita una adecuada gestión del Territorio² en estas áreas.

La realidad muestra que el establecimiento de áreas protegidas continúa provocando una serie de conflictos socioeconómicos, culturales y políticos en los cuales se encuentran inmersos una diversidad de actores sociales y una serie de normas y políticas publicas a través de las cuales se desplaza a menudo compul-

-
- 1 Ingeniero Agrónomo. Magíster en Agroecología Cultura y Desarrollo Sostenible (AGRUCO-UMSS). Investigadora de AGRUCO. Doctorante del NCCR-IP1 (IUED-AGRUCO-UMSS)
 - 2 La Gestión del territorio se refiere a la ocupación del territorio, el uso de los recursos naturales en sus diferentes niveles de aplicación en función a las características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y político-institucionales existentes. (Proyecto de Ley de Ordenamiento territorial 2001)

sivamente de estas áreas a poblaciones o en otros casos se les tolera restringiendo sus derechos en el acceso y la gestión del territorio y la biodiversidad, convirtiendo paradójicamente estos espacios de “Conservación de la biodiversidad” en espacios de “Interfaz social”. La esencia de la perspectiva de interfaz es, como Long (1999: 21) lo señala, “explorar cómo las discrepancias de interés social, interpretación cultural, conocimiento y poder son intermediados, perpetuados o transformados en puntos críticos de confrontación y cooperación.”

En las últimas dos décadas el Sistema de áreas protegidas en Latinoamérica ha tenido un fuerte crecimiento; según la FAO (1998b) la superficie de áreas protegidas se ha expandido a un ritmo del 6% anual en la década de los setenta (Burkart 2001), en la última década se han creado en Bolivia 47 áreas protegidas de las que solo 21 están reguladas oficialmente por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP la concepción de área protegida prioriza las características naturales que contiene en su territorio, ello permite asumir que los asentamientos existentes en el territorio de las áreas protegidas sean minoritarios y presenten características de pueblos indígenas ubicados en tierras comunales o relativamente pequeñas comunidades campesinas; esta situación se presenta en la mayoría de las áreas protegidas de la amazonía Boliviana a diferencia de las áreas que se encuentran en zonas de valles interandinos donde la densidad de comunidades campesinas es mayor en las áreas protegidas (ej. Parques Nacionales de Carrasco, Tunari, Toro Toro, Reserva de Tariquia) (Pereira 2001)

En el presente estudio una metodología es básicamente cualitativa el Parque Nacional Tunari (ubicado en el Departamento de Cochabamba-Bolivia) se constituye en un espacio de Interfaz donde se establece un diálogo entre diferentes visiones del mundo que corresponde a actores sociales con diferentes valores éticos a cerca de la relación sociedad-naturaleza, generando procesos de aprendizaje social que inciden en la transformación de los valores éticos de los actores involucrados. Desde la perspectiva de interfaz nos interesa identificar aspectos que contribuyan a la creación de una base común que posibilite una gestión más sostenible de la tierra, del territorio y de la biodiversidad.

2. El Parque Nacional Tunari como espacio de interfaz

Un importante enfoque para entender la política social en Bolivia en la que se consideran a nuevos actores sociales, es hacerlo desde la perspectiva de *interfaz social* (Roberts 2001). Si bien esta perspectiva ha sido principalmente aplicada al desarrollo rural, su aplicación en temas de política social y conflictos urbano-rurales que se dan en el Parque Nacional Tunari es igualmente valiosa puesto que sensibiliza al analista alertándolo sobre el significado de los tipos de relaciones que la implementación de la política crea entre los actores sociales

locales (comunidades, empresarios, instituciones) y los actores sociales externos (gobierno, ONGs, iglesia).

El análisis requiere explorar el contenido de las relaciones, por una parte, en términos de intereses sociales confrontados y por otra, en términos de las interpretaciones e información presente en interacciones estratégicas durante el proceso de implementación.

La implementación de las nuevas políticas de conservación de la biodiversidad y del medio ambiente particularmente la creación de Areas Protegidas representan una interfaz social en la que se enfrentan concepciones, intereses y reivindicaciones enraizadas en diferentes formas de vida cotidiana (Long 1992). Los encuentros y desencuentros de las diferentes formas de vida corresponden a diferentes proyectos de desarrollo que se plantean los grupos de actores sociales involucrados como base para contribuir a procesos de negociación y aprendizaje social que permitan buscar bases mas amplias para la integración y coexistencia pacífica de diferentes grupos culturales en espacios naturales compartidos (Rist 2003).

El análisis de la situación del PNT y los conflictos que genera su creación e implementación permite observar que si bien existen normas genéricas, estas no son generadoras de procesos de gestión, por lo que es necesario crear las normas concretas en base a procesos colectivos que tomen en cuenta las particularidades y la diversidad social, cultural y ecológica de cada área. Esto permitirá encontrar mecanismos para articular sociedad civil³ y estado en la implementación de políticas de gestión del área protegida; en otras palabras las normas deben resolver los conflictos no profundizarlos (Pereira 2002:2).

2.1. Creación del Parque Nacional Tunari

El Parque Nacional Tunari (PNT) fue creado en 1962 por decreto supremo N°. 06045 con una superficie de 240 Km² en las alturas de la ciudad de Cochabamba por iniciativa de un grupo de pobladores ciudadanos de la provincia cercado preocupados en la conservación de las fuentes de recarga de los acuíferos que proveen de agua a la ciudad de Cochabamba, los recursos naturales y las amenazas de inundación y deslizamiento que podrían afectar a la ciudad; fue ampliado en 1991 por la Ley N° 1262 a un área de 3090,91 Km², abarcando 5 provincias, 11 municipios y mas

3 Gramsci fue el mentor intelectual del concepto ambiguo de sociedad civil. Se refiere a la sociedad civil como aquella que esta constituida por una seire de "Aparatos" tales como: la iglesia, sindicatos, partidos, cooperativas, entidades cívicas, etc., que por un lado prolongan la dinámica del Estado y por otro están profundamente arraigados entre personas. Es precisamente ese doble carácter de la Sociedad Civil que forma un espacio privilegiado de trasformaciones políticas, posibilitando el cambio (Castells, 1999: 25).

de 300 comunidades en el Departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia (AGRUCO, 2003).

Se ubica geográficamente entre los 17° 00'-17° 30' de latitud Sur y los 66° 42' de Longitud Oeste, en un rango altitudinal de 2.200 msnm y 4.400 msnm. (sernap) dentro de la cuenca hidrográfica de los Ríos Rocha –Maylancu, que a su vez pertenecen al sistema de cuenca de los ríos Caine– Grande de la vertiente del Amazonas (Pereira 2001). Es una de las áreas protegidas mas importantes en cuanto a diversidad y endemismo de aves en bosques de Kewiñas (*Polilepis Sp.*) en Bolivia; su mayor importancia es su condición de proveedor de los recursos hídricos superficiales y subterráneos para los valles de Cochabamba.

Su ubicación y características topográficas hacen que presente un sistema de cuencas conformando ríos, quebradas, lagunas y zonas de infiltración de acuíferos; solamente en la Ladera Sur se tienen contabilizadas 39 microcuencas; estos atributos hídricos permiten la sobrevivencia de comunidades, ciudades y producción agropecuaria de valles, beneficiando de esta forma a una población aproximada de un millón de habitantes. Asimismo permiten generar energía eléctrica que abastece al Departamento de Cochabamba y en parte a los de Oruro, La Paz y Potosí.

2.2. Los conflictos en el PNT

Los conflictos que existen en el Parque Nacional Tunari tienen su origen en la creación inconsulta de un área protegida en un territorio en el que las comunidades campesinas tienen derecho propietario, la magnitud de los conflictos socioculturales desde 1996 ha sido creciente y consiguientemente ha provocado mayores conflictos, económicos y ambientales.

La Ley 1262 dictada en 1991 a través de la cual se amplía arbitrariamente la extensión del parque afectando a mas de 300 comunidades agrava la situación de conflicto en el PNT. Estas comunidades se enteraron recién en 1996 cuando fueron promulgadas la Ley INRA y la Ley de Participación Popular que sus territorios formaban parte del PNT.

De acuerdo a lo que expresa el reglamento de áreas protegidas deben restringir sus actividades dentro del parque, y ceñirse a un plan de manejo en el que aparece una estructura que desconoce las formas organizativas locales que manejan su territorio según sus usos y costumbres. Paradójicamente hasta ahora no se tiene un plan de manejo del parque y solo está en constitución el Comité de Gestión del PNT pero no ejerce ninguna acción.

Además de las comunidades campesinas/indígenas se tienen una diversidad de otros actores sociales inmersos en la problemática del PNT, tales como las asociaciones de regantes, grupos de exmineros asentados en urbanizaciones y otras organizaciones locales que tienen estructuras organizativas que nacen de una praxis social propia. Así mismo existen otros actores sociales que aunque tienen

presencia dentro del parque, corresponden a una estructura externa y funcional establecida por el Estado como son los Municipios, Prefectura, Alcaldía, Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, ONGs, y Empresas privadas.

Para analizar la complejidad de la problemática del PT nos referiremos a cuatro aspectos fundamentales: el legal, el administrativo, el técnico y el sociocultural.

Conflictos legales

El problema legal se centra en aspectos territoriales que se originan junto a la creación del Parque; pues no se consideró entonces ni cuando fue ampliado, que estos territorios tenían como propietarios legales a poblaciones rurales y urbanas, cada una con particularidades socioeconómicas culturales diferentes. (AGRUCO 2003)

La tución sobre este Territorio de los once gobiernos Municipales, que se pierde al ser declarada área de Preservación Nacional y no pueden actuar ni en su defensa ni en su protección.

Conflictos administrativos

Bajo las mencionadas circunstancias legales, la administración del PNT se la ha dado al gobierno Central que a través del Servicio Nacional De áreas Protegidas (SERNAP) tiene competencias sobre su regulación y Administración, pero sus limitaciones en recursos humanos, y financieros no han permitido desarrollar un plan de gestión y se ha transferido esta responsabilidad a la prefectura del Departamento de Cochabamba que con los limitados medios capacidades operativas lleva adelante una dificultosa administración de este conflictivo espacio.

Esta situación es parte de un conflicto político abierto entre las sociedades campesinas indígenas y el Estado Boliviano y lleva regularmente a enfrentamientos.

Conflictos técnicos

Un problema técnico muy debatido respecto al PNT está orientado a los cuestionamientos que el propio SERNAP tiene respecto a la categoría dentro la cual está catalogada como “Parque Nacional”, pues sus características no concuerdan con las establecidas dentro de esta categoría⁴; al margen de esto hasta ahora no se tiene un Plan de Gestión y manejo de esta área protegida.

4 Parque Nacional Son áreas naturales inalteradas, donde se protegen todos sus elementos y procesos espontáneos, como muestras representativas de ecosistemas naturales, con valores paisajísticos excepcionales con lo cual cumplen finalidades tanto

Aunque existe conciencia principalmente en los actores locales sobre la importancia respecto al rol del PNT en la recarga de acuíferos, no han parado los asentamiento urbanos que ubican las viviendas en zonas de riesgo y que técnicamente provocan la impermeabilización de zonas de recarga de acuíferos y la contaminación del suelo y las aguas por disposición de desechos sólidos de la presencia de industrias o la aplicación de tecnologías no sostenibles.

La falta de manejo de las áreas forestadas con especies introducidas; en diferentes sectores, por efectos naturales, los árboles caídos han formado poblaciones importantes que constituyen un riesgo y dificultan el control de incendios forestales, y finalmente el problema de las torrenceras que es una amenaza para la ciudad de Cochabamba con diferentes magnitudes a nivel de la gran cantidad de microcuencas que se ubican en el PNT.

Conflictos socioculturales

El conflicto de mayor magnitud en este espacio se refiere a las distintas visiones que los actores sociales tienen sobre la gestión del territorio y la biodiversidad, la diferencia mas visible está en la concepción materialista del Estado sobre la gestión del territorio y los mecanismos empleados para su regulación: tales como las políticas, reglamentos y normas. En tanto que las comunidades campesinas tienen una concepción que es parte de su cultura, en la que la gestión del territorio obedece a una lógica de vida que no se limita a considerar solo los aspectos materiales de la gestión del territorio y la biodiversidad sino que considera además los aspectos sociales y espirituales. (Delgado 2002).

Existen controversias específicas si consideramos la diversidad de visiones de los actores sociales presentes en el PNT, que corresponden a lo Urbano y lo rural; en el sector urbano, la visión del PNT mas que un espacio para conservar la Biodiversidad valora el rol económico que cumple en la provisión de servicios: para los ambientalistas son servicios ambientales, tales como la provisión de agua, aire limpio, atractivo paisajístico, etc. De hecho, son los ambientalistas quienes constantemente demandan a la administración del PNT se desaloje a las comunidades campesinas de este y que el mismo cumpla su función en la categoría actualmente asignada. Por otro lado, están los loteadores para quienes el PNT constituye una recurso para lucrar, a través de la especulación dentro de un mercado de tierras que carece de legalidad; también están las empresas privadas que usufructúan diversos recursos del PNT particularmente del recurso agua, entidades públicas

científico-educativas, como recreativas. Admite la afluencia de visitantes, aunque tampoco asentamientos ni actividades humanas fuera de las relacionadas con fines referidos (Categoría de manejo de las áreas de reconocimiento internacional.

de educación, salud, así como organizaciones no gubernamentales para quienes el PNT constituye su espacio de acción.

Para las comunidades campesinas este espacio constituye su territorio con todas las implicancias materiales sociales y espirituales.

3. Configuraciones de contexto y contenido social en el Parque Nacional Tunari, sus diferencias y complejidad

En el área afectada por el PNT existen diferencias substanciales a nivel de los municipios, referidos principalmente a la diversidad de actores sociales presentes en los mismos, esta diferencia constituye una variable importante puesto que determina la *configuración social* de un determinado espacio.

El análisis propuesto parte del *contexto social*, constituido por la diversidad de actores sociales y el análisis de elementos como tierra, mano de obra, mercados, estructuras políticos-económicas, género, clases, religión, etc., que resultan en las diferencias individuales y grupales de las comunidades humanas. Este contexto debe observarse desde el nivel local hasta el global, con especial énfasis en las interacciones entre los diferentes actores y elementos. Una prioridad para nuestro estudio es tomar en cuenta el *contenido social y los valores éticos* que subyacen en las iniciativas de gestión del territorio y la biodiversidad, lo cual se refiere a los efectos que tienen estas iniciativas sobre los diferentes tipos de actores, hogares, o comunidades que determinan el nivel y tipo de impacto que resulta de la adopción o modificación de una intervención determinada. De aquí que los efectos que son positivos para un grupo de actores pueden ser fatales para otros. Estos impactos deben ser tomados en serio, ya que pueden negativamente afectar a ciertos actores en términos socioculturales económicos y ambientales. (Gliessman & Mendez 2000).

Hurni, Rist y Rocheau nos recuerdan que las relaciones entre los humanos y el ambiente son sumamente complejas. Para entenderlas y mejorarlas debemos ampliar nuestro repertorio para desarrollar una ciencia transdisciplinaria que logre integrar estas interacciones a múltiples escalas. Como punto de partida los científicos y practicantes de desarrollo y el manejo de los recursos naturales debemos empezar a profundizar en las múltiples disciplinas que se incluyen en este nuevo enfoque. Primeramente se tiene que mejorar la comunicación entre las diferentes disciplinas y fomentar la aceptación de enfoques transdisciplinarios por parte de instituciones internacionales y nacionales.

Se tiene que aceptar que las percepciones sobre territorio, biodiversidad significan visiones y construcciones sociales diferentes para los distintos actores. Empezando por nosotros, es necesario aceptar que estas distintas percepciones

existen y que además inciden en los procesos de desarrollo y manejo de los recursos naturales.

Por tanto es importante interpretar y analizar de manera transdisciplinaria la concepción de los diferentes actores estudiados como parte de un proceso interactivo basado en el diálogo entre diferentes sistemas de conocimiento a cerca de la tierra, territorio y biodiversidad, para lo cual se ha hecho una primera distinción entre los actores locales y los actores externos que refleja la procedencia y la vinculación que tienen respecto al desarrollo de las configuraciones. También se ha distinguido entre actores públicos y privados. Finalmente se han definido varios tipos de función del carácter tradicional o nuevo de las actividades que desarrollan. Así según los casos se habla de “actores locales tradicionales” y “actores locales no tradicionales” y de “nuevos actores”.

3.1. Visualizando la realidad compleja: configuraciones diferenciadas en el Parque Nacional Tunari como espacios de estudio

Uno de los aspectos mas importantes en la definición del contexto para el estudio es la configuración presente en un espacio, en la cual influyen determinantemente el número de actores sociales y la complejidad de sus interrelaciones. Concentraremos nuestros esfuerzos en conocer y analizar aquellos actores que afectan mas significativamente y en diferentes niveles, para esto es importante llegar a entender las realidades tal como son de las comunidades.

En las configuraciones representativas para el estudio se muestran las relaciones existentes entre actores sociales desde aquellas que están catalogadas como *muy buenas*, en las que se benefician mutuamente ambos grupos; las relaciones catalogadas como *buenas* en las que la relación implica un servicio de tipo estructural o de representación; por otro lado están las relaciones de carácter *débil* en las que la comunicación no es muy fluida y existe alejamiento entre actores; luego están las relaciones de *Conflicto abierto* en las que los actores sociales muestran relaciones de conflicto en diferentes espacios; finalmente están las relaciones *cortadas* que se dan entre actores que no tienen comunicación.

Las diferencias que se presentan en el “Mapeo de las relaciones de los grupos de actores sociales en el espacio de Interfaz del Parque Nacional Tunari” entre un contexto que recibe mayor influencia del sector urbano y otro que está mas alejado de esta influencia se perciben claramente en las configuraciones que se presentan a continuación: en las que solo describiremos las relaciones existentes en los principales grupos de actores sociales, mas adelante este material servirá para hacer un análisis de estas relaciones y porque se establecen el tipo de relaciones que están vigentes y como se transforman de acuerdo a la Coyuntura Política, Social, y económica.

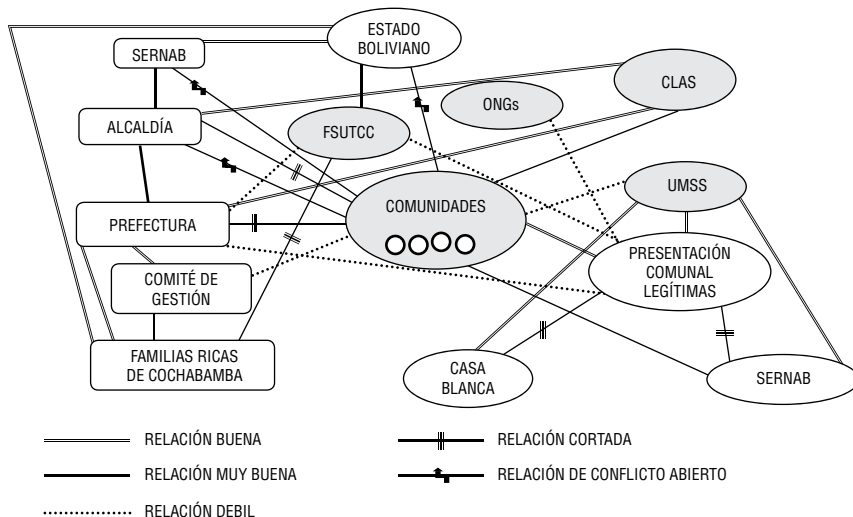
Configuración social en espacios con alta influencia urbana

Figura 1. Mapeo de las relaciones de los grupos de actores sociales en el espacio de interfaz del parque Nacional Tunari comunidad de Tirani.

Uno de los principales problemas identificados en la configuración en la que se encuentra la comunidad de Tirani es que dentro del PNT no hay interlocutores válidos para negociar con el Estado; en esta configuración aparecen 14 actores sociales, los intereses de los mismos son diversos y heterogéneos por tanto complejizan de manera significativa esta configuración, el tipo de relación entre los actores sociales está determinado por la afinidad o contradicción que existen entre los valores éticos que subyacen tanto en la praxis como en el discurso de los mismos, para dar un ejemplo podemos describir la relación que las comunidades campesinas tiene con los otros actores sociales: el grupo de actores sociales de las comunidades mantiene una relación muy buena únicamente con sus representantes, mantiene una relación buena con las ONGs, mantiene una relación muy débil con la UMSS (debido a que el programa del PAMS está orientado solo a los representantes de las comunidades, sería interesante generar una mayor relación de la Universidad con todas las bases pero las comunidades entienden las limitaciones de la UMSS-AGRUCO) así mismo su relación es débil con el comité de Gestión y otro representante de la Universidad que es el CLAS. La relación de las comunidades con entidades tales como la cervcería Taquiña, el Estado Boliviano, el SERNAB, la Alcaldía del Departamento de Cochabamba es de pleno conflicto. La relación de las comunidades con la Prefectura en este momento está cortada al extremo que

cuando las comunidades han solicitado audiencias y lo único que se ha hecho ha sido derivarlos a una secretaria; así mismo con la alcaldía en algunos casos de algunas comunidades. Respecto a la relación de las comunidades con las familias ricas de las urbanizaciones del Parque, esta no existe. Las relaciones de la Cervecería con las comunidades están en Conflicto abierto. Hasta hace poco la relación de la Cervecería con algunos representantes de las comunidades (representantes corruptos) era muy buena. Un ex dirigente en complicidad con la Cervecería Taquiña vende sus terrenos a la Taquiña misma. La otra empresa privada Casa Blanca sus ejecutivos influían en las autoridades que administran el Parque para estar siempre beneficiados, así, se presentaba ante las comunidades el Director de Medio ambiente a dar instrucciones a los Dirigentes de las comunidades acerca de lo que debían opinar sobre ciertas propuestas hechas por los empresarios.

Configuración social en espacios tradicionales

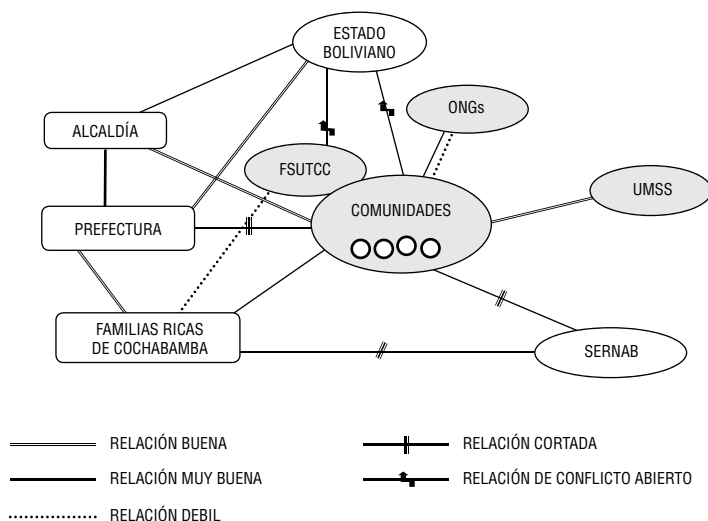


Figura 2. Mapeo de relaciones de los grupos de actores locales en el espacio de interfaz del Parque Nacional Tunari (comunidad - Chorojo)

En la Configuración que presentan las comunidades tradicionales que para el caso del PNT son mas de 300 el estudio considera el contexto de Chorojo donde se identificaron 9 grupos de actores sociales, el principal grupo de actores sociales

está constituido por los actores locales tradicionales (Comunidades) y es a partir del tipo de relaciones que mantienen con los otros actores sociales que determinamos la configuración presentada.

Los actores sociales locales tienen una Relación muy Buena con La Federación Sindical Unica de trabajadores campesinas, puesto que su Sindicato pertenece a esta Organización y permanentemente está en contacto con los dirigentes Sindicales, así mismo tiene muy buena relación con la Alcaldía de Sipe Sipe, esto recientemente, a partir de la participación de sus dirigentes en la elaboración del POA y otras actividades, la Alcaldía en las recientes gestiones ha ejecutado algunos pequeños proyectos en la Comunidad como ser el arreglo de la escuela y agua potable; igualmente tiene una muy buena relación con la Universidad Mayor de San Simón a través del Centro Universitario AGRUCO con quienes ejecutan proyectos participativos de Investigación, formación y desarrollo.

Con los otros grupos de actores sociales, como son los actores privados y algunos públicos como la prefectura de Cochabamba, el Comité de Gestión, y otras ONGs la relación está cortada no existe relación, la comunidad indica que estas autoridades parece que no saben que existe la comunidad de Chorojo.

4. El análisis de los discursos en la identificación de los valores éticos de los principales actores sociales involucrados en la problemática del Parque Nacional Tunari

El análisis de los discursos resulta ser una herramienta fundamental para lograr los objetivos planteados en este estudio, partimos del significado de la palabra discurso que según Taberner 2002 es la construcción lingüística organizada a cerca de hechos (naturales o sociales) o símbolos (temáticos o lógicos). Al igual que la comunidad científica, los grupos de actores sociales comparten principios significados, expresiones, reglas, y los resultados acumulados según la experiencia los cuales son expresados en sus discursos los cuales principalmente tienen carácter dentro de tres niveles: el nivel Descriptivo, Nivel explicativo, el nivel Crítico.

Los testimonios de cinco Dirigentes Campesinos entrevistados por Macchi y Serrano (2002) constituyen los discursos analizados como paso inicial de este estudio; los mismos están caracterizados por mostrar un nivel crítico sobre la problemática del PNT. Un elemento común en el discurso de los actores locales es de que ya no se conforman con los niveles y estructuras de participación existentes ofrecidos por las organizaciones estatales actuales. Más bien generan propuestas para reformar las estructuras existentes en el sentido de alcanzar una mejor articulación entre los, valores éticos, principios y procesos de toma de decisión vigentes en sus propias organizaciones (comunidades, ayllus, sindicatos,

barrios, o federaciones de los mismos) y los que deben regir la toma de decisión en el ámbito estatal.

La concepción de valor varía de sociedad a sociedad, de época a época, lo que sin embargo no justifica un simple relativismo ético. Una sociedad basada en valores de la libertad del individuo, conquistada a lo largo de un esfuerzo de humanizaciones de varios siglos, supone la convicción de que hay que respetar la pluralidad de sistemas de valores de los diferentes grupos humanos y de las diferentes concepciones del mundo (pluralismo de los valores éticos). (Otfried 94)

Sin embargo la convivencia social exige un acuerdo sobre los aspectos formales de la garantía de las condiciones de vida de los individuos y consiguientemente el consenso al menos “material” sino sociocultural sobre que valor debería incluir una vida digna para toda persona, en un sentido amplio referirnos a una Ética Social donde las normas y principios morales de la vida colectiva en el Ámbito institucional y no institucional establecen los deberes que el ser humano tiene como persona para con los demás centrándose básicamente en las instituciones⁵ básicas establecidas dentro de su sociedad

Los principales valores identificados son los referidos a una ética social que exige: justicia social, equidad, bien común, solidaridad, benevolencia, confianza, dignidad, inviolabilidad, comunicación, interacción humana, honestidad, consenso, lealtad, rectitud, honradez, reciprocidad, redistribución, comunitarismo, consenso.

El significado de cada uno de estos valores expresa la visión de los actores a los que corresponde el discurso; debemos recordar que los discursos tienen una orientación crítica a la situación que se viven en el espacio de interfaz del Parque Nacional Tunari, por tanto los valores éticos que aparecen son señalados como demandas en algunos casos, y en otras como líneas a seguir en una propuesta de solución.

La vida en común no está asegurada mediante un modelo conductual innato, sino que en ella se dan procesos en el marco de un Pluralismo ético en el que los valores éticos de los actores sociales se influyen unos a otros y se transforman por necesidades e intereses distintivos, por la escasez de muchos bienes, así como por las pasiones a veces de tipo ideológico o emocional como la envidia, el recelo y el odio. Sin una educación correspondiente, en la que los actores se dispongan a un diálogo, y sin medidas institucionales, no son posibles ni la supervivencia ni la vida en armonía.

5 Institución: Se refiere a los patrones regulares de conducta entre individuos y grupos de la sociedad, tienen un papel crucial en las relaciones humanas con el ambiente. Estas instituciones pueden ser formales o informales, e incluyen cualquier tipo de asociación para negociar el manejo de recursos y/o derechos

4.1. Transformación de valores éticos en actores sociales y procesos de aprendizaje colectivo

Los valores éticos están fundamentados por un lado en la praxis social de individuos y las sociedades que conforman. Por otro lado los valores éticos son relacionados con las concepciones de la vida, del hombre y de la naturaleza que subyacen de las diferentes formas de vida que es expresado a través del concepto de *ethos*. (Rist. 2003)

Una constante del discurso en el campo político de estos actores sociales organizados en los movimientos indígenas y campesinos, es el cuestionamiento y el rechazo a los valores éticos derivados de un estado neo-liberal que se proyecta en primera línea como facilitador de una economía de libre mercado (Delgado, 2002). En el campo social son los valores de solidaridad, justicia y participación los que juegan un rol dominante mientras que en lo cultural valores derivados de concepciones culturales específicas entre sociedad y naturaleza como p. ej. el principio de co-evolución, respeto para la vida y apertura cognitiva asumen una importancia primordial en la formación de identidades propias (Droz, et al. 2003).

A través de la intervención de los actores locales se genera un escenario en el debate público en el cual los valores éticos y las visiones del mundo, de la vida y de la naturaleza tienen una importancia fundamental. El debate hace explícitos los valores éticos diferenciados, sin embargo las interacciones entre los actores sociales generan un proceso de aprendizaje⁶ que transforma los valores éticos de los actores sociales, y consiguientemente la praxis social que desarrollan los mismos, lo cual tiene directa relación con el desarrollo sostenible de las comunidades.

Desde el punto de vista de la mitigación de los síndromes se entiende estas re-interpretaciones como parte de un proceso de aprendizaje social (Woodhill and Roeling 2000), que contribuye a re-configurar los valores fundamentales para el pensamiento y la acción en el ámbito público, lo cual se manifiesta en la práctica de los grupos de actores sociales asentados en el PNT, espacio que hemos determinado como zona de estudio.

Para el caso del Parque Nacional Tunari, se da un interesante proceso en el que el Estado a través de sus políticas respecto a la gestión de áreas protegidas, ejerce una acción coactiva sobre los actores sociales involucrados en estos espacios, que transforma sus hábitos, consiguientemente su *ethos* y valores, pero eso no es todo sino que al mismo tiempo cambia toda una lógica de gestión del territorio y la

6 Nos referimos aquí al proceso por medio del cual la apropiación y uso del conocimiento crean o fortalecen habilidades y capacidades en las personas, comunidades sus organizaciones que se los apropian, convirtiéndose así en factor de cambio y de progreso en la sociedad, en sus instituciones y en las empresas del sector productivo.

biodiversidad como veremos a continuación en las especificidades en la gestión del territorio y la biodiversidad que se dan en las configuraciones de estudio.

5. La gestión del territorio en el Parque Nacional Tunari: propiedad y acceso a la tierra

Como parte del proceso de apropiación de tierras que en el pasado y el presente acompaña al actual modelo de desarrollo predominante en América Latina se ha desplazado en forma prepotente a muchas poblaciones rurales y grupos indígenas de sus propias tierras incorporando en estos grupos a través de las restricciones nuevos hábitos de vida y medios de subsistencia, tan forzosa como precaria y desordenada.

Bolivia tiene una conformación poblacional con una fuerte presencia indígena que tradicionalmente ha vivido en relación directa con la tierra como fuente de alimentación, ingresos y afirmación cultural, por ello la tenencia de la tierra es un tema económico, pero también social y político de gran importancia nacional. Alrededor del cuarenta por ciento de la población económicamente activa depende directamente del sector agropecuario (Justiniano 2001)

La implementación gradual de diferentes leyes, decretos supremos y reglamentaciones en relación al reordenamiento político administrativo y la planificación, uso, tenencia, saneamiento y titulación de tierras (Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización Político-Administrativa, Ley de Municipalidades, Ley INRA, Ley Forestal, Ley del Medio Ambiente, Ley de Minería) es un proceso que se ha intensificado desde 1993. Otras Leyes están en estudio para su próxima promulgación (Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Aguas, Ley de áreas protegidas). Esta preocupación de las estructuras estatales por la problemática de la administración del territorio nacional, del uso y tenencia de la tierra, se produce después de un silencio de 40 años desde la promulgación de la Ley de Reforma Agraria que significó la legalización de la acción campesina de toma de grandes extensiones de tierra (las llamadas haciendas) en propiedad de pequeños grupos familiares, y la abolición de hecho de las prácticas de servidumbre al que se hallaba sometida el campesinado. (Delgado 2002:1).

Muchas comunidades de la región de cabecera de Valle en Cochabamba que fueron exhaciendas, después de la reforma volvieron a una gestión territorial comunitaria en la que mantuvieron el control no solamente sobre la tierra sino sobre el conjunto de su territorio, que desde la perspectiva de los actores locales no se limita a la dimensión material o unidad natural del territorio de los pueblos indígenas y originarios que comprende subsuelo, suelo, espacio aéreo y aguas (Pachamama: *alax pacha*, *manqha pacha* y *aka pacha*). Este territorio es indivisible continuo o discontinuo" (CSUTCB en: Procampo N° 88:21 y 22); determinan a su

vez formas específicas de organización socioeconómica. Por otra parte, la noción de territorio abarca no solamente una superficie unitaria, sino también aquellas zonas de colonizaciones (históricas o recientes) en otros pisos ecológicos diferentes a las de origen. (Delgado 2000).

5.1. La propiedad y el acceso a la tierra en un espacio de conflicto territorial

Desde la visión del Estado la administración de la tierra en Bolivia ha sido y sigue siendo un tema de administración nacional, los niveles intermedios (Prefecturas) y los locales (municipios) no tienen competencias específicas sobre la tierra, con la sola excepción de la administración del catastro. Durante el largo período de vigencia de la Ley de Reforma Agraria, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, administró la tierra en todas sus etapas, desde la identificación de tierras fiscales, la dotación gratuita, la venta, la administración de justicia y la reversión al Estado. El Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización, bajo la tutela del referido Ministerio, eran las entidades encargadas de distribuir tierras y administrar justicia. La justificación de semejante poder concentrado en un ministerio obedeció al criterio de lograr que una sola institución procese de manera expedita la distribución de tierras y evite que el poder judicial en su instancia ordinaria de aplicación de justicia falle sobre disputas de tenencia de tierras en las que el indígena sería atropellado por los que tengan poder ante los órganos de la justicia ordinaria.

En Bolivia no existió un mercado transparente para la tierra, la distribución de la misma obedeció a criterios políticos y de poder con absoluta discrecionalidad (Pereira 2001). Desde 1953 hasta 1972, se distribuyó tierras para colonos campesinos de las zonas altas en las tierras bajas menos pobladas, pero en el gobierno militar de principios de los años setenta, se distribuyó masivamente tierras a grupos de poder que apoyaron al régimen, en una cantidad mayor a todo el período anterior de la reforma agraria, lo que generó una fuerte concentración de tierras en pocas manos. El acceso a la tierra fue siempre fruto de las influencias políticas o de los grupos de presión sindicales o de empresarios con acceso al poder. (Justiniano 2000).

La Ley INRA de 1996 eliminó el regalo de la tierra, separó la administración de justicia del Poder Ejecutivo traspasándola al Poder Judicial, creó mecanismos automáticos vía el pago del impuesto en lugar de la inspección ocular para demostrar el uso económico social de la tierra, estableció procedimientos para la subasta pública de las tierras disponibles y el acceso preferente para los indígenas y campesinos sin tierra, combinando procesos de intervención estatal con el mercado.

Es entonces cuando la legislación en Bolivia por primera vez desde 1952, se ocupa de los territorios comunales de organizaciones campesinas, tratando de imponerles nuevas reglas de acceso a su territorio. Les plantea por ejemplo, que

previo al usufructo de la tierra, deben contar con Planes de Ordenamiento Predial, que el uso de los bosques debe estar regido a lo que manda la Ley Forestal. O que cualquier veta mineral que se descubriese dentro su territorio, es de propiedad del Estado, sujeto a expropiación y posterior explotación de parte de particulares.

Las políticas relacionadas al acceso, uso y la tenencia de la tierra se tornan mas conflictivas a partir de la regulación de territorios como áreas protegidas, pues en la ultima década se han creado en Bolivia 47 áreas protegidas de las que solo 21 están reguladas oficialmente por el SNAP con el propósito de "Preservar el Medio Ambiente", la delimitación de estas áreas obedece a una tendencia conservacionista que no considera a las comunidades y poblaciones existentes dentro de estas áreas generando conflictos en las comunidades afectadas, debido a que los límites de estas áreas expropiaban terrenos que legalmente pertenecían a las comunidades o bien dividían propiedades e impedían el acceso a arroyos y fuentes de agua que tradicionalmente era utilizados por las comunidades, lo que demuestra que estas delimitaciones fueron establecidas sin considerar ningún criterio técnico, ni mucho menos socio-cultural.

Territorialidad del Parque Nacional Tunari

El Parque Nacional Tunari PNT en el momento de su creación (1962) tenía 240 km², a través de la Ley No. 1262 promulgada en 1991 su superficie fue ampliada a un área de 3090,91 Km², abarcando 5 provincias, 11 municipios y mas de 300 comunidades en el Departamento de Cochabamba (Mapa N° 2), en el centro de Bolivia (AGRUCO-2003).

Superficie del Parque Nacional Tunari por jurisdicción provincial

Provincia	Ayopaya	Cercado	Quillacollo	Chapare	Tapacarí
Sup de la provincia Ha.	958.535	28.652	163.264	1.250.533	167.446
Superficie afectada por el Parque	103.171	3.811	120.596	71.511	17.969
% de la superficie total del parque	32,67	1,2	37,97	22,51	5,65
N°. de Municipios	2	1	4	3	1

Fuente: (AGRUCO 2003).

En el cuadro podemos apreciar claramente, que la provincia que tiene la mayor superficie dentro esta área protegida es la provincia Quillacollo con el 37,96% de la superficie total, comprende cuatro Municipios y 58 comunidades, a diferencia de la provincia cercado cuyo territorio es el menor dentro del PNT y corresponde al 1,20% con 1 solo municipio que es principalmente Urbano y que le da a esta área otra particularidad de relación activa con la ciudad de Cochabamba, capitales provinciales de Quillacollo, Sacaba y un macroespacio de una alta dinámica urbanizadora.

Conflictos en la delimitación del territorio del PNT

Territorialmente las áreas protegidas tienen límites bien definidos, presentan continuidades con esferas naturales, sociales económicas y políticas mayores que son reguladas a través de zonas de amortiguación, pero este no es el caso del PNT que no tiene una delimitación oficial, a pesar de que la Ley 1262 en la que se amplía su superficie señala como límites: “al norte, la ceja del monte de la región de Tablas, al sur la Cota 2750, al Este el Río Kenko o Kenko Mayu, y al Oeste la margen Norte del Estrecho de Parotani” no existe la información cartográfica oficial.

Los Municipios urbanos tienen la atribución de administrar los instrumentos reguladores del catastro urbano, esto no ocurre con los Municipios del área rural respecto a su catastro, esto aumenta la dimensión de la complejidad de los Conflictos (Justiniano 2001) puesto que en el PNT están comprendidos tanto Municipios urbanos como rurales, por tanto existe una desigualdad de derechos respecto al manejo de la propiedad de la tierra,

Considerando estos aspectos la prefectura ha elaborado un mapa cartográfico delimitando la superficie territorial del PNT, el cual no coincide con el mapa diseñado por el Sistema Nacional de Areas protegidas SNAP, donde a simple vista encontramos tres puntos de divergencia: el primero y el mayor se ubica en el sector Norte explícitamente en el Municipio de Villa Tunari, el segundo aparece en el sector de Parotani donde la prefectura ha tomado en su delimitación la referencia del río Tapacaré, en cambio el SNAP toma la cota 2750 como referencia para la delimitación del Parque. El tercer punto de divergencia está en el límite Sur en la cota 2750 en el Municipio del Cercado donde se da una expansión urbana con alto grado de ilegalidad que llega a colindar con el pie de montaña y los municipios de Tiquipaya y Sacaba.

Lo señalado nos muestra que incluso en la estructura Estatal se encuentran dificultades de coordinación cuando se trata del territorio particularmente en esta área donde el mencionado decreto de ampliación ha sido rechazado por las comunidades que manifiestan que esta ampliación obedece a una decisión arbitraria de autoridades del Municipio del cercado sin una consulta previa con las comunidades afectadas

5.2. Ocupación del territorio y conflictos de sociedades urbanas y rurales en el Parque Nacional Tunari

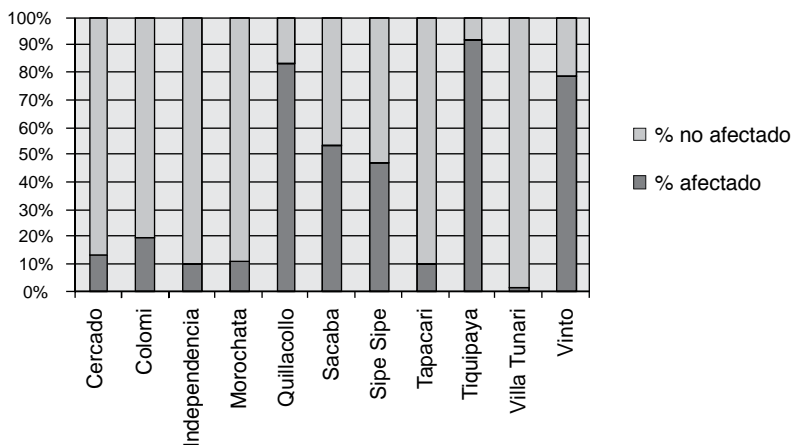
A partir de la ley INRA se han distribuido 1.957.092 hectáreas, lo que es un cambio histórico sin precedentes. Sin embargo, no se ha puesto en funcionamiento el mecanismo de la compulsa pública que fomente un mercado de tierras transparente (Justiniano 2001). Sin duda los perjudicados hasta ahora por la Ley INRA

son los propietarios que no tenían sus títulos claros o que no pudieron demostrar un uso económico social de sus propiedades.

Los compromisos especificados en la Ley de inra de titular territorios indígenas, tienen plazos que al momento están agotados en demasía, la titulación tampoco parece ser la solución, pues los procesos dificultosos y burocráticos de titulación han motivado oposición y por tanto un porcentaje bajísimo de titulación de tierras en Bolivia desde 1953.

La ocupación territorial del espacio del PNT es resultado de un proceso histórico social muy diferenciado en los niveles urbanos y rurales; eso nos muestra el análisis realizado a cerca del territorio que abarca el PNT, pues al menos tres de los 11 Municipios que están dentro del Parque están constituidos por centros urbanos, en los que se ha estado loteando la tierra en un proceso mercantil, en cambio que en el resto del territorio muchas comunidades indígenas tienen el derecho otorgado a través de la Ley de Reforma Agraria.

Porcentaje del territorio de los municipios afectados por el PNT



Fuente: Serrano, Boillat (2004)

La gráfica muestra el área territorial afectada por el PNT en cada uno de los Municipios; los porcentajes mas altos considerando este criterio son los Municipios de Quillacollo, Tiquipaya y Vinto; otro aspecto que nos permite apreciar el cuadro es la ubicación de la capital Municipal que en los casos de los municipios de Cercado, Sacaba, y Tiquipaya se encuentra muy próximo al límite que tiene el parque, lo cual hace que en estas capitales municipales la dinámica del conflicto es mayor, por otro lado, los mencionados Municipios se caracterizan por ser centros urbanos en crecimiento donde constantemente se tropiezan con problemas de

asentamientos poblacionales; aunque el detalle del % de territorio afectado por el PNT en estos Municipios corresponde a los menores, un factor que determina la complejidad de los conflictos en estos Municipios es la presencia de una diversidad de actores sociales.

a) Asentamientos urbanos

En Bolivia uno de los ejes de concentración urbana es la ciudad de Cochabamba, el impacto de la urbanización sobre las tierras agrícolas fértiles del valle desplaza las mejores tierras agrícolas para construir viviendas, los asentamientos urbanos se dan principalmente, a nivel periurbano en el Municipio del Cercado y en los márgenes cercanos a la ciudad de los Municipios de Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sacaba, son muchas las razones de estos asentamientos urbanos.

En el área periurbana, en el tema referido al acceso a la tierra se tiene un grupo social con grandes posibilidades económicas y de relaciones de poder que ha accedido a grandes superficies de terreno estableciendo una zona de Urbanización denominada "Las Lomas de Aranjuez" que se ubica sobre la cota 2750 con grandes mansiones que pertenecen al sector privilegiado de la sociedad Cochabambina, otro grupo social es el que ha accedido a pequeñas superficies de tierra, a través de transacciones legales, y en ocasiones ilegales, asentamientos de familias de escasos recursos que han accedido a un terreno para su vivienda, muchas veces a través del negociado con los loteadores⁷, y han establecido allí barrios, villas, legalmente establecidas e unos casos y en otros no.

Las medidas de ajuste estructural de 1985 año en que fueron capitalizadas muchas empresas Estatales, principalmente la mineras trajo un proceso de asentamientos de una población de relocalizados mineros⁸, la falta de políticas

7 Los loteadores, según nuestra tipología esta dentro del grupo de los actores locales no tradicionales, es el grupo social que más influencias ha ejercido en este proceso de conflictos del Parque Nacional Tunari en la ciudad de Cochabamba, esto con la finalidad de continuar con una serie de negociados en lo que corresponde a la compra y venta de lotes(terrenos), para lo que ha movido a grandes sectores de la sociedad civil infiltrándose en las organizaciones locales, para protestar por ejemplo respecto a la legalidad de los asentamientos sobre la cota 2750msnm. En muchos casos estos grupos están trabajando de manera conjunta con grupos de poder del ámbito político-económico actual del departamento de Cochabamba y el país, por lo que cuentan con un respaldo sólido.

8 Los relocalizados corresponden a la tipología de actores locales no tradicionales, se trata de mineros son grupos de familias migrantes de los centros mineros y con sus cuotas de finiquito salarial adquirieron terrenos de los loteadores en los márgenes de la ciudad de Cochabamba, en el límite sur del PNT donde establecieron barrios con viviendas habitacionales.

de apoyo al sector agrario provocó la migración de algunas familias campesinas⁹, hacia las ciudades ubicándose en las periferias de los centros urbanos, así mismo el crecimiento demográfico del Municipio del Cercado que obligó a un sector de familias pobres a buscar un sitio para vivir en las villas y que al mismo tiempo crean los cinturones marginales urbanos de pobreza, desde entonces este proceso se ha ido intensificando al grado que llegan a colindar con el pie de montaña hacia los Municipios de Tiquipaya y Sacaba siendo factible observar que la tendencia es expandirse hacia otros Municipios relacionados con el límite Sur del PNT.

Una muestra de la tendencia en el proceso de expansión relacionado al límite sur que indican que los asentamientos por encima de la cota 2750 en la década de los 70 alcanzan solamente a 5, y se van incrementando en el 100 % en cada década, esto se puede explicar por las limitaciones en las competencias legales que tienen los municipios respecto a la administración de la tierra, donde solo tienen instrumentos reguladores del catastro los Municipios urbanos no así los rurales

La extensión que ocupan los asentamientos en el área del Límite Sur del Parque, es decir el espacio destinado a las viviendas que ocupan alrededor de 172 hectáreas distribuidas en un 21.27 % en el Municipio de Sacaba, 42.26 % en el de Cercado, 36.47 % en Tiquipaya en los asentamientos solo se encuentran viviendas construidas en el 65.18 % de lotes.

Ocupación de la tierra en lotes y viviendas en los asentamientos urbanos

Municipios	Nº de Asentamientos	Nº de Lotes	Nº de Viviendas	Extensión en m ²
Sacaba	12	1.307	802	366.840
Cercado	17	1.998	1.320	728.835
Tiquipaya	3	1.049	716	629.064
Total	32	4.354	2.838	1.724.739

Fuente : Pereira (2001).

En los mecanismos de distribución de la tierra está determinada la política de acceso al recurso de los pobres y excluidos de manera concreta. La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y la Política Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, contienen lineamientos generales sobre el tema de acceso a la tierra para los pobres, pero no existen avances significativos respecto de la Ley INRA. Por otro lado estos documentos en los hechos se convir-

9 El caso de asentamientos de estas familias esta dado por la necesidad de vivienda para los hijos que estudian en centros urbanos o en los pueblos cercanos a la ciudad esto no significa que continúen desarrollando sus actividades productivas en sus comunidades.

tieron en instrumentos inefectivos de la ejecución de la política gubernamental. La distribución de tierras en Bolivia se caracteriza por la desigualdad y la seguridad jurídica (que otorga el Estado) la misma es muy cuestionada.

El negocio de la especulación de tierras que se da en los asentamientos urbanos del PNT tuvo como principal causa las políticas gubernamentales de la distribución de tierras con una visión del territorio materialista que obedeció en muchos casos a transacciones ilegales de grupos inextricables que solo velan intereses sectoriales y que no les importa la agresión que a través de la implementación de estas políticas se ejerce sobre comunidades indígenas, es importante mencionar que a través de estas políticas se ha transformado las lógicas de gestión del territorio y la biodiversidad de muchas comunidades, especialmente aquellas que están próximas a los centros urbanos.

El hecho de establecer un Parque Nacional en el que se prioriza la tuición del Estado para su Manejo según las Leyes, es una medida que induce a las familias campesinas a vender a precios muy bajos sus terrenos que estaban destinados a la agricultura a fin de no perderlo todo, sin embargo se embarcan en un proceso de dependencia en el que pierden su soberanía por un lado y por otro el loteamiento y la urbanización tiene importantes impactos para el Medio Ambiente y la biodiversidad; una de las configuraciones que sirven a este análisis es en el que se encuentra la comunidad de Tirani, que mas adelante desarrollaremos.

Los conflictos de los asentamientos urbanos que sobrepasan el plano legal desde hace décadas no alcanzan el 5 % en la magnitud de la problemática territorial que representa el parque, y a pesar de ello no han encontrado solución aunque el estado establece que las "disputas sobre tierras debe ser resueltas por los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras en primera instancia y por la Judicatura Agraria en segunda apelación, Aunque se indica que los Municipios y las autoridades naturales no tienen ninguna participación en el proceso, vemos que en el Conflicto del Parque Nacional Tunari precisamente son las autoridades locales que están llevando adelante una gestión que considera la conservación no solo de diversidad biológica sino también cultural, lo cual muestra que la Judicatura Agraria tiene muchas falencias y está todavía en el proceso de asentamiento institucional .

b) Comunidades campesinas en el área de PNT

Las comunidades campesinas ocupan territorios en las distintas zonas¹⁰ que cubre la superficies del PNT, desde las zonas de montaña y altura, cabeceras de valle,

10 Según MAYER (1981:59) llegan a ser: "secciones del territorio comunal que se usa de una manera claramente distinta, lo que incluye un conjunto de cultivos, un patrón de rotación, barbecho y un sistema para la asignación de recursos *libres* tales como agua de riego, tierras de pastoreo y otros

valle hasta regiones tropicales, presentándose un alto nivel de relación entre ellas lo cual les permite desarrollar actividades agrícolas, pecuarias y forestales destinadas al autoconsumo y parcialmente al mercado local, las tierras de acuerdo a una racionalidad espacio temporal son destinadas a la actividad ganadera en pequeña escala, la particularidad del manejo territorial en las comunidades campesinas esta en las formas de acceso al territorio que se tienen en las que la propiedad privada y la propiedad colectiva son parte de una gran diversidad de estrategias.

Dentro de los 11 Municipios que están en el PNT son mas de 300 las comunidades campesinas que ocupan este territorio (AGRUCO 2003), la forma de gestión que tienen estas comunidades respecto a su territorio responde a una lógica que corresponde a una forma de concebir el territorio como algo sagrado y vivo, de hecho el Estado al aprobar el establecimiento del PNT no consideró estos aspectos y mas por el contrario a través de la Ley INRA se estableció el saneamiento de tierras que fue reiterado a través de la Ley del Diálogo (Ley 2233 del 31 de julio del 2001), que establece en el Art. 6 la priorización del saneamiento y titulación de la propiedad agraria: Los Gobiernos Municipales, en acuerdo con las Organizaciones Campesinas e Indígenas, deberán coordinar con el INRA, la identificación de áreas prioritarias para el saneamiento y titulación de la Propiedad Agraria, en la respectiva Sección y Provincia.

A la fecha no se han registrado avances en la implementación de esta disposición, a criterio del Gobierno, por la falta de recursos económicos, de una política de tierras, y la atención de parte del INRA de numerosos procesos contenciosos administrativos ante el Tribunal Agrario.

De hecho muchas comunidades hasta antes de 1996 año en que fueron promulgadas las mencionadas leyes no tenían conocimiento a cerca del hecho de que sus territorios formaban parte del PNT, la Ley de Participación Popular oficializó la división Político administrativa de las secciones municipales y fue esta la instancia en que las comunidades se informaron de que eran parte del PNT, lo cual provocó una serie de conflictos sociopolíticos y administrativos que antes explicamos.

Concretamente en el tema Territorial el conflicto con las comunidades se genera ante la Ley 1262 a través de la cual se amplía la extensión del Parque llegando a afectar a 147 comunidades que de acuerdo a lo que expresa el Reglamento de Areas protegidas deben restringir sus actividades dentro del Parque, y señirse a un plan de manejo en el que aparece una estructura que desconoce las formas organizativas locales que manejan su territorio según sus usos y costumbres; paradójicamente, hasta ahora no se tiene un plan de manejo del Parque, y está en constitución el Comité de Gestión del PNT.

En 1998 la prefectura de Cochabamba, elaboro una propuesta de manejo del parque basado en criterios técnico legales, esta propuestas sigue una perspectiva conservacionista y técnica de la Ley 1262 creando una oposición clara de las comu-

nidades a la legislación actual de parque (Los Tiempos 2002) esta situación es parte de un conflicto político abierto entre sociedades campesinas indígenas y Estado a nivel de Bolivia y particularmente de áreas protegidas que lleva regularmente a enfrentamientos. El conflicto llegó a la propuesta extrema de la prefectura de la Provincia Cercado de relocalizar a las comunidades rurales autóctonas fuera del área del parque (Los Tiempos 1999).

Por lo señalado podemos indicar que la implementación de las nuevas políticas de conservación de la biodiversidad y el Medio Ambiente representan una Interfaz social en la que se enfrentan concepciones, intereses y reivindicaciones enraizadas en diferentes formas de vida cotidiana. Los encuentros y desencuentros de las diferentes formas de vida corresponden a diferentes proyectos de desarrollo que se plantean los grupos de actores sociales involucrados como base para contribuir a procesos de aprendizaje y negociación social que permitan buscar bases mas amplias para la integración y coexistencia pacifica de diferentes grupos culturales en espacios naturales compartidos (Rist 2003).

En síntesis la situación del PNT permite observar que si bien existen normas genéricas, estas no son generadoras de procesos de gestión, por ello, es necesario generar participativamente normas que tomen en cuenta las particularidades y diversidad social, cultural y ecológica de cada área como mecanismo que permita articular sociedad civil Estado en la implementación de políticas de gestión del área protegida, en otras palabras la norma debe resolver los conflictos no profundizarlos (Pereira 2002:2).

6. Conclusiones

En el análisis del Parque Nacional Tunari como espacio de interfaz podemos indicar que existe una diversidad de actores sociales con características específicas que configuran espacios cuya complejidad varía de acuerdo al número de actores sociales presentes en los diferentes contextos, y al tipo de relaciones establecidas entre los mismos, la caracterización de los municipios afectados por el PNT nos ha posibilitado preestablecer los criterios para determinar las configuraciones en las que se realiza el Estudio, así mismo nos ha facilitado la selección de los principales grupos de actores sociales que serán analizados dentro de la investigación.

En el espacio de interfaz los puntos clave identificados para abordar el problema son los siguientes: El tema de la concepción del territorio y la biodiversidad, a partir del respeto de las visiones existentes en la perspectiva de los diferentes actores sociales en un diálogo intercultural que permita llegar a un consenso, lo cual requiere la voluntad política de los actores sociales de resolver el conflicto, con la participación de todos los involucrados, y promover la coordi-

nación interinstitucional. Así mismo llegar a acuerdos sobre la categoría del PNT, aclarar el tema de los límites del Parque, revisar la normativa de gestión de áreas protegidas y principalmente priorizar el bien común para todos los que viven en el área del Parque.

A partir del análisis de los discursos hemos conocido una diversidad de valores éticos desde la perspectiva de los actores locales que nos permiten determinar que los mayores conflictos entre los grupos de actores sociales se suscitan cuando la diferencia y percepción respecto a un valor es mayor. A partir de estos resultados preliminares es importante profundizar este tema para construir bases que nos permitan analizar las transformaciones de los valores éticos en los diferentes actores sociales, así como los factores que facilitan los procesos de aprendizaje social a partir de los cuales se dan estas transformaciones.

El análisis de la política en cuanto a tierra y territorio expresada en el ordenamiento territorial demuestra en síntesis una desarticulación entre su diseño y su implementación, esta desarticulación es conceptual, programática e institucional, *conceptual* porque las metas que se fijan a nivel del Estado no pueden ser alcanzadas por las condiciones humanas de los equipos de su estructura encargada de esta tarea, y principalmente porque no hay unanimidad en la comprensión del concepto tierra y territorio entre las unidades gubernamentales estas diferencias se hacen mayores cuando nos remitimos a considerar la conceptualización de tierra-territorio de los diferentes actores del Espacio Boliviano y que será importante estudiarlas, *programática* por que los procesos de implementación se van anteponiendo a los procesos de organización y definición de la política e *Institucional* porque no existe una adecuada articulación entre niveles nacional, departamental y municipal.

En el tema tierra-territorio el aspecto legal, que se circunscribe a la propiedad de la tierra es importante recordar que las comunidades tienen en propiedad mas del 98% del territorio del área del PNT, y las invasiones ilegales en el límite sur van aumentando anualmente, entonces se observa que existen disfunciones en los objetivos por los que fue creado el PNT, puesto que por un lado se establecen reglas que restringen el acceso a los recursos de los territorios de los propias comunidades, y por otro lado se recorre el límite Sur a una cota, que al momento otra vez ha sido invadida ilegalmente lo cual es una evidencia del poder ejercido por grupos de élite de la ciudad de Cochabamba, que a su vez influyen en las políticas publicas.

La situación de incertidumbre con respecto a la delimitación del territorio del Parque Nacional Tunari, no ha prosperado hasta ahora debido a las grandes contradicciones que se ha dado en torno a tema desde el punto de vista de las diferentes instituciones que tendrían que participar en su implementación, lo que nos lleva a la conclusión que este es y será uno de los puntos de mayor conflicto, porque el tema Tierra-Territorio es que más atención ha copado en las organizaciones campesinas.

En los niveles comunales se mantiene una estructura de gestión territorial, no reconocida por el Estado basada en principios comunitarios, de reciprocidad y redistribución cuya Gestión está a cargo de las autoridades tradicionales locales que organizan la producción y el acceso al territorio y los recursos naturales a través de una diversidad de formas que superan las limitaciones que se tienen en la regulación de la propiedad privada.

Un aspecto relevante en el estudio preliminar realizado en la configuración de Tirani, es ver como las políticas actúan como medios coactivos en la transformación de los hábitos de la gente, y cambia paulatinamente sus lógicas de gestión, en este caso nos referimos a la gestión del territorio, en el cual se da todo un proceso de cambio en la lógica que desemboca en un problema suburbano, que al mismo tiempo a nivel de las comunidades induce a una inseguridad alimentaria familiar.

Bibliografía

AGRUCO

- 2000 Diagnóstico Participativo y Plan de uso del Suelo del Ayllu Majasaya Mujlli, Municipio Tapacarí. Cochabamba-Bolivia. 83p
- 2002 Proyecto "Conflictos y procesos de Transformación entre los actores locales y las políticas publicas en la gestión de la Naturaleza y la Biodiversidad en el PNT".
- 1994 Informe final sobre el estudio piloto "Bosque y árboles en la vida de las comunidades de Chorojo y Paredones. Doc. Institucional AGRUCO 1994 BURKART R. MORELLO J. MARCHETTI (2000) Las áreas protegidas en el tercer milenio. Universidad de Buenos Aires. 17p.

BOLIVIA

- 1960 Constitución Política del Estado 10. ed. Gisbert editores, 1960, La Paz-Bolivia. 81p

CHAYANOV, A. V.

- 1974 La organización de la unidad económica campesina. Nueva visión, Bs. As.-Argentina. 342p.

DELGADO, F.

- 2001 Simbiosis interzonal en las estrategias de autodesarrollo sustentable en ecosistemas de montaña: El caso del Ayllu Mujlli de la Provincia Tapacarí. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba-España. ed. 406 p. DORY D. MANZANO N. "Lógicas territoriales y políticas pública las condiciones de gobernabilidad democrática en Cochabamba. P. 46. pp. 129 La Paz-Bolivia.

- 1993 La Agroecología en las estrategias del Desarrollo Rural. Una experiencia institucional. (Trabajos del Colegio Andino 9). Centro Bartolomé de Las Casas, Cusco-Perú, 2da edición. 166p.
- DELGADO y TAPIA
1998 Políticas y Estrategias Gestión de la Investigación en Agroecología y Revalorización del Saber Local para un Desarrollo Sustentable. AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. 29 p.
- EARLS, JOHN
Planificación agrícola andina. Bases para un manejo cibernético de sistemas de andenes. Lima, COFIDE, 1989. Págs. 443.
- JUSTINIANO
2001 Políticas de tierras: El caso de Bolivia documento preparado para el Encuentro sobre políticas de manejo Territorial. 25p.
- LISPERGUER, G. et. al.
1989 Organización de la producción en el Ayllu Mujlli, cantón Challa, Provincia Tapacarí. Serie Técnica 17. AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 22p.
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN SERNAB
2002 Políticas para el sistema nacional de áreas protegidas.
- PARK
1989 Que es la investigación acción participativa. Perspectivas teóricas y metodológicas en: Salazar, María C. La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollo. Popular, Madrid-España, 1992. pp. 135-174.
- PEREIRA, D.
2001 Estudio socioeconómico del limite sur del Parque Nacional Tunari elaborado para la prefectura del Departamento de Cochabamba.
- PLATT, T.
1982 Estado Boliviano y Ayllu Andino: Tierra y tributo en el norte de Potosí. Historia andina. N° 9. Lima: IEP. 197p.
- RASNAKE
1989 Autoridad y Poder en Los Andes. Los Kuraq Kuna de Yura. HISBOL, La Paz-Bolivia, 282p.
- RIST, S.; et. al.
2000 Cosmovisión andina y desarrollo autosostenible. . En: Haverkort, B.; et. al. Comida para el pensamiento: visiones antiguas y experiencias nuevas de la gente rural. Cochabamba: COMPAS. 267p.
- RIST, S.
1992 Desarrollo y Participación. Experiencias con la revalorización del conocimiento campesino en Bolivia. Serie Técnica 27. AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 58p.

SAN MARTÍN, J.

- 1998 UKAMAPI. Así no más es pues. En la búsqueda del enfoque para el desarrollo rural autosostenible. UMSS-AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 199p.

S. BOISIE

- 1995 Ordenamiento territorial y Proyecto Nacional, CEPAL-ILDIS Dirección de políticas y Planificación Regionales Documento 95/31 Santiago de Chile pp. 1.

SENADO NACIONAL

- 2001 Proyecto de Ley N°. 142/00-01 Proyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial.

SERRANO E.

- 2003 Influencia de las relaciones sociales de reciprocidad y parentesco en la reproducción de los sistemas de producción indígenas para una agricultura sostenible. AGRUCO-UMSS. P. 246

TAPIA, N.

- 2000 "Agroecología y Conocimiento Campesino en los Andes: el caso del Ayllu Majasaya Mujlli. Cochabamba-Bolivia. Tesis Doctoral, a Universidad de Córdoba, España. 302p.

URIOSTE, M.

- 1988 Segunda reforma agraria: campesinos, tierra y educación popular. Talleres CEDLA. N° 1. La Paz: CEDLA. 219p.

Medio ambiente y biodiversidad desde una perspectiva transdisciplinaria, pautas para un nuevo enfoque para el Parque Nacional Tunari

Sebastián Boillat¹

1. Introducción

Desde que existe preocupación por las amenazas a la diversidad biológica, desde la ciencia y desde las esferas políticas, se desarrollaron diferentes enfoques para la conservación de la biodiversidad. En una primera etapa se dio énfasis en la protección de especies animales y vegetales consideradas como importantes, mediante restricciones de caza, recolección o comercio para estas especies. En una segunda etapa se buscó proteger a estas especies dentro de su ambiente natural, condición fundamental para asegurar su conservación a largo plazo. Se crearon entonces áreas protegidas en que se restringen las actividades económicas sobre la base de estudios hechos por expertos científicos.

En este marco, numerosos conflictos sociales aparecieron en las áreas protegidas debido a la oposición de las poblaciones locales que se ven imponer restricciones en el uso de sus recursos sin que se les involucre en la gestión del área y los procesos de toma de decisiones. Además, el enfoque conservacionista se reveló ineficiente cuando la reproducción de la biodiversidad esta ligada a una actividad humana tradicional.

Consciente de estas fallas, la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) introdujo en 1999 el concepto de enfoque de ecosistemas que incluye 12 principios con el objetivo de implementar *una estrategia para la gestión de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve su conservación y uso sostenible de manera equitativa*" (CDB, 1999). Estos principios implican, entre otros, (1) consensos sociales en la gestión de

1 Ingeniero en Medio Ambiente de la Universidad de Berna-Suiza. Doctorante del individual project 1 de NCCR y AGRUCO-UMSS.

los recursos, (2) la descentralización de esta gestión al nivel más bajo posible, (3) la consideración del saber local e indígena de los ecosistemas, y (4) la valoración de los ecosistemas no solamente como hábitat para las especies, sino también por su estructura y sus funciones ecológicas en general.

Las implicaciones de este nuevo enfoque son múltiples. Dar un valor a los ecosistemas como tales implica definirlos para poder planificar y consensuar su manejo. Sin embargo no existen en la naturaleza límites y características de los ecosistemas que pueden ser definidas en forma única y objetiva, y su clasificación y diferenciación siempre es arbitraria (Bisby et al., 1995).

La definición de los ecosistemas es entonces el resultado de un proceso de construcción social que varía en una dimensión intercultural. En otras palabras, un ecosistema no es nada más que una división arbitraria del medio ambiente, definida por un grupo de personas para poder comprender y gestionar a la naturaleza. En este contexto, las comunidades locales que viven en las áreas protegidas también tienen su propia definición de los ecosistemas que es de igual valor que la definición que les dan los científicos.

Aplicar este nuevo enfoque en la gestión de áreas protegidas requiere considerar el conocimiento del medio ambiente y su manejo en forma transdisciplinaria. La investigación transdisciplinaria no significa solamente que la realidad tiene que ser entendida desde las ciencias naturales y sociales (enfoque multidisciplinario), sino que el conocimiento tiene que ser extendido también del lado de los actores locales y sus propias interpretaciones de la realidad (Hurni et al., 1999). Por lo tanto, llegar a una gestión sostenible y social de un área como el de la Cordillera del Tunari requiere de una investigación participativa con los actores locales, a fin de establecer un diálogo para discutir en forma participativa el estado del medio ambiente y las potencialidades para su gestión local sostenible.

2. Objetivos y metodología

El objetivo de esta investigación es de comprender las concepciones de los campesinos indígenas andinos del medio ambiente y sus relaciones con el concepto de la biodiversidad de ecosistemas, y discutir sus potencialidades y limitaciones para una gestión sostenible de la biodiversidad, usando estudios de caso en el Parque Nacional Tunari.

En una primera fase, se debe realizar un estudio de la biodiversidad de ecosistemas en forma separada desde la visión indígena y científica. Luego se identificarán los principios básicos y la epistemología de ambos tipos de conocimiento, para poder compararlos y discutirlos en forma participativa, y finalmente formular pautas para su integración o consenso para la gestión sostenible de la zona del Parque Nacional Tunari.

Lo que ya se realizó fue una caracterización ecológica del Parque Nacional Tunari, y una investigación explorativa de la visión indígena del medio ambiente a partir de estudios realizados por AGRUCO en la comunidad de Chorojo. Esto permitió emitir resultados preliminares e hipótesis para continuar la investigación, y que también ya son un aporte para la propuesta de un nuevo enfoque para el Parque Nacional Tunari.

3. Caracterización ecológica del Parque Nacional Tunari

Ecoregiones en el Parque Nacional Tunari

El Parque Nacional Tunari corresponde al macizo andino de la Cordillera del Tunari, parte de la Cordillera Oriental de Bolivia. La Cordillera del Tunari representa un promontorio de tierras altas orientado hacia los Yungas, cerrando de ambos lados zonas de valles secos interandinos en Cochabamba y Ayopaya. La parte central del Parque abarca estas tierras altas que pertenecen al distrito biogeográfico de la Puna Peruana (Navarro & Maldonado, 2002) teniendo mayor afinidad con las punas húmedas de La Paz y del Perú que con las punas ubicadas más al sur, más áridas. Estas zonas de Puna son relativamente homogéneas en todo el área del Parque y pueden ser consideradas como perteneciendo a una sola ecoregión.

De acuerdo al mapa global de ecoregiones del WWF (Olson et al., 2001), existen tres ecoregiones en el Parque Nacional Tunari: (1) la Puna Andina Central, que corresponde a la Puna Peruana de Navarro & Maldonado (2002), los Bosques Montanos Secos de Bolivia, que corresponde a las zonas de valles secos, y (3), los Yungas Bolivianos. Tomando en cuenta los ombroclimas de estas diferentes zonas (Navarro & Maldonado, 2002), se distinguen las zonas de valles entre valles secos en el Sur (principalmente el valle de Cochabamba) con clima pluviestacional a xérico, y los valles subhúmedos de Ayopaya, con clima netamente pluviestacional. Una tercera categoría de valles es representada por los Yungas hiperhúmedos del Chapare, hacia el noreste, con clima pluvial. De acuerdo a Navarro & Maldonado (2002), las partes altas de los Yungas, a pesar de ya no ser valles, tienen características más afines con la región de Yungas que de la Puna, por su clima pluvial.

Entonces se pueden definir para el Parque Nacional Tunari cuatro zonas ecológicas: (1) la zona de puna, entre 3200 y 5000 m con clima pluviestacional, (2) la zona de valles secos entre 2000 y 3200 m con clima pluviestacional a xérico, (3) los valles subhúmedos entre 900 y 3200 m con clima pluviestacional, y (4) la zona de yungas y puna hiperhúmeda entre 2000 y 4300 m con clima pluvial (fig. 1, cuadro).



Figura 1: Principales ecoregiones en el Parque Nacional Tunari.

**Principales Ecoregiones del Parque Tunari
(en base a Navarro & Maldonado, 2002)**

Eco región	Puna	Valles secos	Valles subhúmedos	Yungas
Altura	3200 - 5000 m	2000 - 3200 m	900 - 3200 m	2000 - 4300 m
Ombroclima	Pluviestacional	Pluviestacional Xérico seco Xérico semiárido	Pluviestacional	Pluvial
Termoclima	Supratropical Orotropical Criorotropical	Mesotropical	Termotropical Mesotropical	Mesotropical Supratropical Orotropical

Ecosistemas en el Parque Nacional Tunari

A cada ecoregión corresponde una vegetación nativa característica, que representa la vegetación natural potencial, es decir lo que crecería allí tomando solamente en cuenta el bioclima y no factores edáficos y humanos. Existe información detallada sobre la vegetación natural potencial en la zona andina gracias a los trabajos de Navarro & Maldonado (2002) y PROBONA (2003). Cada ecoregión tiene su vegetación natural potencial específica en función a sus diferentes pisos ecológicos.

Por ejemplo, la vegetación característica de la zona de puna son bosques de kewiña (*Polylepis besseri* y *Polylepis racemosa*) hasta una altura de aproximadamente 3900 m, luego matorrales con *Baccharis* spp. y pajonales en la zona alta. En los valles, debajo de 3200 m, son bosques de soto (*Schinopsis haenkiana*), kacha kacha (*Aspidosperma quebracho-blanco*), lloque (*Kageneckia lanceolata*) o pino colorado (*Prumnopitys harmsiana*) para los valles subhúmedos.

Sin embargo, considerar solamente la vegetación natural potencial en el caso del Parque Nacional Tunari sería ignorar un gran número de ecosistemas que son, por una parte, condicionados por factores edáficos como suelos pobres y pedregosos, o zonas húmedas, y por otra parte productos de la influencia humana.

Un breve recorrido de la Cordillera muestra claramente que en la mayor parte de su territorio ya no existen bosques nativos, o han sido reducidos a bosques relictos de un tamaño no mayor a una ladera. La observación de imágenes Landsat 7 muestra también claramente la ausencia de grandes extensiones de vegetación densa. Otra manera de constatar este hecho es consultar el mapa de estado de conservación de los bosques nativos andinos de Bolivia elaborado por PROBONA (2003). Este muestra que, a diferencia de áreas protegidas vecinas como el Parque Nacional Carrasco o el TIPNIS, la mayor parte del territorio del Parque Nacional Tunari se encuentra en un estado de conservación crítico a muy crítico de acuerdo a la vegetación nativa.

Esto quiere decir que en el PNT, la mayor parte de la vegetación ha sido modificada por la acción humana. La mayoría de las actividades que se desarrollan en el área del parque son ligadas a la agricultura tradicional andina, practicada por comunidades de origen Quechua. La agricultura andina crea y re-crea en forma permanente diversos tipos de ecosistemas, como parcelas cultivadas, pero también matorrales y pastizales de las zonas de pastoreo y de las parcelas en descanso. Existen también, en forma relativamente nueva, bosques exóticos de eucaliptos y de pinos plantados.

Varios estudios en diferentes regiones del mundo mostraron que existe una relación estrecha entre sistemas de agricultura tradicional y dinámica de los ecosistemas a nivel de paisaje. Es especialmente el caso en zonas donde la agricultura tradicional es relativamente antigua y corresponde a un centro de civilización, como por ejemplo el Mediterráneo Europeo (Naveh, 1998), el Suroeste de México (Gerritsen, 2002) o los altos Andes (Tapia, 2002).

En un sistema de agricultura tradicional, los ecosistemas siguen una dinámica definida por la organización de la producción. Existen relaciones entre los ecosistemas que son el resultado del manejo campesino de los patrones de sucesión, tanto sucesión ecológica como sucesión en los tipos de uso del suelo (Gerritsen, 2002).

En este tipo de agricultura, la relación entre los campesinos y la naturaleza puede ser comprendida como un proceso de co-producción, que es la interacción vigente y el proceso continuo de transformación entre los campesinos y la naturaleza.

La co-producción puede, bajo ciertas condiciones, llevar a una transformación de la diversidad en las actividades de producción y en los recursos biológicos (Gerritsen, 2002). En otras palabras, el campesino produce a la naturaleza y la naturaleza produce al campesino en un contexto dinámico. Esta dinámica implica una adaptación mutua entre campesinos y naturaleza que se implementa a lo largo de las generaciones que van reproduciendo una continuidad en la co-producción basada en la continuidad de la cultura. La co-producción implica también la co-evolución, una respuesta adaptativa de los ecosistemas y especies a las prácticas humanas, y vice-versa.

Un factor determinante para la creación y mantenimiento de una alta diversidad de ecosistemas es la diversificación de la producción: una estrategia de uso múltiple del medio ambiente implica atribuir varios valores diferentes a los recursos naturales que tienen que ser conservados y creados. Al contrario, una estrategia de uso basado en un solo recurso, le quita valor a los demás recursos naturales que ya no son mantenidos y destruidos (Gerritsen, 2002). Una estrategia de uso diversificado del medio ambiente implica que la relación campesino-naturaleza respete a los ciclos de vida. Si deja suficientemente espacio para permitir los procesos evolutivos naturales y mantiene una biodiversidad suficiente para asegurar la base genética de estos procesos, se crea un sistema sostenible con su diversidad de ecosistemas y de recursos que depende de la actividad humana. Este sistema no tiene menor valor que los ecosistemas naturales. En este contexto los ecosistemas naturales tienen que ser comprendidos como elementos que son parte integrante de un sistema ecológico más amplio que incluye al hombre y sus actividades.

Esta claro que la agricultura tradicional andina, esencialmente de subsistencia, se apoya en estrategias diversificadas de producción que permite minimizar los riesgos (Serrano, Rist et al., 1994). Por lo tanto, a pesar de que aún no se hayan realizado estudios detallados de la diversidad de ecosistemas en la zona andina, se puede emitir la hipótesis de que la agricultura tradicional andina juega un papel fundamental en la creación y la conservación de la diversidad de ecosistemas en el paisaje andino.

4. Cosmovisión andina y medio ambiente

En la cosmovisión andina, cohabitan tres ámbitos de vida, la vida material, la vida social y la vida espiritual que se interrelacionan para conformar el espacio-tiempo de la vida cotidiana (San Martín, 1997). Estos tres ámbitos están presentes en los diferentes grupos de conocimientos que manejan los campesinos para describir, categorizar e interpretar al medio ambiente. Es posible reconocer a estos ámbitos de vida relacionando a estos grupos de conocimientos. Un ejemplo es la relación entre zonas de producción, predicción climática y seres espirituales que existe en la comunidad de Chorojo (Ponce, 2003).

Zonas de producción

Una zona de producción es un conjunto territorial de recursos productivos, manejado por la comunidad y en el cual la producción es realizada de manera específica (Mayer, 1992). Es la primera división que se hace del territorio en una comunidad y que permite la organización de la producción. Cada zona de producción tiene infraestructuras, repartición de los recursos, regulación de la utilización de los recursos específicos. Las zonas de producción no son iguales que pisos ecológicos, son creadas por el hombre y no son estáticas. Su establecimiento obedece no solamente a limitaciones ecológicas, sino también a los objetivos y necesidades de los actores: que producir, para qué y dónde (Mayer, 1992). Generalmente, las familias tratan de asegurarse acceso a diversas zonas de producción.

En la comunidad de Chorojo por ejemplo, la zona más alta de la comunidad es denominada Pata Loma (Serrano, 2003). Se encuentra a una altura de 4500-4600 m con fuerte presencia de rocas. Es una zona de pastoreo temporal. Entre 4000 y 4500 m se encuentra la zona de Loma (Serrano, 2003), con pastizales y bosquetes arbustivos que son de uso exclusivamente pastroril. La parte más alta apta para la agricultura se encuentra entre 3800 y 4000 m y consiste en las Aynoqas, que son sectores determinados del territorio de propiedad comunal. La organización comunal regula y facilita el acceso de todas las familias a estos sectores. Existen 12 aynoqas y cada año la comunidad identifica una aynoqa que será cultivada por 3 años consecutivos. De esta manera son siempre dos a tres aynoqas que son cultivadas, mientras las demás sectores se encuentran en descanso y sirven enteramente como áreas de pastoreo. En esta zona, el descanso de las tierras dura entre 7 y 12 años. La zona de Chaupi Loma, entre 3600 y 3800 m, se caracteriza por la propiedad familiar de tierras a secano con 4 años consecutivos de cultivos de tubérculos andinos y cereales, y descansos entre 1 a 5 años (Serrano, 2003).

La zona dicha Chimpa (Ponce, 2003) corresponde a la vertiente opuesta a los asentamientos poblacionales. Por su exposición en el solano, es una zona más seca y árida, dónde se desarrolla una agricultura en parcelas familiares. La producción es a secano y se realiza en esta zona solo en los años lluviosos. Allí los periodos de descanso son mayores y dependen de la variación anual en la ocurrencia de precipitaciones. La zona de Monte (Ponce, 2003; Serrano, 2003) corresponde al bosque nativo de kewiñas (*Polylepis besseri*) entre 3500 y 3800 m. Existen parcelas de propiedad familiar para el cultivo a secano de tubérculos y cereales, fuera y dentro del bosque. Esta zona es especialmente aprovechada en años secos. Fuera del bosque, el descanso de las parcelas es de 3 a 18 años, dentro del bosque, solo 1 año (Serrano, 2003). La parte central de la comunidad dónde también se encuentra la escuela es denominada Ura (Serrano, 2003) también Chaupi Loma o Rancho (Ponce, 2003). Allí, entre 3200 y 3600 m, se concentra el mayor asentamiento poblacional y la propiedad de las parcelas es familiar. La agricultura es intensiva y bajo riego,

y tiene la mayor diversidad de cultivos con hortalizas y leguminosas además de tubérculos y cereales. La producción incluye siembras miskas de papa y en bersa de cereales, que permiten tener 3 cosechas en 2 años. Los periodos de descanso de las parcelas varían entre 0 y 5 años (Serrano, 2003). Finalmente, la parte más baja de la comunidad es la zona Uraman (Serrano, 2003), debajo de 3200 m. La propiedad es familiar. La preferencia es dada al cultivo de maíz, asociado con leguminosas. El descanso de las tierras es generalmente entre 1 a 5 años, la producción intensiva se da solo en caso de parcelas que disponen de riego (fig. 2).

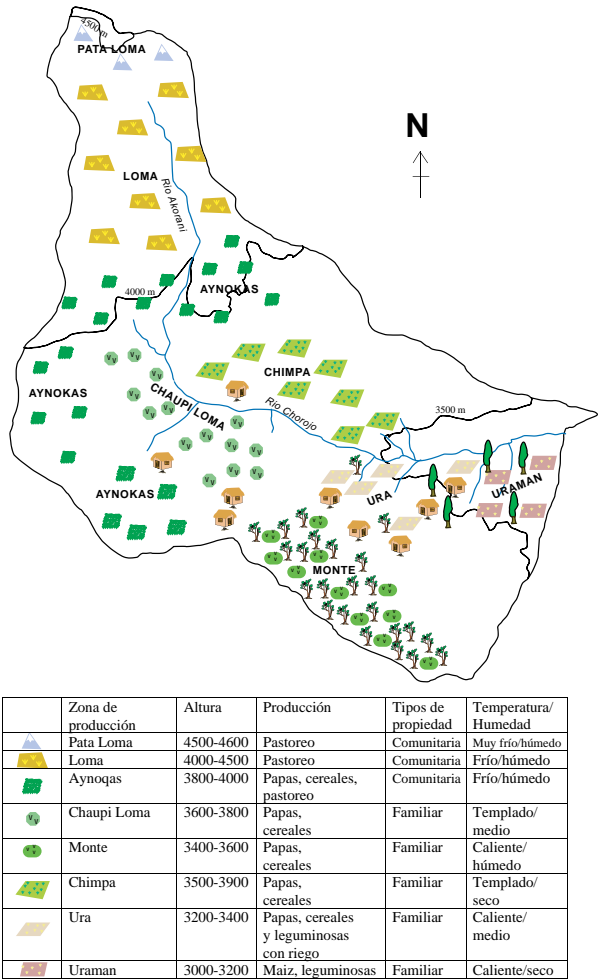


Figura 2: Zonas de Producción en la comunidad de Chorojo (Ponce, 2003, modificado).

La predicción climática y su relación con la dinámica de uso de la tierra

En la comunidad de Chorojo, la diversidad de zonas de producción es de importancia fundamental para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad alimentaria de los comunarios. Es por eso que las familias de la comunidad siempre buscan asegurarse el acceso a parcelas cultivables en las diferentes zonas de la comunidad, sea mediante relaciones de reciprocidad o parentesco (Serrano, 2003).

Sin embargo, el periodo de descanso de las parcelas varía y la intensidad de uso de estas parcelas no es constante. Un factor determinante para la planificación y la ejecución de actividades productivas es la predicción del clima, que tiene como objetivo otorgar las pautas suficientes a las familias campesinas sobre las características climáticas que podrían presentarse en un determinado período agrícola (Ponce, 2003). Ya que el clima varía entre los años, entre las estaciones y dentro de ellas, estos cambios afectan, además a los humanos, a las plantas y a los animales que *“reaccionan de manera anticipada y mas notoria a estos cambios”* (Ponce, 2003). El cambio de clima también se expresa en fenómenos atmosféricos y el movimiento de los astros.

Existen entonces cuatro grupos de indicadores que utilizan los campesinos para la predicción climática: fitoindicadores, zooindicadores, indicadores atmosféricos e indicadores astronómicos. Concretamente, los campesinos andinos observan e interpretan a lo largo del año diferentes estados fenológicos de plantas silvestres, comportamiento de la fauna silvestre, así como fenómenos astronómicos y físicos, para luego tomar decisiones orientadas hacia la producción (Ponce, 2003). Los pronósticos climáticos son muy importantes para la planificación de las siembras, su inicio y su ubicación. Por ejemplo si la muña (*Satureja boliviana*) florece de manera adelantada, también se tendrán que adelantar las siembras (Ponce, 2003).

Los pronósticos climáticos también influyen en el uso de las diferentes zonas de producción de la comunidad. Si las observaciones generales para el año de producción le indican que habrá sequía, el campesino sembrará más en las zonas de mayor humedad (en el caso de Chorojo el Monte y las Aynoqas), empero si la previsión acusa que será un año de abundantes lluvias se labrará en las zonas con suelos secos, generalmente ubicadas en laderas (en Chorojo la Chimpa) (Ponce, 2001). Una base importante para el pronóstico general del año es la observación de la nitidez y el brillo de los astros. La observación de las Nubes Magallánicas (llamados *Qayana* por los indígenas) se relaciona directamente con las zonas de producción: si la *Puna Qayana* es grande y brillante, la producción será buena en las punas, si la *Valle Qayana* es grande y brillante, la producción será buena en los valles (Ponce, 2003). De acuerdo a San Martín (2001), las Nubes Magallánicas también se observan en las comunidades aymaras, y permiten

relacionar directamente el territorio de la comunidad con entidades cósmicas. Otra importante observación astronómica que se realiza en las comunidades andinas es la de la constelación de las Pléyades, o “Cabrillas”: *“Desde San Antonio miramos las cabrillas (Pleyades), si son grandes y titilean las estrellas de atrás hará frío pero retrasado, es decir los fríos vendrán retrasados”* (Francico Romero, Chorojo). (Ponce, 2001). Este último indicador corresponde a un elemento fundamental de la cosmovisión andina.

La cultura andina como integradora de los ámbitos de vida

Las Pléyades, indicador general de la predicción climática en las comunidades, se relacionan directamente con la creación. Se consideran como el centro de origen de la vida. Las Pléyades son el Chakastillu, la Cruz Mayor, o Sol de Soles, una energía fundamental del cosmos, encarnación del Ser Supremo Wiracocha Pachachic, la fuente de energía vital eterna, el hacedor y criador (San Martín, 2001).

La predicción climática mediante los astros es solamente un aspecto de la relación directa entre la producción, el manejo de los ecosistemas y aspectos sociales y espirituales. A lo largo del año, se practican toda una serie de rituales que se relacionan a la vez con los movimientos astrales y la organización social y productiva de la comunidad. Existen rituales en fechas claves para el inicio de siembras, fin del aporque de cultivos, cambio de autoridades, etc. El calendario se convierte entonces en el espacio de integración de todas las actividades de la comunidad, sean materiales-productivas, sociales y espirituales (Delgado, 2002). Para el hombre andino existen confluencias de energías muy profundas, integrantes e interactuantes, que repercuten no solo en el entorno sino en la totalidad. Esto implica una relación íntima de interacciones entre los tres ámbitos de la vida (material, social y espiritual) de cada acción en el cotidiano acaecer de la comunidad (Serrano, 2001).

La cultura andina es entonces holística-totalizadora, quiere decir que no pueden existir estos aspectos en forma separada y que los tres ámbitos se interrelacionan entre sí para formar la vida cotidiana (Delgado & Tapia, 1998). En la cosmovisión andina los tres ámbitos de la vida Pachamama (vida material), Pachakamak (vida espiritual) y Pachankamachaña (vida social) conforman la vida cotidiana (Pachankiri). Esta es la visión que ha sido adoptada por AGRUCO como enfoque institucional dicho enfoque Histórico-Cultural-Lógico (San Martín, 1997) para la comprensión de la vida en las comunidades andinas (fig. 3)

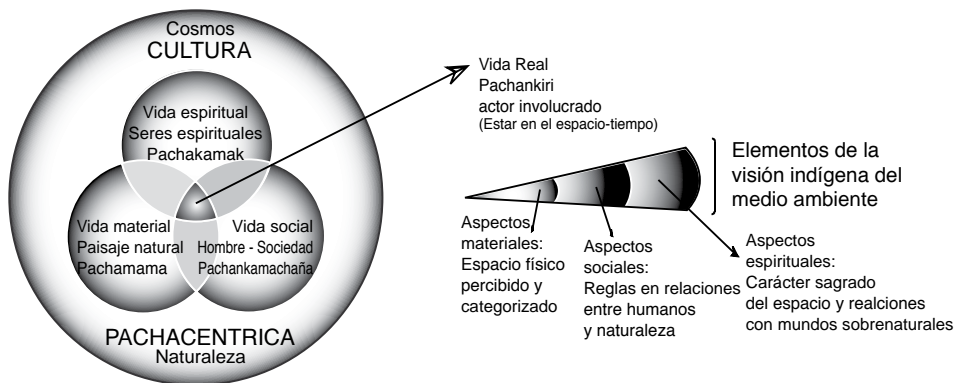


Figura 3: El enfoque Histórico-Cultural-Lógico aplicado a la visión indígena del medio ambiente.

5. Conclusiones

Los estudios realizados en la comunidad de Chorojo mostraron que la dinámica existente en el manejo de los diferentes ecosistemas que existen en su territorio está ligada a su visión del medio ambiente, que incluye aspectos materiales, sociales y espirituales que no pueden ser separados entre sí.

Al contrario, la ciencia busca comprender al medio ambiente separando a los ámbitos de vida, considerando aspectos materiales en el caso de las ciencias naturales y aspectos sociales en el caso de las ciencias sociales. Combinar a los dos es posible adoptando un enfoque interdisciplinario que busca integrar a las diferentes ciencias dentro del marco de la comunidad científica. Sin embargo no logra incluir al tercer ámbito de vida, el espiritual, que sólo se considera en la visión indígena. Adoptar un enfoque transdisciplinario, que busca además de la integración de las ciencias la integración de los conocimientos de los actores locales, implica tomar en cuenta a los aspectos espirituales del medio ambiente que existen en la visión indígena.

Considerar de manera integral a los tres ámbitos de vida es una condición para plantear la sostenibilidad del manejo de los ecosistemas en el Parque Nacional Tunari. Los conocimientos que tienen las comunidades campesinas y que se relacionan con estos tres ámbitos de vida pueden ser considerados como el resultado de los procesos de co-producción y de co-evolución que se implementaron en el paisaje andino a lo largo del desarrollo de las civilizaciones indígenas. Son las bases culturales que permiten la reproducción de la diversidad de ecosistemas y de recursos en la Cordillera del Tunari, caracterizada por la presencia de un paisaje cultural más que natural. A partir de un ecosistema nativo, el hombre andino crea una serie de ecosistemas que juega un rol específico en su visión del mundo. El

indígena andino enriquece a cada uno de estos ecosistemas con aspectos sociales y espirituales para formar un todo y aspirar a la reproducción de la vida o, en otros términos, a la sostenibilidad de su cultura.

Con estas consideraciones, podemos emitir la hipótesis de que son las comunidades campesinas que crean y mantienen la diversidad de ecosistemas en el paisaje andino. Es necesario por lo tanto continuar la investigación y profundizar la caracterización de los sistemas andinos de co-producción, desde una visión indígena como desde una visión científica. También es necesario identificar en forma participativa las amenazas, internas como externas, que ponen en riesgo la sostenibilidad de este sistema.

El diálogo intercultural que surge de este trabajo de investigación transdisciplinaria es de gran importancia para un área como el Parque Nacional Tunari, porque se caracteriza por su alta intervención humana de tipo agrícola-tradicional que les da una importancia fundamental a las comunidades para la gestión de la biodiversidad. La Cordillera del Tunari tiene que ser comprendida como un paisaje cultural que es el resultado de una co-evolución entre hombre y naturaleza.

En este contexto, un marco jurídico-legal demasiado rígido para un área protegida puede provocar no solamente conflictos con las poblaciones que habitan el área, sino también poner en riesgo a largo plazo la reproducción y el mantenimiento de la biodiversidad, porque esta estrechamente ligada a las actividades humanas tradicionales.

La situación ecológica y social actual del Parque Nacional Tunari sugiere que hay una necesidad urgente de volver a plantear el objetivo del área y abrir espacios de consenso entre el Estado y las comunidades locales. Solo en este contexto se podría lograr implementar propuestas de manejo que sean compatible con la realidad ecológica, social y económica del área, y pretender alcanzar la sostenibilidad en la gestión de los recursos de la Cordillera del Tunari.

Bibliografía

BISBY, F.A. et al.

1995 Characterization of Biodiversity. *in* Heywood, V.H. & Watson, R.T. (eds.) Global Biodiversity Assessment. Cambridge University Press, Cambridge for UNEP. 21-106.

Convention on Biological Diversity (CBD)

1999 Liasion Group Meeting on Ecosystem Approach. Report. Paris: Secretariat of the CDB.

DELGADO, F.; TAPIA, N.

1998 Políticas y estrategias de la investigación en agroecología y revalorización del saber local. Serie Memorias N° 5. Cochabamba: AGRUCO.

DELGADO, F.

- 2002 Estrategias de autodesarrollo y gestión sostenible del territorio en ecosistemas de montaña. Serie: La vida en las comunidades N° 2. La Paz: AGRUCO/Plural Editores.

GERRITSEN, P.

- 2002 Diversity at Stake. A farmers' perspective on biodiversity and conservation in western Mexico. Wageningen Studies on Heterogeneity and Relocalization, nr. 4. Wageningen, The Netherlands.

URNI, H.; WIESMANN, U.; KOHLER, T.

- 1999 Mitigating the syndromes of desertification: the requirements for transdisciplinary research and information exchange. EU Workshop on "information requirements and organizational approaches to support interdisciplinary research on desertification", Alghero, Sardinia.

MAYER, E.

- 1992 Zones de production: autonomie individuelle et contrôle communal. In: Morlon, P. (1992). Comprendre l'agriculture paysanne dans les Andes centrales. Paris: IRNA. 159-178.

NAVARRO, G.; MALDONADO, M.

- 2002 Geografía ecológica de Bolivia, vegetación y ambientes acuáticos. Cochabamba: Centro de Ecología Simón I. Patiño.

NAVEH, Z.

- 1998 From biodiversity to ecodiversity. Holistic conservation of the biological and cultural diversity of mediterranean landscapes. *Ecological Studies* 136: 23-53.

OLSON, D. M. et al.

- 2001 Terrestrial Ecoregions of the World. A New Map of Life on Earth. *BioScience* Vol. 51 N° 11, 933-938.

PONCE, D.

- 2003 Previsión del clima y recreación del conocimiento indígena en los Andes bolivianos. El caso de la comunidad Chorojo, Prov. Quillacollo, Dep. Cochabamba. Tesis de Maestría. Cochabamba: AGRUCO.

- 2001 La Predicción del clima en la cuenca Jatun Mayu. In COMPAS/ AGRUCO (2001). Cosmovisión Indígena y Biodiversidad en América Latina. Cochabamba: AGRUCO. 83-94

PROBONA

- 2003 Mapa de los Bosques Nativos Andinos de Bolivia. FAN-PROBONA. La Paz: Plural Editores

RODRÍGUEZ, C.

- 1994 Sistema de pastoreo en la comunidad de Chorojo, Prov. Quillacollo, Dep. Cochabamba. Tesis de Grado. Cochabamba: AGRUCO.

SAN MARTÍN, J.

- 2001 Conociendo a quienes afectan y guían el clima y la vida. El caso de los Andes. *In* COMPAS/ AGRUCO (2001). Cosmovisión Indígena y Biodiversidad en América Latina. Cochabamba: AGRUCO. 61-82.
- 1997 En la búsqueda del enfoque para el desarrollo rural autosostenible. Uk'amäpi, así nomás es pues. Serie: La vida en las comunidades N.1. La Paz: AGRUCO/Plural Editores.

SERRANO, E.

- 2001 Astros, clima y continuidad de vida en las comunidades. *In* COMPAS/ AGRUCO (2001). Cosmovisión Indígena y Biodiversidad en América Latina. Cochabamba: AGRUCO. 95-105.

SERRANO, E.

- 2003 Influencia de las Relaciones Sociales de Reciprocidad y Parentesco en la Reproducción de los Sistemas de Producción Indígenas para una Agricultura Sostenible. El caso de la Comunidad de Chorojo, Prov. Quillacollo, Dep. Cochabamba. Tesis de Maestría. Cochabamba: AGRUCO.

SERRANO, E.; RIST, S. et al.

- 1994 Informe final sobre el estudio piloto "Bosques y árboles en la vida de las comunidades de Chorojo y Paredones", parte Chorojo. Cochabamba: AGRUCO.

TAPIA, N.

- 2002 Agroecología y agricultura campesina sostenible en los Andes bolivianos. La Paz: AGRUCO/Plural Editores.

La capacitación como instrumento para el fortalecimiento de la gestión local de las áreas protegidas, el caso del “PAMS” en el Parque Nacional Tunari

Jaime Delgadillo P.¹
Juan Carlos Mariscal C.²

1. Introducción

El Programa de Capacitación en Control Social y Gobernanancia para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Parque Nacional Tunari que corresponde a las Acciones para Atenuar los Síndromes del Cambio Global (PAMS), ha sido gestionada e implementada en el marco de la cooperación entre la Universidad Mayor de San Simón representada por el Centro Agroecología Universidad Cochabamba de (AGRUCO-UMSS), el National Centre if Competence in Research North-South (NCCR N-S) representada por el Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo (IUED) de la Universidad de Ginebra y la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) que representa a las organizaciones campesinas de los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari (Tapacarí, Sipe Sipe, Vinto, Morochata, Tiquipaya, Quillacollo, Cercado, Sacaba, Villa Tunari, Colomi y Ayopaya).

El programa refleja los resultados de las discusiones sostenidas entre AGRUCO-UMSS y el IUED (responsable del IP8) que enfoca temas sobre gobernabilidad, gobernanancia, desarrollo humano y medio ambiente, por lo que este programa de capacitación se inserta a los “Modelos de Gobernanancia de Biodiversidad”

-
- 1 Ingeniero Agrónomo Responsable de investigación en AGRUCO y docente de la Facultad de Agronomía de la UMSS. Magíster candidato en Agroecología y Desarrollo Sostenible (Universidad de Córdoba-España).
 - 2 Ingeniero Agrónomo Investigador Asociado de AGRUCO y docente de la Escuela Técnica Superior de Agronomía. Magíster candidato en Economía de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Universidad Concepción-Chile).

del IP8, que es parte de la línea de acción llamada “Estrategias de Mitigación de Síndromes” del NCCR-NS. El PAMS ha sido planteada en base a la experiencia previa que desarrollo AGRUCO-UMSS en la capacitación a las organizaciones de base y los comités de vigilancia de 5 municipios en temáticas de “Control Social y Gestión Municipal”, las cuales fueron financiadas por el Programa de Inversión Rural Participativa (PDCR II), lográndose resultados satisfactorios que se buscan ampliar y replicar con el presente programa de capacitación.

En el marco del Programa de Investigación IP8, el PAMS busca facilitar y coadyuvar los procesos de investigación de tesis de doctorado a través de acciones de apoyo directo a las comunidades y organizaciones campesinas de los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari, siendo estos los beneficiarios directos del programa de capacitación. En ese sentido, la coordinación para la gestión y ejecución del programa de capacitación se ha realizado a través de los dirigentes de las organizaciones campesinas (federación, centrales y subcentrales) y las autoridades de los comités de vigilancia.

La justificación del programa de capacitación se circunscribe en la preocupación de la sociedad civil, las autoridades locales y principalmente las organizaciones campesinas, en que las soluciones a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales (RN) se generalizan a través de políticas de Estado que impulsan la creación de áreas protegidas dentro un marco jurídico-técnico en más de los casos, ajenos a la realidad del contexto local e incluso desconocido por involucrados o afectados por estas decisiones desde arriba. Estas acciones del Estado en vez de coadyuvar a la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, frenan la participación y las iniciativas locales en la gestión y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, creando muchas veces conflictos sociales.

De esta manera, las políticas de Estado obedecen a nociones de orden internacional que no necesariamente consideran los aspectos locales de manejo ni mucho menos los aspectos socioeconómicos y culturales de los actores locales. Esta situación que se reproduce a nivel de los gobiernos locales como los municipios, generan un síndrome de orden social y cultural que desemboca en una susceptibilidad latente de la sociedad civil respecto a sus derechos de acceso a sus territorios y a los recursos naturales. De ahí que la creación de áreas protegidas como el Parque Tunari desemboca en conflictos que inciden negativamente en la buena gobernabilidad municipal y nacional.

Actualmente las organizaciones de base y las autoridades responsables del control social como son los comités de vigilancia a nivel municipal, vienen cuestionando la actitud de sus representantes municipales (concejales y alcalde) y nacionales (poder legislativo y ejecutivo) por seguir y aplicar acciones y políticas contrarias a los intereses de las mayorías, lo que es un fuerte cuestionamiento al sistema democrático representativo en Bolivia. Pero al ser una

debilidad para el ejercicio de la buena gobernabilidad, es también el escaso conocimiento de los marcos legales por parte de la sociedad civil y los responsables del control social, lo que limita en las negociaciones que realizan, para incidir en las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales. Por ello es de vital importancia la capacitación de las autoridades locales, los responsables del control social y las organizaciones de base en general, para que así puedan ejercer adecuadamente sus funciones, hagan respetar sus derechos y en las negociaciones logren resultados a favor de las mayorías, esencialmente en las políticas y acciones relacionados a la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales.

Es en ese sentido que a los actores locales de los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari les corresponde intervenir y tomar decisiones al respecto, sin embargo este proceso hasta la fecha no ha prosperado debido a que en las organizaciones de base y los municipios no existe un entendimiento cabal de los marcos jurídico-legales referidos, por un lado, a las funciones y competencias de los actores locales y, por otro lado, a la comprensión de las leyes vigentes sobre las áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, la gestión municipal y el control social.

2. Objetivos y plan de capacitación

Por todo lo expuesto anteriormente, el programa de capacitación planteó los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Fortalecer la gobernabilidad en los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari a través del Programa de Capacitación en Control Social y Gobernancia para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad.

Objetivos específicos:

- 1) Discutir y analizar los actuales marcos técnico-jurídicos y socioeconómicos relacionados a la gestión municipal, el control social y los recursos naturales con los responsables del control social (principalmente comités de vigilancia y organizaciones campesinas) en ocho municipios del Parque Nacional Tunari.
- 2) Analizar y discutir la Estrategia Nacional de Biodiversidad con las organizaciones locales encargadas del control social para la gestión sostenible de la biodiversidad.

- 3) Discutir y analizar el tema del Parque Nacional Tunari y áreas protegidas desde las diferentes perspectivas de los actores sociales involucrados en la problemática.

2.1. Plan de capacitación

La capacitación ha seguido un plan estructurado en base a los siguientes componentes:

a. Planificación y motivación

La planificación y motivación correspondió a las siguientes actividades específicas:

- Reuniones de coordinación y planificación con dirigentes campesinos (de la FSUTCC, las subcentrales y centrales), autoridades municipales y comité de vigilancia. Aquí se cumplió con la socialización del proyecto y la programación de los cursos de capacitación, y
- Preparación de los contenidos y el material didáctico de capacitación para cada temática y ley establecida en el proyecto.

Las acciones de planificación y motivación se aplicaron durante toda la ejecución del programa de capacitación, puesto que era necesario mantener una coordinación permanente con los dirigentes campesinos, las autoridades municipales y los miembros de los comités de vigilancia para la realización de los cursos de capacitación.

b. Acciones de capacitación

Este componente correspondió a la realización de los cursos de capacitación en los 8 municipios afectados por el Parque Tunari, los cuales han sido estructurados en 3 módulos:

Módulo I. El objetivo de este modulo fue el de capacitar sobre los marcos legales vigentes relacionados con la gestión municipal, el control social y la gestión de los recursos naturales. En este módulo la capacitación se dividió en 3 partes. La primera parte trato: El Estado Boliviano, Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades y Descentralización y Ley del Diálogo 200. La segunda parte trato de los roles y funciones de las autoridades municipales, los comités de vigilancia y las organizaciones de base en la gestión municipal y el control social. Y la tercera trato: La Constitución Política del Estado y los Recursos Naturales (suelos, bosques, minerales,

aguas e hidrocarburos), Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal y Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria).

Módulo II. El objetivo de este módulo fue Analizar y reflexionar sobre la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Areas Protegidas en Bolivia. La capacitación se dividió en 2 partes. La primera parte trato de: La Estrategia Nacional de Biodiversidad, la situación actual de la conservación de la biodiversidad en Bolivia y la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas. En tanto que la segunda parte abordó los siguientes temas: El Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) y su marco legal y la importancia de la biodiversidad y del control social para la gestión sostenible.

Módulo III. Su objetivo fue el de analizar y reflexionar con los actores locales la problemática y la situación actual del Parque Nacional Tunari. Aquí la capacitación también se dividió en dos partes. La primera trato de los lineamientos técnicos-jurídicos de las áreas protegidas en Bolivia y el análisis sobre algunos casos de áreas protegidas en Bolivia. En una segunda parte se abordó el análisis y la discusión de la Ley y la problemática del Parque Nacional Tunari.

c. Seguimiento y evaluación

Este componente correspondió a las actividades de evaluación, particularmente de las acciones de capacitación conjuntamente los beneficiarios, lo cual se realizó al finalizar cada curso de capacitación. Este seguimiento correspondió también a una supervisión y monitoreo del cumplimiento del plan de trabajo que estuvo a cargo del director ejecutivo de AGRUCO y el Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC). En fase final contempló también la elaboración del informe.

3. Metodología de capacitación

El proceso de capacitación ha seguido una secuencia lógica según el plan y los componentes definidos en el proyecto. La planificación y motivación se desarrolló bajo una modalidad participativa y de concertación, principalmente con los dirigentes campesinos, para lo cual se realizaron reuniones donde, además de socializar el contenido del proyecto, se ha concertado las fechas y los lugares para la realización de los talleres de capacitación.

La capacitación se implementó a través de “cursos-taller” siguiendo un programa estructurado según las temáticas y leyes correspondientes para cada módulo. Cada temática y ley ha sido preparada en una presentación didáctica acorde con el nivel de educación de los beneficiarios que por lo general es de carácter básico.

Por ello, el material didáctico fue redactado en palabras simples y acompañado con ilustraciones y gráficos; el material didáctico fue preparado en base a una amplia revisión de bibliografía, documentos y las leyes y decretos correspondientes. Este material también fue facilitada a los beneficiarios en forma impresa.

Los cursos taller fueron desarrollados de una manera interactiva, dialogada y de aprendizaje mutuo entre capacitadores y capacitados, por lo que fue necesario realizar la capacitación en el idioma nativo de los actores locales que es el quechua. En ese marco los capacitadores no solo buscaron transmitir los contenidos de cada temática y de cada ley, sino esencialmente motivar a un “aprendizaje social” a través de una reflexión colectiva, constructiva y propositiva por parte de los participantes y capacitadores, lo que ha generado que exista amplios espacios de intervención abierta para los participantes, quienes no solo realizaron preguntas, sino que emitieron opiniones y realizaron reflexiones, análisis, críticas y propuestas a la situación y a los muchos problemas que enfrenta el sector campesino.

4. Resultados logrados: participación y reacción

Los resultados logrados con el programa de capacitación pueden visualizarse en los 3 componentes establecidos en el proyecto, es decir para la planificación y motivación, las acciones de capacitación y el seguimiento y evaluación.

4.1. Planificación y motivación

Las actividades de planificación y motivación se han cumplido de acuerdo a lo previsto en el proyecto y el plan de trabajo. La primera actividad del proyecto fue precisamente una reunión de planificación y motivación con los dirigentes campesinos de los municipios afectados por el Parque Tunari realizado en la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCB). En esta reunión se socializó el proyecto en forma extensa, para posteriormente realizar la planificación de los talleres para el Módulo I en cada uno de los municipios, actividad que consistió en fijar la fecha de realización de los talleres, el lugar, la alimentación y el tiempo de duración. Por otra parte, los dirigentes emitieron sugerencias y propuestas para mejorar los contenidos y el procedimiento de realización de los cursos-taller.

Posteriormente a esta reunión de planificación y motivación, las acciones de planificación y coordinación fueron permanentes entre el equipo técnico de capacitación, la dirección ejecutiva de AGRUCO y los principales dirigentes campesinos de la FSUTCB y las organizaciones campesinas de base (subcentrales, centrales y sindicatos comunales). De esta manera por ejemplo la planificación del Módulo II se realizó a la finalización de los cursos taller del Módulo I, y para el Módulo III finalizado los cursos taller del Módulo II. Sin embargo, se debe indicar que algu-

nos talleres no han podido realizarse en la fecha planificada debido a coyunturas imprevistas como el mal estado de los caminos por la excesiva precipitación y los bloqueos de caminos por las organizaciones campesinas, razón por la que se tuvo que postergar y planificar nuevamente las fechas de realización de los cursos taller, lo que retrasó la conclusión del proyecto en algunas semanas y que fue comunicado oportunamente al NCCR a través de una carta.

La planificación con los dirigentes campesinos que tuvo un carácter de concertación a través de una discusión y análisis, ha determinado no solo la fijación de las fechas y los lugares para la realización de los cursos taller, sino también el ajuste y la modificación de algunos puntos de los programas de los cursos taller. Esta dinámica hizo que el proyecto se enmarque en una planificación participativa y flexible que es propio de las comunidades campesinas, puesto que su íntima relación con la naturaleza hace que la incertidumbre sea parte de las acciones cotidianas de las sociedades, lo que muchas veces no es considerado en los niveles académicos e institucionales. Más adelante se detallan los programas desarrollados para cada módulo de capacitación considerando algunas modificaciones respecto a lo planificado en el proyecto.

4.2. Participación en los cursos de capacitación

Dentro las acciones de capacitación se cumplieron con todos los módulos y cursos taller programados, lográndose por cada módulo una participación muy variable. Para una mejor apreciación de la participación de hombre y mujeres en los cursos de capacitación, a continuación se muestra para cada módulo.

Módulo I

La participación en este módulo fue el siguiente:

Participación en cursos taller del módulo I

Municipio	Fecha de realización	Lugar de realización	Participantes		
			Hombres	Mujeres	Total
1. Tapacarí	12-9-2003	Tapacarí	79	15	94
2. Sacaba	13-9-2003	El Morro- Sacaba	36	16	52
3. Sipe-Sipe	4-10-2003	Tajamar- Sipe Sipe	55	3	58
4. Cercado	5-10-2003	Escuela Tirani	26	6	32
5. Vinto	24-10-2003	Motecato-Vinto	33	10	43
6. Tiquipaya	5-12-2003	Chapisirca	33	3	36
7. Independencia	28-11-2003	Independencia	12	36	48
8. Morochata	6-12-2002	Morochata	84	5	89
Total			358	94	452

Como se puede advertir en el cuadro anterior, la participación fue muy variable en cada uno de los municipios, lográndose en algunos casos una participación muy superior a lo previsto en el proyecto; en otros casos, algo inferior. Esta situación tiene que ver mucho con el tamaño y número de comunidades en cada municipio, además de la motivación y el interés de las organizaciones campesinas. El número de asistentes en cada uno de los cursos taller fue el siguiente:

El promedio de asistencia por curso taller para el módulo I fue de 57 personas, existiendo una predominancia de hombres, aunque la participación total de mujeres fue importante ya que asciende a un 20.8% del total, lo que demuestra una paulatina incorporación de la mujer a procesos de capacitación que en años pasados era casi totalmente excluida. En el caso de Independencia la participación de mujeres fue mayoritaria, ya que el interés de las organizaciones de mujeres de este municipio fue mucho mayor que en otros municipios.

Considerando el promedio de asistencia en este módulo, se puede concluir que se ha cumplido con el grupo meta previsto en el proyecto y que se ha superado las expectativas de participación de las mujeres. El haber superado el número de participantes en los municipios de Tapacarí y Morochata podría significar un problema, sin embargo esto no fue así, puesto que la infraestructura y el mobiliario existente en estos municipios facilitan la realización de los cursos taller con un 40% más de lo establecido.

Por otra parte, con la realización de los cursos taller en los 8 municipios previstos como beneficiarios del proyecto se ha cumplido con el Módulo I en un 100%, logrando en todos los municipios desarrollar 9 temáticas estructuradas en tres partes según el programa.

Sin embargo, la participación no solo se refiere a la asistencia en términos de números de personas, sino que también a la reacción de los participantes frente a la temáticas tratadas, que a manera de síntesis se puede destacar los siguientes puntos relevantes obtenidos de los mismos testimonios de los participantes:

- La primera parte que trató la gestión municipal, ha tenido muy buena aceptación y provocó mucho interés sobre todo en aquellos municipios que en la actualidad tienen conflictos políticos y de gobernabilidad, como son el casos de Morochata, Vinto y Tiquipaya. Mientras que en municipios como Tapacarí y Sipe Sipe donde ya se realizó acciones de capacitación sobre algunos temas de la gestión municipal, el interés fue algo menor pero no menos importante, además en estos municipios la gobernabilidad a mejorado en los últimos años justamente por el efecto de algunos proyectos de capacitación en control social y gestión municipal en los que AGRUCO-USS participó como entidad capacitadora.

- La segunda parte que trato de los roles de la autoridades y el control social, también provocó mucha reacción principalmente por el desconocimiento que se tiene de las atribuciones de las organizaciones de base y del comité de vigilancia para ejercer control social sobre la gestión municipal. En muchos municipios esta temática fue considerada desconocida y que era urgente conocer para poder tomar acciones sobre los malos manejos y la corrupción que se genera al interior de algunos Gobiernos Municipales.
- La tercera parte que trato de las leyes relacionadas a los recursos naturales, por los testimonios de los participantes, fue muy novedoso ya que nunca antes habían tenido cursos de capacitación sobre las leyes bolivianas principalmente de la Constitución Política del Estado (CPE) que para la mayoría era muy poco conocido. Muchos participantes en sus intervenciones coincidieron en indicar que la CPE es violada por los mismos Gobiernos y por todos los que ostentan poder en Bolivia; asimismo expresaron la necesidad que existe de reformar la CPE para garantizar un Estado que se ocupe más de los pobres y de las desigualdades en Bolivia.
- Otro tema muy discutido fue el de la Ley INRA que tiene que ver directamente con el área rural y los campesinos, ya que en los últimos años se ha generado una gran incertidumbre sobre la propiedad y los derechos campesinos sobre la tierra. La Ley Forestal y de Medio Ambiente fue recibido más como información y con menos reacción posiblemente porque hasta el momento estas leyes no han afectado directamente el derecho y la soberanía de las comunidades campesinas. En torno a la discusión de los recursos naturales surgió también el tema del Gas, que en la actualidad es muy discutido en Bolivia.
- Finalmente, los participantes y principalmente los que intervinieron con sus opiniones los cursos taller evaluaron de positivo y de muy provechoso para las organizaciones campesinas en la perspectiva de avanzar con la capacitación de sus dirigentes y autoridades y a través de esto, fortalecer sus organizaciones. Se expresaron muchos agradecimientos por parte de los participantes y dirigentes a todas las instituciones que hicieron posible la realización de los cursos taller de capacitación.

Módulo II

Como en el caso de los cursos taller del Módulo I, la asistencia y participación en el Módulo II fueron variables en cada uno de los municipios, sin embargo se pudo constatar que una mayoría de los asistentes fueron los mismos que participaron en el Módulo I, lo que garantizó una continuidad al proceso de capacitación. Esta participación fue el siguiente:

Participación en cursos taller del módulo II

Municipio	Fecha de realización	Lugar de realización	Participantes		
			Hombres	Mujeres	Total
1. Tapacarí	12-11-2003	Tapacarí	60	16	76
2. Sacaba	30-11-2003	Challviri	79	7	86
3. Sipe-Sipe	5-11-2003	Tajamar- Sipe Sipe	72	6	78
4. Cercado	16-11-2003	Escuela Andrada	31	11	42
5. Vinto	26-11-2003	Qollpa Centro	25	10	35
6. Tiquipaya	16-11-2003	Chapisirca	94	2	96
7. Quillacollo	3y4-04-2004	Quillacollo*	26	2	28
Total			387	54	441

*Importante: En el Municipio de Quillacollo los cursos taller del módulo I y II se realizaron conjuntamente en fechas consecutivas, por lo que la asistencia sólo se considera en el módulo II.

El promedio de asistencia por curso taller en este Módulo II fue de 63 participantes, superior al promedio del Módulo I que fue de 57 participantes.

La realización de los cursos taller del Módulo II se ha cumplido en todos los municipios previstos, con excepción de los municipios de Independencia y Morochata donde no se ha podido continuar con el proceso de capacitación debido al mal estado de los caminos que no nos permitió llegar hasta estos municipios, haciéndose mucho más difícil esta gestión por la excesiva prolongación de la temporada de lluvias. Además, en el caso de Morochata existen muchos conflictos en el Gobierno Municipal que no permite desarrollar eventos con las organizaciones campesinas y las autoridades municipales, puesto que en este municipio desde el mes de diciembre se vive una permanente convulsión social debido a que el Alcalde ha sido destituido por malos manejos administrativos y financieros, quien actualmente se encuentra prófugo con toda la documentación del municipio, por lo que hasta la fecha el Gobierno Municipal no se ha podido entrar en funcionamiento.

La reacción de los participantes para las temáticas desarrolladas en el Módulo II no fue igual a la del Módulo I, puesto que la conservación de la biodiversidad a nivel nacional y mundial, que se enfatiza en este módulo, es aún muy desconocida para las comunidades campesinas. De los testimonios de los participantes puede destacarse los siguientes puntos:

- La primera parte que trató sobre todo lo relacionado con la conservación de la Biodiversidad como es la Estrategia Boliviana, causó sorpresa por el desconocimiento que tienen los dirigentes campesinos y las organizaciones campesinas de esta estrategia. Se expresaron muchas críticas y rechazos a muchos aspectos de la Estrategia Boliviana de Biodiversidad y de otras

políticas nacionales e internacionales relacionadas con la conservación de la biodiversidad. En las organizaciones campesinas existe la susceptibilidad de que toda política Estatal que se relacione con los recursos naturales y biodiversidad afecta sus intereses, derechos y su soberanía, lo cual se atribuye en gran parte a que las organizaciones campesinas no solo desconocen la legislación y las políticas nacionales e internacionales, sino que nunca han participado en la proposición mucho menos en la elaboración de estas leyes y estrategias, lo que es muy cuestionado actualmente por las organizaciones campesinas y al parecer es la principal debilidad del sistema de democracia representativa que no ha logrado cubrir las expectativas de las mayorías como son las comunidades campesinas en Bolivia.

- La segunda parte que trató de las Áreas Protegidas y la situación del Parque Nacional Tunari, tuvo reacciones de rechazo puesto que este afecta directamente a las comunidades campesinas que no solo pone en riesgo la propiedad de sus tierras y sus recursos naturales, sino que principalmente atenta contra las únicas posibilidades de vida que tienen las comunidades que son de cultivar la tierra y criar animales, además de utilizar algunos recursos naturales para sus necesidades básicas de vida como el agua y la leña. El rechazo a las áreas protegidas, y en especial el Parque Tunari, es unánime, puesto que la Ley 1262 del Parque Nacional Tunari no considera los usos y costumbres de las comunidades campesinas que han vivido por siglos dentro el área del parque, además no respeta el derecho de las comunidades campesinas e indígenas a trabajar la tierra y a vivir bajos sus usos y costumbres que están establecidos en la Constitución Política del Estado. Otro aspecto muy criticado y rechazado es el procedimiento de los Gobiernos de imponer en forma vertical y forzada las políticas de conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, generándose por ello conflictos que no favorecen a la buena gobernabilidad ni a la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales.

Módulo III

Los cursos taller del módulo III se ha realizado en 7 municipios, no llegando a realizarse en los municipios de Morochata e Independencia por las razones ya explicadas anteriormente. En los últimos meses sin embargo, el Municipio de Quillacollo se incorporó al proceso de capacitación, puesto que en este municipio al inicio no hubo interés de parte de sus dirigentes para implementar la capacitación.

Por otra parte, se debe aclarar que el programa del Modulo III fue ampliado a pedido de las organizaciones y los mismos participantes de los cursos taller sugiriendo incluir al módulo III el tema del ALCA y los Transgénicos, puesto que

estos temas actualmente se consideran prioritarios en las discusiones entre las organizaciones campesinas y el Gobierno.

La asistencia y participación al igual que en los Módulos I y II fue muy variable en cada municipio, tal como se muestra a continuación:

Participación en cursos taller del módulo III

Municipio	Fecha de realización	Lugar de realización	Participantes		
			Hombres	Mujeres	Total
1. Tapacarí	14-03-2004	Tapacarí	30	8	38
2. Sacaba	10-03-2004	Larati	116	7	123
3. Sipe-Sipe	20-03-2004	Tajamar- Sipe Sipe	40	6	46
4. Cercado	21-12-2003	Escuela Andrada	24	3	27
5. Vinto	25-03-2004	Keraya Centro	25	10	35
6. Tiquipaya	09-04-2004	Cruzani	35	3	38
7. Quillacollo	04-04-2004	Liruini	35	1	36
Total			305	38	343

La participación en el Módulo III ha disminuido respecto de los cursos taller del módulo I y II, lo que se debe principalmente a que la época de lluvias, que coincidió con la realización del módulo III, impidió a muchos participantes trasladarse al lugar de los cursos taller incluso a pie. El promedio de asistencia a estos cursos taller fue de 49 personas por taller, lo que representa aproximadamente un 10% menos respecto a los módulos I y II. La participación de las mujeres disminuyó mucho más, siendo aproximadamente un 45% menos respecto a los módulos I y II. Sin embargo, esta disminución en número de participantes totales y de mujeres no significa que haya disminuido la calidad de los cursos taller y mucho menos el interés de los beneficiarios, al contrarió los participantes del Módulo III fueron aquellas personas que más interés mostraron por completar el proceso de capacitación con los 3 módulos, siendo estas personas además las que siguieron con mucho interés los módulos I y II. Esta continuidad de los participantes fue importante para lograr cumplir con los objetivos del programa de capacitación.

La reacción de los participantes a las temáticas desarrolladas en el Módulo III fue de igual o de mayor interés a los anteriores módulos, puesto que el tema del ALCA, los Transgénicos y la Ley del Parque Nacional Tunari sienten y perciben que afecta directamente sus intereses y vulnera mucho más la situación en la que viven las comunidades. Los puntos destacables de estas reacciones son los siguientes:

- El ALCA y los transgénicos han recibido un rechazo unánime de los participantes de los cursos taller, puesto que se advierte un serio riesgo para la seguridad de vida de las comunidades campesinas principalmente de Bolivia. En ambos casos la seguridad y soberanía alimentaria será la más afectada y

por tanto las organizaciones campesinas ven en el ALCA y los transgénicos como una amenaza para las mayorías de los países pobres, pretendiendo los países ricos invadir con sus productos y semillas. Estas últimas tienen el riesgo de que ya no podrán ser reproducidas en las comunidades, lo que hará a los campesinos más pobres y dependientes de las empresas transnacionales. Por otra parte, muchos campesinos participantes indicaron que el ALCA también tiene una intención oculta sobre los recursos naturales y la biodiversidad, que es la apertura a las transnacionales para la explotación y la apropiación de las riquezas naturales de los países pobres, siendo también la declaración de parques o áreas protegidas parte de esta corriente globalizadora.

- Otro resultado importante del Módulo III fue el trabajo de grupos que se realizó en torno a la problemática del Parque Nacional Tunari. De hecho, lo que se advierte en las comunidades campesinas y sus dirigentes respecto del Parque Nacional Tunari es de rechazo total, por una parte, porque en la Ley se desconoce los derechos de las comunidades ha desarrollar actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Por otra parte, porque no reconoce los usos y costumbres de las comunidades, peor aún no reconoce la existencia de comunidades campesinas dentro del área declarado como Parque. Esta situación crea en la actualidad muchos conflictos y de oposición a la implementación de la Ley 1262 (del Parque Nacional Tunari). Las comunidades y sus dirigentes proponen que la Ley de Parque Nacional Tunari debe revisarse a profundidad y modificar principalmente la categoría de Parque que no se adecua a la situación social, cultural y económica de las comunidades campesinas.

4.3. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y la evaluación se ha cumplido durante todo el proceso de ejecución con la participación de la Dirección Ejecutiva de AGRUCO-UMSS, los Técnicos Responsables de la Capacitación y los dirigentes campesinos de la FSUTCC y las organizaciones campesinas de base (centrales, subcentrales y sindicatos comunales). En ese sentido, se puede indicar que la ejecución del programa ha sido ampliamente participativa y de alguna manera flexible en cuanto a los tiempos establecidos, ajustándose a la dinámica social de las comunidades campesinas, pero cuidando sobre todo la calidad de los resultados en la ejecución de cursos taller de capacitación.

5. Evaluación de los beneficiarios

Los resultados e impactos logrados con la capacitación y la reflexión pueden ser evaluados amplia y profundamente con las opiniones, comentarios y testimonios grabados de los beneficiarios. A continuación se muestra partes relevantes

de algunos testimonios que reflejan una evaluación positiva de los beneficiarios y que sin duda contribuye a mejorar la gestión de las áreas protegidas.

Sobre la importancia de la capacitación y reflexión

... sobre las leyes tenemos que hablar y para nosotros del campo y la gente mayor el único son estos talleres, son buenos, como la escuela o colegio, ya no hay otra escuela para nosotros solamente este tipo de cursos, por eso debemos estar muy atentos y también hay que preguntar, analizar y así darnos cuenta como están las leyes...

Respecto de la gestión y el control social

... todas las organizaciones campesinas, organizaciones sociales, donde quiera que se encuentren, tenemos que saber cómo hacer el control social, por tanto es importante involucrarse como organizaciones en cuestiones de control social, esto porque siendo dirigentes o cualquier autoridad deben estar sometido a las organizaciones y no pueden ser sometedores, es por eso también que se debe tener una idea clara de lo que significa el control social...

... el control social no sólo debe ser en las organizaciones comunales sino también en la alcaldía, en todo el municipio ...si no existiera un control social, las autoridades que nos representan, después de hablar bonito a las bases, pueden desaparecer e irse del municipio engañando y robando a los campesinos...

Sobre la ley del Parque Nacional Tunari y las áreas protegidas

... la ley del Parque Tunari se ha elaborado sin conocer bien los usos y costumbres por eso no podemos aceptar, el parque además en esa ley nos esta prohibiendo la crianza de ganado, el recojo de leña y otros entonces con eso estamos afectados...

... si el gobierno quiere construir alguna obra en nuestras comunidades debe consultar con nosotros o para dar en concesión o explotar los recursos ... tenemos muchas leyes, pero se hacen siempre desde arriba sin participación de nosotros y nuestros gobiernos aplican las leyes solo cuando les conviene y nunca cumplen...

... algunos decimos que hecha la ley hecha la trampa como vemos el gobierno declara áreas protegidas pero a la vez también dar en concesión territorios para la explotación de petróleo... los gobiernos siempre manejan a su gusto...

... rechazo de áreas protegidas porque atentan contra nuestros derechos a recursos naturales rechazo a empresas privadas ...

De las leyes y los problemas

... cuando nosotros el pueblo nos levantamos el gobierno dice hay que hacer respetar la constitución política del estado no debe haber marchas ni bloqueos ... pero si analizamos

bien la CPE necesita cambios igualmente las otras leyes como el INRA que ha sido aprobado por el gobierno como querían ellos...

... para poder salir de este problema y de otros que afectan a los sectores campesinos, debemos trabajar con unidad, con una organización sólida, sólo así se va a poder defender nuestra tierra y territorio respetando nuestros usos y costumbres....

... una de las labores de los dirigentes que asisten a talleres y seminarios, es llevar lo aprendido a sus bases, debe socializar los temas que se tocaron con los jóvenes, con los ancianos, con las mujeres, con los hombres sin hacer discriminaciones.

... compañeros según como nos ha explicado las leyes hemos conocido mas y esta bien por eso compañeros siempre es importante asistir a estos talleres porque para nosotros es como la universidad ..nosotros siempre hemos sido engañados por los gobiernos ... por eso compañeros a mi me parece muy bien estos cursos...

De la Continuidad de los talleres de capacitación

... yo rogaría a la institución que estos talleres no se terminen aquí, sino que continúe y que sigan orientando también en otros lugares... agradezco a los compañeros de AGRUCO por este seminario que ha sido muy importante para nosotros...

Como se puede advertir en los testimonios de los propios beneficiarios, la implementación del Programa de Capacitación (PAMS) tuvo un efecto muy positivo y fue muy valorado por los beneficiarios, ya que muchos de ellos expresaron que fue la primera vez que escucharon una explicación detallada de las leyes, además estas se pudo analizar, reflexionar y discutir con la participación de todos los dirigentes.

Otro indicador importante de los resultados logrados con el programa de capacitación, es la profundidad y la calidad de los análisis y la autoreflexión que realizaron los participantes en cada uno de los cursos taller. Este análisis y autoreflexión no solamente ayudo a fortalecer el proceso de capacitación, sino que ha permitido un intercambio de conocimientos y experiencias entre técnicos capacitadores y actores locales, generándose así un proceso de aprendizaje social entre actores externos y actores locales. Asimismo, gran parte de la información y los aprendizajes fueron difundidos por los dirigentes a sus comunidades y sus compañeros de base, lo que es otro indicador de impacto y del alcance indirecto que logro el programa de capacitación.

En consecuencia, de la evaluación realizada por los beneficiarios se puede concluir que el programa de capacitación ha cumplido con el objetivo planteado en el proyecto como fue el de fortalecer y mejorar la Gobernabilidad y el Control Social, lo que depende indudablemente de una mejor cualificación de los conocimientos y de los actores que están directamente involucrados en esta tarea, como son los dirigentes campesinos, los comités de vigilancia, las autoridades municipales y las autoridades gubernamentales. Asimismo, en los testimonios

de los participantes de los cursos taller resalta que la capacitación y la reflexión sobre todo a nivel de las organizaciones campesinas, es una de las pocas estrategias para mejorar la gobernabilidad y el control social en la perspectiva de lograr no solo una gestión sostenible de la biodiversidad, sino en todos los aspectos de la vida del País. Por ello, muchos dirigentes han planteado la necesidad de dar continuidad a este proceso de capacitación profundizando algunos temas y leyes e incorporando otras.

Finalmente, mencionar como otro indicador positivo del programa de capacitación implementado, que las organizaciones campesinas junto a su máximo representante a nivel departamental (FSUTCC) solicitaron el apoyo de AGRUCO en la realización de un ampliado con la participación de los dirigentes y representantes de las cinco provincias afectadas con el Parque Nacional Tunari ha realizarse en el mes de mayo del 2004, donde se pretende obtener una propuesta campesina en torno a la problemática del Parque Nacional Tunari considerando sobre todo el proceso de capacitación implementado y los aprendizajes obtenidos de la discusión, el análisis y la autoreflexión. Esta actividad lamentablemente no fue contemplada en el proyecto; sin embargo consideramos que es muy importante apoyar como un resultado y logro del programa de capacitación, por lo que AGRUCO ha decidido apoyar este taller institucionalmente y proponer una segunda parte del proceso al que se ha denominado PAMS II.

6. Conclusiones y lecciones aprendidas

6.1. Conclusiones

- La conclusión principal del programa de capacitación es, sin duda, el aprendizaje social que se ha generado en torno a la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales en el Parque Nacional Tunari. Este aprendizaje social permitirá a los actores sociales que han participado en el proceso, como son principalmente los dirigentes campesinos y los comités de vigilancia, iniciar una concertación adecuada y un control social eficiente sobre los recursos naturales, en la perspectiva de lograr una buena gobernabilidad.
- Para los capacitadores y los capacitados ha constituido un proceso de aprendizaje mutuo, puesto que ambas partes han generado un diálogo intercultural y de saberes a partir de sus propias experiencias, interpretaciones y visiones sobre las temáticas y leyes tratadas. Si bien este proceso ha servido para que los actores locales adquieran mayores conocimientos e información sobre las temáticas y leyes tratadas, para los capacitadores y los investigadores ha significado un proceso de retroalimentación, ampliación y fortalecimiento de sus conocimientos teóricos y prácticos, lo que les

permitirá una mejor lectura e interpretación de la realidad en la perspectiva de incidir en las políticas nacionales y municipales, sobre todo con relación a las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad.

- Para los investigadores ha constituido, en primer lugar, un nexo y una apertura con las organizaciones campesinas principalmente a nivel municipal y por otra, conocer la visión de las comunidades campesinas sobre los recursos naturales y la legislación boliviana que se expresaron en los testimonios, que serán un insumo de análisis para las investigaciones científicas. Asimismo, el programa de capacitación ha permitido mostrar a los investigadores su posición frente a las comunidades campesinas. Si bien las investigaciones deben cumplir objetivos y resultados concretos, el PAMS ha significado una acción de reciprocidad con las organizaciones campesinas tan importante en la cultura andina, pero también es un medio de diálogo y aprendizaje para los investigadores involucrados.
- Por otra parte y de manera general, el programa de capacitación y reflexión ha permitido también generar un sentimiento de unidad en las organizaciones y dirigentes campesinos de los municipios afectados por el Parque Nacional Tunari, lo que ha fortalecido a las organizaciones sociales en la perspectiva de defender los derechos sobre la tierra y la gestión del territorio bajo su propia cosmovisión, sus usos y costumbres, que muchas veces no son respetados y menos considerados en muchas de políticas nacionales.
- La activa participación de las organizaciones campesinas en los cursos taller ha demostrado el interés que tienen estas por una mayor capacitación y conocimiento, siendo ello una señal importante de que las mayorías en Bolivia quieren insertarse a la dinámica política municipal y nacional, pero haciendo prevalecer su visión, sus organizaciones y su cultura, por lo que las instituciones externas, especialmente las entidades educativas, deben contribuir cada vez más en este cometido puesto que es la base de la gestión sostenible y la buena gobernabilidad en torno a la biodiversidad y los recursos naturales.
- Se espera que la capacitación y reflexión impulsada a través del presente programa, contribuya en el mediano plazo a la solución de los conflictos que se han generado en torno al Parque Nacional Tunari, con una perspectiva a más largo plazo de lograr una gestión sostenible entre las organizaciones de base, los gobiernos municipales y las entidades gubernamentales.
- Los resultados del proceso de capacitación y reflexión prácticamente han rebasado las expectativas de AGRUCO a pesar de algunos inconvenientes de fuerza mayor como fue el octubre negro del 2003 (convulsión social y cambio de gobierno), conflictos de los Gobiernos Municipales (el caso de Morochata), la época de lluvias y el mal estado de los caminos (principalmente en Independencia) que ocasionaron la postergación y la no realización de algunos talleres.

- Por todos los resultados e impactos logrados con el PAMS I, consideramos que es de mucha necesidad la implementación de un segundo PAMS³ para ampliar el proceso de aprendizaje a una mayor población de las comunidades campesinas, pero fundamentalmente para apoyar a la búsqueda de soluciones adecuadas a la problemática del Parque Nacional Tunari en la perspectiva de lograr una gestión sostenible de la biodiversidad y las áreas protegidas a través de mecanismos de una buena gobernabilidad y control social.

6.2. Lecciones aprendidas

- Si bien el Estado Boliviano cuenta con muchas leyes y decretos para regular los diferentes procesos y acciones de los diferentes actores sociales, estos no son de conocimiento de una mayoría de la población principalmente rural, debido a la ausencia de sistemas de comunicación de alcance popular que difundan apropiadamente el contenido de las leyes, además el sistema educativo en Bolivia no considera ni siquiera la enseñanza de la Constitución Política del Estado. En estas circunstancias, los cursos taller de capacitación como los realizados, son los únicos medios de aprendizaje e información para las comunidades campesinas. Es muy notoria la carencia de programas de capacitación para adultos y las comunidades campesinas, lo cual repercute en la gobernabilidad, el control social y la participación ciudadana.
- El análisis y la autoreflexión de las comunidades y sus dirigentes respecto de las diferentes leyes, ha sido un verdadero aprendizaje social no solo para los actores locales, sino también para los actores externos (técnicos capacitadores e investigadores), puesto que los testimonios de los campesinos participantes de los cursos taller nos hacen ver que una mayoría de las leyes no responden a la realidad socio-cultural de Bolivia y en muchos casos existe contradicciones entre leyes, lo que en vez de ser un medio para normar adecuadamente los diferentes aspectos de vida del Estado boliviano, provoca conflictos sociales que muchas veces llegan a la violencia. Un problema que han advertido las comunidades, es la contradicción de la Ley INRA con la declaratoria de parques como el Parque Nacional Tunari; la primera pretende realizar el saneamiento de las tierras en las comunidades campesinas y, la segunda, prohíbe las actividades agrícolas, pecuarias y forestales de las mismas comunidades campesinas. Estas contradicciones se encuentra incluso

3 En el momento de la impresión de esta memoria, se tiene la confirmación de la aprobación del PAMS II; proyecto que se intitula “Apoyo a los Procesos de Concertación entre Actores Sociales para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales en la Cordillera del Tunari.

frente a la Constitución Política del Estado, lo que para las comunidades es un problema no solo de falta de conocimiento por parte de ellos, sino que también del desconocimiento de la realidad boliviana por parte de los legisladores y los gobiernos de turno. La credibilidad de las comunidades hacia las leyes nacionales es realmente muy escasa, ya que advierten que ni los legisladores y gobierno las cumplen, por lo que muchos dirigentes y comunidades plantea que se debe reconocer la normas consuetudinarias de las comunidades por su efectividad no solo en la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad, sino también en otros aspectos como la justicia comunitaria.

- Otro aprendizaje, principalmente para los capacitadores, fue que no solo es necesario elaborar un material didáctico apropiado y capacitar en el idioma nativo, sino que es importante la credibilidad y la confianza de los participantes y las comunidades campesinas hacia los capacitadores e investigadores, puesto que la incertidumbre que se tiene de ser mal informados y con intereses sectarios es muy grande. Esta confianza no solo garantiza la realización de los talleres, sino también que el análisis y la autoreflexión sean realizados sin temores ni reservas por parte de los asistentes a los cursos taller; siendo fundamental también para ello, la coordinación y participación en el proceso de capacitación de los dirigentes de la máxima entidad que los representa como es la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, las centrales campesinas, subcentrales y sindicatos campesinos.
- En ese marco, la implementación de programas de interacción social como el PAMS requieren de una coordinación estrecha con las organizaciones sociales, dirigentes y principalmente con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, ya que estas instancias facilitan la buena implementación de las actividades programadas con las organizaciones campesinas. De la misma forma se requiere una coordinación con las autoridades municipales para garantizar la participación de estos actores como los Comités de Vigilancia, el Alcalde y los Concejales Municipales.
- Otro aspecto no menos importante es que se requiere de una buena coordinación y retroalimentación entre los integrantes del equipo técnico e investigadores, dejando de lado las especialidades y más bien buscando un tratamiento integral de las temáticas y leyes tratadas.
- La experiencia institucional de AGRUCO en los procesos de fortalecimiento y capacitación a organizaciones campesinas, permitió diseñar una estrategia metodológica apropiada para la ejecución del PAMS, la misma tuvo tres aspectos importantes: el enfoque participativo e interactivo, el diálogo de saberes y la reciprocidad. En ese sentido, las actividades fueron ampliamente concertadas con los dirigentes, autoridades y representantes de las organizaciones campesinas y municipios.

- Finalmente, si bien se ha contribuido en el aprendizaje social, la ampliación de los conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales en torno a la Gobernabilidad, Control Social y la Gestión Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales en Áreas Protegidas, este proceso requiere de una continuidad (PAMS-II), para consolidar resultados efectivos y facilitar la búsqueda de soluciones a la problemática del Parque Nacional Tunari en la perspectiva de lograr un desarrollo sostenible que garantice el desarrollo humano, el mejoramiento económico y la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad en el área rural de Bolivia.

Panel de debate y discusión

Parte IV

Moderador:

Dra. Silvia Rodríguez, Universidad Nacional de Costa Rica

Emilio Espinoza

Dirigente de la Central Campesina de la Provincia de Quillacollo

Es muy interesante las propuestas que han presentado los compañeros panelistas y, por ello, quiero felicitar a todos los panelistas, en especial al compañero Zacarías, porque ha tenido la capacidad de redactar y presentar la versión que tienen los campesinos sobre el Parque Tunari. Así también han mostrado la realidad de cómo vivimos las comunidades campesinas del Parque Tunari. Anteriormente muchas instituciones y profesionales han visitado nuestras comunidades pero nunca hicieron conocer la verdadera realidad y versión de los compañeros campesinos. Otras instituciones manejadas por el gobierno buscaron solo aprovecharse de nuestros conocimientos y organizaciones, además nos engañaron, por eso es que desconfiamos mucho y no los aceptábamos a muchas instituciones.

Por otro lado tengo una preocupación con lo que esta pasando con SEMAPA en el Parque Tunari. Resulta que SEMAPA a través del INRA quiere sanear 2657 hectáreas en el territorio que corresponde al Municipio de Tiquipaya, pero esta situación desconocen los compañeros campesinos, eso nos sorprende. Como dije anteriormente, todas las tierras del Parque Tunari incluso los de pastoreo y lagunas cuenta con un título de propiedad ejecutorial de los campesinos. Además en el artículo 177 de la Constitución Política del Estado dice que el título de propiedad ejecutorial es insustituible, no se puede quitar. Pero que esta ocurriendo? La Prefectura y la Alcaldía quieren transferir a SEMAPA tierras que son de nosotros. Por esa razón no estaré mañana porque tenemos una reunión para discutir esta situación, pero mis compañeros van estar aquí. Así nos pasa, aquí estamos hablando de

resolver los conflictos del Parque Tunari, mientras que por otro lado las empresas se están adueñando de las tierras, eso realmente nos sorprende.

Como también ya dije anteriormente, los campesinos pedimos que nos respeten y que las tierras y los recursos se administren según nuestros usos, costumbres y servidumbres, porque así se ha manejado desde nuestros abuelos. Si no se toman en cuenta nuestros reclamos, no nos queda otra cosa que luchar con el movimiento campesino para hacernos respetar y defender nuestros territorios. Por ello queremos que estos seminarios lleguen a buenos resultados y propuestas que sirvan a todo el movimiento campesino, indígena y de colonizadores del país. Creo que queda mucho todavía para debatir, analizar y discutir.

Finalmente quiero pedir a los compañeros visitantes de los diferentes países como de Costa Rica, Perú, Chile y otros, y también a los representantes del gobierno boliviano y de las instituciones, que en los congresos mundiales y en todos los congresos digan la verdad y hagan conocer la versión de los campesinos. Lamentablemente a nosotros no nos invitan ni nos dan cabida en estos congresos, aunque últimamente algunas instituciones ya nos invitan para que podamos hacer conocer nuestra posición, y lo más importante es que lleguemos a tener acercamientos y conclusiones que beneficien a todos. Muchas gracias.

Casiano Fernández

Dirigente de la Central Campesina de la Provincia de Quillacollo

Primeramente quiero expresar mi agradecimiento a AGRUCO por haberme invitado a este seminario. Yo vivo en la Provincia Quillacollo regional Llave Grande. Aquí la señora Debra Pereyra informó que el Parque Tunari está muy bien. Como va estar bien? Si lo que quieren es expulsarnos de nuestras tierras, nos quieren prohibir la construcción de casas, caminos y otros; entonces donde vamos a vivir? Todo esto es un perjuicio para nosotros, pero ya tenemos una decisión como organización de campesinos para no ceder ni un paso de nuestras tierras. Por otra parte, nosotros no reconocemos a ese comité de gestión, no se donde hacen reuniones, no sabemos nada. Los compañeros campesinos ya están cansados de todo esto, no queremos ser responsables si hay más problemas. Eso nada más, gracias señores.

Juan René Alcoba

Representante del SERNAP

Tengo varios puntos para comentar sobre las exposiciones particularmente en relación al Parque Nacional Tunari. Primero quiero aclarar que la situación del

Parque Tunari es muy diferente a lo que ocurre en el resto de las áreas protegidas que se tiene en el país. Por indicar una diferencia, en este parque no hay elementos de biodiversidad que nos interesa conservar y que sean de prioridad para el sistema, al contrario es un área con mucha intervención y una fuerte amenaza de urbanización. Todo eso lleva obviamente, a que es necesario repensar la categoría y el objetivo de esta área protegida.

Por otra parte, en todas las intervenciones y discusiones que se realizaron desde ayer, se advierte que no hay una claridad de la Prefectura en cuanto a la gestión y la resolución de los conflictos. El SERNAP ha dejado en manos de la Prefectura toda la situación del Parque Tunari, ya que la Prefectura es un importante actor regional y tiene la posibilidad de hacer un mejor trabajo a nivel local para que se inicie la gestión de esta área protegida. Asimismo, el caso de Cotacajes Altamachi es plena responsabilidad de la Prefectura de Cochabamba, por lo que el SERNAP solo puede apoyar y orientar para una buena gestión del mismo, aunque indirectamente el SERNAP es responsable de todas las áreas protegidas en Bolivia. Por ello también dijimos que el Parque Tunari es diferente a las otras áreas protegidas que esta bajo la responsabilidad del SERNAP. Por ejemplo en el caso del Parque Nacional Sajama, como nos explicó su director, se tiene importantes avances en cuanto a la participación local y la conservación y el manejo sostenibles de los recursos de biodiversidad.

Otro aspecto que nos preocupa como SERNAP, es la forzada relación que se quiere encontrar entre áreas protegidas y las empresa petroleras. Creemos que en este aspecto hay una lectura sesgada. Es necesario entender que la región subandina tiene importantes recursos de biodiversidad pero también geo-morfológicamente hablando, donde no hay duda que existen recursos petrolíferos. Por ello posiblemente haya una alta coincidencia entre áreas protegidas y concesiones petroleras. Lo que se debe aclarar entonces, es que de ninguna manera el objetivo de las áreas protegidas es hacer explotaciones petroleras, creo que ni René que hablo del tema intento decir eso. Por otro lado, se quiere hacer ver que las instituciones gubernamentales también están involucrados o trabajan a favor de las empresas petroleras y mineras, por lo menos en el caso del SERNAP eso no ocurre de ninguna manera.

Por todos estos aspectos, creo que es muy necesario trabajar de manera conjunta entre actores del Estado y de la sociedad civil, en la perspectiva de hacer alianzas que nos permitan implementar normas y efectuar una fiscalización fuerte a todos los actores que intervienen en las áreas protegidas del país, adicionalmente las alianzas con los sectores sociales pueden ser vitales para implementar una gestión adecuada de las áreas protegidas. El SERNAP tiene una visión netamente de conservación y manejo sostenible de los recursos de biodiversidad en los lugares determinados como prioridad para Bolivia.

Carmen Miranda

Representante de la UICN-Bolivia

Tengo una pregunta en referencia a la sistematización de las normas comunales para el uso de ciertos recursos de la biodiversidad. Conozco una experiencia en Chuquisaca donde a partir de estos ejercicios académicos se ha propiciado la articulación del derecho consuetudinario con la normativa formal. Entonces quiero saber si es que AGRUCO está emprendiendo este tipo de iniciativas principalmente para fomentar la conservación de recursos de biodiversidad y recursos forestales.

Otra pregunta que quiero hacer es a Jaime. Me parece muy interesante todo ese proceso de capacitación que realizaron y de apertura a un diálogo intercultural, en realidad como una estrategia para lograr sostenibilidad en el manejo de nuestros recursos. Pero también hemos visto que los procesos de capacitación y de diálogo intercultural son largos y costosos; creo que con un curso o cuatro cursos no es suficiente, además sabemos que hay deficiencias en la transmisión de la información entre quienes asisten a un curso y el resto de la población. En el caso del Parque Tunari entiendo que son muchas comunidades y seguro que hay una población humana muy grande, por tanto la asistencia a los cursos de capacitación que realizaron seguro que fue restringida a un tipo de dirigentes. Me gustaría saber si es que están implementando una metodología de monitoreo para ver cual es el impacto real de estos procesos que buscan creo el “empoderamiento” para la gestión comunal de la biodiversidad.

Otra cosa que quería comentar brevemente es lo siguiente. Coincido con la visión del representante del SERNAP en el sentido de que Cochabamba como departamento tiene muchos desafíos y conflictos que debe resolver en el nivel local y departamental. Una de ellos es por ejemplo resolver la viabilidad del Parque Nacional Tunari. Uno de los problemas de porque no fue incluido el Parque Tunari en el sistema nacional, es que no se encontró elementos de la biodiversidad representativos que justifique su conservación, además que no es posible encontrar ecosistemas prístinos.

Por todas estas razones, creo que es importante hacer una evaluación anticipada de cual va ser el objetivo y la perspectiva de viabilidad del Parque Tunari, además no debemos olvidar que los esfuerzos para desarrollar un área protegida son grandes e implica un montón de esfuerzos no solamente a nivel social sino también económicos. El Parque Nacional Tunari no hay duda que es muy importante para la ciudad de Cochabamba, y de todas maneras es necesario pensar en ayudar a que la naturaleza sea la que gane frente a otros intereses personales y sectarios.

Dora Ponce

Investigadora en el Parque Tunari, NCCR-AGRUCO

Respecto a la pregunta de Carmen sobre las normas locales. Por el año 1999 AGRUCO en convenio con PROBONA ha realizado una investigación sobre

las normas comunales y el tipo de relación que mantienen las comunidades con sus bosques nativos. Como resultado de este estudio se conoce por ejemplo las normas internas que tiene la comunidad de Chorojo para regular el uso de los recursos del Bosque, y esto se lo ha difundido bastante hasta se tiene un video sobre el mismo. Pero creemos que más que solo ver las normas, es importante ver lo que hay detrás de estas normas; en realidad las normas comunales son la expresión de una cosmovisión particular que tienen las comunidades campesinas. El trabajo de investigación que vengo realizando, tiene precisamente el objetivo de analizar las normas locales no como formas únicas o estáticas, sino ligadas a su cosmovisión, a su proceso histórico, a las relaciones que existen dentro la comunidad y otros ámbitos. Es decir que no pretendemos estudiar las normas comunales en forma atomizada, sino que ligada a su contexto sociocultural y productivo, y nuestro interés es ante todo de revalorizar las formas de relación de las comunidades campesinas con la naturaleza, que finalmente resultan ser las formas de vida que tienen las comunidades campesinas e indígenas y que son complemente diferentes a la visión occidental. Por ello no son fácilmente compatibles las normas comunales con la legislación formal, ya que la primera tiene que ver con una forma de vida, una forma de organización y una forma específica de concebir a la naturaleza, mientras que la legislación formal es ante todo restrictiva. Con el trabajo de investigación esperamos aportar en la definición de las políticas públicas.

Pese a que ya se han realizado muchos estudios sobre las normas locales y comunales, en Bolivia se continúa elaborando reglamentos en base a criterios externos e internacionales. Incluso como les dije, hay normas consuetudinarias que están funcionando en las comunidades campesinas e indígenas, porque no revalorizar estas? Hay muchos conocimientos y saberes en las comunidades que no se les quiere dar la importancia respectiva.

Jaime Delgadillo
Técnico de AGRUCO

Con respecto a los impactos del programa de capacitación y diálogo intercultural que implementamos. Creemos que hay diferentes impactos y que algunos pueden ser inmediatos y otros pueden llegar a más largo plazo. Reconocemos también que este proceso toma su tiempo y es difícil abarcar a poblaciones grandes, tal vez esas sean algunas desventajas. Pero tomando algunos puntos específicos, podemos ver que los impactos son evidentes por ejemplo en el control social a nivel municipal, porque este tema fue incluido en el programa de capacitación, incluso ya hubo cambio de autoridades municipales que no realizan manejos transparentes en sus municipios.

Para implementar un programa de capacitación en base a un diálogo intercultural, creemos que es fundamental el idioma local y tomarse todo el tiempo posible para conversar, dialogar y aclarar las dudas. Otro aspecto es la transparencia de los contenidos de la capacitación. Para las comunidades campesinas es mucho más importante conocer toda la información que dar solo un resumen didáctico, puesto que muchas veces un pequeño resumen interpreta como una actitud para esconder información. El análisis debe ser también profundo en lo posible considerando un proceso histórico que es vital para las comunidades campesinas, ya que la visión de estas es que nada de lo ocurre hoy es causal, si no que hay una causa histórica. De esta manera se buscó que los participantes de los talleres entiendan bajos sus propios códigos y percepciones los temas tratados, para que luego puedan transmitir a sus compañeros de base con mayor facilidad. Otro aspecto importante es que todo el proceso debe planificarse en forma participativa con todos los dirigentes y las autoridades legítimas, y respetando la estructura orgánica de los campesinos.

Solamente para poner otro ejemplo del impacto que se ha logrado con el programa de capacitación. En este seminario están participando algunos de los compañeros campesinos que se han beneficiado con los talleres de capacitación, y en sus intervenciones reflejan lo que aprendieron. También hemos tenido oportunidad de escuchar en otros eventos a compañeros campesinos que expresan lo que han aprendido y lo que se ha discutido en cada uno de los talleres. Pese a que AGRUCO tiene una larga experiencia de trabajo en las comunidades sobre todo en el Municipio de Tapacarí, en una mayoría de los municipios intervenimos por primera vez con el programa de capacitación, logrando una importante confianza y credibilidad.

Por los resultados que se lograron con este primer programa de capacitación, una mayoría de las organizaciones campesinas del parque han demandado una segunda fase, que si bien estará orientado a profundizar algunos temas, el objetivo central será apoyar a la búsqueda de soluciones a los conflictos del Parque Nacional Tunari pero comandado por la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba en coordinación con otras instituciones y todas las organizaciones de base.

Respecto a la pregunta que tan viable es el Parque Tunari? Creo que ya han escuchado la respuesta, durante todo el seminario los actores locales han expresado su versión y lo que piensan sobre el Parque Tunari. Creemos que los compañeros no están totalmente en desacuerdo con el parque, lo que pasa es que los procedimientos legales, las formas de creación y administración de las áreas protegidas no responden a sus percepciones y demandas. Si se continua con los procedimientos tradicionales no se va a lograr nada. Es necesario cambiar la visión y el objetivo del Parque Tunari, pero también los procedimientos y métodos de trabajo principalmente de parte de la prefectura, las alcaldías y de algunas instituciones involucradas.

Otro elemento que podría ayudar a la viabilidad del Parque Tunari, es que los actores gubernamentales y prefecturales aprendan a escuchar las propuestas de los actores locales u otros actores, luego generar discusiones abiertas y sin restricciones. Las organizaciones campesinas del Parque Tunari ya tienen una propuesta que puede ser mejorada y profundizada en base a una discusión sin imposiciones ni discriminaciones, aunque es cierto que lo más importante es pensar en que todos ganen, incluso la naturaleza, para ello sin embargo es necesario ceder de alguna manera en nuestras posiciones. Ese en este sentido que, como AGRUCO, hemos ido orientando a las comunidades campesinas. Pero los que finalmente tomaran las decisiones son los actores locales, porque debemos reconocer que ellos son los dueños de casa y los demás son solo inquilinos.

Franz Guzmán

Director del Parque Nacional Sajama

Quisiera abordar varios aspectos. Una primera cosa que debemos aclarar, es que no se puede generalizar que todas las áreas protegidas de Bolivia están mal solo tomando como punto de discusión y análisis el Parque Tunari, y por esto hay que crear movimientos sociales. Eso creo que es muy peligroso. Debemos reconocer que hay comunidades Aymaras que están trabajando positivamente en las áreas protegidas. Creemos que los conflictos que están ocurriendo en Cochabamba es de carácter institucional, tal vez nunca debió haberse creado un área protegida y que este problema hay que abordarlo desde un punto de vista institucional

Las investigaciones que esta haciendo AGRUCO nos muestra con claridad meridiana lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Tunari, y a partir de estos resultados hay que construir una propuesta concertada que debe llegar a los niveles de gobierno. En realidad este parque ha perdido su esencia. ¿Qué se va a conservar en el Tunari, las plantaciones de pinos y eucaliptos? creo que no hay esencia de conservación. Por otra parte, la categoría de manejo no está adecuado, se esta castigando a las poblaciones que viven dentro el Parque Tunari. Además es casi imposible hacer gobernable con trescientas comunidades, mucho peor con una ley tan restrictiva, donde estamos?

Las áreas protegidas tienen como sustento social la participación de los actores locales, ellos son en realidad los que tienen que conservar y han conservado desde miles de años atrás. Las comunidades campesinas son conservacionistas en esencia, y esa conservación debemos llevar a un proceso de desarrollo sostenible si es que en verdad queremos salvar la naturaleza y sacar a nuestras comunidades de la pobreza, es decir debemos premiar la conservación implementando un proceso de desarrollo sostenible. Creo que en Cochabamba se esta haciendo todo lo contrario, más bien creo que se esta castigando a las comunidades campesinas.

Entonces la perspectiva de solución es una propuesta institucional donde participan actores como el SERNAP, el propio gobierno, la prefectura, las alcaldías, las organizaciones campesinas, etc. Ojalá que para esta solución se consideren como punto de partida los resultados de investigación que esta realizando AGRUCO. La pregunta es a AGRUCO y a los compañeros campesinos del Parque Tunari si han pensado o ya existe esa propuesta, y si no fuese así, hay que movilizar a las instituciones inmediatamente para solucionar la situación del Parque Tunari.

Miguel Angel Crespo PROBIOMA-Santa Cruz

Quisiera decir lo siguiente. El proceso de creación de áreas protegidas ha sido polémico en todos los lugares, en unos más que en otros menos. Pero hay un elemento que es coincidente sobre todo en los últimos años, y es que ese proceso esta siendo impulsado fundamentalmente por organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales, muchas de ellas de corte muy conservacionista. Esto es lo que me preocupa personalmente, porque muchas de estas organizaciones conservacionistas no han dudado en más de los casos en aliarse a las empresas petroleras u otras empresas para negociar territorios y áreas que son potestad y patrimonio del Estado boliviano, por ende de las comunidades que viven allá.

Un hecho lamentable es lo que esta ocurriendo en la provincia Ayopaya con la creación del Parque Cotacajes-Altamachi, el que esta siendo impulsado por cuatro ONGs, estoy hablando de tres ONGs norteamericanas o internacionales y una nacional. Esta última es PROMETA que es una ONG conservacionista de Tarija, y no es casual que esté impulsando la creación de esta área protegida. Esta mañana me tocó hablar pero no hubo tiempo para referirme a profundidad al caso del bosque seco chiquitano; lamentablemente estas mismas ONGs negociaron con la ENRON y SHELL el cambio de la definición de un bosque primario o prístino a otro que les permita a estas empresas pasar por medio del bosque seco chiquitano. Es una historia muy larga que me tomaría mucho tiempo contarla. Que significa todo esto? Que se está violando la soberanía nacional y la Constitución Política del Estado, o no es cierto? La creación de áreas protegidas deberían ser impulsados por el Estado boliviano a través de sus autoridades e instituciones competentes, pero fundamentalmente bajo un proceso en el que este involucrada la población local. Cuando la población local no esta involucrada hay libertad para hacer negociados.

Las áreas protegidas en si no son malas, el problema es cuando se llevan adelante bajo procesos no transparentes y no participativos, como los que hemos escuchado en estos dos días. Entonces los compañeros campesinos tienen razón en

rechazar las áreas protegidas cuando los procedimientos de creación y de gestión no son transparentes ni apropiados.

La conservación en áreas protegidas deberían principalmente permitir la sostenibilidad en el mejoramiento de la calidad de vida, o sea que las comunidades vean un beneficio como producto de la creación de las áreas protegidas. Pero como esto no ocurre las organizaciones campesinas reaccionan negativamente frente a las áreas protegidas. Es hora de que los bolivianos cambiemos nuestras actitudes, tanto a nivel del gobierno como de la sociedad civil, bajo la premisa sobre todo de rescatar y fortalecer los derechos soberanos que tenemos los bolivianos sobre el manejo y la gestión de nuestros recursos naturales.

Otro aspecto en este sentido, es que se debe buscar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas y del SERNAP, puesto que ambas tienen la potestad legal para ocuparse de las áreas protegidas. Aunque las instituciones del Estado casi siempre se encuentran en una situación difícil, porque están presionados por todos lados, por el lado de las petroleras, las empresas mineras, las organizaciones conservacionistas y hasta las comunidades locales.

Es importante por otro lado, involucrar a los municipios en el tema de las áreas protegidas, ya que estos son responsables de la gestión territorial en sus jurisdicciones, pero los asuntos de las áreas protegidas y del medio ambiente están dejando de lado bajo el argumento que es responsabilidad del Gobierno, eso se debe a que los municipios todavía no encuentran beneficios en las áreas protegidas y los recursos de biodiversidad. Por otro lado, muchos municipios aún no asumen que la conservación y los servicios ambientales son la base del desarrollo sostenible.

El fortalecimiento de las comunidades locales es vital, principalmente en términos del uso adecuado y sostenible que hacen de la biodiversidad. Aunque no debemos ser ingenuos de mistificar esto, porque nadie puede desconocer que estamos viviendo un momento de intensa globalización en muchos aspectos. Aquí es donde las ONGs, universidades, centros de investigación y otras organizaciones deben contribuir en rescatar, fortalecer y mejorar las tecnologías locales, de modo que sobre la base de las tecnologías y conocimientos locales se puedan generar e innovar tecnologías y estrategias mucho más sostenibles.

Bolivia se encuentra actualmente en una coyuntura muy especial, producto de las movilizaciones de octubre, puesto que se está cuestionando muchos aspectos de manejo del Estado, especialmente de los anteriores gobiernos. En este sentido una de las leyes más cuestionadas es la ley de hidrocarburos; desde hace mucho tiempo hay una demanda por revisar esta ley. En Bolivia la dimensión económica siempre ha estado por encima de la dimensión social y ambiental, por eso es que siempre hemos tenido las leyes como el código minero y la ley de hidrocarburos con una visión netamente económica. Pero creo que es hora de exigir que la dimensión social y ambiental debe estar a la misma altura de la dimensión económica.

Esto supone que en la modificación de la ley de hidrocarburos deben participar los dirigentes sindicales, los municipios, las autoridades competentes y la sociedad civil en general. No es posible que continúen haciendo las leyes un par de tecnócratas pro petroleras, sabemos que estos están vendidos a las empresas y cada vez que las empresa no están de acuerdo con un párrafo o una palabra lo hacen cambiar, hay un loby muy fuerte de estas empresas a nivel del gobierno.

Entonces las jornadas de octubre deben servir para hacer cambios estructurales en nuestro país, y eso dependerá del pueblo y de las organizaciones vivas de la sociedad civil. Debemos cambiar la visión en muchos aspectos, principalmente respecto a nuestros recursos naturales. Puede que este planteando una utopía, pero pienso que en nuestro país todo es posible y en la medida que hayan organizaciones fortalecidas y un concepto fortalecido de soberanía sí vamos a poder avanzar y cambiar.

Para terminar felicitar a AGRUCO por el trabajo y las investigaciones que esta realizando. No entendía el problema del Parque Tunari con mucha claridad, pero a partir de la explicación acerca del trabajo y las investigaciones que han desarrollado la cosa esta muy clara. Como ya dijeron, sobre la base de estos resultados se deben buscar soluciones a los conflictos y problemas. En ese sentido quería hacer una pregunta. AGRUCO podría facilitar o dinamizar un proceso donde se puedan sentar los actores del SERNAP, la prefectura, los municipios y comunidades locales para definir cual va a ser el futuro del Parque Tunari? Si se va a recategorizar o se va eliminar el concepto de área protegida? Creo que en el caso del Parque Tunari ya no requiere darle más vueltas ni de parte de la prefectura ni de parte de los campesinos, sino de llegar a una concertación con todos los actores sociales involucrados pero inmediatamente.

Aquino Heredia

Ejecutivo de la Subcentral Campesina del Parque Tunari

Lo que quiero indicar es que el pasado año nos reunimos las 5 provincias afectadas por el Parque Tunari, seguro recuerdan los compañeros dirigentes, en esa ocasión se presento un anteproyecto que la prefectura quería hacer aprobar. Entonces los dirigentes de las 5 provincias pedimos un compás de espera, por lo menos de 7 meses. De esta manera decidimos entre todos los dirigentes capacitarnos y prepararnos, para que posteriormente podamos discutir la situación del Parque Tunari con la prefectura. Así es como realizamos, AGRUCO nos ha capacitado y nos hizo conocer muchas leyes y temas con transparencia, su labor fue muy buena. Por ello pensamos los dirigentes de las 5 provincias que vamos a seguir trabajando con AGRUCO, creo que no termina aquí, sino que vamos a seguir preparando nuestra propuesta. Agradecer al equipo de AGRUCO, muchas gracias.

Jaime Soto

FUNDECAM, Chile

No se si voy hacer una reflexión. Entre lo que se presentó ayer y hoy en el taller, creo que hay como dos propuestas o dos visiones de manejo de áreas protegidas en Bolivia. Una que viene del Servicio Nacional de Areas Protegidas de Bolivia (SERNAP) y la otra que se mostró en el caso del Parque Nacional Amboró, esta última como una propuesta alternativa que incorporaba elementos nuevos. Pero lo que no veo claro cual es la propuesta de los campesinos, o sea cual es la propuesta con visión Aymara, Quechua? Que hubiera sido interesante para negociar con las otras propuestas y no partir con algo mediatizado. A lo mejor Sebastián trató de mostrar algo por ejemplo en un mapa de manejo de las diferentes altitudes. Pero para mi una propuesta indígena verdadera es aquella que no esta mediatizada por ninguna institución. A lo mejor ustedes lo han propuesto como una labor de AGRUCO para poder colaborar con una visión actual que yo pienso que existe y que es Aymara Quechua. Obviamente esta propuesta mediatizada tiene elementos occidentales, aunque es mucho más flexible que la propuesta de Estado. En este proceso supongo que AGRUCO es un tercer actor, al menos así entiendo por el trabajo que hago y que es similar al de ustedes. Como un tercer actor están participando en el proceso, a ello va dirigida mi pregunta. Cómo ven ustedes su situación? Sienten presiones? Viven presiones dentro su trabajo? Al acompañar y colaborar con una propuesta campesina sienten presiones del Estado?.

Elvira Serrano

Investigadora en el Parque Tunari, NCCR-AGRUCO

De hecho este seminario es un espacio que pretende facilitar el acercamiento de diferentes visiones, de las diferentes percepciones para luego llegar a algunos puntos de negociación. Aquí se ha podido ver cuál es la percepción de las comunidades y otros actores como la prefectura, y en base a estos se podría encontrar espacios de interfaces. Por otro lado, a partir de lo que ha sido el programa de capacitación que presento Jaime, los compañeros campesinos ya han ido delineando algunos puntos clave sobre los cuales ellos van a realizar sus propuestas. AGRUCO en este proceso obviamente es un facilitador, lo que ha hecho simplemente es socializar algunas leyes y orientar a los dirigentes campesinos, pero finalmente los que tomarán alguna decisión son los propios campesinos. Una acción inmediata que tienen programado los compañeros campesinos y que es producto también del programa de capacitación, es una reunión que realizaran las 5 provincias afectadas por el Parque Nacional Tunari para elaborar una propuesta de gestión del Parque Nacional Tunari. Suponemos que posteriormente habrá algún otro espacio para

negociar con los personeros de la prefectura y del SERNAP. Para ello se ha previsto una segunda etapa del proyecto de capacitación en concertación con la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, dirigentes de las organizaciones de base, comités de vigilancia y otros actores.

Zacarías Ortíz

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Ayopaya

Las propuestas de las organizaciones campesinas sabe claramente el pueblo boliviano. Como dijo un compañero, en octubre del año pasado hubo una convulsión social en Bolivia que ha promovido muchos cambios o al menos esta cambiando, aunque muchos dicen todavía que hay que evaluar. Las organizaciones campesinas estamos proponiendo incluso que debe cambiar la Constitución Política del Estado, sobre esa base cambiar todo hasta las áreas protegidas. Pero sobre el actual modelo no podemos cambiar mucho. Los bolivianos tuvimos muchas riquezas naturales como plata, plomo, estaño, oro y otros, pero actualmente los hijos de los mineros por lo menos trabajan en alguna empresa. Eso ya no queremos que ocurra, por eso estamos proponiendo cambios a través de la asamblea constituyente, queremos escuchar y ser escuchados, queremos cambiar este país para que legítimamente los quechuas y los aymaras manejen las riquezas naturales, no con imposición de otros países, sino con soberanía, esa es nuestra visión.

Sebastián Bolliat

Investigador del Parque Tunari, NCCR-AGRUCO

A mi me gustaría agregar algo y estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero Zacarías. Bolivia se encuentra en un proceso que al parecer va a cambiar muchas cosas, porque se presume que habrá una asamblea constituyente que posiblemente cambie toda la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de lo que podía ser la suerte del Parque Tunari, no es suficiente cambiar la categoría, sino pensar también quienes plantearon las diferentes categorías de áreas protegidas y de donde vienen. Se realizó igualmente una ley sin consultar a las organizaciones campesinas. Advierto más bien en este proceso de la asamblea constituyente, una oportunidad para plantear como se va encarar la conservación ambiental en Bolivia o mejor dicho la gestión sostenible de la biodiversidad, considerando sobre todo la participación de las organizaciones campesinas y actores locales. Posteriormente esas propuestas podrían subir a un nivel de legislación, pero que estas respeten las bases culturales y la realidad del país.

En el caso del Parque Tunari no creo que deba ser anulada y dejarlo a su suerte, puesto que en esta área vive mucha gente que esta bajo presión del mercado tal como lo dijo Miguel, y que esta gente esta de alguna forma consciente de que si se le somete a la lógica del mercado van a tener que acabar con sus recursos aunque no tengan la voluntad de hacerlo. Entonces hay una necesidad de que se apoye procesos de desarrollo sostenible, y dentro de ello el manejo sostenible de la biodiversidad que existe en el parque.

Dora Ponce

Investigadora del Parque Tunari, NCCR-AGRUCO

Sobre la pregunta de Jaime si recibimos alguna presión en el trabajo que hacemos. A lo largo de todo el trabajo que realizamos en AGRUCO desde hace muchos años, de relación más cercana a las comunidades o en términos mucho más académicos de diálogo intercultural, pienso que en AGRUCO nos dimos cuenta que las comunidades tienen alternativas viables por ejemplo para la conservación o manejo de la biodiversidad, y nuestro acercamiento no es porque los compañeros campesinos nos caen más simpáticos que otro sector de la sociedad civil. Creo que hemos tenido oportunidad de reflexionar en equipo, de compartir trabajos en equipo y de ver las potencialidades siempre desde una perspectiva sostenible. En esa perspectiva probablemente nos fuimos identificando con la visión campesina, y con el propósito principal de apoyar el rescate y la revalorización de los saberes y tecnologías locales. Esta perspectiva posiblemente no les gusta a muchos.

Aportando algo sobre la pregunta si AGRUCO podría facilitar un acercamiento de los actores del parque? Esto en realidad va depender de la voluntad de los actores. Un aspecto importante en esto es el acceso a la información, puesto que en Bolivia es muy usual ocultar la información y ser transparentes en este sentido, aspecto que lo hemos comprobado cuando buscamos información.

Eugenio Luna

Dirigente Campesino de la Cuenca Taquiña

Aquí se ha tratado mucho sobre conservación de la biodiversidad. Quiero preguntar si las áreas protegidas deben cumplir una función económica o no? A que viene esta mi pregunta. Los que trabajamos en el agro, o sea como agricultores, actualmente nos estamos peleando por pequeñas parcelas, entonces si hubiera áreas libres donde vivir seguro que vamos a pedir que nos entreguen esas áreas libres; nuestra presión será decir abrogamos esa ley o si no nos levantamos.

Gonzalo Zambrana

Director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba

Creo que uno de los factores que ha definido las jornadas de octubre y que ha puesto en tela de juicio, es precisamente la forma de ver el mundo de una manera unidireccional, es decir bajo nuestra visión sin reconocer la visión de los otros. La jornadas de octubre a los bolivianos nos ha dejado en el otro lado del péndulo, tal como sucede con este tipo de convulsión social. Lo que nos está sucediendo ahora es ver al revés, o sea solo ver desde lo que proponen los movimientos insurgentes, y eso es lo que nos están planteando los movimientos insurgentes. Creo que el peor error que cometeríamos a partir de las enseñanzas de octubre es de ver el mundo desde una sola óptica, sin reconocer las otras que existían o que vendrán. Rescato lo que expresaba el compañero de Sajama en el sentido que existen matices; las áreas protegidas siempre han sido conflictivas desde su creación pero existen matices, en el mismo Parque Tunari existe matices. La ley del Parque Tunari ya lleva varios años, y conocemos que existen otras dos propuestas. Aquí tengo en manos una de ellas, en realidad lleva la autoría de un Comité de Defensa de la Cordillera del Tunari, y como se ve es una propuesta netamente campesina. A mi gustaría saber que opinan de esta propuesta los compañeros campesinos que están presentes? A mi modo de ver es una propuesta bastante completa incluso plantea hasta estrategias de financiamiento, como por ejemplo un impuesto ecológico.

Zacarías Ortíz

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Ayopaya

Esa propuesta que esta en tus manos no es de las organizaciones campesinas legítimas, sino que es una propuesta que realizaron los seguidores del gobierno que ha caído en octubre, o sea seguidores del Goni Sánchez de Lozada. Por eso los que estamos planteando es cambiar todo con la asamblea constituyente, incluso el modelo, porque todo lo que hay en Bolivia es de los anteriores gobiernos seguidores del imperialismo Yanqui.

Eugenio Luna

Dirigente Campesino de la Cuenca Taquiña

Primero quiero preguntar si AGRUCO va continuar haciendo cursos de capacitación o no? Por otra parte, quiero preguntar que función tiene que cumplir el Parque Tunari, a donde apunta? Dentro esta área protegida puede haber tierras de cultivo dentro de ellas o no?

Jaime Delgadillo

Técnico de AGRUCO-UMSS

Responderé en el idioma quechua tal como pregunto el compañero. Como ya dijeron algunos compañeros que me han antecedido, no podemos decir que todas las áreas protegidas son iguales. Cada caso es particular. Algunos parques indicaron que están bien, no hay ningún problema; en otros casos hay muchos problemas. Por ejemplo dijeron que el Parque Sajama está funcionando bien, pero el Parque Tunari es muy diferente. Entonces de las tierras en el Parque Tunari todavía no está definido, como ustedes están reclamando hay que buscar soluciones.

En el caso de los cursos de capacitación, muchos de los compañeros campesinos nos han pedido que continuemos con los cursos de capacitación. Pero esto va a depender si conseguimos como AGRUCO nuevos fondos para hacer los cursos. Para ello en coordinación con la Federación de Campesinos de Cochabamba, ya realizamos un nuevo proyecto que en estos días lo vamos a presentar y ojalá que nos aprueben nuevamente. En una segunda fase de este programa de capacitación, también estamos planteando apoyar en la solución de los conflictos del Parque Tunari, pero a través de un acercamiento transparente entre los actores sociales y la toma de decisiones bajo plena concertación.

Mario Vargas

Comunario de la Comunidad de Chorojo

Primero agradecer a todos. La verdad de la creación de las áreas protegidas como el de Cotacajes Altamachi, es para negocio de las transnacionales, esa es la verdadera versión. Como campesinos por eso rechazamos a todo tipo de leyes de áreas protegidas. En estas leyes siempre los gobiernos han buscado sus intereses junto a las transnacionales. Por eso planteamos como comunarios que nosotros mismos podemos hacernos cargo de las áreas protegidas y de cuidar, incluso estamos de acuerdo en hacer nuevas plantaciones. Esa es nuestra versión, gracias.

Angel Condori Coronel

Ejecutivo de la Central Campesina Provincial de Tapacarí

Quizás falta aclarar algo. Creo que primeramente debemos velar por los intereses de nuestro país, no solamente del sector campesino, sino igualmente de los profesionales y otros, todos tenemos derechos y deben ser iguales para todos. Para que? Para que no sigamos siendo dependientes de ningún país rico y que siempre nos han dominado utilizando a algunos de nuestros profesionales. Pero

como podemos cambiar esto? Creo que tenemos que unirnos todos como verdaderos bolivianos, como un solo hombre, con una sola idea. Que debemos hacer para solucionar los problemas de los parques, concesiones petroleras y todo eso? Creo que primero debemos hacer una ley de tierra y territorio a través de la asamblea constituyente. En esa ley debe indicarse claramente que se prohíbe el ingreso de las empresas transnacionales a una determinada área. Por ejemplo nosotros como bolivianos a otros países no podemos ingresar fácilmente, el mismo trato debemos darles a las transnacionales.

Por otra parte, debemos luchar no solo los bolivianos sino también los países vecinos para cambiar el modelo neoliberal. Este modelo ha traído demasiada pobreza; el sector de salud y educación esta peor cada vez más. De los campesinos hasta ahora no tenemos profesionales, esto debemos cambiar con una educación para todos y productiva.

Eliseo Vallejos

Dirigente Campesino de la Subcentral Parque Tunari

Primeramente quiero expresar mis saludos a todos los presentes, a los compañeros visitantes de otros países, a los compañeros campesinos y a los compañeros expositores. Quiero indicar que en el trabajo de AGRUCO se ve claramente que han podido recoger las propuestas y los pensamientos de todas las comunidades de las 5 cinco provincias afectadas por el Parque Tunari. Todo esto nos muestra que hay una buena posibilidad de llegar a una solución del Parque Tunari con todas las comunidades y provincias. Evidentemente hay muchas propuestas que se han hecho anteriormente, pero nunca hemos visto claramente la situación como nos ha presentado AGRUCO. Mi sugerencia es que ahora se puede hacer una propuesta con todos los compañeros campesinos y los expertos ecologistas o ambientalistas, probablemente para cambiar o anular la Ley 1262 del Parque Tunari que está en contra de los campesinos.

Stephan Rist

CDMA, Universidad de Berna, Suiza

Considerando todo lo que se ha discutido hoy día, creo que se puede llegar a la siguiente conclusión. Se ha visto que desde la ciencia y las investigaciones que se han realizado no se puede aseverar que solo una ley nos va a permitir avanzar, mas bien hemos visto que la ley es un obstáculo. Entonces que nos queda? Creo que lo que se debe hacer es apoyar a las comunidades sobre lo que ya existe, sobre lo que esta hecho en términos de gestión sostenible versus recursos naturales.

También hemos escuchado la versión del SERNAP, que indicó que el Parque Tunari es completamente diferente a otras áreas protegidas; y otra vez más de parte de los campesinos hemos escuchado que no quieren aceptar estas restricciones que están asociados a esta ley. Entonces como conclusión creo que esta ley debe ser anulada porque parece que el único actor que lo defiende es la Prefectura, y sobre la base de las nuevas propuestas, tanto de los campesinos como de otros sectores, crear una nueva ley en concertación con todos los actores.

Humberto Mariscal

Director del Parque Tunari

Quiero aclarar lo que dijo uno de los expositores en relación a que la prefectura tiene un nuevo proyecto de ley. Eso no es cierto. En realidad la prefectura quería construir con la participación de los actores campesinos que están aquí y demás actores ambientalistas y en base a las propuestas que han presentado estos mismos actores. Entonces se planteo una metodología no de revisar artículo por artículo, sino discutir primero que queremos para el parque, sin decir si va ser parque nacional, santuario u otra categoría, hasta ahí llegamos. Vuelvo a recalcar que la prefectura no tiene ningún proyecto.

Miguel Angel Crespo

PROBIOMA-Santa Cruz

Me queda una preocupación. Tal vez voy a officiar de abogado del diablo. Cuidado que nos hagamos muchas ilusiones con la asamblea constituyente, porque no vaya a ser que después nos demos de cabeza contra la pared. La asamblea constituyente no va resolver nada si nosotros no tenemos el derecho soberano de acceder sosteniblemente a nuestros recursos naturales. Cuidado que pase lo que paso con la situación de las llamadas TCOs (Tierras Comunitarias de Origen) que incluso el gobierno entrego estos títulos con bombos y platillos a los compañeros indígenas, pero hoy que esta ocurriendo? En estos territorios están trabajando las empresas madereras, están pasando los gaseoductos por estos territorios y no dijeron absolutamente nada. Cuidado que ocurra lo que esta ocurriendo en el parque Kaa Iya, donde hay una administración campesina pero por atrás hay una organización conservacionista que ha negociado con la empresa petrolera por 20 millones de dólares el asunto del bosque Seco Chiquitano. Entonces no nos hagamos muchas ilusiones con la asamblea constituyente, la soberanía se la ejerce no se la recibe. En el caso del Amboro no se espero una ley para que la empresa petrolera Andina no entre a este parque. La autorización estaba otorgada por el

gobierno pero fue la organización y el derecho soberano de estas que no permitió el ingreso de esta empresa.

Feliciano Vegamonte

Ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Con el permiso de los panelistas solo quiero hacer un simple comentario. Como parte de los auspiciadores de este seminario, quiero decir que necesitamos en Bolivia hacer cambios estructurales y los cambios estructurales no se hacen con discursos, sino en forma práctica incluso desde las mismas bases. Lo que se ha hablado anteriormente me llama mucho la atención, por eso insistí en pedir la palabra. Lo que dijo el compañero sobre que no nos haremos muchas ilusiones con la asamblea constituyente, es muy cierto. Toda discusión en torno a la tierra especialmente en Bolivia, es una discusión política. Si no somos dueños del territorio nunca vamos a ser libres.

Con mucho respeto al Director del Parque Tunari, quiero decirle que digamos la verdad. Hubo muchas propuestas para el Parque Tunari, mejor dicho anteproyectos, que eran presentados por los partidos políticos (NFR, ADN y MNR) y de otras instituciones conservacionistas. Por ello decidimos parar ese proceso, principalmente cuando la hija del Goni Sánchez de Lozada (Expresidente de Bolivia) que era diputada nacional estaba muy ilusionada en hacer aprobar una ley de áreas protegidas. En ese mismo momento la señora Debra Pereyra también quería hacer aprobar su propuesta.

Posteriormente coordinamos con AGRUCO para hacer un proceso de capacitación en todos los municipios del Parque Tunari, luego de eso recién hacer una propuesta de parte del movimiento campesino. Pero quiero decir que ni AGRUCO ni otra institución van a solucionar nuestros problemas, AGRUCO solo va hacer algunas investigaciones y en base a los resultados los que vamos a dar una solución somos los actores sociales directamente involucrados en el problema del Parque Tunari.

La propuesta concreta de las organizaciones campesinas es la reversión de todas las tierras de las áreas protegidas y parques a favor de todos los compañeros campesinos e indígenas del país. Como vamos hacer operativo esta propuesta? Con una ley de tierra y territorio que ya esta encaminado. Con otras leyes como la de la Reforma Agraria y otras, a los campesinos solo nos han dado derecho a la tierra en Bolivia, y no tenemos derecho al territorio de lo que se aprovechan las transnacionales como dijo anteriormente el compañero Miguel. Las transnacionales son en realidad las que manejan los gobiernos en Bolivia, y sirvientes de estos son todos los que están en cargos del gobierno. Todos los gobiernos proponen trabajar por el pueblo, pero por atrás están haciendo negociados como el ALCA que ahora

esta apoyando el actual Presidente. Sabemos que el ALCA será un perjuicio para los compañeros campesinos. Entonces hay que conocer los intereses de cada uno de los actores.

Por ejemplo las propuestas tienen que conocer todas las bases y no solo algunos dirigentes; sobre las leyes no puede decidir sola una persona. Este seminario incluso no es una instancia de decisión, al contrario es una instancia de información y de reflexión. Los llamados indios en este país ya no tenemos porque tener miedo, más bien debemos capacitarnos mucho más para que así podamos discutir y debatir nuestros problemas. Por eso quiero pedir a AGRUCO que continuemos con los trabajos de capacitación y de investigación, porque estos nos tienen que servir para conocer y aprender más, y así buscar soluciones a nuestros problemas en debates y discusiones abiertas ya sea con los del gobierno u otros. Eso quería expresar, gracias.



Mesa redonda final del seminario con participación del Lic. Adolfo Mendoza (Prefectura de Cochabamba), Felix Terceros (Municipio de Tapacarí), Dr. Willi Graf (COSUDE) y Limber Olmos (Federación de Campesinos de Cochabamba)



Participación del Consejero Departamental del Municipio de Tapacarí, Sr. Angel Condori durante la ceremonia de clausura del seminario.

Mesa redonda final

Mesa redonda final

Participantes:

Dr. Willi Graf, COSUDE

Lic. Adolfo Mendoza, Prefectura de Cochabamba

Limbert Olmos, FSUTCC

Félix Terceros, Municipio de Tapacarí

Moderador:

Dr. Stephan Rist, CDMA de la Universidad de Berna-Suiza

Iniciaremos entonces con la mesa redonda final del seminario, pidiéndoles a los invitados a que a manera de presentación realicen una primera intervención.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Como indicó Stephan, actualmente ocupo el cargo de Director de Fortalecimiento Municipal de la Prefectura de Cochabamba. En realidad formo parte de la nueva gestión prefectural que nace a partir de los conflictos de octubre, y la explicación de nuestra presencia allí tiene que ver precisamente por los cambios políticos que se generaron en Bolivia el mes de octubre pasado.

Como habíamos señalado al inicio de este evento, la Prefectura de Cochabamba está tratando de trabajar alrededor de todas estas discusiones en la perspectiva de cambiar la visión que se tiene de la Prefectura en el sentido de que ya no sea concebida como una entidad interventora, si no mas bien como una entidad facilitadora de procesos. Es necesario aclarar que también los cambios políticos que están sucediendo en el país nos están permitiendo construir una nueva visión de la relación entre gobernabilidad social y biodiversidad, no es fácil porque hay todavía viejas prácticas políticas que hacen difícil los cambios prefecturales. Por otra parte, todavía subsisten las viejas fuerzas políticas que están en juego, entre lo que podríamos denominar en términos Pierre Bordieu, la mano izquierda y la mano derecha del Estado, aunque la mano derecha este fracturada.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Buenos días, soy de la Central Morro Sacaba y estoy aquí en representación de la Federación de Campesinos de Cochabamba. Para mí es un gusto participar en este seminario, porque aquí se puede tener mas información de las investigaciones y discusiones, que luego se puede difundir a todos los compañeros campesinos, y también hacer planteamientos acerca de todo lo que se está tratando en este seminario.

Félix Terceros

Director de Desarrollo Social del Municipio de Tapacarí

Estoy aquí en realidad, en representación del Honorable Alcalde Municipal de Tapacarí que por motivos de fuerza mayor no ha podido asistir a este debate, por lo que me encomendó participar en nombre suyo. De esta manera estoy dispuesto ha responder a todas las inquietudes que tengan, y también recibir toda la información, para luego transmitirles al municipio y toda la población Tapacareña.

Willi Graf

Coordinador adjunto de la COSUDE

Soy Willi Graf de la COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación); COSUDE tiene una larga tradición en Bolivia de apoyo al uso de los recursos naturales sobre todo dentro el manejo de sistemas productivos, pero también en el tema de la sostenibilidad en cuanto al uso de los recursos naturales y su interacción con la sociedad.

Dentro este ámbito venimos apoyando, por ejemplo, la reflexión que AGRUCO hace sobre la interacción de las culturas andinas con los recursos naturales; asimismo venimos apoyando procesos de reflexión sobre los ecosistemas de montañas y los recursos hídricos, temas que se priorizaron durante la celebración del año internacional de las montañas el 2003. De hecho COSUDE ve estos temas como uno de los grandes desafíos para Bolivia y probablemente también de otros países. Toda esta reflexión sobre la gobernabilidad social para el uso de los recursos naturales, el manejo de cuencas, la conservación de la biodiversidad y otros temas relacionados, creemos que son vitales para Bolivia.

Una preocupación que quisiera compartir con ustedes en relación a las áreas protegidas y en particular con el SERNAP, es la sostenibilidad financiera de estas. Tal vez la reflexión de este seminario puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, puesto que el gobierno de Suiza ha puesto a disposición del FUNDESNA un

millón de dólares como fondos fiduciarios, lo cual es un intento del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) para crear un sistema de financiamiento que sea sostenible. Pero lo que me preocupa es que la supervisión de este fondo terminamos este junio, y ahí me surge la interrogante. Que sentido tiene un financiamiento sostenible para un sistema que tal vez no es sostenible? esto es algo que quería compartir con ustedes como reflexión.

Stephan Rist

Moderador: preguntas para la Mesa Redonda

Muy bien gracias. Como la mayoría de los miembros de esta mesa redonda no pudieron estar en el seminario durante todo el tiempo, se ha pensado proponer preguntas para una intervención de cada uno ellos.

Entonces la primera pregunta es *¿Cuál es la visión que ellos tienen y las instituciones a las que representan en cuanto a la situación actual de la biodiversidad y de lo que son las áreas protegidas más específicamente?* Creo que es importante conocer la visión institucional y personal sobre la biodiversidad y las áreas protegidas.

La segunda pregunta es: *¿Cómo ven la sostenibilidad del sistema de áreas protegidas tomando en cuenta las diferentes dimensiones que están involucradas, tales como la dimensión económica, social, cultural y ambiental?*

La tercera pregunta es: *¿De qué manera la sostenibilidad está articulada con diferentes roles de los actores que están involucrados en la gestión de las áreas protegidas?*

Considerando la visión que tienen sobre la sostenibilidad de la biodiversidad y las áreas protegidas, se plantea la cuarta pregunta de la siguiente manera: *¿Cuáles serían los ajustes que ustedes consideran necesarios en la perspectiva de mejorar la sostenibilidad de la conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas?*

Pensamos que estos ajustes deberían darse en la interrelación o no relación de los principales actores involucrados como son el Estado, los ministerios del ramo, las entidades publicas como el SERNAP, las prefecturas, los municipios, las empresas privadas, las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y, desde luego, las organizaciones campesinas.

Entonces para iniciar la ronda de respuestas le daríamos la palabra al representante de la prefectura.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Gracias. No podría hablar antes de dejar en claro que nuestra posición no es solo personal, sino que también corresponde a la nueva visión de la Prefectura,

aunque en verdad mucho de lo que expresaré son posturas personales. Insisto que la nueva visión de la Prefectura esta en construcción y precisamente este tipo de seminarios nos están brindando insumos para discutir, reflexionar y deliberar esta nueva visión prefectural.

Respecto de la situación actual de las áreas protegidas y la biodiversidad, creemos que tiene que ver con dos componentes fundamentales: El primero es que en la practica todas las acciones criticas que son fundamentalmente sociales, tienen que ver con una critica de las definiciones asumidas en el país en la década de los noventa; es decir en el fondo se pone en tela de juicio aquel ámbito normativo que formo parte de las reformas políticas de segunda generación, y que hoy pues, deben cambiar. Así como las reformas políticas de los noventa expresaron en el marco normativo una serie de condiciones diferentes a las anteriores políticas, en términos de la temática de la biodiversidad y las áreas protegidas ocurrió algo similar. En segundo lugar, hoy estamos ingresando a una nueva etapa donde los actores sociales han tenido un enriquecimiento en términos de relación durante la década de los noventa, que la ubicamos como una década fundamental para entender las nuevas visiones en torno a las áreas protegidas y la biodiversidad.

Creemos que el reto hacia adelante tiene que establecerse en base a la conjunción de dos criterios: Por un lado, aquello que es clásico en referencia al “bien común” y, por otro lado, la idea de respeto al “derecho a la diferencia”. Sabemos muy bien que las mayores críticas sociales respecto a lo que ocurre con las áreas protegidas, tienen que ver con las reivindicaciones en términos de “derecho a la diferencia”. En ese sentido creemos que nuestro reto e insisto, es conjuncionar ambos elementos. Si es que se ve a las áreas protegidas y la biodiversidad como problemáticas específicas del “bien común”, se estaría descartando la posibilidad de sostener la legitimidad del “derecho a la diferencia”. Por el contrario, si es que se basan las acciones única y exclusivamente en el “derecho a la diferencia”, y nos olvidamos del bien común, se estaría ingresando en un panorama de exacerbación de los “particularismos”, lo que impediría dotarle de sostenibilidad a aquello que formalmente llamamos áreas protegidas y a aquello que formalmente tiene que ver con el tema de la biodiversidad.

En este sentido y en el marco de la asamblea constituyente la apuesta que se está haciendo, es que se deben discutir los principios fundamentales de esta relación entre el “derecho a la diferencia” y el “bien común”. Debo aclarar sin embargo, que no pensamos que la asamblea constituyente sea la panacea, así como en algún momento se pensaba que la democracia iba a resolver todo e iba a dar pan a todos. Creemos que la asamblea constituyente simplemente brindará los principios sobre los cuales los temas específicos deben tratarse y resolverse bajo la nueva coyuntura.

Entonces, esa relación entre el “bien común” y el “derecho a la diferencia” en el caso de las áreas protegidas y la biodiversidad debe formar parte de uno de los

temas específicos de deliberación en el marco de la asamblea constituyente, pero no es necesario que esta se constituya para discutir estos temas, sino que lo antes posible se debe empezar con un proceso de deliberación entre los distintos actores involucrados con la temática de la biodiversidad y las áreas protegidas, esperando que de esa deliberación anticipada puede darse cuerpo a los contenidos que permitirían establecer los principios expresados en la asamblea constituyente.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Gracias. Como dijeron mis compañeros, antiguamente la biodiversidad se manejaba y se la veía de diferente manera ¿Por que?. Porque no había mucha contaminación como ahora, antes el ambiente era mas sano, pero ahora vemos como están creciendo las industrias que contaminan. Por otro lado, la eliminación de árboles es mucho más fuerte. Todos vemos que hay un cambio en la biodiversidad y que ahora se quiere proteger en las áreas protegidas. Asimismo se han realizado nuevas leyes para esto, como la ley forestal y la ley del medio ambiente, pero entre estas hay contradicciones. Entonces nosotros como campesinos tampoco podemos decir que con los nuevos cambios va a cambiar, por ello mantenemos nuestra posición de que las áreas protegidas deben estar en nuestras manos, caso contrario seguiremos luchando y defendiendo nuestros derechos. Gracias

Félix Terceros

Representante del Municipio de Tapacaré

En el Municipio de Tapacaré todo está ligado directamente con lo que son las organizaciones campesinas originarias. Esto a funcionado con un principio desde hace mucho tiempo atrás, y eso implica que las organizaciones campesinas originarias han normado, de acuerdo a su cultura, el uso y manejo de los recursos naturales como el suelo, los bosques y otros. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos años con la promulgación de las nuevas leyes, con las cuales ha cambiado incluso el rol de las mismas organizaciones campesinas. Por un lado, sigue funcionando la central campesina desde los sindicatos, pero, por otro lado, se tiene al comité de vigilancia que se organiza a partir de los sindicatos y esta ligado a la Ley de Participación Popular.

Con la Ley de Participación Popular por ejemplo, se han implementado varios proyectos relacionados con el manejo y la recuperación de los recursos naturales como los suelos y los bosques, pero un problema de estos proyectos es la sostenibilidad. Muchos proyectos solo funcionan mientras están a cargo de las

ONGs o el municipio, pero cuando estas se retiran los proyectos quedan ahí nomás, y esto de alguna manera a creado cierta debilidad. Por eso el Municipio de Tapacaré está buscando implementar otro tipo de proyectos relacionado con los recursos naturales, con una responsabilidad desde las organizaciones campesinas, y esto implica devolver los roles originarios de las organizaciones campesinas tradicionales. De esta manera se pretende involucrar directamente a los campesinos en el manejo y la conservación de los recursos naturales, lo que consideramos que es muy importante para lograr la sostenibilidad del manejo y la conservación de los recursos naturales.

Es verdad que en algunas comunidades están dejando de controlar y cuidar sus recursos, para revertir esta situación consideramos que es importante los procesos de capacitación de los recursos humanos en temas de manejo, conservación y administración de los recursos naturales. Este tipo de proyectos se tienen insertos en el PDM y los POAs por ejemplo, ya que a partir de esta capacitación pensamos que puede lograrse una sostenibilidad en el manejo y la conservación de los recursos naturales desde las mismas comunidades campesinas. De este modo pretendemos fortalecer la autogestión y el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas. Para ello es importante también el apoyo de las ONGs, la Prefectura y otras instituciones, pero bajo esa visión de autogestión y desarrollo sostenible. Al respecto, quiero manifestar que el Municipio de Tapacaré requiere bastante cooperación y apoyo, puesto que territorialmente es muy grande y tiene muchas comunidades que requieren de ayuda para mejorar su situación, principalmente en lo que respecta a la recuperación y la conservación de sus recursos naturales como suelos, bosques, áreas de pastoreo y aguas. Con esto quiero decir que la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad tampoco van a poder encarar solamente el Municipio y las comunidades campesinas, sino se requiere la colaboración y la cooperación del Estado y otras instituciones.

Willi Graf

Coordinador adjunto de la COSUDE

Primero me voy a permitir contarles una experiencia personal con las áreas protegidas. Como turista privilegiado dentro un grupo que tenían los recursos para disfrutar de las áreas protegidas, tuve la oportunidad de conocer esos gorilas famosos de montaña que hay en Ruanda, muchos de ustedes tal vez han visto en televisión, y el costo para visitar estos lugares era alrededor de 150 dólares por persona por un día, pero al volver me enteré que casi ninguna de las personas que viven alrededor de esos lugares, personas de Ruanda, habían visto los gorilas. Al pensar en esto para mi era evidente que estos gorilas tendrían que sobrevivir para nosotros los turistas, y que ni la gente local que vivía a cinco kilómetros de

los gorilas les podían ver, situación que de ninguna manera podía ser considerado sostenible. En una segunda oportunidad como experto agrónomo en África, tuve una anécdota en Kenia visitando a campesinos, quienes se quejaban de que uno de los mayores daños que había en sus campos era provocado por los elefantes que venían del área protegida del lado. Por ello había evidentemente, fuertes conflictos incluso entre los mismos grupos locales.

En Bolivia los conflictos se le atribuye casi siempre a dos actores: Por un lado está el Estado y, por el otro lado, está la sociedad civil, pero la sociedad civil no es homogénea, hay muchos intereses particulares y creo que esto es parte de la experiencia mundial con áreas protegidas cómo lo ha mostrado la Doctora Rodríguez en su exposición, al indicar que Bolivia no es un caso muy particular hablando de conflictos. Más bien, lo particular de Bolivia es que tiene una alta riqueza biológica, mientras que las experiencias de conflictos alrededor de las áreas protegidas en los hechos es mundial.

Por otra parte, como indicó el señor Alca, al final lo que se impone es lo local; puedes tener lo mejor como ley o como sistema nacional, pero si a nivel local no logras un mínimo de aceptación y consenso, la ley no se va a sostener, va a caer. Entonces creo que la reflexión que se está haciendo aquí es muy interesante para la cooperación internacional.

Algo que se debe considerar al analizar el tema de las áreas protegidas, es que nosotros venimos de países donde se ha destruido la naturaleza, a cambio se ha dado un desarrollo económico muy importante, y lo que ahora estamos financiando es la búsqueda de un nuevo equilibrio con la naturaleza con esos recursos económicos que hemos generado a través de procesos de industrialización y de servicios. Por ejemplo en Suiza cuantos osos existen? Creo solo hay en zoológicos. Todos los animales endémicos de Suiza ya no existen y por ejemplo cuando se ve un lobo en algún lugar que también era un animal endémico en Suiza, es todo un acontecimiento nacional que sale en los periódicos, como si el lobo se va ha comer media ciudad.

Tenemos entonces un problema de legitimidad como cooperación internacional, porque nosotros en nuestros países hemos destruido nuestra naturaleza y ahora con los recursos que hemos generado en parte por el desarrollo, los países industrializados pedimos mantener por lo menos el Amazonas. En conferencias internacionales es un problema grande y con razón países como Malasia nos preguntan que ha pasado con sus bosques, y en verdad los bosques boreales en Europa casi han desaparecido, los bosques naturales ni hablar, aunque se ha reforestado mucho después con los recursos generados por la industrialización.

Este tema es muy particular para la cooperación internacional, y creo que se repite a nivel de país. La misma crisis de legitimidad tienen los Estados frente a los pueblos indígenas u otros grupos que quieren aprovechar los recursos naturales para su desarrollo, ya que se les quiere imponer límites entonces surgen fuertes

conflictos. Por lo tanto, en base a nuestra propia experiencia, no me sorprende lo que se vive en Bolivia en el caso por ejemplo del Parque Tunari, donde la cooperación Suiza ha estado involucrado a través de sus financiamientos como en los programas de reforestación (PROFOR), el programa del manejo de cuencas (PROMIC) y ahora a través de programas de investigación.

A pesar de que no hay elefantes en el Tunari, pero hay bastantes conflictos, aunque posiblemente haya elefantes blancos hablando desde el punto de visto económico (inversiones sin beneficios), y todo esto trae efectivamente muchos problemas. La única forma probablemente de resolver estos problemas, es abrir una amplia discusión a nivel local y un consenso entre todos los actores; no olvidemos que si no se resuelve el tema a nivel local no hay sostenibilidad, pese a que pueden existir una buena legislación y acuerdos interinstitucionales.

Stephan Rist

Moderador

Muy bien gracias. Creo que con esta primera ronda vemos que lo que expresaron tienen que ver mucho con lo que se ha estado debatiendo durante estos días en el seminario. Por otro lado, la problemática de la biodiversidad y las áreas protegidas no solo se reduce a aspectos técnicos, sino que claramente se ha mostrado que estos temas están inmersos y relacionados con aspectos socio-económicos y políticos como la asamblea constituyente y hasta con los elefantes verdaderos y blancos. Entonces es importante situarnos otra vez en ese escenario, donde tenemos que ampliar la visión mucho más allá, porque tal vez uno u otro estamos acostumbrados a ver la situación desde un punto de vista solo técnico profesional.

Pasaríamos entonces a ver la tercera pregunta, aunque creo que ya lo han mencionado por lo menos en forma indirecta, que hace referencia a lo siguiente: ¿Cuáles son los ajustes que se deberían dar en las relaciones entre Estado y sus instituciones y las organizaciones de la sociedad civil? Para que no sea una pregunta muy amplia, les pediríamos que vean la posibilidad de indicar dos ajustes que se requiere hacer con mayor urgencia. Empezaríamos nuevamente con Willi porque después, lastimosamente tendrá que retirarse. Empezaríamos entonces al revés, le daremos la palabra primero a Willi Graf.

Willi Graf

Coordinador adjunto de la COSUDE

Es un tema que realmente me preocupa mucho. Pensamos que la sostenibilidad tiene tal vez hasta cuatro niveles fundamentales ha considerar: el nivel

institucional, el nivel social, el nivel ecológico y el nivel financiero. Tal vez pueda sorprenderles lo que diré, pero pensamos que el nivel ecológico en este momento es el que tiene menos peligro, porque las extensiones todavía son grandes, evidentemente algunas áreas como la región andina son más frágiles y de menos extensión.

La sostenibilidad ecológica que siempre ha sido la preocupación central de las áreas protegidas y la motivación central para financiar áreas protegidas, si bien esta en peligro pero la mayor preocupación en este momento es el tema social. Vemos que el consenso social sobre áreas protegidas y cómo manejarlos no es suficiente para garantizar la sostenibilidad ecológica de las áreas protegidas en Bolivia. Esto ocurre porque tal vez la sociedad boliviana todavía tiene que buscar en sí, la sostenibilidad del mismo país. Creemos que hay todavía temas muy importantes a nivel de la sostenibilidad de la misma sociedad boliviana como una sola unidad, y esto también se refleja en las áreas protegidas posiblemente con mayor intensidad porque aquí se encuentran pueblos muy distintos y con lógicas muy diversas.

Otro tema que nos preocupa mucho es el nivel institucional. A pesar de los diez años de esfuerzos con el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), consideramos que todavía no se puede hablar de una institucionalidad muy fortalecida. El año pasado por ejemplo, hubo una crisis muy fuerte en el SERNAP debido a los acontecimientos políticos y la influencia de algunos grupos sectarios. Esta situación en el plazo de un mes ha puesto en peligro todo el sistema y quedó de alguna manera desestructurado. Todo esto demuestra una tremenda fragilidad institucional, lo que no permite asegurar una sostenibilidad social ni ecológica. Por eso pensamos que es más urgente resolver la sostenibilidad social e institucional del sistema, y ahí también está la sostenibilidad financiera. Efectivamente es muy preocupante que un Sistema Nacional de Áreas Protegidas dependa en 95% de los recursos provenientes de la cooperación internacional.

Para dar otro ejemplo diferente a lo que ocurre en el SERNAP, es la situación del programa nacional de semillas que tiene 70 % de recursos propios y 30% proviene de la cooperación internacional. Hay otros proyectos que también dependen mucho de la cooperación internacional, pero no son sistemas nacionales. Esto no es sostenible

Por otro lado se ha intentado crear mayor sostenibilidad financiera para las áreas protegidas a través de FUNDESNAP, esta es una fundación que ha recibido fondos de Canadá, de Suiza, Gran Bretaña y algunos otros fondos del Banco Mundial. Con esta fundación se ha pretendido hacer más sostenible el financiamiento de las áreas protegidas, porque la idea fue crear un fondo fiduciario, lo que significa que el dinero depositado no se retira queda como fondo y solo los intereses y las ganancias que se crean en la bolsa internacional y otros lugares sirven para financiar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lamentablemente estos fondos siguen siendo una pequeña proporción del financiamiento total que se necesita para todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por todo esto es que al inicio indique, que para

nosotros es también una pregunta si vale la pena seguir manteniendo este sistema de financiamiento posiblemente sostenible para un sistema que en la práctica tiene tantos aspectos de insostenibilidad. De hecho en el convenio está previsto que a partir de este año Suiza ya no da ningún seguimiento a este millón de dólares que ha depositado en FUNDESNA, pero creemos que es demasiado temprano para dejar esta supervisión porque otros niveles del sistema son todavía muy insostenibles.

Félix Terceros

Representante del Municipio de Tapacarí

Es muy importante destacar que la sostenibilidad no se puede lograr, si es que no se hace un trabajo conjunto e integral. Aquí tiene que ver mucho la participación de las organizaciones sociales, pues si no involucramos a las organizaciones campesinas y a la gente que vive en las áreas que queremos proteger, va ser muy difícil lograr una sostenibilidad. En este sentido, deben ir de mano la participación social, la institucionalidad y el financiamiento, lo cual es muy importante para que la gestión de las áreas protegidas sea sostenible. Entonces es muy importante involucrar a las organizaciones sociales en todos los aspectos, el fortalecimiento institucional y la disponibilidad de recursos. En conclusión, debe verse a las áreas protegidas de manera integral, así lograr una sostenibilidad efectiva de la biodiversidad y alcanzar una sostenibilidad ecológica que todos esperamos.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Cuando analizábamos la situación de los recursos naturales en los talleres de capacitación que realizamos con AGRUCO, vimos con mis compañeros que esa parte de la sostenibilidad no se da porque se está perdiendo la cultura y las tradiciones de antes. Esto ocurre porque hay una marginación a la cultura y las tradiciones de los campesinos, desde ese punto de vista ya se ve que no existe una sostenibilidad. Hay también otras cosas, pero si se pierde la cultura y las tradiciones es difícil que exista sostenibilidad.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Quisiera referirme a algunas de las dimensiones ya apuntadas respecto de la sostenibilidad, como son las dimensiones institucional, social y política.

Creo que ahí hay un componente político bien importante que hace referencia a lo siguiente: el tema de la sostenibilidad es un asunto “glo-cal”, es decir que el asunto de la biodiversidad y las áreas protegidas no solo no se resuelve única y exclusivamente en el ámbito global o en el ámbito local, sino que es un asunto que involucra a todos. Entonces, la preocupación financiera debe estar orientada por un criterio que escapa de ver esta dicotomía que viene de afuera o lo que está dentro, es decir la problemática de los parques o las áreas protegidas no admite una división tajante entre lo que llamamos formalmente la cooperación internacional y los resortes locales. En la práctica, la cooperación internacional ha actuado en muchos casos también como un actor local muy intenso, y en ese sentido, así como en el carnaval el personaje son exactamente lo contrario que en otro tipo de escenarios.

Un primer desafío creemos que es ver esta nueva relación, enfrentarse fundamentalmente a esta nueva dicotomía que la considero como parte de la propia construcción colonial del poder. Eso obviamente no quiere decir que las preocupaciones en términos de sostenibilidad financiera respecto de estos actores “glocales” no tengan validez o estén vacíos de contenido, más bien la figura es exactamente contraria, son actores “glocales”, llamémoslo así, fundamentales y preocupados por el tema de la sostenibilidad. Estos actores deberían participar por lo tanto, en la redefinición de las reglas de juego; ahí entramos a la sostenibilidad en términos institucionales. Finalmente hay muchas reglas de juego que ya no funcionan y hay que pensar también en su modificación.

Entonces difícilmente se puede ver la sostenibilidad solamente en términos de pequeñas modificaciones de artículos o de normas, creemos que el asunto es mucho más grande, y esto se relaciona también con las dimensiones simbólicas que acompañan a la sostenibilidad. Una otra gran dicotomía más allá de la cooperación internacional y los actores locales, ha sido construida alrededor de Estado y sociedad civil; por varios datos, varias muestras empíricas en este país que vive y respira a través de los conflictos, tal vez en ese sentido también habría que ver el problema de la sostenibilidad, los movimientos sociales no tienen una orientación necesariamente “anti-estatal”, por el contrario los movimientos sociales en Bolivia se han orientado a formar parte digamos de estrategias estatales. Ese es el caso de toda la discusión respecto de la problemática de los parques, todo lo que tiene que ver con las TCOs (Tierras Comunitarias de Origen) el reconocimiento constitucional de lo pluri o multiétnico, etc. Hay entonces intensa participación subalterna en la propia construcción estatal. En ese marco, la dimensión política de la sostenibilidad también invita a repensar esta arbitraria dicotomía entre Estado y sociedad civil, mucho más cuando de pronto aparece en el escenario local la temática de la “gobernabilidad participativa” que intenta vincular gobiernos locales con sociedad civil a nivel local.

Sephan Rist

Moderador

Muy bien gracias. Creo hasta aquí, para mi por lo menos, ya se vislumbra una dimensión muy interesante y parecería que estamos colectivamente construyendo un concepto de sostenibilidad. Podríamos coincidir entre muchos que sostenibilidad no tiene que ver solamente con lo económico o lo ecológico, sino que al hablar de sostenibilidad debemos tomar en cuenta una multiplicidad de dimensiones: lo ecológico, lo económico, lo institucional, la participación social, la dimensión política, la cultura y las tradiciones y también los aspectos simbólicos. Entonces este análisis me parece muy interesante, tal vez sin estar previsto está surgiendo algo que podemos seguir trabajando y reflexionando.

Pasaríamos entonces a ver la tercera pregunta, aunque creo que ya lo han mencionado por lo menos en forma indirecta, que hace referencia a lo siguiente: ¿Cuáles son los ajustes que se deberían dar en las relaciones entre Estado y sus instituciones y las organizaciones de la sociedad civil? Para que no sea una pregunta muy amplia, les pediríamos que vean la posibilidad de indicar dos ajustes que se requiere hacer con mayor urgencia. Empezaríamos nuevamente con Willi porque después, lastimosamente tendrá que retirarse.

Willi Graf

Coordinador adjunto de la COSUDE

Mencionaré tres pero en forma rápida. El primero, es que se necesita una discusión mucho más amplia del tema de la biodiversidad y las áreas protegidas involucrando esencialmente a los gobiernos municipales y las prefecturas, en la perspectiva de que ellas podrían ser los nuevos responsables de la gestión de la biodiversidad y las áreas protegidas en sus respectivas jurisdicciones. Me parece tremendamente importante que a través del proceso de participación popular se refuerce también el sistema de áreas protegidas; en los espacios municipales de alguna manera se han fortalecido otros procesos como las TCOs por ejemplo, por lo que también el tema de las áreas protegidas puede ser fortalecido, y a través de esto se puede crear una mayor aceptación política social donde evidentemente son actores importantes los grupos indígenas y otros grupos de interés de las áreas protegidas.

El segundo punto tienen más que ver con el ámbito de la institucionalidad. Aquí se requiere una decisión y una clara muestra de voluntad política del Estado para institucionalizar de manera definitiva el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, para que esta tenga sobre todo la suficiente fuerza para resistir cualquier ingerencia política tanto a nivel nacional como a nivel de los diferentes componentes del Sistema

Nacional de Areas Protegidas. Además se requiere de un adecuado control social en las instancias como el SERNAP, o sea el control de la sociedad civil sobre esta instancia en realidad no existe, creemos incluso que hay sistemas de control social más desarrollados para la cooperación internacional, aunque no debería ser el caso. Cuando hay problemas llaman a la cooperación internacional, cuando debería llamar a las mismas fuerzas y contra fuerzas del ámbito nacional.

El tercer aspecto, tiene que ver con el desarrollo de una estrategia financiera verdaderamente sostenible, lo que implica generar ingresos y reducir gastos. Por ejemplo si hay una aceptación social tal vez no se requiere de guardaparques, puesto que estos representan en este momento uno de los gastos más fuertes para el sistema. Esto podría reducirse o podría financiarse localmente a través de estrategias mas claras de ingreso, como las entidades descentralizadas de ecoturismo, ya que este rubro puede generar muchísimos más ingresos de lo que hasta hoy ha generado. Se dice a menudo que llegan muchos turistas a Bolivia, pero comparando con lugares donde realmente llegan podríamos decir que a Bolivia no llega nadie. Esos serían los tres puntos.

Félix Terceros

Representante del Municipio de Tapacarí

Creo que para esta situación se debe crear espacios de discusión, donde puedan participar actores locales, gobiernos municipales y del gobierno nacional. En estos espacios de discusión deben ajustarse los mecanismos tanto de administración como de manejo de los recursos naturales para que se pueda hacer efectivo esa sostenibilidad que tanto se busca. Entre todos los actores se puede plantear la forma de como se va administrar y manejar los recursos naturales. Aquí podrían estar involucrados las autoridades del gobierno municipal, la sociedad civil y el gobierno nacional pero dejando de lado la influencia de los partidos políticos que muchas veces trabajan bajo objetivos sectarios.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Nosotros también vemos que debe haber una relación organizada junto con los campesinos, los municipios y el gobierno. También es necesario un control social, porque vemos que las instituciones no manejan bien los fondos y hay mucha corrupción en el gobierno. Por eso muchas veces los campesinos no están de acuerdo con lo que plantea el gobierno, se necesita un control social como en los municipios, y así tal vez se puede mejorar más en las instituciones.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Quisiera comenzar indicando que la biodiversidad, en términos generales, se relaciona con temas de la agenda política nacional como es la discusión de tierra-territorio y la problemática del ALCA, y esto nos invita a pensar que esta discusión podría canalizarse a partir de un intenso proceso de deliberación local en el marco de los contenidos de la asamblea constituyente, es decir creo que ese es el escenario fundamental para ir avanzando desde lo local a lo nacional en la discusión de estos temas, puesto que estos eventos son enriquecedores para los actores que nos involucramos, sin embargo no tienen capacidad de decisión y por eso creo que es necesario discutir en una otra instancia y eso son los espacios que podríamos denominar de “deliberación local” sobre estos temas de la agenda política nacional donde entraría el tema de biodiversidad.

El segundo ajuste tiene que ver con la institucionalidad, comparto esa preocupación con Willi, porque es un tema fundamental que considero que no solamente tienen que ver con el control social, sino también con la otra cara de la medalla del control social que es la responsabilidad funcionaria y la rendición de cuentas. Si solo nos detenemos en el control social, entonces simplemente estamos pensando en como las organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto genera un control respecto de gobiernos municipales o prefecturas, es decir respecto del Estado local, pero la contraparte de esto es una responsabilidad funcionaria que puede establecerse claramente como parte de este proceso de transformación de las reglas de juego. Entonces el nivel de institucionalidad debe llegar a la institucionalidad de cargos, no tanto en términos de institucionalidad como reglas de juego. En conclusión dos criterios deben acompañar al control social, la responsabilidad funcionaria y la rendición de cuentas.

Stephan Rist

Moderador

Muy bien gracias. Se ha concluido entonces la ronda de preguntas y respuestas con los invitados. Ahora abrimos la participación de ustedes, pero les sugiero que traten de ser concretos y tomarse el menor tiempo posible.

Participante

No identificado

Gracias. Para empezar a mi me preocupa el proceso de inestabilidad que viene ligado a todo un proceso de cambios que se está viviendo nuestro país. Sin

embargo hay que dejar en claro que las áreas protegidas no se crearon para que el SERNAP se expropien bajo ciertas reglas de juego y que ellos quieran manejar; en muchos casos el SERNAP como administrador de las áreas protegidas se ha constituido en el enemigo más fuerte de las áreas protegidas, o sea quiero decir en áreas donde no había problemas estos se han acentuados con la presencia del SERNAP, lo que significa un retroceso en el proceso de conservación de los recursos naturales. Pero tampoco las áreas protegidas se han creado para otro tipo de agentes o grupos de gente que se expropien.

Entonces creo que aún con todos los problemas que está viviendo nuestro país y que está afectando a las áreas protegidas, seguimos creyendo de que estas siguen siendo los instrumentos que aún sirven para preservar los recursos naturales y la biodiversidad. Otro problema es la poca participación local; el país tiene dos sistemas de administración: el gobierno central y los gobiernos municipales, pero casi es inexistente la participación de los gobiernos municipales en las áreas protegidas. Ahí hay un vacío grande y se debe ayudar a que los municipios en su proceso de desarrollo involucren también la conservación y el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad como parte de la necesidad que tienen las poblaciones.

Por otra parte, me parece que es un error de la cooperación internacional dejar al Estado fondos para que se administren desde el gobierno central. Creo que las áreas protegidas se podrían fortalecer en todas sus dimensiones apoyando al desarrollo local de las comunidades que están siendo afectadas por éstas áreas. Es verdad por otro lado, que no todos los parques tienen los mismos problemas, pero la mayoría tienen el problema de índole social. Un ejemplo bien chiquito pero que significa mucho para entender lo que está pasando en las áreas protegidas, es lo que ocurre en el Parque Carrasco. Aquí ocurre que todas las comunidades aledañas al parque construyen sus casas con el bambú, de repente se establece el Parque y se prohíbe el corte del bambú a los lugareños, evidentemente el guarda-parque tienen que hacer cumplir la norma que está establecida. Como se puede restringir de esta manera a las comunidades mas viejas de estos territorios como son Totorá y Pocona, puesto que históricamente han utilizado el bambú, es más, esta especie tienen una fácil capacidad de recuperación, pero a causa del parque ahora está prohibida su utilización.

Entonces existen desencuentros entre la administración de las áreas protegidas y el desarrollo libre de las comunidades, por lo que obviamente las comunidades no quieren tener parque ni siquiera a su lado. Esas experiencias se repiten en muchas áreas protegidas y la cooperación internacional debería enfocarse al desarrollo de estas comunidades, para que así entiendan que la conservación de un área protegida es importante también para ello, puesto que no se les puede prohibir el derecho a vivir y existir en sus lugares de origen. Creo que más bien se les debe facilitar algunos mecanismos para que saquen beneficios y cuiden su materia prima no solo para ellos, sino también para sus hijos.

Miguel Angel Crespo
PROBIOMA-Santa Cruz

Quisiera tocar tres puntos fundamentales. Primero, insistir en que el tema de las áreas protegidas y lo que significa la gestión de la biodiversidad debería ser parte de la política del desarrollo nacional sostenible, pero el Estado boliviano hasta ahora no lo ha asumido como tal. De nada sirve que sigamos reunidos hablando de la gestión de áreas protegidas y de la biodiversidad, si esto no asume como un política de Estado, aunque hay que reconocer que la estrategia nacional de biodiversidad es un avance. Del mismo modo, otros actores importantes tampoco la asumen como una política prioritaria, estoy hablando de los municipios y también de las organizaciones locales que no se involucran definitivamente en los procesos de toma de decisiones y esto le quita muchas posibilidades de sostenibilidad a todo lo que es el sistema de áreas protegidas, y lo mas grave se está dejando de lado el precepto del derecho soberano sobre las decisiones de esos sectores.

El representante de la COSUDE tiene mucha razón al indicar que las áreas protegidas no pueden seguir bajo la tutela de la cooperación internacional; las áreas protegidas tiene que ir pasando cada vez más a ser una cuestión nacional en la que se pueda establecer mecanismos de sostenibilidad. Aunque creo ya están en marcha algunas estrategias como un “sistema de cobranza” que, según personeros del SERNAP, se pretende implementar inmediatamente al menos en el departamento de Santa Cruz. De este “sistema de cobranza” debe salir un porcentaje para el municipio y otro para el SERNAP, de esta manera se abre la posibilidad de que las comunidades también se benefician, y no estén de acuerdo con las áreas protegidas porque no les trae ningún beneficio.

El otro elemento que quería plantear, es que dado las jornadas de octubre pasado (convulsión social que termino con la renuncia del Presidente Constitucional de Bolivia) debe haber una voluntad política de parte del Estado para encarar dos grandes amenazas. Una de estas amenazas proviene de las iniciativas de integración regional que están siendo propiciadas por el Banco Mundial, el BID y la CAF, a través de las cuales se está buscando la construcción de gasoductos, oleoductos, corredores bioceánicos, hidrovías, etc. Según alguna información, el continente Sur Americano está cuadrículado y estas iniciativas de integración pretenden consolidar un modelo de explotación de los recursos naturales bajo conceptos de “dependencia”, es decir convertirnos únicamente en un país productor de materias primas. Por ejemplo, se hablan mucho de los mercados justos para los productos orgánicos en Europa, pero cuando nosotros queremos exportar cacao transformados en barras de chocolate nos ponen un arancel del 24% y cuando exportamos solo cacao biológico el arancel es cero por ciento, que significa eso? Los mercados justos no son tales en tanto y en cuanto nosotros sigamos exportando

materia prima, pero cuando empecemos a darle un valor agregado ya tenemos que pagar el arancel.

Que significa todo esto? Que a través de las iniciativas de integración regional se está queriendo imponer obviamente todo lo que están rechazando algunos países, concretamente Bolivia tal como en las jornadas de octubre hubo una oposición muy fuerte a los tratados de libre comercio, pero el Estado boliviano hasta ahora no a asumido una posición soberana sobre el tema puesto que a nivel de gobierno se sigue hablando de manera muy sutil. Estos tratados obviamente son una amenaza y tienen un impacto muy fuerte sobre los recursos naturales.

Otro caso son los “corredores biológicos” que se vienen impulsando a partir de organizaciones conservacionistas internacionales, pero también están involucrados el Banco Mundial y el BID. Esta es otra estrategia para el aprovechamiento y la apropiación de los recursos genéticos de la biodiversidad, y nosotros no estamos tomando ninguna iniciativa para frenar ninguna de estas dos amenazas. Los primeros afectados seremos obviamente bolivianos, porque no vamos a poder tener un acceso libre y soberano sobre nuestros recursos de la biodiversidad que es lo único que nos queda y es en lo único que sí realmente somos competitivos, puesto que la competitividad no esta en traer un producto de mejor calidad sino en la cualidad cualitativamente diferente y eso es lo que no tienen otros países. No por nada Bolivia está considerado entre los diez países más ricos en biodiversidad y eso nos hace diferentes con los países del resto del mundo y no estamos aprovechando bajo una política de Estado; mientras no seamos capaces de asumir todo esto, vamos a seguir viendo el tema de las áreas protegidas como un tema que es inherente a los científicos y que sirven únicamente para la contemplación.

Finalmente quisiera decir, que este seminario nos sirva no solamente para que reflexionar sino que para empezar a tomar realmente cartas en el asunto, porque el tiempo apremia ya que estas iniciativas de integración regional y de los corredores biológicos están corriendo a cien por hora y nosotros ni siquiera hemos empezado. Eso es lo que quería plantear.

Sebastian Bolliat

Investigador del Parque Tunari

A mi me parece que al hablar de un sistema nacional de áreas protegidas se esta hablando de un organismo estatal, entonces si queremos pensar en la sostenibilidad de ese sistema tenemos que pensar primero en la sostenibilidad del mismo Estado boliviano. En ese contexto se debe analizar y reflexionar por qué el Estado y sus organismos no son sostenibles, por lo menos ahora se puede decir eso. Tomando una referencia de los gastos del Estado boliviano, vemos que

alrededor de un 35% de sus ingresos esta destinado a pagar la deuda externa, entonces lo que proviene de la cooperación internacional son realmente migajas. Como vamos a financiar el sistema nacional de áreas protegidas cuando tenemos que pagar a la deuda externa un 35% de nuestro presupuesto; creo que hay muy pocas posibilidades de hacer sostenible las áreas protegidas pensando en que el Estado boliviano debe asumírselos.

Por otro lado, no existe participación de la sociedad civil en la elaboración de ese presupuesto. Quién o quienes hacen ese presupuesto general de la nación, acaso hubo alguna consulta a la sociedad civil, nunca lo ha habido, no es cierto? Aunque existe procesos de descentralización pero estos todavía no son muy suficientes. Otro punto que veo con preocupación, son las políticas de privatización que continúan incidiendo fuertemente, por tanto consolidar un organismo estatal diferente en ese sentido es difícil. Entonces pienso que deberíamos reflexionar y encontrar los espacios para poder actuar en la perspectiva de eliminar esas trabas que hay en los organismos estatales y que no permiten una autosostenibilidad.

Participante

Creo que lo que se plantea en general es una transformación del Estado a partir de las áreas protegidas. Considero que las propuestas para ello sin embargo, necesariamente deben partir de lo local para evitar las tergiversaciones y que intermedien terceras personas. El sistema nacional de áreas protegidas y sus actores yo les asemejo con los que desarrollan una tecnología y la transfieren pero no para el usuario, sino para ellos mismos, entonces se vuelven gestores de la tecnología además de usuarios, lo que nuevamente colisiona con las propuestas de lo local. Aquí justamente creo que debemos volcarnos nuestras miradas.

Por otro lado quería hacerle una pregunta al señor Limber Olmos representante de la Central de Sacaba. La organización sindical y comunal hace un manejo de los recursos y define por ejemplo los conflictos en relación a la tenencia de tierra y también establece los mecanismos y formas de manejo de los recursos del agua, no es verdad? Por ejemplo en Sacaba hubo problemas cuando los sin tierra se han entrado a sus terrenos o cuando el PDAS estableció un sistema de distribución del agua, o cuando yacimientos bombea agua de las partes altas que obviamente afecta a las capas de abajo. En ese sentido quería hacer la pregunta al representante de los campesinos de la Central el Morro de Sacaba: ¿Cuáles son las capacidades que tiene la Central del Morro para manejar sus recursos y también sus debilidades o sus dificultades, de tal manera que los municipios y la prefectura en el marco del sistema nacional de áreas protegidas podrían fortalecer en esa gestión?

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Respecto a tu pregunta puedo indicar que en Sacaba tenemos una asociación grande de regantes y también existe la Central Campesina. Las tierras que se han tomado creo que es una movida política que trata de dividir al sector campesino y afectar a los compañeros campesinos. Quieren tomar nuestros territorios que han sido siempre de nosotros, aunque algunos no tienen títulos. En el caso del agua no tengo la información para darte una respuesta.

Participante

No identificado

Coincido mucho con lo que planteó Miguel Ángel sobre el tema de las áreas protegidas. Pero también vale la pena hacer una reflexión en el sentido de que si vemos de manera aislada la situación de las áreas protegidas, pareciera ser un conflicto entre la gestión, la participación y la capacidad de decidir sobre los recursos. Pero si hacemos una revisión retrospectiva, encontramos que la conservación siempre ha sido parte de nuestra vida, principalmente de las comunidades campesinas y pueblos indígenas. Muy posteriormente aparecen las áreas protegidas como una estrategia de conservación y estas han tenido su origen en iniciativas individuales con tinte científico. En la década de los 90 se amplían estas iniciativas a un contexto mucho más social y gubernamental, de donde surgen con fuerza las áreas protegidas. Ahora creo que estamos en una nueva etapa de ampliación de ese contexto social pero en términos de participación. Si bien en la década de los 90 los gobierno empiezan a asumir la gestión de las áreas protegidas, hoy lo que se demanda es que la sociedad civil tenga mayor participación y decisión en las gestión de las áreas protegidas.

Creo que bajo esa perspectiva deberíamos empezar a ver el escenario de las áreas protegidas y la biodiversidad y no como un problema, sino como un proceso de desarrollo y maduración de una estrategia de conservación y gestión a través de áreas protegidas. Si asumimos esa visión, entonces, como dijo Miguel Ángel, debemos subirnos inmediatamente al tren. Las áreas protegidas ya están ahí, ya se tienen algunas normas e instituciones del Estado, lo único que nos queda es ver como acomodamos este nuevo rol de la participación local, de lo que era una indicativa individual a una iniciativa social e institucional. Nuestras propuestas deben apuntar a todo ello, no ver como un problema sino ver la gestión de las áreas protegidas como una etapa más en el mejoramiento del desarrollo sostenible, considerando que siempre hemos practicado la conservación como parte de nuestras vidas, al menos en el caso de los bolivianos.

Stefan Rist

Moderador

Muy bien gracias. Daríamos entonces las últimas palabras a nuestros panelistas, empezando ahora por el representante del Municipio de Tapacarí.

Félix Terceros

Representante del Municipio de Tapacarí

Creo que nos encontramos en Bolivia en un momento político particular, que desde mi punto de vista ha incentivado el surgimiento de diferentes grupos con intereses sectarios y políticos. Esto considero muy peligroso para el país, porque en vez de cambiar para bien podríamos terminar peor que antes. Hay mucha discrepancia entre personas y entre diferentes grupos políticos, por tanto nuestro reto es acomodar nuevamente el Estado boliviano. Para ello se necesita que los bolivianos tengamos una sola camiseta, y nos quitemos los colores políticos, caso contrario por mucho que discutamos seguirán las discrepancias y esto es lo que no deja mejorar nuestra situación y solucionar nuestros problemas. Para terminar simplemente decirles que la única manera para que las áreas protegidas y la biodiversidad este garantizada, es que todos trabajemos bajo una sola idea por Bolivia.

Limbert Olmos

Representante de la Federación de Campesinos de Cochabamba

Para despedirme, decirles que es la primera vez que nos invitan a la Central el Morro ha participar en este tipo de seminarios como panelistas. Todo lo que se ha tratado aquí haré conocer a mis compañeros. De mi parte quisiera pedir que no nos quedemos aquí, sino que continuemos avanzando y que siempre se tome en cuenta al sector campesino porque nosotros estamos muy interesados en discutir los temas. Estamos sumamente agradecidos por la invitación a este seminario, gracias.

Adolfo Mendoza

Director de Fortalecimiento Municipal, Prefectura de Cochabamba

Por todo lo que se ha expuesto en este seminario, por lo menos para la prefectura, un planteamiento es el de repensar el papel que tienen que jugar las áreas protegidas y cruzar estas con la problemática de las tierras comunitarias de origen

por ejemplo. Aquí creo que es necesario generar un amplio proceso de discusión que no solo involucre a la prefectura sino a todos los actores de la sociedad civil, donde la prefectura debe ser ante todo un facilitador de procesos hacia la generación de oportunidades, antes que ser un interventor tal como sigue ocurriendo por ejemplo con el marco normativo.

Sobre el papel de la cooperación pienso que todo esto está preñado de colonialismo, si es que concebimos que la cooperación internacional es también un actor local. Más bien creo que la idea debe ser ver como la cooperación internacional cumple una responsabilidad global, es decir no se trata única y exclusivamente que aporten recursos financieros, sino también de conocer porque lo hacen. No creo que la participación de la cooperación internacional en términos financieros sea descartable, más bien es parte de la propia sostenibilidad. El problema es, quién pone las reglas del juego y ahí es cuando puede saltar el demonio del colonialismo nuevamente, por supuesto.

Aquí quisiera poner el ejemplo del “Gran Tumpa”. En el relato de Abaycay cuando los Chiriguano atacan una misión, y los misioneros los Franciscanos se refugian en Buenos Aires. Entonces el Gran Tumpa, esto en el período colonial tardío, se desplaza hacia Buenos Aires para preguntar ¿por qué razón los misioneros abandonaron su lugar? El Virrey responde porque ustedes saquearon la misión, y el Gran Tumpa responde no: lo que pasó es que nosotros necesitábamos de esos recursos de la misión para poder subsistir y quien ocupa nuestro territorio debe pagar tributo y por tanto corresponde que los misioneros vuelvan para pagar tributo. Entonces, la lectura aquí es la otra cara de la medalla de la acostumbrada en la relación colonial. Es necesario por lo tanto, que la cooperación internacional participe porque tiene con nosotros una deuda histórica, creo que el asunto podría ir por allí.

Por otro lado, vuelvo a insistir en que la discusión de las áreas protegidas tiene que ver con la problemática del “bien común” y el “derecho a la diferencia”. Es como pensar por ejemplo en que el pan es un bien común, todos tenemos derecho a acceder a un pan. Sin embargo hay pan de Toco, hay pan de Arani y hay las ricas marraquetas en La Paz, no es cierto? Si uniformamos a todos los panaderos seguro que desaparecerá la diversidad de panes. Entonces no estaríamos respetando el derecho a la diferencia, por el contrario si es que dejamos de pensar en el acceso común al pan y simplemente apostamos por el pan de Toco o la marraqueta paceña, ahí sí podríamos estar perdidos porque exacerbamos particularismos y perdemos el fondo de la cuestión del acceso de todos al pan.

El tema de las áreas protegidas tiene que ver con el cruce entre el bien común y el derecho a la diferencia, o sea hasta donde las áreas protegidas tienen que ver con el bien común y, al mismo tiempo, con el derecho de los pueblos indígenas y los campesinos ha participar en la administración y el manejo de las áreas protegidas. Creo que se debe combinar ambos elementos.

Finalmente ¿Qué es el Estado? ¿A que nos referimos cuando hablamos de Estado? ¿Cuando se habla de sostenibilidad del Estado se esta pensando en un Estado neoliberal? ¿Estamos dispuestos a generar una sostenibilidad de un Estado neoliberal? O por el contrario ¿Estamos pensando en la sostenibilidad de una otra forma de Estado?, si fuera así nuevamente salta el tema de la asamblea constituyente, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de Estado también estamos hablando de aquello que se expresa en términos locales como es el Gobierno Municipal; el Estado son también los Gobiernos Municipales y ahí están también trabajando las organizaciones campesinas. Entonces los Gobiernos Municipales están participando en la construcción de un Estado, ojo esto es perverso, porque de pronto todo esto forma parte de la gran maraña que en términos generales podríamos decir Estado neoliberal.

En general, no es que la sociedad civil este en un lado y el Estado en otro, sino que hay una conexión a partir de los movimiento sociales respecto de la propia construcción del Estado. ¿El MAS no es Estado en el parlamento? ¿El MIP no es Estado en el parlamento? Forman parte, pues, del mismo sistema político que criticamos desde los movimientos sociales. Estos temas deberían ponerse sobre la mesa, porque siendo Estado hablo desde allí, no puedo hablar desentendiéndome de la posición desde la cual estoy hablando. Todo Alcalde es también Estado a nivel local, y esto en las áreas protegidas y las demandas de TCOs tiene que ver con el juego de las élites locales, porque el asunto de lo local no se muere en la homogeneidad. Por eso insisto, en que la problemática de la biodiversidad debe formar parte de una intensa deliberación en ámbitos locales, para que de allí nos conduzcan a la creación de una nueva forma de Estado que la creemos sostenible a partir de acuerdos comunes y el respeto al derecho a la diferencia.

Parte V

Visita de campo al Parque Nacional Tunari

Visita de campo al Parque Nacional Tunari (PNT)

El seminario tuvo un complemento práctico a través de una visita al Parque Nacional Tunari (PNT). Esta visita permitió realizar un análisis más objetivo y práctico de la problemática del PNT; al mismo tiempo permitió intercambiar diferentes percepciones y experiencias entre campesinos que viven en el PNT y visitantes externos participantes del seminario.

1. Objetivo de la visita de campo al PNT

El objetivo principal de la visita al PNT fue el de analizar la situación del PNT de una forma más objetiva y a través de un diálogo directo entre campesinos del lugar e investigadores nacionales y extranjeros.

2. Lugar y fecha de la visita

La visita se llevo acabo a las comunidades de Andrada y Tirani de la Sub Central del Parque Tunari del Municipio de Cercado, (Departamento de Cochabamba, Bolivia), en fecha 29 de febrero de 2004, desde las 9:00 hasta las 16:30 horas aproximadamente.

3. Programa de actividades

La visita se desarrollo en base al siguiente programa:

Programa de la visita al Parque Tunari

Horas	Actividad	Responsable
9:00 a.m.	Salida del Hotel REGINA	AGRUCO-UMSS
10:00 a.m.	Reunión en el campamento 10: Presentación de los visitantes, Explicación del parque por los actores locales e intercambio de experiencias	VISITANTES COMUNARIOS DEL LUGAR AGRUCO-UMSS
10:30 a.m.	Recorrido por el parque e intercambio de experiencias	AGRUCO
12:30 p.m.	Descanso y almuerzo en los predios del PNT	
13:30 p.m.	Recorrido por el parque e intercambio de experiencias	VISITANTES COMUNARIOS DEL LUGAR AGRUCO-UMSS
15:30 p.m.	Retorno a la ciudad.	AGRUCO-UMSS PARTICIPANTES

4. Participantes

En la mencionada visita y en el recorrido por distintos lugares del PNT, participaron campesinos del lugar, investigadores (extranjeros y nacionales), guardaparques y algunas autoridades de áreas protegidas que participaron en el Seminario. El total de participantes en la visita fue de aproximadamente 40 personas.

5. Testimonios, opiniones y comentarios realizados durante la visita

A continuación presentamos algunos testimonios que surgieron durante la visita y el intercambio de experiencias entre visitantes externos y campesinos de lugar.

Aquino Heredia (campesino del lugar)

Como están viendo, nos encontramos en las comunidades de Tirani y Andrada que pertenecen a la Subcentral Parque Tunari. Nosotros como campesinos habíamos adquirido en 1953 títulos ejecutoriales de nuestras tierras. Mucho después el gobierno promulgó la Ley 1262 del PNT, la cual en vez de favorecernos nos atenta porque en uno de los artículos prohíbe la crianza de ganado, la extracción de material, la construcción de casas y otros que afectan al sector campesino. Durante el seminario hemos discutido que en otros parques el manejo es más adecuado ¿porque los campesinos no tomamos parte en el manejo del PNT? Por eso nosotros pedimos que este problema debe ser solucionado de una vez.

Eliseo Vallejos (campesino del lugar)

De acuerdo a la historia el PNT, este se inicio en el año 1946 a la cabeza de Arquitecto Urquidi. A mi me sorprende la ausencia del actual director del parque en este momento. En el seminario no han contado toda la historia. En 1958 por los desastres ocasionados por la riada de agua se ha fortalecido mas el PNT, actualmente afecta a cinco provincias y once municipios. Desde el año 1977 las ocho comunidades que estamos en esta área del parque (zona norte de Cochabamba) hemos plantado muchos árboles. Esta plantación realizamos sin ninguna remuneración y hasta ahora seguimos siendo los cuidadores del pulmón de Cochabamba. Pero la prensa dice que somos más bien destructores de los árboles. Al contrario, somos los cuidadores y protegedores del parque. Este último año la comunidad Leuquepamapa ha plantado más de 6000 plantas.

Miguel Carrillo (campesino del lugar)

El año 1994-1995, esta área de recreación del parque estaba muy bien equipado, ahora faltan varias cosas, parece que los anteriores directores no han cuidado bien y solo se han dedicado a velar por su bolsillo. En cambio a nosotros nos duele mucho, porque es nuestro sacrificio, nuestro dinero y nuestro trabajo. Por eso nosotros creemos que esto debe pasar a las manos de los compañeros campesinos, para que haya un mejor manejo. Los años anteriores hemos manejado los árboles con poda tal vez mejor que los profesionales. Ustedes que están investigando han podido observar durante el recorrido que este lugar no se puede llamar parque, sino que debe ser cambiado de categoría a un área de manejo integrado. Deben precisar bien la experiencia, en esa lógica la visita de hoy tiene el objetivo de intercambiar experiencias, así buscar una buena solución para esta problemática. La problemática del parque se está agudizando porque no hay un dialogo entre comunidades y Estado; en segundo lugar, no existe parque sin territorio y toda el área tiene propietarios y además cumple una función social que no solo es cultivar, sino que es cuidar los árboles y no cortar. Entonces estamos cumpliendo con la función social. Por otro lado, si existe interés por cuidar los recursos naturales, es importante conversar con los actores locales y, en base a ello, buscar soluciones. Asimismo el intercambio entre los profesionales y los campesinos debe ser más fluido. Concluyo diciendo, que el Estado crea la Ley y le dice al campesino planta arbolitos y tu después vas ha aprovechar, pero es un engaño. Porque cuando el campesino quiere aprovechar los recursos le dicen usted no puede tocar, y la segunda etapa es la prohibición en el manejo del bosque. Así el Estado corrompe a la comunidad, y hace hablar a la comunidad, lo que no corresponde. Todos estamos concientes de que hay que preservar el medio ambiente. Con los seminarios, por ejemplo de AGRUCO, la gente se da

cuenta y dice: nosotros somos parte del parque y por tanto debemos participar en la administración y en el manejo. Yo creo que este parque es el pulmón de Cochabamba y los que viven en la ciudad también deben contribuir. Espero que de aquí en adelante podamos seguir intercambiando más ideas y que todos los problemas se puedan solucionar en función de satisfacer las necesidades de uno y otro, y les felicito a todos.

Javier Rocha (comunario del lugar)

Yo no estoy metido con políticos. Los anteriores dirigentes estaban comprometidos con los políticos, por eso no querían soltar el cargo. Ahora nosotros somos nuevos y podemos manejar, como decían mis compañeros, AGRUCO ha venido a hacernos despertar, porque nos falta capacitarnos más; y ya no vamos ha permitir que nos manejen como antes. Yo también quiero pedirles que esta visita no sea la primera ni última vez, sino que sigan apoyándonos porque algunas instituciones vienen y luego desaparecen.

Guardaparques

Bueno yo me siento feliz por ver por primera vez, a las instituciones que nos acompañan. Nuestra obligación como guardaparques es controlar los incendios en el área del parque y también otro producir plantines en el vivero y luego plantar. Actualmente producimos 150000 plantines. Nosotros estamos ubicados en los diferentes campamentos, pero el personal es aún escaso y no abastece.

Dr. Stephan Rist (Investigador extranjero)

En primer lugar, les agradezco mucho por la información muy clara y muy rica que nos ayuda a entender mejor la situación porque se trata de un problema mundial. Como podemos ver en África y en la India, aquí encontramos exactamente lo mismo. Por eso es bueno que compartamos la experiencia entre representantes de diferentes naciones, ya que es fundamental que sepamos que el tema de los parques también viene impulsado por los países del norte y con muchas contradicciones. Nosotros conociendo esta situación podemos influir en los que toman decisiones, para que no se vuelva ha repetir este tipo de contradicciones. El manejo debía ser a partir de una organización de base y no crear contradicciones mirando solamente al árbol y olvidándose de las familias. Ahora lo que quisiera saber de los guardabosques es ¿Quien los nombra, la organización de base o la prefectura, y como funciona?

Guardaparques

Somos de diferentes comunidades Pacolla, Tirani, Andrada, Taquiña y otros.

En síntesis, los participantes de la visita dialogaron y analizaron la problemática del PNT desde diferentes visiones y gran parte de ellos coincidieron en que la participación de los actores locales, tanto en la reglamentación como en el manejo y la administración, es fundamental para la sostenibilidad de las áreas protegidas.

6. Conclusiones

- La visita facilitó un mejor acercamiento, análisis e interpretación de la problemática que actualmente viven en las áreas protegidas y en especial Parque Nacional Tunari.
- El diálogo y el intercambio de experiencias entre los actores locales y externos contribuyó a ampliar y fortalecer los conocimientos de ambos. Asimismo, originó un mayor interés sobre la problemática de los parques y las alternativas de solución viables.
- Finalmente, es importante destacar la actitud de los visitantes externos quienes exteriorizaron su respaldo a los campesinos y el compromiso de continuar brindando su apoyo para la búsqueda de soluciones. En consecuencia, la visita de campo alcanzó los objetivos y resultados esperados, la misma se vio ratificada en los agradecimientos y la satisfacción de los comunarios anfitriones y los visitantes externos.

Memoria fotográfica

*Visita al Parque Nacional Tunari
29 de febrero de 2004*



Intercambio de experiencia entre los visitantes externos y comunarios del lugar en uno de los campamento del Parque Nacional Tunari.



Recorrido y visita a algunas áreas de bosques nativos que existe aún en el Parque Nacional Tunari.



Descanso y almuerzo en un sector del parque forestado con árboles de pino.



Participantes de la visita al Parque Nacional Tunari.

La creación de áreas protegidas se ha constituido en la actualidad como una de las propuestas y acciones fundamentales para la conservación de la biodiversidad, sin embargo, los resultados logrados en diferentes regiones del mundo y Latinoamérica han demostrado que es necesario considerar de forma más preponderante y fundamental la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para la definición de categorías, políticas, planes, programas y proyectos. Los conflictos y problemas causados por la creación de áreas protegidas, en muchos casos, han incrementado la pobreza en las poblaciones involucradas directa o indirectamente y han originado problemas de gobernabilidad en sus diferentes niveles.

La visión multidimensional y el énfasis puesto en la participación local sobre las áreas protegidas, la biodiversidad y los recursos naturales es fundamental considerarla en cualquier proyecto de creación de áreas protegidas y en los planes de manejo. Por tanto, la gestión de la biodiversidad y los recursos naturales se convierte en un espacio donde se debe reinventar la relación Estado-sociedad en sus diferentes niveles, en una perspectiva de construir un proceso de aprendizaje social que permita una relación equilibrada con la naturaleza.

En este proceso, el diálogo entre la sabiduría de los pueblos originarios y el conocimiento científico debe permitir recrear estrategias que se plasmen en políticas, programas y proyectos eminentemente participativos, buscando la interacción entre diferentes maneras de ver la vida, que en el escenario político viene a ser parte de un proceso social, en el que se puede coincidir o no plenamente. El seminario sobre gobernabilidad social de las áreas protegidas y biodiversidad en Bolivia y Latinoamérica, realizado entre el 26 y 29 de febrero de 2004 en Cochabamba, Bolivia, justamente ha pretendido abrir un espacio de diálogo y discusión entre representantes de movimientos sociales (principalmente de los pueblos originarios), científicos de las ciencias sociales y naturales, políticos y representantes del gobierno boliviano, para analizar la gobernancia y ver las posibilidades para una gobernabilidad que permita reducir la pobreza y conservar la biodiversidad y los recursos naturales en áreas protegidas.